

NACIONES



UNIDAS

**INFORME
DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA**

**Período comprendido entre el
22 de julio de 1953 y el 16 de julio de 1954**

ASAMBLEA GENERAL

**DOCUMENTOS OFICIALES : NOVENO PERIODO DE SESIONES
SUPLEMENTO No. 4 (A/2680)**

NUEVA YORK, 1954

NACIONES UNIDAS

**INFORME
DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA**

**Período comprendido entre el
22 de julio de 1953 y el 16 de julio de 1954**



ASAMBLEA GENERAL

DOCUMENTOS OFICIALES : NOVENO PERIODO DE SESIONES

SUPLEMENTO No. 4 (A/2680)

Nueva York, 1954

NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La simple mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

INDICE

Parte I. Organización y actividades del Consejo

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
I. ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO	
1. Composición	1
2. Presidente y Vicepresidente.....	1
3. Sesiones	1
4. Procedimiento	2
5. Relaciones con el Consejo Económico y Social y los organismos especializados	2
II. EXAMEN DE LOS INFORMES ANUALES	
1. Introducción	3
2. Tanganyika	3
3. Ruanda Urundi.....	3
4. Somalia bajo Administración Italiana.....	3
5. Camerún bajo Administración Británica.....	3
6. Camerún bajo Administración Francesa.....	4
7. Togo bajo Administración Británica.....	4
8. Togo bajo Administración Francesa.....	4
9. Samoa Occidental.....	4
10. Nueva Guinea.....	5
11. Nauru	5
12. Islas del Pacífico.....	5
III. EXAMEN DE PETICIONES	
1. Introducción	6
2. Peticiones relativas a Tanganyika.....	7
3. Peticiones relativas a Ruanda Urundi.....	8
4. Peticiones relativas a Somalia bajo administración italiana.....	8
5. Peticiones relativas al Camerún bajo administración británica.....	10
6. Peticiones relativas al Camerún bajo administración británica y al Camerún bajo administración francesa.....	13
7. Peticiones relativas al Camerún bajo administración francesa.....	13
8. Peticiones relativas al Togo bajo administración británica.....	24
9. Peticiones relativas al Togo bajo administración británica y al Togo bajo administración francesa.....	26
10. Peticiones relativas al Togo bajo administración francesa.....	26
11. Peticiones relativas a Nueva Guinea.....	29
12. Peticiones relativas a Nauru.....	29
13. Peticiones relativas al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico	29
14. Peticiones relativas a los territorios en fideicomiso en general.....	29

IV. VISITAS A LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

1. Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del Africa Occidental, 1952.....	30
2. Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del Africa Oriental, 1954	30

V. CUESTIONES REMITIDAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA POR LA ASAMBLEA GENERAL

1. Uniones administrativas concernientes a los territorios en fideicomiso..	32
2. Desarrollo económico rural en los territorios en fideicomiso.....	32
3. El problema de la unificación del Togo.....	33
4. Participación de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria..	33
5. Divulgación en los territorios en fideicomiso, de información acerca de las Naciones Unidas y del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria.....	33
6. Adelanto educativo en los territorios en fideicomiso: facilidades de estudio y de formación profesional ofrecidas por Estados Miembros..	34
7. Informe del Consejo de Administración Fiduciaria.....	35
8. Audiencia de peticionarios del Territorio en fideicomiso del Camerún bajo Administración Francesa.....	35
9. Consecución por los territorios en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la independencia.....	36
10. Peticiones de la comunidad Ngoa-Ekéle, del Camerún bajo Administración Francesa, concernientes a la solución de su reclamación sobre las tierras que habitaba.....	36
11. Control y limitación de la documentación.....	37
12. Revisión del Cuestionario sobre territorios en fideicomiso.....	37

Parte II. Condiciones generales en los territorios en fideicomiso

I. TANGANYIKA

I. Información general.....	39
II. Progreso político.....	44
III. Progreso económico.....	58
IV. Progreso social.....	67
V. Progreso educativo.....	76

II. RUANDA URUNDI

I. Información general.....	83
II. Progreso político.....	84
III. Progreso económico.....	92
IV. Progreso social.....	97
V. Progreso educativo.....	101

III. SOMALIA BAJO ADMINISTRACIÓN ITALIANA

I. Información general.....	105
II. Progreso político.....	108
III. Progreso económico.....	117

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
IV. Progreso social.....	125
V. Progreso educativo.....	128
 IV. CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN BRITÁNICA	
I. Información general.....	133
II. Progreso político.....	134
III. Progreso económico.....	142
IV. Progreso social.....	151
V. Progreso educativo.....	156
 V. CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA	
I. Información general.....	162
II. Progreso político.....	164
III. Progreso económico.....	175
IV. Progreso social.....	184
V. Progreso educativo.....	191
 VI. TOGO BAJO ADMINISTRACIÓN BRITÁNICA	
I. Información general.....	195
II. Progreso político.....	195
III. Progreso económico.....	206
IV. Progreso social.....	214
V. Progreso educativo.....	217
 VII. TOGO BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA	
I. Información general.....	222
II. Progreso político.....	222
III. Progreso económico.....	231
IV. Progreso social.....	236
V. Progreso educativo.....	240
 VIII. SAMOA OCCIDENTAL	
I. Información general.....	245
II. Progreso político.....	246
III. Progreso económico.....	252
IV. Progreso social.....	256
V. Progreso educativo.....	260
 IX. NUEVA GUINEA	
I. Información general.....	263
II. Progreso político.....	264
III. Progreso económico.....	272
IV. Progreso social.....	278
V. Progreso educativo.....	282

X. NAURU

I. Información general.....	286
II. Progreso político.....	288
III. Progreso económico.....	292
IV. Progreso social.....	296
V. Progreso educativo.....	299

Parte III. Consecución, por los territorios en fideicomiso, del objetivo del gobierno propio o la independencia

I. Información general.....	301
II. Medidas para favorecer la consecución del gobierno propio o la independencia por parte de los territorios en fideicomiso.....	302

Lista de mapas

1. Territorios en fideicomiso.....	325
2. Territorio en fideicomiso de Tanganyika (bajo administración británica)	326
3. Territorio en fideicomiso de Ruanda Urundi (bajo administración belga) ..	327
4. Territorio en fideicomiso de Somalia (bajo administración italiana) ..	328
5. Territorio en fideicomiso del Camerún (bajo administración británica y francesa).....	329
6. Territorio en fideicomiso del Togo (bajo administración británica y francesa)	330
7. Territorio en fideicomiso de Samoa Occidental (bajo administración de Nueva Zelandia).....	331
8. Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea (bajo administración de Australia)	332
9. Territorio en fideicomiso de Nauru (bajo administración de Australia, en nombre de Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido)	333
10. Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico (bajo administración de los Estados Unidos).....	334

Parte I

ORGANIZACION Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO

Capítulo I

ORGANIZACION DEL CONSEJO

1. Composición

Durante el período a que se refiere este informe, ocurrieron dos vacantes entre los miembros electivos del Consejo de Administración Fiduciaria: Haití e India fueron elegidos por la Asamblea General en su octavo período de sesiones para reemplazar a la República Dominicana y a Tailandia, cuyos mandatos terminaron el 31 de diciembre de 1953. En consecuencia, la composición del Consejo durante sus períodos de sesiones 13° y 14° fué la siguiente:

Miembros que administran territorios en fideicomiso:

Australia
Bélgica
Estados Unidos de América
Francia
Nueva Zelandia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 de la Carta y que no están administrando territorios en fideicomiso:

China
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Miembros elegidos por la Asamblea General:

*Fecha de terminación
del mandato*

El Salvador	31 de diciembre de 1955
Siria	31 de diciembre de 1955
Haití	31 de diciembre de 1956
India	31 de diciembre de 1956

En su calidad de Autoridad Administradora para el Territorio de Somalia, Italia estuvo representada en los períodos de sesiones 13° y 14° del Consejo; y Colombia, Egipto y Filipinas, como miembros del Consejo Consultivo para Somalia, estuvieron representados en las sesiones del 14° período, dedicadas al examen de las condiciones reinantes en dicho Territorio.

Cuando las circunstancias lo exigieron, también participaron en los debates del Consejo representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de la Organización Mundial de la Salud.

Los gobiernos de varios Estados Miembros, entre ellos la Argentina y el Brasil, nombraron representantes competentes de sus delegaciones permanentes en las Naciones Unidas, para actuar como observadores en los períodos de sesiones 13° y 14° del Consejo. El

Consejo unánimemente tomó nota con satisfacción de esta iniciativa y prueba de interés.

2. Presidente y Vicepresidente

El Sr. L. K. Munro (Nueva Zelandia) y el Sr. M. R. Urquía (El Salvador), que habían sido elegidos respectivamente Presidente y Vicepresidente al iniciarse el 12° período de sesiones del Consejo, continuaron en sus cargos hasta la sesión de apertura del 14° período de sesiones celebrada el 2 de junio de 1954, en la que el Sr. M. R. Urquía (El Salvador) y el Sr. L. Pignon (Francia) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente.

3. Sesiones

El Consejo y sus órganos auxiliares celebraron las siguientes sesiones durante el período a que se refiere el presente informe:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

13° período de sesiones (484a. a 525a. sesiones), celebrado en la Sede, Nueva York, del 28 de enero al 25 de marzo de 1954.

14° período de sesiones (526a. a 562a. sesiones), celebrado en la Sede, Nueva York, del 2 de junio al 16 de julio de 1954.

COMITÉ PERMANENTE DE UNIONES ADMINISTRATIVAS
45a. a 55a. sesiones, celebradas en la Sede, Nueva York, del 2 de febrero al 7 de julio de 1954.

COMITÉ PERMANENTE DE PETICIONES
97a. a 200a. sesiones, celebradas en la Sede, Nueva York, del 25 de septiembre de 1953 al 14 de julio de 1954.

COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DE LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO
13a. sesión, celebrada en la Sede, Nueva York, el 9 de julio de 1954.

COMITÉ PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES INDÍGENAS DE LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO EN LOS TRABAJOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Sesiones primera a sexta, celebradas en la Sede, Nueva York, del 2 de febrero al 17 de marzo de 1954.

COMITÉ PARA EL CONTROL Y LIMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Primera y segunda sesiones, celebradas en la Sede, Nueva York, el 8 y el 21 de junio de 1954.

4. Procedimiento

En virtud de la resolución 467 (XI) del 22 de julio de 1952 relativa a procedimientos generales del Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo aprobó enmiendas provisionales a algunos de los artículos de su reglamento que se refieren a peticiones, e invitó al Comité Permanente a que lo informara en su 12º período de sesiones sobre la eficacia de los nuevos artículos. En el 12º período de sesiones, el Consejo decidió ampliar el plazo para la presentación del informe hasta el 13º período de sesiones a fin de tener mayor experiencia respecto a la aplicación de los artículos.¹

El Comité Permanente de Peticiones informó² al 13º período de sesiones del Consejo, que había dedicado todas sus sesiones exclusivamente al examen de peticiones y no podría presentar un informe sobre cuestiones de procedimiento. Proponía, por lo tanto, que el Consejo aplazara el examen de la cuestión hasta el 14º período de sesiones. En consecuencia, en su 519a. sesión, el Consejo decidió aplazar el examen de la cuestión hasta su 14º período de sesiones.

Durante el 14º período de sesiones del Consejo, el Comité Permanente de Peticiones presentó un informe³ sobre la eficacia del nuevo procedimiento relativo a peticiones. El Comité Permanente recomendó enmiendas a los artículos 86 y 90 al efecto de que la Autoridad Administradora correspondiente transmitiera por escrito, dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de recibo, observaciones completas y precisas sobre aquellas peticiones a las que se fuera a aplicar el procedimiento establecido, y que el Comité Permanente de Peticiones se reuniera con la frecuencia que exigiera el volumen de trabajo. En cuanto al examen de peticiones relativas a problemas de carácter general, que se distribuyen en virtud del párrafo 2 del artículo 85 del reglamento del Consejo, el Comité Permanente propuso que el contenido de estas peticiones se pusiera en conocimiento del Consejo con mayor detalle y en forma más aprovechable. Con este propósito, recomendaba que en el documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre la situación de cada territorio figurara un anexo en el que se expusieran, bajo los títulos correspondientes a los del documento de trabajo, los problemas planteados en las peticiones y los problemas generales planteados en las comunicaciones.

En su 528a. sesión, el Consejo examinó el informe del Comité Permanente de Peticiones y resolvió⁴ aprobar las recomendaciones contenidas en el informe, y adoptar las enmiendas propuestas por el Comité a los artículos 86 y 90 del reglamento del Consejo.

También en la misma reunión, el Consejo aprobó otra resolución⁵ relativa a la presentación de información

suplementaria para examinar los informes anuales. En la resolución, el Consejo opinaba que su labor se facilitaría si las Autoridades Administradoras presentaran por escrito, aproximadamente un mes antes del período de sesiones correspondiente, declaraciones en que reseñaran los sucesos y acontecimientos más importantes ocurridos en los territorios en fideicomiso después de la presentación de los informes anuales, que no hubieran sido comunicados al Consejo de algún otro modo; invitaba a las Autoridades Administradoras a prestar atención favorable a esta cuestión.

El Consejo, en su 548a. sesión, después de examinar la resolución 789 (VIII) de la Asamblea General, sobre control y limitación de documentos, aprobó diversas propuestas formuladas por el Secretario General relativas al procedimiento a seguir en el examen de los informes anuales sobre la administración de los territorios en fideicomiso. En la sección 11 del capítulo V se exponen estas propuestas.

5. Relaciones con el Consejo Económico y Social y los organismos especializados

En la resolución 504 F (XVI) del 23 de julio de 1953 del Consejo Económico y Social, se invita a la Asamblea General y al Consejo de Administración Fiduciaria a que, según sea procedente y en colaboración con los gobiernos de todos los Estados que administran territorios, inclusive territorios en fideicomiso y territorios no autónomos, en los cuales la mujer no goce de plenos derechos políticos, tomen todas las medidas necesarias para impulsar, en especial mediante la enseñanza, el desarrollo de los derechos políticos de la mujer en dichos territorios; e invita al Secretario General a informar a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer acerca de las medidas tomadas con objeto de llevar a la práctica la presente resolución. El Consejo decidió en su 517a. sesión tomar nota de esta resolución.

La UNESCO presentó al Consejo sus observaciones⁶ respecto a aquellas partes de los informes anuales sobre los Territorios en fideicomiso de Tanganyika, Ruanda Urundi, Camerún bajo Administración Francesa, Togo bajo Administración Británica, Togo bajo Administración Francesa, Samoa Occidental, Nueva Guinea y Nauru, que versaban sobre asuntos de su incumbencia. Además, proporcionó ejemplares de su publicación *Study Abroad*, y de su monografía sobre educación fundamental, "El uso de los idiomas vernáculos en la enseñanza", para información de los miembros del Consejo.

La OMS presentó al Consejo sus observaciones⁷ respecto a aquellas partes de los informes anuales sobre los Territorios en fideicomiso de Somalia bajo Administración Italiana, Samoa Occidental, Nueva Guinea, Nauru y las Islas del Pacífico, que versaban sobre asuntos de su incumbencia.

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período de sesiones, Suplemento No. 4*, documento A/2427, páginas 1 y 2.

² T/L.432, párrafo 6.

³ T/L.465.

⁴ Resolución 998 (XIV).

⁵ Resolución 997 (XIV).

⁶ T/1091, 1124, 1125, 1126.

⁷ T/1122.

Capítulo II

EXAMEN DE LOS INFORMES ANUALES

1. Introducción

Las disposiciones tomadas por el Consejo durante el período abarcado por el presente informe, como resultado del examen de los informes anuales, figuran, respecto de cada territorio, en el capítulo pertinente de la parte II de este informe. Esos capítulos tratan también de las disposiciones tomadas por el Consejo respecto a las cuestiones de carácter general planteadas en las peticiones y, cuando son pertinentes, las observaciones y conclusiones de las misiones visitadoras. El Consejo decidió que las observaciones de cada uno de los miembros figuraran a continuación de las secciones a que se refirieran.

2. Tanganyika

El informe del Gobierno del Reino Unido sobre la administración de Tanganyika relativo al año terminado el 31 de diciembre de 1952⁸ fué recibido por el Secretario General el 28 de septiembre de 1953. El examen del informe comenzó en la 507a. sesión, en la que el Sr. A. J. Grattan-Bellew, representante especial de la Autoridad Administradora, hizo una declaración inicial. Durante las sesiones 508a. a 510a. se dirigieron preguntas al representante especial. Durante las sesiones 511a. a 513a., el Consejo celebró un debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio, y en la última de estas sesiones designó un comité de redacción integrado por los representantes de Australia, El Salvador, Francia y Siria, para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción⁹ fueron aprobadas, con enmiendas, por el Consejo en su 524a. sesión. El informe,¹⁰ tal como quedó finalmente aprobado en esa sesión, forma el capítulo I de la parte II.

3. Ruanda Urundi

El informe del Gobierno de Bélgica sobre la administración de Ruanda Urundi relativo al año terminado el 31 de diciembre de 1952¹¹ fué recibido por el Secretario General el 7 de julio de 1953. El examen de este informe comenzó en la 510a. sesión, en la que el representante especial de la Autoridad Administradora, Mr. Pierre Leroy, hizo una declaración inicial. Durante las sesiones 511a., 512a. y de la 514a. a la 516a. se dirigieron preguntas al representante especial. En la última de estas sesiones, el Consejo inició un debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio, que terminó en la 518a. sesión, en la cual el Consejo

designó un comité de redacción integrado por los representantes de El Salvador, India, Nueva Zelandia y el Reino Unido para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción¹² fueron aprobadas con enmiendas por el Consejo en la 525a. sesión. El informe,¹³ tal como quedó finalmente aprobado en esa sesión, forma el capítulo II de la parte II.

4. Somalia bajo Administración Italiana

El informe del Gobierno de Italia sobre la administración de Somalia relativo al año terminado el 31 de diciembre de 1953¹⁴ fué recibido por el Secretario General el 14 de mayo de 1954. El examen de este informe y de un informe de la delegación de Colombia relativo al Consejo Consultivo para Somalia¹⁵ comenzó en la 528a. sesión, en la cual el representante de Italia, el Administrador del Territorio, Sr. Enrico Martino, y el representante de Colombia en el Consejo Consultivo hicieron declaraciones. En la 529a. sesión, el representante de Egipto, Presidente del Consejo Consultivo, formuló declaraciones y en la 530a. sesión, los señores Aden Abdullah Osman y Abdi Nur Mohamed Hussen, Vicepresidentes del Consejo Territorial de Somalia, hicieron una declaración conjunta con carácter de peticionarios. Durante las sesiones 529a. a 533a. se dirigieron preguntas al representante especial de la Autoridad Administradora, Sr. Marcello Mochi. En la 533a. sesión se inició el debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio, que continuó hasta la 535a. sesión, en la cual el Consejo nombró un comité de redacción integrado por los representantes de Bélgica, Estados Unidos de América, India y Siria, para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción¹⁶ fueron aprobadas con enmiendas por el Consejo en la 549a. sesión. En sus sesiones 549a. y 550a., el Consejo aprobó dos resoluciones relativas, respectivamente, a la cuestión de la frontera entre Somalia bajo Administración Italiana y Etiopía y a la cuestión del financiamiento de los planes de desarrollo económico del Territorio en fideicomiso.¹⁷ El informe,¹⁸ tal como quedó finalmente aprobado en la 562a. sesión, forma el capítulo III de la parte II.

5. Camerún bajo Administración Británica

El informe del Gobierno del Reino Unido sobre la administración del Camerún, relativo al año termina-

⁸ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1083.

⁹ T/L.451.

¹⁰ T/L.419 y Add.1, L.451, L.455, L.456.

¹¹ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1081.

¹² T/L.452.

¹³ T/L.420 y Add.1, L.452, L.457.

¹⁴ T/1117.

¹⁵ T/1116.

¹⁶ T/L.483.

¹⁷ Resoluciones 1000 (XIV) y 1001 (XIV).

¹⁸ T/L.471 y Add.1, L.483, L.495, L.497.

do el 31 de diciembre de 1952¹⁹ fué recibido por el Secretario General el 20 de enero de 1954. El examen del informe, junto con el informe²⁰ de la Misión Visitadora que fué al Territorio en 1952, comenzó en la 485a. sesión, en la que el representante del Reino Unido y el representante especial de la Autoridad Administradora, Brigadier E. J. Gibbons, hicieron declaraciones iniciales. Durante las sesiones 486a. a 488a. se dirigieron preguntas al representante especial. En la 488a., comenzó un debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio, que continuó durante las sesiones 490a. y 491a. En la última de estas sesiones, el Consejo designó un comité de redacción integrado por los representantes de Bélgica, China, Estados Unidos de América e India para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. En su 503a. sesión, el Consejo aprobó las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción.²¹ El informe,²² tal como quedó finalmente aprobado en la 525a. sesión, forma el capítulo IV de la parte II.

6. Camerún bajo Administración Francesa

El informe del Gobierno de Francia sobre la administración del Camerún, relativo al año terminado el 31 de diciembre de 1952²³ fué recibido por el Secretario General el 28 de agosto de 1953. El examen del informe, junto con el informe²⁴ de la Misión Visitadora que fué al Territorio en 1952 comenzó en la 488a. sesión, en la que el representante especial de la Autoridad Administradora, Sr. G. H. Becquey, hizo una declaración inicial. Durante las sesiones 489a. a 492a., se dirigieron preguntas al representante especial. En la 493a. sesión, el Consejo comenzó el debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio, el cual continuó hasta la 496a. sesión. En esta última sesión, el Consejo designó un comité de redacción integrado por los representantes de Australia, El Salvador, Nueva Zelandia y Siria, para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción²⁵ fueron aprobadas con enmiendas por el Consejo en sus sesiones 519a. y 520a. El informe,²⁶ tal como quedó finalmente aprobado en la 525a. sesión, forma el capítulo V de la parte II.

7. Togo bajo Administración Británica

El informe del Gobierno del Reino Unido sobre la administración del Togo, relativo al año terminado el 31 de diciembre de 1952,²⁷ fué recibido por el Secretario General el 6 de noviembre de 1953. El examen del informe, junto con el informe²⁸ de la Misión Visitadora que fué al Territorio en 1952, comenzó en la 493a. sesión, en la que el representante especial de la Autoridad Administradora, Sr. M. de N. Ensor, hizo una declaración inicial. Durante las sesiones 494a. a

498a., se dirigieron preguntas al representante especial. En la 499a. sesión, el Consejo inició un debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio, que fué concluido en la 500a. sesión. En el curso de ésta, el Consejo designó un comité de redacción integrado por los representantes de Bélgica, China, Estados Unidos de América y Haití para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción²⁹ fueron aprobadas con enmiendas en la 520a. sesión. El informe,³⁰ tal como quedó finalmente aprobado en la 525a. sesión, forma el capítulo VI de la parte II.

8. Togo bajo Administración Francesa

El informe del Gobierno de Francia sobre la administración del Togo, relativo al año terminado el 31 de diciembre de 1952,³¹ fué recibido por el Secretario General el 12 de agosto de 1953. El examen del informe, junto con el informe de la Misión Visitadora³² que fué al Territorio en 1952, comenzó en la 498a. sesión, en la que el representante especial de la Autoridad Administradora, Sr. Apedo Amah, hizo una declaración inicial. Se dirigieron preguntas al representante especial durante las sesiones 499a. a 502a. y en esta última el Consejo inició un debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio, que continuó hasta la 505a. sesión. En esta última sesión, el Consejo designó un comité de redacción integrado por los representantes de Bélgica, China, Estados Unidos de América y Haití para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción³³ fueron aprobadas con enmiendas en la 521a. sesión. El informe,³⁴ tal como quedó finalmente aprobado en esa sesión, forma el capítulo VII de la parte II.

9. Samoa Occidental

El informe del Gobierno de Nueva Zelandia sobre la administración de Samoa Occidental, relativo al año terminado el 31 de diciembre de 1953,³⁵ fué recibido por el Secretario General el 19 de mayo de 1954. El examen del informe comenzó en la 542a. sesión, en la que el representante especial de la Autoridad Administradora, Sr. P. K. Edmonds, hizo una declaración inicial. Durante las sesiones 542a. a 547a. se dirigieron preguntas al representante especial. El debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio comenzó en la última de estas sesiones y continuó hasta la 551a. sesión. En la 549a. sesión, el Consejo designó un comité de redacción integrado por los representantes de Australia, Bélgica, India y Siria para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción³⁶ fueron aprobadas con enmiendas por el Consejo en su 560a. sesión. El informe,³⁷ tal como quedó finalmente aprobado en la 562a. sesión forma el capítulo VIII de la parte II.

¹⁹ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1090.

²⁰ T/1042.

²¹ T/L.418.

²² T/L.404 y Add.1, L.418, L.424.

²³ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1091.

²⁴ T/1043.

²⁵ T/L.429.

²⁶ T/L.406 y Add.1 y 2, L.429, L.445, L.454.

²⁷ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1084.

²⁸ T/1040.

²⁹ T/L.421.

³⁰ T/L.407 y Add.1, L.421, L.450.

³¹ Transmitido a los miembros del Consejo en los documentos T/1080 y Add.1.

³² T/1041.

³³ T/L.431.

³⁴ T/L.409 y Add.1, L.431, L.439.

³⁵ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1119.

³⁶ T/L.493.

³⁷ T/L.476 y Add.1, L.493, L.513.

10. Nueva Guinea

El informe del Gobierno de Australia sobre la administración de Nueva Guinea, relativo al año terminado el 30 de junio de 1953,³⁸ fué recibido por el Secretario General el 2 de abril de 1954. El examen del informe comenzó en la 537a. sesión, en la que el representante especial de la Autoridad Administradora, Sr. J. H. Jones, hizo una declaración inicial. Durante las sesiones 538a. a 541a. se dirigieron preguntas al representante especial. El debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio comenzó en la 542a. sesión y continuó durante las sesiones 544a. y 545a. En la última de estas sesiones, el Consejo designó un comité de redacción integrado por los representantes de China, El Salvador, Estados Unidos de América y Reino Unido para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción³⁹ fueron aprobadas con enmiendas por el Consejo en su 559a. sesión. El informe,⁴⁰ tal como quedó finalmente aprobado en la 562a. sesión, forma el capítulo IX de la parte II.

11. Nauru

El informe del Gobierno de Australia sobre la administración de Nauru, relativo al año terminado el 30 de junio de 1953,⁴¹ fué recibido por el Secretario General el 6 de abril de 1954. El examen del informe

³⁸ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1114.

³⁹ T/L.496.

⁴⁰ T/L.473 y Add.1, L.496, L.514.

⁴¹ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1111.

comenzó en la 535a. sesión, en la que el representante especial de la Autoridad Administradora, Sr. J. H. Jones, hizo una declaración inicial. Durante las sesiones 535a. a 537a. se dirigieron preguntas al representante especial. El debate general sobre las condiciones reinantes en el Territorio comenzó en la 537a. sesión y continuó hasta la 540a. sesión. En la última de estas sesiones, el Consejo designó un comité de redacción integrado por los representantes de Bélgica, China, El Salvador y Francia, para que preparara un proyecto de capítulo sobre el Territorio. Las recomendaciones contenidas en el informe del comité de redacción⁴² fueron aprobadas con enmiendas por el Consejo en su 560a. sesión. El informe,⁴³ tal como quedó finalmente aprobado en la 562a. sesión, forma el capítulo X de la parte II.

12. Islas del Pacífico

En conformidad con el Artículo 83 de la Carta, con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en su 415a. sesión, celebrada el 7 de marzo de 1949, y con su propia resolución 46 (IV) del 24 de marzo de 1949, el Consejo de Administración Fiduciaria examinó en su 14º período de sesiones el informe del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre su administración del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, relativo al año terminado el 30 de junio de 1953,⁴⁴ y aprobó un informe,⁴⁵ que transmitió al Consejo de Seguridad, sobre el ejercicio de sus funciones respecto de esta zona estratégica.

⁴² T/L.494.

⁴³ T/L.472 y Add.1, L.494, L.515.

⁴⁴ Transmitido a los miembros del Consejo en el documento T/1118.

⁴⁵ S/3272.

Capítulo III

EXAMEN DE PETICIONES

I. Introducción

El programa del 13° período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria incluía el estudio de 253 peticiones. Posteriormente el Consejo agregó al programa una petición escrita, y concedió tres audiencias orales no relacionadas con peticiones inscritas en su programa.

Las tres peticiones orales se referían al problema de la unificación del Togo. Además, el Consejo recibió una solicitud de audiencia oral para apoyar una petición escrita. La solicitud, presentada por la Union des populations du Cameroun, fué rechazada por el Consejo en su 485a. sesión. En su 12° período de sesiones el Consejo había decidido acceder a las solicitudes de audiencia oral que habían presentado la Assemblée traditionnelle du peuple Douala (NGONDO) y la Assemblée traditionnelle du peuple Bamiléké (KUM-ZSE), pero había resuelto aplazar las audiencias hasta su 13° período de sesiones. Sin embargo, ninguna de estas dos organizaciones envió ningún representante ante el Consejo durante el 12° período de sesiones.

De las 254 peticiones escritas, 78 estaban relacionadas con problemas de carácter general que ya habían sido señalados a la atención del Consejo y respecto de los cuales éste ya había tomado decisiones o formulado recomendaciones. Las 176 peticiones restantes se referían a cuestiones específicas.

El programa del 14° período de sesiones del Consejo comprendía el estudio de 176 peticiones. Posteriormente, el Consejo agregó al programa seis peticiones escritas y concedió una audiencia oral relacionada con una de ellas. Esta audiencia se relacionaba con las condiciones existentes en la Somalia bajo administración italiana.

Todas las peticiones fueron presentadas por el Comité Permanente de Peticiones, el cual estuvo integrado por los representantes de Australia, Bélgica, El Salvador, el Reino Unido, Siria y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta que se clausuró el 13° período de sesiones del Consejo. En su 525a. sesión celebrada durante su 13° período de sesiones, el Consejo decidió que el Comité Permanente quedara integrado por los representantes de Bélgica, Francia, India, Reino Unido, Siria y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

En sus informes 54⁴⁶ y 75⁴⁷ que se referían a peticiones distribuidas con arreglo al párrafo 2 del artículo 85 del reglamento del Consejo, el Comité Permanente recomendó, entre otras cosas, que las peticiones sobre cuestiones generales fueran estudiadas por el Consejo en relación con su examen del informe anual siguiente sobre el territorio considerado, o en

relación con determinados temas del programa con los que estuvieran más estrechamente relacionados. Estos dos informes fueron aprobados por el Consejo en su 485a. sesión celebrada durante el 13° período de sesiones, y en su 527a. sesión que tuvo lugar durante el 14° período de sesiones. Como resultado de la aprobación, 77 de dichas peticiones fueron tomadas en consideración por el Consejo durante su 13° período de sesiones, en tanto que el examen de las restantes peticiones del programa fué aplazado hasta el 14° período de sesiones. Asimismo, durante el 14° período de sesiones, 26 de las mencionadas peticiones fueron tomadas en consideración por el Consejo y el examen de siete fué aplazado hasta el 15° período de sesiones.

De las 176 peticiones escritas incluidas en el programa del 13° período de sesiones del Consejo que se referían a cuestiones específicas, 175 fueron remitidas al Comité Permanente el cual examinó 141, informando sobre cada una de ellas en 17 informes separados. Conforme a la recomendación del Comité Permanente contenida en su 67° informe,⁴⁸ el Consejo decidió retirar una petición⁴⁹ del programa y diferir el examen de otras 34 hasta su 14° período de sesiones. En 22 casos, el aplazamiento se debió a que las peticiones no habían sido recibidas por la Autoridad Administradora interesada con dos meses de anterioridad a la inauguración del 13° período de sesiones; en un caso, la Autoridad Administradora interesada la estaba estudiando, y en otro, el peticionario planteaba problemas abstractos y complicados que el Consejo no tenía tiempo de examinar durante su 13° período de sesiones. Se aplazó el examen de las 10 peticiones restantes porque el Comité Permanente no estaba en condiciones de presentar informes sobre ellas al Consejo antes de que se clausurara el 13° período de sesiones.

Durante el 13° período de sesiones el Comité Permanente presentó además otro informe⁵⁰ que contenía una información especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a peticiones, aprobadas previamente por el Consejo; el Consejo tomó nota de dicho informe en su 524a. sesión.

Entre las clausuras de los períodos 12° y 13° de sesiones del Consejo, el Comité Permanente celebró, en total, 55 sesiones, presentando 20 informes al Consejo en el 13° período de sesiones. El Consejo examinó los informes en sus sesiones 485a., 504a., 519a., 520a., 521a. y 524a. durante las cuales aprobó 129 resoluciones relativas a 135 peticiones que se referían a cuestiones específicas. De las 141 peticiones presentadas por el Comité Permanente, el Consejo examinó dos que se relacionaban con la resolución 750 (VIII) de la Asamblea General concerniente al problema de

⁴⁶ T/L.405.

⁴⁷ T/L.463.

⁴⁸ T/L.432.

⁴⁹ T/PET. 11/370.

⁵⁰ T/L.444.

la unificación del Togo. El Consejo no pudo aprobar ninguna resolución acerca de tres peticiones,⁵¹ porque ninguna de las propuestas presentadas al respecto llegó a obtener una mayoría de votos. En consecuencia, estas tres peticiones fueron remitidas por el Consejo al Comité Permanente para que volvieran a ser examinadas. Se aplazó hasta la 14a. sesión la consideración de una petición que no se había remitido al Comité Permanente.

De las 149 peticiones escritas incluidas en el programa del 14° período de sesiones del Consejo que se referían a cuestiones específicas, 148 se remitieron al Comité Permanente de Peticiones, que las examinó informando sobre 93 de ellas, una por una, en 12 informes separados. Conforme a las recomendaciones del Comité, contenidas en su 88° informe,⁵² el Consejo decidió dar por terminado el trámite de tres de las peticiones, en vista de que se habían concedido audiencias a sus autores durante el 13° período de sesiones del Consejo, y también resolvió aplazar el examen de 52 peticiones hasta el 15° período de sesiones. En 23 casos, el aplazamiento se debió a que no habían recibido las observaciones de las Autoridades Administradoras sobre las peticiones, y en 14 de dichos casos a que las peticiones o los documentos adicionales no habían sido recibidos por las Autoridades Administradoras interesadas con dos meses de anterioridad a la inauguración del 14° período de sesiones. En lo que concierne a tres peticiones, la Autoridad Administradora interesada observó que se estaban investigando los agravios que se exponían en ellas y en dos casos la información suplementaria que había solicitado el Comité Permanente, en un caso del peticionario y en el otro del representante especial de la Autoridad Administradora interesada, no se había recibido hasta la clausura del 14° período de sesiones. Se aplazó el examen de las 24 peticiones restantes porque el Comité Permanente no pudo presentar al Consejo los informes respectivos antes de que se clausurara el 14° período de sesiones.

El Consejo examinó la única petición que no había sido remitida al Comité Permanente.

Entre las clausuras de los períodos 13° y 14° de sesiones del Consejo, el Comité Permanente celebró, en total, 49 sesiones presentando 15 informes al Consejo en el 14° período de sesiones. El Consejo examinó los informes en sus sesiones 527a., 528a., 548a., 556a. y 561a., durante las cuales aprobó 81 resoluciones relativas a 93 peticiones que se referían a cuestiones específicas.

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó resoluciones concernientes a las tres peticiones sobre las cuales no había podido aprobar resoluciones en su 13° período de sesiones.

En su 562a. sesión, el Consejo decidió que el Comité Permanente de Peticiones quedara integrado por los representantes de Bélgica, Estados Unidos de América, Francia, India, Siria y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mandato de todos estos representantes debe durar hasta el final del 15° período de sesiones del Consejo.

2. Peticiones relativas a Tanganyika

En su 13° período de sesiones, el Consejo consideró cinco peticiones escritas relativas a Tanganyika. Dos de ellas se referían a problemas de carácter general que ya habían sido señalados a la atención del Consejo y respecto de los cuales ya había tomado decisiones o formulado recomendaciones. El Consejo las tuvo presentes durante su consideración del informe anual sobre el Territorio. En los títulos correspondientes del capítulo I de la parte II del presente informe se da razón de las principales cuestiones planteadas en ellas. Esas dos peticiones fueron las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Sr. Swaeleh Fundi y otras personas	T/PET.2/L.2
Los batika y pueblo de Uganda	T/PET.2/L.3

El Comité Permanente y el Consejo examinaron por separado las tres peticiones siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Anton Weber	T/PET.2/162 T/PET.2/162/Add.1-3	T/L.436	868 (XIII)
Unión de Ciudadanos Wameru	T/PET.2/164	T/L.436	869 (XIII)
Sr. Edward Levy	T/PET.2/165	T/L.436	870 (XIII)

Con respecto a una petición⁵³ relativa a las dificultades con que había tropezado el peticionario a propósito de un matrimonio, el Consejo tomó nota de que estaba tramitándose la solución y solicitó de la Autoridad Administradora que le informara acerca del resultado del asunto.

Con respecto a una petición⁵⁴ relativa a la cuestión de las tierras de los wameru y a una orden de desalojamiento dada por un colono europeo a varios miembros de la tribu, el Consejo señaló a la atención de los

peticionarios una declaración de la Autoridad Administradora en el sentido de que se estaba tratando la solución del asunto con el colono interesado. El Consejo invitó también a la Autoridad Administradora a informarle acerca del resultado de las negociaciones y solicitó de ella que tomara medidas necesarias para garantizar a los autóctonos que ocupaban la tierra que disfrutarían de sus derechos sobre ella con plena seguridad.

Con respecto a una tercera petición⁵⁵ en la que se presentaba una queja contra la Autoridad Administradora por su negligencia en proteger y conservar bienes decomisados a extranjeros enemigos, el Con-

⁵¹ T/PET. 5/161, 174, 184.

⁵² T/L.511.

⁵³ T/PET.2/162 y Add.1-3.

⁵⁴ T/PET.2/164.

⁵⁵ T/PET.2/165.

sejo tomó nota de las observaciones de la Autoridad Administradora en el sentido de que no había habido negligencia.

El Consejo no examinó durante su 14° período de sesiones ninguna petición relativa a Tanganyika.

3. Peticiones relativas a Ruanda Urundi

En su 13° período de sesiones, el Consejo consideró siete peticiones escritas relativas a Ruanda Urundi; cuatro de ellas se referían a problemas de carácter general que ya habían sido señalados a la atención del Consejo y respecto de los cuales ya había tomado decisiones o formulado recomendaciones. El Consejo

las tuvo presentes al considerar el informe anual sobre el Territorio. Bajo los títulos pertinentes del capítulo II de la parte II del actual informe se exponen los principales problemas planteados en esas cuatro peticiones que fueron las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Dr. R. Van Saceghem y Sr. E. Rabaud	T/COM.3/L.2
Sr. Kabondo	T/COM.3/L.3
Sr. Alexander Boateng	T/PET.3/L.1
Sr. E. Rabaud	T/PET.3/L.3

El Comité Permanente y el Consejo examinaron por separado cada una de las tres peticiones siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. E. Rabaud	T/PET.3/61	T/L.437	871 (XIII)
Sr. Joseph Habyarimana Gitera	T/PET.3/69	T/L.437	872 (XIII)
Sr. E. Rabaud	T/PET.3/L.2	T/L.437	873 (XIII)

Con respecto a una petición⁵⁶ en la que se afirmaba que la Autoridad Administradora se había negado a permitir que se organizaran determinados cursos que había propuesto la UNESCO, para los habitantes autóctonos, el Consejo señaló a la atención del peticionario las declaraciones de los representantes de Bélgica y de la UNESCO, según las cuales la UNESCO no había ofrecido jamás organizar tales cursos, tomó nota de que la UNESCO había ofrecido una beca para ampliación de estudios de seis meses a un habitante autóctono del Territorio, pero que el Gobierno de Bélgica no había podido aceptar el ofrecimiento, y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuara concediendo la debida importancia a dichos ofrecimientos e informara al Consejo acerca de ellos.

Con respecto a una petición⁵⁷ que contenía una serie de quejas encaminadas a mostrar que la Autoridad Administradora trataba con favoritismo a los belgas residentes en el Territorio, el Consejo estimó que no se había presentado ninguna prueba de ello.

En lo relativo a una petición⁵⁸ relativa a la admisión de los niños mulatos a las escuelas oficiales, el Consejo señaló a la atención del peticionario que la Autoridad Administradora había declarado que esos niños eran admitidos en las escuelas oficiales a condición de que hubieran alcanzado cierto grado de instrucción y señaló a la atención de la Autoridad Ad-

ministradora la necesidad de aumentar las asignaciones presupuestarias con varios fines docentes.

Durante su 14° período de sesiones el Consejo no examinó ninguna petición relativa a Ruanda Urundi.

4. Peticiones relativas a Somalia bajo administración italiana

En su 13° período de sesiones, el Consejo examinó 28 peticiones escritas relativas a la Somalia bajo administración italiana. Sin embargo, durante su 12° período de sesiones, el Consejo en realidad había dado por terminado el trámite de las peticiones que eran solicitudes de audiencias orales a las que el Consejo había accedido en aquel entonces. Habiendo sido recibidas demasiado tarde para ser incluidas en el programa del 12° período de sesiones, las dos peticiones fueron incluidas, por consideraciones de forma, en el programa del 13° período de sesiones.

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Sr. Abdullahi Issa	T/PET.11/L.6
Unione Nazionale Somalia, Unione Africana Somalia, Lega Progressista Somalia e Hisbia Dighil y Mirifle	T/PET.11/L.7

El Comité Permanente de Peticiones y el Consejo examinaron por separado cada una de las 25 peticiones siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Abdi Aden Ismahil Mohamed	T/PET.11/351	T/L.426	874 (XIII)
Sres. Scide Mohamed Dore, Dahir Sciacul y Abdullahi Hassan	T/PET.11/356	T/L.427	875 (XIII)
Hisbia Dighil y Mirifle, Sección de Oddur	T/PET.11/358	T/L.426	876 (XIII)
Sr. Mohi Edden Abo Bakre Othman Herset	T/PET.11/359	T/L.427	877 (XIII)
Jeque Abdul Rezah, Jeque Abdio y otras personas	T/PET.11/360	T/L.427	878 (XIII)
Sr. Hassan Gaal Mohamed	T/PET.11/361	T/L.426	879 (XIII)
Sres. Barle Ker, Osman Hire y otras personas	T/PET.11/362	T/L.427	880 (XIII)
Sr. Alam Othnou Mohamed Abiker y otras personas	T/PET.11/363	T/L.425	881 (XIII)
Liga de la Juventud Somali, Sección de Oddur	T/PET.11/364	T/L.426	882 (XIII)

⁵⁶ T/PET.3/61.

⁵⁷ T/PET.3/69.

⁵⁸ T/PET.3/L.2.

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Jefe Hussien Mohamud Dini	T/PET.11/366	T/L.427	883 (XIII)
	T/PET.11/366/Add.1		
Mr. Haji Abdulla Hussien y otras personas	T/PET.11/367	T/L.427	883 (XIII)
Comerciantes de Bur Acaba	T/PET.11/368	T/L.426	884 (XIII)
Sr. Ahmed Mohamud Ismail Hussein	T/PET.11/369	T/L.426	885 (XIII)
Jefe Soffe Abdulle Aden Uarsama y otras personas	T/PET.11/371	T/L.427	886 (XIII)
Sr. Haji Abdalla Hussien	T/PET.11/372	T/L.427	887 (XIII)
	T/PET.11/372/Add.1		
Jeque Abdullahi Ahmed Abdi y otras personas	T/PET.11/373	T/L.426	888 (XIII)
	T/PET.11/373/Corr.1		
Sr. Haji Abdullahi Hussein	T/PET.11/374	T/L.427	889 (XIII)
Sr. Mohamed Ba're Mohamud	T/PET.11/375	T/L.425	890 (XIII)
Sr. Farah Hassan Odua	T/PET.11/376	T/L.425	891 (XIII)
Sr. Sciarif Adan Abdi	T/PET.11/377	T/L.425	892 (XIII)
Sr. Mohamed Osman Ahmed	T/PET.11/378	T/L.425	893 (XIII)
Sr. Ali Osman Iusuf	T/PET.11/379	T/L.425	894 (XIII)
Sr. Mohamed Giana Hassan	T/PET.11/380	T/L.426	895 (XIII)
Sr. Sido Giamo Mire	T/PET.11/381	T/L.425	896 (XIII)
Jefe Dahir Sciacul	T/PET.11/L.5	T/L.427	883 (XIII)

Siete de las peticiones⁵⁹ contenían quejas de carácter particular, cuatro de ellas presentadas por ex soldados del ejército de Italia. La quinta era una petición para ser dado de alta en el ejército, la sexta se refería a una persona despedida de la policía por razones de salud y la séptima era una reclamación por supuestas pérdidas sufridas en Baidoa en el mes de abril de 1950.

Con respecto a la primera de dichas peticiones⁶⁰ el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora en el sentido de que había sido licenciado por la Compañía de Lisiados de Guerra, de Militares Inválidos y de ex Combatientes, después de haber sido condenado por desobediencia. Respecto a dos peticiones⁶¹ el Consejo instó a la Autoridad Administradora a que adoptara tan pronto como fuera posible las medidas que tenía en perspectiva para ayudar a los ex combatientes que no estaban en condiciones de trabajar.

En lo que respecta a dos peticiones⁶² el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora estudiara la posibilidad de pagar indemnizaciones a los peticionarios después de que hubiera adoptado las medidas de asistencia que tenía en mira.

Acerca de una petición,⁶³ el Consejo decidió que el peticionario había sido despedido de las fuerzas de policía en interés de su propia salud, y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora pudiera ofrecerle un trabajo apropiado que fuera menos pesado.

Respecto a la última petición,⁶⁴ el Consejo señaló a la atención del peticionario la declaración del representante especial de la Autoridad Administradora durante el 12º período de sesiones del Consejo, relativa al pago de una indemnización graciable como indemnización por daños sufridos durante el incidente de Baidoa en 1950.⁶⁵

Ocho peticiones se referían a diversas cuestiones políticas y económicas.⁶⁶

Respecto de cuatro peticiones⁶⁷ que se referían a quejas relacionadas con la administración de justicia, el Consejo tomó nota de las declaraciones formuladas por la Autoridad Administradora acerca de cada una de dichas peticiones. A propósito de la primera petición, que contenía la queja de que la policía había tratado duramente al peticionario, el Consejo instó a la Autoridad Administradora a inculcar en los agentes de policía y los guardias carcelarios del Territorio el respeto de los derechos de los penados; y, en lo que respecta a la tercera petición, que era una súplica de indulto a favor de cuatro presos sentenciados por los tribunales, se pidió a la Autoridad Administradora que examinara la posibilidad de efectuar un nuevo acto de clemencia a favor de los mismos.

Respecto de dos peticiones⁶⁸ relativas a la rivalidad existente entre los partidos políticos de Oddur, en la provincia del Alto Giuba, el Consejo expresó la esperanza de que las secciones de los diversos partidos políticos comprenderían que el interés del Territorio exigía que cooperaran entre sí y con la Administración.

Con respecto a la primera de dos peticiones,⁶⁹ el Consejo dió instrucciones a la Misión Visitadora para los territorios en fideicomiso del África oriental, 1954, en el sentido de que tomara en consideración los derechos e impuestos municipales cuando se examinara el sistema fiscal del Territorio; respecto a la segunda de las peticiones, expresó la esperanza de que el peticionario quedara satisfecho al habersele concedido la licencia que había solicitado para administrar un restaurante.

Diez peticiones⁷⁰ procedentes del Distrito de Bardera contenían expresiones de descontento por la administración de ese distrito, y en uno o dos casos por la del Distrito de Lugh Ferrandi.

Acerca de dos de estas últimas⁷¹ que trataban de conflictos intertribales, el Consejo expresó la esperanza

⁵⁹ Véase el 64º informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.425.

⁶⁰ T/PET.11/375.

⁶¹ T/PET.11/376, 381.

⁶² T/PET.11/377, 378.

⁶³ T/PET.11/379.

⁶⁴ T/PET.11/363.

⁶⁵ Véase el 32º informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.347.

⁶⁶ Véase el 65º informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.426.

⁶⁷ T/PET.11/361, 369, 373, 380.

⁶⁸ T/PET.11/364 y 358.

⁶⁹ T/PET.11/368 y 351.

⁷⁰ Véase el 66º informe del Comité de Peticiones, T/L.427.

⁷¹ T/PET.11/356 y 362.

de que en interés del futuro del Territorio los jefes de las tribus cooperarían mutuamente y con la Administración, y de que la Autoridad Administradora continuaría sus esfuerzos para inducir a los nómadas a que adoptaran un género de vida sedentario.

Respecto de una tercera petición⁷² relativa a las costumbres locales de los intermediarios en las ventas de ganado, el Consejo solicitó de los peticionarios que cooperaran con la Administración en la aplicación de reglamentos que evidentemente se hallaban en armonía con las costumbres tradicionales, y estimó que la Autoridad Administradora debería continuar haciéndolos respetar.

En una cuarta petición⁷³ se presentaban quejas relativas a la selección y composición de las entidades políticas, a la insuficiencia de los servicios sanitarios y a las condiciones de la enseñanza. El Consejo observó que estas cuestiones habían merecido su atención repetidas veces, e invitó al Secretario General a que comunicara a los peticionarios las conclusiones y recomendaciones más recientes del Consejo sobre estos temas.

En cuanto a tres peticiones⁷⁴ que contenían diversas quejas relativas al progreso político, económico, social y educativo, así como la acusación de que el pueblo era víctima de una opresión general y de que los habitantes eran encarcelados cuando se comunicaban con el Consejo Consultivo de las Naciones Unidas para Somalia, el Consejo decidió enviar a los peticionarios sus últimas recomendaciones sobre las cuestiones de carácter general que habían planteado y señalar a la atención de los peticionarios el hecho de que el Consejo examinaría sus demás acusaciones si las apoyaban con ejemplos concretos.

Con respecto a una petición⁷⁵ que contenía, además de quejas de carácter general relativas al progreso del Distrito, otras de que faltaban aldeas y de que se aplicaba la ley italiana en lugar de la ley coránica, y de que los animales salvajes causaban estragos en el ganado, el Consejo decidió enviar a los peticionarios sus últimas recomendaciones acerca del progreso económico, social y educativo del Territorio; señaló a su atención las declaraciones de la Autoridad Administradora de que la legislación coránica se aplicaba en cuestiones relativas al estatuto personal, y manifestó que la Autoridad Administradora estaba tratando de que los nómadas se hicieran sedentarios y que a menudo se enviaban patrullas locales para proteger al ganado. El Consejo recomendó a la Autoridad Administradora

que continuara e intensificara sus esfuerzos para proteger el ganado.

En una petición⁷⁶ relativa a las contadas veces en que prestaba sus servicios el *ferry* de Bardera, y al sistema de impuestos que rige las transacciones de ganado, el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora en el sentido de que el *ferry* suministraba transporte suficiente y de que los impuestos sobre el ganado eran moderados y equitativos.

Otra petición⁷⁷ se refería a una solicitud de un empleo en la Administración que no había sido satisfecha. El Consejo señaló a la atención del peticionario la observación hecha por la Autoridad Administradora en el sentido de que se le había negado empleo porque no había ningún puesto vacante, y expresó la esperanza de que fuera tenido en cuenta para un empleo en caso de que se produjera alguna vacante adecuada para él.

El Consejo retiró de su programa la 26a. petición⁷⁸ en vista de que la Autoridad Administradora había informado de que los acontecimientos con los que se relacionaba habían ocurrido fuera del Territorio en fideicomiso.⁷⁹

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo consideró 41 peticiones escritas relativas a la Somalia bajo administración italiana. Cuatro de estas peticiones se referían a problemas de carácter general que ya habían sido señalados a la atención del Consejo y respecto de los cuales éste había tomado decisiones o formulado recomendaciones. El Consejo las tuvo presentes al considerar el informe anual sobre el Territorio. Bajo los títulos pertinentes del capítulo III de la parte II del actual informe aparece una relación de los principales problemas que se plantearon en esas cuatro peticiones, que fueron las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Sr. Abdi Hagi Mohamed Hussien y otras personas	T/PET.11/L.9
Presidente de la Liga Musulmana en Somalia	T/PET.11/L.10
Jerife Mohamed Abdurahman y otras personas	T/PET.11/L.11
Vicepresidentes del Consejo Territorial	T/PET.11/L.12

El Comité Permanente de Peticiones y el Consejo examinaron por separado las 37 peticiones siguientes:

⁷² T/PET.11/371.

⁷³ T/PET.11/360.

⁷⁴ T/PET.11/366 y Add.1, 367 y L.5.

⁷⁵ T/PET.11/372 y Add.1.

⁷⁶ T/PET.11/374.

⁷⁷ T/PET.11/359.

⁷⁸ T/PET.11/370.

⁷⁹ Véase el 67° informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.432.

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sres. Nur Elmi Giavane, Nur Elmi Mohamud y otras personas	T/PET.11/383	T/L.468	1003 (XIV)
Sr. Ahmed Mohamood	T/PET.11/384	T/L.467	1004 (XIV)
Sr. Mohamed Hassan Mohamed y otras personas	T/PET.11/386	T/L.468	1005 (XIV)
Caid Ahmed Othman	T/PET.11/387	T/L.468	1006 (XIV)
Sr. Mohamed Gial Akbar	T/PET.11/389	T/L.467	1007 (XIV)
Representantes de la Tribu Averghedir-Saad	T/PET.11/390	T/L.468	1008 (XIV)
Jefes del Pueblo Abgal	T/PET.11/391	T/L.468	1009 (XIV)
Sr. Mohamed Hassan Yousuf	T/PET.11/392	T/L.467	1010 (XIV)
Sr. Aden Mohamed Jama	T/PET.11/394	T/L.467	1011 (XIV)
Sres. Ali Osman Haji Mohamed Omar Jusuf y otras personas	T/PET.11/395	T/L.467	1012 (XIV)

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Mussa Said Aves y otras personas	T/PET.11/396	T/L.467	1013 (XIV)
Jefes y notables de la comunidad árabe de Baidoa	T/PET.11/398}	T/L.468	1014 (XIV)
Representantes de la comunidad árabe de Baidoa	T/PET.11/401}		
Jefes, notables y dirigentes de la comunidad árabe de Baidoa	T/PET.11/399	T/L.468	1015 (XIV)
Liga de la Juventud Somali, Sección de Chisimaio	T/PET.11/402		
	T/PET.11/414		
	y Add.1	T/L.469	1016 (XIV)
Sr. Ismail Ran Gutale	T/PET.11/403	T/L.467	1017 (XIV)
Sra. Cutubei Addo' Daut	T/PET.11/404	T/L.467	1018 (XIV)
Sres. Abdo El Shafei, Jeque Abdo Ali y otras personas	T/PET.11/405	T/L.468	1019 (XIV)
Sres. Islam Mohamed Mussi, Haji Mohamed y otras personas	T/PET.11/406		
	y Add.1 y 2	T/L.468	1020 (XIV)
Sres. Mohamed Giama Hassan, Obdurahman Haji y otras personas	T/PET.11/407	T/L.468	1021 (XIV)
Miembros de la Somali Intelligent Secret News Agency	T/PET.11/408	T/L.468	1022 (XIV)
Jefe Dahir Shakul Hussien, Ali Osman Mohamed y Haji Abdulla Isse	T/PET.11/409	T/L.469	1023 (XIV)
Liga de la Juventud Somali, Sección de Galcaio	T/PET.11/410		
	y Add.1	T/L.469	1024 (XIV)
Liga de la Juventud Somali, Sección de Bender Cassim	T/PET.11/411		
	y Add.1	T/L.469	1025 (XIV)
Sr. Mohamed Giama Hassan	T/PET.11/412	T/L.468	1026 (XIV)
Sr. Elmi Shire Ali	T/PET.11/415	T/L.469	1027 (XIV)
Secretario de la Liga de la Juventud Somali, Sección de Skushuban			
	T/PET.11/416		
	y Add.1 y 2	T/L.469	1028 (XIV)
Liga de la Juventud Somali, Sección de Candala	T/PET.11/417	T/L.469	1029 (XIV)
Liga de la Juventud Somali, Sección de Eil	T/PET.11/418		
	y Add.1	T/L.469	1030 (XIV)
Vicepresidente de la Liga de la Juventud Somali	T/PET.11/423	T/L.469	1031 (XIV)
Sr. Mohamed Uehlie Barre y otras personas	T/COM.11/L.87		
	y Add.1		
Jefes y notables de la tribu abgal	T/COM.11/L.88	T/L.468	1032 (XIV)
Comitato per il Progresso Somalo	T/COM.11/L.91		
Sr. Mohamed Mohamud Osman y otras personas	T/COM.11/L.96		
Jefes y notables de la Tribu Abgal	T/COM.11/L.97		
Sr. Haji Abdullahi Hussien	T/COM.11/L.101	T/L.467	1033 (XIV)

Dos peticionarios se quejaban de que la Autoridad Administradora no ayudaba a combatir la plaga de langostas y pedían que se protegiera a las poblaciones y al ganado de los ataques de los animales salvajes. Acerca de la primera petición⁸⁰ el Consejo propuso que la Autoridad Administradora empleara todos los medios posibles para combatir este azote que amenazaba periódicamente al Territorio. Con respecto a la segunda petición⁸¹ el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora intensificara sus esfuerzos para proteger a la población y al ganado contra los ataques de los animales salvajes.

Seis peticionarios se quejaban de haber perdido sus empleos públicos y solicitaban ser o reinstalados o indemnizados.

Con respecto a dos peticiones,⁸² el Consejo señaló a la atención de los peticionarios las observaciones formuladas por la Autoridad Administradora y la declaración del representante especial. Respecto de una de ellas⁸³ el Consejo sugirió que el peticionario debía adquirir los conocimientos necesarios para poder ser maestro. Acerca de las tres⁸⁴ peticiones restantes el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora examinara nuevamente cada uno de los casos, con miras a reintegrar a los peticionarios en

sus empleos, y a que continuara interesándose en los casos semejantes que pudieran presentarse en el porvenir.

Con respecto a una petición,⁸⁵ el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones formuladas por la Autoridad Administradora.

Una peticionaria⁸⁶ reclamaba una indemnización de la Administración, y solicitaba empleo para sus hijos. El Consejo expresó la esperanza de que el Parlamento italiano promulgara próximamente una ley que reglamentara esta cuestión y de que la Autoridad Administradora continuara, entre tanto, protegiendo a la peticionaria y a su familia, y de que haría todo lo que estuviera en su poder para procurar un empleo adecuado a sus hijos.

Respecto de dos peticiones⁸⁷ que trataban de cuestiones jurídicas, el Consejo decidió que, en vista de que caían dentro de la competencia de los tribunales del Territorio, que no era necesario formular recomendación alguna.

Acerca de otras dos peticiones⁸⁸ relativas a la elección de jefes de tribus, el Consejo tomó nota de que se daría oportunidad a los peticionarios de participar en las elecciones que se celebrarían próximamente con este objeto.

⁸⁰ T/PET.11/395.

⁸¹ T/PET.11/L.101.

⁸² T/PET.11/394.

⁸³ T/PET.11/392.

⁸⁴ T/PET.11/389, 396, 384.

⁸⁵ T/PET.11/403.

⁸⁶ T/PET.11/404.

⁸⁷ T/PET.11/386, 387.

⁸⁸ T/PET.11/390, 391.

Cuatro peticiones contenían expresiones de descontento hacia la Administración. Acerca de una de ellas⁸⁹ el Consejo tomó nota de que se trataba de acusaciones de carácter general, en vista de lo cual no podía formular ninguna recomendación. Respecto de las otras tres,⁹⁰ el Consejo señaló a la atención de los peticionarios las observaciones formuladas por la Autoridad Administradora y el hecho de que no podía examinar las acusaciones a menos que se presentaran pruebas en apoyo de las mismas.

Respecto a cinco peticiones⁹¹ relativas a un litigio concerniente a la perforación de un pozo cerca de Uardiglei, el Consejo tomó nota de que la controversia había sido resuelta satisfactoriamente.

Con respecto a una petición⁹² concerniente a un litigio acerca de una granja el Consejo señaló a la atención del peticionario el hecho de que podía presentar una reclamación ante los tribunales.

Con respecto a una petición⁹³ que se refería a un problema sobre el cual el Consejo ya había aprobado su resolución 895 (XIII), el Consejo decidió esperar a que el peticionario enviara informes complementarios antes de examinar la cuestión.

En una petición⁹⁴ se expresaba la queja de que el Residente de El Bur había cometido arbitrariedades y abusos y se solicitaba la abolición de las sanciones colectivas. El Consejo tomó nota de los esfuerzos de la Autoridad Administradora para abolir el sistema de las sanciones colectivas.

Acerca de una petición⁹⁵ relativa a los inmigrantes procedentes de Etiopía, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora realizaría un cuidadoso estudio de la situación de los inmigrantes, y reiteró su esperanza, expresada con anterioridad, de que se resolvería satisfactoriamente la cuestión de la frontera.

Una petición⁹⁶ expresaba la queja de que la Administración estaba distribuyendo armas a la población.

El Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que continuara ejerciendo la fiscalización más estricta sobre la adquisición y posesión de armas de fuego.

Respecto de una petición⁹⁷ cuyo autor se quejaba de haber obtenido una insuficiente indemnización por invalidez, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora hiciera todo lo posible para ayudar al peticionario.

Con respecto a una petición⁹⁸ que contenía varias acusaciones contra determinados funcionarios de la Administración, el Consejo hizo notar a los peticionarios que era necesario que presentaran pruebas suficientes en apoyo de sus acusaciones, para que el Consejo pudiera adoptar una decisión sobre el caso.

Ocho peticiones⁹⁹ se referían a la intromisión de las autoridades locales en las elecciones municipales, y a las irregularidades cometidas durante el transcurso de las mismas. Acerca de estas peticiones el Consejo señaló de diversas maneras a la atención de los peticionarios las observaciones formuladas por la Administración y por su representante especial en el sentido de que los recursos contra las inscripciones en el registro electoral podían interponerse ante los jueces regionales, de cuyas decisiones cabía apelar ante el Juez de Somalia. El Consejo recomendó asimismo a la Autoridad Administradora que, en la medida de lo posible, tratara de impedir que hubiera motivos de queja en las elecciones que se celebraran en el futuro.

5. Peticiones relativas al Camerún bajo administración británica

En su 13º período de sesiones, el Consejo examinó cuatro peticiones, presentadas por escrito, relativas al Camerún bajo administración británica. Cada una de ellas fué examinada separadamente por el Comité Permanente de Peticiones y por el Consejo. Dichas cuatro peticiones eran las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Representante de la Ayuk Eтайak Union	T/PET.4/90	T/L.410	897 (XIII)
Sr. A. M. Nchoh	T/PET.4/93	T/L.410	898 (XIII)
Miembros cameruneses de la Cámara de la Asamblea Oriental de Nigeria	T/PET.4/100	T/L.410	899 (XIII)
Sr. E. F. Fawty	T/PET.4/101	T/L.410	900 (XIII)

Una de las peticiones¹⁰⁰ contenía una denuncia relativa a la pérdida de ciertos cultivos y a otros perjuicios ocasionados por la construcción de un aeródromo. El Consejo llamó la atención de los peticionarios sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, según las cuales sus reclamaciones eran infundadas.

Otra¹⁰¹ se refería al despido del peticionario del cuerpo de policía y a su solicitud de que le fueran pagadas ciertas sumas. El Consejo tomó nota de la declaración hecha por el representante especial, según

la cual se pagarían al peticionario todos los gastos de viaje a que tenía derecho en virtud del reglamento.

Por otra de las peticiones¹⁰² se solicitaba que se estableciera una legislatura separada para los cameruneses. El Consejo observó que, desde que se presentó esta petición, habían ocurrido muchos cambios institucionales en el Camerún Meridional; decidió comunicar a los peticionarios sus últimas conclusiones y recomendaciones al respecto.

Con respecto a una petición¹⁰³ que contenía una reclamación por pérdidas ocasionadas al peticionario por

⁸⁹ T/PET.11/406 y Add.1 y 2.

⁹⁰ T/PET.11/407, 401, 398.

⁹¹ T/COM.11/L.87 y Add.1, 88, 91, 96, 97.

⁹² T/PET.11/399.

⁹³ T/PET.11/412.

⁹⁴ T/PET.11/383.

⁹⁵ T/PET.11/405.

⁹⁶ T/PET.11/408.

⁹⁷ T/PET.11/415.

⁹⁸ T/PET.11/409.

⁹⁹ T/PET.11/423, 417, 411 y Add.1, 416 y Add.1 y 2, 418 y Add.1, 410 y Add.1, 402, 414 y Add.1.

¹⁰⁰ T/PET.4/90.

¹⁰¹ T/PET.4/93.

¹⁰² T/PET.4/100.

¹⁰³ T/PET.4/101 y Add.1 y 2.

un arresto y encarcelamiento de que, según él, había sido objeto injustamente, el Consejo observó que el peticionario sabía que podía solicitar desagravio ante los tribunales, e invitó a la Autoridad Administradora a que, en su 14° período de sesiones, informara sobre el curso dado a este asunto.

En su 14° período de sesiones, el Consejo no examinó ninguna petición relativa al Camerún bajo administración británica.

6. Peticiones relativas al Camerún bajo administración británica y al Camerún bajo administración francesa

En su 13° período de sesiones, el Consejo examinó seis peticiones, presentadas por escrito, relativas al Camerún bajo administración británica y al Camerún bajo administración francesa. Todas las peticiones se referían a cuestiones generales sobre las cuales ya se había llamado la atención del Consejo y respecto a las cuales el Consejo había tomado decisiones o hecho recomendaciones. El Consejo tuvo dichas peticiones ante sí mientras examinaba el informe anual sobre el Territorio; una reseña de los principales puntos tratados en ellas puede verse, bajo los epígrafes pertinentes, en los capítulos IV y V de la parte II del presente informe. Las seis peticiones fueron las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Cameroons Aspirants Party	T/COM.4 y 5/L.1
Cameruneses residentes en París y en Londres	T/PET.4 y 5/L.1
Kamerun United National Congress	T/PET.4 y 5/L.2
Union des populations du Cameroun (Comité Central de Mbal-mayo)	T/PET.4 y 5/L.3
Union des populations du Cameroun (Unión de las Poblaciones del Camerún)	T/PET.4 y 5/L.4 y Add.1-4
Sr. Jacques René Biboum	T/PET.4 y 5/L.5

En su 14° período de sesiones, el Consejo no examinó ninguna petición relativa al Camerún bajo administración británica y al Camerún bajo administración francesa.

7. Peticiones relativas al Camerún bajo administración francesa

En su 13° período de sesiones, el Consejo examinó 109 peticiones, presentadas por escrito, relativas al Ca-

merún bajo administración francesa. Catorce de estas peticiones se referían a cuestiones generales sobre las cuales ya se había llamado la atención del Consejo y respecto a las cuales el Consejo había tomado decisiones o hecho recomendaciones. El Consejo tuvo ante sí dichas peticiones mientras examinaba el informe anual sobre el Territorio; una reseña de los principales puntos tratados en ellas puede verse, bajo los epígrafes pertinentes, en el capítulo V de la parte II del presente informe. Las 14 peticiones fueron las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Comunicación anónima	T/COM.5/L.4
Sr. Timothée Maah	T/PET.5/L.2
El Comité Directivo de la Assemblée traditionnelle du peuple Bamiléké (KUMZSE)	T/PET.5/L.3
Sr. Calvin Raymond Medou Edjoa	T/PET.5/L.4
El Presidente General de la Evolution sociale camerounaise	T/PET.5/L.5
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/L.6
El Presidente de la Assemblée traditionnelle du peuple Douala (Ngondo)	T/PET.5/L.7
El Comité Directivo de la Assemblée traditionnelle du peuple Bamiléké (KUMZSE)	T/PET.5/L.9 y T/PET.5/L.9/ Add.1
Sr. Etienne M'Bida en nombre de los Radicaux Modes Camerounais	T/PET.5/L.10
La Union des populations du Cameroun, Sección de Elung	T/PET.5/L.11
Los Comités de la Union des populations du Cameroun reunidos en Hikoajom	T/PET.5/L.12
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/L.14
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/L.15
El Comité de Bangui-Chari (Nkong-samba) de la Union des populations du Cameroun	T/COM.5/L.25

El Comité Permanente de Peticiones y el Consejo examinaron separadamente cada una de las 95 peticiones siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Pierre Simon Nkén Tchallé	T/PET.5/126	T/L.417	901 (XIII)
Sr. Djibo Zinder	T/PET.5/127	T/L.413	902 (XIII)
Sr. Dob Dang Benoît	T/PET.5/128	T/L.411	903 (XIII)
Sr. Félix Mbélé	T/PET.5/129	T/L.413	904 (XIII)
Sr. Mboudou Ngono	T/PET.5/130	T/L.417	905 (XIII)
Sr. Sosthènes Meka	T/PET.5/132	T/L.413	906 (XIII)
Sr. Ndjefenfang Banda	T/PET.5/133	T/L.413	907 (XIII)
Sr. Thomas Aba	T/PET.5/134	T/L.417	908 (XIII)
Sr. Bissa Lucas Kono	T/PET.5/135	T/L.413	909 (XIII)
Sr. Mbida Joseph Assene	T/PET.5/136	T/L.411	910 (XIII)
Sr. Alphonse Mostagay Amougou	T/PET.5/137	T/L.413	911 (XIII)
Sr. Frédéric Ava	T/PET.5/138	T/L.413	912 (XIII)
Sr. Daniel Engouli	T/PET.5/139	T/L.411	913 (XIII)
Sr. Sylvestre Akono	T/PET.5/140	T/L.411	914 (XIII)
Sr. Daniel Bayiha	T/PET.5/141	T/L.411	915 (XIII)
Sr. Bernard Bassegne	T/PET.5/142	T/L.412	916 (XIII)
Sr. Adolph Amougou Ngongbwa	T/PET.5/143	T/L.413	917 (XIII)

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del in- forme correspon- diente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Maurice Moffi y otros representantes de la familia Ipoua- bato	T/PET.5/144	T/L.417	918 (XIII)
Sr. Max Legrand Evehe	T/PET.5/145	T/L.412	919 (XIII)
Sr. Basile Moneyembong Nkoulou	T/PET.5/146	T/L.411	914 (XIII)
Representantes del Syndicat unique des cheminots	T/PET.5/147	T/L.413	920 (XIII)
Sr. Nanton Métébé	T/PET.5/148	T/L.417	921 (XIII)
Sres. Joseph Léa Elong, Ekwalla Ekwa y Ngouen Djoun	T/PET.5/149	T/L.414	922 (XIII)
Sr. Gabriel Tougobu	T/PET.5/150	T/L.417	923 (XIII)
Sr. Gabriel Honana	T/PET.5/152	T/L.414	924 (XIII)
Sr. André Beaurepaire Yomba	T/PET.5/153	T/L.413	925 (XIII)
Comité central de Progrès à Massangam	T/PET.5/154	T/L.411	926 (XIII)
Sr. Samuel Ekwe	T/PET.5/155	T/L.413	927 (XIII)
Sr. Joseph Emadion	T/PET.5/156	T/L.414	928 (XIII)
Sr. David Kamjeu	T/PET.5/157	T/L.414	929 (XIII)
Sr. Jacob Goumawa	T/PET.5/158	T/L.411	930 (XIII)
Sr. Isaac Ekweboua	T/PET.5/159	T/L.414	931 (XIII)
Sr. Nicolas Ehole	T/PET.5/160	T/L.412	932 (XIII)
Sr. Abraham Ewo	T/PET.5/161		
Sr. Nicolas Esso	T/PET.5/162	T/L.412	933 (XIII)
Sr. Lucas Nana	T/PET.5/163 y Add.1	T/L.412	934 (XIII)
Sr. Siméon Kamgang	T/PET.5/164	T/L.413	935 (XIII)
Sr. Oscar Ehoum	T/PET.5/165	T/L.414	936 (XIII)
Sr. Samuel Ngotti	T/PET.5/166	T/L.414	937 (XIII)
Sr. Limpa Tamfo ro	T/PET.5/167	T/L.414	938 (XIII)
Sr. Paul-Louis Schunmelé	T/PET.5/168	T/L.413	939 (XIII)
Sr. Ibrahim Nsangou	T/PET.5/169	T/L.411	940 (XIII)
Sr. Gilbert Tsafac	T/PET.5/170	T/L.414	941 (XIII)
La Union des populations du Cameroun, Comité régional Bami- léké, Subdivisión de Bafang	T/PET.5/171	T/L.412	942 (XIII)
Sr. Oumarau Fonbanhang	T/PET.5/172	T/L.416	943 (XIII)
Sr. Tiam Sakio	T/PET.5/173	T/L.416	944 (XIII)
Sr. Issah Njoya	T/PET.5/174		
Sr. Issah Mouassé	T/PET.5/175	T/L.412	945 (XIII)
Sr. Oumarau Youpon	T/PET.5/176	T/L.412	946 (XIII)
Sr. Issah Ngnanubi	T/PET.5/177	T/L.412	947 (XIII)
Sr. Idrissau Nghapon	T/PET.5/178	T/L.416	948 (XIII)
Sr. Moise Tchouatun	T/PET.5/179	T/L.416	949 (XIII)
Sr. Njikam Salifou	T/PET.5/180	T/L.412	950 (XIII)
Sr. Nsapgue Aboubekar	T/PET.5/181	T/L.416	951 (XIII)
Sr. Didio Ngomssi	T/PET.5/182	T/L.416	952 (XIII)
Sr. Issah Mouassé	T/PET.5/183	T/L.416	953 (XIII)
Sr. Njiyangouo Soulémanou	T/PET.5/184		
Sr. Fit Chouraihou	T/PET.5/185	T/L.413	954 (XIII)
Sr. Louis Mounchili	T/PET.5/186	T/L.416	955 (XIII)
Sr. Soulé Mekou	T/PET.5/187	T/L.416	956 (XIII)
Sr. Jean Njitagui	T/PET.5/188	T/L.416	957 (XIII)
Sr. Njimoupaine Chouraihou	T/PET.5/189	T/L.416	957 (XIII)
Sr. Ibrahim Njoya	T/PET.5/190	T/L.413	958 (XIII)
Sr. Nomaudou Aboubekain	T/PET.5/191	T/L.411	959 (XIII)
Sr. Ndam Adamou Njoya	T/PET.5/192	T/L.416	960 (XIII)
Sr. Mfulu Banga Esaie	T/PET.5/193	T/L.413	961 (XIII)
Sres. Makembé Moukory Moise y Ndobu Elessa Simon	T/PET.5/194	T/L.412	962 (XIII)
Sr. François Ndé	T/PET.5/195	T/L.411	963 (XIII)
Sr. Albert Menguele	T/PET.5/196	T/L.412	964 (XIII)
Sr. Ignace Koumda	T/PET.5/198	T/L.417	965 (XIII)
	y Add.1		
Sr. Etienne Bivina	T/PET.5/199 y Add.1	T/L.417	966 (XIII)
	T/PET.5/200	T/L.412	967 (XIII)
Sr. Pierre Badjeck	T/PET.5/201	T/L.413	968 (XIII)
Sr. Jean Sanchez	T/PET.5/202	T/L.416	969 (XIII)
Sr. Ibrahim Ngoh	T/PET.5/203	T/L.417	970 (XIII)
Sr. Pierre Libii	T/PET.5/204	T/L.412	971 (XIII)
Sr. Ndong Ngema Mba	T/PET.5/205	T/L.412	972 (XIII)
Sr. Pierre Dimalla	T/PET.5/205 y Add.1		
Sres. Jean Yamagang y Manengoteng	T/PET.5/206	T/L.414	973 (XIII)
La Mesa del Comité Central de la Union des populations du Cameroun en Mbalmayo	T/PET.5/207	T/L.423	974 (XIII)
Sr. Zacharie Zenguele	T/PET.5/208	T/L.413	975 (XIII)
Sres. Bernard Songo, Paul Mpako y Max Mouebele	T/PET.5/209	T/L.414	973 (XIII)
Mesa de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/210	T/L.423	976 (XIII)
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/211	T/L.423	977 (XIII)

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Norbert Yamgwet de Bana	T/PET.5/212	T/L.413	978 (XIII)
Sr. Jean Biya de Goncourt	T/PET.5/213 y Add.1	T/L.417	979 (XIII)
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/214 y Add.1-2	T/L.423	980 (XIII)
Federación Sindical Mundial	T/PET.5/215	T/L.413	981 (XIII)
Sr. Gottlieb-Issac Ekoulle	T/PET.5/216	T/L.411	982 (XIII)
Miembros de la Solidarité Babimbi (Solibabi)	T/PET.5/217	T/L.412	983 (XIII)
Sr. Maurice M'Barga Zambo	T/PET.5/218	T/L.411	984 (XIII)
Jefe Djomatchoua Fomokoum	T/PET.5/220	T/L.434	985 (XIII)
Sr. Alphonse M'Boua M'Boua	T/PET.5/221	T/L.412	986 (XIII)
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/L.1	T/L.411	987 (XIII)
Fédération d'agriculture et forêts de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun	T/PET.5/L.8 y Add.1	T/L.434	988 (XIII)
Union des populations camerounaise, Sección de M'Balmayo	T/PET.5/R.5	T/L.423	974 (XIII)

Dieciocho de dichas peticiones se referían a cuestiones políticas y administrativas.¹⁰⁴ Los autores de dos de ellas¹⁰⁵ se quejaban de que ciertos jefes habían sido nombrados. Con respecto a la primera, el Consejo tomó nota de que el jefe había sido elegido según la costumbre, y tocante a la segunda, llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que el interesado había perdido sus funciones de jefe después de haber sido condenado por haber desfalcado el dinero del impuesto.

Los autores de otras dos peticiones¹⁰⁶ formulaban cargos contra un jefe y se quejaban de la imposición de trabajos forzosos. El Consejo tomó nota de que la investigación no había revelado ningún hecho que corroborara los cargos de los peticionarios, pero sin embargo recomendó que la Autoridad Administradora, a fin de evitar posibles abusos, vigilara estrechamente el sistema de la participación voluntaria de los habitantes de una localidad en trabajos de interés público y expresó la esperanza de que en adelante fuese posible cada vez más efectuar esa clase de trabajos con trabajadores remunerados.

Los autores de dos peticiones acusaban a ciertos jefes de oprimir a sus administrados. Con respecto a la primera,¹⁰⁷ el Consejo pidió a los peticionarios que citaran hechos precisos en apoyo de sus denuncias. En cuanto a la segunda,¹⁰⁸ ninguna de las propuestas presentadas al Consejo logró obtener una mayoría de votos; la petición fué, pues, remitida al Comité Permanente de Peticiones para ser reexaminada.

Tres peticiones¹⁰⁹ habían sido enviadas por jefes de aldea que se quejaban de que no se les pagaba por sus servicios o de que no se les pagaba bastante. A este respecto, el Consejo tomó nota de que la Administración había puesto en vigor un nuevo reglamento que modificaba la remuneración de los jefes, lo cual aumentaría los emolumentos pagados a los jefes de aldea, y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora, al volver a revisar el sistema de remuneración de los jefes tendría en cuenta que es conveniente que los jefes y las

otras personas encargadas de recaudar los impuestos reciban una remuneración fija y no descuentos sobre el monto de los impuestos que recaudan.

Cinco peticiones se referían a funcionarios que habían sido despedidos.

Respecto de una de ellas,¹¹⁰ el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora volviera a examinar el caso del peticionario, a fin de determinar si existen razones que justificarían su rehabilitación. Con respecto a otras dos,¹¹¹ el Consejo decidió que no requerían ninguna recomendación de su parte. Con respecto a la cuarta,¹¹² recomendó que la Autoridad Administradora, teniendo en cuenta la juventud del peticionario cuando cometió el delito y su conducta anterior satisfactoria, examinara la posibilidad de darle un nuevo empleo. Respecto a la quinta petición,¹¹³ el Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración del representante especial, según la cual él podía dirigirse al Conseil du contentieux administratif para que decidiera si tiene derecho o no a una pensión de invalidez.

Tres de las peticiones de este grupo emanaban del Secretario General de la Union des populations du Cameroun. En la primera,¹¹⁴ el peticionario se quejaba de que la Autoridad Administradora no hubiese dado a las Naciones Unidas las señas de la Voix du Cameroun como una de las instituciones a las que podría enviarse información sobre las Naciones Unidas. Respecto a esta petición, el Consejo invitó al Secretario General a continuar enviando a la Voix du Cameroun información sobre las actividades de las Naciones Unidas. Respecto a la segunda,¹¹⁵ en que se relataban las persecuciones, de que el Sr. Um Nyobe y sus partidarios decían haber sido objeto después del regreso del Sr. Nyobe de Nueva York, en 1952, el Consejo tomó nota de que el Sr. Um Nyobe había podido difundir libremente sus ideas políticas, celebrando varias reuniones públicas y privadas y de que las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora para prohibir algunas reuniones habían tenido por objeto proteger el orden y la seguridad públicos; el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora seguiría concediendo a todos los movimientos políticos del Territorio las facilidades

¹⁰⁴ Véanse los 56º, 63º y 68º informes del Comité Permanente de Peticiones, T/L.411, 423, 434.

¹⁰⁵ T/PET.5/123, 136.

¹⁰⁶ T/PET.5/140, 146.

¹⁰⁷ T/PET.5/154.

¹⁰⁸ P/PET.5/174.

¹⁰⁹ T/PET.5/158, 169, 191.

¹¹⁰ T/PET.5/139.

¹¹¹ T/PET.5/141, 216.

¹¹² T/PET.5/195.

¹¹³ T/PET.5/218.

¹¹⁴ T/PET.5/L.1.

¹¹⁵ T/PET.5/211.

necesarias para difundir sus ideas políticas, bajo la sola reserva de las exigencias del orden y la seguridad públicos. En la tercera petición,¹¹⁶ el secretario general de la UPC se quejaba de que las autoridades hubiesen prohibido la difusión de ciertos folletos políticos. A este respecto, el Consejo tomó nota de que uno de los folletos de que se trataba ya estaba difundido en el Territorio y que la difusión del otro estaba temporalmente prohibida en espera del fin de la investigación judicial relativa al incidente de Foumban. El Consejo invitó, además, a la Autoridad Administradora a suministrarle datos respecto a la revocación de la prohibición temporal.

Los autores de la última petición¹¹⁷ de este grupo se quejaban de que su comunidad hubiese sido dividida y colocada bajo la autoridad de jefes vecinos. A este respecto, el Consejo comprobó que la Autoridad Administradora había tomado en consideración las quejas de los peticionarios nombrando una comisión encargada de efectuar una investigación sobre todos los puntos suscitados, e invitó a la Autoridad Administradora a que le informara sobre los resultados de la investigación.

Diecinueve peticiones¹¹⁸ expresaban el descontento de los peticionarios respecto a la administración de justicia.

Dos de estas peticiones¹¹⁹ contenían quejas por encarcelamiento injusto y por actos de represión cometidos contra la población indígena por la Administración. El Consejo notó y deploró que, debido a un error, una persona había purgado anticipadamente su condena; notó, además, que los magistrados responsables habían sido reprendidos. El Consejo recomendó asimismo a la Autoridad Administradora que prosiguiera e intensificara sus esfuerzos a fin de asegurar la separación de las autoridades judiciales y administrativas. Finalmente, estimó que la acusación general relativa a los actos de represión no requería ninguna recomendación de su parte, ya que el único caso particular mencionado había sido examinado por las autoridades judiciales del Territorio, quienes habían decidido que el funcionario de que se trataba había actuado en legítima defensa.

El autor de otra petición¹²⁰ se quejaba de que fuertes multas hubiesen sido impuestas por el empleo de balanzas falsas y pedía que se reembolsara a los indígenas el producto de esas multas. El Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración de la Autoridad Administradora, según la cual las multas judiciales se pagaban a la Tesorería y beneficiaban al conjunto de los habitantes del Territorio. El Consejo tomó asimismo nota de que se había instituido en el Territorio un control de pesos y medidas.

En cuanto a una petición¹²¹ relativa a ciertos incidentes ocurridos en Sangmélima en junio de 1952, el Consejo tomó nota de que el juez de paz con jurisdicción especial aun estaba investigando las acusaciones proferidas contra funcionarios y guardias, y llamó la atención del peticionario sobre la declaración de la Autoridad Administradora según la cual se habían impuesto sanciones disciplinarias al agente de policía y a los guardias implicados en esos incidentes. Invitó a la Au-

toridad Administradora a que le informara sobre los resultados de la investigación.

En otra petición,¹²² un indígena del Africa Ecuatorial Francesa pedía que se deportara del Africa Ecuatorial a un francés a quien acusaba de haber asesinado a dos africanos. El Consejo decidió que la petición no era aceptable más que en la medida en que se refería a la residencia de la persona inculpada en el Camerún bajo administración francesa. Además, decidió que las alegaciones contenidas en la petición no eran de su competencia porque se referían a hechos que, según se decía, habían ocurrido en un territorio que no era un Territorio en fideicomiso.

Respecto a una petición¹²³ que contenía acusaciones por golpes, el Consejo tomó nota de que el magistrado que había efectuado la investigación preliminar no había podido determinar quién los había dado primero, pero que había notificado al peticionario que podía instituir una acción civil contra la otra parte.

Una petición¹²⁴ contenía acusaciones por robo de bienes, encarcelamiento injusto y deportación. El Consejo llamó la atención del peticionario sobre las declaraciones de la Autoridad Administradora, según la cual el padre del peticionario ya era dueño de residir donde quisiera en el Territorio y que si deseaba reclamar bienes podía instituir un proceso ante los tribunales indígenas competentes.

Con respecto a una petición¹²⁵ que contenía cargos por encarcelamiento injusto y persecución por la Autoridad Administradora, el Consejo tomó nota de que el primer asunto a que se refería el peticionario había sido objeto de una sentencia pronunciada por el tribunal competente y que se estaba efectuando una instrucción respecto a las circunstancias del segundo asunto. Tomó asimismo nota de que el peticionario y las otras personas inculpadas de los mismos delitos habían sido mantenidas en prisión preventiva desde mayo y enero de 1953 respectivamente, y recomendó a la Autoridad Administradora que procurase que los inculpados fueran juzgados lo más pronto posible. El Consejo pidió también a la Autoridad Administradora que le comunicara la fecha en que el peticionario y los otros inculpados serían juzgados y la sentencia pronunciada por el tribunal.

En otra petición,¹²⁶ los miembros de La Solidarité Babimbi (SOLIBABI) protestaban contra el procesamiento de su presidente y se quejaban de la situación en el territorio Babimbi. Los peticionarios lamentaban asimismo que las Misiones Visitadoras no hubiesen podido encontrar tiempo para trasladarse a esa región. Respecto a esa petición, el Consejo tomó nota de la declaración de la Autoridad Administradora, de la cual se desprendía que los peticionarios no parecían representar a la mayoría de los miembros de la SOLIBABI, ya que apoyaban a una persona que había sido relevada de sus funciones de presidente en virtud de una decisión de la asamblea general de dicha asociación. Tomó asimismo nota de que esa persona había sido condenada por los tribunales competentes y estaba todavía en libertad en espera de la decisión del Tribunal de Casación. El Consejo recordó su resolución 156 (VI) por la cual había invitado a la Autoridad Administradora a proseguir sus esfuerzos para el desarrollo de

¹¹⁶ T/PET.5/214, Add.1 y 2.

¹¹⁷ T/PET.5/220.

¹¹⁸ Véanse los 58° y 63° informes del Comité Permanente de Peticiones, T/L.412, 423.

¹¹⁹ T/PET.5/R.5, 207.

¹²⁰ T/PET.5/142.

¹²¹ T/PET.5/196.

¹²² T/PET.5/204.

¹²³ T/PET.5/145.

¹²⁴ T/PET.5/200.

¹²⁵ T/PET.5/205 y Add.1.

¹²⁶ T/PET.5/217.

dicha región, tomó nota de los diversos proyectos emprendidos por la Autoridad Administradora y recomendó a ésta que terminara esas obras con diligencia. Finalmente, el Consejo tomó nota de la declaración del representante especial, de la cual se desprendía que el mejoramiento de las vías de comunicación permitiría a las próximas Misiones Visitadoras trasladarse a la región, y recomendó que la próxima Misión Visitadora que fuera a los territorios en fideicomiso del África occidental considerase la posibilidad de trasladarse a esa región.

Respecto a otra petición¹²⁷ relativa a un caso de arresto injusto y amenazas de encarcelamiento, el Consejo tomó nota de la declaración del representante especial, de la cual se desprendía que los actos imputados al peticionario habían sido amnistiados en virtud de la ley del 6 de agosto de 1953.

Con respecto a una petición¹²⁸ fundada en la alegación de que la mujer y los hijos del peticionario habían sido vendidos por un jefe de aldea y otras personas, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración de la Autoridad Administradora de la cual se desprendía que el peticionario podía intentar una acción ante los tribunales indígenas. Recomendó asimismo a la Autoridad Administradora que continuara adoptando medidas para reprimir los abusos a que daban ocasión las costumbres matrimoniales repugnantes al concepto moderno del matrimonio.

Una petición¹²⁹ versaba sobre denuncias por ataques contra la plantación del peticionario y demolición de dos casas grandes. A este respecto, el Consejo tomó nota de que los tribunales habían fallado que debía pagársele una indemnización al peticionario y llamó la atención de éste sobre la declaración del representante especial, de la cual se desprendía que si la indemnización no era pagada, él podría dirigirse al tribunal para obtener la ejecución de la sentencia. Además señaló a la atención del peticionario que él podía dirigirse al Conseil du contentieux administratif del Territorio para pedir el pago de una indemnización por la Administración.

Otra petición¹³⁰ contenía denuncias relativas a la situación en la región de Bamiléké, al encarcelamiento del jefe Ntapié y a que se le había negado el derecho de retornar a sus propiedades después de su liberación. A este respecto, el Consejo tomó nota de que el jefe Ntapié había retornado a su aldea y pidió datos suplementarios respecto a su condena. Tomó nota, además, de que una escuela de enseñanza secundaria parcial había sido establecida en Dschang y pidió información adicional sobre el proyecto de crear una escuela de enseñanza secundaria completa en la región de Bamiléké. El Consejo recomendó asimismo a la Autoridad Administradora que estudiara cuidadosamente las propuestas presentadas en la petición para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales de los habitantes indígenas de la región. También recomendó a la Autoridad Administradora que ayudara a la población a proteger sus bienes contra los perjuicios causados por los animales salvajes. Finalmente, el Consejo invitó a la Autoridad Administradora a que le comunicara las medidas que fueran adoptadas para llevar a efecto la resolución.

Tocante a una petición¹³¹ que contenía denuncias según las cuales las penas de prisión infligidas a los peticionarios eran excesivas, el Consejo tomó nota de que el asunto todavía estaba en instancia ante el Tribunal de Casación, en París; y expresó la esperanza de que no tardaría en darse una decisión. Señaló asimismo a la atención de los peticionarios la declaración de la Autoridad Administradora, según la cual el peticionario podía presentar una demanda de excarcelación provisional, mientras se tomaba una decisión definitiva respecto a su caso.

Una petición¹³² se refería a protestas contra el arresto de 18 miembros de la Union des populations du Cameroun y al robo de sus bienes por un guardia. El Consejo tomó nota de la declaración del representante especial, según la cual la cuidadosa investigación efectuada por las autoridades no había revelado ninguna prueba en apoyo de los cargos del peticionario y decidió que esa petición no requería ninguna recomendación de su parte.

El autor de otra petición¹³³ se quejaba de haber sido encarcelado junto con otras 16 personas por haberse negado a votar por el candidato propuesto por las autoridades como jefe principal. Respecto a esta petición, el Consejo tomó nota de que la denuncia había sido objeto de una petición examinada anteriormente (T/PET.5/120) y recordó su resolución 779 (XII) relativa a esa petición, por la cual había decidido que no requería ninguna recomendación de su parte; finalmente, decidió que esta nueva petición no requería ninguna medida de su parte, ya que se refería a cuestiones que eran de la competencia de los tribunales del Territorio.

Con respecto a una petición¹³⁴ relativa a una demanda de indemnización, el Consejo tomó nota de las observaciones de la Autoridad Administradora, según las cuales el peticionario se había negado a aceptar la suma que le había sido adjudicada como indemnización y estimó que esa petición no requería ninguna medida de su parte, ya que la cuestión era de la competencia de los tribunales del Territorio.

El autor de otra petición¹³⁵ se quejaba de que cinco chozas de su propiedad habían sido incendiadas por el jefe de la aldea mientras el peticionario estaba purgando una pena de prisión. A este respecto, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las declaraciones de la Autoridad Administradora, según las cuales el peticionario no había presentado pruebas en apoyo de las acusaciones que había hecho y la investigación efectuada por las autoridades locales no habían permitido determinar quién era responsable del incendio de las chozas.

En la última petición¹³⁶ de este grupo, los peticionarios se quejaban de que se hubiesen adoptado medidas para deponer y condenar al jefe Njimofira por haber prestado apoyo al Sr. Um Nyobe. Los peticionarios se quejaban asimismo de que los poderes judicial y administrativo fueran interdependientes. A este respecto, el Consejo comprobó que el jefe Njimofira había sido depuesto de sus funciones de jefe principal a causa de su condenación por haber proferido palabras calumniosas contra otros jefes, y de sus funciones de jefe de aldea a causa de su incapacidad. El Consejo recomen-

¹³¹ T/PET.5/194.

¹³² T/PET.5/175.

¹³³ T/PET.5/180.

¹³⁴ T/PET.5/176.

¹³⁵ T/PET.5/177.

¹³⁶ T/PET.5/210.

¹²⁷ T/PET.5/221.

¹²⁸ T/PET.5/160.

¹²⁹ T/PET.5/163 y Add.1.

¹³⁰ T/PET.5/171.

dó asimismo a la Autoridad Administradora que adoptara todas las medidas posibles para separar los poderes judicial y administrativo y que adoptara también medidas para garantizar la participación de representantes de la población indígena en los órganos judiciales y administrativos del Territorio en fideicomiso.

Veintiuna peticiones trataban de diversas cuestiones relativas a la vida económica, a la vida social y a la enseñanza.¹³⁷

Una petición¹³⁸ contenía una queja relativa a los honorarios de los agentes de negocios. El Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que la ordenanza del 15 de junio de 1951 no limitaba los honorarios de los agentes de negocios, sino que meramente decretaba ciertas reglas relativas a la contabilidad.

Con respecto a otra petición¹³⁹ cuyo autor se quejaba de que se le hubiese negado la autorización de abrir un restaurante, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que la demanda del peticionario había sido rechazada porque su establecimiento no respondía a los reglamentos vigentes de seguridad y de higiene. El Consejo señaló además al peticionario que disponía de un recurso contencioso contra la Administración.

En otra petición,¹⁴⁰ el autor se quejaba de haber tenido que pagar derechos de aduana sobre mercaderías que en realidad habían sido compradas en el Territorio. A este respecto, el Consejo señaló al peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que él había aceptado una transacción propuesta por el servicio de aduanas y que las mercaderías le habían sido restituídas el mismo día.

Cinco peticiones contenían diversas quejas y solicitudes de ayuda formuladas por ex combatientes. Según la primera de esas peticiones,¹⁴¹ la Administración no había ayudado al peticionario a mantener a sus 17 hijos; el Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración del representante especial de la cual se desprendía que si bien aun no se había implantado en el Territorio un sistema general de subsidios familiares, la implantación del sistema estaba en estudio. El Consejo señaló, además, a la atención del peticionario que los ex combatientes que poseían la libreta militar tenían derecho a una pensión de jubilación desde la edad de 50 años.

En cuanto a la segunda de estas peticiones,¹⁴² el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que las autoridades estaban tratando de instalar una sucursal de la Oficina de los Ex Combatientes en las principales poblaciones donde existía una asociación de ex combatientes, y que la Asamblea Territorial había decidido en 1951 eximir del impuesto personal fijo por un período igual a la duración del servicio prestado, a los ex combatientes que poseyeran una libreta militar.

Con respecto a la tercera petición¹⁴³ el Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración del representante especial, de la cual se desprendía que el peticionario podía dirigirse a la Oficina de los Ex Combatientes para solicitar asistencia económica. Pidió también a la Autoridad Administradora que volviese a examinar con benevolencia el caso del peticionario.

El Consejo tomó nota, respecto a la cuarta petición,¹⁴⁴ de que posteriormente a la fecha de su petición, el peticionario había recibido un préstamo de 20.000 francos y un aparato ortopédico.

Con respecto a la quinta petición,¹⁴⁵ el Consejo tomó nota de que, posteriormente a la fecha de su petición el peticionario había recibido un préstamo de 15.000 francos de la Oficina de los Ex Combatientes.

Tres de las peticiones contenían solicitudes de préstamo o de ayuda financiera. El Consejo señaló a la atención de los autores de esas peticiones que las Naciones Unidas no podían dar curso a solicitudes de ayuda financiera emanadas de particulares o de instituciones particulares. Respecto a dos de esas peticiones,¹⁴⁶ el Consejo hizo observar, además, que el peticionario podía pedir un préstamo al Crédit du Cameroun; con respecto a la tercera,¹⁴⁷ el Consejo tomó nota, además, de que la Administración acababa de implantar un sistema de pensiones conforme al cual los ciegos indigentes recibirán pensiones que podrán elevarse hasta 500 francos por mes.

Dos peticiones provenían de grupos de trabajadores indígenas y contenían quejas relativas a las condiciones de trabajo.¹⁴⁸ Respecto a la primera, el Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que prosiguiera las negociaciones con los representantes del Syndicat unique des cheminots, a fin de aplicar medidas tendientes a mejorar la suerte de los trabajadores ferroviarios indígenas.

Con respecto a la segunda petición,¹⁴⁹ el Consejo expresó la esperanza de que las actividades de las personas que gozaban de concesiones forestales siguieran sometidas al control de la Autoridad Administradora a fin de que los derechos de los habitantes de las aldeas fueran protegidos. El Consejo llamó la atención de los peticionarios sobre las recomendaciones y las conclusiones formuladas en su 13° período de sesiones respecto al desarrollo de la economía y de la enseñanza en el Territorio. El Consejo también llamó la atención de los peticionarios sobre las observaciones presentadas por la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo ya respondían a sus demandas. Finalmente, el Consejo invitó a la Autoridad Administradora a continuar velando por que las disposiciones del Código del Trabajo fueran efectivamente aplicadas.

En otra petición,¹⁵⁰ la Federación Sindical Mundial se quejaba de que la difusión de algunas de sus publicaciones hubiese sido prohibida en el Territorio. Respecto a esta petición, el Consejo tomó nota de la declaración del representante especial según la cual las publicaciones de la Confédération Générale du Travail, así

¹³⁷ Véase los informes 58° y 68° del Comité Permanente de Peticiones, T/L.413, 434.

¹³⁸ T/PET.5/129.

¹³⁹ T/PET.5/155.

¹⁴⁰ T/PET.5/164.

¹⁴¹ T/PET.5/127.

¹⁴² T/PET.5/132.

¹⁴³ T/PET.5/133.

¹⁴⁴ T/PET.5/135.

¹⁴⁵ T/PET.5/190.

¹⁴⁶ T/PET.5/143, 185.

¹⁴⁷ T/PET.5/193.

¹⁴⁸ T/PET.5/147.

¹⁴⁹ T/PET.5/L.8 y Add.1.

¹⁵⁰ T/PET.5/215.

Respecto a una petición¹⁶⁶ cuyo autor se quejaba de que una tierra que le pertenecía hubiese sido vendida sin que él lo supiera, el Consejo hizo observar al peticionario que su terreno no había sido en modo alguno enajenado y que, si deseaba recibir un título de propiedad oficial, le tocaba a él suministrar un plano del terreno.

El autor de otra petición¹⁶⁷ se quejaba de haber sido echado de un terreno suyo muchos años antes; a este respecto, el Consejo tomó nota de que el terreno de que se trataba estaba ocupado en 1930 y de que la concesión había sido otorgada conforme al procedimiento normal. Señaló además a la atención del peticionario que tal vez le sería posible llevar el asunto a los tribunales competentes del Territorio, si podía reunir pruebas suficientes. Finalmente, el Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que procediera a una investigación de la situación del peticionario a fin de determinar si disfrutaba de un terreno suficiente.

Dos peticiones¹⁶⁸ se referían a pleitos en que la Compagnie Pastorale estaba implicada. El Consejo recordó la resolución 149 (VI) que había aprobado respecto a una petición anterior (T/PET.5/38) relativa a la utilización de las tierras en el macizo del Bambuto, y por la cual había instado a la Autoridad Administradora a que intensificara sus esfuerzos para resolver el problema suscitado por el litigio entre la Compagnie Pastorale y los bamiléks de las comunidades vecinas. Tomó nota de que el macizo del Bambuto había sido constituido en reserva de pastos, con objeto de detener inmediatamente el peligro de erosión y llamó la atención de los peticionarios sobre la importancia de la conservación del suelo en la región. Finalmente, reiteró la recomendación que había hecho a la Autoridad Administradora de que intensificara sus esfuerzos para hallar una solución definitiva y equitativa del problema, que incluyera, en particular, el pago de una indemnización anual a las comunidades de la región.

Respecto a las dos últimas peticiones, emanadas de habitantes de dicha región,¹⁶⁹ y en que los autores protestaban contra amenazas de expropiación, el Consejo tomó nota de que los tribunales competentes del Territorio estaban entendiendo en los litigios de que se trataba.

Catorce peticiones relativas a cuestiones de tierras emanaban de la región de Bamún.¹⁷⁰

Con respecto a una petición¹⁷¹ referente a la enajenación de tierras, el Consejo tomó nota de que la concesión de que se trataba había sido otorgada conforme al procedimiento reglamentario; señaló al peticionario que podía llevar el asunto a los tribunales competentes.

Con respecto a una petición¹⁷² referente a la enajenación de tierras por la Autoridad Administradora, el Consejo comprobó que el asunto había sido sometido al tribunal competente y pidió que se le informara sobre el resultado.

Acerca de otra petición¹⁷³ relativa a la enajenación de tierras, el Consejo tomó nota de que la declaración

del peticionario según la cual él era menor de edad en la época en que la tierra de que se trataba había sido objeto de una concesión; señaló al peticionario que podía llevar el asunto a los tribunales competentes y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora prestaría al peticionario la ayuda necesaria para permitirle adquirir derechos sobre una tierra.

El autor de otra petición¹⁷⁴ se quejaba de que él y muchos otros hubiesen sido obligados a salir de ciertas tierras que ellos habían ocupado durante 17 años. El Consejo tomó nota de la declaración de la Autoridad Administradora según la cual las tierras otorgadas en compensación habían sido deslindadas en febrero de 1953 y expresó la esperanza de que los interesados se estimarían suficientemente indemnizados.

El autor de una petición¹⁷⁵ se quejaba de la conducta del jefe de la plantación de la SIAC en Fumbot, a quien acusaba de haber saqueado su plantación; el Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración de la Autoridad Administradora según la cual él nunca había depositado una denuncia por escrito que hubiese permitido llevar el asunto a los tribunales; sugirió al peticionario que, si deseaba llevar adelante el asunto, depositara una denuncia por escrito en manos de las autoridades judiciales.

El autor de una petición¹⁷⁶ protestaba respecto a la destrucción de su choza. El Consejo señaló a la atención del peticionario la declaración de la Autoridad Administradora según la cual él había comenzado la construcción de una choza en el centro urbano de Fumbot, sin respetar las servidumbres de urbanismo y había destruido él mismo su choza por orden de las autoridades locales. El Consejo tomó nota, además, de que el peticionario podía solicitar un permiso para reconstruir en un lugar vecino y pidió a la Autoridad Administradora informara al Consejo si el peticionario había efectivamente reconstruido su choza.

Con respecto a una petición¹⁷⁷ cuyo autor se quejaba de que tierras que desde hacía 50 años pertenecían a su padre hubiesen sido confiscadas, el Consejo tomó nota de que el peticionario había interpuesto apelación ante el tribunal de segundo grado de Fumbán; invitó a la Autoridad Administradora a que le comunicara el resultado del asunto.

Respecto a una denuncia¹⁷⁸ fundada en una enajenación de tierras que se alegaba haber ocurrido hacía 20 años, ninguna de las propuestas presentadas al Consejo pudo obtener la mayoría requerida; en consecuencia, la petición fué remitida al Comité Permanente para que volviera a examinarla.

Acerca de otra petición¹⁷⁹ relativa a la enajenación de tierras, el Consejo comprobó que la diferencia suscitada por el peticionario había sido ya resuelta por el tribunal indígena y que el peticionario no había apelado de la decisión pronunciada.

Con respecto a una petición¹⁸⁰ cuyo autor pedía la restitución de tierras enajenadas durante su ausencia, el Consejo señaló al peticionario que él podía someter el litigio al tribunal competente; invitó a la Autoridad Ad-

¹⁶⁶ T/PET.5/165.

¹⁶⁷ T/PET.5/166.

¹⁶⁸ T/PET.5/167 y 170.

¹⁶⁹ T/PET.5/206, 209.

¹⁷⁰ Véase el 61º informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.416.

¹⁷¹ T/PET.5/172.

¹⁷² T/PET.5/173.

¹⁷³ T/PET.5/178.

¹⁷⁴ T/PET.5/179.

¹⁷⁵ T/PET.181.

¹⁷⁶ T/PET.5/182.

¹⁷⁷ T/PET.5/183.

¹⁷⁸ T/PET.5/184.

¹⁷⁹ T/PET.5/186.

¹⁸⁰ T/PET.5/187.

ministradora a que comunicara al Consejo el resultado del asunto si el peticionario así lo hacía.

Acerca de dos peticiones¹⁸¹ cuyos autores se quejaban de que sus casas y sus plantaciones habían sido confiscadas y destruidas, el Consejo comprobó que, mientras se tramitaba el otorgamiento de la concesión del terreno de que se trataba, los peticionarios no habían en ningún momento hecho oposición. Con todo, el Consejo invitó a la Autoridad Administradora a que efectuara una investigación suplementaria respecto a esas quejas y a que informara al Consejo.

Con respecto a una petición¹⁸² cuyo autor afirmaba que sus tierras habían sido confiscadas mientras prestaba su servicio militar, el Consejo tomó nota de que el peticionario y su familia más inmediata habían abandonado las tierras de que se trataba durante unos 20 años y que, en el intervalo, esas tierras habían sido asignadas a otras personas en conformidad con el derecho consuetudinario. El Consejo tomó nota, además, de que el peticionario había presentado cinco reclamaciones ante los tribunales, que una de ellas había sido rechazada y que las otras cuatro aun estaban pendientes; invitó a la Autoridad Administradora a que comunicara al Consejo el suceso que tuvieran los asuntos pendientes.

Con respecto a la última petición,¹⁸³ que emanaba de la región de Bamún, en la cual el autor se quejaba de la enajenación de sus tierras y de la destrucción de sus cultivos de productos alimenticios, el Consejo tomó nota de que el asunto había sido sometido al tribunal de segundo grado de Fumbán; pidió a la Autoridad Administradora que le comunicara la decisión del tribunal.

El Consejo recibió de otras regiones del Territorio¹⁸⁴ 10 peticiones relativas a cuestiones de tierras.

Con respecto a una petición¹⁸⁵ motivada por medidas de expropiación tomadas en la aldea de Nguangawanda y el asentimiento ulterior de los habitantes en Pont Kellé, el Consejo tomó nota de que la gente que se había establecido en Pont Kellé podía solicitar que se le asignaran tierras en Nguangawanda.

El autor de una petición¹⁸⁶ pedía una indemnización por pérdidas sufridas al construirse una vía férrea. A este respecto, el Consejo tomó nota de que el peticionario, después del envío de su petición, había aceptado una suma de 1.180 francos en calidad de indemnización por la pérdida de diversos árboles frutales. Tomó nota asimismo de que, por telegrama dirigido al peticionario, se le había preguntado si, a pesar de ese pago, deseaba mantener su petición, pero que dicho telegrama había quedado sin respuesta.

Con respecto a una petición¹⁸⁷ relativa a una solicitud de derecho de propiedad, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las declaraciones de la Autoridad Administradora según las cuales él podía presentar una nueva solicitud para obtener el título correspondiente.

Los autores de una petición¹⁸⁸ reclamaban el pago de un alquiler que, según ellos, les era pagado en la época de la administración alemana. El Consejo llamó la aten-

ción de los peticionarios sobre las declaraciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que en los archivos oficiales de la Administración alemana no había ninguna huella del pago de un alquiler a los peticionarios por el terreno de que se trataba, que ese terreno era propiedad del Territorio desde hacía mucho tiempo, que los peticionarios no habían hecho oposición dentro de los plazos prescritos a la extensión del perímetro urbano de Kribi y que, ulteriormente, ocho lotes habían sido asignados a la familia de los peticionarios en compensación de los derechos que ella tenía sobre otro terreno que había sido incluido en el perímetro urbano de Kribi. Finalmente, el Consejo llamó la atención de los peticionarios sobre la posibilidad que se les daba de recusar las operaciones de deslinde y de clasificación ante el Conseil du contentieux administratif.

Acerca de una petición¹⁸⁹ cuyo autor afirmaba que un terreno de que él era propietario había sido vendido sin su consentimiento a la empresa que explota la estación de bombeo de Japoma, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración de la Autoridad Administradora, de la cual se desprendía que era contra la comunidad de Japoma contra quien él debía hacer valer su derecho a una indemnización y que a él le tocaba probar su derecho ante los tribunales indígenas.

Con respecto a una petición¹⁹⁰ cuyo autor se quejaba de que hacía 50 años aproximadamente la Compañía SAFA, de Dizangue, había usurpado, sin pagar ninguna compensación, un terreno de gran extensión, el Consejo tomó nota de que el peticionario no era el representante legítimo de la población, de que la primera enajenación de tierras había ocurrido bajo la administración alemana y de que las enajenaciones subsiguientes se habían efectuado en las formas legales y con la aprobación de la población.

En una petición,¹⁹¹ un funcionario se quejaba de que no había sido ascendido y expresaba también su disconformidad respecto a un reconocimiento de títulos. El Consejo llamó la atención del peticionario sobre las declaraciones de la Autoridad Administradora según las cuales las decisiones de la Junta de Ascensos eran definitivas y según las cuales, en cuanto al terreno, él podía llevar el asunto al tribunal local de segundo grado.

El autor de una petición¹⁹² se quejaba de que un terreno perteneciente a la población indígena hubiese sido clasificado como "vacante y mostrenco" y de que un terreno que le pertenecía a él hubiese sido enajenado. A este respecto, el Consejo tomó nota de que los terrenos de que se trataba habían sido clasificados como bienes de dominio privado del Territorio a fin de permitir la creación de un centro administrativo y comercial, y que los jefes y la población habían, en principio, convenido en desocupar dichos terrenos. Tomó nota, además, de que una indemnización de 18.000 francos había sido adjudicada al peticionario, y de que el Conseil du contentieux administratif había rechazado la acción del peticionario relativa al monto de la indemnización.

El autor de una petición¹⁹³ protestaba contra la tala de árboles valiosos en su plantación y se quejaba de ha-

¹⁸¹ T/PET.5/188, 189.

¹⁸² T/PET.5/192.

¹⁸³ T/PET.5/202.

¹⁸⁴ Véase el 62° informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.417.

¹⁸⁵ T/PET.5/126.

¹⁸⁶ T/PET.5/130.

¹⁸⁷ T/PET.5/134.

¹⁸⁸ T/PET.5/144.

¹⁸⁹ T/PET.5/148.

¹⁹⁰ T/PET.5/150.

¹⁹¹ T/PET.5/198 y Add.1.

¹⁹² T/PET.5/199 y Add.1.

¹⁹³ T/PET.5/203.

ber sido difamado. A este respecto, el Consejo llamó la atención del peticionario, por una parte, sobre la declaración de la Autoridad Administradora según la cual las demandas de indemnización por daños causados por la expedición de permisos de tala podían dirigirse al jefe de circunscripción, al inspector de recursos hidráulicos y forestales o al tribunal competente y, por otra parte, sobre la posibilidad que él tenía de demandar a su difamador ante los tribunales.

Acerca de la última petición de este grupo,¹⁹⁴ que era una queja contra la explotación de una cantera por la Régie générale des chemins de fer et travaux publics en

la aldea de Matomb-Route, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre la declaración de la Autoridad Administradora según la cual el peticionario podía, si estimaba que había sido lesionado por la decisión de la Administración de autorizar la explotación de la cantera, ejercer un recurso ante el Conseil du contentieux administratif, del Territorio.

En el curso de su 14º período de sesiones, el Consejo examinó 29 peticiones presentadas por escrito acerca del Camerún bajo administración francesa. Dichas peticiones, que fueron examinadas una a una por el Comité Permanente de Peticiones y por el Consejo, eran las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Abraham Ewo	T/PET.5/161	T/L.470	1034 (XIV)
Sr. Issah Njoya	T/PET.5/174	T/L.470	1035 (XIV)
Sr. Njiyangouo Soulémanou	T/PET.5/184	T/L.470	1036 (XIV)
Syndicat des employés des exploitants forestiers, de Messondo	T/PET.5/219	T/L.481	1037 (XIV)
Sr. Batind Makon Paulin	T/PET.5/222	T/L.470	1038 (XIV)
Assemblée générale des chômeurs du Cameroun	T/PET.5/225	T/L.491	1039 (XIV)
Sr. J. Emile Kohn	T/PET.5/226	T/L.470	1040 (XIV)
Sr. Joel Kouang	T/PET.5/228		
	y Add.1 y Add.2	T/L.481	1041 (XIV)
Association des chômeurs de la région Sanga Maritime	T/PET.5/229	T/L.491	1042 (XIV)
Union des populations du Cameroun, Sección de Yaoundé	T/PET.5/231}		
Union de Populations du Cameroun, Sucursal de Mbalmayo	T/PET.5/239}	T/L.470	1043 (XIV)
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/232}		
El Presidente de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/237}		
Comité Central de la Union des populations du Cameroun en New-Bell	T/PET.5/238}	T/L.470	1044 (XIV)
Comité Central de la Union des populations du Cameroun en Bandjún	T/PET.5/235	T/L.470	1045 (XIV)
Sr. Daniel Deno	T/PET.5/240	T/L.481	1046 (XIV)
Association amicale des chefs traditionnels de la région Bami-léké	T/PET.5/242	T/L.470	1047 (XIV)
Union des populations du Cameroun, Sucursal de Bafussam	T/PET.5/243	T/L.481	1048 (XIV)
El Secretario General del Comité Central de Njombe	T/PET.5/244	T/L.481	1049 (XIV)
Sr. Theodore M. Matip	T/PET.5/245		
	y Add.1	T/L.481	1050 (XIV)
El Secretario General de la aldea de Mbosbo	T/PET.5/246 }		
	y Add.1		
Junta Directiva de la Union des populations du Cameroun	T/COM.5/L.29 }	T/L.481	1051 (XIV)
	y Add.1		
Comité Central de la Union des populations du Cameroun en Manjo	T/PET.5/247	T/L.491	1052 (XIV)
El Vicepresidente de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/248	T/L.491	1053 (XIV)
Sr. Félix Song	T/PET.5/249	T/L.491	1054 (XIV)
El Secretario General de la Union des populations du Cameroun	T/PET.5/258	T/L.470	1055 (XIV)
Sr. Emile J. Kohn	T/PET.5/L.17	T/L.481	1056 (XIV)
Sr. Abel Kingue	T/PET.5/L.19	T/L.470	1057 (XIV)
Sr. Pierre Simon Nkén Tchallé	T/COM.5/L.30	T/L.481	1058 (XIV)

En una de esas peticiones,¹⁹⁵ el autor desaprobaba la presencia del Sr. Bissecck ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General en 1953 y acusaba al Sr. Bissecck de haber importado dos fusiles sin declararlos en la Aduana. El Consejo comprobó, entre otras cosas, que el Sr. Bissecck, funcionario, había obtenido, a petición suya, una licencia de dos meses, conforme al reglamento que permite otorgar licencias a los funcionarios que deseen tomar parte en congresos sindicales o internacionales. El Consejo tomó también nota de que el Sr. Bissecck había obtenido un permiso de importación y un permiso para retirar de la Aduana sus dos fusiles, en conformidad con el reglamento.

Respecto a una petición¹⁹⁶ en la cual se indicaba que, por razones políticas, las autoridades se habían negado a expedir pasaportes a ciertas personas, el Consejo llamó la atención de los peticionarios sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que la Administración no se había negado nunca a expedir pasaportes por razones políticas.

Dos peticiones¹⁹⁷ contenían protestas contra el arresto de una persona a la que la Cuarta Comisión de la Asamblea General había dado audiencia en 1953. El Consejo llamó la atención de los peticionarios sobre las observaciones presentadas por la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que la Administración

¹⁹⁴ T/PET.5/213 y Add.1.

¹⁹⁵ T/PET.5/L.19.

¹⁹⁶ T/PET.5/L.226.

¹⁹⁷ T/PET.5/231, 239.

no había tomado nunca, ni tomaría jamás, ninguna disposición para impedir que una persona a quien la Cuarta Comisión o el Consejo de Administración Fiduciaria habían dado una audiencia, se trasladara a la Sede de las Naciones Unidas. En el caso de que se trataba, la Administración había renunciado a arrestar al interesado hasta el 12 de diciembre de 1953 — tres días después que la Asamblea General resolvió suspender el octavo período de sesiones — a fin de que su arresto no le impidiera trasladarse a la Sede de las Naciones Unidas.

Tres peticiones¹⁹⁸ se referían a un atentado contra la persona del Sr. Abel Kingué, en Mburuku, el 12 de diciembre de 1953, y a dos ataques perpetrados sobre la persona del Sr. Um Nyobe, bien por un ex jefe, bien por instigación de dicho jefe. Esas peticiones contenían asimismo quejas respecto a la anulación de las elecciones en la región de Mungo en 1952. El Consejo tomó nota de que el jefe de que se trataba había sido condenado por haber participado en uno de los incidentes en Mburuku, y de que se estaba efectuando una investigación judicial respecto a dicho incidente. El Consejo pidió a la Autoridad Administradora que comunicara al Consejo el resultado de esa investigación. Además, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría medidas para promover relaciones pacíficas entre las diversas facciones de Mburuku. Tomó nota de que la anulación de las elecciones en la región de Mungo había sido decidida en conformidad con las disposiciones de la ley electoral.

Con respecto a una petición¹⁹⁹ relativa a la disolución de una reunión de un partido político, el Consejo lamentó que el jefe de subdivisión se hubiese visto obligado a disolver la reunión y destacó la necesidad de garantizar la libertad que los partidos políticos tienen de celebrar reuniones, declarando que sólo en casos excepcionales convenía disolver una reunión pública.

Trece de las peticiones²⁰⁰ se referían a cuestiones de orden político y administrativo.

Respecto a una de dichas peticiones,²⁰¹ ninguna de las propuestas presentadas al Consejo, en el curso del 13° período de sesiones, logró obtener, como ya se ha indicado, una mayoría de votos. El peticionario se quejaba de un abuso de poder cometido por un jefe impuesto, según él, a la población. El Consejo comprobó que el jefe de que se trataba había sido elegido conforme a las disposiciones reglamentarias y que la Autoridad Administradora ya había investigado sus actividades. Por otra parte, aconsejó al peticionario que presentara pruebas en apoyo de sus acusaciones si no se estimaba satisfecho.

Una petición,²⁰² cuyos autores apoyaban al secretario general de la Union des populations du Cameroun, formulaba diversas quejas respecto a la Autoridad Administradora y citaba varios hechos en apoyo de estas acusaciones. Los autores también se quejaban de la conducta del *chef de subdivision* de Bafussam. El Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que las decisiones del *chef de*

subdivision eran apelables y que las acusaciones formuladas contra dicho jefe carecían de fundamento; invitó, además, a los peticionarios a comunicar de un modo preciso y detallado las razones que motivaban las quejas formuladas contra el funcionario de que se trataba.

Los autores de otra petición²⁰³ pedían que un representante de cada jefatura pudiera asistir al juez francés tanto en lo civil como en lo penal, que uno de sus jefes los representara en la Asamblea Territorial y que se instituyera un impuesto suplementario para el sostenimiento de las jefaturas y para las recepciones oficiales.

Acerca de una petición,²⁰⁴ en la que el peticionario se quejaba de haber sido condenado por haber dejado de declarar en la aduana un paquete de tarjetas sindicales, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que la condena del peticionario había sido anulada y que se había restituido a éste el paquete de tarjetas sindicales.

Con respecto a una petición²⁰⁵ relativa a un incidente en el que la multitud había maltratado al dirigente de un partido político, el Consejo tomó nota de que el incidente todavía estaba en instancia ante los tribunales e invitó a la Autoridad Administradora a que le comunicara en su 15° período de sesiones el resultado del proceso.

Siete peticiones contenían quejas relativas a la enajenación de tierras. Respecto a dos de ellas, ninguna de las propuestas presentadas al Consejo en su 13° período de sesiones había logrado obtener, como ya se ha indicado, una mayoría de votos. Acerca de estas dos peticiones,²⁰⁶ el Consejo llamó la atención de los peticionarios sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que las concesiones de que se trataba habían sido otorgadas conforme a un procedimiento normal y que nunca habían sido objeto de ninguna oposición. Además, el Consejo tomó nota de que los peticionarios tenían la posibilidad de llevar sus querellas a los tribunales competentes.

Con respecto a la tercera petición,²⁰⁷ el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que, en 1947, al venderse los terrenos de que se trataba, el peticionario no había formulado ninguna protesta; por otra parte, dentro de poco tiempo se le otorgarían títulos de propiedad sobre una parcela vecina.

Con respecto a la cuarta petición,²⁰⁸ el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora, de las cuales se desprendía que la Administración había procedido a una cuidadosa investigación respecto a la queja relativa a la parcela de que se trataba, pero que el peticionario no había podido probar el fundamento de su reclamación. El Consejo también sugirió al peticionario que se dirigiera a la inspección interregional del trabajo para obtener un empleo o — si deseaba dedicarse a la

¹⁹⁸ T/PET.5/232, 237, 238.

¹⁹⁹ T/PET.5/258.

²⁰⁰ T/PET.5/174, 226, 231, 232, 235, 237, 238, 239, 242, 245, 258; T/PET.5/L.17, L.19.

²⁰¹ T/PET.5/174.

²⁰² T/PET.5/235.

²⁰³ T/PET.5/242.

²⁰⁴ T/PET.5/L.17.

²⁰⁵ T/PET.5/245 y Add.1.

²⁰⁶ T/PET.5/161, 184.

²⁰⁷ T/PET.5/222.

²⁰⁸ T/PET.5/228 y Adds. 1 y 2

agricultura — que pidiera a la Administración autorización para ocupar una parcela.

Acerca de la quinta y de la sexta peticiones,²⁰⁹ el Consejo tomó nota de que el 29 de julio de 1947 la Administración había adoptado, conforme a una política de conservación del suelo destinada a promover los intereses del Territorio en su conjunto, un reglamento que clasificaba el terreno de que se trataba como reserva forestal y que esa decisión había sido tomada después de deliberación de la Asamblea Territorial. Además el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora consultaría a los órganos elegidos del Territorio y nombraría una comisión compuesta de representantes de la Administración y de los aldeanos interesados, a fin de estudiar las necesidades de los peticionarios en materia de agricultura.

Acerca de la séptima petición,²¹⁰ el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones de la Autoridad Administradora y sobre la resolución que el Consejo había aprobado respecto a una petición que el peticionario le había dirigido sobre el mismo tema (resolución 901 (XIII) relativa a la petición T/PET.5/126). Además, indicó al peticionario que, si la comunidad en cuyo nombre hablaba deseaba pedir una indemnización mayor por el perjuicio sufrido, debía presentar su querrela a los tribunales competentes del Territorio.

Dos peticiones²¹¹ versaban sobre el cultivo del café. Acerca de la primera de ellas, el Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones presentadas por la Autoridad Administradora de las cuales se desprendía que a las cooperativas agrícolas les era imposible fijar al comienzo de la estación cafetera el precio que se habría de pagar al productor y que el precio pagado a los cosecheros de café de Bamiléké en la estación cafetera 1952-1953 había sido considerablemente más elevada que el precio pagado por los compradores particulares. Acerca de la segunda petición, el Consejo tomó nota de las observaciones de la Autoridad Administradora según las cuales era menester controlar las plantaciones de café explotadas por los habitantes indígenas y recomendó a la Autoridad Administradora que adoptara todas las medidas que permitieran explicar a los futuros cultivadores de café por qué era necesario el control.

En otra petición,²¹² los autores se quejaban de que la Autoridad Administradora se negara a permitir a los habitantes indígenas beber vino de palma y formulaban nuevas reclamaciones respecto al precio pagado por una partida de cacao. El Consejo llamó la atención del peticionario sobre las observaciones presentadas por la Autoridad Administradora.

Una petición²¹³ contenía quejas relativas a las condiciones de trabajo de los trabajadores forestales. El Consejo señaló a los peticionarios que correspondía a la inspección del trabajo del Territorio investigar las reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo y que ellos debían dirigirse a dicha oficina si, en adelante, tenían que formular reclamaciones de esa clase. Recomendó a la Autoridad Administradora que diera la debida publicidad en el Territorio a las disposiciones

del Código del Trabajo y que hiciera conocer la existencia y las funciones de la inspección del trabajo. Sin embargo, el Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que siguiera examinando cada uno de los puntos suscitados en la petición a fin de proceder a una investigación completa de las reclamaciones más importantes.

Cuatro de las peticiones²¹⁴ se referían a cuestiones relativas a la mano de obra. Acerca de una de ellas,²¹⁵ en particular, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuaría velando por que los empleadores aplicaran estrictamente el Código del Trabajo y de que continuaría examinando el problema del desempleo; el Consejo también recomendó a la Autoridad Administradora que adoptara todas las medidas necesarias para encontrar otro empleo para algunas vendedoras africanas que habían sido despedidas por sus empleadores. Respecto a la segunda petición,²¹⁶ el Consejo comprobó que la Autoridad Administradora aplicaba las recomendaciones de la Conferencia Internacional relativa a los trabajos forzados y que el *indigénat* había sido abolido en 1944. La tercera denuncia²¹⁷ versaba sobre la contratación de trabajadores del Camerún para llevarlos a trabajar en los Territorios bajo administración española; respecto a esta petición, el Consejo tomó nota de que la Administración había suspendido tal contratación hasta que las autoridades españolas convinieran en establecer condiciones de trabajo satisfactorias para los trabajadores que fuesen contratados. El Consejo expresó también la esperanza de que el nuevo plan de desarrollo económico del Territorio remediaría un poco el desempleo reinante, en particular en las inmediaciones de Douala. Acerca de la cuarta petición,²¹⁸ el Consejo señaló al peticionario que si deseaba formular una reclamación respecto a su despido, debía reanudar su proceso ante el tribunal competente; señaló también a su atención que la inspección del trabajo había sido creada para investigar respecto a las reclamaciones relativas a las violaciones del Código del Trabajo.

Con respecto a otra petición²¹⁹ relativa a cuestiones agrícolas, el Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que adoptara medidas para dar una amplia publicidad a las finalidades del reglamento relativo a los recursos forestales y del reglamento relativo a las plantaciones de café (decreto del 10 de mayo de 1937).

8. Peticiones relativas al Togo bajo administración británica

Durante su 13º período de sesiones, el Consejo examinó 41 peticiones escritas relativas al Togo bajo Administración Británica. Además, el Consejo concedió audiencias orales al Sr. S. T. Flekku, representante del *Convention People's Party*, al Sr. J. H. Allasani, representante del Consejo de Distrito de Dagomba, y al Sr. J. K. Mensah, representante del Consejo de Distrito de Buem Krachi. Los peticionarios fueron escuchados en las sesiones 505a. y 506a. del

²¹⁴ Véase el 84º informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.491.

²¹⁵ T/PET.5/225.

²¹⁶ T/PET.5/229.

²¹⁷ T/PET.5/248.

²¹⁸ T/PET.5/249.

²¹⁹ T/PET.5/247. Véase el 84º informe del Comité Permanente de Peticiones, T/L.491.

²⁰⁹ T/PET.5/246 y Add.1; T/COM.5/L.5/L.29 y Add.1.

²¹⁰ T/COM.5/L.30.

²¹¹ T/PET.5/240 y 243.

²¹² T/PET.5/244.

²¹³ T/PET.5/219.

Consejo. Las tres audiencias orales y 35 de las peticiones escritas relativas al problema de la unificación del Togo, y una relación de las medidas adoptadas por el Consejo sobre las cuestiones planteadas figuran en el informe especial del Consejo sobre el problema de la unificación del Togo, presentado a la Asamblea General.²²⁰

Las 35 peticiones fueron las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Sr. Fidelis E. K. Krampa	T/COM.6/L.6
Nana Kwaku Ossi Brantuo III	T/PET.6/L.9
Jefe John Amanic	T/PET.6/L.10
El Secretario General Interino de la Ali Ewe Conference	T/PET.6/L.11
	T/PET.6/L.11/ Add.1-2
Convention People's Party, Sección de Teteman	T/PET.6/L.12
Sindicato de Conductores, Teteman	T/PET.6/L.13
Jefe de la Unión de Campesinos, Teteman, en nombre de otros Campesinos	T/PET.6/L.14
Sr. E. K. Appiah en nombre de los Votantes y Electores de la "Sección A", Teteman	T/PET.6/L.15
Nana Adjei III, Gyasehene de Buem, en nombre del Pueblo de Okadjakrom	T/PET.6/L.16
Comunidad de Kumasi	T/PET.6/L.17
Sindicato de Conductores, Teteman	T/PET.6/L.18
Sociedad de ex Combatientes de la División Oriental de Buem	T/PET.6/L.19
Jefes de la División Nifa del Estado de Buem	T/PET.6/L.20
Asociación de Sociedades Ewés, Sekondi-Takoradi	T/PET.6/L.21

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
El Presidente del Consejo Local de Krachi	T/PET.6/L.22
Consejo Local de Akan	T/PET.6/L.23
Consejo del Estado de Buem en Borada	T/PET.6/L.24
Asociación de la Juventud del Togo, Distrito de Ho	T/PET.6/L.25
Jefes y pueblo del Togo Meridional	T/PET.6/L.26
Representantes de la Región Electoral Rural que forman el Consejo Local de Yingor	T/PET.6/L.27
Habitantes de Worawora y la Región — Buem Akan	T/PET.6/L.28
Consejo Local de Akpini	T/PET.6/L.29
Jefes y pueblo del Distrito de Ho	T/PET.6/L.30
Consejo de Distrito de Buem-Krachi (Costa de Oro)	T/PET.6/L.31
Consejo de Campesinos Ganas Unidos del Togo Trans-Volta (Costa de Oio)	T/PET.6/L.32
Movimiento de la Juventud del Togo	T/PET.6/L.33
Togoland Congress	T/PET.6/L.34
Togoland Congress	T/PET.6/L.35
Consejo Local de Anfoega	T/PET.6/L.36
Asociación de Jóvenes del Togo	T/PET.6/L.37
Togoland Congress, Sección de Kpandu	T/PET.6/L.38
Jefes tradicionales y ancianos del Togo	T/PET.6/L.39
Servicio de Información de la Juventud del Togo	T/PET.6/L.40
Ciudadanos del Togo Meridional	T/PET.6/L.41
Asociación de Jóvenes del Togo	T/COM.6/L.27

El Comité Permanente de Peticiones y el Consejo examinaron por separado cuatro peticiones. Estas eran:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. J. J. Amoa	T/PET.6/325	T/L.415	989 (XIII)
Sr. Gilbert Osei	T/PET.6/326 y Add.1	T/L.415	990 (XIII)
Sr. Seth G. K. Golovi	T/PET.6/327	T/L.415	991 (XIII)
Pacientes de la Colonia de Leprosos de Ho	T/PET.6/328	T/L.415	992 (XIII)

Acerca de una petición²²¹ en que el peticionario alegaba haber sido destituido del cargo de director de una escuela, a causa de sus opiniones políticas, el Consejo tomó nota de las observaciones de la Autoridad Administradora al efecto de que el peticionario había sido trasladado a otra escuela por contravenir las instrucciones sobre la admisión de visitantes a las escuelas, y que recientemente había sido restablecido en su cargo de director.

En el caso de otra petición²²² relativa a la destitución de un maestro de una escuela parroquial que pedía que le pagaran su sueldo, el Consejo pidió a la Autoridad Administradora que ayudara al peticionario a recuperar lo que le correspondía.

Respecto a una petición²²³ relativa a la imposibilidad en que se encontraba un estudiante de continuar sus estudios por falta de fondos, el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora en el sentido de que existían dis-

posiciones que le permitían continuar sus estudios e invitó a la Autoridad Administradora a informar al peticionario de estas medidas y ayudarlo.

En relación con una petición²²⁴ de los pacientes de una colonia de leprosos, que se quejaban de que se los obligaba a trabajar sin remuneración y a pagar su sustento, el Consejo tomó nota de que se habían adoptado medidas para alimentar a los pacientes incapacitados, pero que otros tenían que comprar sus alimentos fuera del lazareto y pidió a la Autoridad Administradora que continuara mejorando las condiciones en el lazareto.

Por recomendación del Comité Permanente, el Consejo decidió examinar las dos peticiones restantes²²⁵ conjuntamente con el problema de unificación del Togo.

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo examinó ocho peticiones escritas relativas al Togo bajo Administración Británica. Siete se referían al problema de la unificación del Togo. En el informe especial a la Asamblea General,²²⁶ sobre el problema de la uni-

²²⁰ A/2669.

²²¹ T/PET.6/325.

²²² T/PET.6/326 y Add.1.

²²³ T/PET.6/327.

²²⁴ T/PET.6/328.

²²⁵ T/PET.6/L.7, 8.

²²⁶ A/2669.

ficación del Togo, figura una relación de las medidas adoptadas por el Consejo sobre las cuestiones suscitadas. Las siete peticiones eran:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
El Secretario General del Togoland Congress	T/PET.6/L.42
El Secretario, Ewe and All Togoland Congress	T/PET.6/L.43
El Presidente del Distrito Electoral, Convention People's Party, Sección de Kpandu Norte y otras personas	T/PET.6/L.44 y Add.1

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Representantes del pueblo de Atikpui	T/PET.6/L.45
El Secretario General de la All Ewe Conference	T/PET.6/L.46 y Add.1
El Consejo del Estado de Hopke	T/PET.6/L.47
El Secretario General del Togoland Congress	T/PET.6/L.48

El Comité Permanente y el Consejo examinaron por separado la siguiente petición:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Jefes Principales, Jefes y Ancianos de los Nawuris y Nanjoros	T/PET.6/332	T/L.466	1059 (XIV)

En esta petición se solicitaba²²⁷ que los Estados Nawuri y Nanjoro fueran asociados con los Krachis, a los fines de su representación ante la Asamblea. El Consejo ratificó su resolución 401 (X) y contestó a los peticionarios que presentaran sus quejas a la Autoridad Administradora, a la cual rogó que les escuchara con simpatía.

9. Peticiones relativas al Togo bajo administración británica y al Togo bajo administración francesa

Durante su 13° período de sesiones, el Consejo examinó 12 peticiones escritas relativas al Togo bajo Administración Británica y al Togo bajo Administración Francesa. Todas las peticiones estaban relacionadas con el problema de unificación del Togo y en el informe especial del Consejo sobre el problema de unificación del Togo presentado a la Asamblea General figura una relación de las medidas adoptadas por el Consejo sobre las cuestiones planteadas.²²⁸ Las 12 peticiones eran:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Copresidentes del Tercer Congreso del Parti togolais du progrès	T/PET.6 y 7/L.7 T/PET.6 y 7/L.7/ Add.1-3
Sr. J. K. A. Quashie	T/PET.6 y 7/L.8
Sr. Albert Essien	T/PET.6 y 7/L.9
El Presidente General del Parti togolais du progrès	T/PET.6 y 7/L.10
Togoland Congress	T/PET.6 y 7/L.11
Consejo de Circunscripción del Círculo de Anecho	T/PET.6 y 7/L.13
Príncipe Kokovena Akakpo	T/PET.6 y 7/L.14 T/PET.6 y 7/L.14/ Corr.1
Sr. Norman Paulin	T/PET.6 y 7/L.15
Togoland Congress, Sección de Tete-man Buem	T/PET.6 y 7/L.16
Sr. Francis K. Ezu	T/PET.6 y 7/L.17
Sr. Martin Martelot	T/PET.6 y 7/L.18
El Presidente General del Comité de l'Unité togolaise	T/PET.6 y 7/L.19

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo examinó 14 peticiones escritas relativas al problema de la unificación del Togo. En el informe especial sobre el problema de la unificación del Togo presentado por el Consejo a la Asamblea General, figura una relación de las medidas adoptadas por el Consejo sobre las cuestiones planteadas. Las 14 peticiones fueron:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
El Presidente del Distrito Electoral Convention People's Party, Akpini	T/COM.6 y 7/L.16
El Secretario de la All Ewe Conference	T/PET.6/ y 7/L.20
El Secretario General de la Union des chefs et de la population du Nord-Togo	T/PET.6 y 7/L.21
Representantes del Pueblo del Círculo de Tsevie	T/PET.6 y 7/L.22
Jefes y Notables del Círculo de Atakpame	T/PET.6 y 7/L.23
Jefes y Notables del Círculo de Palimé	T/PET.6 y 7/L.24
Representantes del pueblo del Círculo de Anecho	T/PET.6 y 7/L.25
El Vicepresidente de la Jeunesse du Nord-Togo	T/PET.6 y 7/L.26
Los Jefes y Notables del Círculo de Lomé	T/PET.6 y 7/L.27
El Presidente del Joint Togoland Congress	T/PET.6 y 7/L.28
El Secretario de la Ewe Union Association	T/PET.6 y 7/L.29
Sr. Augustino de Souza	T/PET.6 y 7/L.30
Asociación Nacional de Organizaciones de Trabajadores y Estudiantes	T/PET.6 y 7/L.31
El Presidente General del Comité de l'Unité togolaise	T/PET.6 y 7/L.32

10. Peticiones relativas al Togo bajo Administración Francesa

Durante su 13° período de sesiones, el Consejo examinó cinco peticiones relativas al Togo bajo Administración Francesa. Dos de las peticiones se referían a cuestiones generales que ya habían sido señaladas a la atención del Consejo y sobre las cuales

²²⁷ T/PET.6/332.

²²⁸ A/2669.

éste ya había adoptado decisiones y formulado recomendaciones. El Consejo las tuvo presentes al considerar el informe anual del Territorio y en el capítulo VII de la parte II del presente informe, aparece bajo los títulos correspondientes, una relación de los principales problemas planteados en esas dos peticiones que fueron las siguientes:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Sr. Yahaba F. Namgbi	T/PET.7/L.4
El Presidente Nacional de JUVEN-TO	T/PET.7/L.5

El Comité Permanente de Peticiones y el Consejo examinaron por separado tres peticiones. Estas fueron:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Vincent Vovor	T/PET.7/355	T/L.440	993 (XIII)
Sr. Mathias Eklou Natey	T/PET.7/356	T/L.440	994 (XIII)
Sr. Paul Y. Agbetété	T/PET.7/358	T/L.440	995 (XIII)

Acerca de una petición²²⁹ de reclamación por destitución de un funcionario del servicio de aduanas, el Consejo advirtió que se estaba investigando el asunto e invitó a la Autoridad Administradora a informarle de los resultados de la investigación.

Acerca de una petición²³⁰ relativa al despido de un trabajador que alegaba que la destitución tenía motivos políticos, el Consejo señaló a la atención del peticionario, las observaciones de la Autoridad Administradora al efecto de que su contrato temporal se había terminado, no por motivos políticos sino por considerarse que su trabajo no era satisfactorio.

Acerca de una tercera petición²³¹ en la que el peticionario informaba haber tenido que abandonar el

Territorio para no ser detenido arbitrariamente y pedía se le pagara su sueldo de maestro de escuela, el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora en el sentido de que había renunciado a su cargo voluntariamente, que su sueldo le sería pagado cuando deseara y que podía regresar al Territorio y solicitar empleo. El Consejo también invitó a la Autoridad Administradora a examinar la posibilidad de reponer al peticionario en su cargo anterior si éste lo solicitaba.

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo examinó 22 peticiones escritas relativas al Togo bajo Administración Francesa. El Comité Permanente y el Consejo las examinaron una por una. Estas fueron:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Augustino de Souza, Presidente General del Comité de l'unité togolaise	T/PET.7/350 y Add.1 to 5	T/L.462	1061 (XIV)
El Secretario General del Togoland Congress	T/PET.7/351 y Add.1 y 2	T/L.462	1062 (XIV)
El Presidente de JUVENTO	T/PET.7/352	T/L.462	1063 (XIV)
Sr. J. K. A. Quashie	T/PET.7/353	T/L.462	1064 (XIV)
El Presidente de JUVENTO	T/PET.7/354 y Add.1-4	T/L.462	1065 (XIV)
Sr. Christian A. Kuwame	T/PET.7/357	T/L.462	1066 (XIV)
Sr. Paul Agbetété	T/PET.7/359	T/L.462	1067 (XIV)
Sr. Joseph Firmin Abalo	T/PET.7/360	T/L.462	1068 (XIV)
Sr. Georges Kitty Koudayor	T/PET.7/361	T/L.482	1069 (XIV)
Sres. Alfa Yaya y El Hadj Issa	T/PET.7/362	T/L.482	1070 (XIV)
Sr. Justin Doe Bruce	T/PET.7/363	T/L.482	1071 (XIV)
El Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Togo- leses en Francia	T/PET.7/365	T/L.492	1072 (XIV)
Sr. Gilbert K. Abbey, Presidente General del Comité de l'unité togolaise	T/PET.7/366 T/PET.7/367 y Add.1 y 2	T/L.482	1073 (XIV)
El Secretario General de la All-Ewe Conference	T/PET.7/370		
Sr. Paul Agbété	T/PET.7/368	T/L.482	1074 (XIV)
Jefe Grégoire Amouzou	T/PET.7/371 y Add.1	T/L.482	1075 (XIV)
Sr. Aboki Sodjehoun	T/PET.7/372	T/L.482	1076 (XIV)
Sr. Michihoun Ayikoue	T/PET.7/373	T/L.482	1077 (XIV)
Sr. Chistophie K. Martelot	T/PET.7/374	T/L.482	1078 (XIV)
Miembros de JUVENTO que asistieron a una reunión privada	T/COM.7/L.13	T/L.462	1079 (XIV)
Jefe Alphonse Avogbedo Gbede y habitantes de Gape Atsave	T/PET.6 y 7, L.12	T/L.482	1060 (XIV)

²²⁹ T/PET.7/355.

²³⁰ T/PET.7/356.

²³¹ T/PET.7/358.

En ocho de las peticiones²³² se formularon reclamaciones con motivo de la celebración de reuniones por los partidos políticos Comité de l'Unité togolaise y JUVENTO. El Consejo tomó nota de que las reuniones se habían celebrado en condiciones normales y que nunca se había prohibido una reunión de ninguno de los partidos. También tomó nota de que el lugar donde acostumbraban a reunirse los dos partidos estaba situado en el centro de Lomé, circunstancia que dificultaba el mantenimiento del orden público por la Autoridad Administradora, que no deseaba dar la apariencia de coartar la libertad de reunión; y señaló a la atención de los peticionarios la posibilidad de celebrar sus reuniones fuera de la ciudad donde la Autoridad Administradora podría garantizar más fácilmente la libertad de reunión. El Consejo expresó la esperanza de que se redujera al mínimo el número de policías que asistía a las reuniones públicas, y de que los incidentes de la naturaleza descrita en las peticiones ocurrieran con menos frecuencia en lo futuro. Finalmente el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora prestara a los partidos políticos toda la asistencia necesaria para organizar y celebrar reuniones públicas. El Consejo también señaló que no había pruebas para apoyar las acusaciones formuladas por uno de los peticionarios y que si éste lo deseaba podía entablar una demanda.

Acerca de una petición²³³ que acusaba a la Autoridad Administradora de perseguir a los miembros del Comité de l'Unité togolaise, el Consejo tomó nota de que se había arrestado y detenido en custodia a personas, por celebrar una demostración en la carretera pública, sin estar autorizadas, y pidió a la Autoridad Administradora que informara al Consejo del resultado de las apelaciones interpuestas contra la sentencia.

Acerca de una petición²³⁴ que protestaba contra la deportación del Secretario Nacional de JUVENTO, el Consejo pidió a la Autoridad Administradora que reconsiderara su decisión, con el fin de permitir que esa persona volviera al Territorio si así lo pedía.

Acerca de una petición²³⁵ relativa a reclamaciones sobre irregularidades electorales, el Consejo señaló a la atención del peticionario una resolución aprobada previamente por el Consejo.

Acerca de una petición²³⁶ que protestaba contra las restricciones de libertad de movimiento, el Consejo señaló a la atención del peticionario la declaración del representante especial de la Autoridad Administradora al efecto de que la disposición en virtud de la cual se le había negado el visado para su pasaporte ya no estaba en vigor.

Acerca de una petición²³⁷ en la que se alegaba discriminación en los empleos públicos en contra de los miembros de los partidos nacionalistas, el Consejo opinó que la acusación no tenía fundamento.

Acerca de una acusación²³⁸ relativa a la anulación de una beca de estudios, el Consejo advirtió las obser-

vaciones de la Autoridad Administradora, al efecto de que la actuación académica del peticionario había resultado inadecuada, y señaló a la atención de éste que los becarios estaban obligados a proseguir sus estudios con mayor diligencia que otros estudiantes.

En una petición²³⁹ se expresaba descontento por el procedimiento seguido con una petición anterior (T/PET.7/346), y se alegaba que la Administración había impuesto penas a ex combatientes por haber formulado peticiones a la Misión Visitadora de 1952. El Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora al efecto de que en cuanto a su petición anterior, se había decidido ulteriormente que los nacionales del Togo bajo administración francesa que hubieran servido durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército británico y poseedores de las condecoraciones Burma Star y Africa Star, podrían acogerse a los beneficios de la Service-men's Charter. El Consejo también observó que el peticionario había sido despedido de su empleo por ineficiencia, no por motivos políticos.

Acerca de dos peticiones²⁴⁰ de queja de la conducta de un jefe, el Consejo indicó que los peticionarios estaban en libertad de proseguir sus casos ante el Procurador de la República.

Acerca de una petición²⁴¹ relativa a la destitución de un jefe, la instalación de un nuevo jefe y la fuga de los peticionarios del Territorio, el Consejo indicó a los peticionarios que podían regresar al Territorio y propuso a la Autoridad Administradora que ayudara al grupo a que pertenecían los peticionarios a obtener su propio Imán.

Acerca de una petición²⁴² relativa a una jefatura, el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora.

Acerca de una petición²⁴³ que protestaba por el aumento de los impuestos, el Consejo señaló a la atención del peticionario el hecho de que los impuestos variaban de acuerdo con la riqueza de los cantones y eran determinados por la Asamblea Territorial.

Acerca de una petición²⁴⁴ en la que se deploraba la falta de carreteras, hospitales, mercados y escuelas, el Consejo advirtió que se necesitaría tiempo para dotar a las aldeas de todos los servicios que deseaban sus habitantes; no obstante expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora podría, según lo permitieran las circunstancias, dotar a los peticionarios de las facilidades deseadas.

Acerca de una petición²⁴⁵ respecto de una denegación de licencia para portar armas con fines de defensa propia, el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora al efecto de que las licencias para portar armas de fuego se expiden sólo cuando tales armas se usen para deportes.

²³⁹ T/PET.7/363.

²⁴⁰ T/PET.7/372, 373.

²⁴¹ T/PET.7/362.

²⁴² T/PET.7/371 y Add.1.

²⁴³ T/PET.7/368.

²⁴⁴ T/PET.6 y 7/L.12.

²⁴⁵ T/PET.7/361.

²³² T/PET.7/350 y Adds. 1-5, 354 y Adds. 1-4, 357, 366, 367 y Adds.1 y 2, 370, 374; T/COM.7/L.13.

²³³ T/PET.7/351 y Adds. 1 y 2.

²³⁴ T/PET.7/352.

²³⁵ T/PET.7/359.

²³⁶ T/PET.7/353.

²³⁷ T/PET.7/360.

²³⁸ T/PET.7/365.

11. Peticiones relativas a Nueva Guinea

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo examinó una petición escrita procedente de Nueva Guinea, relativa a cuestiones generales que ya habían sido señaladas a la atención del Consejo y sobre las cuales ya había adoptado decisiones o formulado recomendaciones. El Consejo la tuvo presente al considerar los informes anuales del Territorio y en el capítulo IX de la parte II del presente informe bajo los títulos correspondientes aparece una relación de los principales problemas planteados. La petición era la siguiente:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>
Sra. Jane T. Wallace	T/PET.8/L.1

12. Peticiones relativas a Nauru

Durante su 13° período de sesiones, el Consejo examinó una petición escrita relativa a Nauru. Esta petición, que fué examinada separadamente por el Comité Permanente de Peticiones y por el Consejo, era la siguiente:

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Sr. Apadinuwe	T/PET.9/11	T/L.435	996 (XIII)

El peticionario era una víctima de poliomielitis y solicitaba asistencia suplementaria en vista del alto costo de vida. El Consejo contestó que la Autoridad Administradora había decidido hacer un pago graciable al peticionario y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora consideraría la posibilidad de prestarle mayor asistencia financiera si fuera necesario.

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo no examinó peticiones relativas a Nauru.

minó tres peticiones²⁴⁶ relativas al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. En el informe²⁴⁷ transmitido por el Consejo de Administración Fiduciaria al Consejo de Seguridad sobre esta zona estratégica, figura una relación de las peticiones y de las medidas adoptadas en relación con ellas.

14. Peticiones relativas a los territorios en fideicomiso en general

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo examinó las siguientes peticiones escritas relativas a los territorios en fideicomiso en general:

13. Peticiones relativas al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico

Durante su 14° período de sesiones, el Consejo exa-

<i>Peticionario</i>	<i>Signatura del documento en que consta la petición</i>	<i>Signatura del informe correspondiente del Comité Permanente de Peticiones</i>	<i>Resolución</i>
Liga Internacional de Derechos del Hombre, Comité de Ruanda Urundi	T/PET.GENERAL/23	T/L.503	1083 (XIV)

La petición²⁴⁸ se refería al procedimiento del Consejo de Administración Fiduciaria, y proponía que se informara a los peticionarios, antes de examinar sus peticiones, de las observaciones formuladas por la Autoridad Administradora correspondiente, a fin de que los peticionarios pudieran contestarlas. El Consejo reafirmó el principio de que debe garantizarse a los

peticionarios el máximo posible de seguridad cuando se examinen sus peticiones; hizo notar que en el pasado, en diversas ocasiones, se había pedido información suplementaria a un peticionario para elucidar lo que pudiera resultar oscuro de su petición; e informó al peticionario de que el reglamento del Consejo permite al peticionario comentar las observaciones de la Autoridad Administradora y que está en libertad de presentar una nueva petición cuando no le satisfagan las conclusiones a que haya llegado el Consejo con respecto a su petición anterior.

²⁴⁶ T/PET.10/26, 27, 28.

²⁴⁷ S/3272.

²⁴⁸ T/PET.GENERAL/23.

Capítulo IV

VISITAS A LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

1. Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del Africa Occidental, 1952

En conformidad con la decisión adoptada en el 12º período de sesiones,²⁴⁹ el Consejo continuó, en su 13º período de sesiones, el examen de los informes de la Misión Visitadora sobre los cuatro territorios en fideicomiso²⁵⁰ del Africa occidental, y al mismo tiempo examinó los informes anuales de las Autoridades Administradoras sobre la administración de los territorios en fideicomiso respectivos.

En la 521a. sesión, el Consejo aprobó una resolución²⁵¹ en la que tomaba nota de los informes y de las observaciones pertinentes de las Autoridades Administradoras interesadas; expresaba aprecio por la labor realizada por la Misión Visitadora en su nombre; hacía notar que en su 13º período de sesiones, el Consejo, al formular sus propias conclusiones y recomendaciones sobre la situación de los territorios interesados, había tenido en cuenta las observaciones y conclusiones de la Misión Visitadora y las observaciones de las Autoridades Administradoras al respecto; decidía seguir teniendo en cuenta estas observaciones y conclusiones en el futuro examen de cuestiones relativas a los territorios interesados; invitaba a las Autoridades Administradoras interesadas a prestar la más atenta consideración a las conclusiones de la Misión Visitadora y a los comentarios pertinentes de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria; decidía, en conformidad con el artículo 99 de su reglamento, que los informes de la Misión Visitadora, incluso el informe especial²⁵² sobre el problema de los ewés y de la unificación del Togo fueran impresos conjuntamente con las observaciones pertinentes de la Autoridades Administradoras²⁵³ y las decisiones adoptadas al respecto por el Consejo; y pedía al Secretario General que dispusiera la impresión de los documentos a la mayor brevedad.

²⁴⁹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período de sesiones, Suplemento No. 4*, documento A/2427, página 17.

²⁵⁰ Informe del Togo bajo Administración Británica, T/1040; Informe del Togo bajo Administración Francesa, T/1041; Informe del Camerún bajo Administración Británica, T/1042; Informe del Camerún bajo Administración Francesa, T/1043.

²⁵¹ Resolución 867 (XIII).

²⁵² T/1034.

²⁵³ Observaciones de la Autoridad Administradora relativas al Togo bajo Administración Británica, T/1070;

Observaciones de la Autoridad Administradora relativas al Togo bajo Administración Francesa, T/1068;

Observaciones de la Autoridad Administradora relativas al Camerún bajo Administración Británica, T/1074;

Observaciones de la Autoridad Administradora relativas al Camerún bajo Administración Francesa, T/1069;

Informe especial de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en Fideicomiso del Africa Occidental, 1952, Observaciones del Gobierno del Reino Unido en su calidad de Autoridad Administradora del Togo bajo Administración Británica, T/1039.

2. Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del Africa Oriental, 1954

Durante su 13º y 14º período de sesiones, el Consejo adoptó las medidas necesarias para enviar en 1954, una Misión Visitadora a los territorios en fideicomiso del Africa oriental.

En su 511a. sesión, el Consejo decidió que la Misión estuviera integrada por personas designadas por El Salvador, Estados Unidos de América, y Nueva Zelandia. En sus sesiones 524a. y 537a., el Consejo aceptó las candidaturas de los Sres. R. Eguizábal (El Salvador), Mason Sears (Estados Unidos), R. Jaipal (India) y John Stanhope Reid (Nueva Zelandia) como miembros de la Misión Visitadora. En la última sesión mencionada, el Sr. Reid fué elegido Presidente de la Misión.

En su 524a. sesión, el Consejo decidió que la Misión Visitadora partiera el 20 de julio de 1954 para los territorios en fideicomiso; que fuera a Ruanda Urundi, Tanganyika y Somalia bajo administración italiana en el orden mencionado, a menos que no fuera conveniente para las autoridades de Bélgica, en cuyo caso la Misión iría a Tanganyika antes que a Ruanda Urundi; y que la visita de la Misión durara tres meses.

En su 548a. sesión, el Consejo aprobó una resolución²⁵⁴ en que definía las atribuciones y el cometido de la Misión Visitadora. El Consejo ordenaba a la Misión Visitadora que investigara e informara con la mayor minuciosidad posible las medidas adoptadas en los tres territorios en fideicomiso para cumplir los objetivos enunciados en el inciso b del Artículo 76 de la Carta, teniendo en cuenta los términos de la resolución 321 (IV) del 15 de noviembre de 1949, de la Asamblea General; indicaba a la Misión Visitadora que prestara atención, ateniéndose a los debates del Consejo de Administración Fiduciaria y de la Asamblea General y a las resoluciones aprobadas por estos órganos, a las cuestiones planteadas en relación con los informes anuales sobre la administración de los tres territorios en fideicomiso, en las peticiones recibidas por el Consejo relativas a estos territorios en fideicomiso, en los informes de las Misiones Visitadoras periódicas que con anterioridad habían pasado por los territorios en fideicomiso del Africa oriental y a las observaciones de las Autoridades Administradoras sobre estos informes; ordenaba a la Misión Visitadora que recibiera peticiones, sin perjuicio de actuar en conformidad con el reglamento, e investigara sobre el terreno, después de consultar con el representante local de la Autoridad Administradora correspondiente, las peticiones recibidas que, a su juicio, merecieran investigación especial; indicaba a la Misión que examinara en consulta con las Autoridades Administradoras, las medidas adop-

²⁵⁴ Resolución 999 (XIV).

tadas y por adoptar, respecto al suministro de información sobre las Naciones Unidas a los pueblos de los territorios en fideicomiso, en virtud de la resolución 36 (III) del 8 de julio de 1948 del Consejo, de la resolución 754 (VIII) del 9 de diciembre de 1953 de la Asamblea; y a poner en práctica las obligaciones enumeradas en la reso-

lución 311 (VIII) del 7 de febrero de 1951 del Consejo sobre la misma cuestión; y pedía a la Misión que transmitiera al Consejo tan pronto fuera practicable, un informe sobre cada uno de los territorios en fideicomiso visitados, con sus observaciones y los comentarios, conclusiones y recomendaciones que deseara formular.

Capítulo V

CUESTIONES REMITIDAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA POR LA ASAMBLEA GENERAL

1. Uniones administrativas concernientes a los territorios en fideicomiso

En su 484a. sesión, el Consejo eligió a China, Estados Unidos de América, Haití y Nueva Zelandia como miembros del Comité Permanente de Uniones Administrativas:

El Comité Permanente presentó informes sobre las condiciones y consecuencias de las uniones administrativas en Tanganyika,²⁵⁵ Ruanda Urundi²⁵⁶ y Nueva Guinea²⁵⁷ los cuales fueron examinados por el Consejo en sus sesiones 524a., 525a., y 560a. respectivamente. El Consejo decidió que las observaciones y conclusiones contenidas en los informes debían figurar como conclusiones del Consejo en las secciones sobre uniones administrativas de los capítulos I, II y IX, referentes a las condiciones en Tanganyika, Ruanda Urundi y Nueva Guinea, de la parte II del presente informe.

El Comité Permanente también presentó informes sobre las uniones administrativas concernientes al Togo bajo Administración Británica²⁵⁸ y al Camerún bajo Administración Británica.²⁵⁹ Respecto a la unión administrativa del Togo bajo Administración Británica, el Comité Permanente, después de tomar nota del memorándum intitulado "El futuro del Togo bajo administración fiduciaria del Reino Unido"²⁶⁰ transmitido el 21 de junio de 1954 al Secretario General por el Representante Permanente del Reino Unido, fué de la opinión de que, en vista de que el futuro del Territorio en fideicomiso sería probablemente un tema del programa del noveno período de sesiones de la Asamblea General, debía aplazar el examen de esta cuestión hasta que el Consejo de Administración Fiduciaria le pidiera especialmente que la examinara de nuevo. En relación con la unión administrativa del Camerún bajo Administración Británica, el Comité Permanente, observando que algunos de los problemas constitucionales de este territorio en fideicomiso eran similares a los del Togo bajo Administración Británica y que las nuevas disposiciones constitucionales referentes a este Territorio en fideicomiso habían estado en vigor sólo durante un breve período, decidió aplazar el examen de la cuestión hasta el 15º período de sesiones del Consejo, esperando disponer entonces de información más completa.

En sus sesiones 558a. y 559a. respectivamente, el Consejo tomó nota de estos informes.

En los períodos 13º y 14º de sesiones del Consejo, el representante de la URSS presentó cinco proyectos de resolución sobre las uniones administrativas concernientes a los territorios en fideicomiso. En uno de ellos,²⁶¹

se proponía que el Consejo recomendara a las Autoridades Administradoras de Tanganyika, Nueva Guinea, Ruanda Urundi, el Togo y el Camerún bajo Administración Británica y el Togo y el Camerún bajo Administración Francesa, que establecieran en los mencionados territorios en fideicomiso, órganos legislativos y administrativos, independientes de otros órganos establecidos con el propósito de la unión de territorios en fideicomiso y colonias; y que, con ese fin, aprobaran medidas de carácter legislativo y de otro orden para asegurar la participación de los habitantes autóctonos en las funciones de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de los territorios en fideicomiso. En los otros cuatro²⁶² se proponía la misma recomendación en los casos concretos de Tanganyika, Ruanda Urundi, el Camerún bajo Administración Británica y Nueva Guinea.

En sus sesiones 524a., 525a., 559a., y 560a., el Consejo examinó estos proyectos de resolución y los rechazó.

2. Desarrollo económico rural en los territorios en fideicomiso

En su resolución 438 (V) del 2 de diciembre de 1950, la Asamblea General recomendaba al Consejo de Administración Fiduciaria que se sirviera estudiar la política aplicada, la legislación existente y las prácticas seguidas en los territorios en fideicomiso en lo concerniente a las tierras, su utilización y enajenación, teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras de la población autóctona desde el punto de vista de los objetivos básicos del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria, establecidos en el Artículo 76 de la Carta, y las necesidades económicas futuras de dichos territorios, así como las consecuencias sociales y económicas de la enajenación de tierras a favor de habitantes no autóctonos. Por su resolución 305 (VIII), del 2 de febrero de 1951, el Consejo estableció un Comité de Desarrollo Económico Rural encargado de efectuar dicho estudio. En su resolución 561 (VI) del 18 de enero de 1952, la Asamblea General recomendó que el Consejo considerara la posibilidad de invitar a los organismos especializados competentes, en especial a la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y a la Organización Internacional del Trabajo, así como a los expertos que fueren necesarios, para que le asesorasen en su estudio. Por su resolución 421 (X) del 28 de febrero de 1952, el Consejo de Administración Fiduciaria autorizó al Comité de Desarrollo Económico Rural de los Territorios en Fideicomiso a que invitara a los organismos especializados y a otros expertos a contribuir a su estudio o a participar en él.

En sus períodos de sesiones 9º, 11º y 12º respectivamente, el Comité tomó nota de tres informes sobre los progresos realizados.

²⁵⁵ T/L.460, L.461, L.508, L.509.

²⁵⁶ T/L.488.

²⁵⁷ T/L.438 y Corr.1.

²⁵⁸ T/L.485.

²⁵⁹ T/L.486.

²⁶⁰ T/L.487.

²⁶¹ T/1130-A/2660.

²⁶² T/L.453.

El Comité presentó al Consejo en su 14° período de sesiones un cuarto informe²⁶³ sobre los progresos realizados. El Comité manifestaba que no se habían concluido los estudios especiales sobre tierras que, según había comunicado anteriormente, se habían iniciado en varios territorios en fideicomiso. El Comité opinaba que estos estudios serían de importancia fundamental para la preparación de un análisis más concluyente de los problemas agrarios en los territorios en fideicomiso. Por lo tanto, consideraba esencial para el cumplimiento satisfactorio de sus tareas, aplazar la redacción de su informe hasta un ulterior período de sesiones del Consejo.

En su 558a. sesión, el Consejo tomó nota de este informe.

3. El problema de la unificación del Togo

En conformidad con la resolución 750 (VIII) del 8 de diciembre de 1953, el problema de la unificación del Togo es objeto de un informe especial²⁶⁴ a la Asamblea General.

4. Participación de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria

En su 12° período de sesiones, el Consejo, después de considerar la resolución 653 (VII) de la Asamblea General, del 21 de diciembre de 1953, relativa a la participación de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en el gobierno de dichos territorios y en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria, aprobó una resolución²⁶⁵ en la cual advierte que el Consejo examina regularmente la cuestión de la participación de los habitantes indígenas en el gobierno de los territorios, al estudiar los informes anuales sobre cada territorio, los informes de las Misiones Visitadoras y las peticiones relativas al progreso político de los territorios. En relación con la cuestión de participación de los habitantes indígenas en los trabajos del Consejo, decidió establecer un comité compuesto de los representantes de El Salvador, Estados Unidos de América, Reino Unido y Siria, para que examinara la cuestión teniendo en cuenta la resolución 653 (VII) de la Asamblea General. Dió instrucciones al comité para que presentara un informe al Consejo en su 13° período de sesiones.

En consecuencia, el Comité presentó un informe²⁶⁶ al 13° período de sesiones del Consejo, en el cual declaró que había estudiado la cuestión teniendo en cuenta las resoluciones del Consejo, pero que no podía llegar a un acuerdo con respecto a ninguna recomendación.

El Consejo examinó el informe del Comité en sus sesiones 522a., 523a. y 524a. En la 522a. sesión, el representante de Siria presentó un proyecto de resolución,²⁶⁷ en el cual, 1) con el fin de utilizar a las Misiones Visitadoras para ampliar la participación de los habitantes indígenas en los trabajos del Consejo, se proponía que éste diera instrucciones a cada una de las Misiones Visitadoras en el sentido de que *a)* además de tener en cuenta las expresiones de la opinión pública que le hicieran llegar espontáneamente todos los sectores de la población, tomara la iniciativa y tratara de sondear la opinión pública sobre todos los problemas importantes y cele-

brara consultas populares en las formas que juzgara apropiadas; *b)* informara completamente sobre el desarrollo de la libre expresión de los deseos de los pueblos y sobre las principales tendencias de opinión y formulara recomendaciones relativas al más amplio desarrollo de la libre opinión pública; 2) con el fin de utilizar el derecho de petición para ampliar la participación de los habitantes indígenas en los trabajos del Consejo, se proponía que éste, *a)* al hacer su estudio de las condiciones reinantes en cada uno de los territorios en fideicomiso, examinara todas las peticiones que pudieran ser reflejo de la opinión pública en cuestiones de interés general para el desarrollo del territorio y adoptara medidas concretas al respecto; *b)* pidiera a las Autoridades Administradoras que proporcionaran sin demora copias de sus informes anuales a todos los órganos de opinión pública existentes en el territorio interesado, que alentaran a estos órganos a examinar los informes y les comunicaran que su derecho de petición incluía el de hacer conocer sus opiniones a las Naciones Unidas y pedir el examen de esas opiniones por el Consejo de Administración Fiduciaria; *c)* diera instrucciones a cada una de las Misiones Visitadoras en el sentido de que fomentara en los territorios en fideicomiso la discusión pública de los informes anuales y la expresión de opiniones sobre ellos y de que informara sobre los medios que se hubieran puesto a disposición de la población a este efecto; y, 3) con el fin de asegurarse, en casos de urgencia, de que una determinada situación en un territorio en fideicomiso se conformaba a los deseos libremente expresados de la población se proponía que el Consejo se declarara dispuesto a entrar en comunicación con representantes apropiados de la opinión pública y a pedirles que expusieran sus opiniones sobre el problema por carta o telegráficamente, o a invitar a tales representantes a comparecer en persona ante él.

En la 523a. sesión, el representante de Haití propuso las siguientes enmiendas al proyecto de resolución: 1) en el inciso *a)* del párrafo 2, reemplazar las palabras "adoptar medidas concretas", por las palabras "formular recomendaciones"; 2) en el inciso *b)* del párrafo 2, suprimir el resto del inciso después de las palabras "examinar los informes"; 3) en el inciso *c)* del párrafo 2, agregar al final de las palabras "y comunicar a los habitantes que su derecho de petición incluye el de hacer conocer sus opiniones a las Naciones Unidas y pedir el examen de esas opiniones por el Consejo de Administración Fiduciaria"; y 4) en el párrafo 3, suprimir el final del párrafo a partir de las palabras "se declara dispuesto" y sustituirlo por las siguientes "concederá inmediatamente audiencia a todos los representantes apropiados de la opinión pública cuando éstos lo soliciten, o si éstos no pudieran viajar, examinará todas las comunicaciones, cartas o telegramas en que expongan sus puntos de vista". El autor del proyecto aceptó estas enmiendas.

En su 524a. sesión, el Consejo procedió a votar sobre el proyecto de resolución así enmendado. Por haber empate en dos votaciones sucesivas, el proyecto de resolución se consideró desechado en conformidad con el artículo 38 del reglamento del Consejo.

5. Divulgación en los territorios en fideicomiso, de información acerca de las Naciones Unidas y del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria

Por resolución 754 (VIII) del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General expresó la opinión de que los arreglos existentes para la divulgación de informa-

²⁶³ T/1132.

²⁶⁴ A/2669.

²⁶⁵ Resolución 647 (XII).

²⁶⁶ T/L.447.

²⁶⁷ T/L.458.

ción referente a las Naciones Unidas en los territorios en fideicomiso eran, en general, inadecuados y de limitada efectividad; invitó a las Autoridades Administradoras a suministrar al Secretario General, de acuerdo con la resolución 36 (III) del Consejo de Administración Fiduciaria, las sugerencias relativas a la manera de hacer llegar al público en general de los territorios en fideicomiso (prensa, radio, organizaciones no oficiales, sindicatos, bibliotecas, instituciones culturales, religiosas y educativas, maestros, misioneros, etc.) información sobre las Naciones Unidas y el Régimen de Administración Fiduciaria; pidió al Secretario General que, teniendo en cuenta las sugerencias que suministraran las Autoridades Administradoras, su propio conocimiento de los canales apropiados para la información o cualquiera de estas dos fuentes, se sirviera iniciar en la fecha más próxima posible el envío directo de material informativo destinado al público en general de los territorios en fideicomiso; y que se sirviera incluir en sus informes periódicos sobre la materia dirigidos al Consejo, una lista de las vías o canales de divulgación que se hubieran establecido en conformidad con esta resolución.

El Secretario General presentó al Consejo en su 13º período de sesiones un informe preliminar²⁶⁸ sobre la aplicación de la resolución 754 (VIII) de la Asamblea. El Secretario General participaba que había pedido a las Autoridades Administradoras le comunicaran sus sugerencias respecto a la manera en que podría aplicarse más favorablemente esta resolución. Las respuestas recibidas le habían permitido realizar consultas con los representantes especiales de las Autoridades Administradoras que habían asistido al 13º período de sesiones del Consejo, con el fin de elaborar medidas prácticas para suministrar información a los territorios en fideicomiso. El Secretario General tenía la intención de continuar estas consultas durante el 14º período de sesiones del Consejo en que estarían presentes los representantes especiales de los Territorios en Fideicomiso del Pacífico.

En su 517a. sesión, el Consejo tomó nota de este informe provisional.

En el 14º período de sesiones del Consejo, el Secretario General sometió un nuevo informe²⁶⁹ en el que figuraba una relación de los progresos realizados en la ampliación de los medios de información ya existentes, y de los resultados logrados en la labor de difusión de información al público en general en los territorios en fideicomiso, conforme a las disposiciones de la resolución 754 (VIII). Manifestaba que, en el período a que se refería el informe, la cooperación entre la Secretaría de las Naciones Unidas y las Autoridades Administradoras había sido fructífera en general, y en muchos casos había contribuido extraordinariamente a promover los objetivos señalados en las resoluciones de la Asamblea y del Consejo. El Secretario General tenía la esperanza de que la continua colaboración entre los representantes de las Autoridades Administradoras y los servicios competentes de la Secretaría daría como resultado la adopción de medidas satisfactorias para el suministro de información adecuada en los territorios en fideicomiso, sobre las actividades de las Naciones Unidas y el funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria.

En su 550a. sesión, el Consejo tomó nota de este informe.

6. Adelanto educativo en los territorios en fideicomiso: facilidades de estudio y de formación profesional ofrecidas por Estados Miembros

Por resolución 753 (VIII) del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General tomó nota de los resultados²⁷⁰ obtenidos hasta esa fecha en el programa de becas, becas para ampliación de estudios y becas de internado ofrecidas por los Estados Miembros a los estudiantes procedentes de los territorios en fideicomiso, de conformidad con su resolución 557 (VI), y decidió, entre otras cosas, pedir al Consejo de Administración Fiduciaria se sirviera modificar como fuera necesario su procedimiento de distribución de las becas de estudio y de ampliación de estudios ofrecidas por Estados Miembros a los habitantes de los territorios en fideicomiso, para que las solicitudes pudieran presentarse por conducto del Secretario General o por conducto de las autoridades de los territorios, quedando entendido que el Secretario General cuando recibiera esas solicitudes las transmitiría simultáneamente a las Autoridades Administradoras interesadas y a los Estados que hubieran hecho los ofrecimientos correspondientes. También en la misma resolución, la Asamblea pedía al Secretario General que se sirviera hacer figurar en el material informativo de las Naciones Unidas que se prepara para ser distribuido en los territorios en fideicomiso, detalles concernientes a dichos ofrecimientos y al procedimiento que se debería seguir para presentar solicitudes.

El Consejo examinó la resolución en su 13º período de sesiones conjuntamente con el informe del Secretario General²⁷¹ que contenía sugerencias para la modificación del procedimiento de administración del programa de las Naciones Unidas, relativo a facilidades de estudio y de formación profesional para los estudiantes de los territorios en fideicomiso, en cumplimiento de las resoluciones 557 (VI) y 753 (VIII) de la Asamblea General.

En su 517a. sesión, el Consejo aprobó el procedimiento revisado expuesto en el informe del Secretario General.

Según este procedimiento revisado, el Estado Miembro que ofrezca facilidades de estudio y formación profesional a estudiantes de territorios en fideicomiso, presentará detalles concretos de su oferta al Secretario General para que éste los transmita a las Autoridades Administradoras, y los estudiantes podrán solicitar tales facilidades por conducto de la Autoridad Administradora respectiva o del Secretario General. Si la solicitud se hace por conducto de la Autoridad Administradora, ésta proporcionará al Secretario General toda la información pertinente sobre las condiciones del estudiante e indicará si se podrá disponer de ayuda financiera suplementaria. El Secretario General transmitirá la solicitud al Estado Miembro que ofrezca las facilidades. Si un estudiante se dirige directamente al Secretario General, éste someterá la solicitud simultáneamente al Estado Miembro y a la Autoridad Administradora interesados.

El Estado Miembro interesado elegirá entre las candidaturas presentadas, tomará las medidas necesarias y notificará al Secretario General.

El Secretario General incluirá el material informativo de las Naciones Unidas preparado para divulgación en los territorios en fideicomiso, detalles de todas las ofertas recibidas y del procedimiento para solicitarlas y transmitirá los mismos detalles a la organización de las Nacio-

²⁶⁸ T/1100

²⁶⁹ T/1121

²⁷⁰ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período de sesiones, Suplemento No. 4*, documento A/2427, páginas 38 a 39.

²⁷¹ T/1093.

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a fin de que los incluya en su folleto titulado *Study Abroad*.

En el 14° período de sesiones del Consejo, el Secretario General presentó el informe²⁷² sobre la marcha del programa de becas, de becas para ampliación de estudios y de becas de internado, durante el período del 1° de julio de 1953 al 8 de junio de 1954.

Hasta esta última fecha, se habían recibido 38 ofertas concretas de los siguientes Gobiernos: Yugoslavia (5 becas de estudio y 5 becas para ampliación de estudios); India (4 becas de estudio); Estados Unidos de América (5 becas de estudio); Filipinas (11 becas); Turquía (2 becas de estudio); Indonesia (6 becas para ampliación de estudio). Todas las becas de estudio, de ampliación de estudios y de internado ofrecidas eran para seguir estudios en instituciones de enseñanza superior, salvo en el caso del Gobierno de la India que había decidido aceptar candidatos de los territorios en fideicomiso para estudios de enseñanza postprimaria, si no se presentaban estudiantes preparados para estudios universitarios.

Con respecto a la concesión de estas becas de distintas clases, el Secretario General fué informado de que el Gobierno de los Estados Unidos había renovado dos becas de estudio, para el año académico 1954-1955, que serían concedidas a estudiantes de los territorios en fideicomiso que estuvieran estudiando en los Estados Unidos. El Gobierno de Indonesia había concedido a un estudiante del Togo bajo Administración Británica, una beca de estudios de especialización en la London School of Economics and Political Sciences, y el Gobierno de la India había elegido provisionalmente a un estudiante del Camerún bajo Administración Británica para el año académico 1954-1955.

En cuanto a las solicitudes para obtener estas becas, el Secretario General había recibido por conducto del Gobierno del Reino Unido, una solicitud procedente del Togo bajo Administración Británica en relación con una de las becas de estudio ofrecida por el Gobierno de Indonesia. Además, desde la adopción del citado procedimiento revisado para la administración del programa, el Secretario General había recibido 34 solicitudes directas de habitantes de los territorios en fideicomiso. Treinta y una procedían del Camerún bajo Administración Francesa, una del Togo bajo Administración Británica y dos de Somalia bajo Administración Italiana.

El Secretario General informó al Consejo de que, en cumplimiento de la petición contenida en la resolución 753 (VIII) de la Asamblea General, estaba adoptando medidas para hacer figurar en el material informativo de las Naciones Unidas que se distribuiría en los territorios en fideicomiso, detalles concernientes a dichos ofrecimientos y al procedimiento que se habría de seguir para presentar solicitudes. Esta información ha sido además incluida en los volúmenes V y VI del manual de la UNESCO *Study Abroad*.

En su 550a. sesión, el Consejo tomó nota del informe del Secretario General.

7. Informe del Consejo de Administración Fiduciaria

Por resolución 756 (VIII) del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General tomó nota del informe del Consejo de Administración Fiduciaria correspondiente al período comprendido entre el 4 de diciembre de 1952 y el 21 de julio de 1953, y recomendó al Consejo que, en sus deli-

²⁷² T/1127.

beraciones futuras, tuviera en cuenta las observaciones y sugerencias formuladas al examinarse el informe del Consejo en el octavo período de sesiones de la Asamblea General.

En su 517a. sesión, el Consejo tomó nota de esta resolución.

8. Audiencia de peticionarios del Territorio en fideicomiso del Camerún bajo Administración Francesa

En el séptimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión concedió audiencias orales a partidos políticos y organizaciones del Camerún bajo Administración Francesa y escuchó las declaraciones de los representantes de dos organizaciones. Además, la Comisión había recibido una comunicación escrita de una tercera organización.

Por resolución 655 (VII) del 21 de diciembre de 1952, la Asamblea General tomó nota de las declaraciones y decidió transmitir al Consejo de Administración Fiduciaria, junto con las observaciones hechas por los miembros de la Cuarta Comisión, pidiendo al Consejo que procediera a una nueva investigación sobre estas cuestiones, especialmente con respecto a la aplicación de la recomendaciones ya formuladas acerca de ellas, y que el Consejo diera cuenta de la misma en un informe a la Asamblea General en su octavo período de sesiones.

En su 480a. sesión, celebrada el 14 de julio de 1953, el Consejo decidió aplazar el examen de la resolución hasta su 13° período de sesiones en el que examinaría el informe anual de la Autoridad Administradora sobre el Camerún bajo Administración Francesa y el informe de la Misión Visitadora al Territorio.

Sin embargo, en el octavo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión concedió dos audiencias orales a dos peticionarios del Camerún. Por resolución 758 (VIII) del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea ratificó la resolución 655 (VII) y recomendó que el Consejo diera atención preferente a esta cuestión en su próximo período ordinario de sesiones. Al propio tiempo, la Asamblea recomendaba al Consejo que, al examinar esta cuestión, tomara en consideración también las declaraciones de los peticionarios y las observaciones hechas por los miembros de la Cuarta Comisión en el octavo período de sesiones de la Asamblea, y que incluyera un estudio especial sobre esta cuestión en su informe a la Asamblea para su consideración en el noveno período de sesiones.

Esta cuestión figuraba en el programa del 13° período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria y, en su 488a. sesión, el Consejo decidió examinarla junto con el informe anual sobre el Camerún bajo Administración Francesa y con el informe de la Misión Visitadora a los Territorios en Fideicomiso del África Occidental. El Consejo examinó estos informes durante sus sesiones 488a. a 496a.

Las principales cuestiones planteadas por los peticionarios fueron:

- a) Unificación de los dos Territorios del Camerún;
- b) Consecución del gobierno propio o independencia;
- c) Asociación del Camerún con la Unión Francesa;
- d) Asamblea Territorial;
- e) Poder Ejecutivo;
- f) Consejos locales;
- g) Sistema electoral;
- h) Jefaturas tradicionales;
- i) Desarrollo económico: Asistencia Técnica de las Naciones Unidas;

- j) Participación europea en la economía;
- k) Participación de los autóctonos en la economía;
- l) Discriminación racial.

En el curso del debate sobre las condiciones en el Territorio en fideicomiso, los miembros del Consejo dirigieron preguntas al representante y al representante especial de la Autoridad Administradora, con el propósito de obtener información suplementaria sobre las cuestiones que se examinaban. Durante el debate general, algunos miembros formularon observaciones y conclusiones respecto a las condiciones reinantes en el Territorio y se refirieron particularmente a las cuestiones principales planteadas por los peticionarios.

El Consejo tomó nota de que las cuestiones planteadas por los peticionarios a la Cuarta Comisión durante el séptimo y el octavo períodos de sesiones de la Asamblea General estaban relacionadas con asuntos que el Consejo había examinado al discutir el informe anual de la Autoridad Administradora sobre la administración del Territorio en fideicomiso y el informe de la Misión Visitadora al África Occidental. También el Consejo advirtió que al aprobar sus conclusiones y recomendaciones, había tenido en cuenta las declaraciones de los peticionarios y las observaciones de los miembros de la Cuarta Comisión en el octavo período de sesiones de la Asamblea General.

Las conclusiones y recomendaciones del Consejo sobre la cuestión, que fué objeto de las resoluciones 655 (VII) y 758 (VIII) de la Asamblea General figuran en el capítulo V de la parte II de este informe bajo los títulos correspondientes:

- a) Problema de las fronteras: cuestión de la unificación;
- b) Asociación del Camerún con la Unión Francesa;
- c) Ejercicio de los derechos políticos;
- d) Administración territorial y Asamblea Territorial;
- e) Administración regional y municipalidades rurales mixtas;
- f) Jefaturas tradicionales;
- g) Progreso económico general.²⁷³

9. Consecución por los territorios en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la independencia

Por resolución 752 (VIII) del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General, recordando su resolución 558 (VII) por la cual invitaba a la Autoridad Administradora de cada uno de los territorios en fideicomiso, excepto del Territorio de Somalia bajo Administración Italiana, a que incluyese en todos los informes anuales, datos relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyectase adoptar para la consecución del objetivo del gobierno propio o la independencia y, entre otros datos, el cálculo aproximado del tiempo necesario para ejecutar tales medidas y para lograr el objetivo final; pedía al Consejo de Administración Fiduciaria se sirviera incluir en su próximo y sucesivos informes a la Asamblea General una sección separada que tratara del cumplimiento de la resolución 558 (VI) y de la presente resolución, especificando de modo particular las medidas que se hubieran adoptado en lo concerniente a:

- a) Consultas con los habitantes de cada territorio en fideicomiso relativas a las medidas ya adoptadas o que se proyectara adoptar para la consecución del gobierno propio;

b) La creación en cada territorio en fideicomiso de órganos representativos, ejecutivos y legislativos, y el alcance de sus facultades;

c) El establecimiento en cada territorio en fideicomiso del sufragio universal para los adultos y de elecciones directas;

d) La preparación y el nombramiento de aborígenes de cada territorio en fideicomiso para desempeñar puestos de responsabilidad en la administración;

e) La creación de rentas públicas adecuadas; especificando en cada caso sus conclusiones y recomendaciones, habida cuenta de la resolución 558 (VI) y de la presente resolución.

El Consejo examinó esta resolución en sus sesiones 518a. y 519a. y en esta última aprobó una resolución²⁷⁴ en la cual pedía al Secretario General que preparara para la primera reunión de su 14° período de sesiones, un proyecto de informe provisional ateniéndose al párrafo 3 de la resolución 752 (VIII) de la Asamblea General, sobre todos los territorios en fideicomiso, excepto Somalia bajo Administración Italiana, y además pedía al Secretario General que, al preparar el mencionado proyecto de informe provisional y con el propósito de que el informe se conformara a las intenciones y propósitos de la resolución 752 (VIII) de la Asamblea General, tuviera en cuenta y utilizara como fuera conveniente y necesario, a) todo el material relacionado con los temas mencionados en la resolución, ya sometido al Consejo que estuviera en sus archivos; b) información pertinente de que dispusiera, procedente de publicaciones oficiales de las Autoridades Administradoras, los organismos especializados de las Naciones Unidas u otras fuentes apropiadas de las Naciones Unidas; c) aclaraciones pertinentes, explicaciones, información o material suplementarios que pudiera haber recibido o recibir en lo sucesivo, de las Autoridades Administradoras, y que preparara el mencionado informe preliminar de manera que permitiera la inclusión del nuevo material en etapas subsiguientes, especialmente sobre los territorios en fideicomiso cuyos informes fuera a examinar el Consejo en su 14° período de sesiones. En consecuencia, el Secretario General presentó al Consejo en su 14° período de sesiones un proyecto de informe²⁷⁵ como se solicitaba en su resolución.

En sus sesiones 527a., 528a., 556a. y 559a., el Consejo examinó el proyecto de informe y en la última de estas sesiones aprobó el proyecto de informe con enmiendas. Al propio tiempo, decidió aplazar la formulación de sus conclusiones y recomendaciones respecto a la aplicación de las resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII) de la Asamblea General, hasta su 15° período de sesiones, e incluir estas conclusiones y recomendaciones en sus subsiguientes informes a la Asamblea General. El informe, tal como quedó finalmente adoptado, forma la parte III del presente documento.

10. Peticiones de la comunidad Ngoa-Ekéle, del Camerún bajo Administración Francesa, concernientes a la solución de su reclamación sobre las tierras que habitaba

La Asamblea General escuchó en su octavo período de sesiones la demanda²⁷⁶ del Sr. Joseph Ndzinga, representante de la colectividad Ngoa-Ekéle y las observaciones de la Autoridad Administradora al respecto, y por resolución 757 (VIII) del 9 de diciembre de 1953

²⁷³ Véase el documento T/L.430 que contiene el informe del Comité de Redacción sobre el Camerún bajo Administración Francesa relativo a esta cuestión.

²⁷⁴ Resolución 866 (XIII).

²⁷⁵ T/L.464, Corr.1 y Add.1.

²⁷⁶ A/C.4/255.

formuló diversas recomendaciones a la Autoridad Administradora para aliviar las dificultades experimentadas por los peticionarios. Además invitó al Consejo de Administración Fiduciaria a examinar la cuestión y a incluir los resultados de su examen en su próximo informe a la Asamblea.

El Consejo examinó esta cuestión en su 556a. sesión. El representante de Francia informó al Consejo de que el problema en su totalidad había sido reexaminado en una sesión conjunta de las autoridades interesadas y los representantes de la comunidad Ngoa-Ekélé, incluso el peticionario. Ulteriormente, la Administración había procedido a dar efecto a la recomendación de la Asamblea con el fin de que la comunidad se valiera de los recursos legales adecuados en relación con los terrenos en que sus miembros estaban asentados originalmente y otras compensaciones posibles. Como resultado, quedó claramente establecido que la expropiación realizada en 1940 fué legal y que la comunidad Ngoa-Ekélé había recibido una compensación justa por los terrenos. En cumplimiento de la resolución de la Asamblea, la Administración estaba actualmente en negociaciones con los representantes de la comunidad para delimitar 30 hectáreas de terreno a las cuales la colectividad Ngoa-Ekélé tendría derecho indiscutible. El Consejo tomó nota de esta declaración.

11. Control y limitación de la documentación

Por resolución 789 (VIII) del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General invitaba a todos los órganos de las Naciones Unidas a examinar la documentación que utilizaban, y a que redujeran los documentos en la medida de lo posible. Además les invitaba a cooperar con el Secretario General en sus esfuerzos por reducir el volumen de la documentación de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, mejorar su calidad.

El Secretario General presentó al Consejo en su 14º período de sesiones un informe²⁷⁷ en el que proponía ciertas medidas en favor de la economía y la eficiencia, sin perjuicio de que el Consejo y la Asamblea cumplieran el cometido que les incumbía en el funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria.

El Consejo examinó el informe en sus sesiones 527a. y 528a. y decidió en esta última remitirlo a un comité integrado por Bélgica, Estados Unidos de América, India y Siria.

En sus sesiones 547a. y 548a., el Consejo examinó el informe del Comité²⁷⁸. En esta última sesión aprobó, por recomendación del Comité, el procedimiento descrito a continuación.

En relación con el examen de informes anuales sobre la administración de territorios en fideicomiso, el Consejo aceptó la opinión del Secretario General al efecto de que era aconsejable que no hubiera una separación muy brusca entre el período de formulación de preguntas y la celebración de debates generales sobre las condiciones en los territorios, y que se permitiera a los representantes, que lo desearan, formular comentarios sobre un tema determinado durante el período de formulación de preguntas. El Consejo aprobó la propuesta del Secretario General al efecto de que se facilitaría la función de los comités de redacción para preparar proyectos de conclusiones y de recomendaciones del Consejo, si las delegaciones presentaran propuestas oficiales al Consejo. El Consejo interpretó esta propuesta en el

sentido de que las delegaciones deberían someter estas propuestas al Consejo, en forma de proyectos de conclusiones, o recomendaciones, en sus declaraciones en los debates generales, o separadamente por escrito si lo deseaban. El Consejo aprobó además la propuesta del Secretario General de que la Secretaría redactara, de manera más concisa, la indicación de las opiniones expresadas individualmente, y cuando fuera posible, presentando los mismos puntos de vista en un solo lugar, siempre que esta concisión pudiera lograrse sin excluir ninguna de las ideas expuestas.

Respecto a la forma de su informe a la Asamblea, el Consejo aceptó la propuesta del Secretario General al efecto de que se pidiera la aprobación de la Asamblea para que el Consejo presentara un amplio informe sobre un determinado territorio en fideicomiso cada tres años, coincidiendo con el período en que el Consejo examinara el informe sobre el Territorio preparado por la Misión Visitadora; y que el Consejo presentara un informe más breve en los años intermedios, limitándose simplemente a los acontecimientos y progresos observados durante el año de que se tratara, aunque incluyendo el material documental que permitiera a la Asamblea apreciar el significado de los acontecimientos importantes y las conclusiones y recomendaciones del Consejo. El Consejo recomendó que la Asamblea aprobara estas propuestas en su noveno período ordinario de sesiones. El Consejo decidió además que su informe al Consejo de Seguridad sobre el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, se modificara del mismo modo que su informe a la Asamblea General sobre determinados territorios.

En relación con las fechas de presentación de los informes anuales, el Consejo hizo notar que el retraso considerable ocurrido recientemente, había creado, en muchos casos, graves dificultades para los miembros del Consejo, de la Secretaría y de los organismos especializados, en el desempeño de sus respectivas responsabilidades. Estima que esta cuestión merecía la atención cuidadosa de las Autoridades Administradoras y la aplicación estricta del artículo 72 del reglamento del Consejo.

12. Revisión del Cuestionario sobre territorios en fideicomiso

Por resolución (VIII) del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General encargó a un comité compuesto por representantes de El Salvador, Haití, India y Siria, que examinara el Cuestionario preparado por el Consejo de Administración Fiduciaria, estudiara las modificaciones que sería necesario introducir para adaptarlo a las condiciones especiales de cada territorio en fideicomiso, y presentara sus conclusiones al Consejo de Administración Fiduciaria. Además invitaba al Consejo a emprender, basándose en los trabajos del Comité, la preparación de cuestionarios separados adaptados a cada territorio en fideicomiso.

El Comité presentó al Consejo en su 14º período de sesiones un informe provisional²⁷⁹ en el cual declaraba que estaba dedicado a preparar un cuestionario adaptado a las condiciones especiales existentes en Somalia bajo Administración Italiana y que esperaba terminar el proyecto de cuestionario y presentarlo en el 15º período de sesiones. El Comité declaró además que al mismo tiempo, informaría al Consejo sobre la marcha de sus trabajos respecto a los otros territorios en fideicomiso.

En su 550a. sesión, el Consejo tomó nota de este informe.

²⁷⁹ T/1128.

²⁷⁷ T/1120.
²⁷⁸ T/L.477.

Parte II

CONDICIONES GENERALES EN LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

Capítulo I

TANGANYIKA

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

Tanganyika es con mucho el más extenso de los territorios en fideicomiso. Aproximadamente 500 millas de la costa de Africa oriental situada al sur del Ecuador forman sus límites orientales y comparte sus demás fronteras con seis territorios dependientes — Kenia, Uganda, Congo Belga, Rhodesia del Norte, Nyasalandia y Africa Oriental Portuguesa — y con el territorio en fideicomiso de Ruanda Urundi. Cerca de 8.000.000 de personas habitan las 362.688 millas cuadradas del Territorio, cuya superficie está formada principalmente por llanuras y mesetas.

Conforme a cálculos hechos en 1952, la población africana se estimó en unos 7.850.000 habitantes, en comparación con la cifra aproximada de 7.400.000 que arrojó el censo de 1948. Dichos habitantes pertenecen a muchas tribus, pero de las cuales siete comprenden la tercera parte de la población total y conocen bastante bien el swahili, que es el idioma de Africa oriental empleado en el comercio y el dialecto básico uniforme usado en la enseñanza y la literatura en general. La mayor parte de los africanos viven conforme a las antiguas normas de sociedad y autoridad de sus tribus, y se dedican a las actividades tradicionales de una economía de subsistencia.

La población europea, mucho más reducida, aumentó de 11.300 habitantes en 1948 a 18.300 en 1952. De esta cifra, 2.747 eran empleados de la administración pública. De un total de 10.249 europeos “económicamente activos”, 4.056 fueron clasificados como trabajadores profesionales, técnicos y trabajadores de análoga categoría, 1.199 como administradores, superintendentes y funcionarios y 1.291 como agricultores, pescadores y cazadores.

Un tercer grupo importante de población está compuesto por no africanos que no son europeos; este grupo ha aumentado de 62.500 en 1948 a 79.000 en 1952. Más de las tres cuartas partes de los miembros que componen este grupo son asiáticos y la mayor parte de éstos son de origen indio y pakistano. Estos habitantes desarrollan actividades comerciales e industriales y la mayoría de ellos viven en las poblaciones.

La mayoría del resto de este grupo está formada por 13.000 árabes.

En su 13° periodo de sesiones el Consejo aprobó las recomendaciones siguientes:

El Consejo expresa que tiene pleno conocimiento de la responsabilidad especial de las funciones que desempeña la Autoridad Administradora de Tanganyika, debido a la presencia en ese Territorio de importantes minorías europeas y asiáticas que coexisten con una gran mayoría de indígenas africanos, y que en la actualidad se encuentran generalmente en situación más avanzada en materia de desarrollo político, económico, social y educativo. El Consejo toma nota con satisfacción de la armonía que ha existido y continúa existiendo en las relaciones entre estos tres grupos principales de la población; sin embargo, señala posibles peligros inherentes a la pronunciada falta de equilibrio que presentan esos grupos en sus etapas de desarrollo; por consiguiente, el Consejo acoge con satisfacción la seguridad dada por la Autoridad Administradora de que toda su política y todas las actividades de desarrollo están encaminadas a que los habitantes indígenas ocupen el lugar que les corresponde junto a las comunidades formadas por inmigrantes; y expresa la esperanza de que, con arreglo a esa política la Autoridad Administradora podrá intensificar sus esfuerzos en forma tal que dentro del más breve plazo posible, se logre el desarrollo de una Tanganyika unificada en cuyas actividades los habitantes indígenas participarán plenamente.

El Consejo invita a la Autoridad Administradora a incluir en sus futuros informes anuales datos estadísticos que indiquen el número de la población indígena por provincias y, en los casos en que sea posible, el número de varones adultos que trabajan en ocupaciones remuneradas y la proporción de esas personas en el total de población masculina adulta empleable y el número de niños indígenas en edad escolar.

El Consejo, observando la falta de estadísticas vitales relativas a la población indígena y apreciando las dificultades que presenta el establecimiento de medios adecuados para la obtención de esa información, recomienda que la Autoridad Administradora prosiga realizando esfuerzos para vencer esas dificultades y expresa la esperanza de que se podrá inducir a la población, en su propio interés, a cooperar en esta cuestión.

El Consejo toma nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora

con objeto de fomentar el uso y desarrollo del idioma swahili y, observando que dicho idioma es ya generalmente empleado en el comercio, en la enseñanza y otros fines, recomienda que la Autoridad Administradora adopte todas las medidas posibles destinadas a fomentar el desarrollo del idioma y a extender su uso.

MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

En una petición²⁸⁰ que examinó el Consejo de Administración Fiduciaria en su 13° período de sesiones se señaló a la atención del Consejo los informes publicados por la prensa del Reino Unido sobre las repercusiones que en 1953 tuvieron en el Territorio acontecimientos originados en dos dependencias vecinas pertenecientes al Reino Unido.

El primer punto estaba relacionado con el empleo de fuerzas de policía de Tanganyika para reprimir una perturbación del orden ocurrida en Nyasalandia. En el curso de sus observaciones²⁸¹ sobre la petición, la Autoridad Administradora declaró que la asistencia dada al Gobierno de Nyasalandia por un destacamento de 50 agentes de policía de Tanganyika fué prestada con arreglo a la Ordenanza No. 51 de Tanganyika del año 1952, concerniente al préstamo recíproco de fuerzas de policía. El segundo punto se refería a informes publicados al efecto de que el Gobierno de Tanganyika había concedido permiso a un grupo investigador procedente de Kenia — 10 africanos dirigidos por un joven europeo — para entrar en el Territorio con objeto de interrogar a unos africanos de la tribu Kikuyu sospechosos de desarrollar actividades mau mau, y que el grupo investigador había sido declarado culpable de agresión por un juzgado de paz después de haberse presentado pruebas de que dicho grupo había procedido de manera brutal al interrogar a algunas personas. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que el grupo en cuestión había entrado en el Territorio en virtud de un acuerdo mutuo entre los dos Gobiernos con objeto de determinar si algunos kikuyus arrestados en Tanganyika eran del tipo de adherentes al mau mau que el Gobierno de Kenia estaba dispuesto a detener en Kenia. Como resultado de los alegatos presentados por malos tratos, se instituyó un proceso contra el funcionario europeo y los guardias de Kenia que le acompañaban, y fueron debidamente condenados con arreglo a la ley.

El representante especial de la Autoridad Administradora informó también al Consejo que en noviembre de 1952 se implantó un sistema de inscripción, en virtud del cual todas las personas que formasen parte de la tribu Kikuyu — de las cuales había unas 15.000 en Tanganyika septentrional — estaban obligadas a inscribirse. Aproximadamente la mitad de la población kikuyu que había entrado en las provincias septentrionales del Territorio procedente de Kenia regresó a ese último país con objeto de evitar la inscripción.

PROGRESO HACIA EL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDENCIA

En las resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII), la Asamblea General invita a la Autoridad Administradora de cada uno de los territorios en fideicomiso a incluir en sus informes anuales, entre otras cosas, datos

relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyecte adoptar para conducir a los territorios en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia y un cálculo aproximado del tiempo necesario para hacer efectivas las diversas medidas encaminadas hacia ese objetivo. Además, se pide al Consejo se sirva incluir en sus informes a la Asamblea General una sección separada que trate del cumplimiento de dichas resoluciones.

Esta cuestión se trata en la parte III del presente informe.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de los Estados Unidos de América, al observar que los progresos realizados en el camino hacia el gobierno propio estaban haciendo historia política en África occidental, vió en Tanganyika circunstancias muy diferentes pero igualmente dignas de atención en el avance de un territorio hacia la libre determinación. Dijo que una declaración reciente hecha por el Secretario de Estado de su Gobierno, a saber que "los Estados Unidos reconocen que la libertad y la independencia se basan no sólo en consideraciones políticas y morales sino también en el bienestar económico y social", se ajustaba actualmente al caso de Tanganyika, donde el desarrollo social y el económico son la base del progreso político. Este desarrollo social y económico está estrechamente relacionado con una mejor vivienda y una mejor remuneración para la creciente población trabajadora, y durante el año se han hecho importantes progresos en ambos campos (véase *Viviendas urbanas y trabajo, infra*). Estos y otros progresos demuestran que Tanganyika se está convirtiendo en un laboratorio para experimentos satisfactorios que están rindiendo muchos beneficios a sus 8.000.000 de habitantes aproximadamente, e inclusive a aquellas personas que viven fuera de sus fronteras. Estos resultados se deben a la administración británica.

El representante de Siria declaró que experimentaba alguna dificultad en evaluar los problemas básicos del Territorio y en juzgar los progresos realizados en el mismo; dicho representante no se refería a las mejoras de carácter ordinario efectuadas en diversas actividades y que eran de esperar como resultado de una administración razonablemente eficiente, sino al verdadero problema que plantea el hecho de que la gran mayoría de la población, casi 8.000.000 de africanos, ocupa una posición secundaria en todos sentidos — política, económica y socialmente — a la de las minorías europea y asiática. En comparación con otros países, algunos de ellos situados muy cerca de Tanganyika, el Territorio había evitado hasta la fecha, hablando en forma general, las manifestaciones más graves de esta clase de situación. Puesto que la Autoridad Administradora podía contar con el apoyo pleno y legítimo de las Naciones Unidas, podía hacer de Tanganyika un ejemplo de cómo asegurar que la mayoría africana participara plenamente y ejerciera sus derechos en el desarrollo del país y, además, de la forma de establecer las condiciones en virtud de las cuales las comunidades inmigrantes justificaban su estancia en el país. Estimaba que la Autoridad Administradora era sincera en su

²⁸⁰ T/PET.2/163 y Adds. 1-3.

²⁸¹ T/OBS.2/8

deseo de hacer de Tanganyika un ejemplo de esta clase. Manifestó su gran satisfacción por el hecho de que Tanganyika, si bien contenía muchos de los mismos elementos, había hasta ahora evitado las manifestaciones más graves de la "línea de color" y las reivindicaciones basadas en la superioridad racial; pero expresó su preocupación por el hecho de que Tanganyika hubiese logrado esos resultados sin resolver realmente el problema o ni siquiera presentar una idea clara para una posible solución. Por su participación en la vida del Territorio, los europeos ocupaban el primer lugar, los asiáticos el segundo y en último término estaban los africanos, en el orden contrario a su fuerza numérica.

Después de extenderse sobre la situación mencionada, en cuanto ésta afectaba la representación en la administración pública, la participación en la economía, la tenencia de tierras, el nivel de vida y la enseñanza, el representante de Siria señaló que no dudaba en modo alguno que la Autoridad Administradora conocía perfectamente el problema y que estaba determinada a no permitir que Tanganyika permaneciese en este peligroso estado de desequilibrio. La política e intenciones de la Autoridad Administradora estaban encaminadas a corregir gradualmente esta situación con objeto de que los africanos, en particular, participasen mucho más plenamente en las actividades de su propio país. Sin embargo, sus dudas estribaban en no saber si esas buenas intenciones se aplicaban en forma suficientemente rápida, si su alcance era suficiente y si en conjunto ofrecían un cuadro representativo del objetivo final. Las Misiones Visitadoras que visitaron anteriormente el país habían experimentado las mismas dudas, como las abrigaba también el propio Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo debe confiar en que la Misión Visitadora de 1954 tratará de presentar un cuadro más claro del objetivo final que se persigue en el Territorio y qué medidas se están adoptando para alcanzarlo: sobre todo qué medidas se están adoptando para transformar la sociedad de Tanganyika, compuesta de tres comunidades muy diferentes y muy separadas entre sí racialmente, en una nación unificada, que cuente con los lazos de una ciudadanía común e igual para todos sus habitantes, y una idea común de conciencia y dignidad nacional; qué disposiciones se están adoptando para lograr este resultado oportunamente, con objeto de alcanzarlo antes de que aumenten la tirantez y las rivalidades que puedan dividir aún más las diferentes razas y qué procedimientos se siguen con el fin de asegurar que los africanos obtengan una plena participación en la vida del Territorio, mediante el desarrollo económico y la introducción de grandes mejoras en el nivel de vida y de iguales oportunidades de enseñanza. Las Naciones Unidas y la Autoridad Administradora, actuando conjuntamente, tenían en Tanganyika una rara oportunidad de demostrar que los pueblos de diferente raza, origen, religión y tradición podrían vivir plena, provechosa y pacíficamente dentro de las fronteras de una sola nación.

El representante de Nueva Zelandia describió el año que se estaba examinando como un año de progreso constante, hablando en términos generales. Si bien no se podía señalar un desarrollo apreciable de una conciencia territorial o de una comunidad de opinión, la ausencia de discordias raciales y tribales en Tanganyika era en sí misma alentadora. La Autoridad Admi-

nistradora debe dirigir su atención primordialmente al bienestar e interés de los habitantes indígenas, pero la Autoridad Administradora había demostrado que consideraba apenas menos importante estimular activamente la armonía interracial en todas las cuestiones, tanto en materia de normas como en la práctica.

El representante de Haití estimó que de los tres territorios en fideicomiso bajo administración británica, Tanganyika era el territorio que parecía ofrecer menos razones para sentirse satisfecho.

El representante de El Salvador declaró que Tanganyika, a diferencia de los territorios en fideicomiso de África occidental, no había realizado ningún progreso notable. Se habían realizado muy pocos avances hacia el objetivo final del gobierno propio o la independencia.

El representante de Bélgica estimó que el Consejo daría muestras de ser poco realista si esperaba que, de un año para otro, podrían notarse progresos realmente espectaculares en un territorio en fideicomiso. Aquellas personas que conocían la situación existente en los países insuficientemente desarrollados comprendían cada vez más que se necesitaba mucho tiempo para realizar progresos. Los expertos desinteresados a quienes consultó el Secretario General con respecto al Programa Ampliado de Asistencia Técnica informaron que sería posible mejorar el nivel de vida y el promedio de productividad en un 2% anual mediante el gasto de enormes sumas de dinero. El Consejo de Administración Fiduciaria tenía derecho a esperar que la Autoridad Administradora haría todo lo posible para fomentar por todos los medios el progreso del Territorio, pero no debía esperar que la Autoridad Administradora hiciera milagros que nunca se habían llevado a cabo en ninguna otra parte del mundo. En el caso de Tanganyika los esfuerzos de la Autoridad Administradora eran constantes y cada vez mayores, y los progresos regulares y seguros. Sus esfuerzos se reflejaban principalmente en el presupuesto del Territorio, el cual había aumentado de 7.000.000 de libras esterlinas en 1945 a 18.000.000 aproximadamente en 1953. La posibilidad de ampliar un presupuesto tiene sus límites pero, inclusive si se dispusiera de fondos ilimitados, existiría también un límite para la obra que se podría realizar, ya que el desarrollo de las actividades humanas demanda cierto tiempo.

El representante de la India declaró que el actual Gobernador del Territorio, que desarrolla sus actividades en un continente donde los problemas sociales y políticos en el norte son diferentes de los del sur, había mantenido el Territorio libre de los efectos de creencias intolerantes y violentas por ambas partes y había establecido en Tanganyika una atmósfera de paz y reconciliación. Alabó también los sacrificios y la labor inteligente desarrollada por muchos administradores coloniales, empleados públicos y trabajadores voluntarios, tales como misioneros y otros trabajadores de servicios sociales, así como las administraciones sucesivas que habían logrado algunos éxitos en el Territorio. No obstante, su delegación no podía participar del optimismo general y la satisfacción que la Autoridad Administradora había expresado en su informe. Si bien el ritmo y los métodos administrativos aplicados eran benéficos y fraternales, en Tanganyika los progresos realizados eran muy lentos; en realidad, las disposiciones adoptadas habían sido, en cierta forma, hostiles al progreso. Criticaba, en

particular, lo que describió como la introducción del sistema comunal de administración, gobierno, elecciones, y demás actividades en Tanganyika. Las clases colonizadoras apoyaban esta política; pero el cumplimiento de las responsabilidades contraídas dentro del régimen de administración fiduciaria, tanto en la letra como en el espíritu, sólo era posible si se reconocía la igualdad jurídica de todos los individuos en el Territorio, sin tener en cuenta la raza a que pertenecían.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Autoridad Administradora no cumplía los compromisos contraídos en virtud de las disposiciones de la Carta y el acuerdo de administración fiduciaria. La Autoridad Administradora continuaba desarrollando una política que no garantizaba el progreso de la población de Tanganyika hacia la consecución de los objetivos de la Carta y estaba destinada a consolidar el régimen colonial existente. Las autoridades coloniales británicas en África aplicaban la política proclamada unos 50 años antes por Cecil Rhodes: "iguales derechos para todas las personas civilizadas", es decir, para los europeos y no para los africanos, porque Rhodes estimaba que los africanos no podían ser considerados como personas civilizadas. No obstante, entre los africanos habían ahora algunos individuos educados y este hecho empezaba a asustar a las administraciones y colonizadores británicos en África. Señaló un artículo publicado en la revista *Time*, del 24 de enero de 1954, en el cual se declaraba que las autoridades coloniales británicas y los colonizadores en África estaban preocupados por el hecho de que los africanos estaban logrando lentamente acceso a la civilización y que, por consiguiente, estaban en situación de reclamar su derecho a participar en los asuntos locales. En vista de ello, la población blanca había modificado su lema como sigue: "iguales derechos para todas las personas responsables" y, naturalmente, sería la población blanca la que decidiera quiénes pueden ser consideradas gente responsable. Desde luego, la población africana sería despojada de sus privilegios y excluida de dicha responsabilidad. El Secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido declaró que compartía el criterio de que debían concederse derechos iguales a todas las personas responsables, y dijo que era muy natural que todo sistema electoral contemporáneo que se implantase en África significaría que la población blanca quedaría sumergida por el electorado africano. Esto es lo que sucedía en un territorio que las Naciones Unidas habían confiado al Reino Unido como Territorio en fideicomiso; a la Autoridad Administradora no le interesaba el fomento del progreso político de los habitantes del Territorio hacia el gobierno propio o la independencia, sino que estaba principalmente interesada en la posibilidad de continuar el gobierno de la raza blanca sobre la mayoría africana.

El representante especial de la Autoridad Administradora estimó necesario señalar que las primeras influencias árabes en Tanganyika se habían dejado sentir sólo en la franja costanera del Territorio y sólo con la llegada de los europeos en 1880 es que el territorio del interior tuvo contacto con la civilización. Hace 60 años no se conocía allí todavía el uso de la rueda. En su opinión, parecía esencial que las condiciones actuales de Tanganyika y los progresos logrados por la Autoridad Administradora en el desarrollo del Territorio fuesen considerados en relación con estos

antecedentes. Uno de los miembros del Consejo describió Tanganyika como un problema que ponía a prueba los esfuerzos que se hicieran por resolverlos; otro formuló la lógica pregunta: ¿cómo habrá de resolverse el problema de que los africanos no sean relegados a un lugar en relación con las comunidades inmigrantes? Esas cuestiones, cada una planteada de modo diferente — un desafío y una pregunta — constituyen realmente la base de toda la política de la Autoridad Administradora. Su política se basaba en el criterio de que mediante el desarrollo económico, agrícola y educativo del país y el fomento de las industrias se elevaría y desarrollaría el nivel cultural del africano hasta que pudiera ocupar el lugar que le corresponde junto a las comunidades inmigrantes. Desafortunadamente, no existía un camino más corto para conseguir este objetivo. Toda esta labor es muy difícil de realizar y requiere necesariamente mucho tiempo. Pero todas las actividades de desarrollo estaban en una forma o en otra encaminadas a la consecución de este fin en materias tales como la enseñanza, la agricultura, la explotación de yacimientos minerales e industrias, para mencionar sólo unas cuantas. Los esfuerzos que se realizan en estos campos de actividad estaban encaminados directamente al mejoramiento de los africanos o, indirectamente, a proporcionar fondos suficientes para su mejoramiento. La crítica alentadora y las sugerencias constructivas ofrecidas por algunos de los miembros serían tenidas en cuenta y examinadas cuidadosamente por la Autoridad Administradora y el Gobierno de Tanganyika. En cambio, el representante de la URSS había tergiversado los hechos con el propósito de ajustarlos a sus prejuicios e ideas preconcebidas, y al hacerlo así, presentó un cuadro completamente falso de la política de la Autoridad Administradora. Finalmente, al contestar a las críticas relativas al ritmo de progreso, declaró que la Autoridad Administradora, así como el Gobierno y sus funcionarios, estaban haciendo todo lo posible para estimular a los africanos hacia el progreso y la evolución, incluso obligándoles a seguir ese camino, pero, en última instancia, el ritmo del progreso sería el que el propio africano tendría a bien escoger.

INMIGRACIÓN

El representante de la India, si bien señaló que no existía ley alguna que oficialmente permitiese la discriminación contra persona alguna por razón de raza o país de origen, declaró que en la práctica la aplicación de las leyes de inmigración presentaba un cuadro bastante diferente. Durante el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre de 1952, emigraron a Tanganyika 1.827 europeos en comparación con 2.412 no europeos, si bien el elemento básico de la población era sólo de 18.000 europeos en comparación con 70.000 otras personas no africanas. En opinión de su delegación no cabía duda de que en la aplicación práctica de las leyes de inmigración existían trabas que hacían difícil la entrada de población asiática en el Territorio. La proporción de inmigrantes era aproximadamente de un 30% más alta en el caso de los europeos; además, esta cifra tenía que ser considerada en el sentido de que el inmigrante europeo disfrutaba de una situación económica, política y administrativa diferente y más privilegiada. Las leyes de inmigración no se aplicaban con arreglo al espíritu del Acuerdo de Administración Fiduciaria por mucho que se adaptasen a su texto. Añadió que 124 personas procedentes de la

Unión Sudafricana entraron como inmigrantes en Tanganyika durante dicho período. Con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria no podía ejercerse discriminación alguna contra nacionales de la Unión Sudafricana que fuesen al Territorio en fideicomiso. Sin embargo, sugirió que, en alguna oportunidad, la Asamblea General debía examinar si un país que se burlaba de las decisiones de la Asamblea General y hacía caso omiso de las disposiciones de la Carta en materia de administración fiduciaria, tenía derecho a aprovecharse de una situación por la cual sus nacionales podían entrar en el Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora lamentó que no se le hubieran formulado preguntas al respecto, puesto que la inmigración es una de las cuestiones por las cuales él mismo es responsable ante el Consejo Ejecutivo. Observó que la Misión Visitadora de 1951 realizó algunas encuestas especiales en materia de inmigración y declaró en su informe que, en su opinión, las leyes de inmigración se aplicaban de manera justa y que no existía discriminación. En Tanganyika se necesitaban técnicos que prestaran sus servicios y, naturalmente, éstos recibían una compensación adecuada; es posible que, posteriormente, dichos técnicos volviesen a su país de origen. Era un hecho que la mayoría de las personas técnicas especializadas en alguna profesión que habían solicitado ir a Tanganyika eran nacionales británicos, mientras que la inmigración general consistía mayormente en trabajadores calificados y semicalificados. No se trataba de discriminación en relación con la raza. Se trataba simplemente de lo que el país necesitaba, y no de una cuestión de discriminación por motivos de raza. El hecho de permitirse la entrada en el país de muchas personas, tales como dependientes de tiendas, auxiliares de oficina, escribientes, trabajadores calificados y semicalificados, significaría solamente, en el transcurso de algunos años, que los asiáticos establecidos en el país y los africanos se encontrarían sin empleo en esa clase de trabajo. Los servicios de inmigración habían sido siempre dirigidos y todavía lo eran por la Immigration Control Board (Junta de Control de la Inmigración), compuesta de dos oficiales, dos europeos de carácter no oficial, dos africanos y dos asiáticos, todos ellos no funcionarios. Los miembros que componen la Junta están convencidos de que se aplica la ley sin discriminación y en interés del Territorio.

MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

El representante de Francia dijo que comprendía el deseo de la Autoridad Administradora de fomentar la evolución rápida de ideas e instituciones y evitar, a la vez, los disturbios que habían afectado a otras regiones africanas. Si la democracia era contagiosa, lo era únicamente en cierto ambiente y clima; de no ser así, probablemente se extendería la fiebre y la agitación y se demoraría la consecución de los objetivos previstos por la Carta. Este hecho justificaba los acuerdos que permitían un intercambio de fuerzas del orden público para hacer frente a necesidades temporales en Tanganyika y en los territorios británicos vecinos.

El representante de la India, refiriéndose específicamente al incidente originado por la investigación de los kikuyus planteado ante el Consejo en una petición, preguntó si el grupo investigador había obtenido el permiso previo de las autoridades de Tan-

ganyika; si la policía de Tanganyika había cooperado con dicho grupo; si era verdad que los kikuyus habían sido sometidos a un régimen de hambre durante cuatro días aproximadamente como medio de obligarles a confesar; si, en el interrogatorio, se habían aplicado métodos de "tercer grado"; si se habían aplicado diferentes formas de tortura y si un hombre se había suicidado. No sugería que el propio gobierno de Tanganyika emplease esos procedimientos; la cuestión era que dicho gobierno era arrastrado a participar en condiciones que prevalecían más allá de las fronteras de su propio Territorio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, refiriéndose también a los dos incidentes mencionados en la petición, declaró que dichos incidentes implicaban una violación del Acuerdo de Administración Fiduciaria. Respecto al envío de fuerzas de policía desde Tanganyika con el fin de suprimir supuestos desórdenes en el territorio vecino, declaró que la Autoridad Administradora no tenía derecho, en virtud del artículo 5 del Acuerdo de Administración Fiduciaria, a enviar fuerzas de policía local a un territorio vecino, cualquiera que fuese el fin que se perseguía. No se trataba de cumplir con obligaciones hacia el Consejo de Seguridad, y el Acuerdo de Administración Fiduciaria disponía que esas fuerzas podrían ser usadas para la defensa local y el mantenimiento del orden público "en Tanganyika". El incidente relativo al grupo investigador procedente de Kenia implicaba una segunda violación originada por la unificación ilegal del Territorio en fideicomiso con Kenia y Uganda. Tal como lo predijo su delegación cinco años antes, era ahora imposible decir dónde terminaban las colonias y empezaba el Territorio en fideicomiso; se hacían incursiones desde las colonias al Territorio y las fuerzas de policía del Territorio eran enviadas a un territorio vecino para aplicar medidas de represión. La situación que reinaba en Kenia estaba afectando la situación en Tanganyika. En la Provincia Septentrional de Tanganyika habían antes 15.000 hombres de la tribu kikuyu, de los cuales sólo quedaban 5.000. Los otros 10.000 habían sido internados o habían huido.

El representante especial de la Autoridad Administradora explicó, respecto al caso de los kikuyus, que el funcionario de Kenia envuelto en el incidente entró en Tanganyika previo acuerdo mutuo entre los gobiernos de Tanganyika y de Kenia, y que la administración de Tanganyika no era arrastrada en modo alguno a participar en la situación que prevalecía más allá de sus fronteras. El funcionario había ido al Territorio con objeto de interrogar a algunos kikuyus que habían llegado allí procedentes de Kenia unos años antes y de quienes se sospechaba que estaban en relaciones con los mau mau. No podía ser verdad que ninguno de los kikuyus interrogados por el funcionario hubiese sido sometido a un régimen de hambre durante cuatro días antes de ser interrogado, puesto que se prohibió a dicho funcionario ejercer sus funciones en Tanganyika, cuatro días después de haber llegado al Territorio, tan pronto como se supo que se formulaban quejas contra él por el trato dado a los kikuyus. La policía de Tanganyika había estado en contacto con dicho funcionario y había cooperado con él en este sentido, pero no se hallaba en manera alguna comprometida en lo que dicho funcionario había hecho en el Territorio.

El representante de Bélgica pidió que la Autoridad Administradora suministrase en futuros informes anuales datos estadísticos que indicasen la cifra de población por provincias y presentasen el número de hombres empleados en cada provincia.

El representante de la India observó que después de 35 años de administración no existían estadísticas demográficas para el Territorio, ni registro de nacimientos o defunciones, ni medios de verificar la tasa de mortalidad infantil. Era sorprendente comprobar que no se había hecho esfuerzo alguno para calcular estadísticamente el grado de progreso realizado o para indicar dicho progreso en una forma o en otra. Sugirió se pidiese a la Autoridad Administradora que en su próximo informe presentase estadísticas demográficas sobre nacimientos, defunciones y mortalidad infantil, así como datos estadísticos ocupacionales y de población, y que dichas estadísticas se basaran en la política de la propia Autoridad Administradora y en su propia organización.

El representante especial de la Autoridad Administradora dijo que no era correcto afirmar que se había levantado un censo de la población no africana pero no de la población africana. En 1948 se levantó un censo tanto de la población africana como de la no africana. El funcionario principal encargado del censo decidió que era conveniente que se levantase un censo en dos etapas. Declaró que era esencial que se levantase el censo de los no africanos durante los primeros meses del año, porque más tarde habría gran movimiento de personas no africanas en el territorio, y todo censo que se levantara entonces sería inexacto y poco útil para usos estadísticos. Por consiguiente, el censo de la población no africana fué levantado durante el primer semestre de 1948 y el de la población africana durante el segundo semestre del mismo año. A la crítica formulada de que no existían "estadísticas", contestó que era verdad que no se conocía la tasa de mortalidad infantil y que no existía todavía un registro obligatorio de nacimientos y defunciones entre africanos; pero también era verdad que existía un Departamento de Estadística que compilaba estadísticas publicadas trimestralmente en forma muy substancial.

DESARROLLO DEL IDIOMA SWAHILI

El representante de Siria se expresó en favor del uso del swahili como idioma oficial y opinó que la política seguida por la Autoridad Administradora en esta cuestión no era alentadora. Pidió que la Autoridad Administradora tratara de fomentar el uso del idioma y lo declarase idioma oficial dentro del más breve plazo posible.

El representante de El Salvador consideró también que, si era posible, el swahili debía ser declarado idioma oficial.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que no veía qué efectos podría producir o de qué manera ayudaría a la Autoridad Administradora en su política encaminada a fomentar el swahili el hecho de declararlo idioma oficial. Como había reconocido la última Misión Visitadora, el idioma no era adecuado para expresarse en cuestiones técnicas ni particularmente conveniente para los debates en el Consejo Legislativo. Sin embargo, el idioma

estaba desarrollándose y, en caso de proseguirse la actual política, algún día se convertiría en un idioma adecuado para los fines mencionados.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

El Territorio se halla en una etapa de evolución política en la cual, si bien la autoridad reposa aún en un gobernador responsable ante la Autoridad Administradora, se están introduciendo gradualmente personas procedentes de todas las comunidades — africanos, asiáticos y europeos — en los consejos centrales de gobierno con objeto de que participen con el Gobernador y sus funcionarios en la formulación de la política y las leyes. Dichas personas ocupan actualmente una posición minoritaria en esos consejos; en lo que a la gran mayoría de población africana se refiere, en la actualidad se concede atención especial a la formación política en otras esferas, es decir, en los pueblos y distritos donde la Autoridad Administradora desea convertir las variadas y numerosas formas de autoridad tribal en unidades más eficientes, responsables y democráticas de administración local.

Estos dos métodos principales de desarrollo político están evolucionando gradualmente. La relación existente entre los dos no ha sido todavía determinada en forma definitiva, pero la Autoridad Administradora ha modificado ya un antiguo concepto según el cual las autoridades locales o "indígenas" eran parte integral de la organización central del gobierno y ahora considera a los órganos del gobierno central y local como entidades separadas.

El Consejo de Administración Fiduciaria consideró en el pasado, particularmente ante las pruebas presentadas por sus misiones visitadoras, que el desarrollo de un sentimiento de unidad territorial entre todos los habitantes era un ingrediente esencial de esta evolución política. En su 11° período de sesiones, el Consejo, como medio de lograr este objetivo en el caso de la población africana, aprobó los esfuerzos que realiza la Autoridad Administradora con objeto de unificar o federar en grupos mayores el gran número de autoridades tribales separadas. En el campo más general de las relaciones existentes entre las comunidades africana, asiática y europea, el Consejo, consciente de la actual representación separada de esos tres grupos en los organismos centrales de gobierno, opinó que los intereses comunales debían estar subordinados a los intereses de la totalidad del Territorio y formuló recomendaciones en ese sentido en lo concerniente al cuerpo legislativo. Recomendó también que se examinase la posibilidad de establecer un estatuto de "ciudadano de Tanganyika" para todas las personas que hayan establecido realmente su domicilio en el Territorio. Actualmente dichas personas son "personas protegidas por los británicos" en el caso de los indígenas africanos y personas nacidas en el Territorio o cuyos padres nacieron en él, o continúan manteniendo su nacionalidad o ciudadanía individuales.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las recomendaciones siguientes:

El Consejo recuerda la importancia que concedió anteriormente al desarrollo de un sentimiento de unidad territorial por parte de todos los grupos de población, y con este fin a la conveniencia de considerar el establecimiento de un estatuto común de ciudadano de Tanganyika y, en general, de subordinar los intereses comunales a los de la totalidad del Territorio. El Consejo, al afirmar de nuevo estos puntos de vista, se complace en observar que la cuestión de la ciudadanía de Tanganyika ha sido examinada por la Autoridad Administradora y, si bien aquilata las dificultades que envuelve la cuestión, expresa la esperanza de que se proseguirá ese estudio y que se hallará una solución satisfactoria. A ese respecto, el Consejo toma nota además de la necesidad de fomentar la educación política general de los habitantes indígenas en especial, necesidad justificada por el hecho de que la población indígena no demostró más interés por las reformas constitucionales pendientes, y pide a la Autoridad Administradora que intensifique sus esfuerzos presentes destinados a estimular el interés de la población indígena en los asuntos del Territorio.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

El Gobernador administra el Territorio con la asistencia, en el gobierno central, de un Consejo Ejecutivo compuesto de ocho miembros oficiales y cinco miembros no oficiales; desde 1951 uno de estos miembros es africano. La principal función del Consejo es la de asesorar al Gobernador, pero muchas ordenanzas (leyes del cuerpo legislativo) autorizan al Gobernador, en consulta con el Consejo a promulgar o aprobar legislación de carácter subsidiario. Sus miembros oficiales son funcionarios superiores responsables ante el Gobernador por la dirección, coordinación e inspección de grupos de departamentos oficiales. Además, existen muchas juntas estatutarias y otras juntas, comités y órganos similares, que asesoran sobre cuestiones específicas tales como la utilización de la tierra, la mano de obra, la enseñanza para los africanos y los productos agrícolas; la Autoridad Administradora declara que su propósito es que dichos órganos tengan la mayor representación posible, tanto desde el punto de vista racial como de los intereses específicos para cuyo servicio fueron creados.

La autoridad central se extiende a las ocho provincias administrativas en que se divide el Territorio, cada una bajo la dirección de un Comisionado Provincial quien, como jefe administrativo provincial, es responsable de la coordinación y orientación general de todas las actividades oficiales en su provincia. Las provincias están a su vez divididas en distritos administrativos (55 en total), cada uno de ellos dirigido por un Comisionado de Distrito responsable ante el Comisionado Provincial por las actividades que se desarrollan en sus respectivos distritos. En la administración local, la política oficial es aplicada por las autoridades locales quienes, en las zonas rurales, son en su mayor parte los gobernantes tradicionales del pueblo.

Las leyes del Territorio son promulgadas por el Gobernador con el consejo y consentimiento de un Consejo Legislativo compuesto del Gobernador como Presidente, 15 de sus funcionarios superiores y 14 miembros no oficiales — tres asiáticos, cuatro africanos y siete europeos. Los miembros no oficiales son designados por el Gobernador durante un plazo de cinco

años; la Autoridad Administradora describe a dichos miembros como representativos de las diferentes comunidades e intereses en el Territorio más bien que como representantes de determinadas regiones geográficas. El Gobernador está autorizado para aceptar o rechazar los proyectos de ley aprobados por el Consejo o para someterlos a la decisión de la Autoridad Administradora, la cual puede también desaprobado legislación ya aceptada por el Gobernador. Pero la Autoridad Administradora declara que, con sujeción a esta disposición y a las leyes del Parlamento del Reino Unido, el Consejo es una legislatura soberana con plena competencia legislativa y presupuestaria dentro del Territorio. Dentro de esa competencia, todo miembro del Consejo puede proponer cualquier moción relativa a los asuntos de Tanganyika con la única reserva de que no puede presentarse ningún proyecto de ley, moción, voto o resolución que pueda imponer un tributo o una obligación a los ingresos públicos, salvo por el Gobernador o bajo su dirección o sanción expresa.

El Consejo de Administración Fiduciaria y sus misiones visitadoras expresaron anteriormente interés en que se aumentara la participación de los habitantes indígenas en estos órganos de administración central. En su 11° período de sesiones el Consejo examinó las recomendaciones de un Comité de Desarrollo Constitucional que en 1951 recomendó que se nombrase un africano como miembro del Consejo Ejecutivo; este nombramiento se efectuó en 1951 y el Consejo de Administración Fiduciaria expresó la esperanza de que la representación de africanos sería aumentada cuanto antes.

El mismo Comité recomendó también que en el Consejo Legislativo, si bien debía mantenerse la mayoría oficial hasta que se haya adquirido más experiencia, debía aumentarse el número de miembros el cual comprendería el Gobernador, 21 miembros oficiales y 21 miembros no oficiales. Entre estos últimos, siete serían africanos, siete asiáticos y siete europeos. La Autoridad Administradora decidió ulteriormente que el objetivo sería el de establecer la nueva legislatura a más tardar cinco años después de la fecha de la aprobación en principio de las recomendaciones del Comité; el Consejo fué informado de esta aprobación en su 11° período de sesiones.

La Misión Visitadora de 1951 informó que estas propuestas tuvieron diversas reacciones públicas, especialmente en lo que respecta a la proyectada división de los puestos no oficiales sobre una base de igualdad entre los tres grupos principales de población: en resumen, esta propuesta fué apoyada por la comunidad asiática; fué objeto de oposición, excepto como fase temporal, por parte de los portavoces de la opinión africana educada, quienes propusieron que una mitad por lo menos de los miembros no oficiales debían ser africanos; y, con algunas excepciones, se opusieron también a ella de manera muy activa los miembros de la comunidad europea.

En el 11° período de sesiones, el Consejo reflejó los puntos de vista de su Misión Visitadora al expresar la opinión de que, si bien la propuesta de representación igual para las tres razas era útil como medida provisional, no ofrecía una solución satisfactoria a largo plazo. El Consejo sugirió, como una forma posible de pasar del sistema de representación comunal a un sistema más representativo, el uso de una lista

electoral común con todas las reservas oportunas. El Consejo expresó también la esperanza de que se podría reducir el período de cinco años propuesto para la aplicación de las reformas. La Autoridad Administradora informó que después de su aceptación general de las propuestas de reforma, una comisión especial realizó una investigación de los dos aspectos principales de las propuestas, es decir, la introducción de sistemas electorales (véase a continuación, *Sistema electoral*) y la organización de la administración local (véase a continuación *Administración local*). Al mismo tiempo, en 1953 se adoptó una disposición conforme a la cual el Consejo Legislativo debía ser presidido por un Presidente y se designó a uno de los principales miembros no oficiales para este cargo. A principios de 1954 se anunciarían probablemente al público los cambios propuestos con respecto al Consejo Legislativo. En lo que se refiere a la cuestión general de la participación de los habitantes indígenas en los órganos consultivos y ejecutivos de la administración central, la Autoridad Administradora declaró que esta participación aumentaba anualmente y que estaba sólo limitada por la falta actual de un número suficiente de personas que reuniesen las condiciones necesarias. La Autoridad Administradora declaró, no obstante, que por el momento se prestaba especial atención a la formación profesional en materia de administración local en órganos representativos.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las recomendaciones siguientes:

El Consejo, recordando las observaciones que formuló en su 11° período de sesiones sobre las modificaciones constitucionales propuestas entonces y que exigen nuevas investigaciones, y recordando, en particular, sus puntos de vista sobre el sistema comunal de representación en el Consejo Legislativo y la oportunidad de los cambios propuestos, expresa su satisfacción por el hecho de que se hayan completado las investigaciones y de que, en breve plazo, se hará un anuncio público relativo a las modificaciones propuestas y expresa la esperanza de que puedan ser aplicadas dentro del período de cinco años previamente fijado. El Consejo, si bien espera con interés informaciones detalladas sobre las modificaciones en la forma en que se las determine finalmente, expresa la esperanza de que la conservación de una representación separada de los tres grupos de población, aun sobre la mejor base de la paridad entre ellas, será considerada por la Autoridad Administradora como una fase de transición y que se examinará cuanto antes la posibilidad de establecer una lista electoral común, con todas las reservas oportunas, en el caso de que se considere conveniente.

El Consejo observa con satisfacción que, en espera de que se lleven a cabo las más importantes modificaciones constitucionales, se han adoptado disposiciones para que un Presidente presida el Consejo Legislativo y que dicho cargo sea desempeñado por uno de los miembros no oficiales del Consejo.

El Consejo reitera su esperanza de que la Autoridad Administradora examinará la posibilidad de aumentar el número de miembros africanos tan pronto como sea posible.

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Dentro de la organización de la estructura administrativa centralizada existente, en 1949 se inició la

adopción de medidas destinadas a facilitar la participación pública en la administración provincial. Se estableció un consejo provincial en la Provincia de Lagos, compuesto de un Comisionado Provincial, y nueve funcionarios, cinco africanos, dos asiáticos y dos europeos. Las funciones del consejo son principalmente consultivas y deliberativas, pero tiene también algunos poderes de carácter financiero; en 1950 se estableció en la Provincia Meridional de Tierras Altas un consejo similar con funciones netamente consultivas y deliberativas.

El Consejo de Administración Fiduciaria vió con satisfacción esta evolución y expresó la esperanza de que se aumentaría el número de consejos y la representación de africanos en cada uno de ellos. Sin embargo, el programa fué aplazado en espera del informe del Comité de Desarrollo Constitucional; y este Comité, a su vez, si bien propuso el establecimiento de administraciones regionales basadas en regiones más extensas que las provincias existentes, con consejos constituídos por representantes de todas las razas que controlasen la política y presupuestos regionales, y de condados más extensos que los actuales distritos, recomendó que la cuestión fuese objeto de nuevos estudios. La Misión Visitadora de 1951 estimó que la situación existente no debía permanecer estática mientras se estaban realizando prolongadas investigaciones, que se debían adoptar medidas especiales para mejorarla y que la Autoridad Administradora debía establecer su política para la organización administrativa regional con la mayor celeridad posible. En su 11° período de sesiones, el Consejo habiendo sido informado de que, si bien se podría aplazar la introducción de administraciones regionales, se estaban examinando diversas propuestas relativas a la descentralización, había pedido a la Autoridad Administradora que en el próximo informe anual incluyese información completa sobre los resultados de sus deliberaciones. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones que, como resultado de nuevas investigaciones realizadas por un Comisionado Especial, a fines de 1953 se había promulgado una ordenanza sobre administración local (véase a continuación *Administración local*, sección c)).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

a) Administración rural

La forma de autoridad que reglamenta más directamente los asuntos de la gran mayoría de la población — es decir, de más de 7.500.000 de africanos que viven en las zonas rurales — es la ejercida por las "Autoridades Indígenas" cuya base es, en casi todas las localidades, el dirigente tradicional del pueblo, generalmente el jefe hereditario, un grupo de jefes o un consejo de notables. Las autoridades indígenas son oficialmente reconocidas como tales por la Administración, y están legalmente investidas con poderes ejecutivos, legislativos y responsabilidad financiera locales. Como se ha dicho antes, si bien se entiende que dichas autoridades no tienen relación orgánica alguna con los órganos de la administración central, son responsables de la aplicación de las disposiciones oficiales en la administración local y sus actividades son supervisadas por el Comisionado de Distrito local.

En 1952 existían 386 de estas Autoridades Indígenas, muy diferentes entre sí en importancia y estado de evolución. La forma actual de esas Autoridades Indí-

genas es resultado de un largo proceso llevado a cabo por la Autoridad Administradora para restaurar la autoridad de las instituciones tribales tradicionales, organizando sobre ellas un sistema de administración local, consolidándolas mediante la unión y la federación, reuniendo sus recursos y modificándolas gradualmente con objeto de ajustarlas a los conceptos modernos de administración local. Esa es la política a la que la Autoridad Administradora dedica actualmente atención especial como medio conducente al desarrollo político de la población africana; estima que el desarrollo de un sistema eficiente de administración local sobre bases democráticas es "el mejor método de preparar a la población para participar plenamente junto con los demás habitantes del Territorio, en la obtención del gobierno propio o de la independencia".

En la práctica, la introducción de métodos democráticos entre las Autoridades Indígenas ha hecho necesario encontrar medios para disminuir la autoridad autocrática de los jefes tribales y para que éstos tomaran en consideración el parecer y, con el tiempo, la voluntad de un mayor sector de opinión pública en la ejecución de sus funciones ejecutivas y legislativas locales. Es por esta razón que la Autoridad Administradora declara que en la práctica la transformación de las normas tradicionales en un sistema administrativo moderno ha tomado la forma del desarrollo de consejos de distrito, consejos de división y de consejos de menor importancia. Los consejos que han sido establecidos difieren en su composición, pero en general incluyen un núcleo de jefes y de otros dirigentes tradicionales, a los cuales se asocian un número cada vez mayor de personas elegidas y de representantes de intereses especiales. La Autoridad Administradora informa que en 1952 existían consejos de distrito representativos en la gran mayoría de los 55 distritos administrativos; en algunos casos los propios consejos constituían las Autoridades Indígenas con plenos poderes legislativos locales, pero en otros los consejos ejercían principalmente funciones de asesoramiento respecto de los jefes, especialmente en los casos en los que la jefatura gozaba de mucho prestigio y los jefes se manifestaban renuentes a abandonar sus poderes ejecutivos tradicionales. Dentro de los distritos, los consejos de división varían también en sus atribuciones, y dentro de las divisiones los consejos de menor importancia ejercen ahora principalmente funciones consultivas y deliberativas.

El Consejo de Administración Fiduciaria había expresamente aprobado con anterioridad los métodos generales de desarrollo, instando a la vez a que se acelerase el proceso de democratización y recomendando una intensificación de los esfuerzos entre las tribus menos evolucionadas — cuestión sobre la cual la Autoridad Administradora ha declarado que las medidas adoptadas por ella generalmente se han anticipado mucho a la demanda pública. En su 11º período de sesiones, el Consejo hizo suya la opinión de la Misión Visitadora de que había llegado el momento en que la Autoridad Administradora debía examinar detenidamente la posibilidad de efectuar una reforma importante de la legislación que rige las actividades de las Autoridades Indígenas y de los consejos de distrito, a fin de establecer una norma más uniforme de administración local africana para todo el Territorio.

La Autoridad Administradora ha respondido a esta observación declarando, en su informe anual de 1952, que si bien la posible modificación del sistema de ad-

ministración rural local tendría que ser estudiada tomando en consideración las propuestas relativas al establecimiento de consejos de condado (véase a continuación sección c)), las normas políticas de la administración local africana eran lo suficientemente claras como para permitir la preparación de una nueva legislación general. La Autoridad Administradora declaró además que se había alcanzado ya un mayor grado de uniformidad en la composición de los consejos de distrito. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13º período de sesiones, que había proseguido la creación de consejos locales para sustituir las funciones administrativas y ejecutivas de las Autoridades Indígenas y que en muchas regiones se habían ampliado los consejos de distrito añadiéndoles miembros dirigentes de la comunidad seleccionados sin tener en cuenta su raza. Declaró que esta medida había obtenido un éxito muy importante en algunas regiones, particularmente en el distrito de Newala en la Provincia del Sur.

El Consejo de Administración Fiduciaria había también recomendado previamente que se estableciesen servicios de formación en materia de administración local, en vista de que existe escasez de personal técnico y administrativo, y se le informó que la Autoridad Administradora esperaba que con la inauguración de una escuela de formación profesional en Mzumbe se realizarían rápidos progresos en este sentido.

b) Administración urbana

La organización de la administración urbana local ha alcanzado su máximo desarrollo en Dar-es-Salaam, la capital (población, 100.000 habitantes) que está administrada por un Consejo Municipal autónomo, autorizado para fijar impuestos y hacer préstamos. En 1952 el Consejo estaba compuesto por siete africanos, siete asiáticos, siete europeos y dos funcionarios europeos que representan al gobierno. Todos estos miembros del Consejo son nombrados por el Gobernador, quien aprueba también el nombramiento del secretario municipal y de los principales funcionarios ejecutivos del Consejo. El alcalde de la ciudad es elegido anualmente por el Consejo; el alcalde elegido en 1952 era un asiático.

Se esperaba que una segunda población, Tanga (población, 22.000 habitantes), adquiriría rango de municipalidad o autonomía a mediados de 1954. Otras 29 poblaciones de Territorio han sido declaradas oficialmente municipalidades y las autoridades municipales están encargadas del cumplimiento de los reglamentos locales; dichas autoridades consisten en un Comisionado de Distrito y otros funcionarios y, en la mayor parte de los casos, de una mayoría o de un número igual de miembros no oficiales pertenecientes a los tres grupos de población. Si bien la Autoridad Administradora informó en 1951 que estaba examinando con toda diligencia la posibilidad de otorgar autonomía a otras municipalidades importantes, ninguna de ellas disfrutaba de dicha autonomía en 1952. Dichas municipalidades no poseen atribuciones financieras estatutarias, pero 21 de ellas tenían sus propios presupuestos que son financiados por el gobierno central. Se proyectaba establecer consejos municipales en tres de esas poblaciones (Mwanza, Arusha y Moshi) antes de que terminase el año 1954.

La Autoridad Administradora informó que la evolución más notable en materia de administración urbana

local en 1952 fué la promulgación de una ordenanza en la que se autorizaba a las municipalidades y a cinco cuerpos municipales determinados a fijar impuestos sobre la valoración de solares o sobre sus mejoramientos, o sobre ambos a la vez. En Dar-es-Salaam el impuesto sólo se había basado anteriormente en mejoramientos.

c) *Propuestas para un mayor desarrollo de la administración local*

En su 11° período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria examinó algunas propuestas, sobre las cuales informó con algún detalle a la Asamblea General; estas propuestas estaban encaminadas a desarrollar todavía más la administración local y le fueron presentadas por el Comité de Desarrollo Constitucional en 1951.

En resumen, el Comité recomendó que en todo el Territorio se crearan consejos de condado, cada uno de ellos con jurisdicción local sobre un territorio mayor que el de los actuales distritos administrativos, pero que en un principio tendrían a su cargo sólo aquellos asuntos que afectaban claramente a todas las razas, como son, por ejemplo, el mantenimiento de carreteras, los mercados y los servicios de sanidad. Los consejos disfrutarían de atribuciones financieras y tendrían normalmente una mayoría de miembros no oficiales pertenecientes a todas las razas.

Los consejos de condado complementarían a los órganos actuales de administración local, es decir, a las Autoridades Indígenas y las autoridades municipales y no los reemplazarían o fiscalizarían. Las autoridades existentes suministrarían algunos de los miembros que formarían los consejos de condado, pero continuarían siendo responsables en general, ante el gobierno central.

La Misión Visitadora de 1951 observó que las funciones propuestas para los consejos de condado no parecían ser en modo alguno muy extensas, e informó al Consejo de Administración Fiduciaria que la Administración esperaba que los consejos estarían funcionando dentro del plazo de un año. El informe anual para 1952 indicaba que las propuestas eran objeto de estudios más detenidos por parte de un Comisionado Especial, cuyo informe se estaba examinando en forma preliminar al terminar el año.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, durante su 13° período de sesiones, que a fines de 1953 se promulgó una Ordenanza general sobre administración local en aplicación de las recomendaciones presentadas por el Comisionado Especial. En virtud de esta Ordenanza se proyectaba constituir, en enero de 1954, un consejo de condado en Kilimanjaro, en el cual quedaría incluido el distrito de Moshi, pero debido a la oposición de la tribu Chagga se propuso que se estableciese primero un órgano consultivo compuesto por miembros de todas las razas que sería, en realidad, un consejo de condado "simbólico" y el cual sería transformado cuanto antes en consejo estatutario. Se estaba estableciendo un órgano análogo en Sukumaland donde, a la postre, se instalaría también un consejo de condado con plenas atribuciones.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo felicita a la Autoridad Administradora por haber introducido en su legislación las propuestas relativas a administración local, de las cuales tomó nota

el Consejo en su 11° período de sesiones; comparte la decepción sufrida por la Autoridad Administradora ante la oposición hecha por algunos sectores de la comunidad africana interesada a sus esfuerzos para establecer el primero de los nuevos consejos de condado, y toma nota de su política de no imponer cambios a la población hasta haber realizado todos los esfuerzos posibles para obtener su cooperación plena y voluntaria; recomienda que la Autoridad Administradora intensifique sus actividades en este sentido, por medios tales como el establecimiento de consejos "simbólicos" y otras medidas positivas y expresa la esperanza de que la población interesada cooperará en esos esfuerzos.

SISTEMA ELECTORAL

No existe todavía en el territorio legislación electoral. Los miembros que forman parte de los consejos de administración central y de los órganos provinciales, municipales y de ayuntamiento, son designados. La Autoridad Administradora ha informado que existen, en cierto grado, métodos de elección en el caso de la selección de alguno de los jefes y miembros de consejo africanos, pero declara que los principios de la representación popular no son todavía apreciados por la masa de la población.

Algunos de los portavoces africanos recibidos en audiencia por la Misión Visitadora de 1951 señalaron la necesidad de representación electiva en el Consejo Legislativo. La Misión estimó posible proceder casi inmediatamente a la elección de los miembros europeos y asiáticos, mientras que los miembros africanos podrían continuar siendo designados hasta que se pudiese establecer un sistema electoral para ellos. El Comité de Desarrollo Constitucional aceptó también el principio de la representación electiva para el Consejo Legislativo, y, después de transcurrido cierto plazo, para los consejos regionales y de condado, cuyo establecimiento proponía.

La representación electoral fué una de las cuestiones estudiadas por un Comisionado Especial en 1952.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, teniendo en cuenta su deseo de que se establezca con el tiempo la representación electiva en los diversos organismos administrativos del Territorio, toma nota con satisfacción de que el Comisionado Especial ha recomendado, en principio, la representación electiva tanto en la administración central como en la administración local. El Consejo considera una primera medida muy útil adoptada en este sentido, el impulso que la Autoridad Administradora ha dado al uso del sufragio por los habitantes indígenas en la selección de algunas autoridades y consejos locales, y aprecia la importancia que a ese respecto tienen sus esfuerzos para unificar o federar a las tribus más pequeñas en unidades más importantes. El Consejo expresa la esperanza de que una experiencia constante y cada vez mayor en métodos electivos en la administración local ayudará a facilitar la pronta introducción del sufragio universal basado en una lista común.

CUERPO DE EMPLEADOS PÚBLICOS

El cuerpo de empleados públicos del Territorio se divide en cuadro de funcionarios superiores, cuadro de funcionarios subalternos y cuadro de servicios subordinados. El cuerpo de empleados públicos, considerado en su totalidad, consistía en 1952 de 2.747 europeos

(2.599 en 1951); 1.359 asiáticos (1.259 en 1951); y 13.719 africanos (12.381 en 1951).

Todos los puestos superiores (es decir, los puestos principales) han sido desempeñados por europeos durante los últimos 5 años.

La escala de sueldos incluida en el informe anual indica que los sueldos básicos van desde 20 chelines (seguramente mensuales) en los servicios subordinados hasta 1.335 libras esterlinas, que pueden llegar hasta 1.535 libras anuales, en la más alta categoría del cuadro de funcionarios superiores (exceptuando los puestos principales). En agosto de 1952 un subsidio de emergencia que ascendía al 25% del salario básico con un máximo de 250 libras esterlinas, fué aumentado hasta el 30% con un máximo de 300 libras esterlinas.

La Misión Visitadora de 1951 informó al Consejo de Administración Fiduciaria, el cual había hecho notar anteriormente que existían "muy pocos" africanos en el cuadro de funcionarios superiores, que un africano había sido ascendido a esa categoría. La Misión informó también sobre cargos presentados por africanos y asiáticos relativos a la desigualdad de oportunidades de ascenso y salarios, y al resentimiento existente ante el hecho de que los empleados no europeos ascendidos al cuadro de funcionarios superiores percibían sólo tres quintas partes del sueldo que se pagaba a los europeos que ocupaban los mismos puestos.

En vista de ese informe el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora estableciese una escala uniforme de salarios básicos para los funcionarios, cualquiera que fuese su país de origen, y que esa escala fuese complementada por un sistema de subsidios de expatriación y de prima de rendimiento en los casos en que se considerasen aplicables. El Consejo sugirió además que la administración hiciera más asequibles los servicios de enseñanza mediante los cuales pudiesen obtenerse las calificaciones adecuadas para entrar en el cuadro de funcionarios superiores.

La Autoridad Administradora contestó que en 1953 se había iniciado una revisión completa de salarios y que había tenido en cuenta la introducción del principio fundamental de una escala uniforme de salarios básicos. Añadió que proseguiría realizando toda clase de esfuerzos para hacer más asequibles los servicios de enseñanza superior.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las recomendaciones siguientes:

El Consejo nuevamente toma nota de que todavía muy pocos africanos ocupan puestos en el cuadro de funcionarios superiores del cuerpo de empleados públicos. Si bien aprecia las intenciones de la Autoridad Administradora en esta cuestión y las dificultades que ésta entraña y reconoce que el número de africanos calificados para ocupar puestos depende del desarrollo de la enseñanza y de la demanda competitiva de otras ocupaciones, el Consejo recomienda que la Autoridad Administradora intensifique la aplicación de toda clase de medidas que den como resultado la posibilidad de nombrar más africanos para desempeñar puestos de responsabilidad en la Administración. El Consejo toma también nota de los sueldos relativamente bajos pagados a los empleados públicos de origen africano y asiático y recuerda su recomendación anterior encaminada a que la Autoridad Administradora estableciera una escala uniforme de salarios básicos para todos los funcionarios en el cuadro de funcionarios superiores y en

el cuadro de funcionarios subalternos y que esta escala fuera complementada con un sistema de subsidios de expatriación y de primas de rendimiento en los casos en que se consideraran aplicables; el Consejo espera con interés recibir información relativa al resultado de la revisión de salarios que se inició después de su primera recomendación.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

La única organización política que, según informa la Autoridad Administradora, se atribuye la representación de toda la población indígena del Territorio es la African Association (Asociación de africanos), la cual cambió su nombre en 1952 a Tanganyika African Union (Unión de africanos de Tanganyika); se describe a esta organización, que tiene su sede en Dar-es-Salaam y secciones en todo el Territorio, como representativa de los africanos más políticamente conscientes y educados, principalmente en las poblaciones, pero que es casi desconocida para la gran masa de la población.

Las diversas secciones de población asiática tienen sus propias asociaciones. Un grupo importante de opinión europea no oficial está representado por el Tanganyika European Council (Consejo europeo de Tanganyika).

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

El sistema judicial está compuesto por el Tribunal Superior de Tanganyika integrado por un magistrado superior y por cinco jueces; por tribunales inferiores en todos los distritos administrativos, presididos por magistrados que, en la práctica, son o magistrados residentes o funcionarios administrativos locales; por tribunales locales indígenas, compuestos tradicionalmente por el jefe indígena principal o por otra autoridad indígena, pero que en la actualidad presiden, en varios casos, personas investidas de autoridad judicial especialmente. El recurso de apelación se ejercita ante el Tribunal de Apelaciones del África Oriental, por intermedio de los Tribunales Territoriales superiores.

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria había elogiado la política seguida por la Administración para fomentar la evolución del derecho consuetudinario, que es administrado por los tribunales indígenas, y la separación de las funciones judiciales de las funciones tradicionales de las Autoridades Indígenas. También había expresado la esperanza de que, en el caso de los tribunales inferiores, aumentará en forma paulatina el número de magistrados residentes. Posteriormente, la Autoridad Administradora informó que el número total de estos magistrados aumentó de nueve que había en 1948 a 21 en 1952, y que en el presupuesto se preveía el nombramiento de otros dos magistrados.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo toma nota con aprobación del importante y reciente aumento en el número de magistrados residentes, aumento que interpreta como prueba de un nuevo progreso en la tarea de separar las funciones judiciales de las funciones administrativas, y expresa la esperanza de que este proceso de separación continuará tan rápidamente como sea posible. El Consejo toma nota, además, de que en el cuadro de funcionarios administrativos que ejercen funciones de magistrados figuran ya algunos funcionarios africanos, y expresa la

esperanza de que nuevas experiencias de esta naturaleza y la expansión de la educación superior conducirán a una participación progresiva y cada vez mayor de los africanos en el sistema judicial.

ASOCIACIÓN CON KENIA Y UGANDA

Tanganyika comparte con Kenia y Uganda varios servicios gubernamentales; entre otros, los de defensa, planificación industrial, ferrocarriles, aduanas y recaudación del impuesto sobre la renta, e investigaciones. El Territorio participa en los órganos comunes ejecutivo y legislativo del África oriental que fiscalizan estos servicios.

El Consejo ha examinado periódicamente estas disposiciones como parte de su estudio de las uniones administrativas que afectan a los territorios en fideicomiso. En su 13° período de sesiones, el Consejo tomó nota de que, en virtud del Real Decreto de 1951 para el África Oriental (Alta Comisión) (Enmienda), se autorizó la continuación del funcionamiento de la Asamblea Legislativa Central del África Oriental hasta el 31 de diciembre de 1955. Recordó el Consejo que anteriormente había expresado la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría todas las medidas posibles para informar a la población acerca del funcionamiento y las consecuencias de la unión administrativa y de que tomaría en cuenta las opiniones de la población antes de emprender cualquier revisión de los actuales arreglos.

A este respecto, el representante de la Autoridad Administradora manifestó al Consejo que indudablemente, antes de procederse a cualquier revisión en ese sentido se consultaría plenamente al Consejo Legislativo de Tanganyika, que es el mejor órgano al que puede recurrirse en la actualidad para conocer la opinión pública. También se tendrían en cuenta otras expresiones de la opinión pública, pero el estado actual de los servicios de información del territorio en fideicomiso era tal que apenas si era posible efectuar un referéndum de cualquier naturaleza. Todos los informes y documentos pertinentes relativos a la unión administrativa estarían a la disposición de cualquier persona que tuviera interés en verlos, y la prensa, cada vez más numerosa, del Territorio estaba prestando mucha atención a las cuestiones relativas a la unión administrativa. El representante de la Autoridad Administradora declaró también que ésta continuaría suministrando al Consejo de Administración Fiduciaria toda la información de que dispusiera con respecto a la cuestión de la unión administrativa, y que cualesquiera acontecimientos especiales serían comunicados al Consejo a medida que fueran ocurriendo.

Con respecto al punto precedente, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota de que se realizarán consultas con los habitantes del Territorio en fideicomiso antes de la revisión del Real Decreto de 1951 para el África Oriental (Alta Comisión) (Enmienda), expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora no sólo continuará adoptando todas las medidas posibles para informar a la población acerca de las actuales actividades de la unión administrativa, sino que la pondrá también al corriente de sus consecuencias y consultará con ella antes de proceder a cualquier revisión de los actuales arreglos. El Consejo expresa también la esperanza de que la Autoridad Administradora le suministrará, antes de su 15° período de sesiones, una

detaillada información sobre las medidas adoptadas en el presente año a este respecto.

El Consejo recordó también que anteriormente había expresado la opinión de que la Autoridad Administradora debía adoptar todas las medidas posibles para garantizar que las condiciones de empleo aplicadas a los habitantes de Tanganyika que estaban al servicio de la Alta Comisión del África oriental, no fueran menos favorables que las concedidas a los habitantes que estuvieran al servicio del Gobierno de Tanganyika.

El Consejo tomó nota de una declaración formulada por el representante de la Autoridad Administradora, según la cual una Comisión de Sueldos está revisando actualmente toda la escala de sueldos de la Alta Comisión del África Oriental. Se informó también al Consejo que la clasificación anterior de puestos, según la raza, había sido ya abolida y se la había reemplazado por tres categorías: A, B y C, clasificación en la cual no entraba ninguna consideración de la raza y se basaba únicamente en la competencia y en los méritos de cada individuo. Añadió el representante de la Autoridad Administradora que los funcionarios indígenas no recibían actualmente el mismo sueldo que los europeos que ocupaban puestos equivalentes, y explicó que esto se debía a que, si bien el Gobierno ha decidido abolir la norma según la cual los funcionarios civiles de origen local recibían como paga únicamente las tres quintas partes de los sueldos de los funcionarios civiles venidos de ultramar su decisión no podía llevarse a la práctica mientras la Comisión de Sueldos no hubiera publicado sus recomendaciones relativas al establecimiento de un nuevo sistema de sueldos.

Con respecto a este punto, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo acoge con satisfacción la declaración del representante de la Autoridad Administradora en el sentido de que la Alta Comisión del África oriental tiene el propósito de garantizar que las condiciones de empleo que se aplican actualmente a los habitantes de Tanganyika que están al servicio de la Alta Comisión no sean menos favorables que las que disfrutaban los habitantes que están al servicio del Gobierno de Tanganyika, y expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora mantendrá informado al Consejo sobre las medidas concretas que se adopten a este respecto.

En lo que respecta a las actividades del Consejo Industrial del África oriental, el Consejo de Administración Fiduciaria recordó que no estaba firmemente convencido de que esas actividades no podrían perjudicar el futuro desarrollo económico del Territorio en fideicomiso.

El Consejo tomó nota de que la East African Licensing Ordinance (Ordenanza sobre Concesión de Licencias para el África Oriental) de 1952 fué publicada en Tanganyika el 3 de diciembre de 1952, después de haber sido aprobada por el Consejo Legislativo de Tanganyika el 22 de noviembre de 1952, y de que, después de que Kenia y Uganda aprobaron ordenanzas similares en 1953, esta ordenanza entró en vigor el 1° de noviembre de 1953.

El representante de la Autoridad Administradora informó al Consejo de lo siguiente:

a) En septiembre de 1953 el Consejo Industrial de África Oriental (East African Industrial Council) concedió a la firma Van Eeghen y Maclaine (África oriental) Limitada, miembro de la Holland House Dar-

es-Salaam, una licencia condicional para establecer y explotar una fábrica para la manufactura y venta de telas de algodón y rayón en piezas en el distrito de Kisarawe, en Tanganyika;

b) Los tres miembros de Tanganyika en el Consejo Industrial, dos europeos y un asiático, son todavía designados por el Gobernador de Tanganyika, quien opina que ningún africano tiene todavía la necesaria experiencia industrial o comercial para ocupar puesto en el Consejo;

c) Las actas de las sesiones del Consejo Industrial son de carácter confidencial y, por consiguiente, no pueden ser puestas a disposición del público. La publicación de tales actas serviría simplemente para estorbar las actividades del Consejo Industrial y para someterlo a presiones de los varios grupos comerciales;

d) El sistema de licencias, que se aplica únicamente a una escala muy reducida de productos, se introdujo principalmente con objeto de inducir a los industriales a arriesgar su capital en la explotación de las industrias que se necesitan en el Territorio en fideicomiso. Esta consideración explica también la adición de tres nuevos grupos a la lista de mercaderías que pueden fabricarse únicamente en virtud de licencia;

e) Los intereses económicos futuros del Territorio están protegidos por la legislación existente. Los representantes de Tanganyika en el Consejo Industrial pueden vetar cualquier decisión que consideren perjudicial para el Territorio en fideicomiso.

Con respecto al punto precedente, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando en cuenta estas declaraciones del representante de la Autoridad Administradora, y careciendo de toda otra información que exista con respecto a las actividades del Consejo Industrial del Africa Oriental, no puede declararse plenamente convencido de que el Consejo Industrial del Africa Oriental esté funcionando con arreglo a los mejores intereses del desarrollo económico del Territorio en fideicomiso.

A este respecto, el Consejo recuerda que ya expresó la esperanza de que se estudie la participación adecuada de los representantes debidamente calificados de la población indígena del Territorio en fideicomiso en las actividades del Consejo Industrial.

El Consejo considera que deben examinarse con mayor detenimiento las consecuencias sociales y económicas de la Organización Interterritorial del Africa Oriental y, por consiguiente, pide a la Autoridad Administradora que someta al Consejo la información pertinente que le permita emprender dicho estudio.

Con respecto a las actividades de la Administración de los Ferrocarriles y Muelles del Africa Oriental, el representante de la Autoridad Administradora informó al Consejo que las nuevas tarifas unificadas, que entraron en vigor el 1° de octubre de 1951, no implicaban que el Gobierno se hubiera apartado de su política anterior. Siempre se tuvo en consideración que la racionalización de la estructura de tarifas, que debió haberse realizado hace mucho tiempo, debía ser simultánea con la fusión de los sistemas ferroviarios en 1948, pero que se habían necesitado tres años para completar dicha fusión. La última Misión Visitadora reconoció que la fusión había producido ventajas apreciables para Tanganyika. Con la introducción de las Tarifas Comunes se había completado la labor de fusión de los sistemas de transporte del Africa oriental en conformidad

con los términos aprobados por los cuerpos legislativos del Africa oriental. Naturalmente, esto beneficiaría a todos los territorios interesados y suministraría a las poblaciones un servicio lo más eficiente y económico posible.

El Consejo decidió continuar estudiando la Administración de los Ferrocarriles y Muelles del Africa Oriental.

Finalmente, con respecto a las garantías enumeradas en su resolución 293 (VII), el Consejo aprobó las siguientes observaciones:

a) *El Consejo toma nota de que los informes anuales sobre la administración de Tanganyika correspondientes a los últimos cuatro años, incluso 1952, contienen datos separados de carácter financiero, estadístico y de otra naturaleza, relativos al territorio de Tanganyika, y de que algunos servicios puestos bajo la jurisdicción de la Alta Comisión del Africa Oriental, a saber, la Administración de Ferrocarriles y Muelles del Africa Oriental, están integrados en forma tan estrecha que es imposible dar cifras financieras separadas para el Territorio de Tanganyika únicamente.*

b) *El Consejo toma nota de que en 1952 y 1953 no fueron misiones visitadoras al Territorio y recuerda nuevamente que desde la aprobación de la resolución 293 (VII), la segunda Misión Visitadora visitó a Tanganyika en 1951, y que la Misión observó que los diversos funcionarios de la Autoridad Administradora ofrecieron su plena cooperación para facilitar el trabajo de la Misión.*

c) *El Consejo toma nota de que no existe información alguna que sugiera que no se han conservado los límites del Territorio.*

d) *El Consejo toma nota de que, según se desprende de la información contenida en el informe anual correspondiente a 1952, los ingresos totales derivados del Territorio en fideicomiso ascendieron a:*

1949	1950	1951	1952
(ingresos reales)	(ingresos reales)	(ingresos reales)	(ingresos reales)
£8.585.645	£10.396.887	£11.930.822	£16.430.340

y de que los gastos totales por concepto de administración, bienestar y desarrollo del Territorio en fideicomiso ascendieron a:

1949	1950	1951	1952
(gastos reales)	(gastos reales)	(gastos reales)	(gastos reales)
£9.459.540	£13.560.953	£16.134.855	£20.867.021

y de que los gastos por concepto de administración, bienestar y desarrollo de Tanganyika, correspondientes a los últimos cuatro años no serán, por consiguiente, inferiores al monto total de los ingresos públicos derivados del Territorio.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GNFRALES; ADMINISTRACIÓN CENTRAL

El representante de China, tomando nota con interés de la publicación del informe del Comisionado Especial sobre el desarrollo constitucional y de que se le había dado una amplia circulación entre los habitantes del Territorio, consideró poco alentadora la falta de interés

demostrada por las masas en general. Estimó que esto podría ser un índice del nivel de educación política que era esencial alcanzar antes que la población en general pudiera dar pruebas de una seria preocupación por su porvenir político. Refiriéndose a la declaración pública que se esperaba y en la cual se indicarían las reformas que la Autoridad Administradora tiene el propósito de hacer con respecto al Consejo Legislativo, el representante de China manifestó que esperaba disponer de una mayor información.

El representante de Siria observó que, aunque los europeos constituían el grupo menos numeroso, ocupaban en los principales órganos del Gobierno más puestos que cualquier otro grupo, aun entre los miembros no designados oficialmente, y que se habían opuesto sistemáticamente a que las tres comunidades tuvieran una representación igual. En la esfera oficial, los europeos todavía conservaban todos los puestos clave de la Administración. Aceptó el hecho de que la política e intención de la Autoridad Administradora era corregir gradualmente esa situación; reconoció, por ejemplo, que la Autoridad Administradora había ido en contra de la opinión de los colonos locales europeos en la aplicación de sus planes actuales referentes al Consejo Legislativo. Sin embargo, puso en duda que estas buenas intenciones fueran suficientemente amplias y se tratara de realizarlas con suficiente rapidez. Recordó que hacía casi dos años que el Consejo había tomado nota de la propuesta sobre reorganización del Consejo Legislativo. El Consejo había reconocido la osadía de este plan en comparación con la situación existente en otros territorios; sin embargo, el Consejo estimó que esta propuesta no encaraba el problema real, es decir, el problema de abolir la idea de tratar separadamente a las tres razas, y había sugerido que se empleara una lista electoral común. Habían transcurrido dos años, y no existía todavía la lista electoral común ni se había reorganizado el Consejo Legislativo como se había pensado. Tomó nota de que se habían adoptado algunas medidas para persuadir a los habitantes del Territorio de que adquirieran un interés responsable en el gobierno, y estimó que esta labor podría realizarse mediante una modificación de carácter constitucional. Aunque se había informado al Consejo que se estaba considerando dicha modificación y que dentro de poco tiempo se haría una declaración acerca de ella, no se contaba con información de ninguna clase respecto a la fecha en que se efectuaría dicha modificación. Instó a la Autoridad Administradora a que nombrara más africanos en el Consejo Ejecutivo y expresó dudas acerca de que fuera difícil que una tribu pudiera deshacerse de uno de sus hombres para que prestara servicios en el Consejo Ejecutivo, tal como se había sugerido.

El representante de Australia estimó que cualquier discusión sobre el desarrollo político del Territorio en las principales esferas de la administración era probablemente prematura en el actual estado de cosas. En vista de que todavía se estaban estudiando las reformas recomendadas por el Comisionado Especial sobre desarrollo constitucional, su delegación esperaba el resultado con mucho interés.

El representante de Nueva Zelandia estimó que la Autoridad Administradora había obrado prudentemente al esperar la formación de una opinión pública favorable antes de introducir reformas en el Consejo Legislativo. La aceptación del principio de la igualdad política racial, a pesar de los recelos iniciales de algunos grupos

raciales, constituía un buen augurio para que continué el progreso en materia de tolerancia racial en el Territorio.

El representante de Haití, haciendo notar la información de que en el Territorio se había prestado muy poca atención a las propuestas sobre desarrollo constitucional, se manifestó menos sorprendido ante este hecho recordando una observación de la Misión Visitadora de 1951 en el sentido de que, fuera de la tribu, la población no demostraba interés alguno en las cuestiones políticas concernientes al futuro del Territorio. Las potencias encargadas de la administración de los territorios siempre habían atribuido excesiva importancia a una política que él consideraba demasiado estática y retardataria en sus efectos: la política consistente en un respeto exagerado de las costumbres tribales. Se había permitido a la población vivir en el círculo estrecho de la satisfacción de sus necesidades inmediatas y en el halago del ejercicio de una autoridad ficticia. Indicó el representante de Haití que era sorprendente que la Autoridad Administradora pudiera afirmar que la participación de los habitantes indígenas en los órganos consultivo y ejecutivo del Gobierno central iba aumentando año a año y que este aumento estaba limitado únicamente por la falta de personas calificadas, cuando en realidad esta participación consistía en la presencia de un solo africano en el Consejo Ejecutivo y de este mismo africano y otros tres en el Consejo Legislativo. La educación de la población se estaba llevando a cabo con una lentitud singular. Afirmó que todavía quedaba por estudiar, con miras al futuro, el significado de la representación de los grupos africano, europeo y asiático de la población y la elaboración de un sistema social tripartito. Añadió que sería posible hacerse con cierta preocupación la pregunta de si, en determinado momento, no se presentarían dificultades originadas en los derechos adquiridos, y si sería posible hallar una solución satisfactoria a lo que todavía parecía constituir un problema de minorías.

El representante de Francia tomó nota con interés de que, en esta parte de sus Territorios, el Reino Unido consideraba que la educación política debía realizarse primero en las esferas de la aldea y del distrito. Dijo que este era un método racional y efectivo mediante el cual se echaban los cimientos antes de construir la fachada, pero que era demasiado simple y sencillo como para ganarse el apoyo de los que preferían las medidas teóricas a los logros efectivos. Añadió que, sin embargo, era deber de la Autoridad Administradora proceder prudentemente y tomar en cuenta el tiempo y la realidad más bien que la ilusión y la apariencia. Si los órganos ejecutivo y legislativo que asisten a la Autoridad Administradora tenían todavía una competencia, composición y representación algo restringidas, debía notarse, sin embargo, que su condición jurídica iba modificándose año a año en beneficio de los habitantes indígenas.

El representante de El Salvador tomó nota de que se habían adoptado medidas para facilitar las reformas constitucionales propuestas. No obstante, las funciones y la competencia del Consejo Legislativo eran todavía demasiado restringidas y su composición, demasiado limitada. Deberían ampliarse su composición y sus poderes y el representante de El Salvador desearía que sus miembros fueran elegidos más bien que nombrados.

El representante de la India consideró que eran pocos o casi nulos los progresos realizados en el Terri-

torio en la tarea de alcanzar el gobierno propio o la independencia. Añadió que casi no existía motivo alguno de satisfacción, excepto, quizás, el hecho de que no se hubiera registrado un conflicto violento, aunque podría decirse que cuando no hay un conflicto violento no hay progreso. El aspecto más trágico consistía en que cuando se habían establecido instituciones con cierta semejanza a cuerpos representativos — como en el caso de las instituciones africanas inferiores — esas instituciones parecían no formar parte de una estructura que pudiera llegar a ser una administración nacional y conducir a la independencia nacional. A ese respecto Tanganyika estaba muy retrasada. Ni en los órganos de la administración central ni en los órganos de la administración local había persona alguna que ejerciera autoridad, debido a su situación con respecto a sus pueblos. Todas las personas que formaban parte de los órganos central y local del Gobierno eran nombradas, directa o indirectamente, por la Autoridad Administradora. Este hecho se había interpuesto en el camino del desarrollo, porque cuando se proponía una reforma había que solicitar a esta misma autoridad nombrada su opinión sobre dicha reforma. Aunque se habían realizado dos encuestas sobre las reformas políticas, la situación permanecía como antes, aunque, en principio, todas las recomendaciones habían sido favorables a la formación de una lista electoral común. En realidad, la insistencia en la representación comunal en Tanganyika era demasiado ominosa y, en la práctica, iba aún más allá de la división del pueblo en asiáticos, africanos y europeos; había una tendencia a introducir divisiones en la comunidad asiática. Sin embargo, no había manera de crear una sociedad multirracial, salvo mediante la introducción de una lista electoral común, con todas las garantías que fueran necesarias para lograr que los más débiles estuvieran debidamente representados. La representación de los europeos, asiáticos y africanos estaba actualmente en proporción inversa a su número. Añadió el representante de la India que estaba dispuesto a reconocer que la mayoría de la población podía estar ampliamente dispersa en todo el territorio, que sus niveles actuales de educación estaban atrasados y que su capacidad para ejercer las funciones del gobierno podrían no ser iguales. Pero aun en este caso, no parecía equitativa para la población africana la actual situación o aun la situación propuesta. En todo caso, la representación basada en las razas o en las comunidades, y aun una división de la comunidad en varios sectores mediante la designación de candidatos para representar a cada sector, tendía a fraccionar el Territorio y a crear por lo menos el reflejo de una doctrina, que la Autoridad Administradora había abandonado en otros lugares, encaminada a dividir a la población con objeto de mantener la fiscalización que ejerce sobre ella la Autoridad Administradora. Ese sería el resultado, aunque no fuera el motivo. Manifestó el representante de la India que era mejor enfrentarse ahora a este problema y establecer rápidamente en Tanganyika un sistema de gobierno representativo basado en la lista electoral común. Sin embargo, se había informado que el Consejo Legislativo se oponía a esta medida; no podría esperarse otra cosa, puesto que el Consejo Legislativo incluía a personas que habían sido especialmente seleccionadas por la Administración sobre esa base, que ocupaban un lugar en el Consejo merced a un favor de la administración y que probablemente no serían favorecidas en una elección. Cuando un jefe africano protestaba que su gente no tenía capacidad para

votar, esto podría muy bien deberse al hecho de que si ese pueblo votara él no sería el jefe. Por otra parte, la población india, con el influjo de otras poblaciones que tenían ideas raciales, y con la creación en otras partes de mayorías permanentes, temía que pudiera suprimirse una especie de protección, por autocrática que ésta fuera.

Sin embargo, no existía justificación alguna para establecer divisiones comunales en Tanganyika, donde se había estado realizando, durante 2.000 ó 3.000 años, un proceso de mezclas raciales; este hecho constituía un gran error político y haría casi completamente imposible el adelanto hacia el gobierno propio. Probablemente conduciría a divisiones en el país y a luchas raciales en el futuro si la Administración no podía resistir, en este momento, a las presiones de otros países y a la de ese elemento colonizador que era el principal opositor a que se otorgaran consideraciones equitativas y a que se concediera el derecho a la representación. Afirmó que debía eliminarse la representación comunal. Podrían presentarse dificultades en la aplicación absoluta del principio, porque los que hoy estaban atrasados podrían permanecer en ese estado durante algún tiempo y podrían ser impulsados en esa dirección por la mayor conciencia política de las comunidades europeas o asiáticas. El representante de la India expresó la esperanza de que en el próximo informe la Autoridad Administradora podría declarar que no se estaba llevando adelante este fraccionamiento y que, dentro de las fracciones, no se estaban introduciendo otras nuevas; que la Autoridad Administradora ya no confiaba en los mismos individuos que habían intentado dividir las comunidades en otras partes del mundo, y que el nuevo cuerpo legislativo o la nueva autoridad de Tanganyika, aunque estuviera adoptando algunas disposiciones de carácter práctico para garantizar que efectivamente todas las comunidades estuvieran representadas, no estaba constituida de tal forma como para perpetuar las diferencias existentes. El representante de la India se preguntó también si la Autoridad Administradora — aunque no pudiera aceptar inmediatamente la doctrina de que debe establecerse una fecha límite definitiva para la independencia — estaría dispuesta a informar al Consejo si sería posible precisar las etapas previas necesarias para progresar en ese sentido; por ejemplo, cuánto tiempo se necesitaría para introducir en la administración central instituciones representativas basadas por lo menos en un sufragio limitado; cuánto tiempo se necesitaría para cambiar la actual constitución de las autoridades subalternas e instituir una forma completa de gobierno propio; cuánto tiempo sería necesario emplear para cambiar la rama ejecutiva, que era actualmente, tanto en derecho como en hecho, una burocracia, por un órgano que estuviera por lo menos efectivamente atemperado por la influencia del gobierno representativo; y dentro de cuánto tiempo podrían eliminarse las desigualdades raciales que existían actualmente en los servicios y en lo que se refería al cuerpo legislativo. Sugirió el representante de la India que se solicitara a la Autoridad Administradora que tome este asunto en consideración y que, en su próximo informe anual — o antes si fuera posible — exponga sus propias opiniones sobre el progreso que podría realizarse en ese sentido.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la población indígena estaba privada de todos los derechos políticos y excluida de la administración de su territorio. Todos los poderes esta-

ban concentrados en manos del Gobernador británico y de los funcionarios británicos que actuaban bajo su autoridad. En el llamado Consejo Legislativo, la proporción de la representación era de 1 por 2.000.000 de africanos, 1 por 25.000 asiáticos y 1 por 800 europeos. En el Consejo Ejecutivo, el único miembro africano no era elegido por medios democráticos, sino designado por el gobernador.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que sería fácil, en un esfuerzo por apresurar la creación de una conciencia política o de una educación política, dañar las buenas relaciones actuales entre las razas y convertir en discordia la armonía actual, lo que sería no solamente un máximo error político sino una tremenda desgracia para el Territorio en fideicomiso. Sin embargo, se estaban realizando progresos. La Autoridad Administradora consideraba que el mejor terreno para la preparación de los africanos en materia política eran los órganos locales de gobierno, los que existían actualmente y aquellos cuya creación se proponía. De las varias autoridades indígenas, una consistía en un Consejo elegido en elecciones libres; el jefe, que antes era la propia autoridad indígena, era actualmente sólo el Presidente del Consejo; y existían también órganos asesores, tales como el Consejo Provincial de la Provincia de Lagos y los demás consejos distritales de todo el país. A su modo, cada uno de estos órganos era un terreno de preparación: en cada uno de ellos se enseña a los africanos a tomar parte en sus propios asuntos locales y a dirigirlos, así como a ir adquiriendo una conciencia política. Otro medio importante para alcanzar estos dos fines es el de los periódicos indígenas, en el cual se habían realizado progresos apreciables. En 1951, había 14 periódicos vernáculos y la circulación máxima de cualquiera de ellos era de 3.000 ejemplares; actualmente hay 35 periódicos vernáculos, y la circulación máxima de uno de ellos había llegado actualmente a 50.000 ejemplares. Además, circulaban en el Territorio otros periódicos indígenas. Por otra parte, existían varias asociaciones y se esperaba que se fundaran más en el futuro inmediato. La Asociación Africana de Tanganyika (The Tanganyika African Association) abarcaba todo el territorio. Esta asociación tenía oficinas seccionales en la mayor parte de las ciudades principales y cada día se le conocía mejor y adquiría mayor influencia. Existían también varias asociaciones locales, que sin duda darían origen pronto a mayores medios de expresión y ayudarían así a crear una conciencia política territorial que fuera contraria a una conciencia política local, y prestarían una gran ayuda en la educación política de los africanos. De no ser así, el desarrollo debería impulsarse mediante la educación de los niños y de los adultos.

Refiriéndose a las críticas hechas a la supuesta demora de la reforma constitucional, el representante de la Autoridad Administradora dijo que no había habido realmente demora indebida. El informe del Comisionado Especial se publicó en marzo de 1953. Hasta entonces no podía haberse tomado decisión alguna salvo la de nombrar al presidente del Consejo Legislativo, lo cual se había hecho. La Autoridad Administradora había considerado importante que se concediera cierto tiempo al público para examinar el informe y sus consecuencias, puesto que planteaba muchos problemas que exigían cuidadosa consideración antes de que pudieran adoptarse medidas acerca de ellos. La conveniencia de haber concedido este plazo no muy largo quedó demos-

trada por el hecho de que, aunque originalmente algunos elementos del país se habían opuesto a la idea de la paridad de representación, particularmente algunos europeos y asiáticos, todos estos elementos habían convenido ahora en apoyar la propuesta encaminada a establecer dicha paridad. Esa propuesta había sido aceptada por el pueblo, aunque no necesariamente como una solución definitiva; podía ser preferible esperar a ver en qué forma se desarrollaba, después de que se hubiera realizado la próxima reforma. Dentro de poco tiempo se haría una declaración pública en cuanto a la reforma que se piensa introducir en el Consejo Legislativo, pero habían pocas dudas acerca de que el resultado consistiría en todo caso en un aumento de la representación en el Consejo y, por lo tanto, en el aumento de la representación africana y asiática.

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

El representante de Siria, al poner en duda que las buenas intenciones de la Autoridad Administradora fueran suficientemente amplias y se aplicaran con suficiente rapidez, indicó que, con respecto a la organización regional de la Administración, el Consejo había acogido y estimulado previamente la idea de establecer consejos provinciales en los cuales se tomaran más en cuenta las opiniones de la población en materia de asuntos locales. Siguió luego una investigación y se presentaron propuestas sobre el gobierno regional. La Misión Visitadora se había preocupado de que todo este asunto no quedara estancado mientras se realizaran las investigaciones. Pero lo cierto es que todo lo relacionado con este nivel de organización regional quedó estancado. Añadió el representante de Siria que no había podido ni siquiera encontrar una mención a los consejos provinciales en el informe anual.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

El representante de Siria criticó la demora en realizar la reforma del gobierno local. Se habían presentado propuestas, contrapropuestas y propuestas modificadas y se habían realizado investigaciones. Los consejos que la Misión Visitadora creyó que estarían en actividad dentro de un año a partir de 1951, todavía figuraban sólo en el papel. Además, dicho representante no podía comprender bien cómo estas formas de gobierno local irían a encuadrar dentro del sistema existente, que parecía basarse principalmente en los jefes y otros gobernantes tradicionales. Estimó el representante de Siria que debía hacerse algo sin demora.

El representante de Nueva Zelandia apoyó la importancia que se concedía actualmente al desarrollo de los consejos locales. Por consiguiente, era de lamentar que los planes de la Autoridad Administradora para establecer consejos de condados, de ciudad y locales, no hubieran sido recibidos con mayor entusiasmo por parte de las poblaciones interesadas. Al mismo tiempo, era alentador ver que la Autoridad Administradora perseveraba en sus esfuerzos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Autoridad Administradora debía adoptar medidas para garantizar un período de transición del sistema tribal — sistema que se estaba estimulando actualmente — a un sistema de gobierno propio basado en fórmulas democráticas.

El Representante Especial de la Autoridad Administradora declaró que el ritmo del desarrollo de la administración local no iba tan aprisa como quisiera la

Autoridad Administradora. Sin embargo, por desalentador que esto fuera, particularmente para aquellos funcionarios del país que deseaban naturalmente ver realizados sus planes a la mayor brevedad, no había nada que hacer por el momento fuera del establecimiento de consejos "fantasmas" como intento para captarse la cooperación de las gentes que ahora se oponen a las modificaciones. Indicó que, sin embargo, no podría establecerse en ningún caso ninguno de los nuevos organismos de la administración local mientras no se publicara el informe del Comisionado Especial; el haber examinado ese informe, que fué publicado en marzo de 1953, y el haber promulgado para octubre del mismo año una ordenanza general sobre el gobierno local, compuesta de casi 200 secciones, había sido una proeza nada desdeñable. En lo que respecta a los órganos existentes del gobierno local, se habían realizado modificaciones y adelantos tanto en las constituciones de esos órganos como desde el punto de vista político. En varias regiones, tales como Chaggaland, Meru Mountain, Hamdani y Geita, donde fué necesario designar nuevos consejos y nuevos jefes, no se habían hecho los nombramientos conforme a las costumbres tribales, sino que se habían celebrado elecciones libres por insistencia de los funcionarios administrativos interesados, aunque no siempre había sido posible lograr que los africanos de la localidad accedieran a la práctica del voto secreto. La Autoridad Administradora tenía que enfrentarse al problema de determinar si es posible conciliar la posición de los jefes con la organización de los consejos de condado y de los consejos locales, cuya creación se ha propuesto. El representante especial estimó que, adoptando las debidas precauciones, la posición del jefe como autoridad indígena iría evolucionando paulatinamente; dicho jefe dejaría de tener su función ejecutiva como jefe y quizás al principio llegaría a ser simplemente el Presidente del Consejo, que sería por sí mismo el órgano ejecutivo, y, finalmente, se preocuparía no de las funciones ejecutivas del gobierno local sino simplemente de las cuestiones del derecho y de las costumbres indígenas.

SISTEMA ELECTORAL Y CIUDADANÍA

El representante de China declaró que entre las formas que su delegación deseaba que se adoptaran figuraba la introducción del sistema electoral para seleccionar los miembros del Consejo Legislativo. El hecho de que la Comisión de Desarrollo Constitucional hubiera aceptado el principio de la representación electiva demostraba la conveniencia de esta medida, y él esperaba sinceramente que los resultados del estudio hecho por el Comisionado Especial conducirían a la realización de esta reforma. En la esfera de la administración local, igualmente la extensión del método electoral era tan importante como la multiplicación de los consejos locales.

El representante de El Salvador apoyó las opiniones expresadas por el representante de China sobre la introducción del sufragio. Expresó también la idea de que el establecimiento de una lista electoral común, tal como lo había sugerido la Misión Visitadora, sería una excelente medida hacia el establecimiento de un sentido de unidad y de conciencia territorial, que constituirían la base para la creación, como lo había propuesto previamente el Consejo, de la ciudadanía de Tanganyika.

El representante de Siria tomó nota de una declaración del Representante Especial en el sentido de que

existían varias dificultades en la tarea de crear cualquier forma de ciudadanía en Tanganyika, cuestión que estaba relacionada con la del sufragio. Instó a la Misión Visitadora de 1954 a que prestara a este problema su más cuidadosa atención y a que se cerciorara de los deseos y opiniones de los pueblos del Territorio relativos a este problema. El representante de Siria expresó su confianza en que la Autoridad Administradora prestaría también la más completa atención a esta cuestión vital y que suministraría al Consejo una relación detallada de las medidas adoptadas o de las que hayan de adoptarse para alcanzar una solución. Estimó que el consejo debía formular una recomendación en la que instara a la Autoridad Administradora a adoptar las medidas necesarias para promulgar, a la mayor brevedad posible, la legislación relativa tanto al sufragio universal como a la ciudadanía y a la condición jurídica de los pueblos del Territorio. Instó también a la Autoridad Administradora a ampliar y estimular sus experimentos con votaciones secretas para las cuestiones locales; el vasto conocimiento que tiene la Autoridad Administradora de las tradiciones y costumbres del Territorio la capacitarán, según lo expresó el orador, para realizar una labor tendiente a estimular dicha política.

El representante de Haití señaló, con pesar, que en el Territorio no existía todavía el sufragio universal, aunque los elementos avanzados de la población habían expresado claramente el deseo de que se implantara el principio de nombramiento por elección, que también fué recomendado por la Comisión de Desarrollo Constitucional.

El representante de la India observó que, aunque el Reino Unido había asumido el mandato el 28 de junio de 1919 y la responsabilidad de la administración fiduciaria el 13 de diciembre de 1946, no existía todavía en el Territorio nada parecido a un sistema electoral. En virtud de su política, la Administración estaba privando del derecho de voto a sus propios nacionales y a los nacionales de otros países. Se había presertado esta situación porque no habiéndose realizado un avance en el campo del sufragio, en lo que concierne a la población africana, las demás debían seguir el paso de la que marchara más lentamente. El representante de la India insistió también en la introducción de una lista electoral común con las precauciones que fueran necesarias para proteger los intereses de los elementos más débiles de la población.

El representante especial de la Autoridad Administradora observó que la sugestión hecha por varios miembros para establecer inmediatamente el principio de nombramiento por elección, sobre la base de una lista electoral común para el Territorio y de una condición jurídica común para fines electorales, planteaba un problema muy grande y difícil integrado por muchos elementos, algunos de los cuales habían sido indicados por el Comisionado Especial en su informe. El Comisionado Especial no había recomendado que se realizaran elecciones, ahora o en un futuro inmediato, sobre la base de una lista electoral común para todo el Territorio. Habiendo entrevistado a mucho africanos y discutiendo el asunto con ellos, el Comisionado Especial declaró que, entre otras razones para no establecer una lista electoral común para todo el Territorio, estaba el hecho de que había muchas tribus pequeñas en Tanganyika; en realidad, había sólo una tribu que podía formar un distrito electoral por sí misma. Existiendo

tantas tribus pequeñas, transcurriría algún tiempo antes de que una tribu pudiera decir que estaba representada verdaderamente por un miembro de otra tribu. Cualquiera que fuera la decisión respecto al principio electoral para la formación del Consejo Legislativo, parecía imposible en la actualidad pensar en elecciones sobre la base de una lista electoral común para todo el Territorio. Era importante tomar nota de que el principio de nombramiento por elección se había introducido ya en los órganos existentes de la administración local en algunas regiones. La Administración estaba aplicando la política de extender ese principio siempre que fuera posible lograr que los africanos lo aceptaran para elegir sus consejos o sus jefes. Añadió el representante especial que la cuestión de crear una ciudadanía de Tanganyika estaba todavía en estudio, pero que deseaba insistir en que, aunque el Comisionado Especial había subrayado en su informe el hecho de que era usual relacionar la ciudadanía con el sufragio, él mismo no había declarado que eso fuera necesariamente así, y estimó que podía informar que la introducción de las elecciones no se demoraría simplemente por causa de las dificultades que pudieran presentarse en la redacción de una ley por la cual se estableciera la ciudadanía de Tanganyika y que, en realidad, estas dos cuestiones podrían estudiarse separadamente.

CUERPO DE EMPLEADOS PÚBLICOS

El representante de China expresó su satisfacción al saber que la Administración había adoptado medidas para revisar las escalas de sueldos del cuerpo de empleados públicos, y esperaba que se dieran mayores explicaciones en el próximo informe anual. En cuanto al nombramiento de africanos como funcionarios superiores de la administración — cuestión que había sido motivo de gran preocupación para el Consejo de Administración Fiduciaria en su 11° período de sesiones — eran muy pocos los progresos realizados, y el representante de China esperaba que se hiciera un esfuerzo más intenso para acelerar los programas de formación profesional.

El representante de Siria instó a la Autoridad Administradora a que nombrara africanos calificados para desempeñar puestos superiores en la administración del Territorio. Dijo que no podía comprender por qué, después de una tutela de poco menos de 40 años, ni un solo africano ocupaba un puesto principal en los servicios administrativos de su propio país, mientras que en los territorios vecinos y otros territorios muchos africanos ocupaban esos altos puestos. La Autoridad Administradora debería intensificar sus esfuerzos en ese sentido. El representante de Siria expresó también la esperanza de que, cuando se efectúe la revisión de las escalas de sueldos, se disminuya la diferencia que existe entre los salarios del personal de las diferentes razas.

El representante de El Salvador estimó que debería aumentarse el número de africanos designados para ocupar puestos en las ramas ejecutiva y administrativa de la administración pública en conformidad con las recomendaciones del Consejo y con las obligaciones asumidas voluntariamente por la Autoridad Administradora.

El representante de la India indicó que, de 1948 a 1952, el elemento europeo en el cuerpo de empleados públicos había indicado un aumento del 70%, mientras que los otros dos elementos habían indicado un aumento de sólo el 50%. Además, los 2.747 puestos ocupados

por europeos representaban una abrumadora y desproporcionada cantidad, tanto en lo relativo a emolumentos como a la categoría del empleo. De los 13.719 africanos empleados, por ejemplo, bastante más de 3.000 eran policías. Naturalmente, la fuerza trabajadora requerida se tomaba de ese mismo sector de la población y ninguno de los altos puestos estaba ocupado por asiáticos o africanos. Además, se había empleado a los asiáticos en ciertos puestos en donde no se admitía a los africanos. Si había individuos africanos capaces de ocupar puestos o de ser elegidos para las jefaturas de tribu, no era nada ilógico, biológico o inherentemente, que se les educara con objeto de que asumieran mayores responsabilidades. Así, pues, si no había africanos que pudieran ocupar altos puestos dentro de la administración, la razón de ello debía ser que la educación, y todos los servicios y las condiciones económicas que capacitaban a la población para aprovecharse de la educación, faltaban en el Territorio; que las oportunidades que se daban dentro del servicio no fueran suficientemente halagüeñas ni siquiera para los hombres educados que pudiera haber disponibles, o que — y el representante de la India esperaba que este no fuera el caso — la Administración temiera que en los puestos de responsabilidad hubiera africanos. El número de europeos en la Administración era totalmente desproporcionado y estaba calculado para impedir a los demás sectores de la población, los asiáticos y los africanos, llegar a posiciones de igualdad, porque todas las posiciones desde las cuales se ejercía control estaban ocupadas por europeos y los nuevos inmigrantes estaban ocupando sus puestos en un grado cada vez mayor. Al mismo tiempo, era necesario reconocer que no existía prueba alguna de que se estuvieran pagando sueldos desproporcionadamente altos al elemento europeo; en realidad, las pruebas demostraban lo contrario. La importancia de esta política parecía residir no en este aspecto sino en la conservación del poder. Aun asumiendo que la educación y la experiencia administrativa de los africanos no fuera adecuada, no podía justificarse una conclusión de esa clase con respecto a los asiáticos, cuyos países de origen eran autónomos; no podía haber justificación, salvo la de discriminación racial o la del temor de que el traspaso de la autoridad administrativa a otros elementos pudiera tener como consecuencia la disminución de la autoridad de la Potencia Administradora.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas indicó que ningún africano ocupaba posiciones de jefe o de adjunto en ninguno de los departamentos de la Administración. Todos los puestos administrativos principales estaban ocupados por europeos; los empleados africanos ocupaban puestos subalternos, tales como los de oficinistas, obreros técnicos, traductores y chóferes, en otras palabras, puestos que no exigen preparación especial. En las provincias, la discriminación contra la población africana indígena se practicaba también en forma amplia y los africanos ocupaban únicamente puestos inferiores, tales como los de oficinistas, mientras que todos los puestos más importantes estaban en manos de los europeos.

El representante especial de la Autoridad Administradora observó que era erróneo afirmar que no había africanos en los puestos superiores de la administración pública. La realidad es que en el cuadro de funcionarios superiores hay africanos y asiáticos; su número aumentaba gradualmente y la política de la Administración

consistía en estimular este aumento. Era práctica rutinaria de la Administración la de que, tan pronto como un africano estaba calificado y capacitado para ocupar un puesto superior, era nombrado para ese puesto. Los puestos superiores de la Administración estaban ocupados predominantemente por europeos sólo porque en la actualidad no había un número suficiente de africanos de esa clase. El número de africanos que habrán de ocupar puestos superiores en la Administración irá aumentando año a año, a medida que el efecto acumulativo del plan decenal de enseñanza se haga evidente. Sin embargo, no se trataba simplemente del número de africanos que salían de las escuelas o que ingresaban a institutos de enseñanza superior. A este respecto, el Gobierno tenía que competir en el mercado y competir con las firmas locales, con el comercio y la industria. Como era el caso, a menudo los sueldos que pagaba el Gobierno no eran quizás tan atractivos como los sueldos que pagaban el comercio y la industria en puestos de responsabilidad similar.

ASOCIACIÓN CON KENIA Y UGANDA

El representante de la India hizo notar que, aunque se complacía en rendir homenaje a la integridad y al alto nivel de la administración de justicia del Tribunal Superior de Tanganyika, le preocupaba el hecho de que el Territorio permaneciera dentro de la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del África oriental, en vista de las condiciones que predominan en otras partes del África oriental. Su anterior mención al incidente relativo a la investigación realizada entre los kikuyus tenía también por objeto señalar que, en su opinión, esta unión del Territorio en fideicomiso con otros territorios sobre los cuales no tenía control alguno la Autoridad Administradora y donde prevalecían otros sistemas era una de las características que militaban en contra de la aplicación de los fines y propósitos del régimen de administración fiduciaria. El representante de la India estimaba también que al usar el Territorio en fideicomiso los servicios estadísticos del África oriental, en los que participaban otros dos territorios, no se facilitaba el suministro de la información necesaria para el adelanto de los propósitos del régimen de administración fiduciaria.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que su creencia de que la política aplicada en Tanganyika estaba destinada a consolidar un régimen colonial en el Territorio se apoyaba en la existencia de la unión administrativa, la llamada Organización Interterritorial del África oriental. Esta unión había causado la absorción económica, política y administrativa del Territorio en fideicomiso y su unificación con las colonias británicas de Kenia y Uganda, y la aplicación al Territorio en fideicomiso del sistema colonial que existía en esos otros territorios. Ahora existía una administración central para ocuparse de un gran número de problemas, y responsable de 23 departamentos y servicios de los tres territorios. La lista era de tal naturaleza que era posible preguntarse cuáles eran las funciones de gobierno que se dejaban a Tanganyika. El hecho era que Tanganyika era un Territorio puesto bajo la administración fiduciaria de las Naciones Unidas, y no una colonia británica. Las Naciones Unidas deben preocuparse de que se desarrolle el Territorio en todos los campos y de que se hagan mes a mes progresos hacia la autonomía y la independencia. Esa era también una de las responsabilidades de la Autoridad Administradora. En cambio, dicha Autori-

dad había unificado el Territorio con Kenia, y el Consejo sabía lo que estaba ocurriendo en Kenia. La misma Administración gobernaba en Kenia y en Tanganyika; los servicios comunes eran administrados por los mismos métodos coloniales y en la Asamblea Legislativa Central del África oriental el Territorio en fideicomiso estaba representado por el mismo número de representantes que Kenia y Uganda. En esta forma se había violado la condición jurídica especial del Territorio, y la Autoridad Administradora había amenazado y perjudicado los derechos e intereses de la población del Territorio. Esa política condenaba al Territorio en fideicomiso a la inmovilidad y a la regresión en los campos político, económico, social y educativo, y no se proponía con ella hacer progresos hacia la autonomía o la independencia. Debía garantizarse el desarrollo independiente de Tanganyika; el Territorio debía tener sus propios órganos legislativo y administrativo, independientes de cualesquiera otros órganos establecidos sobre la base de la unión con las colonias vecinas.

El representante especial de la Autoridad Administradora hizo notar que la declaración relativa al Tribunal Superior de Tanganyika y a sus relaciones con el Tribunal de Apelaciones del África Oriental se basaba en una información completamente deficiente sobre las posiciones relativas de estos dos Tribunales. El Tribunal Superior de Tanganyika era una entidad completamente separada de Tribunal de Apelaciones del África oriental, y no había realmente ninguna diferencia, en la teoría ni en la práctica, entre apelar ante el Tribunal de Apelaciones del África oriental y apelar, por ejemplo, al Consejo Privado. Estos dos tribunales estaban situados fuera de Tanganyika; ambos establecidos por la Reina; los magistrados eran nombrados por la Reina y ejercían sus funciones y deberes con arreglo a la tradición de los tribunales británicos.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

El representante de Siria expresó cierta preocupación por una impresión que había recibido en el sentido de que la Autoridad Administradora no tenía el propósito de dar a la población indígena de Tanganyika el derecho de elegir sus propios jueces y magistrados. El representante de Siria no esperaba que se adoptara esa medida en un plazo de uno o dos años, pero creía firmemente que, a medida que la población fuera progresando, debía ejercer este derecho. La Autoridad Administradora debía preparar africanos jóvenes para puestos tales como los de magistrados del Tribunal y, si fuere necesario, debía enviarlos al exterior para que recibieran una preparación especializada y luego nombrarles jueces adjuntos de manera que pudieran adquirir la experiencia necesaria. Probablemente más tarde podrían ser nombrados y elegidos para ocupar esos altos puestos.

El representante de la India hizo notar que, aunque en Tanganyika una parte apreciable de la legislación escrita era derecho indio, no había ningún africano o asiático en el Tribunal Superior. Era incomprensible que hubiera exclusiones por motivos raciales en este campo. Dijo que esperaba que no estuviera lejano el día en que un africano ocupara puesto en el Tribunal.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas indicó que ningún africano ocupaba puestos en la administración judicial.

El Representante Especial de la Autoridad Administradora estimó que quizás habría habido alguna mala in-

interpretación con el uso de la palabra "magistrado", que denotaba precisamente a un magistrado del Tribunal Superior. Expresó que en el sistema británico de justicia, cuya bondad había sido probada en la práctica, la Reina nombraba a los magistrados, y su posición y su seguridad en el empleo estaban garantizados por la Constitución. Los jueces residentes eran nombrados por el Gobernador, pero en los tribunales locales que conocían en muchos asuntos relativos a los africanos, los jueces, en varios casos, eran seleccionados por un consejo indígena elegido. Añadió que era cierta la afirmación de que un africano no tenía medios para estudiar leyes, y lo era en el sentido de que en Tanganyika no existían instituciones donde pudiera prepararse para ejercer la profesión de abogado; pero los africanos podían llegar a ser abogados en la misma forma en que podían llegar a ser médicos, ingenieros, agrimensores o en que podían optar por cualquiera otra profesión. Informó que no sabía de ningún caso en que un africano se estuviera preparando como abogado en este momento, pero que, sin duda, esto era únicamente cuestión de tiempo.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La economía de Tanganyika se basa esencialmente en la producción y exportación de productos primarios, sobre todo henequén, café, algodón, cueros y pieles, y en la producción de productos alimenticios esenciales para el consumo local. Además, el Territorio posee amplios recursos minerales y existe una importante industria extractiva, cuyas principales exportaciones son los diamantes, el oro, el plomo y la mica. Sin embargo, con excepción de las instalaciones para la elaboración de las materias primas, existen pocas industrias manufactureras y la política económica general de la Autoridad Administradora persigue, entre otras cosas, el fomento de las industrias secundarias con medidas especiales, incluso la reducción de los impuestos y de los derechos de aduana.

Los principales productos de exportación del Territorio, en orden de importancia, son: henequén, café, algodón, diamantes y semillas oleaginosas y nueces. El valor total de las exportaciones ascendió en 1952 a 47.020.000 libras, o sea 7.677.000 libras más que en 1951, al paso que las importaciones aumentaron también en forma muy notable, registrando un total de 37.495.000 libras, en comparación con 28.121.000 libras en 1951.

La gran mayoría de los habitantes indígenas está constituida por agricultores dedicados principalmente al cultivo de productos alimenticios para su propio consumo aunque, con excepción del henequén, el té y el azúcar, cuyo cultivo se realiza principalmente en grandes plantaciones, producen una parte considerable de los productos de exportación del Territorio, incluso la mayor parte del café. Puesto que es propósito de la Administración obtener que la población indígena participe plenamente en el desarrollo económico del Territorio, muchos de los programas del plan de desarrollo del Territorio tienen por objeto el mejoramiento de la agricultura indígena y existen facilida-

des de crédito especiales para los agricultores campesinos en forma de un Fondo Local de Préstamos, que concede préstamos a bajo interés con fines agrícolas. Se está considerando la posibilidad de conceder una ayuda financiera análoga a los africanos que se dedican a actividades comerciales o industriales. La Asamblea General, el Consejo y las Misiones Visitadoras de 1948 y 1951, han hecho hincapié en el pasado en la necesidad de una mayor participación de la población indígena en la economía del Territorio.

Con respecto al progreso económico general del Territorio, la Autoridad Administradora informó que se seguían realizando progresos en la aplicación del plan de desarrollo y bienestar para 1950-1956 que asciende a 25.000.000 de libras; los gastos en 1952 alcanzaron la cifra de 5.500.000 libras. A fines de 1952 se había realizado ya aproximadamente la mitad del programa de gastos de todo el plan y de su parte dedicada al desarrollo económico. Además, del plan de desarrollo, de cuyos detalles específicos el Consejo tomó nota con satisfacción en su noveno período de sesiones, todas las 51 tesorías indígenas, con excepción de una, habían aprobado hasta 1952 programas de desarrollo propios, con un total de 2.000.000 de libras aproximadamente, de las cuales se esperaba gastar 500.000 libras durante el año. El establecimiento de esos programas locales de desarrollo responde a la esperanza expresada por el Consejo en su 11º período de sesiones y representa un progreso con respecto a la situación que prevalecía en 1951, cuando sólo había en ejecución dos programas de esa naturaleza.

Con respecto al desarrollo económico, la Autoridad Administradora informó también que entre las diversas propuestas de asistencia técnica dirigidas a las Naciones Unidas y sus organismos especializados figuraban dos relativas a la prestación de asistencia para realizar exploraciones en yacimientos de minerales conocidos y para llevar a cabo un estudio del suelo y del riego de la cuenca del río Rufiji.

La Misión Visitadora de 1951, en su informe examinado en el 11º período de sesiones del Consejo, señaló a la atención la diversidad de organizaciones que se ocupaban del desarrollo en el Territorio, entre los que figuraban el Gobierno de Tanganyika, sociedades dependientes del Gobierno del Reino Unido y ciertas empresas particulares. Informó que la Autoridad Administradora tenía intención de confiar al Gobierno de Tanganyika la dirección de las actividades de la Overseas Food Corporation (Corporación de Productos Alimenticios de Ultramar) y que aún no se había decidido nada con respecto al control futuro de los programas iniciados por la Colonial Development Corporation (Corporación de Fomento Colonial) cuando hubiesen pasado el período experimental. La Misión estimaba que era necesario que el Gobierno ejerciera un control sobre los proyectos de desarrollo procedentes de la iniciativa privada para asegurar que los intereses de los habitantes indígenas estuvieran convenientemente garantizados. En sus observaciones sobre el informe de la Misión, la Autoridad Administradora expresó que tendría en cuenta las opiniones de la Misión a ese respecto y el Consejo tomó nota de esa garantía, expresando al mismo tiempo satisfacción por el rápido desarrollo económico logrado en el Territorio.

Un problema permanente que afecta al Territorio es el de aumentar la producción de productos alimenticios primarios. En la actualidad, las necesidades totales del Territorio no pueden ser satisfechas por

la producción local, y periódicamente se produce una escasez de alimentos debida a malas cosechas por la irregularidad de la precipitación pluvial. El mejoramiento de los métodos de cultivo y el aumento de la producción de alimentos constituyen dos importantes características del programa de desarrollo y, desde 1949, se han construido instalaciones para el almacenamiento de granos en centros estratégicos con objeto de constituir una reserva para períodos de grave escasez. La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones que, debido a que el año 1952 no había sido favorable para los agricultores, junto con la falta de lluvias en 1953, había causado una escasez de alimentos en algunas regiones. Sin embargo, las reservas de granos almacenados habían aliviado considerablemente la situación y habían reducido la cantidad de granos que de otra manera debería haberse importado a precios elevados.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las recomendaciones siguientes:

El Consejo, reconociendo la necesidad de ampliar las fuentes de los ingresos fiscales que pueden destinarse al desarrollo general del Territorio, acoge con beneplácito la importancia que se concede en los actuales planes de desarrollo territorial al aumento de la producción agrícola. El Consejo interesado también en que los habitantes indígenas participen plenamente en las actividades económicas del Territorio, solicita de la Autoridad Administradora que adopte todas las medidas posibles con objeto de aumentar su participación en la producción de los principales cultivos de exportación, y observa a este respecto que los habitantes indígenas producen ya la mayor parte del café, algodón y algunos otros productos de exportación, y que el propósito especial de los programas locales de desarrollo, cuyo número es mayor en la actualidad, es aumentar aún más la producción africana.

El Consejo, teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de industrias secundarias como medio de diversificar y equilibrar la economía del Territorio, apoya a la Autoridad Administradora en su política general de fomento de dichas industrias con medidas especiales tales como la disminución de los derechos de aduana y toma nota, en particular, de las posibilidades que aparentemente existen, y que se están examinando actualmente, para crear una industria textil, en vista de la actual importancia, por una parte, del algodón en rama como exportación del Territorio y, por la otra, de los productos textiles como importación. El Consejo expresa la esperanza de que los habitantes indígenas participarán en el mayor grado posible en el desarrollo industrial.

El Consejo toma nota con satisfacción de que la política previsor de la Autoridad Administradora, consistente en construir instalaciones para el almacenamiento de granos, evitó que los resultados relativamente pobres de la producción de alimentos en 1952 y 1953 tuvieran consecuencias más graves.

COMUNICACIONES

En el plan de desarrollo, el mejoramiento de las comunicaciones ocupa un lugar muy importante en el orden de prioridad. En 1952, el Territorio tenía 5.189 kilómetros de caminos principales, 22.577 kilómetros de caminos de distrito y 12.800 kilómetros aproximadamente de caminos de aldea, estos últimos, de calidad muy diversa, conservados por las Autoridades Indígenas. Durante el período que se está examinando, se terminaron los trabajos relativos a un nuevo ca-

mino de 192 kilómetros que une a Namanga, Arusha, Moshi e Himo y quedaron casi terminados los trabajos de otro camino que va desde Dar-es-Salaam a Morogoro. Se hicieron nuevos progresos en otros tres caminos: de Dar-es-Salaam a Bagamoyo, de Tanga a Korogwe y de Lindi a Nangana. Se comenzó también la construcción de un camino de 320 kilómetros que va desde Morogoro hasta Iringa, además, se estaba realizando un amplio programa de trazado de caminos.

Entre otras cosas en materia de comunicaciones, se mejoraron durante 1952 los servicios ferroviarios y las instalaciones portuarias.

En su 11° período de sesiones, el Consejo había tomado nota con satisfacción de las medidas que se estaban adoptando para llevar a la práctica el programa de construcción de carreteras, así como de los planes para el desarrollo de las instalaciones ferroviarias y expresado la esperanza de que la Autoridad Administradora continuara prestando gran atención a este importante aspecto del desarrollo económico.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, reconociendo la importancia que la Autoridad Administradora presta a la ampliación de las comunicaciones en el Territorio en fideicomiso como medio de promover el desarrollo general, toma nota con satisfacción de los progresos realizados en materia de mejoramiento de las comunicaciones ferroviarias y por carretera, y solicita de la Administración que continúe intensificando sus esfuerzos en este campo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA; BOSQUES

En términos generales, el agricultor africano practica una forma de agricultura para la subsistencia y la gran mayoría de la población sigue utilizando métodos primitivos. La Autoridad Administradora expresó que para muchos habitantes indígenas las actividades agrícolas son todavía limitadas debido a que los agricultores se contentan con seguir ese sistema.

Una gran parte de la tierra del Territorio no se cultiva todavía a causa de la mosca tsetse y de la carencia de agua, y de tiempo en tiempo se produce una escasez de alimentos. Por consiguiente, el problema inmediato es el de mejorar los métodos agrícolas y obtener la transición de la agricultura extensiva a la agricultura intensiva. Se ha concedido prioridad al logro de la autosuficiencia en materia de productos alimenticios primarios, política que el Consejo había aprobado en su 11° período de sesiones. Se concede también gran importancia en los programas de desarrollo y rehabilitación que se están realizando en varias partes del Territorio, cuyo objeto es aliviar el exceso de uso de la tierra mediante la apertura de nuevas regiones a la agricultura al mismo tiempo que se presta atención al mejoramiento de los métodos de cultivo y de utilización de la tierra. Una Junta de Recursos Naturales vigila en general los recursos naturales del Territorio.

En 1952 no se comunicaron cambios importantes en la superficie dedicada a los principales productos agrícolas: aproximadamente 5.798.800 acres estaban dedicados a la producción de alimentos, de los cuales los africanos trabajaban 5.662.400 acres, mientras que 1.032.000 estaban dedicados a productos de exportación. El henequén, principal producto de exportación del Territorio, se producía casi por entero en plantaciones administradas por europeos, al paso que los

africanos producían la mayor parte del café y casi todo el algodón.

La Autoridad Administradora informó que se realizaron progresos en varios programas de rehabilitación y se obtuvieron resultados satisfactorios de los esfuerzos para obtener la activa cooperación de las Autoridades Indígenas y de la población. Los dos más importantes de esos programas son los del Sukumalandia y de Mbulu. El objeto del programa de Sukumalandia, que ha de abarcar una superficie de unos 51.800 kilómetros cuadrados, es el de organizar una redistribución controlada de la población y del ganado y mejorar los métodos en la agricultura y la ganadería en las regiones recién colonizadas que hubieran sido abastecidas de agua y en las cuales se hubiera exterminado la plaga de la mosca tsetse. El programa de Mbulu es de naturaleza análoga. Entre otros planes figuran los siguientes: un plan de utilización de tierras en la región montañosa de Uluguru; un programa de aumento de tierras para los chaggas; el suministro de mayor cantidad de agua y el exterminio de la mosca tsetse en las malezas de Masailandia; la lucha contra la erosión del suelo en las montañas de Usumbara; y el aumento de la producción agrícola en la Provincia Meridional.

Se están realizando experimentos en cultivos mecanizados en diversas regiones, pero en la actualidad principalmente con carácter experimental; en su 11º período de sesiones, el Consejo recomendó que, tan pronto como se implantaran métodos satisfactorios, la administración alentara en todo lo posible el desarrollo de la mecanización.

El crédito agrícola lo conceden dos organismos. El Land Bank (Banco Agrario) de cuyo establecimiento el Consejo tomó nota con aprobación durante su sexto período de sesiones, concede préstamos a los agricultores, las cooperativas y las Autoridades Indígenas a un interés del 5%. El Local Development Loans Fund (Fondo de Préstamos para el Desarrollo Local), cuya misión principal es fomentar la agricultura africana y árabe, concede préstamos generalmente al 2,5% de interés. Sin embargo, la Misión Visitadora de 1951 descubrió que los africanos tropezaban con dificultades para obtener crédito agrícola debido a que eran pocos los que podían dar como garantía tierras de su propiedad a fin de poder solicitar créditos del Banco Agrario, y rara vez se concedió la garantía de las Autoridades Indígenas locales que se exige a los africanos para poder obtener créditos del Fondo de Préstamos para el Desarrollo Local. La Misión consideraba que la Autoridad Administradora debía buscar otros medios para mejorar los sistemas de créditos puestos a disposición de los africanos.

Además de los proyectos de rehabilitación mediante los cuales se alivió el exceso de población pecuaria y el exceso de pastoreo en ciertas regiones, los esfuerzos principales del Veterinary Science and Animal Husbandry Department (Departamento de Ciencias Veterinarias y Ganadería) se encaminan al desarrollo de planes de comercialización debidamente organizados y al mejoramiento de la cría de ganado. Se han establecido granjas modelos de demostración, así como un laboratorio de investigación, una estación central de cría y una escuela de formación profesional veterinaria.

En anteriores períodos de sesiones, el Consejo había recomendado que la Autoridad Administradora reforzara los servicios agrícolas y continuara inten-

sificando sus esfuerzos por mejorar la agricultura y la ganadería africanas.

El aumento de las reservas forestales continuó durante 1952 y se calculó que durante el año se agregaron alrededor de 5.500 kilómetros cuadrados al total existente de 22.849 kilómetros cuadrados de reservas forestales. El objetivo de la Administración es el de disponer del 8% (70.966 kilómetros cuadrados) de las tierras del Territorio en calidad de reserva. La Corporación de Fomento Colonial inició una importante plantación de acacias en una superficie de 43.000 acres con el fin de producir tanino. En 1949 se otorgó también una importante concesión en la región de la Meseta de Rondó, en virtud de un convenio por el cual los concesionarios pagarán al Gobierno el 50% de las utilidades netas obtenidas de la explotación de madera para construcción y otros productos forestales. En 1951 se exportaron unas 19.380 toneladas de madera para construcción, o sea alrededor de la tercera parte de la producción del Territorio, por un valor de 623.475 libras.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, considerando que la necesidad de aumentar en el mayor grado posible la producción de alimentos merece la atención continua de la Autoridad Administradora, la insta a que conceda mayor prioridad a los planes de desarrollo encaminados a aumentar la producción y mejorar las condiciones y los métodos de los agricultores africanos, y a este respecto atribuye particular importancia a los esfuerzos permanentes, toda vez que puedan realizarse, en materia de construcción de caminos y de mejoramiento del abastecimiento de agua, la concesión de mayores facilidades de crédito a los agricultores, la ampliación de la capacitación agrícola, el mejoramiento de los rebaños de ganado, la transición cuando sea posible de la explotación ganadera a la explotación agrícola mixta, el uso de estiércol y abonos, y otras medidas activas para desalentar las actuales prácticas agrícolas que son perjudiciales para la tierra. El Consejo, consciente del grado en que la eficacia de dichos planes depende de la disponibilidad de personas convenientemente preparadas, acoge con beneplácito la creación de la Escuela de Recursos Naturales y el desarrollo del movimiento de las sociedades cooperativas.

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS: COOPERATIVAS

En el período que se está examinando se hicieron nuevos progresos en materia de sociedades cooperativas, cuestión a la que el Consejo ha dado mucha importancia en anteriores períodos de sesiones. A fines de 1952, había un total de 152 cooperativas registradas con un total de casi 123.000 socios, en comparación con 138 cooperativas en 1951 con 105.762 socios. Entre 1950 y 1952, el personal del Departamento de Fomento de Sociedades Cooperativas, que orienta y ayuda a las cooperativas, fué llevado casi al doble. En su 13º período de sesiones, el Consejo fué informado de que hasta fines de 1953 el número de cooperativas registradas había aumentado a 198.

La mayoría de las sociedades cooperativas se ocupan principalmente de la producción, la elaboración y la comercialización de los productos agrícolas. De éstas, 111 están agrupadas en cuatro uniones de las cuales la mayor, la Kilimanjaro Native Cooperative Union Ltd. (Unión Cooperativa Indígena de Kili-

manjaro, Ltda.), tiene unas 30 cooperativas primarias afiliadas.

En el caso de varios productos primarios, sobre todo la hilaza y la semilla de algodón, el café, el tabaco y el peritre, existen juntas oficiales que controlan toda la comercialización, defienden los intereses de la industria y en algunos casos mantienen fondos de estabilización de precios. La Misión Visitadora de 1951 informó que había encontrado cierto descontento con el funcionamiento de una de esas juntas, la Junta Indígena del Café de Bukoba, debido a su demora en distribuir sus fondos excedentes acumulados en virtud de las fluctuaciones de los precios del mercado. La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 11° período de sesiones, que se habían iniciado negociaciones con los productores sobre esta cuestión.

Anteriormente, parte de la cosecha del café se vendía por contrato al Ministerio de Alimentación y con objeto de obtener que los productores indígenas locales de productos de exportación se beneficiasen ampliamente con el alza de los precios mundiales, el Consejo, en su 11° período de sesiones, recomendó que se revisaran constantemente los contratos a largo plazo entre las cooperativas de comercialización y el Ministerio de Alimentación. Sin embargo, durante 1952 todo el café producido en Africa se vendió por intermedio de conductos comerciales, en su mayor parte en subasta pública.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente conclusión:

El Consejo toma nota con satisfacción del aumento ocurrido en el número de cooperativas registradas que lleva el total a 198 a fines de 1953, así como del aumento del personal de la dependencia oficial respectiva, y expresa su confianza en que, en vista del creciente interés manifestado por los habitantes indígenas, el movimiento de sociedades cooperativas aumentará en forma considerable en todo el Territorio.

TENENCIA Y ENAJENACIÓN DE TIERRAS

En 1952, las tierras del Territorio, que ascienden a 887.608 kilómetros cuadrados, estaban distribuidas aproximadamente de la siguiente manera:

	Kilómetros cuadrados
Tierras laborables, incluso praderas temporales y tierras temporalmente en barbecho.....	74.867
Tierras para plantar árboles, vides y arbustos.....	5.668
Praderas y apacentamientos permanentes.....	149.737
Tierras productivas pero sin cultivar.....	153.777
Tierras de bosques o selva.....	361.792
Otras tierras (por ejemplo desiertos, tierras rocosas, pantanos, tierras cubiertas por maleza, tierras ocupadas por edificios, caminos y aeródromos).....	141.766

La superficie de tierra ocupada de hecho por los africanos no se conoce y por varias razones, incluso debido al sistema indígena de cultivo migratorio, la Autoridad Administradora estima que no es práctico tratar de determinarla. La tierra enajenada a la población no indígena en virtud de derechos de ocupación ascendió en 1952 a 7.846,64 kilómetros cuadrados y en cambio se habían registrado títulos de dominio absoluto con respecto a 1.673 kilómetros cuadrados. En 1951, la superficie total de tierra enajenada ascendió a 9.244 kilómetros cuadrados. En ambos casos, la superficie total de la tierra no excedió del 1%.

Tanto la Misión Visitadora de 1948 como la de 1951 comentaron la política de enajenación de tierras

de la Autoridad Administradora. La Misión mencionada en primer término estimó que la colonización debía ser restringida y mantenida al mínimo de modo tal que no perjudicara el desarrollo y las necesidades y los intereses mediatos e inmediatos de los africanos. La segunda Misión observó que la importancia relativa de la enajenación de tierras a habitantes no indígenas era puesta de manifiesto por la gran proporción de tierras improductivas y señaló que la mayor parte de la tierra enajenada que vio era de buena calidad y estaba situada en regiones favorecidas con buen clima y suficientes lluvias. Por otra parte, el Gobierno había empezado a desempeñar un papel activo en lo concerniente al estudio de los recursos agrícolas del Territorio para determinar qué tierras podrían enajenarse convenientemente, teniendo presentes las necesidades de las tribus africanas y las tierras ya no se ponían en subasta, sino que se concedían a particulares o a sociedades sólo después de escoger cuidadosamente a los candidatos. Sin embargo, a juicio de la Misión, la concesión de derechos de ocupación por un período de 99 años debía considerarse con la mayor prudencia.

La Autoridad Administradora señaló que están todavía desocupadas grandes superficies del Territorio. Estima que las tierras del Territorio que aún no han sido enajenadas, una vez descontadas las tierras no adecuadas para la colonización, proporcionarían espacio para la población actual, a una densidad media no mayor de 14 personas por kilómetro cuadrado.

Aunque la densidad media de la población es baja si se tiene en cuenta todo el Territorio, hay algunas regiones donde existe presión sobre la tierra por diversas razones. En algunas de dichas regiones, esa situación fué creada en un principio por la excesiva enajenación de tierras efectuada durante el régimen alemán y la nueva enajenación durante el período del Mandato. En la mayoría de los casos, se había tratado de resolver el problema por medio de programas de rehabilitación con arreglo al plan de desarrollo territorial (véase la parte sobre Agricultura) pero en el caso de los distritos de Arusha y Moshi de la Provincia Septentrional, región donde se había realizado una amplia enajenación de tierras, una Comisión Agraria especial ha examinado todo el problema. Llegó a la conclusión de que no era factible hacer una nueva distribución del conjunto o de la mayor parte de las tierras tribales y de las tierras enajenadas pero, como medida provisional, recomendó que ciertas tierras pertenecientes a ex enemigos o a misiones y otras tierras enajenadas fuesen asignadas a los habitantes autóctonos de las regiones superpobladas. La solución a largo plazo propuesta fué el desarrollo de las tierras más bajas y contiguas.

En su 11° período de sesiones, el Consejo recibió y examinó varias peticiones de las tribus de la región de Arusha-Moshi relativas a la cuestión de las tierras y a las recomendaciones de la Comisión Agraria. En su informe anual correspondiente a 1952, la Autoridad Administradora expresó que, en general, la aplicación de las recomendaciones de la Comisión se habían realizado normalmente y sin dificultades.

Sin embargo, se planteó una dificultad particular que fué señalada a la atención del Consejo en su 11° período de sesiones, en el caso de la región de Meru del distrito de Arusha donde, a recomendación de la Comisión se adquirió una superficie de tierra que estaba en poder de unas 300 familias wa-meru con ob-

jeto de lograr un bloque homogéneo de colonización no africana, mientras que, al mismo tiempo, los wa-meru mencionados serían establecidos en nuevas tierras, como parte de una colonización más amplia, y serían indemnizados por sus tierras. Algunos de ellos se opusieron a ese plan y finalmente la Administración adoptó medidas encaminadas a llevarlos fuera de la región. En su 11° período de sesiones, el Consejo, habiendo recibido peticiones sobre esta cuestión y habiendo escuchado declaraciones verbales en apoyo de dichas peticiones, aprobó una resolución²⁸² en la cual lamentó que la Autoridad Administradora hubiera considerado necesario desalojar a algunos de los wa-meru y que se hubiera estimado necesario efectuar una expulsión. Consideró que en el futuro la Autoridad Administradora debía inspirarse en el principio de que las comunidades africanas asentadas en la tierra no debían ser trasladadas a otras zonas a menos que expresasen claramente su asentimiento colectivo. Recomendó varias medidas encaminadas a obtener que el pueblo wa-meru recibiera adecuada indemnización y asistencia por las privaciones que había sufrido y recomendó asimismo que la Autoridad Administradora elaborara y pusiera en práctica un plan para el desarrollo y el bienestar de la comunidad en beneficio de los wa-meru.

La Autoridad Administradora expresó en su informe anual correspondiente a 1952 que la Administración había continuado su política, que seguía la norma establecida en las recomendaciones del Consejo, y que, después de haberse dado curso a las peticiones formuladas ante las Naciones Unidas, se había observado un cambio de actitud muy satisfactorio en la población. Se habían realizado conversaciones de mesa redonda a fin de examinar planes para el desarrollo tribal, para el cual se disponía de sumas considerables y parecían existir buenas perspectivas de lograr la plena cooperación de la población en la tarea de llevar a cabo dichos planes. En su 13° período de sesiones se comunicaron al Consejo nuevos detalles de los progresos realizados en el programa de colonización, incluso el hecho de que se habían establecido hasta entonces 413 familias en la región recién saneada y desarrollada y de que se había reservado la suma de 14.000 libras para indemnizaciones, de la cual sólo se había reclamado hasta entonces 130 libras. El Consejo fué informado de que ciertas personas influyentes de la tribu sobre la base de que el Consejo había decidido la cuestión en favor de la tribu habían dicho a la gente que no presentara reclamaciones.

En su 13° período de sesiones, el Consejo tuvo ante sí una petición²⁸³ procedente de la Meru Citizens' Union que contenía, en realidad, un pedido para que se reabriera todo el caso, así como la queja de que mediante la violencia se habían transferido a un colono europeo otras tierras de los wa-meru. La Autoridad Administradora hizo una relación detallada²⁸⁴ de esta cuestión, y lamentó que los peticionarios hubieran interpretado mal los hechos. Las tierras respectivas eran de propiedad en dominio absoluto del colono europeo mencionado y las familias meru que la utilizaban eran, en realidad, ocupantes sin título. Mediante la intervención de la Administración, el colono europeo había convenido en vender esa parte de

su tierra ocupada por colonos sin título establecidos allí desde hacía mucho tiempo; la tierra se entregaría a la Autoridad Indígena meru en condiciones convenientes para que fuera ocupada por los actuales ocupantes sobre la base de tenencia tribal. Sobre este caso, el Consejo aprobó una resolución²⁸⁵ por la que se solicita información respecto del resultado final de las negociaciones y se pide a la Autoridad Administradora que adopte medidas para obtener que, en el arreglo final, los ocupantes indígenas de la tierra disfruten con absoluta seguridad de sus derechos sobre la tierra.

La población indígena en general posee la tierra en virtud de leyes y costumbres tradicionales que varían de una a otra parte del Territorio, pero durante los últimos años, y en forma progresiva, esas leyes y costumbres han sido objeto de modificación y ya en ciertas regiones se ha llegado a un sistema individualista de tenencia de tierras y en otras existe, según la Autoridad Administradora, un deseo creciente de poseer un título más individual del que permite la usanza tradicional. Además, el desarrollo agrícola ha puesto de manifiesto la necesidad de que se utilice mejor la tierra.

Sobre esta cuestión, el Consejo, en su 11° período de sesiones, recomendó que la Junta de Aprovechamiento de la Tierra, que tenía entre sus atribuciones la de adoptar medidas encaminadas al fomento y desarrollo de un sistema conveniente de tenencia de tierras para los africanos, pero que hasta 1951 se había ocupado principalmente de escoger las zonas que habrían de reservarse en virtud de los derechos de ocupación, continuara sin demora formulando dichas recomendaciones. Expresó también la esperanza de que se aumentara la participación de representantes africanos en la Junta.

La Autoridad Administradora respondió que se había aumentado la representación africana y que se esperaba que esa mayor representación resultaría particularmente útil ahora que la Junta y sus comités concentraban sus esfuerzos en la formulación de recomendaciones para el fomento y desarrollo de un sistema conveniente y seguro de tenencia de tierras para los africanos.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión siguiente:

El Consejo, recordando las observaciones formuladas por su Misión Visitadora de 1951 relativas a la enajenación de tierras, y en particular su declaración de que las propuestas para enajenar tierras por períodos no menores de 99 años deben examinarse con la mayor prudencia, y teniendo presente la evolución del Territorio hacia el gobierno propio o la independencia, toma nota de la explicación de la Autoridad Administradora y recuerda la seguridad que ha dado en el sentido de que reconoce plenamente su obligación de observar la prudencia necesaria y obtener que el problema de las tierras de los africanos reciba amplia consideración.

MINERÍA

La industria extractiva es un factor de creciente importancia en la economía del Territorio. Entre los minerales que se explotan actualmente los más importantes son: diamantes, oro, estaño, plomo y mica. Otros recursos minerales conocidos, algunos de los cuales se

²⁸² Resolución 468 (XI).

²⁸³ T/PET.2/164.

²⁸⁴ T/OBS.2/7.

²⁸⁵ Resolución II del documento T/L.436, en la forma enmendada en la 521a. sesión del Consejo.

están explotando en distinto grado, son: caolín, tungsteno, magnésita, sal, yeso y grafito.

La actividad minera que rinde más utilidades actualmente es la explotación de minas de diamantes en Shinyanga. Durante 1952, se reanudó la venta de diamantes, que se había suspendido casi por completo durante 1951 y el segundo semestre de 1950 debido a un conflicto entre la principal compañía minera, Williamson's Diamonds Limited, y los compradores en el extranjero; se registraron ventas sin precedentes que alcanzaron una cifra tres veces mayor que la del año anterior. El valor de todos los minerales extraídos tanto para la exportación como para la venta local se estimó provisionalmente en 6.034.330 libras. El valor de los minerales extraídos para la exportación fué de 5.744.844 libras, de las cuales 4.124.190 corresponden a los diamantes.

Durante todo el año la Corporación de Fomento Colonial continuó investigando los yacimientos de carbón de la cuenca del río Ruhuhu, lo que confirmó la existencia de amplias reservas de carbón explotable. Empresas mineras continuaron también la exploración en busca de minerales, particularmente de metales básicos, en las provincias Central, Occidental y del Lago, y la Administración adoptó las disposiciones necesarias para constituir, en 1953, un grupo especial de geólogos de minas encargados de examinar y determinar la importancia relativa de varios indicios de existencia de minerales. Asimismo, estaba casi terminada al fin del año una solicitud para buscar petróleo en las zonas costeras.

La mayoría de las zonas respecto de las cuales se otorgaron títulos de minería están en manos de súbditos británicos (93,79%); los europeos no británicos poseen el 3,45%, los asiáticos, el 1,98% y los africanos el 0,78%. Siete compañías, todas predominantemente británicas, produjeron las cuatro quintas partes de los minerales de que se dispuso en el Territorio durante 1952.

En su sexto período de sesiones, el Consejo había pedido a la Autoridad Administradora que proporcionara detalles y estadísticas de los ingresos directos e indirectos de todas las fuentes que contribuían a aumentar el presupuesto del Territorio, con relación a los principales minerales explotados, pero la Autoridad Administradora respondió que era difícil calcular satisfactoriamente los ingresos indirectos de la explotación de minas. Los datos suministrados a la Misión Visitadora de 1951 demostraban que, en 1950, se pagaron cerca de 140.000 libras por concepto de regalías, procedentes principalmente de la explotación de las minas de diamantes; y si el total del impuesto sobre la renta pagado por Williamson's Diamonds Limited se agregaba a las regalías, el total de los impuestos pagados por dicha sociedad ascendía a 14 chelines por libra de utilidad. La Autoridad Administradora no suministró nuevas cifras, pero expresó que estaba segura de que el Territorio estaba percibiendo una participación adecuada de la explotación de los recursos minerales del Territorio.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión siguiente:

El Consejo toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora para facilitar las exploraciones en busca de carbón y minerales y para aumentar el número de licencias de explotación y de los derechos de explotación de minas

en poder de los africanos; toma nota además del estímulo y la ayuda que ha dado a los africanos para que exploten sus descubrimientos de minerales y recomienda que adopte todas las medidas que permitan a éstos aumentar su participación en las utilidades procedentes de los recursos minerales del Territorio.

HACIENDA PÚBLICA

Los ingresos reales, en la cuenta territorial, ascendieron en 1952 a 16.430.340 libras y los gastos a 15.877.711 libras. Los ingresos y los gastos calculados para 1953 fueron de 13.482.834 y 14.408.368 libras respectivamente.

Las principales fuentes de ingresos son los impuestos directos e indirectos; en 1952, los derechos de aduana ascendieron a 6.614.186 libras y las licencias y los impuestos a 6.445.674 libras. Los impuestos directos están integrados por el impuesto sobre la renta y sobre las sociedades de capital, los derechos de sucesión, los impuestos sobre la vivienda, de capitación y para los servicios de enseñanza aplicables a los no indígenas y los impuestos a la vivienda y de capitación que deben pagar los nativos. El impuesto sobre la renta se aplica a todos los sectores de la comunidad, pero la carga la soporta principalmente la población no indígena. En 1952, la tasa del impuesto sobre la renta era de 1 chelín 6 peniques por libra sobre las primeras 400 libras de ingresos gravables, aumentando hasta una tasa máxima de 5 chelines; sobre los ingresos de más de 2.000 libras se aplica un recargo que se eleva hasta un máximo de 9 chelines por libra. Las sociedades de responsabilidad limitada pagaron 5 chelines por libra. El impuesto sobre la vivienda o el de capitación debe pagarlo todo varón indígena, físicamente capaz, de 18 años de edad; la tasa anual varía en los distintos distritos entre 13 y 50 chelines.

Aparte del presupuesto territorial, las Autoridades Indígenas tienen sus propias tesorerías, cuyos ingresos proceden de una participación fijada de antemano en los impuestos sobre la vivienda y de capitación aplicables a los nativos, las tasas locales, los derechos judiciales y las multas y los impuestos de amillaramiento aplicados con la aprobación del Gobierno sobre las cantidades de productos que se proyecta vender.

La Autoridad Administradora, en respuesta a una anterior sugestión formulada por el Consejo en el sentido de que se examinara la cuestión de si el impuesto aplicado a los indígenas era satisfactorio y se basaba en la capacidad de pago del contribuyente, informó que, hasta ahora, no habían tenido éxito los esfuerzos desarrollados para el establecimiento de un sistema graduado de impuestos a la vivienda e impuestos de capitación para la población indígena.

Sin embargo, expresó que se consulta siempre a las Autoridades Indígenas con respecto a cualquier cambio en los impuestos actuales y que se han adoptado medidas para aplicar la exención de impuestos en los casos de personas necesitadas.

Además de los ingresos procedentes del Territorio, se suministran fondos para el desarrollo económico en forma de subsidios del Gobierno del Reino Unido en virtud de las disposiciones de la Ley de Fomento y Bienestar Coloniales. En 1952, dichos subsidios alcanzaron un total de 936.489 libras y se recibió una nueva contribución de 79.507 libras de la Administración de Cooperación Económica de los Estados Unidos de América.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de China observó un constante desarrollo económico y una alentadora dedicación a la construcción de carreteras, así como un firme aumento del número de cooperativas. Le fué grato comprobar que el mejoramiento de los métodos de cultivo y el aumento de la producción de alimentos constituían características importantes del plan de desarrollo y deseaba que la Administración continuara teniendo éxito en la ejecución de ese plan en todo su alcance y en el aprovechamiento, en beneficio de la población local, de todas las posibilidades de desarrollo industrial. Tendrían que adoptarse enérgicas medidas para promover y continuar el progreso económico de los habitantes.

El representante de Siria observó que, si bien los europeos eran menos numerosos, ejercían un dominio enorme sobre la economía privada del Territorio. El comercio de exportación e importación (exportaciones, 47.000.000 de libras; importaciones, 37.000.000 de libras) era impresionante para una población total de 8.000.000 de habitantes, pero señaló que las exportaciones de henequén (21.700.000 libras) y de minerales (casi 6.000.000 de libras) eran casi por entero producto de europeos y ascendían a más de la mitad del total del comercio de exportación. Era grato comprobar que los africanos producían la mayor parte del café (5.500.000 libras) y del algodón (casi 5.000.000 de libras) y, probablemente, también la mayor parte de algunos de los otros productos, tales como las semillas oleaginosas, nueces, cueros y pieles; pero quedaba en pie el hecho de que los pocos miles de europeos producían más de la mitad de los productos exportados, mientras que 7.000.000 de africanos producían menos de la mitad. Reconoció que la política de la Autoridad Administradora en materia de hacienda pública contribuyó en cierta forma a contrarrestar ese desequilibrio. Mediante impuestos y derechos de aduana, absorbía buena parte de las utilidades de los europeos y las destinaba, en forma de gastos públicos, al bien del país en general. Reconoció también que la Autoridad Administradora quería alentar a los africanos a ser agricultores y productores mejores y más modernos, a desempeñar un papel más importante en la producción de los productos para exportación y a elevar al mismo tiempo su nivel de vida acercándolo al de los europeos. No obstante, le preocupaba el actual desequilibrio e instaba a la Autoridad Administradora a que alentara y ayudara a la población a cultivar el henequén y otros productos importantes o, por lo menos, a participar en las empresas europeas que monopolizaban dichos productos. La Autoridad Administradora debería también alentar y colaborar en el desarrollo de la industria ligera—tal como, por ejemplo, la industria textil—puesto que el Territorio producía abundantes materias primas, sobre todo algodón. Aparte de proporcionar empleo permanente a gran número de los habitantes indígenas, esas industrias contribuirían materialmente a lograr una economía más equilibrada. Como incentivo, la Autoridad Administradora podría proporcionar ayuda financiera a los habitantes indígenas; eximiéndolos del pago de derechos de importación y de impuestos locales durante cierto número de años, con objeto de obtener que esas industrias incipientes florecieran y se afianzaran sobre una base

económica. Tomó nota con satisfacción de la cooperación de la Autoridad Administradora con la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y los organismos especializados y expresó la esperanza de que continuara dicha cooperación.

El representante de Haití expresó que, con excepción de la mayor exportación de ciertos productos tales como el henequén, el café y el algodón, la situación económica general del Territorio era todavía precaria. La propia Autoridad Administradora había declarado que no había realizado milagros. En realidad, no se había registrado un aumento importante de la superficie de tierras cultivadas y, aunque tenía conciencia de las dificultades con que se tropezaba, estimaba que debía hacerse un mayor esfuerzo por fomentar entre la población indígena el uso de métodos agrícolas modernos.

El representante de Francia observó que el Territorio experimentaba grandes dificultades debido al bajo nivel de la producción de alimentos y tomó nota de los esfuerzos de la Administración por mejorar los métodos agrícolas y por constituir reservas de alimentos. Agregó que debían aplaudirse todas las medidas encaminadas a aumentar la participación indígena en la vida económica del Territorio y, por lo tanto, su delegación había tomado nota con satisfacción de la concesión de préstamos, a bajo interés, a los africanos dedicados a actividades industriales y comerciales.

El representante de El Salvador estimó que la situación económica del Territorio no era alentadora. La balanza comercial era desfavorable; los ingresos habían disminuido; el Territorio no había alcanzado la autosuficiencia a pesar de que era rico potencialmente y poseía considerables recursos naturales.

El representante de la India felicitó a la Autoridad Administradora por los progresos realizados en el campo económico, pero observó que, no obstante, quedaba mucho por hacer. Existía una balanza comercial favorable tanto en el Territorio en fideicomiso como en el territorio vecino de Uganda. Esa balanza favorable había contribuido mucho a compensar la pérdida de comercio en Kenia. El valor de los bienes de capital importados en el Territorio durante el período que se estaba considerando ascendía a 625.000 libras, suma de dinero considerable hace 50 años, pero muy pequeña en la actualidad. El volumen de los bienes de capital podía considerarse como índice de los progresos realizados en el campo industrial. Prosiguió diciendo que todo el sistema financiero del Territorio estaba totalmente bajo el dominio del capital "europeo" (principalmente británico y sudafricano), que controlaba la organización bancaria. No quería decir que la comunidad africana pudiera crear su propio sistema bancario, pero era necesario saber hasta qué punto era colonial la estructura de la economía. El actual dominio del capital de ultramar dejará probablemente a los africanos en una situación tal que su Territorio será meramente un lugar fértil para recibir artículos manufacturados y sus habitantes los productores de materias primas. Consideró deprimente que en un Territorio donde no existía mayor progreso económico se registrara un gran aumento del monto de la moneda emitida. Entre 1951 y 1952 ese aumento había ascendido a muy cerca del 50%; la emisión de billetes y monedas alcanzaba en 1951 a la cifra de 7.592.404 libras y en 1952 a 10.550.904 libras. A menos que hubiera una cantidad suficiente de mercaderías para adquirir con ese dinero, este hecho significaba simple-

mente que había inflación y que el costo de la vida había aumentado. Por lo tanto, la economía del Territorio había llegado a adquirir un carácter más colonial, lo que constituye en gran parte un factor del mantenimiento de la estabilidad de la zona de la libra en otras partes.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó que la Autoridad Administradora seguía una política de consolidación, mediante el dominio de la economía del Territorio por parte de los monopolios británicos y otros monopolios extranjeros, y que no adoptaba medida alguna para promover el desarrollo económico del Territorio en interés de la población indígena. Agregó que todas las posiciones más elevadas en el campo económico eran monopolizadas por representantes de los monopolios británicos y de los demás monopolios extranjeros y que en la industria minera, por ejemplo, sólo se otorgaban concesiones a los europeos y los habitantes indígenas no gozaban de arriendos de minas, aunque la tierra pertenecía a los africanos. Manifestó que de esa manera la Autoridad Administradora estaba convirtiendo a Tanganyika en una base de aprovisionamiento de materias primas en beneficio del país metropolitano. Los monopolios explotaban los recursos naturales del Territorio. Por ejemplo, las compañías mineras habían exportado productos por un valor superior a 5.000.000 de libras, al paso que las sociedades agrícolas habían exportado productos por valor de 40.000.000 de libras y las compañías madereras habían exportado madera para construcción por valor de 623.000 libras. Añadió que, al mismo tiempo, la Autoridad Administradora no hacía nada por establecer industrias manufactureras en el Territorio sobre la base de los recursos naturales existentes. Era notable que el plan de desarrollo económico no contuviera disposición alguna encaminada a la creación de industrias manufactureras pesadas o de industrias mecánicas y que todo el plan estaba subordinado a los intereses de las compañías británicas que operan en el Territorio. Como base para el desarrollo, sólo iban a aumentarse los medios de comunicación, que servirían meramente para facilitar la forma de sacar las materias primas. En el campo de la agricultura, las instalaciones para riego y abono estaban también monopolizadas por empresas y colonos británicos que se habían apoderado asimismo de las mejores tierras del Territorio. Como resultado, los plantadores británicos obtenían cosechas bastante buenas, mientras que los africanos sólo podían obtener cosechas lamentablemente pobres, que no bastaban ni siquiera para cubrir el consumo doméstico en sus familias. La consecuencia de esa política era el aumento del número de personas que no podían producir sus propios alimentos y estaban, por lo tanto, obligadas a vender su trabajo por una paga insuficiente a los monopolios británicos y a los demás monopolios extranjeros.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló, con respecto a los bienes de capital importados, que la cifra de 600.000 libras representaban los importados por el propio Gobierno. El hecho era que en 1952 varias personas y empresas importaron maquinarias y vehículos por un valor de 10.000.000 de libras y se importaron artículos de metal por un valor de 5.000.000 de libras. Por lo tanto, aparte de la importación de bienes de capital realizada por el Gobierno, las importaciones efectuadas por otras personas ascendieron de 10 a 15.000.000 de libras. En lo que se refiere a la disminución de los ingresos del Te-

rritorio, explicó que, puesto que los ingresos dependían en gran parte de las exportaciones del país, debía registrarse naturalmente una variación de los ingresos cuando fluctuaban los precios del mercado mundial. Cuando éstos se elevaban, aumentaban los ingresos de Tanganyika, y esto es lo que ocurrió en los periodos de prosperidad después de la guerra. Ahora han bajado los precios del mercado mundial y, por lo tanto, se redujeron los ingresos de Tanganyika. No debía atribuirse un significado especial a ese hecho si se tenían en cuenta los progresos realizados en el Territorio.

El representante especial manifestó además que no era exacto decir que la industria del henequén estuviera en gran parte en manos de europeos. Sería más exacto decir que estaba en gran parte en manos de las razas inmigrantes, europeas e indias. Señaló que en 1938 no había habido una actividad remunerativa para que los africanos se dedicaran a ella. Ahora los precios mundiales del henequén han aumentado; el Gobierno tenía conciencia de ese hecho y deseaba que los africanos no sólo obtuvieran los beneficios que recibían actualmente del buen empleo en virtud de las buenas condiciones en las plantaciones del henequén, sino que fueran también productores. Sin embargo, pasaría cierto tiempo antes que los africanos fueran competentes para administrar toda una plantación de henequén sin ayuda exterior. Con respecto a los servicios bancarios del Territorio, el representante especial no podía comprender por qué razón no habrían de ser prestados por bancos británicos. Eran buenos bancos y realizaban sus operaciones sobre una base segura. No veía desventaja en ello alguna para los africanos y señaló, además, que no se impedía que otros bancos operaran en el Territorio y no sufrían de limitación alguna con la condición de que ofrecieran las seguridades necesarias a sus clientes. Refiriéndose a la declaración del representante de la URSS, manifestó que este último no había sido siquiera consecuente. Había objetado la explotación o el desarrollo de las minas y la exportación de henequén por estimar que constituía un drenaje de riqueza. Por otra parte, había dicho que debería gastarse más dinero en servicios médicos y en enseñanza. Evidentemente, ambas cosas no son compatibles. Con objeto de que el país tuviera más y más ingresos, era esencial que todos sus recursos—agrícolas, mineros y otros—fueran desarrollados, y desarrollados lo antes posible, pero sin dejar atrás a los africanos. Finalmente, el representante especial expresó que, aunque el Territorio no había alcanzado todavía la etapa de desarrollo en que podría pensarse en establecer industrias pesadas, el Gobierno alentaba el desarrollo de las industrias, sobre todo de las textiles, puesto que ello ayudaría a los africanos y contribuiría a reducir el costo de la vida. El número de fábricas hasta la fecha es de 2.178, con un total de 52.000 personas empleadas.

COMUNICACIONES

El representante de El Salvador consideró que el plan de mejoramiento de las comunicaciones debería llevarse a cabo a un ritmo más acelerado.

El representante de la India tomó nota de que en el informe anual correspondiente a 1952 se mencionaba el mejoramiento de la red de comunicaciones. Abrigaba la esperanza de que en el próximo informe anual se indicara en qué medida esas comunicaciones penetran en el interior del Territorio.

El representante de Siria estimó que en este campo quedaba mucho por hacer. El mejoramiento de los métodos agrícolas, la creación de nuevos centros de capacitación agrícola y la introducción de maquinaria moderna debían recibir la más detenida atención de la Autoridad Administradora. El agricultor africano debe practicar una forma de agricultura remunerativa más bien que de agricultura para la subsistencia.

El representante de Australia declaró que debía felicitar a la Autoridad Administradora por el enérgico programa de investigaciones encaminado a obtener una mayor producción de algodón, café y alimentos. Observó que las estaciones experimentales que se habían establecido parecían funcionar de manera muy satisfactoria y se esperaba que la población cooperaría plenamente en la obtención de nuevos productos.

El representante de Nueva Zelandia señaló, con respecto al problema de la tierra infestada por la plaga de la mosca tsetsé, que se consideraba que el exterminio total de esa plaga sobrepasaba los recursos normales del Territorio, a menos que se descubrieran nuevos métodos más baratos de exterminio.

El representante de Haití expresó que debían hacerse mayores esfuerzos para inducir a la población indígena a utilizar métodos agrícolas modernos. Estimó que era inútil atribuir toda la culpa a los hábitos y costumbres de los agricultores indígenas si no se hacía nada para corregir el mal. Recordando que la Autoridad Administradora había expresado que los jefes indígenas permitían que se siguieran métodos agrícolas deficientes que conducían al empobrecimiento gradual del suelo, dijo que la Autoridad Administradora debía no sólo hacer las advertencias necesarias a los jefes indígenas sino adoptar, si fuera necesario, medidas energéticas.

El representante de la India observó que se había registrado una mejora en los métodos de cultivo y que la Administración había proporcionado instalaciones para el almacenamiento de granos con objeto de evitar las grandes hambres colectivas.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que dicha Autoridad había tenido siempre presente el problema de la mosca tsetsé. Se habían elaborado métodos para combatir la mosca, no sólo como resultado de la labor realizada por el Departamento de Investigaciones sobre la mosca tsetsé, sino también en virtud de la comprobación de lo que había ocurrido en otras partes. Había todavía casos de enfermedad del sueño, pero no eran muchos si se comparaban con la anterior difusión de la enfermedad. En las regiones habitadas el problema había quedado dominado y los servicios encargados de la lucha contra la plaga de la mosca tsetsé habían ideado un nuevo método de saneamiento que había resultado de gran utilidad y había acelerado y disminuído el costo del procedimiento.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS; COOPERATIVAS

El representante de Haití tomó nota con satisfacción de la política seguida por la Bukoba Native Coffee Board (Junta Indígena del Café de Bukoba). Las utilidades excedentes de la Junta, según el representante especial, habían sido distribuídas entre los productores de café y si éstos habían pedido ulteriormente que se utilizara parte de esas utilidades en el

desarrollo de la región, ésa había sido una actitud voluntaria. Por lo tanto, la Autoridad Administradora no había creado el espectro de la inflación ni el peligro de que las utilidades cayeran en manos de los usureros, para imponer medidas que despojara al productor del fruto de su trabajo.

TENENCIA Y ENAJENACIÓN DE TIERRAS

El representante de Siria hizo hincapié en que, si bien era cierto que los europeos, que constituían la parte menos numerosa de la comunidad, sólo poseían una pequeña fracción de las tierras del Territorio, la Misión Visitadora había observado que la mayoría de las tierras enajenadas que vió eran de buena calidad y estaban situadas en regiones favorecidas por un buen clima y suficiente precipitación fluvial. Instó a la Autoridad Administradora a que intensificara sus esfuerzos con respecto al problema de la tenencia de tierras y a que dictara las disposiciones legales necesarias para establecer los derechos sobre las tierras. Al tomar nota de la designación de un funcionario especial encargado de asesorar sobre el régimen de tenencia de tierras para los indígenas, esperaba con interés los resultados de las conclusiones de dicho funcionario en el próximo informe anual.

El representante de la India expresó que no había duda, en lo que a su delegación concernía, que existía en el Territorio un problema de colonos; por lo menos 7.770 kilómetros cuadrados de tierra se habían enajenado a colonos blancos. La tierra se enajenaba con arreglo a contratos de arriendo por 99 años y, contrariamente a lo que manifestó el representante especial, no era probable que a la terminación de ese período la tierra volviera a su dueño original. El resultado de esa enajenación era el de crear gran número de labradores sin tierras que no tenían ocupaciones secundarias y a los que no se suministraban servicios sociales. Por lo tanto, debería considerarse si ese problema de la enajenación de la tierra estaba o no en armonía con el régimen internacional de Administración Fiduciaria.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que se estaba trasladando a los habitantes indígenas de las tierras agrícolas a regiones que no habían sido cultivadas y que las regiones fértiles estaban siendo ocupadas por plantadores y colonos inmigrantes extranjeros. Asimismo, se privaba a la población indígena de los beneficios derivados de sus recursos forestales. La superficie total de tierra sustraída a los indígenas para uso de compañías y colonos europeos ascendió en 1952 a 7.845 kilómetros cuadrados y la Autoridad Administradora había enajenado más de 7.770 kilómetros cuadrados para otorgar concesiones mineras a compañías europeas. En cuanto a las reservas forestales, hasta fines de 1952 la Autoridad Administradora había enajenado un total de 27.972 kilómetros cuadrados. Todo esto, expresó, se hizo con el pretexto de crear las llamadas reservas forestales y se preveía que, en el futuro, la superficie total de reservas forestales ascendería a unos 69.930 kilómetros cuadrados, o sea que se duplicaría. Agregó que el Consejo había recibido varias peticiones de los habitantes indígenas en las que se exponían quejas contra la enajenación de las tierras; citó, en particular, la petición²⁸⁶ de la Meru Citizens Union.

²⁸⁶ T/PET.2/164.

El representante especial de la Autoridad Administradora estimó que la cuestión de las tierras debía examinarse en dos partes. Con arreglo a las leyes y las costumbres indígenas, una enorme superficie de tierra estaba ocupada por los africanos. Esas leyes y costumbres planteaban un problema que sería aterrador para un abogado, pero dicho problema debía resolverse. Sin embargo, al resolverlo debía procederse con cautela porque podrían crearse dificultades si se introdujera, sin tacto, un cambio repentino en el sistema africano de tenencia de tierras. El Gobierno había designado un funcionario superior, dueño de una gran experiencia, para que realizara un estudio especial de la cuestión y mientras no se efectuara este estudio no sería nada conveniente que la Administración adoptara medida alguna para modificar el sistema. Con respecto a otras clases de tenencias de tierras, éstas eran reguladas mediante ordenanza, y el Gobierno abrigaba la esperanza de que los africanos solicitaran derechos de ocupación en virtud de esa ordenanza. Se los alentaba a que así lo hicieran; es decir, cuando la tierra era saneada en zonas no contiguas a las regiones tribales, se los instaba a que la solicitaran. Al principio se habían mostrado indecisos; sin embargo, se habían hecho algunos progresos y varios africanos ya habían presentado solicitudes.

En cuanto a la concesión de derechos de ocupación a no africanos, se consultaba siempre a la población local en primer lugar y, si no oponía reparos, se consideraba nuevamente la petición. Si parecía que ello redundaría en beneficio de los habitantes y del desarrollo del Territorio, se aprobaba la solicitud. Si la población local presentaba objeciones, sus objeciones no podían ser desechadas sin el consentimiento del Secretario de Estado. Sólo en dos ocasiones se habían hecho objeciones de esa naturaleza y la cuestión había sido remitida al Secretario de Estado; uno de esos casos se refería a medio acre de tierra. Si, como se ha afirmado, la Autoridad Administradora hubiera de prohibir la concesión de tierras a no africanos, los africanos serían los primeros en sufrir las consecuencias, ya que se retardarían y reducirían los actuales planes de desarrollo. La agricultura era la base del desarrollo y había regiones del Territorio que no podían ser desarrolladas por los africanos solos en un futuro previsible. Por lo tanto, el Gobierno tenía la alternativa de dejar que la tierra permaneciera improductiva o de hacerla explotar en escala moderna, con métodos modernos, a un costo considerable para los no africanos y en beneficio del Territorio.

En cuanto a la declaración formulada por el representante de la URSS de que se estaban enajenando las tierras de los africanos con el pretexto de establecer reservas forestales, expresó que esa era una deformación de los hechos tan exagerada que resultaba ridícula. Todos los representantes sabían perfectamente que la creación de reservas forestales no entrañaba una enajenación de tierras. Se hacía en beneficio de la población, para la conservación del suelo y para salvaguardar y proteger los bosques, que constituían un valioso haber del Territorio.

MINERÍA

El representante de Siria tomó nota con gran satisfacción de que se estaban adoptando disposiciones encaminadas a aumentar el número de licencias concedidas a los africanos para la exploración en busca de minerales. Instó a la Autoridad Administradora a

que adoptara todas las medidas posibles con objeto de ayudar a los africanos a participar en la explotación de la riqueza mineral del Territorio. También debía prestarse ayuda en la organización de varias empresas mineras indígenas.

El representante especial de la Autoridad Administradora convino en que era conveniente que los africanos participaran en la mayor medida posible en la industria extractiva. Se había hecho referencia a las minas de plomo de Uruwira pero preguntó cómo podía afirmarse seriamente que, en el actual estado de desarrollo de Tanganyika, los africanos podrían establecer una organización para la extracción de plomo en gran escala, como la de Uruwira. Sin embargo, el Gobierno estaba haciendo todo lo posible para alentar a los africanos a que se interesaran directamente en la minería y era erróneo sostener que no se habían otorgado concesiones o derechos de explotación a ningún africano. Un africano había descubierto también un yacimiento de *kianita* y el Gobierno lo ayudará en todas las formas posibles para explotarlo. Necesitará asistencia técnica y financiera, pero en realidad será su mina.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

Según las leyes del territorio, las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres y pueden aspirar a ocupar cargos públicos en condiciones de igualdad. Sin embargo, con arreglo a las costumbres indígenas, que varían notablemente de una tribu a otra, en general se considera a las mujeres como inferiores a los hombres y, si bien éstas pueden ejercer considerable influencia en la comunidad, sus actividades suelen estar restringidas por la tradición y por la falta general de educación. La poligamia y el pago de precio de la novia se practican todavía, pero se informa que la primera está disminuyendo.

La Autoridad Administradora ha informado durante los últimos años que se han manifestado síntomas en número cada vez mayor de un mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer, y que va en aumento la tendencia de las mujeres a participar más activamente en la labor de los consejos locales. Hay varias organizaciones femeninas. La Autoridad Administradora señala que se estimula por todos los medios posibles el desarrollo de las actividades femeninas y que en esa tarea las misiones desempeñan un papel importante.

Tanto el Consejo de Administración Fiduciaria como la Misión Visitadora de 1951 han destacado la necesidad de mejorar la condición jurídica y social de la mujer; y la Autoridad Administradora informa que comparte plenamente la opinión del Consejo sobre la importancia de este problema. En el 11° período de sesiones, se había señalado a la atención del Consejo el problema especial que creaba la tendencia de las mujeres hayas, en el distrito de Bukova, a abandonar el distrito para buscar empleo, y en algunos casos, para dedicarse a la prostitución. La Autoridad Administradora informó al Consejo que había desig-

nado una asistente social en el distrito para que estudiara el problema.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando sus anteriores recomendaciones encaminadas al mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer en el Territorio, y tomando nota del progreso que se ha hecho en tal sentido, recomienda a la Autoridad Administradora que adopte nuevas medidas en esta materia, entre las que podrían figurar el nombramiento de otros asistentes sociales y la intensificación de sus actividades.

DISCRIMINACIÓN RACIAL

En diversas ocasiones, tanto la Asamblea General como el Consejo han hecho recomendaciones sobre la eliminación de la discriminación racial en el Territorio, y en varias peticiones examinadas por el Consejo en su 11° período de sesiones se afirmó que existía dicha discriminación.

La Autoridad Administradora manifestó que no había discriminación jurídica, salvo aquellas disposiciones que favorecían a la población indígena, y que su política consistía en combatir los prejuicios raciales y velar por que todos gozasen de las mismas oportunidades. Afirmó que las diferencias existentes en materia de empleo y en el pago de salarios no se debían a discriminación sino a la experiencia personal y aptitudes del individuo. Con respecto a los servicios médicos y sanitarios, la Autoridad Administradora declaró que todos los sectores de la población, sin distinción por motivos de raza o de comunidad, tenían acceso, en igualdad de condiciones, a los servicios para el tratamiento de las enfermedades de todas clases.

En lo referente a los servicios de enseñanza sobre una base racial, la Autoridad Administradora declaró que, por el momento, las diferencias de idioma impedían que se practicase la enseñanza interracial.

NIVEL DE VIDA

Las Misiones Visitadoras de 1948 y 1951 informaron que el nivel de vida era bajo en muchas partes del Territorio, y la Misión Visitadora de 1951 estimó que el problema cobraba cada vez mayor importancia en las zonas urbanas en vista de la continua afluencia de africanos procedentes de los distritos rurales. En su 11° período de sesiones, el Consejo había apoyado la recomendación de la Misión tendiente a que la Autoridad Administradora emprendiera estudios más detallados del costo y el nivel de vida a fin de asegurar un nivel razonable de salarios mínimos; además, expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuaría adoptando medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los africanos que reciben sueldos bajos, especialmente los de las regiones urbanas.

En su informe anual de 1952, la Autoridad Administradora declaró que compartía la preocupación del Consejo referente al nivel de vida relativamente bajo que prevalece en algunas regiones del Territorio. Al señalar que, en lo relativo a las zonas rurales, las observaciones de la Misión Visitadora de 1951 se habían basado en cifras relativas a los ingresos en efectivo con exclusión de los productos de consumo doméstico en una de las regiones menos fértiles, observó que las condiciones variaban considerablemente en las distintas regiones del Territorio, y que en general se había registrado un mejoramiento sostenido

en el nivel general de vida en las regiones rurales como consecuencia de los altos precios que alcanzaron las cosechas destinadas a la venta en los últimos años. Sin embargo, en las zonas urbanas, donde los altos precios ejercieron un efecto adverso sobre el nivel de vida, la situación de los trabajadores con salarios más bajos constituía aún un problema y se estaban adoptando todas las medidas prácticas posibles para mejorar tal estado de cosas. Durante el año, se habían concedido nuevos aumentos en los salarios y en los subsidios por aumento del costo de vida, pero éstos fueron contrarrestados parcialmente por el creciente aumento registrado en algunos distritos.

En cuanto a la población africana, la única investigación detallada sobre el costo de vida fué la realizada en 1951 para determinar la relación entre los ingresos, los gastos y el consumo para la población urbana con salarios más bajos. Aunque fué difícil obtener estadísticas fidedignas debido a los métodos que se emplean en la comercialización de productos indígenas, la Autoridad Administradora declaró que disponía de información suficiente sobre las fluctuaciones de precios de los artículos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Consideró, además, que el mejoramiento general del nivel de vida dependía de un mayor desarrollo económico y del incremento de la producción.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, recordando que anteriormente expresó su preocupación ante el bajo nivel de vida que prevalece en muchas partes del Territorio, reconoce que la elevación de dicho nivel de vida debe ser consecuencia natural, como así también uno de los objetivos primordiales, de la política de la Autoridad Administradora encaminada a incrementar la productividad y la participación de los africanos en la vida económica del Territorio; solicita de la Autoridad Administradora que mantenga informado al Consejo sobre todo lo referente a los resultados obtenidos en esa forma, así como sobre las otras medidas concretas que adopte o se proponga adoptar para elevar el nivel de vida de los habitantes; y se pide que comunique todos los datos estadísticos que sea posible obtener a ese respecto.

VIVIENDAS URBANAS

La aguda escasez de viviendas en las zonas urbanas provocada por el éxodo de africanos de los distritos rurales a las ciudades, ha sido motivo de preocupación para el Consejo de Administración Fiduciaria, el cual, en su 11° período de sesiones, había expresado la esperanza de que la Administración ejercería la presión necesaria para poner en práctica sus programas de vivienda, y de que se daría mayor atención a las solicitudes de vivienda apropiada para los funcionarios africanos.

En respuesta a esta recomendación, la Autoridad Administradora declaró que se estaban realizando todos los esfuerzos posibles para acelerar el programa de viviendas, y a ese respecto se estaba concediendo atención a las necesidades de los funcionarios. La Autoridad Administradora informó que en 1952 el Departamento de Obras Públicas inició la construcción de más de 300 casas en los centros urbanos que han de ser alquiladas a africanos; además, las autoridades locales de la vivienda en distintos municipios han preparado planes de desarrollo de viviendas, y en Dar-es-Salaam quedó terminada la construcción de 244 casas

nuevas permanentes. En cuanto a las viviendas para los funcionarios, en 1952 quedaron terminadas unas 80 casas destinadas a funcionarios, y en el mismo año se estaban construyendo 168 casas para funcionarios de categoría auxiliar y 125 casas para funcionarios de categoría superior. Se han hecho progresos considerables en el desarrollo de los programas de urbanismo, y en Dar-es-Salaam se han proyectado grupos especiales de vivienda de nuevo tipo para regiones densamente pobladas, y con arreglo a dichos proyectos los africanos podrán edificar sus propias casas de tipo tradicional mediante ayuda financiera oficial.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando que anteriormente expresó su preocupación con respecto al problema de las viviendas urbanas para africanos, ve con satisfacción el desarrollo y construcción de un nuevo tipo de vivienda de bajo costo en Dar-es-Salaam y en otras ciudades, y el hecho de que 25 planes de urbanismo se hallen en distintas etapas de preparación, e insta a la Autoridad Administradora a que prosiga sus esfuerzos en materia de urbanismo y en lo referente a la construcción de viviendas urbanas cuyos alquileres estén en relación con los ingresos de sus ocupantes.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El número de africanos que tenían empleo con salario a fines de julio de 1952 era de 443.597, o sea unos 11.800 menos que en el año anterior. Las principales fuentes de trabajo fueron, como anteriormente: la agricultura (160.704 varones adultos), la administración pública (51.971 varones adultos), las industrias manufactureras, incluso la electricidad (18.964 varones adultos), la construcción (18.127 varones adultos), el servicio doméstico (17.996 varones adultos) y el comercio (12.850 varones adultos).

Los dos problemas principales relacionados con el adelanto económico del Territorio, según la Autoridad Administradora, son la necesidad de velar por el suministro adecuado de mano de obra durante el año y hallar los medios para aumentar los ingresos de los trabajadores africanos no calificados sin reducir su capacidad de producción. En cuanto al primero de esos problemas, en 1951 se emprendió una investigación especial preliminar de la situación de la mano de obra y, sobre la base de la recomendación a que se llegó en dicha investigación, el Gobierno hizo una declaración de principios por la cual se recomendaba a los funcionarios de distrito que estimulasen a los africanos a emprender cultivos económicamente remuneradores o a buscar empleo con sueldo. Al mismo tiempo, se ampliaron las facultades de la Junta de Trabajo, órgano creado por ley, a fin de que asesorase al Gobierno sobre la utilización de la mano de obra disponible y asimismo al Comisionado del Trabajo acerca de la concesión de patentes de contratación de mano de obra. Sin embargo, no se introdujeron modificaciones en el régimen de contratación de mano de obra, en virtud del cual y con la sola excepción de la Oficina de Utilización de la Mano de Obra de la Provincia Septentrional, las empresas industriales o los empleadores independientes hacen sus propios arreglos para satisfacer sus necesidades de mano de obra.

En su 11° período de sesiones, el Consejo había recomendado que la Autoridad Administradora, en re-

lación con sus esfuerzos encaminados a estabilizar la fuerza de trabajo y a aumentar su productividad, debía considerar la posibilidad de adoptar medidas tendientes a aumentar los salarios y a mejorar la vivienda y otras condiciones del trabajo.

Los promedios de las tasas de salarios mensuales para los trabajadores no calificados en 1952 fueron los siguientes (entre paréntesis se dan las cifras correspondientes a 1951 con fines de comparación): agricultura (con exclusión del henequén): 15 a 35 chelines, y henequén: 23 a 39 chelines (en 1951, 18 a 40 chelines por cada 30 jornadas en la agricultura en total); minería: 14 a 55 chelines (en 1951, 12 a 30 chelines por 30 jornadas); industria, 18 a 52 chelines; y comercio al por menor, 15 a 60 chelines (en 1951, un promedio general de 30 a 60 chelines por 30 jornadas). Además, debían entregarse raciones, (cuyo valor fluctuó en 1952 de 15 a 29 chelines aproximadamente por mes, según la localidad), con excepción de los casos en que los contratos establecen otra cosa; también debía proporcionarse vivienda gratuita si el trabajador realizaba su trabajo lejos del hogar.

Durante el año, 66 empleadores fueron condenados por infringir las leyes del trabajo del Territorio; a 56 de ellos se les condenó al pago de multas y 3 fueron encarcelados. El número de empleados condenados fué de 363; fueron multados 138 y 221 fueron condenados a penas de prisión. En respuesta a una recomendación formulada por el Consejo en su sexto período de sesiones en el sentido de que la Autoridad Administradora considerase la posibilidad de abolir las sanciones penales en los casos de incumplimiento de contratos de trabajo, ésta declaró que su política tenía precisamente ese objeto, pero que, por el momento, era menester seguir aplicando dichas sanciones en los casos de deserción deliberada, pues en las condiciones actuales el recurso a un juicio civil sería totalmente ineficaz.

La Autoridad Administradora declaró que los sindicatos se desarrollaban con lentitud en el Territorio y que, con excepción de cierto número de asociaciones de funcionarios de la Administración, había sólo un sindicato (asiático) reconocido oficialmente en 1951. Sin embargo, al año siguiente, se reconocieron dos sindicatos de africanos y se hicieron progresos para la formación de comités de empleados o trabajadores industriales como resultado de la iniciativa oficial. Asimismo la Autoridad Administradora informó que en 1952 no se habían producido conflictos de trabajo de carácter grave, pero que hubo 86 conflictos de poca importancia, que afectaron en total a 10.998 trabajadores y duraron de una hora a 15 días, como consecuencia de lo cual se perdieron unos 15.600 días-hombre de trabajo.

Con respecto al problema especial de los trabajadores migrantes de Tanganyika empleados fuera del Territorio, el Consejo, en su 11° período de sesiones, había recomendado que la Autoridad Administradora considerase, en cooperación con otros gobiernos interesados, la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar satisfactorias condiciones de empleo para dichos trabajadores. En respuesta a esa recomendación la Autoridad Administradora declaró que había obtenido información completa sobre salarios y condiciones de trabajo en las regiones adonde solían migrar los trabajadores de Tanganyika y se sentía satisfecha de que sus intereses estuvieran bien resguardados.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, recordando su anterior recomendación relativa al problema de estabilizar la fuerza de trabajo y de aumentar su productividad, señala a la atención de la Autoridad Administradora la relación que existe entre este problema y el del mejoramiento de los salarios y las condiciones de trabajo; toma nota, a este respecto, del nuevo aumento concedido en los salarios mínimos oficiales en virtud del subsidio por costo de la vida, así como del establecimiento por parte de una importante empresa explotadora de henequén de un régimen de pensiones para sus trabajadores; toma nota, asimismo, de que está en vías de preparación un proyecto de ley de empleo de carácter general; y confía en que mejorarán aún más los niveles de salarios y se concederán otras prestaciones de empleo tales como vacaciones con goce de sueldo, licencias por enfermedad y se organizarán cajas de pensión o fondos de previsión.

El Consejo, reconociendo que la política de la Autoridad Administradora tiende a abolir las sanciones penales en los casos de incumplimiento de los contratos de trabajo y que éstas se aplican únicamente en los casos de desertión deliberada, toma nota con satisfacción de que el proyecto de ley sobre empleo, según se prevé, tiende a hallar una solución a este problema, y espera con interés nuevos datos sobre la cuestión.

El Consejo recibe complacido la declaración de principio sobre oferta de mano de obra que la Autoridad Administradora difundió en el Territorio y la considera un enfoque realista del difícil problema de la contratación de mano de obra, y toma nota, en especial, de la importancia que asigna al mejoramiento económico de los africanos, la necesidad de aumentar la producción de alimentos, la libertad de que gozan los africanos para emprender cultivos destinados a la venta o dedicarse al trabajo por cuenta ajena, y la conveniencia de preservar la unidad de las familias de trabajadores.

El Consejo, teniendo presente la conveniencia de efectuar nuevas investigaciones, mediante el concurso de expertos, de los problemas del trabajo en la totalidad del Territorio, sugiere a la Autoridad Administradora que considere la posibilidad de solicitar la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo al realizar dichos estudios.

SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS

El departamento médico oficial, las autoridades indígenas y las misiones religiosas se encargan de los servicios médicos del Territorio; además, cierto número de empresas industriales y comerciales y explotaciones agropecuarias proporcionan servicios médicos a sus propios empleados. Todas las personas que ejercen la medicina y la odontología tienen la obligación de registrarse u obtener licencia oficial, y con arreglo a la nueva legislación aprobada en 1952 el registro de los prácticos en medicina está sujeto a la aprobación de un período predeterminado de práctica subsiguiente a la obtención del título. En el mismo año se aprobó una ordenanza con arreglo a la cual se establece por vez primera el registro de enfermeras y parteras y se reglamentan sus actividades.

El Consejo, sus Misiones Visitadoras, y la Autoridad Administradora han insistido reiteradas veces en la necesidad de ampliar los servicios médicos y

sanitarios. La Misión Visitadora de 1951, en especial, opinó que los servicios médicos y sanitarios existentes eran insuficientes en comparación con las necesidades del Territorio, que el nivel de la construcción de hospitales era, en general, inferior al de otros edificios gubernamentales y que, a la larga, sería esencial aumentar el número de personal médico africano. En su 11° período de sesiones, el Consejo había tomado nota con preocupación de la declaración de la Misión Visitadora sobre la formación del personal médico y sobre las normas que regían la construcción de hospitales, y recomendado a la Autoridad Administradora que hiciera todo lo que estuviese a su alcance a fin de lograr lo más pronto posible los objetivos enunciados en el plan oficial de desarrollo de los servicios médicos. En respuesta a dicha recomendación, la Autoridad Administradora declaró en su informe anual para 1952, que se estaban haciendo esfuerzos por activar el programa de desarrollo médico dentro de los límites impuestos por los recursos financieros, materiales y de otra índole.

En 1952, el cálculo de los gastos en servicios médicos, sanitarios y de higiene prestados por el Gobierno y autoridades oficiales ascendió a 1.524.434 libras, lo cual constituye un aumento de 265.261 libras con respecto al año anterior. El personal médico del Territorio estaba compuesto de 393 prácticos en medicina registrados o con licencia, 18 dentistas y 471 enfermeras y parteras tituladas registradas con arreglo a la legislación aprobada recientemente. De esos totales, 173 prácticos en medicina, 7 dentistas y 235 enfermeras parteras tituladas trabajaban al servicio del Gobierno, lo cual, con respecto al año precedente, representaba un aumento de 18 médicos, 2 dentistas y 30 enfermeras y parteras tituladas. En 1953, terminaron su formación profesional 17 auxiliares médicos, 79 enfermeras, 35 parteras y otras 45 personas dedicadas a distintas actividades médicas, y 7 estudiantes de medicina africanos procedentes de Tanganika seguían estudios en el Colegio Makerere. En 1952, se inauguraron un centro sanitario en Kongwa y una escuela para enfermeras en Tukuyu, y además se ampliaron los servicios de alojamiento en el centro de formación profesional de Mwanza para auxiliares médicos rurales, y se proporcionaron otros servicios de alojamiento para estudiantes en Dar-es-Salaam.

En cuanto a las instalaciones médicas, el Territorio contaba en 1952 con 70 hospitales oficiales o dispensarios para pacientes hospitalizados (4.693 camas), 92 hospitales o dispensarios del mismo tipo administrados por las misiones (4.356 camas) y 16 hospitales sostenidos por empresas comerciales e industriales (867 camas). En 1952 funcionaron 801 dispensarios para pacientes no hospitalizados, o sea 5 más que en 1951, y 93 clínicas de maternidad y asistencia infantil. Además de 7 hospitales especiales incluidos en el total que figura anteriormente, funcionaron 27 leprosarios de importancia diversa, así como cierto número de campamentos o dispensarios auxiliares donde se dió tratamiento a los leprosos.

La Autoridad Administradora informó que, en 1952, fué aprobado un nuevo programa de construcción de hospitales y que el objetivo inmediato consistía en proporcionar una cama por cada 1.000 personas pertenecientes a los principales grupos de población. En los planes se prevé la pronta edificación de hospitales en los pocos distritos administrativos que aún no cuentan con hospitales oficiales. Durante el año, quedó ter-

minado un nuevo hospital de 100 camas en Korogwe, provincia de Tanga, y se iniciaron los trabajos en otros dos, ubicados en Nzega (Provincia Occidental) y Lindi (Provincia Meridional). Se añadió una sala de maternidad a los hospitales de Dar-es-Salaam, se terminó la construcción de un nuevo sanatorio anti-tuberculoso en Kibongoto, y se introdujeron mejoras e hicieron ampliaciones diversas en otros hospitales, incluso una residencia para estudiantes de enfermería africanos construida en Tanga. Además se iniciaron los trabajos preliminares relacionados con un nuevo hospital con 400 camas en Dar-es-Salaam, cuya construcción el Gobierno confía poder iniciar en 1953.

La Autoridad Administradora informó también que en 1952 se habían hecho progresos concretos en las actividades de saneamiento del medio ambiente y que se habían alcanzado progresos de especial importancia en lo relativo a la lucha contra las enfermedades transmisibles (especialmente la viruela y la peste bubónica), el examen médico de los trabajadores, la higiene rural y la enseñanza sanitaria. Durante el año, personal médico y sanitario calificado inició por vez primera actividades médicas y sanitarias o bien las reanudó en seis distritos o grupos de distritos que abarcaban en total aproximadamente 1.273.605 habitantes.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, tomando nota con satisfacción de las nuevas ampliaciones y del mejoramiento, iniciado o proyectado, en las instalaciones de hospitales en el Territorio, insta a la Autoridad Administradora a que continúe este desarrollo con miras a asegurar que todos los habitantes del Territorio en fideicomiso, en la mayor escala posible, dispongan de todos los servicios e instalaciones necesarios.

El Consejo también toma nota con especial interés de los adelantos logrados en materia de sanidad en cuestiones tales como la lucha contra las enfermedades transmisibles y los trabajos de divulgación de información sanitaria, y señala a su atención la tarea que resta por hacer para lograr una ulterior expansión de los servicios médicos preventivos y de los equipos de investigación sanitaria.

El Consejo, tomando nota con satisfacción que la Autoridad Administradora ha establecido ya en el Territorio la colaboración con la Organización Mundial de la Salud, expresa la esperanza de que aquélla seguirá utilizando los servicios e instalaciones con que cuenta dicho organismo para la realización de investigaciones y otros trabajos de asistencia técnica en materia médica y sanitaria.

CASTIGO CORPORAL

El castigo corporal, cuya abolición han recomendado tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración Fiduciaria en distintas ocasiones, puede ser impuesto por decisión de los tribunales territoriales como pena por cierto número de delitos o bien aplicado en las cárceles como medida disciplinaria. La política declarada de la Autoridad Administradora consiste en colocar a la legislación del Territorio a la altura de la del Reino Unido y lograr, lo más rápidamente posible, la total abolición de esta forma de castigo.

La Autoridad Administradora informó, en 1952, que en vista de la oposición casi unánime de los miembros no oficiales del Consejo Legislativo, se había creado

una comisión para auscultar la opinión pública con respecto al castigo corporal y determinar la medida en que dicho castigo actuaba como factor disuasivo en la comisión de delitos. Durante 1952, los tribunales subordinados impusieron 542 penas de castigos corporales, o sea 43 menos que en 1951. Los tribunales locales indígenas impusieron 561 penas de azote (175 menos que en 1951), de las cuales 529 se aplicaron a menores. En 1952 se aplicaron castigos corporales a cuatro personas por haber infringido disposiciones carcelarias.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando las recomendaciones previas de la Asamblea General y del Consejo encaminadas a la total abolición del castigo corporal, reconoce los esfuerzos hechos por la Autoridad Administradora en tal sentido mediante la aprobación de medidas legislativas apropiadas y el ulterior nombramiento de una comisión especial investigadora; lamenta que dichos esfuerzos no hayan tenido aún éxito; reafirma sus recomendaciones y, en consecuencia, solicita de la Autoridad Administradora que prosiga sus esfuerzos encaminados a salvar las dificultades que han impedido hasta ahora su plena aplicación práctica.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

El representante de Francia hizo notar que el Gobierno se hallaba empeñado en eliminar la discriminación contra la mujer, y afirmó que su delegación recibiría complacida toda nueva medida encaminada a mejorar la condición jurídica y social de la mujer.

El representante de El Salvador señaló que, según el representante especial, una sola asistente social había visitado la región haya donde se había planteado un problema social especial como consecuencia de la tendencia de las mujeres a abandonar su lugar de residencia en busca de empleo y, en algunos casos, para dedicarse a la prostitución. El orador afirmó que debían intensificarse las actividades de los asistentes sociales y aumentarse el número de éstos.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que se reconocía la existencia del problema de la prostitución en la región y, según el informe de la última Misión Visitadora, alrededor del 10% de las mujeres adultas se había dedicado a la prostitución; el resto, sin embargo, llevaba una vida normal, ajustada a principios morales. El Gobierno se ha ocupado del problema, y tendrá presente la gestión hecha para que se adopten nuevas medidas.

DISCRIMINACIÓN RACIAL

El representante de la India hizo notar que en Tanganyika no existía un problema racial como los que prevalecen en otros territorios. Desde el punto de vista jurídico, no existía la discriminación racial, pero en materia de elecciones y representación había diferencias. Existían distintas categorías de servicios de recreación entre africanos, asiáticos o europeos. Con respecto a la enajenación de la tierra, los servicios de enseñanza y las camas de hospital, el colonizador blanco se hallaba en situación de privilegio. En materia tri-

butaria también había distinciones por motivos de raza. No deseaba insistir sobre este punto sino señalarlo a la atención del Consejo, porque la política del Gobierno no tenía por objeto promover la discriminación racial. Como consecuencia de esas diferencias raciales sería difícil alcanzar el gobierno propio, porque no había derechos universales y porque el ritmo del progreso no sería lo suficientemente rápido.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que la situación en materia social se caracterizaba no sólo por la falta de progreso sino también por el notorio empeoramiento de la situación: la discriminación racial y la explotación de los indígenas, que van en aumento, y su empobrecimiento continuo. La discriminación racial se manifestaba en todos los aspectos de la vida en el Territorio. Los indígenas carecían de todos los derechos políticos y se les habían vedado toda posibilidad de ocupar cargos públicos de responsabilidad, además, los empleados públicos africanos eran objeto de discriminación en lo relativo a los salarios. En el campo económico, los europeos representantes de monopolios europeos, ocupaban todos los puestos administrativos principales en las empresas comerciales e industriales y en las explotaciones agrícolas. En materia sanitaria, la Autoridad Administradora también aplicaba una política de discriminación racial o segregación al determinar qué europeos, africanos y asiáticos debían utilizar hospitales y servicios sanitarios separados. La misma situación prevalecía en materia de enseñanza pues había escuelas separadas para cada una de las tres comunidades, con diferentes niveles de enseñanza y toda la política de la administración demostraba la existencia de un preponderante principio de discriminación racial. Este hecho saltaba a la vista si se comparaban los programas de enseñanza africano y europeo, las asignaciones presupuestarias para las dos comunidades y los sueldos percibidos por los maestros. Del informe anual parecía desprenderse que el objeto de la enseñanza primaria para los africanos consistía simplemente en que éstos aprendan a leer y escribir y las reglas elementales de la aritmética, mientras que la enseñanza primaria para los europeos tenía por objeto prepararlos para la enseñanza secundaria. Las asignaciones presupuestarias para las escuelas de europeos eran 10 veces superiores a las dedicadas a las escuelas de africanos y los gastos por cada alumno africano eran 26 veces menores que los gastos por alumno europeo. Del mismo modo, el sueldo percibido por un maestro africano fluctuaba, aproximadamente, entre 96 y 500 chelines, mientras que un maestro europeo cobraba de 900 a 2.000 chelines. La discriminación se manifestaba en la totalidad del régimen de sueldos en todo el Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora hizo notar que ya había sido planteada la cuestión de la discriminación racial en los hospitales. Se admitía la existencia de salas y camas reservadas para europeos, asiáticos y africanos, pero ningún hospital, ni siquiera los llamados hospitales europeos, había sido destinado exclusivamente a los europeos, pues miembros de otras razas habían sido tratados allí cada vez que fué necesario. Las razas estaban separadas en los hospitales como consecuencia de sus antecedentes culturales y normas de vida diferentes. Parecería que esto se había hecho para conveniencia de los europeos, pero la realidad era otra, pues los asiáticos y africanos no deseaban que se los colocase en una misma sala.

El representante de la India felicitó a la Autoridad Administradora por el hecho de no aplicarse en el Territorio las leyes de tránsito como se hacía en territorios vecinos tanto al norte como al sur de Tanganyika.

NIVEL DE VIDA

El representante de Siria afirmó que la disparidad económica entre el escaso número de europeos y la gran mayoría de africanos se reflejaba inevitablemente en el campo social. Las dos Misiones Visitadoras habían informado que el nivel de vida de los africanos era bajo. Todo inducía a suponer que el nivel de vida de los europeos era relativamente alto. La diferencia entre los niveles de vida de los africanos y los europeos debía ser con frecuencia enorme, pues un cultivador europeo de henequén ganaba probablemente varios millares de libras anuales, mientras el trabajador africano del henequén percibía de 23 a 29 chelines mensuales. El orador sugirió que la Autoridad Administradora debía dedicar a esta cuestión la mayor atención posible e incluir en su próximo informe anual todas las medidas que se habían adoptado, o cuya adopción se proyectaba, con miras a elevar el nivel de vida de los africanos.

El representante de Haití hizo hincapié en que el nivel de vida de los indígenas, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, era muy bajo, a pesar de que la Autoridad Administradora había declarado que en las regiones rurales los africanos resuelven sus problemas normalmente pues producen el alimento que consumen y no tiene problema de vivienda. Añadió que sería interesante ver, en el próximo informe anual, las estadísticas sobre el salario medio familiar en las distintas zonas del Territorio, tanto urbanas como rurales.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que ésta tenía pleno conocimiento de que el nivel de vida era bajo, pero que este problema no era fácil de resolver. Afirmó que era esencial mantener una relación apropiada entre los salarios y la productividad, ya que de otro modo se produciría la inflación. En general, la política de la Administración, que estaba encaminada a ayudar a los africanos y promover su evolución, tendía también directamente a elevar su nivel de vida y a aumentar su capacidad de producción, y la situación a este respecto estaba mejorando.

VIVIENDAS URBANAS

El representante de los Estados Unidos de América señaló que se había aplicado con éxito en Dar-es-Salaam un nuevo procedimiento para construir a bajo costo casas higiénicas de arcilla y concreto que se alquilaban al precio extraordinariamente bajo de menos de un dólar mensual por habitación. Después de señalar que ya se habían edificado casi 2.000 unidades de ese tipo, afirmó que el nuevo procedimiento de edificación sería recibido aún con mayor beneplácito si con él se conseguía evitar en Tanganyika la aparición de los enormes barrios industriales de casuchas que en otras partes de Africa son focos de delincuencia y de actos de violencia racial.

El representante de Australia declaró que le había impresionado el cuidado con que la Administración local había preparado sus programas de vivienda y

urbanismo con miras a asegurar su éxito. Estimó que el Consejo debía tomar nota de la declaración de la Autoridad Administradora según la cual 25 programas de urbanismo y cinco programas suplementarios de desarrollo estaban en vías de preparación.

El representante de Haití afirmó que los alquileres de las casas construidas por la Autoridad Administradora eran demasiado altos para que pudieran pagarlos las masas de la población.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El representante de los Estados Unidos de América hizo notar que una importante empresa explotadora de henequén había iniciado la aplicación de un régimen de pensiones para sus trabajadores africanos. Esta les ofrece la oportunidad de trabajar toda una vida, radicarse permanentemente en sus plantaciones y disponer de un huerto suficientemente grande como para obtener los alimentos esenciales para su familia. A cambio de ello, la empresa obtendría los servicios de un trabajador experimentado que estaría dispuesto a trabajar toda una jornada. Anteriormente, el incentivo que se había dado al trabajador africano era escaso o no existía, y lo único que éste deseaba era trabajar un plazo suficientemente largo como para ganar lo necesario para costear el pequeño impuesto cobrado por las chozas. Según ciertos autores, este continuo ir y venir entre el lugar de empleo y los bosques, y la consiguiente baja productividad de su trabajo constituían parte del "ritmo de África", pero la delegación de Estados Unidos considera que esta descripción no es justa. Además, el orador tiene entendido que las propias empresas explotadoras del henequén han empezado a interpretar la baja productividad de los africanos como consecuencia natural de error administrativo de no proporcionar un incentivo a los trabajadores.

El representante de la China, después de observar que no se habían abolido aún las sanciones previstas penales por incumplimiento de los contratos de trabajo, hizo notar con satisfacción que la Administración estaba estudiando una nueva legislación con la cual se trataría de resolver este problema. Expresó la esperanza de que dicha legislación sería aprobada a su debido tiempo y que en breve se transmitiría al Consejo más información a ese respecto, con preferencia en el próximo informe anual.

El representante de Siria instó a la Autoridad Administradora a que adoptara todas las medidas a su alcance para asegurar a los africanos el goce de un descanso semanal. El argumento de que el ausentismo es una de las razones por las cuales los empleadores se muestran remisos a conceder días de descanso con remuneración no parece ser muy convincente ni justo. El trabajador debe tener un día de descanso por semana. Es preciso elaborar una legislación del trabajo para reglamentar este importantísimo problema y para fijar el número de horas de trabajo diarias. El orador instó asimismo a la Autoridad Administradora a que aprobase una ley especial con el objeto de implantar un régimen de pensiones para los trabajadores africanos empleados en los establecimientos industriales.

El representante de Haití declaró que la mano de obra indígena era barata porque el salario mensual oscilaba entre dos y seis dólares, y que no era fácil explicarse cómo un trabajador, con un salario tan miserable, podía satisfacer sus necesidades más elementales.

El representante de la India hizo notar que había unos 180.000 asalariados dedicados a la agricultura. Aparentemente se trataba de trabajadores agrícolas carentes de tierra y, si así fuera, sería interesante que en el próximo informe anual se explicase cuántas semanas o meses trabajan durante el año y de qué viven el resto del tiempo. Fuera de la agricultura, las principales fuentes de trabajo son la minería y unas pocas explotaciones industriales. Sin embargo, según los elementos de juicio que figuran en el informe anual, no es posible determinar cuáles son las tasas de salario diarias, pues las cifras dadas se refieren al trabajo a destajo. Sin embargo, es probable que las tasas de salarios sean muy bajas; la delegación de la India desearía que en el próximo informe anual se incluyesen estadísticas más detalladas. El orador sugirió además que la Autoridad Administradora invitara a la Organización Internacional del Trabajo a que efectuase una investigación en el Territorio. Si no se dispone de créditos suficientes para costear una investigación sobre el terreno, es probable que la Organización disponga por lo menos de material suficiente para preparar un análisis preliminar. La delegación de la India se preocupaba especialmente por los trabajadores empleados en las minas y desearía que se le confirmase que no existen ni en derecho ni especialmente en la práctica condiciones de trabajo que sean en alguna forma contrarias a las convenciones internacionales y a las normas de trabajo que generalmente aceptan los países adelantados. La delegación de la India solicitó pues a la Autoridad Administradora que examinase si no conveniría, en su propio interés y en bien del progreso del Territorio, estudiar esos hechos con miras a aplicar las reformas necesarias.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que en todo el Territorio en fideicomiso, la Administración seguía una política destinada a concentrar y acaparar, en provecho de los europeos, la propiedad de las mejores tierras y de los recursos naturales. La Autoridad Administradora proporcionaba mano de obra barata a las empresas británicas al crear en el Territorio condiciones tales que obligaban a los africanos a alquilar su capacidad de trabajo a los empleadores europeos por un salario mínimo. Según la Autoridad Administradora, uno de los problemas fundamentales del Territorio era la obtención de mano de obra y, pese a ello, había millares de desocupados que buscaban empleo. El representante afirmó que la escasez de mano de obra en el Territorio se debía a las condiciones de trabajo y a los bajísimos salarios que se pagaban a los trabajadores. Cabía señalar que, a pesar de que hay millares de desocupados en el Territorio, la Autoridad Administradora recurría a la importación de mano de obra barata contratada en el Congo Belga, Ruanda Urundi y otros territorios; de este modo se creaba la competencia y obligaba a los indígenas a aceptar cualesquier salario y condiciones de trabajo a fin de obtener los medios de subsistencia más precarios. Al disponer únicamente de esos bajos salarios, los trabajadores se veían obligados a tomar dinero en préstamo. La Autoridad Administradora reconoció que la mayoría de los deudores eran trabajadores ocupados principalmente en las explotaciones agrícolas inglesas o en las empresas de la misma nacionalidad. A pesar de la lamentable situación de esos trabajadores, la Autoridad Administradora no adoptaba medida alguna para mejorar su suerte. Al contrario, ésta no deseaba aumentar los

salarios, y afirmaba que temía los efectos de la inflación en el Territorio y que por esa razón mantenía los salarios a bajo nivel. En cambio, los precios en el mercado local y el costo de la vida estaban aumentando.

El representante especial de la Autoridad Administradora, al tomar nota de la referencia hecha a los "trabajadores sin tierra", declaró que esta expresión no se basaba en los hechos reales pues en Tanganyika un trabajador agrícola no carece de tierra. Disponía invariablemente de la tierra que le daba su empleador o bien de la tierra de la tribu a cuya ocupación y cultivo tenía derecho. El representante especial señaló además que el hecho de calcular los salarios mínimos sobre la base del dólar se prestaba a equívocos porque, aunque la tasa de cambio entre la libra y el dólar había disminuido, no había ocurrido lo mismo con el poder adquisitivo local de la libra. Además, las tasas de salarios citadas eran tasas mínimas y no las tasas medias, y en algunos casos se daban al trabajador otras ventajas además del salario. Esto se aplicaba especialmente a las empresas explotadoras del henequén, las cuales daban al trabajador casa, comida, agua potable y atención médica. En 1952, el salario mínimo en los servicios oficiales fué de 65 chelines mensuales en Dar-es-Salaam y 38 chelines en otras partes; desde entonces dichas tasas habían aumentado gracias al subsidio por costo de la vida. Aunque una empresa explotadora del henequén había implantado un régimen de pensiones, no sería apropiado por el momento tratar de imponer tal régimen, por ley, a todos los empleadores. Lo mejor era dejar que la idea se extendiera por sí misma y posteriormente aprobar las leyes pertinentes.

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS

El representante de Siria tomó nota con satisfacción del aumento de las instalaciones médicas, pero opinó que era menester ampliarlas aun más y que debía cesar la discriminación que afecta la admisión de los africanos en los hospitales.

El representante de Australia señaló que en 1952 se había aprobado un nuevo programa de edificación y que los planes disponían la próxima construcción de hospitales del gobierno en los pocos distritos administrativos en que aun no los había. Señaló que se habían hecho progresos concretos en las actividades de saneamiento del medio ambiente gracias al nombramiento de nuevos funcionarios médicos e inspectores sanitarios, y también por haberse concedido especial importancia a los servicios de los funcionarios médicos y sanitarios de distrito. El orador se refirió a los adelantos logrados en la lucha contra las enfermedades contagiosas, especialmente la viruela y la peste bubónica, al examen médico de los trabajadores, al saneamiento rural y a la divulgación de información sobre cuestiones sanitarias mediante la radio y la prensa en lengua indígena. En opinión del orador, el Consejo debería asimismo tomar nota de la labor de inspección médica de los escolares así como de la difusión de información sanitaria a cargo de funcionarios médicos de distrito.

El representante de Nueva Zelandia opinó que, si bien se habían hecho progresos apreciables en el desarrollo de la medicina curativa, había margen para ampliar aún más los servicios médicos preventivos. Estimó que no debía pasarse por alto la importancia de la formación profesional de mujeres africanas. Tomó

nota de que en la nueva escuela de Tukuyu las mujeres recibían formación profesional en enfermería sanitaria con miras a que prestasen servicio en los centros rurales de maternidad y asistencia infantil, y que se había aprobado un programa para la formación profesional de enfermeras urbanas a cargo de las misiones.

El representante de Francia consideró que se habían hecho grandes progresos en la lucha contra las enfermedades contagiosas, y tomó nota con satisfacción de que gran número de distritos contaban ya con servicios médicos y sanitarios eficaces.

El representante de la India opinó que los servicios e instalaciones médicos del Territorio eran muy insuficientes y señaló que eran escasos los datos registrados acerca de los progresos en sanidad rural. La falta de desarrollo en este campo, así como en otros, se debía a varios factores tales como la incertidumbre acerca de la situación internacional del Territorio; pero había llegado ya el momento de adoptar medidas y aumentar el número de funcionarios, lo cual facilitaría el desarrollo de los servicios médicos y sociales en el Territorio. El problema de la viruela y la peste no era ajeno a los países tropicales, pero en ciertos territorios se había conseguido dominio. El representante de la India propuso que la Autoridad Administradora invitase a la Organización Mundial de la Salud a efectuar una investigación sobre la situación sanitaria del Territorio. Añadió que sería irreal esperar que la Autoridad Administradora o una persona cualquiera pudiera resolver en poco tiempo problemas tales como el de la mosca tsetse o las dificultades producidas por las variaciones del clima y las condiciones atmosféricas. Sin embargo, sería conveniente realizar una investigación para determinar el grado de progreso alcanzado y averiguar cuánto tiempo hará falta para que esos problemas dejen de ser un peligro para los habitantes del Territorio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la situación en materia sanitaria era evidentemente deficiente y que la Autoridad Administradora no adoptaba medida alguna para mejorarla. El paludismo era endémico en el Territorio; de vez en cuando se producían epidemias de viruela y de peste. Según el informe anual, el número de personas enfermas de viruela en la Provincia Meridional había aumentado. Además, había unos 100.000 casos de lepra en Tanganyika; de ese total, sólo 5.000 aproximadamente recibían tratamiento en leprosarios. Además, un gran número de indígenas de Tanganyika padecía de otras enfermedades; en 1952, se registraron más de 1.000.000 de casos de enfermedades en el Territorio. Sin embargo, a pesar de que la incidencia de enfermedades era elevada, la Autoridad Administradora no adoptaba medida alguna para satisfacer las necesidades sanitarias más elementales de la población. El Consejo de Administración Fiduciaria y las Misiones Visitadoras habían destacado reiteradamente que la situación sanitaria era insatisfactoria; la Misión Visitadora de 1951 señaló que el número de hospitales era insuficiente y que muchas regiones del Territorio carecían de hospitales y servicios sanitarios, y mencionó el caso de un hospital que sólo tenía 26 camas, así como el de un médico que debía atender de 800 a 900 pacientes por mes. El número de camas en los hospitales del Gobierno era más o menos el mismo que en años anteriores. Como consecuencia de la escasez de personal médico, un gran número de afri-

canos carecía de atención médica y se tenía que recurrir a curanderos indígenas. En el informe de la Autoridad Administradora se citó la falta de médicos calificados y de personal de enfermería como uno de los principales obstáculos al mejoramiento de las condiciones sanitarias; sin embargo, la Autoridad Administradora no se preocupaba de formar nuevo personal africano. El representante de la URSS afirmó que en la actualidad sólo hay 10 médicos africanos en un vasto territorio habitado por 8.000.000 de personas. Por último, el representante de la URSS señaló que en materia sanitaria, así como en otros campos, la Autoridad Administradora aplicaba una política de segregación y discriminación raciales.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que no se había sugerido que los actuales servicios médicos del Territorio fuesen satisfactorios; la Autoridad Administradora tenía el propósito de mejorarlos. Se habían hecho considerables progresos, como lo demostraba el continuo aumento de los gastos anuales en servicios e instalaciones médicos. Dichos gastos debían compararse con los ingresos totales del país, pues el desarrollo del Territorio tenía que ser equilibrado. También se habían hecho progresos en la tarea de enseñar a los africanos a fin de que participaran en los servicios médicos, lo cual era indispensable si se quería que los servicios fueran adecuados para atender a toda la población. Las estadísticas relativas a las enfermedades infecciosas han sido objeto de ciertas interpretaciones equívocas, pero si se las comparara con la situación que reinaba en África y en otras partes hace algunos años, se vería que, en general, se había conseguido dominar dichas enfermedades.

CASTIGO CORPORAL

El representante de la China consideró que la aplicación de castigos corporales era el aspecto menos alentador de la situación social en el Territorio. En Tanganyika el problema asumía una importancia especial y producía la más grave inquietud. El número de delitos sancionados con la pena de azote no sólo no había disminuido, sino que el número de condenas a penas corporales había aumentado el año pasado. Al tomar nota de que la Comisión designada para auscultar la opinión pública se había pronunciado, en su informe, contra la supresión de los castigos corporales, el representante de China expresó que abrigaba dudas sobre si las personas interrogadas habían interpretado correctamente el carácter de la investigación. Sea como fuere, el representante de la China declaró que no podía comprender el que la población en general insistiese, según sostenía la Administración, en que los castigos corporales se siguiesen aplicando, en vez de reemplazarlos por una pena de carácter más humano. El Consejo debería insistir nuevamente sobre este punto y señalar otra vez a la atención de la Autoridad Administradora la necesidad de que vuelva a examinar detenidamente este problema.

El representante de Siria declaró que compartía la desilusión expresada por el representante de la China con respecto al castigo corporal. Fuera del hecho de que el número de delitos sancionados con la pena de azote había aumentado durante los últimos años, el aspecto más inquietante era que la comisión nombrada para auscultar la opinión pública había llegado a la conclusión de que era conveniente seguir aplicando

esta forma de castigo. El orador expresó que estaba seguro de que ninguna comunidad pediría que esta clase de castigo se siguiese aplicando a los delincuentes. Confía en que se adoptarán medidas para abolirlo sin más demora en todo el Territorio.

El representante de Haití hizo notar que, según el representante especial las condenas a castigo corporal habían aumentado en 1953. Los argumentos aducidos por la Autoridad Administradora en favor de la aplicación de este castigo nunca habían convencido a su delegación; si la Autoridad Administradora deseaba cumplir su obra de civilización en el Territorio, tendría que imponer una reforma a fin de inculcar a la población el sentido de la dignidad humana.

El representante de El Salvador consideró inconcebible el hecho de que aun se aplicaran castigos corporales en el Territorio e instó a la Autoridad Administradora a abolir la ley que los autoriza. Se hizo una investigación para determinar la opinión de los habitantes sobre esa cuestión y se informó que la opinión pública se oponía a la supresión del castigo corporal. Sin embargo, ésta no es una razón que la Autoridad Administradora deba considerar como definitiva, y ésta debería preparar una ley sobre la cuestión. Una vez que dicha ley fuese comprendida como resultado de una labor de enseñanza, se obtendrían excelentes resultados. Además, en la propia ley se determinarían los medios para su aplicación y se impondrían sanciones a aquéllos que violasen sus disposiciones.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que el castigo corporal era una cuestión que constituía motivo de gran preocupación para la Administración. Esta deseaba sinceramente poder aplicar en Tanganyika las mismas leyes que rigen en el Reino Unido, y como prueba de ello había presentado, a principios de 1952, un proyecto de ley encaminado a la abolición del castigo corporal. En el Consejo Legislativo, todos los miembros no oficiales se opusieron a él. Ahora los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria instan al Gobierno de Tanganyika a que corra el riesgo de imponer esta medida contra la oposición conjunta de los miembros no oficiales. La Autoridad Administradora no ha tomado hasta ahora decisión alguna sobre este difícil problema. La Comisión nombrada para investigar la cuestión fué integrada por representantes de los distintos sectores de la población, y no cabe dudar de su veracidad cuando en el informe declara que la opinión pública era contraria a la abolición del castigo corporal. Debía recordarse asimismo que, en lo que atañe a los adultos, es un tribunal africano, presidido por un juez africano, a menudo nombrado por los miembros de un consejo electivo, el que decide si una persona ha de ser condenada a castigo corporal o a pena de prisión. En ciertas regiones delitos tales como el abigeato tienen un efecto y consecuencias mucho mayores ante los ojos de la población que los delitos que otras personas podrían considerar de mayor gravedad. El representante expresó que lo dicho no debía considerarse como un argumento en el sentido de que debía seguirse aplicando el castigo corporal, sino como un elemento de juicio para que los miembros del Consejo pudieran comprender la razón por la cual ciertos elementos de la población africana se oponen a su abolición, especialmente en esta etapa del desarrollo del Territorio. Sin embargo, habrá que resolver esta cuestión, y las opiniones expresadas por los miembros del Consejo serán trans-

mitidas a la Autoridad Administradora y al Gobierno de Tanganyika y serán objeto de cuidadoso análisis antes de que se adopte una decisión.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

Existen en el Territorio instalaciones y servicios educativos separados para los tres grupos raciales más importantes, africano, asiático y europeo. Una gran parte de las escuelas del Territorio está a cargo de organizaciones privadas, a las que se ayuda con subsidios del Gobierno y se las somete a estrecha fiscalización. Respecto a las escuelas de las organizaciones privadas, las ordenanzas pertinentes disponen que todas las instituciones que imparten instrucción secular deben registrarse y someterse a inspección y pueden, en ciertas circunstancias, ser clausuradas por orden de la autoridad. Los subsidios pueden pagarse en forma de un porcentaje de los sueldos de los profesores o de una proporción de los costos de edificación, siempre que las escuelas de las organizaciones privadas se ajusten a normas reconocidas y acepten ciertas condiciones, especialmente las de registro y de inspección. Durante el año que se reseña, se adoptaron nuevas disposiciones mediante las cuales se concede mayores subsidios tanto a las escuelas para africanos como a las escuelas para europeos.

La enseñanza de los europeos e indios corre a cargo de las Autoridades de Instrucción Pública para europeos y para indios, que constituyen organismos ejecutivos, la mayoría de cuyos miembros no son elegidos por el gobierno. Tratándose de la enseñanza para africanos, el Director de Enseñanza cuenta con la asistencia de un Comité Asesor en materia de enseñanza para africanos, entre cuyos miembros se cuentan funcionarios públicos, representantes de las organizaciones privadas y cinco miembros indígenas, uno de los cuales es mujer.

Los fondos para la enseñanza provienen de ingresos generales, fondos de desarrollo, impuestos para la enseñanza de no indígenas o tesorerías indígenas. En 1952, los gastos calculados ascendieron a 2.522.103 libras, de las cuales 903.844 libras se dedicaron a gastos de capital. El constante aumento de los gastos y del número de alumnos se exponen en el cuadro siguiente:

<i>Gastos</i>	<i>Africanos</i>	<i>Asiáticos^a</i>	<i>Europeos</i>	<i>Total</i>
	£	£	£	£
1950	868.393	372.389	252.725	1.503.505
1951	1.114.986	601.241	359.049	2.075.276
1952 (calculados) .	1.477.958 ^b	574.623	469.522	2.522.103
1953 (calculados) .	(no h a y c i f r a s)			3.119.546
<i>Niños en edad escolar</i>				
1950	182.942	13.286	1.417	197.645
1951	210.949	14.445	1.655	227.049
1952	239.642	15.353	1.757	256.752 ^c

^a Incluye la enseñanza para asiáticos que no está sujeta a la Autoridad de la Enseñanza para Indios.

^b Incluye una suma de 274.132 libras comprendidas en los cálculos de los comisionados provinciales por concepto de gastos de las tesorerías indígenas para educación.

^c Comprende 182.829 niños y 73.923 niñas.

En cuanto a la enseñanza de africanos, el aumento señalado en el cuadro precedente está de acuerdo con el Plan Decenal Revisado para la Enseñanza de Africanos, cuya enérgica aplicación fué observada encomiásticamente por el Consejo en su 11° período de sesiones. En virtud de este plan, en el que se dispone un gasto calculado de 1.423.000 libras de inversiones de capital durante el período 1947-56, se realizaron nuevos adelantos en el programa de construcciones durante el período que se examina. Se terminaron dos centros para la formación de maestros varones en Butimba (Mwanza) y Mpwapa, y empezaron a funcionar una escuela para niñas y un centro de formación de maestros en Bwiru (Mwanza). Continuaron los trabajos de construcción en la escuela secundaria de niños de Songea, en armonía con el nuevo ingreso de alumnos, y se continuaban los trabajos de edificación de una nueva escuela intermedia para niñas en Same, en el Distrito de Pare. Además, a fines de 1952 se habían terminado o se proseguían las ampliaciones y mejoras en diversas escuelas del Estado y de organizaciones privadas.

También se realizaron progresos en la ampliación de las instalaciones y servicios educativos para estudiantes no africanos. Durante el año que se examina, se terminó la mayor parte de una nueva escuela secundaria del Estado para indios y se hicieron nuevas construcciones en las escuelas que reciben subsidios, incluso la construcción de un nuevo edificio escolar y una casa de huéspedes para estudiantes destinados a la escuela del Aga Khan en Iringa, gracias a un subsidio del gobierno. Por lo que hace a la educación para europeos, se inició la construcción de nuevos pabellones en el internado primario del Gobierno en Mbeya y se añadieron nuevos edificios en diversas escuelas pertenecientes a organizaciones privadas. Por primera vez fué posible impartir enseñanza secundaria a los niños europeos dentro del Territorio gracias a la terminación de un nuevo departamento secundario en la escuela del Estado de Kwongwa.

Uno de los principales objetivos del Plan Decenal para la Enseñanza de Africanos es combatir el analfabetismo mediante el aumento de la asistencia en las escuelas primarias y reducir las marcadas diferencias que se observan en el estado actual del proceso educativo, impulsando la instrucción entre las capas más atrasadas de la población. Sin embargo, el programa también prevé la ampliación del sistema escolar en todos sus grados, de suerte que permita aumentar el número de niños que gocen de las ventajas de la enseñanza secundaria y superior, preparándoles para desempeñar un papel efectivo en el desarrollo del Territorio. A este respecto, la Misión Visitadora de 1951 recibió diversas quejas de los africanos en el sentido de que eran insuficientes los fondos para la ampliación de la enseñanza postprimaria, consagrándose demasiado interés al progreso de las zonas atrasadas con detrimento de los distritos más avanzados. La Misión llegó a la conclusión de que los objetivos para la educación postprimaria con arreglo al plan decenal eran muy limitados y que el Consejo, al hacer suya esta opinión en su 11° período de sesiones, expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora revisaría el plan con miras a ampliar sus disposiciones relativas a la educación postprimaria.

En su informe anual de 1952, la Autoridad Administradora manifestó que había tomado debida nota de

las conclusiones y recomendaciones del Consejo y que se estaban realizando esfuerzos destinados a aplicar el programa de desarrollo educacional en todos sus aspectos tan rápidamente como fuera posible. El cuadro siguiente, compilación de las estadísticas suministradas en los informes anuales, señala los adelantos realizados en la enseñanza para africanos en las etapas primaria, intermedia y secundaria:

Escuelas primarias (grados I a IV)

<i>Escuelas</i>	<i>Escuelas del Estado y de las autoridades indígenas</i>	<i>Escuelas de las organizaciones privadas*</i>	<i>Total</i>
1947	267	823	1.090
1951	388	1.079	1.467
1952	447	1.252	1.699

Número de alumnos

1947	30.830	92.301	123.131
1951	50.822	149.229	200.051
1952	54.146	159.845	213.991

Escuelas intermedias (grados V a VII)

<i>Escuelas</i>			
1951	20	52	77
1952	84	201	285 ^b

Número de alumnos

1951	1.720	4.218	5.938
1952	6.285	14.142	20.427

Escuelas secundarias (grados VII a XII)

<i>Escuelas</i>			
1947	10	13	23
1951	11	17	28
1952	10	12	22

Número de alumnos

1947	768	762	1.530
1951	1.360	1.365	2.725
1952	1.405	1.404	2.810

* Estas cifras no comprenden aproximadamente 6.610 escuelas *bush* no registradas, con una matrícula calculada de 267.000 alumnos, dirigidas por sociedades de misioneros. El nivel de la enseñanza secular en muchas de estas escuelas no es elevado, pero la Autoridad Administradora considera que desempeñan una función muy útil en la etapa actual de desarrollo y, según el informe anual de 1952, procura desarrollar algunas de ellas hasta la categoría de escuelas registradas.

^b Comprende 158 antiguas escuelas de distrito (grados V a VI), 13 escuelas presecundarias (grados V a VI) y siete escuelas de formación previa de maestros (grados VII a VIII).

El informe anual de 1952 también revela un aumento del personal administrativo general y docente del Departamento de Instrucción Pública (sin contar el personal empleado por las organizaciones privadas) de 1.804 puestos creados en 1951 a 2.183 en 1952. De este aumento la parte más importante corresponde al número de maestros africanos e inspectores (de 1.502 a 1.757). Durante el mismo período se agregaron seis instructores subalternos al personal de las secciones de formación técnica del departamento.

La Misión Visitadora de 1951 examinó la organización actual de los programas de enseñanza sobre una base racial a raíz de diversas representaciones que recibió de fuentes africanas y asiáticas con el objeto que se introdujera una enseñanza interracial, por lo menos en la enseñanza secundaria. La Autoridad Administradora sostiene que las dificultades de idioma hacen impracticable, por ahora, la educación primaria interracial, y que será oportuno considerar tal sistema cuando se disponga de instalaciones y servicios

de enseñanza superior en el territorio y cuando el conocimiento del idioma inglés se generalice. En 1952, en el Makerere College se ofrecieron diversos puestos a estudiantes asiáticos del África oriental pero, según el informe anual de 1952, ninguno había sido ocupado hasta la fecha por alguien procedente del Territorio.

En 1951, la Autoridad Administradora informó al Consejo que una misión de enseñanza bajo los auspicios de la Fundación Nuffield había visitado Tanganyika con el objeto de examinar el sistema de enseñanza, en especial, si el período de cuatro años para la enseñanza primaria era suficiente. Como resultado de la visita de la Misión, se celebró una conferencia sobre la enseñanza africana en Cambridge (Inglaterra), en septiembre de 1952, a la que concurrió una delegación de Tanganyika representativa de todos los grupos interesados en la enseñanza para africanos, incluso tres indígenas.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota con satisfacción de que los objetivos trazados para la enseñanza primaria en el actual plan decenal habrán sido sobrepasados en el año 1956, y reconociendo que el objetivo final de la Autoridad Administradora es poner al alcance de todos la enseñanza primaria, la insta a tener siempre presente, al hacer planes para un mayor desarrollo, ver la conveniencia de introducir la enseñanza primaria gratuita y obligatoria.

El Consejo, considerando ventajoso que todo el sistema de enseñanza primaria se encuentre fiscalizado por el Gobierno, y observando que en el Territorio ha aumentado el número de escuelas "bush" no registradas y el número de niños matriculados en ellas, apoya la propuesta encaminada a desarrollar algunas de estas escuelas hasta que alcancen la categoría de escuelas primarias, y expresa la esperanza de que este proceso sea ampliado.

El Consejo toma nota con particular interés y satisfacción del hecho de que las niñas que asisten a las escuelas alcanzan la proporción relativamente elevada del 30% del número total de alumnos.

El Consejo, si bien toma nota del progreso constante alcanzado en la ampliación de las instalaciones y servicios escolares intermedios y secundarios, recomienda a la Autoridad Administradora que consagre especial atención a la tarea de asegurar que, a medida que la enseñanza primaria se amplía y mejora, se desarrollen las instalaciones y servicios en las enseñanzas intermedia y secundaria en forma que permita recibir a todos los niños que necesiten dicha educación; y, a este respecto, hace suyo el comentario favorable de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura²⁸⁷ sobre el esfuerzo que se está realizando para vincular los programas de estudio de las escuelas intermedias a las necesidades económicas y sociales de la región a la que prestan servicio cada una de dichas escuelas.

FORMACIÓN INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

Aunque el número de escuelas de formación industrial y profesional del Estado fué idéntico al de 1951 (ocho escuelas), el número de dichas instituciones para africanos dirigidas por organizaciones privadas, disminuyó de 14, en 1951, a 9 en 1952, y la matrícula

²⁸⁷ T/1091.

total de africanos bajó de 1.091 a 942. Sin embargo, según el informe anual de 1952, durante el año se hicieron notables progresos en la tarea de completar la construcción de la escuela de recursos naturales de Tengeru, en la Provincia Septentrional, construcción que se terminó a comienzos de 1953. Esta escuela servirá a unos 450 alumnos africanos, incluyendo el personal subalterno de servicio de los departamentos de Agricultura, Veterinaria y Silvicultura, y también los profesores que trabajan en las regiones rurales, quienes asistirán a cursos de dos a tres años de duración sobre temas relacionados con el desarrollo rural.

En el pasado, el Consejo y sus Misiones Visitadoras han expresado su permanente interés en la ampliación de las instalaciones y servicios para la formación industrial y profesional. En su 11° período de sesiones, el Consejo había tomado nota del aumento habido en las instalaciones de formación profesional en 1951 y expresado su confianza en que, habida cuenta de la enorme necesidad de africanos preparados técnicamente, la Autoridad Administradora proseguía sus esfuerzos en este importante campo de la enseñanza.

MAESTROS Y FORMACIÓN DE MAESTROS

Los maestros africanos son seleccionados entre los estudiantes de las escuelas secundarias, después de rendir exámenes y terminar satisfactoriamente cursos especiales académicos y de formación profesional, ya sea en las escuelas secundarias del Estado o de organizaciones privadas, y en los centros de formación de maestros. Los que se califican para entrar en el Makerere College en Uganda, pueden obtener becas del Estado, mientras que los alumnos seleccionados del Makerere College pueden conseguir becas para estudios superiores y formación profesional en el extranjero.

Los maestros africanos con certificado están clasificados en dos clases, la segunda de las cuales exige que los maestros hayan completado el ciclo de estudios hasta el grado octavo y hayan recibido dos años de formación profesional; los maestros que tienen certificados de la clase II, pueden enseñar únicamente en las escuelas primarias e intermedias. Las maestras africanas con certificado deben tener por lo menos dos años de experiencia profesional en la enseñanza, después de haber completado su octavo año de estudios. Los maestros sin certificado, pueden obtener una licencia al terminar satisfactoriamente un curso oficial de formación de maestros si, a pesar de no haber pasado el examen para obtener el certificado, se los considera con condiciones para ser maestros.

La necesidad de contar con un número cada vez mayor de maestros africanos calificados constituye un problema permanente del que se han preocupado ya la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria. De conformidad con el plan decenal revisado, la cifra prevista de profesores que se necesita formar anualmente es de 750 y, tratándose de maestras, la Autoridad Administradora manifestó que la obtención de la cifra prevista (375 anualmente) demandaría un aumento considerable del personal femenino de funcionarios de enseñanza.

El número total de maestros en las escuelas africanas de todas las clases ascendió de 4.849 en 1951 a 5.170 en 1952. Durante el año que se examina, obtuvieron sus certificados 81 maestros de la nueva clase I, al mismo tiempo que recibieron su licencia para enseñar

siete nuevos maestros de la nueva clase I. Un total de 355 maestros de la nueva clase II obtuvieron sus certificados y 27 recibieron licencia para enseñar. Setenta y una estudiantes para maestras obtuvieron certificados de la clase II y cinco recibieron licencia para enseñar. Al mismo tiempo, el número de estudiantes africanos matriculados en los centros de formación de maestros aumentó de 1.144 en 1951 a 1.472 en 1952 y el número de centros de formación de maestros ascendió de 15 a 33. En 1953, se inauguraron tres centros de formación de maestros de la nueva clase II y al término del año había 1.655 personas preparándose en el Territorio para enseñar. Nueve estudiantes africanas terminaron su formación como maestras de la clase I. La Autoridad Administradora también informó que durante 1952 se dictaron cursos de repaso y perfeccionamiento para maestros en diversos centros de formación y que próximamente se dictarían cursos regulares de no menos de nueve meses de duración en dos centros del Estado.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones:

El Consejo señala a la atención de la Autoridad Administradora las observaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre el problema permanente de formar maestros africanos calificados, y suscribe la opinión manifestada por ese organismo de que los fondos destinados a la formación de maestros son esencialmente una inversión comparable a otras formas de desembolso de capital.

ENSEÑANZA SUPERIOR

En la actualidad no existen servicios de enseñanza superior en Tanganyika y, con excepción de las becas para estudiar en el extranjero o para formación técnica en territorios vecinos, la mayoría de los estudiantes calificados reciben becas del Estado para asistir al Makerere College en Uganda, que se sostiene mediante contribuciones de todos los territorios de África Oriental. Con arreglo al Plan Decenal que se prevé en 1956 habrán por lo menos 200 estudiantes de Tanganyika matriculados en el Makerere College. En 1951 habían 49 estudiantes de Tanganyika en el Makerere College, y en 1952 se otorgaron 23 becas del Estado a africanos para asistir al College. Se concedieron cuatro becas a africanos para estudiar en la escuela de Formación Profesional en Obras Públicas (Ingeniería) de Kampala (Uganda). Se concedieron otras cuatro a africanos para estudiar en el Reino Unido, dos de ellas por el Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial y dos por la Bukova Cooperative Union. Se informó al Consejo en su 13° período de sesiones que en el Makerere College había 88 estudiantes a fines de 1953, 16 estudiantes en las Universidades del Reino Unido y otros 16 que asistían a diversos cursos de enseñanza superior en el Reino Unido y en otros lugares.

Anteriormente, la Asamblea General, el Consejo de Administración Fiduciaria y las Misiones Visitadoras han señalado a la atención la necesidad de aumentar los servicios de enseñanza superior y han sugerido que la Autoridad Administradora estudie la posibilidad de crear una institución con tal objeto dentro del Territorio de Tanganyika propiamente dicho. En respuesta a esta proposición, la Autoridad Administradora declaró que se estaba estudiando activamente la posibi-

lidad de establecer un colegio universitario en Tanganyika, pero señaló que por algún tiempo el Makerere College podía recibir a todos los estudiantes de Tanganyika que pudieran calificarse para dichos estudios. En su 11° período de sesiones, el Consejo había observado con satisfacción el aumento del número de estudiantes que recibían enseñanza superior y había acogido favorablemente la declaración de la Autoridad Administradora de que se estaba estudiando activamente la posibilidad de establecer un colegio universitario en Tanganyika.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, observando que a los estudiantes calificados se les da acceso a la enseñanza superior fuera del Territorio en fideicomiso, recordando su sugestión anterior de que la Autoridad Administradora considerara la posibilidad de establecer dentro del Territorio una institución de enseñanza superior, y tomando nota de la consideración que la Autoridad Administradora ha dado a este problema, sugiere que se considere la posibilidad de establecer cursos en número limitado de materias como un primer paso hacia la creación de una universidad en el Territorio.

DERECHOS DE MATRÍCULA

En la mayoría de las escuelas primarias para africanos del Estado la enseñanza es gratuita, mientras que en las escuelas de la Autoridad Indígena se cobran sólo pequeños derechos que no exceden de 10 chelines, para cubrir el costo de los materiales. En todas las escuelas secundarias se paga la pensión de internado y también se cobran derechos de matrícula en la mayoría de las escuelas postprimarias dirigidas por organizaciones privadas, pero la matrícula es gratuita en las escuelas oficiales de enseñanza postprimaria para niñas. No se pagan derechos de matrícula en los centros de formación de maestros del Estado, pero en casi todos los centros de formación pertenecientes a organizaciones privadas se cobran derechos de matrícula iguales a los que se pagan en las escuelas secundarias. En todas las escuelas del Estado se condonan los derechos de matrícula en los casos de personas necesitadas y no se impide a ningún alumno proseguir sus estudios por incapacidad de los padres para pagar la matrícula. Los estudiantes africanos que se califican para ingresar al Makerere College pueden recibir becas del Estado que cubren todos los gastos de estudios y residencia en el colegio universitario.

Salvo en el caso de unas pocas escuelas de comunidades asiáticas, se cobra derechos de matrícula en todas las escuelas para la población no africana.

La cuestión de los derechos de matrícula ha sido anteriormente objeto de recomendaciones tanto de la Asamblea General como del Consejo de Administración Fiduciaria, los que han propuesto que la enseñanza primaria en los territorios en fideicomiso sea gratuita y que el acceso a la enseñanza superior no dependa de los recursos de los estudiantes.

INSTRUCCIÓN PARA ADULTOS Y ENSEÑANZA PARA LAS MASAS

La Autoridad Administradora declaró que desde hace tiempo la instrucción para adultos y la enseñanza para las masas forman parte integrante de los planes de desarrollo general que los miembros de los grupos provinciales y de distrito procuran estimular en sus

giras como un medio de elevar los niveles sociales y culturales de la población. En 1952, se concedieron fondos especiales a los grupos de distrito para impulsar los programas de desarrollo de la comunidad, de que forman parte los programas de alfabetización de las masas. Una de las campañas de alfabetización que han tenido más éxito es un plan experimental llevado a la práctica en el distrito de Pare, en la Provincia de Tanga, de cuyos resultados se informó al Consejo en 1951. Esta campaña continúa recibiendo el apoyo entusiasta de la población. En otras regiones se han iniciado programas similares y en los centros urbanos algunos centros de bienestar constituyeron el eje de la instrucción para adultos. Se aumentó el personal del Departamento de Desarrollo Social para colaborar en la organización de estos planes.

Entre otros servicios que coadyuvan a la instrucción para adultos se encuentran la publicación y distribución de literatura en Kiswahili, la exhibición de películas y los servicios de radiodifusión en Kiswahili. En 1952 se ampliaron todas estas actividades y se nombró un funcionario de educación para impulsar una enseñanza especial encaminada al desarrollo de la radiodifusión educativa, particularmente para las escuelas.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, tomando nota de los esfuerzos que con éxito ha realizado la Autoridad Administradora en los trabajos de desarrollo de la comunidad y de enseñanza para las masas, y tomando nota de que el programa más importante es un proyecto que se lleva a cabo con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, expresa su confianza en que la Autoridad Administradora ampliará estas actividades y las extenderá a otras partes del Territorio, y la esperanza de que se adoptarán las medidas sugeridas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de evaluar los métodos empleados y los resultados obtenidos en beneficio de regiones que se encuentren en análoga situación.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Siria observó que, en el terreno de la enseñanza, los europeos, asiáticos y africanos estaban divididos en los mismos compartimientos estancos que se presentaban en el terreno político, y era evidente que niños europeos, que son una minoría, gozaban de mejores instalaciones y niveles más elevados de enseñanza que niños africanos, los cuales constituyen la mayoría. Reconoció que la Autoridad Administradora quería elevar los niveles de la enseñanza para africanos y gastaba mucho más dinero que antes en tal enseñanza; pero puso en duda que sus intenciones fueran suficientemente amplias y rápidas. Aun después de 1956 más de la mitad de los niños en edad escolar estarán imposibilitados de asistir a la escuela por falta de instalaciones. Esperaba que la Autoridad Administradora examinara nuevamente el plan para tratar de hallar una solución. También debería tenerse siempre presente la posibilidad de introducir la enseñanza obligatoria y gratuita, ya que no

puede implantarse sin que existan escuelas para recibir a todos los niños que requieran enseñanza. El representante estimaba que los estudiantes africanos deberían ser admitidos en todas las escuelas secundarias, ya sea que estén destinadas a europeos, asiáticos o a otros grupos. No debería admitirse la discriminación en esta o en otras categorías de la enseñanza.

El representante de Australia se manifestó impresionado por la participación de los habitantes indígenas en la formulación de la política educativa, tanto en la administración central, a través del Comité Asesor en materia de enseñanza para los africanos como en la administración local, mediante los comités de enseñanza local. A su juicio, otro adelanto importante era la creación en 1953 de la Escuela de Recursos Naturales de Tengeru, que, una vez terminada, tendría capacidad para 450 alumnos, incluso el personal del cuadro de funcionarios subalternos y los maestros que trabajan en las regiones rurales.

El representante de Haití, tomando nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que, mientras las instalaciones y servicios de enseñanza no fueran suficientes para atender a todos los niños en edad escolar, no se implantaría la educación obligatoria, comentó que su delegación consideraba que, si se establecía la enseñanza obligatoria, la Administración estaría obligada a destinar fondos suficientes para proporcionar las instalaciones adecuadas. Desde ahora en adelante toda instalación dedicada a los niveles inferiores de la enseñanza debería ponerse a disposición de la población, de suerte que pueda prepararse una *élite* capaz de aprovechar la enseñanza superior. A este respecto, el Consejo debe solicitar de la Autoridad Administradora que demuestre un mayor interés por las escuelas *bush* del Territorio.

El representante de Bélgica destacó que el total del personal docente llegaba a 5.000 personas. Esta constituye una cifra muy alentadora. También consideró que el hecho de que el 30% de los alumnos que concurren a las escuelas sean niñas probaba que la Administración realizaba un serio esfuerzo, puesto que este era un porcentaje muy elevado para África. Además, observó con satisfacción que la Autoridad Administradora estaba preparada para aceptar cualquier cooperación que se le ofreciera y otorgaba subsidios, en determinadas condiciones, a las misiones religiosas que deseen dedicarse a la enseñanza pública. La Autoridad Administradora aportaba el 50% de los gastos de edificación y el 95% de los sueldos de los maestros. Sin embargo, tratándose de organizaciones que estaban a expensas de la caridad, aun el pago de un 50% de los gastos de edificación constituía un obstáculo para los esfuerzos que podrían realizar si los recursos financieros fueran mayores. Por consiguiente, consideraba que la Autoridad Administradora podría considerar la posibilidad de aumentar los subsidios y la ayuda para la construcción de nuevos edificios. A este respecto, subrayó que no deberían menospreciarse los esfuerzos y las ventajas de las escuelas *bush*, cuyo número era de más de 6.600, y a las que concurría un gran número de niños. Las escuelas no eran de un nivel suficientemente elevado como para recibir subsidios del Gobierno, pero ofrecían una enseñanza que por lo menos permitía a un hombre, que hubiera aprendido a leer, enseñar a otros a hacerlo y, en el peor de los casos, le daban al pueblo nociones elementales de higiene, agricultura y materias similares.

El representante de El Salvador declaró que veía con agrado los resultados alcanzados en el campo de la enseñanza como fruto de la cooperación entre todos los organismos interesados, particularmente con la UNESCO. Sin embargo, su delegación estimaba que la enseñanza elemental debería ser obligatoria y gratuita y que la enseñanza de las escuelas no oficiales debía ser fiscalizada por la Administración.

El representante de la India observó que, en materia de enseñanza, un niño europeo cuesta anualmente a la Administración 223 libras; un niño asiático, 31 libras y, un alumno africano, 8 libras y 5 chelines al año. Esto significaba que la calidad de la enseñanza dada a un niño europeo y las instalaciones y servicios a su alcance eran de superior calidad. La mayoría de los niños europeos eran hijos de administradores que habían abandonado sus hogares para desempeñar funciones en el Territorio o, como podría argumentarse — argumento indefendible socialmente — que los europeos contribuían más a los ingresos y, por consiguiente, tenían derecho a una mejor enseñanza para sus hijos. Su delegación no creía que podría progresarse rebajando el nivel de los que están más arriba, pero quedaba en pie el hecho de que el costo de la enseñanza del niño africano es de 8 libras y 5 chelines. Además, señaló que la enseñanza general o amplia era imposible en territorios como Tanganyika mientras la población no gozara de una alimentación suficiente. De allí que el problema estuviera asociado a las condiciones económicas y esperaba que el plan decenal daría como resultado un mayor progreso en la lucha contra el analfabetismo en el Territorio. Se había producido un fuerte aumento en la asignación de fondos por las autoridades locales para la enseñanza primaria, pero el incremento era menos notorio en proporción a los gastos totales en materia de enseñanza.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la discriminación racial y la segregación eran evidentes en la política general que seguía el Gobierno en el campo de la educación y en los programas de enseñanza. Existían escuelas separadas con diferentes niveles de enseñanza para las tres principales comunidades raciales y los servicios de enseñanza eran también separados. La existencia de la discriminación resultaba evidente si se comparaban los programas de enseñanza para europeos y para africanos, las asignaciones en el presupuesto y el pago de los maestros. La finalidad de la enseñanza para africanos era simplemente enseñarles a leer y a escribir, y darles las nociones elementales de aritmética, mientras que la enseñanza primaria en las escuelas para europeos estaba destinada a preparar a los alumnos para la enseñanza secundaria. Las asignaciones presupuestarias para las escuelas de europeos eran 10 veces mayores que las asignaciones para las escuelas de africanos, a pesar de que la población africana era de 8.000.000 en comparación con los 18.000 europeos. En las escuelas del Estado, los gastos por alumno africano eran 26 veces inferiores a los gastos por alumno europeo. Asimismo el sueldo de los maestros africanos era aproximadamente de 96 a 500 chelines, mientras que los maestros europeos recibían de 900 a 2.000 chelines. En cuanto a la situación general de la enseñanza, sólo el 12% de los niños en edad escolar asistía a las escuelas y la Autoridad Administradora no adoptaba las medidas necesarias para aumentar las instalaciones y servicios escolares. Con arreglo

al Plan Decenal para la Enseñanza de Africanos, en 1956 sólo el 36% de los niños africanos asistiría a las escuelas primarias. En consecuencia, el 64% de los niños indígenas permanecería al margen de la escuela y, por lo mismo, estos niños serían analfabetos.

La asignación presupuestaria para la enseñanza era muy insuficiente. En realidad, era tan ridículamente exigua que resultaba casi imposible hablar de la construcción de nuevas escuelas y sin embargo, sin la instalación de nuevos servicios y sin la preparación de personal calificado, no podía pretenderse la ampliación de la enseñanza a todo el territorio. En 1951, los gastos en enseñanza ascendieron aproximadamente a 800.000 libras esterlinas y, en 1952, a 900.000; 260.000 niños se veían obligados a concurrir a las escuelas denominadas escuelas *bush* que, en realidad, no imparten enseñanza alguna y sólo asisten a estas escuelas porque no existen otros servicios. La propia Autoridad Administradora reconoció este hecho y admitió que el nivel de enseñanza en estas escuelas no era elevado. Los niños que asistían a tales escuelas salían de ellas completamente analfabetos. La situación era aún peor en la enseñanza secundaria. Un curso completo de educación secundaria sólo podía obtenerse en una escuela para europeos, que rehusaba admitir africanos. Habían solamente 2.000 alumnos africanos en las escuelas secundarias y el plan decenal no proveía ninguna mejora de esta situación, puesto que, según dicho plan, sólo uno de cada cinco niños podría obtener una enseñanza secundaria de dos años después de completar cuatro años de escuela primaria. En esta forma, sólo el 20% del total de alumnos de las escuelas primarias estaría en condiciones de continuar asistiendo a clases en las escuelas secundarias y tales clases ni siquiera serían del nivel de una escuela secundaria, sino levemente superiores al nivel de la escuela primaria. En lo que respecta a las clases superiores en las escuelas secundarias, aun con arreglo al plan decenal, sólo 230 alumnos gozarían del beneficio de este curso para 1956 y la Autoridad Administradora admitía que únicamente alrededor de la mitad de los solicitantes podrían pasar el examen de admisión para el Makerere College. En consecuencia, sólo aproximadamente 115 estudiantes serían aceptados. En cambio la población total africana sería de 8.000.000.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que el plan decenal para la enseñanza era ambicioso, pero constituía sólo una fase en el desarrollo de la enseñanza y que debía llevarse a la práctica un desarrollo aun mayor. Sin embargo, el plan era el máximo que la hacienda del Territorio podía soportar en la actualidad. En 1952, 12,1 ó 12,2% de los ingresos se invirtieron en la enseñanza y la UNESCO consideró que esta cantidad era muy apropiada. En 1954, se gastará aproximadamente el 15% en la enseñanza. El primer desarrollo necesariamente se produciría en las escuelas primarias y el efecto pleno del plan no se observaría realmente sino algún tiempo después de su terminación. Puesto que el plan debe terminar dentro de dos años, sería más conveniente comenzar a elaborar el próximo plan en vez de revisar el actual, como sugirió un representante. En cuanto al establecimiento de la enseñanza obligatoria, el representante en su calidad de Procurador General del Territorio, se vería obligado a oponerse a su implantación hasta que hubiera un número sufi-

ciente de escuelas donde enviar a los niños. Sin embargo, la Autoridad Administradora tenía la intención de que con el tiempo se estableciera la enseñanza obligatoria, y llegaría el momento en que sería posible implantarla en algunas regiones. En realidad, ya se habían dictado algunas normas en ciertas regiones para obligar a un padre, una vez que su niño asistía a la escuela, a continuar enviándolo a clases. Esto podía considerarse como un primer paso hacia la enseñanza obligatoria.

FORMACIÓN INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó que, lejos de aumentar el número de alumnos matriculados en las escuelas técnicas, en realidad disminuía.

MAESTROS Y FORMACIÓN DE MAESTROS

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas advirtió que había gran escasez de maestros en el Territorio. Este hecho constituía otro obstáculo para el desenvolvimiento de la enseñanza.

ENSEÑANZA SUPERIOR

El representante de Siria estimó que un pueblo de 8.000.000 de africanos necesitaba una universidad. Podía comenzarse modestamente; la Autoridad Administradora podía crear cursos especiales de nivel universitario, que serían el núcleo de la futura universidad.

El representante de El Salvador expresó que su delegación consideraba oportuno que se estableciera por lo menos un centro de enseñanza superior en el Territorio, como lo había recomendado previamente el Consejo.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas advirtió que aun no existía una sola institución de enseñanza superior en el Territorio, no obstante la recomendación formulada por el Consejo en 1949 de que la Autoridad Administradora considerara la creación de instituciones de esta índole en Tanganyika.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la enseñanza superior era un problema que estaba siendo estudiado, pero que resultaría extremadamente oneroso tratar de crear por ahora una universidad en el Territorio. Era mejor emplear los fondos disponibles para el desarrollo de la enseñanza secundaria y técnica, debido particularmente a que, hasta ahora y aun por algún tiempo, todo africano debidamente calificado podía recibir enseñanza superior fuera de Africa, posibilidad que no le sería negada nunca.

DERECHOS DE MATRÍCULA

El representante de Haití consideró que, por pequeños que pudieran ser los derechos de matrícula, constituían un inconveniente para el desarrollo de la educación.

El representante de El Salvador estimó que la enseñanza elemental debía ser gratuita.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que los derechos de matrícula eran elevados y que, en las escuelas secundarias, ascendían aproximadamente a 200 chelines al año. Esto significaba, por supuesto, que tales escuelas eran prácticamente inaccesibles a la mayoría de la pobla-

ción, dado que el salario medio de un trabajador era aproximadamente de 14 a 15 chelines al mes.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que los derechos de matrícula cobrados a los africanos eran extremadamente reducidos y que no cabía duda de que a ningún africano se le había rehusado o impedido la enseñanza por no poder pagar los derechos de matrícula. Sin embargo, se tomarían muy en cuenta las opiniones de los miembros del Consejo; el problema estaba considerándose y se mantendría en permanente revisión.

INSTRUCCIÓN PARA ADULTOS Y ENSEÑANZA PARA LAS MASAS

El representante de Francia, en nombre de su delegación, expresó su interés por la labor en materia de instrucción para adultos, puesto que así se reduciría en un plazo previsible la enorme diferencia existente entre los niveles intelectuales y culturales. El

entusiasmo de los habitantes indígenas por este trabajo constituía la mejor garantía de su éxito.

El representante de El Salvador sugirió que debería emprenderse en el Territorio una campaña contra el analfabetismo en forma permanente y en una escala creciente.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expuso que la Autoridad Administradora había admitido que el analfabetismo entre la población era elevado; no obstante, la Autoridad Administradora no adoptó las medidas necesarias para reducirlo.

El representante especial de la Autoridad Administradora expuso que, hasta el momento, la campaña de alfabetización de adultos había sido un éxito. La Autoridad Administradora comprendía plenamente su importancia e insistiría en el desarrollo de la campaña.

Capítulo II

RUANDA URUNDI

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

El Territorio de Ruanda Urundi está situado en el África central y tiene una superficie de 54.172 kilómetros cuadrados. El país, que es montañoso, está limitado al Norte por Uganda, al Este y al Sur por el Territorio en Fideicomiso de Tanganyika y al Oeste por el Congo Belga. La capital, Usumbura, está situada sobre la costa noreoriental del Lago Tanganyika.

El clima del Territorio es tropical en las zonas bajas y templado en la elevada meseta que comprende la mayor parte del país. La precipitación pluvial varía según las regiones, pero es excesivamente irregular tanto por la cantidad de las precipitaciones como por su distribución.

Ruanda Urundi es el territorio más densamente poblado del África central; según los datos obtenidos, la población se distribuye de la siguiente manera:

	1951	1952
Habitantes indígenas que viven en regiones tribales	3.904.799	4.035.123
Habitantes indígenas no sometidos al régimen de jefatura, que viven en regiones extratribales	62.261	67.363
Europeos	4.325	5.121
Asiáticos	1.370	1.328

La Autoridad Administradora ha estimado que si la población sigue aumentando al ritmo actual Ruanda duplicará sus habitantes en 26,9 años y Urundi en 31,8 años.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, observando que entre los principales problemas señalados a su atención por el representante especial en su análisis de la situación del Territorio, el más apremiante es el que plantea el crecimiento de la población, pide a la Autoridad Administradora se sirva mantener al Consejo plenamente informado de sus opiniones sobre esta cuestión y de las medidas que está adoptando al respecto.

PROGRESO HACIA LA AUTONOMÍA O LA INDEPENDENCIA

En sus resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII), la Asamblea General invita a las Autoridades Administradoras a incluir en sus informes anuales datos relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyecte adoptar, para conducir al territorio en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia, y un cálculo aproximado del tiempo que consideren necesario para completar la aplicación de las distintas medidas des-

tinadas a lograr tal objetivo. También se pide al Consejo se sirva incluir en sus informes a la Asamblea General una sección separada que trate del cumplimiento de las resoluciones mencionadas.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Francia estimó que la Autoridad Administradora había cumplido su misión con conciencia, método y eficacia, teniendo solamente en cuenta los intereses presentes y futuros de los habitantes indígenas.

El representante de la India declaró que la actitud de la Autoridad Administradora respecto a los habitantes indígenas recordaba la de los despotas paternalistas, y que ni el informe anual ni el representante especial decían siquiera una palabra de elogio respecto a los habitantes del país; lo más frecuente era que la Autoridad Administradora expresase un sentimiento de desdén. Se manifestó sorprendido de que la Autoridad Administradora no pareciese darse cuenta de que esta crítica de la población de Ruanda Urundi no constituía un desdoro para dicho pueblo, sino para la propia Administración. Si, como decía la Autoridad Administradora, después de 30 años de administración belga el pueblo se encontraba en semejantes condiciones, ello sólo podría significar que la Autoridad Administradora había desempeñado muy mal su misión. Pidió a la Autoridad Administradora que modificase su actitud hacia ese pueblo, puesto que tal actitud no correspondía en modo alguno al concepto general de la administración fiduciaria.

Agregó que la situación del Territorio dejaba mucho que desear. Aunque reconoció que se habían dado los primeros pasos hacia el adelanto general del Territorio, a su juicio había que hacer un esfuerzo más firme. Sin embargo, tal esfuerzo solamente lograría el éxito si la población indígena prestaba su cooperación, que sólo podría obtenerse dando al pueblo la sensación de que él también tenía algo que ganar en Ruanda Urundi, y podía alentar la esperanza de que en un futuro no muy lejano se le permitiría encargarse de los asuntos del Territorio. En consecuencia, antes de introducir cambios sociales, económicos y docentes, había que adoptar una decisión concreta para conceder a los habitantes cierto grado de responsabilidad política.

El representante de Nueva Zelandia tomó nota con interés del prólogo a los apéndices estadísticos, así como de la importancia que la Autoridad Administradora atribuía a la recopilación de estadísticas adecuadas, especialmente de las estadísticas demográficas, para que sus planes de desarrollo tuviesen una base firme. Además, consideró que el Consejo debía tomar

nota de los progresos que se habían realizado en todos los campos de actividad durante el año que se estudiaba, teniendo sin embargo en cuenta algunas de las dificultades y de los obstáculos propios del Territorio que se oponían al progreso.

El representante del Reino Unido dijo que su delegación confiaba que ni la tradición conservadora feudal ni la inercia apática impedirían que la Autoridad Administradora hiciese una tentativa concienzuda y enérgica para guiar a los habitantes del Territorio, para que apreciaran plenamente los principios más satisfactorios de organización política y social.

Agregó que la Autoridad Administradora había cumplido evidentemente con su primer deber, que era el de hacer uso de la experiencia y de los conocimientos humanos, a fin de identificar y analizar los problemas fundamentales que deben resolverse para realizar los objetivos del Régimen de Administración Fiduciaria, de conformidad con las circunstancias propias del Territorio y del genio natural de su pueblo.

El representante de Haití no pudo aceptar sino con reservas el juicio severo de la Autoridad Administradora acerca de las facultades de los habitantes indígenas, ni considerar tal juicio como explicación adecuada de la relativa falta de progreso en todas las esferas. Expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora pondría todo su empeño en la recuperación del tiempo perdido.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recalcó que la situación del Territorio en general era muy poco satisfactoria. La Autoridad Administradora estaba violando las obligaciones que había contraído como tal, especialmente las del Artículo 76 de la Carta. Por lo tanto, el Consejo de Administración Fiduciaria debía aprobar recomendaciones claras y estrictas acerca de la política seguida por la Autoridad Administradora. Las Naciones Unidas en general, y el Consejo de Administración Fiduciaria en particular, no debían permitir que la Autoridad Administradora desacreditase al Régimen de Administración Fiduciaria con la política que estaba aplicando en el Territorio; el Consejo debía aprobar las recomendaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos y propósitos de dicho Régimen.

El representante de Siria dijo que no creía que las características negativas de holgazanería y propensión al delito, atribuidas a la población por la Autoridad Administradora, constituyesen características innatas de la población. La Autoridad Administradora llegaba incluso a afirmar que había una diferencia esencial entre un hijo de padres europeos y uno de padres africanos, para que el Consejo reconociese las restricciones que había impuesto en su Administración.

El representante de la Autoridad Administradora, así como su representante especial, contestaron a las críticas formuladas por ciertas delegaciones en el sentido de que la inercia y el estancamiento habían impedido el desarrollo del Territorio, citando para ello ejemplos de progresos logrados en todas las esferas de actividad durante la Administración belga.

En respuesta al representante de la India, el representante especial de la Autoridad Administradora declaró que ésta siempre habría expresado su intención de resolver los problemas económicos antes que los políticos, puesto que los primeros eran apremiantes y

vitales, mientras que la situación política, si bien no era ideal, era tolerable. Por ejemplo, los adelantos logrados en el cultivo del café se habían mantenido sólo gracias a la continua propaganda hecha por la Administración.

En respuesta a las delegaciones que habían criticado la actitud de la Autoridad Administradora respecto a la población indígena, manifestó que se habían atribuido a la Autoridad Administradora y a él mismo declaraciones que no habían sido formuladas ni en uno ni en otro caso. Por su parte, aunque se refirió a los habitantes indígenas diciendo que eran apáticos y evidenciaban una falta de interés por las innovaciones, no los había calificado de holgazanes, indisciplinados, deshonestos ni inclinados al delito, defectos que, por otra parte, no tenían. El respeto entre la Autoridad Administradora y la población indígena era recíproco.

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

El representante de la India estimó que la única respuesta eficaz al problema del exceso de población estaba en un planeamiento hecho a base de la organización familiar, y expresó su pesar por el hecho de que esta medida todavía no hubiese sido considerada por la Autoridad Administradora. Opinó que la manera más constructiva de resolver el problema del exceso de población consistía en aumentar la productividad de la región. Otra manera de resolverlo podría ser el fomento de la emigración, mas expresó la esperanza de que no se considerase esta alternativa como política oficial, puesto que entrañaba una actitud derrotista que también era inhumana. Además recomendó que la Autoridad Administradora acelerase la ejecución de trabajos previstos en el Plan Decenal.

El representante de Nueva Zelandia consideró que convendría que la Autoridad Administradora prosiguiese prestando atenta consideración al problema del exceso de población.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló a la atención del Consejo el hecho de que, además de constituir un método radical, el control de la natalidad como medio para contener el aumento de la población también constituía una medida peligrosa y planteaba importantes cuestiones morales. Una campaña semejante constituiría una grave afrenta a las tradiciones de la población indígena y a su sentido de la dignidad moral.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SITUACIÓN JURÍDICA DEL TERRITORIO Y UNIÓN ADMINISTRATIVA CON EL CONGO BELGA

Las leyes de 21 de agosto de 1925 y el 25 de abril de 1949 siguen siendo la base de la situación jurídica del Territorio, que está unido administrativamente al Congo Belga, con la categoría de vicegobernación general. Pero las leyes del Congo Belga sólo son aplicables a Ruanda Urundi cuando se hace una declaración expresa a tal efecto, o cuando el Gobernador del Territorio las proclama mediante decreto. El Territorio tiene una personalidad jurídica separada, sus

propias finanzas y sus propios bienes. Se ha establecido una unión aduanera con el Congo Belga.

A base del informe del Comité Permanente de Uniones Administrativas,²⁸⁸ el Consejo, en su 13° período de sesiones, aprobó las siguientes conclusiones:

El Consejo recuerda las conclusiones aprobadas en su informe especial sobre las uniones administrativas concernientes a los territorios en fideicomiso,²⁸⁹ en el que expresó la opinión de que no había prueba alguna que indicara que la unión administrativa de Ruanda Urundi y del Congo Belga era incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Ruanda Urundi; pero el Gobierno de Bélgica debiera seguir examinando la conveniencia de revisar la ley del 21 de agosto de 1925, en cuya virtud se estableció la unión administrativa entre Ruanda Urundi y el Congo Belga para que armonizara más con las prácticas seguidas en la actualidad.

A este respecto, el representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la ley del 21 de agosto de 1925 no había sido reformada desde que el Consejo de Administración Fiduciaria había redactado y aprobado su informe. La ley era bastante flexible y se la podía adaptar a cualesquiera circunstancias que se planteasen en Ruanda Urundi. Sin embargo, el 25 de abril de 1949 el Gobierno de Bélgica había promulgado una nueva ley que disponía que el Acuerdo de Administración Fiduciaria para el Territorio de Ruanda Urundi, aprobado por la Asamblea General el 13 de diciembre de 1946, debía aplicarse plenamente. Por consiguiente, todas las disposiciones de la ley del 21 de agosto de 1925 que se consideraran incompatibles con las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria o de la Carta de las Naciones Unidas quedarían automáticamente nulas y sin valor; pero dicha ley no incluía disposiciones de tal género.

Al tomar nota de esta declaración formulada por el representante especial de la Autoridad Administradora, el Consejo sigue creyendo que la ley del 21 de agosto de 1925 no concuerda plenamente con las prácticas administrativas actuales, y, por lo tanto, expresa la esperanza de que el Gobierno de Bélgica informará al Consejo acerca de las medidas convenientes que puedan adoptarse para que la ley del 21 de agosto de 1925 armonice más con las prácticas seguidas actualmente, y para hacer que sus disposiciones sean más precisas con respecto a los términos del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

Con respecto a las garantías enumeradas en el inciso a) del párrafo 7 de su resolución 293 (VII), el Consejo toma nota de que los informes anuales relativos a la administración de Ruanda Urundi, incluso el informe correspondiente a 1952, incluyen datos financieros, estadísticos y de otro carácter del Territorio en fideicomiso.

Respecto a las garantías enumeradas en el inciso b) del párrafo 7 de su resolución 293 (VII), el Consejo toma nota de que en 1952 y 1953 no fué al Territorio ninguna Misión Visitadora, pero que ni el Comité Permanente de Uniones Administrativas ni el Consejo habían puesto en duda la buena voluntad del Gobierno

belga para facilitar a las Misiones Visitadoras el acceso a todas las fuentes de información sobre la unión administrativa de Ruanda Urundi y el Congo Belga, que pudiesen necesitar para la presentación de informes completos sobre el Territorio en fideicomiso de Ruanda Urundi.

Respecto a las garantías enumeradas en el inciso c) del párrafo 7 de su resolución 293 (VII), el Consejo comprueba que no existe información alguna indicativa de que los límites del Territorio no han sido respetados.

Respecto a las garantías enumeradas en el inciso d) del párrafo 7 de su resolución 293 (VII), el Consejo toma nota de que, según los datos que figuran en los informes anuales correspondientes a 1951 y 1952, el total de ingresos públicos recibidos del Territorio en fideicomiso de Ruanda Urundi se descompone de la siguiente manera:

Año	En francos
1948 (valor real)	220 878.741,16
1949 (valor real)	275.904.788,99
1950 (valor real)	385.919.350,62
1951 (valor real)	559.211.752,25
1952 (valor aproximado)	417.443.000,00

Los gastos totales, ordinarios y extraordinarios, para la administración, bienestar social y desarrollo del Territorio en fideicomiso ascendieron a las siguientes sumas:

Año	Gastos ordinarios	Gastos extraordinarios	Totales
	En francos	En francos	En francos
1948 (valor real) ..	230.109.202,85	28.718.000,40	258.827.203,25
1949 (valor real) ..	327.334.161,85	24.238.880,05	351.573.041,90
1950 (valor real) ..	335.164.570,31	109.749.629,62	444.914.199,93
1951 (valor real) ..	430.643.948,18	89.887.770,10	520.531.718,28
1952 (valor aproximado)	441.853.000,00	428.200.681,00	870.053.681,00

Por lo tanto, puede afirmarse:

i) Que el presupuesto de los gastos de administración, bienestar social y desarrollo de Ruanda Urundi para 1952 no ha sido inferior al total de los ingresos públicos del Territorio en fideicomiso;

ii) Que, considerados separadamente, los gastos reales de 1951 fueron inferiores a los ingresos públicos reales del Territorio en fideicomiso;

iii) Que el valor real de los gastos de administración, bienestar social y desarrollo de Ruanda Urundi en 1948 y 1951 no fué inferior al valor real de los ingresos públicos del Territorio, que en esos cuatro años ascendieron a 1.441.914.633,02 francos, mientras los gastos reales ascendieron a 1.575.846.163,36 francos.

CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS HABITANTES

En virtud de la ley del 21 de agosto de 1925, los indígenas de Ruanda Urundi tienen derechos iguales a los concedidos a los habitantes del Congo Belga por las leyes de este Territorio.

La Autoridad Administradora considera que durante mucho tiempo no se podrá unificar la legislación aplicable a los distintos sectores de la población, especialmente en lo que se refiere a la situación jurídica de los individuos, a los derechos de propiedad y a la organización política, en aquellos lugares donde los habitantes indígenas continúan sujetos a sus propias costumbres siempre que éstas no sean contrarias a la legislación escrita o al orden público general, y en lo que

²⁸⁸ T/L.438.

²⁸⁹ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo período de sesiones, Suplemento No. 12 (A/2151).

se refiere a ciertas esferas económicas, en cuyos casos la población indígena necesita de protección especial.

Una serie de decretos, que entraron en vigor en el Territorio el 10 de septiembre de 1952, disponen la inscripción de los habitantes indígenas en el registro de la población civilizada, y en materia jurídica pone en completo pie de igualdad a las personas inscritas y a las que tienen el certificado de mérito civil, que se otorga a personas no indígenas. La Autoridad Administradora declara que, de esta manera, la unificación de la condición jurídica de la población se está logrando en forma gradual.

FUNCIONES LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS

En 1952 continuaron ejerciendo el poder legislativo el Parlamento de Bélgica y la Corona, respectivamente mediante leyes y decretos. En caso de urgencia, el Gobernador General del Congo Belga y el Gobernador de Ruanda Urundi pueden suspender temporalmente la ejecución de los decretos, y firmar ordenanzas con fuerza de ley.

Las facultades ejecutivas están delegadas por ley en el Gobernador, quien las ejerce por medio de ordenanzas.

Desde 1947 existe un Consejo del Vicegobernador General de Ruanda Urundi, órgano consultivo que examina los presupuestos, delibera sobre todas las cuestiones que le somete el Gobernador y está autorizado para expresar sus deseos (*vœux*) al Gobierno.

Actualmente el Consejo se compone de siete miembros natos (con inclusión del *Mwami* (rey) de Ruanda y el *Mwami* de Urundi); de dos representantes de la cámara de comercio, dos representantes de asociaciones de colonos, dos representantes de asociaciones de empleadores y tres representantes de sindicatos, todos ellos escogidos por el Gobernador de las listas de candidatos presentadas por dichas organizaciones; y de tres notables y de tres representantes de la población indígena (que, en lo posible, han de ser habitantes indígenas) libremente nombrados por el Gobernador. Un miembro de este último grupo es un sacerdote africano y los otros dos son misioneros europeos.

En 1948 y 1951 el Consejo de Administración Fiduciaria y sus Misiones Visitadoras recomendaron persistentemente la conveniencia de aumentar la representación y participación de todos los intereses indígenas y de permitir que los habitantes indígenas adquirieran experiencia en los procesos del gobierno.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, considerando que es conveniente que exista en el Territorio algún órgano central en el que los habitantes indígenas puedan adquirir experiencia en las actividades gubernamentales y participar en la elaboración de las leyes, lo que permitiría estrechar las relaciones entre los dos países y desarrollar sus intereses comunes, recuerda sus recomendaciones aprobadas en el 11° período de sesiones acerca del Consejo del Vicegobernador General, y recomienda que la Autoridad Administradora amplíe las funciones de dicho Consejo y aumente el número de sus miembros para que en él puedan estar representados todos los intereses indígenas. El Consejo recomienda que la Autoridad Administradora considere especialmente la posibilidad de aumentar el número de miembros del Consejo del Vicegobernador General, eligiendo para dichos

cargos a miembros de los consejos superiores de los dos países.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Existen en el Territorio en Fideicomiso dos regímenes paralelos de administración: la administración belga y, bajo su fiscalización general, un régimen de autoridades indígenas.

La administración belga está a cargo de un Gobernador, auxiliado en sus funciones por un Comisionado Provincial; en 1952 los servicios administrativos contaron con 524 europeos, y con 559 habitantes indígenas del Territorio y del Congo Belga con categoría de funcionarios de la administración pública. Las cifras correspondientes a 1951 fueron de 477 y 493 funcionarios respectivamente. Además había 5.046 empleados africanos no pertenecientes a dicha categoría. Todos los altos cargos de la Administración están ocupados por europeos.

Desde el punto de vista de la administración belga el Territorio está dividido en dos Residencias, la de Ruanda y la de Urundi, cada una de las cuales se divide respectivamente en ocho y nueve territorios; cada una de ellas está dirigida por un Administrador.

Respecto a la estructura política indígena, el Territorio está dividido en dos estados indígenas (país), Ruanda y Urundi, cada uno de ellos dirigido por un *Mwami* elegido conforme a las costumbres indígenas, y ratificado por el Gobernador. Cada país se divide en jefaturas administradas por jefes a quienes designa el *Mwami* conforme al derecho consuetudinario y a quienes ratifica el Gobernador. Hay 51 jefes en Ruanda y 36 en Urundi. A su vez, cada jefatura está dividida en subjefaturas cuyos jefes son nombrados por el *Mwami* y ratificados por el Residente. Hay 628 subjefes en Ruanda y 499 en Urundi. La gran mayoría de los jefes y subjefes saben leer y escribir, y por regla general se han educado en el sector de la administración de la Escuela de Astrida. Reciben remuneraciones basadas en el número de contribuyentes de su respectiva región.

Los *Bami*,* jefes y subjefes ejercen su autoridad con arreglo a lo prescrito por la costumbre y también desempeñan numerosas funciones prescritas por la ley. Por ejemplo, tienen la obligación de informar a los miembros de sus distritos sobre las reglamentaciones y decisiones adoptadas por las autoridades superiores y comunicar a éstas los deseos de la población; entre otras cosas, tienen que cooperar en la recaudación de impuestos, informar a las autoridades judiciales sobre los delitos y velar por que se ejecuten los trabajos que incumben realizar a los distritos indígenas.

En los centros extratribales (*centres extra-coutumiers*), de los cuales el de Usumbura es el más importante, las autoridades administrativas son africanos dirigidos por funcionarios europeos. Cualquier habitante indígena capacitado del Territorio en fideicomiso o del Congo Belga puede ser jefe de un centro extratribal.

Al comentar en el 11° período de sesiones la cuestión de la participación de africanos en la administración belga, el representante especial había señalado que, además de la administración dirigida por funcionarios belgas, existía simultánea y paralelamente una poderosa organización indígena que comprendía desde el subjefe

* Plural del *Mwami*.

hasta el *Mwami*. Al parecer la futura independencia se lograría como resultado del traspaso progresivo de poderes de las autoridades no indígenas a las indígenas, y no mediante la introducción de personas indígenas en la administración belga.

En dicho período de sesiones, el Consejo había señalado a la atención de la Autoridad Administradora las dificultades que la dualidad existente en la estructura administrativa parecía presentar al desarrollo de un gobierno territorial en el que los representantes indígenas pudiesen desempeñar plenamente su parte, y la había invitado a incluir en su siguiente informe anual una explicación completa de su política en la materia y de los medios por los cuales pudieran resolverse las dificultades implícitas en la misma.

En distintas oportunidades, y últimamente en su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria había recomendado que la Autoridad Administradora ampliase las oportunidades para que los habitantes indígenas pudiesen avanzar a los cargos superiores de la administración pública mediante medidas tales como la concesión de becas y la realización de programas de formación profesional. También había invitado a la Autoridad Administradora a revisar las escalas de sueldos y salarios para empleados de la Administración a fin de determinar si eran adecuados, y la invitó a incluir información sobre este asunto en su siguiente informe anual.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando la recomendación aprobada en su 11° período de sesiones, en que señaló los obstáculos que la dualidad existente en la estructura administrativa parecía oponer al desarrollo de un gobierno territorial en que los representantes indígenas pudieran participar plenamente y observando que en el 13° período de sesiones el representante especial de la Autoridad Administradora no pudo exponer las ideas de ésta acerca del porvenir del régimen basado en dicha dualidad, expresa su permanente preocupación por recibir de dicha Autoridad una declaración de su política al respecto, y pide a la próxima Misión Visitadora que vaya al Territorio, que estudie esta cuestión y exprese sus opiniones al respecto en el informe que presente al Consejo.

REFORMA DE LA ESTRUCTURA POLÍTICA INDÍGENA

La estructura política indígena será reorganizada en cumplimiento de un decreto del 14 de julio de 1952. El aspecto principal de esta reorganización consistirá en el establecimiento, para las categorías de subjefatura, jefatura, territorio y país, de consejos que, según expresa la Autoridad Administradora, serán organizados con arreglo a un sistema representativo adecuado al estado de desarrollo de la población del Territorio y a la mentalidad indígena. El Consejo de cada subjefatura estará compuesto por el subjefe y por cinco a nueve notables elegidos por sus iguales, a base de una lista de notables preparada por el subjefe conforme a los deseos de la población. En los consejos de mayor categoría habrá aproximadamente igual número de representantes de jefes y subjefes y de representantes de notables, elegidos con arreglo a un sistema de elección directa por los notables de los consejos de menor categoría.

Por último, el Consejo Superior de cada país, presidido por el *Mwami*, estaría compuesto por cuatro per-

sonas escogidas por su conocimiento de los problemas sociales, económicos, espirituales y culturales del país, y cuatro indígenas que tengan el certificado de mérito civil y que estén inscritos en el registro, debiendo estos ocho miembros ser aceptados por los otros miembros del Consejo.

Estos diversos consejos deberán ser consultados en todas las cuestiones de interés para sus distritos. El consentimiento de los consejos regionales y de las jefaturas será necesario en muchos casos para dar validez a las decisiones del *Mwami* o de los jefes, mientras que los antiguos consejos sólo tenían facultades consultivas. Diputaciones permanentes de los Consejos Superiores regionales se encargarán de la fiscalización entre uno y otro período de sesiones.

Como contrapartida del control ejercido por estas asambleas sobre los actos de las autoridades indígenas, el decreto amplía las atribuciones de estas últimas, otorgándoles, entre otras atribuciones, la de determinar los programas agrícolas y establecer impuestos suplementarios (centimes additionnels).

En su 11° período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria acogió favorablemente estas reformas, que todavía no habían sido aprobadas, y expresó su interés por recibir otros informes sobre la marcha de su aplicación.

En el 13° período de sesiones del Consejo el representante especial de la Autoridad Administradora informó de que el decreto del 14 de julio de 1952 relativo a la reorganización política indígena había entrado en vigor el 1° de agosto de 1953, y que desde entonces se habían constituido los consejos en sus distintas categorías.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, observando con satisfacción que las reformas de la estructura política indígena previstas en el decreto del 14 de julio de 1952 han sido aceptadas por las autoridades tradicionales, y que los consejos de las distintas categorías han sido establecidos con buen éxito, expresa la esperanza de que este importante primer paso hacia la democratización de las instituciones indígenas sea complementado con la adopción de medidas encaminadas a tal fin.

SUFRAGIO

En el Territorio no hay un sistema general de sufragio.

En distintas oportunidades se ha intentado celebrar elecciones para los consejos de los centros extratribales, pero la Autoridad Administradora ha informado de que tales iniciativas han fracasado. Los resultados desalentadores de estos experimentos electorales fueron atribuidos por la Autoridad Administradora a la falta de interés de los africanos en tales elecciones, y al hecho de que muchos electores son analfabetos.

El Consejo observó con pesar estos fracasos, y en su 11° período de sesiones invitó a la Autoridad Administradora a estudiar la adopción de nuevas medidas que pudieran suscitar un movimiento de opinión favorable a las experiencias electorales efectuadas en una escala cada vez mayor.

En su informe de 1952, la Autoridad Administradora manifestó que indudablemente podrían hacerse nuevos esfuerzos cuando se constituyeran los consejos previstos en el decreto de 14 de julio de 1952. En el 13°

período de sesiones el representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo de que las elecciones celebradas en 1953 para la formación de consejos indígenas se habían desarrollado normalmente. Declaró además que las elecciones celebradas en Usumbura en noviembre de 1953 habían demostrado que los habitantes de los centros extratribales comenzaban a comprender el funcionamiento del sistema electoral.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes conclusiones:

El Consejo observa con satisfacción que las elecciones celebradas en 1953 para el Consejo del centro extratribal de Usumbura despertaron un interés público mayor que elecciones anteriores similares, y que en el establecimiento de nuevos consejos indígenas se están empleando con éxito los métodos de elección indirecta. El Consejo expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora intensifique sus campañas para persuadir a la población indígena acerca del valor de los métodos electorales, y de que se despierte un interés público cada vez mayor, a fin de que los métodos electorales se utilicen cada vez más, particularmente en lo que se refiere a la estructura política indígena.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

En el Territorio sólo hay dos grupos que pueden considerarse como organizaciones políticas. El primero de ellos, la Unión Euroafricana de Ruanda Urundi (L'Union Euroafricaine du Ruanda-Urundi), primitivamente conocida como Union des Colons du Ruanda-Urundi es una asociación que cuenta con más de 200 miembros europeos interesados en la defensa de los intereses morales y materiales de la población europea del Territorio, así como en la evolución de esta última en armonía con otros sectores de la población. El otro grupo, la Liga de los Derechos Humanos y de la nueva democracia (Ligue des droits de l'homme et de la démocratie nouvelle) que tiene su oficina central en Kisenyi y está compuesto por algunos europeos, tiene por objeto la difusión de los principios de la Declaración de Derechos Humanos.

Ambas organizaciones han dirigido peticiones al Consejo de Administración Fiduciaria. La Unión Euroafricana ha sometido a título de información una crítica²⁹⁰ acerca de la reforma de la estructura tribal indígena y la Liga de los Derechos Humanos ha pedido, entre otras cosas, que se mejoren los servicios de enseñanza para los niños mulatos²⁹¹ y que se fiscalice la emigración desde Ruanda Urundi hacia el Congo Belga.²⁹²

DERECHOS DE PETICIÓN

En su 11° período de sesiones, el Consejo expresó su preocupación por la impresión recibida por la Misión Visitadora de que no se comprendía cabalmente ni se ejercitaba eficazmente el derecho de petición en el Territorio; aceptó complacido la seguridad dada por la Autoridad Administradora de que no se había opuesto obstáculo alguno para que los habitantes indígenas ejercieran ese derecho reconocido; instó a la Autoridad Administradora a tomar las medidas adecuadas para que se comprendiese cabalmente el objeto de las peticiones en el Régimen Internacional de Administración Fiduciaria; y recomendó que estos esfuer-

zos se coordinasen con la difusión de información general sobre las Naciones Unidas.

En su informe de 1952 la Autoridad Administradora no formuló observaciones concretas acerca de esta recomendación, pero reafirmó que el derecho a someter peticiones a las Naciones Unidas era bien conocido de los habitantes que hacían buen uso de él y era utilizado, como era del conocimiento del Consejo, por todos los sectores de la población.

RÉGIMEN JUDICIAL

En sustancia, los sistemas de tribunales no indígenas e indígenas existen hoy con las mismas características descritas en años anteriores.

En su décimo período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora tomase las medidas pertinentes para reducir al mínimo el período de prisión preventiva.

En su informe de 1952 la Autoridad Administradora declaró que el Procurador General (Procureur du roi) había impartido instrucciones a sus auxiliares a fin de que le informasen sobre todos los casos en que el período de prisión preventiva había excedido de tres meses.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

SITUACIÓN JURÍDICA DEL TERRITORIO Y UNIÓN ADMINISTRATIVA CON EL CONGO BELGA

El representante de El Salvador consideró que la unión administrativa del Territorio con el Congo Belga era, lo mismo que las demás uniones similares, de una utilidad práctica discutible. Sería preferible crear en el Territorio instituciones que permitieran al pueblo conocer su propia capacidad, por más que tales instituciones al principio fueran rudimentarias.

El representante de la China observó que en el Territorio todavía no había una ley orgánica. La ley de 1949 no podía hacer las veces de una ley orgánica, y la situación jurídica actual de los habitantes del Territorio, que era indefinida, así como otras lagunas, requerían que la Autoridad Administradora preparase otra ley.

El representante de Siria declaró que, aun cuando el Congo Belga era una colonia directamente vinculada con la Administración belga, Ruanda Urundi era un Territorio en Fideicomiso de las Naciones Unidas colocado bajo la administración del Gobierno de Bélgica. En consecuencia, estimó que la creación de vínculos estrechos entre estos dos Territorios no era plenamente compatible con las disposiciones de la Carta y de los acuerdos de administración fiduciaria, y tendía solamente a complicar la situación.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que aun cuando técnicamente Ruanda Urundi era un Territorio en Fideicomiso, en la práctica había sido convertido por la Autoridad Administradora en un apéndice del Congo Belga. El Gobierno de Bélgica había introducido y seguía introduciendo en el Territorio leyes iguales a las vigentes en el Congo para fortalecer su dominación colonial en el Territorio en fideicomiso. Estas normas y prácticas constituían una flagrante violación del Acuerdo sobre Ad-

²⁹⁰ T/COM.3/L.6.

²⁹¹ T/PET.3/L.2.

²⁹² T/PET.3/L.3.

ministración Fiduciaria. El Consejo debía recomendar a la Autoridad Administradora que adoptase medidas para corregir la situación, y diese a Ruanda Urundi una condición jurídica independiente, que no la subordinase a la administración colonial del Congo Belga. A tal efecto, la Autoridad Administradora debía establecer en el Territorio órganos independientes en materia legislativa, ejecutiva y judicial, basándose en principios democráticos.

El representante especial de la Autoridad Administradora repitió la declaración formulada en períodos de sesiones anteriores, en el sentido de que la unión administrativa con el Congo Belga, lejos de constituir un obstáculo para el desarrollo del Territorio, aun en cuestiones políticas favorecía tal desarrollo. Señaló que la última Misión Visitadora había expresado en su informe la opinión de que tal unión ofrecía ventajas indudables para el Territorio y no perjudicaba su situación jurídica ni su identidad de territorio separado.

En respuesta al representante de la China, el representante especial explicó que la ley del 25 de abril de 1949 había tenido por efecto introducir en la legislación belga el texto íntegro del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

FUNCIONES LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS

El representante de El Salvador estimó que la Autoridad Administradora debía estudiar los medios de establecer un órgano legislativo, en el que los habitantes indígenas tuviesen por lo menos alguna participación directa en la formulación de leyes.

El representante de Nueva Zelandia consideró que el próximo paso en el desarrollo político podía ser el establecimiento, con categoría superior a la de los dos Consejos Superiores regionales, de un consejo para todo el Territorio que al principio podría estar compuesto por los *Bami* y jefes y notables de los Consejos Superiores regionales elegidos por sus iguales. A su juicio, dicho Consejo nacional contribuiría más al desarrollo político y a la unificación de los dos países, que la ampliación del Consejo de la Vicegobernación General.

El representante de Siria observó que, con respecto al Territorio, las funciones legislativas eran ejercidas principalmente por el Rey, es decir, en la práctica, por el Gobierno de Bélgica, y que las funciones ejecutivas del Consejo de la Vicegobernación General eran muy limitadas. Consideró que en su forma actual este órgano era inadecuado puesto que no daba suficientes garantías a los habitantes indígenas.

Acerca de la representación de la población en el ejercicio de las funciones políticas, observó que todavía no se había establecido el derecho de voto. Mientras no existiese ese derecho no podría decirse que hubiera una representación de la población indígena.

Observando que el Consejo de la Vicegobernación General sólo se reunía cuatro o cinco días al año, el representante de Haití dedujo que dicho Consejo sólo aceptaría las decisiones que los miembros europeos, los altos funcionarios y los representantes de los distintos intereses hubiesen condescendido en aceptar durante el resto del año. Nada había cambiado desde que las Misiones Visitadoras de 1948 y 1951 habían recomendado que se estableciese una representación más equitativa de los intereses de los habitantes indígenas, a fin de que pudiesen adquirir experiencia práctica en materia de gobierno.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas observó que todas las funciones legislativas del Territorio no las ejercía la población indígena, sino el Parlamento y el Rey de Bélgica, mientras que las funciones ejecutivas las ejercía el Gobernador de Ruanda Urundi.

Agregó que en su informe anual la Autoridad Administradora reconocía que la población indígena no tenía participación directa en el ejercicio de las funciones legislativas. El Consejo de la Vicegobernación General carecía absolutamente de atribuciones y tenía tan sólo carácter consultivo. Sólo se le permitía examinar cuestiones tales como los presupuestos, pero carecía de poderes para adoptar decisiones. Además, por su constitución este Consejo evidenciaba la absoluta dominación blanca existente en el Territorio. De los 25 miembros del Consejo, sólo tres eran habitantes indígenas, y de éstos dos eran los *Bami*, funcionarios de muy alta categoría pagados por la Administración belga, que, por lo tanto, no podían ser considerados como representantes de la voluntad de los habitantes indígenas.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El representante de Francia estimó que los peligros del actual sistema político residían en la estructura bipartita del territorio. Aunque el problema de establecer las bases generales de la futura organización, fuese unitaria o federal, no era urgente, sería útil pensar de la forma de evitar o disminuir las dificultades del porvenir inmediato.

El representante de la India consideró que el Territorio en fideicomiso estaba atrasado en materia de desarrollo político y que era notoria la falta de progreso. Su administración pública se basaba en un sistema absolutamente anacrónico y las poblaciones locales, gobernadas por un cauteloso sistema indirecto, no hacían más que cumplir órdenes. Esta situación no podía durar mucho tiempo, y sería trágico que estos métodos anticuados y semif feudales tuviesen como consecuencia una situación de desasosiego, y que el pueblo comenzase a pensar que sólo podría lograr sus objetivos valiéndose de métodos más dudosos. La delegación de la India comprendía perfectamente los peligros de un cambio precipitado e imprudente contrario a los hábitos y modos de vida tribales que, según aducía la Autoridad Administradora, constituían mayores obstáculos al desarrollo; sin embargo, la Autoridad Administradora tenía el deber de cambiar estos modos de vida y estos hábitos, y de modificar las costumbres que impedían el progreso político y social. Sobre todo, era menester que la población fuese agrupada en aldeas.

El representante de la India encontró difícil entender la existencia de dos administraciones paralelas. Las reformas recientes habían hecho más compleja y confusa la organización administrativa local, pero dudaba de que la hubiesen hecho más eficaz.

Por último, la Autoridad Administradora debía poner más empeño para lograr la integración de los dos países del Territorio.

A juicio del representante de Australia era conveniente que los dos países eventualmente se unificasen, pero estimó que en las actuales circunstancias tal vez no se pudiera adoptar una acción rápida.

El representante de El Salvador estimó que debían adoptarse disposiciones para establecer una cooperación más estrecha entre los pueblos de los dos países a fin

de solucionar los problemas comunes a ambos, y de realizar sus aspiraciones comunes.

El representante de la China observó que una separación prolongada de los dos sistemas de administración tendría el efecto inevitable de retardar el progreso de los habitantes indígenas hacia el gobierno propio o la independencia, puesto que la limitación impuesta a la participación indígena en la administración europea privaba a la mayoría de los habitantes del Territorio de la útil experiencia que podía obtener en tal servicio.

El representante de Haití estimó que la Autoridad Administradora había adoptado una actitud demasiado paternalista con respecto a las antiguas costumbres de la población indígena. A pesar de las condiciones poco satisfactorias que prevalecían cuando se hizo cargo de la administración del Territorio, la Autoridad Administradora debía haber quebrado resueltamente las tradiciones que constituían un obstáculo al progreso.

El representante de Siria encontró difícil comprender por qué la estructura feudal indígena, que según reconocía la Autoridad Administradora podía entorpecer el progreso del Territorio, se seguía manteniendo tanto en la letra como en el espíritu.

Observó que la mayoría de los puestos públicos estaban ocupados por belgas y declaró que, según había podido comprobar, ningún habitante indígena ocupaba puestos de responsabilidad en la administración.

Acerca de los salarios, observó que existía una enorme diferencia entre los pagados a los europeos y los pagados a los indígenas; a su juicio, esa diferencia no debía ser tal que estableciese una línea de demarcación imposible de atravesar.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que en la esfera política no se habían realizado progresos y que, por el contrario, se observaba un estancamiento absoluto. La organización política del Territorio, así como su estructura administrativa, seguían sin experimentar cambio alguno y por su propio carácter eran antidemocráticas. En su fundamento se encontraba una estructura social atrasada, constituida por el sistema tribal y por los dos sultanatos de Ruanda y de Urundi.

Agregó que la Autoridad Administradora se había servido del antiguo sistema de las jefaturas utilizando los servicios remunerados de los jefes para consolidar el régimen colonial del Territorio. Caía de su peso que este sistema constituía un obstáculo al desarrollo económico y político de la población indígena. En el sistema actual, los verdaderos administradores eran europeos y la administración de Bélgica gobernaba el Territorio. La población indígena no tenía absolutamente ninguna participación en el gobierno.

Por último, declaró que la Autoridad Administradora debía establecer un sistema de gobierno propio basado en el principio democrático de la representación popular.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que no podía prejuzgar acerca de la opinión de su Gobierno respecto de las sugerencias formuladas por varias delegaciones, en el sentido de que los dos sistemas de administración debían estar más estrechamente vinculados entre sí. Sin embargo, entre los dos sistemas no había ninguna separación infranqueable, puesto que funcionarios indígenas a veces pasaban de la administración a ocupar cargos como jefes y viceversa.

El representante especial no sabía en qué forma la Autoridad Administradora se proponía resolver la cuestión del sistema bipartito; por su parte, en otras oportunidades había expresado la opinión de que podía haber dos soluciones: un traspaso de poderes de las autoridades europeas a la administración indígena, o la sustitución de los funcionarios europeos por funcionarios indígenas. Desgraciadamente, estas dos posibilidades ofrecían grandes desventajas. Si la administración indígena se reservaba exclusivamente para los habitantes indígenas, y si se transferían todos los poderes a esta administración, ¿qué ocurriría con los derechos de los europeos que vivían en el Territorio y que, desde el punto de vista de Ruanda Urundi, a menudo eran dispensables para la vida del Territorio? ¿Qué ocurriría con los derechos de los asiáticos, que habían colaborado en la penetración y el desarrollo económico del país, y con los derechos de los africanos que no eran habitantes indígenas? Por otra parte, si los administradores europeos eran reemplazados por administradores indígenas, ¿no se plantearía un conflicto abierto con las autoridades de derecho consuetudinario?

El representante especial declaró que muchos de los jefes eran personas instruidas, con ideas muy progresistas, mientras que entre los jefes ancianos habían muchos llenos de prudencia, moderación y experiencia, asequibles a las nuevas ideas.

En respuesta al representante de la URSS, declaró que no debía sorprender que en el momento actual los verdaderos administradores del Territorio fuesen europeos, o, más concretamente, la Administración belga. Esto era precisamente lo que disponían, aunque de manera un tanto distinta, las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria, que conferían plenos poderes a la Autoridad Administradora en materia de legislación, administración y jurisdicción.

REFORMA DE LA ESTRUCTURA POLÍTICA INDÍGENA

El representante de Francia manifestó que las reformas introducidas por el decreto del 14 de julio de 1952 constituían una etapa importante y aun decisiva de la vida política del Territorio. Manteniendo los elementos estables y progresivos de la organización tradicional, la Autoridad Administradora había logrado, en el momento oportuno, suspender el poder absoluto de los *Bami* y de los jefes y, al mismo tiempo, aumentar las funciones ejecutivas de las autoridades indígenas.

El representante de los Estados Unidos de América declaró que se estaban haciendo progresos en lo referente a las instituciones tribales, y expresó la opinión de que el sistema de consejos establecido en 1952 representaba un importantísimo progreso que permitiría a un número cada vez mayor de habitantes indígenas adquirir experiencia en la administración de los asuntos del Territorio. Se manifestó complacido de saber que el Consejo Colonial de Bruselas había tomado nota con gran satisfacción de las medidas que se estaban adoptando para promover el progreso hacia la autonomía territorial.

El representante de Australia consideró que las reformas introducidas por el decreto del 14 de julio de 1952 no sólo servían para fiscalizar los actos de las autoridades indígenas, sino que también representaban una ampliación de sus atribuciones en ciertas esferas de acción que hasta la fecha habían sido reservadas a las autoridades europeas. A su juicio, el Consejo debía

tomar nota con satisfacción de estas importantes reformas.

El representante de Nueva Zelandia opinó que el Consejo debía acoger con beneplácito la reorganización de la estructura política indígena. Al parecer, la Autoridad Administradora comprendía perfectamente la conveniencia de asegurar la unidad política de Ruanda y de Urundi y reconocía, a juzgar por las declaraciones del Consejo Colonial de Bélgica, que "por sobre todo debemos ocuparnos de organizar la sociedad". La introducción de un sistema jerárquico de consejos, en el cual se había introducido un nuevo elemento de elección, representaba un paso hacia adelante. Sin embargo, debía preverse la extensión gradual por la Autoridad Administradora de los poderes de los consejos indígenas, ampliarse sus bases de representación y considerarse la conveniencia de aumentar sus atribuciones en materia financiera.

El representante de Haití observó que la Autoridad Administradora se había manifestado satisfecha con los primeros resultados de las reformas, y expresó la esperanza de que el informe de la próxima Misión Visitadora diese una clara idea acerca de la forma en que estaban actuando los nuevos consejos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Autoridad Administradora no había hecho nada para modificar la estructura social indígena y la administración local. Si se examinaba el decreto del 14 de julio de 1952, se vería que la supuesta reorganización de los órganos de la administración indígena tenía una finalidad muy evidente y clara, que era la de mantener la actual estructura social atrasada y el poder de los *Bami*. La reorganización era absolutamente antidemocrática y antirrepresentativa, y no concordaba con las finalidades y los propósitos del Régimen de Administración Fiduciaria.

SUFRAGIO

El representante de la India observó con satisfacción que las recientes elecciones parecían haber tenido éxito, y felicitó a la Autoridad Administradora por ello. Observando que el pueblo del Territorio estaba respondiendo a la enseñanza que se le impartía al respecto, sugirió que debía intensificarse dicha enseñanza.

El representante de El Salvador consideró que la Autoridad Administradora debía preparar un programa general para familiarizar a la población indígena con el sistema electoral.

El representante de la China estimó que la introducción del método electivo para constituir los consejos indígenas debía ser motivo de satisfacción; era de esperar que el éxito logrado en la aplicación de este método condujese a su mayor difusión.

El representante de Haití opinó que el sistema de elección establecido para constituir los nuevos consejos no era sino una primera etapa hacia la introducción del sufragio universal y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuase sus esfuerzos en esta materia y diese a la población cada vez mayores oportunidades para expresar su opinión mediante métodos democráticos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas observó que en el Territorio no existía el sufragio, y consideró que el Consejo debía recomendar la introducción de un sistema de sufragio universal.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

El representante de Nueva Zelandia advirtió que el principio de la separación de poderes no parecía cumplirse estrictamente. La Autoridad Administradora tal vez podría considerar la posibilidad de que, mediante una reorganización de la estructura de los tribunales no indígenas, se diera a los magistrados de carrera una mayor parte de las funciones judiciales que estaban ejerciendo los residentes y los administradores.

Expresó ciertas dudas acerca de la oportunidad del derecho de apelar de los fallos de los tribunales indígenas y observó complacido que se estaba estudiando la formulación de un decreto para mejorar esta situación.

El representante de Siria deploró que el principio de la separación de poderes no se respetase ni en la jurisdicción belga ni en la indígena. Observó que la jurisdicción indígena se basaba en reminiscencias de ideas anticuadas, y preguntó cómo podía esperarse que los habitantes indígenas progresaran si no se les permitía abandonar sus viejas tradiciones, que todavía seguían constituyendo la base de su organización judicial.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la aplicación del principio de la separación de poderes era meramente una cuestión de educación de la población indígena, que a menudo veía en las funciones judiciales el principal atributo de la autoridad. Sin embargo, las reformas aprobadas en 1948 mostraban el rumbo escogido por la Autoridad Administradora a tal respecto.

Agregó que el proyecto de decreto sobre la jurisdicción indígena estaba especialmente encaminado a simplificar el complicado sistema actual de apelaciones.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

El representante de Haití dijo que era lamentable que hasta la fecha no hubiese asociaciones de habitantes indígenas que pudieran expresar sus opiniones sobre cuestiones generales de interés permanente para su comunidad. Advirtió que el decreto del 11 de febrero de 1926, que disponía que los residentes podían negarse a autorizar la organización de asociaciones que pudieran constituir un obstáculo al progreso de los habitantes indígenas o una amenaza al orden público, no era el más adecuado para estimular el establecimiento de tales asociaciones.

El representante de Siria observó que las dos organizaciones políticas existentes se componían de europeos, y que los habitantes indígenas no contaban con organizaciones o partidos políticos. En consecuencia, los habitantes indígenas no podían expresar sus opiniones por la prensa o en reuniones públicas.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estimó que la población indígena no participaba en forma alguna en la administración del Territorio y estaba privada de todos los derechos políticos. Hasta tal punto estaban privados de esos derechos y eran objeto de tal opresión que, salvo en circunstancias extraordinarias, el Consejo no recibía información directa de ellos. En el Territorio no había sufragio, ni una sola organización política indígena, ni el menor indicio de actividad política indígena alguna.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que si el Consejo de Administración Fiduciaria recibía pocas peticiones del Territorio, una razón de ello era que los residentes asiáticos, por ejemplo, preferían resolver sus problemas directamente con

la administración. El secreto de la correspondencia estaba garantizado por ley y se respetaba rigurosamente.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

El informe anual de la Autoridad Administradora para 1952 indica que las actividades económicas del Territorio están orientadas fundamentalmente hacia la agricultura y la ganadería. A esto debería agregarse la industria minera, en la cual la población indígena solamente participa como mano de obra.

El programa de la Autoridad Administradora para el desarrollo económico y social del Territorio está expuesto en el plan decenal, cuyo resumen constituyó un anexo del informe anual de 1951. En el campo económico, este plan incluye, además de programas para el desarrollo de la producción y la industria a que nos referimos más adelante, un programa para la modernización del vasto pero aun inadecuado sistema de transportes. En el año bajo estudio, se adelantó la construcción del nuevo camino principal de Astrida a Shangugu que se conecta con la principal vía de comunicaciones en el Congo Belga que va de Bukavu a Matadi vía Stanleyville, a la vez que se hicieron diversas mejoras en los caminos existentes. Se han trazado planes para un nuevo puerto en Usumbura (que conectará con la nueva línea de comunicaciones de Kigoma a Dar-es-Salaam en Tanganyika) así como para un nuevo aeródromo.

El Territorio no posee servicios estadísticos que permitan determinar el ingreso nacional, pero se calcula que la producción agrícola para consumo interno asciende a más de 5.000 millones de francos y la producción de carne a unos 330.000.000.

Las cifras del comercio exterior muestran que en 1952 las importaciones ascendieron a 131.011 toneladas con un valor de 1.648.627.000 francos comparadas con 95.492 toneladas y un valor de 1.390.505.000 francos en 1951. En 1952 las exportaciones ascendieron a 86.296 toneladas con un valor de 1.352.000.000 de francos comparados con 82.087 toneladas con un valor de 1.519.780.000 en 1951. Así, pues, el Territorio tuvo una balanza comercial favorable de 129.275.000 francos en 1951 y una balanza desfavorable de 296.627.000 francos en 1952. Entre las razones de este déficit, la Autoridad Administradora menciona las menores exportaciones de café, los precios mundiales inferiores para ciertos minerales, la importación de bienes de capital y el exceso de importación de bienes de consumo. Este exceso de existencias ha causado ciertas dificultades financieras a muchos importadores.

Casi todo el comercio exterior y el comercio al por mayor del Territorio están en manos de firmas no indígenas. Las principales cosechas de exportación son compradas a los productores y vendidas en el extranjero por compañías comerciales, pero el Gobierno inspecciona estos productos a fin de garantizar una buena calidad.

Se han hecho arreglos especiales para estabilizar los precios del café y del algodón y mejorar el volumen y la calidad de la producción. En el caso del café, el

Gobierno percibe un derecho de exportación, que al 31 de diciembre de 1952 ascendía a 6,65 francos por kilo de café elaborado, su producido es puesto a la disposición de la Oficina del Café Indígena (OCIRU). De este derecho, seis francos van a un fondo de estabilización, que en 1952 aumentó de 176.000.000 a 225.000.000 de francos; el resto se emplea para sufragar los gastos que exige el fomento del cultivo del café. En el caso del algodón, la Compañía del Ruzizi paga a los cultivadores por su algodón los precios fijados por el Gobierno, lo elabora y lo prepara para su venta por medio de una organización central. El producido de la venta, menos los gastos de elaboración y transporte y el monto pagado a los cultivadores, se coloca en la Caja de Reserva del Algodón para su eventual distribución a los cultivadores cuando los precios de venta sean demasiado bajos. En el último año agrícola completo (1951) para el cual se dispone de cifras, los cultivadores recibieron 26,25 francos por kilo de fibra de algodón, a la vez que 3,58 francos se contribuían al fondo de estabilización.

El comercio minorista consiste, en su mayor parte, en la compra de productos indígenas y la venta de mercaderías de intercambio. De los 2.189 comercios que existían en el Territorio en 1952, 519 eran administrados por europeos (de los cuales 291 son griegos), 967 pertenecen a asiáticos (indios y árabes) y 703 están en manos de africanos (comparados con 647 en 1951 y 21 en 1948).

La Autoridad Administradora manifiesta además que esta creciente participación indígena en el comercio minorista se debe al aumento en el número de centros de comercio (*centres de négoce*), en los cuales sólo se permite comerciar a los habitantes indígenas. Observa, además, que los habitantes indígenas están desarrollando una mayor actividad en la ganadería y en ocupaciones como los transportes, fabricación de ladrillos, carpintería y diversas artesanías.

En 1952 se adoptaron otras medidas para fomentar la organización de cooperativas indígenas. Además de una cooperativa de consumo en Kigali y una cooperativa de comerciantes en Usumbura, establecida en 1951, existe ahora una cooperativa de consumo en Kisenyi y tres cooperativas de producción en las llanuras de Ruzizi y Tanganyika. Se están estudiando otros proyectos similares.

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, comprobando el evidente aumento de la participación de la población indígena en la vida económica del Territorio, incluyó el creciente número de centros indígenas de comercio, y las medidas adoptadas para organizar cooperativas indígenas, había expresado la esperanza de que, al difundirse y consolidarse estas y otras medidas, se tomaran las disposiciones necesarias para ayudar a los habitantes a que participaran en otros aspectos de la economía, por ejemplo, el desarrollo de las industrias secundarias como parte de la actividad económica fomentada por el plan decenal.

La Autoridad Administradora, en el informe que ahora se estudia, subraya especialmente ese desarrollo de las cooperativas. Manifiesta, como prueba de la creciente participación de los habitantes indígenas en la economía monetaria, que sus depósitos en el Banco de Ahorro del Congo Belga y de Ruanda Urundi aumentaron en 1952 de 2.700.000 francos en 2.377 cuentas a 12.100.000 francos en 15.272 cuentas.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo toma nota del progreso alcanzado hasta ahora en el cumplimiento del plan decenal y expresa la esperanza de que, al continuar su aplicación, la Autoridad Administradora seguirá fomentando el desarrollo de las industrias manufactureras y otras industrias secundarias y estimulará la participación de los habitantes indígenas en las actividades económicas más amplias del Territorio mediante cooperativas y otros medios.

TENENCIA Y UTILIZACIÓN DE LAS TIERRAS

En el Territorio existen dos sistemas de tenencia de tierras: un sistema consuetudinario para la tierra que ocupa la población indígena y el sistema de ley escrita que rige las cesiones o concesiones de tierra, que sólo pueden hacerse, con la aprobación del Gobierno, a personas no indígenas. Las tierras desocupadas se consideran de propiedad de la Administración.

En su informe sobre 1952, la Autoridad Administradora indicó que los habitantes indígenas poseían unos 36.000 kilómetros cuadrados de tierra. La Administración poseía 132 kilómetros cuadrados (129 en 1951), sin contar las vastas reservas naturales, pero incluyendo los puertos, municipalidades, aeródromos, etc. Los habitantes no indígenas tenían 222 kilómetros cuadrados (218 en 1951), de los cuales poseían 95 kilómetros (92 en 1951) y el resto lo ocupaban a título de arrendamientos. Los establecimientos de enseñanza o eclesiásticos de las misiones religiosas poseían 45 kilómetros cuadrados (43 en 1951) de ese total de 222 kilómetros. Había 170 colonos agrícolas (159 en 1948).

De la tierra ocupada (aproximadamente dos tercios de la superficie total) 14.407 kilómetros cuadrados eran tierra cultivable, 20.882 kilómetros cuadrados eran tierra de pastoreo permanente, 864 kilómetros cuadrados estaban cubiertos de bosques o estaban siendo reforestados y 162 kilómetros cuadrados no servían para la agricultura. En las zonas más densamente pobladas del Territorio, el término medio de las explotaciones agrícolas para una familia es menos de una hectárea y media, lo que la Administración considera inferior a lo necesario para mantener tanto un nivel de vida razonable como la fertilidad del suelo. Por lo tanto el plan decenal dispone una reagrupación progresiva de la población por medio de la migración a zonas menos densamente pobladas tanto dentro como fuera del Territorio.

Dentro del Territorio, se han hecho estudios del suelo en las zonas de reasentamiento de la llanura del Ruzizi, la llanura del lago Tanganyika y Mosso. En la primera zona, el número de familias establecidas en los centros de desarrollo de la pequeña agricultura indígena (*centres de paysannat indigène*) aumentó durante 1952 de 2.534 a 3.179. Un camino que dará acceso al lago Tanganyika desde la zona de Mosso estaba en construcción en 1952. No se tienen cifras completas sobre el movimiento de población desde Ruanda a la vecina provincia de Kivu en el Congo Belga, pero este movimiento, en el cual el Consejo ha demostrado interés en el pasado, continúa y es fomentado por la Administración. En los años 1950 a 1952 unas 30.000 personas emigraron a Kivu desde el distrito de Kisenyi exclusivamente.

El Consejo ha encarecido a la Autoridad Administradora que mantenga las restricciones impuestas a la concesión de tierras para las personas no indígenas y en su noveno período de sesiones acogió con satisfacción

una decisión de suspender temporalmente las concesiones agrícolas y madereras.

El plan decenal prevé la posibilidad de concesiones agrícolas (no mayores de 50 hectáreas en las zonas muy pobladas) que puedan tener un valor educativo para los habitantes locales; la organización de 12 granjas modelo (con una superficie máxima de 200 hectáreas) en las grandes zonas de pastizales y la concesión de arriendos por 30 años (sin límite máximo) para repoblación forestal en tierras que sólo sirven para la silvicultura. En el informe que se estudia, la Autoridad Administradora subraya que las enajenaciones temporarias o definitivas de tierras arables siguen siendo muy restringidas y que sólo se permitirían cuando tuvieran un valor educativo o económico para el Territorio.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente conclusión y recomendación:

El Consejo, observando el progreso cumplido en los planes de colonización del valle del Ruzizi y la región de Mosso, encarece a la Autoridad Administradora que conceda la mayor importancia a la apertura de nuevas regiones a la colonización y cultivo a fin de aumentar la producción de alimentos. A este respecto, el Consejo opina que estos planes de colonización también contribuyen al fin importante de establecer una vida comunal más estrecha.

AGRICULTURA

El informe anual para 1952 indica que en ese año la cuarta parte de la superficie del Territorio estaba cultivada y que de este total, un 96,6% estaba dedicado al cultivo de productos alimenticios.

La producción de alimentos por parte de la población indígena en 1952 (por orden de importancia: frijoles, batatas, bananas, mandioca) se calculó en 5.491.420 toneladas comparadas con 5.160.750 toneladas en 1951 y 3.783.300 en 1950. A fin de prevenir el peligro del hambre, todos los habitantes adultos y físicamente aptos que viven en las regiones tribales deben cultivar 35 áreas de productos agrícolas comestibles estacionales y 25 áreas de productos agrícolas comestibles no estacionales.

En 1952, la población indígena produjo 13.109 toneladas de granos de café árabe (17.500 en 1951), 5.003 toneladas de semilla de algodón (3.835 en 1951), 1.100 toneladas de aceite de palma (1.265 en 1951) y 2.501 toneladas de aceite de ricino (2.930 en 1951).

La Autoridad Administradora atribuyó la mala cosecha de café en 1952 al tiempo desfavorable, a las enfermedades de los cafetos y a la edad de muchos de ellos. Durante el año se plantaron más de 9.000.000 de cafetos.

La producción agrícola de empresas no indígenas ascendió a 116 toneladas de granos de café árabe, 239 toneladas de granos de café robusta, 990 toneladas de pelitre, 129 toneladas de quina y 110 toneladas de henequén (sisal), así como unas 5.000 toneladas de productos alimenticios.

Los fines principales del programa agrícola del plan decenal, además de la conservación del suelo, son los siguientes: a) crear zonas mutuamente complementarias, de las cuales algunas son seleccionadas para la producción intensiva de artículos alimenticios y otras para artículos de exportación o desarrollo industrial; b) preparar las regiones que eventualmente pueden recibir

nuevos habitantes con vistas a su repoblación; c) aliviar las zonas superpobladas que no sirven para cultivos de exportación o para la industria y fomentar la emigración de parte de su población a regiones menos pobladas. Gracias a este programa, la superficie de tierra cultivable aumentaría un 10%, la producción de productos alimenticios indígenas un 31% y la de productos exportables un 155%.

Con el fin de aumentar la superficie cultivada, el programa de trabajo de la Administración dió los siguientes resultados en 1952: se desecaron 1.645 hectáreas de tierras pantanosas, con lo cual la superficie total de tierra así rehabilitada llegó a 88.118 hectáreas; se regaron 6.626 hectáreas; se terraplenaron 41.000 hectáreas por medio de setos y zanjas, llegando así la superficie total de la tierra protegida contra la erosión a 221.000 hectáreas.

En 1952 se distribuyó a los indígenas 54 toneladas de semillas seleccionadas, 51 toneladas de vástagos de batatas y unos 400.000 vástagos de mandioca por medio de los centros agrícolas de la Administración.

GANADERÍA

Al final de 1952 el número de cabezas de ganado en el Territorio era de 900.263, una disminución de 71.827 desde el año anterior. Además, había 1.266.334 cabras, 400.299 ovejas y 34.588 cerdos. El ganado es propiedad casi exclusiva de la población indígena que lo considera como un signo de riqueza y prestigio social. Los ganaderos habitualmente poseen de una a cinco cabezas de ganado, sólo un 1% posee 50 cabezas o más.

En la mayoría de los casos, las personas que tienen el ganado no son los propietarios sino servidores (*atigaragu*) que han adquirido una especie de derecho de utilización a largo plazo a cambio de ciertas obligaciones de naturaleza semifeudal hacia sus señores (*shebuja*). Este sistema consuetudinario de derechos sobre el ganado recibe el nombre de *ubuhake*.

El plan decenal prevé una reducción de 46% en el número del ganado a fin de superar los problemas creados por el exceso de pasturaje. Esto se logrará aboliendo el *ubuhake* y estableciendo una organización indígena de comercialización cooperativa que disponga del exceso de ganado. Además, propone programas para la selección y mejora del ganado, la mejora de los pasturajes, prevención de las enfermedades y la planificación de zootecnia para la producción de carne, productos lácteos y cuero.

En su 11° período de sesiones el Consejo tomó nota de estas medidas con interés e instó a la Autoridad Administradora a que las pusiera en práctica lo antes posible.

En su informe de 1952, la Autoridad Administradora dió detalles de los esfuerzos realizados para mejorar el ganado y de ciertas medidas de tipo experimental adoptadas para mejorar los pasturajes, pero manifestó que la reducción en el número de cabezas de ganado no podía efectuarse hasta que se aboliera el sistema del *ubuhake*.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente conclusión y recomendación:

El Consejo, recordando su recomendación aprobada en el 11° período de sesiones, por la cual encareció a la Autoridad Administradora que pusiera en práctica lo antes posible sus medidas destinadas a suprimir el

sistema del ubuhake y a reducir el número de cabezas de ganado, observa que ciertos sectores de la población, incluso los Bami y la joven generación en las escuelas, apoyan estas medidas, pero que aun existe una firme oposición por parte de muchos elementos tradicionalistas y encarece a la Autoridad Administradora que tome todas las medidas del caso para conseguir que la población colabore en la supresión del sistema y se reduzca el número de cabezas de ganado.

MINERÍA

En virtud de acuerdos concertados con las empresas mineras, la Administración tiene derecho a fiscalizar y también a participar en las ganancias mediante la obtención de un determinado número de acciones.

Durante el año que se estudia, se concedieron 53 permisos especiales de exploración y seis permisos de explotación (en tanto que en 1951 se habían concedido 67 y cinco respectivamente).

Las cifras de producción (en toneladas métricas) son las siguientes:

Producto	1951	1952
Oro	0,170	0,122
Mineral de estaño.....	2.611	2.641
Wolframio	277	467
Minerales diversos	162	277

El valor de la producción fué de 270.000.000 de francos en 1951 y de 314.000.000 de francos en 1952. El número de trabajadores indígenas empleados en las empresas mineras ascendió de 15.000 en 1951 a 19.000 en 1952.

En su 11° período de sesiones, el Consejo, recordando que en su noveno período de sesiones había pedido a la Autoridad Administradora que se sirviera facilitar en sus futuros informes anuales datos más completos sobre las utilidades de la industria minera así como las contribuciones de ésta a la renta del Territorio, acogió con beneplácito la seguridad que se le había dado de que dicha información sería incluida en el próximo informe anual.

La Autoridad Administradora informó de que los impuestos personales, regalías por derecho de cateo, cargos por derecho de explotación, los derechos de laboreo y tenencia y los impuestos sobre la renta (sin contar los impuestos sobre la renta de las compañías) pagaderos por explotaciones mineras habían ascendido a 49.702.733 francos en 1952, en tanto que en 1951 habían sido de 48.990.366 francos. Otros ingresos que ascendieron a 12.676.096 francos fueron obtenidos en 1951 de los valores correspondientes a minas que eran propiedad del Territorio. Las cifras pertinentes no están indicadas en el informe para 1952.

INDUSTRIA

La industria está aún poco desarrollada en el Territorio. Los establecimientos industriales más importantes son fábricas destinadas a elaborar los productos agrícolas de exportación, en especial el café y el algodón, fábricas de ladrillos y baldosas, cemento y aserraderos. Hay cierto número de pequeñas actividades industriales como trabajos de forja y canastería, en las cuales los habitantes indígenas desempeñan una parte importante, pero sus productos sólo tienen un mercado local.

El plan decenal prevé el aumento de la elaboración de productos primarios, especialmente la carne, y el establecimiento de una oficina especial para fomentar este aumento. También dispone del desarrollo de empresas artesanales así como la producción de materiales de edificación. El plan se funda en el desarrollo de los recursos hidroeléctricos para estimular la industrialización. A este respecto, el Consejo tomó nota en su 11° período de sesiones del acuerdo para la creación de un sindicato que se encargue de la electrificación de Kivu (Congo Belga) y de Ruanda Urundi y estimuló que el Territorio se beneficiará considerablemente con esta empresa.

En su informe de 1952, la Autoridad Administradora manifestó que durante el año se hicieron los estudios técnicos sobre la central eléctrica de 20.000 kilovatios que se ha propuesto para el río Ruzizi.

HACIENDA PÚBLICA

Los cuadros siguientes dan las cifras (en millones de francos) correspondientes a los ingresos y gastos ordinarios del Territorio para 1950, 1951, 1952, y 1953.

	1950	1951	1952	1953 (Cálculo)
Ingresos				
Impuestos personales	9	10	11	15
Impuestos sobre la renta.....	38	64	92	60
Derechos aduaneros e impuestos internos	130	216	215	223
Capitación sobre los habitantes indígenas	72	84	97	104
Impuesto sobre el ganado.....	22	30	37	43
Impuesto de estabilización sobre las cosechas de exportación..	55	77	148	80
Otros ingresos	59	78		95
Total de los ingresos.....	386	559	600 ^a	620
Gastos				
Servicios administrativos.....	73	95	111	123
Servicios sociales.....	91	113	156	208
Servicios económicos.....	110	136	224 ^b	112
Pagos al fondo de estabilización del café.....	54	71		80
Diversos	7	15	22	16
Total de gastos.....	336	430	514	539

^a Las cifras completas de los ingresos y gastos de 1952 no fueron incluidas en el informe anual. Los ingresos han sido tomados del boletín estadístico mensual del Congo Belga y Ruanda Urundi, enero de 1954; y los desembolsos, de la declaración inicial formulada por el representante especial en la 510a. sesión del Consejo de Administración Fiduciaria.

^b El monto total pagado al fondo de estabilización del café no se conoce, pero en los primeros diez meses del año fiscal se pagaron 44.000.000 de francos.

La Autoridad Administradora calculó que, excluyendo los pagos de transferencias hechas al fondo de estabilización del café, 41,68% de los gastos ordinarios de 1951 fueron en beneficio de los habitantes indígenas, comparado con 44,22% en 1950.

Hay un presupuesto extraordinario cuyos ingresos consisten principalmente en los anticipos reembolsables sin interés hechos por la Autoridad Administradora, sus gastos están destinados casi en su totalidad a planes de desarrollo con arreglo al plan decenal. El siguiente cuadro indica los desembolsos (en millones de francos) hechos en virtud de estos presupuestos:

Año	Fondos asignados	Desembolsos al 31 de diciem- bre de 1951	Desembolsos al 31 de diciem- bre de 1952
1948	31	29	29
1949	72	8	24
1950	160	69	109
1951	161	38	90
1952	428	--	64

En 1952 la deuda pública se mantuvo inalterada en 320.000.000 de francos.

El Fondo de Bienestar Indígena (*Fonds du bien-être indigène*) proporciona fondos adicionales para programas de desarrollo social y económico en beneficio directo de los habitantes indígenas; éste es un organismo público que funciona tanto en el Congo Belga como en Ruanda Urundi. Sus recursos están formados por los gastos de guerra que Bélgica reembolsa a la Colonia. Las asignaciones del fondo para trabajos cumplidos en Ruanda Urundi ascendieron a 59.000.000 de francos en 1952, con lo cual las asignaciones totales hechas desde 1948 ascienden a 285.000.000.

En los presupuestos de 1952 para las tesorerías indígenas de los países y las jefaturas, los ingresos fueron calculados en 78.000.000 (61 en 1951) y los desembolsos en 77.600.000 francos (55.500.000 francos en 1951).

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Francia opinó que, en lo que se refiere al progreso económico, el Territorio parecía estar bien administrado y que, como resultado del gran cuidado ejercido por la Autoridad Administradora, sería difícil encontrar algún problema que hubiera sido pasado por alto o que no hubiera sido afrontado en forma resuelta. El esfuerzo sistemático que se había hecho para conservar y desarrollar los recursos del Territorio merecía la aprobación y aliento unánime del Consejo.

El representante de la India manifestó que en el campo de las empresas económicas la Autoridad Administradora apreciaba justamente los problemas fundamentales que existían y que se había dado un paso inicial, aunque pequeño, hacia su solución.

El representante de Australia expresó interés en el desarrollo de la pesquería en el Territorio y manifestó su esperanza de que la Autoridad Administradora pudiera desarrollar más esta fuente de alimento y que pudiera suprimirse gradualmente la importación de pescado seco.

El representante de Nueva Zelandia expresó su beneplácito por el progreso hecho en la aplicación del plan decenal y se complació en observar el alentador desarrollo de las cooperativas.

El representante de Haití observó que en el campo económico la Autoridad Administradora debía permanecer alerta, como lo indicaba la vasta diferencia entre la balanza comercial favorable de 1952 y la balanza desfavorable de 1953. Observó que la Autoridad Administradora se ocupaba de mejorar una situación tan inestable.

Consideró que se mantenía a los habitantes indígenas demasiado alejados de la vida económica del Territorio. Aunque la Autoridad Administradora había manifestado que el número de comercios en manos de los ha-

bitantes indígenas había aumentado en los años últimos, ningún habitante indígena era miembro de una cámara de comercio.

El representante de Siria observó que ninguna de las muchas empresas comerciales privadas del Territorio era de carácter local. Recomendó que el Consejo pidiera a la Autoridad Administradora fomentar la creación de organizaciones locales para que estudiaran las necesidades económicas de la población y, de ser necesario, ayudaran a la Autoridad Administradora en sus tareas en el campo económico.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que en el campo económico la población indígena carecía de derechos. A pesar del hecho de que el Territorio era rico en minerales valiosos, tanto los minerales metálicos como los no metálicos estaban prácticamente inexplorados. Cuando eran explotados, lo eran por belgas y otras compañías extranjeras y para la exportación. No había industrias que elaboraran las materias primas del Territorio; a pesar de que se cultivaba el algodón, no había industria textil y no se proyectaba plan alguno para la instalación de dicha industria. Por el contrario, según lo que informaban los periódicos, un grupo de expertos textiles belgas habían visitado el Territorio con miras a ampliar la venta de textiles producidos en Bélgica.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló que ya existía un vasto sistema de transporte en el Territorio que era empleado por los habitantes indígenas en el cual participaban activamente y señaló a la atención del Consejo el programa de ampliación de los transportes con arreglo al plan decenal.

Con respecto a las industrias, se refirió al plan decenal del Territorio en virtud del cual Bélgica adelantaba cada año 400.000.000 de francos sin interés.

TENENCIA Y UTILIZACIÓN DE LAS TIERRAS

El representante de Nueva Zelandia se complació en observar el progreso hecho en la aplicación en el plan de colonización en el valle del Ruzizi y en la región del Mosso.

Consideró que el Consejo debía elogiar a la Autoridad Administradora por el progreso realizado en la repoblación forestal.

El representante de Siria observó la existencia de un sistema dual de tenencia de tierras. La propiedad indígena aun se hallaba en el estado colectivo y debían adoptarse medidas para establecer un sistema de propiedad privada. Recomendó que la Autoridad Administradora aplicara un sistema de registro de tierras a todas las propiedades sin distinción alguna entre las tierras que pertenecían a los habitantes indígenas o no indígenas.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que, a pesar de las frecuentes recomendaciones del Consejo, aun continuaba la enajenación de tierras en el Territorio; observó que, en una serie de boletines del Gobierno, se hacía referencia a tierras que habían sido simplemente concedidas a europeos sin que mediara pago alguno. Como la Autoridad Administradora continuaba enajenando la tierra, violando los derechos de los habitantes indígenas, el Consejo debía señalar a su atención una vez más el hecho de que era inadmisibles enajenar tierras que pertenecían a los habitantes indígenas y debía recomendar que cesara toda futura enajenación de tierras.

El representante especial de la Autoridad Administradora, en respuesta a los representantes de la URSS y de Siria manifestó que no era posible, en el interés mismo de los habitantes indígenas, prohibir toda forma de concesión, pero que la cuestión carecía de interés general, ya que el grupo no indígena, incluso las misiones religiosas, sólo ocupaban un total de 85 millas cuadradas. Consideró que la afirmación de que la tierra había sido concedida sin pago alguno, carecía de fundamento ya que, en realidad, la Administración había adquirido anteriormente el título de propiedad de los habitantes indígenas.

Manifestó que la Administración preferiría tener un sistema completo de registro de tierras pero que era imposible establecer uno en ese momento.

AGRICULTURA

El representante de Nueva Zelandia consideró que la Autoridad Administradora debería seguir concediendo importancia a la producción de artículos alimenticios y sugirió que se considerara nuevamente la posibilidad de construir instalaciones de almacenaje.

El representante de Australia observó que diversas medidas adoptadas por la Autoridad Administradora tenían como fin afrontar la cuestión de los alimentos y de la exportación de productos alimenticios y expresó completa confianza en que adoptaría todas las medidas del caso para mejorar la situación. Observó complacido que, a pesar de las dificultades, las exportaciones del Territorio se habían mantenido en ascenso.

El representante de Haití consideró que, si bien se podía felicitar a la Autoridad Administradora por hacer obligatoria la plantación de una superficie mínima de productos alimenticios, se debía alentar a los habitantes indígenas a que reemplazaran los sistemas y métodos anticuados de cultivo por el arado con tracción animal y el empleo de abonos naturales. Las escuelas agrícolas del Territorio podrían hacer mucho bien si los estudiantes que regresaban a sus regiones nativas fueran asistidos por la Administración en sus relaciones con los cultivadores indígenas.

Observó con interés el estímulo dado a la expansión de los cultivos industriales y a la introducción de nuevas cosechas.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó, con respecto a la agricultura, que la economía del Territorio estaba completamente desequilibrada y que se fundaba exclusivamente en las cosechas de exportación que eran enviadas a la metrópoli.

GANADERÍA

El representante de la India instó a la Autoridad Administradora a que intensificara sus esfuerzos en contra del sistema de contratos de *ubuhake*. Al observar que los *Bami* habían expresado su oposición a este sistema, expresó la creencia de que nuevos esfuerzos en este sentido no encontrarían grandes dificultades.

Observó, respecto al problema del exceso de ganado, que un gran número de cabezas ya habían sido sacrificadas y que el pueblo había sido estimulado para que empleara la carne en su alimentación. Consideró que la Autoridad Administradora no debía dejar que tradiciones y hábitos consuetudinarios impidieran la exterminación del exceso de ganado.

El representante de China observó que el problema del ganado era uno de los más graves que debía afron-

tar la Autoridad Administradora. A este respecto, la campaña de la Autoridad Administradora contra el perjudicial sistema del *ubuhake* era excelente aunque era prematuro anunciar su éxito. Sin embargo, el hecho de que se hiciera comprender a la nueva generación el peligro de la práctica tradicional era un motivo de esperanza.

HACIENDA PÚBLICA

El representante de Siria manifestó que aun quedaba mucho por hacer en materia de tributación y recomendó que la Autoridad Administradora continuara su trabajo sistemático.

Con respecto al sistema monetario, el representante de Siria observó que a menos de que ahora se adoptaran medidas para establecer monedas distintas para el Congo Belga y el Territorio, sería muy difícil para éste liquidar su posición monetaria al alcanzar su independencia.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La población indígena del Territorio se compone de tres grupos sociales distintos: los batutsis, una aristocracia ganadera oriunda del Nilo, los bahutus, un pueblo agrícola bantú que forma el 90% de la población y los batwas, un pueblo de tipo pigmeo que se dedica principalmente a la caza y a la artesanía. La población vive en grupos familiares muy dispersos y no hay aldeas.

La Autoridad Administradora manifiesta que está tratando de atenuar las diferencias sociales aun reconocidas por la costumbre y amalgamar hasta donde pueda los diversos elementos de la población.

Los principales organismos oficiales dedicados a los servicios sociales son el Servicio del Trabajo, el cual también se ocupa de asuntos sociales en general y de las cooperativas y cuyo presupuesto ascendió a 5.800.000 en 1952, y los Servicios Médicos. Otras organizaciones públicas activas en el campo social incluyen el Fondo del Bienestar Indígena (Fonds du bien-être-indigène), el Fondo Colonial de Invalidez, (Fonds colonial d'invalidité) que asegura a los trabajadores indígenas contra los accidentes y la Oficina de las Ciudades Indígenas (Office des cités indigènes), una organización cuya sede está en el Congo Belga y que en 1952 asumió las funciones de la Junta del Centro Extratribal (Centre extracoutumier) de Usumbura, poniendo en práctica un programa de vivienda para africanos cerca de dicha ciudad; en 1952, se completaron 245 casas para familias y 72 apartamentos para solteros y en 1953, se proyectaron 600 casas de familia en virtud de este programa.

Las instituciones privadas que cumplen programas sociales son primordialmente misiones católicas y protestantes y organizaciones afiliadas.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proporcionó al Territorio nueve toneladas de leche en polvo y 58 toneladas de leche descremada para su distribución a los niños y a las mujeres encintas.

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

El informe anual de 1952 señala que se garantiza el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales a todos los sectores de la población sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, en virtud de la ley del 18 de octubre de 1908 del Gobierno del Congo Belga la cual se aplica en Ruanda Urundi.

El Consejo ha prestado especial atención a algunos problemas de derechos humanos y en sus períodos de sesiones cuarto, sexto y noveno, había recomendado que se revisara la legislación pertinente con el fin de eliminar toda forma de discriminación racial. Las cuestiones incluyen las leyes de residencia, tenencia de la tierra, bebidas alcohólicas, el sistema penal y la inmigración.

En su 11° período de sesiones, el Consejo había observado que estaba en vigor en el Territorio una legislación que limitaba el tránsito de personas y recomendó a la Autoridad Administradora que estudiara la posibilidad de adoptar en fecha próxima otras medidas substitutivas que no dieran la impresión de que existía discriminación racial y que revisara en conjunto las disposiciones relativas al tránsito de personas que restringían la libertad personal de los habitantes.

En su informe de 1952 la Autoridad Administradora da detalles de tres restricciones a la libertad de movimiento. En primer término, esta reglamentación dispone que ningún habitante indígena puede abandonar su jefatura por más de 30 días sin un pasaporte de traslado del jefe. La Autoridad Administradora señala que los pasaportes deberán ser dados a la esposa y a los hijos que acompañan al jefe de familia y a los habitantes indígenas que se dirijan a un establecimiento de enseñanza o que deseen obtener empleo en la Administración o una firma europea.

En segundo término, a los habitantes indígenas les está prohibido circular de noche en zonas urbanas. La Autoridad Administradora manifiesta que estas medidas son una protección en contra de los criminales que podrán ser suprimidas cuando las fuerzas de policía sean suficientes y las zonas de que se trata tengan bastante luz.

En tercer lugar, los habitantes indígenas que amenazan el orden público pueden ser obligados por una orden fundada a que abandonen cierto lugar o residan en un sitio determinado. La Autoridad Administradora agrega que estas órdenes se emiten rara vez. En circunstancias similares, los habitantes no indígenas pueden ser expulsados del Territorio.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, recordando la recomendación aprobada en el 11° período de sesiones sobre las limitaciones a la libertad de tránsito dentro del Territorio, toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora según la cual el objetivo último es eliminar el sistema de pasaportes de tránsito y de toque de queda, pero expresa su desilusión por el hecho de que la Autoridad Administradora no ha podido eliminar estas restricciones, sobre todo el toque de queda, y reitera sus recomendaciones de que estas restricciones a la libertad personal de los habitantes sean eliminadas por la Autoridad Administradora.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

La Autoridad Administradora señala que, según las costumbres indígenas, no hay igualdad de derechos

entre los hombres y las mujeres, aunque la condición jurídica y social de la mujer en el Territorio es mejor que entre otros pueblos africanos. En 1952, entró en vigor el Decreto del 5 de abril de 1950 que prohíbe los matrimonios polígamos y prohíbe a los polígamos fijar en adelante su residencia en los centros extratribales. La Autoridad Administradora señala además que el decreto referente al registro de habitantes indígenas ofrece la posibilidad de que el marido y la mujer que se registren por su decisión conjunta, posean una condición de completa igualdad ante el Código Civil.

Los centros de bienestar social de Usumbura y As-trida, continúan proporcionando instrucción en obstetricia y asistencia a las mujeres casadas en el cuidado de los niños. Se están construyendo nuevos edificios para estos centros así como un nuevo centro que se inauguró en 1952 en Nyundo, Ruanda.

CONDICIONES DE TRABAJO

En 1952, el término medio de trabajadores indígenas se calculó en unos 140.000 de los cuales 22.000 estaban empleados en la agricultura, 25.000 en la minería, 16.000 en la construcción, 14.000 en el comercio y 29.000 en la prestación de servicios. Las cifras relativas a 1951 que no fueron presentadas en forma estrictamente comparable, indicaban que 81.190 trabajadores tenían empleo permanente y 46.266 no permanente.

De los empleados en 1952, unos 9.000 trabajadores residían en su sitio de trabajo, 137.000 eran contratados en el terreno y 8.000 habían sido contratados en otra parte. Unas 63.000 personas estaban empleadas bajo contrato.

Hay una considerable migración de trabajadores desde el Territorio. En 1952, 2.205 trabajadores fueron contratados para trabajar en el Congo Belga y 1.281 para trabajar en Tanganyika y Uganda; por lo menos un 90% de los trabajadores debe ser acompañado por su familia. Hay una emigración espontánea mucho mayor; en general los 15.000 trabajadores que han emigrado al Congo Belga obtuvieron empleo con contrato a largo plazo, mientras que los 27.000 que se dirigieron a Tanganyika y a Uganda eran en su mayor parte trabajadores estacionales. La Administración fiscaliza la contratación y celebra conferencias con las autoridades británicas sobre los problemas que presenta la migración estacional.

La Autoridad Administradora considera que estos dos movimientos se están transformando en una emigración permanente de familias.

El decreto del 16 de marzo de 1952 establece los deberes y obligaciones generales de los empleadores y de los trabajadores indígenas. El empleador está obligado, con algunas excepciones, a proporcionar alojamiento y atención médica al trabajador y a su familia y a proporcionar al trabajador, además de su salario, raciones o su equivalente en dinero. Desde 1949, ha estado en vigencia un sistema de seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La posibilidad de instituir un sistema general de subsidio familiar que el Gobierno ya paga a sus empleados está en estudio.

En el pasado, el Consejo ha recomendado que las sanciones penales por incumplimiento del contrato de empleo fueran abolidas en cuanto fuera posible y en el 11° período de sesiones fué informado de que se estaba estudiando un proyecto de decreto que reduci-

ría el número de casos de aplicación de dichas sanciones. En 1952, 752 trabajadores indígenas fueron condenados a prisión y 644 a multas por abandonar su trabajo u otros incumplimientos de su deber, comparados con 1.246 y 288 respectivamente en 1951.

Los sindicatos, aunque autorizados por la ley, no existen en el Territorio. Sin embargo, se han establecido comités de trabajadores en ciertas empresas y localidades bajo los auspicios de la Administración. Además, existen Comisiones de Trabajo y Progreso Social de los Indígenas en cada región y para todo el Territorio; están compuestas por cierto número de funcionarios y de miembros designados por el Gobernador a fin de que representen a los empleadores y de un igual número de miembros designados para representar a los empleados indígenas. Estas comisiones ofrecen asesoramiento y formulan recomendaciones en materia de normas del trabajo, incluso la determinación del nivel de los salarios y de pagos ofrecidos en vez de raciones.

El salario mínimo teórico fué fijado en 1952 en 11 francos por día en Usumbura y 7,90 en otras partes, mientras que el salario mínimo legal era un 72% del salario mínimo teórico (comparado con 66% en 1951) y aumentará a 77% en 1953. En la práctica, el término medio de los salarios es de 7 francos diarios para los serenos, 13 francos para los ayudantes de albañil, 20 francos para los ladrilleros, 60 francos para los conductores de vehículos y 100 francos para los dactilógrafos empleados por la Administración. El dinero equivalente a una ración varía desde un máximo de 50 francos por semana en Usumbura a un mínimo de 20 francos en ciertas partes de Ruanda.

En el pasado, el Consejo ha recomendado a la Autoridad Administradora que continúe efectuando estudios con miras a mejorar el nivel de vida y los salarios de la población indígena.

En su informe de 1952, la Autoridad Administradora señaló el aumento en el salario mínimo legal mencionado, pero manifestó que el principal obstáculo para nuevas mejoras radicaba en la baja productividad de la fuerza de trabajo, la que atribuía a las costumbres sociales del Territorio, al hecho de que los trabajadores sólo dependan parcialmente de su trabajo para vivir, a las deficiencias de salud y alimentación y a la falta de formación y técnica profesional.

El plan decenal incluye un programa de acción para aumentar la productividad, incluso la expansión de la enseñanza profesional y la organización de "juntas de capacitación".

El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, de que los salarios mínimos actuales varían de 18 francos por día en Usumbura a 12,40 en las afueras. El representante especial también indicó que ha entrado en vigor un sistema de inspección del trabajo.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó la siguiente conclusión y recomendación:

El Consejo toma nota con interés de la declaración hecha por el representante especial según la cual se ha organizado un sistema de inspección del trabajo y se estudia un proyecto de decreto referente a la cuestión de las sanciones penales. El Consejo pide a la próxima Misión Visitadora que incluya en su informe observaciones sobre la forma en que se aplica la legislación del trabajo en el Territorio y sobre los niveles de salarios y de vida.

SERVICIOS MÉDICOS Y DE HIGIENE PÚBLICA

En el presupuesto ordinario de 1952 el total de créditos para servicios médicos y de higiene pública ascendió a 79.000.000 de francos, en tanto que en 1951 había ascendido a 63.700.000. Además, se gastaron en obras públicas 37.200.000 francos del presupuesto extraordinario y 24.700.000 francos del Fondo de Bienestar Indígena. Los presupuestos locales proporcionaron 10.000.000 de francos y las compañías particulares proporcionaron 8.700.000 francos con fines médicos.

En 1952 había 35 hospitales (incluso 16 hospitales del Gobierno) en el Territorio, el mismo número que en 1951, pero el número de camas aumentó en 423 para llegar a un total de 3.148. Había además, nueve maternidades, un sanatorio para tuberculosos (y otro casi terminado) y un leprosario. El número de dispensarios aumentó en 14 llegando así a 103.

El cuadro siguiente indica el número de personal de servicios médicos en 1952 y las cifras correspondientes a 1951:

Personal europeo

	Gobierno	Misiones	Otros	Total 1952	Total 1951
Médicos	37	12	14	63	63
Dentistas	1			1	2
Practicantes, etc.	41	13	2	60	56
Enfermeros y enfermeras auxiliares....	42		1	43	42
Parteras	1	21		22	19

Personal indígena

	Gobierno	Misiones	Otros	Total 1952	Total 1951
Practicantes	52		1	53	28
Enfermeros diplomados	72		3	75	40
Enfermeras auxiliares	230	163	64	457	482
Parteras ayudantes...	51	52	5	108	78
Guardias sanitarios y asistentes	45			45	40

Los practicantes indígenas estudian en la sección médica del grupo escolar de Astrida un curso médico de cuatro años al que siguen dos años de internado. Además, en 1952 había tres escuelas para enfermeros (dos en 1951), cuatro escuelas para enfermeras auxiliares y cuatro escuelas para parteras auxiliares.

El programa previsto en el plan decenal para la expansión de los servicios médicos fué explicado en el informe anterior del Consejo.

El informe de 1952 señala especialmente el aumento de las consultas prenatales y posnatales, la campaña antipalúdica con pulverización de DDT y distribución de quinina, la vigilancia continua contra la tuberculosis pulmonar (1,872% de 153.631 personas examinadas tenían tuberculosis pulmonar), y la marcada disminución de casos de enfermedad del sueño (57 casos nuevos en 1952, en tanto que en 1946 hubo 1.363) gracias a las inyecciones profilácticas de pentamida.

En su 11° período de sesiones el Consejo, luego de observar con agrado los considerables progresos en los servicios médicos y de higiene pública, en especial las campañas contra la tuberculosis y el paludismo, vió con agrado el lugar destacado que se les concedía en el plan decenal e instó a la Autoridad Administradora a que se sirviera prestar constante atención al problema y estudiara la manera de ampliar en sus futuros programas la formación profesional de prácticos en medicina indígena.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo observa con agrado la continua mejora de los servicios médicos y la enérgica campaña que se lleva a cabo contra la tuberculosis y la enfermedad del sueño. El Consejo, al observar que aún persisten el paludismo y otras enfermedades en el Territorio, insta a la Autoridad Administradora a que insista en su programa de ampliación de los servicios médicos, empleando cada vez que sea oportuno los servicios de los organismos especializados, y reitera la recomendación aprobada en su 11° período de sesiones de que la Autoridad Administradora amplie su programa de formación profesional de los habitantes indígenas para los servicios médicos, incluso la preparación de doctores en medicina.

SISTEMA PENAL

El informe de 1952 no tiene ninguna nueva información sobre la proyectada reforma del sistema penal tendiente a una separación de los presos y a disposiciones más sistemáticas y racionales de su trabajo. El decreto del 6 de diciembre de 1950 sobre el trato dado a los menores delincuentes no ha entrado en vigor, ya que se deben hacer ciertos arreglos de orden material. En 1952, el término medio de menores delincuentes en las prisiones llegó a 60. El promedio de la población penitenciaria total en 1952 fué 2.122 comparado con 1.783 en 1951.

Con respecto a las recomendaciones hechas por la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria para que se aboliera totalmente el castigo corporal en los territorios en fideicomiso, en Ruanda Urundi el castigo corporal fué abolido como condena judicial en 1951, aún se mantiene con un máximo de cuatro latigazos como castigo disciplinario para las personas de color en las cárceles del Territorio, pero la Autoridad Administradora manifiesta que está sujeto a numerosas restricciones.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, al observar que los tribunales indígenas ya no están autorizados para condenar a castigos corporales, pero que el azote aún puede ser administrado como sanción penal en las cárceles, expresa su desilusión por el hecho de que la Administración aún no haya podido eliminar completamente el castigo corporal, y la insta a que adopte esta medida a la brevedad posible.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Francia observó el notable aumento en el crédito presupuestario dedicado a la asistencia social así como a la importancia del trabajo emprendido por el Fondo de Bienestar Indígena.

El representante de la India manifestó su agrado por la creación de centros extratribales y vió en ellos un buen comienzo para destruir las costumbres restrictivas de las tribus. Recomendó que se ampliaran estos centros y que no se los hiciera depender totalmente de la existencia de una ciudad próxima con una población europea.

El representante de Australia observó con satisfacción el aumento gradual de los créditos presupuestarios para servicios sociales y manifestó su creencia

de que la proporción de éstos con respecto al presupuesto total era muy satisfactoria. También observó que, con respecto a la asistencia social, el Territorio había continuado beneficiándose considerablemente con el Fondo de Bienestar Indígena.

El representante de Nueva Zelanda consideró que el progreso en el campo social se había mantenido. Creía, sin embargo, que la Administración debía fomentar los programas de desarrollo de las comunidades locales y, a este respecto, podría preparar habitantes indígenas seleccionados para el desarrollo y dirección de la comunidad.

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

El representante de Francia, si bien consideró que el sistema de pasaportes de traslado era muy justificado en las circunstancias especiales del Territorio, tenía dificultad en encontrar una base válida para la existencia del toque de queda que era, a su juicio, desfavorable para el desarrollo del espíritu social.

El representante de la India objetó la ordenanza del toque de queda que se aplicaba en el Territorio. Las razones dadas para su continuación no lo habían convencido y consideró que era un modo injusto y poco digno de tratar a la población. Agregó que no creía en su eficacia.

El representante de China lamentó que la discriminación racial aún existiera en el Territorio y que, evidentemente, la Autoridad Administradora no deseara abolirla. Las recomendaciones del Consejo y de la Asamblea General sobre leyes y prácticas discriminatorias no habían sido cumplidas; la ley de inmigración tenía rasgos discriminatorios y la libertad de circulación de los habitantes indígenas aún estaba restringida. Con respecto a esto último, las explicaciones de la Autoridad Administradora no eran convincentes. Si se requería más policía para proteger a los habitantes y se hacía necesario un mayor alumbrado público, la Autoridad Administradora debía proporcionarlo en vez de limitar la libertad del pueblo. Habían pasado varios años desde que se había tratado por primera vez la cuestión de las leyes y prácticas discriminatorias y el modo como la administración belga había orillado las decisiones de la Asamblea General era desalentador.

El representante de Haití, al referirse al sistema de pasaporte de traslado y al toque de queda, manifestó que consideraba que estas medidas se debían a que la Administración no proporcionaba una suficiente fuerza de policía ni un alumbrado público adecuado. Parecía que se consideraba una cosa normal perseguir a los habitantes indígenas y restringir su libertad para que todo el mundo pudiera dormir en paz.

El representante de Siria manifestó que las restricciones que exigían a los indígenas llevar con ellos un pasaporte y respetar el toque de queda y las limitaciones de la libertad de asociación eran innecesarias. Observó con pena que se aplicaban diversas restricciones a la divulgación de ideas y que estaba prohibida la entrada al Territorio de diversas publicaciones, aunque algunas de ellas se editaban en Bélgica.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la discriminación racial era evidente en todos los aspectos de la vida del Territorio. Se practicaba en la administración, en los asuntos judiciales, en materia sanitaria, en el uso de la tierra, y en el salario de los maestros. Hasta llegaba a las prisiones donde, por el mismo delito, se apli-

caba distintos castigos a los blancos y a la gente de color. Además, los habitantes indígenas eran privados de la libertad de circulación y si un africano deseaba cambiar su domicilio o dirigirse a otra parte por más de 30 días, debía recabar la autorización de las autoridades; sin embargo, los europeos tenían absoluta libertad de circulación.

Este representante también manifestó que existía la discriminación racial en los salarios pagados a los europeos y los africanos. Según el informe anual, había tres escalas de salarios para el mismo trabajo; por ejemplo, un mecánico europeo recibía 380 francos por día, un mecánico asiático 150 francos y un africano sólo 35 francos. En cuanto a los maestros, un maestro indígena de escuela elemental recibía 3.000 francos por año mientras que un maestro no indígena recibía de 20.000 a 30.000 francos. Así pues el salario de un maestro indígena de una escuela elemental ascendía a unos 8 francos por día, lo cual ni siquiera bastaba para comprar un diario que costaba 12,50 francos.

Terminó diciendo que tomando también en cuenta la situación de los servicios administrativos del Territorio donde no existía participación indígena alguna, era posible obtener una idea de la enorme magnitud de la discriminación racial en Ruanda Urundi.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que estaba de acuerdo con las opiniones expresadas en el Consejo sobre la abolición de las disposiciones que restringían el tránsito de los habitantes indígenas, pero que hasta la fecha, la Autoridad Administradora había creído que no podía ir más allá de lo ya hecho. Sin embargo, tenía como objetivo la abolición de estas medidas.

Señaló que muchos países fiscalizaban la importación de la literatura que se consideraba peligrosa para el orden público y que una de las preocupaciones de los organismos internacionales era limitar la circulación de publicaciones pornográficas.

Con respecto a la inmigración, subrayó que las restricciones a la inmigración sólo se referían a las personas analfabetas y tenían como fin prohibir la entrada de personas de bajo nivel social cuyas actividades podrían ser perjudiciales para los intereses de los habitantes.

Negó que la Autoridad Administradora aplicara medidas discriminatorias en la escala de salarios de los trabajadores. Señaló que si un empleador podía obtener trabajadores indígenas a 35 francos por día para los mismos servicios que prestaba un europeo a razón de 350 francos más los gastos de viaje o un asiático por 150 francos, lo haría; las leyes económicas tienen un cierto realismo y cuando el empleador puede esperar los mismos servicios de un indígena que los que recibe de un europeo ya no empleará a este último.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

El representante de Francia felicitó a la Autoridad Administradora por haber establecido el principio de la monogamia en el Territorio.

Consideró que los centros de asistencia social indudablemente fomentarian el desarrollo de los intereses sociales entre los habitantes nativos. Estos centros deberían desempeñar una función importante en la formación de trabajadores sociales indígenas.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El representante de Francia lamentó que aún se mantuvieran las sanciones penales en la legislación del tra-

bajo. Sería imprudente recomendar su abolición inmediata, pero debería hacerse todo lo posible para adoptar un sistema de libertad dentro de un plazo muy breve. Observó que se habían hecho grandes esfuerzos para educar a los trabajadores, sobre todo mediante los comités de trabajadores y las Comisiones de Progreso Social Indígena, las cuales, en su opinión, contribuían a este fin.

El representante de Haití dijo que el nivel de vida no era muy alto. La emigración de los trabajadores a los territorios vecinos se explicaba por el hecho de que obtenían salarios más altos en estos últimos.

Notó con satisfacción la legislación del trabajo y la legislación social expuestas en el informe. Sin embargo, la próxima Misión Visitadora debería observar hasta dónde esta legislación se aplicaba en la vida cotidiana del Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que un decreto que dispondría la abolición de las sanciones penales se hallaba en estudio. De mantenerse estas sanciones penales ellas afectarían no sólo al empleado, sino también al empleador que no cumpliera su obligación.

Admitió que los salarios eran bajos pero agregó que habían subido desde 1948 y que los aumentos habían sido mayores que los del costo de vida. Por lo tanto, la situación de los indígenas mejoraba gradualmente.

SERVICIOS MÉDICOS Y DE HIGIENE PÚBLICA

El representante de Francia expresó satisfacción con los resultados obtenidos en materia de higiene pública, sobre todo por la enérgica campaña contra las enfermedades tropicales y la tuberculosis. Consideró que la Autoridad Administradora debería ampliar su programa de instrucción general a fin de permitir la preparación de médicos indígenas, que eran indispensables si habían de consolidarse los considerables resultados ya obtenidos.

El representante de la India instó a la Autoridad Administradora a que hiciera mayor uso de los organismos especializados en su lucha contra el paludismo y otras enfermedades.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que hacía seis o siete años había 35 médicos oficiales en el Territorio y que actualmente el número era el mismo, a pesar del hecho de que la población había aumentado de 3.500.000 a más de 4.000.000 de personas.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que ésta trataría de acelerar la formación de médicos indígenas. Rechazó la afirmación hecha por el representante de la URSS de que el número de médicos en el Territorio no había aumentado y señaló que, en 1952, había 68 médicos en el Territorio en tanto que en 1948 había 35. Manifestó que, si bien la Autoridad Administradora apreciaba profundamente los servicios de la Organización Mundial de la Salud y colaboraba con ella regularmente, consideraba que estos servicios deberían ser proporcionados a los Territorios que disponían de menos recursos que Ruanda Urundi, donde la Autoridad Administradora gastaba cantidades considerables de dinero anualmente en higiene pública y medicina.

SISTEMA PENAL

El representante de El Salvador expresó la esperanza de que el castigo corporal sería abolido totalmente en el porvenir próximo.

El representante de China manifestó que aunque se había reducido mucho el número de azotes que podían aplicarse en las prisiones del Territorio como medida disciplinaria, su delegación aún deseaba la abolición total del castigo corporal como lo habían recomendado repetidamente el Consejo y la Asamblea General.

Los representantes de Haití y Siria manifestaron que las recomendaciones del Consejo de Administración Fiduciaria y de la Asamblea General para la abolición total del castigo corporal aún no habían sido respetadas en el Territorio.

El representante de Haití observó que aún no existía un establecimiento para la rehabilitación de los menores delincuentes. Además, no era seguro de que existiera una separación completa entre los menores y los adultos en las cárceles.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que estaba de acuerdo con las opiniones expresadas por el Consejo sobre la abolición del castigo corporal en las prisiones, pero que hasta la fecha la Autoridad Administradora no había creído factible adelantar más de lo que ya se había hecho. Sin embargo, su fin era la abolición de esta medida.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SISTEMA DE ENSEÑANZA

La política declarada del Gobierno en materia de instrucción pública es proporcionar enseñanza a toda la juventud indígena del Territorio; ofrecer una educación que prepare a todos los habitantes indígenas del Territorio para vivir de acuerdo con sus habilidades, ya sea en su medio ambiente tradicional o fuera de él; ofrecer una educación que prepare una minoría selecta y alcanzar estos fines teniendo en cuenta la necesidad de adaptar los métodos de enseñanza a las condiciones existentes en la región y a las necesidades de la civilización.

El sistema de enseñanza en el Territorio está organizado, apoyado y fiscalizado por el Gobierno. Aparte de unas pocas escuelas oficiales, cuyo personal está formado en su mayor parte por miembros de congregaciones religiosas, las escuelas son del tipo "libre, subvencionado" y son administradas casi íntegramente por misiones religiosas.

Los gastos hechos por el Gobierno para el mantenimiento del sistema de enseñanza ascendieron a 43.600.000 francos en 1951 (comparado con 32.100.000 francos en 1950). De este total, 34.200.000 francos (24.700.000 francos en 1950) representan los subsidios pagados a las escuelas no oficiales. Para 1952 los gastos se calcularon en 64.600.000 francos, incluso 48.400.000 francos de subsidios; el representante especial informó al Consejo, en su 13º período de sesiones, de que en 1952 los gastos reales fueron de 69.000.000 de francos. A esta cifra deben agregarse los desembolsos en obras de capital financiadas con el presupuesto extraordinario y el Fondo de Bienestar Indígena. Los gastos de los trabajos incluidos en estos rubros y que comenzaron en 1952 ascendieron a 16.700.000 francos (12.100.000 francos en 1951) y

9.100.000 francos (10 millones en 1951) respectivamente.

El informe no consigna detalles de los desembolsos hechos por las misiones para la enseñanza, pero la tasa de subsidios para construcción varía de 70 a 80%, para los maestros indígenas de 80 a 100% y para gastos de alojamiento hasta un 80%, a la vez que se pagan sumas fijas para los maestros europeos, útiles escolares y conservación de los edificios.

El programa de la enseñanza primaria para los africanos concede especial importancia a la educación general, formación manual y agrícola e higiene práctica. El lenguaje de la enseñanza es el vernáculo, y se enseña el francés como un segundo idioma en los últimos años de las escuelas primarias. Las escuelas primarias tienen cursos de primaria elemental (primero y segundo año y tercer año voluntario); y cursos superiores "ordinarios" (tercero a quinto año), y clases superiores "seleccionadas" (tercero a sexto año) para alumnos que probablemente continuarán estudiando.

En 1952, había dos escuelas primarias oficiales para africanos con una matrícula de 695 niños (674 en 1951). Además, había escuelas oficiales para europeos y asiáticos con matrículas de 91 y 174 alumnos respectivamente. En 1951 un total de 172.300 alumnos estaban matriculados en escuelas primarias confesionales para africanos, comparado con 139.327 en 1951. En 1952, la matrícula por años se distribuía como se indica a continuación:

	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
1er. año	70.000	21.840	91.840
2do. año	27.850	11.130	38.980
3er. año	16.385	4.189	20.574
4to. año	9.207	2.716	11.923
5to. año	5.758	1.967	7.725
6to. año	1.600	258	1.258
TOTAL	130.200	42.100	172.300

Además había 228 alumnos en las escuelas primarias confesionales para europeos.

Diversas organizaciones informaron de que sus escuelas parroquiales y de primeras letras, que proporcionaban cierta instrucción elemental pero que no disfrutaban de subsidios y no estaban sujetas a inspección oficial en 1952, habían tenido una asistencia de 348.699 personas. De éstas, 246.789 habían ido a escuelas católicas, 8.550 a protestantes, 19.340 a adventistas del séptimo día y 1.020 a escuelas musulmanas.

La enseñanza postprimaria oficial se concentra en el Centro Escolar de Astrida que tiene, además de sus secciones primaria y una sección general secundaria, secciones especializadas para medicina, veterinaria, agronomía, administración y, desde 1952, pedagogía. En 1952 un total de 915 varones y 33 mujeres estaban matriculados en las clases postprimarias de las escuelas del Estado. De éstos, 735 varones y 33 mujeres estaban en las tres primeras clases mientras que 180 varones recibían una instrucción especializada más adelantada. La Autoridad Administradora informó de que el proyecto de construir una escuela secundaria clásica cerca de Nyanza había sido abandonado; en cambio, en 1953 se iniciaría la construcción, cerca de Usumbura, de una escuela que sería interracial y en la cual los estudiantes serían admitidos sobre la base de sus capacidades. Mientras se termina esta escuela, 68 habitantes indígenas de Ruanda Urundi asistieron en 1952 a la escuela secundaria clásica

de Bukavu en el Congo Belga, cerca del límite del territorio. El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó, en el 13° período de sesiones, que el colegio interracial estaba en construcción y que se esperaba inaugurarle en enero de 1955.

En las escuelas confesionales subvencionadas, hay 1.015 varones y 250 mujeres matriculadas en las clases postprimarias; 19 de los varones estudian en las clases de cuarto año. Además, las misiones administran dos tipos de escuelas para la formación de maestros indígenas: las *écoles de moniteurs* (cursos de tres o cuatro años que siguen a una enseñanza primaria completa) a las que asistieron 561 varones y 183 mujeres en 1952 (373 y 135 respectivamente en 1951) y las *écoles d'apprentissage pédagogique* (curso de dos años que siguen a cuatro años de enseñanza primaria) a las que asistieron 326 varones y 178 mujeres (120 y 84 de 1951).

Existe una escuela comercial del Gobierno recientemente establecida en Usumbura, la cual será ampliada en 1953.

El establecimiento de una institución superior en el Territorio continúa siendo el objeto de un examen cuidadoso. En 1952, 17 estudiantes indígenas del Territorio estudiaron en el Centro Universitario Lovanium en el Congo Belga, donde todos sus gastos fueron pagados; otros seis asistieron a universidades europeas.

En el último examen de la administración de Ruanda Urundi, hecho por el Consejo²⁹³ se dieron detalles del programa de ampliación de las instalaciones de enseñanza incluido en el plan decenal. El Consejo y las Misiones Visitadoras han prestado especial atención a cuestiones tales como la función que desempeñan las misiones religiosas en la educación y el alcance restringido de los servicios actuales. La Misión Visitadora de 1951 opinó que en muchas de las clases visitadas los métodos de enseñanza eran inadecuados y que debía mejorarse considerablemente el nivel de las escuelas existentes. La Misión consideró que las medidas previstas en el plan decenal por cierto contribuirían al mejoramiento de las instalaciones escolares existentes pero creyó que ellas no afectaban dos problemas importantes: la duración del estudio en las escuelas primarias inferiores y el mejoramiento de las escuelas parroquiales y de primeras letras. La Misión consideró que debería haber mejores cursos secundarios, incluso la posibilidad de una enseñanza secundaria completa para las mujeres.

En su 11° período de sesiones el Consejo reconoció la gran contribución de las misiones religiosas en la esfera de la educación, pero consideró, sin embargo, que sería conveniente que la Administración interviniera de una manera más directa en la educación de los habitantes e instó a la Autoridad Administradora a que inspeccionara más de cerca las escuelas elementales de las misiones (escuelas de primeras letras), y que, cuando las condiciones lo justificaran, estableciera más escuelas oficiales. El Consejo recomendó que la Autoridad Administradora desarrollara y extendiera las instalaciones y servicios de enseñanza secundaria y superior existentes en el Territorio y que, como ampliación de este programa, ofreciera becas a los habitantes indígenas para que prosiguieran sus estudios en el extranjero. El Consejo invitó además a la Autoridad Administradora a que tomara las

²⁹³ Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo período de sesiones, Suplemento No. 4, A/2150, páginas 109-112.

medidas necesarias para mejorar los centros normalistas del Territorio.

En su informe de 1952, la Autoridad Administradora se refirió especialmente a la expansión de los servicios de enseñanza a que se ha hecho referencia y declaró que se habían anticipado al programa del plan decenal.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo observa con agrado el aumento de los créditos presupuestarios para la enseñanza y del número de escuelas así como el hecho de que se proyecta establecer en enero de 1955 una escuela secundaria interracial en Usumbura. Expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora considerará, como lo ha sugerido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,²⁹⁴ la conveniencia de alcanzar la uniformidad en el sistema de enseñanza primaria con el fin de dar a todos los niños de edad escolar seis años de enseñanza primaria y la necesidad de formar más maestros y mejorar su preparación. El Consejo recomienda a la Autoridad Administradora que amplíe su sistema de becas.

El Consejo, al tomar nota de la declaración del representante especial de que entre los principales problemas que debe afrontar el Territorio se halla el de la condición jurídica y social de la mujer y considerando que una mejor educación de la mujer contribuiría considerablemente a mejorar dicha condición, expresa la esperanza de que habrá una constante ampliación de los servicios de enseñanza para la mujer, especialmente de enseñanza secundaria, y de las oportunidades para la enseñanza para adultos y educación fundamental de la mujer y de que los esfuerzos de la Autoridad Administradora en este campo encontrarán un eco cada vez mayor en la población indígena.

ANALFABETISMO Y ENSEÑANZA PARA ADULTOS: RECREO

Según el informe anual de 1952, no fué posible proporcionar el porcentaje real de habitantes indígenas que no sabían leer ni escribir. Al mismo tiempo se manifestó que el número de analfabetos en el Territorio había disminuído debido a la expansión de la enseñanza organizada y a la asistencia cada vez mayor a las escuelas parroquiales. Además, existen cursos para adultos que tienen como objetivo principal ayudar a los habitantes indígenas a que adquieran conocimientos suficientes de lectura y escritura y a los cuales asistieron 1.627 personas en 1952.

En 1952 había 18 bibliotecas públicas para el uso de la población indígena y tres para la población no indígena. La Administración informa de que, en el año que se estudia, gastó 80.000 y 40.000 francos respectivamente en estos establecimientos. La mayoría de los libros son en francés y, aunque son buenos y variados, actualmente los habitantes indígenas leen muy poco y, en general, su pereza intelectual es tan grande que resulta difícil de imaginar para personas civilizadas.

Con respecto a recreo se informa de que hay ocho cines para europeos. Los asiáticos también pueden concurrir a los mismos, y en Usumbura hay una sala especial para ellos donde se exhiben films indios. En los círculos de estudio de Usumbura, Astrida, Biumba y en diversas misiones se ofrecen espectáculos cinematográficos para los habitantes indígenas. Dos uni-

dades móviles cinematográficas hicieron una gira por el Territorio en 1952 y ofrecieron 249 espectáculos a los que asistieron 227.500 personas.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

SISTEMA DE ENSEÑANZA

El representante de Francia expresó gran satisfacción por el progreso alcanzado en materia de enseñanza, el programa de construcción de nuevas escuelas y la próxima inauguración de la escuela secundaria de Usumbura. Sin embargo, consideró que debería seguirse una política algo más audaz para organizar la enseñanza secundaria femenina.

Manifestó que, a medida que la enseñanza se profundizara y se diversificara, habría una mayor necesidad de intervención directa de la Autoridad Administradora, pero que la política seguida hasta entonces basada sobre todo en la enseñanza libre, subvencionada y fiscalizada por la Administración, se había visto justificada por los hechos.

El representante de la India manifestó que su labor se había visto estorbada por la falta de estadísticas sobre el analfabetismo. También expresó la creencia de que la Autoridad Administradora debería asumir una parte más importante en el desarrollo del sistema de enseñanza del Territorio.

Observó con satisfacción que se estaba construyendo un colegio en el territorio y expresó la esperanza de que sería inaugurado en el mes de enero de 1955. Sin embargo, no le complacía oír que el programa de estudio sería el mismo de un colegio belga. Si bien estaba de acuerdo en que las normas debían ser altas creía que debe haber una adaptación considerable a las condiciones locales. Parecía darse demasiada importancia a lo literario y no bastante a la enseñanza práctica y científica.

Consideró que la instrucción religiosa en las escuelas misionales subvencionadas por la Administración debería ser optativa a menos que se pidiera que se hiciera obligatoria.

El representante de El Salvador insistió en la necesidad de establecer nuevas escuelas oficiales. Al mismo tiempo, las instalaciones existentes deberían ser mejoradas y se debía prolongar la duración mínima de los estudios en las escuelas primarias.

El representante de China reconoció que se habían hecho ciertos progresos en el sistema de enseñanza del Territorio, cuyos resultados más importantes eran los mayores créditos presupuestarios y el mayor número de escuelas. Sin embargo, la enseñanza aún no era obligatoria y cabía esperar que la Administración tomaría algunas medidas preliminares en ese sentido. Además, había una gran necesidad de que se prepararan maestros y también era deseable, como lo había señalado la UNESCO, que se unificara el sistema escolar.

El representante de Haití manifestó que hubiera estado más dispuesto a reconocer los méritos del sistema de enseñanza del Territorio si éste no se viera viciado por una concepción errónea de las posibilidades de desarrollo de la población indígena. Consideraba que los estudiantes que completaban sus estudios secundarios no estaban en situación de comenzar inmediatamente su instrucción superior en el Centro Uni-

²⁹⁴ T/1091.

versitario Lovanium del Congo Belga, o en las universidades belgas.

Subrayó la declaración que aparecía en el informe, según la cual los estudiantes al finalizar sus estudios tenían un conocimiento insuficiente del francés; sin embargo, a estos jóvenes se proyectaba enseñarles el flamenco.

El representante de Siria observó que el principio de la enseñanza obligatoria no era respetado en el Territorio y que la instrucción no era gratuita. Otro defecto de la organización de la enseñanza era la duración de los estudios para los habitantes indígenas, fundada en el principio de que estos habitantes eran diferentes de los europeos, un principio que el orador rechazaba. Refiriéndose al pequeño número de mujeres que recibían instrucción, el representante expresó que las tradiciones que causaban esta situación debían ser abandonadas para que el Territorio progresase.

Observó con pena que el programa de enseñanza superior del Territorio era una mezcla de enseñanza superior superficial y enseñanza secundaria un tanto desarrollada. Notó que las becas todavía eran escasas y recomendó que se las aumentara.

Lamentó que la Autoridad Administradora no colaborara estrechamente con la UNESCO.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que, a pesar de las insistentes recomendaciones de que la Autoridad Administradora se hiciera cargo de la enseñanza, aumentara los créditos presupuestarios y creara una minoría selecta indígena, la Autoridad Administradora había continuado su política de confiar la responsabilidad de la enseñanza a las misiones religiosas. Los resultados de esta política eran obvios: hasta ese momento ni siquiera se había creado un pequeño grupo de intelectuales y ninguno de los habitantes indígenas era capaz de contribuir al desarrollo de la enseñanza en el Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que ésta deseaba hacer obligatoria

la enseñanza, pero que ello era imposible hasta que se pudiera contar con personal e instalaciones necesarias.

No podía estar de acuerdo con el representante de la India sobre la cuestión de la instrucción religiosa. Consideraba que la instrucción religiosa era uno de los medios más poderosos de cambiar la mentalidad de los hombres. La supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas sería suprimir una fuente de energía, elevación y valores morales.

Negó que la Autoridad Administradora restringiera a los habitantes indígenas las posibilidades de alcanzar un nivel más alto de instrucción. El fin de la Autoridad Administradora era abolir completamente el analfabetismo y dar a cada uno de los habitantes indígenas la posibilidad de alcanzar la enseñanza secundaria, pero era una tarea compleja y difícil y era casi imposible acelerar el proceso.

No estuvo de acuerdo con el representante de Siria en que el período de enseñanza era demasiado largo; por el contrario, en su opinión, el período era perfectamente normal.

El representante especial manifestó que el plan decenal disponía la expansión de la enseñanza secundaria para mujeres.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS NACIONES UNIDAS

El representante de China expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora prestara especial atención a la difusión de información sobre las Naciones Unidas entre el pueblo del Territorio en Fideicomiso y se esforzaría por ofrecer a las escuelas una información lo más amplia posible sobre el Régimen Internacional de Administración Fiduciaria, y especialmente sobre el derecho de petición a las Naciones Unidas.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que la enseñanza sobre las Naciones Unidas proporcionada en las escuelas producía resultados excelentes y que la Autoridad Administradora tenía el propósito de ampliarla.

Capítulo III

SOMALIA BAJO ADMINISTRACION ITALIANA

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

Somalia bajo administración italiana se extiende a lo largo de la costa nordeste de África y abarca una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Gran parte del Territorio es árida y por lo tanto la colonización agrícola estable se limita a las dos zonas ribereñas y a algunos distritos de la costa.

El Territorio tiene 1.268.624 habitantes que en su mayoría son somalis, pueblo de pastores que lleva una vida nómada o seminómada. La comunidad árabe comprende unas 30.000 personas, y se calcula que los indios y pakistanos son unos 1.000. El número de italianos es aproximadamente de 5.000.

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS NACIONES UNIDAS

El Consejo Consultivo no ha presentado un informe sobre sus actividades durante el período del 1° de abril de 1953 al 31 de marzo de 1954. El representante de Colombia, en un informe al Consejo de Administración Fiduciaria, expresó que él era el único delegado presente en el Territorio al expirar el período anual en que normalmente se presenta un informe, y que consideraba necesario presentar uno sobre las actividades del Consejo Consultivo. Informó que durante el período del 1° de abril de 1953 al 31 de marzo de 1954, los tres miembros del Consejo Consultivo estuvieron representados en Mogadiscio durante un total de 28 días. En el mismo período, el Consejo Consultivo tuvo un quórum de dos representantes durante 23 días.²⁹⁵

En su 12° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción del espíritu de cooperación que existía entre el Consejo Consultivo y la Autoridad Administradora, así como de la atmósfera de armonía que había dentro del propio Consejo Consultivo, y encomió las medidas adoptadas y las que se habían previsto para fortalecer la colaboración entre el Consejo Consultivo y la Autoridad Administradora.

La Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria que en 1953 sus relaciones con el Consejo Consultivo se caracterizaron por un espíritu de estrecha colaboración; que se pidió asesoramiento al Consejo sobre proyectos de ley relativos al desarrollo político, económico, social y educativo del Territorio; y que se mantuvo al mismo al corriente de todos los hechos que no eran tema de legislación. Prestóse la mayor atención a los puntos de vista y opiniones del Consejo Consultivo al redac-

tarse los textos definitivos de las distintas medidas legislativas; y las observaciones y recomendaciones del Consejo sobre diversas cuestiones respecto a las cuales se le consultó fueron de suma utilidad para la Autoridad Administradora en el cumplimiento de sus funciones.

En su 14° período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, tomando nota con preocupación de que representantes miembros del Consejo Consultivo han estado ausentes del Territorio durante largos períodos, reitera su recomendación anterior en la que expresaba la esperanza de que los tres Estados miembros participaran plenamente en los trabajos del Consejo Consultivo y que sus representantes permanecieran en el Territorio durante el tiempo suficiente para que ese organismo pudiera desempeñar sus funciones de la manera más eficaz.

CUESTIÓN DE LA FRONTERA CON ETIOPÍA

En sus 11° y 12° períodos de sesiones, el Consejo calificó de asunto urgente la cuestión de la demarcación definitiva de la frontera entre el Territorio en fideicomiso y Etiopía, especialmente en vista del propósito de dar independencia a Somalia para 1960, y expresó la esperanza de que mediante negociaciones se llegara a un arreglo satisfactorio tan pronto como fuera posible.

Asimismo, el Consejo recibió anteriormente peticiones de somalis que contenían reclamaciones relativas a la frontera provisional con especial referencia a la separación de grupos vinculados por parentesco, a la inaccesibilidad de pozos situados en el lado etíope y a incursiones a través de la frontera del Territorio en fideicomiso.

La Autoridad Administradora señaló a la atención del Consejo la gravedad de la situación creada por la actual línea provisional de demarcación, que ha hecho empeorar la situación económica y social de la población fronteriza, especialmente en la región de Mudugh. Debido a la cuestión de los pozos, por ejemplo, son más difíciles las relaciones entre las tribus que allí viven. La presión demográfica hacia el interior del país, como resultado de la necesidad de agua por parte de las tribus nómades, también ha creado problemas en lo que se refiere al mantenimiento del orden público.

La Autoridad Administradora informó al Consejo que en junio de 1953, la Embajada de Italia en Addis Abeba propuso nuevamente a Etiopía que cada Gobierno designase delegados para iniciar negociaciones. En respuesta, el Gobierno de Etiopía propuso que ambos Gobiernos designasen dos expertos que se encargarían, en primer término, de reunir los datos esenciales y determinar los principios que han de seguirse en las etapas ulteriores de las negociaciones. La Auto-

²⁹⁵ T/1116.

ridad Administradora aceptó esta propuesta. El Gobierno de Etiopía no ha llevado adelante el asunto.

En opinión de la Autoridad Administradora, la demarcación de una frontera definitiva y satisfactoria no debería tropezar con dificultades insuperables. Por otra parte, la Autoridad Administradora considera sumamente deseable un arreglo definitivo de esta cuestión, a fin de suprimir todas las diferencias entre las partes fundamentalmente interesadas: Etiopía y Somalia.

Durante el debate sobre las condiciones existentes en el Territorio celebrado en el 14° período de sesiones, algunos miembros expresaron preocupación con respecto a la falta de progreso en la solución del problema fronterizo. Tomando como base una propuesta presentada por el representante de Haití,²⁹⁶ el Consejo aprobó una resolución²⁹⁷ en la cual señalaba a la atención de la Asamblea General la conclusión del Consejo según la cual la delimitación de la frontera era cuestión urgentísima en razón de la proximidad de la fecha en que el Territorio alcanzaría la independencia y de las permanentes dificultades políticas, económicas y sociales de la zona de la frontera provisional actual, y pedía al Secretario General que solicitara de los Gobiernos de Italia y de Etiopía toda la información apropiada sobre la marcha de las negociaciones directas entre ellos, para presentarla a la Asamblea General en su noveno período de sesiones. Además, invitaba al Consejo Consultivo a someter al Secretario General, en el mismo período de sesiones, la información que pudiera obtener en el ejercicio normal de sus funciones acerca de la situación actual en la región fronteriza, y pedía al Secretario General que, a la luz de las informaciones así obtenidas, presentara a la Asamblea General en su noveno período de sesiones, un informe sobre los progresos alcanzados en las negociaciones emprendidas de conformidad con la resolución 392 (V) de la Asamblea y sobre la situación existente en la zona de la frontera provisional.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Durante el año que se examina, el Cuerpo de Policía de la Somalia se componía de 2.024 miembros, todos ellos somalis. El número de *carabinieri* italianos fué reducido de 297 a 190. Pronto regresará al Territorio un grupo de ocho somalis que siguió cursos de perfeccionamiento en Italia y que reemplazará a un número igual de oficiales de policía italianos. Al terminar el año, se habían encargado a somalis 46 de los 74 puestos de policía del Territorio, o sea 14 más que el año precedente. El número de los *Ilalos* (fuerza de policía de la Residencia) era de 1.514.

Las fuerzas militares se componían de 3.500 plazas aproximadamente, de las cuales los italianos ocupaban 652. El número de oficiales somalis era de 16, o sea 5 más que el año anterior, y una guarnición, la de Bardera, estaba bajo el mando de un oficial somali. Se espera que gracias al programa de lucha contra el analfabetismo puesto en práctica en el ejército, todos los soldados de línea somalis hayan obtenido su certificado de estudios elementales en agosto de 1956. Se han creado cursos técnicos de instrucción, y se enviarán graduados a Italia para que sigan cursos para oficiales y suboficiales. Espérase que a fines de 1956 más de 60 oficiales, suboficiales y soldados italianos hayan sido reemplazados por somalis, y que durante

los años 1957 a 1960 se reduzca a 130 aproximadamente la cifra del personal italiano.

En años anteriores, se llamó la atención del Consejo hacia graves incidentes ocurridos entre grupos armados como resultado de la rivalidad tradicional que existe entre ciertos grupos por la escasez de agua y de pastos y por el hecho de que el carácter provisional de la frontera con Etiopía, tiende a privar a ciertos grupos de acceso a los pozos y a los pastos. Según el informe anual, el año examinado fué el más tranquilo desde el establecimiento de la administración fiduciaria. No se produjo ningún acto de violencia colectiva, y si bien la situación de los grupos nómades fronterizos sigue siendo de relativa gravedad, hubo pocos incidentes; durante el último trimestre de 1953 no ocurrió ninguna incursión armada a través de la frontera. Mediante la reunión de varias asambleas tribales bajo la fiscalización de las autoridades británicas e italianas, estíbale logrando el arreglo pacífico de conflictos entre grupos establecidos en la frontera con la Somalia Británica.

NACIONALIDAD DE LOS HABITANTES

La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 12° período de sesiones, que en vista de la evolución política parecía llegado el momento de preparar una legislación que definiera la nacionalidad de los habitantes, y que con ese fin se podía establecer un comité de expertos y representantes de la población. En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora declaró que se estaban preparando proyectos de ley y que los mismos serían presentados al Consejo Territorial una vez que éste fuese ya un cuerpo elegido dotado de facultades legislativas.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota de que la Autoridad Administradora ha preparado ya textos legislativos que definen la nacionalidad de los habitantes del Territorio, insta a la Autoridad Administradora a que presente esos textos al Consejo Territorial una vez que éste haya sido establecido por vía electoral.

DESARROLLO GENERAL DEL TERRITORIO

Considerando que, con arreglo a la resolución 289 (IV) de la Asamblea General, del 20 de noviembre de 1949, la independencia de Somalia bajo administración italiana deberá hacerse efectiva al final de un período de 10 años, contados desde la fecha en que la Asamblea General apruebe un acuerdo de administración fiduciaria, la Misión Visitadora de 1951 destacó la necesidad urgente de preparar un plan general de desarrollo en todas las esferas. Poco después, la Autoridad Administradora informó al Consejo que se aplicaría un breve programa quinquenal de enseñanza y que se estaban preparando planes para un programa sanitario y de desarrollo económico.

La Autoridad Administradora comunicó al Consejo en su 12° período de sesiones que pese a los resultados obtenidos no estaba en condiciones de formular los planes de desarrollo en su forma definitiva, especialmente por el hecho de que la preparación de programas concretos dependería en gran parte de una investigación concienzuda del aspecto económico. El Consejo recomendó en aquel entonces que la Autoridad Administradora continuara tratando de elaborar y poner en práctica planes detallados en todos los órdenes, con plazos de ejecución bien determinados, ya

²⁹⁶ T/L.474.

²⁹⁷ Resolución 1000 (XIV).

que la necesidad de esos planes empezaba a ser urgente a medida que se acercaba el plazo fijado para el establecimiento de la independencia. El Consejo sugirió asimismo que desde entonces se indicase concretamente en los informes anuales de la Autoridad Administradora si el ritmo con que avanza la capacitación de los somalis para gobernarse a sí mismos progresa con rapidez suficiente, teniendo en cuenta la finalidad de la independencia en 1960, y si el Territorio está en condiciones de mantener sus servicios de gobierno en un nivel adecuado sin ayuda continua del exterior.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14º período de sesiones, que con el año 1953 había llegado a su término el período de estudio de las posibilidades del Territorio y de integración y revisión del programa de actividades de la Administración. Presentó al Consejo un plan de desarrollo económico del Territorio.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente, y observaciones del representante especial de la Autoridad Administradora

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Francia declaró que, por primera vez desde que él era representante en el Consejo, experimentaba un optimismo prudente y razonado respecto al porvenir del Territorio, que era objeto de muy altas esperanzas y muy graves responsabilidades para las Naciones Unidas. Su optimismo se basaba, en parte, en las actividades de la Autoridad Administradora, la cual había hecho mucho durante el año que se examinaba y parecía, después de una vacilación inicial, haber encontrado su camino.

El representante del Reino Unido manifestó que indudablemente el Gobierno de Italia había asumido una grave responsabilidad al preparar al Territorio para el logro del gobierno propio en 1960. En su opinión, sin embargo, el Consejo debía convenir en que la Autoridad Administradora cumplía ese cometido con una tenacidad y un celo de que eran pruebas los muchos y felices resultados concretos que llegaban a conocimiento del Consejo.

El representante de la India señaló que las Naciones Unidas se comprometieron a conceder la independencia a Somalia en una fecha determinada, fecha a la que dieron su aprobación irrevocable todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y que fué aceptada sin reservas por la Autoridad Administradora, y declaró que, en consecuencia, la Organización no podía defraudar la confianza en ella depositada por el pueblo de Somalia, ya que esto último tendría amplias repercusiones y haría que la generalidad de los habitantes de los territorios en fideicomiso pensasen que entre la palabra empeñada y los hechos hay un trecho grande e infranqueable. Parecía esencial, y en realidad ineludible, para una consideración adecuada de la cuestión de Somalia, tener en cuenta esos hechos básicos. Aunque estaba dispuesta a admitir que se habían hecho ciertos progresos durante el año precedente, la delegación de la India estimaba que el cuadro definitivo, objetivamente juzgado, era decepcionante.

El representante de El Salvador declaró que su delegación consideraba en general satisfactorias las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora en

sus esfuerzos por dar la independencia a Somalia en 1960. Por otra parte, debían tenerse en cuenta diversos factores geofísicos y sociales, y muchas cosas urgentes y necesarias quedaban ciertamente por hacerse. El orador hizo suyas sin reservas algunas de las observaciones formuladas por el representante de Francia. Compartía las dudas y la impaciencia ocasional del representante de la India. No obstante, siempre consideró que todo cuanto se hacía era realizado con buena fe. Bastaba señalar a este respecto que su delegación admitía ahora que existían perspectivas promisorias de éxito y fundamentos sólidos para aguardar con serena confianza la llegada de 1960.

El representante de Australia declaró que impresionaban a su delegación los esfuerzos vigorosos y conscientes desplegados por la Autoridad Administradora con miras a promover el adelanto de Somalia hacia el logro de su prometida independencia. El Consejo debía apreciar plenamente el alcance gigantesco de los trabajos que el Gobierno de Italia había emprendido espontáneamente, así como las grandes contribuciones, tanto financieras como de otro orden, que Italia había tenido que hacer. Se estaban dando con suficiente rapidez los pasos necesarios para satisfacer los naturales deseos del Consejo de lograr que Somalia obtenga su independencia al final del período previsto en el Acuerdo de Administración Fiduciaria pero al mismo tiempo hiciese ello en forma paulatina, a fin de que el pueblo del Territorio comprendiera y apreciara cabalmente las nuevas técnicas.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que las condiciones reinantes en el Territorio en fideicomiso distaban mucho de ser satisfactorias, especialmente si se atendía a la consideración fundamental de que Somalia había de convertirse en estado independiente y soberano en 1960. A juzgar por el informe de la Autoridad Administradora y los demás documentos que el Consejo tenía ante sí, la Autoridad Administradora no había adoptado las medidas necesarias para la obtención de progresos en los campos político, económico, social y cultural, y había seguido una política cuya finalidad no era el más pronto cumplimiento de las obligaciones que le imponía el Acuerdo de Administración Fiduciaria.

El representante especial de la Autoridad Administradora aseguró a los representantes de la India y de Siria, así como a los demás miembros del Consejo, que la Administración tenía siempre presente el factor tiempo en todos sus planes y actividades, y que la celeridad con que se proyectaba celebrar elecciones políticas en todo el Territorio era testimonio evidente de ello.

CUESTIÓN DE LA FRONTERA CON ETIOPÍA

El representante de Francia declaró que su delegación apoyaría toda recomendación que el Consejo de Administración Fiduciaria propusiere para subsanar una vez más la necesidad urgente de hallar una solución satisfactoria al delicado problema de la fijación de fronteras. A su parecer, el método de negociaciones directas entre Italia y Etiopía seguía siendo el mejor sistema, y debía facilitarse y estimularse el rápido comienzo de tales negociaciones.

El representante de la India manifestó que su delegación compartía la preocupación expresada por otros miembros del Consejo respecto al permanente problema fronterizo. Convino en que el mejor procedimiento para resolver la cuestión sería realizar negociaciones amistosas entre las partes directamente interesadas. Su delegación simpatizaba plenamente con

el propósito del proyecto de resolución de Haití y confiaba en que este problema de fronteras, con las dificultades e incertidumbres que de él derivaban, sería resuelto satisfactoriamente mucho antes de la fecha fijada para el traspaso de la soberanía.

El representante de Siria manifestó que el aspecto más inquietante y decepcionante en el campo político era la cuestión de la frontera entre Somalia y Etiopía. Después de estudiar la propuesta del representante de Haití, su delegación veía con beneplácito las ideas y los principios que la misma englobaba. De ser aprobado ese proyecto de resolución, el Consejo debía también tener en cuenta la exposición hecha por el vicepresidente del Consejo Territorial. Su delegación opinaba que toda ulterior demora en la solución de este asunto constituiría evidentemente un peligro para la independencia del Estado de Somalia.

El representante de El Salvador declaró que le complacía dar la bienvenida al proyecto de resolución presentado por el representante de Haití. Su delegación lo apoyaría sin reserva alguna.

El representante de Haití expresó que se debía prestar especial atención a la cuestión de la frontera entre Somalia y Etiopía, y tratar de resolverla cuanto antes. La necesidad urgente de resolver este problema quedaba aún más destacada por las noticias que la prensa internacional del momento daba sobre una situación análoga entre otros dos países. Su delegación apelaba al espíritu de comprensión de los representantes miembros del Consejo en lo que se refería a las razones que lo habían inducido a presentar el proyecto de resolución.

El representante de China señaló con cierto pesar que no se había registrado progreso alguno en las negociaciones entabladas por los dos Gobiernos interesados. Todas las informaciones señalaban la necesidad de resolver esta cuestión cuanto antes, y su delegación confiaba sinceramente en que las partes se esforzarían para llegar a un acuerdo.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

El representante de la India declaró que su delegación tenía serias dudas y reservas con respecto a las fuerzas de seguridad de la región, que consideraba comparativamente grandes. No alcanzaba a comprender por qué era menester mantener una fuerza policial y militar de 6.000 a 7.000 hombres en un territorio cuya población apenas llegaba a un cuarto de millón, y le sorprendía algo el enterarse de que ello se debía en parte a la no solucionada cuestión de la frontera con Etiopía. No cabía sugerir, ciertamente, que para la protección de un territorio en fideicomiso en lo referente a una situación no resuelta con un Estado Miembro de las Naciones Unidas debían mantenerse importantes fuerzas militares. El representante de la India sugirió que se volviese a estudiar esta cuestión con detenimiento, pues era evidente la inconveniencia de recargar el presupuesto del futuro Estado somali con el sostén de una fuerza numerosa y posiblemente innecesaria cuyo costo era atendido parcialmente, en la actualidad, con fondos procedentes del extranjero. A su parecer, esta cuestión podría ser examinada por el Consejo Consultivo y la Misión Visitadora.

El representante especial de la Autoridad Administradora lamentó que el representante de la India, al referirse a las fuerzas armadas de Somalia, hubiese pensado que en alguna forma se podía relacionar su número con actitudes hipotéticas de parte del Gobierno de Etiopía. Nunca se previó que el Territorio necesitase fuerzas de protección contra un supuesto e hipotético agresor. La

Autoridad Administradora comprendía, al igual que el representante de la India, que Etiopía era un Miembro leal de las Naciones Unidas y que jamás abrigaría intenciones hostiles contra Somalia. El orador había aludido simplemente a la situación aun pendiente en la línea administrativa provisional, cuestión a que se había referido el representante de Colombia al hacer sus observaciones ante el Consejo.

II. PROGRESO POLÍTICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SITUACIÓN GENERAL: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Durante el año no sufrió ninguna modificación importante la estructura de la Administración, en la cual el Administrador, como representante de la Autoridad Administradora, ejerce los poderes ejecutivo y legislativo. En el ejercicio de sus facultades para dictar resoluciones ejecutivas y en todos los asuntos relativos al progreso político, económico y social, el presupuesto y la liquidación de cuentas, este funcionario es asesorado por el Comité Administrativo, compuesto del Administrador, el Secretario General de la Administración y de siete a nueve jefes de departamentos gubernamentales. Además, administra el Territorio por mediación de seis comisionados regionales, 30 residentes y vicepresidentes y nueve departamentos administrativos, financieros y técnicos.

Durante el año 1953 fué modificada la estructura de la administración central, que actualmente combina diversas oficinas gubernamentales en departamentos más grandes. Las Direcciones de Agricultura y Zootecnia, de Industria, de Comercio Interior y Trabajo, y de Obras Públicas y Comunicaciones fueron combinadas y forman parte del Departamento de Desarrollo Económico. Las Direcciones de Salud Pública y de Enseñanza fueron reunidas en el Departamento de Desarrollo Social. Las Direcciones de Relaciones Exteriores, de Información y Estadística y de Imprenta y Prensa fueron incorporadas a la Oficina del Administrador. La Dirección de Divisas y de Comercio Exterior quedó dentro del Departamento de Asuntos Financieros.

Como en los años anteriores, el papel de la población indígena en la administración del Territorio consiste en la actuación de sus representantes en órganos consultivos (el Consejo Territorial, los Consejos de Residencia y Municipales y otros órganos técnicos de carácter consultivo), en el ejercicio de funciones por los jefes de tribus en cuestiones tribales, y en el trabajo en los servicios administrativos (principalmente, en la actualidad, en las categorías inferiores).

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, considerando que en el Estado independiente de Somalia debe haber un número adecuado de somalis con suficiente experiencia administrativa y ejecutiva en el momento de realizarse el traspaso de poderes; opinando que deben tomarse medidas inmediatas para lograr una mayor participación de los somalis en todos los órganos de la Administración y su designación en puestos de más grande responsabilidad, pide a la Autoridad Administradora que examine la posibilidad de asociar a somalis en los trabajos del actual Comité Administrativo.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Son ocho los partidos políticos que la Autoridad Administradora considera como activos (al igual que en el año anterior). El cuadro general de esos partidos no experimentó ningún cambio. La Liga de la Juventud Somali sigue siendo partidaria de una modificación rápida y radical de la estructura del Territorio, en tanto que los otros partidos abogan por una evolución y una substitución más gradual de las instituciones tradicionales.

En su 11° período de sesiones el Consejo hizo suyo el parecer, expresado por la Misión Visitadora de 1951, de que gran parte de la actividad política carecía de orientación y de que los dirigentes de los partidos políticos debían dar importancia cada vez mayor al aspecto constructivo de sus funciones. También exhortó a la Autoridad Administradora a poner en vigor, lo antes posible, una nueva ley relativa al establecimiento de partidos políticos. La Autoridad Administradora informó al Consejo que había derogado la legislación sobre partidos políticos vigente durante la guerra.

Anteriormente, el Consejo había tomado nota de que la existencia política del Territorio se caracterizaba por las discrepancias entre la Liga de la Juventud Somali y otros partidos, así como entre éstos y la Administración. Esas discrepancias motivaron la presentación de peticiones que el Consejo consideró. En su 12° período de sesiones, sin embargo, el Consejo advirtió que se había registrado una disminución de la tensión política en el Territorio y que habían mejorado notablemente las relaciones entre los partidos políticos y entre éstos y la Autoridad Administradora, e instó a todos los partidos políticos a cooperar para lograr los objetivos del Acuerdo de Administración Fiduciaria, y expresó la esperanza de que los partidos políticos y la Autoridad Administradora en lo sucesivo allanaran juntos los numerosos y difíciles obstáculos que quedaban por vencer. El Consejo, además, acogió con beneplácito la mayor representación otorgada a los partidos políticos en el Consejo Territorial.

La Autoridad Administradora informó al Consejo que durante el año 1953 había mantenido su política de estricta imparcialidad con respecto a todos los movimientos políticos y que habían sido reabiertas las filiales de la Liga de la Juventud Somali en la región del Bajo Giuba, que habían sido temporalmente clausuradas a raíz del incidente de Chisimaio de 1952; las autoridades y los representantes de todos los partidos políticos participaron en las ceremonias realizadas en esa ocasión.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo toma nota con satisfacción del papel constructivo desempeñado por los partidos políticos del Territorio y del interés que demuestra el Consejo Territorial por los programas de desarrollo, como lo indica la declaración formulada al Consejo de Administración Fiduciaria por los dos Vicepresidentes del Consejo Territorial, y expresa la esperanza de que este espíritu de confianza mutua y de cooperación permitirá que los partidos políticos continúen participando de manera constructiva en los esfuerzos de la Autoridad Administradora para promover el desarrollo progresivo del Territorio hacia su completa independencia en 1960.

CONSEJO TERRITORIAL

Las facultades y la composición del Consejo Territorial, establecido en 1950 como entidad consultiva, no han sufrido ninguna modificación desde que el Consejo de Administración Fiduciaria examinó por última vez las condiciones existentes en el Territorio.

Con respecto a las facultades del Consejo Territorial, tanto el Consejo de Administración Fiduciaria como la Misión Visitadora de 1951 destacaron la necesidad de que cuanto antes y paulatinamente se concediesen facultades legislativas a fin de que la población pudiera realizar la más prolongada experiencia posible en el funcionamiento de los sistemas legislativos durante el breve período de administración fiduciaria.

En su 14° período de sesiones el Consejo fué informado de que la Autoridad Administradora estaba estudiando proposiciones concretas tendientes a fortalecer gradualmente las facultades deliberativas del Consejo Territorial.

En cuanto a la composición del Consejo Territorial, 21 de sus 51 miembros son representantes regionales designados, según lo declara la Autoridad Administradora, por voto secreto. Otros 18 son representantes de partidos políticos, y los asientos se asignan a los partidos en relación directa con el número de sus filiales; los nombramientos son hechos por la Administración a base de listas que contienen nombres en número doble del de los puestos que se deben llenar. Ocho miembros son representantes de grupos económicos; uno representa a grupos culturales y hay un representante de la colectividad italiana, otro de la árabe e india y otro de la pakistana.

Con respecto a la composición del Consejo Territorial, la Misión Visitadora de 1951 criticó el sistema por el cual la representación proporcional de los partidos políticos estaba combinada con la representación de grupos funcionales. En consecuencia, el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora llevase adelante sus planes de celebrar en las ciudades y aldeas elecciones directas de miembros del Consejo Territorial y de los Consejos Municipales. En su 12° período de sesiones se informó al Consejo que se estudiaba la posibilidad de aplicar un plan conforme al cual la representación en el Consejo Territorial estaría compuesta de un número aproximadamente igual de representantes de las comunidades urbanas elegidos directamente, por una parte, y, por la otra, de representantes de grupos tribales elegidos en dos grados (en este último caso las elecciones se basarían en el sistema tradicional de designación de jefes).

En el informe anual que se examina, la Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria que pronto se adoptarían medidas para transformar al Consejo Territorial en un órgano electivo y que en vista de la inminencia de esta medida, la Autoridad Administradora había decidido ampliar el mandato de los miembros del Consejo Territorial para evitar dos cambios, en un año, en la composición del mismo. Con arreglo al plan previsto por la Autoridad Administradora, la población sedentaria elegiría sus representantes al Consejo Territorial mediante el sistema de sufragio universal masculino establecido para la elección de consejeros municipales. Se elegirían representantes de la población nómada mediante elecciones indirectas, en las cuales las asambleas tribales o *shirs* designarían sus representantes. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo que estas elecciones se celebrarían en 1955.

En su 14° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, tomando nota de que las elecciones generales para el Consejo Territorial habrán de celebrarse en 1955; tomando nota además de que el Consejo Territorial comprende a representantes de la población pastoril y agrícola, por una parte, y de la población urbana, por la otra, recomienda que el sistema de elecciones directas

sea ampliado tanto antes de manera que abarque a toda la población; expresa la esperanza de que el pueblo somali coopere plenamente a ese respecto con la Autoridad Administradora; recomienda además que la Autoridad Administradora examine cuidadosamente la futura composición del mencionado órgano, con miras a lograr que el funcionamiento de la rama legislativa de gobierno se conforme a los objetivos señalados en la Carta y especificados en la Declaración de Principios Constitucionales anexada al acuerdo de Administración Fiduciaria.

El Consejo, tomando nota con aprobación de que la Autoridad Administradora se propone abolir los nueve asientos del Consejo Territorial asignados a los representantes de grupos económicos y culturales, recomienda que esos asientos sean incluidos entre los que serán llenados mediante elecciones directas cuando el Consejo Territorial sea reconstituido en 1955.

CONSEJOS DE RESIDENCIA

Durante el año 1953, los Consejos de Residencia aumentaron de 28 a 30, a raíz del establecimiento de vicerresidencias en Dinsor y en Uanle Uen. Estos Consejos están compuestos por jefes, notables y representantes de partidos políticos. La Misión Visitadora de 1951 puso en conocimiento del Consejo de Administración Fiduciaria que los Consejos de Residencia no funcionaban satisfactoriamente debido a que no estaban familiarizados con los procedimientos administrativos modernos, y a la visión política rígidamente localista de muchos somalis.

El Consejo concedió importancia al aumento de las facultades y de la jurisdicción de los Consejos de Residencia e hizo recomendaciones similares a las que había formulado respecto al Consejo Territorial. En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora expresó que se estaban examinando planes tendientes al fortalecimiento de las facultades de esos órganos y a su reorganización sobre bases más democráticas, y que esperaba una pronta aplicación de esos planes. Mientras tanto, decidió prolongar el mandato de los consejeros ya en funciones hasta después de terminado el año 1953, a fines del cual dicho mandato hubiera terminado normalmente.

CONCEJOS MUNICIPALES

En cada una de las 35 administraciones municipales establecidas en el Territorio, existe un Concejo Municipal cuya relación con el Presidente es de carácter consultivo. Hasta 1954, los miembros de estos concejos eran designados casi siempre por los Consejos de Residencia. El Consejo de Administración Fiduciaria había estimado anteriormente que la Autoridad Administradora debía ampliar las facultades y la competencia de esos órganos en el mismo sentido indicado con respecto al Consejo Territorial. La Misión Visitadora de 1951 había hecho observaciones sobre el hecho de que en las administraciones municipales toda la autoridad había sido conferida a los residentes. Ulteriormente, la Autoridad Administradora comunicó al Consejo que una vez creado en 1953 un sistema censal y de registro civil en cada municipio, los miembros de los Concejos Municipales serían elegidos por sufragio directo.

En su 14.º período de sesiones, se informó al Consejo que durante el año 1953 se había efectuado un censo de la población establecida en las municipalidades y que en cada una de éstas se había establecido un sistema de registro civil. Estas dos medidas habían permitido a la Autoridad Administradora aplicar sus planes para la realización de elecciones municipales. Se promulgaron disposiciones legislativas que establecían un sistema elec-

toral, y se fijó la fecha del 28 de marzo de 1954 para la realización de las elecciones, en las cuales se esperaba que participaran 60.000 votantes. La ley electoral prevé, entre otras cosas, el sufragio universal para los hombres de más de 21 años de edad, el voto secreto y la representación proporcional. El número de consejeros se determina en cada caso con arreglo a la magnitud de la comunidad, y su total puede variar entre cinco y 20 personas. Aproximadamente un 75% de los votantes inscriptos participó en las elecciones, y la Autoridad Administradora informó al Consejo que tanto los resultados de la campaña como la forma en que ella se desarrolló constituían una prueba de la conciencia cívica del pueblo somali.

Ocho peticiones que el Consejo tuvo ante sí en su 14.º período de sesiones contenían cargos según los cuales algunas autoridades locales habían demostrado parcialidad e intervenido en la campaña electoral, y se habían producido irregularidades en la aplicación de la ley de elecciones municipales.²⁹⁸ Se denunciaba el hecho de que el censo de la población, que se efectuó antes de la elección y sirvió de base para la preparación de las listas electorales, había sido incompleto y había impedido así la participación de quienes fueron omitidos. Expresábase también que en ciertos casos se había permitido la inscripción de ciudadanos no residentes como votantes, y que miembros de algunas organizaciones políticas habían recibido trato preferencial en la inscripción. Se afirmaba igualmente que después de las elecciones hubo actos de violencia y de intimidación.

En sus observaciones sobre algunas de estas peticiones, la Autoridad Administradora negó las diversas acusaciones, afirmando que habían pasado por lo menos tres meses entre la creación de los padrones civiles y las elecciones; que las oficinas inscriptoras habían funcionado permanentemente y que los interesados pudieron inscribirse hasta la víspera de las elecciones si deseaban votar. La Autoridad Administradora declaró además que podían haberse producido errores y omisiones, pero que si algunas personas no habían sido incluidas en las listas de electores y otras aparecían con nombres falsos, debíase ello a que habían eludido el censo o habían suministrado información inexacta. Hubo 127 reclamaciones relativas a inscripciones o a casos en que éstas no fueron asentadas; se falló con respecto a 81 de esos casos.

La Autoridad Administradora agregó que los partidos políticos habían tratado de registrar a simpatizantes que no eran residentes de las municipalidades pero que las autoridades lograron frustrar esa maniobra. Los cargos sobre intervención de autoridades locales en la campaña electoral fueron refutados por la Autoridad Administradora, la cual agregó que hubo absoluta libertad para la celebración de reuniones y que se acordaron facilidades a todos los partidos políticos. De los diversos actos de violencia ocurridos después de las elecciones, sólo en un caso hubo indicios de motivos políticos.²⁹⁹

Con arreglo a una ley promulgada durante el año que se examina, los jefes de las administraciones municipales deben procurar ahora el asesoramiento de los concejos para todo gasto mayor de 500 somalos. Antes se requería la consulta sólo para gastos mayores de 5.000 somalos.³⁰⁰ La Autoridad Administradora declaró también que en

²⁹⁸ T/PET.11/402, 410 y Add.1, 411 y Add.1, 414 y Add.1, 416 y Add.1 y 2, 417, 418 y Add. y 423.

²⁹⁹ T/OBS.11/30, 32 y 33. Respecto a las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria sobre esas peticiones, véanse las resoluciones 1016 (XIV), 1024 (XIV), 1025 (XIV), 1028 (XIV), 1029 (XIV), 1030 (XIV) y 1031 (XIV).

³⁰⁰ 20 somalos = £ 1 = 2,86 dólares de los EE.UU.

1954 se acordarían facultades deliberativas a los Concejos Municipales.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones:

El Consejo toma nota con satisfacción de que en 35 comunidades se han establecido Concejos Municipales, para lo cual se ha tomado como base el voto secreto de los hombres adultos; toma nota además de que la Autoridad Administradora se propone aumentar el número de los Concejos Municipales y la amplitud de las municipalidades existentes; y toma nota asimismo de la promesa de la Autoridad Administradora de ampliar en 1954 las facultades de los Concejos Municipales.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En anteriores períodos de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria reconoció la urgencia de que en el período relativamente corto que falta para que el Territorio alcance su independencia, y un número suficiente de somalis reciba formación y sea capacitado para ocupar puestos de responsabilidad en la administración pública.

El Consejo tomó nota también de los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora para aumentar la participación de somalis en los servicios administrativos y, particularmente, de su nombramiento para puestos como jefes de sección, residentes y vicerresidentes, funcionarios a cargo de las aduanas y de los puestos de policía y oficiales del Cuerpo de Seguridad. Algunos de esos nombramientos constituyeron los primeros resultados útiles de la creación de una Escuela de Administración Política por la Autoridad Administradora.

No obstante, consciente de que los puestos administrativos de mayor responsabilidad todavía son desempeñados por italianos, el Consejo, en sus 11° y 12° períodos de sesiones, expresó la esperanza de que se intensificara ese proceso de somalización del Gobierno.

La información examinada por el Consejo en su 14° período de sesiones indicaba que a fines del año 1953, en un total de 4.292 personas al servicio de la Administración, había 4.139 somalis, 779 italianos y 11 personas de otras nacionalidades. Con respecto al año anterior, esas cifras acusaban un aumento de 57 somalis y una disminución de 40 italianos. En 1953 fueron designados cuatro vicerresidentes somalis y en enero de 1954 se hizo una quinta designación; el número de oficiales somalis del Cuerpo de Seguridad aumentó de 11 a 16; en 1954 se nombrarían otros 12 funcionarios aduaneros somalis; se contrató en 1953 a 32 maestros, y en 1954 se realizarían nuevos nombramientos para puestos de importancia cuando regresaran 38 somalis que recibían formación profesional en Italia y que se especializaban en el Centro de Estudios sobre Somalia, y a medida que terminaran sus estudios los somalis que seguían cursos especializados en el Territorio. Sin embargo, el reemplazo de italianos por somalis, particularmente en puestos de alta responsabilidad, sólo podría hacerse gradualmente, ya que hasta los últimos años de la administración fiduciaria no se dispondrá de personas que posean los conocimientos indispensables. El primer grupo de estudiantes terminará sus estudios secundarios en 1951 y podrá recibir el título de doctor antes de 1960. En opinión de la Autoridad Administradora, sería imprudente apresurar el proceso de somalización mediante la contratación de personas que carezcan de la competencia necesaria.

En su 14° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, considerando que la designación de cinco vicerresidentes somalis constituye un hecho alentador; notando que un grupo de somalis preparado para ocupar puestos administrativos de alta responsabilidad ocupará esos puestos en 1954, recomienda que la Autoridad Administradora tome medidas para colocar a un mayor número de somalis calificados en altos puestos administrativos y para estudiar otras posibilidades de contratar somalis e incorporarlos al servicio administrativo, en todos sus niveles, después de una intensa formación profesional.

El Consejo, recordando la recomendación aprobada en su 12° período de sesiones con miras a la realización de un estudio inicial sobre cuáles son los servicios gubernamentales que el Territorio podría mantener con sus propios recursos; tomando nota de la declaración de la Autoridad Administradora según la cual los gastos de personal en 1960 podrían constituir una pesada carga financiera para el Estado somali, encarga a la Misión Visitadora de 1954 que estudie cuidadosamente esta cuestión juntamente con la Autoridad Administradora, con el Consejo Consultivo y con representantes de la población.

RÉGIMEN JUDICIAL

En anteriores períodos de sesiones, el Consejo tomó nota del ejercicio de funciones judiciales por funcionarios administrativos, de la duración de la detención de las personas que van a ser procesadas, del enjuiciamiento y sentencia de personas sin audiencia y de la existencia de sanciones colectivas.

Aunque tomando nota de que la Autoridad Administradora había adoptado algunas medidas para completar la separación de las funciones ejecutivas y judiciales mediante el nombramiento de jueces en las sedes de las comisarías regionales, el Consejo, en su 11° período de sesiones, compartió la opinión de la Misión Visitadora de 1951 en el sentido de que el nuevo reglamento judicial a la sazón pendiente debía garantizar la absoluta independencia del poder judicial, de conformidad con el artículo 7 de la Declaración de Principios Constitucionales anexa al Acuerdo de Administración Fiduciaria. En su 12° período de sesiones el Consejo tomó nota de las medidas que se estaban adoptando para separar más las funciones judiciales y las administrativas y expresó la esperanza de que se completara lo más rápidamente posible esa separación. El representante especial de la Autoridad Administradora comunicó al Consejo, en su 14° período de sesiones, que la separación de las funciones judiciales y administrativas era completa, con excepción de la facultad del Administrador de rever las decisiones de los tribunales de cadés. Con el establecimiento de una corte suprema en 1954, dicha atribución correspondería exclusivamente a ese tribunal y el régimen judicial del Territorio tendría todas las instancias de justicia.

Con respecto al período de detención anterior al juicio, se promulgaron nuevas leyes que fijan en dos a cinco meses la duración máxima de ese período, salvo en casos de delitos sumamente graves. El Consejo tomó nota de que con la designación de un juez en cada comisaría se hacía mucho más rápida la tramitación de los juicios.

En cuanto al procedimiento de dictar sentencia sin audiencia, se informó al Consejo, en su 12° período de sesiones, que la condena a prisión sin enjuiciamiento había sido abolida, pero que se mantenía ese procedimiento para la imposición de multas no mayores de 400 somalos. A raíz de una recomendación del Consejo Consultivo de que se aboliera también la imposición de multas

sin juicio, la Autoridad Administradora declaró que la cuestión sería incluida en el nuevo reglamento judicial y que, mientras tanto, una persona así condenada al pago de multa podría apelar siempre a un tribunal superior. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14° período de sesiones, que las personas así sentenciadas podían apelar y que en ese caso se les concedía una audiencia ante juez.

El Consejo también había tomado nota de que en las controversias intertribales se aplicaban todavía sanciones colectivas, y con ese motivo había expresado la esperanza de que esas sanciones fueran reemplazadas tan rápidamente como fuese factible por otras penas basadas en el concepto de la responsabilidad individual. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14° período de sesiones, que la Autoridad Administradora había anunciado su propósito de suspender por dos años las sanciones colectivas.

En lo concerniente al reglamento judicial, un comité especial de expertos terminó en 1953 la redacción de un nuevo reglamento; éste será promulgado en 1954 una vez que lo hayan estudiado cuidadosamente los órganos técnicos de la Administración.

En su 14° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, recordando la recomendación aprobada en su 12° período de sesiones; tomando nota con satisfacción de que con el próximo establecimiento de la Corte de Justicia el sistema judicial del Territorio se independizará totalmente de la rama ejecutiva de gobierno, insta a la Autoridad Administradora a que complete la redacción del reglamento judicial antes de presentar al Consejo su próximo informe.

El Consejo, tomando nota con satisfacción de la decisión de la Autoridad Administradora de suspender por dos años la imposición de sanciones penales colectivas, como medida experimental, y de que una vez aprobada esa decisión por el Consejo Territorial se la ha puesto en práctica, expresa la esperanza de que la experiencia lograda llevará eventualmente a la total abolición de las sanciones colectivas, y exhorta al pueblo somali a cooperar a ese efecto con la Autoridad Administradora.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente, y observaciones del representante especial de la Autoridad Administradora

SITUACIÓN GENERAL: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El representante de la India declaró que el ritmo del progreso en los campos ejecutivo y administrativo había sido demasiado lento.

En el Consejo Administrativo, que en cierto modo funcionaba como gabinete, no había ninguna participación somali. Ese órgano tendría finalmente responsabilidad ejecutiva y en 1960 sería reemplazado por un gabinete compuesto exclusivamente por somalis. Ciertamente, ya debía existir una efectiva participación somali y el representante de la India preguntó si no se podía aumentar la composición del Consejo mediante la designación, sin carácter oficial, de algunos asesores somalis. Era bien sabido que existían somalis poseedores del sentido de responsabilidad cívica y de las condiciones necesarias para desempeñar esa función. La participación de somalis en los más elevados planos de dirección de la cosa pública no sólo permitiría la preparación de los dirigentes que serían necesarios cuando se hiciera el traspaso de poderes, sino que también daría a la Administración

un mejor sentido de orientación, y al pueblo somali una conciencia de participación en su propio gobierno.

El representante de Siria declaró que su delegación lamentaba profundamente el hecho de que la Autoridad Administradora, después de cuatro años de experiencia en la administración del Territorio en fideicomiso, no hubiese podido dar comienzo a las medidas valientes que se requerían para que los somalis alcanzaran el más alto grado de experiencia gubernamental y administrativa. Había llegado el momento de que la Autoridad Administradora adoptara algunas decisiones trascendentales y cualquier nueva postergación de esas decisiones comprometería la aplicación adecuada de las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

La participación de somalis en el Comité Administrativo no tenía por qué esperar el establecimiento de una asamblea legislativa para que esos miembros pudieran ser elegidos. En vista de los problemas que quizás afectarían el desarrollo y la evolución de la asamblea legislativa, podía argüirse que los miembros del gabinete debían ser designados por el poder ejecutivo, a fin de asegurar la eficacia de dicho órgano.

El representante de Siria propuso que el Consejo de Administración Fiduciaria aprobara las siguientes recomendaciones:

“El Consejo, considerando que la participación de somalis en altos puestos de la rama ejecutiva de gobierno constituye una cuestión urgente; recordando sus anteriores recomendaciones relativas al proceso de somalización del gobierno, recomienda que se tomen medidas para colocar a somalis en altos puestos administrativos y para establecer, a más tardar a fines de 1954, un Consejo Ejecutivo que incluya a miembros somalis.”

El representante de El Salvador declaró que en el campo político se advertían signos alentadores y que la feliz asistencia de los dos vicepresidentes del Consejo Territorial al período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria constituía una demostración de ello. Cabía señalar además las recientes elecciones municipales (las primeras en la historia de toda el África Oriental) y la somalización de los servicios administrativos, proceso que su delegación había auspiciado anteriormente y que se había producido con alguna lentitud, pero de manera segura.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó que seguía siendo insatisfactoria la situación política del Territorio. Pese a las aspiraciones de la población indígena, reflejadas en diversas peticiones, hacia la derogación de antiguas leyes coloniales y fascistas, esas leyes aun sobrevivían y la Autoridad Administradora se había abstenido de reemplazarlas por leyes democráticas compatibles con los propósitos del Régimen de Administración Fiduciaria. La Administración seguía en manos de antiguos funcionarios coloniales y la estructura administrativa era esencialmente análoga a la colonial. Se continuaba impidiendo la participación efectiva de los indígenas en el gobierno de su propio país, a pesar de que sólo faltaban cinco años y medio o seis para que Somalia fuera proclamada estado independiente.

La Autoridad Administradora debía adoptar inmediatamente medidas eficaces para que los indígenas participaran en los órganos administrativos, legislativos, ejecutivos y judiciales. Para lograr que Somalia adelantara en la esfera política, el Consejo de Administración Fiduciaria debía señalar a la atención de la Autoridad Administradora la necesidad de adoptar medidas que permitieran la transición entre un sistema tribal anti-

cuado y un régimen de gobierno propio establecido sobre bases democráticas.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

El representante de Francia manifestó que también cabía ser optimista con respecto al establecimiento de buenas relaciones entre la Autoridad Administradora y los partidos políticos de Somalia. Era notable el hecho de que los representantes de los partidos políticos opuestos entre sí hubiesen aceptado formular una declaración conjunta al Consejo de Administración Fiduciaria y exponer sus aspiraciones comunes, que eran a la vez patrióticas y moderadas. Esos partidos depusieron sus diferencias particulares y sólo atendieron a los intereses nacionales. En opinión del representante de Francia, tales hombres estaban a la altura de las grandes responsabilidades que ya habían asumido y de las importantes tareas que habrían de emprender en un futuro cercano. El Consejo debía manifestar de alguna manera su deseo de apoyarlos y alentarlos, y la mejor manera de hacerlo consistiría en apoyar sus principales reclamaciones, que en lo esencial parecían razonables.

El representante de Siria observó que la declaración de los vicepresidentes del Consejo Territorial no sólo les había ganado un profundo respeto por su moderación y comprensión, sino también admiración por su madurez política, por su conciencia de las pesadas responsabilidades que deberían afrontar, por su tacto y, principalmente, por la franqueza y el sentido diplomático demostrados al contestar las muchas preguntas que les hicieron los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria. Esa era la calidad de dirigentes que se podía elogiar y que cabía esperar surgiese no sólo en este Territorio sino en todos los demás territorios en fideicomiso. Su delegación apoyaba la sugestión formulada por el representante de Francia en el sentido de que se apoyaran sus principales requerimientos.

El representante de Haití expresó que satisfacía a su delegación la presencia de peticionarios somalis, hecho que brindaba al Consejo la rara experiencia de que comparecieran ante él representantes de diversos partidos políticos para formular colectivamente los deseos de la población que representaban y para solicitar de las Naciones Unidas la ayuda que requería el desarrollo económico de su país. Por esta actitud digna y respetable, su delegación deseaba felicitar a los peticionarios.

El representante de la China declaró que su delegación había escuchado con el mayor interés la declaración conjunta de los dos vicepresidentes del Consejo Territorial y estaba impresionada por el conocimiento que habían demostrado de los problemas del Territorio. Complacía en extremo a su delegación el hecho de que contrariamente a la situación imperante hasta no hacía mucho tiempo, la Administración y los partidos políticos habían trabajado juntos con el espíritu de armonía y cooperación que era indispensable para alcanzar una solución satisfactoria de los numerosos problemas que la Administración y la población del Territorio afrontaban.

El representante especial de la Autoridad Administradora expresó su confianza en que la creciente cooperación entre la Administración y los partidos políticos facilitaría la labor y el cumplimiento de los compromisos de la Autoridad Administradora en el Territorio.

CONSEJO TERRITORIAL

El representante de Francia declaró que sin lugar a dudas era urgente y de fundamental importancia la cele-

bración de elecciones políticas, y que ello constituía quizás la más difícil de las tareas que la Autoridad Administradora debía realizar en un muy breve período. No sólo debía echar los cimientos de un futuro estado democrático e independiente, sino que también tenía que establecer bases sólidas para que en los primeros años de independencia el país no fuera trastornado por la lucha entre facciones e intereses antagonicos. De ahí que le pareciera muy importante que los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria no complicaran innecesariamente la misión de Italia con pretensiones de una perfección teórica. La Autoridad Administradora tenía razón al querer emplear las instituciones tradicionales, los *shirs*, que en realidad eran democráticas, como una base para las elecciones entre los nómadas. La situación de la población no sedentaria impediría la introducción de procedimientos electorales modernos, y sería imposible determinar exactamente quiénes constituían en ella la verdadera *élite*. En el caso particular de la población nómada, serían los hombres que poseyeran la autoridad y la sabiduría reconocidas por las tribus. Era absolutamente necesario evitar que cuando el joven estado somali alcanzara la independencia se produjese un conflicto entre la población sedentaria y la nómada. Sería igualmente peligroso querer favorecer a la población sedentaria en la distribución de los asientos del futuro parlamento en razón de que esas personas son las más cultas, adelantadas y aptas para comprender las complejas condiciones del mundo moderno. En vez de perseguir una perfección formal conforme a las normas ideales de democracia, Italia debía esforzarse por encontrar un equilibrio entre los intereses en juego y por traspasar el poder a manos de personas experimentadas.

El representante de Francia declaró además que si bien favorecía el sufragio femenino, consideraba imprudente complicar la situación de la Autoridad Administradora con una recomendación en ese sentido, porque pasarían años antes de que ello se pudiera llevar a la práctica.

El representante de la India manifestó que la manera como se estaban introduciendo y aplicando los principios de una democracia parlamentaria y el alcance con que ello se hacía eran cuestiones de fundamental importancia. Refiriéndose a las próximas elecciones, expresó que a juicio de por lo menos algunos miembros del Consejo el principio electoral debía tener las bases más extensas y amplias que fuera posible. El hecho de que en las últimas elecciones de Concejos Municipales la población hubiera demostrado un sorprendente grado de madurez política, indicaba sin lugar a dudas que en las próximas elecciones de Consejo Territorial, el sistema de sufragio universal podría ser ampliado de manera que incluyese también a la población femenina.

El representante de la India se manifestó además en favor de una extensión del principio de elecciones directas entre las tribus. No ignoraba que esto entrañaría algunos problemas de organización y administración, pero problemas análogos habían sido satisfactoriamente resueltos en otros países y no existía alguna para que no pudieran hacerse arreglos similares en el caso de la población pastoril y nómada de Somalia. Para que el Consejo Territorial pudiera representar verdaderamente a todo el pueblo de Somalia, era imprescindible que se celebraran elecciones directas sobre la base más amplia posible. Como ese órgano pasaría a ser el futuro parlamento soberano del estado independiente de Somalia, había llegado el momento de hacerlo lo más representativo posible. ¿De qué manera podría el pueblo de Somalia adquirir plena conciencia de la responsabilidad de gobernarse

como no fuera capacitándose para participar plenamente en las diversas actividades de gobierno?

El representante de la India expresó que las funciones del Consejo Territorial eran muy restringidas y que se le debía encargar que estudiara (para luego asesorar al respecto a la Administración) el plan quinquenal de desarrollo económico, los programas de colonización de tierras y de agricultura, incluyendo la cuestión del asentamiento de la población nómada, y también el programa de fomento de la enseñanza.

El representante de Siria manifestó que en lo referente al establecimiento de un órgano legislativo eran insignificantes los resultados alcanzados. Estimaba que la Autoridad Administradora debía dedicar cuidadosísima atención al problema de la composición de ese órgano, ya que era necesario establecer cierto equilibrio entre los elementos urbanos progresistas, por una parte, y los elementos tribales tradicionales, por la otra. Los primeros, debido a su más amplia experiencia y capacidad de adaptación a los cambios, asumirían la mayor parte de la responsabilidad y de la tarea de establecer un gobierno eficiente y democrático. Los elementos tribales, de actitud esencialmente conservadora, tendrían naturalmente voz en el gobierno, y una vez establecido debidamente el estado somali se tomaría en cuenta adecuadamente la cultura tradicional.

La cuestión consistía, sin embargo, en la manera de armonizar los intereses de esos dos grupos en instituciones gubernamentales durante el periodo de administración fiduciaria. Una representación igual de ambos grupos en la asignación de asientos en el Consejo Territorial perjudicaría inevitablemente el desarrollo de este órgano como cuerpo legislativo, y disminuiría su eficacia. Era evidente que la Administración debía asumir la responsabilidad de establecer el equilibrio apropiado para asegurar la aplicación de los principios constitucionales establecidos en el Acuerdo de Administración Fiduciaria. Esto sólo podría conseguirse si la Autoridad Administradora, en su esfuerzo por crear un estado moderno, requiriese desde un principio la colaboración de los partidos políticos. El problema de la representación tribal exigía un estudio cuidadoso, particularmente debido a que el grado de desarrollo logrado por los elementos nómadas no los calificaría para desempeñar funciones directivas en la creación de órganos de gobierno basados en los principios de la Carta y del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

El representante de Siria declaró que había escuchado con satisfacción la opinión del Vicepresidente del Consejo Territorial, Sr. Osman, en el sentido de que el Consejo podía ser transformado sin más demora en un órgano legislativo, y de que las aspiraciones del pueblo somali tendían a ese propósito. La Autoridad Administradora debía hacer todo lo posible para satisfacer esas esperanzas y adoptar la audaz decisión de traspasar las facultades y responsabilidades legislativas al pueblo somali.

También prestó atención a la declaración formulada por el Sr. Osman en el sentido de que podrían celebrarse elecciones directas entre el pueblo nómada; por consiguiente, exhortaba a la Autoridad Administradora a establecer este procedimiento electoral único en todo el territorio, aunque los primeros resultados pudieran distar mucho de ser perfectos. Ponía en duda la conveniencia de mantener el *shir* como órgano electoral, en vista de que era imprescindible que los representantes poseyeran, en todo lo posible, un conocimiento amplio de las necesidades del Territorio y de las medidas necesarias para

hacerlo progresar. Dudaba que el *shir* fuese un órgano verdaderamente democrático en el sentido moderno y dinámico de la expresión.

El representante de Siria opinó que los planes de la Autoridad Administradora respecto a la organización del poder legislativo, eran un tanto indefinidos. Esa circunstancia no era muy alentadora, y parecería que las primeras medidas para conferir poderes legislativos al Consejo Territorial no se adoptarían antes de 1956. Era probable, pues, que en el corto lapso de tres años el Consejo tuviera que pasar de órgano consultivo a órgano plenamente legislativo.

El representante de Haití declaró que su delegación había observado con gran interés los resultados de las primeras elecciones democráticas celebradas en Somalia, en las cuales fueron elegidos 35 Concejales Municipales, y agregó que le gustaría saber que la Autoridad Administradora iba a afirmar aun más su propósito de realizar elecciones para que el Consejo Territorial pudiera convertirse en un órgano legislativo completo. También esperaba que las elecciones se celebraran en la fecha que se había indicado.

El representante de Australia expresó la opinión de que la Autoridad Administradora había actuado con gran prudencia al hacer evolucionar gradualmente el futuro parlamento. También estaba acertada al dedicarse singularmente a un aspecto de la evolución antes de pasar al siguiente. Su delegación consideraba lógica y realista la decisión de la Administración de concentrar su atención en primer término en la organización de elecciones libres al Consejo y de considerar luego las facultades adicionales que deberían acordarse a ese cuerpo.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que el Territorio carecía aún de órgano legislativo adecuado y que las facultades legislativas eran ejercidas por el Administrador. La composición del Consejo Territorial reflejaba la política de la Autoridad Administradora de alentar el retrógrado sistema tribal. Ni aun ese órgano puramente consultivo, carente de autoridad o facultades auténticas, estaba constituido democráticamente y merecía ser considerado como verdaderamente representativo de la población indígena. La mayoría de sus miembros eran en realidad jefes de tribu y, en el fondo, funcionarios a sueldo de la Administración.

El representante especial de la Autoridad Administradora expresó que a juicio de algunas delegaciones se debía implantar en todo el Territorio el sistema de elecciones directas en lugar de recaer, cuando fuere necesario, en los *shirs*. Aunque la Administración no había adoptado aún una decisión al respecto, él creía que como surgirían enormes dificultades si se recurriera al sencillo expediente de detener a los nómadas durante sus travesías mientras se celebraran las elecciones, la Administración había hecho suya la opinión expresada por los representantes de Francia y de Bélgica sobre el particular. De esa manera, por lo menos, existía la posibilidad de celebrar esas elecciones en la primavera de 1955. La proposición tendiente a lograr en el Consejo Territorial elegido un equilibrio adecuado a fin de dar a los miembros elegidos por la población sedentaria una proporción diferente, mediante el sufragio directo, de la que resulta de la cuota de población que en realidad representan, difícilmente parecía en consonancia con el principio democrático y suscitaría seguramente la oposición de parte de los más activos miembros de la nación somali.

La Autoridad Administradora no dejaría de poner en juego todos los medios a su alcance para extender cuanto antes el sufragio a las mujeres. En este sentido, ya se

habían dado seguridades al Consejo Consultivo, que había patrocinado esa medida. Sin embargo, por falta de tiempo para las disposiciones preparatorias, parecía poco probable que se pudiera establecer el voto femenino en las próximas elecciones.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que quizás fueran ampliadas las facultades del Consejo Territorial durante el año siguiente, en caso de que después de las elecciones quedara tiempo para completar y promulgar las leyes pertinentes, las cuales, como siempre, debían ser examinadas antes por el Consejo Consultivo.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que todos los proyectos de ley habían sido objeto de amplia discusión y de votación en el Consejo Territorial, desde que éste fué creado en 1950. Lo mismo se hizo sostenidamente en las esferas municipales y de distrito. En lo concerniente a la formación necesaria para la dirección de la cosa pública, la diferencia entre asambleas consultivas y legislativas no parecía constituir un factor determinante.

CONSEJOS DE RESIDENCIA

El representante de la India, observando que la Autoridad Administradora preparaba planes para reorganizar esas órganos sobre una base más democrática, consideró esencial que dichos planes fuesen rápidamente terminados y puestos en práctica, y expresó la esperanza de que los mencionados órganos fueran reconstituídos en 1955 sobre bases democráticas y con facultades mucho más amplias.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que los Consejos de Residencia no eran sino órganos de carácter consultivo a los que no se podía considerar verdaderamente representativos, ya que quienes los integraban eran jefes tribales o locales designados por la Administración.

CONCEJOS MUNICIPALES

El representante del Reino Unido manifestó que las elecciones municipales habían sido celebradas en un ambiente de absoluta libertad y que los resultados eran alentadores. Deseaba a Somalia, en las elecciones venideras, el mismo éxito que habían tenido las recientes elecciones municipales.

El representante de la India declaró que las últimas elecciones municipales, basadas en el sufragio universal masculino y en el voto secreto habían demostrado la madurez política y el sentido de responsabilidad de la población. Esperaba que ya podría traspasarse al concejo municipal recientemente electo una parte substancial de la autoridad y las tareas ejecutivas. En su opinión, la autonomía en la esfera local proporcionaba un excelente campo de capacitación para el ejercicio de una mayor responsabilidad legislativa y ejecutiva; confiaba que no se descuidaría ninguna oportunidad para utilizar a dichos concejos municipales con ese fin. Por otra parte, el traspaso de autoridad a dichos órganos era cuestión que el Consejo Consultivo y la Misión Visitadora debían seguir de cerca.

El representante de Siria afirmó que era indispensable dar el mayor estímulo posible a los nuevos concejos para que asumiesen gran parte de la responsabilidad del gobierno propio. La labor de los futuros administradores de Somalia sería por cierto menos difícil si pudiesen contar con el apoyo de órganos de gobierno local responsables

y experimentados. De lo contrario, el nuevo estado somali encontraría nuevas complicaciones y dificultades.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas afirmó que no existía indicación alguna de que con las elecciones municipales el sistema administrativo local se hubiese transformado sobre una base democrática. Señaló que de conformidad con la ley electoral, de una población total de 1.200.000 personas sólo participaron unos 60.000 votantes y que las mujeres y la población nómada, que constituían aproximadamente las tres cuartas partes de los habitantes, carecían aún del derecho de votar. Por otra parte, las peticiones recibidas demostraban que las elecciones se habían realizado bajo presión policial y medidas arbitrarias; varias peticiones denunciaban violaciones de la ley electoral, coacción sobre el electorado e intervención de la Administración en las listas electorales.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que los concejos municipales asumirían sus facultades durante ese año.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

El representante de Bélgica declaró que sería muy imprudente confiar funciones de responsabilidad a somalis que aun carecían de una total calificación. Agregó que la Administración debía actuar con prudencia con respecto al aumento de sueldos a medida que los somalis reemplazaran a los italianos en la administración, ya que era importante que el estado somali pudiera hacer frente a sus propias obligaciones. También sería peligroso asignar a extranjeros salarios superiores a los que el país podía normalmente soportar y que luego deberían ser extendidos a toda la administración cuando ésta estuviese totalmente integrada por somalis.

El representante de Francia dijo que la designación de funcionarios indígenas y de auténticos administradores, es decir, de hombres respetados y obedecidos por la población, constituía un importantísimo factor. En este sentido, se preguntaba si la Autoridad Administradora no aspiraba excesivamente a la perfección. Comprendía su deseo de dar puestos a elementos más jóvenes que se hubieran formado en el extranjero y poseyeran diplomas, pero sabía por experiencia que personas de cultura general y de conocimientos técnicos limitados que hubieran demostrado sensatez en su labor diaria, adquirido experiencia y manifestado fuerza de carácter, generalmente actuaban con mayor eficacia que los jóvenes graduados, particularmente en difíciles períodos de transición. Lo importante era preparar con la mayor prontitud y seriedad posible a hombres de positivo valor, cualesquiera fueren sus antecedentes académicos, bajo la dirección de administradores italianos.

El representante del Reino Unido opinó que era muy prudente la política de la Autoridad Administradora de preparar cuidadosamente a quienes habrían de ocupar los puestos más elevados. Señaló que varios cargos de gran responsabilidad eran ya desempeñados por somalis y que ese número aumentaba constantemente, hecho que coincidió con una disminución, en número de 273, del número de empleados italianos.

El representante de la India declaró que en ese respecto el progreso logrado había sido demasiado moderado, lento e indeciso. Tomando como base el actual ritmo de progreso, en 1960 habría muy pocos somalis en puestos de alta responsabilidad. No cabía considerar que la posesión de un título universitario y de una preparación académica general debiera ser una calificación previa

indispensable de todo administrador capaz de alcanzar éxito. Dentro de la situación general de Somalia, si la participación de los somalis en los cuadros superiores de la administración fuera a estar limitada por esos factores, el Estado independiente de Somalia afrontaría en 1960 una grave situación en lo concerniente a su estructura administrativa. Ya que de todos modos la responsabilidad total pasaría al pueblo somali en 1960, sería un tanto exagerado y pesimista afirmar que no existían somalis que pudieran ocupar puestos de responsabilidad limitada como los de Residentes y jefes de departamentos de menor importancia. En vista de la importancia vital de esa cuestión, no se la debía afrontar de manera excesivamente conservadora y ortodoxa o con espíritu de resignación. La situación requería claramente medidas más enérgicas y de gran vuelo y un adecuado sentido de urgencia.

El representante de la India señaló a la más celosa atención de la Autoridad Administradora la posibilidad de designar somalis como suplentes de algunos jefes italianos de departamento, cosa que permitiría la capacitación eficaz de funcionarios somalis que demostraran condiciones positivas y que habrían de reemplazar, llegado el momento, a aquellos jefes. La elección no tenía por qué limitarse a funcionarios somalis, pero también se debía considerar la designación de algunos somalis experimentados en otras actividades. El Consejo Consultivo y la Misión Visitadora podrían quizás examinar esa sugestión prontamente, en consulta con la Administración y con representantes del Consejo Territorial.

El representante de Siria expresó que no alcanzaba a comprender la política de la Autoridad Administradora en lo concerniente a la somalización del Territorio. Refiriéndose a la norma de no colocar ya en ese momento el mayor número posible de somalis en altos cargos, en razón de que ello impediría que personas instruidas pudiesen ocuparlos más adelante, declaró que no veía por qué personas con cierto grado de experiencia y sensatez no podían ocupar puestos que les permitirían aprender a administrar el Territorio. Estaba seguro que si había en éste personas dotadas de esas calificaciones y si se les daba la necesaria orientación y enseñanza, podrían convertirse en buenos administradores. La mera posesión de un grado académico no calificaba necesariamente a una persona para ocupar un puesto administrativo. La mejor, y en realidad la única, preparación para el gobierno propio y la independencia, era el ejercicio del gobierno propio. Era importante que se adoptasen todas las medidas posibles para que los somalis pudiesen actuar en los puestos de más responsabilidad. Si carecían de la experiencia necesaria, podían actuar como auxiliares de los jefes de departamento y de otros altos funcionarios.

El representante de Siria manifestó que los cálculos de la Autoridad Administradora sobre personal y gastos de personal para 1960 no ofrecían la orientación que él había esperado encontrar en ellos y no correspondían a la probable situación del Territorio en 1960.

El representante de la China declaró que su delegación había notado con satisfacción que se había nombrado vicerresidentes a cinco habitantes indígenas. Ello constituía un paso significativo en el sentido en que debía orientarse la evolución, y él esperaba que cuando se presentara el próximo informe anual más somalis hubieran sido nombrados en esos puestos y en otras posiciones, incluyendo la de mayor importancia.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que los datos del informe anual indi-

caban que todos los puestos importantes de la Administración estaban ocupados por italianos. Estimaba que la Autoridad Administradora debía adoptar medidas eficaces para asegurar la participación de los indígenas en todos los órganos de la administración.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que convenía con el representante de Francia en que quizá la Administración había actuado con demasiada cautela al admitir a somalis en puestos administrativos de alta responsabilidad. No obstante, su número aumentaba constantemente en la nómina general de empleados. Pero la Autoridad Administradora no podía eludir la responsabilidad de convertir a Somalia en un estado moderno, pese a lo cual podía anunciarse que el proceso de somalización sería apresurado muy en breve. El primer grupo de jóvenes que asistieron a los cursos de la Escuela de Política Administrativa que funciona en el Territorio y a un curso de ampliación en Italia, acababa de regresar a Somalia, y todos tendrían acceso a puestos administrativos de mayor responsabilidad. Confiaba en que este grupo haría muy buen papel en la administración central, junto con algunos de los 33 directores italianos de la Administración (excluyendo los departamentos estrictamente técnicos) y en los distritos. Dispondrían ellos de amplias oportunidades para adquirir experiencia administrativa. La Autoridad Administradora aceptaba la idea de que un título universitario no constituía un requisito previo imprescindible para ser buen administrador, pero la tarea administrativa requería, sobre todo en los más altos niveles, un grado de conocimientos y de instrucción que el mero buen criterio no podía substituir.

RÉGIMEN JUDICIAL

El representante de Francia expresó que aunque consideraba peligroso imponer una pesada carga presupuestaria al futuro estado somali, en la organización de la esfera judicial no se debía imponer una economía exagerada, a fin de que el estado somali pudiese tener un régimen judicial bien concebido, independiente, fuerte y respetado. Nada era más necesario para un nuevo estado que poseer una justicia prudente, eficaz y respetada. Exhortaba a la Autoridad Administradora, pues, a que llevara adelante sus planes y prosiguiese decididamente sus esfuerzos.

El representante de El Salvador declaró que la organización del régimen judicial, completada ahora con el establecimiento de la Suprema Corte, merecía los mayores elogios, y que sólo cabía esperar su rápida consolidación.

El representante de la China expresó la satisfacción con que observó el modo en que se había concretado gradualmente la separación de poderes entre las ramas administrativa y judicial de la Administración. También se había enterado con satisfacción de que la Administración había decidido suspender por dos años la imposición de multas colectivas y de que esta decisión había sido aprobada por el Consejo Territorial. Confiaba sinceramente en que la experiencia lograda mediante esta oportuna medida habría de conducir eventualmente a la abolición de las multas colectivas y a su substitución por una sanción penal más apropiada.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que en la esfera judicial la próxima institución de la Corte de Justicia daría independencia absoluta al régimen judicial del Territorio, tanto con respecto a órganos exteriores como frente al Poder Ejecutivo.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

Los recursos económicos conocidos del Territorio son escasos. Se calcula que un 90% de la población se dedica al pastoreo y a la agricultura dentro del cuadro tradicional de subsistencia. De esa población, el 40% se dedica a actividades de pastoreo, el 30% a explotaciones agropecuarias y el 20% a la agricultura exclusivamente. Sólo ocasionalmente participan en el sistema de mercados para cambiar sus pequeños excedentes de cueros, *ghee* (mantequilla líquida de leche de búfalo) y granos por textiles, arroz, azúcar, té y otros artículos de consumo. La producción para la exportación es limitada, tanto en volumen como en variedad, y los principales productos son las bananas, los cueros, el *ghee*, el algodón y el incienso. Se ha producido muy poco desarrollo industrial. Tal vez exista petróleo en algunas partes del Territorio, pero aun no se le ha descubierto.

La Autoridad Administradora sugirió anteriormente que el progreso económico del Territorio dependería en gran medida de la asistencia prestada por organizaciones financieras internacionales. A este respecto, el Consejo expresó la opinión de que se estimularía la inversión de capital en el Territorio si la Autoridad Administradora elaborara un plan general de desarrollo económico del Territorio, y pidió que se preparase dicho plan y se le presentara lo más pronto posible.

Posteriormente el Consejo manifestó la opinión de que las deficiencias económicas del Territorio y los problemas que se plantean en relación con el desarrollo económico se oponían seriamente a la suficiencia económica del futuro Estado independiente, y consideró esencial que se examinaran cuidadosamente todos los recursos y posibilidades económicas teniendo en cuenta las conclusiones y los resultados obtenidos por la Misión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. El Consejo instó a la Autoridad Administradora a que, como cuestión de alta prioridad, elaborara un plan económico general, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, especialmente por lo que respecta a las futuras necesidades del Territorio como Estado independiente, y pidió a la Autoridad Administradora que informara concretamente sobre el plan y su aplicación.

La Autoridad Administradora comunicó al Consejo que había comisionado a un destacado experto en asuntos financieros y económicos para que estudiara las posibilidades de desarrollo económico general. Sus recomendaciones y los datos que había reunido facilitarían considerablemente a la Administración la tarea de elaborar un plan. En el 14° período de sesiones del Consejo se presentó un plan para el desarrollo económico del Territorio. Sus principales objetivos son el desarrollo de la agricultura y la ganadería y la transformación gradual de la población nómada en sedentaria. En él se prevé particularmente el aumento de la producción de cereales y de las cosechas comerciales, la modernización de la agricultura y un mayor uso del riego, la construcción de depósitos para el almacenamiento de granos y un amplio programa de perforación de pozos y construcción de embalses. El plan prevé también medidas de fomento con respecto a las comunicaciones, el saneamiento urbano, las instalaciones hidráulicas y eléctricas, la industria, los oficios y el

comercio. El Instituto de Crédito Somali, que constituye parte integrante del plan, otorga préstamos a los agricultores y comerciantes somalis, así como a los que se dedican a la industria.

El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo que el plan de desarrollo económico se realizaría totalmente con los recursos disponibles, tanto de personal como financieros. Expresó que era deseable la asistencia de organismos internacionales para realizar otros trabajos de desarrollo económico no comprendidos en el plan, así como para aquéllos cuya amortización requiera más tiempo. Informó asimismo al Consejo que el Consejo Territorial había dado las más formales y categóricas seguridades de que las empresas extranjeras que realicen inversiones de capital en el Territorio serían respetadas y protegidas y recibirían un tratamiento igual al que se concede a las empresas indígenas, incluso cuando se modifique el *status* del Territorio. El Consejo Territorial pidió a los organismos internacionales que tomaran nota de dichas seguridades y las confirmaran.

En su 14° período de sesiones, sobre la base de una propuesta presentada por el representante de El Salvador,³⁰¹ el Consejo aprobó una resolución³⁰² por la cual invitaba a la Asamblea General a que, durante su noveno período de sesiones, pidiera al Secretario General que, en consulta con el Gobierno italiano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, considerara si el financiamiento del plan de desarrollo económico del Territorio se haría con asistencia del Banco o si esa asistencia la prestarían las Naciones Unidas por otros medios. Recomendó asimismo a la Autoridad Administradora que considerara las posibilidades de asociar el capital privado somali y el capital privado extranjero en empresas respecto de las cuales el Banco Internacional pudiera estar dispuesto a otorgar préstamos. e instó a la Autoridad Administradora a que diera la más amplia publicidad posible a sus planes de desarrollo económico, con objeto de suscitar interés público en el Territorio y en el extranjero y obtener la colaboración del público en su ejecución.

En su 14° período de sesiones el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota con satisfacción de que la Autoridad Administradora ha preparado un plan de desarrollo económico general en conformidad con una recomendación aprobada por el Consejo en su 12° período de sesiones, y tomando nota además de la seguridad dada en el sentido de que es propósito de la Autoridad Administradora ejecutar el plan con la mayor energía posible antes de 1960, insta a la Autoridad Administradora a que prosiga la ejecución del plan por todos los medios posibles y con el asesoramiento y la cooperación del Consejo Consultivo, el Consejo Territorial y las Misiones Visitadoras.

El Consejo, tomando nota con aprobación de los esfuerzos de la Autoridad Administradora para obtener asistencia técnica y económica de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como de la útil asistencia prestada hasta ahora por dichos organismos, expresa la esperanza de que ellos den la más favorable consideración a los nuevos pedidos de asistencia y de ayuda material de la Autoridad Administradora para llevar a cabo los planes de desarrollo, incluso los trabajos de desarrollo social e higiene pública, renunciando

³⁰¹ T/L.475.

³⁰² Resolución 1001 (XIV).

en lo posible a las contribuciones financieras del Territorio.

El Consejo, tomando nota con satisfacción del alto sentido de responsabilidad que indujo al Consejo Territorial a aprobar su resolución del 4 de enero de 1954, por la que se dan amplias seguridades de que las inversiones y las empresas privadas extranjeras recibirán en el Territorio igual trato que las empresas indígenas, tanto antes como después de que el Territorio alcance su independencia en 1960, expresa la esperanza de que el ambiente creado por dicha resolución estimule el aumento de las inversiones extranjeras en el Territorio.

El Consejo, tomando nota de que las inversiones de capital privado en el Territorio se elevan a 22.000.000 de somalos, insta a la Autoridad Administradora a que intensifique sus esfuerzos para alentar las inversiones privadas. El Consejo toma nota con beneplácito de que la Autoridad Administradora acogerá favorablemente la participación de otras instituciones financieras en el desarrollo del Territorio.

El Consejo, tomando nota con satisfacción del establecimiento del Instituto de Crédito Somali, de cuya Junta Ejecutiva la mitad de los miembros son somalis, expresa la esperanza de que se lo utilice en la mayor medida posible e insta a la Autoridad Administradora a que explique a la población somali las distintas formas de ayuda que presta dicha institución y el papel útil que puede desempeñar en el desarrollo general del Territorio.

HACIENDA PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN

Los ingresos y gastos totales para el ejercicio económico de 1952-1953 sumaron respectivamente 32.700.000 y 68.900.000 somalos, o sea que hubo un déficit de 36.200.000 somalos, equivalente al 52,5% de los gastos totales. Los ingresos y los gastos excedieron las previsiones prepuestarias en 3.600.000 y 2.800.000 somalos, respectivamente. En 1951-1952, los ingresos disminuyeron en 3.500.000 somalos y el déficit aumentó en 6.700.000 somalos.

Los gastos para el personal civil de todos los servicios administrativos alcanzaron a 38.700.000 somalos (33.400.000 somalos en 1951-1952 y 30.100.000 en 1950-1951).

Hasta ahora el ejercicio económico iba del 1° de julio al 30 de junio del año siguiente. A partir de 1955, coincidirá con el año civil; por consiguiente, el presupuesto para 1953-1954 se calcula para un período provisional de 18 meses, previéndose que los ingresos ascenderán a 50.000.000 de somalos y los gastos a 98.000.000.

Los gastos militares ascendieron a 28.600.000 somalos en 1952-1953, en comparación con 39.200.000 somalos en 1951-1952; los gastos previstos para 1953-1954 llegan a 21.000.000 de somalos. La Autoridad Administradora señaló que las fuerzas militares prestan importantes servicios civiles, sobre todo en materia de transporte aéreo y radiocomunicaciones, y estimó que el costo de estos servicios pasaba de 5.500.000 somalos.

El Consejo expresó anteriormente la opinión de que la única base sólida sobre la cual puede establecerse el Estado independiente es la de su suficiencia económica, y que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas graduales para tal fin. La Misión Visitadora de 1951 había estimado que la Autoridad Administradora debía estar en condiciones de reducir gradualmente el déficit presupuestario. El Consejo, basando su recomendación en una sugerencia hecha por la Misión, pidió a la Autoridad Administradora que realizara una investigación preliminar sobre la estructura de los servicios públicos que el

Territorio podría sostener con sus propios recursos, como preparación para la Misión Visitadora de 1954. La Autoridad Administradora comunicó posteriormente al Consejo que podían preverse las siguientes necesidades con respecto al personal y los gastos de personal en 1960:

	Personal Gastos en somalos	
1. Servicios técnicos y administrativos	4.679*	16.992.420
2. Policía	2.025	4.855.800
3. Fuerzas armadas	2.955	6.794.640
TOTAL		9.659 28.642.860
4. Técnicos extranjeros esenciales	250	9.500.000-14.000.000

* Esta cifra se basa en el número total de somalis empleados en 1953, que fué de 4.140, a los que se agregan 539 puestos ocupados actualmente por italianos que serán reemplazados por somalis.

La Autoridad Administradora señaló a la atención del Consejo el carácter un tanto arbitrario de estas cifras, debido a la dificultad de predecir, ya sea las necesidades exactas de personal, ya sea el nivel del desarrollo económico y de los ingresos públicos que podría existir hacia 1960. Se dió por sentado que el personal no excedería el número actual, que éste sería suficiente para las necesidades futuras y que por lo menos durante los primeros años de la independencia el Estado somali ha de requerir los servicios de determinado número de especialistas extranjeros. Dichas cifras no prevén personal consular o diplomático.

En su 13° período de sesiones, el Consejo examinó una petición en la que se llamaba la atención hacia las diferentes tasas de tributación en varias localidades y se pedía que se aplicaran tasas uniformes de tributación con respecto a los impuestos sobre mercados, chozas y tiendas.³⁰³ En sus observaciones acerca de esa petición, la Autoridad Administradora expresó que el régimen tributario se basa en el principio de clasificación de las tiendas y los mercados públicos en categorías según su importancia, su tamaño y el volumen de los negocios. A la mayor parte de los artículos vendidos en los mercados se les asigna una tributación máxima, y las administraciones municipales están autorizadas para aplicar los impuestos hasta el máximo, tomando en consideración las costumbres locales, las necesidades de los servicios públicos y la riqueza de la zona. En los mercados donde escasean ciertos productos básicos se aplican impuestos más reducidos.³⁰⁴

La Misión Visitadora de 1951 tomó nota de que debía utilizarse al máximo la capacidad de pago de impuestos del Territorio y, a este respecto, el Consejo señaló a la atención de la población y de la Autoridad Administradora la importancia de aumentar la contribución financiera de todos los sectores de la población para sufragar los gastos del Territorio. Se informó posteriormente al Consejo que se había iniciado el cobro de un impuesto sobre todas las tierras cultivadas en posesión de los indígenas; el impuesto oscila entre 2 y 12 somalos por *shamba*. En una petición examinada por el Consejo en su 14° período de sesiones se formularon objeciones al impuesto, expresándose que la población no podía soportarlo.³⁰⁵ En sus observaciones sobre esa petición la Autoridad Administradora expresó que ese impuesto se ideó

³⁰³ T/PET.11/368.

³⁰⁴ T/OBS.11/20/Add.1, sección 2. Respecto de las disposiciones adoptadas por el Consejo de Administración Fiduciaria sobre esta petición, véase la resolución 884 (XIII).

³⁰⁵ T/PET.11/388.

para que figuraran entre los contribuyentes muchos pequeños agricultores que de lo contrario no aportarían nada al fisco; que el impuesto era moderado y que todo el mundo estaba en condiciones de pagarlo,³⁰⁶ y, además, que el mismo había merecido la aprobación del Consejo Territorial.³⁰⁷ El representante especial de la Autoridad Administradora, en una declaración que formuló ante el Comité Permanente de Peticiones, señaló que en las circunstancias más desfavorables el agricultor pagaría un impuesto de dos somalos sobre cada 42 somalos de renta.

En su 14º período de sesiones el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota de que actualmente los ingresos anuales del Territorio son menos de la mitad de sus gastos; tomando nota además de que los gastos anuales en servicios administrativos, incluso del personal civil, policial y militar, son injustificadamente elevados en relación con los ingresos; comprendiendo la dificultad que tendrá el futuro Estado somali para soportar el déficit sin ayuda externa, insta a la Autoridad Administradora a que adopte las disposiciones necesarias para reducir el déficit presupuestario de que tenga que hacerse cargo el Estado independiente somali por todos los medios posibles, incluso mediante el aumento de la productividad del Territorio, la utilización máxima de su capacidad tributaria, la organización racional de la estructura administrativa y la substitución gradual de los italianos por somalis en los puestos administrativos.

El Consejo, recordando la recomendación que aprobó en su 11º período de sesiones por la cual señaló a la atención de la población del Territorio y de la Autoridad Administradora la importancia de aumentar la contribución financiera en todos los sectores de la población, para sufragar los gastos del Territorio, considera que dicha población podría contribuir en mayor medida a los ingresos e insta a los habitantes somalis a que colaboren con la Autoridad Administradora en el examen de las posibilidades de aumentar los ingresos fiscales.

COMERCIO

El comercio de productos en el año 1953 acusó un exceso de las importaciones sobre las exportaciones equivalente a 43.900.000 somalos. Las importaciones ascendieron a 78.600.000 somalos, cifra que representa un aumento considerable con respecto a 1952, año en que el valor de las importaciones fué de 105.000.000 de somalos. Las exportaciones, que llegaron a 34.700.000 somalos, también declinaron ya que en 1952 habían sumado 46.600.000 somalos. El déficit comercial se redujo en 14.500.000 somalos con respecto a 1952. Sin embargo, como en el año anterior, la Autoridad Administradora manifestó que las valuaciones de las exportaciones son muy inferiores a los valores reales y que, por consiguiente, el déficit real fué considerablemente menor.

Italia es la principal fuente de importaciones y contribuye con el 47,8% de su valor. Adén y Kenia contribuyen con un 20% cada una, aproximadamente. Del valor total de las exportaciones, un 70% se envía a Italia, en tanto que Adén, Kenia y Zanzíbar reciben el 11,9, el 3,8 y el 2,2% respectivamente.

Con objeto de reducir la balanza comercial desfavorable, la Autoridad Administradora expresó que estaba

tratando de alentar la producción de ciertos productos agrícolas, de orientar una cantidad cada vez mayor de exportaciones hacia las zonas del dólar y de la libra esterlina y de buscar nuevos mercados extranjeros. El número de somalis que participan en el comercio de exportación e importación aumentó de 68 en 1952 a 202 en 1953.

En una petición que el Consejo examinó en su 14º período de sesiones, se protestaba por el hecho de que, según se sostenía, un grupo de hombres de negocios italianos monopolizaban el comercio al por mayor del Territorio, y sólo se otorgaban a los somalis permisos de importación y licencias de exportación para Italia, donde, se agregaba, los precios eran exorbitantes.³⁰⁸ En sus observaciones sobre esa petición, la Autoridad Administradora manifestó que no menos de 203 somalis estaban autorizados para realizar ese comercio, y que en 1953 se habían concedido a los somalis 785 permisos de importación por un monto de 6.500.000 somalos aproximadamente. De esos permisos, sólo correspondían a Italia 136, por un valor de 1.300.000 somalos. Se otorgaron también otros tipos de permisos por un valor total de más de 4.000.000 de somalos para realizar intercambio comercial con los países vecinos. La Autoridad Administradora negó que existiera discriminación entre países con respecto al comercio, salvo en lo que se refiere a ciertas restricciones que podrían resultar de la escasez de divisas.³⁰⁹

Los mismos peticionarios se quejaron de que, mientras el costo de un quintal de azúcar producido en el Territorio era de 70 somalos y el del azúcar de 90 somalos, la Autoridad Administradora había aumentado el precio del azúcar de ambas procedencias a 210 somalos por quintal, y de que tanto la importación como la producción local de azúcar estaban monopolizadas por una firma italiana.³¹⁰ En sus observaciones la Autoridad Administradora expresó que en 1951 había fijado el precio del azúcar producido en el Territorio (186,90 somalos, incluidos los impuestos) y que bajo ese estímulo los productores locales habían ampliado sus instalaciones con objeto de satisfacer totalmente las necesidades del Territorio. Con ese fin invirtieron el equivalente de unos 2.000.000 de dólares en maquinaria. Estos planes fueron desbaratados cuando bajó el precio del azúcar importado; se aplicó un derecho adicional al azúcar importado con objeto de proteger el empleo de varios miles de somalis ocupados en la producción local de azúcar. No obstante, el derecho adicional dejaba un margen razonable de utilidades a los importadores. Durante el año 1953, se importaron unos 30.000 quintales. La Autoridad Administradora negó categóricamente que el azúcar estuviera monopolizado por una firma italiana. El derecho a importar partidas se ponía en venta en subasta pública y se otorgaba a los mejores postores, ninguno de los cuales era italiano.³¹¹

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota de que el valor de las importaciones asciende a más del doble del valor de las exportaciones, tomando nota asimismo de que el desarrollo del comercio exterior en una sola dirección presenta varias desventajas, recomienda a la Autoridad Administradora que, en el interés del futuro Estado somali, haga lo posible para reducir la balanza comercial desfavorable, adoptando para ello medidas tales como la

³⁰⁶ Para las *shambas* sin riego el impuesto oscila entre dos somalos (sobre las que no pasan de una hectárea) y seis somalos (sobre las que tienen más de cinco hectáreas de superficie). El impuesto para las *shambas* que cuentan con riego varía entre 3 y 12 somalos.

³⁰⁷ T/OBS.11/27, sección 3.

³⁰⁸ T/PET.11/382/Add.1.

³⁰⁹ T/OBS.11/26/Add.1.

³¹⁰ T/PET.11/382.

³¹¹ T/OBS.11/26.

liberalización de los conductos comerciales, reformas arancelarias, obtención de nuevos mercados y desarrollo de la industria local.

El Consejo, tomando nota del alto precio del azúcar, resultante de la aplicación de un elevado derecho de importación; tomando nota además del limitado poder adquisitivo del consumidor y de la importancia de aquel producto en el régimen alimenticio de la población somali; reconociendo que podría ser necesario proteger en cierto grado la industria local del azúcar, recomienda a la Autoridad Administradora que examine los medios de reducir el precio al por menor del azúcar, dando al mismo tiempo una protección razonable a la industria por los medios que juzgue convenientes.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Misión Visitadora de 1951 estimó que las condiciones de las carreteras presentaban un serio obstáculo para el desarrollo económico. Según el informe anual que se está examinando, un experto de la *Foreign Operations Administration* de los Estados Unidos hizo un estudio de la red caminera y recomendó la adopción de un programa mínimo de construcción y reparación de caminos, cuyo costo sería de 14.000.000 de somalos y que debería estar terminado en 1957. Entre las propuestas formuladas figuraba la recomendación de que mejorara el camino vital que une a Mogadiscio con Chisimaio a fin de asegurar el tránsito permanente; actualmente esa vía es inutilizable durante las estaciones de lluvias.

La misma dependencia hizo un estudio de las instalaciones portuarias y recomendó un programa mínimo de mejoramientos portuarios. Con respecto a dichos estudios sobre caminos y puertos, la Autoridad Administradora expresó que los programas mínimos recomendados se ejecutarían como parte del plan de desarrollo económico.

Se informó al Consejo que un buque de 600 toneladas de desplazamiento realizaría un servicio mensual de transporte que uniera a los puertos del Territorio con Adén y Mombasa.

En una de las peticiones a las que se hizo referencia anteriormente y que fué examinada en el 14° período de sesiones del Consejo, se protestaba contra el hecho de que todas las operaciones de transporte eran efectuadas por la Administración o por firmas italianas, lo cual dejaba sin trabajo a los contratistas de transporte.³¹² En sus observaciones acerca de esta petición, la Autoridad Administradora respondió que las nueve empresas de transporte automotor del Territorio comprenden tanto italianos como somalis y están agrupadas en un sindicato. Agregó que siempre había tratado de asegurar el mayor trabajo posible a todos los componentes del grupo y que sus indagaciones habían revelado que los pedidos se distribuían entre los miembros del sindicato sin que se hiciera distinción alguna entre somalis e italianos.³¹³

TENENCIA DE TIERRAS

Conforme al derecho consuetudinario, los derechos de los individuos sobre las tierras son limitados y derivan de la comunidad a la cual pertenecen. Según la legislación de la preguerra todavía vigente, la Autoridad Administradora no puede disponer de ninguna tierra ocupada por grupos indígenas.

La Autoridad Administradora ha manifestado que reconoce la necesidad de una nueva legislación agraria en conformidad con el artículo 14 del Acuerdo sobre

Administración Fiduciaria. Se aseguró al Consejo que en vista de la pequeña cantidad de tierra arable y de las características especiales de los arreglos para la Administración Fiduciaria del Territorio, la política de la Autoridad Administradora consiste en no otorgar nuevas concesiones de tierras hasta que se aprueben nuevas leyes agrarias inspiradas en los principios del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria.

El Consejo había encarecido a la Autoridad Administradora que adoptara todas las medidas necesarias para que se promulgara rápidamente dicha legislación. Posteriormente fué informado de que se había creado una comisión compuesta de italianos y somalis para que redactara una nueva legislación agraria. La comisión ha reunido hasta ahora mucho material de estudio.

En 1953, la Administración, después de obtener el consentimiento unánime del Consejo Territorial, autorizó la venta, por parte de indígenas, a tres agricultores italianos, de tierras cuya superficie suma un total de 698 hectáreas. La superficie de las tierras poseídas por personas no indígenas era la siguiente: de propiedad árabe, 1.500 hectáreas; de propiedad italiana, 73.540 hectáreas.

Diversos aspectos del problema de las tierras fueron ya objeto de peticiones examinadas anteriormente por el Consejo.

En su 14° período de sesiones el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, tomando nota de que se promulgará en 1954 una nueva legislación agraria que establecerá un sistema de registro de tierras, invita a la Autoridad Administradora a que en su próximo informe suministre información detallada al respecto.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

La riqueza principal del Territorio consiste en el ganado, principalmente camellos, ganado vacuno, ovejas y cabras. Por lo general la agricultura está limitada a las vecindades de los ríos, a algunas regiones costeras y a la región agrícola de tierra seca entre los ríos Juba y Uebi Scebeli. Los cultivos principales son: sorgo, maíz, frijoles, maní, bananas, ajonjolí, caña de azúcar y algodón. Las sequías frecuentes son características del Territorio y causa de muchos sufrimientos a los habitantes indígenas. A este respecto, puede recordarse que en el pasado el Consejo recomendó a la Autoridad Administradora que adoptara medidas para lograr la diversificación de los cultivos, la producción adecuada de cultivos básicos para la alimentación y el almacenamiento de alimentos.

La Autoridad Administradora informó al Consejo que como consecuencia de las lluvias escasas e irregulares, así como de la aparición de graves pestes ocasionadas por insectos, incluso langostas, la producción agrícola fué relativamente baja en comparación con el año 1952. Agregó que los 53.000 quintales de que disponía la Administración en virtud de su programa de almacenamiento permitieron evitar la especulación y mantener los precios de los cereales en un nivel normal.

El problema del desarrollo agrícola consistía en gran parte, según el informe, en lograr un mejor aprovechamiento de la tierra. En las zonas de agricultura de secano podría obtenerse una producción mayor mediante la utilización de animales de tiro, la construcción de nuevos pozos y cuencas colectoras para acelerar la sedentarización, el cultivo de granos que sirvan de forraje y reduzcan así el traslado del ganado a nuevos pastizales, la construcción de depósitos de almacenamiento a fin de que los excedentes que se obtengan

³¹² T/PET.11/382/Add.1.

³¹³ T/IBS.11/26/Add.1.

durante años favorables puedan utilizarse en épocas de malas cosechas, y la adopción de nuevas técnicas y mejores herramientas por los agricultores somalis. En las zonas de los ríos, el principal problema consiste en ampliar y mejorar la agricultura de regadío.

Durante el año que se examina, el principal esfuerzo de la Autoridad Administradora con respecto al desarrollo agrícola continuó concentrándose en las zonas fluviales y en la región de agricultura de secano comprendida entre los dos ríos. Se establecieron otras ocho cooperativas y dos consorcios de riego a lo largo del río Uebi Scebeli y tres consorcios de riego a lo largo del río Juba. La Administración contribuyó a dichos trabajos con más de 300.000 somalos, y suministró además el equipo mecánico necesario. Esto llevó el número de las cooperativas a un total de 24; la superficie cultivada es de 3.360 hectáreas. En la región de agricultura de secano, en la zona del Alto Juba, se establecieron cinco subdivisiones agrícolas dotadas de personal somali; en las dos explotaciones agrícolas modelo se continuaron los trabajos experimentales y de demostración práctica; se distribuyó equipo y se construyeron dos embalses y dos silos para el almacenamiento de granos en Baidoa. La Autoridad Administradora hizo saber también al Consejo que se realizaban trabajos en materia de selección de semillas y ensayo de nuevas variedades.

Con respecto al ganado, la Misión Visitadora de 1951 subrayó la necesidad de establecer una industria ganadera adecuada y la Autoridad Administradora informó posteriormente al Consejo sobre las medidas que se habían adoptado para desarrollar la industria mejorando la calidad de los cueros y del *ghee* (mantequilla líquida de leche de búfalo), así como los métodos zootécnicos, y haciendo un uso más eficaz de los pastos mediante la construcción de nuevos pozos.

El número de cabezas de ganado vacunado contra varias enfermedades se elevó a 152.954 (había sido de 125.291 el año anterior).

En su 14º período de sesiones el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo toma nota con interés de las medidas que la Autoridad Administradora, dentro del plan de desarrollo económico, ha tomado a fin de proporcionar agua y pastos para el ganado, e insta a la Autoridad Administradora a que intensifique sus esfuerzos para desarrollar una industria ganadera en el Territorio y, en particular, para alentar la exportación de ganado, establecer una industria de transformación de la carne y continuar divulgando mejores técnicas de industria lechera y de preparación de cueros y pieles, como se ha hecho por medio de películas y otros medios.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El problema de asegurar un abastecimiento de agua adecuado es uno de los más difíciles que afronta el Territorio, y tanto la Misión Visitadora de 1951 como el Consejo de Administración Fiduciaria alentaron a la Autoridad Administradora para que continuara sus esfuerzos en su programa de mejoramiento del suministro de agua e instaron a la población somali que prestara toda su colaboración a la Autoridad Administradora.

La Autoridad Administradora informó que se habían realizado apreciables progresos en 1953, sobre todo con respecto a la perforación de pozos. Se estaban haciendo todos los esfuerzos posibles para asegurar la distribu-

ción adecuada de los nuevos pozos en las regiones ganaderas, con objeto de que disminuyeran los conflictos entre las tribus y de que se dispusiera de nuevos campos de pastoreo hasta ese momento inútiles por falta de agua. Se prestaba también atención a la cuestión de abastecer adecuadamente a las comunidades asentadas. Se construyeron asimismo embalses, uno de los cuales tiene una capacidad de 500.000 metros cúbicos y puede abastecer a 60.000 cabezas de ganado durante la estación de sequía. Con la asistencia técnica y financiera de la *Foreign Operations Administration* de los Estados Unidos, la Autoridad Administradora ha iniciado la perforación de 150 pozos con un costo de 4.200.000 somalos; la mitad de esa suma será aportada por la mencionada *Foreign Operations Administration*.

En su 14º período de sesiones el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo toma nota con satisfacción del progreso realizado por la Autoridad Administradora en su programa para asegurar un abastecimiento de agua adecuado mediante la perforación de pozos y la construcción de embalses y canales de riego, e insta a la Autoridad Administradora a que continúe concediendo alta prioridad a ese programa en vista de su gran importancia tanto para el desarrollo económico del Territorio como para resolver los diversos problemas sociales derivados del carácter nómada de gran parte de la población.

MINERÍA

En 1952 la Autoridad Administradora otorgó concesiones para la exploración y desarrollo de los recursos petrolíferos a la Sinclair Somal Corporation y a la Sociedad Minera Somala, en zonas de una superficie de 200.000 y 28.000 kilómetros cuadrados, respectivamente. Estos acuerdos preveían un período de nueve años para la exploración y de 40 años para la producción. El primer pozo deberá estar terminado dentro de cuatro años, y se harán anualmente algunos gastos mínimos en el Territorio. Después del descubrimiento del petróleo, las compañías pagarán una cuota anual de arrendamiento que disminuirá a partir de 100.000 somalos, así como un estipendio anual de 100 somalos por kilómetro cuadrado dentro de la zona de producción. Las regalías de los primeros cinco años de producción serán del 12½% del petróleo producido, reservado y colocado en servicios de almacenamiento por las compañías, y después del 15%. Al final de 10 años se revisarán las regalías y, siempre que el petróleo sea comparable en calidad y cantidad al que se produce en el Oriente Medio, podrán fijarse a la tasa corriente en dicha región.

La Autoridad Administradora informó al Consejo que ambas compañías realizaron explotaciones geofísicas en 1953.

En su 14º período de sesiones el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota de que se han otorgado concesiones petroleras a dos compañías con arreglo a la ley minera aprobada por el Consejo Territorial, expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora obtenga asesoramiento del Consejo Consultivo respecto de la ley minera en general y de los términos de los convenios petroleros, e invita a la Autoridad Administradora a que presente un informe sobre la marcha de los trabajos en las exploraciones para localizar yacimientos petrolíferos.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente y observaciones del representante especial de la Autoridad Administradora

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Bélgica expresó que el Consejo de Administración Fiduciaria debía tomar nota del voto del Consejo Territorial sobre la propuesta relativa a inversiones extranjeras. El Consejo debía tomar nota de la declaración, expresar su satisfacción y quizás sugerir a la Asamblea General que comunicara a los representantes de la población somali su propósito de fomentar las inversiones extranjeras en un territorio que necesita tan imperiosamente capitales extranjeros.

El representante de Francia expresó que había escuchado con satisfacción la importante declaración de los peticionarios, que eran vicepresidentes del Consejo Territorial, relativa al compromiso asumido por la Asamblea Somali de alentar y respetar las inversiones extranjeras en su país. Se adhería a la propuesta del representante de Bélgica tendiente a que el Consejo tomara nota oficialmente de ello. Sin embargo, ése sólo era un aspecto del problema, puesto que debía haber también perspectivas de utilidades remunerativas; dichas perspectivas no eran favorables por el momento. Sólo la realización de un plan de importantes obras podría brindar posibilidades. La Autoridad Administradora tenía razón al querer evitar que el futuro Estado quede comprometido a emprender la aplicación de un número excesivo de ambiciosos programas de desarrollo económico, pero las Naciones Unidas eran responsables de la gran aventura en que se ha embarcado el pueblo somali, y debía hacerse en favor del Territorio mucho más de lo realizado hasta el momento. No deseaba restar importancia al papel de los expertos del programa de asistencia técnica, pero estimaba que eran mucho menos necesarios que el otorgamiento de cuantiosos créditos.

El representante de Francia aprobaba con entusiasmo el espíritu del proyecto de resolución presentado por El Salvador. Sin embargo, creía que no era lo suficientemente amplio puesto que sólo se dirigía a la Autoridad Administradora. El Consejo también debía tratar de llegar directamente a los órganos de las Naciones Unidas que distribuyen los medios necesarios.

El representante del Reino Unido estaba seguro de que el Consejo desearía acoger favorablemente la moción unánime del Consejo Territorial relativa a las inversiones privadas extranjeras y aprobada a principios de año. No obstante, aun era demasiado temprano para evaluar los resultados que dichas garantías podrían tener en la corriente de capital privado hacia el Territorio, pero el representante del Reino Unido abrigaba la esperanza de que esa acertada iniciativa de parte de los representantes del pueblo somali tendría su recompensa.

El representante de la India expresó que en el campo económico el grado de progreso no era tampoco muy alentador y que deseaba que se siguiera una política más decidida y vigorosa. El Consejo no había tenido tiempo de analizar en detalle el plan quinquenal de desarrollo económico; no obstante, aun un examen superficial del plan revelaba la existencia de problemas no resueltos. No se advertía claramente cómo funcionaría cada sector de la economía, qué prioridades se proponían respecto de los distintos proyectos y de dónde procedería el dinero, el equipo, el personal técnico, etc. En la actuali-

dad, el plan sólo existía en el papel. Era indispensable estudiarlo y analizarlo cuidadosamente. Sugirió que se remitiera el plan a la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para que lo examinara más detenidamente. Se le podría remitir también con el mismo objeto al Consejo Consultivo y al Consejo Territorial.

Añadió el representante de la India que le alegraba comprobar que el Consejo Territorial había anunciado garantías para la protección de las inversiones extranjeras. Esperaba que ello habría de estimular el flujo de capital, y que se solicitaría un préstamo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Observaba con preocupación que no se había adoptado todavía ninguna disposición a ese respecto, por razones que no parecían muy convincentes.

La delegación de la India simpatizaba plenamente con el espíritu de las propuestas contenidas en el proyecto de resolución presentado por El Salvador, y ciertamente apoyaría en general dicho proyecto.

El representante de Siria declaró que al aceptar los términos del Acuerdo de Administración Fiduciaria, la Autoridad Administradora había admitido también la responsabilidad de realizar programas de desarrollo económico que podrían requerir la inversión de sumas relativamente elevadas. Por lo menos, debía determinar las zonas en que podrían hacerse con provecho inversiones con fines de desarrollo económico y social. En otros territorios en fideicomiso se elaboró un presupuesto aparte para el desarrollo económico y se invirtieron grandes sumas. Estimaba que aprovecharía al Territorio la más pronta evaluación posible de la capacidad de desarrollo, con objeto de que tanto el pueblo somali como la Autoridad Administradora y las Naciones Unidas pudieran saber dónde debía concentrarse el esfuerzo máximo.

El representante de El Salvador dijo que se había hecho un esfuerzo valioso y positivo y que el Consejo de Administración Fiduciaria no podía dejar de reconocer lo realizado. Puesto que en el Territorio todo dependía de los escasos recursos económicos, el único camino que al Consejo quedaba era buscar soluciones a los múltiples y complejos problemas del Territorio. El equilibrio del presupuesto, el aumento de los fondos públicos y el mejoramiento de las comunicaciones eran cuestiones vinculadas con el desarrollo de los recursos económicos del Territorio.

El representante de Haití declaró que las Naciones Unidas no debían permanecer en actitud pasiva ante las dificultades económicas con que tropezaba el Territorio. La primera responsabilidad incumbía a la Autoridad Administradora, pero ésta se mostraba todavía algo indecisa con respecto a dichos planes. Necesitábase la asistencia económica de las Naciones Unidas en la mayor medida posible, pero ello no bastaba, pues aparte del asesoramiento, los planes y los programas, se requerían medios financieros para ejecutar esos planes y programas. El Consejo Territorial tenía conciencia de las dificultades actuales y futuras, pero lo único que podía hacer en esos momentos era garantizar que las inversiones internacionales y extranjeras serían respetadas y protegidas. Su delegación entendía que no debían perjudicarse de manera alguna los intereses de la población y que la Autoridad Administradora, de realizarse esas inversiones durante el período restante hasta 1960, no debía hacer pesar sobre el Territorio compromisos que quizás estorbaran seriamente su desarrollo económico futuro. No había contradicción entre

el llamamiento que debía dirigirse a los inversionistas extranjeros y la prudencia que cabía observar.

Su delegación convenía en principio con el proyecto de resolución de El Salvador, que preveía la ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento respecto de los trabajos a largo plazo que se realizaran en el Territorio. Sin embargo, había necesidades inmediatas en materia de alimentos, higiene, sanidad y asistencia social que requerían sumas de dinero superiores a aquellas de que disponían la OMS o la FAO.

El representante de Australia expresó confianza en que la Autoridad Administradora alentaría, siempre que ello fuera posible y teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la formación de la cooperativa de Mogadiscio, el desarrollo de instituciones de esa naturaleza en otras partes del país, con objeto de que las industrias pequeñas pudieran contribuir en lo futuro a la formación de la economía social. El Consejo debía también tomar nota con satisfacción de la formación del Instituto de Crédito Somali, que sin duda contribuiría mucho al desarrollo de las actividades económicas.

El representante de China manifestó que toda la información proporcionada por el representante especial parecía demostrar no sólo que los trabajos esenciales en el campo económico proseguían ininterrumpidamente, sino también que la Administración comprendía plenamente los problemas concretos que abordaba. Estaba convencido de que la necesidad de ayuda exterior constituía la verdadera esencia del problema económico que quedaba por resolver en Somalia. Por esa razón, estimaba que el Consejo debía reconocer el acierto de la delegación de El Salvador al presentar al Consejo su proyecto de resolución que su delegación apoyaría gustosamente.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó que la situación económica del Territorio se caracterizaba, por una parte, por el atraso de la economía de la población indígena, y, por otra parte, por el hecho de que compañías norteamericanas, inglesas e italianas penetraban en la economía del Territorio y afianzaban su dominio sobre ella.

El representante especial de la Autoridad Administradora aseguró al Consejo que era propósito de la misma poner en práctica totalmente el plan presentado por el Administrador entre ese momento y 1960. El financiamiento se había calculado de manera tal que se ajustara al aporte anual que hacía Italia al Territorio, y todos los planes de desarrollo económico se habían elaborado con arreglo al criterio sugerido por las misiones de asistencia técnica que visitaron Somalia en los últimos años. La posibilidad de emprender otros planes de desarrollo de mayor envergadura, que requerirían cuantiosas inversiones por un largo plazo que iría más allá de 1960, dependía de las inversiones extranjeras. La Autoridad Administradora abrigaba la esperanza de que la propuesta presentada al Consejo de Administración Fiduciaria por El Salvador, en la forma final en que el Consejo juzgara conveniente aprobarla, proporcionaría al Territorio la ayuda financiera necesaria para ejecutar los mencionados planes de desarrollo a largo plazo.

HACIENDA PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN

El representante de Bélgica observó que la nueva forma de presentación del presupuesto, en la que se hace una descomposición de los gastos, constituía una gran mejora con respecto a la antigua forma de presentar los gastos en el informe. Los gastos de personal y

servicios se presentaban como rubros independientes, y el Consejo debía expresar su satisfacción por ese cambio.

El representante de la India señaló que la característica saliente y, por cierto, muy intranquilizadora, de la situación económica, era la prolongación de un déficit presupuestario al parecer crónico. Durante el ejercicio económico 1952-1953 se registró un déficit real de 36.200.000 somalos, que representa el 52,5% de los gastos totales. En lugar de aumentar, los ingresos declinaron en realidad en 3.500.000 somalos. Estas cifras no incluían los considerables gastos militares, que eran sufragados con fondos procedentes de fuentes externas. Tal situación parecía, en verdad, muy alarmante.

El mismo representante agregó que la estructura administrativa representaba no menos del 55% de los gastos totales y expresó la esperanza de que al aumentar la proporción de indígenas en los servicios administrativos pudiera reducirse esa sangría del erario público y gastarse una suma mayor en la prestación de servicios sociales y en la enseñanza, así como en la intensificación de otras actividades propias a la construcción de un país.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que el mejor índice de la verdadera política de la Autoridad Administradora era el presupuesto del Territorio, que revelaba que las consignaciones de fondos para la policía eran excesivamente elevadas y excedían las destinadas a la higiene y la enseñanza. La consignación de fondos para la policía se había triplicado desde el año anterior y la Autoridad Administradora no había dado una explicación satisfactoria de ese aumento, ni del hecho de que el total de los créditos para las fuerzas armadas, la policía, los órganos judiciales y las cárceles constituían alrededor del 40% del presupuesto del Territorio en 1953-1954, al paso que las consignaciones de fondos para satisfacer las necesidades económicas y los servicios eran menores que las del año anterior. Añadió que existía en el Territorio un régimen tributario poco equitativo en virtud del cual se aplicaban los impuestos sin tener en cuenta la capacidad de pago de las personas. En su opinión, el Consejo debía señalar a la atención de la Autoridad Administradora la necesidad de reemplazar el actual régimen tributario por un impuesto progresivo sobre la renta, o por lo menos por un régimen de impuesto sobre la renta que tuviera en cuenta la capacidad de pago y la situación de los habitantes en lo que respectaba a la propiedad.

COMERCIO

El representante de la India observó que el valor de las importaciones ascendió a más del doble del de las exportaciones. Las importaciones procedentes de Italia representaban alrededor del 50% del volumen total, y las exportaciones a Italia el 75%. No sólo era muy adversa la balanza comercial, sino que el desarrollo del comercio en una sola dirección podía presentar graves desventajas. Debían concederse facilidades para la liberalización del intercambio, de manera que los productos somalis tuvieran acceso a los mercados más favorables. En cuanto a las importaciones, el 25% estaba constituido por alimentos y el 30% por artículos manufacturados, principalmente textiles. Cabía admitir la posibilidad de que el país se bastara a sí mismo en materia de alimentos y vestidos. En general, debían hacerse mayores esfuerzos para aumentar la producción, ampliar los mercados de exportación y desarrollar la eco-

nomía del Territorio. El precio inflado del azúcar, debido en gran parte al elevado derecho de importación, había dado lugar a numerosas protestas en el Territorio. El azúcar constituía un elemento básico del régimen alimenticio de la población, que bien se sabía padecía desnutrición. No parecía muy acertado o equitativo que la protección de la industria local del azúcar de propiedad extranjera impusiera una carga financiera tan pesada al consumidor empobrecido. Debía ser posible conciliar los intereses del consumidor con los de la industria, de manera que el precio pagado por el consumidor guardara cierta relación con el precio mundial del azúcar.

El representante de Siria opinó que la Administración debía levantar todas las restricciones impuestas al comercio internacional, si es que existían restricciones de esa naturaleza. Debía permitirse que se efectuaran importaciones de las fuentes que ofrecieran la mejor calidad y los precios más convenientes. Ningún Estado debía depender de una sola fuente, ya se tratase de las exportaciones o de las importaciones.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que todo el comercio exterior y la mayor parte del comercio interno estaba en manos de grandes firmas extranjeras.

El representante especial de la Autoridad Administradora, al referirse a la acusación de que el comercio exterior, excepto con Italia, se reducía al mínimo, expresó que el Territorio tenía un déficit anual de unos 2.000.000 de libras esterlinas con la zona de la libra, déficit que fué enjugado con un aporte del Gobierno italiano a pesar de que la propia Italia tenía un déficit con respecto a la zona de la libra.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El representante de Siria observó que la cuestión de las comunicaciones del Territorio requería la más atenta consideración por parte del Consejo. Instó a la Administración a que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para iniciar la construcción y el mejoramiento de caminos y modernizar los puertos, a fin de facilitar considerablemente las importaciones y las exportaciones.

TENENCIA DE TIERRAS

El representante de China expresó que, según la información contenida en el informe anual, no parecía haberse terminado la redacción de la legislación agraria. Como esa medida se refería a una actividad económica de gran importancia, su delegación deseaba que se llevara a cabo lo antes posible.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que los europeos ocupaban 73.000 hectáreas de las tierras más ricas a lo largo de los ríos y cultivaban en esas tierras productos para la exportación. Las explotaciones agrarias europeas diferían radicalmente de las indígenas, puesto que tenían la posibilidad de utilizar maquinaria y métodos agrícolas modernos y hacían uso de los planes de riego. Las tierras de los habitantes indígenas no debían traspasarse a otros, ya fuere en forma de concesiones o por arrendamiento, y la Autoridad Administradora debía tomar medidas para evitar la enajenación de las tierras de los habitantes indígenas.

El representante especial de la Autoridad Administradora aseguró al representante de China que la preparación de la legislación agraria estaba muy adelantada. La ley por la que se establecería un registro de tierras estaría pronta antes de un año.

El representante del Reino Unido tomó nota con satisfacción de los planes para el aumento de la producción de cereales, azúcar y textiles, y de los importantes programas de riego destinados a proporcionar un medio de vida estable a unos 200.000 agricultores. Ya se estaban realizando los trabajos paralelos de perforación de pozos, cuyo objeto era ayudar a una gran parte de la población, y eran alentadores los primeros resultados obtenidos. Veía con gran interés los planes de la Autoridad Administradora para el desarrollo progresivo de la industria ganadera, que con el tiempo habría de constituir una de las principales fuentes de riqueza natural del Territorio.

El representante de la India manifestó que la superficie cultivable, de ser aprovechada convenientemente, debía bastar no sólo para la manutención de la población actual, sino para producir una cantidad exportable suficiente. Las disposiciones adoptadas hasta entonces habían sido acertadas, pero sólo constituían un comienzo. La riqueza ganadera era considerable y no parecía que se hubiesen adoptado suficientes medidas para fomentar la cría de ganado y utilizar esa vasta riqueza animal. Debían adoptarse disposiciones eficaces para crear una industria del cuero y de la curtiembre. Debía también explorarse la posibilidad de establecer una industria frigorífica. Aunque la región producía grandes cantidades de algodón, en su mayor parte para la exportación, parecía existir poca o ninguna producción indígena de telas. El ideal que debía perseguirse era evidentemente el de poseer una industria textil local, pero si había dificultades para obtener el capital necesario, podía hacerse por lo menos un comienzo creando una industria de tejido con telares a mano. Ello proporcionaría a la población una nueva fuente de ingresos que le era muy necesaria, sobre todo para los períodos de disminución de los trabajos agrícolas. Asimismo, los nómadas podrían tejer alfombras, frazadas, etc., con la lana de los animales que poseían. El representante de la India esperaba que se prestaría alguna atención a esta forma de desarrollo, que proporcionaría una nueva fuente de ingresos a la población y reduciría al mismo tiempo su dependencia de las importaciones.

El representante de Siria manifestó que su delegación estimaba que los problemas del sector nómada de la población merecían mucha más atención de la que se les había prestado hasta ahora. A este respecto, el programa de la Autoridad Administradora se basaba casi exclusivamente en el desarrollo del abastecimiento de agua y los pastos. Dudaba de que esas medidas proporcionaran por sí mismas algo más que una solución transitoria del problema. La solución final dependería de un equilibrio entre la población y los recursos, y con ese fin debían realizarse grandes esfuerzos para permitir que esa población explotara con mayor eficacia los recursos de que disponía. Lo esencial era obtener que vendiera regularmente su ganado, mediante el establecimiento de una industria de la carne. La Autoridad Administradora debía proseguir sus esfuerzos para construir, preferentemente en escala modesta, instalaciones para la elaboración de la carne, y si fuere necesario debía concederse un subsidio a la industria durante el período inicial. Junto con esa medida, se debía hacer lo posible por ofrecer alicientes a fin de que se comercializara el ganado, y educar a la población a ese respecto. Podría lograrse esa finalidad si en la tarea se concentraran todos los recursos en el terreno político, en el económico y en el de la enseñanza.

El representante de Australia opinó que si bien se habían realizado ciertos progresos en el desarrollo de las cooperativas, la Autoridad Administradora convenía en que debía explorarse a fondo la posibilidad de un mayor desarrollo de esa forma de esfuerzo colectivo y ofrecerse estímulos en todos los casos en que pareciera existir en la población un deseo real de formar cooperativas.

El representante especial de la Autoridad Administradora expresó que no cabía temer que Somalia tuviera un exceso de ganado, prescindiendo del problema de la protección de las tierras de pastoreo, que se tuvo debidamente en cuenta al elaborar los planes de perforación de pozos. Se esperaba que la desaparición de la amenaza del hambre induciría automáticamente a los poseedores de ganado a vender los animales sobrantes, alimentando así una industria frigorífica. Con respecto a las cooperativas, mencionadas por el representante de Australia, se las seguiría alentando cuando se tuviera la impresión de que se constituía entre los agricultores indígenas la necesaria conciencia del esfuerzo común, ya fuera espontáneamente o mediante campañas educativas. Al Instituto de Crédito Somali, cuya junta ejecutiva está compuesta de tres somalis y tres italianos, iba a corresponder un papel importante en esa materia, así como en el campo de las industrias domésticas independientes y de la agricultura en general.

MINERÍA

El representante de Bélgica expresó su satisfacción por el hecho de que si se hallare petróleo se revisarían las regalías, como lo preveían los acuerdos petroleros.

El representante de Siria, al referirse a las concesiones petroleras, recordó que en el 12° período de sesiones el representante de su país sugirió que el Consejo recomendará a la Autoridad Administradora la revisión de las concesiones petroleras para proteger los intereses del futuro Estado somali. Se había hecho referencia entonces al inciso b) del artículo 8 del Acuerdo de Administración Fiduciaria, que disponía que la Autoridad Administradora consultaría al Consejo Consultivo con respecto a los planes de "desarrollo económico y financiero". No sabía con certeza qué ocurrió cuando se otorgaron las dos concesiones petroleras. ¿Fue informado el Consejo Consultivo? ¿Dió él su parecer? Debía aclararse eso, para que el Consejo pudiera formular la debida recomendación al respecto.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se refirió a la concesión otorgada en 1952 a la Sinclair Somal Corporation y afirmó que como resultado de ella toda la riqueza petrolera de Somalia había sido vendida anticipadamente por un período de 40 años, sin siquiera consultar los deseos de la población indígena. Observó asimismo que otras compañías participaban en la apropiación de la riqueza natural de Somalia y expresó que la Autoridad Administradora debía adoptar medidas para desarrollar la economía nacional del Territorio, en vez de limitarse a invocar el pretexto de la escasez de recursos y a pedir la ayuda del capital extranjero y de compañías extranjeras.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

Los efectos retardativos que ejercen el bajo nivel de vida y la elevada incidencia de las enfermedades sobre

el desarrollo social del Territorio, fueron observados por el Consejo de Administración Fiduciaria y la Misión Visitadora de 1951. El Consejo subrayó la necesidad de formular planes específicos en relación con el bienestar social, la legislación obrera y los servicios sanitarios, y pidió que se hiciera un estudio completo del problema del nomadismo y que se dieran datos sobre sus resultados en el informe anual.

La Autoridad Administradora comunicó que se había aprobado un programa urbanístico para Uanle Uen. Con arreglo a este programa, se construyeron edificios públicos, se mejoraron las carreteras, se perforaron pozos y se instaló un sistema de alumbrado eléctrico, con un costo total de 155.600 somalos.

NIVEL DE VIDA

La Autoridad Administradora informó al Consejo que a pesar de haberse desencadenado una grave plaga de langostas, en la mayor parte de los distritos las cosechas de 1953 fueron satisfactorias en cuanto se refería al sorgo y el maíz, alimentos básicos.

Los datos sobre costo de vida reunidos en 1953 respecto de una familia somali típica de cinco personas, revelan un descenso de 10%, aproximadamente, en el costo de los productos alimenticios, un aumento de más del 3% en el costo del vestido y una disminución total de cerca del 8% en el costo de vida entre diciembre de 1952 y diciembre de 1953.

INMIGRACIÓN

Se había informado anteriormente al Consejo que la admisión de inmigrantes, incluso de ciudadanos italianos, se basaba en su capacidad para contribuir provechosamente al desarrollo económico del Territorio. A este respecto, la Misión Visitadora de 1951 había expresado dudas sobre la conveniencia de alentar más aún la colonización agrícola por europeos. De un total de 314 personas que recibieron permisos de inmigración durante el año 1953, 189 eran italianos, 93 árabes y 27 indios o pakistanos.

PRENSA Y RADIO

La Administración sigue publicando el periódico diario *Il Corriere della Somalia*. La tirada diaria es de 2.500 ejemplares y se calcula que dos tercios de los lectores son somalis. En 1953 se fundó un nuevo diario, *Il Popolo della Somalia*, en tanto que *Somalia Nuova*, publicación que apareció en 1952, dejó de salir al finalizar el año.

Desde Mogadiscio se transmiten diariamente programas de radiodifusión, tanto en idioma somali como en italiano. Los programas en idioma somali están enteramente a cargo de somalis. En 23 comunidades se han instalado para uso del público aparatos receptores, y su número aumentó en nueve durante 1953. Se calcula que 15.000 personas escuchan esas transmisiones.

El Consejo, en su 14° período de sesiones, aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, tomando nota de las medidas adoptadas hasta ahora por la Autoridad Administradora en materia de radiodifusión; considerando que existe todavía la necesidad de un programa de información más amplio y eficaz, insta a la Autoridad Administradora a que expanda considerablemente los servicios radiotelefónicos y recomienda que los programas observen una íntima coordinación con todos los programas de desarrollo.

La Misión Visitadora de 1951 había señalado la necesidad de promulgar una legislación especial para la protección de las trabajadoras, y el Consejo expresó la esperanza de que en breve se formularían y entrarían en vigor los reglamentos previstos por la Autoridad Administradora para la protección de las mujeres y los niños que trabajan. Ulteriormente la Autoridad Administradora comunicó al Consejo que, con arreglo a la legislación vigente, las mujeres trabajadoras recibían las mismas prestaciones y protección que se concede a los hombres, y que la legislación especial para la protección de las mujeres trabajadoras fué aprobada por los órganos consultivos y promulgada.

El Consejo, en su 14º período de sesiones, aprobó la siguiente conclusión y recomendación:

El Consejo expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora, de acuerdo con la población y por medio de la educación y la persuasión, prepare el camino para otorgar, en un futuro próximo, el derecho a voto a las mujeres adultas, y exhorta a la población a que colabore con la Autoridad Administradora en esta materia.

CONDICIONES DEL TRABAJO

Una misión de la OIT estudió las condiciones del trabajo en el Territorio y algunas cuestiones conexas. La Autoridad Administradora está preparando una legislación general del trabajo cuyas diversas secciones serán aprobadas sucesivamente; se han dado los primeros pasos para la institución de escalas de salarios, de la jornada de trabajo de ocho horas, del seguro obligatorio contra accidentes del trabajo, y de inspecciones y oficinas del trabajo, y para reglamentar el trabajo de los niños.

El Consejo, en su 14º período de sesiones, aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, tomando nota de la existencia de desempleo en algunas regiones, pide a la Autoridad Administradora que intensifique sus esfuerzos para mitigar la situación aumentando los incentivos del empleo regular y estabilizando la mano de obra por otros métodos, y expresa la esperanza de que la aplicación del plan de desarrollo económico contribuya a resolver este problema.

El Consejo invita a la Autoridad Administradora a que solicite asesoramiento al Consejo Consultivo sobre el asunto de la legislación en materia de salarios, contratos de trabajo y sindicatos, y a que continúe consultando a la OIT sobre estas materias y otras con ellas relacionadas.

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS

El Consejo ya ha puesto de relieve los efectos negativos de la mala salud sobre los progresos sociales y económicos. La Misión Visitadora de 1951 también señaló anteriormente a la atención del Consejo la necesidad de adoptar medidas eficaces en materia de sanidad.

Según el informe que se examina, hay en el Territorio 66 médicos en ejercicio (en comparación con 54 en 1952), de los cuales sólo cuatro prestan servicios en las fuerzas militares. Nueve son cirujanos militares. Hay además, otros nueve, incluyendo a los que atienden privadamente y a los que están al servicio de la Cassa d'Assicurazione Sociale. Un somali realiza estudios de medicina en Roma por cuenta de la Administración del Territorio.

Como en 1952, hay tres hospitales generales o principales en Mogadiscio, y cinco hospitales regionales y dos secundarios en otras partes del Territorio. El número de enfermerías es de 18, o sea cuatro más que en 1952. Cada una tiene de seis a 20 camas, y 12 de ellas están dirigidas por médicos en ejercicio calificados. El número total de dispensarios ascendía a 109 (99 en 1951). El número de camas aumentó aproximadamente en 100 durante 1953, hasta alcanzar un número total cercano a los 1.600, o sea una cama por cada 750 habitantes.

Durante el año que se examina se obtuvieron nuevos equipos de radiología y otras ramas de la actividad médica, y se construyeron cuatro enfermerías, nueve dispensarios, dos dispensarios generales, un dispensario antituberculoso y un laboratorio farmacéutico para la preparación de medicinas. La Autoridad Administradora informó al Consejo que era posible prestar asistencia médica adecuada con el número existente de hospitales, enfermerías y dispensarios, y que no era necesario aumentar su número, pero que aun así procuraría mejorar los servicios existentes.

Los gastos de servicios médicos y sanitarios ascendían aproximadamente a 10.000.000 de somalos, suma que representaba más o menos el 14% de los gastos totales. La Autoridad Administradora informó al Consejo que las responsabilidades que debía afrontar en materia de higiene pública eran vastas y que en vista de lo limitado de los recursos financieros disponibles se habían trazado planes y programas de desarrollo específicos y restringidos, en vez de proyectos generales. Figuran entre estos programas los siguientes: producción y distribución de medicinas, mejoramiento de la calidad del personal, ampliación de los servicios de radiología y campañas contra la malaria, la tuberculosis, el tracoma, las enfermedades venéreas y la desnutrición.

Según el informe anual, la Autoridad Administradora no tuvo éxito en sus esfuerzos por lograr la asistencia de los organismos especializados de las Naciones Unidas para obtener equipo y material, especialmente con miras a las campañas contra la malaria, la tuberculosis y la desnutrición. Al respecto, debe observarse que la Misión Visitadora de 1951 había señalado a la atención del Consejo las condiciones de desnutrición crónica y de lenta inanición y, ulteriormente, que el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora se esforzara por obtener la asistencia y el asesoramiento de los organismos internacionales para el estudio y la solución de este problema. En su 12º período de sesiones, se informó al Consejo que se había pedido la asistencia de la FAO y que el programa previsto se efectuaría durante un período mínimo de cuatro o cinco años.

La campaña contra la tuberculosis, enfermedad relativamente corriente en el Territorio, se inició en 1953 con la creación de un dispensario especial para el diagnóstico de la enfermedad; en un período de cinco meses fueron examinadas 2.827 personas. Fuentes privadas contribuyeron con 50.000 somalos para la distribución de alimentos a las personas expuestas a la tuberculosis. Se inició la vacunación antituberculosa, y el empleo de los antibióticos y la quimioterapia aumentó aproximadamente en un 20%.

De conformidad con la legislación promulgada durante el año que se examina, la tarifa aplicada es de medio somalo diario para los pacientes externos y de un somalo diario para los pacientes hospitalizados. Las

personas indigentes están exentas del pago de derechos, y todos los tratamientos de enfermedades contagiosas y sociales son gratuitos.

El Consejo, en su 14º período de sesiones, aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, observando con satisfacción las campañas emprendidas y proyectadas por la Autoridad Administradora contra el paludismo, la tuberculosis, el tracoma, las enfermedades venéreas y la desnutrición, así como el éxito de la primera campaña antituberculosa. expresa la esperanza de que se mantenga un constante esfuerzo para lograr que la población aproveche cada vez más esas medidas; insta a que se conceda especial importancia a la formación profesional de ayudantes médicos y enfermeros somalis a fin de asegurar la máxima eficacia de los programas sanitarios y expresa la esperanza de que la OMS y el UNICEF presten la asistencia de ellos solicitada en este dominio.

El Consejo felicita a la Autoridad Administradora por la fundación de un establecimiento para la producción de medicamentos en el Territorio.

ADMINISTRACIÓN PENAL

La Misión Vistadora de 1951 y el Consejo ya habían tomado nota de que la Administración penal no era satisfactoria, en particular respecto a los edificios, la inactividad de los presos y los servicios destinados a las mujeres presas. El Consejo ulteriormente tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas para reparar y reconstruir las prisiones y de las seguridades dadas por la Autoridad Administradora de que antes de fines de 1953 se recluiría a los menores y las mujeres delincuentes en secciones separadas. En su 14º período de sesiones, se comunicó al Consejo que en 1953 se había completado el programa de modernización y ampliación de las prisiones y que los gastos correspondientes ascendían aproximadamente a 1.000.000 de somalos. Los prisioneros que cumplen largas condenas son enviados ahora a la nueva prisión de Uegit, medida que, según la Autoridad Administradora, ha aliviado considerablemente la situación de las prisiones de Mogadiscio. Las mujeres y los menores son reclusos actualmente por separado.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente, y observaciones del representante especial de la Autoridad Administradora

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la India declaró que en el campo social el progreso había chocado con una conciencia exagerada de las dificultades y los obstáculos y con demasiada escasez de imaginación, decisión y voluntad.

NIVEL DE VIDA

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que el informe anual demostraba que el 40% de los habitantes eran nómadas y pastores cuyo nivel de vida era muy bajo y que se encontraban en condiciones de desnutrición crónica y de casi total analfabetismo. El nivel de vida de la población agrícola, que constituía el 30% de la población, también era bajo. Los trabajadores agrícolas recibían únicamente dos somalos a dos y medio por día, y las mujeres la mitad de esa suma. Tal salario no alcanzaría ni para una sola visita al médico, a quien

habría que pagar tres somalos. Aun así, observábase a menudo que la Autoridad Administradora impedía los aumentos de salario a los trabajadores.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

El representante de El Salvador expresó que la condición jurídica y social de la mujer era deprimente. Era indispensable adoptar medidas legislativas para liberar a la mujer de la virtual tutela en que vivía, de suerte que se despejara el camino para un régimen legal más amplio y satisfactorio en esa materia. Ningún estado ya constituido o por constituirse podría, en la fase actual de civilización, resistir a la fuerte corriente de la emancipación política y legal de la mujer.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El representante de Francia sostuvo que se debía felicitar a la Autoridad Administradora por haber implantado una moderna legislación del trabajo. Había que ser cauto al aplicar la legislación social, pues resultaría peligroso suscitar grandes esperanzas que más tarde pudieran provocar una desilusión. Tampoco se debía gravar excesivamente los recursos del futuro estado de Somalia.

Señaló además que en algunas regiones el desempleo no se debía a circunstancias crónicas y era tan solo un fenómeno vinculado a la adaptación del Territorio. Sin duda, la diversificación de las actividades económicas pondría remedio a esa crisis, que él esperaba fuera transitoria.

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS

El representante de Francia manifestó que las actividades sanitarias parecían bien encaminadas hacia resultados satisfactorios. Todavía quedaba mucho por hacer en el campo de la medicina, especialmente en el de la preventiva. A este respecto, el representante de Francia estaba dispuesto a sumarse gustosamente a aquellos de sus colegas que desearan recomendar, como él estaba convencido de que lo harían, que se diera prioridad a los créditos de la OMS para emprender las campañas proyectadas por los organismos especializados y por demasiado tiempo postergadas.

El representante de la India dijo, con respecto al problema de la lucha contra las enfermedades y del mejoramiento de la salud de las mujeres y los niños, que se debía adoptar medidas firmes para obtener la asistencia de organismos especializados como la OMS y la UNESCO. El debate recientemente realizado en el Consejo había demostrado claramente que los contactos con estos organismos habían sido un tanto reticentes. Ambos organismos habían realizado una labor sobresaliente en otros países, y con su cooperación y asistencia era mucho lo que se podía hacer mejorar las deplorables condiciones sanitarias del Territorio.

El representante de Siria declaró que, en opinión de su delegación, debía realizarse el mayor esfuerzo para procurar solución al problema de la desnutrición y de la lenta inanición, al igual que en la lucha contra enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, el tracoma y las afecciones venéreas. Era indudable que si existiera la seguridad de que se proporcionarían fondos de asistencia técnica, la Administración afrontaría esos problemas sin dificultades financieras.

El representante de El Salvador expuso que en el campo social la legislación adoptada y las medidas ya emprendidas representaban un adelanto positivo,

aunque bien se le alcanzaba que mucho quedaba todavía por hacer en diversos aspectos del problema y, en especial, en cuanto a medicina preventiva e higiene.

El representante de Australia expresó la esperanza de que se suministrara cuanto antes la asistencia técnica deseada por la Autoridad Administradora para combatir el paludismo y la tuberculosis y para la alimentación.

El representante de China sostuvo que la Administración debía recibir la más completa asistencia de los organismos especializados de las Naciones Unidas en la campaña contra el paludismo y la tuberculosis. La sola asistencia técnica en manera alguna era suficiente. Se debía proporcionar al Territorio fondos y recursos adecuados. Le complacía enterarse por el Administrador del Territorio de que la Administración de Asistencia Técnica de la Naciones Unidas había asignado la suma de 75.000 dólares, para el año 1955, a fin de que la emplearan en el Territorio tres organismos especializados.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que la situación extremadamente difícil de los habitantes indígenas era empeorada por una situación sanitaria bastante deplorable, por el bajo nivel de vida, por una nutrición inadecuada y por deficiencias en materia médica y de higiene. Debido a la desnutrición, los habitantes indígenas carecían de suficiente resistencia a las enfermedades y se propagaban muchas enfermedades. La Autoridad Administradora no construyó nuevos hospitales a pesar de que los existentes eran inadecuados, como lo demostraba el hecho de que todavía existían sólo tres hospitales generales en todo el Territorio y de que desde 1951 había disminuído el número de clínicas con camas disponibles. Además, no había aumentado el número de médicos, y ninguno de éstos era somali.

Declaró que a pesar de la tributación especial con finalidades médicas, los servicios distaban mucho de ser adecuados y los fondos dedicados a la higiene pública eran demasiado escasos y muy inferiores a los asignados para la policía. El Consejo debía señalar a la Autoridad Administradora la necesidad de aumentar las asignaciones para sanidad pública.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La Autoridad Administradora comunicó al Consejo de Administración Fiduciaria en su 14° período de sesiones las medidas que había adoptado para fomentar la enseñanza, que según la Misión Visitadora de 1951 se encontraba en sus primeras etapas de desarrollo; esas medidas consistieron especialmente en el aumento de los gastos generales.

Anteriormente, el Consejo había dedicado especial atención al número y la calidad de las escuelas, al personal docente y a la cuestión del idioma de enseñanza. En su 12° período de sesiones, el Consejo se manifestó complacido por el plan quinquenal de enseñanza presentado por la Autoridad Administradora y expresó la opinión de que el desarrollo eficaz de la enseñanza en el Territorio exigía nuevas ampliaciones del programa

de formación de maestros y un continuo aumento de las respectivas partidas presupuestarias.

En 1953 los gastos totales de educación ascendieron a 7.700.000 somalos, o sea un millón más que el año precedente. En las escuelas para somalis no se cobran derechos de matrícula, en tanto que sí se percibe ese derecho en las escuelas secundarias para italianos. El programa de contrucciones escolares continuó durante el año 1953, y se gastó en él la suma de 1.500.000 somalos, aproximadamente.

El Consejo, en su 14° período de sesiones, aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, reconociendo la fundamental importancia que para la aplicación eficaz del programa de enseñanza tiene el hecho de que exista un número suficiente de maestros somalis calificados, recomienda a la Autoridad Administradora que amplíe cuanto antes el programa de enseñanza normal y haga cuanto esté a su alcance para que la profesión de maestro sea lo suficientemente atractiva como para asegurar la contratación de un número adecuado de somalis capacitados.

El Consejo, tomando nota del progreso ya realizado, insta a la Autoridad Administradora a que intensifique sus esfuerzos para resolver los problemas que plantea el mejoramiento de la enseñanza secundaria y otros problemas enumerados por la UNESCO, y le sugiere que examine la posibilidad de aumentar el número de becas para enseñanza secundaria y superior.

El Consejo felicita a la Autoridad Administradora, como también al Gobierno de Egipto, por la asistencia que han prestado al Territorio en el campo de la educación y expresa la esperanza de que otros Estados Miembros suministren análoga ayuda.

El Consejo insta a la Autoridad Administradora a que acentúe sus esfuerzos, en consulta con la UNESCO, a fin de mejorar y ampliar el sistema escolar somali.

DESARROLLO DEL IDIOMA SOMALI

El hecho de que el italiano y el árabe sean los idiomas de enseñanza en las escuelas aun cuando el somali es la única lengua hablada en todo el Territorio, ha retardado la difusión de la enseñanza, especialmente en los distritos rurales. El Consejo había observado ya con preocupación la falta de una lengua indígena escrita y había manifestado la esperanza de que la Autoridad Administradora examinara con particular atención la posibilidad de hacer del somali una lengua escrita, con el concurso de la UNESCO. También había instado a la Autoridad Administradora y a los habitantes a examinar el problema del idioma de enseñanza desde el punto de vista del desarrollo a largo plazo de la cultura somali autóctona.

El Consejo, ulteriormente informado por la Autoridad Administradora de que seguían registrándose diferencias de opinión sobre este asunto entre los somalis y que la actitud de la Administración al respecto consistía en esperar la definición de la opinión pública, a la vez que en estimular los debates públicos, había considerado que el desarrollo del idioma somali en forma escrita era un asunto muy urgente y que con tal fin debía decidirse, lo antes posible, la elaboración de un alfabeto apropiado.

La Autoridad Administradora informó al Consejo en su 14° período de sesiones, que estaba en preparación una cartilla somali en la que se utilizaba el alfabeto latino. Durante el año 1953 se enseñó el idioma somali en una de las escuelas primarias de Mogadiscio, y se

emplearon ambos alfabetos latino y "osmani". El curso constituyó un éxito durante los primeros meses, pero antes de su terminación dejaron de concurrir a él, súbitamente, todos los alumnos. La Autoridad Administradora declaró que no se presentaba ninguna explicación convincente de este hecho, pero que posiblemente algunos elementos religiosos y políticos habían visto en el programa un peligro para la fe musulmana. La Autoridad Administradora agregó que por este motivo debió postergar su programa de creación de escuelas rurales para los grupos nómadas y seminómadas, dada la imposibilidad de obtener éxito sin el empleo del idioma somali como lengua de enseñanza. Su política consistía en continuar estimulando la discusión del problema y en estudiar posibles soluciones a fin de que el futuro cuerpo legislativo del Territorio disponga de todos los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre esta materia.

El Consejo, en su 14° período de sesiones, aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, tomando nota de los ensayos realizados con miras al desarrollo de una forma escrita del idioma somali; reconociendo que con el uso del idioma somali como medio de instrucción se pueden realizar progresos más rápidos en el dominio de la enseñanza primaria y para adultos, insta a la Autoridad Administradora a intensificar sus esfuerzos, en cooperación con la UNESCO y la población de Somalia, para dar al idioma somali una forma escrita, teniendo también presente la posibilidad de utilizar la escritura árabe.

El Consejo, observando la situación especial de la lengua árabe en la vida de la población, especialmente en el dominio religioso, y el hecho de que se la emplea ahora como medio de enseñanza en las escuelas primarias; tomando nota, además, de que el Consejo Territorial y un referéndum han manifestado preferencia por el árabe como segunda lengua de enseñanza, expresa la esperanza de que el árabe, lo mismo que el italiano, sea empleado como medio de enseñanza en las escuelas secundarias de las regiones en que la población así lo desee.

El Consejo opina que en definitiva, es la población de Somalia, cuando alcance su independencia, quien ha de decidir la cuestión del idioma nacional de Somalia.

El Consejo invita a la Misión Visitadora de 1954 a prestar especial atención a la cuestión de los idiomas del Territorio.

ESCUELAS

Existe una distinción entre las escuelas italianas y las somalis. En las primeras, a las que asisten principalmente los hijos de italianos, el programa de enseñanza es el mismo que en Italia, mientras que en las últimas el programa ha sido adaptado a las necesidades particulares de la población del Territorio. Las escuelas italianas están abiertas a los estudiantes somalis, y de una matrícula total de 368 alumnos en las escuelas elementales italianas, 82 son somalis. Hay siete somalis matriculados en las escuelas secundarias.

En 1953-1954, existían 86 escuelas primarias diurnas que impartían enseñanza somali, lo que representó un aumento de cuatro con respecto al año anterior. Su cuerpo docente estaba constituido por 100 maestros italianos, 126 somalis y nueve árabes y libios, lo cual indica un aumento de 19 maestros con respecto a 1952-1953. Había nueve escuelas elementales italianas.

En la categoría de escuelas secundarias y técnicas, incluyendo las escuelas para adultos, había 20 escuelas

somalis, cuyo personal era de 71 maestros. Un hecho importante fué en 1953 la inauguración de una escuela secundaria superior somali, con un programa de estudios de cuatro años de duración. En esa forma, la enseñanza somali posee ahora un programa secundario completo dentro del sistema escolar somali.

ESTUDIANTES

He aquí la cifra de la matrícula escolar durante el año escolar 1953-1954, cotejadas con las del año 1952-1953:

A. Escuelas elementales

	1952-1953	1953-1954
1) Escuelas diurnas		
Italianas	564	511
Somalis	5.458	6.804
Indias y pakistanas	189	103
TOTAL	6.211	7.418
2) Cursos nocturnos para adultos		
Somalis	9.058	10.615
Indios y pakistanos	—	14
TOTAL	9.058	10.629

B. Escuelas secundarias

	1952-1953	1953-1954
Escuelas secundarias, italianas	199	197
Escuelas secundarias, somalis	208	175
Gimnasio italiano	34	36
Liceo clásico, italiano	20	24
Liceo científico, italiano	43	46
Escuela normal	32	14
TOTAL	536	492

C. Escuelas técnicas y especiales

	1952-1953	1953-1954
Escuela vocacional	135	246
Escuela para especialistas en aeronáutica	41	32
Escuela de mecanografía	—	267
Escuela de administración política	93	95
Escuela de agricultura	25	21
Escuela marítima y de pesca	25	58
TOTAL	319	719

MAESTROS

Tanto el Consejo de Administración Fiduciaria como la Misión Visitadora de 1951 opinaron que se debía prestar particular atención al problema de la formación profesional de maestros.

En 1953-1954 había 149 maestros indígenas en actividad (su número había sido de 97 en 1952-1953) y de ellos sólo 73 poseían el diploma normal y habían completado un curso de estudios correspondiente a los de las escuelas secundarias elementales. De los 90 alumnos que concurren a este curso de tres meses de estudio en 1953, 14 recibieron el diploma, en tanto que 17 de los que fracasaron serán readmitidos en dicho curso en 1954. Diez y nueve de los que obtuvieron diploma en 1952 fueron enviados a Italia a continuar sus estudios. Diez y ocho regresaron al Territorio en 1954 después de terminar sus estudios y uno permaneció en Italia para asistir a la Universidad.

En 1953 se inauguró una escuela normal cuyo nivel es el de las escuelas secundarias superiores.

Aún no hay instituciones de enseñanza universitaria en el Territorio. Se informó al Consejo que se estudiaba la creación de una institución de tipo universitario, en la cual serían admitidos los graduados en las escuelas secundarias y quienes hayan estudiado en Italia después de terminar el curso dictado en la Escuela de Administración Política.

En Roma se creó un centro de estudios somalis para estudiantes somalis. Durante el año que se examina había 63 estudiantes somalis en Italia y 87 en Egipto. Un estudiante somali ha empezado estudios de medicina en Roma.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y PARA LAS MASAS

La Autoridad Administradora continuó sus esfuerzos en la esfera de la educación para adultos, y 11.438 personas se matricularon en los cursos nocturnos de esa enseñanza (9.058 en 1952-1953).

El Consejo había subrayado la importancia de la educación para las masas declarando que en ese campo podría lograrse una ampliación considerable si se diera forma escrita al idioma somali. Expresó la esperanza de que se prosiguiera activamente la campaña de educación para las masas.

La Autoridad Administradora informó al Consejo que la falta de una forma escrita de la lengua somali y la escasez de profesores continuaban oponiéndose al desarrollo del programa de educación para las masas. Un experto de la UNESCO inició en Dinsor un programa de desarrollo de comunidades.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente, y observaciones del representante especial de la Autoridad Administradora

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Bélgica estimó que se debía felicitar a la Autoridad Administradora por la creación de bibliotecas.

El representante de Francia declaró que entre los problemas que exigían solución urgente, el de la educación era uno de los más importantes. La Autoridad Administradora había logrado considerables resultados que podían parecer insuficientes en la actualidad, pero que permitirían ulteriores adelantos en los años venideros.

El representante de la India afirmó que en materia de enseñanza, los antecedentes del año anterior no habían sido especialmente alentadores. Si bien se habían creado escuelas secundarias profesionales y especiales, la matrícula había disminuído ese año. Sólo en el caso de la escuela de mecanografía se había producido una fuerte matrícula.

El representante de Haití instó a la Autoridad Administradora a asociar a los representantes más calificados de la población somali en el esfuerzo de persuasión y enseñanza tendiente a convencer a todos los interesados de que el esfuerzo debe ser esencialmente de carácter nacional.

El representante de Australia expresó que la propuesta que ahora se consideraba para crear una institución docente de tipo universitario para la enseñanza de la economía y el derecho, era también digno de que el Consejo tomara nota de ella. Si bien esti-

maba que por entonces cualquier tentativa de crear una universidad completa, con facultades técnicas tanto como no técnicas, quizás era innecesaria e impracticable, esperaba que los establecimientos de enseñanza que se estaba estudiando llegarían eventualmente a constituir una universidad, con un alcance y categoría que pudiese compararse con los de las modernas universidades de Italia y del resto del mundo.

El representante de China manifestó que agradecía y hacía suyas las observaciones del representante de la UNESCO. Reconociendo el progreso realizado en esta esfera durante el período examinado, compartía la opinión de que aun era necesario el esfuerzo intenso de la Autoridad Administradora para afrontar todos los problemas señalados por el representante de la UNESCO, especialmente el problema lingüístico, el programa de enseñanza normal y el desarrollo de la enseñanza fundamental.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas afirmó que la situación de la enseñanza era poco satisfactoria y que la Autoridad Administradora no adoptaba las medidas necesarias para eliminar el analfabetismo o para formar un personal capacitado en bien del futuro estado independiente de Somalia. El informe anual señalaba que la población somali anhelaba instrucción pero carecía de ella, y que aunque reclamaba enérgicamente nuevas escuelas, las existentes en el Territorio no satisfacían la demanda y en la mayoría de las regiones el número de escuelas elementales había sido el mismo durante los cuatro años de administración fiduciaria desempeñada por Italia. No existía un solo instituto de enseñanza superior en el Territorio y sólo había una beca de estudios superiores en Italia.

La Autoridad Administradora tampoco prestaba la atención necesaria a la formación profesional de maestros indígenas, como lo indicaba el hecho de que el número de los indígenas que asistían a las escuelas normales o de formación profesional de maestros había disminuído desde el año anterior. El Consejo de Administración Fiduciaria debía señalar a la Autoridad Administradora la necesidad de aumentar las asignaciones presupuestarias para la enseñanza.

El representante especial de la Autoridad Administradora expresó que ésta contrajo el compromiso de cumplir el plan quinquenal aprobado por la UNESCO y elogiado por el Consejo y estaba llevando a la práctica algunas recomendaciones de éste. Estimaba que en la fase en que se estaba, cualquier cambio podía comprometer los intensos y bien coordinados esfuerzos de la Administración en ese campo.

DESARROLLO DEL IDIOMA SOMALI

El representante de Bélgica opinó que, evidentemente, si el grueso de la población que no hablaba ni italiano ni árabe hubiera expresado el deseo de recibir enseñanza, hubiera pedido que ella se le impartiera en idioma somali.

Era equivocado decir que el somali carecía de forma escrita puesto que se le podía escribir; como ejemplo, citó los términos somalis que aparecen en el informe anual. Tratábase simplemente de enseñar a la población a escribir el idioma que hablaba. La experiencia ha demostrado que una persona puede aprender más rápidamente un nuevo idioma si antes aprendió a escribir el suyo propio. Los somalis podían cambiar de opinión si se les lograba convencer de que aprenderían italiano o árabe más rápidamente en caso de que co-

menzaran por escribir su propio idioma. No se encontraría solución al problema del suministro de maestros a menos que la enseñanza elemental fuera impartida en el idioma vernáculo.

El representante de Francia declaró que desde el punto de vista técnico no había dificultad para iniciar un sistema práctico de escritura del somali. El problema no era técnico sino político, hecho que a veces no se tomaba suficientemente en cuenta. Consideraba sumamente lamentable y grave que las escuelas destinadas a la población nómada, tan necesarias, no pudiesen funcionar porque en ellas era indispensable el idioma somali. Comprendía, por otra parte, que debía tenerse presente la buena voluntad de la población y el hecho de que ella hubiera manifestado preferencia por la enseñanza en árabe, aunque no estaba convencido de la cabal validez de los referéndums realizados, ya que sólo había participado en ellos una pequeña élite y que toda una provincia se pronunció en favor de la enseñanza en somali. En consecuencia, el representante de Francia propuso una solución provisional que contemplara el hecho de que en 1960 Somalia sería independiente y podría decidir libremente no sólo cuál habría de ser su idioma de enseñanza, sino también qué idioma oficial adoptaría. Se debían adoptar las precauciones necesarias para que los somalis hicieran una libre elección. Por otra parte, en las escuelas públicas para la población sedentaria se debía seguir empleando el árabe hasta que se hiciese la elección. Mientras tanto, se podía crear un sistema de escritura del idioma somali para emplearlo en la enseñanza destinada a la población nómada y también en la educación básica. Asimismo, se le podría utilizar en las escuelas elementales con arreglo a las orientaciones indicadas por la UNESCO. Esta transacción no entrañaría una contradicción, ya que tomaba en cuenta los intereses de la población nómada, que constituía la mayoría. El uso del árabe no debía implicar la eliminación del somali, puesto que tal exclusión haría imposible que la población usara su lengua materna.

El representante de la India sostuvo que los auténticos representantes de la población serían quienes mejor pudieran resolver la cuestión un tanto compleja del idioma nacional del Territorio. Era evidente, sin embargo, la peculiarísima situación del árabe en el Territorio. Agregó el representante de la India que sus observaciones sobre la situación del idioma árabe estaban subordinadas a cualquier decisión que adoptara sobre la materia un Consejo elegido popularmente por la propia población, que era quien naturalmente debía tener la última palabra al respecto.

El representante de Siria apoyó la sugestión del representante de la India. Creía que el idioma árabe, de ser adoptado como lengua de enseñanza en las escuelas secundarias, prestaría una gran ayuda al Territorio. Las peticiones procedentes de Somalia estaban escritas en árabe, y el resultado del referéndum celebrado en el Territorio favoreció al árabe. Confiaba en que los miembros del Consejo comprenderían que un Estado no puede carecer de idioma y que la población de Somalia podía leer y escribir en árabe, en tanto que no existía hasta la fecha idioma somali escrito.

El representante de Haití manifestó que la cuestión del idioma oficial definitivo tendría que resolverla el propio futuro estado. La enseñanza en todos sus grados exigía importantes desembolsos aun en el caso de un estado monoligüe, pero el problema se complica-

ba mucho más si el estado debía afrontar el empleo de dos o, aun, de tres idiomas, como en el caso de Somalia. Su delegación consideraba que la Autoridad Administradora no podía eludir sus obligaciones y debía proporcionar enseñanza en los idiomas somali, árabe e italiano. Las dificultades que implicaba esta cuestión lingüística eran de carácter religioso y político. Preguntábase él si la Autoridad Administradora, ante la resolución del Consejo que reconoció el idioma utilizado por la abrumadora mayoría de la población somali, no podía aceptar los caracteres arábigos para escribir el idioma somali.

El representante de China expresó que su delegación estaba convencida de que seguían en pie las conclusiones a que arribaron el Consejo y la UNESCO sobre la cuestión lingüística. Para educar apropiadamente a la población del Territorio, se le debía impartir enseñanza en su lengua materna, por lo menos en los primeros estadios de esa enseñanza, razón por la cual era urgente dar forma escrita al idioma somali. Sin embargo, el representante de China había prestado atención a los argumentos relativos a las dificultades emanadas de la coexistencia de otros dos idiomas en el Territorio, a saber, el italiano y el árabe. No dudaba de que, en colaboración con los expertos de la UNESCO, la Autoridad Administradora encontraría la posibilidad de hacer los reajustes que fueran necesarios y que la propia población considerase aceptables.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que al desarrollo de la enseñanza se oponía la falta de un idioma somali escrito, pero que la Autoridad Administradora nada hacía para dotar de un alfabeto al idioma, e imponía una lengua extranjera a los habitantes indígenas so pretexto de que el único medio de combatir el analfabetismo era que los somalis aprendieran un idioma extranjero. Debía prestarse seria atención a lo manifestado por el representante especial en el sentido de que dos tercios del pueblo somali sólo conocían el idioma somali.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que su actitud con respecto al idioma árabe en la escuela podía apreciarse mejor a través de las instrucciones dadas en 1951 a todos los maestros de las escuelas elementales, instrucciones que perdurarían y que obtuvieron la plena aprobación de un experto de la UNESCO. La difusión del idioma árabe no estaba desatendida por la Autoridad Administradora. Esta continuaría sus esfuerzos para dar una forma escrita al idioma somali, especialmente con el objeto de resolver el problema de la educación para las masas. La propuesta del representante de Haití, tendiente a que se hiciera un esfuerzo por lograr la transcripción en escritura arábiga, recibiría especial consideración. Se esperaba que todos los miembros del Consejo Consultivo, en sus contactos con los somalis, ayudaran a la Autoridad Administradora a convencer a la población somali de la necesidad de la medida para combatir el analfabetismo, especialmente en el interior del Territorio.

ESCUELAS

El representante de Bélgica dijo que el Consejo haría bien en felicitar a la Autoridad Administradora por la terminación del primer curso trienal de estudios en la Escuela de Administración Política.

El representante de la India manifestó que parecía haber una multiplicidad de escuelas. El idioma de en-

señanza era en algunas el italiano, mientras en otras era el árabe o el somali. Parecía imponerse un mayor grado de coordinación e integración del sistema de enseñanza, y esperaba él que esta idea recibiera debida atención de las autoridades.

Dado que el Territorio dependía mucho de sus recursos de origen animal, se debía prever la creación de un instituto avanzado de zootecnia. Además, se debían sentar ya las bases para la creación de un centro de enseñanza superior de nivel universitario.

El representante de Siria propuso que el Consejo adoptara las siguientes recomendaciones:

"El Consejo, tomando nota de que los niveles de eficiencia son superiores en las escuelas italianas que en las escuelas somalis, insta a la Autoridad Administradora a que tome inmediatamente medidas para mejorar y ampliar el sistema de las escuelas somalis."

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas opinó que la población somali pidió decididamente la creación de nuevas escuelas, pero que las existentes en el Territorio no satisfacían la demanda. El informe anual demostraba que en la mayor parte de las regiones el número de escuelas elementales había sido el mismo durante los cuatro años de la administración fiduciaria ejercida por Italia, en tanto que el número de escuelas elementales para adultos había disminuído en 1953 con respecto al año precedente. Durante el año escolar 1953-1954, sólo hubo en las escuelas elementales unos 6.000 niños somalis en las primeras clases y 2.000 en la quinta, lo que arrojaba un total de unos 8.000 niños que recibían enseñanza y representaba cerca del 3% de la población somali en edad escolar.

El representante de la Autoridad Administradora expresó que la Administración estaba en desacuerdo con la observación de que las escuelas somalis fueran de calidad inferior a la de las escuelas italianas. El programa de estas últimas había sido preparado para alumnos italianos y comprendía cierto número de temas, como el latín o la historia y las instituciones de Italia, que serían de escaso interés para los niños y niñas somalis. Las escuelas somalis, por su parte, daban mayor importancia a temas locales como la historia somali, las ciencias naturales, los recursos locales, etc. En modo alguno existía una diferencia cualitativa entre los maestros italianos que enseñaban en cualquier grado de las escuelas somalis o italianas.

MAESTROS

El representante de Francia indicó que en Somalia las dificultades para la formación profesional de maes-

tros eran aún más agudas y que la necesidad de una solución era más urgente que en otras partes. Sugirió que el Consejo de Administración Fiduciaria recomendara al Consejo Territorial que asistiera a la Autoridad Administradora en la difícil tarea de contratar futuros maestros y de hacer el tipo apropiado de propaganda entre los elementos jóvenes de la ciudad.

El representante de la India opinó que la educación no podía avanzar a menos que hubiera un número suficiente de maestros locales. Mucho preocupaba a su delegación la disminución de la matrícula en las escuelas de formación profesional de maestros, que bajó de 32 a 14 con respecto al año precedente. La supuesta resistencia de los somalis a inscribirse en las escuelas normales era cuestión que exigía cuidadosa investigación en consulta con el Consejo Territorial.

El representante de China sostuvo que la insuficiencia de maestros en el Territorio había resultado un problema desconcertante. Era indudable que el representante de la UNESCO tuvo razón al decir que debía realizarse muchos esfuerzos más para ampliar el programa de formación profesional de maestros. El Consejo debía recomendar no sólo la apertura de más escuelas normales, sino también la disposición de alicientes adecuados para inducir a un número mayor de miembros de la *élite* a abrazar la profesión de la enseñanza.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y PARA LAS MASAS

El representante de la India declaró que los programas de desarrollo de comunidades tenían mucho éxito en su propio país cuando se les emprendía en gran escala, y expresó la esperanza de que el programa de Dinsor fuera seguido por otros análogos en distintas partes del Territorio.

Agregó que el Consejo ya había subrayado la importancia de la educación popular y manifestó la esperanza de que la campaña de educación popular fuera firmemente proseguida.

El representante especial de la Autoridad Administradora aseguró al representante de Nueva Zelandia que habían sido muy bien acogidas sus muy constructivas observaciones sobre los programas de desarrollo de comunidades y respecto de los planes para estimular y ayudar a los nómadas que desearan aceptar una forma de vida más estable. Podía considerarse que los programas de comunidad de Ualen Uen y Dinsor eran proyectos experimentales en esta materia; el primero estaba destinado a la población sedentaria, y el segundo a una predominantemente nómada. La Administración se proponía dar gran impulso a la multiplicación de dichos programas en un futuro cercano.

Capítulo IV

CAMERUN BAJO ADMINISTRACION BRITANICA

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

Situado inmediatamente al norte del Ecuador y a lo largo de la frontera oriental de Nigeria, el Camerún bajo administración británica está formado por dos franjas largas y angostas de tierra montañosa separadas por una hondonada de unas 45 millas. La superficie total del territorio es de 34.081 millas cuadradas; tiene aproximadamente 700 millas de longitud, y su anchura no sobrepasa nunca de las 100 millas.

El primer censo integral, realizado en 1952, reveló que la población total ascendía en ese entonces a 1.430.100 habitantes, de los cuales 687.100 vivían en el norte y 743.000 en el sur. Esta cifra es mucho mayor que la calculada anteriormente, y eleva aproximadamente en un 40% el cálculo de 1.083.000 habitantes efectuado en 1951. El censo realizado en el sur del país, especialmente, reveló un aumento de casi 300.000 habitantes con respecto al cálculo de 484.000 efectuado en 1951.

La población indígena varía considerablemente en lo que se refiere a origen étnico, lengua y cultura y existen también diferencias notables en el grado de desarrollo. Muchos grupos guardan estrecha vinculación tribal y cultural con los habitantes de los territorios vecinos, o sea el Camerún bajo administración francesa y Nigeria. Ciertas zonas septentrionales, que cuentan en total 1.150 millas cuadradas de superficie y 107.131 habitantes, siguen siendo consideradas "distritos no colonizados".

PROGRESO HACIA EL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDENCIA

Mediante resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII), la Asamblea General invitó a las Autoridades Administradoras a que en todos los informes anuales incluyesen, entre otros, datos relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyectase adoptar para conducir a los territorios en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia, así como también un cálculo del tiempo necesario para ejecutar las diversas medidas encaminadas hacia ese objetivo. Se pidió al Consejo que, en sus informes a la Asamblea General, se sirviese incluir una sección separada que tratase del cumplimiento de estas resoluciones.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la China consideró que los informes presentados al Consejo mostraban un cuadro

alentador de la manera en que paulatinamente mejora la situación del Camerún bajo la administración británica, como así también del esfuerzo concienzudo desplegado por la Autoridad Administradora para lograr ese fin.

El representante de Bélgica observó que la situación en que se encontraba el Camerún bajo administración británica era favorable.

PROGRESO HACIA EL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDENCIA

El representante de la India restó importancia a las dificultades que, según la Autoridad Administradora, se encontraron en el cumplimiento de las resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII) de la Asamblea General, por las cuales se pidió que para cada uno de los territorios en fideicomiso se hiciese un cálculo del plazo necesario para alcanzar el objetivo del gobierno propio o la independencia. Instó a la Autoridad Administradora a que por lo menos tratase de fijar una fecha límite provisional.

El representante de la Autoridad Administradora recordó que su delegación en ningún momento ocultó sus dudas con respecto al acierto de estas resoluciones de la Asamblea General, y que había señalado claramente lo poco que el Gobierno del Reino Unido podía hacer para observar las recomendaciones dirigidas a las Autoridades Administradoras. En lo que respecta a los deseos expresados al Consejo por la Asamblea, su Gobierno desde luego, colaboraría en el cumplimiento del único elemento obligatorio que encierra la resolución 752 (VIII), a saber, el párrafo 3, en el cual se pide al Consejo que informe respecto de las medidas adoptadas en cada territorio en fideicomiso para promover diversos aspectos del adelantamiento hacia el gobierno propio.

EL PROBLEMA DE LA FRONTERA; PEDIDOS DE UNIFICACIÓN

El representante de Siria estimó que, a pesar de que se hubiese informado que el vivo interés suscitado por otros acontecimientos de índole constitucional había dejado en segundo plano la cuestión de la unificación, el Consejo no debía pasar por alto el apoyo que mereció esa cuestión en el pasado por parte de los dirigentes del Camerún, ni debía perder de vista la posibilidad de que el mismo asunto surgiese con renovado vigor en lo futuro si los mismos dirigentes se convencieren de que el Camerún Meridional es demasiado pequeño para existir por sí solo. Agregó que es necesario que se envíen al Consejo informes regulares y detallados sobre el asunto.

El representante de la India se opuso a la creación de una barrera aduanera entre el Camerún bajo administración británica y el Camerún bajo administración francesa, sosteniendo que todavía no se había dado a estos territorios el carácter de naciones separadas. A

su entender, la barrera aduanera tendría por efecto dividir a ambos territorios antes de que se decidiera la relación que existiría entre ambos en lo futuro.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

a) La situación en 1952

En 1952 no se registró cambio de importancia en la estructura gubernamental del Protectorado de Nigeria y del Camerún Británico, la cual, según lo hizo notar anteriormente el Consejo de Administración Fiduciaria, quedó substancialmente modificada en virtud de la Constitución de Nigeria, Real Decreto de 1951 (*Order in Council*). En la actualidad se sigue administrando el Protectorado y el Territorio en fideicomiso como si fuesen una sola entidad, en la cual el Camerún Meridional forma parte de la Región Oriental de Nigeria, en tanto que el norte del Territorio forma parte de la Región Septentrional.

Debido al régimen especial del Territorio en fideicomiso, existe un Comisionado del Camerún, directamente responsable ante el Gobernador, que se encarga de la administración fiduciaria de todo el Territorio. El Comisionado es también responsable (y en esto depende del Gobernador Adjunto de la Región Oriental) de la administración del Camerún Meridional.

Con arreglo a la Constitución de 1951, existen órganos de gobierno ejecutivos y legislativos tanto en la esfera central como en la esfera regional. Cada Región es administrada por un Gobernador Adjunto y posee un Consejo Ejecutivo y una Asamblea Legislativa; en estos últimos órganos la mayoría está constituida por miembros elegidos. En las Regiones Occidental y Septentrional existe también una Cámara de Jefes. El Territorio en fideicomiso tiene un representante en la Cámara Septentrional de Jefes y tres representantes en la Cámara de Asamblea Septentrional, que se compone de 90 miembros. En la Cámara de Asamblea Oriental, que se compone de 80 miembros, los representantes del Camerún son 13. En lo que se refiere a la parte ejecutiva del Gobierno, el Camerún está representado en el Consejo Ejecutivo de la Región Oriental por un miembro oficial y otro no oficial, el primero de los cuales es el Comisionado del Camerún. En 1952 el Territorio en fideicomiso no tuvo representantes independientes en el Consejo Ejecutivo de la Región Septentrional.

En la esfera del gobierno central, el principal órgano gubernamental de Nigeria y del Camerún bajo administración británica es el Consejo de Ministros, que se compone del Gobernador, seis miembros de oficio y doce ministros, uno de los cuales debe ser miembro de la Cámara de Asamblea Oriental, que se elige entre una división de Camerún. La legislación, que está sujeta a la aprobación del Gobernador, emana de la Cámara de Representantes; el Camerún tiene ocho representantes en esta Cámara, que se compone de 136 miembros elegidos por los cuerpos legislativos regionales.

Tanto en la Región Septentrional como en la Región Oriental pueden votar todos los adultos de Nigeria que sean contribuyentes y hayan residido el tiempo pres-

crito en la circunscripción electoral o hayan nacido en ella; en la Región Oriental, la circunscripción electoral es la división, y en la Región Septentrional, es la provincia. Todos los hombres adultos son contribuyentes en principio y, por lo tanto, tienen derecho a votar. La Autoridad Administradora declaró que, en el caso de las mujeres adultas, las mismas tienen "derecho" pero no "obligación" de pagar impuestos y que en la práctica no los pagan.

Las elecciones de candidatos a las Asambleas legislativas regionales se rigen por el sistema de colegio electoral: en la Región Oriental, las elecciones se dividen en dos etapas, en tanto que en la Región Septentrional se dividen en cuatro por lo menos. La Autoridad Administradora manifiesta que en la División Victoria (Camerún Meridional), la existencia de un número elevado de habitantes no cameruneses en la población requiere disposiciones especiales para garantizar que uno de los representantes elegidos por el colegio electoral ha de ser natural de la División. Los representantes de la Cámara Central de Representantes son elegidos entre los miembros de las Asambleas legislativas regionales.

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de que en algunas partes del Territorio se había observado en los habitantes indígenas indiferencia respecto a las primeras elecciones, realizadas en 1951. En esa ocasión el Consejo instó a la Autoridad Administradora a proseguir fomentando por todos los medios posibles la educación política de los habitantes y a alentar a éstos a desempeñar plenamente la parte que les corresponde en el funcionamiento de la nueva estructura gubernamental. En el 13° período de sesiones, el representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo que las elecciones que terminaron en enero de 1954 habían despertado enorme interés público en el Camerún Meridional, y que el porcentaje de los votantes fué muy alto.

b) Organizaciones políticas

La Misión Visitadora de 1952 observó que el interés por las cuestiones políticas había aumentado en el Territorio en fideicomiso. La Misión quedó impresionada por la seriedad con que los representantes indígenas electos encaraban sus obligaciones y por la política liberal que seguía la Autoridad Administradora. Esta última informó que en 1952 la conciencia política del Territorio se desarrolló más que en cualquier otro año de su historia. La Autoridad Administradora manifestó asimismo que, a medida que avanzaba el año, los representantes del Camerún empezaron a desempeñar un papel importante en las Asambleas legislativas Oriental y Central, y que los representantes del Camerún Meridional, especialmente, actuaron con espíritu de unión y demostraron conciencia de la posición especial en que se encuentra el Camerún por su calidad de Territorio en fideicomiso. Al terminar el año habían constituido en el Este un "bloque camerunés" bien delineado; los representantes del Camerún en la Asamblea Legislativa Central, tanto los del norte como los del sur, reconocían un terreno común de intereses y se consultaban para propugnarlos.

Sin embargo, la conciencia política está mucho más desarrollada en el Camerún Meridional que en el Septentrional. En el sur, casi todos los clanes cuentan con una "unión para el progreso" integrada por jóvenes que

saben leer y escribir y que tratan de infundir un espíritu progresista a los consejos de las Autoridades Indígenas. La mayor parte de estas uniones han enviado representantes a la Cameroons National Federation, organización política constituida en 1949; en ese año, esta organización se presentó ante la primera Misión Visitadora y fué la principal defensora de un *status* regional autónomo para el Camerún, con miras, en último término, a lograr la unificación con el Camerún bajo administración francesa. La Autoridad Administradora informó que en 1952 decayó la influencia de la Federation ante el surgimiento de una entidad rival, el Kamerun United National Congress, que estaba vinculado con la Union des Populations Camerounaises del Territorio vecino. Este partido también aspiraba a lograr un *status* regional dentro de Nigeria, para el Camerún bajo administración británica, con miras finales a la unión con el otro Camerún. En 1953, como se verá más adelante, ambos partidos se amalgamaron con el nombre de Kamerun National Congress.

En el plano más amplio de la política de Nigeria, los representantes del Camerún Meridional en la Cámara de Asamblea Oriental mantuvieron en 1952 con el partido mayoritario de la Cámara, el National Council for Nigeria, and the Cameroons (NCNC), una vinculación que la Autoridad Administradora definió como un matrimonio aparentemente de conveniencia y que, como se verá, fué disuelta en 1953.

En la parte septentrional del Camerún, el interés despertado por los partidos políticos parece haber sido relativamente escaso. La Autoridad Administradora expresó que la tendencia de las personas que saben leer y escribir es apoyar al Nigerian Northern Peoples' Congress, cuyos objetivos son una mayor autonomía para Nigeria Septentrional, el *status* de dominio para toda Nigeria, la reforma del gobierno local y el progreso social en general. La Misión Visitadora pudo observar una actividad muy atenuada por parte de la Northern Elements Progressive Union, partido de Nigeria cuyos métodos y tácticas, según la Misión lo expresa, han sido objeto de críticas por parte de la Administración.

c) Aspiraciones políticas

En el transcurso de las conversaciones mantenidas con los partidos políticos y con otros grupos representativos del Camerún, la Misión Visitadora de 1952 llegó a la conclusión de que, aunque la nueva Constitución concedía al Territorio mayor representación en los órganos de gobierno, existía el temor generalizado de que, por estar en minoría los miembros cameruneses, los intereses del Territorio quedasen supeditados a los de Nigeria, con el perjuicio consiguiente para la eventual independencia política del Territorio en fideicomiso. Como consecuencia, los dos partidos políticos de la parte meridional y también otros grupos, pidieron que se diera un *status* regional separado al Territorio, y que el cargo de Comisionado del Camerún fuera elevado a la categoría de Gobernador Adjunto de la región. La Misión no se pronunció sobre estas peticiones, pero recomendó la ampliación de las facultades del Comisionado del Camerún.

El Consejo había recibido anteriormente solicitudes similares formuladas en forma de peticiones o por conducto de la primera Misión Visitadora de 1949. Esta última opinó que debía dejarse abierto el camino para examinar cuidadosamente la conveniencia y la

posibilidad de extender cierto grado de autonomía administrativa, legislativa y presupuestaria del Territorio en fideicomiso.

Se renovaron también a la Misión Visitadora las solicitudes en el sentido de que se unificara a ambas partes del Camerún; esas solicitudes provinieron especialmente del Kamerun United National Congress y de 10 de los 13 representantes del Camerún en la Cámara de Asamblea Oriental, cinco de los cuales pertenecen también a la Asamblea legislativa central de Nigeria. La Cameroons National Federation, sin mencionar expresamente la unificación, recalcó la necesidad de eliminar las dificultades a que da origen la frontera. Estas solicitudes, presentadas en términos muy generales, no introdujeron en el problema otros elementos que no fueran los ya examinados por el Consejo de Administración Fiduciaria con motivo de peticiones anteriores. La Misión consideró que la solicitud de unificación se localizaba en algunas partes del Camerún Meridional y no contaba con un apoyo popular activo. Estimó también que la cuestión de la unificación estaba estrechamente vinculada a la preocupación que provoca el hecho de que los representantes del Camerún estén en minoría en los órganos legislativos de Nigeria. La Autoridad Administradora, coincidiendo con este criterio, informó en 1953 que, en el transcurso de subsiguientes acontecimientos (véase más adelante), el problema de la unificación pasó a un segundo plano.

La Misión Visitadora vió con agrado las medidas que se estaban tomando para contrarrestar las dificultades relativas a la frontera; ello era muestra de la buena voluntad con que se trataba de solucionar el problema.

Respecto de otra cuestión relacionada en parte con la anterior, la Misión recibió también un pedido de la French Cameroons Welfare Union en el sentido de que se concedieran derechos electorales a los inmigrantes del Camerún Francés domiciliados en el Territorio bajo administración británica (cuyo número es aproximadamente 17.000) y que se reconociera una nacionalidad camerunesa a los habitantes de ambos territorios en fideicomiso. En su 11º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria había estudiado ya peticiones a ese respecto, y la Autoridad Administradora se comprometió en ese entonces a estudiar la cuestión del sufragio. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13º período de sesiones, que se volvería a examinar el asunto en conexión con la redacción de un reglamento electoral en conformidad con la nueva Constitución.

d) ACONTECIMIENTOS RECIENTES DE ORDEN CONSTITUCIONAL

Desde fines de 1952, las cuestiones referentes a la relación del Camerún con Nigeria han adquirido una gravedad mayor que lo que pudo apreciar la Misión Visitadora. En relación con el informe de la Misión, la Autoridad Administradora informó al Consejo³¹⁴ que discrepancias sobrevenidas dentro del partido mayoritario de la Región Oriental de Nigeria — el National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC) — ocasionaron una división dentro del partido, e hicieron necesaria la disolución de la Cámara

³¹⁴ T/1074.

Oriental y la convocatoria a nuevas elecciones. También en el Gobierno Central surgieron discrepancias que provocaron la renuncia de varios ministros y pedidos de reforma constitucional. La Autoridad Administradora, en consecuencia, propuso que se realizasen conversaciones con los representantes de todas las regiones de Nigeria, incluyendo el Camerún, sobre los aspectos de la Constitución que se debían revisar y los métodos que se utilizarían para ello.

Estos acontecimientos, según el informe de la Autoridad Administradora, tuvieron el siguiente efecto en el Territorio en fideicomiso: desde que se produjo la división en el partido mayoritario en Nigeria Oriental, nueve de los trece representantes del Camerún en la Cámara Oriental, incluyendo el Dr. E. M. L. Endeley (eminente hombre público que desempeñó también el cargo de Ministro de Trabajo del Gobierno Central), se desafiliaron del partido y se pronunciaron en favor del *status* regional. En una petición³¹⁵ enviada simultáneamente a las Naciones Unidas, anunciaron su intención de abandonar la asamblea legislativa regional y pedir que se constituyese un cuerpo legislativo separado para el Camerún.

En su ruptura con el partido de Nigeria, los miembros del Camerún contaron con el apoyo de los dos partidos políticos del Camerún Meridional, que se fusionaron con el nombre de Kamerun National Congress. Los otros cuatro miembros siguieron fieles al NCNC hasta la disolución de la Cámara Oriental, después de lo cual su actitud, a juicio de la Autoridad Administradora, halló expresión de una nueva organización conocida como Kamerun People's Party. En el manifiesto de este partido se pedía un *status* regional separado (aunque sin hacer referencia al Camerún Septentrional) y se preconizaba el mantenimiento de los vínculos con los partidos políticos de Nigeria.

En mayo de 1953 una "All-Camerouns Conference" (Conferencia pancamerunesa) redactó una petición en la cual se solicitaba la independencia regional para el Camerún. En junio, el Dr. Endeley entregó personalmente la petición al Ministro de Colonias. En esa oportunidad se le aseguró que, a pesar de los enormes obstáculos financieros, geográficos y administrativos que se oponen a la independencia regional del Camerún, se estudiaría atentamente el pedido al revisarse la Constitución de Nigeria.

El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13º periodo de sesiones, que en el transcurso de las conversaciones que precedieron a la Conferencia de Londres sobre la Constitución de Nigeria se echó de ver que el pueblo del Camerún Septentrional estaba determinado a continuar dentro de la estructura gubernamental de Nigeria Septentrional. Por este motivo, el Kamerun National Congress tenía sumo interés en obtener una organización regional separada para el Camerún Meridional. El Kamerun People's Party, sin embargo, se mostraba reacio a apoyar este pedido a menos que se le asegurase que tal solución era financieramente viable. El Ministro, pues, aunque se mostraba en favor del pedido de un *status* regional, postergó toda decisión sobre el asunto hasta tanto se supiese el resultado de las elecciones en el Camerún Meridional y se terminase una encuesta independiente que sería realizada por un Comisionado Fiscal *ad hoc* y tendría por fina-

lidad determinar las consecuencias financieras de las modificaciones constitucionales propuestas.

Dichas elecciones, que se celebraron en enero de 1954, dieron por resultado una victoria abrumadora del Kamerun National Congress en el Camerún Meridional. A la vez, el resultado del estudio financiero demostró que por cierto tiempo el Camerún Meridional carecería de estabilidad financiera si pasase a ser una región separada sin ayuda externa, ya que los ingresos que le fueron atribuidos estaban sujetos a grandes fluctuaciones y que el superávit de los años favorables no bastarían para cubrir los costos del gobierno regional y de los servicios federales en los años desfavorables.

El representante especial manifestó que por esa razón se convino, al reiniciarse las sesiones de la Conferencia sobre la Constitución de Nigeria, que el Camerún Meridional se separase de la Región Oriental y se convirtiese en un territorio federal dotado de sus propios poderes legislativo y ejecutivo para atender los asuntos regionales, pero financiado mediante un subsidio anual del gobierno federal. De igual manera que hasta entonces, todos los ingresos procedentes del Camerún se gastarían dentro del Territorio. Las instituciones gubernamentales proyectadas diferirían en su forma de las que existían en las principales regiones de Nigeria, para dar expresión al deseo del pueblo camerunés de que por el momento los funcionarios siguiesen participando en forma relativamente preponderante en el gobierno, a fin de asegurar la representación de los jefes tradicionales y de contar con la protección de su *status* por el Gobernador General, dada su vinculación directa con la Autoridad Administradora. La asamblea legislativa estaría presidida por el Comisionado del Camerún y se compondría de 13 miembros elegidos, seis representantes de las Autoridades Indígenas, dos representantes de intereses especiales que no tuviesen otra representación, y tres funcionarios. El Gobernador General se encargaría de aprobar y promulgar las leyes. El Consejo Ejecutivo estaría también presidido por el Comisionado del Camerún y se compondría de cuatro miembros de la legislatura que no fuesen funcionarios públicos y de tres funcionarios. El Camerún Meridional estaría representado en la Legislatura federal por seis miembros y en el Consejo de Ministros por un Ministro, como anteriormente.

En lo que respecta al Camerún Septentrional, el representante especial informó al Consejo que, con arreglo a las reformas constitucionales propuestas, tendría una representación de cinco miembros en la Cámara de Asamblea Septentrional, además de los miembros con que cuenta en la Cámara de Jefes Septentrional, y estaría representada en la asamblea legislativa federal por cuatro miembros. Gracias a estas disposiciones el Camerún Septentrional tendría asegurada una representación mucho mayor en el Gobierno Regional Septentrional y estaría además representado en la asamblea legislativa federal. Se constituiría también un Comité Consultivo integrado por los representantes del Camerún Septentrional en la Cámara de Asamblea Septentrional y, quizás, por algunos miembros de las circunscripciones electorales situadas parcialmente en el Camerún; éstos tendrían por función mantener informado al Gobierno Regional Septentrional respecto a la opinión del Camerún sobre la legislación regional.

³¹⁵ T/PET.4/100.

El representante especial manifestó además que se adoptarían medidas constitucionales para mantener el cargo de Comisionado del Camerún, a fin de que se pudiese seguir observando el progreso de todo el Territorio en fideicomiso. Agregó que a la luz del informe del Comisionado Fiscal, el Territorio en fideicomiso seguiría recibiendo ayuda del Colonial Development and Welfare Fund.

En su 13° período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente conclusión:

"El Consejo, tomando nota de las modificaciones propuestas para la estructura política del Territorio en fideicomiso en relación con la revisión de la Constitución de Nigeria y del Camerún, felicita a la Autoridad Administradora por el desarrollo político alcanzado en el Territorio en fideicomiso durante el período que se examina."

GOBIERNO LOCAL

El gobierno puramente local del Territorio es ejercido por las Autoridades Indígenas, a quienes dan orientación y asesoramiento los Funcionarios de la Administración. Estas autoridades consisten, en el Norte y en la Provincia de Bamenda, de algunos jefes hereditarios relativamente poderosos, que cuentan con el apoyo de consejos de ancianos y de otros caudillos tradicionales y en el Sur de un número relativamente grande de consejos de clan. Tienen facultades legales, en virtud de la Ordenanza sobre la Autoridad Indígena, para dar y aplicar leyes locales y para preparar y administrar, con asesoramiento, presupuestos locales cuyos ingresos se derivan principalmente de los impuestos cobrados a los habitantes indígenas y de las subvenciones otorgadas por el gobierno central.

En 1950 se promulgó en la Región Oriental de Nigeria una ley que autorizaba el establecimiento de consejos de estructura más moderna, encaminados a dar al pueblo mayor participación en la solución de sus problemas locales.

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción de las medidas ya adoptadas por la Autoridad Administradora para hacer evolucionar las instituciones de gobierno local hacia formas más modernas y democráticas.

La Asamblea Administradora informó que las nuevas leyes no habían sido aplicadas todavía en el Camerún Meridional, ya que sus posibilidades de éxito dependían principalmente de que surgiese una clase responsable e instruida, dispuesta a dedicarse a los problemas públicos de orden local. Para lograr este fin, la Administración y los dirigentes indígenas más progresistas estaban realizando francos esfuerzos. La Misión Visitadora de 1952 recibió propuestas del Cameroons National Federation y del Bakweri Improvement Union para que se implantara el nuevo sistema en la provincia del Camerún; dichas propuestas se basaban en que el sistema existente carecía de carácter democrático y de popularidad. El Bakweri Land Committee propuso también que se concediese categoría municipal a algunas ciudades. La Misión estimó que hubiera sido prematuro formular comentarios sobre estas propuestas dada la evolución que se estaba realizando en el gobierno local del Camerún Meridional.

Tanto la Misión Visitadora como la Autoridad Administradora informaron que se estaba produciendo

una evolución satisfactoria bajo la forma de mejoras concretas en la organización de Administraciones Indígenas, y de una duplicación general de sus actividades que se reflejaba en el aumento de los gastos presupuestarios. El progreso más notable se registró en la parte septentrional del Territorio, donde la hasta entonces rígida estructura jerárquica de los emiratos estaba modificándose y dando entrada en forma cada vez más marcada a los elementos elegidos por el pueblo. En la División Dikwa se estaban creando consejos de aldea, y en lo sucesivo los miembros de los consejos de distrito serían elegidos por los consejos de aldea entre sus propios miembros. En un nivel más alto, el Consejo Asesor (Externo) fué reconstituido con el fin de que su mayoría se compusiese de miembros elegidos entre los consejos de distrito, y la Autoridad Indígena dió una prueba más de su deseo de descentralizar la autoridad al crear cinco nuevos comités que se encargarán de la enseñanza, la sanidad, las finanzas, las obras públicas y las cuestiones disciplinarias. En la Provincia de Adama se dejó ver una tendencia similar, al escogerse a representantes de tres zonas eminentemente paganas para que integrasen el Consejo Asesor del Lamido. En 1953, la Autoridad Administradora informó que el progreso del gobierno local en la parte septentrional del Territorio siguió a ritmo acelerado. Las Autoridades Indígenas individuales habían sido reemplazadas ya en todos los casos por Autoridades Indígenas legalmente constituidas y consistentes en Consejos de Jefes; esta modificación hace que toda decisión adoptada por la Autoridad Indígena deba obtener la aprobación de la mayoría del Consejo.

En el Camerún Meridional se notó un marcado progreso en el sistema de comités, especialmente en las divisiones Mamfe y Kumba, y la Misión Visitadora señaló la creación de diversos erarios combinados, cada uno de los cuales está destinado a un grupo de Autoridades Indígenas. La Misión estimó que esto último permitirá a la población africana iniciar empresas de mayor envergadura que las que antes hubiesen sido posibles. En la División Victoria, donde el grueso de la población vive en comunidades situadas dentro de las plantaciones dependientes de la Cameroons Development Corporation, las Autoridades Indígenas no habían actuado satisfactoriamente, desde hacía algún tiempo, debido a la falta de interés público. En 1952 se inició un movimiento para infundir nueva vida al gobierno local de la División; para ello se reorganizó la Autoridad Indígena de Tiko, a fin de dar mejor representación a las nutridas comunidades de personas procedentes de otras zonas. Esta reforma obtuvo un éxito inmediato, y surgió el propósito de reorganizar análogamente y a la brevedad posible las demás Autoridades Indígenas. No obstante, se informó al Consejo que el interés que despertaba en la población del Camerún Meridional el problema constitucional le había impedido abocarse al problema de la reforma del gobierno local. Se esperaba que los representantes elegidos del nuevo Gobierno del Camerún Meridional inspirasen un amplio movimiento en favor de la reforma.

Durante el período que se examina continuó en la Bahía Man-O'War, en mayor escala, la formación de dirigentes de comunidad; asistieron a los cursos, jóvenes procedentes de toda Nigeria y el Camerún, y no solamente de las dos provincias meridio-

nales del Territorio en fideicomiso, como había sucedido en años anteriores. Los candidatos fueron designados por funcionarios de distrito, departamentos, misiones, Autoridades Indígenas y compañías comerciales, y recibieron formación durante periodos de cuatro a cuatro semanas y media de duración.

En su noveno periodo de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria formuló comentarios favorables respecto del proyecto de formación profesional, y pidió que se le informara acerca de la creación de nuevos centros de capacitación. En su informe anual de 1952, la Autoridad Administradora señaló que no se proyectaba crear nuevos centros, dada la escasez de personal adecuado para ese fin.

En su 13° periodo de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, considerando conveniente que el desarrollo de instituciones de gobierno local eficientes y democráticas se produzca en forma paralela con el progreso político en un nivel elevado, toma nota de que se ha verificado algún progreso en la reforma del gobierno local en el Camerún Septentrional, pero que esa reforma se ha retrasado en el Camerún Meridional debido al interés despertado por la reforma constitucional; recomienda, en consecuencia, que se adopten medidas para estimular el desarrollo del gobierno local, especialmente en la zona meridional, como así también en la zona septentrional, y apoya la intención del Comisionado del Camerún de alentar a los representantes elegidos del proyectado nuevo gobierno del Camerún Meridional para que conduzcan un amplio movimiento popular a favor de la reforma; y recomienda asimismo que se haga un intento decidido para ampliar la base de las instituciones locales de gobierno.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Bajo la dirección del Gobernador de Nigeria, los cargos administrativos y técnicos del Territorio en fideicomiso se llenan con miembros de la administración pública de Nigeria, y es norma manifiesta del Gobierno de Nigeria contratar el menor volumen posible de personal de ultramar para esos cargos, siempre que no se resienta con ello la eficiencia del servicio. La Autoridad Administradora declaró que los naturales del país pueden ocupar cualquier cargo, siempre que reúnan las calificaciones y cualidades de carácter necesarias. Sin embargo, pocos africanos ocupan actualmente puestos elevados en la administración pública; los africanos desempeñan por lo general cargos de categoría inferior. En 1953, la Autoridad Administradora observó que el atractivo que ejercen los órganos legislativos y ejecutivos y los comités públicos tienden a disminuir la entrada de naturales del Camerún en los cargos superiores de la administración pública; dos altos empleados públicos naturales del Camerún, por ejemplo, renunciaron recientemente a sus cargos para dedicarse a la política.

La Misión Visitadora de 1952 informó que le había llamado especialmente la atención la consagración con que los funcionarios encargados de la ejecución de los proyectos y los inspectores realizan sus tareas muchas veces en circunstancias extremadamente difíciles. Después de comprobar que era pequeño el número de funcionarios del Territorio, expresó la opinión de que no se lo debía disminuir aún más, puesto que los habitantes indígenas necesitan la orientación y el consejo que ellos ofrecen, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de las actividades locales de gobierno. Ya anteriormen-

te el Consejo de Administración Fiduciaria había recalcado también la necesidad de que se aumentase el número de funcionarios administrativos y técnicos encargados de asesorar y capacitar a los habitantes indígenas. En este sentido, la Autoridad Administradora observó que el Gobierno de Nigeria se preocupaba constantemente por mantener suficiente personal en el Camerún.

En su 13° periodo de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, destacando la importancia que para el progreso político del Territorio tiene el contar con una administración pública calificada y tomando nota de la dificultad con que, debido a la competencia que crean otras ocupaciones, se tropieza para atraer candidatos idóneos hacia los cargos superiores de la administración, considera que este problema exige en primer término que se amplie la enseñanza general en el Territorio a fin de hacer surgir un conjunto suficiente de personas instruidas; y recomienda también que se amplíen más aun las facilidades para la capacitación administrativa y que se considere la posibilidad de hacer que los salarios, emolumentos y condiciones de trabajo del personal de administración pública ejerzan una mayor atracción sobre las personas calificadas.

RÉGIMEN JUDICIAL

El Territorio en fideicomiso tiene dos tipos de tribunales que funcionan paralelamente: los tribunales que aplican el derecho inglés y los que aplican principalmente el derecho y la costumbre indígenas locales, tanto en lo civil como en lo criminal. La primera categoría comprende los tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo de Nigeria y el Tribunal de Apelaciones del África Occidental. La segunda categoría comprende los tribunales indígenas, que constituyen la rama judicial de las Autoridades Indígenas. Los tribunales de la primera categoría pueden conocer de las apelaciones interpuestas contra los fallos emitidos por los tribunales indígenas, y en tales casos se respetan, generalmente, el derecho y la costumbre indígenas.

Los tribunales indígenas se dividen en cuatro grados, y cada grado tiene su jurisdicción concretamente circunscrita tanto en lo civil como en lo criminal. Los tribunales indígenas de primer grado ejercen a menudo la más amplia jurisdicción, pero no pueden condenar a castigos corporales y ninguna sentencia de muerte puede ser ejecutada sin que la haya ratificado el Gobernador.

Los magistrados se dividen en tres grados, el primero de los cuales tiene facultad para conocer de casos civiles, cuando la deuda o las indemnizaciones reclamadas no sobrepasan de 200 libras esterlinas, y en lo criminal cuando la penalidad implica una multa no mayor de 200 libras esterlinas, o dos años de cárcel o ambas cosas a la vez. En el periodo que se examina se creó un nuevo grado, el de magistrado principal, que tiene jurisdicción en asuntos civiles y criminales que impliquen penalidad no mayor de 500 libras esterlinas o cinco años de cárcel o ambas cosas. Hay también un magistrado principal que tiene a su cargo la actividad administrativa de diversos distritos judiciales, y que vela por el pronto despacho de los asuntos.

En un memorándum presentado a la Misión Visitadora de 1952, el Mamfe Divisional Committee afirmó que el sistema judicial indígena era anticuado y requería

una reforma. En dicho documento se proponía que se fijaran sueldos adecuados para los miembros de tribunales a fin de evitar la corrupción y que, con el objeto de separar de la rama judicial a las instituciones gubernamentales locales, no se permitiera a los miembros de los consejos actuar como jueces. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que la conveniencia de establecer en lo posible una separación entre los funcionarios judiciales y los del gobierno local, constituía una de las recomendaciones formuladas por la Comisión Investigadora designada para estudiar el sistema judicial indígena. Esta investigación había terminado, y el informe del Comisionado sería uno de los primeros asuntos que consideraría el nuevo Gobierno del Camerún Meridional.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria hechas a título personal únicamente

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

El representante de la China se mostró vivamente impresionado por el rápido desarrollo de la conciencia política entre la población indígena, especialmente en el Camerún Meridional, y por el papel cada vez más importante que desempeñaba el "bloque camerunés" en la asamblea legislativa central. Expresó la satisfacción que le causaba la decisión adoptada por la Conferencia sobre la Constitución de Nigeria para conceder un grado mayor de autonomía al Camerún Meridional, pero estimaba que se debía dedicar mayor estudio a las disposiciones constitucionales en los aspectos relativos a la unión administrativa con Nigeria. Señaló que el Camerún Septentrional quedaría completamente absorbido por la Región Septentrional de Nigeria, en tanto que ni siquiera la mayor autonomía del Camerún Meridional garantizaba a esa parte del Territorio en fideicomiso una individualidad aparte.

El representante de los Estados Unidos de América expresó gran satisfacción ante el progreso político alcanzado por el Territorio en fideicomiso, y opinó que los últimos adelantos registrados en el orden constitucional en Nigeria y en el Camerún, como así también en los territorios vecinos, parecían indicar que se aproximaban al gobierno propio.

El representante de Australia felicitó a la Autoridad Administradora por su decisión de establecer un gobierno independiente para el Camerún Meridional, para satisfacer los deseos libremente expresados por el pueblo. Manifestó que los acontecimientos que condujeron a esta decisión demostraban claramente que la Autoridad Administradora desempeñaba cabalmente su papel en la promoción del progreso político del pueblo.

El representante de Siria dijo que el Consejo no podía dejar de observar que, al conceder alguna autonomía regional al Camerún Meridional, la Autoridad Administradora había cedido a la presión de la opinión pública del país. Señaló que cuando anteriormente el Consejo y su Misión Visitadora de 1949 recomendaron que se diese al Territorio un grado mayor de autonomía, la Autoridad Administradora declaró que por razones abrumadoras ello no era práctico. La última decisión de dicha Autoridad modificaba radicalmente esa actitud en cuanto al Camerún Meridional se refería. El Consejo debía tomar nota formalmente de este cam-

bio extraordinario de circunstancias. El representante de Siria pasó luego a analizar los rasgos de la Constitución reformada que le parecían más importantes y que le hacían llegar a la conclusión de que en realidad, en el orden nacional, el Territorio en fideicomiso sería administrado por un Gobierno Federal de Nigeria, y en el orden regional en la parte septentrional, por un gobierno regional de Nigeria; sólo en la parte meridional sería administrado por un gobierno no nigeriano, y ello únicamente en la esfera regional. El Acuerdo de Administración Fiduciaria estipula, sin embargo, que la Autoridad Administradora del Camerún es el Gobierno del Reino Unido y que ese Gobierno tiene plenos poderes para legislar y administrar el Territorio en fideicomiso. Pero evidentemente, el Gobierno del Reino Unido perdería esos poderes plenos; no podría conservarlos por el mero hecho de reservar un derecho de veto sobre las medidas adoptadas por los órganos representativos de Nigeria y el Camerún. No se trata de dar un paso atrás e insistir en que se cumpla rígidamente la letra del Acuerdo de Administración Fiduciaria, sino, más bien de que, al parecer, los hechos se han adelantado al Acuerdo. Era deber del Consejo señalar a la atención de la Autoridad Administradora y de la Asamblea General esta nueva situación. El Consejo debía acoger con agrado la decisión de establecer una forma de autonomía regional para el Camerún Meridional, en cuanto ello representaría por sí mismo un jalón importante en la marcha de ese sector del Camerún hacia el gobierno propio. Asimismo, debería expresar la opinión de que esta nueva disposición no debe ser óbice para que el Camerún se separe aun más del control de Nigeria si el pueblo así lo desea.

Además, el Consejo debía plantear formalmente la cuestión de si el control sobre los asuntos del Camerún (en los aspectos reservados al Gobierno de Nigeria y en todas las cuestiones internas del Camerún Septentrional) por órganos predominantemente nigerianos era compatible con los términos del actual Acuerdo de Administración Fiduciaria, y si no se debía revisar ese Acuerdo para tomar en cuenta esta situación y también para garantizar que los intereses del Territorio en fideicomiso quedaran plenamente resguardados en todos los casos en que el Gobierno Federal de Nigeria y el Gobierno Regional Septentrional actuaran de hecho como Autoridades Administradoras. Pero llegárase o no a tales conclusiones en esa etapa, el Consejo debía referir todo el asunto a la Comisión de Uniones Administrativas para que los estudiase con mayor detenimiento e informase al Consejo en su siguiente período de sesiones. Por otra parte, como las nuevas disposiciones constitucionales tendían a aumentar la separación del Camerún Septentrional y del Camerún Meridional, y como al parecer la opinión pública no se había desarrollado en el norte de tal manera que el Camerún en su totalidad pudiese presentar una demanda común de autonomía regional, el representante de Siria estimó que sería conveniente volver a plantear toda la cuestión de las disposiciones administrativas y constitucionales del Camerún Septentrional en fecha posterior, cuando ya existiese en esa zona una opinión pública auténtica. El Consejo debía tomar nota de que la actitud de los jefes y notables del norte, cuyos intereses personales se acercaban quizá más a Nigeria que al Camerún, era por el momento la única expresión de la opinión pública; debía recomendar que se siga encareciendo, en el norte y en el sur del país, la conveniencia de lograr una mayor

unidad política y administrativa entre ambas partes; y se debía proseguir el estudio en común de los planes de desarrollo.

El representante de Bélgica estimó que era muy prematuro hacer comentarios sobre los acontecimientos políticos recientes. Expresó la esperanza, sin embargo, de que se desarrollarían aún más la conciencia nacional y el sentido de responsabilidad entre la población indígena, y reconoció que el interés de ésta por los asuntos políticos había evolucionado rápidamente.

El representante de la India observó que la cantidad de representantes del Camerún en los órganos gubernamentales de Nigeria, tanto en los regionales como en los federales, no debería limitarse a reflejar proporcionalmente la población, sino que debería ser lo suficientemente numerosa para permitir que los intereses del Camerún estuviesen representados adecuadamente. Si esto no se pudiese lograr, no quedaría al pueblo del Camerún, para alcanzar la libre determinación, otro camino que acelerar la evolución hacia la autonomía estatal. En cuanto a si él debía quedar integrado con Nigeria o si debía existir un estado puramente camerunés, el representante de la India no deseaba mostrarse dogmático. El único principio que, a su criterio, no admitía transacciones, era el de la libre determinación; la Autoridad Administradora se había comprometido a mantener ese principio, y él no abrigaba dudas de que así lo haría.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, reseñando la manera en que el Camerún había quedado integrado con Nigeria, declaró que los informes de la Autoridad Administradora y de la Misión Visitadora demostraban que se estaba despojando al Camerún de los derechos especiales y de la condición jurídica de que debía gozar como Territorio en fideicomiso. En efecto, la Autoridad Administradora, sin consultar al Consejo de Administración Fiduciaria ni a la Asamblea General, había desmembrado el Territorio, y anexado sus diversas partes a la colonia de Nigeria a pesar de que tal medida entrañaba una violación de la Carta y de las decisiones de la Asamblea General, especialmente de la resolución 224 (III), que exige el desarrollo del Territorio en fideicomiso como una entidad independiente. Con arreglo a las nuevas disposiciones constitucionales adoptadas en la reciente conferencia (al margen de las Naciones Unidas), la unidad del Territorio experimentó un perjuicio aun mayor. El Consejo debía estudiar atentamente esta situación, como así también el hecho de que la información suministrada por la Misión Visitadora de 1952 y la que figura en las peticiones ponen en evidencia que la población del Camerún desea tener carácter propio como territorio en fideicomiso y teme que sus intereses sean subordinados a los de Nigeria, o sufran menoscabo por causa de ellos. Lo que se debe dilucidar es si el Camerún marchará hacia el gobierno propio o la independencia, tal como lo estipulan la Carta y el Acuerdo de Administración Fiduciaria, o si en último término el territorio se convertirá definitiva y completamente en provincias o regiones de Nigeria. El Consejo debe exigir a la Autoridad Administradora que modifique su administración del Territorio en fideicomiso para ponerla de acuerdo con lo que establece la Carta; en otras palabras, que lo administre como un Territorio independiente y no como una colonia, pues entre uno y otro tipo de territorio debe existir una nítida línea divisoria. A ese respecto, el Consejo debía recomendar

que la Autoridad Administradora adopte las medidas necesarias para desarrollar los órganos de gobierno propio del Territorio en fideicomiso, y para adiestrar y preparar a los habitantes a fin de que se hagan cargo de la administración del país.

El representante de El Salvador estimó que era quizás prematuro arribar a conclusiones precisas y definitivas sobre la base de la información existente. Sin embargo, dos hechos emergían con bastante claridad. El primero era el nuevo *status* que se concedería al Camerún Meridional; a ese respecto, su delegación no podía menos que expresar la satisfacción que le causaba el hecho de que el pueblo del Camerún Meridional hubiese conquistado un nuevo trecho en el camino hacia la consecución de su total autonomía. Su delegación expresaba su reconocimiento a la Autoridad Administradora por haber acatado la voluntad del pueblo en esa parte del territorio. Respecto del segundo hecho, el entusiasmo de su delegación se desvanecía en parte. Le hubiese agradado escuchar que todo el Territorio había alcanzado la condición de la parte meridional. No desconocía las grandes diferencias que existían entre el norte y el sur del Camerún, pero no creía que existiesen obstáculos o barreras insalvables. En su opinión, se debería alentar a la parte norte del Territorio y establecer mayor contacto entre ambas partes. Debería intensificarse la enseñanza en el norte, y hacer un esfuerzo para que los habitantes comprendieran el hecho de que ellos en el norte, unidos con el sur, constituían, en el aspecto jurídico internacional, una entidad de distinta naturaleza que la de una colonia. También se debía tener en cuenta la voluntad actual de este pueblo, según se la entendiese; pero en el norte existía todavía un número muy grande de jefes que ejercían gran autoridad sobre las tribus; los intereses de estos jefes eran enormes y su voluntad indiscutible, pero esa voluntad no debía interpretarse como la voluntad de todo el pueblo. A este respecto, sería muy interesante que la Autoridad Administradora proporcionase un mapa con la distribución de las tribus y el asiento de los jefes superiores.

El representante de Haití, refiriéndose al contraste que se presentaba entre la actitud de la Autoridad Administradora en 1949 y su actitud en 1954, estimó indispensable que, a pesar de las buenas intenciones de las Autoridades Administradoras, los pueblos directamente interesados expresasen cada vez más sus opiniones respecto de sus propios problemas. Si existían buenas soluciones desde el punto de vista de la propia Autoridad Administradora, debía haberlas aun mejores si se estudiase detenidamente el otro punto de vista. El representante de Haití no diría que se había alcanzado una solución en el caso del Camerún bajo administración británica, pero parecía que se había dado un paso hacia adelante, por lo menos en el Camerún Meridional. La población indígena desempeñaría un papel más importante en los órganos regionales y centrales, aunque, en opinión del orador, los representantes directos de la Autoridad Administradora ejercían demasiada influencia en sus deliberaciones. Los poderes exorbitantes que ejercía el Gobernador prodrían reducir el gobierno local a una fantasmagoría. Señaló además que el Camerún meridional disfrutaba de un mayor grado de ayuda financiera, sanitaria y educativa, y expresó el temor de que estuviese recibiendo un trato preferencial en detrimento del norte del país. Finalmente, reservó la opinión de su delegación respecto de las mo-

dificaciones constitucionales, hasta tanto contase con mayor información.

El representante de la Autoridad Administradora manifestó que al administrar el Territorio (con arreglo a lo prescrito por el inciso a) del artículo 5 del Acuerdo de Administración Fiduciaria) como parte integral de Nigeria, la Autoridad Administradora tenía en vista principalmente los deseos crecientes de los habitantes, como lo demuestra la decisión, adoptada en principio, de conceder *status* separado e instituciones autónomas a las provincias meridionales del Camerún, y como lo demuestra también la manera en que se respetó el deseo del norte de mantener y fortalecer sus provechosos y satisfactorios vínculos con la Región Septentrional de Nigeria. La Autoridad Administradora no quería permitir que el carácter fiduciario del Territorio obstaculizara innecesariamente el adelantamiento de los habitantes hacia el pleno goce de los objetivos del Régimen de Administración Fiduciaria junto con los pueblos de Nigeria. Las responsabilidades que corresponden a la Autoridad Administradora en virtud de la Carta y del Acuerdo de Administración Fiduciaria fueron reconocidas explícitamente, y el ejercicio efectivo de las mismas garantizados en sucesivas constituciones de Nigeria.

El representante especial de la Autoridad Administradora convino en que el progreso político del Territorio era ya tan marcado que comenzaba a sentirse la necesidad de revisar los conceptos en que se basa actualmente la relación entre el Consejo de Administración Fiduciaria, la Autoridad Administradora y el pueblo del Territorio. A decir verdad, parecía que en la esfera política los objetivos del Régimen de Administración Fiduciaria estaban a punto de ser alcanzados, si es que no se los había alcanzado ya. Debido a la existencia de organismos representativos a los cuales había pasado la autoridad en todos sus aspectos, salvo aquéllos necesariamente reservados a los poderes metropolitanos, era necesario considerar nuevamente quién debía estudiar en lo futuro las recomendaciones formuladas por el Consejo. La situación sería la siguiente. En el Camerún meridional, las recomendaciones serían estudiadas por un Consejo Ejecutivo responsable, presidido por el Comisionado del Camerún y compuesto de una mayoría indígena elegida por el pueblo. En el caso de la parte septentrional del Territorio, serían examinadas por el Consejo Ejecutivo de la Región Septentrional de Nigeria, compuesto de una amplia mayoría elegida por el pueblo, y, según lo creía ahora el orador, por un comité consultivo integrado por los miembros de la Cámara de Asamblea Septentrional, que representa al Camerún septentrional. El representante especial disintió de las insinuaciones hechas en el sentido de que estos adelantos habían sido impuestos a una Autoridad Administradora reacia a concederlos; la verdad era que esa Autoridad se había mostrado invariablemente liberal respecto de la organización administrativa del Camerún. La situación había sido fluida en todo momento, y el representante especial mencionó algunos de los problemas que había sido necesario resolver durante el período de transición de la constitución anterior. Respecto de los progresos ulteriores del pueblo del Camerún hacia el gobierno propio, la Autoridad Administradora seguiría manteniendo una actitud realista, y se ajustaría a la vez a las circunstancias particulares del Territorio y de su pueblo y a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, en conformidad con los términos de la Carta. Aseguró también que la autoridad ejercida por las instituciones demo-

cráticas previstas en la nueva Constitución de Nigeria sería una realidad en un sentido muy cabal. Desde el punto de vista del Territorio en fideicomiso, la única previsible intervención del Gobernador General sería la que tuviere por objeto garantizar la estricta observación del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

En cuanto al argumento invocado en el sentido de que en los órganos regionales y federales de gobierno la representación del Camerún no se debiera basar en la población, el representante especial respondió que el sector del pueblo camerunés que deseaba una organización regional propia seguía aspirando a participar en la Federación de Nigeria, de la cual esperaba recibir apoyo financiero. Por lo tanto, era necesario considerar los deseos de los otros miembros de la Federación además de los del Camerún Meridional. La representación lograda por el Camerún Meridional era justa con respecto a todos los partidos y brindaría al pueblo la oportunidad de hacerse escuchar positivamente en los consejos de estado. En el caso del Camerún Septentrional, la representación basada en la proporción del número de habitantes parecía plenamente apropiada.

El representante especial, contestando específicamente al representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, observó que eran ya bien conocidas las razones por las cuales el Territorio difícilmente se convertiría en una entidad unida e independiente. El Comité de Uniones Administrativas había apreciado en todo su valor el cuidado con que la Administración preservaba la identidad del Territorio en fideicomiso, en la medida en que los deseos del pueblo así lo permitían. Estaba suficientemente demostrado que la vinculación establecida entre el pueblo del Camerún y el estado de Nigeria, que evolucionaba rápidamente, tuvo como resultado que aquel Territorio avanzase en el camino del gobierno propio a un ritmo que pocos hubieran podido predecir uno o dos años atrás. Recalcó que no existía un deseo popular tendiente a obtener la separación de Nigeria. También era un error absoluto suponer que la Administración del Territorio era una administración de funcionarios burocráticos; las normas gubernamentales era determinadas por consejos, dependientes de los ministerios, compuestos en su mayor parte de representantes elegidos por el pueblo. Afirmó por último que se seguía promoviendo el desarrollo del Camerún Septentrional en forma sostenida.

SUFRAGIO

El representante de la India consideró injustificado el requisito que subordina el derecho de voto al pago de impuestos, sobre todo en vista de la restricción que ello imponía al voto de las mujeres. En su opinión, se debía conceder incondicionalmente el derecho de voto a todas las personas adultas de uno y otro sexo.

El representante especial de la Autoridad Administradora explicó que de hecho tenían el derecho de sufragio todos los hombres adultos. La mención de los impuestos en el reglamento electoral obedecía a que la zona en que un hombre paga su impuesto determina el distrito electoral en que debe votar. La exención de tales impuestos ocurre en casos extremadamente raros y no afecta al derecho de voto de la persona a quien se concede tal exención. La representación de las mujeres era cuestión que debía quedar librada a la opinión pública del Territorio. La última vez que se revisó la Constitución la gran masa de la población se pronunció decididamente en contra de ello.

GOBIERNO LOCAL

El representante de la China observó que se habían realizado progresos satisfactorios en el gobierno local, especialmente en el Camerún Septentrional, y expresó la esperanza de que tales adelantos no se interrumpieran.

El representante de Australia señaló las dificultades con que se tropezaba para desarrollar las instituciones locales de gobierno, y manifestó confianza en que el activo interés por los problemas locales de gobierno que la Autoridad Administradora había conseguido despertar en el Camerún Septentrional se repetiría también en el sur.

El representante de Siria expresó la creencia de que el Consejo debía tomar nota de los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora para democratizar y mejorar las dependencias encargadas del gobierno local en el Territorio, y debía estimular a la Autoridad Administradora para que intensificara sus esfuerzos en ese sentido.

El representante de la India se mostró insatisfecho con la situación existente en materia de instituciones locales de Gobierno, pues la composición de las mismas se limitaba en algunos casos a personas de prestigio lugareño, tales como funcionarios y maestros de escuela. En su opinión, debía realizarse un esfuerzo decidido para sentar sobre bases más amplias el gobierno local, a fin de promover con ello el progreso político del Territorio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que en vez de crear órganos democráticos para el gobierno local del Territorio en fideicomiso, la Autoridad Administradora estaba en realidad promoviendo y alentando el retrógrado sistema tribal, a fin de mantener su propia posición; el Gobernador y el Comisionado designaban jefes tribales o de familia para desempeñar los cargos de funcionarios indígenas, de manera que las antiguas instituciones tribales perduraban con diferentes nombres. Refiriéndose al memorándum presentado a la Misión Visitadora de 1952 por la National Federation of the Cameroons, en el cual se señalaba que el sistema administrativo de jefes indígenas y autoridades indígenas no era democrático, afirmó que ya había llegado el momento de adoptar medidas para pasar del sistema tribal a un sistema de gobierno propio basado en principios democráticos.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que el interés que había despertado en el pueblo del Camerún Meridional el problema constitucional le había impedido ocuparse del problema de la reforma de gobierno local. La evolución en este terreno, para ser positiva, debía venir desde abajo y no desde arriba, y, desde hacía algún tiempo, tenía él la impresión de que los esfuerzos realizados en este sentido por los funcionarios de la administración pública no estaban produciendo resultados de gran valor. Esperaba que, una vez que los dirigentes políticos subiesen al poder, se realizarían con ellos conversaciones encaminadas a despertar el interés del electorado para iniciar con éxito un amplio movimiento.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El representante de la China expresó la esperanza de que se realizaran esfuerzos para colocar mayor número de personal indígena en los cargos superiores de la administración pública.

El representante de la India instó a que se hicieran mayores esfuerzos en ese sentido. Observando que la mejor manera de atraer a los naturales del país hacia esos cargos sería aumentar el número de personas suficientemente instruidas, expresó que la situación exigía la creación de más centros de formación profesional y más escuelas preparatorias para los aspirantes a altos cargos administrativos, así como el establecimiento de un mayor contacto entre los funcionarios europeos y las clases instruidas. Por este motivo, instó a que se aumentase el número de becas para estudiar en universidades de ultramar y a que, de ser necesario, la Autoridad Administradora recabase la ayuda de organizaciones internacionales y de otras instituciones con ese objeto.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tras observar que ningún natural del país ocupaba un puesto importante en la Administración, declaró que era indispensable el ingreso de cada vez más indígenas en la administración, a fin de lograr la evolución política paulatina del Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora afirmó que la preparación de los habitantes del Territorio para la tarea de administrarse a sí mismos constituía una de las principales normas de la Administración. El hecho de que no hubiese cameruneses en los cargos más altos de la administración pública del Territorio no era un índice del éxito que en efecto se estaba alcanzando; la principal línea de progreso la daban las notables oportunidades educativas que, en materia de administración pública, significaba la participación del pueblo, con plena responsabilidad, en los organismos legislativos y ejecutivos, en la Cameroons Development Corporation, en los comités locales de enseñanza y sanidad y en diversos órganos consultivos especiales. El atractivo que ejercían estas amplísimas oportunidades de adquirir experiencia y responsabilidad administrativas había de hecho conspirado contra el ingreso de los cameruneses en los cargos más altos de la administración pública. Cabía esperar, con todo, que la reciente ampliación general de los servicios de enseñanza en los grados inferiores, pronto empezaría a dar resultado en los niveles más altos de la administración y permitiría contar con aspirantes más capacitados para los cargos públicos.

RÉGIMEN JUDICIAL

El representante de la China expresó la esperanza de que, al examinar las recomendaciones formuladas por la Comisión Investigadora respecto del sistema judicial indígena, el nuevo Gobierno del Camerún Meridional tendría en cuenta las atinadas opiniones expuestas por el Mamfe Divisional Committee a la Misión Visitadora de 1952.

El representante especial de la Autoridad Administradora tomó nota de las esperanzas manifestadas en el sentido de que el Gobierno del Camerún Meridional emprendiera la reforma del régimen judicial indígena.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La economía del Camerún bajo administración británica es esencialmente agrícola, ya que no existen re-

curso minerales de reconocido valor comercial ni industria manufacturera, salvo alguna fábrica moderna para la elaboración del aceite de palma y del caucho y una pequeña industria de artesanías.

El factor singular de mayor importancia en la economía del Territorio es la Corporación de Fomento del Camerún, cuyas plantaciones, conjuntamente con las haciendas menores de dos compañías comerciales, producen la mayor parte de los plátanos, el cacao y los productos derivados de la palma, así como casi toda la producción de caucho. Los habitantes indígenas del Territorio son en su casi totalidad agricultores y ganaderos y producen la mayor parte de los alimentos que el Territorio necesita, casi toda la producción de cacahuetes, pieles y cueros, importantes cantidades de cacao y de productos derivados de la palma, y un volumen creciente de café.

Las principales exportaciones del Territorio, en su orden de importancia, son las bananas, el cacao, el aceite de palma, el caucho, los cacahuetes y las nueces de palma. El rubro de mayor importancia lo constituyen las bananas, cuyas exportaciones ascendieron a £2.270.000 en 1952, o sea más de la mitad del valor total de las exportaciones efectuadas durante dicho año.

Sin embargo, se ha observado un aumento significativo en la producción de cacao y de cacahuetes, el valor de cuyas exportaciones llega a £517.335 y £341.000 respectivamente. El Territorio, aunque dista mucho de ser rico, ha continuado evolucionando en un sentido de expansión económica, y en 1951-1952 los ingresos previstos sobrepasaron nuevamente a los gastos; tanto unos como otros aumentaron considerablemente.

La dependencia del Territorio de la producción de bananas, que constituye su principal cultivo, ya ha sido motivo de preocupación por parte del Consejo de Administración Fiduciaria, que tanto en su noveno como en su 11° período de sesiones había recomendado que se realizaran mayores esfuerzos para diversificar la economía del Territorio. En 1952 se dieron nuevos pasos en este sentido, al iniciarse lo que podría resultar con el tiempo una importante industria del café en el Camerún meridional. Una empresa cooperativa estableció, con la ayuda del Gobierno, cerca de Kumba, una fábrica para descascarar café que se espera traerá un gran aumento en la producción de café de la región; al mismo tiempo la Junta Regional del Este para el Fomento de la Producción (Eastern Regional Production Development Board) comenzó los trabajos para el establecimiento de una plantación de 1.200 acres en Santa, cerca de Bamenda, la cual tendrá una capacidad potencial de producción de varios millones de libras de café por año, y que se espera estimulará la producción de café por los campesinos comarcanos. La distribución de plantas de café a los agricultores produjo un aumento de más de 500 acres en las plantaciones de la Provincia de Bamenda, y se están adoptando medidas para fomentar la producción de café en el distrito de Mambila de la Provincia de Adamawa. Al observar las favorables perspectivas que algunas secciones de la Provincia de Bamenda ofrecen al cultivo del café, la Misión Visitadora de 1952 sugirió que la Autoridad Administradora considere la adopción de medidas adecuadas para la explotación intensiva de dichas tierras, en tanto que protege debidamente los intereses de la población indígena.

La Autoridad Administradora informó de otras medidas que fueron adoptadas para diversificar la econo-

mía, entre las cuales figura la rehabilitación de granjas de cacao abandonadas, que se mantuvo en constante progreso durante el año que se examina, y el establecimiento de la primera bolsa de algodón del Territorio. Se informa que el cultivo del arroz se ha difundido mucho en el distrito de Jada de la Provincia de Adamawa; con menor éxito se hicieron esfuerzos para introducir el tabaco de Virginia en el Emirato de Dikwa.

Cuatro de los cultivos de exportación del Territorio, a saber, el cacao, los productos derivados de la palma, los cacahuetes y el algodón, se comercializan por medio de las Juntas de Comercialización oficiales de Nigeria, que fueron establecidas con el objeto de asegurar una comercialización ordenada y para prevenir violentas fluctuaciones de los precios mediante el manejo de fondos de estabilización. Empleando fondos que forman parte de las utilidades no afectadas a la estabilización de precios, dichas juntas asignan recursos para la labor de investigación y de desarrollo económico en las regiones productoras. La administración de estas asignaciones está a cargo de las juntas regionales para el fomento de la producción, las que a su vez conceden fondos para proyectos de desarrollo específicos. En 1952 la Junta Regional del Norte para el Fomento de la Producción (Northern Regional Production Development Board) votó, entre otras cosas, £125.000 para la construcción de caminos en el Camerún y £4.500 para el reasentamiento de los paganos montañeses del distrito de Gwoza. La Junta Regional del Este financió los esfuerzos del Departamento de Agricultura para restaurar la industria del cacao del Territorio, y también asignó en su presupuesto una suma de £165.000 con destino a la ya mencionada plantación de café de Santa. Sin embargo, la Misión Visitadora recibió quejas en el sentido de que las asignaciones de las Juntas con destino al Territorio en fideicomiso eran insuficientes si se las comparaba con las que recibía Nigeria.

Una de las normas observadas por la Administración ha sido la de alentar a los agricultores indígenas a que participen en sociedades cooperativas. A fines de 1952 había 38 sociedades cooperativas en las Provincias del Camerún y de Bamenda, de las cuales 35 eran cooperativas de producción y tres eran exclusivamente sociedades de comercialización. En el curso del año, la Unión de Agricultores Bakuiris (Bakweri Farmers' Unión) se constituyó en una sociedad cooperativa que contaba con 118 miembros; se dedicó a la producción de bananas con la ayuda del Gobierno y con arreglo a un contrato con la Corporación de Fomento del Camerún. La Misión Visitadora pudo observar que la sociedad inició sus actividades en forma promisorias y con buenas perspectivas de éxito; no obstante, la Autoridad Administradora informó que la sociedad todavía dependía lamentablemente de la supervisión directa del Gobierno y estaba aun lejos de utilizar plenamente la tierra, aunque más tarde declaró que las actividades de la sociedad parecían justificar el optimismo de la Misión. La Misión notó que el proyecto marcaba un paso hacia adelante en el esfuerzo para solucionar el litigio sobre las tierras de los bakuri (véase más adelante) y que la Administración merecía elogios por el apoyo y la asistencia que había prestado al mismo. En 1952 se inscribieron seis nuevas sociedades, tres de las cuales se dedicaban a la comercialización del café. Sin embargo, en la división de Kumba fueron liquidadas tres sociedades para la comercialización del cacao, debido a la falta de interés de los productores. El representante especial

de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que un nuevo acontecimiento de importancia lo constituía la formación de una organización denominada Cooperativa de Exportadores del Camerún, Limitada (Cameroons Co-operative Exporters Limited), la cual se basaba en las cooperativas de los productores y tenía por finalidad la comercialización de sus cosechas.

Tanto la Misión Visitadora de 1949 como la de 1952, llamaron la atención hacia los métodos generalmente primitivos empleados por los campesinos agricultores, y se recordará que el Consejo de Administración Fiduciaria, en su sexto período de sesiones, pidió con carácter urgente a la Autoridad Administradora que intensificara su programa destinado a dotar de métodos modernos a la agricultura indígena. Este programa se está realizando con los servicios agrícolas y ganaderos que suministran tanto los Departamentos Técnicos de Nigeria como las Autoridades Indígenas. Además de una estación experimental agrícola cerca de Bamenda y de un centro de investigación ganadera en Jakiri, existen granjas modelo mantenidas por el Departamento de Agricultura o por las Administraciones Indígenas y una clínica veterinaria que fué inaugurada en 1952 en Mubi, en el Camerún Septentrional. También se estaba estableciendo por entonces en la Provincia del Camerún una segunda estación experimental agrícola para el desarrollo de la industria del cacao y de la producción de alimentos.

Según informa la Autoridad Administradora, gran parte de la labor del personal agrícola se relaciona con el mejoramiento de los cultivos existentes y con la introducción de otros nuevos. Ya se ha hecho referencia al desarrollo de la producción del café y del cacao; también se informó al Consejo que en la división de Kumba la producción de cacao aumentó durante el año 1952 en más de 2.000 toneladas, debido principalmente al éxito alcanzado por la propaganda relativa a la conservación de granjas y a las labor de las granjas experimentales. Se asigna especial importancia al desarrollo de cultivos mixtos. De 1950 a 1952 la cantidad de granjas mixtas aumentó de 25 a 155: 11 de dichas granjas estaban ubicadas en la Provincia de Bamenda y cada una de ellas recibió un subsidio gubernamental, en tanto que a 28 de ellas se las preparaba para un sistema de explotación en grupos que se aplicaría en 1953. Tanto en el Camerún Meridional como en el Septentrional se distribuyeron semillas de arroz, árboles frutales, arbolitos de palmas aceiteras y fertilizantes a los agricultores, sea en forma gratuita a o un precio sumamente bajo, y mediante el procedimiento de demostración se difundieron métodos modernos de cultivo, incluyendo métodos para combatir la erosión del suelo. También se trató de alentar la explotación comercial de granjas y el cultivo de tabaco en el Emirato de Dikwa, y se realizaron tres exposiciones agrícolas en la Provincia de Adamawa. El éxito de estos esfuerzos quedó reflejado en una serie de notas apreciativas que recibió la Misión Visitadora de 1952, y entre las cuales figuraban al mismo tiempo solicitudes de más asistencia.

Las reservas forestales, que ahora cubren aproximadamente un 13% de las tierras, son llevadas lentamente hacia un objetivo de 25% ante el disgusto de la opinión pública en general por reservas y concesiones. Los bosques del Territorio produjeron aproximadamente 600.000 pies cúbicos de madera y leña en 1952; la mayoría de dicha cantidad era explotada por una compañía

francesa que opera con arreglo a un permiso concedido por la división de Kumba. Cuando cayeron los precios mundiales de la madera dura, esta compañía rompió las negociaciones relativas a la explotación de madera en gran escala que se estaban realizando.

A pedido de la Autoridad Administradora, una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento realizó en 1953 un estudio económico de Nigeria y del Camerún.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo toma nota con satisfacción de los salubres signos de progreso que se manifiestan en el desarrollo económico del Territorio y en la diversificación de su producción, y en especial de los aumentos que se observan en los ingresos y gastos públicos así como del estímulo que reciben las cooperativas de producción de algodón, cacao y café y otras empresas cooperativas; insta a que se hagan nuevos esfuerzos para desarrollar la autarquía económica, por ejemplo, mediante el fomento de industrias rurales subsidiarias que ofrezcan empleo conveniente a los trabajadores agrícolas y labradores que se hallan expuestos a desempleo de temporada.

El Consejo, considerando que ha existido en el Territorio la necesidad de un estudio económico que pudiera servir como base para la planificación de un desarrollo ulterior, toma nota con interés de que una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha terminado recientemente a pedido de la Autoridad Administradora, un estudio sobre Nigeria y el Camerún y expresa la esperanza de que los resultados de dicho estudio, en cuanto al Camerún se refieren, figuren en el próximo informe anual.

COMUNICACIONES

A fines de 1951 había en el Territorio 1.470 millas de carreteras transitables para vehículos automotores (en comparación con 1.164 en 1948), de las cuales 950 millas correspondían a carreteras utilizables durante todo el año, en tanto que 520 millas eran transitables únicamente durante la estación seca. Hacia fines de 1952 el total pasó de 1.500 millas. La extensión y el desarrollo de esta red de carreteras, a que el Consejo de Administración Fiduciaria había instado anteriormente, constituye un importante aspecto del plan quinquenal de desarrollo, del cual se asignaron fondos por un valor de £59.000 para 1951-1952 y de £297.000 para 1952-1953. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que el programa de desarrollo de carreteras ha ido ganando impulso y que el monto total de gastos efectuados se había elevado, hacia el 31 de marzo de 1953, a £338.000. Hacia fines de 1953 se habían realizado apreciables progresos en el mejoramiento de la principal arteria meridional entre Buca y Bamenda y se habían construido unas 15 millas de un camino proyectado entre Takum y Bamenda. Expuso la necesidad de proceder con cuidado a fin de que los fondos disponibles alcancen para continuar ininterrumpidamente el trabajo hasta abril de 1955, fecha en que ha de aprobarse un nuevo plan de desarrollo.

Tanto el Consejo de Administración Fiduciaria como la Autoridad Administradora han destacado repetidamente la importancia que tienen para la economía del Territorio el mejoramiento y el aumento de las carreteras. La Misión Visitadora informó que se siente la ne-

cesidad general de mejores vías de comunicación a través del Territorio, y que esa necesidad era particularmente urgente en el sector septentrional y en la División de Kumba. Entre los obstáculos para la construcción y conservación de carreteras figuran las inundaciones que se producen durante la estación de las lluvias, la escarpada naturaleza del terreno, la falta de piedras adecuadas y la escasez de mano de obra en algunas regiones. No obstante, a pesar de estas dificultades, la Misión estimó que se debería dar alta prioridad a proyectos para la construcción de carreteras, y señaló que la Administración compartía este criterio.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, destacando la importancia que tanto él mismo como la Autoridad Administradora han atribuido constantemente a la extensión y el mejoramiento del sistema de carreteras como uno de los medios indispensables de desarrollo económico y social, y reconociendo las dificultades especiales resultantes de la topografía del Territorio en fideicomiso, expresa la esperanza de que cualquier déficit que pueda producirse en los ingresos del territorio en 1953-1954 no sea motivo para una reducción de las asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, y que en los futuros planes de desarrollo ocupe un lugar importante la continuación del mejoramiento de los medios de comunicación.

LA TIERRA

Con arreglo a la Ordenanza sobre Tierras y Derechos de los Indígenas (*Land and Native Rights Ordinance*) de 1916, todas las tierras del territorio (con excepción de algunas zonas cuya propiedad se había adjudicado antes de la Ordenanza o, en el caso de los indígenas, antes de marzo de 1916) han sido declaradas terrenos indígenas bajo la fiscalización del Gobernador. Las personas no indígenas pueden adquirir legalmente tierras tan sólo mediante el otorgamiento de un derecho de ocupación en conformidad con la Ordenanza.

De las 34.081 millas cuadradas del Territorio, unas 12 millas cuadradas están ocupadas por el Gobierno, y aproximadamente 450 millas cuadradas por la Corporación de Fomento del Camerún, compañías mercantiles, misiones y particulares. Las posesiones de la Corporación de Fomento, que consisten de plantaciones confiscadas a intereses alemanes durante la segunda guerra mundial, llegan a unas 395 millas cuadradas; las compañías mercantiles tienen más de 34.000 acres; las misiones poseen aproximadamente 4.000 acres y los particulares (todos ellos indígenas bajo protección británica) poseen 3.823 acres. Durante el año que se examina la Corporación de Fomento entregó 37 acres al Centro de Capacitación de Artesanos (*Trades Training Centre*) de Ombe. Se asignaron 400 acres para la ampliación del Centro de Investigación Ganadera de Jakiri, y en la División de Kumba se eligieron 800 acres para un granja experimental.

La Autoridad Administradora ha declarado que, salvo algunas excepciones locales, no existe actualmente escasez de tierras. Las dos excepciones más notables son la región de montañeses paganos de la parte septentrional de la provincia de Adamawa y los montes Gwoza, en el Emirato de Dikwa. En el primero de esos casos se continúan los esfuerzos para trasladar la población a los llanos, y se informa que en el distrito de Mubi la población ha iniciado el descenso. En el caso del

Emirato de Dikwa se está adelantando en la ejecución de un plan destinado a reasentar de manera ordenada, en los llanos situados al oeste de los montes Gwoza, a los paganos montañeses. Aparte de aliviar la presión de la población, este plan también tiene por objeto mejorar su nivel económico y social y evitar que se repitan los desórdenes de 1950. El plan mereció la aprobación de la Misión Visitadora de 1952.

Los litigios sobre tierra son frecuentes en el Territorio, y fueron objeto de varias peticiones dirigidas al Consejo de Administración Fiduciaria. En su 11° período de sesiones, el Consejo consideró una petición de la Asociación de Fomento de Bamenda (*Bamenda Improvement Association*) relativa a una antigua controversia entre las tribus de Widekum y de Bali sobre tierras ocupadas por esta última tribu con anterioridad al establecimiento de la administración europea, controversia que culminó con la ruptura de hostilidades entre ambas tribus. En su resolución³¹⁶ relativa a la petición, el Consejo tomó nota del nombramiento de una Comisión de Encuesta para investigar las reivindicaciones de las dos partes y consideró que, mientras no se conocieran los resultados de la encuesta, no era necesario que el Consejo formulara recomendación alguna. En su informe anual correspondiente a 1952, la Autoridad Administradora informó que las investigaciones habían sido realizados por dos Comisiones. La primera, nombrada con arreglo a la Ordenanza de Castigos Colectivos (*Collective Punishments Ordinance*), hizo responsables por los desórdenes a tres sectores del pueblo Widekum. En consecuencia, el Gobernador impuso sobre dichas comunidades una multa de £10.000, de las cuales £9.000 fueron destinadas a indemnizar a los Balis. La Autoridad Administradora declaró que la multa, que representa algo menos de una libra por cada hombre adulto, fué pagada sin serias objeciones. La Corte de Justicia declaró culpables de fomentar la guerra entre los indígenas a un número de personas ligeramente inferior a 100, y les impuso diversas condenas. La segunda comisión (la que era objeto de referencia en la resolución del Consejo) llegó a la conclusión de que los Balis ocupaban en forma indiscutiblemente legal todas las tierras objeto de la controversia, y recomendó la realización de una encuesta administrativa, en consulta con la población, a fin de determinar si era necesaria alguna rectificación fronteriza para acomodar a comunidades de Widekums, caso en el cual, según lo decidió la Autoridad Administradora, los Balis debían ser indemnizados por el Gobierno por cualesquiera tierras que entregaren. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que la encuesta tuvo por consecuencia que las partes se pusieran de acuerdo en gran medida, y que él esperaba que un plan completo para la solución del problema estuviera listo para su presentación al Gobernador en abril de 1954.

Una segunda y antigua controversia se refiere a las reclamaciones del pueblo Bakuiri para la devolución de tierras enajenadas durante el período de administración alemana y ocupadas actualmente por plantaciones de la Corporación de Fomento del Camerún. Pese a que existe un plan de reasentamiento, con ayuda especial, que ofreció la Autoridad Administradora y que cuenta con la aprobación del Consejo de Administración

³¹⁶ Resolución 620 (XI).

Fiduciaria, el Comité de las tierras de los bakuiris (*Bakweri Land Committee*) insiste aún en sus demandas y se niega a aceptar dicho plan. Sin embargo, el representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que la Unión de Agricultores Bakuiris (*Bakweri Farmers' Union*) ha indicado que está dispuesta a discutir ajustes menores de tierras y a aceptar planes de reasentamiento agrícola de índole experimental.

En el curso de sus conversaciones con los habitantes indígenas del Camerún meridional, la Misión Visitadora recibió una petición tendiente a la abrogación de la Ordenanza sobre Tierras y Derechos de los Indígenas (*Land and Native Rights Ordinance*), a la que se calificaba como "armacrónica", y a que se la substituyera por una ley de tierras similar a la Ordenanza sobre Adquisición de Tierras Indígenas (*Native Land Acquisition Ordinance*) vigente en la región oriental de Nigeria.

La Misión Visitadora notó que la erosión del suelo constituye un serio problema en el Territorio y que la Administración trataba de combatirla mediante el fomento del cultivo en curvas de nivel y la plantación de árboles de sombra. La Misión asignó gran importancia a estas actividades, y estimó que la Administración debía perseverar en sus esfuerzos para prevenir la erosión, mediante una educación constante y, si fuere necesario, la introducción de normas obligatorias. A este respecto, la Autoridad Administradora señaló que la forma más apropiada de imponer normas obligatorias consiste en instruir a las Autoridades Indígenas, tarea que en zonas adecuadas es actualmente realizada por funcionarios administrativos. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que esas normas están en vías de ser aprobadas para su aplicación en un sector importante de la provincia de Bamenda.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, reiterando el interés con que sigue las dificultades particulares del pueblo bakuirí en el campo económico y social, toma nota con satisfacción de que un grupo de agricultores bakuiris ha organizado una cooperativa de producción, y expresa la esperanza de que las medidas adicionales que tome la Autoridad Administradora y la cooperación de los miembros de la tribu, conducirán a que se efectúen con éxito su reasentamiento y su rehabilitación

El Consejo, considerando que la erosión del suelo constituye un grave problema en el Territorio, recomienda que la Autoridad Administradora señale a la atención de las autoridades locales competentes la necesidad de recurrir a medidas de conservación del suelo, y que les señale, cuando ello sea adecuado, el ejemplo dado por las Autoridades de Bamenda al aplicar normas para el cultivo en curvas de nivel en gran parte de la provincia.

LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL CAMERÚN

La Corporación de Fomento del Camerún es una empresa pública legal establecida en 1947 para administrar, en beneficio del pueblo del Territorio en fideicomiso, las tierras y plantaciones antiguamente alemanas. Desde su creación, las actividades de la Corporación se han ampliado constantemente para incluir no sólo la producción comercial, sino también la administración de hospitales, dispensarios, escuelas e insti-

tuciones de comunidad para sus empleados, como también servicios portuarios y de comunicaciones.

Los principales productos de las plantaciones de la Corporación son bananas, caucho y productos de la palma aceitera. En 1952 se exportó un total de 3.743.801 racimos de bananas, lo que superó algo el total de 3.609.906 racimos de 1951; esa cantidad hubiese sido mucho mayor de no haberlo impedido los graves daños producidos durante el año por las tormentas. Las bananas se vendían antes bajo contrato al Ministerio de Alimentación del Reino Unido, pero hacia fines de 1952 el Ministerio anunció su intención de suspender las compras en grandes cantidades, y desde entonces la cosecha ha sido comercializada con arreglo a los términos convenidos con una compañía mercantil.

Las cuentas de la Corporación correspondientes a 1952 muestran una utilidad de operaciones de £689.843, de la cual se reservaron aproximadamente £567.629 para depreciación o para el fondo de reservas destinado a inversiones nuevas o al bienestar del personal, incluyendo los servicios de vivienda, hospitales y enseñanza. La Corporación paga el impuesto ordinario que pagan las compañías privadas (nueve chelines por libra esterlina) y en esta forma proporciona, a la vez que con los derechos de aduana, una parte de los ingresos públicos previstos para el Territorio en fideicomiso.

El excedente de utilidades de la Corporación correspondiente a 1952 alcanzó a £51.108, o sea algo menos que el total de £55.559 del año anterior. La Corporación tiene la obligación legal de poner este excedente a disposición del Gobernador de Nigeria para que lo aplique en provecho de los habitantes del Territorio en fideicomiso. Generalmente, el Gobernador efectúa la distribución de dicha parte de las utilidades después de celebrar consultas con comités de desarrollo local, y las asigna a proyectos específicos de desarrollo local. Este principio de las consultas, sin embargo, fué ampliado en 1951 mediante la convocación de una conferencia representativa territorial con ese fin. El Consejo de Administración Fiduciaria expresó su beneplácito ante este hecho en su 11° período de sesiones, al manifestar la esperanza de que se continuarían esas consultas y de que se ampliaría el alcance de sus debates, cuando ello fuere apropiado.

Se informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que a consecuencia de la modificación de los estatutos propuestos para 1954 se ha manifestado entre los dirigentes septentrionales la tendencia a oponerse a cualesquiera futuras asignaciones de utilidades extraordinarias de la Corporación al Camerún Septentrional, con el objeto de evitar cualquier impresión de ingerencia política del sur.

El Consejo se ha preocupado por fomentar la máxima participación de la población indígena en las actividades de la Corporación. Actualmente, la junta administrativa de la Corporación tiene nueve miembros (cuatro de los cuales son africanos), y la Autoridad Administradora ha hecho manifiesta la norma de que a su debido tiempo las operaciones de la Corporación deberán confiarse a representantes electos de la población indígena. En respuesta a una petición que recibió la Misión Visitadora pidiendo una mayor representación indígena en la junta, la Autoridad Administradora declaró que aunque su finalidad era aumentar lo antes posible el número de miembros de la junta naturales del Camerún, debía considerarse ante todo la eficiencia comercial que exige la inclusión entre los miembros de la junta de

un número suficiente de personas con experiencia en asuntos administrativos y en comercio internacional. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° periodo de sesiones, que el número de miembros de la Corporación que son indígenas naturales del Camerún ha pasado de tres a cuatro.

Con respecto a sus empleados, la Corporación sigue la política de ofrecer formación profesional a los africanos para facilitar su ascenso a puestos de alta categoría, y con esta finalidad costea programas de formación profesional y becas para su personal, como también un sistema general de becas para enseñanza superior accesible a todos los habitantes del Camerún. En su 11° periodo de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó que se siguiera acelerando en lo posible el nombramiento de personas indígenas para ocupar puestos de responsabilidad y que, con ese objeto, se orientara el programa de becas, en todo lo posible, hacia la formación profesional en materia de métodos comerciales y técnicos adecuados para la administración de la Corporación. Posteriormente, durante el periodo comprendido entre diciembre de 1951 y junio de 1952, cinco africanos fueron nombrados para puestos de alta categoría, y la Autoridad Administradora ha informado que, de conformidad con las recomendaciones del Consejo, la concesión de becas se limitará, en lo futuro, a estudiantes de medicina, enfermería, contabilidad, ingeniería, comercio y agricultura.

La Misión Visitadora de 1952 recibió una petición del sindicato obrero de la plantación de Likomba (explotada por una compañía británica con arreglo a una concesión) en la cual se solicitaba que las utilidades de la compañía fueran publicadas y empleadas en beneficio del Territorio de la misma manera que las utilidades excedentes de la Corporación. La Autoridad Administradora señaló que esto no sería posible debido a que la Compañía era una empresa comercial. No obstante, sus operaciones son muy provechosas para el Territorio, tanto indirectamente como por el pago de impuestos y derechos de aduana.

En su 13° periodo de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, reafirmando su reconocimiento del importante papel que desempeña en la economía del Territorio la Corporación de Fomento del Camerún y su anterior aprobación de los principios y normas básicos de la Corporación, recomendando que se adopten todas las medidas adicionales posibles tendientes a acelerar la formación profesional de personal indígena, para que éste participe cada vez más en las responsabilidades de sus trabajos.

El Consejo, habiendo tomado nota anteriormente de que la Corporación fué establecida en beneficio de todo el Territorio en fideicomiso, y habiendo acogido con satisfacción y alentado la celebración de consultas de amplitud territorial sobre la asignación de sus utilidades extraordinarias, toma nota de la tendencia existente entre los representantes del Camerún Septentrional en el sentido de declinar, por razones políticas, cualesquier asignaciones futuras de tales fondos, y pide a la Autoridad Administradora que mantenga informado al Consejo sobre la evolución de la opinión pública en esta materia.

HACIENDA PÚBLICA

Debido a su unión administrativa con Nigeria, el Camerún no tiene presupuesto separado ni deuda pú-

blica independiente. Sin embargo, en los informes anuales de la Autoridad Administradora han figurado, cada vez con mayor detalle, los cálculos de ingresos y egresos atribuibles al Territorio. Este mero ejercicio estadístico, como lo ha llamado la Autoridad Administradora, ha adquirido en los últimos años importancia práctica para el Territorio, ya que se creó un fondo especial de desarrollo tomando como base el aparente superávit arrojado por los ingresos sobre los gastos. Este superávit se ha producido anualmente a partir del ejercicio económico de 1948-1949, y tanto los ingresos como los gastos han aumentado en forma sostenida, de la siguiente manera:

Año	Ingresos £	Gastos £	Superávit £
1949-50	1.045.000	880.000	165.000
1950-51	1.145.000	1.061.000	84.000
1951-52	1.410.000	1.357.000	53.000

Las principales fuentes de ingresos son los impuestos directos e indirectos y los derechos de aduana, que en 1951-1952 alcanzaron a £1.117.000. De este total, £527.000 correspondieron a derechos de aduana y £501.000 a impuestos pagados por las compañías comerciales, inclusive la Corporación de Fomento del Camerún. Los impuestos directos se recaudan bajo la forma del impuesto sobre la renta personal, aplicable a las personas no indígenas, a las compañías y a los indígenas residentes en Lagos, y de los impuestos indígenas, de los que las Autoridades Indígenas retienen la mayor parte. La tasa de los impuestos indígenas varía considerablemente de una región a otra; en algunos casos se recauda como un impuesto de tasa uniforme y en otros se calcula sobre la rental anual determinable de colectividades o particulares. Los impuestos indirectos consisten principalmente de derechos de importación y exportación y de impuestos sobre el consumo; estos últimos gravan la cerveza y los cigarrillos.

El fondo especial de fomento del Camerún, que ya ha sido mencionado y que tiene como base el superávit arrojado por el cálculo de ingresos y gastos, fué creado en 1951 con una aportación inicial de £350.000, aumentada posteriormente con una suma de £204.000 correspondientes al superávit calculado para 1950-1951. A partir de entonces se aportaron al fondo dos sumas de dinero adicionales de £148.911 y £150.000; la primera provino de utilidades obtenidas en la explotación de la plantación de Likomba, cuando la misma se hallaba bajo la administración del Custodio de la Propiedad Enemiga, y la segunda fué una contribución del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial (*Colonial Development and Welfare Fund*). Ya se ha hecho una aportación de £47.000 correspondiente al superávit previsto para 1951-1952.

Con arreglo al plan quinquenal de desarrollo de Nigeria, que abarca el periodo 1951-1956, se asignó un total de £380.392 para gastos de desarrollo en el Camerún durante los ejercicios económicos de 1951-1952 y 1952-1953. Este nuevo plan es una versión modificada del plan decenal de desarrollo aprobado en 1946 y asigna mayor importancia a obras de importancia económica, especialmente a la construcción de carreteras.

Como ya se ha señalado, otros fondos destinados al desarrollo provienen de las utilidades extraordinarias de la Corporación de Fomento del Camerún y de subvenciones concedidas por las Juntas Regionales del Norte y del Este para el Fomento de la Producción. La Misión Visitadora de 1952 recibió una propuesta

tendiente a fusionar esos fondos con el Fondo de Fomento del Camerún y a que los administre un solo órgano. Sin embargo, la Autoridad Administradora declaró que esto no sería práctico, ya que los fondos están destinados a diferentes finalidades.

Con arreglo a las disposiciones constitucionales, los ingresos del Territorio se asignan a presupuestos separados del gobierno central y de los diversos gobiernos regionales. Además, las Autoridades Indígenas tienen presupuestos propios y destinan sus gastos a servicios y obras locales. En su sexto período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó que la Autoridad Administradora, al examinar los presupuestos de las Autoridades Indígenas del Camerún, tuviera en cuenta la conveniencia de mantener un equilibrio adecuado entre el costo de la administración y los gastos correspondientes a servicios sociales y de otra índole. Durante los años 1950-1951 y 1951-1952, los ingresos totales de las Autoridades Indígenas aumentaron de £271.900 a £318.100, cifra que en 1952-1953 aumentó aun a £337.200. El total de gastos en 1951-1952 fué de £250.800, y el rubro particular más importante, el de administración, alcanzó a £34.400. Para 1952-1953 se calculó un total de gastos de £285.500; los rubros más importantes eran los de administración (£36.800), educación (£35.300), sanidad y asistencia médica (£25.400), obras públicas periódicas (£36.800) y obras públicas extraordinarias (£39.300).

El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que para el ejercicio económico de 1953-1954 del Territorio cabía esperar un déficit como resultado de una disminución de las contribuciones impositivas de la Corporación de Fomento del Camerún, debida a exenciones legales en lo que respecta a inversiones en bienes de capital. No obstante, había perspectivas de una recuperación considerable en 1954-1955.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la China tomó nota con satisfacción del aumento de los ingresos y gastos destinados al desarrollo del Territorio, como también de las medidas adoptadas para diversificar la economía del Territorio y, en especial, el mejoramiento del cultivo del algodón en el norte y el fomento de la producción de cacao y café en el sur.

El representante de Australia dijo que el Consejo podría muy bien tomar nota de los saludables signos de progreso en el desarrollo económico y en la diversificación de la producción del Territorio. Interesábale en especial el apreciable aumento de las sociedades cooperativas.

El representante de Siria sugirió que el Consejo recomendase la pronta realización de un estudio económico del Territorio en fideicomiso (preferiblemente en colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados) a fin de suministrar una base para la planificación del desarrollo y la diversificación de la economía. Añadió que en cualquier plan de esta índole le correspondería un papel destacado a la Corporación de Fomento del Camerún, cuyas normas financieras y cuyos programas de desarrollo debían ser cuidadosamente integrados con los del Gobierno. Al declarar que

debiéranse adoptar medidas adicionales para diversificar la economía del Territorio, sugirió que podrían tomarse para explotar los recursos de maderas existentes en provecho de la población.

El representante de la India definió la base de la economía como estrictamente colonial, en el sentido de que la población estaba constituida por "picadores de leña y acarreadores de agua" que producían materias primas para la exportación y dependían especialmente del mercado de bananas para su existencia. El hecho de que el Territorio dependiese de la exportación de unos pocos productos primarios, producidos por los habitantes pero comercializados por otros, constituía un defecto básico de su economía. Instó a que se realizaran esfuerzos para desarrollar la autarquía económica del Territorio, especialmente mediante el estímulo a las industrias rurales subsidiarias más provechosas para los trabajadores agrícolas y labradores expuestos al desempleo de temporada. Si el Territorio había de ser independiente, era necesario que su economía no fuese tan vulnerable con respecto a las tendencias del consumo o a la actitud política de otras potencias en lo futuro. Indicó además que aparte de la Corporación de Fomento del Camerún, poco podía dudarse de que empresas privadas exteriores extraían grandes utilidades de las materias primas producidas por el Territorio. Era imposible saber qué parte de dichas utilidades volvía a ser invertida o hasta qué punto las compañías privadas estaban sujetas a los mismos gravámenes que tendrían que pagar en sus propios países de origen. Ciertamente que existían empleadores competentes, pero esas preguntas todavía quedaban sin respuesta.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que las difíciles condiciones de vida de la población indígena eran el resultado de la explotación del Territorio por la Autoridad Administradora. La economía presentaba las características clásicas de una economía colonial, a saber, la producción de materias primas y la absorción de éstas por el país metropolitano para su empleo en él. Esta lastimosa economía estaba completamente en manos de compañías extranjeras. Existía una marcada diferencia entre las plantaciones de propiedad de dichas compañías y las que poseían los habitantes indígenas; las primeras gozaban de todos los beneficios del equipo moderno, en tanto que las últimas eran explotadas por medios primitivos y apenas proporcionaban a sus propietarios los recursos para su subsistencia.

El representante de El Salvador observó con satisfacción que, gracias a la nueva reforma constitucional, se establecerían juntas agrícolas y comerciales regionales independientes de las juntas de Nigeria.

El representante de Haití consideró que la diversificación de la producción agrícola y la incipiente industrialización permitían entrever una vida económica más rica.

El representante especial de la Autoridad Administradora recordó que una importante misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento había terminado recientemente un estudio económico de Nigeria y el Camerún emprendido por iniciativa de las autoridades del Reino Unido. El representante especial convino cabalmente en que se debía prestar mucha atención a la expansión del movimiento cooperativo, al desarrollo de las investigaciones agrícolas, al suministro de equipo agrícola y a la capacitación de los agricultores. Los dirigentes políticos del Camerún estaban dispuestos a intensificar aún más los esfuerzos que ya se

realizaban. Expresó dudas respecto de que el representante de la India tuviera una impresión exacta sobre la economía del Territorio. Ciertamente era que una proporción muy pequeña de la producción nacional exportable del Camerún consistía enteramente en productos primarios y que, para que la economía adquiriese un equilibrio conveniente era necesario introducir ocupaciones subsidiarias y eventualmente industrias livianas. En ese sentido se estaba impartiendo una buena enseñanza técnica que pronto produciría artesanos altamente calificados. Pero el representante especial destacó algunos aspectos importantes de la actual estructura económica: sólo unos pocos latifundios de menor importancia se hallaban en manos de dos empresas privadas; no existían plantadores extranjeros individuales; el total de utilidades de la Corporación de Fomento del Camerún, que producía la mayor parte del valor de las exportaciones, permanecía dentro del Territorio para el provecho del mismo; las cantidades que salían del país en calidad de utilidades de empresas privadas, luego de la deducción del impuesto sobre las compañías (a la tasa de nueve chelines por libra esterlina) era insignificante en comparación con el valor del producto nacional bruto del país. Un grupo de expertos que recientemente hizo un estudio del ingreso nacional, en lo que respecta al conjunto de Nigeria y el Camerún, llegó a la conclusión de que la cantidad que salía del país por ese concepto no podía ser mayor de un medio por ciento del valor del producto nacional bruto. Comparando los impuestos pagados por la Corporación de Fomento del Camerún durante el ejercicio económico de 1952-1953 con el total recaudado por concepto de impuestos sobre las compañías durante ese ejercicio, el representante especial calculó que las empresas privadas pagaron unas £380.000 en impuestos, de tal suerte que las utilidades netas extraídas por dichas empresas no podían exceder mucho de £400.000. Esto debía constituir una fracción insignificante del valor total de la producción del Territorio, el cual, tomando como base el promedio de £20 por persona determinado por el reciente estudio sobre Nigeria y Camerún en conjunto, sería aproximadamente de £30.000.000. El valor de una sola cosecha comercial local producida por los campesinos, a saber, la del cacao, que los labradores dedicados a la agricultura de subsistencia cultivan como producción secundaria en las divisiones de Victoria y Kumba con el objeto de costearse artículos de lujo, fué un 50% mayor que la cantidad extraída del Territorio por concepto de utilidades de empresas comerciales. Decir que el Territorio era expoliado por empresas monopolistas en beneficio del Reino Unido constituía una tergiversación fantástica de los hechos. Refiriéndose nuevamente al estudio del ingreso nacional de Nigeria y el Camerún, el representante especial dió como cierto que la proporción de ingresos derivados del producto nacional y sacados del país con destino al Reino Unido o a cualquier otra parte era, en lo que se refiere al propio Camerún, menor que el pequeño porcentaje correspondiente a ambos territorios combinados, puesto que en el Camerún bastante más de la mitad del comercio de exportación estaba en manos de entidades de propiedad pública que no pagaban dividendos y que devolvían la totalidad de sus utilidades al país en forma de mejoras, servicios sociales y gastos directos en provecho del pueblo.

COMUNICACIONES

El representante de la China se manifestó de acuerdo con la Autoridad Administradora sobre la importancia

que ésta atribuye al fomento de las carreteras dentro del Territorio, y expresó la esperanza de que sus esfuerzos en este sentido dieran como resultado pronto mejoramientos.

El representante de Australia tomó nota de la importancia atribuida por la Misión Visitadora de 1952 a la falta de caminos adecuados, pero observó que la Autoridad Administradora estaba dando la más alta prioridad a este problema.

El representante de Francia consideró importantísimo el problema de las comunicaciones, ya que de su solución dependía el adelanto en todos los campos. Tratabase de una muy difícil tarea, en razón de las condiciones geográficas. El Consejo debía tomar nota con satisfacción de los esfuerzos que a ese respecto realizaba la Autoridad Administradora.

LA TIERRA

a) Consideraciones generales

El representante de la China tomó nota con satisfacción de la organización de una sociedad cooperativa por la Unión de Agricultores Bakuiris (*Bakweri Farmers' Union*) y expresó la esperanza de que los bakuiris ofrezcan una mayor colaboración que permita solucionar la prolongada controversia sobre tierras.

El representante de Bélgica destacó que se debían adoptar todas las medidas necesarias para combatir la erosión del suelo, que planteaba un grave problema en el Territorio. En su opinión, toda urgencia sería poca para señalar a la atención de la Autoridad Administradora y de las Autoridades Indígenas competentes la necesidad de adoptar medidas para la conservación del suelo.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas observó que la economía del Territorio se caracterizaba por una amplia aplicación de la práctica de posesionarse de tierras de la población indígena en provecho de las compañías monopolistas. Gran parte de la tierra ha sido entregada a la Corporación de Fomento del Camerún (más de 250.000 acres) y a otras compañías (34.000 acres), a sociedades misioneras (4.000 acres) y a colonizadores europeos (4.000 acres), o ha sido enajenada so pretexto de creación de reservas forestales. El hecho de haberse desposeído de sus tierras más fértiles a la población indígena agravaba aún más la situación de ésta. Hasta entonces el Consejo no había adoptado ninguna medida para satisfacer las justas y legales demandas de los bakuiris y otras tribus en el sentido de que se les restituyeran las tierras que les habían sido arrebatadas. Considerando que una de las funciones más importantes del Consejo es defender los intereses de la población indígena se debían adoptar medidas y dar los pasos necesarios para asegurar la devolución de las tierras quitadas a los habitantes indígenas y prevenir cualquier futura enajenación de dichas tierras bajo cualquier forma.

El representante especial de la Autoridad Administradora recordó, como ejemplo de los esfuerzos realizados para evitar la erosión del suelo, el reciente éxito de la Administración (con ayuda de propaganda y de la misión de estudio del Banco Internacional) al asegurar la aplicación de normas de cultivos en curvas de nivel aplicables en una gran parte de la provincia de Bamenda; esperábase que ese ejemplo fuera pronto seguido en todas partes. Declaró que era infundada la idea de que se produjera una importante enajenación de tierras en el Territorio en favor de personas o empresas comerciales extranjeras. Las tierras de dominio

absoluto, poseídas por empresas comerciales, alcanzan tan sólo a unas 40 millas cuadradas, o sea aproximadamente a la milésima parte de la superficie del Territorio. Tampoco era razonable sugerir que las reservas forestales de la Administración Indígena o del Gobierno significasen enajenación alguna en cualquier sentido de la palabra. En el caso de las reservas forestales, lejos de enajenarse la tierra, se protegía su riqueza forestal contra la destrucción para el futuro beneficio de sus propietarios. La única crítica de esta situación hasta entonces sugerida por el Consejo era la de que las reservas no eran todavía suficientemente extensas. El representante especial también declaró que el Consejo sabe que no se puede hacer responsable a la Administración por la demora en vencer las dificultades con que se tropezó en la rehabilitación social del pueblo bakiuri.

b) *La controversia bali-widekum; sanciones colectivas*

El representante de la India se refirió a la aplicación de la Ordenanza de Castigos Colectivos (*Collective Punishment Ordinance*) en el caso de los desórdenes bali-widekum y dijo que era cabalmente censurable la noción del castigo colectivo, ya que ella implicaba sanciones a los inocentes junto con los culpables, lo cual equivalía a eludir los principios de derecho que exigen el descubrimiento de la culpa y el reconocimiento del respeto de la ley. Evocando la experiencia de su propio país, recordó que el principio de las multas colectivas, una vez aceptado, podría ser aplicado a muchísimas otras cosas y, en determinadas circunstancias, conducir a un régimen de terror. En su opinión, el sistema se apartaba de los principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas, constituía una violación de los derechos humanos y era totalmente incompatible con el derecho de la Autoridad Administradora y aun con el derecho tribal. Además, en el caso de los desórdenes bali-widekum la causa de la controversia procedía indudablemente de un problema económico y social que no se podía resolver mediante castigos. La solución consistía en eliminar la causa de la agresión, es decir, en resolver el problema agrario. Insistió en que los castigos colectivos constituyen un principio bárbaro en sí mismos y podrían convertirse, en momentos de agitación política, en un medio de acción también política.

El representante especial de la Autoridad Administradora explicó que la Ordenanza de Castigos Colectivos (*Collective Punishment Ordinance*) facultaba al Gobernador de Nigeria, en ciertas circunstancias concretas de las cuales la principal era la ocultación general de pruebas en el caso de delitos colectivos, para ordenar una investigación y para, sobre la base de las recomendaciones resultantes de la misma, imponer una multa colectiva sobre la comunidad respectiva. Esa multa tenía carácter punitivo, pero una parte o el total de la misma podían ser destinados, cuando ello fuera apropiado, a compensar a las partes perjudicadas. Verdad era que este procedimiento, de ser empleado en una sociedad razonablemente evolucionada, constituiría una negación de los principios jurídicos ingleses, dado el peligro de que personas inocentes pudieran sufrir conjuntamente con los culpables. De ahí que rara vez se recurriera a él y aun así con la mayor circunspección y luego de una discusión cabal en el Consejo Ejecutivo y el Consejo de Ministros. El representante especial sólo conocía este único caso de su aplicación en el Territorio en fideicomiso. No dejaba de ser un hecho, sin embargo, que por más inadecuado e indudablemente impropio que este procedimiento pudiera ser en un

medio civilizado, presentábanse en las regiones primitivas situaciones en que ése era el único medio práctico de hacer justicia. Una tribu primitiva que rompiese hostilidades contra otra tribu vecina, casi con seguridad ocultaría toda prueba y haría así imposible cualquier investigación de complicidad individual, debido a que en ella la opinión pública no vería mal alguno en la actividad delictiva realizada. En estas circunstancias, la única forma de proteger el orden público, mostrando que el crimen no rinde frutos y asegurando la indemnización de los damnificados por los agresores, parecería ser la de medidas colectivas contra la comunidad agresora. La atmósfera de sentimiento patriótico descarriado dentro del grupo criminal garantizaba que no había ningún extravío de justicia al darse cumplimiento a la pena de multa colectiva. Para convencer a los bali de que siguieran manteniéndose bajo control y en actitud pacífica hasta que el asunto pudiera ser solucionado por medios legales, había sido necesario e indudablemente justo asegurar a los bali que el Gobierno los protegería contra cualquier nuevo ataque y haría que no quedaran impunes los crímenes ya cometidos contra ellos, y que recibieran indemnización. Cuando se inició la investigación policial resultó obvio que el pueblo widekum, actuando de conformidad con los rígidos cánones de la conducta tribal primitiva, estaba eliminando pruebas en gran escala. El único camino que quedaba era que el Gobernador, luego de discutirlo con su Consejo de Ministros, estableciese una Comisión con arreglo a la Ordenanza de Castigos Colectivos (*Collective Punishment Ordinance*). Luego de una investigación cabal, esta Comisión llegó a la conclusión de que tres sectores del pueblo widekum tenían toda la culpa de los desórdenes. Llegó también a la conclusión de que esas gentes se habían puesto de acuerdo para eliminar las pruebas al realizarse la investigación sobre los desórdenes, y que su conducta imponía la necesidad de trasladar tropas y refuerzos de policía. De conformidad con la recomendación de la Comisión, el Gobernador impuso a las comunidades de que se trataba una multa de £10.000. La multa fué pagada sin oposición seria y los dos pueblos discutieron pacíficamente con el Residente, por algún tiempo, las condiciones de una solución definitiva, resultado satisfactorio que no hubiera sido posible alcanzar sin recurrir al procedimiento de la Ordenanza de Castigos Colectivos.

ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL CAMERÚN

El representante de la China, observando que el conocimiento y la experiencia deben constituir la consideración primordial para fomentar la creciente participación indígena en la obra de la Corporación de Fomento del Camerún, instó a la Autoridad Administradora a acelerar la capacitación de personal indígena con ese fin, y expresó la esperanza de que aumentaría gradualmente el número de naturales del Camerún en la junta directiva de la Corporación.

El representante de Siria sugirió que el nuevo Gobierno del Camerún Meridional, como uno de sus primeros actos, examinara nuevamente la posición que la Corporación ocupa en la vida del Territorio y tomara medidas (de ser necesario mediante el control de las normas observadas por la Corporación) para que su política financiera y sus programas de desarrollo quedaran integrados con los del Gobierno. También sugirió que el Consejo expresara la esperanza de que con arreglo a las nuevas disposiciones constitucionales se siguieran aplicando las utilidades de la Corporación al

bienestar del Territorio en su conjunto y no solamente al de su parte meridional.

El representante de la India elogió la obra de la Corporación como un progreso económico correctamente orientado. Expresó la esperanza de que con el tiempo el pueblo del Camerún, al participar en esa actividad, introduciría tanto en el plano nacional como en el industrial los principios de gobierno propio y de asociación.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Corporación actúa no para dar desarrollo al Territorio en fideicomiso sino para abastecer de materias primas agrícolas al país metropolitano. En 1951 la Corporación amasó utilidades de operaciones por valor de £623.000, pero menos de la décima parte de esta cantidad fué al fondo de desarrollo del Territorio. Citó el informe de la Misión Visitadora de 1952 para mostrar que la Corporación estaba extendiendo su influencia a la vida política y económica del Territorio y que a veces era difícil trazar un límite entre sus funciones y las del Gobierno, y comparó su posición con la de la United Fruit Company en algunos países de América Central.

El representante de El Salvador, señalando que la Corporación ejerce una gran influencia directa sobre todos los aspectos de la vida del Territorio, dijo que su desarrollo, que cuenta con el asesoramiento y la asistencia de la Administración, es sumamente alentador. Su delegación sugería únicamente que las utilidades de la Corporación se distribuyeran con la mayor equidad posible entre las partes meridional y septentrional del Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que la sugestión de que se continuaran distribuyendo entre el Camerún Septentrional y el Camerún Meridional las utilidades de la Corporación era un asunto sobre el cual se debían esperar las opiniones del electorado. La información más reciente de que él disponía era la de que las reuniones públicas celebradas en la parte septentrional del Territorio se pronunciaron en contra de la aceptación de cualesquier asignaciones futuras de utilidades de la Corporación, con el objeto de poner fin a cualquier impresión de ingerencia política del sur.

HACIENDA PÚBLICA

El representante de Siria, a la vez que observó el efecto drástico que sobre los ingresos públicos del año en curso tendría el hecho de eximir a la Corporación de Fomento del Camerún del impuesto sobre reservas de capital, opinó que podía pedirse a la Corporación que ampliara el desplazamiento de sus ingresos hasta los gastos de capital, e incluso que obtuviera fondos, mediante préstamos, destinados a esa finalidad, con el objeto de reducir al mínimo las consecuencias que se harían sentir sobre la hacienda pública del Territorio.

El representante de la India lamentó que aproximadamente la mitad de los ingresos del tesoro público del Territorio provinieran de derechos de aduana, hecho que convertía al país en una mera operación comercial. Aunque no creía que las Naciones Unidas tuvieran el derecho de dirigirse a la Autoridad Administradora a fin de encontrar recursos financieros para el desarrollo, destacó que la carga de los derechos de aduana pesaba finalmente sobre el consumidor y que más lógico sería gravar con impuestos directamente al consumidor. Ninguna razón permitía creer que el ingreso *per capita* o la carga tributaria hubieran de permanecer en su nivel actual.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó que el sistema de impuesto de capitación era completamente injusto, ya que no tomaba en cuenta los bienes del contribuyente ni su capacidad de pago. En su opinión, la Autoridad Administradora debía adoptar las medidas necesarias para substituir ese sistema por un régimen de impuesto sobre la renta que tuviera debidamente en cuenta dichos factores.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que en determinada fase del desarrollo de una sociedad, el dar aplicación a los argumentos teóricos en favor de la recaudación de todos los ingresos por medio de impuestos sobre la renta puede resultar más práctico que recaudar una parte de los mismos por medio de derechos de aduana sobre importaciones y exportaciones. Pero en las condiciones reinantes en la mayor parte del mundo libre los derechos de aduana parecían ser un medio razonable, conveniente e indudablemente inevitable para recaudar ingresos, a la vez que para controlar las tendencias del consumo en beneficio de la sociedad. No creía que el gobierno representativo interesado, en Nigeria, diera seria consideración a una recomendación tendiente a eliminar los derechos de aduana. También declaró que la transformación del impuesto de capitación en un sistema de impuestos graduados sobre la renta era de hecho una norma seguida por la administración, y que se estaba procediendo de manera sostenida, aunque naturalmente lenta, a la aplicación del impuesto graduado sobre la renta a las personas, a medida que iban emergiendo de la condición económica de producción agrícola para la subsistencia y empezaban a tener ingresos monetarios determinables.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La Autoridad Administradora manifestó que el Gobierno de Nigeria está tratando de mejorar las condiciones sociales de la población indígena del Territorio en fideicomiso, sobre todo mediante la elevación de su nivel de vida. Los principales organismos administrativos son el Departamento Médico y el Departamento de Trabajo de Nigeria. Las instituciones particulares de las misiones también trabajan activamente en la esfera social. En el Camerún Meridional, los sindicatos de las aldeas, los pueblos, y las tribus, que adquieren cada vez más influencia, se interesan en todos los aspectos de la vida, desde las controversias entre individuos y comunidades y las cuestiones de sanidad y educación local hasta las cuestiones políticas de Nigeria. Sin embargo, no hay ni servicios oficiales ni organizaciones particulares que se ocupen específicamente del bienestar social porque, según la Autoridad Administradora, la misión de cuidar a los ancianos, los indigentes, los huérfanos, las viudas, los inválidos, los epilépticos, los impedidos y los delincuentes incumbe a las familias y a los parientes de los interesados. Como no hay ciudades heterogéneas, la Autoridad Administradora estima innecesaria toda legislación referente a la seguridad social y al bienestar social.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

La mujer ejerce una influencia considerable en la sociedad como participante en el gobierno y en los

negocios. Así, por ejemplo, en la provincia de Bamenda hay mujeres elegidas para los consejos federales, y en la mayoría de los tribunales indígenas por lo menos uno de los magistrados es mujer. No obstante, la actitud tradicional con respecto a la mujer todavía está muy generalizada; la poligamia es una costumbre aceptada y el "precio de la novia" todavía sigue reconocido entre los grupos de no musulmanes.

El Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota en su 11° período de sesiones de la atención prestada al problema de mejorar la condición jurídica y social de la mujer y recomendó que la Autoridad Administradora prosiguiera sus esfuerzos con ese fin. En respuesta a esta petición, la Autoridad Administradora hizo hincapié en que el método con que se enfocaba el problema coincidía con la política sugerida en el informe de la Misión Visitadora de 1949, es decir, en que la mejor manera de lograr la modificación de las tradiciones y prácticas indeseables podría consistir no en legislar al respecto, sino en despertar en las propias mujeres el deseo de un cambio, y en que, por el momento, el papel del Gobierno debía consistir en garantizar el derecho de las mujeres a rechazar o abandonar tales prácticas indeseables.

Al informar de que esa política ya comenzaba a dar sus frutos, la Autoridad Administradora citó como ejemplo el hecho de que el Bakweri Women's Party había manifestado estar preocupado por el asunto de la prostitución en las plantaciones y había presentado una queja sobre el particular a la Misión Visitadora de 1952. La Misión opinó que el asunto de la prostitución se relacionaba parcialmente con el problema de las dotes que los trabajadores habían de pagar por sus novias, cosa que a veces representaba para ellos una gran carga financiera. Por lo tanto, la Misión sugirió que se tomase en consideración la posibilidad de aliviar dicha carga, por ejemplo mediante anticipos de salario para pagar la dote, así como la posibilidad de controlar la presencia de muchachas en los campos de trabajo. Aunque estimaba que la prostitución desaparecería en las regiones de las plantaciones si se fuera extendiendo una opinión adversa a ella a medida que mejorasen las condiciones de vida de los trabajadores, la Autoridad Administradora señaló que, con objeto de allanar las principales dificultades, se estaban tomando decisiones apropiadas como la de aumentar el número de viviendas para los trabajadores casados y reforzar el servicio de bienestar de la Corporación de Fomento del Camerún, en espera del resultado de una investigación sobre las condiciones sociales en las plantaciones, la cual se efectuaba bajo los auspicios del *West African Institute of Social and Economic Research* (Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del África Occidental).

Otro ejemplo dado por la Administración, que lo consideraba indicio de un creciente interés por la política, era el deseo de las mujeres del Camerún Meridional de votar en las elecciones para la Cámara de la Asamblea Oriental, derecho que, según lo dijo la Autoridad Administradora, poseían siempre que pagaran impuestos.

La Autoridad Administradora también observó que los hombres tendían a realizar los trabajos agrícolas pesados que antes efectuaban tan sólo las mujeres, acontecimiento que al parecer de la Autoridad Administradora era en potencia el más importante de todos, ya que los trabajos del campo dejaban a la mujer

tiempo y energía escasos para dar a la sociedad su privativa contribución.

La Autoridad Administradora manifestó que en la división de Victoria, así como en los distritos de Adamawa, la obra de bienestar del Departamento Médico no sólo había sido eficaz, sino que gracias a ella las mujeres discernían sus propios intereses en tales cuestiones. En el Camerún Meridional había 12 escuelas de economía doméstica y una escuela normal. Seguía ampliándose el Instituto Femenino de Bamenda.

En 1952, la Corporación de Fomento del Camerún facilitó salas de clase para la enseñanza de la economía doméstica en sus escuelas y concedió siete becas especiales para niñas. Una camerunesa estudiaba economía doméstica en el Reino Unido y dos estaban estudiando allí para enfermeras.

En cuanto a la cuestión de los matrimonios de niños, cuya abolición progresiva recomendó el Consejo en su 11° período de sesiones, la Autoridad Administradora declaró que continuaba esforzándose por lograr la eliminación de esa práctica, y que la misma iba desapareciendo paulatinamente, sin lugar a dudas.

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS

Los servicios médicos son suministrados en el Territorio en fideicomiso por el Departamento Médico del Gobierno de Nigeria, las Autoridades Indígenas, las misiones religiosas y la Corporación de Fomento del Camerún. La necesidad de servicios médicos y sanitarios adicionales ha sido motivo de interés constante por parte del Consejo de Administración Fiduciaria, que en su 11° período de sesiones encareció a la Autoridad Administradora que continuara tratando de aumentarlos, especialmente en la zona septentrional. Además, la Misión Visitadora recibió varios memorándum que contenían peticiones similares.

La Autoridad Administradora informó respecto del progreso realizado en 1952 en comparación con la situación existente en 1951. Los gastos por concepto de servicios médicos ascendieron a un total de £141.000, lo cual representó un aumento de £18.000 y constituyó la cantidad mayor asignada con tal fin. En 1952, el personal médico del Territorio comprendía 16 médicos y cirujanos registrados, 26 enfermeras principales y 77 enfermeras diplomadas africanas, es decir que dicho personal ha aumentado, con respecto a 1951, en 1 médico, 8 enfermeras principales y 27 enfermeras diplomadas africanas. El personal total estaba compuesto de 385 miembros en lugar de los 435 que había en 1951; esta disminución se produjo principalmente en los grados técnicos inferiores.

Con respecto a los servicios médicos, la Autoridad Administradora manifestó que el Camerún Meridional disponía en 1952 de seis hospitales públicos (371 camas), un hospital misional (69 camas), cinco hospitales de la Corporación de Fomento del Camerún (355 camas), tres hospitales de la United Africa Company (34 camas), seis casas de maternidad misionales, seis clínicas rurales públicas, 58 dispensarios (22 administrados por las autoridades indígenas y 31 por la Corporación de Fomento del Camerún), una leprosería, un grupo médico móvil y un equipo para el tratamiento de la enfermedad del sueño. Comparado con la situación existente en 1951, esto representa un aumento de un hospital, un dispensario y 77 camas de hospital. Se preparaban planes para establecer una colonia de leproso en la zona fronteriza de las divisiones Kumba y Mamfe.

En el Camerún Septentrional, esos servicios estaban parcialmente asegurados por instituciones de Nigeria: seis hospitales (en Maiduguri, Lassa, Yola, Wukari y Mkar), ocho dispensarios y dos grupos médicos móviles. Dentro del propio Territorio en fideicomiso había 15 dispensarios de la Administración Indígena de los cuales ocho estaban en los distritos de Adamawa y los restantes en la división de Dikwa; esto representa un aumento de dos con respecto a 1951. Las misiones religiosas tenían cinco dispensarios, o sea, dos más que en 1951, y sostenían una casa de maternidad y tres leproserías. Además de ampliarse dos hospitales en Yola y Lassa, en Nigeria, abiéronse tres nuevos dispensarios durante el año (dos sostenidos por misiones religiosas en Bulak y uno por la Administración Indígena en Michika) en el Camerún Septentrional.

En Sugu estaba casi terminado un dispensario y centro de bienestar.

Un funcionario médico fué destinado a Bama para una temporada, y un visitador oficial de sanidad, cuyo programa causó muy buena impresión a la Misión Visitadora de 1952, se dedicaba a tareas de maternidad y bienestar de la infancia en los distritos de Adamawa. Por último, terminó en 1953 un hospital en Mubi.

La Misión Visitadora hizo comentarios bastante extensos sobre los servicios médicos de las distintas partes del Territorio en fideicomiso. En un comentario general manifestó que los servicios médicos de la provincia del Camerún eran buenos en comparación con los de otras partes del Territorio, principalmente debido a los servicios prestados por la Corporación de Fomento del Camerún. Esperaba que ese progreso continuara y se extendiera al resto del Territorio. No obstante, la Misión (con cuyos pareceres se manifestó de acuerdo en general la Autoridad Administradora) observó que la falta de carreteras en muchas zonas aisladas impedía la expansión de los servicios. La Misión también advirtió un gran porcentaje de casos de paludismo, tracoma y sífilis entre la población del Camerún Septentrional, sobre todo en los distritos de Adamawa y en la división de Dikwa. En esta última, la Misión tuvo la impresión de que la gente no estaba aún muy dispuesta a ir a los dispensarios, aunque las Autoridades Indígenas demostraban muy vivo interés en aumentar el número de instalaciones sanitarias. En opinión de la Misión, la elevada incidencia de sífilis entre los fulanis de los distritos de Adamawa requería firmes y constantes esfuerzos para atraer al mayor número posible de pacientes con objeto de someterlos a tratamiento. En varios memorándum recibidos por la Misión se pedía la adopción de más disposiciones para combatir la viruela, el pian y la lepra.

Como no existe registro de nacimientos y defunciones, la Autoridad Administradora se halla en la imposibilidad de determinar las principales causas de defunción. Las estadísticas sanitarias y epidemiológicas son demasiado escasas para ser satisfactorias, y la Autoridad Administradora estima que no existe la posibilidad de mejorarlas, en la fase en que el Territorio se halla actualmente. El Consejo, aun reconociendo las dificultades con que se tropezaba para obtener información, ya había pedido anteriormente datos sobre la incidencia y las causas de la mortalidad infantil, pero la Autoridad Administradora lamentó no hallarse todavía en condiciones de dar una información realmente útil.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, advirtiendo el mejoramiento de los servicios médicos y sanitarios que se ha realizado durante el período examinado, en particular el aumento de los servicios de hospital y de dispensario, el comienzo de una campaña organizada contra la lepra y el aumento de las asignaciones para servicios médicos y sanitarios, considera, sin embargo, que las necesidades del Territorio requieren que la Autoridad Administradora intensifique su esfuerzo para ampliar los servicios médicos, especialmente en el Camerún Septentrional; y recomienda que la Autoridad Administradora aliente a los representantes del Camerún, tanto del norte como del sur, a que presten seria consideración a la posibilidad de obtener ingresos públicos adicionales a fin de aumentar las asignaciones de fondos para servicios médicos.

NIVEL DE VIDA; MANO DE OBRA

En lo que respecta al costo y al nivel de vida, cabe decir que no existen estudios periódicos o estudios que abarquen a todo el Territorio, fuera de un índice de precios de venta al por menor de productos alimenticios en la zona de Victoria y Buea, y de una encuesta efectuada en 1951 y 1952 sobre la renta nacional de Nigeria.

La Misión Visitadora de 1952 estimó que el tipo de vida del Territorio era primitivo y se limitaba a la satisfacción de las necesidades de subsistencia, especialmente en el Camerún Septentrional.

No obstante, los asalariados constituyen sólo una pequeña minoría de la población. En 1952 eran 37.000, de los cuales 27.300 estaban empleados en la agricultura, principalmente en las plantaciones. Muchos de éstos venían de fuera del Territorio en fideicomiso o de regiones distantes del Camerún Meridional. En el caso de las plantaciones de la Corporación de Fomento del Camerún, por ejemplo, el número total de 25.569 empleados incluía a 5.508 de Nigeria y de otras partes y a 2.115 del Camerún bajo administración francesa. Aproximadamente el 27% de la fuerza de trabajo de la Corporación procede de los prados de Bamenda. En opinión de la Autoridad Administradora, no se ha producido ningún trastorno apreciable en la vida aldeana como resultado de la migración de mano de obra hacia las plantaciones. Sin embargo, en relación con la encuesta social y económica sobre las plantaciones a que ya se ha hecho referencia, se está efectuando una investigación antropológica especializada sobre los muchos y difíciles problemas sociales que plantea la concentración de una gran fuerza de trabajo en las plantaciones.

En 1952 había seis sindicatos en el Territorio, de los cuales los dos más importantes eran el Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Fomento del Camerún y el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Elders and Fyffes (Sindicato de Trabajadores de la Plantación de Likomba), que tenían respectivamente 17.000 y 3.000 afiliados. Una cantidad menor de obreros pertenecía a otros cuatro sindicatos de servicios públicos, incluyendo un nuevo sindicato designado con el nombre de Sindicato General de Trabajadores del Camerún.

Dos de los principales sindicatos y cuatro de sus funcionarios fueron multados en 1952 por no haber comunicado ciertas declaraciones al Registro de Sindicatos, en conformidad con las disposiciones de la Ordenanza sobre Sindicatos (*Trade Unions Ordinance*).

Según lo que se ha informado, produjéronse en 1952 cinco conflictos industriales principales que afectaron a 5.825 trabajadores de las plantaciones y que causaron una pérdida de 51.710 días-hombre. La información suministrada por la Administración indica que en los tres principales conflictos el nivel de sueldos constituyó una cuestión importante. El más grave de esos conflictos (en el que se planteaban otras cuestiones además de la de los sueldos) fué la huelga de octubre de 1952, que duró 20 días y afectó a todos los jornaleros de la firma Elders and Fyffes, Ltd., de Tiko, que eran 3.068.

En anteriores períodos de sesiones, el Consejo formuló recomendaciones en favor de los aumentos de salarios y, efectivamente, se concedieron algunos de esos aumentos. La Corporación de Fomento del Camerún anunció en agosto de 1952, como ya lo había hecho la firma Elders and Fyffes, Ltd., que las nuevas escalas de salarios para la mano de obra en general se habían fijado de 2 chelines y 4 peniques a 2 chelines y 8 peniques por día a partir del 1° de septiembre (en lugar del mínimo anterior, que iba de 2 chelines y 3 peniques a 2 chelines y 7 peniques), pero a partir de esa misma fecha se dejó de pagar una prima de asistencia de 6 chelines por mes. El Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Fomento del Camerún expresó a la dirección de ésta que las escalas revisadas y las condiciones de pago eran inaceptables y que, de no llegarse a un acuerdo antes del 30 de noviembre, todos los trabajadores se declararían en huelga. En el transcurso de las negociaciones con los trabajadores, la Corporación aceptó restablecer la prima de asistencia, pero el Sindicato rechazó la oferta y abrió un conflicto de trabajo. Gracias a un mediador gubernamental se llegó a un arreglo basado en los siguientes términos: aceptación de la escala de salarios revisada, con efectividad a partir del 1° de abril de 1952; creación, el 1° de enero de 1953, de una nueva prima de asistencia de 2 chelines pagadera con respecto a 12 días laborables de cada medio mes civil, y de una prima suplementaria de 2 chelines cuando se hubiera ganado la primera en las dos mitades de un mes civil; y venta de mercaderías esenciales a los trabajadores que merecieran la prima de asistencia, a los precios que determinaran de común acuerdo la dirección y el sindicato a intervalos de seis meses.

Al llamar nuevamente la atención en su informe de 1952 hacia el problema planteado por la necesidad de una mejor dirección sindical, la Autoridad Administradora manifestó que aunque se había hecho mucho por elevar el nivel de la dirección sindical, se notaba todavía poco progreso en la organización de los sindicatos, que aun era grande el mejoramiento que podía hacerse en los métodos de negociación colectiva y que el deseo de aprender por parte de los trabajadores y de la dirección debía traducirse en un mayor mejoramiento de las relaciones entre empleadores y empleados.

La Misión Visitadora de 1952 estimó que las relaciones entre los trabajadores y la dirección eran buenas en general. Recibió comunicaciones del Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Fomento del Camerún y del Sindicato de Trabajadores de la Plantación de Likomba, en cuyas comunicaciones se le pedía que facilitase la formación profesional y la concesión de becas para los miembros y los funcionarios de los sindicatos. En la primer comunicación pedíase también que se ampliara la representación especialmente en la junta directiva. En la última se pedía, además, que se establecieran un tribunal de trabajo y juntas

asesoras, que se mejoraran los niveles de vida atrayendo a más compañías navieras y comerciales al Territorio y que se efectuara una investigación sobre las condiciones de trabajo y de vida en el Camerún.

Comentando estas peticiones, la Autoridad Administradora declaró que la Administración del Territorio concedía becas a los afiliados de ambos sindicatos (que eran periódicamente visitados por un inspector competente en asuntos de asesoramiento y formación profesional), que el Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Fomento del Camerún también podía aprovechar las becas y los programas de formación profesional de la Corporación; que la conveniencia de organizar consultas mixtas entre los trabajadores y la dirección no se debía confundir con la idea de que se nombraran representantes sindicales para el ejercicio de funciones directivas; que la cuestión de los incentivos para atraer a más firmas navieras y comerciales era ajena a las facultades de la Administración, y que se estaba efectuando actualmente una encuesta de índole social-económica sobre el sistema de las plantaciones.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las recomendaciones siguientes:

El Consejo, advirtiendo con satisfacción que el informe anual de la Autoridad Administradora correspondiente a 1952 contiene una reseña más completa que los anteriores de las condiciones reinantes en el Territorio en lo que respecta al costo de vida y a los salarios, expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora siga facilitando toda la información posible sobre esas cuestiones en sus futuros informes. El Consejo también espera que se señale a su atención cualquier información pertinente, en especial con respecto a los salarios reales, de que la Organización Internacional del Trabajo pudiere disponer.

CASTIGOS CORPORALES

La pena de azotes, cuya completa abolición fué recomendada por la Asamblea General y fué objeto de instancias del Consejo desde su cuarto período de sesiones, puede ser impuesta por el Tribunal Supremo y los tribunales ordinarios por ciertos delitos como la violación y el robo con violencia. Toda persona de sexo masculino y menor de 17 años de edad puede también ser condenada a la pena de azotes a discreción del tribunal. La Autoridad Administradora comunicó al Consejo que sólo dos menores fueron condenados en 1952 a castigos corporales. En 1951 un adulto y 17 menores habían recibido esas sentencias.

La Autoridad Administradora declaró además que los tribunales indígenas del Territorio estaban facultados para imponer castigos corporales sólo a menores. En los distritos de Adamawa se dictaron, en 1952, 28 sentencias con tal fin; la cantidad había sido de 71 en 1951, y 65 de esos casos correspondieron a personas de los distritos de Adamawa.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que era sorprendente que la Autoridad Administradora hubiera descargado la res-

ponsabilidad (que le incumbía en virtud del Acuerdo de Administración Fiduciaria) de financiar la enseñanza, la sanidad y otras cuestiones sociales sobre la Corporación de Fomento del Camerún, empresa comercial interesada en amasar utilidades.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que la información fiscal detallada que el Consejo tenía ante sí mostraba que los gastos ya grandes hechos por la Administración en esas esferas no se podían aumentar sin dejar sin fondos a la Administración o sin imponer una carga tributaria insoportable para los habitantes.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

El representante de Bélgica señaló a la atención del Consejo la cuestión del precio de la novia. Observando que en ese momento los trabajadores contratados no siempre podían pagar las arras pedidas por los padres de la muchacha y, por consiguiente, se hallaban en la imposibilidad de casarse, estimó que sería quizás conveniente que la Autoridad Administradora tomase en consideración la posibilidad de anticipar las sumas necesarias para ese fin, ya que, en el caso de los trabajadores con contrato, le parecía que existían garantías suficientes contra el fraude.

El representante especial de la Autoridad Administradora expresó la creencia de que las personalidades políticas del Territorio verían con buenos ojos una advertencia tendiente a evitar que un sistema de pagos, simbólico en su origen, pudiese adquirir importancia económica. No creía que la sugestión de que la Corporación de Fomento del Camerún ofreciese anticipos a los trabajadores deseosos de pagar el precio de la novia pudiera tener éxito, pues probablemente una gran proporción de tales anticipos se utilizarían en la práctica con otros fines, quizás menos deseables. No obstante, señalaría la propuesta a la dirección de la Corporación.

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS

El representante de la China, observando el progreso realizado durante el período examinado, encareció la necesidad de que la Administración intensificara sus esfuerzos para ampliar los servicios médicos en el Territorio, especialmente en el Camerún Septentrional.

El representante de Siria advirtió con satisfacción los mejoramientos de los servicios médicos y sanitarios logrados durante los últimos años y expresó la esperanza de que se dedicara aún más atención al progreso en esa esfera.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la situación en materia de sanidad distaba mucho de ser satisfactoria y que a la mayoría de la población indígena le era imposible obtener asistencia médica. Un ejemplo de ello lo daba el hecho de que en el Camerún Septentrional no había un solo hospital y sólo se disponía de un dispensario perteneciente a una misión religiosa. Los habitantes de la mayor parte de las regiones del Territorio no podían nunca llevar a sus enfermos a los hospitales, y no les quedaba otro camino que recurrir a la ayuda de curanderos incompetentes. Las enfermedades imperaban en el Territorio, cuyo personal médico era insuficiente ya que sólo disponía de 16 médicos, todos ellos en el Camerún Meridional, para una población de 1.500.000 habitantes. Añadió que la Autoridad Administradora no se preocupaba por la for-

mación de personal médico entre la población indígena, y que durante el año examinado habían disminuído las cifras de ciertos sectores de personal médico y el número de camas de hospital. En consecuencia, no compartía la opinión de que lo importante fuese inducir a los habitantes a que utilizaran los servicios médicos existentes; en su opinión, lo realmente necesario era que el Consejo diera instrucciones a la Autoridad Administradora para que multiplicara las asignaciones presupuestarias destinadas a la sanidad.

El representante de El Salvador manifestó que las enfermedades endémicas, como la sífilis y el paludismo, minaban la salud de la mayoría de la población. Los grandes esfuerzos de la Administración tropezaban con muchas dificultades debido a la ignorancia y a la negligencia de los habitantes. El Consejo debía señalar a la atención de los habitantes la necesidad de cooperar en el tratamiento de dichas enfermedades.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló el aumento apreciable del número de pacientes tratados en hospitales modernos (el número de pacientes internos había aumentado de 14.500, en 1950, a 56.000 en 1952; y el número de pacientes externos había pasado de 204.000, en 1950, a 482.000 en 1952); señaló la evolución que se producía en la parte septentrional del Territorio; el comienzo de una campaña organizada contra la lepra; la constante propaganda, en lo relativo a la sífilis, el paludismo y otras enfermedades endémicas, realizada por los dispensarios de la Administración Indígena, por las unidades sanitarias móviles y en los principales centros durante la semana de divulgación sanitaria; y los grandes y recientes aumentos de los gastos públicos en materia de servicios sanitarios y médicos (de £66.000 en 1950 a £141.000 en 1952). El ritmo de una ulterior expansión sería materia de estudio por parte de las autoridades representativas de la población; el representante especial creía que los representantes elegidos del Camerún Meridional estaban sinceramente decididos a aumentar los impuestos con objeto de acelerar la expansión de los servicios sociales. Contestando a la sugestión de que se multiplicaran las asignaciones para los servicios médicos y sanitarios, declaró que no se podrían aumentar los ya grandes gastos sin paralizar a la Administración por falta de fondos o sin imponer una carga tributaria desastrosa para los habitantes.

NIVEL DE VIDA; MANO DE OBRA

El representante de la India señaló que los salarios de los peones eran más bajos en el Territorio que en países como la India antes de la independencia, y que la seguridad de empleo y beneficios sociales, propia de la mano de obra industrial faltaba en absoluto. Observando que las condiciones de trabajo en las plantaciones merecían cuidadoso estudio, ya que en general eran las peores del mundo, encareció la necesidad de que los organismos especializados (particularmente la Organización Internacional del Trabajo, directamente interesada en esos problemas) prestaran más asistencia al Consejo. Las plantaciones debían ser explotadas en condiciones que garantizaran a los trabajadores una vida hogareña, el derecho de huelga y el derecho de organización política.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas observó que, según la Misión Visitadora de 1952, el modo de vida de la población indígena era primitivo, particularmente en el norte.

Declaró que los trabajadores de las plantaciones eran explotados de la manera más vergonzosa, que se les pagaban salarios miserables y que ellos ya protestaban desde hacía tiempo contra esas condiciones de trabajo y hacían huelgas para obtener aumentos de salarios. La situación de los no asalariados era todavía peor: estudios hechos por personal médico indicaban que muchos de ellos padecían desnutrición, y era significativo que la Autoridad Administradora revelara en su informe que las personas detenidas siempre aumentaban su peso durante su permanencia en la cárcel.

El representante de Haití estimó que eran algo bajos los salarios mínimos pagados en el Territorio. La tarifa de dos chelines por día no parecía suficiente para que un individuo, en circunstancias normales, atendiera a sus necesidades personales perentorias, sin contar las familiares.

El representante especial de la Autoridad Administradora respondió que la propia gente y los delegados que habían visitado el Territorio se sorprenderían si oyese decir que la suerte de los trabajadores de las plantaciones del Camerún era miserable o que se imponían limitaciones a la libertad sindical o al derecho de organización política o al de huelga. Los trabajadores estaban organizados en sindicatos, podían celebrar consultas con la dirección de las empresas y, en algunas ocasiones, habían ejercido el derecho de huelga. Además, participaban normalmente en la vida política del país. Tratándose de esa parte del mundo, podía decirse que era elevado el pago que recibían en efectivo; disfrutaban además de valiosas facilidades adicionales, que incluían una hospitalización excelente y gratuita y enseñanza primaria también gratuita. Las condiciones del trabajo en el Territorio nada desmerecían si se las comparaba con las de cualquier territorio insuficientemente desarrollado.

CASTIGOS CORPORALES

El representante de la China expresó satisfacción ante el hecho de que hubiera disminuido el número de personas condenadas a castigos corporales en 1952, en relación con el año anterior, pero instó a la Autoridad Administradora a que examinara atentamente la necesidad de cumplir con las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria que pedían la total abolición de los castigos corporales.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que nada se había hecho por abolir los castigos corporales, a pesar de las muchas recomendaciones con tal fin formuladas por la Asamblea General y por el Consejo de Administración Fiduciaria.

El representante de El Salvador, aunque advirtiendo que la pena de castigo corporal se había impuesto con menos frecuencia a adultos y a adolescentes, consideró que se debía hacer todo lo posible por dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo y de la Asamblea General en lo relativo a la abolición de este castigo.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que la cuestión de los castigos corporales era por entonces, en gran parte, asunto que incumbía a los dirigentes elegidos por la opinión pública del Territorio.

A este respecto, la propia Administración continuó adelantándose a la opinión pública y siguió cumpliendo

efectivamente el compromiso de la Autoridad Administradora de esforzarse por que se aboliera gradualmente la pena de que se trata.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

El Inspector General de Enseñanza en Nigeria tiene a su cargo la inspección de la enseñanza; los directores regionales de la Región Septentrional y de la Región Oriental de Nigeria tienen la responsabilidad de las partes del Territorio en fideicomiso situadas en sus respectivas regiones. Se han establecido una junta consultiva central y juntas consultivas regionales; en estas últimas están representadas las principales instituciones particulares que ejercen actividades en el Camerún. Dentro del propio Territorio en fideicomiso se han formado algunos comités educativos locales con el fin de promover el desarrollo y la propagación de la enseñanza.

La mayor parte de las escuelas del Territorio, dirigidas por las Administraciones Indígenas y por instituciones particulares, reciben subsidios del Gobierno. Las consignaciones presupuestarias para gastos de enseñanza subieron de £149.000 en el ejercicio 1950-51, a £182.000 en 1951-52; dentro de esta última suma el rubro particular más importante fué el de subsidios de ayuda, que alcanzó a £114.000. Durante el año 1952 los subsidios a las misiones ascendieron a £66.600, lo que representa un aumento de £10.000 sobre el año anterior.

Se realizó un gran progreso en 1952 en lo que respecta a la ampliación de los servicios educativos y de la matrícula escolar, especialmente en la parte meridional del Territorio. De 247.000 niños de edad escolar (aproximadamente un 18% de la población), 33.220, o sea el 13%, se matricularon en 336 escuelas situadas, con excepción de 44, en el sur, en tanto que en 1951 la matrícula fué de 31.960 alumnos en 312 escuelas, y en 1950 de 30.700 alumnos en 304 escuelas. Se calcula que el número de analfabetos en todo el territorio constituye probablemente un 90% de la población. (El censo de 1952 muestra que en el norte, de un total de 474.000 personas, sólo 17.100 personas de 7 años o más de edad sabían leer y escribir y 12.700 de ellas únicamente en escritura arábiga).

El interés ya demostrado por el Consejo en lo referente al régimen de enseñanza se había orientado principalmente hacia el aumento de los servicios educativos (especialmente en el norte), hacia una participación más directa en la Autoridad Administradora en el desarrollo de la instrucción, incluyendo la creación de más escuelas oficiales, y hacia un aumento de la asignación presupuestaria destinada a enseñanza. En su 11º período de sesiones, el Consejo sugirió a la Autoridad Administradora que utilizara los conocimientos técnicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de otras organizaciones, y le recomendó que tomara nuevas medidas para suplir las necesidades del Territorio, en materia de enseñanza. Al mismo tiempo, el Consejo concedió especial importancia a la educación progresiva de las mujeres y pidió que se suministraran datos por separado sobre el número de niños y

de niñas matriculados en las escuelas. La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que el Departamento de Enseñanza comprendía el valor de la labor realizada por la UNESCO y que estaba estudiando atentamente sus resultados.

Al comentar las actividades educativas de 1952 en el Camerún Meridional, la Autoridad Administradora declaró que la falta de interés en la instrucción demostrada por los habitantes de algunos lugares, la imposibilidad o la falta de deseo de pagar los derechos de matrícula y el mayor costo de la instrucción eran los factores que dificultaban el desarrollo de la enseñanza primaria y constituían la causa principal de la inasistencia escolar. Manifestó que su política era alentar el establecimiento de nuevas escuelas en los lugares donde hubiera necesidad y demanda pública de aumento de los servicios educativos, así como aumentar las tasas locales con la esperanza de que con el tiempo dichas tasas reemplazaran a los derechos de matrícula. Señaló además que a pesar de todas estas dificultades, la matrícula en las escuelas de enseñanza primaria había experimentado en el sur, en 1952, un aumento comprendido entre el 5 y el 7%, y que en esa región las necesidades de la enseñanza secundaria eran atendidas por dos escuelas. Además, se había establecido una escuela de artes y oficios en Ombe, y continuaba el desarrollo de la enseñanza para adultos. Estimaba que las dificultades eran análogas en el Camerún Septentrional, pero en un grado peor. Señaló, sin embargo, que la matrícula en las escuelas primarias había aumentado moderadamente, que se había abierto una escuela del segundo ciclo primario en Bama, había continuado aumentando el número de escuelas en Vi y en Michika, que se había reconstruido la escuela de Mubi y que había progresado la construcción de una nueva escuela primaria en Baissa, la cual debía iniciar sus actividades en enero de 1953.

La Misión Visitadora de 1952 informó que había recibido peticiones generales en el sentido de que se establecieran nuevas escuelas (entre ellas escuelas de niñas), de que se ampliaran y mejoraran las existentes y de que los gobiernos mantuvieran establecimientos docentes. Se le solicitaron también servicios de orientación profesional, así como que se enseñara a mejorar los procedimientos de labranza, que se establecieran escuelas artesanales y que se dictaran cursos de economía doméstica. En las regiones del sur, inmigrantes provenientes del Camerún bajo administración francesa propusieron la enseñanza escolar del francés además del inglés. En lo que respecta al desarrollo general de la instrucción, la Misión declaró que en el Camerún Meridional existían y se estaban desarrollando servicios educativos aceptables, en tanto que en el norte era mucho lo que se podía mejorar. También puso de relieve la necesidad de más y mayores esfuerzos si se quería que disminuyera rápida y progresivamente el alto porcentaje existente de analfabetismo.

La Autoridad Administradora señaló subsiguientemente al Consejo que cualquier progreso importante en materia de instrucción en el Territorio dependía del activo apoyo del pueblo. Aunque la demanda general de instrucción crecía, todavía se hallaba limitada a ciertas localidades y clases; la indiferencia hacia la escuela y el disgusto por ella seguían constituyendo un obstáculo serio, sobre todo en el norte. No obstante, la Autoridad Administradora consideraba in-

dicio sumamente alentador el hecho de que algunas comunidades hubieran aceptado una tasa de educación.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, tomando nota de las opiniones expresadas por la Misión Visitadora de 1952 sobre la necesidad de realizar esfuerzos intensos y de vasto alcance para desarrollar la instrucción en el Territorio, recomienda que la Autoridad Administradora tome medidas eficaces para construir edificios escolares y para suministrar otros servicios en materia de educación, sobre todo en el Camerún Septentrional, y que estimule el deseo de instruirse entre la población indígena.

El Consejo, tomando nota además de que el analfabetismo continúa generalizado en el Territorio, recomienda a la Autoridad Administradora que (si fuere necesario con ayuda internacional) prepare un programa de planes de educación para las masas y que difunda la enseñanza primaria, a fin de vencer el analfabetismo, teniendo en cuenta un plazo que se determine por el logro de este objetivo.

ENSEÑANZA PRIMARIA

La Autoridad Administradora declaró que la política general del Gobierno en materia de enseñanza primaria es que en lo posible ésta esté a cargo de instituciones particulares y de las Autoridades Indígenas en vez de depender de la creación de nuevas escuelas oficiales: también expresó que era propósito manifiesto del gobierno regional proporcionar una enseñanza primaria gratuita y universal.

En 1952, había 327 escuelas primarias y escuelas de enseñanza en los idiomas vernáculos; de ellas, 42 (6 más que en 1951) estaban en el norte y alcanzaban una matrícula de 2.280 alumnos (un aumento de 220 sobre el año anterior) y 285 (19 más que en 1951) se hallaban en el sur y tenían una matrícula de 3.070 alumnos (1.110 más que el año anterior). De todas las escuelas primarias y de enseñanza en idiomas vernáculos que había en 1952, 164 eran escuelas subvencionadas de instituciones particulares y 100 eran escuelas no subvencionadas, también de instituciones particulares; 63 estaban a cargo del Gobierno y de las administraciones indígenas.

En su 11° período de sesiones el Consejo encareció a la Autoridad Administradora que intensificara sus esfuerzos para suministrar servicios de enseñanza primaria, especialmente en la parte septentrional del Territorio, y que tomara las disposiciones necesarias para que las autoridades locales de esa parte del Territorio desempeñaran en forma adecuada su misión en materia de enseñanza. La Autoridad Administradora, al hacer el comentario respectivo, declaró que asistían a las escuelas primarias y de enseñanza en idiomas vernáculos 1.330 niños más que en el año anterior, y que la matrícula en las escuelas a cargo de la Administración Indígena había aumentado ligeramente, tanto en la provincia de Bornu como en la de Benué, aunque la cifra para Adamawa había permanecido estacionaria. Agregó que en el norte las autoridades locales comprendían su responsabilidad en materia de instrucción, pero que la población estaba en general mucho menos dispuesta que en el sur a aprovechar los servicios que se ofrecían. Informó que la Administración Indígena de Adamawa establecería la escuela que necesitaban los habitantes de la localidad si en un plazo de dos años éstos mostraban suficiente interés

por la organización de las escuelas experimentales, en cada una de las cuales había un solo maestro provisto únicamente del equipo esencial. A su parecer, ésta era una prueba de que la Administración Indígena estaba dispuesta a dotar de una escuela a cualquier comunidad siempre que ésta estuviese deseosa de utilizarla. Señaló además que el número de escuelas a cargo de la Administración Indígena en los distritos de Adamawa había aumentado en cuatro durante el año 1952, y que se había creado otra escuela en el Emirato de Dikwa. El representante especial de la Autoridad Administradora comunicó al Consejo posteriormente durante su 13° período de sesiones, que hasta ese momento las comunidades locales no habían reaccionado en forma satisfactoria ante el sistema de escuelas experimentales.

No obstante, la Misión Visitadora notó que en todas las regiones visitadas, los habitantes mostraban interés en la instrucción y pedían más y mejores escuelas, así como aumento de la asignación gubernamental destinada a la enseñanza. En algunas regiones la Misión observó que los habitantes no estaban satisfechos con las escuelas a cargo de la Administración Indígena y deseaban que se crearan establecimientos educativos gubernamentales. Se pidió además a la Misión que prestara más atención a la instrucción de las jóvenes y que mejoraran las condiciones docentes en las escuelas de instituciones particulares.

ENSEÑANZA SECUNDARIA Y SUPERIOR

El programa de enseñanza secundaria de la Administración tiene como objetivo que se suministre una enseñanza que sea completa en sí misma y que al mismo tiempo prepare a los estudiantes para trabajos de responsabilidad, y que les suministre la base para una preparación profesional posterior cuando reúnan las condiciones para ello. Impártese esta enseñanza en dos escuelas misionales en Sasse y en Bali, en el Camerún Meridional, acerca de las cuales la Autoridad Administradora informa que son suficientes por el momento, si se tiene en cuenta el número de candidatos debidamente calificados que solicitan matrícula. El Gobierno, las Autoridades Indígenas, las misiones religiosas y la Corporación de Fomento del Camerún conceden becas de estudio, con destino a las escuelas secundarias del Territorio y de Nigeria, a los estudiantes cameruneses.

No existen en la actualidad establecimientos de enseñanza superior en el Territorio, pero se proporcionan oportunidades mediante las becas de estudio que ofrecen el Gobierno, el Consejo Británico (*British Council*), y la Corporación de Fomento del Camerún la cual destina £5.000 anuales con este propósito.

El Consejo ya manifestó anteriormente su permanente interés en la posibilidad de aumentar el número de becas de estudio para estudiantes cameruneses y que éstos tuvieran acceso a la enseñanza secundaria y a la superior. La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que en las dos escuelas secundarias misionales la matrícula, incluyendo 19 graduados, era de 330 (en comparación con 322 en 1951), y que la Corporación de Fomento del Camerún había concedido 25 becas para estudios secundarios (en comparación con 18 en 1951), además de las destinadas a los hijos de sus empleados.

La Misión Visitadora de 1952, además de informar que los estudiantes del Colegio de Bali, cuyo rendimiento escolar era superior al rendimiento medio co-

rriente, mostraban gran entusiasmo por sus estudios y que se había propuesto crear una escuela secundaria misional para niñas en Okoyong, declaró que se pedían más escuelas secundarias y una escuela secundaria para niñas. A este respecto, sin embargo, el representante especial de la Autoridad Administradora comunicó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que por el momento el número de egresados de las escuelas primarias no era lo suficientemente grande como para que se mantuviera en un nivel adecuado la cantidad de quienes deseaban el ingreso a las escuelas de enseñanza secundaria existentes.

En 1952, 13 estudiantes (dos más que en 1951) asistieron a universidades de ultramar gracias a becas del Gobierno y del Consejo Británico (*British Council*). La Corporación de Fomento concedió 18 becas (dos más que en 1951); de ellas, ocho servían para cursar estudios en el Colegio Universitario de Ibadán, en Nigeria; tres en el Colegio (*College*) de Fourah Bay, en Sierra Leona, y las demás en el Reino Unido.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo recomienda que la Autoridad Administradora trate por todos los medios posibles, inclusive mediante asistencia internacional, de aumentar el número de becas de estudios superiores destinadas a los indígenas.

DERECHOS DE MATRÍCULA

En todas las escuelas se cobran derechos de matrícula, salvo en aquéllas en que la enseñanza se imparte en los idiomas vernáculos. En 1952 permanecieron inalterados los derechos de matrícula de las escuelas primarias gubernamentales: en los cursos inferiores fueron de 12 chelines y 6 peniques por año, de 25 chelines por año en los cursos superiores. En las escuelas primarias de la Administración Indígena y de instituciones particulares, oscilaron entre estos extremos: 3 chelines y 4 peniques a 12 chelines y 6 peniques anuales en los cursos inferiores; 30 chelines a 40 chelines en los cursos superiores (5° y 6° años); no se dispone de cifras para 1951. Los derechos de matrícula y pupilage en la escuela secundaria fueron de £19 por año (un aumento de £1 sobre 1951 y de £3 adicionales por concepto de libros en la provincia de Camerún, y de £14 por año (un aumento de £2 sobre 1951), con un recargo de £4 para libros a los alumnos recientemente matriculados, en la provincia de Bamenda.

En su 11° período de sesiones el Consejo, recordando su anterior recomendación relativa a lograr que la enseñanza primaria fuera gratuita, recomendó a la Autoridad Administradora que renovara su política a este respecto con objeto de tomar medidas progresivas encaminadas hacia el objetivo final de la enseñanza gratuita. La Misión Visitadora de 1952 observó un anhelo general a este respecto.

La Autoridad Administradora declaró, en respuesta, que la dificultad en cuanto a la enseñanza gratuita era que alguien tenía que pagar por ella. Las instituciones particulares permitían algunas veces que los niños de las zonas más atrasadas asistieran gratuitamente a la escuela. El número de comunidades que adoptaban el procedimiento de pagar una suma global para un curso era cada vez mayor, sobre todo cuando se trataba de párvulos. En las escuelas de la Empresa Elders y Fyffes y de la Corporación de Fomento del Camerún no se cobraban derechos de ma-

trícula; la corporación pagaba además los derechos de matrícula de los hijos de sus empleados que asistían a escuelas que no fueran las suyas. Además, en casos de necesidad, las misiones religiosas eliminaban con frecuencia el pago de derechos de matrícula. La Autoridad Administradora opinó que en el Territorio, fuera de las regiones ocupadas por las plantaciones, la solución consistía en establecer *taas*, y expresó que, como se ha dicho ya anteriormente, habían comenzado los esfuerzos en ese sentido. El éxito de éstos era por el momento tan sólo limitado, pero la experiencia de Nigeria sugería que una vez implantado el principio en algunos lugares, sus beneficios serían tan evidentes que se propagaría rápidamente.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, recordando su recomendación anterior relativa a lograr que la enseñanza primaria sea gratuita, recomienda a la Autoridad Administradora continúe prestando particular atención a la necesidad de lograr este objetivo.

MAESTROS

En 1952, había en el territorio cinco escuelas normales (dos menos que en 1951) con una matrícula de 275 alumnos (en comparación con 340 alumnos en 1951). El número total de maestros de escuela aumentó de 1.121 (inclusive 116 maestras) en 1951 a 1.330 (inclusive 206 maestras) en 1952; la mayor parte de los maestros enseñaban en las escuelas primarias del sur del Territorio.

Todos los sueldos, tanto en el caso de los maestros del Gobierno como en el de las instituciones particulares, fueron modificados con efecto al 1° de abril de 1952. Los sueldos anuales con arreglo a la nueva escala oscilan entre £ 55 y £ 155 para los maestros gubernamentales no diplomados y entre £ 465 y £ 615 para maestros con funciones directivas; conforme a la antigua escala, los sueldos correspondientes eran de £ 42 a £ 120 y de £ 360 a £ 450. Los nuevos sueldos de los maestros de instituciones particulares oscilan entre £ 40 y £ 420-£ 700, en tanto que en la antigua escala variaban de £ 24 a £ 240-£ 480. Los sueldos de los maestros a quienes se elige para ocupar puestos que importen una responsabilidad especial en la enseñanza secundaria, en las escuelas normales o en la tarea de dirigir y administrar la enseñanza primaria, pueden ser llevados a la nueva escala de £ 570-£ 1.290.

Se informó al Consejo, en su 13° período de sesiones que las autoridades docentes aún tenían que afrontar el problema que significaba la necesidad de más maestros diplomados de enseñanza primaria, sobre todo en las escuelas primarias superiores de las misiones. Su Misión Visitadora de 1952 le hizo saber también que la mayoría de las escuelas normales estaban al parecer bien equipadas, sobre todo la de Mubi, y que la primera promoción de maestros de esa escuela se graduaría en enero de 1954, con lo cual se corregiría parcialmente la considerable falta de personal docente en las regiones septentrionales.

En vista de la disminución del número de maestros en 1951, el Consejo había expresado en su 11° período de sesiones la esperanza de que esta disminución sólo fuera temporal y de que aumentara el número de maestros calificados. La Autoridad Administradora respondió que durante el año que se examina el número de maestros aumentó en 209, cifra que comprende a 90 maestras.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota con satisfacción del aumento del número de maestros durante el período que se examina, pero tomando nota también de que continúa la escasez de maestros, sobre todo la de maestros diplomados de enseñanza primaria de segundo grado, recomienda que la Autoridad Administradora preste especial atención a la necesidad de mejorar y ampliar los servicios de enseñanza normal.

FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

La escasez de técnicos todavía constituye un gran problema económico y educativo. En 1952 había 38 pasantes que recibían enseñanza técnica en la Escuela de Artes y Oficios de Ombe, y se tenía el propósito de llevar ese número a 180. La Misión Visitadora de 1952 estimó que la Autoridad Administradora merecía elogios por haber organizado ese centro, que al parecer de la Misión pronto habría de contribuir mucho al progreso económico del Territorio.

La Misión recibió varias comunicaciones en las que se formulaban peticiones tendientes al establecimiento de centros artesanales en las divisiones de Victoria y Bamenda (a cuyo respecto supo la Misión que la Administración estaba preparando planes), así como de escuelas de orientación profesional y centros artesanales en materia de tejidos, cerámica, tintorería, hilados y capacitación agrícola práctica. La Autoridad Administradora informó ulteriormente que se acababa de abrir una escuela normal de agronomía en Bambui.

ENSEÑANZA PARA ADULTOS Y POPULAR

Durante el año que se examina se matricularon 1.478 hombres y 312 mujeres en 50 centros de enseñanza para adultos en la provincia de Bamenda. La Corporación de Fomento del Camerún tuvo a su cargo 141 cursos de lectura y escritura (nueve menos que en 1951), con una asistencia media de 1.522 alumnos (en comparación con una matrícula de 2.283 en 1951) e inició varios cursos de continuación de estudios para adultos. Además, puso en actividad 24 clases de costura para mujeres (tres más que en 1951); se estaba tratando de que se implantaran clases de lectura y escritura junto con estas últimas. También funcionaron clases en las explotaciones agrícolas de Pamol de propiedad de la United Africa Company, y clases libre en las divisiones de Victoria, Kumba y Manfe; los cursos dictados en las dos últimas divisiones estuvieron a cargo de particulares, y los de la División Victoria fueron dictados por maestros de escuelas particulares bajo el patrocinio de las Autoridades Indígenas. En Adamawa, las Autoridades Indígenas encargaron un proyector cinematográfico móvil y una prensa manual como accesorios para la enseñanza para adultos; nombraron un funcionario especial encargado de tomar y aplicar las medidas que fueran necesarias para suprimir el analfabetismo y adoptaron la regla de pagar 7 chelines y 6 peniques por mes a cualquier maestro particular que mantuviera una clase de 25 adultos por lo menos. La Misión Visitadora informó que se habían iniciado cerca de 100 clases sin contar las que estaban a cargo de misiones religiosas, y que existía la posibilidad de que su número aumentara; se habían entregado más de 100 certificados de alfabetización a adultos. Tomó nota de este progreso con satisfacción y expresó la esperanza de que se le intensificara.

Se nombró un organizador de clases de lectura y escritura para adultos en la División de Dikwa, donde en 1952 se establecieron 17 clases para adultos (eran 15 durante la visita de la Misión), cada una con 25 alumnos.

En su 11° período de sesiones el Consejo, tomando nota de los nuevos progresos realizados en la enseñanza para adultos, había expresado la esperanza de que en vista del elevado porcentaje de analfabetismo que existía en el Territorio, la Autoridad Administradora persistiera en sus esfuerzos en esa materia. En respuesta, la Autoridad Administradora señaló los hechos ya mencionados y declaró que la actividad en el campo de la enseñanza para adultos se había mantenido sin desmayo.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la China, si bien advertía los progresos obtenidos durante el período examinado instó a la Autoridad Administradora a que redoblara sus esfuerzos para mejorar las condiciones de la enseñanza en el Territorio, particularmente en el Camerún Septentrional.

El representante de Australia hizo suya la opinión, expresada por la Misión Visitadora de 1952, de que se necesitaban mayores y más amplios esfuerzos para desarrollar la enseñanza, y observó que era importantísimo el problema de provocar una reacción satisfactoria de parte de los habitantes indígenas. Consideró que el tiempo era un factor fundamental y que cabía esperar que el desarrollo de la enseñanza siguiera requiriendo una labor paciente de parte de la Autoridad Administradora.

El representante de Bélgica elogió la tarea fecunda y valiosa que en materia de enseñanza realizan las misiones cristianas, y señaló con particular complacencia que la Autoridad Administradora concedía gran importancia a esta labor, que quizás permitiera lograr un cambio radical en la mentalidad de los habitantes indígenas, sobre todo en el Camerún Septentrional.

El representante de Francia señaló que a pesar de las muchas dificultades se habían logrado progresos lentos pero firmes en el campo de la enseñanza primaria, y expresó su convicción de que las autoridades locales continuarían haciendo todo lo posible para estimular el interés de los habitantes indígenas en la instrucción y para que advirtieran la necesidad de hacer mayor sacrificio financiero con ese fin.

El representante de la India estimó que las necesidades del territorio en materia de enseñanza eran inmensas y excedían en mucho los fondos de que se disponía en la actualidad. En su opinión, el objetivo principal debía ser suprimir el analfabetismo dentro de un plazo previsible o en una fecha señalada como objetivo, y creía que la Autoridad Administradora actuaría justificadamente si buscara asistencia internacional para lograr ese propósito. Señaló que el carácter del problema era en parte social y económico, ya que en una comunidad económicamente subdesarrollada los niños a menudo no podían ir a la escuela porque tenían que ganar el sustento de su familia, o se les retiraba a una edad temprana y recaían en el analfabetismo.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la situación de la enseñanza

era deplorable. Los analfabetos constituían un 90% de la población y, según la Misión Visitadora de 1952, el porcentaje de analfabetos era todavía mayor entre las mujeres y los ancianos. El número de las escuelas primarias era insuficiente y sólo había dos escuelas secundarias en el territorio; no existía un solo establecimiento de enseñanza superior. Teniendo en cuenta que se cobraban derechos de matrícula en un territorio donde los habitantes eran demasiado pobres para pagarlos, y que las escuelas eran pocas y de baja calidad, era posible formarse una idea clara de cómo la ignorancia y el analfabetismo prevalecían en el Camerún. Si se consideraba que sólo el 10% de la población sabía leer y escribir y sólo el 2% de los niños de edad escolar asistían a la escuela en el Camerún Septentrional, según el informe anual, era evidente que el porcentaje de personas que sabían leer y escribir disminuiría en realidad después de transcurridos algunos años. Era indispensable multiplicar las sumas gastadas en materia de educación.

El representante de El Salvador expresó la esperanza de que pronto pudieran encontrarse los 180 alumnos que puede recibir la nueva escuela de artes y oficios.

El representante de Haití, basándose en el equipo escolar que él había visto, preguntó cuál podría ser la eficacia de la escuela indígena del norte si se la comparaba con una escuela misional o con cualquier otra escuela. Debía emprenderse una gran labor de persuasión para convencer a mentes todavía rebeldes de la necesidad de la instrucción; en el caso de la escuela indígena el estímulo sería aún mayor si los niños encontraran en la escuela algo diferente de la pobre choza familiar: asientos que lo coloquen a una altura mayor que la de un animal de cuatro patas, un pizarrón y pizarras. Dicho representante manifestó la esperanza de que se prestara algo más de atención a esas escuelas en el Camerún Septentrional.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló que los gastos públicos de educación habían continuado su rápido crecimiento (de £ 149.000 en 1950-1951 a £ 182.000 en 1951-1952). Prestaban ya sus servicios dos nuevas instituciones de importancia: una escuela de artes y oficios y una escuela de agricultura; la difusión de la enseñanza primaria había continuado su paulatino pero firme progreso, y como parte de la lucha contra el analfabetismo se habían logrado resultados alentadores en la enseñanza para adultos. En esa fase, la principal necesidad del Territorio en materia de enseñanza era hacer que el aumento gradual de los establecimientos de enseñanza primaria se convirtiera en un progreso rápido y general. El costo de la enseñanza tendía a acrecentarse de un año a otro con aumentos ineludibles en la partida para sueldos de los maestros. El personal docente, que poseía un sindicato muy bien organizado, constituía así un grupo de hombres y mujeres muy satisfactoriamente remunerado; sus sueldos podían compararse sin desmedro con los sueldos de la administración civil. Se necesitaban, pues, nuevas contribuciones locales en forma de impuestos, tasas o derechos para estar en armonía con estos aumentos, aun antes de que se decidiera aumentar los servicios. Su opinión, que creía compartida en general por los dirigentes políticos del Camerún Meridional, era que el problema podría solucionarse mediante la adopción general de tasas de educación. Expresó la esperanza de que la campaña de los representantes del pueblo provocara una respuesta satisfactoria de parte de éste.

El representante de la India, observando que de un total de unos 1.500 becarios de Nigeria que asistían a las universidades del Reino Unido solamente 13 provenían del Camerún Británico, juzgó que debía aumentarse considerablemente esa cifra y que si, como parece, no había fondos para ese fin, debía buscarse la asistencia de las organizaciones internacionales y de otras instituciones.

El representante de El Salvador manifestó la esperanza de que la Autoridad Administradora y la Corporación de Fomento del Camerún continuaran concediendo becas para cursar estudios superiores en Nigeria y en la metrópoli a los estudiantes del Camerún.

DERECHOS DE MATRÍCULA

El representante de la China instó a la Autoridad Administradora a que continuara prestando atención a la posibilidad de suministrar enseñanza gratuita.

El representante de Siria instó a que se llevaran a la práctica las recomendaciones anteriores en ese sentido.

El representante de El Salvador opinó que la Administración debía hacer todos los esfuerzos posibles para promover enseñanza gratuita, principalmente en las escuelas primarias. En el vecino Territorio del Camerún bajo administración francesa, la enseñanza pública era completamente gratuita; los grandes beneficios que los habitantes reciben de la enseñanza gratuita debían ser comunes a ambos Territorios.

El representante de Haití manifestó su impresión de que la asistencia escolar quizás fuera mayor en el Territorio si se estableciera la completa gratuidad de la enseñanza. Ciertamente es que los padres que deben realizar un esfuerzo para pagar los derechos de matrícula, tratan de que sus hijos vayan a la escuela, pero también es verdad que cuando los padres se desinteresan por la instrucción les es aún más desagradable tener que pagar por ella.

El representante especial de la Autoridad Administradora estimó que el nuevo gobierno del Camerún Meridional se preocuparía por la cuestión del eventual establecimiento de la enseñanza universal y gratuita. Ese Gobierno ya había llegado a la conclusión de que los gastos que éste importaba y las necesidades en materia de maestros sólo permitían pensar en ese objetivo como en una meta lejana. Los pequeños derechos de matrícula existentes no constituían al parecer un factor adverso considerable para la matrícula escolar.

MAESTROS

El representante de la China instó a la Autoridad Administradora a que prestara particular atención a la necesidad que el Territorio experimenta de más servicios de enseñanza normal.

El representante de El Salvador tomó nota del aumento del número de maestros y expresó la esperanza de que continuara esa tendencia.

Capítulo V

CAMERUN BAJO ADMINISTRACION FRANCESA

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

TERRITORIO Y POBLACIÓN

Situado en el corazón del África, el Camerún forma un triángulo de 432.000 kilómetros cuadrados de superficie, cuyo lado occidental es una línea que baja directamente desde el Lago Chad hasta el centro del Golfo de Guinea, y cuya base, también rectilínea, y más o menos paralela al ecuador, se extiende unos 800 kilómetros a lo largo del grado 2 de latitud Norte.

El Territorio se encuentra en una fase de transición, sin unidad geográfica. Por su clima y orografía puede dividirse en cuatro regiones naturales: al sur, una región de mesetas y bosques, cálida y húmeda; en el centro, un altiplano relativamente seco y fresco; al norte, una vasta llanura, seca y calurosa; y al oeste, una región montañosa, fresca y brumosa.

En 1952, el Territorio tenía unos 3.065.000 habitantes, 13.173 de los cuales eran europeos (en comparación con 2.700.000 habitantes y 2.500 europeos, que había en 1947). La población indígena no es étnicamente homogénea. En el sur, es de raza e idioma bantú y, por lo general, se ha convertido al cristianismo. En el norte, es de origen e idioma sudanés y, principalmente, mahometana.

EVOLUCIÓN HACIA LA AUTONOMÍA O LA INDEPENDENCIA

En sus resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII), la Asamblea General invita a las Autoridades Administradoras a que, en sus informes anuales, incluyan, entre otros datos, los relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyecta adoptar para conducir a los territorios en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia, y un cálculo aproximado del tiempo necesario para hacer efectivas las diversas medidas encaminadas hacia ese objetivo. Además, se pide al Consejo se sirva incluir en sus informes a la Asamblea General, una sección separada que trate del cumplimiento de dichas resoluciones.

Durante los períodos de sesiones séptimo y octavo de la Asamblea General, los representantes de tres partidos políticos del Camerún: Union des populations du Cameroun, Parti Socialiste camerounais y Evolution Sociale du Cameroun plantearon la cuestión del logro de la autonomía o de la independencia. El representante del primero pidió que se fijase una fecha límite para poner fin al régimen de administración fiduciaria en el Camerún. En cambio, los representantes del Parti socialiste camerounais y de Evolution sociale du Cameroun consideraron que era prematuro hablar de la independencia del Camerún para un futuro inmediato,

y pidieron que la Autoridad Administradora adoptara las medidas necesarias para acelerar la evolución del territorio hacia la autonomía.

Durante el octavo período de sesiones de la Asamblea General, el representante de Francia en la Cuarta Comisión declaró que la independencia real exigía cierto grado de autarquía y personal técnico y administrativo con conocimientos adecuados, requisitos que no se daban en el Camerún bajo administración francesa. La fijación de un plazo límite para la concesión de la independencia encerraba el peligro de que ese período resultase demasiado largo o corto.

La cuestión del logro de la autonomía o la independencia se trata en la parte III del presente informe.

PROBLEMAS DE FRONTERAS: LA CUESTIÓN DE LA UNIFICACIÓN

Los problemas que plantea la existencia de una frontera entre el Camerún bajo administración francesa y el Camerún bajo administración británica fueron objeto de varias peticiones dirigidas al Consejo de Administración Fiduciaria y a las dos Misiones Visitadoras que recorrieron el Territorio. En algunas de las citadas peticiones se formulaban quejas por las restricciones fronterizas, mientras que en otras, inclusive la presentada por la Union des Populations du Cameroun, se pedía la unificación política de los dos territorios del Camerún. El principal argumento esgrimido en apoyo de esta petición era que la división del Camerún alemán en dos zonas se había decidido sin el consentimiento de las poblaciones interesadas y constituía un obstáculo para el progreso político, económico, social y cultural del país.

La Misión Visitadora que recorrió el Territorio en 1952 declaró en su informe que tenía motivos sobrados para creer que la cuestión de la unificación de las dos partes del Camerún no constituía entonces un problema en el Camerún bajo administración francesa. En cambio, las restricciones fronterizas sí habían planteado algunos problemas en la región meridional de dicho Territorio. En relación con ello, se informó a la Misión que las dos Autoridades Administradoras interesadas estaban esforzándose por reducir a un minimum las restricciones fronterizas y habían adoptado varias medidas para facilitar la circulación de personas, moneda y mercaderías entre ambos territorios. La Misión estimaba que las disposiciones ya adoptadas al efecto reducían considerablemente las restricciones fronterizas y confiaba que continuarían las tentativas realizadas en tal sentido por ambas Autoridades Administradoras.

La cuestión de la unificación de los dos territorios del Camerún se planteó también en varias de las peticiones que examinó el Consejo en su 13º período de sesiones. Las organizaciones Ngondo, Kumzse y Union des populations du Cameroun, así como dos partidos

políticos del Camerún bajo administración británica, y otros peticionarios³¹⁷ reclamaban la unificación de las dos partes del Camerún, en tanto que la Evolution sociale camerounaise se oponía a la unificación inmediata.³¹⁸

También en la Asamblea General, durante sus períodos de sesiones séptimo y octavo, plantearon esta cuestión los representantes de la Union des populations du Cameroun, Parti socialiste camerounais y Evolution sociale du Camerounaise. Ya se ha mencionado el punto de vista expuesto por la Union des populations du Cameroun. Los representantes del Parti socialiste y de la Evolution sociale camerounaise negaron que la masa de la población tuviese por ahora deseo de que se realizase la unificación de los dos territorios del Camerún. Sin embargo, añadieron que la frontera entre ambos territorios no debía constituir un obstáculo para la libre circulación de personas y mercadería, y pidieron que prosiguiera la política recientemente iniciada, de atenuar las restricciones fronterizas.

Durante el octavo período de sesiones de la Asamblea General, el representante de Francia declaró en la Cuarta Comisión que habían desaparecido en gran parte las dificultades que, con anterioridad, creaba la existencia de la frontera y que la gran masa de la población se preocupaba muy poco de la unificación. Luego agregó que entre las personas que seguían con interés el asunto, muchas se oponían enérgicamente a la unificación, sobre todo en la región septentrional del Territorio.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las conclusiones siguientes:

El Consejo, tomando nota de la opinión expresada por la Misión Visitadora de 1952, en el sentido de que en el Camerún bajo administración francesa no tiene carácter crítico el deseo de unificar los Territorios bajo fideicomiso y de que la gran masa de la población no se interesa por tal problema, expresa la esperanza de que se continúe estudiando el asunto y de que, en los informes anuales futuros, se mantenga enterado al Consejo de la opinión pública en el Territorio y de la opinión de la Autoridad Administradora en lo que respecta a tal unificación.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

EVOLUCIÓN HACIA LA AUTONOMÍA O LA INDEPENDENCIA

El representante de los Estados Unidos de América hizo notar que el rápido progreso político y económico que se estaba logrando en el África Occidental había llegado a ser un ejemplo clásico de lo que se podía realizar con la cooperación de poblaciones de idioma y origen muy diferentes. El orador agregó que estaba seguro de que este hecho contribuiría enormemente a solucionar el problema colonial de una manera definitiva. Sin embargo, la índole del progreso era tal que no podían cerrarse los ojos a las complicaciones que surgirían si algunas regiones del África Occidental lograban la autonomía, mientras otras no la conseguían plenamente. Si se dejaba que tal situación perdurase

y evolucionase sin control, surgirían numerosas dificultades y, en fin de cuentas, se convertiría en terreno fértil para que agitadores, manejados por intereses extranjeros, disfrazados de patriotas locales, se dedicaran a actividades comunistas para dominar todo movimiento nacionalista en el que pudieran infiltrarse. La inminente creación de un Estado de la Costa de Oro y Nigeria y la concesión del derecho de libre determinación a los territorios del Togo y del Camerún bajo administración británica tendrían importantes repercusiones en los territorios vecinos. Por lo tanto, las decisiones que adopte Francia acerca del ritmo de evolución más conveniente para el bienestar del Camerún bajo administración francesa, revestirán, cada vez más importancia no sólo para el Territorio en fideicomiso, sino para todo el continente africano. El representante de los Estados Unidos opinó que esas decisiones influirían de una manera profunda en las posibilidades de los administradores coloniales para encauzar, mediante un proceso de evolución ordenado, las fuerzas cada vez más poderosas del nacionalismo africano. El orador agregó que estaba persuadido de que los administradores franceses del Territorio, personas capaces y bien informadas, no ignoraban las consecuencias que tendrían los acontecimientos que se iban a producir en los territorios vecinos y no deseaban que las poblaciones de los territorios bajo su administración quedasen a la zaga del progreso de los territorios vecinos. A continuación felicitó a los administradores franceses por la importante contribución que aportaban al progreso de las poblaciones del Camerún.

El representante de Haití señaló, con pesar, que el informe de la Autoridad Administradora correspondiente al año 1952 no hacía ninguna referencia al cumplimiento de la resolución de la Asamblea General relativa a la evolución del Territorio hacia la autonomía o la independencia.

PROBLEMAS DE FRONTERAS; LA CUESTIÓN DE LA UNIFICACIÓN

El representante de Siria señaló que en el informe anual de la Autoridad Administradora no se trataba la cuestión de la unificación de los dos territorios del Camerún. Pese a este hecho, deseaba saber cuál era la opinión de la Autoridad Administradora al respecto y qué planes estaban aplicando para lograr la unificación. El orador no veía qué obstáculos o impedimentos podían oponerse a tal unificación a pesar de que ambas Autoridades Administradoras, que tenían ciertas responsabilidades al respecto, declaraban que no podían hacer nada.

Refiriéndose a la resolución 758 (VIII) de la Asamblea General, el representante del Reino Unido manifestó que el Consejo no debía dejarse sugestionar, y conceder a la integridad de un territorio, definido por las organizaciones Union des Populations du Cameroun y Ngondo, la misma importancia que a los deseos, cada vez más claramente expresados, de las diversas poblaciones que habitan en dicha región del mundo. El régimen de administración fiduciaria tiene por objeto servir los intereses de los habitantes en los Territorios en fideicomiso, y no mantener la integridad de un territorio determinado. El representante del Reino Unido hizo notar que otros partidos políticos, por ejemplo, la Evolution Sociale Camerounaise, habían negado que existiera actualmente, entre las masas del Camerún, un clamor por la unificación, opinión que,

³¹⁷ T/PET.5/155, 156, 158, 159, 171; T/PET.5/L.6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; T/PET.4 y 5 y 5/L.1, 2, 3, 4.

³¹⁸ T/PET.5/L.5.

al parecer, era compartida por las Misiones Visitadoras que habían recorrido una tras otra el Territorio. Apartadamente, en el Territorio había múltiples opiniones sobre esta cuestión y la Autoridad Administradora y el Consejo de Administración Fiduciaria sólo podrán conocer bien los deseos reales de los habitantes cuando las poblaciones hayan evolucionado lo suficiente en el terreno político y los diversos partidos puedan hacer oír su voz en los diversos problemas gubernamentales. El representante del Reino Unido opinaba que, por el momento, el Consejo debía dejarse guiar por la opinión de las Misiones Visitadoras, según las cuales tal cuestión no tenía por ahora gran interés para la población, y posiblemente para el propio Consejo de Administración Fiduciaria.

El representante especial de la Autoridad Administradora recordó que el Consejo ya había examinado con anterioridad la cuestión de la unificación de los dos territorios del Camerún y que la Misión Visitadora de 1952 había informado que creía que no era apremiante en el Camerún bajo administración francesa, ni que la gran masa de la población se interesaba por este problema. La Autoridad Administradora tenía una opinión parecida del asunto.

La Union des Populations du Cameroun había declarado que la circulación de mercaderías y personas entre los dos territorios estaba sujeta a ciertas restricciones. Esta afirmación era exacta, pero tales restricciones afectaban a los exportadores menos que a los agricultores que iban de mercado en mercado o pasaban la frontera para visitar a amigos o parientes. De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración Fiduciaria, la Autoridad Administradora había adoptado ciertas medidas para liberalizar los reglamentos fronterizos y disminuir el número de puestos aduaneros. Los habitantes del Camerún pueden circular libremente entre los dos territorios, pero han de presentar documentos de identidad en la zona francesa y un pase que tiene tres años de validez, en la zona británica. También es libre el movimiento de mercaderías, hasta un máximo de 25 kilogramos, siempre que no se trate de artículos en régimen de monopolio, por ejemplo, el cacao, que sólo puede importar, en el Camerún bajo administración británica, la Junta de comercialización de este producto. En lo que respecta al ganado vacuno, pueden cruzar la frontera sin ninguna restricción hasta tres cabezas. Los artículos de regalo pueden circular libremente si su valor no pasa de 15.000 francos. En cuanto a las divisas, se pueden pasar hasta 15 libras esterlinas y no existe ninguna restricción para exportar francos. Todas estas medidas, tomadas de común acuerdo por las Autoridades Administradoras, han sido muy bien acogidas por la población que habita en la región fronteriza. En 1953, el Comisario del Camerún bajo administración británica examinó conjuntamente con el representante especial la posibilidad de preparar un reglamento común de transportes por carretera, a fin de unificar el sistema de caminos de los dos territorios. El representante especial terminó declarando que la Autoridad Administradora no creía que el problema de la unificación tuviera un carácter urgente. En el Camerún bajo administración francesa empieza apenas ahora a nacer un sentimiento nacional; este hecho obedece, sobre todo, a motivos políticos que no interesan a la mayoría de la población. Gran parte de los habitantes del Camerún se oponen a toda modificación del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INCORPORACIÓN DEL CAMERÚN A LA UNIÓN FRANCESA

El Camerún forma parte de la Unión Francesa en calidad de "Territorio Asociado". Administrativamente, depende del Ministerio francés de Ultramar; desde el punto de vista legislativo depende del Parlamento francés, en el cual se encuentra representado.

El Territorio elige por sufragio directo cuatro diputados a la Asamblea Nacional. Tiene igualmente tres representantes en el Consejo de la República y cinco representantes en la Asamblea de la Unión Francesa, todos ellos elegidos por la Asamblea Territorial.

El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13º período de sesiones, que en octubre de 1953 la Asamblea Territorial había procedido a la elección de los representantes del Territorio en la Asamblea de la Unión Francesa. De los cinco puestos vacantes, se reservaron cuatro para los candidatos elegidos en el segundo colegio electoral³¹⁹ es decir uno más que en las elecciones de 1947.

Los indígenas del Camerún gozan del estatuto personal de "personas bajo la administración fiduciaria de Francia", lo que les confiere la condición de ciudadanos de la Unión Francesa. Pueden adquirir la nacionalidad francesa por naturalización, pero para ello deben renunciar a su estatuto personal lo que equivale a decir, a la poligamia. Como ciudadanos de la Unión Francesa gozan de los derechos fundamentales previstos en la Constitución francesa de 1946 y participan tanto en la vida política del Territorio como en la de la Unión Francesa.

En su noveno período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, aunque señaló que la asociación del Territorio con la Unión Francesa no dejaba de ofrecer ciertas ventajas, consideró que la Autoridad Administradora debía continuar manteniendo un estatuto distinto para el Territorio, con objeto de concederle en última instancia la autonomía o la independencia. En su 11º período de sesiones, el Consejo opinó que las relaciones que existían entre el Camerún y la Unión Francesa parecían ajustarse a las disposiciones de la Carta y el Acuerdo de Administración Fiduciaria, pero no se creyó competente para emitir un juicio sobre los principios de derecho constitucional en que podrían inspirarse los acuerdos entre el Territorio y la Unión Francesa.

La Misión Visitadora de 1952 informó que las organizaciones políticas del Territorio habían señalado en repetidas ocasiones a su atención la cuestión de las relaciones entre el Camerún y la Unión Francesa. Una de ellas, la Union des Populations du Cameroun declaró que se oponía a la incorporación del Camerún a la Unión Francesa porque consideraba que si el Territorio quedaba asimilado a los territorios franceses de ultramar, se retardaría su evolución y desaparecería toda esperanza de independencia. Asimismo presentó la queja de que la representación del Camerún en los órganos legislativos de la Unión Francesa era insuficiente para asegurar la defensa de los intereses del Te-

³¹⁹ En la sección siguiente se explica el sistema de los colegios electorales.

ritorio. Por el contrario, otras organizaciones, como la Evolution Sociale Camerounaise y el Bloc démocratique camerounais, consideraron que la representación del Camerún era suficiente en la fase actual de evolución del Territorio y ofrecía ventajas indiscutibles.

La Misión estimaba que no podía agregar nada nuevo a los comentarios ya formulados al respecto por el Consejo de Administración Fiduciaria.

En varias peticiones dirigidas al Consejo de Administración Fiduciaria,³²⁰ la Union des populations du Cameroun reiteró su oposición a la asociación del Camerún con la Unión Francesa y pidió que se creara en el Territorio una asamblea legislativa y un consejo de gobierno, elegidos por sufragio universal. Otros dos peticionarios, las organizaciones Ngondo y Kumzé³²¹ también se opusieron a la asociación con la Unión Francesa.

La cuestión de la incorporación del Camerún a la Unión Francesa se planteó asimismo ante la Asamblea General durante sus períodos de sesiones séptimo y octavo, por los representantes de los partidos Union des populations du Cameroun, Parti socialiste camerounais y Evolution sociale camerounaise. Ya se han expuesto con anterioridad los puntos de vista de la Union des populations du Cameroun. Los representantes de las otras dos organizaciones eran partidarios de la evolución progresiva del Territorio hacia la autonomía o la independencia, dentro de la estructura de la Unión Francesa; sin embargo, opinaban que debían realizarse ciertas reformas con objeto de acelerar dicha evolución.

En el séptimo período de sesiones de la Asamblea General, el representante de Francia en la Cuarta Comisión declaró que quedaría mejor asegurado el porvenir del Camerún si éste decidiese permanecer dentro de la Unión Francesa, por encontrarse ya garantizados los derechos inalienables del Territorio en la Constitución francesa, en el Acuerdo de Administración Fiduciaria y en los textos legislativos que rigen el estatuto de la Asamblea Territorial. Luego agregó que estaba convencido de que en un futuro no especificado el Camerún dejaría de ser un "Territorio asociado" para pasar a ser Estado asociado, dentro de la estructura de la Unión Francesa. En el octavo período de sesiones, el representante de Francia en la Cuarta Comisión indicó que el estatuto jurídico del Territorio difería mucho del de los territorios vecinos que forman parte de la Unión Francesa. Tales diferencias forzosamente se acentuarían a medida que en el Territorio bajo fideicomiso se creara un parlamento local, un consejo de gobierno y otros órganos análogos.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión siguiente:

El Consejo, consciente de los objetivos del régimen internacional de administración fiduciaria, teniendo en cuenta las opiniones expresadas sobre las relaciones que existen entre el Territorio en fideicomiso y la Unión Francesa, así como también las observaciones de la Autoridad Administradora y especialmente su declaración de que, al terminarse el régimen en fideicomiso del Territorio, las poblaciones de los territorios en fideicomiso serán libres, si así lo desean, para realizar sus aspiraciones fuera de la Unión Francesa; considerando, además, las recomendaciones formuladas, previamente, por el Consejo al respecto; expresa su confianza

en que estas relaciones continuarán desarrollándose de conformidad con los términos del Acuerdo de Administración Fiduciaria y con las disposiciones de la Carta.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

El derecho de sufragio se implantó en el Camerún por la Constitución de 1946. Los electores forman dos colegios, el primero de los cuales abarca los ciudadanos con estatuto civil de derecho común (*citoyens de statut civil de droit commun*) (franceses y autóctonos que hayan adquirido la nacionalidad francesa por naturalización), y el segundo, los ciudadanos con estatuto personal (*citoyens de statut personnel*), que constituyen la mayoría de la población indígena.

Gozan del derecho de voto todos los ciudadanos adultos con estatuto civil de derecho común y ciertas categorías de ciudadanos con estatuto personal. La concesión del derecho de voto a estos últimos ha sido reglamentada por varios textos sucesivos que, según la Autoridad Administradora han tenido por efecto que el número de electores inscritos, que en 1946 era de 15.896, aumentara a 564.335 el 31 de marzo de 1952 y llegase a cerca de 600.000 para el 31 de marzo de 1953.

Según el tipo de elecciones, cada colegio electoral tiene una representación distinta. Así, el primer colegio elige un diputado para la Asamblea Nacional y 18 representantes para la Asamblea Territorial, en tanto que el segundo elige tres diputados para la Asamblea Nacional y 32 representantes para la Asamblea Territorial.

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción del aumento registrado en el número de electores inscritos en 1951 y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría nuevas medidas para establecer lo antes posible el sufragio universal y el colegio único. El Consejo, al observar que en las elecciones del 17 de junio de 1951 se abstuvo un 55% del cuerpo electoral inscrito, también expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora se esforzaría por educar y estimular a los electores inscritos para que participasen más en las elecciones.

En respuesta a las citadas recomendaciones, la Autoridad Administradora hizo notar que la ley de 6 de febrero de 1952 no solamente había ampliado el cuerpo electoral, sino que había aumentado la representación del segundo colegio en la Asamblea Territorial. Aunque en las elecciones de marzo de 1952, el número de votantes no sólo representó el 45% de los electores inscritos, la Autoridad Administradora confiaba en que podría atender las recomendaciones del Consejo, convenciendo progresivamente a los electores inscritos para lograr que participaran en mayor número en las elecciones. También señaló que los progresos logrados en los últimos cinco años en la organización del registro de nacimientos, matrimonios y defunciones habían contribuido a aumentar el cuerpo electoral.

La Misión Visitadora de 1952 comprobó que la población del Camerún había logrado grandes progresos en el terreno electoral desde 1947 pero que, a excepción de determinados electores de la región meridional no había alcanzado todavía la madurez electoral. La Misión creía que era preciso implantar lo antes posible en el Territorio el sufragio universal y el colegio único. Sin embargo, en lo que respecta al sufragio universal, creía que para que la reforma tuviera sentido, era indispensable perfeccionar antes la organización del registro

³²⁰ T/PET.5/115/Add.1; L.2 y L.6.

³²¹ T/PET.5/L.7 y L.9.

civil y est' nular además a los electores inscritos para que ejerciesen el derecho de sufragio.

En una petición,³²² la organización Kumzsé deploraba que se mantuviera en el Camerún el sistema de doble colegio y se mostraba igualmente partidaria de que se crease el registro civil obligatorio, como medida previa para establecer el sufragio universal.

Asimismo los representantes de la Union des populations du Cameroun, Parti socialiste camerounais y Evolution sociale du Cameroun plantearon la cuestión del derecho de sufragio en los períodos de sesiones séptimo y octavo de la Asamblea General y pidieron la abolición del régimen de doble colegio electoral. El representante de la Union des populations du Cameroun solicitó además que se organizaran las elecciones a base del sufragio universal. Durante el octavo período de sesiones, el representante de Francia en la Cuarta Comisión informó que se estaba estudiando la cuestión del colegio electoral único.

En el Territorio hay varios partidos políticos. La Autoridad Administradora señalaba en su informe que el Camerún había despertado a la vida política después de la segunda guerra mundial. Los partidos de la Metrópoli (entre los cuales los más activos eran el Rassemblement du peuple français y el socialista) trataron al principio de crear filiales en el Territorio, pero su éxito fué limitado y pronto quedaron reducidos a los sectores europeos, sin gran raigambre en los medios africanos. No tardaron en surgir otros partidos, propiamente del Camerún, sin programas bien definidos. Los más importantes son la Renaissance camerounaise, la Evolution sociale camerounaise, la Union des populations du Cameroun, el Bloc démocratique camerounais y el Parti socialiste camerounais. Por último se pueden citar las agrupaciones tradicionales, tales como el Ngondo (Asamblea Tradicional del pueblo duala), el Kumzsé (Asamblea Tradicional del pueblo bamileke) y la Unión tribal bantú.

La Misión Visitadora observó que la influencia que ejercen los partidos en la vida política del Territorio es todavía pequeña. Tuvo la impresión de que el "espíritu aldeano" de los autóctonos, todavía muy apegados a sus tribus, constituye uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los partidos políticos en el Territorio y que las preocupaciones locales, por no decir personales, impiden a menudo que colaboren elementos que pertenecen a grupos diferentes. Sin embargo, la Misión creía que, con el nacimiento de una conciencia nacional, que ya se observaba en el Camerún, los partidos políticos están llamados a desempeñar un papel más importante en la vida del Territorio.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones:

El Consejo, recordando sus recomendaciones anteriores, así como la opinión expresada por la Misión Visitadora de 1952; considerando los puntos de vista expuestos en el presente período de sesiones del Consejo, encarece a la Autoridad Administradora que instituya el colegio electoral único y el sufragio universal de los adultos, de ser posible antes de las próximas elecciones.

El Consejo, observando la falta de unidad política entre las regiones septentrional y meridional del Territorio; teniendo en cuenta las observaciones de la Autoridad Administradora sobre la materia; expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora continúe

adoptando todas las medidas posibles para fomentar entre la población del Territorio un sentido de conciencia nacional que conduzca a una mayor integración social y política del Territorio.

ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO Y ASAMBLEA TERRITORIAL

La administración del Camerún se halla bajo la autoridad de un Alto Comisionado (*Haut Commissaire*) de la República, quien depende directamente del Ministerio de la Francia de Ultramar. En sus funciones, el Alto Comisionado está asistido por la Asamblea Territorial, órgano electivo que tiene atribuciones en cuestiones presupuestarias, financieras, económicas y administrativas. La Asamblea discute y aprueba el presupuesto del Territorio; delibera sobre ciertas cuestiones de orden financiero, económico y administrativo y evacua los consultas que deben hacerse en cuestiones análogas; por último, puede enviar sus comentarios al Gobierno en todas las cuestiones, salvo las de carácter político, que interesen al Territorio.

La Asamblea Territorial fué creada por ley del 6 de febrero de 1952, en sustitución de la antigua Asamblea Representativa cuyo mandato estaba a punto de expirar. La citada ley modificó la composición de la anterior Asamblea y aumentó el número de miembros de la nueva de 40 a 50, el de los miembros elegidos por el primer colegio de 16 a 18 y el de los elegidos por el segundo de 24 a 32.

No obstante, las facultades de la Asamblea Territorial seguían siendo las mismas que las de la Asamblea Representativa. Sin embargo, la ley del 6 de febrero de 1952 estipulaba que antes del 1° de julio de 1952 se promulgaría una ley definiendo las atribuciones de la Asamblea. A este respecto, la Autoridad Administradora manifestó en su informe correspondiente a 1951 que se estaba estudiando un proyecto de ley para ampliar tales atribuciones.

En su 11° período de sesiones, el Consejo había tomado nota con satisfacción de las reformas introducidas y expresado la esperanza de que la Autoridad Administradora aumentara aún más la representación de los africanos en la Asamblea Territorial. El Consejo, que en varias ocasiones había recomendado que se ampliaran los poderes de la Asamblea local, también hacía constar la esperanza de que el proyecto de ley por el que se ampliaban los poderes de la Asamblea Territorial fuese aprobado lo antes posible.

La Misión Visitadora de 1952 declaró que había quedado favorablemente impresionada por el elevado tono de los debates de la Asamblea Territorial y por la madurez política de que daba pruebas. La Misión comprobó que existía un deseo manifiesto de que se ampliaran las facultades de la Asamblea, aunque las opiniones sobre el alcance de tal ampliación eran distintas; la Misión opinaba que los deseos de la población y la manera cómo la Asamblea había realizado sus tareas justificaban una reforma en tal sentido. Teniendo conocimiento, a su paso por París, que el proyecto de ley sobre ampliación de los poderes de la Asamblea estaba todavía en estudio en el Ministerio de la Francia de Ultramar, expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría todas las medidas pertinentes para hacerlo aprobar cuanto antes.

El representante de la Autoridad Administradora declaró en el Consejo durante el 13° período de sesiones, que tenía la esperanza de que el Parlamento francés discutiría antes del verano de 1954 las reformas polí-

³²² T/P.ET.5/L.9.

ticas que interesaban al Territorio. Entre tales reformas figuraba especialmente la ampliación de las facultades deliberantes de la Asamblea Territorial.

Respecto a la composición de la Asamblea, la Misión señaló que el sistema del doble colegio era objeto de vivas críticas en ciertos sectores de la población indígena. Algunos críticos afirmaban que constituía una discriminación racial en el terreno político, mientras que otros deploraban que tal sistema se hubiera abolido en el Togo, pero no en el Camerún bajo administración francesa. La Misión creía que sería conveniente establecer cuanto antes el sistema del colegio único. Recordando que se había utilizado tal sistema en las elecciones municipales del 30 de noviembre de 1952, reservando cierto número de puestos para los ciudadanos franceses, manifestó que si tal solución daba resultados satisfactorios, podría constituir un paso de transición en la sustitución progresiva del sistema de doble colegio por el de colegio único.

A este respecto, la Autoridad Administradora explicó que, teniendo en cuenta la fase actual del desarrollo del Territorio, la ampliación del sistema de colegio único utilizado en las elecciones municipales para que abarcara las elecciones a la Asamblea Territorial, originaba ciertos inconvenientes, y que, en vista de la complejidad de la economía del Camerún y de la importancia que tenía la participación de los europeos en su fomento económico, con el sistema de colegio único se corría el riesgo de limitar en exceso el número de los miembros de la Asamblea Territorial familiarizados con los métodos modernos de producción.

La cuestión de la Asamblea Territorial se ha planteado en varias de las peticiones dirigidas al Consejo de Administración Fiduciaria.³²³ Las organizaciones Union des populations du Cameroun, Ngondo y Kumzé pidieron que se substituyera la Asamblea Territorial por un órgano dotado de facultades legislativas. Las dos primeras se quejaban al propio tiempo de que la población indígena no estuviese suficientemente representada en la Asamblea Territorial.

Asimismo, la cuestión de la administración del Territorio y de la Asamblea Territorial fué planteada en los períodos de sesiones séptimo y octavo de la Asamblea General por los representantes de las organizaciones Union des populations du Cameroun, Parti socialiste camerounais y Evolution sociale du Cameroun. Ya se han expuesto con anterioridad los puntos de vista de la Union des populations du Cameroun acerca de la Asamblea Territorial. Los representantes de los otros dos partidos pidieron que se ampliassen las facultades de la Asamblea Territorial. Los tres representantes eran partidarios de la creación de un consejo de gobierno, dotado de poderes ejecutivos, por conducto del cual la población indígena podría participar eficazmente en el gobierno.

En el octavo período de sesiones de la Asamblea General, el representante de Francia³²⁴ en la Cuarta Comisión también reconoció que convendría ampliar las facultades de la Asamblea Territorial y permitir que la población autóctona participara más en las actividades del poder ejecutivo. Hablando en su calidad de diputado del Camerún, expresó la esperanza de que

en enero de 1954 podría presentar un proyecto en tal sentido ante la Asamblea Nacional.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las conclusiones y recomendación siguiente:

El Consejo, recordando sus recomendaciones anteriores relativas al aumento de la representación de los africanos en la Asamblea Territorial y a la promulgación del proyecto de ley por el que se prevé la ampliación de los poderes de dicha Asamblea; observando que el representante de la Autoridad Administradora ha dado seguridades de que su Gobierno estaba dispuesto a ampliar considerablemente las facultades deliberantes de la Asamblea Territorial y que algunos de los miembros de esta Asamblea serían elegidos para el Consejo Ejecutivo que va a crearse; encarece a la Autoridad Administradora que promulgue lo antes posible dicho proyecto de ley.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y MUNICIPIOS MIXTOS

Las circunscripciones administrativas del Territorio se encuentran bajo la autoridad de los jefes de región y de los jefes de subdivisión, funcionarios administrativos que están bajo la jurisdicción del Alto Comisionado. Dichos funcionarios son auxiliados en el examen de las cuestiones de índole financiera, económica y social por los consejos de notables (*conseils de notables*), órganos consultivos nombrados por el Alto Comisionado. Sin embargo, esta organización no existe para los municipios mixtos (*communes mixtes*) urbanos y rurales, que tienen un régimen netamente municipal.

En la actualidad hay 12 municipios mixtos urbanos en el Territorio. Dos de ellos (Duala y Yaundé) fueron creados en 1941; siete (Ebolowa, Edéa, N'Kongsamba, Mbalmayo, Kribi, Sangmelima y Garoua) durante los años 1950 y 1951, y tres (Ngaundéré, Bafussam y Bafang) en 1953. Estos municipios son administrados por administradores alcaldes (*administrateurs-maires*) nombrados por el Alto Comisionado. Los administradores alcaldes son auxiliados por comisiones municipales, designadas también por el Alto Comisionado y que tienen facultades deliberativas y consultivas en ciertas cuestiones relativas a la gestión del municipio.

Los municipios mixtos rurales fueron creados en fecha más reciente, por decreto del 21 de agosto de 1952, en las 12 subdivisiones de las regiones de Nyong-et-Sanaga, N'Tem y Dja-et-Lobo. Son administrados por administradores alcaldes, nombrados por el Alto Comisionado y auxiliados por consejos municipales. Estos tienen facultades análogas a las de las comisiones municipales, pero sus miembros son elegidos mediante voto mayoritario en una sola vuelta. Se ha adoptado el sistema de colegio electoral único, pero en varios municipios se reservan puestos para los candidatos franceses, aunque según la Autoridad Administradora en número muy reducido.

En períodos de sesiones anteriores, el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó que se reformaran los consejos de notables. También recomendó que se ampliara a todo el Territorio la creación de municipios mixtos urbanos y que las comisiones municipales tuviesen carácter electivo. La Autoridad Administradora informó al Consejo que en 1952 se pensaba substituir los consejos de notables por consejos regionales con una composición más amplia y con mayores atribuciones, y que tal reforma se efectuaría creando municipios mixtos rurales, proyecto que, a su juicio, constituía un paso importante para la descentralización y la autonomía administrativa regional.

³²³ T/PET.5/L.7, L.9, 121; T/PET.4 y 5/L.3.

³²⁴ Que fué el Sr. Ninine, Diputado del Camerún bajo administración francesa en la Asamblea Nacional. El Sr. Ninine es afiliado de la Union sociale camerounaise, partido político del Camerún.

En su informe correspondiente a 1952, la Autoridad Administradora señaló que por decreto de 21 de agosto de 1952 se habían creado 12 municipios mixtos rurales y que las elecciones a los concejos municipales de esos centros se habían celebrado en diciembre del mismo año. La Autoridad Administradora opinaba que se habían desarrollado satisfactoria y ordenadamente y, a pesar de que el porcentaje de abstenciones había sido bastante elevado, los resultados parecían ser una representación bastante exacta de las poblaciones interesadas. Después informó que ya se estaban estudiando la aplicación del régimen de municipios mixtos rurales a otras regiones del Territorio, pero al mismo tiempo puso en guardia contra las reformas demasiado rápidas en una sociedad que conservaba intactas muchas instituciones tradicionales.

En el citado informe no se mencionaba el proyecto sobre los consejos regionales, que debía ponerse en práctica en 1952, pero la Misión Visitadora manifestó que en dicho año la Asamblea Territorial se opuso a ese proyecto.

Respecto a los municipios mixtos urbanos, el representante especial de la Autoridad Administradora señaló al Consejo durante el 13° período de sesiones que en 1953 se habían creado tres nuevos centros de esta clase en Ngaundéré, Bafussam y Bafang. Además, la Administración había preparado un proyecto de reforma para establecer concejos municipales de tipo electivo en Duala y Yaundé, y se proponía consultar a la Asamblea Territorial sobre este proyecto durante 1954.

A juicio de la Misión Visitadora, la creación de los municipios mixtos rurales constituía un importante paso hacia la evolución política y económica del Territorio. Aunque reconocía que era lógico que se hubiesen escogido tres de las zonas más adelantadas de la región meridional para establecer los primeros municipios, la Misión consideraba que convendría extender la reforma lo antes posible a otras regiones del Territorio. Luego hacía notar que la Administración tenía el propósito de establecer municipios mixtos rurales en la región de los bamiléke y expresaba la esperanza de que tal propósito se convirtiera pronto en realidad.

La Administración local informó a la Misión que hasta entonces no le había parecido posible que las comisiones municipales tuviesen carácter electivo en vista de la inestabilidad y diversidad de la población de las aldeas. A su juicio, algunos pequeños municipios urbanos como Ebolowa, Sangmélina y Mbalmayo, que necesitaban subsidios del Territorio para equilibrar sus presupuestos, se verían obligados a fusionarse con los municipios rurales que les rodeaban, mientras que los municipios urbanos más importantes, tales como Duala y Yaundé, se mantendrían y evolucionarían hacia un sistema plenamente electivo. La Misión opinaba que este plan era lógico.

La cuestión de los consejos locales fué planteada en tres peticiones. El Comité Central de la Union des populations du Cameroun,³²⁵ de Mbalmayo, pedía que se crearan en seguida municipios con plenos poderes y completa autonomía. El Comité Regional de la Union des populations du Cameroun, de Fumbau, y el Kumzé³²⁶ pidieron que los actuales consejos de notables fuesen sustituidos por consejos regionales de tipo electivo.

Los representantes del Parti socialiste camerounais y de la Évolution sociale du Cameroun también plantearon esta cuestión ante la Asamblea General en los períodos de sesiones séptimo y octavo, pidiendo que se aumentase el número de municipios.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión y la recomendación siguientes:

El Consejo, tomando nota con satisfacción del aumento del número de municipios mixtos urbanos y del establecimiento de municipios mixtos rurales, así como de la reforma electoral prevista para las municipalidades de Duala y Yaundé, recomienda que estas instituciones se fomenten aun más y se extiendan a todo el Territorio y que la Autoridad Administradora asesore a dichos órganos para que puedan desempeñar sus funciones cada vez con más eficacia.

JEFATURAS TRADICIONALES

Los jefes de región y de subdivisión ejercen su autoridad por conducto de los jefes tradicionales que se encuentran bajo su jurisdicción. Estos jefes son nombrados según la costumbre y reconocidos por el Alto Comisionado. Esencialmente representan a colectividades autóctonas y, como tales, colaboran con la Administración en cargos como jueces de los tribunales de derecho consuetudinario, empadronadores del censo y recaudadores de impuestos, actuando, en general, como intermediarios entre los jefes de las circunscripciones administrativas y la población.

La Misión Visitadora de 1952 señaló que la institución de las jefaturas tradicionales suscitaba numerosas críticas de las poblaciones de la región meridional. En efecto, algunos elementos autóctonos consideraban que tales jefes no eran más que funcionarios a sueldo de la Administración, mientras que los jefes se quejaban por su parte de que la falta de respeto de la población y su supeditación a la Administración les quitaban gran parte de su autoridad.

La Autoridad Administradora reconoció que la rápida evolución del Territorio imponía que ciertos aspectos de la estructura política consuetudinaria se adaptaran al nuevo género de vida de la población. Por ello había tratado de reorganizar las jefaturas tradicionales, definiendo el papel y facultades de los jefes y sus relaciones con la población, por una parte, y con la Administración, por la otra. Un proyecto de ley preparado a tal efecto se presentó a la Asamblea local para que diera su opinión, y ésta lo aprobó en 1949. La Misión Visitadora señalaba que la Asamblea Nacional estaba examinando dicho proyecto en esa época.

La Misión Visitadora también informó que la Administración se esforzaba además por adaptar progresivamente las jefaturas tradicionales a las necesidades de los tiempos presentes, democratizando su funcionamiento y adiestrando a los jefes en las técnicas modernas. Aunque es cierto que los esfuerzos desplegados por la Administración para educar a los jefes han dado algunos resultados alentadores, la Misión hizo notar, sin embargo, que algunos jefes, sobre todo en la región septentrional seguían siendo hostiles a los métodos democráticos. No obstante, también reconoció que la formación de los jefes constituía una labor lenta, a la que debía prestarse la mayor atención.

La cuestión de las jefaturas tradicionales fué planteada a la Asamblea General, en los períodos de sesiones séptimo y octavo, por los representantes del Parti socialiste camerounais y de la Évolution sociale

³²⁵ T/PET.4 y 5/L.3.

³²⁶ T/PET.5/114, L.9.

camerounaise, quienes opinaron que los jefes debían ser representantes de la población y guardianes de sus tradiciones locales y no bajo la jurisdicción de los funcionarios de la Administración.

En su 13° periodo de sesiones, el Consejo aprobó las conclusiones y la recomendación siguientes:

El Consejo, tomando nota con satisfacción de las medidas que la Autoridad Administradora ha adoptado para organizar las jefaturas y establecer oficinas de aldea (bureaux de village), que han tenido por efecto definir con más precisión las atribuciones de los jefes de aldea y extender el régimen de los municipios; tomando nota asimismo que la Autoridad Administradora ha presentado a la Asamblea Nacional francesa un proyecto de ley en el que se definen el papel y las facultades de los jefes tradicionales; recomienda a la Autoridad Administradora que tome todas las medidas necesarias para asegurar la democratización progresiva de las instituciones tradicionales.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En sus periodos de sesiones cuarto y noveno, el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó a la Autoridad Administradora que se nombrara el mayor número posible de indígenas para puestos administrativos de responsabilidad.

Los servicios administrativos tenían, en 1952, 9.791 funcionarios africanos y 4.323 europeos, de los cuales desempeñaban altos cargos 73 africanos y 827 europeos. Así, pues, la plantilla de personal administrativo de 1952 reflejaba un aumento neto sobre la de 1948, cuando había 4.343 africanos y 1.044 europeos. Según la Autoridad Administradora tal incremento se explicaba, por la evolución económica del Territorio, junto con la ejecución del plan decenal, que hizo necesario recurrir a los servicios de numerosos técnicos y formar muy de prisa especialistas indígenas.

La Autoridad Administradora señalaba que los funcionarios se contrataban por concurso, y que en estos concursos podían acudir todos los elementos de la población, siempre que poseyeran los títulos prescritos. A fin de facilitar a los funcionarios indígenas el acceso a los cargos de importancia la Administración había organizado clases nocturnas (en Yaundé, Duala y N'Kongsamba) y de enseñanza profesional. Además se habían concedido becas a numerosos funcionarios indígenas para que ampliasen sus estudios en Francia, reservándoseles cargos adecuados a sus aptitudes profesionales para cuando regresasen al Territorio. Para terminar la Autoridad Administradora declaraba que por el momento sólo en muy raros casos se podían confiar puestos de responsabilidad a funcionarios cuya cultura básica o cualidades profesionales no los hacían idóneos. Sin embargo, llegaría indudablemente un momento en que, mediante una selección cada vez más juiciosa y rigurosa, la Administración del Territorio podría utilizar en cargos cada vez más importantes y numerosos a los indígenas que se hicieren dignos de ocuparlos.

RÉGIMEN JUDICIAL

Según hizo constar el Consejo de Administración Fiduciaria, con satisfacción, en su 11° periodo de sesiones, el Camerún tiene una organización judicial autónoma desde que, en virtud del decreto del 11 de abril de 1951, se creó el Tribunal de Apelación de Yaundé. La organización comprende dos clases de tribunales: los tribunales de derecho consuetudinario y los tribunales de derecho francés.

Los tribunales de derecho consuetudinario sólo tienen jurisdicción sobre los litigios civiles entablados entre africanos. Por una parte, incluyen los tribunales de conciliación y los tribunales consuetudinarios que están compuestos exclusivamente de africanos y, por otra, los tribunales de primera y segunda instancia, que están presididos respectivamente por los jefes de subdivisión y los jefes de región, auxiliados por asesores africanos. La apelación de la sentencia y el recurso de revocación competen a una sala especial de homologación del Tribunal de Apelaciones de Yaundé.

Los tribunales de derecho francés juzgan todas las infracciones del derecho penal y los casos civiles en que es parte un europeo, así como los litigios entre africanos cuando lo solicitan las partes. En 1952 este sistema estaba formado por un tribunal de apelación, compuesto de seis magistrados; tres tribunales de primera instancia, compuestos de dos o tres magistrados cada uno; 17 juzgados de paz con amplia competencia; cinco juzgados de paz con facultades correccionales y 27 juzgados de paz de jurisdicción ordinaria, cada uno de ellos representado por un juez. Según el informe de la Autoridad Administradora, las funciones del juez de paz con facultades correccionales y de juez de paz con jurisdicción ordinaria están en la actualidad a cargo de un funcionario administrativo, que es el jefe de subdivisión del lugar en que tiene su sede el correspondiente juzgado de paz.

En sus periodos de sesiones sexto y 11°, el Consejo de Administración Fiduciaria pidió a la Autoridad Administradora que nombrase más jueces de carrera para cubrir los puestos judiciales. En respuesta a esta recomendación, la Autoridad Administradora indica que la reforma de la organización judicial efectuada en 1951 ha aumentado el número de jueces de 27 a 49. Al robustecer la estructura existente y crear nuevos tribunales, esta reforma permitirá que se tramiten más casos, se sancionen con más rapidez y eficacia las faltas y se administre mejor la justicia.

En una petición³²⁷ el Kumzse se queja de que los puestos judiciales se confían todavía a funcionarios administrativos y pide que la administración de la justicia esté por completo en manos de jueces de carrera. Otro peticionario³²⁸ lamenta que aún exista discriminación en la esfera judicial.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria hechas a título personal únicamente

INCORPORACIÓN DEL CAMERÚN A LA UNIÓN FRANCESA

El representante de Siria manifestó que tal como está redactado en la actualidad el artículo 60 de la Constitución francesa, podría plantear problemas en el futuro, por existir en el Camerún dos estatutos diferentes. El primero de ellos se basa en el derecho internacional público, es decir, en la Carta de las Naciones Unidas y en el Acuerdo de Administración Fiduciaria. El segundo descansa en las disposiciones del derecho público francés. A este respecto, el orador opinó que las disposiciones de orden internacional deben tener primacía sobre las disposiciones del derecho nacional.

Respecto al ejercicio del poder legislativo, declaró que el procedimiento en cuya virtud el Parlamento

³²⁷ T/PET.5/L.9.

³²⁸ T/PET.5/198 y Add.1. Véanse en la resolución 965 (XIII) las medidas adoptadas respecto a esta petición.

francés asumió la responsabilidad de promulgar las leyes aplicables al Camerún ofrece la ventaja de permitir que todos los partidos políticos representados en la Asamblea General y en el Consejo de la República discutan la política que la Autoridad Administradora desea aplicar en el Territorio por medio del mecanismo legislativo. No obstante, con este procedimiento la población del Camerún permanece en una situación que no le permite expresar su voluntad, pues sólo cuenta con unos cuantos representantes en el Parlamento francés.

El representante de la India hizo notar que en el Acuerdo de Administración Fiduciaria se estipula que el Territorio en fideicomiso será administrado como parte integrante de la Unión Francesa. En la práctica la Autoridad Administradora ha incorporado por completo el Camerún a su territorio, mientras que según el orador el Territorio en fideicomiso es en realidad un "Estado asociado" de la Unión Francesa. Aunque el Consejo no ha adoptado una decisión definitiva sobre el lugar que ocupa el Territorio dentro de la Unión, la delegación de la India cree que la Autoridad Administradora no tiene ningún derecho a modificar así el estatuto del territorio y que, en su informe a la Asamblea General, el Consejo debería pedir que se estudien los aspectos jurídicos de esta cuestión.

En virtud de la Constitución francesa, la Unión Francesa está "compuesta de naciones y pueblos que reúnen o coordinan sus recursos y sus esfuerzos en común". No existe ninguna prueba de que el pueblo camerunés desee formar parte de la Unión, y todos los indicios parecen demostrar lo contrario. En la Constitución no se prevé el derecho de secesión para ningún miembro de la Unión, y ésta sólo podría realizarse en virtud de un acto de fuerza o rebelión. Así, pues, al asociar el Territorio en fideicomiso a la Unión francesa, la Autoridad Administradora ha adoptado una medida unilateral que equivale a privar al pueblo camerunés de la soberanía a que tiene derecho; este hecho constituye un acto contrario a las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

La situación del Camerún tiene que analizarse tomando en cuenta la política colonial francesa y, a juicio del representante de la India, en la historia colonial de Francia no se encuentra nada que permita creer que los pueblos del imperio francés lograrán jamás su independencia. El hecho de que haya cameruneses en el Parlamento francés no puede servir de consuelo por la falta de independencia.

En Francia existen tres órganos legislativos: la Asamblea de la Unión Francesa, la Asamblea Nacional y el Consejo de la República. La representación del Territorio en fideicomiso en estos organismos carece de significación y los representantes del Camerún no pueden ejercer ninguna influencia política, pues en la Asamblea Nacional sólo hay tres cameruneses, en un total de 624 diputados. Entre los 320 consejeros de la República no figuran más que dos cameruneses, y 4 son miembros de la Asamblea de la Unión Francesa. Por lo tanto, es imposible hablar de la madurez política del Camerún o de que ha evolucionado hacia esta madurez.

En el Territorio mismo del Camerún existe una Asamblea Territorial, que es un órgano consultivo con facultades sumamente limitadas.

En realidad, es incontestable que en el Camerún predomina la burocracia. Esta no tiende ni hacia la

democracia ni hacia la aplicación de principios libertarios, y la Asamblea Territorial (que únicamente puede formular recomendaciones) no representa más que una concesión a la opinión pública francesa. En el Camerún, el poder está en manos de funcionarios franceses, que ni siquiera están sujetos a la fiscalización del Parlamento francés, pues el gobierno que se ejerce a distancia equivale a estar ejercido por un ministerio de ultramar.

Ni los cameruneses ni sus portavoces disponen de ningún medio para dar a conocer su opinión; la representación del Camerún, ya sea en el Parlamento francés o en la Asamblea Territorial, resulta completamente inútil y no puede influir de ningún modo en la política de la Autoridad Administradora.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que, violando las disposiciones de la Carta, la Autoridad Administradora ha incorporado al Territorio dentro de lo que se denomina Unión Francesa. Esto ha reducido al Camerún a una situación análoga a la de las demás colonias francesas de la Unión y ha obstaculizado su evolución hacia la autonomía y la independencia. La Misión Visitadora de 1952 tomó nota en su informe de las quejas de los representantes de la población indígena sobre esta cuestión. Si el Consejo de Administración Fiduciaria examina seriamente esta cuestión, con plena conciencia de su responsabilidad, sólo podrá advertir en esta medida una forma jurídica de anexión del Territorio en fideicomiso, así como una tentativa para someterlo al régimen colonial francés.

Señalando que la representación de los habitantes indígenas del Territorio en los órganos legislativos de la Unión Francesa era mínima, el orador declaró que era evidente que la población indígena no disponía de ningún medio para proteger sus intereses por conducto de estos órganos. Tal estado de cosas poco satisfactorio se agrava más por el hecho de que las instituciones del Territorio carecen de poderes y no están en condiciones de proteger los intereses de la población indígena. En consecuencia, se ha privado a los habitantes indígenas del derecho de administrarse por sí mismos y la administración francesa ha concentrado en sus manos toda la autoridad. Es indispensable que el Consejo invite a la Autoridad Administradora a que adopte medidas para establecer en el Territorio órganos legislativos, ejecutivos y judiciales independientes de los de la Unión Francesa, así como para garantizar la participación de la población indígena en las actividades de estos órganos.

Refiriéndose a la resolución 758 (VIII) de la Asamblea General, el representante del Reino Unido señaló que en el Acuerdo de Administración Fiduciaria relativo al Camerún bajo administración francesa se establece que el Territorio será administrado como parte integrante del territorio metropolitano. El orador recordó las conclusiones formuladas por el Comité Permanente de Uniones Administrativas después de haber examinado la cuestión, e hizo notar que este Comité no encontró ninguna prueba de que la aplicación de los acuerdos administrativos entre el Territorio en fideicomiso y la Unión Francesa fuese contraria a la Carta y al Acuerdo de Administración Fiduciaria; luego agregó que las relaciones entre el Territorio y la Unión Francesa parece que se ajustan a las disposiciones de la Carta y del Acuerdo de Administración Fiduciaria. A continuación indicó que la Asamblea

General aprobó el acuerdo el 13 de diciembre de 1946, y es de suponer que tenía perfecto conocimiento del tenor y alcance de la Constitución francesa, que entró en vigor el 27 de octubre de 1946.

El representante de la Autoridad Administradora recordó que en repetidas ocasiones ha tenido que dar prolijas explicaciones sobre las cuestiones planteadas respecto de la Unión Francesa. También señaló que había declarado en nombre de su Gobierno que al terminar el período de administración fiduciaria, los pueblos de los territorios en fideicomiso podrían lograr sus aspiraciones fuera de la Unión Francesa, si tal era su deseo. Después explicó que el preámbulo y las cláusulas de la Constitución francesa sobre los territorios de ultramar de la República, sólo se aplican a los territorios en fideicomiso en cuanto no violan la Carta y los Acuerdos de Administración Fiduciaria. Respecto al temor de que las disposiciones del artículo 75 de la Constitución pudieran prohibir que los pueblos del Territorio en fideicomiso se separen de la Unión Francesa para llevar una existencia independiente, el representante de la Autoridad Administradora declaró que no puede suceder así. En los textos no hay nada que pueda justificar la acusación de que se viola la Carta o el Acuerdo de Administración Fiduciaria; además, en la Constitución se estipula que los tratados tienen primacía sobre las leyes nacionales francesas.

El representante de la Autoridad Administradora tomó nota de las críticas formuladas por los representantes de la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el sentido de que la representación del Camerún en el Parlamento metropolitano es insuficiente. Luego explicó que la representación del Camerún era proporcionalmente menos importante que la de la Metrópoli por diversas razones, pero que indudablemente no resultaba insignificante y que, además si el Camerún tuviese varias docenas de diputados en la Asamblea General, se acusaría a la Autoridad Administradora de haberse anexo el Territorio.

Al contrario de lo que afirma el representante de la India, la influencia que ejercen los diputados de ultramar en el Parlamento francés es bien evidente, y todo el mundo sabe en Francia que el Camerún está representado por diputados muy influyentes que defienden los intereses de su país; además, jamás se ha tratado desfavorablemente al Territorio cuando se asignan los créditos. El representante de la Autoridad Administradora declara con absoluta certeza que el Camerún ha obtenido beneficios palpables de su representación en el Parlamento francés.

Aludiendo a las observaciones del representante de la India sobre la existencia de una burocracia en el Territorio, el orador declaró que en francés el uso de este término es peyorativo y da una impresión falsa e injusta de las actividades de los administradores, médicos, ingenieros y demás personas que trabajan con gran celo. Todavía es más injusto afirmar que esta burocracia se basa en los intereses franceses, pues su primera preocupación es el interés de los habitantes indígenas.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

El representante de El Salvador señaló que en el plano político existe una acusada división entre las regiones septentrional y meridional del Territorio. Mientras que la segunda ha alcanzado un grado satis-

factorio de desarrollo, incluso desde el punto de vista político, la primera todavía se encuentra en la etapa de organización tribal, lo que está muy lejos de responder a los fines del régimen de administración fiduciaria. El orador expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora se esforzará por lograr cierta unidad entre las dos regiones del Territorio, a fin de crear una sola conciencia nacional entre sus habitantes.

El representante de Siria declaró que le parecían extrañas las numerosas observaciones formuladas por la Autoridad Administradora respecto a la Union des populations du Cameroun. Luego añadió que si este partido se inspira en móviles patrióticos no debe ser desacreditado, y que esta cuestión exigía una aclaración.

El representante de la Autoridad Administradora subrayó que las libertades públicas están claramente definidas en el Territorio por las leyes que las garantizan en la Metrópoli, y que tales leyes no son objeto de ninguna excepción en el Territorio. Así, pues, rechaza las acusaciones, implícitas o explícitas, que deforman los hechos. Los partidos políticos son libres, inclusive la Union des populations du Cameroun.

En respuesta a las afirmaciones del representante de Siria, el representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la Autoridad Administradora expuso simple y sencillamente los hechos. Luego agregó que este partido parecía ser un instrumento de la penetración comunista en el Camerún, lo que a los ojos de todos los miembros del Consejo no constituía una cosa infamante. La Autoridad Administradora estimó que era su deber señalar este hecho, simplemente porque algunos miembros de las Naciones Unidas han manifestado algún interés en favor del secretario general del partido, quien, siguiendo el procedimiento clásico, quiso hacerse pasar ante el Consejo como el portavoz de toda la población del Camerún y en el Camerún como el confidente de las Naciones Unidas. Este partido (y no hay en este término ninguna intención peyorativa) es un partido de agitadores, y a este respecto se puede comprobar que numerosos sectores de la población reaccionan violentamente contra tal estado de cosas. El Consejo conoce estas reacciones por medio de las peticiones. El representante de Siria ha afirmado que el partido era objeto de persecuciones; no obstante, su representante, el Sr. Um Nyobe, manifestó el 5 de diciembre de 1953, al comparecer personalmente ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, que había dado 83 conferencias públicas a las que asistieron varios miles de oyentes. Aunque estas cifras son discutibles, el Sr. Um Nyobe no puede quejarse en consecuencia de un trato discriminatorio. Cuando, por motivos de orden público, se prohíben las reuniones o está presente la policía, se queja de persecuciones; pero cuando la policía se halla ausente y es objeto de malos tratos, se queja de que existe un complot.

El representante especial de la Autoridad Administradora ha observado que varias delegaciones se preocuparon por la falta de conciencia nacional en el Territorio, y especialmente el representante de El Salvador pidió a la Autoridad Administradora que unifique las regiones septentrional y meridional del Territorio. La consecución de esta unidad constituye uno de los objetivos de la Administración, pero hay que reconocer que aun queda mucho por hacer en esta materia. Los funcionarios indígenas de la región meri-

dional no quieren trasladarse a la septentrional y a veces prefieren perder el cargo a ser destinados a esa región. Es de esperar que la creciente influencia de los partidos políticos, que rebasan la esfera del grupo tribal, y la existencia de una Asamblea única, que se ocupa de los problemas de todas las regiones, lograrán rápidamente la fusión de los intereses y la creación de un sentimiento de solidaridad. La cordialidad reinante entre los consejeros del norte y los del sur durante las reuniones de la Asamblea alienta esta esperanza. La enseñanza, que es idéntica en todas partes, también contribuirá a crear el sentimiento nacional y, por último, la iniciativa adoptada por la Administración de organizar un viaje de estudio para todos los miembros de la Asamblea a una región determinada del Territorio producirá asimismo resultados satisfactorios.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y ASAMBLEA TERRITORIAL

El representante de la China opinó respecto al sistema de doble colegio electoral que, como la colaboración de los europeos resulta todavía esencial para el desarrollo del Territorio, no es probable que la población indígena ignore los intereses europeos en perjuicio de los suyos propios. Además, si hay que dar la primacía a los intereses de una de las partes, ésta corresponde a los habitantes indígenas. El orador hizo un llamamiento a la Autoridad Administradora para que examinase más a fondo la cuestión. Además, opinó que la Autoridad Administradora debía prestar especial atención a las sugerencias de la Misión Visitadora sobre la adopción de un sistema de colegio electoral único. Por último, expresó su decepción al saber que todavía no estaba terminada de preparar la ley que ampliará los poderes de la Asamblea Territorial, que fué objeto de una de sus recomendaciones durante el 11° período de sesiones del Consejo; a su juicio, el Consejo debería formular una recomendación a este respecto.

El representante de Nueva Zelandia manifestó que el Consejo aguardaría con interés a que el Parlamento francés promulgue leyes para ampliar las facultades de la Asamblea Territorial y ampliar sus funciones deliberantes.

El representante de Haití señaló a la atención del Consejo la explicación ofrecida por la Autoridad Administradora, en virtud de la cual la subsistencia del doble colegio electoral se debe a que la gran mayoría de los cameruneses ha conservado su situación jurídica personal y a que es indispensable proteger los intereses de los europeos. El orador añadió que estas razones no le parecían muy convincentes. Respecto a las facultades de la Asamblea Territorial, reconocía que la Asamblea no era un Parlamento. No obstante, convendría que la Autoridad Administradora acelere la promulgación de la ley que ampliará la esfera de acción de la Asamblea. A menudo, la lentitud con la que se adoptan ciertas medidas hace que se impacienten los habitantes indígenas, que temen que se pasen por alto sus necesidades.

El representante de El Salvador lamentó que la Autoridad Administradora no haya establecido todavía un colegio electoral único, y declaró que debería hacer todo lo que esté a su alcance para crearlo a la mayor brevedad posible.

El representante de Siria señaló que entre los miembros de la Asamblea Territorial, además de los habitantes indígenas, hay cierto número de ciudadanos franceses. También subrayó que la Asamblea no tiene poderes ejecutivos y, a este respecto, afirmó que ni siquiera posee las atribuciones de los *Conseils généraux* de los departamentos de la Metrópoli.

El representante de Siria expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora cree en un futuro cercano un colegio electoral único.

El representante de la India hizo notar que, desde el punto de vista de la representación en la Asamblea Territorial, se considera que un francés equivale a 140 cameruneses, pues los 12.000 franceses del Territorio tienen 18 representantes, mientras que los 3.000.000 de cameruneses sólo tienen 32. La existencia de este doble colegio constituye una manifestación de discriminación racial. La Asamblea tiene una función exclusivamente consultiva, sus atribuciones son muy limitadas y, aunque la Autoridad Administradora haya dado seguridades de que se ampliarán sus poderes, hasta ahora apenas hay pruebas de ello.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que a pesar de las reiteradas solicitudes del Consejo de Administración Fiduciaria y de la propia población indígena, la Autoridad Administradora todavía mantiene el sistema de doble colegio electoral. A su juicio, esto constituye uno de los ejemplos más claros de la privación de derechos políticos y de la discriminación de que es víctima la población indígena. Tal política coloca a los habitantes indígenas en una situación de inferioridad con relación a los europeos y asegura la dominación de éstos. Si los indígenas estuviesen representados en la misma proporción que los franceses residentes en el Camerún, no tendrían en la Asamblea Territorial 30 representantes, sino 5.000. El orador agregó después que la población indígena estaba lejos de aceptar esta situación, y que pedía la abolición de este sistema.

A continuación informó que la Misión Visitadora había escuchado peticiones en las que se solicitaba que se otorgaran facultades legislativas a la Asamblea Territorial, que por ahora sólo es un organismo consultivo. Además, subrayó que la Autoridad Administradora había prometido satisfacer las reivindicaciones de la población indígena y ampliar las facultades de la Asamblea Territorial y que iba a presentarse al Parlamento francés un proyecto de ley para tal fin; sin embargo, la Autoridad Administradora no ha hecho nada hasta ahora para cumplir sus promesas.

El representante de la Autoridad Administradora manifestó que había habido un mal entendido acerca del papel de los dos colegios electorales en la elección de los representantes en la Asamblea Territorial. El procedimiento no tiene ningún valor como principio para la Autoridad Administradora y constituye una solución empírica, que permite poner a disposición de los habitantes indígenas la experiencia de hombres mejor preparados para deliberar sobre los problemas económicos y financieros. Esta solución ha permitido acelerar la adopción de planes de desarrollo económico, de los cuales depende el porvenir del Territorio y de sus habitantes. En 1952, cuando el doble colegio electoral perdió su razón de ser en el Togo, fué suprimido y es indudable que en el Parlamento se discutirá la abolición de este sistema en el Camerún antes de que se renueve el mandato de la actual Asamblea

Territorial. El orador dice que está seguro de que la opinión expuesta por el Consejo de Administración Fiduciaria en esta cuestión se tendrá en cuenta como un actor de suma importancia.

El representante de la Autoridad Administradora lamentó que los representantes de la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que describieron la Asamblea Territorial como un órgano de carácter exclusivamente consultivo, no hubiesen leído, aunque no fuese más que por encima, el decreto del 25 de octubre de 1946. Los poderes de la Asamblea son muy reales, amplios y, contrariamente a la opinión expuesta por el representante de Siria, mucho más extensos que los de los *Conseils généraux* de la Metrópoli.

Desde el punto de vista político, la Asamblea Territorial interviene en diversas ocasiones en nombre del Territorio para cuestiones tales como la modificación del estatuto, leyes que fijan este estatuto y organización interna. Desde el punto de vista financiero, la personalidad del Territorio en fideicomiso es mucho más acusada que la de un departamento de la Metrópoli. En un departamento, la mayoría de los ingresos y de los gastos se ajustan al presupuesto del Estado, mientras que el Camerún es responsable de sus operaciones financieras en cuanto éstas afectan a su propio territorio. Puede fijar los gravámenes, incluso los derechos de importación y exportación, mientras que un *Conseil général* de Francia jamás se ocupa de estas cuestiones. El poder central no interviene, salvo cuando se le solicita alegando abuso de poder o violación de la ley. La personalidad del Territorio en fideicomiso, y, por lo tanto, la importancia de su organismo deliberante se aprecia en las funciones atribuidas a este organismo, así como en la separación entre hacienda pública del territorio y la de la Metrópoli. El representante indicó claramente que el Alto Comisionado francés en el Camerún no ha pedido ni una sola vez que se anulen las decisiones adoptadas por la Asamblea Territorial.

En general, el ensayo realizado en el Camerún ha tenido éxito, y los representantes de los habitantes indígenas han dado pruebas de sabiduría, discernimiento y devoción al bien público, y raramente han adoptado actitudes deplorables. Por lo tanto, el Gobierno francés ha resuelto ampliar mucho las facultades deliberantes de la Asamblea, para que pueda comprobar cómo se aplican sus decisiones y participar en ellas asignando algunos de sus miembros a un Consejo Ejecutivo. El orador está seguro de que el Parlamento francés acogerá favorablemente estas proposiciones. Aunque es cierto que, cuando se trata de estas reformas, el procedimiento parlamentario es relativamente lento, en cambio ofrece ciertas ventajas pues da fuerza y solemnidad a las decisiones definitivas. Por último, el representante declaró que la propuesta del representante de Nueva Zelanda acerca de la duración del mandato de los miembros de la Asamblea Territorial recibirá indudablemente la atención que merece.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y MUNICIPIOS MIXTOS

El representante de China se siente complacido por el aumento del número de municipios urbanos mixtos y la organización de municipios rurales mixtos. Aunque el orador comprende el motivo de la distinción establecida en la composición de las dos clases de con-

cejos municipales, el orador espera que tan pronto como sea posible se ampliará la aplicación del método electoral.

El representante de Australia declaró que le complacía enterarse de que el experimento de los *bureaux de village* había resultado un éxito, y que probablemente se ampliaría. A su juicio, se trataba de una innovación sencilla y poco costosa que contribuiría a resolver las dificultades surgidas en las aldeas.

El representante de Haití expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora podría seguir organizando municipios mixtos rurales y urbanos en otras regiones del territorio, y además ampliaría las facultades de estas instituciones. Luego tomó nota de que los funcionarios de estas dos clases de municipios son elegidos siguiendo métodos diferentes, y señaló que la forma de elegir el Concejo Municipal urbano había sido objeto de críticas. En su opinión, es indispensable evitar que la preocupación de proteger a ciertos intereses impida que los indígenas puedan elegir a los miembros de los concejos municipales urbanos. El Alto Comisionado podría reservarse el derecho de disolverlos por razones específicas.

El representante de El Salvador tomó nota de que la creación de municipios mixtos rurales contribuirá a que haya una colaboración aun más eficaz entre los jefes indígenas y la Administración.

El representante de la India manifestó su sorpresa al escuchar la afirmación de que el régimen tribal representa un obstáculo para reformar la administración local. Por el contrario, en vez de considerarlo como un obstáculo, convendría utilizarlo para ampliar la autonomía en el plano local. Por lo tanto, su delegación no se ha dejado impresionar por el argumento de que el atraso de los habitantes del Camerún impedirá que se mejore la administración municipal o local.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que si en los concejos municipales se reservaba cierto número de puestos para los europeos, era simplemente porque disfrutaban de ventajas de carácter económico. Tal práctica es contraria a los principios democráticos y constituye una notoria discriminación contra los habitantes indígenas.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba equivocado al afirmar que en los concejos municipales se otorgaban a los europeos, en virtud de su situación económica, los puestos correspondientes a los ciudadanos con estatuto civil de derecho común. En algunos municipios, se reservan los puestos de esta índole, pero su asignación la decide el cuerpo electoral de la circunscripción, que vota en colegio único. Por lo tanto, el colegio electoral es el que escoge entre los candidatos que gozan de este estatuto a los que considera capaces de dirigir mejor los intereses comunes. De los 251 puestos, 13 están reservados y la proporción más elevada existe en el municipio de Akonolinga, donde hay tres puestos reservados de un total de 26. Es evidente que los titulares de estos puestos sólo pueden hacerse oír y que les es imposible ejercer una influencia preponderante en el concejo municipal. Por otra parte, no sólo representan intereses económicos; así, por ejemplo, en Ebolowa, los dos representantes elegidos para desempeñar los dos puestos reservados son sacerdotes de la misión católica.

Contestando al representante de Haití, el orador declaró que se piensa reformar los municipios urbanos y que en breve se presentará a la Asamblea Territorial un proyecto de ley para dotar a los centros urbanos de Duala y Yaundé de un consejo municipal.

JEFATURAS TRADICIONALES

El representante de Australia declaró que a su delegación le complacía observar que se han adoptado medidas para organizar las jefaturas definiendo su papel, sus atribuciones y sus relaciones con la población y con la Administración. Luego declaró que convenía que el Consejo tomara nota con interés de ciertas disposiciones adoptadas para perfeccionar aún más esta institución fundamental.

El representante de Bélgica se refirió a la decisión adoptada por la Administración de conservar la estructura política tradicional, pero desarrollándola con directrices modernas. A continuación añadió que esperaba que en el futuro los jefes de la región septentrional acepten la evolución indispensable con menos reticencia. Respecto a los tributos que tradicionalmente se pagan a los jefes, el representante de Bélgica sugirió que la Autoridad Administradora, que no ha reconocido legalmente este sistema, pero no ha querido abolirlo de una manera coactiva, disponga que el pago de estos tributos se efectúe directamente a una tesorería de la *chefferie*, a la que contribuirían todos los indígenas. Los jefes no tendrían así motivos para quejarse de que carecen de medios legales de exigir el cobro de estos impuestos. Además, de este modo se obtendría una distribución más equitativa de los tributos tradicionales.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas indicó que el informe de la Misión Visitadora revelaba que la Autoridad Administradora mantenía y fortalecía artificialmente el régimen de *chefferie* y toda la estructura de las instituciones tribales. La Autoridad Administradora no piensa adoptar ninguna medida para hacer desaparecer este vestigio de una institución caduca, que obstaculiza el progreso de los indígenas. Ciertamente es que ha preparado un proyecto de ley para someter a los jefes de tribu al control de las autoridades administrativas, pero lo único que se logrará será transformar a los jefes de tribu en funcionarios y agentes de la Administración. No tendrá como consecuencia una reforma democrática de la estructura de la sociedad, sino que simplemente convertirá a los jefes de tribu en mejores instrumentos para perpetuar la dominación de la Autoridad Administradora y sojuzgar más a los habitantes indígenas. La petición presentada al Consejo demuestra claramente que la Administración, al mantener y burocratizar a los jefes de tribu, podrá someter con más facilidad a su arbitrio a los habitantes indígenas. El orador declaró a este respecto que debería tomarse nota de las peticiones T/PET.5/140, T/PET.5/158 y T/PET.5/174. La Autoridad Administradora debería adoptar medidas para asegurar la transición del régimen tribal a un régimen autónomo basado en los principios democráticos. Para tal fin, la Autoridad Administradora debería examinar nuevamente su política y renunciar a toda tentativa de conservar el régimen de la *chefferie*, que convierte a los jefes en funcionarios a sueldo de la Administración o los asimila a esa condición. Por último, el representante sostuvo que con-

viene implantar reformas radicales para dar bases democráticas a la Administración.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló que el representante de la Unión Soviética culpaba a la Autoridad Administradora de mantener el régimen tribal, que considera como un obstáculo para el progreso y la democracia. Luego agregó que le complacía encontrar un argumento completamente opuesto en la intervención del representante de la India, quien opinó que, en vez de destruir la actual estructura social, la Autoridad Administradora debería aprovecharla y utilizar la cohesión y la solidaridad social de la tribu para desarrollar la administración municipal y local; tal es precisamente la política que sigue la Autoridad Administradora.

El orador subrayó nuevamente que en la organización de los municipios rurales se ha hecho un esfuerzo para garantizar una representación adecuada a cada unidad étnica y que, al ampliar esta institución, se tendrían en cuenta las condiciones políticas peculiares de cada región y principalmente la permanencia de las instituciones tradicionales en algunas de ellas. Igualmente, la creación de *bureaux de village* ha hecho que se descentralizase en parte la administración, robusteciendo simultáneamente la cohesión social del grupo étnico.

El representante especial declaró además que la Autoridad Administradora no tiene la intención de transformar a los jefes en simples agentes administrativos y ni de cristalizar en forma permanente las actuales instituciones. El proyecto de reglamento sometido al Parlamento francés tiende a definir con más claridad un estatuto que aun se rige por diversas reglas tradicionales, cuya interpretación jurídica resulta a menudo difícil. Respecto a la Administración, este proyecto de ley reforzará las garantías jurídicas de los jefes en el ejercicio de sus funciones y definirá más estrictamente las atribuciones de estos jefes en relación con la población que está a su cargo.

Acerca de las quejas recibidas de ciertos jefes tradicionales por la Misión Visitadora, el orador hizo notar que algunos jefes saben muy bien que es imposible retroceder y que muchos de ellos han solicitado los votos de sus representados, tanto en las elecciones para la Asamblea Territorial como en las elecciones municipales. La Administración local se ha esforzado por iniciarlos en los conceptos modernos, tanto en los contactos diarios de la vida administrativa como mediante innovaciones más espectaculares, tales como la organización de viajes a Francia. Por otra parte, sería injusto hacer recaer sobre los jefes, que constituyen una clase selecta y que asumen la pesada responsabilidad de dirigir a las colectividades que dependen de su autoridad, las sospechas que han hecho nacer las acusaciones lanzadas en algunas peticiones. El representante de la Autoridad Administradora afirmó que los poderes de los jefes no eran absolutos, que obraban con el asentimiento de la Administración y que si llegasen a cometer abusos podrían ser procesados.

Luego añadió que los trabajos que por tradición tenían que realizar los indígenas en beneficio de los jefes, a los que había aludido el representante de Bélgica, tendían a desaparecer. No obstante, estos trabajos se discutían invariablemente en el consejo de la tribu y, en caso de desacuerdo, pasaban al control de la Administración, la cual suministraba las herra-

mientas y los materiales de construcción. De ningún modo tenían el carácter de trabajos forzados impuestos por los jefes, ni representaban una excesiva carga para la colectividad. Desde luego, sería inconveniente, según señaló el representante de Bélgica, que estos trabajos fuesen ejecutados por los servicios públicos. No obstante, el representante especial indicó que no convenía imponer apresuradamente una organización burocrática en las colectividades locales, y añadió que los trabajos efectuados en esta forma comunal no tenían importancia suficiente para justificar la organización de una Caja local.

RÉGIMEN JUDICIAL

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que el régimen judicial vigente en el Territorio implica la concentración de los poderes administrativo y judicial en las mismas manos, y que como resultado de esta coexistencia hay arbitrariedades y actos ilegales. Luego recordó que los peticionarios se habían quejado de que los tribunales estaban bajo el control completo de la Administración y de que todos los jueces eran funcionarios franceses. Los representantes de la población indígena no tienen ningún tribunal de apelación al que recurrir. Este régimen judicial no puede proteger los intereses de los habitantes indígenas del Territorio.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que los cameruneses tienen los mismos recursos para apelar que los ciudadanos franceses, tanto en el plano judicial como en el administrativo. Luego hizo notar que el régimen judicial del territorio descansa efectivamente en el principio de separación de poderes. Los funcionarios administrativos sólo desempeñan funciones judiciales en cinco juzgados de paz establecidos en localidades muy lejanas. Estos juzgados de paz fueron creados en beneficio del pueblo y desaparecerán a medida que mejoren las comunicaciones. Únicamente tienen competencia en cuestiones de infracciones y, por lo tanto, sólo imponen sanciones leves.

Recordando que los representantes de la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas calificaron de arbitrario el régimen judicial y declararon que no ofrecía ninguna garantía a los cameruneses, el representante especial de la Autoridad Administradora hizo notar que no tuvieron en cuenta las explicaciones dadas por la Autoridad Administradora, por lo que consideraba necesario repetirlas.

Cuando las Potencias europeas llegaron a África, se encontraron con un orden social y judicial que contravenía sus normas de ética y sus ideas de orden moral. No obstante, gradualmente sustituyeron la justicia indígena por la suya, con gran satisfacción de la mayoría de los habitantes indígenas. De este modo, los funcionarios encargados de conservar el orden tuvieron que actuar como magistrados. Desde entonces, las funciones administrativas se han desarrollado y han penetrado más en la vida de la población, lo que ha obligado a la Administración a separar los dos poderes y a reorganizar el poder judicial. Este es uno de los principios establecidos en los decretos de 1946 y 1947. Después de describir brevemente la estructura de la jurisdicción penal del Territorio, el orador concluyó dando un mentís formal a todas las acusaciones formuladas por el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

Gracias a su situación geográfica, el Camerún dispone de multitud de productos. Como ocurre en la mayoría de los países nuevos enclavados en los trópicos, su economía es esencialmente agrícola. La agricultura, la ganadería y la silvicultura son los principales campos de la actividad económica del Territorio y proporcionan ocupación a la mayoría de la población, mientras que las empresas industriales y mineras establecidas en los últimos tiempos tienen todavía poca importancia.

La Autoridad Administradora señaló en su informe correspondiente a 1952 que las fluctuaciones del mercado mundial repercutieron en la economía del Territorio. El volumen de las exportaciones disminuyó un 15% en el curso del año que se examina, a pesar de que el valor de los productos permaneció casi igual. La Autoridad Administradora declaró que se daba cuenta de las dificultades que una depresión económica mundial podría crear en el Territorio y que estaba tratando de evitarlas ampliando y diversificando la economía. A este respecto, su representante especial declaró en el 13° período de sesiones del Consejo que durante los nueve primeros meses de 1953 las exportaciones aumentaron de volumen y valor en comparación con el período correspondiente de 1952 y que a comienzos del año 1954 la situación económica del Territorio parecía ser favorable a pesar de las dificultades en la esfera económica internacional.

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria observó que había un número relativamente grande de europeos en el Territorio y expresó la esperanza de que se seguirían protegiendo con el mayor cuidado los intereses económicos de los habitantes indígenas.

La Misión Visitadora de 1952 observó que el Territorio estaba en un período de intenso desarrollo económico. Tomando nota de las enormes sumas invertidas por los europeos en las empresas económicas del Camerún, la Misión opinó que esas inversiones demostraban el vigor económico del Territorio y eran un buen síntoma para su porvenir, pero que se debían tomar todas las precauciones posibles para proteger los intereses de los habitantes indígenas y para reservarles la parte que les corresponde en el desarrollo del Territorio.

A este respecto, la Autoridad Administradora declaró en su informe que la protección de los intereses económicos de los habitantes indígenas era una de sus más constantes preocupaciones.

En el séptimo y octavo períodos de sesiones de la Asamblea General, los representantes de la Union des populations du Cameroun y del Parti socialiste camerounais plantearon la cuestión del desarrollo económico del Territorio y de la participación de los europeos en su economía. El representante de la Union des populations du Cameroun declaró que la Autoridad Administradora debería solicitar la ayuda de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para fomentar el desarrollo económico del Territorio;

también se quejó de que la población no tenía voz el el uso de los recursos del país. El representante del Parti socialiste camerounais lamentó la forma en que los europeos han monopolizado la economía y manifestó que se debería fiscalizar la inmigración de europeos en el Territorio para proteger los intereses de la población indígena; luego añadió que las Naciones Unidas deberían tomar medidas para que los habitantes indígenas pudieran participar de una forma más activa en el desarrollo económico del Territorio.

En su 13° periodo de sesiones, el Consejo adoptó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota de que el desarrollo de la economía y de las obras de capital del Territorio progresa satisfactoriamente, elogia la especial importancia que se dará en la segunda fase del plan decenal al aumento de la producción; cree que el éxito de dicho plan dependerá en gran parte de la participación y de la colaboración de la población indígena con la Autoridad Administradora, y expresa su confianza en que con esa colaboración la Autoridad Administradora hará todo lo posible para ejecutar el plan.

El Consejo, recordando sus recomendaciones anteriores y recalando la importancia de la mayor participación de los habitantes indígenas en el desarrollo económico del Territorio, recomienda que la Autoridad Administradora tenga en cuenta la observación hecha por la Misión Visitadora de 1952 de que se deben tomar todas las precauciones posibles para proteger los intereses de los habitantes indígenas y asegurar su plena participación en la economía del Territorio.

El Consejo, tomando nota de la resolución 439 (V) de la Asamblea General sobre la cuestión de la asistencia técnica a los territorios en fideicomiso; y tomando nota además de que la Autoridad Administradora ha hecho uso de tal asistencia, expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora continuará utilizando los servicios de los organismos especializados y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

PLAN DECENAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

El plan decenal para el desarrollo económico y social del Camerún, organizado por la ley del 30 de abril de 1946, fué puesto en ejecución en 1947. Durante los dos primeros años la ejecución del plan se efectuó mediante presupuestos extraordinarios anuales. El principio del presupuesto extraordinario se abandonó en 1949 y se substituyó por un programa cuatrienal. El primer programa de esta clase se inició en julio de 1949, fué seguido por un segundo que abarca el periodo que va del 1° de julio de 1953 al 30 de junio de 1957.

Los objetivos económicos básicos del plan decenal son la mejora del sistema de comunicaciones y el fomento de la producción. El plan prevé paralelamente al esfuerzo económico, una acción social en cuestiones de salud pública, enseñanza y vivienda.

En el primer programa cuatrienal se dió preferencia al desarrollo del sistema de comunicaciones. Según el informe de la Autoridad Administradora, los créditos autorizados para el plan decenal ascendían al 30 de junio de 1952 a 17.814.350.000 francos CFA, de los cuales 14.096.700.000 fueron asignados a las comunicaciones, 1.847.250.000 a la producción, 1.701.400.000 a

los programas sociales y 169.000.000 a gastos generales.

La Autoridad Administradora declaró que en el segundo programa cuatrienal el esfuerzo principal se concentraría en la producción, atribuyendo especial importancia a mejorar el rendimiento y la calidad. El programa de suministro de equipo básico se limitaría a la construcción de aquellos caminos que son indispensables para la comercialización de los productos. El programa también incluye medidas para que se continúe la acción social.

La Misión Visitadora de 1952 tuvo ocasión de comprobar el papel fundamental que el plan decenal desempeña en el desarrollo económico del Territorio. Por último, opinó que la decisión de dar prioridad a la producción en el segundo programa cuatrienal es muy acertada, en vista de la situación económica del Territorio.

AGRICULTURA

La mayor parte de la población indígena obtiene su subsistencia de la agricultura. Cada familia se dedica, como siempre lo ha hecho, a producir cosechas alimenticias y en menor escala cosechas para la exportación. Los europeos tienen una participación importante en algunos sectores de la economía agrícola, sobre todo en el cultivo de bananas, café y tabaco.

Según el informe de la Autoridad Administradora, la producción de artículos alimenticios en 1952 fué casi igual que en años anteriores. Respecto a las exportaciones, la producción de cacao, café, tabaco y algodón siguió aumentando, mientras que la de bananas y nueces de palma disminuyó debido en parte a la destrucción de muchas plantaciones por los huracanes y a la baja ocurrida durante el año del precio de las nueces de palma. El cuadro siguiente da la producción (en toneladas) de los diversos cultivos en 1951 y 1952:

	1951	1952
Cosechas alimenticias.....	1.936.590	1.974.990
Cosechas para la exportación		
Cacao	50.000	55.000
Café	10.300	11.500
Aceite de palma.....	5.600	4.900
Nueces de palma.....	27.100	19.200
Caucho	2.075	2.500
Bananas	70.000	62.000
Algodón	1.300	5.200
Tabaco	1.560	1.827

La Autoridad Administradora informó que en 1952 siguió haciendo esfuerzos para mejorar la agricultura. Se adoptaron diversas medidas para ampliar y proteger la producción de cacao, café y bananas; se continuaron los cultivos de quina en la estación experimental de Dschang; se introdujeron nuevas variedades de tabaco, algodón, arroz y maní, y se prepararon planes para ensayar el cultivo del té en las tierras altas. La organización del Servicio de Agricultura, que ha sido ampliado considerablemente desde el año 1947, se completó en 1952 con el establecimiento del Servicio de Ingeniería Rural.

La Misión Visitadora de 1952, que observó que los métodos de cultivo empleados por los habitantes indígenas seguían siendo primitivos e imperfectos, informó que la Administración había tomado medidas para desarrollar esta actividad y prestaba a la cuestión toda la atención que merecía.

En varias peticiones se plantearon cuestiones agrícolas. La Union des syndicats confédérés y el Kumzse³²⁹ pidieron que la Administración adoptara medidas para modernizar los métodos de cultivo, proteger los intereses de los plantadores indígenas y restablecer el cultivo libre del café. La Union des populations du Cameroun y otros peticionarios³³⁰ se quejaron de la insuficiencia de los precios pagados a los productores y de las restricciones impuestas a la compra de escopetas de caza, que los agricultores necesitan para defender sus cosechas contra los animales dañinos.

A este respecto, la Autoridad Administradora declaró que la reglamentación del uso de armas de fuego es indispensable para evitar la matanza indiscriminada de animales de caza, pero que los permisos se concedían siempre cuando había que protegerse contra los animales salvajes o feroces. Respecto al precio de los productos, la Misión Visitadora, que también recibió quejas sobre el precio del cacao, opinó que se debía garantizar una cantidad suficientemente remuneradora a los cultivadores de esta planta y sugirió que la Administración estudiara las medidas adecuadas con tal fin.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo observa que en virtud de la segunda fase del plan decenal, uno de los principales objetivos es la modernización de la agricultura y la ampliación de la formación técnica; toma nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora para diversificar los cultivos, lo que indudablemente contribuirá a aumentar la estabilidad económica del Territorio, y le insta a que intensifique esos esfuerzos.

El Consejo expresa su preocupación porque los ingresos de los productores de cacao están actualmente en relación directa con la fluctuación de los precios en el mercado mundial, y, tomando nota de las declaraciones formuladas por el representante especial de la Autoridad Administradora acerca de los obstáculos con que se tropezó para establecer un fondo de estabilización para el cacao, pide a la Autoridad Administradora que continúe estudiando las medidas que se pueden adoptar para asegurar la estabilidad de los ingresos de los productores de cacao.

El Consejo también insta a la Autoridad Administradora a que tome las medidas necesarias para fomentar el desarrollo en el Territorio del movimiento cooperativista para la comercialización del cacao y de otros productos.

CRÍA DE GANADO

Junto con la agricultura, la cría de ganado constituye la principal actividad económica del Territorio, que cuenta con 1.250.000 cabezas de ganado vacuno, 1.300.000 de ganado ovino y caprino, 250.000 de ganado porcino, 81.000 de ganado caballar y más de 2.000.000 de aves de corral.

La Autoridad Administradora declaró que, en aplicación de su programa para mejorar el ganado, en 1952 se construyeron cinco nuevas clínicas veterinarias. Además, se estaban terminando las estaciones

zootécnicas de Kunden y Wakwa, cuya construcción se inició hace varios años, y se continuaron las obras en la cadena de depósitos frigoríficos destinados a facilitar el transporte de la carne desde las regiones ganaderas del norte hasta los centros de consumo del sur. El segundo programa cuatrienal prevé la creación de multitud de potreros modernizados, que estarán dotados de pozos, abrevaderos y cortafuegos y en los que se seguirá la rotación de los pastizales.

La Misión de 1952 observó con satisfacción los esfuerzos realizados por la Administración para fomentar la cría de ganado, y expresó la esperanza de que se continuarían e intensificarían. También sugirió que la Administración adoptara medidas para desarrollar el comercio del cuero.

COOPERATIVAS Y SOCIEDADES DE PREVISIÓN PARA LOS INDÍGENAS

En el Territorio existen dos tipos de organizaciones cooperativistas: las cooperativas propiamente dichas y las sociedades de previsión para los indígenas (*Sociétés autochtones de prévoyance*, o SAP) que pueden considerarse como cooperativas del Estado.

Las cooperativas propiamente dichas, muchas de las cuales se organizaron después de la segunda guerra mundial con la ayuda financiera de la Administración, no han tenido éxito en general. La Autoridad Administradora atribuye su fracaso a que la población rural no ha sido educada para esta clase de actividades, y sobre todo a la falta de inspectores competentes.

La Autoridad Administradora informó que no consideraba el fracaso de las primeras cooperativas como una prueba de que este procedimiento no dará resultados, sino como indicio de que es necesario realizar una minuciosa labor preparatoria. Teniendo este hecho en cuenta, ha concentrado sus esfuerzos en los siguientes objetivos: a) la reorganización de las relaciones entre las sociedades indígenas de previsión y las cooperativas, para que estas últimas aprovechen la experiencia y el apoyo moral y financiero de las primeras; b) la formación de personal administrativo competente, para lo cual se iniciaron en 1951 en Yaundé cursos especializados; y c) el establecimiento de un sistema de inspección con el objeto de evitar los desastres financieros sin dejar de respetar la independencia de todas las cooperativas.

Las sociedades indígenas de previsión, a las que están obligados a afiliarse los agricultores autóctonos, empezaron a crearse en 1937. Sus fines principales son poner a disposición de los miembros un mínimo de herramientas y capital, mejorar el rendimiento y facilitar la comercialización de los productos, y ejecutar ciertos trabajos de interés general que no pueden dejarse a la iniciativa privada. En cada región existe una sociedad indígena de previsión, administrada por una junta ejecutiva de la cual es presidente el jefe administrativo regional.

La Autoridad Administradora declaró que, desde que empezaron a funcionar, las sociedades indígenas de previsión no han cesado de ampliar sus actividades, y que se piensa darles una participación importante en la ejecución del segundo plan cuatrienal. Con respecto a la estructura de estas organizaciones de previsión, la Autoridad Administradora manifestó que no había creído conveniente quitar la presidencia de la junta ejecutiva formada por elección al jefe de la

³²⁹ T/PET.5/L.8, 9.

³³⁰ T/PET.5/L.5, 6; T/PET.5/123, 132, 151, 171. Para la decisión tomada respecto a la petición T/PET.5/171, véase la resolución 942 (XIII).

circunscripción territorial. A su juicio, las juntas ejecutivas no podrán ser administradas por cameruneses únicamente hasta que sea posible encontrar hombres con una gran experiencia comercial y sólida formación financiera para ocupar ese cargo.

La Misión Visitadora de 1952 informó que la organización y las actividades de las sociedades indígenas de previsión eran objeto de duras críticas de algunos indígenas, quienes se quejaban sobre todo de que los afiliados no tenían ninguna participación en la administración y de que las utilidades no se usaban en beneficio de los habitantes indígenas. La Misión consideró que el Consejo de Administración Fiduciaria debía seguir muy de cerca esta cuestión.

También aparecían quejas similares en tres peticiones³³¹ presentadas al Consejo de Administración Fiduciaria.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo recomienda que la Autoridad Administradora, en colaboración con la población indígena, preste especial atención al desarrollo del movimiento cooperativista en todas sus fases.

INDUSTRIAS

El Consejo de Administración Fiduciaria recomendó en períodos de sesiones anteriores que la Autoridad Administradora acelerara la industrialización del Territorio y alentara a los habitantes indígenas para que participaran en todas las fases del desarrollo industrial del Territorio.

La Autoridad Administradora informó que con excepción de las industrias forestales, para las cuales el año 1952 había sido excepcionalmente difícil debido a la crisis en el mercado de maderas tropicales, la industrialización del Territorio había continuado sin cesar durante los doce meses. Durante el año habían comenzado a funcionar cuatro fábricas de aceite y se acababa de terminar la quinta. Respecto a las industrias alimenticias, la fábrica de cerveza que abastecía el Territorio había aumentado enormemente la producción y mejorado la calidad de su producto. Además había empezado a funcionar una pequeña fábrica de conservas y se había modernizado el equipo de dos molinos de arroz.

En cuanto a las industrias del metal, había empezado a producir una fábrica de pernos y tornillos y se había construido una fábrica de envases metálicos. Asimismo, se habían terminado una fábrica de acetileno y de oxígeno y una desmotadora de algodón dotada de maquinaria moderna y se estaban acabando de instalar dos estaciones hidroeléctricas en Dschang y Edéa. Además de las grandes empresas, se habían organizado unos 80 establecimientos pequeños de tipo seminidustrial o artesanal.

La Autoridad Administradora declaró que aunque las grandes empresas industriales, que necesitan grandes inversiones, eran todas propiedad de compañías europeas, los africanos participaban en cambio activamente en la organización y explotación de pequeñas empresas, contribuyendo así al desarrollo industrial del Territorio.

La Misión Visitadora de 1952 observó que tanto las autoridades como las empresas privadas habían

realizado grandes esfuerzos para industrializar el Camerún. Luego añadió que si bien en esa fecha la actividad industrial del Territorio era todavía limitada, la central hidroeléctrica de Edéa, con una capacidad máxima de 60.000 kilovatios, estimularía inevitablemente la rápida industrialización de toda la región meridional en cuanto estuviera en condiciones de funcionar y de suministrar energía barata.

En una petición,³³² el Kumzé instaba a que se establecieran en el Territorio pequeñas industrias de transformación.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora para el desarrollo industrial así como de la ampliación de la ayuda financiera a las industrias de artesanía existentes, recomienda que la Autoridad Administradora estimule el desarrollo de las industrias ligeras con una mayor participación de los habitantes indígenas.

MINERÍA

Hay muchos indicios de que existen yacimientos de minerales en el Camerún, pero muy pocos han sido objeto de un estudio adecuado. En la actualidad, la producción minera se limita al oro, al rutilio aluvial y a la casiterita; en 1952, se extrajeron 81 kilogramos de oro, 294 toneladas de rutilio y 125 toneladas de casiterita.

La Autoridad Administradora informó que la Oficina de Minas y otros organismos estaban realizando exploraciones para localizar yacimientos de estaño en la zona de Foumban-Banzon, oro en el Alto Lem y petróleo en la cuenca aluvial de Duala, pero que hasta la fecha no habían logrado resultados apreciables. La superficie total de las concesiones y autorizaciones mineras otorgadas había disminuído en los últimos años, debido a que el costo de producción del oro y del rutilio camerunés era excesivo. En 1952, esta superficie era de 5.290 kilómetros cuadrados, en comparación con 5.370 en 1951 y 11.500 en 1948.

Con objeto de estimular el desarrollo de la minería, la Autoridad Administradora está preparando un mapa geológico, que permitirá hacer un inventario de los recursos minerales del Territorio, y había organizado los laboratorios de química y mineralogía del Servicio de Minas, que están dotados de equipo para analizar minerales. Al mismo tiempo, el Territorio y la Oficina de Minas han aportado capital y sufragado en parte los gastos de ciertas empresas establecidas, para desarrollar los recursos minerales. El segundo programa cuatrienal también prevé un estudio más detenido de todos los recursos minerales del Territorio.

SILVICULTURA

La zona forestal del Camerún abarca unos 15.870.000 hectáreas de bosques densos y 12.000.000 de hectáreas de bosques tropicales secos o de sabanas boscosas. La madera es uno de los recursos más importantes del Territorio. En 1952, la producción de trozas y madera aserrada fué respectivamente de 250.000 toneladas y 45.000 metros cúbicos, de los cuales 41.794 toneladas y 23.901 metros cúbicos se exportaron. La producción de leña para la venta fué de unos 50.000 metros cúbicos.

³³¹ T/PET.5/L.8, L.9; T/PET.5/123.

³³² T/PET.5/L.9.

A fines de 1952 la superficie en explotación alcanzaba aproximadamente a 2.400.000 hectáreas. Esta cifra es un poco menos que la correspondiente a 1951. La Autoridad Administradora informó que la actitud de los habitantes indígenas era en general favorable a la concesión de permisos de explotación forestal y que durante las reuniones celebradas antes de examinar las solicitudes correspondientes se formularon pocas objeciones.

La deforestación constituye un grave problema en el Camerún. Todos los tipos de bosques están amenazados por los incendios y por el pastoreo o el desmonte para establecer cultivos. La deforestación suele ir acompañada, sobre todo en las laderas escarpadas, del empobrecimiento del suelo como consecuencia de la erosión. Para combatir este azote, la Autoridad Administradora ha tomado ciertas medidas destinadas a clasificar los bosques y luchar contra los incendios. A este respecto la Autoridad Administradora informó que la clasificación de los bosques, que es la medida de protección más eficaz y duradera, ha tropezado, por desgracia, con la oposición de los indígenas o de sus representantes en la Asamblea Territorial, y que por este motivo no se han clasificado más bosques desde 1948, a pesar de que la superficie ya clasificada es claramente insuficiente.

La deforestación que la Misión Visitadora de 1952 observó en ciertas zonas del Camerún le inspiró viva inquietud. A su juicio, mediante una reglamentación estricta se debería obligar a los agricultores a que mejoren sus métodos de cultivo en las regiones con laderas muy prominentes. Respecto a la clasificación de los bosques, la Misión expresó la esperanza, como lo había hecho antes el Consejo de Administración Fiduciaria, de que la Administración tomaría todas las medidas necesarias para convencer a las poblaciones indígenas de la necesidad de aumentar la superficie de bosques clasificados.

Con este motivo, la Autoridad Administradora declaró que continuaba y pensaba continuar su campaña de propaganda para persuadir a la población del Territorio a que acepte la política de conservación forestal.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión y la recomendación siguientes:

El Consejo, consciente de los peligros de la deforestación y de la erosión del suelo en el Territorio; insta a la Autoridad Administradora a que adopte todas las medidas adecuadas para la conservación del suelo y la protección de los bosques, sobre todo la clasificación de los bosques y la reforestación, y expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora contará con la colaboración y el apoyo incondicional de los habitantes indígenas al aplicar esas medidas.

RÉGIMEN DE TENENCIA DE TIERRAS

En virtud del régimen camerunés de tenencia de tierras, éstas están divididas en tres categorías principales: a) las tierras de dominio público o privado, que incluyen las "tierras vacantes y sin propietario"; b) las tierras que poseen los habitantes indígenas sin más título que la costumbre local; y c) las tierras cuyo título ha sido reconocido mediante procedimiento judicial.

El Consejo de Administración Fiduciaria formuló recomendaciones sobre tres cuestiones relacionadas con

el régimen de tenencia de tierras. Se refieren al reconocimiento de los derechos que los habitantes indígenas tienen sobre las tierras, a las concesiones de tierras otorgadas a los europeos y al concepto de tierras vacantes y sin propietarios.

En su sexto período de sesiones, el Consejo, que había recibido numerosas quejas relativas a la lentitud con que el Service des domaines atendía las solicitudes de reconocimiento de derecho sobre las tierras presentadas por los indígenas, recomendó que la Autoridad Administradora adoptara las medidas necesarias para acelerar esos trámites.

La Misión Visitadora de 1952 informó que el problema ya no era apremiante. El Service des domaines había sido reorganizado para que pudiera atender todas las solicitudes, y en ese momento tenía 31 agrimensores en comparación con seis en 1949. Según el informe presentado por la Autoridad Administradora, en 1952 se expidieron 276 títulos de propiedad (o sea, 21 más que en 1951) sobre 11 hectáreas de tierras urbanas y 1.938 hectáreas de tierras rurales. Al 31 de diciembre de 1952 se habían otorgado a los habitantes indígenas títulos sobre 517 hectáreas de tierras urbanas y 7.749 hectáreas de tierras rurales; el número total de títulos expedidos ascendía a 1.500.

En relación con las "tierras vacantes y sin propietario", un concepto que las comunidades africanas nunca aceptaron, el Consejo pidió a la Autoridad Administradora en su sexto período de sesiones que lo definiera con más precisión y que en la nueva legislación que se proponía promulgar tuviera en cuenta por una parte los derechos tradicionales de las comunidades indígenas y, por otra, las exigencias del porvenir económico del territorio.

La Autoridad Administradora señaló que el punto que se debatía en la cuestión de las "tierras vacantes y sin propietario" era más de interpretación que de fondo, y que creía que el establecimiento de colectividades más pequeñas que el conjunto del Territorio (municipios urbanos y rurales), con facultades para poseer tierras de dominio privado, permitiría vencer gradualmente la oposición que existía a la clasificación de las tierras vacantes.

La Misión Visitadora de 1952 fué informada de que el Gobierno francés había decidido revisar la legislación sobre tenencia de tierras, y que se estaba preparando un proyecto de ley en ese sentido. Además, expresó la esperanza de que se adoptarían las medidas necesarias lo antes posible para aprobar ese proyecto de ley.

Dos peticionarios, la Confédération générale du travail y el Kumzse,³³³ criticaron el actual régimen de tenencia de tierras, y sobre todo el concepto de "tierras vacantes y sin propietario".

Respecto a la cuestión de las concesiones, el Consejo aprobó, en sus períodos de sesiones sexto y noveno, varias recomendaciones destinadas a proteger los intereses de la población africana.

Con este motivo, la Autoridad Administradora señaló que aunque en virtud del Decreto del 12 de enero de 1938 las concesiones podían otorgarse mediante una orden del Alto Comisionado, el Decreto del 25 de octubre de 1946 dió a la Asamblea Territorial amplios poderes en la materia. Por esto, las concesiones

³³³ T/PET.5/L.8, L.9.

urbanas tienen que ser examinadas y aprobadas por la Asamblea y las concesiones rurales deben ser sometidas obligatoriamente a su consideración. La Autoridad Administradora informó que en 1952 se otorgaron títulos provisionales sobre 182 concesiones urbanas, que abarcaban 27 hectáreas, y 56 concesiones rurales, que abarcaban 2.724 hectáreas, y títulos definitivos sobre 73 concesiones urbanas, con una superficie total de 32 hectáreas y 21 concesiones rurales, con 774 hectáreas. Al 31 de diciembre de 1952, se habían otorgado títulos provisionales o definitivos sobre 799 hectáreas de tierras urbanas y 106.376 hectáreas de tierras rurales.

La Misión Visitadora de 1952 observó que en los últimos años se habían otorgado pocas concesiones. Además, estimó que el procedimiento que requiere la intervención de la Asamblea Territorial parece ser un medio adecuado para proteger los intereses del Territorio y de los habitantes indígenas.

La Confédération générale du travail y el Kumzsé, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad, se quejaron de que se habían concedido tierras a los colonizadores europeos sin el consentimiento de los propietarios indígenas.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo, teniendo en cuenta la declaración formulada por el representante especial de la Autoridad Administradora acerca de la generalización del sistema de reconocimiento de los derechos de los habitantes indígenas sobre las tierras y del registro de los títulos de propiedad, y teniendo también en cuenta su declaración de que se está reconociendo progresivamente el derecho a la propiedad individual en los centros urbanos y en las regiones agrícolas desarrolladas; expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora proseguirá sus esfuerzos, sobre todo mediante la generalización del catastro, para fomentar la definición progresiva de los derechos de los habitantes indígenas sobre las tierras. A este respecto, el Consejo recomienda que la Autoridad Administradora adopte las medidas necesarias para impedir que se cometan abusos y se perjudiquen los derechos sobre las tierras y los intereses de los habitantes indígenas al efectuarse la catastración mencionada.

El Consejo, tomando nota de la declaración formulada por la Misión Visitadora de 1952, según la cual el procedimiento que requiere la intervención de la Asamblea Territorial al otorgarse las concesiones parece proteger de una manera satisfactoria los intereses del Territorio y de los habitantes indígenas, reitera su recomendación anterior de que los intereses de la población africana deben ser garantizados en debida forma al otorgarse concesiones a los habitantes no indígenas.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

En su 11° período de sesiones, el Consejo notó con satisfacción de que se estaban ampliando y mejorando las comunicaciones y los medios de transporte por vía terrestre y aérea, y recomendó que la Autoridad Administradora extendiera aun más esos medios de transporte del Territorio y sobre todo la red de caminos secundarios.

El Camerún tiene en la actualidad una red de caminos de 10.600 Kms., incluyendo 8.800 Kms. de

caminos y pistas transitables todo el año; dos líneas de ferrocarril, con una extensión total de 505 Kms.; dos puertos de mar, en Duala y Kribi; un puerto fluvial en Garua y 17 aeródromos en diversas partes del Territorio.

La Autoridad Administradora informó que los trabajos iniciados en virtud del plan decenal para mejorar el sistema de comunicaciones del Territorio se continuaron activamente en 1952. Estos trabajos son principalmente la construcción de dos carreteras para tráfico pesado que enlazan Duala con Garua, en la región septentrional, y con Bertua, en el este, la renovación de las vías y del material rodante de los ferrocarriles, y la instalación de equipo en los puertos y principales aeródromos del Territorio.

La mejora del sistema de comunicaciones hizo que el tráfico aumentara considerablemente en 1952. El tráfico marítimo aumentó de 658.534 toneladas en 1951 a 673.380 toneladas en 1952, y el tráfico fluvial del puerto de Garua de 28.945 a 31.216 toneladas. El incremento del tráfico aéreo fué todavía mayor: en 1952, los nueve aeródromos principales del Camerún registraron 13.703 vuelos de aviones comerciales, que transportaron 82.617 pasajeros y 12.877 toneladas de carga, en comparación con 10.361 vuelos, 80.795 pasajeros y 7.554 toneladas de carga en 1951. El tráfico por ferrocarril también aumentó en conjunto, a pesar de que hubo una ligera disminución en el número de pasajeros transportados: en 1952 circularon 15.972 trenes, que transportaron 1.316.000 pasajeros y 667.000 toneladas de carga, contra 13.133 trenes en 1951, que transportaron 1.470.000 pasajeros y 556.000 toneladas de carga.

La Misión Visitadora en 1952 opinó que sin satisfacer las exigencias modernas, la red de caminos y el sistema de comunicaciones en general eran buenos para un territorio africano. También observó que la segunda parte del plan decenal no prestaría atención preferente al sistema de comunicaciones, sino a la producción del territorio. Sin dejar de reconocer el acierto de esta decisión, expresó la esperanza de que los grandes esfuerzos realizados desde 1947 para mejorar el sistema de comunicaciones se reanudarían en cuanto las condiciones económicas lo permitieran.

La cuestión de las comunicaciones fué planteada en dos peticiones. La organización Ngondo³³⁴ admitió que la Administración había logrado algunos progresos en el desarrollo de los caminos municipales e interregionales, pero sostuvo que este esfuerzo debería extenderse a los caminos secundarios, si se deseaba favorecer el desarrollo económico del Territorio. El Kumzsé³³⁵ declaró que los pequeños agricultores se veían obligados a construir ellos mismos los caminos que necesitaban para transportar sus cosechas y se lamentó de la insuficiencia de la ayuda prestada por la Autoridad Administradora.

HACIENDA PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN

La Autoridad Administradora informó que los ingresos y gastos públicos en 1952 ascendieron aproximadamente a 6.836.537.964 y 6.728.878.741 francos CFA respectivamente. En 1952, los impuestos indirectos (3.785.576.000 francos CFA, o sea, el 55,37%) y los impuestos directos (1.892.618.000 francos CFA, o

³³⁴ T/PET.5/L.7.

³³⁵ T/PET.5/L.9.

sea, el 27,68%) constituyeron las principales fuentes de ingresos del Territorio.

Los impuestos directos más importantes son los que gravan la renta, que se componen de un "impuesto de capitación", de impuestos cedulares sobre las rentas personales y de un impuesto complementario general, que grava la renta total de cada familia.

El "impuesto de capitación" es pagado por todos los varones adultos sin distinción de situación jurídica ni de nacionalidad, mientras que las personas cuyos ingresos se pueden determinar pagan, además, el impuesto cédular y el complementario. Sin embargo, la Autoridad Administradora señaló que, debido a su forma especial de trabajos y a la falta de toda contabilidad, los comerciantes y plantadores indígenas ricos eluden en la práctica el pago del impuesto sobre la renta propiamente dicho. Luego añadió que este estado de cosas sólo se corregirá con el tiempo.

Respecto a los impuestos directos, el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó en su noveno período de sesiones que la Autoridad Administradora estableciera lo antes posible un régimen general de impuestos sobre la renta. En respuesta a esta recomendación la Autoridad Administradora declaró en su informe correspondiente a 1951 que la aplicación del impuesto sobre la renta se ampliaría conforme se aumentara el número de funcionarios competentes para la administración del impuesto, pero que, a su juicio, durante un largo período el impuesto mínimo seguiría siendo la forma más equitativa y práctica de imponer gravámenes a los pueblos más primitivos.

El informe de la Autoridad Administradora correspondiente a 1952 demostraba que en ese año el régimen del impuesto sobre la renta apenas se diferenció del de 1951. En el cuadro siguiente figuran las tasas de los impuestos directos para los dos años:

TASA DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS

	1951	1952
Impuesto de capitación..	De 60 a 700 francos CFA, según la región	De 80 a 900 francos CFA, según la región
Impuestos cedulares:		
Sobre los salarios.....	1,8%	Ninguno
Sobre las utilidades comerciales	18,0%	18,0%
Sobre las utilidades agrícolas	13,5%	13,5%
Sobre los valores transferibles (dividendos)...	Ninguno	Ninguno
Impuesto general sobre la renta	Escala progresiva hasta el 10% (tasa máxima a partir de 500.000 francos CFA)	Escala progresiva hasta el 10% (tasa máxima a partir de 500.000 francos CFA)

En una petición,³³⁶ la Union des populations du Cameroun se quejaba de que los habitantes de las aldeas tenían que soportar todo el peso de los impuestos.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión siguiente:

El Consejo, tomando nota de que la sustitución del actual sistema de impuesto personal por un impuesto gradual sobre la renta es el objetivo que persigue la Autoridad Administradora y de que ya se han hecho progresos en ese sentido, insta a la citada Autoridad

Administradora a que intensifique sus esfuerzos para extender todo lo posible el régimen de impuestos sobre la renta a todos los sectores de la población.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de China tomó nota con satisfacción de la evolución progresiva del Territorio, de la aplicación sistemática del plan decenal por la Administración, del desarrollo de Duala y del progreso logrado en otras partes del Territorio.

El representante de Haití tomó nota de que la economía del Territorio está progresando realmente.

El representante de El Salvador declaró que hay que reconocer que se han obtenido auténticos progresos en el campo económico.

El representante de Siria manifestó que el comercio está basado en la política de puerta abierta, pero que las licencias son obligatorias y que éstas no se aplicaban a las mercaderías importadas en la Metrópoli, con la cual el Territorio forma una unión aduanera y económica.

El representante de la India hizo notar, hablando de los cultivos comerciales que constituyen la principal fuente de divisas de la población, que los ingresos habían disminuido en general. Así pues, el Territorio estaba económicamente atrasado y no progresaba hacia la liberación económica.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que en el ejercicio económico de 1952-1953 se habían concedido 52.000.000 de francos en préstamos inmobiliarios y 13.000.000 de francos en préstamos a los artesanos, además de los créditos otorgados a los agricultores y cooperativas. Además, se concedieron sumas a las sociedades de previsión que habían creado establecimientos para fabricar productos en las localidades. Sin dejar de reconocer que aun quedaba mucho por hacer en el Territorio, no aceptaba la opinión del representante de la India, quien sostenía que el Territorio se encontraba en una situación lamentable.

Respecto al control de cambios, declaró que la Metrópoli hacía todo lo que podía para poner a disposición del Territorio la mayor cantidad posible de divisas.

PLAN DECENAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

El representante de Nueva Zelandia felicitó a la Autoridad Administradora por su importante aportación financiera al desarrollo del Territorio. A su juicio, el desarrollo del capital constructivo en el Territorio era impresionante. Luego expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuaría ayudando y estimulando la construcción de caminos secundarios en las zonas rurales. El orador hizo notar que el éxito del segundo programa cuatrienal quizá dependa del interés activo y de la colaboración de la población africana con las autoridades, y para obtener esa colaboración debe concederse especial importancia al desarrollo de la agricultura. En su opinión, la idea de recurrir en parte a las sociedades indígenas de previsión para realizar el nuevo programa constituía un método racional, y no dudaba de que también se estudiaría la medida en que otras organizaciones indígenas, tales como cooperativas y municipios rurales, podrían participar en la ejecución de esos trabajos.

El representante de Bélgica congratuló a la Autoridad Administradora por los importantes trabajos efectuados con sus propios fondos en los puertos de Duala y Garua y por las mejoras introducidas en la red de caminos. La represa de Edea también contribuirá a modernizar la industria del Camerún y a diversificar su economía.

El representante de El Salvador felicitó a la Autoridad Administradora por la forma en que había realizado el programa de centrales hidroeléctricas y puesto en práctica el programa decenal.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que ésta se preocupaba, por lo menos tanto como el representante de Nueva Zelandia, del desarrollo de las comunicaciones, y que, de conformidad con el deseo expresado anteriormente por el Consejo, se prestaría especial atención a la ampliación de la red de caminos secundarios y de pistas en las regiones agrícolas.

AGRICULTURA

Como se reconoce que la producción agrícola es todavía inadecuada, el representante de China opinó que la Autoridad Administradora tenía razón al dedicar el segundo programa del plan decenal a aumentar esa producción y expresó la esperanza de que esta segunda fase tendría tanto éxito como la primera. Luego expresó su preocupación por los precios que se pagan a los productores de cacao. Lamentaba que como la creación de un fondo de estabilización no pareció viable, se hubiera abandonado la idea; luego sugirió que se estudiara el problema más a fondo y que, en caso necesario, se tratara de encontrar otra alternativa.

El representante de Nueva Zelandia manifestó que se debía prestar atención a la conveniencia de proteger a los agricultores contra una posible baja en el precio del cacao. Esto se podría lograr mientras los precios son elevados mediante el establecimiento de una reserva de estabilización, la creación de una organización cooperativa de comercialización o ciertos ajustes en el impuesto sobre las exportaciones.

El representante de Haití dijo que era comprensible que la Administración hubiera tropezado con la hostilidad de los "encargados de compras" en el comercio del cacao. Sin embargo, la libertad del comercio no debería condenar a la población al desempleo. A su juicio, habría que establecer algún reglamento para limitar en cada región el número de "encargados de compras", expidiendo licencias y dictando normas higiénicas. Esto serviría para mantener el principio de libertad en el comercio del cacao y, al mismo tiempo, protegería al pequeño productor contra los perjuicios que le originan las especulaciones de individuos poco escrupulosos.

El representante de la India señaló que los plantadores de cacao eran los que producían riqueza en el Territorio, y que gran parte de los impuestos recaía sobre ellos. El cacao se vende a precios elevados, pero el cultivador no se beneficia por completo de esos precios debido a las maniobras de los intermediarios.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que el nuevo plan cuatrienal estaba destinado a elevar el nivel de la producción agrícola: en la ejecución del plan estarían asociadas varias organizaciones, las cuales ayudarían a desarrollar la agricultura, a modernizarla y a distribuir comercialmente sus productos. Sus actividades irían más allá del estricto campo agrícola e incluirían la formación técnica, la construcción y ciertas actividades financieras. El orador

dijo luego que se estaba diversificando más el régimen alimenticio y formuló la esperanza de que los cultivos de legumbres y frutas aumentarían cada vez más.

Asimismo, se había estudiado la cuestión del establecimiento de un fondo de estabilización o de un sistema de precios uniformes para el cacao, pero la Asamblea Territorial no había acogido favorablemente estas medidas; la creación de un fondo de estabilización no parecía viable en las condiciones actuales. A continuación declaró que la Autoridad Administradora estudiaría las sugerencias que el Consejo pudiera hacer a este respecto.

Con respecto a los "encargados de compras", el representante especial estimó que no había que exagerar su influencia. Se habían organizado mercados oficiales en los cuales los productores podían vender directamente sus productos, y los funcionarios locales alentaban a los vendedores a que los utilizaran cada vez más. El representante especial estimaba que en la actualidad los precios tenían una estabilidad razonable.

CRÍA DE GANADO

El representante de Australia señaló que la cría de ganado era una actividad importante, y que la Autoridad Administradora había adoptado medidas especiales para mejorarla.

El representante de Nueva Zelandia felicitó a la Autoridad Administradora por los trabajos realizados en la estación zootécnica de Wakwa.

INDUSTRIAS

El representante de la China dijo que la persistente industrialización del Territorio era impresionante, y sostuvo que la construcción de una represa y de una central hidroeléctrica en Edea constituían los éxitos más importantes en este terreno.

El representante de Siria declaró que, a pesar de la labor realizada hasta la fecha, no se había conseguido industrializar el Camerún y los trabajos prosiguen muy lentamente. Tomando nota de que la Autoridad Administradora pensaba hacer participar a los cameruneses en la industrialización del Territorio, pero que el capital indígena parecía estar en minoría en las empresas establecidas, sugirió que se protegiera y alentara a esa minoría para que en el momento oportuno pudiera tomar las riendas de la industria privada.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que aunque la adopción de métodos civilizados de producción en el Territorio estaba todavía en su primera fase, deseaba recalcar, sin embargo, que se habían creado numerosas pequeñas industrias de servicios. La Autoridad Administradora se preocupa por proteger a estas empresas; además ha tratado de reservar para la población indígena una parte del capital y de la administración de otras empresas. La experiencia ha demostrado que los habitantes indígenas no desean inmovilizar su capital en inversiones a largo plazo, sino que prefieren invertir su dinero en empresas comerciales que produzcan utilidades a corto plazo.

SILVICULTURA

El representante de Bélgica dijo que creía que si el Consejo estimaba que la población indígena y los miembros de la Asamblea Territorial estaban equivocados al oponerse a la reforestación, a la clasificación de los bosques y a las medidas para combatir la erosión, debería declararlo así de una manera categórica.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que su Gobierno tenía plena conciencia de los problemas que plantean la erosión del suelo y la deforestación y que haría uso de las recomendaciones del Consejo para reforzar su campaña entre la población con objeto de que colaborase en la aplicación de las medidas que se pudieran adoptar para solucionar estos problemas. Luego recordó que en virtud del plan decenal se han asignado créditos para la mejora de los bosques y del suelo.

TENENCIA DE TIERRAS

Observando que existían divergencias de opinión acerca de las llamadas "tierras vacantes y sin propietario", el representante de China declaró que se trataba de una cuestión muy importante y expresó la esperanza de que en breve se encontraría una solución satisfactoria para los habitantes.

El representante de Siria hizo notar que el problema de las tierras era muy complejo y recomendó que la concesión de derechos y títulos se reglamentara para definir con precisión los derechos sobre las tierras. Luego señaló que esta labor estaba íntimamente ligada con la preparación del catastro.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que no se podía desconocer que las tierras de los indígenas seguían enajenándose, por lo general en beneficio de europeos y sin pagar ninguna indemnización. Muchas peticiones han informado que a menudo se destruían árboles y cultivos valiosos que habían sido plantados por los habitantes indígenas. El orador afirmó luego que las sociedades francesas desempeñaban un papel importante en este despojo y que los jefes locales también se apoderaban de las tierras para vendérselas a los europeos. Asimismo, confiscaban terrenos so pretexto de la llamada clasificación de los bosques, de las tierras del Estado y de las tierras baldías o vacantes. Después señaló que la población indígena se oponía a la clasificación de los bosques y de otras tierras.

Por último, añadió que la Autoridad Administradora debería poner fin a su política de enajenación de tierras de los indígenas y adoptar medidas para la demanda de la población indígena de que se le restituyan las tierras enajenadas.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló que el decreto del 12 de enero de 1938 estipulaba que las "tierras vacantes y sin propietario" pertenecían a la comunidad camerunesa y no al Estado, y que, por lo tanto, no eran propiedad de la República francesa ni de ninguna otra administración francesa. Esas tierras podían ser objeto de concesiones o de clasificación en el dominio privado del Territorio. Originalmente, los habitantes indígenas no atribuían ninguna importancia a esas tierras ni veían ningún inconveniente en que fueran explotadas. Debido al cultivo intensivo y a los hábitos migratorios de los citados habitantes indígenas, se concedía muy poca o ninguna importancia a los derechos de propiedad. La situación ha cambiado desde entonces, pues los habitantes indígenas cultivaban en la actualidad superficies más extensas y utilizaban trabajadores asalariados, pasando así del cultivo familiar a la explotación propiamente dicha de los terrenos. Además, el precio de la tierra, sobre todo en las inmediaciones de las zonas urbanas, había subido tanto que los habitantes indígenas alegaron derechos consuetudinarios sobre tierras que no fueron

explotadas nunca y sobre las cuales la tribu como colectividad tenía derechos de usufructo.

Así, pues, se trataba de un problema de evolución, y muchas personas que no formularon ninguna objeción respecto a concesiones otorgadas hace 20 años o más pretendían ahora que habían sido despojadas de sus tierras. El representante especial añadió que no se podía pensar en modificar la situación creada, pues esos terrenos rurales (que tienen una superficie total de 43.000.000 de hectáreas) sólo incluyen unas 6.500.000 hectáreas de tierras verdaderamente cultivables. Sin embargo, se había planteado un problema de evolución y la Autoridad Administradora estaba estudiando un plan de reforma.

El representante especial recalcó que la Asamblea Territorial estaba examinando la cuestión de la reclasificación de las tierras como dominio privado y se tenía que obtener la opinión de este órgano antes de otorgar concesiones rurales que excedieran de 200 hectáreas. Lo mismo sucedía con la concesión de permisos forestales para explotar una superficie de más de 500 hectáreas. Además, estos últimos permisos de explotación de recursos forestales sólo eran temporales y no constituían concesiones. En caso de desacuerdo entre un jefe y la Asamblea, era necesario un decreto para poder otorgar concesiones rurales de 1.500 hectáreas o menos y permisos forestales que abarcasen menos de 2.500 hectáreas. Cuando las cifras eran mayores, se precisaba un decreto aprobado en Consejo de Ministros y basado en la opinión de la Asamblea Territorial. La opinión desfavorable de la Asamblea no se desatendía nunca.

Para terminar, el representante especial declaró que la Autoridad Administradora no había olvidado la recomendación hecha por el Consejo en su 11º período de sesiones sobre la cuestión de tierras; al otorgamiento de concesiones y a la clasificación de las tierras se les daba gran publicidad entre la población indígena y también se hacían públicos datos en el *Journal Officiel* y en carteles. Si querían hacer una reclamación, los habitantes indígenas podían recurrir al *Conseil du contentieux administratif* (Consejo contencioso administrativo) y apelar ante el Consejo de Estado.

El representante especial de la Autoridad Administradora reconoció que convenía extender a toda la región el régimen de reconocimiento de los derechos de los habitantes indígenas sobre las tierras y el registro de los títulos de propiedad inmobiliaria, que había sido establecido por decreto del 21 de julio de 1932. Sin embargo, esta generalización tropezaba con dificultades debido al régimen consuetudinario, según el cual la tierra pertenecía a la comunidad y los derechos de usufructo eran concedidos por el jefe. Después explicó que en los centros industriales donde la tierra se cultivaba y explotaba efectivamente, los derechos de propiedad se iban estableciendo de una manera gradual. Sin embargo, en otras zonas había una fuerte oposición a la concesión de títulos de propiedad. El orador creía que quizá fuese peligroso que se cristalizara la situación en el momento actual, y sugirió que, como etapa intermedia, tal vez convendría reconocer y definir los derechos de las colectividades locales. Por último, explicó que se estaba consultando a la Asamblea Territorial y que su opinión revestiría la mayor importancia al tratar de resolver esta cuestión.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El representante de la China declaró que aunque el sistema de comunicaciones era satisfactorio en su con-

de actividad, pero que la propia población es la que debe hacer todo lo posible para eliminarla, principalmente mediante la instrucción.

En el octavo período de sesiones de la Asamblea General, el representante de Francia en la Cuarta Comisión declaró que la Constitución francesa proscribía en absoluto toda distinción que no se funde en el mérito. Ya se ha hecho bastante para suprimir la discriminación en el sector privado, y, en virtud del nuevo Código del Trabajo, toda distinción en las condiciones de trabajo y en las prestaciones sociales irá desapareciendo gradualmente.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

Aun cuando la mujer del Camerún es igual al hombre ante la ley francesa, la costumbre no le suele reconocer más que muy pocos derechos.

La Autoridad Administradora informó que ha tratado de introducir modificaciones para garantizar a la mujer camerunesa la condición jurídica y la libertad a las que tiene derecho. Sobre todo, ha tratado de reglamentar el régimen matrimonial, que cree que es uno de los obstáculos más difíciles de vencer y cuya evolución es la más lenta y la menos segura.

Así, se ha tomado una serie de medidas para regular el matrimonio entre africanos y para limitar el precio que se paga por la novia. La última medida hasta la fecha es el decreto del 14 de septiembre de 1951, que da a la muchacha que ha llegado a la mayoría de edad el derecho a casarse a pesar de la oposición de sus padres y ofrece a los jóvenes casados la posibilidad de optar por la monogamia. El decreto también faculta al Alto Comisionado para establecer mediante una orden la cuantía máxima de ese precio.

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria acogió con agrado la aprobación del decreto del 14 de septiembre de 1951 y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuara sus esfuerzos por mejorar aún más la condición de la mujer.

La Misión Visitadora de 1952 estimó que el procedimiento de comprar la mujer constituía uno de los obstáculos más graves que se oponen al progreso social del Camerún y que convenía tomar las más enérgicas medidas para poner fin a los abusos que origina. Sin dejar de apreciar la atención que la Autoridad Administradora ha prestado a este problema, la Misión opinó que las medidas legislativas no bastaban para cortar tales abusos, y que para lograr el objetivo deseado convenía inculcar principios morales a la población. La Misión declaró también que el problema de la dote se había agravado aún más desde que entró en vigor la ley Lamine-Gueye, en virtud de la cual los funcionarios polígamos de la Unión Francesa tienen derecho a subsidio familiar por cada una de sus mujeres e hijos. La Misión insistió en que era conveniente revisar esta ley.

Respecto a la condición jurídica de la mujer del Camerún, la Autoridad Administradora informó que en el Territorio existen algunas asociaciones femeninas. La más importante es la Union féminine civique et social, con sede en París y una oficina auxiliar en Duala. Esta asociación, que tiene afiliadas europeas e indígenas, prevé en su programa el estudio de los problemas que plantea el desenvolvimiento de la mujer y de la familia en los territorios de ultramar. En 1952 también se organizaron en Duala dos asociaciones más de indígenas. Una, la Union des femmes camerou-

naises, tiene por objeto alentar a las mujeres para que colaboren en la evolución social, económica y política del país, y afirma que es netamente apolítica. La otra, la Union démocratique des femmes camerounaises, tiene como programa de acción la defensa de la familia y de los derechos de la mujer y del niño; también sostiene que es apolítica, pero la Autoridad Administradora cree que de hecho está vinculada con la Union des populations du Cameroun y la Confédération générale du travail.

La Autoridad Administradora opina que es demasiado pronto para poder aquilatar el apoyo que reciben y la influencia real que ejercen estos movimientos. Sin embargo, en la creación de estas asociaciones ve una manifestación tangible de los progresos realizados por la mujer del Camerún.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión y las recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota de las observaciones de la Misión Visitadora de 1952, según las cuales el precio sumamente elevado de la novia ha originado perjuicios sociales; tomando nota con satisfacción de que la Ley Lamine-Gueye prevé en principio la igualdad de todos los funcionarios; observando, empero, que la aplicación de esta ley en una sociedad que practica la poligamia ha contribuido a que aumentara el precio de la novia; recomienda a la Autoridad Administradora que adopte las medidas requeridas para resolver eficazmente este problema, modificando, si fuere necesario, las disposiciones para aplicar la Ley Lamine-Gueye, y que estimule la emancipación de la mujer y la prepare para las actividades que pueda ejercer.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El número de obreros del Territorio en 1952 llegó a unos 130.000 o sea, el 4,3% de la población global. Esta cifra representa un pequeño aumento sobre el año anterior, cuando fué de 120.000 aproximadamente, o sea, el 3,8% de la población.

La Misión Visitadora de 1952 comprobó que el rendimiento de los obreros cameruneses seguía siendo muy pequeño. Se le informó que la Autoridad Administradora procuraba aumentarlo mejorando los conocimientos técnicos de los trabajadores. Con tal fin, se había dedicado por una parte a formar obreros jóvenes calificados en los diversos centros de enseñanza técnica, y, por otra, a mejorar la formación profesional de los que ya pertenecían al grupo económicamente activo. Como parte de ese programa, a principios de 1952 se inauguró en Duala un centro de formación profesional de adultos; se concedieron a nueve trabajadores becas para que ampliases sus conocimientos en la Francia metropolitana durante un año, y, por último, se regularon las condiciones del aprendizaje en virtud de un decreto del 1° de julio de 1952.

La Misión de 1952 comprobó con satisfacción los esfuerzos que se hacían por mejorar la calidad profesional de los obreros cameruneses, y opinó que dentro de lo posible se debía proseguir a intensificar tales medidas.

Respecto a la reglamentación del trabajo, la Autoridad Administradora señaló que el Código del Trabajo para los territorios de ultramar, aprobado por el Parlamento francés a fines de 1952, había entrado en vigor en el Camerún el 1° de enero de 1953.

El informe de la Autoridad Administradora no menciona las disposiciones del Código, pero el de la

Misión Visitadora contiene algunos datos al respecto. El Código proclama los principios de la libertad de trabajo, de la igualdad de salario, del pago del salario íntegro en efectivo, de la libertad sindical y del derecho de huelga. Introduce una legislación minuciosa sobre ciertos puntos que todavía no habían sido objeto de ninguna disposición en el Camerún, tales como el contrato de aprendizaje, los traficantes medianeros, los representantes del personal, la comisión consultiva del trabajo y los tribunales del trabajo. En cuanto a otros puntos, el Código modifica las medidas legislativas vigentes hasta entonces, inspirándose para ello en la legislación metropolitana; así, se suprime el requisito de que los dirigentes sindicales tengan determinado grado de instrucción y las oficinas del trabajo se transforman en oficinas regionales a cargo de un *Conseil d'administration* (Consejo de administración), con representación paritaria de empleadores y trabajadores. La Misión Visitadora observó que el Código establece reglas generales comunes a todos los territorios de ultramar y que la Administración del Camerún debe dictar las disposiciones oportunas para aplicar esas reglas.

El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13º período de sesiones, que durante 1953 se habían promulgado unas 20 ordenanzas ejecutivas para aplicar el Código del Trabajo. Estas órdenes reglamentan principalmente las horas de trabajo, los contratos de trabajo y de aprendizaje, el descanso semanal, las vacaciones remuneradas y las escalas de salario mínimo garantizado a las diversas profesiones. La semana de 40 horas entró en vigor el 1º de agosto de 1953; además, se creó una oficina territorial del trabajo, para que se ocupe de todas las actividades relacionadas con la utilización y distribución de la fuerza de trabajo.

La cuestión del Código del Trabajo se planteó en dos peticiones. La Union des syndicats confédérés du Cameroun³⁴⁰ se quejó de que el Código fijaba la semana de trabajo en 48 horas para los trabajadores agrícolas y forestales, mientras que establecía la semana de 40 horas para las demás profesiones. La Association des chômeurs de la Sanaga-Maritime³⁴¹ deploró que no se hubiera aplicado todavía el Código, y dió a entender que la Administración no tenía intención de hacerlo.

Contestando a la queja de la Union des syndicats confédérés du Cameroun, el representante especial de la Autoridad Administradora explicó que la semana de trabajo es más larga para los trabajadores agrícolas debido a las condiciones peculiares de sus actividades, y agregó que en Francia se sigue el mismo procedimiento. Respecto a la afirmación de la Association des chômeurs de la Sanaga-Maritime, el orador dijo que carecía de fundamento.

La Autoridad Administradora opina en su informe que con la aplicación del Código del Trabajo, las organizaciones sindicales del Territorio adquirirán indubablemente más importancia. Luego manifiesta que el sindicalismo apareció en el Territorio en los años que siguieron a la segunda guerra mundial. Durante esos años, la afluencia de capital y funcionarios europeos y la preparación, y luego la ejecución, del plan decenal de desarrollo económico, crearon, con las nuevas obras públicas, una demanda mayor de mano de obra. Por último, el prodigioso crecimiento de ciudades como Duala, atrajo del interior del país a un número cada

vez mayor de indígenas que, desarraigados de sus tribus, formaron pronto el núcleo de un proletariado que antes no existía. Estas circunstancias hicieron que las organizaciones sindicales metropolitanas, como la Confédération générale du travail (de afiliación comunista), la Confédération générale du travail-force ouvrière (de afiliación socialista) y la Confédération française des travailleurs chrétiens crearan los primeros sindicatos en el Territorio. Igual que los movimientos políticos, estos sindicatos tuvieron sus altos y bajos; en la Confédération générale du travail, sobre todo, cuya afiliación política no tardó en conocerse, se produjo un cisma que dió origen a un organismo puramente camerunés, la Union des syndicats autochtones du Cameroun.

La Autoridad Administradora declaró que el número de sindicatos obreros y el de sus afiliados no varió apenas en 1952. En su informe aparecen las cifras correspondientes a 1951, que se reproducen en el cuadro siguiente:

	Sindicatos	Número de afiliados
Confédération générale du travail.....	74	8.120
Confédération générale du travail — force ouvrière	1	2.000
Confédération française des travailleurs chrétiens	33	8.110
Independientes	20	2.125
TOTAL....	128	20.355

La Autoridad Administradora también manifestó que en 1952 había habido muy pocos conflictos colectivos de trabajo. Durante el año se habían producido 27 huelgas, una de las cuales duró más de tres días; en estas disputas participaron 1.545 obreros, principalmente con objeto de obtener mayores salarios consiguiéndolos en más de la mitad de los casos.

En su petición, la Federación Sindical Mundial³⁴² protesta contra la decisión de la Administración de fecha 6 de mayo de 1953, en virtud de la cual prohíbe la circulación de algunas publicaciones sindicales. La FMS cree que esta prohibición constituye una violación flagrante de los derechos sindicales.

A este respecto, la Autoridad Administradora declaró que había decidido prohibir la circulación de esas publicaciones porque la propaganda política que contenían podía perturbar la paz en el Territorio.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las conclusiones siguientes:

El Consejo toma nota con satisfacción de la entrada en vigor en el Territorio del Código del Trabajo para los territorios de ultramar y de la creación del Comité Consultivo del Trabajo para encargarse de su aplicación, y expresa su convicción de que las disposiciones del citado Código se aplicarán de tal forma que contribuyan a aumentar persistentemente el bienestar y la protección de los obreros.

SALARIOS Y NIVEL DE VIDA

En su 11º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria pidió a la Autoridad Administradora que le facilitara información más detallada sobre el nivel de vida de los diversos sectores de la población. En su respuesta a esa petición, la citada autoridad manifestó que el Servicio de Estadística General del Territorio había comenzado a investigar el asunto, pero que las dificultades con que se tropezó

³⁴⁰ T/PET.5/L.8.

³⁴¹ T/PET.5/229.

³⁴² T/PET.5/215. Respecto a la decisión tomada sobre esta petición, véase la resolución 981 (XIII).

al tratar de reunir los datos precisos y sacar conclusiones justas, habían impedido que ese Servicio publicara en 1952 los resultados completos.

Sin embargo, se habían hecho estudios para calcular el índice del poder adquisitivo de la mano de obra africana no calificada de Duala. El cuadro siguiente muestra el movimiento de ese índice entre julio de 1949 y diciembre de 1952:

	Salarios		Índice del costo de la vida	Índice del poder adquisitivo
	Tasa	Índice		
Julio de 1959	60	100	100	100
Diciembre de 1950...	90	150	127,9	121
Diciembre de 1951...	100	166	141,9	119
Julio de 1952	110	183	133,8	128
Diciembre de 1952...	110	183	128	132

Según la Autoridad Administradora, el nivel de vida de los trabajadores no calificados, que constituyen alrededor del 70% de la masa trabajadora, mejoró considerablemente gracias al reajuste de su remuneración y a los esfuerzos de toda índole realizados, sobre todo en los centros urbanos, por los empleadores y la Administración. Esta se preocupó principalmente de poner a disposición de los trabajadores servicios que los surtiesen de productos alimenticios baratos, creando para ello en Duala tiendas modelo de comestibles y comedores municipales. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo en el 13° período de sesiones que gracias a la entrada en vigor de la semana de 40 horas desde el 1° de agosto de 1953, los salarios mínimos habían aumentado del 15 al 20%. La Misión Visitadora de 1952 observó que el poder adquisitivo del trabajador indígena aun seguía siendo sumamente reducido. Además, opinó que para remediar esta situación convenía ante todo reducir el costo de la vida en el Territorio.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión siguiente:

El Consejo, recordando sus recomendaciones anteriores acerca de los estudios del nivel de vida, expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora podrá terminar en breve su investigación en este terreno y comunicará al Consejo los resultados obtenidos.

HIGIENE PÚBLICA

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción de la gestión de la Autoridad Administradora en el campo de la higiene pública. Además le recomendó que siguiera ampliando todo lo posible los servicios médicos del Territorio y que a tal efecto intensificara la preparación de personal médico africano.

La Autoridad Administradora señaló que en 1952 se atribuyó la mayor importancia a la medicina profiláctica en la organización de los servicios de higiene pública. Así, el servicio ambulante de higiene y profilaxis (*Service d'hygiène mobile et de prophylaxie (S.H.M.P.)*), que hasta entonces se había dedicado exclusivamente a combatir la enfermedad del sueño, amplió su programa e intensificó su campaña contra las principales enfermedades endémicas. Con la ayuda del UNICEF y de la OMS, inició en 1952 una gran campaña antipalúdica, destinada a proteger a 700.000 u 800.000 personas en 1953.

En 1952 el personal médico superior del Servicio de Higiene Pública (diplomados del Estado o de las uni-

versidades) se componía de 55 médicos (incluidos tres africanos), cinco farmacéuticos, cuatro cirujanos-dentistas y 38 enfermeras y parteras (incluidas tres africanas). Así, pues, había dos médicos, dos cirujanos-dentistas y cuatro enfermeras y parteras más que en 1951, pero el número de africanos que formaban parte de este servicio permaneció estacionario. A este respecto, la Autoridad Administradora declaró que 10 indígenas pertenecientes a la categoría general de médicos, farmacéuticos y parteras africanos (no diplomados del Estado ni de las universidades) cursan actualmente estudios para obtener diplomas del Estado, cinco de ellos en Francia y los demás en el Camerún.

El servicio de higiene pública disponía en 1952 de 40 hospitales generales, 61 dispensarios, 135 dispensarios rurales pequeños, dos centros para la enfermedad del sueño, 32 leproserías y tres instituciones para enfermos mentales, con un total de 8.550 camas. A estos establecimientos médicos se pueden agregar los de las misiones religiosas, que en ese año tenían 11 hospitales, 43 dispensarios y nueve leproserías, con un total de 4.722 camas. Comparando estas cifras con las de 1951 se ve que aumentó el número de dispensarios rurales pequeños (de 167 a 178) y la capacidad de los hospitales (de 12.762 a 12.872 camas).

El número total de días de hospitalización en 1952 se elevó a 954.629, en contraste con 985.859 en 1951, y el de las consultas a 5.382.890 en 1952, en contraste con 5.081.120 en 1951. Estas cifras no incluyen la obra del Servicio Ambulante de Higiene y Profilaxis, que en 1952 había llegado a 382.276 personas con su programa de reconocimientos sistemáticos y descubierto 237 casos de tripanosomiasis (enfermedad del sueño).

La Misión Visitadora de 1952 quedó favorablemente impresionada con la obra sanitaria realizada por Francia en el Territorio. Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo y de los resultados obtenidos, opinó que el problema de la sanidad pública no estaba todavía resuelto por completo. La Misión observó que el número de establecimientos sanitarios en la región meridional era insuficiente, mientras que en la septentrional los habitantes todavía no habían aprendido a apreciar la importancia de los servicios médicos modernos y vacilaba incluso en acudir a los establecimientos sanitarios. También vió con inquietud el elevado porcentaje de sífilíticos de la población, sobre todo en la región septentrional.

La cuestión de la higiene pública se planteó en cuatro peticiones. El Ngondo y la Evolution sociale camerounaise³⁴³ pidieron que se ampliaran los servicios médicos. La Union des populations du Cameroun³⁴⁴ se quejó de que había discriminación racial en el terreno sanitario, y para demostrarlo señaló que en Duala hay dos hospitales, uno reservado para los europeos, y el otro, menos cómodo, para los africanos.

En el 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión y la recomendación siguientes:

El Consejo, tomando nota del progreso logrado en los servicios médicos y sanitarios, recomienda que la Autoridad Administradora siga haciendo todo lo posible para atender las necesidades del Territorio y eliminar las graves enfermedades que existen en él, sobre todo el paludismo, las enfermedades venéreas y la tuberculosis.

³⁴³ T/PET.5/L.6, L.7.

³⁴⁴ T/PET.5/L.11, L.13.

ALCOHOLISMO

La Misión Visitadora de 1952 señaló que durante su recorrido por el Territorio algunos sectores de la población le informaron sobre los perjudiciales efectos que el alcoholismo tenía en el pueblo. La Misión discutió el problema con la Administración, la cual le dió cuenta de las medidas que había tomado o que pensaba tomar al respecto.

La Administración creó en 1951 una comisión compuesta de los jefes de los servicios competentes y de representantes de la población, con objeto de estudiar los medios para combatir el alcoholismo. Apoyándose en las recomendaciones de esta comisión, el Alto Comisionado adoptó las disposiciones siguientes: fijó una cuota para la importación de alcoholes, aumentó los derechos de importación, liberalizó la venta de bebidas de poca graduación alcohólica y limitó el número de licencias. Conjuntamente con estas medidas, se inició una campaña de propaganda antialcohólica, principalmente en las escuelas y en los cursos postescolares. Por último, se presentaron al Parlamento francés tres proyectos de ley para hacer más rigurosas las sanciones contra los delitos relacionados con el alcoholismo.

La Misión opinó que el alcoholismo es en África un problema muy complejo y delicado, y que se debieran adoptar las más energéticas medidas para disminuir el consumo de alcohol destilado en el Territorio. Luego expresó la esperanza de que la población colaboraría sin reservas con la Administración en esta cuestión.

VIVIENDAS

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de que la superpoblación de los centros urbanos hacía que escasearan las viviendas y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuaría aplicando con la mayor energía el programa destinado a resolver el problema de la escasez y a mejorar las condiciones de la vivienda en todo el Territorio.

La Autoridad Administradora declaró que se continuaban construyendo viviendas para los funcionarios públicos. Además de las viviendas construídas para ellos y para el personal administrativo de hospitales y escuelas, en 1952 se edificaron 20 casas independientes y 12 unidades de vivienda en Yaundé y 31 casas de apartamentos en Duala. A los distritos (*circonscriptions*) administrativos se les asignó en el presupuesto de 1952 90.000.000 de francos CFA para la construcción de nuevas viviendas. Además, hay dos organismos semioficiales que ayudan a sufragar los gastos de construcción de las personas que quieren adquirir una casa. Estos organismos son el *Crédit du Cameroun* y la *Société immobilière du Cameroun*. Esta última inició en noviembre de 1952 un programa de construcción de viviendas, sobre todo de casas económicas accesibles a la clase media indígena. Sin embargo, la Autoridad Administradora reconoció que a pesar del progreso logrado, la situación de la vivienda seguía siendo difícil en las aglomeraciones urbanas, donde la población aumenta sin cesar.

DELINCUENCIA DE MENORES

En su 11° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción del proyecto de la Autoridad Administradora para reformar los métodos de rehabilitación de los menores delincuentes, a quienes se agruparía en varios centros especializados, y expresó la esperanza de que las reformas previstas entrarían pronto en vigor.

La Autoridad Administradora declaró que en 1952 se crearon dos instituciones para rehabilitar menores delincuentes. Una era el centro de recepción y observación de menores delincuentes de Bonakouamouamouang, en Duala, que recibe a los menores en custodia preventiva. La otra era el Instituto de Menores de Betamba, que recibirá a los menores física o moralmente descuidados que le sean confiados por decisión judicial.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la China expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora presentará pronto los proyectos de ley sobre seguridad social que está preparando.

El representante de la India rindió homenaje a todos los hombres y mujeres (franceses, cameruneses o de otros países) que trabajaban voluntariamente por el progreso del Territorio. Sin embargo, esta ayuda voluntaria, por muy loable y útil que sea, no podrá eximir a la Autoridad Administradora ni a las Naciones Unidas de la obligación de cumplir las obligaciones que contrajeron al hacerse cargo del Territorio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que en las prisiones y comisarías de policía, se seguía haciendo uso de los castigos corporales, y citó las declaraciones a este respecto hechas en dos peticiones. La Autoridad Administradora no había adoptado ninguna medida para abolir tales castigos, a pesar de las repetidas recomendaciones de la Asamblea General.

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

El representante de Siria indicó que la ley de asociaciones aplicable al Territorio también está vigente en la Metrópoli. Luego dijo que las disposiciones de esa ley son muy liberales y en lo que resultan aplicables al Territorio deben garantizar a los habitantes el derecho de expresar libremente sus opiniones. Como consecuencia, ya no es posible que exista discriminación. La Autoridad Administradora tenía razón en ese punto, pero no debería arrojar ninguna sombra sobre las actividades de cualquier asociación, cuando tales actividades se ajusten a las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes.

El representante de la India declaró que aceptaba la seguridad dada por la Autoridad Administradora de que no existe discriminación racial en el Camerún. Sin embargo, el hecho cierto es que seguían habiendo dos clases de lugares de esparcimiento en hospitales y fábricas; dos escalas de remuneración diferentes, sobre todo para los salarios; y diferencias de trato y derecho de voto, todas las cuales se basan en la raza. En la práctica, la raza a que pertenece un individuo determina la cuantía de los emolumentos, las condiciones de hospitalización, el acceso a los establecimientos de enseñanza y el goce de los derechos políticos. A juicio del representante de la India, esta situación no se ajusta bajo ningún concepto a los principios y objetivos enunciados en el Acuerdo de Administración Fiduciaria.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llamó la atención sobre las peticiones que demostraban la violación flagrante de los derechos de la población indígena por la Autoridad Administradora. Luego dijo que se perseguía a las personas y a las organizaciones que trataban de proteger a la población

indígena y de ampliar los derechos de que disfrutaban y que se esforzaban por acelerar el progreso del Territorio hacia la autonomía y la independencia.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

El representante de Bélgica hizo notar que el problema del precio de la novia, al cual no se había encontrado una solución satisfactoria, se planteaba a muchas Administraciones, y que el Consejo prestaría un gran servicio si hiciera sugerencias útiles sobre el particular. Después agregó que la ley Lamine-Gueye había dado origen a algunos abusos y que si los demás miembros del Consejo están tan convencidos como él de este hecho debían decirlo; a la Autoridad Administradora le correspondería entonces tomar las medidas necesarias para corregir tales abusos, a pesar de que la Asamblea Territorial se ha negado a tomar ninguna medida.

El representante de Haití declaró que el precio de la novia y la aplicación de la ley Lamine-Gueye sobre la poligamia constituían dos problemas graves que afectaban la economía del Territorio y amenazaban con gravar cada vez más el presupuesto de la Administración. Aun cuando no podía ofrecer una solución a esos problemas, el representante de Haití sugirió a la Autoridad Administradora que la mayor educación de las mujeres ayudaría a remediar esta situación.

El representante de El Salvador compartió la opinión del representante de Haití acerca del precio de la novia y la poligamia. Después declaró que era deplorable que se mantuviera a las mujeres en una condición de inferioridad; sin embargo, tal situación quizá pudiera mejorarse con la educación, especialmente las generaciones jóvenes que así estarán en condiciones de oponerse a las opiniones de las personas de más edad todavía instruidas en tradiciones anticuadas. A este respecto, el orador señaló que se aplicaba una excelente legislación en el Territorio, sobre todo el decreto Mandel de 1938. Luego dijo que los decretos de esa índole no eran bien conocidos en el Territorio, y pidió que se explicase el por qué. Las leyes deben ser aplicadas, y el mejor medio de hacerlo es poniendo sus textos en conocimiento de la población, e insistiendo en que sean respetados. Respecto a la ley Lamine-Gueye, el representante de El Salvador declaró que aunque los objetivos que perseguían los autores eran dignos de encomio, su aplicación parecía haber sido poco satisfactoria; a continuación propuso que se revisara la ley o que se encontraran formas más prácticas de aplicarla.

El representante de la Autoridad Administradora manifestó que la igualdad de los derechos de la mujer estaba garantizada hasta donde la aceptaban las costumbres del país. Luego añadió que la Autoridad Administradora seguía luchando contra las tradiciones y que se habían logrado algunos progresos; estaba seguro de que el sufragio universal femenino sería pronto la regla general.

El orador agregó que la aplicación de la ley Lamine-Gueye en el Territorio había provocado observaciones de la Misión Visitadora de 1952 y de algunos miembros del Consejo. A su juicio, esas observaciones se fundaban hasta cierto punto en una interpretación inexacta de la ley. Esta establecía el principio de la igualdad de los funcionarios de la administración, prescindiendo de raza, condición personal, origen o lugar de contratación. Por lo tanto, no puede ser revisada ni abrogada por la Autoridad Administradora. Han sido más bien los decretos y ordenanzas promulgadas para aplicar la ley los que provocaron las críticas de la Misión Visitadora,

que afirma que contribuía a alentar y consolidar la poligamia. Estos decretos se apoyan en dos consideraciones: por una parte, en el principio de la igualdad entre los funcionarios; por otra, en el hecho de que desde el punto de vista de la Administración pública, el niño nacido de una segunda o tercera mujer es tan digno de protección como el nacido de la primera. Este criterio ha planteado dificultades en la esfera social, pues retardan la evolución hacia la monogamia; como quiera que sea, sólo afectan a unos cuantos miles de funcionarios indígenas, de una población de 3.000.000 de habitantes. Por su parte, el representante de la Autoridad Administradora apoyó *a priori* la revisión de tales disposiciones, pero no pudo indicar si se procedería así y añadió que quizá fuese más conveniente esperar a que la opinión pública, con la influencia de los elementos más jóvenes, estuviera lista y dispuesta para tomar las decisiones que el Consejo quería ver adoptadas.

En cuanto a la cuestión del precio de la novia, el representante de la Autoridad Administradora opinó que el Consejo quizá debiera dedicar algunas sesiones a ese problema en su próximo período de sesiones. Era muy raro que las jóvenes aprovecharan las ventajas del decreto del 14 de septiembre de 1951, que les permitía defender su libertad individual; según indicó el representante de Haití, sólo se podrá progresar en este terreno mediante la educación. A su juicio, ese progreso debería ser rápido.

El orador reconoció que la cuestión del precio de la novia sólo se resolverá educando a las jóvenes y a sus padres. La Autoridad Administradora se esforzaba por modificar conceptos profundamente arraigados mediante la escuela, la prensa y la educación fundamental.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El representante del Australia propuso que el Consejo se sirviera tomar nota de la creación en el Territorio de una Comisión Consultiva del Trabajo, así como de la puesta en vigor de la semana de 40 horas y de la aplicación del salario mínimo. Luego consideró que la aplicación de la legislación del trabajo se hacía sin ninguna discriminación ni desigualdad. A continuación sugirió que también debía tomar nota de que no existía desempleo en el Territorio, por lo menos cuando la Misión Visitadora lo recorrió por última vez.

El representante de El Salvador indicó que en el campo social se había logrado un importante progreso que se manifestaba, entre otras cosas, en la promulgación del Código del Trabajo.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que las condiciones de trabajo de la población indígena eran deplorables, como lo atestiguaba el gran número de peticiones recibidas. En ellas se decía principalmente que los indígenas sólo recibían la octava parte del salario pagado a los obreros europeos por el mismo trabajo, y que vivían con un constante temor de ser despedidos o sustituidos por europeos; que el procedimiento para examinar las quejas de los trabajadores era tal que en realidad no se hacía ningún caso de tales reclamaciones; que los consejos disciplinarios creados para juzgar a los ferroviarios sólo servían para perseguir a los indígenas, y que los ferrocarriles no se preocupaban de tomar medidas de seguridad necesarias. Además, los derechos sindicales eran violados continuamente y la difusión de algunas publicaciones sindicales estaban prohibidas por un decreto promulgado en 1953.

DELINCUENCIA DE MENORES

Al representante de El Salvador le complació tomar nota de las reformas introducidas en el régimen penal. Sin embargo, como estas reformas sólo se referían a pequeños detalles y no correspondían a las grandes líneas generales que él preveía, recomendó que se iniciaran otras nuevas, tales como la rehabilitación de menores.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la Administración continuaría prestando la mayor atención a esta cuestión, que se seguía de cerca.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La Autoridad Administradora comunicó que el fin de su política docente era la educación para todos. Siguen los esfuerzos para tratar de lograr este objetivo, mejorar la calidad de la enseñanza y adaptarla a las condiciones económicas y sociales del Territorio. Para lograr que la enseñanza sea uniforme en las diversas instituciones del Territorio, con objeto de aumentar su eficacia, en 1952 decidió transformar la Dirección de Instrucción Pública en Dirección de Enseñanza. Durante ese año, los servicios de enseñanza prestaron especial atención a los problemas que planteaba la ampliación del sistema escolar, la enseñanza femenina, la formación de maestros y la educación de los adultos. Los esfuerzos para incrementar la asistencia a las clases contribuyeron a aumentar mucho el número de alumnos (sobre todo del sexo femenino) en 1952, en comparación con el año anterior.

En su 11º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, aunque tomó nota con satisfacción del progreso logrado en la enseñanza, opinó que debían intensificarse aún más tales esfuerzos. Para ello recomendó que la Autoridad Administradora dedicara especial atención a ampliar la educación femenina y a difundir la educación técnica, el programa de actividades normalistas y la enseñanza de los adultos.

La Misión Visitadora de 1952 observó que la Administración y las misiones religiosas habían hecho muchas tentativas para desarrollar las actividades docentes en el Territorio. Sin embargo, consideraba que el número de escuelas continuaba siendo inadecuado para las necesidades y que el número de niños que asistían a ellas representaba un porcentaje ínfimo de la población en edad escolar.

La Misión también observó que desde el punto de vista escolar, la región septentrional del Territorio (que ha sido descuidada durante muchos años debido a su alejamiento geográfico) estaba retrasada en comparación con la meridional. La Autoridad Administradora reconoce que existe esta situación y manifestó que tratará de aumentar la asistencia escolar en la región septentrional.

En tres peticiones,³⁴⁵ el Kumzsé, la Evolution sociale camerounaise y otro peticionario solicitaron que se amplíe la enseñanza en el Territorio.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo toma nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora en el campo educativo; toma nota también del marcado aumento de los créditos del presupuesto y del número de alumnos y escuelas, así como del progreso que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce se ha realizado en la educación fundamental y de adultos, y recomienda que se intensifiquen los esfuerzos en la formación de maestros y la ampliación de la enseñanza secundaria, profesional, técnica y fundamental.

ENSEÑANZA PRIMARIA

La enseñanza primaria se da en las escuelas públicas y privadas. La mayoría de estas últimas están a cargo de las misiones religiosas. El sistema escolar público de primaria abarca las escuelas principales, que dan un curso completo, y las escuelas de aldea, que se limitan a ciertas clases.

En 1952 asistieron a las escuelas públicas primarias 40.181 alumnos, en comparación con 28.594 en 1951. El número de niños que recibían enseñanza en las escuelas particulares aumentó de 111.988 a 126.193. El total de niños que asistieron a las escuelas en 1952 excedió en 25.000 alumnos de la cifra correspondiente al año anterior; este incremento fué particularmente notable en la región septentrional (30%).

La Autoridad Administradora comunicó que en 1952 se asignaron 135.000.000 de francos CFA al programa de construcción de escuelas, mediante créditos habilitados en virtud del presupuesto y del plan decenal, y que gran parte del programa fué ejecutado durante el año. El nuevo programa cuatrienal prevé una construcción más rápida de escuelas, como medio de aumentar a 100.000 el número de alumnos que asistirán a las escuelas públicas de primaria en 1953. Este nuevo programa de construcción beneficiará principalmente a las pequeñas escuelas de aldea, que ahora dan dos o tres clases.

La Misión Visitadora de 1952 recibió diversas quejas relacionadas con el límite de edad para admitir niños en las escuelas primarias. La Misión reconoció que la escasez de escuelas justifica la aplicación del reglamento, pero consideró que debía hacerse todo lo posible para no desalentar a las personas deseosas de educarse y recomendó que el reglamento se aplicara con la mayor flexibilidad posible.

ENSEÑANZA SECUNDARIA

En el Territorio existen dos clases de enseñanza secundaria: los estudios clásicos o modernos extensos (primero y segundo ciclo), idénticos a los que se dan en Francia y que son preparatorios para el bachillerato; y el curso breve moderno (primer ciclo) para obtener el certificado elemental o el certificado de estudios primarios.

En 1952, asistieron a las escuelas públicas de enseñanza secundaria del Territorio 1.793 alumnos (133 de ellos en el segundo ciclo del curso), en comparación con 1.204 en 1951. Se daban cursos de enseñanza secundaria en las siguientes instituciones:

a) El Liceo de Yaundé, hasta ahora la única escuela pública de enseñanza secundaria en el Territorio que prepara para el bachillerato. Se espera que el número de alumnos aumente a 1.000 en 1956, en contraste con 748 en 1952.

³⁴⁵ T/PET.5/L.2, L.9; T/COM.5/L.11.

b) El colegio clásico y moderno de Duala. Esta escuela no empezará a funcionar normalmente hasta 1956. En 1952 sólo tenía quinto y sexto años, y una matrícula de 21 alumnos.

c) El colegio moderno de N'Kongsamba. El curso concluye con el certificado de estudios primarios. En 1952 asistieron a este colegio 400 alumnos.

d) El colegio moderno de niñas de Duala, que también da un curso para obtener el certificado de estudios primarios. Durante 1952 asistieron a él 100 alumnas. La Administración piensa trasladar este colegio a la zona occidental del Territorio, y ampliarlo para que pueda admitir cinco veces más estudiantes.

e) Siete cursos suplementarios, que concluyen con el certificado elemental.

En 1952 tuvieron 373 alumnos.

En 1952 se concedieron créditos por valor de 142.-500.000 francos CFA para ampliar la enseñanza pública secundaria. En Garua se está construyendo un nuevo colegio moderno que ofrecerá un curso abreviado.

Además de las escuelas públicas de enseñanza secundaria, hay escuelas particulares que dan la misma enseñanza: dos colegios de estudios clásicos, dos colegios modernos, cuatro cursos suplementarios y un curso normalista. En 1952 asistieron a ellos 1.215 alumnos, 13 de los cuales siguieron el segundo ciclo. El total de alumnos que acudieron a las escuelas secundarias del Territorio en 1952 fué de 3.008; de éstos, 1.058 seguían los cursos de enseñanza normalista, 520 en las escuelas públicas y 538 en las escuelas particulares.

Aparte de los niños que se educan en el Territorio, hay cameruneses que reciben enseñanza secundaria en Francia. El número de alumnos con becas de enseñanza secundaria en 1952 fué de 115, en comparación con 108 en 1951. La Autoridad Administradora comunicó a este respecto que como se está ampliando el sistema de enseñanza secundaria, se concederá menor número de becas para estos estudios con objeto de aumentar el de becas de enseñanza superior.

ENSEÑANZA TÉCNICA

La Autoridad Administradora comunicó que en 1952 había aumentado considerablemente el número de alumnos que asistieron a las instituciones técnicas. En este año, hubo en el Territorio 1.137 estudiantes que recibieron enseñanza técnica y vocacional. Solamente en las escuelas técnicas públicas, el número de alumnos aumentó de 444 en 1951 a 796 en 1952.

El sistema público de escuelas técnicas se componía en 1952 de un colegio técnico (Escuela de Orientación Profesional de Duala), tres centros de aprendizaje, ocho secciones de preaprendizaje y cinco secciones de economía doméstica. Instituciones particulares tienen a su cargo cuatro centros de aprendizaje, una escuela de aprendizaje, una escuela de oficios y una sección de economía doméstica.

La Autoridad Administradora informó que en el año 1952 se lograron importantes progresos en los objetivos fijados en el plan decenal para la enseñanza técnica. Según el plan, la Escuela de Orientación Profesional de Duala se transformó en un colegio técnico y se fundaron cuatro centros de aprendizaje, cuatro centros de preaprendizaje y una sección de economía doméstica.

Además de los estudiantes que siguen cursos en el Territorio, 77 recibieron becas en 1952 para realizar estudios técnicos en Francia. La Autoridad Adminis-

tradora señaló que, igual que en el caso de la enseñanza secundaria y por los mismos motivos, se disminuiría en el futuro el número de tales becas.

ENSEÑANZA FEMENINA

La Autoridad Administradora comunicó que en 1952 había prestado especial atención al problema de la enseñanza femenina, con objeto de aminorar la discrepancia entre el número de niños y niñas que asistían a las escuelas. En 1952, asistieron a las escuelas 35.697 niñas, en comparación con 23.833 en 1951. El progreso fué muy notable en las escuelas públicas; en 1952, 12.439 niñas asistieron a las escuelas públicas de primaria y 340 a las escuelas públicas secundarias y técnicas, en comparación con un total de 6.409 en 1951.

La Autoridad Administradora comunicó que en ese año se fundó en Ebolowa un colegio para formar maestras auxiliares. La Administración quiere quintuplicar el número de alumnas del colegio femenino de Duala y establecer en la Metrópoli uno o dos centros para la educación de mujeres casadas o de mujeres comprometidas para contraer matrimonio.

ENSEÑANZA SUPERIOR

En la actualidad no existe ningún centro de enseñanza superior en el Territorio. Los cameruneses que desean seguir estudios superiores a los de enseñanza secundaria marchan a Francia o Dakar.

En el 11º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó que la Autoridad Administradora hiciera un estudio preliminar sobre la posibilidad de establecer un centro de enseñanza superior en el Territorio tan pronto fuera posible, y pidió que informara con todo detalle sobre esta cuestión en su próximo informe anual.

En respuesta a esta recomendación, la Autoridad Administradora manifestó que se estaba estudiando el asunto. Sin embargo, creía que aun había muy pocas personas con título de bachiller en el Camerún para justificar la creación de una universidad en el Territorio, debido a los gastos que supondría. Durante algún tiempo, convendría continuar concediendo becas a los jóvenes que quisieran cursar estudios superiores.

En 1952, recibieron becas de enseñanza superior 82 estudiantes, en comparación con 52 en 1951. La Autoridad Administradora comunicó que se estaba haciendo todo lo posible para aumentar el número de becas. Luego agregó que se enmendarían los reglamentos que rigen la concesión de becas, de conformidad con una moción aprobada recientemente por la Asamblea Territorial, con objeto de orientar a los becarios en el futuro hacia los estudios especiales que respondieran a las necesidades del Territorio.

La Misión Visitadora de 1952 consideró que hasta que no se estableciera una universidad en el Territorio, la Administración debía aumentar, dentro de las posibilidades financieras, el número de becas para estudiar en Francia, sobre todo para los alumnos de medicina. Durante su permanencia en el Territorio, recibió varias solicitudes en este sentido. Hay que destacar una de la Evolution sociale camerounaise, solicitando que se concedieran becas internacionales a los cameruneses.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo, recordando su recomendación sobre la cuestión de crear un centro de enseñanza superior en el Territorio tan pronto sea posible; tomando nota del aumento de la matrícula de las escuelas de enseñanza

secundaria, recomienda que la Autoridad Administradora examine de nuevo esta cuestión, en particular respecto a la posibilidad de organizar cursos con un número limitado de materias, como primer paso hacia el establecimiento de una universidad en el Territorio.

El Consejo, tomando nota con satisfacción del aumento del número de becas concedidas para estudiar en instituciones de enseñanza superior de la Metrópoli, recomienda que la Autoridad Administradora aumente dentro de lo posible el número de estas becas.

EDUCACIÓN FUNDAMENTAL Y PARA ADULTOS

La Misión Visitadora de 1952 observó que la educación en masa estaba aún poco desarrollada, y propuso que la Administración estudiara la posibilidad de intensificar sus esfuerzos en este sentido. La Autoridad Administradora comunicó que la Dirección de Enseñanza había prestado en 1952 especial atención a los problemas que plantea la educación fundamental y para los adultos, y había establecido un departamento especial para ocuparse de estas cuestiones. Además de los cursos para adultos, a los que asistieron más de 12.000 personas en 1952, la Administración inició una campaña pro educación fundamental, con objeto de ayudar a la población rural a mejorar su nivel de vida dentro de las condiciones locales, mediante la reducción del analfabetismo y la difusión de conocimientos elementales de higiene, agricultura y artes manuales.

La Autoridad Administradora comunicó que los principios y métodos de desarrollo de las comunidades rurales seguidos en esta campaña fueron establecidos mediante los resultados obtenidos de un experimento de orientación realizado en la región meridional del Territorio, en Endingding. Se ha enseñado al personal especializado y se ha reunido material audiovisual adecuado desde el punto de vista psicológico y sociológico para las necesidades peculiares de la zona occidental del Territorio, mientras que simultáneamente se realizaban investigaciones etnológicas preliminares en la región oriental.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la China se sentía impresionado por los esfuerzos de la Autoridad Administradora en el campo de la enseñanza y observaba con satisfacción el acentuado aumento de los créditos del presupuesto y del número de estudiantes y escuelas. Sin embargo, continuaba siendo necesario formar nuevos maestros, a pesar de los progresos logrados en ese sentido. En cuanto a la expansión de la enseñanza en la región septentrional, no dudaba de que la Autoridad Administradora iba haciendo todo lo posible para poner sus planes en práctica.

El representante de Bélgica señaló el notable progreso de la enseñanza. En 1938, el personal docente era de 192 personas; en 1952 ascendía a 977. En 1952 se habían gastado 812.000.000 de francos CFA, pero los resultados no guardaban proporción con los gastos, debido a la ayuda voluntaria de las misiones cristianas. La Misión Visitadora insistió en que era necesario mantener la colaboración con las Misiones y ayudarlas en sus actividades con subsidios.

El representante de Haití tomó nota con satisfacción de que todas las escuelas del Territorio disponían

de los muebles y equipo indispensables. Luego añadió que creía que lo único que podía desearse era que el número de escuelas aumentará con un ritmo satisfactorio. En cuanto al empleo de la lengua vernácula en la enseñanza, pedía a la Autoridad Administradora que incluyera en su próximo informe anual información sobre los medios para pasar del idioma indígena al francés, y las conclusiones a que se hubiere llegado.

El representante de El Salvador observó que había mejorado la asistencia de los alumnos a las escuelas.

El representante de Siria recomendó que la Autoridad Administradora prestara especial atención a la ampliación del programa de formación de maestros. Las medidas adoptadas para estimular las actividades normalistas eran inadecuadas; la educación pedagógica en el Territorio no podía satisfacer por el momento las necesidades más urgentes y, por lo tanto, era preciso aumentar el número de becas para entrar alumnos a las escuelas normales.

El representante de la India calculaba que el número de niños que asistían a las escuelas representaba aproximadamente la décima parte de la población en edad escolar, o quizá menos. Los empresarios, industriales y otras personas de nacionalidad francesa estaban invirtiendo grandes sumas para desarrollar los recursos del territorio y había que reconocer para satisfacción de todos los interesados que una parte de sus utilidades se dedicaba a fines educativos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que el sistema docente del Territorio sólo proporcionaba enseñanza elemental en escala muy limitada. Únicamente el 15% de los niños en edad escolar tenía oportunidad de asistir a las escuelas. Las escuelas particulares cobraban elevados derechos de matrícula. En realidad, la Autoridad Administradora había traspasado su responsabilidad en la esfera de la enseñanza a las misiones religiosas y a otras organizaciones particulares, a pesar de que la población indígena tenía derecho a la enseñanza y la Autoridad Administradora obligación de proporcionársela.

En cuanto a los maestros, el orador sostuvo que su grado de instrucción era extremadamente bajo y que por lo general apenas podía equipararse a la enseñanza secundaria. Las cifras de que se dispone demuestran que el total de maestros había disminuído en lugar de aumentar, como debía haber sucedido. Este estado de cosas impedía que la enseñanza en el Territorio se desarrollase.

El orador agregó que debían incrementarse considerablemente los créditos destinados a la enseñanza, que debía estimularse la formación de maestros calificados y que en general debía reorganizarse el sistema docente para que el número de indígenas que reciben enseñanza secundaria y superior pueda aumentar de un año para otro.

El representante especial de la Autoridad Administradora explicó que el problema de la enseñanza no era sólo una cuestión de fondos y personal, sino también de asistencia a las escuelas. Hace unos años, hubiera sido imposible que la asistencia fuera más nutrida, porque la población que vivía fuera de los centros urbanos no está preparada para ello. Sin embargo, en la actualidad la demanda de enseñanza está aumentando y el país se sacude el letargo respecto a la educación. El orador expresó la esperanza de que este deseo se propague con rapidez a las regiones oriental y septentrional.

Capítulo VI

TOGO BAJO ADMINISTRACION BRITANICA

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

El Territorio del Togo bajo administración británica es una estrecha faja de terreno orientada de norte a sur, de 40 millas de ancho por 320 millas de largo más o menos. Linda al norte y al este con el territorio del Togo bajo administración francesa, y al sur y al oeste con la Costa de Oro, con la cual está administrativamente integrado.

Según cálculos de 1952 la población africana del Territorio era de 410.000, de los cuales 223.000 vivían en la parte sur y 187.000 en la parte norte. En el norte, la población es de origen sudanés en su mayoría en tanto que los del sur son negroides. Los lazos de tribu y culturales tienden a extenderse transversalmente hacia los territorios vecinos y no longitudinalmente de norte a sur.

En el Territorio hay pocos europeos, en su mayoría funcionarios del Gobierno y misioneros.

PROBLEMA DE LA UNIFICACIÓN DEL TOGO

A solicitud de la Asamblea General (resolución 750 (VIII) del 8 de diciembre de 1953) el problema de las reivindicaciones y contrareivindicaciones de los movimientos políticos en los dos territorios del Togo a favor de la posible unificación de ambos territorios es nuevamente objeto de un informe especial del Consejo.³⁴⁶

ADELANTO HACIA EL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDENCIA

En sus resoluciones 558 (VI) y 752 (VII), la Asamblea General, invita a las Autoridades Administradoras a que en sus informes anuales incluyan, entre otros datos, los relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyecte adoptar para conducir a los territorios en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia y un cálculo aproximado del tiempo necesario para hacer efectivas las diversas medidas encaminadas hacia ese objetivo. Además, se pide al Consejo se sirva incluir en sus informes a la Asamblea General una sección separada que trate del cumplimiento de dichas resoluciones.

Esta cuestión se trata en la Parte III del presente informe.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de China señaló con satisfacción que durante el año examinado se había adelantado mucho

en diversos sentidos. Citó algunos casos en que la Autoridad Administradora había aplicado con éxito las recomendaciones formuladas por el Consejo en su 11º período de sesiones y juzgó que el Consejo podía darse por satisfecho en este respecto.

El representante de Nueva Zelandia consideró que todos los miembros del Consejo podían considerarse satisfechos por los adelantos logrados en el Togo en el año examinado, que constituyen una reivindicación de la política colonial ilustrada que refleja la Carta y que ha seguido la Autoridad Administradora en cuestión.

El representante de Haití, al recordar las críticas formuladas en la Cuarta Comisión de la Asamblea General acerca del adelanto del Territorio manifestó, que, aun en el ambiente más sereno del Consejo de Administración Fiduciaria distaba mucho de haber quedado convencido de que el Territorio había adelantado política, económica y socialmente.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideró que la Autoridad Administradora había dado pruebas de negligencia grave, había desatendido la administración del Territorio en fideicomiso y no había desempeñado las funciones y tareas fundamentales que le encargaba el régimen de administración fiduciaria. Por consiguiente, juzgó que el Consejo tenía el deber de instar a la Autoridad Administradora a que revisara su política y cumpliera con las obligaciones que había contraído; y opinó que la Autoridad Administradora debía abandonar sus planes de perpetuar el régimen colonial en el Territorio. Según dicho representante, el Consejo debería invitar a la Autoridad Administradora a adoptar medidas encaminadas a desarrollar progresivamente al Territorio para el gobierno propio y la independencia, como lo requiere la Carta.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

DISPOSICIONES DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL

a) *Situación existente en 1952*

En 1952 se siguió administrando al Territorio con arreglo a la constitución de la Costa de Oro de 1951, y a disposiciones anteriores conforme a las cuales el Territorio comparte todos los servicios centrales de gobierno con la Costa de Oro.

La Constitución de 1951 establece dos órganos de gobierno comunes para la Costa de Oro y para el Territorio en fideicomiso: el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. El primero tiene la misión general de formular la política del Gobierno y la segunda la de legislar para ambos territorios. En ambos órganos los africanos están representados en mayoría. Por su parte, la Autoridad Administradora se reserva poderes ejecutivos y legislativos supremos y la Constitución

³⁴⁶ Que será preparado en el 14º período de sesiones.

contiene una cláusula que dispone la nulidad de toda legislación contraria al Acuerdo de Administración Fiduciaria.

El Consejo Ejecutivo de la Costa de Oro o sea el Gabinete, está compuesto de ocho ministros africanos representativos designados por el Gobernador, previa consulta con el Primer Ministro, entre los miembros de la Asamblea Legislativa y tres ministros *ex-officio* que son altos funcionarios del servicio colonial que tienen las carteras de defensa, de relaciones exteriores, y de hacienda y justicia. El propio Primer Ministro es designado por el Gobernador con la aprobación de la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa está compuesta de un Presidente, tres miembros *ex-officio* (funcionarios del Gobierno) seis miembros "especiales" (que representan intereses comerciales y mineros) y 75 miembros elegidos mediante diferentes formas de sufragio inclusive cinco en elecciones municipales, 33 en elecciones rurales, 18 por representantes "tradicionales", y 19 por un colegio electoral especial para los territorios septentrionales que representan intereses tradicionales y de otro tipo.

El Togo no está representado en esos territorios como una entidad separada pero la parte sur tiene derecho a estar representada por dos miembros rurales y un miembro tradicional en la Asamblea Legislativa, en tanto que la parte norte está representada en el colegio electoral de los territorios septentrionales. De esta manera, seis togoleses fueron elegidos miembros de la Asamblea.

A los efectos administrativos el Territorio en Fideicomiso siguió, con arreglo a la Constitución de 1951, dividido en dos partes, cada una vinculada administrativamente con la zona contigua de la Costa de Oro. La parte septentrional está compuesta de tres distritos administrativos, está integrada con los Territorios septentrionales de la Costa de Oro, es administrada desde Tamale en la Costa de Oro y tiene un consejo consultivo regional. La parte sur, que antes se administraba como un distrito de la colonia de la Costa de Oro fué unida en 1952 a la zona contigua de la Costa de Oro donde se habla el ewe para formar una nueva región del Togo Transvolta. Como observó la Misión Visitadora en 1952, el centro de esta nueva región, situado en el Territorio en Fideicomiso, será el centro de servicios administrativos y técnicos en gran escala; por otra parte, la nueva región no está situada totalmente dentro del territorio del Togo sino que comprende una zona de la Costa de Oro cuya población se calcula en 269.000 habitantes y una zona del Togo del Sur que tiene 222.990 habitantes. El Consejo del Togo del Sur, órgano consultivo y colegio electoral establecido en 1949, ha sido reemplazado por un Consejo del Togo Transvolta que tiene facultades consultivas y está compuesto de miembros elegidos por el distrito y por los consejos locales de la región. Tiene 39 miembros, de los cuales 21 proceden del Togo.

Este estrecho vínculo entre el Togo y la Costa de Oro ha venido formándose desde que se inició la administración del mandato, pues fué entonces cuando se tomaron las primeras medidas en ese sentido. La Autoridad Administradora considera que factores geográficos, económicos y otros, pero bajo ningún concepto el origen tribal común de grandes sectores de población de ambos lados de la frontera, requieren, en el interés de la propia población, así como para su mejor administración, que el Territorio en Fideicomiso sea considerado parte integrante de la Costa de Oro como

el Acuerdo de Administración Fiduciaria lo dispone. Considera además que esos mismos factores, que comprenden diferencias grandes entre la población de la parte septentrional y la de la parte sur del Territorio (iguales a las que hay entre la región norte y sur de la Costa de Oro) contribuyen a hacer imposible que se administre al Togo como una entidad separada dentro de la Costa de Oro y requieren que la parte septentrional del Togo sea administrada junto con los territorios septentrionales de la Costa de Oro y la parte sur del Territorio junto con la parte correspondiente de la Costa de Oro.

En el pasado, el Consejo de Administración Fiduciaria no se ha pronunciado en forma definitiva respecto de los problemas de orden más general que plantea la integración administrativa y constitucional del Territorio en Fideicomiso con la Costa de Oro. Sin embargo, ha formulado recomendaciones sobre diversos aspectos de dicha integración.

En primer lugar, como el grado de integración del Territorio en Fideicomiso dificulta la función fiscalizadora del Consejo, éste, preocupado por dicha situación, ha solicitado de la Autoridad Administradora (la última vez en su 11° período de sesiones) que haga cuanto pueda por separar los datos estadísticos y de otro orden sobre el Togo de los referentes a la Costa de Oro. En respuesta a dicha solicitud, la Autoridad Administradora ha suministrado datos cada vez más precisos, pero en su informe anual de 1952 no considera práctico ni deseable llevar esa distinción a materias en que sea preciso establecer divisiones materiales y puestos de verificación entre la Costa de Oro y el Togo, que restrinjan el libre tránsito de personas y mercaderías a través de la frontera.

En segundo lugar, el Consejo, en su estudio sobre la preparación de las reformas de orden constitucional y político aprobadas en la Costa de Oro que también afectan al Togo, se ha esforzado por asegurar que el Territorio en Fideicomiso esté representado equitativamente en los órganos gubernamentales encargados de dichas reformas y que se reconozcan plenamente sus intereses al adoptarse políticas y planes conjuntos. Tomando nota de las seguridades dadas por la Autoridad Administradora en ese sentido, el Consejo ha tomado nota con satisfacción de las reformas políticas incorporadas en la Constitución de 1951 de la Costa de Oro o adoptadas en esa ocasión por considerar que representan un avance importante hacia la autonomía completa y un medio de obtener una experiencia política más fecunda. Más tarde, se manifestó satisfecho con el funcionamiento de los nuevos órganos ejecutivo y legislativo para los dos territorios integrados, y observó complacido que el grado de sufragio universal concedido a la población en la parte sur del Togo es el mismo que se aplica en la Costa de Oro.

En el caso de la organización regional administrativa de la Costa de Oro y el Togo el Consejo había visto con aprobación el establecimiento del ahora extinto Consejo del Togo del Sur y, cuando se revisó la administración regional, recomendó que la Autoridad Administradora procurara establecer una región que sólo comprendiera al Togo del Sur. Sin embargo, después de que la Autoridad Administradora informó que había decidido que el Territorio de la parte sur era demasiado pequeño para formar una región separada, y que una región más amplia que incluyera los distritos ewes de la Costa de Oro satisfaría los deseos de unidad de la población ewe, el Consejo en su 11° período de sesiones

felicité a la Autoridad Administradora por haber decidido formar la región administrativa y el consejo regional del Togo Transvolta.

En cuanto a los problemas más generales que entraña esa situación, el Consejo tomó nota de la opinión emitida por la Misión Visitadora de 1949 en el sentido de que difícilmente puede estudiarse el futuro político del Territorio en Fideicomiso a menos que sea unido al Togo bajo administración francesa, o a la Costa de Oro, o posiblemente a los dos; y de que la elección entre estas tres posibilidades dependerá en gran parte del hecho de que se efectúe o no algún tipo de unificación de los dos Togos. En su 11° período de sesiones, el Consejo reservó su opinión final acerca del efecto que tendrían en el Togo las disposiciones constitucionales adoptadas en 1951 para la Costa de Oro, hasta que hubiera estudiado el problema de la unificación de los ewes y del Togo. Al mismo tiempo, expresó la opinión de que si bien las disposiciones legislativas actualmente aplicadas al Togo quizás perjudiquen el desarrollo progresivo del Territorio hacia su independencia separada, facilitarán sin embargo el logro de los objetivos previstos en el Artículo 76 de la Carta y podrán acelerar el desarrollo progresivo del Territorio hacia el gobierno propio dentro de los principios generales del futuro político de la Costa de Oro. Además, el Consejo considera que la Autoridad Administradora debería seguir cumpliendo con las obligaciones que le impone el Acuerdo de la Administración Fiduciaria y que, hasta que se hayan determinado los deseos libremente expresados por los pueblos del Territorio acerca de su *status futuro*, en conformidad con el Artículo 76 de la Carta, el funcionamiento de la unión administrativa actual debería ser objeto de constante estudio.

b) *Otros acontecimientos de carácter constitucional y político*

El informe de la Misión Visitadora de 1952, en el que se trata de otros acontecimientos de carácter constitucional y político ocurridos en los territorios y las medidas adoptadas posteriormente por la Asamblea General con respecto al problema de la unificación del Togo, han servido para presentar en forma más detallada al Consejo en su 13° período algunas de las cuestiones más importantes suscitadas por la asociación del Togo a la Costa de Oro.

La Misión Visitadora observó que la Costa de Oro avanzaba más rápidamente hacia el gobierno propio y estaba más adelantada en ese sentido que cualquier otro territorio del África Occidental y que, había llevado al Togo por el mismo camino. Si bien, es cierto que el Gobernador conserva, como representante de la Autoridad Administradora, poderes supremos en cuestiones ejecutivas, administrativas y legislativas, en la práctica gran parte de la autoridad legislativa y administrativa sobre la Costa de Oro y el Territorio en Fideicomiso ha pasado a manos del Gobierno de la Costa de Oro, el cual está compuesto de representantes elegidos por los dos territorios integrados. La Misión consideró razonable esperar que se introdujeran nuevas reformas constitucionales dentro de un plazo relativamente breve, con lo cual la Costa de Oro progresaría más todavía, si no hasta la independencia, al menos hasta el gobierno propio dentro del *Commonwealth* británico de Naciones. De concederse al Togo el mismo grado adicional de gobierno propio concedido a la Costa de Oro, la Misión opinó que la Autoridad Administradora se vería obligada a determinar si la responsabilidad que le confiere el Acuerdo de Administración Fiduciaria puede con-

ciliarse con la autoridad sobre el Togo que delegaría al Gobierno de la Costa de Oro. Mientras el Acuerdo de Administración Fiduciaria conserve su forma actual no podría aplicarse también al Togo una constitución que conceda plena autonomía a la Costa de Oro, porque, como el Gobierno del Reino Unido ya no ejercería control sobre el Gobierno de la Costa de Oro, el Togo ya no podría ser administrado como "parte integrante" de la Costa de Oro y seguir teniendo al Gobierno del Reino Unido como Autoridad Administradora. Como parece que la Costa de Oro acabará por tener su gobierno propio es concebible que dentro de poco el Gobierno del Reino Unido así como las Naciones Unidas deseen dilucidar la situación del Territorio en Fideicomiso.

La Misión también observó que la situación estaba despertando gran interés entre la población en un sentido o en otro. En la región septentrional, los dirigentes de las tribus Mamprusi, Dagomba y Manuella volvieron a pedir, como antes, que se las incorporara a la Costa de Oro. La Misión observó empero que dicho requerimiento parecía responder al deseo de mantener la unidad tribal de sus pueblos con la Costa de Oro y no a la consideración de que dicha integración conduciría a un mayor desarrollo político o de otro tipo; la Misión señaló que la actividad y el pensamiento político en el norte todavía seguían sujetos a las limitaciones impuestas por la fidelidad y el respeto tribales. En sus observaciones sobre el informe de la Misión, la Autoridad Administradora manifestó por el contrario que la población del Norte deseaba la unidad tribal por considerarla como el medio más seguro de lograr el adelanto político, social y económico.

En cuanto al Sur, la Misión señaló que fuertes elementos partidarios de la unificación del Togo, dirigidos por el Congreso del Togo, insistían en que se aclarara la situación del territorio y en que éste obtuviera un *status* separado, porque temían que el proceso de integración del Territorio con la Costa de Oro malograra las posibilidades de unificación de los dos Territorios del Togo. Pero el *Convention Peoples' Party*, principal partido político de la Costa de Oro, actualmente en el poder ha intensificado sus actividades y ha conseguido apoyo en el Togo del Sur. Sus partidarios alegan que el interés primordial de la población es el gobierno propio y que el Togo sólo lograría el gobierno propio dentro del menor plazo posible merced a la Constitución de la Costa de Oro. La Misión observó que si bien este último partido, expresaba simpatía por el movimiento de unificación, como es natural en la práctica estaba interesado en tener más influencia en los órganos del Gobierno territorial y local de la Costa de Oro, y a tal efecto, tendía a considerar al Togo como virtualmente parte integrante de la Costa de Oro. La Misión expresó la esperanza de que este partido, sobre todo por el hecho de estar en el poder, no olvidará que el Territorio en Fideicomiso goza de una situación jurídica internacional separada y especial, con todo lo que ello implica. Cabe recordar que la integración presente del Togo con la Costa de Oro no quiere decir que ésta haya de ser, forzosamente, la relación permanente entre ambos Territorios, y que la Autoridad Administradora ha asegurado a las Naciones Unidas que llegado el momento los habitantes podrán decidir libremente por sí mismos, cuál habrá de ser la naturaleza de dicha relación. En conclusión, la Misión manifestó que la perspectiva de que se produzcan nuevos adelantos constitucionales podrá exigir que se vuelva a estudiar atentamente la situación del Territorio en Fideicomiso, dentro de un plazo relativamente breve.

SUFRAGIO

En 1953 se reformó el régimen electoral y de representación, en que se basa la Asamblea Legislativa de la Costa de Oro—Togo, que utilizaba anteriormente diversos métodos electivos, en un régimen de sufragio secreto y directo que se aplica a ambos Territorios, para la elección de la nueva Asamblea Legislativa de 1954. Las condiciones requeridas de los electores, sin distinción de raza ni de sexo, son sencillamente las siguientes: a) súbdito británico, persona de condición jurídica especial o que está prestando servicios en el regimiento de la Costa de Oro o en la policía; b) mayor de 21 años de edad; c) propietario de bienes inmuebles o con seis meses de residencia en la región; y d) pago del impuesto local, en caso de que tenga que pagarlos.

A principios de 1954 se formularon reglamentos en los que se disponía la preparación de un nuevo padrón electoral y se inició el empadronamiento. Se esperaba que otros reglamentos establecerían un tipo uniforme de voto secreto en ambos Territorios, conforme al cual se asignaría a cada candidato un símbolo de color, mucho antes de las elecciones. Se verificaría la inscripción en el padrón electoral de las personas que desearan participar en las elecciones y, si estuvieran empadronados, se les darían cédulas de voto y pasarían una por una a una casilla donde encontrarían varias urnas selladas con el nombre y el símbolo de color de un candidato. Cada persona pondría entonces su cédula, sin marcarla, en la urna del candidato por ella elegido.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente sobre los hechos que se acaban de relatar:

El Consejo toma nota con satisfacción de la decisión de extender el sufragio directo y universal de adultos a todo el Territorio en fideicomiso, y pide a la Autoridad Administradora que lo mantenga informado en ocasiones apropiadas, de las medidas adoptadas para cumplir esta decisión y del ejercicio del sufragio por los habitantes.

GOBIERNO LOCAL

Las reformas constitucionales de 1951 fueron acompañadas por reformas no menos importantes en la estructura del gobierno local de la Costa de Oro y del Territorio en fideicomiso. Dichas reformas fueron explicadas al Consejo en su noveno y 11° período de sesiones, y éste comentó en términos elogiosos. En suma, se decidió reemplazar las anteriores autoridades indígenas, basadas en la organización tradicional de las tribus, por órganos de gobierno local democráticos y modernos.

Estos órganos de gobierno local, son en el caso del Togo los nuevos consejos locales y los nuevos consejos de distrito. Los consejos locales están compuestos en sus dos terceras partes de miembros elegidos y en la tercera parte restante por miembros tradicionales, los dos primeros tercios son elegidos por votación de todos los residentes adultos en la región correspondiente al consejo. Los consejos de distrito, cuya jurisdicción es más amplia, están compuestos por la misma proporción de miembros electos y tradicionales, unos y otros elegidos entre los miembros de los consejos locales.

A principios de 1952 se efectuaron consultas con la población interesada para que ésta tuviera la oportunidad de dar a conocer su opinión sobre la constitución de cada consejo local y sobre el territorio que éstas debían abarcar. Después, se procedió a la redacción de los instrumentos constitutivos de los consejos, habida

cuenta de las opiniones expresadas. Cuando se terminó esta labor, se prepararon nuevos padrones electorales y se celebraron las elecciones. La Autoridad Administradora comunicó que cada una de esas etapas fué acompañada por toda una campaña publicitaria a fin de que todo el mundo comprendiera los diversos problemas planteados. A fines de 1952, en la parte septentrional, se habían establecido un consejo de distrito y 14 consejos locales con jurisdicción situada íntegramente dentro del Territorio y cuatro consejos de distrito y cuatro consejos locales con sólo parte de su jurisdicción en el Territorio, con lo cual quedó terminada la reorganización del gobierno local en esta parte. En la parte Sur, para julio de 1953, se habían establecido 14 consejos locales del total propuesto de 15 y dos de los tres consejos de distrito propuestos con lo que la Autoridad Administradora pudo informar al Consejo en su 13° período de sesiones que había terminado de organizar la estructura de la autoridad local en todo el Territorio.

En 1952, la Misión Visitadora quedó favorablemente impresionada por los consejos locales que encontró, aunque sólo habían sido establecidos poco antes y no se habían podido apreciar debidamente sus méritos. Sin embargo, los consejos del sur parecían haber alcanzado una mayor madurez política que los del norte. La Misión no encontró oposición alguna entre los miembros electos y los miembros tradicionales en los consejos visitados. Posteriormente la Autoridad Administradora informó al Consejo que el funcionamiento y los recursos fiscales tanto de los consejos locales como los de distrito eran cada vez más satisfactorios.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo toma nota con satisfacción de que en todo el Territorio se ha terminado de establecer una nueva estructura de la administración local; observa en especial que se ha aprovechado eficazmente la tradición y los sentimientos tribales para transformar a las instituciones locales en formas de gobierno más modernas; y reitera su esperanza de que, siempre que sea factible y compatible con los deseos de los pueblos de que se trate, se amplíen progresivamente los poderes de los nuevos órganos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Según la Constitución de 1951, el Gobernador tiene a su cargo la administración pública de la Costa de Oro y del Territorio en fideicomiso, y cuenta para ello con el asesoramiento de la Comisión de Administración Pública. Esta Comisión, que antes estaba compuesta de tres miembros, uno de ellos africano, ahora se compone de cuatro, dos de ellos africanos.

En los últimos períodos de sesiones, una de las preocupaciones del Consejo ha sido asegurar que se facilite a los togoleses la formación profesional necesaria para que puedan ocupar cargos de las categorías superiores en los servicios administrativos y asegurar que un número cada vez mayor de togoleses llegue a ocupar dichos puestos. La "africanización" de la administración pública es un criterio consagrado por el Gobierno de la Costa de Oro y, en 1950, se designó un Comisionado de Africanización, que es africano. El Consejo elogió dicho nombramiento en su noveno período de sesiones.

Ulteriormente, en el Despacho del Secretario Jefe se creó una nueva división de contratación y formación profesional. Bajo las órdenes de un Director, que ha asumido las funciones y los deberes del antiguo Comi-

sionado de Africanización, esta división se encargará de planear el programa de contratación y fijará el criterio con que se ha de ejecutar; se ocupará además del enlace con la Comisión de Administración Pública; de la revisión de las calificaciones para los puestos; del enlace con las instituciones de enseñanza; del programa y el procedimiento de formación profesional; de los planes de formación profesional por departamentos; y de las becas de estudio y de las funciones de enlace con las estudiantes en el exterior. A fin de acelerar la política de africanización, se ha creado un grupo de trabajo sobre africanización que examinará, en consulta con los ministerios y los jefes de departamentos, la situación existente en cada departamento en cuanto respecta a la proporción de africanos en cada categoría y estudiará los medios de aumentar dicha proporción.

A fines de 1952, 653 africanos ocupaban puestos de categoría superior en la administración pública de los cuales 11 (en vez de nueve en 1951) eran ciudadanos del Territorio en Fideicomiso. La Autoridad Administradora reconoció que esta proporción era pequeña, pero confiaba en que en lo futuro dicha proporción mejoraría gracias a la aceleración del programa de enseñanza y a la concesión de becas de estudio, que los ciudadanos del Territorio comparten en condiciones de igualdad con los de la Costa de Oro.

En 1952 la Misión Visitadora observó que el desarrollo del Territorio se ve entorpecido por la falta de personal calificado, y señaló en particular la carencia de funcionarios administrativos en el Territorio. Indicó asimismo que aunque la Autoridad Administradora y el Consejo habían considerado esencial para el desarrollo del Territorio la construcción de buenas carreteras y el abastecimiento de agua, tanto el Departamento de Obras Públicas como el Departamento de Fomento Hidráulico Rural apenas tienen suficiente personal. A este respecto la Misión expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora no escatimara esfuerzos por nombrar más funcionarios administrativos en esos departamentos y por transferirle personal de otros departamentos y servicios existentes en el Territorio. A su juicio, aunque la africanización de la administración pública es en sí una política admirable, no cree que deba permitirse que dicha política entorpezca la contratación de funcionarios en ultramar para el Territorio en fideicomiso mientras se va preparando suficiente personal africano.

La Autoridad Administradora, en sus observaciones sobre el informe de la Misión, reiteró que se estaba preparando a los africanos lo más rápidamente posible para que ocuparan las muchas vacantes existentes y que, entre tanto, la Costa de Oro estaba tratando de conseguir en el mercado mundial los técnicos y los funcionarios profesionales necesarios para aplicar los programas de desarrollo y los planes de formación profesional. Sin embargo, en el caso de los funcionarios administrativos, se había decidido interrumpir la contratación en ultramar, y en el mes de julio de 1953, quedaban por cubrir 60 cargos administrativos en la Costa de Oro. Sin embargo, se está haciendo todo lo posible por mantener los efectivos de la plantilla de funcionarios administrativos en el Territorio en fideicomiso. Desde 1951 se habían nombrado tres más, lo que da un total de ocho (dos en el norte y seis en el sur, además de seis funcionarios ejecutivos de categoría superior) y se ha inaugurado un nuevo centro administrativo. Se espera que la contratación local de funcionarios administrativos mejore en el porvenir inmediato, nombrando directamente a estudiantes recién

graduados del Colegio Universitario de la Costa de Oro y mediante oposiciones limitadas entre los funcionarios ejecutivos de la administración pública. A principios de 1954, los titulares de cargos administrativos en el Togo habían aumentado hasta llegar a nueve, de los cuales cuatro eran africanos. La Autoridad Administradora informó que, en general, el número de empleados públicos ha aumentado mucho en el Territorio desde 1952, debido a los nuevos puestos creados en los Departamentos de Obras Públicas, Abastecimiento de Aguas, Higiene e Instrucción Pública, Bienestar Social y en otros. Sigue aumentando el número de funcionarios y la proporción de africanos en puestos superiores pero los togoleses todavía no se presentan en número suficiente para ocupar una proporción equitativa de las vacantes.

Como resultado del nuevo régimen de gobierno local se planteó un problema urgente: la formación de un cuerpo de funcionarios eficientes de categoría superior para prestar servicios en los nuevos consejos y en 1951, se inauguró en Accra una escuela local de formación profesional en administración pública. El Consejo, en su 11º período de sesiones, consideró acertada la creación de esta escuela. En 1952, la Misión Visitadora visitó la escuela y quedó bien impresionada por su obra. En aquel entonces, había 26 estudiantes internos, y se daban cursos de 12 semanas. Se tenía pensado duplicar su capacidad, pero fué imposible hacerlo por falta de personal docente. Cuatro estudiantes del Territorio en fideicomiso ya salieron aprobados de la escuela en tanto que otros cuatro están todavía cursando estudios en ella. La Misión expresó la esperanza de que en lo futuro estudiaran en esa escuela más estudiantes del Territorio en fideicomiso. En 1953, 17 togoleses aprobaron los cursos, y así así todos los consejos locales del Territorio tuvieron por lo menos un empleado capacitado. Un oficinista de la autoridad local obtuvo una beca de estudios para perfeccionar sus conocimientos en Inglaterra. En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, habiendo anteriormente acogido con agrado la creación en Ho, en el Togo meridional, de una organización administrativa regional, expresa la esperanza de que en lo posible la Autoridad Administradora distribuirá los puestos en los departamentos del gobierno entre personas de las diferentes regiones, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, la conveniencia de que los habitantes del Territorio en fideicomiso se relacionen más íntimamente con los servicios esenciales del gobierno, y obtengan de ellos el mayor provecho posible, lo cual les animaría a apoyar dichos servicios y alentaría a los togoleses a prepararse para ocupar cargos administrativos y otros puestos en la administración pública.

RÉGIMEN JUDICIAL

El Togo comparte con la Costa de Oro un sistema judicial doble que consiste en la Corte Suprema de la Costa de Oro y en juzgados de paz, que administran justicia conforme a las leyes inglesas y, por otra parte en los tribunales indígenas, que administran justicia conforme a las leyes y costumbres indígenas.

Los funcionarios administrativos participan en el sistema judicial, o tienen jurisdicción como magistrados en la parte septentrional del Territorio y en la zona de Krachi de la parte meridional y tienen también autoridad para revisar fallos de los tribunales indígenas. Un magistrado de distrito, cuyo nombramiento fué

elogiado por el Consejo en su séptimo período de sesiones, continuó ejerciendo sus funciones en el Togo meridional en 1953.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria hechas a título personal únicamente

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL

El representante de China comprobó con satisfacción la conclusión rápida del programa de organización constitucional y la creación del Consejo de la región del Togo Transvolta. Sin embargo, se reservó su opinión acerca de la integración del Territorio con la Costa de Oro.

El representante de los Estados Unidos de América opinó que las próximas elecciones que iban a celebrarse en la Costa de Oro y en el Togo ejercerían una considerable influencia en el progreso de la libre determinación en toda África. Dentro de uno o dos años la Costa de Oro sería completamente libre; lo importante, lo que debía de llenar de satisfacción a todos los Estados Miembros libres de las Naciones Unidas, era que las futuras elecciones proporcionarían a los votantes la libertad de elegir. Los votantes del Territorio en fideicomiso podrían votar entonces por la unión del Territorio de la Costa de Oro o por su unión con el Togo bajo administración francesa, aunque de momento su decisión tendría meramente carácter consultivo. Esto constituía una demostración práctica de ejercicio de la libre determinación en África, lo cual merecía un apoyo entusiasta. El vehemente anhelo de alcanzar el gobierno propio era la fuerza política más poderosa de la época; y lo esencial de ese anhelo no consistía en lo que había de elegirse, sino en el ejercicio del derecho a elegir. La decisión de la Autoridad Administradora de implantar en el Togo el derecho universal de sufragio para los adultos y facultar así a los habitantes para que participaran en una elección en que manifestasen sus opiniones sobre la futura situación jurídica de su Territorio, ponía de manifiesto una capacidad de gobierno de primer orden y concordaba con los principios básicos del régimen de administración fiduciaria.

El representante de Australia consideró prematuro analizar las nuevas reformas constitucionales propuestas para la Costa de Oro y el Territorio en fideicomiso, puesto que aun estaban en consideración, pero consideró que el Consejo podría tomar nota de los notables cambios que ya habían pasado de la etapa preparatoria. Habían consistido, primero, en la decisión de dividir la Costa de Oro y el Togo en 104 distritos electorales, sistema que permitiría elegir en mayor número que hasta ahora a miembros de la Legislatura pertenecientes a distritos electorales que se encontraban íntegramente en el Territorio, y segundo, en la decisión de establecer el Consejo del Togo Transvolta, que era ahora una organización floreciente.

El representante de Nueva Zelandia se manifestó satisfecho de los progresos políticos ya alcanzados y de las propuestas de otras reformas constitucionales. El Togo tendrá oportunidad, si así lo decide, de aceptar la unión con la Costa de Oro y de convertirse, por consiguiente, en uno de los primeros territorios en fideicomiso que alcance el gobierno propio. Su delegación confía en que ningún miembro de las Naciones Unidas se lamenta si el resultado de la manifestación de la voluntad popular tiene por consecuencia substraer a dicho Territorio del régimen de administración fidu-

ciaria y, por lo tanto, de la esfera de acción inmediata de las Naciones Unidas. El Territorio en fideicomiso se había beneficiado considerablemente mediante su participación en los ingresos y servicios de gobierno de la Costa de Oro y de las relaciones culturales, lingüísticas y étnicas que su pueblo había mantenido con la Costa de Oro. Por lo tanto, la lógica y la realidad por igual indicaban la continuidad de la asociación con la Costa de Oro. Si se reparaba en las recomendaciones previas del Consejo sobre la materia, resultaría contradictorio y falso que el Consejo sugiriera ahora que el Territorio en fideicomiso no acompañara a la Costa de Oro en las últimas etapas hacia el gobierno propio.

El representante de Siria señaló, en primer lugar, que el problema de la unificación del Togo, que debía tratarse por separado, estaba, no obstante, estrechamente relacionado con todas las cuestiones fundamentales del progreso político en cada uno de los Togos. Además, se planteaba urgentemente la cuestión de determinar si el Togo no había de ser simplemente "administrado como parte integral", sino si había de convertirse, en realidad, en parte integral de la Costa de Oro, colonia que se acercaba rápidamente a una forma más completa de gobierno propio. ¿Era posible que el Togo fuera administrado conforme al texto del Acuerdo de Administración Fiduciaria si, al mismo tiempo, los poderes de la Autoridad Administradora se transferían en su mayoría a un gobierno representativo de la Costa de Oro? ¿Acaso era la voluntad libremente expresada del Togo, además, que se le anexara así a la Costa de Oro? Será menester responder a estas preguntas antes de que las Naciones Unidas den su fallo definitivo respecto a la orientación del desarrollo político en cualquiera de los dos Togos. El Consejo podría haber tenido la satisfacción de ver que el destino del pequeño territorio del Togo bajo administración británica se decidía mediante una estrecha asociación con la Costa de Oro, cuyo pueblo podía sentirse orgulloso y contento de seguir a su distinguido Primer Ministro por el camino de la independencia. Esta sería la solución si no hubiera dudas de que ésta era la voluntad libremente expresada de la mayoría del Territorio en fideicomiso; de que su única elección fuera entre un tipo colonial de gobierno y una forma de gobierno propio o independencia; si no hubiera la posibilidad de que un Togo unificado y con gobierno propio ejerciera igual atracción en ese pueblo; y si no fuera necesario tener en cuenta los intereses y el porvenir del Togo bajo administración francesa. Hizo entonces una comparación y un contraste entre la suerte del pueblo del Togo bajo administración británica y la del pueblo del Camerún bajo administración británica y opinó que la distinción fundamental tal vez consistiera en que en la Costa de Oro, a diferencia de Nigeria, los partidos políticos deseaban que el Togo formara parte de un estado unitario, aspiración que probablemente se opondría a cualquier aspiración que pudieran tener los partidos políticos del Togo sobre cualquier otra forma de identidad legislativa y ejecutiva separada, pensando en la unificación del Togo.

El quid de la cuestión parecía consistir en que el Consejo aun no conocía suficientemente las verdaderas aspiraciones de la mayoría de los habitantes de los dos Togos. Como parecía haberse malogrado la acción de las Naciones Unidas para determinar los medios

para poder expresar clara y libremente su voluntad, los dirigentes políticos de la Costa de Oro, naturalmente, anhelaban ahora resolver el problema del Togo bajo administración británica de manera que no se frustrara su esperanza de alcanzar pronto la independencia. Los acontecimientos indicaban que la estrategia expuesta en el "documento secreto" se desenvolvía conforme a un plan o que, de lo contrario, habían ocurrido una serie de notables coincidencias: por ejemplo, las actividades cada vez más intensas del Gold Coast Government Party del Togo, la presentación de peticiones en las que se solicitaba la unificación, y la llegada de peticionarios que apoyaban esta unificación y solicitaban la asignación de grandes fondos para desarrollo. El representante preguntó si las próximas elecciones generales de la Costa de Oro y del Togo podían considerarse justificadamente como una especie de referéndum mediante el cual se decidía el destino del Togo. Por parte de la Costa de Oro en las elecciones lucharía un partido político bien organizado y con experiencia que obtenía su verdadera fuerza y recursos de la Costa de Oro. Además, el partido del gobierno podía sostener, a los fines de la campaña política, que todo el progreso del Togo se debía a su actividad. Por lo que al Togo se refería, se preguntó si los partidos locales, en comparación con aquel otro, no eran más que organizaciones de aficionados. Además, la mayor parte de las personas inscritas en el padrón electoral eran campesinos analfabetos y sin experiencia en las campañas políticas modernas, que no contaban con órganos representativos ni con asambleas, donde estos problemas pudieran debatirse con inteligencia y autoridad. En el caso del Togo septentrional, se preguntó si teniendo en cuenta las observaciones de la Misión Visitadora sobre el estado de la opinión pública, era posible aceptar sin ciertas reservas la afirmación del Gobierno de la Costa de Oro de que era una "petición unánime de los habitantes" más que una solicitud de los jefes, la que pedía que aquella región llegara a ser parte de los territorios septentrionales de la Costa de Oro. Además, como parecía que el Primer Ministro había asegurado a los jefes de la parte septentrional que el Gobierno de la Costa de Oro los secundaba en su demanda se preguntó si los jefes habían insistido en que el problema del Togo se resolviera de esta manera como una especie de *quid pro quo* por el apoyo que ellos prestaban a la idea de crear un estado unitario que comprendiera al conjunto de la Costa de Oro y si se había cerrado para siempre la puerta a la posible libertad de los propios pueblos para decidir por sí mismos, sin reparar en si su decisión confirmaba o no la opinión de los jefes. Tal vez sería mejor que el Consejo esperara hasta que se efectuase algún progreso en lo que se refiere a la idea de proporcionar a los pueblos de ambos Togos un órgano apropiado y libre de expresión de sus aspiraciones por medio del Consejo Mixto para los Asuntos del Togo; en segundo lugar, pedir a las Autoridades Administradoras de los Togos que presentaran lo antes posible, antes del próximo período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, un informe completo sobre la creación y funcionamiento del Consejo Mixto, detalles y un análisis de los resultados de las próximas elecciones en la Costa de Oro y datos sobre cualquier otra evolución de la situación política de los dos Togos; y, en tercer lugar, pedir a un subcomité especial o al Comité Permanente de Uniones Administrativas, que efectuase un estudio

preliminar de toda la información pertinente y que informara en el próximo período de sesiones del Consejo.

El representante de Haití señaló que hasta el momento no se había designado a ningún indígena del Togo como ministro del principal órgano político, o sea, el Consejo Ejecutivo. De los 84 miembros que componían la Asamblea Legislativa sólo había cinco originarios del Togo. La Misión Visitadora había comprobado, en general, que aún no se había formado una opinión política y según la propia Autoridad Administradora la opinión pública del Territorio aún no estaba suficientemente preparada para determinar cuál había de ser el futuro del Territorio. Consideró, además, que el atraso del Territorio se debía a que desde el principio se había carecido de planes para el desarrollo racional de los recursos del Territorio como entidad propia. La actual política tenía su origen directo en la división del Territorio, después de la segunda guerra mundial, entre gobiernos en quienes influía el propósito inmediato de mantener sus zonas de influencia en África. En lo que se refiere exclusivamente al Togo bajo la administración británica, aquella política había impuesto la enmienda de la unificación con la Costa de Oro y había mantenido el problema fundamental: a saber, si se unieran el Togo bajo la administración británica y el Togo bajo administración francesa ¿dispondrían de recursos suficientes para convertirse en un Estado libre e independiente? El Consejo de Administración Fiduciaria debería exigir garantías que, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes, les aseguraran el derecho a decidir su propio destino en el momento oportuno. Por ahora se encontraban en grave desventaja.

El representante de El Salvador señaló que en la sección meridional del Camerún bajo administración británica la integración ya había sufrido un relajamiento y que, en cambio, en el Togo el proceso se efectuaba en un sentido completamente adverso y la integración había llegado a tal grado que aun en 1952, la Misión Visitadora decía que abarcaba todos los aspectos de la administración del Territorio en la forma más absoluta. Si la finalidad que se hubiera encomendado a la Autoridad Administradora hubiera sido la de que este Territorio se convirtiera definitivamente en parte integrante de la Costa de Oro y que esto estuviera de acuerdo con los objetivos de la Carta, la Autoridad Administradora estaría cumpliendo su misión a toda perfección. Pero si los objetivos que le habían sido encomendados no eran otros que los que específicamente determinaba la Carta, es decir el gobierno propio y la independencia, la cuestión cambiaba de aspecto. Su delegación había creído que la política del Convention People's Party consistía en obtener una mayor asociación entre la Costa de Oro y el Territorio lo antes posible y sobre la base actual, y para el futuro una federación de la que habrían de surgir dos estados autónomos. Si esto hubiera sido así podría pensarse que una situación de esa naturaleza podría menos comprenderse dentro de un concepto de autonomía; pero de algunas contestaciones del representante especial se deducía que la Costa de Oro jamás había deseado nada semejante a una constitución federal. Había sido siempre el entendido del pueblo de la Costa de Oro que si el pueblo de Togo deseaba continuar su asociación con él, ésta debía ser a base de un Estado unitario. Además, el representante especial dijo que era el deseo de todas las organizaciones del Togo —y entre estas organizaciones estaba

comprendida la filial del *Convention People's Party*—que el Togo bajo administración británica “llegara a ser parte de una Costa de Oro con gobierno propio”. El representante de El Salvador manifestó que no se referiría a la cuestión de saber hasta qué punto un partido que era el dominante en un gobierno en el cual la Autoridad Administradora había investido la mayor parte de su obligación respecto al Territorio, tenía derecho a desarrollar actividades tendientes a lo que parecía ser una anexión. Su delegación tenía bastantes dudas de que las futuras elecciones pudieran considerarse como un referéndum inequívoco de la voluntad del Territorio en cuanto a futura situación política. La Autoridad Administradora tenía la obligación de asegurar que cuando llegase el momento de decidir el destino del Territorio, todos los togoleses deberían expresar su voluntad en condiciones idénticas.

Recordó al Consejo lo que ya había dicho la Misión Visitadora, es decir que el *Convention People's Party*, particularmente por su posición en el gobierno, no debería perder de vista el separado y especial *status* del territorio en fideicomiso y todo lo que este *status* implicaba: La Misión Visitadora asimismo había manifestado que el Consejo de Administración Fiduciaria, al estudiar las relaciones entre el Territorio y la Costa de Oro, debería tener siempre en cuenta la cuestión de la unificación de ambos Togos. Su delegación creía, en definitiva, que el destino del Territorio no podía ser otro que el que determinaba la Carta, es decir, su gobierno propio y la independencia; la forma en que lo obtuviera, es decir, en relación con la Costa de Oro o como un Estado unido al Togo bajo administración francesa, es algo que sólo los propios habitantes podían decidir. Lo importante era que cualquiera que fuese la situación ésta debía ser el resultado de la expresión genuina de la voluntad de los togoleses. Con respecto a las nuevas reformas constitucionales, manifestó que aunque a primera vista parecería que el Togo bajo administración británica tendría una representación mayor en la Asamblea Legislativa, una simple operación aritmética demostraría que la proporción de esa representación casi no había aumentado. Esto no implicaba una crítica; desde el punto de vista de la integración de ambos Territorios, era posible que la nueva constitución constituyera un adelanto, pero si se consideraba que la integración no era la única alternativa, habría que considerar que esta representación aun no era suficiente para asegurar la verdadera representación del Territorio ni para permitir que suficientes togoleses pudieran prepararse para su misión futura.

El representante de la India señaló que en el caso de los demás territorios en fideicomiso el Consejo trataba teórica y prácticamente con la Administración por parte de los países metropolitanos pero que, en cambio, en el caso del Togo bajo administración británica, por mucho que la teoría constitucional siguiera siendo la misma, la administración cotidiana efectiva se encontraba en manos de un gobierno africano en su mayor parte elegido en común por los habitantes del Territorio en fideicomiso y de la Costa de Oro. Debido a ello su delegación se encontraba en una situación bastante desagradable pues el gobierno responsable sólo estaba parcialmente representado en el Consejo. Al formular apreciaciones sobre el Territorio, el Consejo debía tener sumo cuidado en reparar que trataba de las funciones, adelantos y aspiraciones de un grupo de personas que guiaban a su país hacia el

gobierno propio y que tenían que considerar problemas muy grandes.

El representante declaró que su delegación tenía un espíritu de comprensión con respecto a la cuestión del futuro del Togo. El verdadero problema era el de la libre determinación y el del gobierno propio del pueblo. El Togo no era una vieja nacionalidad; sus límites eran límites europeos, es decir, respondían a las vicisitudes históricas de los últimos treinta o cuarenta años. Estos antecedentes históricos y geográficos no eran más importantes que la conciencia tribal y otros factores reales de cohesión. El problema consistía en saber si el Territorio en fideicomiso, por razones étnicas, sociológicas y de otra índole, así como en virtud de su historia de los últimos treinta o cuarenta años y, en particular, de los últimos cinco o seis años y también a causa de la imposibilidad de seguir existiendo en la forma actual debía formar parte de una dependencia principal que se administraría desde Londres en caso de que la Costa de Oro obtuviera su independencia. Además había que considerar si era posible y razonable que continuara fragmentado en una estructura en que, por otra parte, el Territorio bajo administración francesa estaba política y socialmente más atrasado y en que la tradición de los territorios coloniales que marchaban hacia la independencia no era tan demostrable como en los otros casos. Su delegación tenía la más alta consideración por el jefe del actual gobierno y, en general, por la Administración. Habían recorrido un largo camino hacia la obtención de su independencia nacional y su delegación no deseaba sugerir que harían caso omiso de las consideraciones favorables a la libre determinación. Tomaba nota del homenaje que la Misión Visitadora rindió en 1952 a la libertad de expresión que existía en el Togo. Había varios partidos y, entre ellos, el *Convention People's Party*, que abogaban francamente por la unificación (con la Costa de Oro). Existía además el *Togoland Congress*, que defendía cierto tipo de unidad con el Territorio en fideicomiso bajo administración francesa. No había ningún indicio práctico de que esto llegara a ocurrir alguna vez. Consideró que sería interesante comparar los progresos alcanzados por el Territorio en lo que se refiere a gobierno local, educación, sanidad, instalaciones de abastecimiento de agua y todo lo demás, en el período comprendido de 1919 a 1946 y en el transcurrido entre 1946 y 1954. Se preguntó si esa grata disparidad no guardaba cierta relación con el hecho de que en la Costa de Oro habían evolucionado en diversos grados varias formas de gobierno propio. El grado de progreso en todos estos órdenes se había realizado junto con el vecino territorio de la Costa de Oro y como parte de su administración. Toda la cuestión de la unificación tenía que examinarse conforme a estos antecedentes. Era de lamentar que no hubiera más habitantes del Territorio en fideicomiso en los órganos ejecutivo y legislativo de la Costa de Oro, pero su delegación también había tomado en cuenta la actitud del pueblo de la Costa de Oro. Si había de constituirse un solo gobierno, cualquier desproporción de las representaciones de uno u otro territorio sería igualmente criticada. Era una situación que probablemente podía rectificarse. Pero era verdad que administrativa y políticamente no había sido posible mantener separados a los dos Territorios. Además, los aspectos económicos del Territorio y su existencia como país que se encaminaba hacia las condiciones modernas de existencia sólo habían sido posibles en virtud de las condiciones y an-

tedentes de viabilidad; finalmente, no debía adoptarse medida alguna que aumentara la fragmentación de los pueblos de la África Occidental.

En lo que a las futuras elecciones se refería, el representante opinó que el Convention People's Party se atendería a las normas de los partidos políticos modernos, puesto que se desenvolvía dentro de la estructura de un régimen parlamentario. La Autoridad Administradora había asumido una responsabilidad durante las elecciones al manifestar que serían libres.

La interpretación del problema por parte del Consejo tenía que ser prudente y pragmática y estar dictada por los intereses del pueblo. Los habitantes de la Costa de Oro estaban decididos a alcanzar su independencia; pero no tenían prueba alguna de que el primer ministro de la Costa de Oro y su partido político hubieran dicho: "Uniremos a los Togos quiéranlo o no". El primer ministro había dicho: "Si quieren unirse a nosotros, sùmense de una vez por todas. No pueden estar dentro y fuera al mismo tiempo". Eso era acertado y justo. Estos territorios quieren su unidad para poder sobrevivir. Era fácil comprender el deseo de la Costa de Oro de constituir un solo Estado. Era una cuestión de organización constitucional; era evidente, considerando el aspecto jurídico del Acuerdo de la Administración Fiduciaria, que si se adoptase esa medida, debía aplicarse con el consentimiento del pueblo y con las modificaciones al Acuerdo de Administración Fiduciaria indispensables para la necesaria transferencia de poderes. El representante añadió que hasta ahora su delegación había considerado favorablemente la idea de la unificación de los Togos, porque contaba naturalmente con la simpatía de la gente, pero que después había examinado muy cuidadosamente esta cuestión. La idea se había visto perjudicada porque tuvo que ser inevitablemente presentada por conducto de la Autoridad Administradora y no por medio de instituciones de gobierno propio de la Costa de Oro. Por lo tanto, aquéllos a quienes podría calificarse de integrantes del núcleo anticolonial posiblemente habían tenido que considerarla como parte de los designios o anhelos del país metropolitano. Su delegación aspiraba ahora a que el problema se planteara de manera bien franca y deseaba se considerasen principalmente los intereses y las aspiraciones de los habitantes del Territorio en fideicomiso.

El representante de Bélgica convino con el representante de la India en que la cuestión de la unificación del Togo y su anexión a la Costa de Oro era mucho más complicada de lo que parecía a primera vista. Cuando se habló por primera vez de la unificación, las Potencias no administradoras revelaron por ella un entusiasmo comprensible, pero después de examinar el problema más de cerca, éste no resultaba tan simple, cosa que siempre había sostenido. Opinó que todos los miembros convendrían en regirse por la suprema consideración de los intereses y la voluntad de los habitantes interesados en la cuestión.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la Autoridad Administradora, violando la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Administración Fiduciaria, había anexado la parte meridional del Togo a la Colonia de la Costa de Oro y la parte septentrional a los territorios septentrionales. El Territorio en fideicomiso no sólo había sido anexado a la Costa de Oro sino que también había sido subordinado a ésta y carecía de órganos propios de gobierno. El gobernador de la Costa

de Oro continuaba teniendo poderes legislativos, administrativos y judiciales supremos sobre el Territorio. Según el Togoland Congress, uno de los partidos políticos más importantes del Territorio, la autoridad administradora carecía de planes para el desarrollo por separado del Territorio y las relaciones políticas y la unión administrativa del Territorio con la Costa de Oro se proponían privar al Togo de su *status* como territorio en fideicomiso. Ese partido también había manifestado que en la práctica el Togo no era sino una parte inseparable de la Costa de Oro, puesto que no tenía un solo órgano legislativo, administrativo o judicial y al disolverse el Consejo del Togo meridional y al formarse el Consejo del Togo Transvolta, en el que también ocupaban posiciones representantes de la Costa de Oro, se había privado al Territorio de su última institución independiente. Esta subyugación del Territorio a la Costa de Oro había tenido las más perjudiciales consecuencias en el progreso político, económico, social y cultural del Territorio y había malogrado la evolución hacia el gobierno propio o la independencia. En vez de tener en cuenta la situación especial del Territorio en fideicomiso, la Autoridad Administradora había confiado el gobierno de aquél a la administración colonial de la Costa de Oro, que consideró al Togo sencillamente como un fragmento de tierra colindante con la Costa de Oro. Por eso los principales partidos políticos y los representantes de tribus—por ejemplo, el Togoland Congress, la All-Ewe Conference y los representantes de las tribus konkomba, nawuri y otras—se habían opuesto a la unificación del Territorio con la Costa de Oro y habían aunado sus esfuerzos para procurar el desarrollo del Togo como unidad territorial independiente y separada. Eran partidarios de la unificación del Territorio con el Togo bajo administración francesa. Estas eran las legítimas aspiraciones de los habitantes del Togo y contaban con el apoyo de su delegación, que consideraba que el Consejo debía adoptar medidas para asegurar el desarrollo independiente del Territorio en fideicomiso para que alcanzara el gobierno propio y la independencia. El método adecuado para el desarrollo del Territorio en fideicomiso consistía en crear en el Territorio órganos legislativos, ejecutivos y judiciales verdaderamente representativos de los habitantes indígenas y que no estuvieran subordinados a ningún órgano de la Costa de Oro.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que en los últimos años la gran mayoría de la población del Territorio había llegado a comprender que su destino estaba ahora casi enteramente en sus propias manos y que podía decidirse local y regionalmente y en el Territorio en general, mediante instituciones democráticas compuestas de representantes elegidos por los habitantes. Esta situación satisfactoria se debía a la asociación del Territorio con la Costa de Oro; pero deseaba poner en claro que los dirigentes de la Costa de Oro compartían la opinión de la Autoridad Administradora de que el destino definitivo del Territorio en fideicomiso no sufría detrimento alguno por su actual asociación con la Costa de Oro y la voluntad de la Autoridad Administradora de que el futuro del Territorio se decidiera conforme a las opiniones de los habitantes libremente expresadas. Las futuras elecciones generales no podían considerarse como la norma definitiva en que había de fundarse el futuro del Togo bajo administración británica; no comprometerían irrevocablemente a la Autoridad Administradora, al Gobierno ni a los habitantes

del Territorio mismo a aceptar determinada solución del problema; el representante especial, considerando que se había sugerido que la Autoridad Administradora debía ser el árbitro de una contienda política tan falta de equidad que no debiera continuarse, señaló que aunque el *Convention People's Party* era indudablemente el que disponía de mayores recursos, tendría que emplearlos en por lo menos 104 distritos electorales de la Costa de Oro y del Territorio donde se realizarían simultáneamente las elecciones. Por el contrario, los partidarios de la unificación del Togo probablemente limitarían sus actividades electorales a unos seis distritos electorales del Territorio, lo cual significaba que en aquellos seis distritos electorales era posible que hubiera dos partidos de recursos bastante semejantes, puesto que se había enterado de que los partidarios de la unificación habían adquirido cuatro vehículos con altavoces y confiaban en comprar dos más. Añadió que la consecuencia lógica de cualesquiera dudas respecto a la capacidad y progreso de los habitantes del Togo para adoptar una decisión que influyera en su futuro sería la de poner en duda si la Administración había obrado correctamente al conceder el derecho del sufragio a los habitantes del Togo.

Al referirse a las dudas planteadas sobre el carácter representativo de las opiniones expuestas en el Togo septentrional, dijo que el representante de los dagombas, que hablaría ante el Consejo, no había llegado con un mandato de los jefes, sino de los consejos locales del Togo septentrional, dos terceras partes de cuyos miembros habían sido elegidos por voto popular. El representante de El Salvador, que había presenciado reuniones de estos consejos, se había manifestado muy satisfecho del conocimiento demostrado por estos consejeros acerca de las necesidades de los habitantes por quienes habían sido elegidos y de la forma en que esos consejeros se preocupaban de los intereses de los habitantes; si se reconociera que había unanimidad sobre el asunto en la parte septentrional del Territorio podía darse por seguro que la Administración no dejaría de tomar nota y de trazar sus planes tomándolo en cuenta.

En respuesta a otro punto planteado, el representante especial explicó que el gobernador de la Costa de Oro no ejercía función judicial alguna, excepto el ejercicio del poder real de indulto en los casos de pena de muerte.

SUFRAGIO

El representante de Nueva Zelandia consideró que el Consejo debía recibir favorablemente la propuesta reorganización del padrón electoral y el mejoramiento de los procedimientos de elección. Con esta medida se colocaría al Territorio en fideicomiso, en cuanto a las finalidades electorales, al mismo nivel de los países más democráticos.

GOBIERNO LOCAL

El representante de China observó con satisfacción que la Administración estaba dispuesta a efectuar encuestas periódicas acerca de la forma en que se desenvolvían los consejos locales con objeto de determinar la posibilidad de ampliar sus poderes. Su delegación aguardará con interés la información que resulte de dichas encuestas. Expresó la esperanza de que se ampliaran rápidamente los poderes de los consejos locales de conformidad con la recomendación que formulara el Consejo en su 11º período de sesiones.

El representante de Nueva Zelandia juzgó que el rápido desarrollo del gobierno local en el Territorio era digno de atención. Las múltiples tareas de las unidades de gobierno local y su obligación de recaudar y emplear los fondos públicos, aseguraría el establecimiento con éxito de estos órganos y proporcionaría también localmente el medio de alcanzar la educación necesaria para el arte del gobierno propio.

El representante de Haití opinó que los consejos locales creados por la ordenanza de 1951 sólo se encargaban todavía de las funciones desempeñadas previamente por las autoridades indígenas. La experiencia de estos consejos era tan limitada que sus atribuciones sólo deberían ampliarse poco a poco, después de estudiar cada caso particular.

El representante de El Salvador expresó su satisfacción por el hecho de que ya se hubieran establecido todos los consejos locales y de que funcionaran con éxito. Personalmente observó que los miembros de estos consejos no sólo tenían un conocimiento a fondo de la situación de cada una de las localidades, sino que estaban también animados de la mejor buena voluntad y del mejor deseo de trabajar por sus respectivas localidades.

El representante de Francia expresó particular interés en las medidas adoptadas para modificar y completar la estructura de la administración local, a la cual su delegación atribuía particular importancia pues, en efecto, era una escuela fundamental de educación política. Si en las aldeas y distritos no se preparaban ciudadanos responsables que conocieran la administración y su organización y que estuvieran en condiciones de examinar los asuntos municipales o regionales, los órganos superiores privados de su ayuda y librados a su propia suerte podrían caer en la tentación de establecerse como únicos jueces de los intereses del país.

El representante de la India opinó que el progreso de la administración local era el más importante en sus cuestiones administrativas y políticas. Juzgó que el fenómeno de las instituciones y costumbres tribales de los habitantes no constituía un obstáculo al gobierno propio y que así debían regirse las comunidades no europeas y las antiguas comunidades como las de Asia y Africa. Ya se había intentado aplicar el espíritu, el sentimiento y la organización tribales para desarrollar instituciones de gobierno local. El régimen tribal se había adaptado a las nuevas condiciones y a consecuencia de ello había sido cada vez mayor el número de representantes que pasaron a primer plano sin ser ya jefes tradicionales solamente, sino personas elegidas. El progreso realizado en esta esfera era motivo de gran satisfacción.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la llamada reforma de la estructura del gobierno local en realidad no había modificado el régimen previo. Los nuevos consejos locales y las autoridades indígenas se basaban todas en la organización tribal de los jefes y ancianos. Una tercera parte de los cargos de los consejos locales estaban reservados a las autoridades tribales y un jefe presidía invariablemente el consejo. De esta manera, en vez de una reforma democrática había ocurrido exactamente lo contrario y aún predominaba el régimen tribal antidemocrático. Los miembros tradicionales tenían invariablemente más influencia que los miembros elegidos por la población. Era esencial que la Autoridad Administradora adoptara medidas efectivas que

asegurasen una transición del atrasado régimen tribal a un sistema de gobierno propio sobre una base democrática.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que en lo que se refería al aumento de poderes de las autoridades locales que se había sugerido, los ministros del gabinete de la Costa de Oro, en efecto, deseaban persuadir a aquellas de que asumieran una serie de obligaciones actualmente encargadas a la Administración. Pero señaló que, por otra parte, en el Consejo se habían expresado grandes dudas sobre el acierto de la Administración al transferir a las autoridades locales una parte tan considerable de las obligaciones propias de la educación elemental. Estos y otros problemas a los que se había hecho referencia eran todos interdependientes y podían tener varias soluciones; la elección del mejor rumbo entre los diversos extremos en esta cuestión debía dejarse a discreción de los hombres residentes en el lugar, es decir, a los ministros africanos responsables ante la opinión pública africana que contaban con el asesoramiento de expertos. Declaró después que dos terceras partes de los miembros de las autoridades locales ocupaban sus cargos elegidos por los habitantes. Los otros miembros no tenían votos ponderados y los jefes eran presidentes puramente de forma salvo cuando hubieren sido elegidos para formar parte de los consejos. En general, la presidencia del consejo la ejercía el presidente elegido por los miembros de éste entre sus propios componentes.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El representante de China manifestó su agrado al saber que el número y la proporción de africanos que desempeñaban puestos en las categorías superiores de la administración pública había continuado en aumento. Pero al mismo tiempo, el hecho de que los africanos con las condiciones necesarias para ello, todavía fueran insuficientes para desempeñar puestos en las categorías superiores, constituía una prueba de que era necesario realizar un esfuerzo mucho mayor para acelerar la formación profesional de funcionarios públicos indígenas. Aunque estaba perfectamente al tanto de lo que la Administración había hecho en este sentido, consideró que lo logrado era aún insuficiente para las necesidades del Territorio.

El representante de Australia juzgó que sería conveniente que el Consejo tomara nota de la forma rápida y experta en que la Autoridad Administradora había obrado para satisfacer la necesidad señalada por la Misión Visitadora de que en el Territorio en fideicomiso se confiaran cargos a un número mayor de oficiales superiores de la Administración. También encomió las medidas adoptadas para preparar profesionalmente a personal en condiciones de desempeñar cargos en el gobierno local.

El representante de Haití instó a la Autoridad Administradora a que desarrollara la escuela de gobierno local, para que los jóvenes togolese pudieran obtener la preparación necesaria para desempeñar altos cargos. Se lamentó de que la sede de todos los departamentos y servicios administrativos estuviera fuera del Territorio, lo cual contribuía a dar a los habitantes del Togo la sensación de que se los abandonaba.

El representante de la India observó con satisfacción que la proporción de africanos en comparación con los no africanos en la Administración era mucho mayor que en algunos otros de los territorios en fi-

deicomiso. Al mismo tiempo, observó que todavía era reducida la proporción de habitantes del Territorio en fideicomiso aun en los servicios africanos. Cualquier forma de independencia política sería inestable sin los servicios necesarios. Además, estaba seguro de que la Autoridad Administradora estaba al respecto tan interesada como cualquier otro, pero las medidas de carácter general tendientes a la participación de los africanos en la Administración no resolvían el problema de la relación entre el Territorio en fideicomiso y la Costa de Oro.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que la Misión Visitadora había considerado que el desenvolvimiento del Territorio había sido perjudicado por la falta de personal con preparación profesional. Esto se debía a que todos los servicios administrativos estaban fuera del Togo. Enumeró a los pocos funcionarios que constituían todo el personal de la Administración en el Territorio. Aunque el Territorio necesitaba apremiantemente caminos e instalaciones para el suministro de aguas, el personal para estos departamentos no había alcanzado ni siquiera la cifra inadecuada indicada en las plantillas.

El representante especial de la Autoridad Administradora dijo que nadie tenía más interés que los ministros de la Costa de Oro en alcanzar lo antes posible la africanización completa de la administración pública, y que se alentaba de todas maneras posibles a los togolese para que ocuparan las plazas vacantes en la proporción que les correspondía. El intenso ritmo de desarrollo significaba que los servicios de administración pública aumentaban considerablemente y, en general, el número de africanos que pasaban a ocupar cargos no era mucho mayor que el número de plazas creadas. Por eso la Asamblea Legislativa ha reconocido que durante varios años se necesitaría la ayuda de funcionarios públicos procedentes del exterior. Añadió que el representante de la URSS aunque enumeró el personal de gobierno no empleado en el Togo en 1952, no mencionó el gran aumento de personal ocurrido posteriormente.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

El Togo es esencialmente un país agrícola y su población está compuesta casi exclusivamente de agricultores campesinos que producen alimentos para consumo local y crían algún ganado. El cultivo del cacao constituye una excepción importante a esta regla; el Territorio no produce ningún otro producto de valor de exportación comparable y no desarrolla ninguna actividad industrial importante, ni posee ningún mineral conocido que pueda ser explotado comercialmente.

El cacao, del que proceden los principales ingresos del 22% de la población total y es la principal fuente financiera del desarrollo del Territorio, es cultivado exclusivamente por los africanos en aproximadamente el 6% de la superficie de la tierra en la parte meridional; en los demás lugares, la agricultura para la producción de alimentos para el consumo local, o cuando es posible para la exportación a los centros urbanos de la Costa de Oro, utiliza un sistema de cultivo

migratorio considerado destructivo de los recursos de la tierra e inadecuado, según expresa la Autoridad Administradora, para satisfacer las necesidades de una población creciente.

Por consiguiente, la política de la Administración trata de mejorar los métodos agrícolas, de aumentar la producción de alimentos, de alcanzar una mayor diversificación de la agricultura, de mejorar los métodos de comercialización y distribución y de alentar otras actividades que no sean las agrícolas. Al mismo tiempo, trata de mejorar básicamente el nivel de vida y las condiciones sociales.

El Consejo ha señalado anteriormente la importancia del cacao en la economía del Territorio y ha subrayado la necesidad de diversificar la producción primaria y de mejorar los métodos agrícolas y ha acogido con satisfacción las seguridades dadas por la Autoridad Administradora de que se estaban estudiando cuidadosamente esas cuestiones.

El comercio de alimentos para consumo local, o en la Costa de Oro, está en manos de muchos africanos, en su mayor parte nativos de los dos Territorios. El cacao y otros productos de exportación son comprados por cuenta de la Junta de Comercialización del Cacao de la Costa de Oro y la Junta de Comercialización de Productos Agrícolas por conducto de varios agentes —principalmente compañías europeas en la actualidad— pero cada vez más por las cooperativas de comercialización de productores.

Togo está representado en las dos Juntas de Comercialización arriba mencionadas, así como en la Corporación de Fomento Agrícola y de Pesquerías establecida para fomentar los trabajos en gran escala o participar en ellos.

Las importaciones procedentes de fuera del África Occidental y los productos manufacturados en la Costa de Oro son introducidos principalmente por varias grandes compañías europeas. La Autoridad Administradora expresa que, aunque en la Costa de Oro está aumentando constantemente el número de empresas africanas que participan en el comercio de importación directa, no puede decirse lo mismo de las situadas en el Territorio en fideicomiso. Sin embargo, un elevado porcentaje del comercio al por menor está en manos de comerciantes africanos independientes.

Como anteriormente, a solicitud del Consejo, la Autoridad Administradora suministró para el año 1952 un cálculo aproximado del comercio del Territorio. El valor total calculado de las importaciones ascendió a £3.827.639; las exportaciones se evaluaron aproximadamente en £4.071.750, calculándose el valor del cacao en £3.540.912.

En su 13° período de sesiones, después de examinar estos y otros aspectos de la economía general del Territorio (véase *infra*), el Consejo aprobó las observaciones y recomendaciones siguientes:

El Consejo reitera su preocupación ante los peligros inherentes a la gran dependencia económica del Territorio de la producción y exportación de cacao y está particularmente interesado en hacer que disminuyan dichos peligros prestando debida atención a los aspectos económicos del plan de desarrollo. Por consiguiente, el Consejo acoge con satisfacción la seguridad de que la Administración se da perfecta cuenta de la necesidad de aumentar la variedad y la cantidad de los productos agrícolas y está decidida a que los servicios económicos y productivos reciban mayor atención en la planificación futura del desarrollo; el Consejo re-

comienda que se exploren todas las posibilidades de inversión económica en materia industrial, y agrícola, con la asistencia internacional de que se disponga, y a este respecto atribuye gran importancia a las posibilidades que ofrece el proyecto del río Volta.

El Consejo toma nota con satisfacción de la medida en que la Administración está solicitando y obteniendo formas de asistencia técnica constructivas y previsoras de varios órganos nacionales e internacionales, particularmente de la Autoridad Administradora para los estudios preliminares del proyecto del río Volta y otros planes de beneficio para la Costa de Oro y el Togo; de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, para una encuesta sobre las necesidades de vivienda; de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para un plan experimental de riego de interés para ambos Territorios y del Gobierno de los Estados Unidos de América, para asistencia técnica con respecto a dos proyectos importantes que se están examinando y que beneficiarían directamente al Territorio en fideicomiso.

HACIENDA PÚBLICA: PLAN DE DESARROLLO

Como la hacienda del Territorio está vinculada a la de la Costa de Oro, el Territorio no tiene presupuesto independiente, sino que la Autoridad Administradora suministra todos los años para información del Consejo un cálculo de los ingresos obtenidos en el Togo y de los gastos realizados por su cuenta. Desde 1949-1950, los ingresos calculados han excedido los gastos. A continuación figuran los totales aproximados de los últimos cinco años:

Año	Ingresos £	Gastos £
1947-48	363.900	625.540
1948-49	489.569	614.443
1949-50	812.971	799.753
1950-51	1.039.886	1.036.804
1951-52	1.526.604	1.316.365

En 1952-1953, según un informe preliminar presentado al Consejo en su 13° período de sesiones, los ingresos correspondientes a la Costa de Oro y el Togo en conjunto acusaron un nuevo aumento de aproximadamente un 40%.

Los principales rubros de gastos en 1951-1952 fueron: la enseñanza (£260.493), las obras públicas (£206.322), la agricultura (£94.531), las fuerzas armadas (£76.960, o sea la parte que se calcula correspondiente al Territorio por los gastos de defensa del Gobierno de la Costa de Oro), los subsidios de ayuda a las autoridades locales (£63.758) y los servicios médicos (£61.107).

Los ingresos del Territorio procedieron principalmente de los derechos de importación (£589.011) y los derechos de exportación (£417.417). Además, en las cifras de los ingresos figura la suma de £293.227, cantidad que representa la parte correspondiente al Territorio de los fondos destinados al desarrollo de la Costa de Oro para el ejercicio económico. Sin embargo, la contribución que corresponde al Territorio para los fondos de desarrollo procedentes de la modificación del impuesto a la exportación de cacao excedió en £313.808 a esta última suma. La Autoridad Administradora consideró ese excedente adicional como acumulado en los fondos de desarrollo de la Costa de Oro para ser gastado en los siguientes años en trabajos que benefician al Territorio en fideicomiso, ya sea dentro o fuera de él.

Desde entonces se han asignado dos partidas presupuestarias adicionales de 1.000.000 de libras cada una, las que se utilizarán particularmente en la ampliación de la red de caminos dentro del Togo, así como de los que afectan a ese Territorio (véase más abajo).

Los principales trabajos realizados en el Territorio durante 1952 en virtud del plan de desarrollo fueron una nueva carretera principal en las zonas de cultivo de cacao (£77.250); una nueva escuela normal para maestros (£72.000); un nuevo hospital (£87.500); un nuevo centro sanitario (£10.000); y el suministro de agua por tuberías a dos poblaciones principales (£14.093). Otros grandes trabajos en ejecución o proyectados fueron la escuela secundaria de Ho (£296.000); otras dos escuelas normales para maestros (£155.000 y £70.000); y una nueva escuela secundaria en Kpandu (£52.000).

Los comités locales de desarrollo continuaron también funcionando durante todo el año y, trabajando en colaboración con la población local, terminaron varios trabajos cuyo costo total asciende a alrededor de £6.030.

Las autoridades locales tienen sus propias tesorías y durante 1951-1952 las de la parte meridional recaudaron £92.444 de ingresos y gastaron £90.174. Las dos fuentes principales de ingresos fueron los subsidios de ayuda oficiales (£35.653) y la tasa anual o impuesto local (£24.871). Los gastos principales fueron por obras y servicios (£16.926); enseñanza (£15.028); gastos extraordinarios (£11.434); y administración (£9.431).

El único impuesto directo recaudado por la Administración es el impuesto sobre la renta que deben pagar las personas y las compañías en virtud de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta; el total aproximado ingresado en las recaudaciones conjuntas por cuenta del Togo durante el año ascendió a £52.250. Las autoridades locales imponen también una tasa básica y pueden imponer asimismo una tasa graduada, una tasa sobre la propiedad, o una tasa sobre el patrimonio. La tasa aplicada en la parte meridional durante 1951-1952 varió, como en el año anterior, entre 6 y 12 chelines para los hombres y entre 2 y 4 chelines para las mujeres. En la parte septentrional, el impuesto *per capita* fué de 5 a 8 chelines por hombre, estando exceptuadas las mujeres. También se aplicó un impuesto sobre el ganado en el norte que asciende de 2 a 3 chelines por cabeza de ganado.

PROYECTO DEL RÍO VOLTA

Como resultado de las conversaciones realizadas durante 1952 entre el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de la Costa de Oro y las compañías de aluminio, se constituyó en 1953 una Comisión Provisional encargada de hacer nuevos estudios respecto del proyecto del río Volta descrito anteriormente al Consejo. El objeto principal del proyecto, cuyo costo aproximado oscila de 100 a 144 millones de libras, es el de represar el río Volta—en un punto donde separa la Costa de Oro del Togo—para suministrar energía hidroeléctrica y construir instalaciones de fundición para la explotación de los yacimientos de bauxita situados en la Costa de Oro. También se prevén ciertas posibilidades de riego, el suministro de energía hidroeléctrica con otros fines, el mejoramiento de las comunicaciones y un nuevo puerto marítimo en la Costa de Oro.

La idea fundamental del plan es crear una sociedad en la cual la empresa privada (se trata de dos fábricas

de aluminio canadienses y británicas) se ocuparía principalmente de la producción de aluminio, y los Gobiernos del Reino Unido y de la Costa de Oro se encargarían del plan hidroeléctrico de las obras públicas y de los demás servicios. La capacidad de producción se calcula en 80.000 toneladas de aluminio por año, lo que se elevaría posteriormente hasta llegar a las 210.000 toneladas; durante los primeros 30 años, el 75% de la producción se destinaría a los compradores del Reino Unido a precios basados en los de América del Norte.

La central eléctrica y la represa estarían situadas fuera del Territorio en fideicomiso el que, no obstante, compartiría los beneficios generales derivados de esas obras. La creación de un lago de unas 2.000 millas cuadradas sobre la represa significaría inundar cierta superficie del Togo. La Misión Visitadora de 1952 escuchó protestas de la población de Kete-Krachi, que sería uno de los lugares perjudicados, en el sentido de que la Autoridad Administradora debería reasentar el pueblo y conceder una indemnización proporcionada antes de que se complete el proyecto por toda propiedad perjudicada. La Misión tomó nota de que se habían recibido seguridades de la Autoridad Administradora y del Gobierno de la Costa de Oro de que se pagaría dicha indemnización y consideró que la Autoridad Administradora debería continuar manteniendo plenamente informada a la población del Territorio.

En 1952 se realizaron trabajos preliminares en la construcción del nuevo puerto marítimo de Tema, que el Gobierno de la Costa de Oro había decidido construir, se llevara o no a cabo el proyecto más amplio. El puerto tendrá suma importancia para la economía del Territorio, según expresó la Autoridad Administradora, ya que la mayor parte de las importaciones y algunas de las exportaciones podrían efectuarse con mayor eficacia por el nuevo puerto.

TIERRAS Y AGRICULTURA

La Autoridad Administradora informó que en la parte septentrional los métodos agrícolas continuaron mejorando en 1952 alentándose la explotación agrícola mixta realizada con arados tirados con bueyes, la utilización de estiércol y cultivo en curvas de nivel. Mucho del mérito de esa mejora se atribuye a la iniciativa de la Junta de Desarrollo Agrícola de Kusasi, que durante el año fué registrada como cooperativa. La Junta ha concedido préstamos a los agricultores para la compra de arados y bueyes; también compra a sus miembros las cosechas de maní y las utilidades realizadas sobre sus ventas se utilizan para cancelar los préstamos concedidos a los agricultores.

La Administración no mantiene estaciones agrícolas en la parte septentrional pero se informa que se suministran servicios de dirección y orientación en el centro principal de los territorios septentrionales de la Costa de Oro y durante el año se destacó un funcionario agrícola a esta parte. Expertos agrícolas ambulantes dependientes de las autoridades locales se ocupan también de la vigilancia de las granjas de demostración de las autoridades locales.

Los progresos de tres importantes proyectos de desarrollo agrícola fueron descritos al Consejo en su 13º período de sesiones: un plan en Tamne en el extremo norte para preparar la tierra para el cultivo del arroz y otros fines y dos proyectos encaminados a aumentar la producción de alimentos en el centro y el sur del Territorio.

En la parte meridional del Territorio el Departamento de Agricultura mantiene una granja de demostración con un personal compuesto de 17 personas. Hay también dos juntas agrícolas locales. Se ha prestado especial atención al cacao, como principal cosecha comercial, y un personal compuesto de doce personas ha continuado realizando un estudio intenso de todas las regiones productoras de cacao con el principal objeto de localizar y combatir los brotes de hipertrofia de los retoños del cacao (*swollen shoot*). La Autoridad Administradora informó que todos los brotes conocidos de la enfermedad en el Territorio habían sido tratados y que ahora se realizaban inspecciones periódicas y nuevo tratamiento en los casos necesarios. Al recordar que el Consejo de Administración Fiduciaria había instado a la Autoridad Administradora a que consiguiera la cooperación de los productores de cacao para prevenir la enfermedad, la Autoridad Administradora informó que los productores de cacao parecían haber aceptado ahora plenamente la necesidad de talar los árboles infectados.

En sus períodos de sesiones séptimo y noveno, el Consejo formuló recomendaciones a favor de la diversificación de la producción agrícola. La Autoridad Administradora informó que, durante 1952, el Departamento de Agricultura había puesto a la venta semillas de variedades mejoradas de algunos productos (arroz, maní, garbanzos y maíz). Se dió también amplia publicidad a los mayores precios pagados por el café por el Ministerio de Alimentación del Reino Unido durante 1953 con la esperanza de restituir al café su importancia como cosecha comercial y de exportación.

La Misión visitadora de 1952 tomó nota de que en muchas de las comunicaciones recibidas se pedía el establecimiento de una Junta de Préstamos Agrícolas. En 1953 se estableció esa Junta, financiada por la Administración, para la Costa de Oro y el Togo. Sin embargo, la Autoridad Administradora informó posteriormente que el Gobierno de la Costa de Oro, después de un cambio de política, había disuelto la Junta y estaba pensando establecer un nuevo organismo que dependería directamente del Gobierno.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, teniendo presente la creciente importancia que adquirirá la agricultura a medida que se desarrolle y diversifique la economía general del Territorio, toma nota con satisfacción de los tres proyectos de amplia planificación agrícola que se están realizando actualmente, e insta a la Autoridad Administradora a estimular el desarrollo de las explotaciones agrícolas experimentales, las carreteras y el abastecimiento de agua y a introducir lo más rápidamente posible para uso de los habitantes indígenas, maquinaria agrícola adecuada para mejorar y ampliar la producción.

COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO

Todo el cacao producido en la Costa de Oro y el Togo—el Territorio en fideicomiso produce alrededor de la décima parte—se vende obligatoriamente por conducto de la Junta de Comercialización del Cacao de la Costa de Oro. Esta consiste de nueve miembros designados por el Ministro de Comercio que son responsables por su conducto, desde su reorganización en 1951, ante la Asamblea Legislativa. De los nueve miembros, siete son africanos y uno de ellos procede del distrito de Jasikan en el Territorio en fideicomiso; los otros dos son europeos. La Junta fija al principio

de cada temporada un precio garantizado que pagará al agricultor. Entre los factores que deben tenerse en cuenta al determinar el precio, figuran el nivel que se espera alcancen los precios mundiales para la próxima temporada y la situación del Fondo de Estabilización de la Junta, creado con excedentes resultantes de la venta de cacao en los mercados mundiales y que se utiliza cuando los precios del mercado mundial bajan inesperadamente del nivel de precio garantizado. Otro factor que se tuvo en cuenta para fijar el precio garantizado en 1951 y 1952 fué el deseo de limitar la inflación interna.

En todos los años anteriores de funcionamiento hasta 1952, salvo en uno, las sumas recibidas por la Junta en los mercados mundiales, previa deducción de los gastos de transporte y otros, excedieron considerablemente las sumas pagadas a los productores. La Junta había constituido un considerable fondo de estabilización de £51.000.000 y otras reservas por valor de £13.000.000 para su funcionamiento. Había concedido subsidios por un total de más de £4.500.000 principalmente para investigaciones y fomento de la industria del cacao y de las regiones de cultivo de cacao en general. Había reservado asimismo la suma de £1.000.000 que invirtió en títulos al 3%, cuyos intereses se utilizan para otorgar becas a estudiantes de la Costa de Oro y el Togo.

Sin embargo, en 1952, el excedente obtenido por la Junta disminuyó, como se esperaba, debido al nuevo impuesto que se aplicó a la exportación de cacao como medio de financiar el plan de desarrollo de la Costa de Oro. La Autoridad Administradora expresó que esa elevada tasa de impuesto libraba ahora a la Junta de mucha de la responsabilidad de calcular el riesgo de inflación a base de otros factores al fijar el precio del cacao que pagará a los agricultores. La Junta pagó £14.741.321 como impuestos de exportación, habiendo ascendido a £70 el promedio del impuesto por tonelada de cacao vendida, en comparación con £51 el año anterior. El costo para la Junta del cacao, incluyendo gastos de transporte y el impuesto de exportación, ascendió a £235-12ch.-4p. por tonelada, al paso que la suma recibida en el mercado mundial fué de £245-0ch.-0p. f.o.b. El precio fijado por el productor fué de £149-6ch.-8p. por la tonelada, o sea 80 chelines por carga de 60 lbs. El excedente neto ganado por la Junta sobre sus operaciones del año ascendió a £3.500.000, en comparación con £20.000.000 el año anterior. La Junta pagó durante el año otro millón de libras para la reconstrucción de las zonas de cultivo del cacao y £198.112 como subsidios para el desarrollo local; la parte correspondiente al Togo de estos últimos fué de £42.542, o sea más del 21% de las cuales £18.000 se destinaron a la construcción de caminos secundarios y puentes en las regiones de cultivo de cacao. La parte de la cosecha comercializada correspondiente al Togo ascendió a 23.568 toneladas, o sea poco más del 11% del total.

Se ha formado una Compañía Compradora de Cacao, subsidiaria de la Junta de Comercialización del Cacao, que funcionará como agente comprador autorizado. Uno de sus principales objetivos es permitir que los agricultores inviertan sus ahorros y participen en el control de la Compañía. Además, las utilidades que obtengan los demás agentes compradores autorizados—en su mayor parte compañías no africanas—serán retenidas por los agricultores que vendan directamente a la nueva compañía en lugar de hacerlo a los agentes comerciales.

El Consejo de Administración Fiduciaria se ha interesado anteriormente en obtener que los productores del Togo estén representados suficientemente en la Junta de Comercialización y que el Territorio en fideicomiso reciba una parte equitativa de las utilidades procedentes de la venta de su cacao. En su 11° período de sesiones, prestó particular atención a los precios recibidos por el productor. Aunque tomó nota de los distintos factores en juego, recomendó que la Autoridad Administradora invitara a la Junta a revisar esos precios a fin de asegurar su debida relación con los precios del mercado mundial y con los precios pagados a los productores de cacao en los territorios vecinos.

La Misión Visitadora de 1952 escuchó muchas quejas acerca de los precios. Los representantes del Togo sostuvieron que los agricultores podrían recibir mejores precios por su cacao si el mercado fuera libre. En particular, la Misión escuchó muchas quejas acerca del precio fijado para la temporada de 1952-1953, que había sido reducido de 80 chelines por carga en 1951-1952 a 70 chelines. Se pidió también que se estableciera una junta de comercialización independiente para el Togo.

La Misión tomó nota de que la industria del cacao contribuía efectivamente de una manera directa e indirecta a las recaudaciones conjuntas de la Costa de Oro y del Territorio en fideicomiso. Estimó asimismo que el mantenimiento de la reserva de estabilización era bueno en principio puesto que dicha reserva estaba destinada a proteger a los agricultores de las fluctuaciones violentas de los precios del cacao en el mercado mundial. Consideró además que el establecimiento de una junta de comercialización independiente para el Togo no era necesario en aquellas circunstancias, pero sugirió que la Autoridad Administradora mantuviera a los agricultores del Togo al corriente de las actividades de la Junta de Comercialización del Cacao de la Costa de Oro y de las contribuciones hechas por ésta al desarrollo del Territorio.

Sin embargo, la Misión consideró con benevolencia las quejas acerca de la reducción del precio pagado a los agricultores prevista para 1952-1953. Observó que, según la información de que disponía, no existía al parecer la posibilidad de que la reducción se debiera en parte al aumento del impuesto de exportación que debe pagar la Junta y que se hacía frente a ese aumento transfiriéndolo a los productores en lugar de permitir que disminuyera el excedente anual acumulado por la Junta o de utilizar la reserva de estabilización. La Misión expresó la esperanza de que, en vista de la considerable reserva de estabilización de que disponía la Junta, la Autoridad Administradora volviera a examinar el precio pagado al productor para la temporada próxima.

La Autoridad Administradora señaló que la Junta ya no podía, aunque esa fuera su política, acumular reservas en la escala en que lo había hecho en el pasado, debido al elevado impuesto de exportación. Las autoridades encargadas de fijar el precio para 1952-1953 habían estudiado detenidamente todos los factores en juego al fijar el precio para la temporada en 70 chelines. Entre las varias razones que aconsejaban esa reducción del precio figuraban la tendencia de los mercados mundiales y el deseo de combatir la inflación. El precio mundial no había bajado tanto como se había esperado, pero la moneda en circulación se había mantenido aproximadamente en el mismo nivel del año anterior, y esto se reflejó en la estabilidad

del índice de los precios al por menor de los productos alimenticios locales. Además, la Autoridad Administradora estimó que los impuestos sobre el cacao aplicados en los territorios contiguos podían no ser tan elevados como el que rige en el Togo, donde dicho gravamen constituye la principal fuente de ingresos para fines de desarrollo. Llegó a la conclusión de que inclusive si la Junta de Comercialización del Cacao transfería al productor todo el beneficio del precio del mercado, subsistiría una diferencia de precio correspondiente a ese distinto nivel de tributación. La situación había sido explotada por los miembros de cierto grupo que trataban de demostrar a los agricultores de las regiones fronterizas cuánto mejor sería su situación si su cacao hubiera sido vendido directamente al comprador en lugar de hacerlo por conducto de la Junta de Comercialización del Cacao.

Se informó al Consejo de que el precio para el año agrícola de 1953-1954 fué fijado en 72 chelines por carga.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las observaciones y recomendaciones siguientes:

El Consejo recuerda y reafirma su apoyo de los principios básicos de la comercialización controlada del cacao, en virtud de la cual se acumulan fondos para la futura estabilización de los precios y para el desarrollo económico y social, como resultado de los actuales precios favorables del mercado mundial. El Consejo reconoce, además, la eficacia de una política de precios moderados pagados a los agricultores como medida antiinflacionaria, y el efecto que dicha política, combinada con derechos de exportación relativamente elevados, puede tener como medio de evitar una disparidad demasiado grande entre los ingresos de los productores de cacao y los de otros productores agrícolas. No obstante, el Consejo señala a la atención de la Autoridad Administradora, teniendo presentes los precios mundiales del cacao que siguen siendo elevados y la actual magnitud de las reservas de estabilización, las quejas de ciertos productores de cacao relativas a la gran diferencia que existe entre los precios agrícolas fijados y los precios del mercado libre, y la opinión de la Misión Visitadora de que el precio podría modificarse teniendo en cuenta las reservas existentes. El Consejo, aunque no está de acuerdo en que el problema deba resolverse mediante un apreciable aumento directo de los precios de compra, por lo menos mientras no lo justifiquen otros factores económicos, recomienda, sin embargo, que la Autoridad Administradora invite al Gobierno de la Costa de Oro y a la Junta de Comercialización del Cacao a examinar todos los medios posibles por los cuales los productores de cacao podrían obtener equitativamente mayores ventajas de la situación favorable del mercado mundial, sobre todo mediante incentivos para mejorar la producción, teniendo presentes posibilidades tales como la inversión de las sumas pagadas por concepto de primas anuales o las utilidades excedentes realizadas en su nombre, en la compañía compradora oficial, en las cooperativas o en otros campos de inversión análogos.

COOPERATIVAS

El fomento de las cooperativas por parte de la Autoridad Administradora, favorecido por el Consejo en períodos de sesiones anteriores, se ve reflejado en el hecho de que a fines de 1952 había 22 cooperativas para la comercialización del cacao, en comparación con 18 en 1951, y dos cooperativas de consumo, en

vez de una el año anterior. Las cooperativas de comercialización recibieron de sus 4.057 socios y vendieron a la Junta de Comercialización del Cacao de la Costa de Oro 5.275 toneladas de cacao, o sea el 22% de la producción total del Territorio. Además, sirvieron también de órganos intermediarios para la concesión de préstamos a los agricultores, la mayoría de los cuales fueron otorgados por el Banco Central Cooperativo de la Costa de Oro (ACCRA). El total de dichos préstamos concedidos a los agricultores del Togo durante el año ascendió a £15.700. Se concedió asimismo la suma de £13.000 a las cooperativas para la construcción de galpones para el cacao.

INDUSTRIAS

Los únicos establecimientos locales industriales del Territorio son una fábrica de ladrillos y tejas, una alfarería y la industria del tejido como industria doméstica independiente. Se otorgó una beca para la realización de estudios de artesanía al dueño de una alfarería para estudiar en el Reino Unido en 1952, mientras que la industria del tejido, que en el pasado había recibido considerable ayuda de la Corporación de Fomento Industrial, fué organizada bajo la dirección de los propios trabajadores.

Representantes de las empresas de alfarería y tejido solicitaron ayuda de la Misión Visitadora de 1952 para obtener asistencia oficial; se expresaba que la industria del tejido había tenido dificultades en la venta de las telas, mientras que la alfarería tropezaba, según se informaba, con dificultades financieras debido a que las condiciones en que había recibido un préstamo de la Corporación de Fomento Industrial eran demasiado severas. La Misión consideró que los establecimientos merecían ser ayudados, pero sugirió que sus representantes prepararan planes para que fueran considerados por la Administración, sobre la manera en que se proponían desarrollar sus negocios si se les concedía nueva ayuda.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

La importancia de asegurar al Territorio un abastecimiento suficiente de agua ha sido subrayada por el Consejo en períodos de sesiones anteriores. La Misión Visitadora de 1952 informó que, desde la primera visita de la Misión se habían realizado progresos plausibles para asegurar al Territorio el abastecimiento de agua, pero instó a la Autoridad Administradora a que completara el personal del Departamento de Fomento Hidráulico Rural, que era inferior en un 25% al número proyectado. En respuesta, la Autoridad Administradora se refirió al aumento de dicho personal destacado en la parte meridional, que ahora se compone de tres personas.

Se están ampliando los servicios de abastecimiento de agua con el establecimiento de un depósito en Ho y la asignación de la suma de £300.000 por el Consejo del Togo Trans-Volta.

COMUNICACIONES

En su séptimo y noveno períodos de sesiones, el Consejo formuló recomendaciones a favor de que se intensificara el programa de comunicaciones por carretera y en su 11° período de sesiones señaló a la Autoridad Administradora la conveniencia de construir una carretera transitable en todo tiempo para unir las partes septentrional y meridional del Territorio, y para mejorar el acceso a las zonas productoras de cacao en particular.

En su informe anual correspondiente al año 1952, en el que se daban detalles de los nuevos progresos realizados, sobre todo en materia de construcción de caminos de acceso, la Autoridad Administradora manifestó que la Administración había aceptado la construcción de una carretera principal transitable en todo tiempo desde Accra, cruzando el lado oriental de la parte meridional donde están situadas las regiones de cultivo del cacao, empalmando con el actual camino secundario occidental de Kpandae y continuando luego hasta el extremo septentrional. Posteriormente, según la información suministrada al Consejo en su 12° período de sesiones, el Gobierno de la Costa de Oro anunció la aprobación de una nueva partida de £1.000.000 destinada a la construcción de un puente en el río Volta y al mejoramiento de la principal red de caminos del Togo. El Consejo fué informado, en su 13° período de sesiones, de que se había asignado una segunda partida de £1.000.000 para el desarrollo general de la región del Togo Trans-Volta y de que el consejo regional había aprobado la inversión de £304.000 de esa suma en caminos secundarios.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, habiendo señalado anteriormente la insuficiencia de la red de caminos del Territorio, acoge con agrado la aprobación de nuevas e importantes partidas para los fines, en particular, de construir un puente sobre el río Volta, de adelantar la construcción y la mejora de la carretera principal que va del norte al sur del Territorio y de ampliar la red de caminos secundarios, e insta a la Autoridad Administradora a hacer todo lo posible para mantener ese ritmo acelerado de desarrollo.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de China consideró que no se había resuelto todavía la cuestión de la diversificación de la producción y que con objeto de promover el desarrollo económico del Territorio era esencial diversificar su producción a un ritmo más rápido.

El representante de Nueva Zelandia señaló que la buena situación económica del Territorio se debía a los elevados ingresos procedentes de la exportación de cacao y consideró alentadores los esfuerzos de la Administración tendientes a evitar la inflación mediante, entre otras cosas, el pago de un precio reducido a los productores por su cacao. Sin embargo, subrayó los peligros inherentes a la economía del Territorio por su dependencia del cacao y pidió que se realizara un estudio de todos los métodos para diversificar la economía del Territorio.

El representante de Australia señaló que en el Territorio existía mucha actividad económica. Por supuesto, se corría el peligro de la inflación y el peligro de que debido al alto precio del cacao los agricultores cultivaran mayor cantidad, lo que trastornaría los planes para la diversificación de la producción agrícola. Sin embargo, esos peligros habían podido conjurarse y la estabilidad de la economía del Territorio era digna de mención.

El representante de Siria manifestó que, como la dependencia de la economía del Territorio de uno o dos productos no promovía su desarrollo económico,

la Autoridad Administradora debía prestar especial consideración al cultivo de nuevos productos de manera que pudiera lograrse una economía equilibrada. Asimismo, abrigaba la esperanza de que la Autoridad Administradora alentaría a los habitantes del Territorio a importar directamente de ultramar.

El representante de Haití no encontró mucho motivo de satisfacción en el terreno económico y manifestó su asombro ante los métodos empíricos de utilización de la tierra, el ruinoso sistema rotativo de cultivos y la explotación antieconómica de los bosques. Estimó que la Administración procedía con cierta timidez en la cuestión de introducir nuevos cultivos. Parecía peligroso dejar que la economía del Territorio siguiera dependiendo sólo del cacao.

El representante de Bélgica señaló a la atención el peligro de la falta de equilibrio entre los gastos con fines sociales y las inversiones de carácter económico. La actual situación financiera de la Costa de Oro y el Togo, consideradas como una colectividad, era el resultado de una situación anormal, es decir de los precios extraordinariamente elevados del cacao y el café, lo que permitía al Gobierno de la Costa de Oro, con un entusiasmo plausible, gastar sumas de dinero anormalmente elevadas en medidas de carácter social. Era más importante crear escuelas que explotar minas u ocuparse del desarrollo agrícola, pero las realizaciones en materia social debían costearse con las actividades económicas y sólo si se obtenían buenos resultados en estas últimas podía el Gobierno cumplir sus promesas respecto a las primeras.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresó que en materia económica el Territorio en fideicomiso había estado unido y sometido a la Costa de Oro. El Territorio no tenía un presupuesto independiente, de manera que era imposible determinar qué parte de los gastos se asignaron al Territorio. La Autoridad Administradora no había promovido el desarrollo económico del Territorio. Como resultado de ello, su economía había permanecido estancada, a un nivel primitivo, y había adquirido un carácter colonial de desarrollo unilateral. Toda la economía se basaba en el cacao, que constituía el 80% de las exportaciones del Territorio y, como la propia Autoridad Administradora había admitido, esa dependencia del cacao ponía en peligro la estabilidad económica del Territorio. La población indígena del Territorio había estado sometida a una cruel explotación por parte de las organizaciones monopolistas con oficinas en la Costa de Oro, así como por parte de las compañías europeas que se habían hecho cargo de la mayor parte de las exportaciones y de las importaciones del Togo. Las organizaciones de comercialización importaban productos a precios elevados al paso que exportaban los productos agrícolas, por ejemplo, el cacao, a precios considerablemente inferiores a los del mercado mundial. De tal manera, se despojaba, en realidad, a los habitantes indígenas, sobre todo a los productores de cacao.

El representante especial de la Autoridad Administradora respondió que era posible que, en los próximos años, la lucha por la independencia económica del cacao tendría que ser más dura que la lucha por la independencia política. La necesidad de aumentar la variedad y la cantidad de la producción agrícola del país era una cuestión que la Administración no necesitaba que se le recordara. En particular, estaba decidida a velar por que los servicios económicos y productivos recibieran mayor atención en los próximos años del

plan de desarrollo. No era cierto, agregó, que las pocas compañías europeas que se encuentran en el Territorio se dedicaran a explotar a los africanos. Esas firmas sólo percibieron de la Junta de Comercialización del Cacao y de la Junta de Comercialización de la Producción Agrícola, por actuar en calidad de agentes, la misma tasa de remuneración que las cooperativas indígenas y la Compañía Compradora de Cacao administrada por africanos. Si fuera cierto que se estuviera engañando a los habitantes del Territorio, la URSS, que compró una parte importante de la producción de cacao al mismo precio que cualquier otro comprador, habría participado evidentemente en dicho fraude.

PROYECTO DEL RÍO VOLTA

El representante de Australia consideró que el progreso realizado respecto del proyecto del río Volta era satisfactorio y estimó que el Consejo tomaría seguramente nota con satisfacción de las grandes posibilidades que existían para diversificar la economía de una gran parte del Territorio.

El representante de Nueva Zelandia consideró que el proyecto del río Volta, si se realizaba, beneficiaría considerablemente al Territorio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que un estudio detenido de los planes para la realización del proyecto del río Volta revelaba que no redundaría de manera alguna en beneficio de los intereses de la población indígena del Territorio en fideicomiso. La construcción de instalaciones para la extracción de aluminio tendría por resultado que toda la producción se exportaría a países europeos, al Reino Unido, a Francia y al Canadá. El desarrollo económico del Territorio en fideicomiso no se beneficiaría de manera alguna. La población indígena no había sido tan siquiera consultada acerca del proyecto y aunque el representante del Territorio en fideicomiso había tratado de plantear esta cuestión en la Asamblea Legislativa, no había sido incluida siquiera en el orden del día de la Asamblea, puesto que los miembros del Togo en dicha Asamblea se encontraban en minoría.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que ésta deseaba mantener al Consejo al corriente de los progresos que se realizaran respecto al proyecto del río Volta. Señaló asimismo que un miembro de la población del Territorio era miembro del cuerpo consultivo establecido por el Gobierno.

AGRICULTURA

El representante de Siria subrayó la necesidad de que se introdujeran con mayor rapidez maquinaria agrícola y métodos modernos de explotación agrícola, señalando que, como la agricultura parecía constituir la fuente principal de ingresos, la suma que gastara el Gobierno para mejorarla nunca podría considerarse excesiva. Observó asimismo con agrado que el Gobierno estaba en vía de otorgar préstamos para viviendas y confiaba en que en el próximo informe se presentara un cuadro más alentador.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que en todo el Territorio prevalecían todavía los métodos agrícolas más primitivos y que no había habido señal alguna de un esfuerzo coordinado para despertar al Territorio de ese estado de atraso. La Misión Visitadora había recibido nu-

merasas quejas acerca del estado de la agricultura; no existía una sola estación agrícola en la parte septentrional del Territorio donde sólo había destacado un funcionario agrícola. En todo el Territorio no existía una sola estación veterinaria.

COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO

El representante de China, aunque impresionado por las medidas antiinflacionarias adoptadas por la Administración, no estaba convencido de que hubiera sido necesario reducir el precio pagado al productor por el cacao en la medida en que se hizo en 1952. Su delegación comprendía perfectamente a los agricultores indígenas que se habían quejado del precio reducido, y estaba de acuerdo con la Misión Visitadora en que, en vista de las grandes reservas de la Junta de Comercialización del Cacao, algo podría y debería hacerse para satisfacer a los productores locales.

El representante de Francia no consideró sorprendente que los cultivadores de cacao no siempre comprendieran claramente las razones de la existencia de un mercado controlado para su producción. Su delegación había tomado nota con interés del papel fundamental que había desempeñado la Junta de Comercialización del Cacao en la lucha contra la inflación, así como de la magnitud de las sumas que había destinado a la reconstrucción de varias regiones de cultivo. Abrigaba la esperanza de que en el próximo informe anual la Autoridad Administradora continuara teniendo al corriente al Consejo no sólo con respecto a la justificación económica de la Junta de Comercialización del Cacao, sino también acerca de las medidas adoptadas a fin de que la población comprendiera mejor su utilidad.

El representante de Siria apoyó al representante de China y estimó que debería hacerse un estudio del problema con objeto de suprimir todas las quejas que habían sido hechas por los productores. Aunque comprendía los beneficios obtenidos del fondo de reserva, estimaba que no deberían sustraerse grandes sumas a los agricultores si se deseaba elevar el nivel de vida.

El representante de Haití, al tomar nota de las utilidades realizadas por la Junta de Comercialización del Cacao, inclusive después de haber pagado considerables impuestos de exportación y los gastos en trabajos de desarrollo, estimó que la Autoridad Administradora podría considerar seriamente, con la Junta, la posibilidad de conceder a los productores al terminar al ejercicio económico un porcentaje de las utilidades netas como indemnización por la diferencia reconocida entre el moderado precio de compra y el precio real a que se efectuaron las ventas en los mercados mundiales. No comprendía cómo una medida de esa naturaleza podría perjudicar la política de la Administración de combatir la inflación; por el contrario, veía en ello un gesto de equidad con respecto a aquellos a quienes se debía principalmente la riqueza derivada del cacao. El aumento del impuesto de exportación se debía sólo al deseo de la propia Administración de limitar las utilidades de la Junta, que reconocía eran exageradas.

El representante de El Salvador convino en que el problema del precio del cacao debería resolverse en beneficio de los habitantes. La comparación de los precios que éstos recibían con los precios que existen actualmente en el mercado mundial revelaba una diferencia verdaderamente enorme. La Junta de Comercialización del Cacao había acumulado grandes cantidades y su misión era precisamente tratar de elevar y mantener los

precios. Los productores de cacao debían ser protegidos y los precios a ellos pagados debían revisarse de manera que recibieran un precio más justo.

El representante de la India expresó cierta preocupación de que los precios muy elevados que pagaba el consumidor de cacao beneficiaban un poco al verdadero productor. Por conducto de la Junta de Comercialización del Cacao de la Costa de Oro, se estaba tratando de obtener que el productor no fuera tan explotado como podría serlo de otro modo, pero la mayor parte del precio desde el momento en que la materia prima salía de manos del productor y entraba en la fabricación — todos los beneficios que se obtenían desde el momento en que el grano era entregado por el productor y se vendía — debería reinvertirse en el Territorio. Por supuesto, ello implicaba la intervención de la comunidad o del Gobierno en los procesos siguientes al agrícola y era ésa una cuestión que no podía examinarse teniendo en cuenta exclusivamente el Territorio en fideicomiso.

El representante de Bélgica manifestó que el Consejo debería obrar con suma prudencia. El actual precio del cacao era completamente anormal, debido a que la demanda mundial de cacao no podía ser satisfecha con la actual producción mundial. Pero aunque el precio del cacao había aumentado considerablemente, el costo de producción no lo había acompañado. El Gobierno había, en efecto, aplicado correctamente un impuesto muy elevado sobre las utilidades excesivas de los productores; si hubiese permitido que los productores retuvieran íntegramente sus utilidades excepcionalmente elevadas, esa situación habría perjudicado gravemente a la economía general del Territorio, y traería aparejado un aumento inmediato de los precios de todos los productos agrícolas y un verdadero peligro de inflación. No sería acertado que el Consejo de Administración Fiduciaria recomendara a la Autoridad Administradora que cediera a los productores de cacao una parte considerable del precio de venta. La acogerían con agrado, pero el Gobierno ya no podría aprovechar los actuales precios anormales para establecer las reservas necesarias.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que la Misión Visitadora de 1952 había recibido numerosas quejas acerca de las actividades de la Junta de Comercialización de la Costa de Oro. A los productores africanos de cacao se les pagaron precios reducidos por su producción, al paso que la Junta de Comercialización del Cacao y las compañías europeas que actuaban como intermediarias en la compra y venta del cacao percibieron enormes ganancias a expensas de los productores. En 1951, el productor indígena recibió menos de la mitad del precio del mercado mundial por su cacao, mientras que los intermediarios, tales como la United Trading Company y la United Africa Company, se beneficiaron en más de £10 por tonelada de cacao y la Junta de Comercialización del Cacao ganó de £70 a £80 por tonelada. El precio pagado al productor se redujo aún más en 1952. La Autoridad Administradora debería precaverse contra las fluctuaciones de los precios en el mercado mundial a expensas de las reservas de estabilización más bien que a expensas de los campesinos y agricultores locales. El Consejo debería señalar a la atención de la Autoridad Administradora esa situación anormal.

El representante especial de la Autoridad Administradora estimó que no debía permitirse que las simpatías hacia los productores de cacao no dejara ver a las autoridades los muy importantes problemas económicos in-

volucrados. Los productores de cacao constituían una minoría rica. En el mundo se acostumbraba a graduar el sistema tributario de manera que los pobres pagaran poco por concepto de impuestos mientras que los ricos debían contribuir con sumas considerables. La Administración estaba aplicando esa política mediante un sistema de tributación directo e indirecto. Además la política de la Administración era aprovechar todo lo posible el actual período de altos precios mundiales para acumular los fondos necesarios para grandes trabajos de desarrollo. En un país que está a punto de conseguir el gobierno propio, el no preparar sus recursos financieros para ponerse al nivel de la situación constitucional sería un acto de locura, puesto que la Costa de Oro y el Territorio tendrían que vivir con sus propios medios. Análogamente, en un momento de enorme desarrollo y de salarios elevados, el único medio de mantener la estabilidad económica del país era seguir una política antiinflacionaria vigorosa y permanente y el arma principal de que disponía la Administración era controlar los precios pagados al productor por su cacao. Mientras no se realizaran considerables progresos en la diversificación económica no podría permitirse que los precios del cacao siguieran un curso más natural.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El representante de Australia consideró de especial interés los sondeos que se estaban realizando para encontrar agua para riegos.

COMUNICACIONES

El representante de Siria expresó su reconocimiento por los esfuerzos hechos por la Autoridad Administradora para resolver el problema de las carreteras y, en particular, por sus planes para construir un puente sobre el río Volta y carreteras principales. El estado de los caminos estaba lejos de ser adecuado para el desarrollo económico y la Autoridad Administradora debía hacer todo lo que estuviera a su alcance para mejorar los caminos y acelerar la construcción de otros para beneficio y bienestar del pueblo del Togo.

El representante de El Salvador estimó que puesto que un sistema adecuado de carreteras constituía la base del desarrollo económico de cualquier país, debía procurarse mejorar la situación existente en el Togo.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

Después de que el Consejo, en su 11° período de sesiones, expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuaría alentando a las mujeres del Territorio a participar más en la vida cívica y política del mismo, la Autoridad Administradora replicó que esa era, efectivamente, la política que seguía al respecto. Señaló que la condición jurídica de las mujeres ante el derecho civil es igual a la de los hombres y que están autorizadas a ocupar cargos en la administración pública y a desempeñar funciones públicas, aunque lo hacen raramente. Sin embargo, tanto entre los dagomba como entre los manprusi, hay varias mujeres que son jefes y en general las mujeres se están interesando cada vez más en los asuntos públicos y políticos.

El comercio local de alimentos y de ciertos artículos importados es ejercido especialmente por mujeres. Estas tienen excelentes oportunidades para adquirir experiencia como maestras o como enfermeras y cada día aumenta más el número de mujeres que encuentran empleos en estas profesiones. Otras han conseguido empleos oficiales permanentes como ayudantes de los funcionarios encargados de la educación de las masas, trabajadoras sociales y operadoras de teléfonos; las mujeres se dedican en creciente número a trabajos de oficina que antes realizaban los hombres.

ESTADÍSTICAS VITALES

En una sola ciudad del Territorio, en la ciudad de Ho, se lleva un registro obligatorio de todos los nacimientos y defunciones. Como la Autoridad Administradora informó al Consejo en su 11° período de sesiones que las disposiciones tomadas por tres de las Autoridades Indígenas no habían sido cumplidas, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría nuevas medidas para lograr que el registro de tales datos estadísticos se aplique en todo el Territorio.

En su informe anual de 1952, la Autoridad Administradora señaló que durante ese año se había reorganizado en forma tan completa la estructura básica del sistema de gobierno local, que no había sido posible realizar ningún progreso en la compilación y tabulación de estadísticas vitales por parte de las Autoridades locales.

CASTIGOS CORPORALES

El Consejo, en su cuarto, séptimo y noveno períodos de sesiones había recomendado que la Autoridad Administradora tratara de conseguir la abolición total del castigo corporal en el Territorio, y la Asamblea General, en su quinto y sexto períodos de sesiones, instó también a que se eliminaran totalmente los castigos corporales en los territorios en fideicomiso donde todavía existieran.

La Autoridad Administradora, cuya política manifiesta es tratar de conseguir la disminución paulatina del castigo corporal, a fin de abolirlo tan pronto como sea posible, obtuvo que la Asamblea Legislativa de la Costa de Oro modificase en 1951 las leyes existentes para que el castigo corporal sólo se aplicara a los varones adultos por el delito de escalo a mano armada. El Gobierno de la Costa de Oro había propuesto que se lo aboliese por completo como sentencia para adultos, pero la Asamblea consideró que la opinión pública no favorecería la abolición en el caso del delito mencionado.

Por lo tanto, actualmente, este castigo sólo puede ser aplicado a los varones adultos por un juez de la Suprema Corte en caso de escalo a mano armada y a los menores por los tribunales de magistrados. En la parte septentrional del país los tribunales indígenas pueden también imponer esta pena en el caso de delitos graves. En las prisiones sólo puede aplicarse a dos tipos de delito.

La Autoridad Administradora informó que en 1952 ningún tribunal del Territorio había dictado sentencias de castigo corporal.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, teniendo presentes las recomendaciones anteriores de la Asamblea General y del Consejo tendientes a la abolición del castigo corporal, y tomando

nota de que los tribunales no han impuesto ninguna sentencia de castigo corporal en el Territorio durante el periodo que se examina, insta a la Autoridad Administradora a que continúe sus esfuerzos para lograr que este castigo desaparezca de la legislación del Territorio y a que en esa forma cumpla plenamente dichas recomendaciones.

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS

Según la Autoridad Administradora, los adelantos sociales más notables durante el periodo que se examina tuvieron lugar en los servicios médicos. Se inauguró un nuevo hospital en sustitución del antiguo existente en Hohoe y a principios de 1953 se inauguró un segundo centro sanitario. Una misión religiosa inauguró un nuevo lazareto de gran amplitud.

La Comisión de Encuesta encargada de examinar las necesidades sanitarias de la Costa de Oro visitó diversos centros en el Togo durante el año y sus recomendaciones fueron aprobadas por la Administración, con una o dos reservas. En su informe, la Comisión señaló la urgente necesidad de ampliar los servicios médicos auxiliares y desarrollar la medicina preventiva mediante la rápida extensión de las unidades médicas móviles.

La parte meridional del país cuenta con los servicios del hospital central de Accra en la Costa de Oro y de dos hospitales de distrito dentro del Territorio: uno en Ho (con 38 camas) y otros en Hohoe (con 45 camas). También hay un pequeño hospital de los misioneros (con 18 camas) en Worawora. La parte septentrional cuenta con los servicios del hospital de Yendi (con 36 camas) y de dos hospitales situados más allá del límite del Territorio, en Bakwu y Salaga.

Los servicios de hospital se complementan con los de los dispensarios, las clínicas y los centros sanitarios. En 1952 había 20 dispensarios (uno con camas), y dos clínicas especializadas en higiene materno-infantil. Nueve de estas instituciones estaban situadas en la parte septentrional y 13 en la meridional. Los dos centros sanitarios se dedican especialmente, por ahora, a la higiene materno-infantil. La Administración sostiene dos lazaretos además del nuevo lazareto de la Misión. En la parte meridional del Territorio funciona también una clínica móvil de higiene materno-infantil.

Lo mismo que en 1950 y en 1951, en 1952 había en el Territorio tres funcionarios médicos del Gobierno, uno de ellos africano. Había también dos médicos particulares y un doctor misionero. El número total de médicos profesionales aumentó de 89 en 1951 a 93 en 1952.

En 1952 los gastos totales del Gobierno para higiene pública sumaron alrededor de £100,000, lo cual representa un 8% de los gastos totales del Territorio y el doble de la suma invertida el año anterior.

El Consejo había señalado anteriormente la insuficiencia de los servicios médicos en el Territorio y había hecho recomendaciones encaminadas a su mejoramiento, subrayando sobre todo la necesidad de contratar más funcionarios médicos y de preparar personal indígena. La Misión Visitadora de 1952, aunque tuvo una impresión favorable de la tarea que se está realizando en las instituciones de formación profesional médica de la Costa de Oro (que también sirven al Territorio en fideicomiso) estimó que aun tendrá que pasar mucho tiempo antes que estas instituciones pudieran preparar personal en número suficiente para influir en la situación existente en el Togo.

El Gobierno de la Costa de Oro encontró serias dificultades para poder mantener el cuadro existente de médicos oficiales, y en 1952 no estuvo en condiciones de poner en práctica la decisión de emplear un funcionario más en cada uno de los tres hospitales del Togo. Abriga la esperanza de poder instalar un médico de categoría superior en Ho para que se encargue de todos los servicios médicos en la región del Togo Trans-Volta. Con respecto a los servicios de formación profesional, comunicó que estaba aumentado la inscripción de alumnas en los colegios de formación profesional de enfermeras y en los hospitales de práctica y que también se estaban ampliando los servicios de formación profesional de inspectores y demás personal auxiliar. El Gobierno de la Costa de Oro sintió, sin embargo, por motivos económicos, tener que aplazar toda decisión acerca de la instalación, en un futuro próximo, de una Escuela de Medicina que ha de formar parte del Colegio Universitario de la Costa de Oro.

La Misión Visitadora en 1952 consideró que era necesario suministrar a los hospitales y dispensarios existentes equipo médico en abundancia, ya que a su juicio no era fácil conseguirlo a veces. Recomendó además que la Autoridad Administradora estudiase la cuestión de los honorarios en los diversos hospitales y dispensarios porque, al parecer, las tarifas no son uniformes. La Autoridad Administradora replicó que recientemente se había mejorado la organización del abastecimiento de productos médicos y que en el plan de desarrollo se prevé la construcción de un depósito farmacéutico regional en Ho. No admitió que en las tarifas, que se fijan de acuerdo con un reglamento, se observasen diferencias de un hospital a otro, pero declaró que el Ministerio de Higiene Pública de la Costa de Oro estaba realizando un estudio general de las escalas de aplicación de precios y honorarios.

En su 13º periodo de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes observaciones:

El Consejo, tomando nota con satisfacción de la expansión registrada en los servicios médicos y sanitarios, especialmente la duplicación de las sumas invertidas en este terreno, considera, sin embargo, que las necesidades de la población en materia de medicina y sanidad siguen siendo grandes y que aun queda campo para un mayor esfuerzo, en particular en la formación de personal médico africano; al mismo tiempo, apoya a la Autoridad Administradora en su política de concentrar más sus esfuerzos en pro de la labor de las unidades médicas móviles especializadas y de la medicina preventiva.

SALARIOS Y COSTO DE LA VIDA

Los asalariados que trabajan con regularidad forman una pequeña minoría de la población. Con excepción de la mano de obra empleada estacionalmente en las plantaciones de cacao (que se calcula de 20.000 a 25.000 personas) los principales empleadores son la Administración y las autoridades indígenas. Los salarios que se pagan en todo el Territorio se fijan generalmente a base de los que paga la Administración.

El Consejo había recomendado anteriormente que la Autoridad Administradora revisara su política de salarios teniendo en cuenta los resultados de los estudios proyectados sobre el costo de la vida. Hasta ahora no se habían realizado en el Territorio tales estudios sobre el costo de vida pero en 1952 se revisaron las

escalas de salarios de los empleados de la Administración. En proporción, los jornaleros recibieron los mayores aumentos. En la parte meridional se aumentó el jornal de los obreros no especializados en un 33%, hasta 4 chelines por día. Por primera vez se elevaron los salarios en el norte a un nivel igual a los del sur, representando un aumento del 65% sobre los salarios y los subsidios por costo de vida que se pagaban anteriormente. Las escalas de sueldos mensuales pagados por la Administración en 1952 variaron de 5 libras por mes para los obreros no especializados a 12 libras por mes para los carpinteros.

Se informa que los trabajadores de las plantaciones de cacao están empleados conforme a un sistema de representante-capataz, en cuyo caso reciben un tercio del producto; o bien mediante un sistema de comisiones, en el cual la remuneración se hace mediante una comisión percibida por cada carga que pueden soportar sobre la cabeza (siendo éste el sistema más popular), o bien mediante una paga anual contratada de 12 a 20 libras; o, en algunos casos menos comunes, mediante un salario temporal de aproximadamente 2 chelines y 6 peniques por día. La Misión Visitadora informó que el salario medio aproximado de un trabajador en las plantaciones de cacao empleado conforme al sistema de comisión era de 5 libras por mes. Además, en virtud de los sistemas de representante-capataz, de comisiones y de contrato, los trabajadores reciben comida, alojamiento, herramientas y ropa de trabajo.

En su 11° período de sesiones, el Consejo había recomendado que la Autoridad Administradora realizase un detallado estudio de los movimientos estacionales de los trabajadores, especialmente los empleados en la industria del cacao, y de sus condiciones de trabajo. La Misión Visitadora hizo una recomendación análoga, en la cual se señalaba que, por más que la Administración mantenía una pequeña oficina de trabajo en la parte meridional del Territorio, no había en ella ningún inspector del trabajo de categoría superior y por lo tanto no existía una verdadera fiscalización o control de la situación de la mano de obra en las plantaciones del cacao. Consideró que, teniendo presente el hecho de que en la industria del cacao es donde trabaja la mayoría de los trabajadores asalariados en el Territorio y en vista de la importancia que tiene la industria del cacao para la economía del Territorio, la Autoridad Administradora debería hacer nuevos estudios sobre las condiciones de trabajo con el objeto de mejorarlas, especialmente en lo relativo a la vivienda, y debería considerar la posibilidad de nombrar un funcionario de categoría superior encargado de fiscalizar el trabajo en el Territorio.

La Autoridad Administradora declaró ulteriormente que se había proyectado inaugurar una oficina regional del Ministerio del Trabajo en el Territorio en el curso del año 1953, con un funcionario auxiliar que fiscalizaría desde allí la forma en que se trataba a la mano de obra en la industria del cacao. También se aplicaría lo antes posible al Territorio el estudio de la mano de obra empleada en la zona de las plantaciones de cacao.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, recordando que en su 11° período de sesiones recomendó que se hiciera un estudio detallado de los movimientos y condiciones del trabajo estacional particularmente en las plantaciones de cacao y considerando que ni la Autoridad Administradora ni el Consejo cuentan aún con suficiente información sobre

el asunto, toma nota de que próximamente se ha de instalar un funcionario encargado de fiscalizar el trabajo en la parte meridional del Territorio y de que entre sus funciones figurará la realización de un estudio completo de las condiciones de la mano de obra, y expresa la esperanza de que se enviará este funcionario al Territorio lo antes posible y de que el Consejo recibirá pronto informes detallados que le ayudarán a examinar los movimientos y condiciones de la mano de obra estacional, incluyendo las condiciones de vivienda.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CASTIGOS CORPORALES

El representante de China observó con agrado que durante el año que se examina no se había impuesto ninguna sentencia de castigo corporal en el Territorio. Sin embargo, su delegación continuará pidiendo a la Autoridad Administradora que cumpla las repetidas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria que instan a que se elimine por completo esa forma de castigo.

El representante de Siria expresó su satisfacción por el hecho de que no se hubiese recurrido recientemente a los castigos corporales, pero su delegación desearía que se cumplieran totalmente las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria, a fin de que este tipo de castigo quede abolido pronto por completo.

El representante de la India expresó su preocupación por el mantenimiento del castigo corporal en el Código. Parecería necesario, conforme a los progresos modernos, que se derogase esa parte de la legislación, especialmente si se había dejado de aplicar en la práctica.

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS

El representante de China consideró que los progresos realizados en materia de servicios médicos y sanitarios son halagadores, pero solicitó que la Administración continuara intensificando sus esfuerzos en ese sentido.

El representante de Nueva Zelandia reconoció los esfuerzos de la Administración por desarrollar los servicios sanitarios, pero expresó cierta preocupación por el escaso número de médicos africanos existente en el Territorio.

El representante de Siria recomendó que se construyeran más hospitales y dispensarios mejor provistos y opinó que el tratamiento médico debería ser gratis, por más que ya no se negase la entrada al hospital a los pacientes por falta de dinero.

El representante de El Salvador señaló que la Misión Visitadora había preparado el camino para que el Consejo de Administración Fiduciaria hiciera varias recomendaciones, especialmente con respecto al número de hospitales y médicos y a la posibilidad de que se atendiera gratis a los pacientes en los hospitales.

El representante de la India consideró que aunque el personal africano en los servicios médicos seguía siendo muy escaso, se habían registrado visibles adelantos y observó que las sumas gastadas con este fin habían aumentado en aproximadamente un 100%. Expresó la esperanza de que la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en Brazzaville presaría en el futuro una ayuda mayor.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que, cotejando los informes anuales de la Autoridad Administradora correspondientes a los años 1929 y 1952, se observaba que en 1929 había cinco médicos, o sea un médico por cada 50.000 personas; en 1952 había seis médicos, pero debido al aumento de la población esto representaba solamente un médico por cada 68.000 personas. De modo que, en 25 años de administración británica, se ha registrado un retroceso bien definido en los servicios médicos. En el Territorio, para una población de 400.000 personas, sólo había tres hospitales y éstos no tenían el personal médico adecuado, ni el equipo, ni los medicamentos necesarios. Se exigía un pago por la atención médica, pero como la población no estaba en condiciones de pagar esos honorarios se veía evidentemente obligada a prescindir del tratamiento.

El representante especial de la Autoridad Administradora dijo que ésta reconocía que era necesario hacer mayores esfuerzos en cuestión de servicios médicos. Las autoridades locales tenían el propósito de establecer más dispensarios; pero no estaba seguro de que la Administración podía aceptar la indicación de construir más hospitales. Fuera de las obras actuales, no estimaba que en un futuro inmediato se fueran a construir nuevos hospitales en el Territorio. Lo que hacía falta, y se estaba en camino de conseguir, era la ampliación y modernización de los hospitales existentes, el mejoramiento de su equipo, y el aumento de su personal. Conforme a eso, la mejor manera de ampliar los servicios de hospital sería mejorar la red de carreteras y la superficie de las mismas y suministrar más abundantes y mejores servicios de ambulancias y teléfonos. También se tenía la intención, en cuanto fuera posible, de poner en cada hospital un médico más. Actualmente tiene más importancia las campañas de tratamiento en masa, con las cuales se lleva a los medicamentos hasta el corazón de las aldeas; en este momento debía darse prioridad a las actividades de las unidades médicas móviles en vez de instalar centros de tratamiento fijos.

TRABAJO, SALARIOS Y NIVEL DE VIDA

El representante de Siria compartió la ansiedad de la Misión Visitadora acerca del reducidísimo nivel de vida que se registra en el Territorio y se sintió desanimado al saber que el nivel de vida no es mucho mayor que el nivel mínimo de subsistencia, particularmente en el norte. Hace más de 40 años que el Territorio se encuentra bajo fiscalización internacional y habría que tomar medidas más energéticas para elevar el nivel de vida del pueblo, por complicado y difícil que sea el problema. Aunque comprendía las circunstancias explicadas por el representante especial, sentía al mismo tiempo la obligación de instar a la Autoridad Administradora a que intensificara mucho sus esfuerzos para organizar y orientar a las uniones sindicales. Además, como la mayor parte de la mano de obra tenía carácter temporal y estacional, habría que proporcionar a la población alguna clase de empleo que durara todo el año. Expresó la esperanza de que en el próximo informe anual de la Autoridad Administradora hubiera una información más detallada e indicios más alentadores de una mejor organización en esta materia.

El representante de Haití señaló lo bajo de los salarios pagados a los obreros de las plantaciones de cacao, la pobreza de sus alojamientos y la falta de contratos de trabajo. No existía en el Territorio ningún funcionario encargado de las cuestiones de trabajo que

tuviera la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de trabajo y los reglamentos respectivos. En el nivel de vida de los habitantes del Territorio se reflejaba claramente el notable contraste que existía entre las escasas ganancias de los obreros agrícolas y las utilidades obtenidas por la Junta de Comercialización del Cacao. La situación en el norte era muy poco envidiable; se había descuidado a los 44.000 konkombas, que se habían quedado sin dispensarios y con una pequeña escuela solamente, mientras que los caminos construidos en tiempo de la administración alemana habían sido cubiertos por la vegetación.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideró que el nivel de vida de la población indígena era intolerable. En el sur, los productores de cacao cobraban un precio bajo por su producto y los trabajadores agrícolas obtenían escasamente lo necesario para su subsistencia. En el norte, la situación era peor aún y la población vivía en un estado de hambre casi perpetua. Reinaban condiciones tales que la gente encarcelada vivía mejor que los que estaban en libertad; era una situación espantosa. Señaló particularmente el estancamiento registrado en la zona de Konkomba.

El representante especial de la Autoridad Administradora dijo que con la ayuda de la Administración se había formado a lo largo de un período de muchos años un congreso sindical muy vigoroso en la Costa de Oro, cuyas uniones tenían miembros en el Territorio. Se animaba a los obreros del Territorio a afiliarse a las uniones con sede en la Costa de Oro o a formar sus propios sindicatos. Dentro de poco se aumentará la asistencia, cuando el Territorio, en lugar de recibir visitas periódicas de los funcionarios encargados de las cuestiones de trabajo, disponga de un funcionario dedicado a ese propósito dentro de sus límites. Añadió que creía que tenía el deber de explicar al Consejo que en la Costa de Oro y en el Territorio en fideicomiso las uniones sindicales no son dirigidas por el Gobierno sino por los funcionarios elegidos por ellas mismas. En respuesta a la declaración de que los trabajadores en las plantaciones de cacao no ganaban siquiera lo suficiente para subsistir, dijo que esos obreros recibían habitualmente el sustento de los empleadores y que encima cobraban salarios de cinco libras por mes.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

POLÍTICA E INFORMACIÓN GENERAL

En enero de 1952 entró en vigor un plan de desarrollo acelerado de la enseñanza en la Costa de Oro y el Togo, cuya adopción fué recibida con agrado por el Consejo en su 11° período de sesiones. Su efecto más importante e inmediato fué la inauguración de la educación primaria gratuita (preparatoria y elemental) en toda la Costa de Oro y el Territorio en fideicomiso, reflejando un cambio de política determinado por el nuevo Gobierno de la Costa de Oro.

Como consecuencia, en 1952 la matrícula de niños en el primer curso primario fué 9.821, casi el doble del total registrado en 1950. Para hacer frente a este aumento, el número de escuelas primarias y del segundo ciclo fué aumentado en un total de 95, llegando así

del Togo que recibían educación secundaria, tenían becas de estudio, y de los 53 niños que asistían a las escuelas técnicas de la Costa de Oro, 27 lo hacían con becas de estudio. Seis alumnos de la parte sur tenían becas de estudio para las escuelas del segundo ciclo de enseñanza primaria.

El Togo mismo hasta 1953 sólo tuvo una escuela pública secundaria en Ho, donde el número de alumnos aumentó de 89 en 1951 a 152 en el año que se examina. Además, 291 alumnos (comparados con 166 en 1951) asistieron a escuelas secundarias ubicadas en la Costa de Oro, de ellos 243 eran de la parte sur y 48 procedían del norte. En Kpandú, en la parte sur, a principios de 1953 se abrió una nueva escuela pública secundaria. La Autoridad Administradora manifiesta que una de las iglesias mantiene una escuela secundaria y que hay varias escuelas secundarias particulares más pequeñas.

El Consejo ha expresado anteriormente su satisfacción por la inauguración de la escuela secundaria de Ho. También ha recomendado a la Autoridad Administradora que examine la conveniencia de dar mayor importancia a la enseñanza agrícola en los planes de estudios escolares. La Autoridad Administradora contestó que su política era formular un plan de estudios que no sólo preparara a los niños para satisfacer los requisitos académicos de las instituciones de enseñanza secundaria y superior sino que al mismo tiempo estuviera vinculado a las necesidades prácticas y no reflejara antecedentes puramente europeos. Para ello se estaban adoptando medidas para reorientar los planes de estudios en las zonas rurales, a fin de conceder mayor importancia a la agricultura. Una escuela comercial para la educación técnica será establecida en Kpandú, en el Togo meridional.

En el año que se estudia los gastos del Gobierno para educación ascendieron a £260.493, es decir, un 15,3% de los desembolsos totales. Los gastos de las autoridades locales para educación en la parte sur ascendieron a £15.028, es decir, un 17% de los desembolsos totales.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes observaciones y recomendaciones:

El Consejo hace suyas las observaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura según las cuales a) los datos estadísticos presentados por la Autoridad Administradora muestran un marcado aumento en los gastos de la educación; b) la alta prioridad concedida a la educación tanto en el presupuesto ordinario como en los programas de desarrollo es motivo de satisfacción; c) el éxito logrado en materia de educación primaria que consta en el informe anual de 1952 y la política que esto representa son también causa de satisfacción; d) los servicios educativos en la parte norte del Territorio están aún demasiado poco desarrollados, y e) el ritmo de expansión de la matrícula en la educación secundaria es rápido y puede ser considerado satisfactorio.

El Consejo, tomando en cuenta las observaciones anteriores relativas a la situación de los servicios educativos en la parte norte, reitera su anterior expresión de interés por la gran diferencia existente entre las dos regiones e insta nuevamente a la Autoridad Administradora para que haga un esfuerzo especial para mejorar los servicios en el norte y, en especial, para asegurar que las autoridades locales encargadas de la enseñanza en esa región cumplan adecuadamente la tarea que se les ha confiado.

MAESTROS Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS

Como ya se ha observado, la expansión del sistema educativo en el Territorio depende considerablemente de la formación de un número suficiente de maestros para las escuelas primarias y del segundo ciclo, y este problema se ha hecho más agudo al comenzar la educación primaria y elemental gratuita y el consiguiente aumento en la matrícula. Hasta que se disponga de los servicios de estos maestros, se están contratando maestros sin la formación profesional necesaria. En 1952 se contrataron 714 maestros para la enseñanza primaria y de segundo ciclo, aumentando así el total hasta 1.311. De este total, 1.118 eran profesores de enseñanza elemental, de los cuales 342 tenían formación profesional y 776 carecían de ella. De 143 maestros del segundo ciclo de la enseñanza primaria, 134 tenían formación profesional y 59 carecían de ella. El número de maestros del Togo que recibe una preparación adecuada se duplicó en 1952, siendo el total 431, de los cuales 226 asistieron a colegios en el Territorio y 205 a colegios en la Costa de Oro.

Durante el año que se examina se inauguró una nueva escuela normal en el Territorio, con la que ahora hay tres; todas ellas están ubicadas en la parte sur y ofrecen un curso de dos años para profesores de enseñanza primaria y elemental. En 1954 debe abrirse una escuela normal en Pusiga en la parte norte, lo que fué acogido con agrado por el Consejo, pero sólo una pequeña parte de su alumnado inicial estará compuesta por estudiantes del mismo Togo. En el sur se doblará la matrícula de uno de los colegios y en 1954 se establecerá un centro especial de formación profesional que ofrecerá cursos de seis semanas.

En su 13º período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes observaciones:

El Consejo, observando que la falta de maestros bien preparados se ha acentuado debido al gran aumento de la matrícula, consecuencia de la inauguración del sistema de educación primaria gratuita, acoge con agrado la apertura de una nueva escuela normal en la parte norte del Territorio, la duplicación de la matrícula de una de las dos escuelas en la parte sur y la proyectada organización de un centro especial de formación profesional en 1954.

ENSEÑANZA SUPERIOR

Ahora existen dos instituciones de enseñanza superior en la Costa de Oro a la cual tienen acceso los estudiantes del Territorio, el Colegio Universitario de la Costa de Oro y el Colegio de Tecnología de Kumasi, que se inauguró en 1952. El Colegio Universitario prepara a los estudiantes para los títulos del departamento de extensión universitaria de la Universidad de Londres y el Colegio de Tecnología ha inaugurado cursos de contabilidad profesional, secretaría e ingeniería. En 1953 se inaugurarán nuevos cursos.

En 1952, 36 de los 510 estudiantes del Colegio Universitario eran togoleses, y entre los 53 estudiantes del Colegio de Kumasi había un estudiante del Togo. (A principios de 1954 el número de togoleses en ambos colegios había aumentado hasta llegar a 58). Otros 22 estudiantes del Territorio estaban siguiendo cursos de un año de enseñanza superior en el Reino Unido y en los Estados Unidos. En 1951, el número total de estudiantes del Territorio en instituciones de enseñanza superior llegó a 28.

Cuarenta y cinco de los estudiantes togoleses tenían becas de estudio: los 36 que asistían al Colegio Uni-

fra había quedado reducida a un 17%. Se gastan sólo unos pocos miles de dólares con propósitos de educación. En la parte norte del Territorio no se han construido nuevas escuelas, no hay ninguna escuela secundaria ni escuela normal para la preparación de maestros y es casi imposible, según la Misión Visitadora, encontrar allí alguien que sepa leer y escribir. Las normas de instrucción de las escuelas no son satisfactorias y, según la UNESCO, un 30% del personal de las escuelas secundarias y el 70% del personal de las escuelas elementales no está bien preparado. No existen instituciones de enseñanza superior o técnica en el Territorio y el número de becas concedidas a los togoleses es insignificante.

El representante especial de la Autoridad Administradora aceptó que la aceleración del desarrollo de la educación en la parte norte del Territorio era un fin muy deseable. La Administración siempre había seguido la política de vincular al pueblo de cada región tan estrechamente como fuera posible con los planes de su sistema educativo para que el objetivo pudiera ser apoyado con un entusiasmo creciente por el pueblo de la región septentrional, aceptando los mayores impuestos locales que probablemente deberían pagar con ese fin. Con respecto a la eliminación de la diferencia existente entre el norte y el sur, ésta continuará, pues, aunque se están haciendo progresos en el norte, no se puede contener el adelanto en el sur y el ritmo más rápido del desarrollo educativo del sur implica que por varios años continuará existiendo cierta diferencia. La descripción del sistema educativo en

un estado de estancamiento no se aplica de ninguna manera al Territorio en fideicomiso, como puede verse al comparar las estadísticas de los años 1939 y 1952. El representante especial señaló además que en el año 1951-1952 la Administración había gastado más de £260.000 para educación y dijo que la afirmación de que hay grandes zonas donde casi no se encuentran personas que sepan leer y escribir plantea el problema de saber quiénes habían escrito el gran número de peticiones recibidas por la Misión Visitadora. Finalmente señaló las observaciones de la UNESCO según las cuales la gran importancia dada a la educación por las autoridades, tanto en el presupuesto ordinario como en los trabajos de desarrollo, era un motivo de satisfacción; que el éxito obtenido en materia de educación primaria consignado en el informe de 1952 y la política general eran también causa de satisfacción y que el ritmo de crecimiento de la educación secundaria era rápido y podía ser considerado satisfactorio.

MAESTROS Y FORMACIÓN DE MAESTROS

El representante de Siria subrayó la necesidad de que haya más maestros mejor preparados.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y POPULAR

El representante de China consideró digno de elogio el esfuerzo hecho por la Administración para fomentar la educación popular. Sin embargo, hasta que se haya eliminado totalmente el analfabetismo deberá intensificarse este esfuerzo.

Capítulo VII

TOGO BAJO ADMINISTRACION FRANCESA

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

Togo bajo administración francesa está situado en la costa occidental de Africa, entre el Territorio en fideicomiso de Togo bajo administración británica y Dahomey. El Territorio abarca una superficie de 55.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y presenta una gran variedad de relieve y de población. Entre los extremos septentrional y meridional del Territorio se pueden discernir cinco zonas geográficas y dos grupos étnicos principales. La población del Norte, que está parcialmente islamizada, se distingue por una organización tradicional particularmente fuerte y la autoridad de los jefes se extiende sobre vastos grupos políticos y sociales. Por el contrario, los habitantes de la parte meridional del Territorio han estado sometidos a una fuerte influencia europea. En ciertas regiones, las fronteras no corresponden a las líneas de demarcación nacionales o étnicas.

La población indígena, calculada en 1.029.946 habitantes, está compuesta principalmente de agricultores. El número de los habitantes no africanos se elevaba en 1952 a 1.427 personas, y, en su mayoría, eran funcionarios públicos, misionarios y empleados de comercio.

EL PROBLEMA DE LA UNIFICACIÓN DE TOGO

A solicitud de la Asamblea General (resolución 750 (VIII) del 8 de diciembre de 1953), las reivindicaciones y contrarrevindicaciones de los movimientos políticos en los dos Territorios del Togo a favor de la posible unificación de ambos Territorios constituyen un tema sobre el cual el Consejo presentará a la Asamblea General el nuevo informe especial que ella le pidió para su noveno período de sesiones.³⁴⁷

DESARROLLO PROGRESIVO HACIA EL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDENCIA

Por sus resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII), la Asamblea General invitó a las Autoridades Administradoras a incluir en sus informes anuales datos relativos, entre otras cosas, a las medidas ya adoptadas o que se proyectase adoptar para conducir al Territorio en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia, y al cálculo aproximado del tiempo que considerasen necesario para ejecutar las diversas medidas destinadas a alcanzar ese objetivo. Se pidió al Con-

sejo se sirviera incluir en sus informes a la Asamblea General una sección separada que tratase del cumplimiento de las disposiciones de dichas resoluciones.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Bélgica estimó que la situación en Togo bajo administración francesa revelaba un progreso general.

El representante de la India declaró que no podía menos de sentirse preocupado por la situación que reina en el Territorio; le parecía que la Autoridad Administradora no se daba bien cuenta de la urgencia de la obra que había que realizar ni de las necesidades de la población que se manifiestan con una fuerza a menudo irresistible. Dijo, además, que en muchos respectos la situación en el Territorio dejaba mucho que desear.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas opinó que la situación política y social en el Territorio, así como la situación de la enseñanza, eran muy poco satisfactorias y que la Autoridad Administradora no cumplía las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al régimen internacional de administración fiduciaria.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

SITUACIÓN JURÍDICA DEL TERRITORIO

El Territorio forma parte de la Unión Francesa en calidad de "Territorio asociado". En virtud de esta asociación, el poder legislativo es ejercido en el Territorio por los órganos legislativos de la Unión Francesa, en los cuales Togo está representado por un representante en la Asamblea Nacional, por dos representantes en el Consejo de la República y por un representante en la Asamblea de la Unión Francesa. Otras disposiciones de la Constitución Francesa de 1946 han conducido a la creación de una Asamblea Territorial dotada de poderes precisos que le permiten tomar decisiones o emitir dictámenes sobre cuestiones administrativas y presupuestarias de interés local. Así pues, los habitantes indígenas han recibido la calidad de ciudadanos de la Unión Francesa, con los derechos y libertades que garantiza la Constitución.

El Consejo de Administración Fiduciaria ha tenido ocasión de examinar la relación entre Togo y la Unión Francesa, especialmente respecto a la situación jurídica del Territorio y a su desarrollo económico conforme

³⁴⁷ Resolución 750 A (VIII) de la Asamblea General.

al régimen internacional de administración fiduciaria, tanto al estudiar los informes anuales como al considerar cuestiones relativas a las uniones administrativas y de otra índole en que Territorios en fideicomiso son partes. El Consejo ha tomado nota de las seguridades dadas por la Autoridad Administradora, de que, oportunamente, los habitantes tendrán el derecho de decidir ellos mismos si desean continuar formando parte de la Unión Francesa o si prefieren volverse independientes. Además, el Consejo ha expresado la opinión de que la Autoridad Administradora debe mantener la situación jurídica separada del Territorio, a fin de conducirlo a la autonomía o independencia. Invitado por la Asamblea General³⁴⁸ a que le sometiera un análisis completo de la situación jurídica que para Togo bajo administración francesa resulta de su calidad de miembro de la Unión Francesa, el Consejo estimó que nada indicaba que la aplicación práctica de los acuerdos administrativos concertados entre Togo bajo administración francesa y la Unión Francesa fuese incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Administración Fiduciaria y que, según las explicaciones suministradas por el representante de Francia, la relación entre el Territorio en fideicomiso y la Unión Francesa parece ser conforme con las disposiciones de la Carta y del Acuerdo de Administración Fiduciaria. Declaró, sin embargo, que no se consideraba competente para juzgar los principios de derecho constitucional que podían haber servido de base a los acuerdos concertados entre el Territorio en fideicomiso y la Unión Francesa.³⁴⁹

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente conclusión:

El Consejo, teniendo presentes los objetivos del régimen internacional de administración fiduciaria, tomando nota de las observaciones formuladas por la Autoridad Administradora respecto a la relación entre el Territorio en fideicomiso y la Unión Francesa, observaciones según las cuales, cuando dejen de estar sometidos al régimen internacional de administración fiduciaria, los pueblos de los territorios en fideicomiso serán dueños, si así lo desean, de realizar sus aspiraciones fuera de la Unión Francesa, y recordando las recomendaciones aprobadas por el Consejo anteriormente a este respecto, expresa la convicción de que esta relación seguirá siendo conforme con los términos del Acuerdo de Administración Fiduciaria y con las disposiciones de la Carta.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Durante el año a que se refiere este informe, la estructura administrativa no sufrió ningún cambio. El *Commissaire de la République*, que representa a la Autoridad Administradora, está encargado de aplicar en el Territorio las leyes de la Unión Francesa que conciernen al Territorio. Dicho funcionario está facultado para elaborar reglamentos y puede promulgar ordenanzas, bien por iniciativa propia, bien en ciertas materias, después de consultar con el *Conseil privé*, o bien para ejecutar las decisiones de la Asamblea Territorial.

En su 11° período de sesiones, el Consejo había subrayado la necesidad de transformar el *Conseil privé*,

compuesto de altos funcionarios y notables indígenas designados, en un órgano organizado de una manera más representativa, y expresó la esperanza de que este órgano sería transformado progresivamente en un consejo ejecutivo ligado orgánicamente con la Asamblea Territorial. En su 13° período de sesiones, la Autoridad Administradora informó al Consejo que un proyecto de ley tendiente a que se substituyera el *Conseil privé* por un consejo de gobierno integrado en partes iguales por representantes elegidos por la Asamblea Territorial y por personas nombradas por el *Commissaire de la République*, había sido presentado a la Asamblea Nacional. Este Consejo de Gobierno tendría el poder de decisión sobre ciertas cuestiones, se reuniría más a menudo que el *Conseil privé* e informaría a la Asamblea Territorial sobre la ejecución de las medidas consideradas en esa Asamblea.

En el curso de 1952 se constituyeron dos nuevos distritos administrativos (*cercles*), elevando así a nueve el número total de los distritos. Cada distrito está dirigido por un administrador provisto de ciertos poderes de decisión.

Los jefes indígenas, asistidos por consejos consuetudinarios, siguen ejerciendo ciertas funciones administrativas, independientemente de sus funciones consuetudinarias; pueden asimismo ser llamados a presidir tribunales consuetudinarios en materia civil. En sesiones anteriores, el Consejo examinó ciertas cuestiones relativas a las funciones de los jefes; tomó nota de ciertas reclamaciones según las cuales los jefes seguían siendo en realidad funcionarios; tomó nota asimismo de que la Autoridad Administradora había puesto en efecto reformas tendientes a reforzar la autoridad de los jefes y las garantías tradicionales de sus cargos. El Consejo expresó la esperanza de que sería posible integrar a los jefes en la estructura administrativa, pero la Autoridad Administradora declaró que esa medida no parecía ni posible ni conveniente, debido al puesto mismo que los jefes ocupan en la sociedad y porque perderían su autoridad moral al convertirse en funcionarios. La Autoridad Administradora añadió que la evolución de las jefaturas se efectuaría sin duda más eficazmente gracias a la creación de asambleas locales.

La Misión Visitadora de 1952 oyó reclamaciones relativas al pago de tributos consuetudinarios a los jefes, en especie y, a veces, en forma de servicios. Los peticionarios comparaban esos tributos al trabajo forzoso y pedían su abolición. La Autoridad Administradora informó a la Misión que esos tributos no podían ser considerados como trabajo forzoso y que ella no quería poner término bruscamente a todas las tradiciones consuetudinarias, siempre que no fueran incompatibles con los principios de la civilización; añadió que era su deber procurar que dichos pagos se mantuvieran estrictamente dentro del nivel acostumbrado. La Misión reconoció que era difícil poner término bruscamente a tradiciones de esa clase y estimó que, mientras esas tradiciones subsistieran, había que adoptar medidas para evitar que fuesen objeto de abusos. La Misión estimó que procedía fijar el monto de esos tributos, a fin de permitir a las personas que lo desearan pagar el equivalente en dinero.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

Tomando nota de que el Parlamento francés está estudiando un proyecto de ley tendiente a que el Conseil privé sea reemplazado por un consejo de gobierno,

³⁴⁸ Resolución 563 (VI) de la Asamblea General.

³⁴⁹ Véase el Informe especial del Consejo de Administración Fiduciaria sobre las uniones administrativas en que territorios en fideicomiso son partes, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo período de sesiones, Suplemento No. 12*, documento A/2151.

que estaría integrado en partes iguales por representantes elegidos por la Asamblea Territorial y por personas nombradas por el Commissaire de la République, que tendría el poder de decisión sobre ciertas cuestiones y que informaría a la Asamblea Territorial sobre la ejecución de las medidas examinadas por la Asamblea, el Consejo de Administración Fiduciaria expresa la esperanza de que ese proyecto de ley será aprobado en un porvenir cercano y que el Consejo de Gobierno así constituido tendrá amplios poderes de decisión.

El Consejo recomienda a la Autoridad Administradora emprender un estudio especial del sistema actual de tributos consuetudinarios pagaderos a los jefes, a fin de determinar si, en las actuales circunstancias, esos tributos no podrían ser reducidos y si no sería posible reemplazar, para aquellos que así lo deseen, las prestaciones en especie y en servicios debidos a los jefes, por pagos en dinero a tasas fijadas por la Administración.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los empleados europeos de la Administración aumentaron de 188 en 1951 a 242 en 1952, todos los cuales, con excepción de 21, estaban en las categorías superiores, en tanto que los empleados indígenas en las categorías superiores aumentaron de 223 a 339 y, en las categorías inferiores, de 4.627 a 4.900.

En su 11° período de sesiones, el Consejo tomó nota de que se había realizado algún progreso para aumentar el número del personal indígena en la Administración y de que todos los puestos de la Administración estaban al alcance de los habitantes indígenas que poseyeran los diplomas necesarios. Habiendo, sin embargo, observado que sólo un pequeño número de habitantes indígenas ocupaba cargos superiores en la Administración, el Consejo invitó a la Autoridad Administradora a que intensificara la preparación de aspirantes indígenas debidamente calificados para cargos administrativos y judiciales, y a que estudiara medidas para alentarlos a hacer carrera en la administración pública. Por su parte, la Misión Visitadora de 1952 opinó que se debía intensificar la formación profesional de africanos para responder a los deseos expresados por los dos principales grupos políticos de ver a un mayor número de africanos ocupar cargos superiores en la Administración. En sus observaciones al informe de la Misión, la Autoridad Administradora declaró que los jóvenes provistos de los diplomas necesarios podrán, a medida que retornen al Territorio, ocupar una gran parte de los cargos superiores desempeñados hasta ahora por europeos.

El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que, en conformidad con la política seguida por ella, dos distritos agrícolas habían sido colocados bajo la dirección de ingenieros agrónomos africanos y que cuatro comisarias de policía habían sido confiadas a africanos.

La Autoridad Administradora informó asimismo al Consejo que un nuevo reglamento relativo a la contratación de personal destinado a cargos superiores entró en vigor en 1953 y permite contratar directamente a personas provistas de ciertos diplomas y llenar cargos superiores con funcionarios calificados de las categorías locales.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora continuará intensificando la preparación de aspirantes indígenas debidamente calificados para cargos administrativos y de que tomará todas las disposiciones necesarias para mejorar las condiciones de empleo y para alentar a los africanos a trabajar en el Territorio.

PARTIDOS POLÍTICOS

En el Territorio existen tres partidos políticos. El Partido de la Unidad (Comité de l'unité togolaise), principal campeón de la unificación de los dos Togos, ha pedido el otorgamiento sin demora del gobierno propio o de la independencia como medio para alcanzar ese objetivo; según la Autoridad Administradora, la finalidad que persigue es agrupar de nuevo a los dos Territorios unificados con Costa de Oro. El Partido del Progreso (Parti togolais du progrès) favorece la evolución del Territorio hacia la autonomía interna dentro del marco de la Unión Francesa; sobre este punto, su programa es idéntico al del tercer partido, la Unión de Jefes y de Pueblos del Norte (Union des chefs et des populations du nord). Una cuarta organización política, el Movimiento de la Juventud Togolesa o Juvento (Mouvement de la jeunesse togolaise) está considerada por la Autoridad Administradora como una rama del Partido de la Unidad.

La Misión Visitadora de 1952 señaló en su informe que las relaciones entre los dos grandes grupos políticos eran muy tirantes. La Misión tuvo la impresión de que, desde mayo de 1952, la cooperación entre la Administración y los dirigentes del Partido de la Unidad había mejorado ligeramente, pero comprobó, sin embargo, que había todavía divergencias fundamentales entre la Administración y los dirigentes del partido.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo toma nota de la declaración del representante de la Autoridad Administradora, según la cual la tensión política en el Territorio ha disminuído algo, insta a los partidos políticos del Territorio a desarrollar sus actividades sin perder de vista las graves responsabilidades que les incumben, y expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora vigilará atentamente la situación y garantizará la libertad de expresión y de reunión en toda la medida compatible con la preservación del orden público.

ASAMBLEA TERRITORIAL

En cumplimiento de la ley del 6 de febrero de 1952, de la que el Consejo tomó nota en su 11° período de sesiones, la Asamblea Representativa fué convertida en Asamblea Territorial, elegida por un solo colegio electoral en vez del colegio doble. Los miembros de la Asamblea Territorial fueron elegidos el 30 de marzo de 1952. La Autoridad Administradora indicó que los 30 asientos fueron repartidos de la siguiente manera entre los diversos grupos políticos: la Unión de Jefes y de Pueblos del Norte, 14; el Partido del Progreso, 6; el Partido de la Unidad, 7; los Independientes, 2; y la Unión de Organizaciones Sindicales (Union des syndicats), 1. Posteriormente, dos representantes que habían sido elegidos como candidatos del Partido de la Unidad dimitieron de dicho partido y uno de ellos se adhirió al Partido del Progreso.

Al igual que su predecesora, la Asamblea Territorial presta asesoramiento y toma decisiones respecto a determinadas cuestiones relacionadas con la administración del Territorio. El Consejo había observado anteriormente que esas atribuciones estaban limitadas a las cuestiones financieras y administrativas; en particular, la Asamblea no tenía la iniciativa en materia legislativa. El Consejo recomendó que los poderes de la Asamblea fueran ampliados progresivamente; la Autoridad Administradora declaró ulteriormente que, de hecho, la Asamblea posee el poder de legislar respecto a un gran número de cuestiones de interés local, y llamó la atención del Consejo sobre un proyecto de ley que haría pasar a la categoría de los asuntos sometidos a la decisión de la Asamblea a un número máximo de cuestiones sobre las cuales hasta entonces a ella se la consultaba solamente. El Consejo tomó nota con satisfacción de esta declaración y expresó la esperanza de que el informe anual para 1951 indicaría que la Asamblea ha recibido poderes legislativos ampliados.

Ulteriormente, al ser informado de que se estaba estudiando un proyecto de ley mucho más liberal que el de 1951, el Consejo expresó la esperanza de que ese proyecto de ley sería aprobado en breve y de que otorgaría poderes más amplios a la nueva Asamblea Territorial. En su informe anual correspondiente a 1952, la Autoridad Administradora indicó que ese proyecto de ley, que amplía los poderes de la Asamblea Territorial, y especialmente su poder de decisión, había sido aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a la Asamblea Nacional. La Misión Visitadora de 1952 observó que una gran parte de la población del Territorio parecía desear que se ampliaran progresivamente los poderes de la Asamblea en materia de legislación. En sus observaciones sobre el informe de la Misión Visitadora, la Autoridad Administradora señaló que los poderes de la Asamblea son considerablemente más amplios que los de las asambleas locales de los otros territorios franceses de ultramar y, en particular, que los de las asambleas de los territorios del África occidental francesa.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando que en su 11° período de sesiones expresó la esperanza de que el proyecto de ley relativo a la Asamblea Territorial, que había sido sometido al Parlamento francés, sería aprobado próximamente y otorgaría poderes más amplios a la Asamblea Territorial, expresa la esperanza de que ese proyecto de ley será promulgado lo más pronto que sea posible.

CONSEJOS REGIONALES Y MUNICIPALES

Los consejos de distrito (*conseils de circonscription*), creados en 1951, se reunieron durante el año que se examina para discutir, entre otras cosas, el proyecto de presupuesto de cada distrito, la tasa del impuesto local y el planeamiento y ejecución de obras públicas. Los consejos deben ser consultados sobre estas cuestiones, así como sobre varias otras categorías de asuntos. La Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria que los miembros de los consejos de distrito han comprendido perfectamente la importancia de la tarea que se les confía. Normalmente, estos consejos se reúnen dos veces cada año; el jefe del distrito o su representante asiste a todas las sesiones.

En su 11° período de sesiones, el Consejo tomó nota con satisfacción de las atribuciones importantes

confiadas a los consejos de distrito. Tomó nota asimismo de que se está estudiando un proyecto de ley tendiente a que se asignen a los consejos facultades aun más amplias. Conforme a ese proyecto de ley, los consejos de distrito tendrían el poder de decisión respecto a ciertos asuntos; cada distrito tendría su presupuesto, que sería votado por el consejo y alimentado por un impuesto de distrito y recargos adicionales; de esta manera, los consejos de distrito estarían dotados de poderes en materia financiera y administrarían los asuntos de la comunidad. En su 13° período de sesiones, el Consejo fué informado de que dicho proyecto de ley fué presentado a la Asamblea Nacional de diciembre de 1952. La Autoridad Administradora señaló asimismo que, de hecho, los consejos de distrito ya habían podido tomar decisiones en materia de tasas y de empleo del impuesto local.

En 1952 y 1953, se dió la condición jurídica de municipalidad a las poblaciones de Tsévié y Bassari, lo cual elevó a siete el número total de las municipalidades. Cada una posee una comisión municipal, elegida por sufragio universal directo, que tiene ciertos poderes en materia administrativa y presupuestaria. Con excepción de uno solamente, todos los miembros de las comisiones municipales son africanos. Cada comisión está presidida por un alcalde, escogido entre los funcionarios de la Administración. El Consejo fué informado por la Autoridad Administradora de que se ha aplazado la aprobación de una propuesta presentada en 1950 y tendiente a regir la población principal, Lomé, en *commune de plein exercice*, es decir, cuyo alcalde es elegido por la comisión municipal, hasta que se haya aprobado la legislación destinada al conjunto de los territorios franceses de ultramar. Según el informe anual correspondiente a 1952, probablemente otros tres centros urbanos serían dotados de la condición jurídica de municipalidad en 1953. La Misión Visitadora de 1952 expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría medidas complementarias para dar a los miembros de la Asamblea Territorial, de los consejos de distrito y de las comisiones municipales más datos sobre la organización, el funcionamiento y los poderes de esos órganos representativos.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando que en su 11° período de sesiones comprobó con satisfacción que la Autoridad Administradora había seguido creando consejos de distrito y confiado a las comisiones municipales atribuciones más importantes, y que expresó la esperanza de que el proyecto de ley que dotaría a esos órganos de atribuciones aun más amplias sería promulgado próximamente, espera que el proyecto de ley presentado al Parlamento francés será promulgado lo más pronto posible.

SUFRAGIO

Los habitantes del Territorio eligen sus representantes en la Asamblea Nacional Francesa, en la Asamblea Territorial, en los consejos de distrito y en las comisiones municipales. Los representantes del Territorio en otros dos órganos de la Unión Francesa, el Consejo de la República y la Asamblea de la Unión Francesa, son escogidos por la Asamblea Territorial.

En su 11° período de sesiones, el Consejo instó a la Autoridad Administradora a que procurara que todas las personas aptas para tomar parte en las elecciones

podieran inscribirse en los padrones electorales y a que alentara a todos los votantes inscritos a ejercer sus derechos a fin de lograr que el sufragio universal se realice cada vez más en la práctica.

En su informe anual correspondiente a 1952, la Autoridad Administradora declaró que, en virtud de una nueva ley electoral promulgada ese mismo año, el cuerpo electoral había sido ampliado por el otorgamiento del derecho de sufragio a las personas cabezas de familia y que el número de los electores inscritos había pasado de 30.915 en 30 de marzo de 1952 a 113.279 un año después. La Autoridad Administradora estimó que esta ley electoral constituía un paso decisivo hacia el sufragio universal y señaló especialmente que el número de electores en el norte del Territorio había aumentado de 22.750 en 1952 a 60.711 en 1953.

De 50.915 electores inscritos, 41.904 votantes tomaron parte en las elecciones a la Asamblea Territorial que se efectuaron en marzo de 1952. Con excepción de 433 papeletas nulas, todos los votos fueron válidamente expresados y los candidatos del Partido de la Unión de Jefes y de Pueblos del Norte recibieron 20.316 sufragios, los del Partido de la Unión 10.650 y los del Partido del Progreso 10.505. La Autoridad Administradora señaló al Consejo que en el curso de las elecciones municipales que se efectuaron en Tsévié en 1952 fueron elegidos candidatos de diversos grupos políticos. Añadió que las muchas elecciones que se habían sucedido en el Territorio en el curso de los tres últimos años habían familiarizado a capas cada vez más numerosas de la población con el procedimiento electoral y les habían hecho comprender la importancia de inscribirse en los padrones electorales.

Según las peticiones relativas al derecho de sufragio, ya examinadas por el Consejo, el número total de los electores inscritos en el Territorio representaba aproximadamente 5,1% de la población, mientras que en la colonia vecina de Dahomey la proporción de los electores inscritos era de 30%.

La Autoridad Administradora explicó que, a su juicio, la proporción más elevada de los electores inscritos en Dahomey se debía a que la evolución política de ese Territorio era más antigua, a que las mujeres de Dahomey pagaban impuestos, lo cual facilitaba su identificación para la inscripción en los padrones electorales, y a que la inscripción de las mujeres en los padrones electorales no está todavía plenamente aceptada en el Togo.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando las recomendaciones que ya ha aprobado respecto a la cuestión del derecho de sufragio, así como las disposiciones de la resolución 750 B (VIII) de la Asamblea General relativa a la misma cuestión, toma nota con satisfacción de que el número de los electores inscritos en el Territorio continúa aumentando; toma nota de la declaración del representante de la Autoridad Administradora según la cual el establecimiento del sufragio universal de los adultos figura, sin duda alguna, entre las intenciones de su Gobierno; insta a la Autoridad Administradora a que instituya un sistema de sufragio universal y directo por escrutinio secreto, y expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora alentará a todos los electores inscritos a ejercer su derecho de voto, a fin de instituir progresivamente en el Territorio un sufragio verdaderamente universal.

El régimen judicial del Territorio, que en 1952 siguió siendo esencialmente idéntico a como era en 1951, se basa en una distinción fundamental entre el derecho público y el derecho privado, el derecho privado comprendiendo el derecho consuetudinario, por una parte, y el derecho reglamentario, por la otra. El derecho consuetudinario lo explican los tribunales indígenas, mientras que el derecho reglamentario es aplicado por los tribunales franceses.

En cuanto al derecho público, el código penal es aplicado sin distinción a todos por los tribunales franceses. El representante especial de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13° período de sesiones, que se habían establecido en 1953 dos de los tres *justices de paix à compétence étendue*, creados por el decreto en 1951. Las apelaciones de los fallos penales de los tribunales inferiores del Territorio, que se dirigían anteriormente a Dakar, deben dirigirse ahora al Tribunal de Apelaciones de Abidjan en la Costa del Marfil. Durante 1952, el número de tribunales indígenas o consuetudinarios aumentó de 19 a 22.

El Consejo había tomado nota anteriormente de las medidas adoptadas para despojar a los funcionarios administrativos de funciones judiciales y había recomendado a la Autoridad Administradora que preparara un número suficiente de personal indígena de carrera para ocupar todos los puestos en el poder judicial. El informe correspondiente a 1952 menciona que ocho becarios del Territorio siguen cursos de derecho en Francia. La Misión Visitadora estimó que el ejercicio de la profesión de abogado no debía depender de un acto del Poder Ejecutivo, sino estar subordinado exclusivamente a la competencia de las autoridades judiciales superiores. En sus observaciones sobre el informe de la Misión, la Autoridad Administradora declaró que los abogados podían ejercer su profesión con absoluta libertad, que su designación no era más que una formalidad administrativa destinada a confirmar la propuesta de las autoridades judiciales y que el *Commissaire de la République* no podía rechazar dicha propuesta.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de los Estados Unidos de América expresó que la evolución de la situación en el África occidental habrá de influir en el progreso político de toda África y contribuirá mucho a atenuar el carácter crítico del problema colonial. Luego de recordar la opinión expresada por su delegación sobre la evolución de la situación en otras regiones del África occidental, observó que el Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración francesa pronto estará rodeado por naciones dotadas de gobiernos autónomos. Es fácil entrever las complicaciones a que tal situación puede dar lugar, así como las dificultades que pueden producirse cuando dos territorios limítrofes evolucionan a un ritmo diferente. El representante de los Estados Unidos reconoció que el tiempo es el factor esencial de una evolución bien ordenada. Pero para que el ritmo de esa evolución siga siendo ordenado hay que asociarlo al impulso cada día más vivo del nacionalismo africano. Este nacionalismo es una fuerza que puede ser canalizada, pero que ni puede ni debe ser detenida. Por otra

parte, una evolución demasiado rápida podría conducir a una autonomía prematura, en la que el comunismo entraría por la puerta trasera mientras la independencia sería echada por la ventana. En resumen, el ritmo del progreso es el elemento más crítico de toda evolución.

Refiriéndose a una declaración del representante de Francia, de que la terminación del Régimen de Administración Fiduciaria en el Togo bajo administración francesa no impedirá en modo alguno a dicho Territorio determinar su propia suerte, bien dentro de la Unión Francesa, bien fuera de ella, y de que es a la Asamblea Territorial a quien corresponde pedir un referéndum que permita al pueblo ejercer su derecho a gobernarse a sí mismo, el representante de los Estados Unidos dijo que sólo el porvenir podrá indicar la fecha de ese referéndum, pero que felizmente la índole de las relaciones que existen en el seno de la Unión Francesa parece permitir a los Territorios en fideicomiso aliarse con Francia como naciones soberanas e independientes.

El representante de los Estados Unidos tiene la esperanza de que ocurrirán grandes acontecimientos en el África occidental, que permitirán crear un mundo no colonial cuya energía aumentará la aptitud de los pueblos libres del mundo entero para atraer a otros a su filosofía de libertad.

El representante de la India dijo que la Autoridad Administradora se preocupa mucho menos por satisfacer las aspiraciones políticas que por satisfacer las necesidades materiales, que están bastante bien atendidas; y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora dará pruebas de tanta energía e iniciativa en el campo político como en los campos económico, social y educativo.

SITUACIÓN JURÍDICA DEL TERRITORIO

Para el representante de la India, la teoría de los territorios asociados es una teoría peculiar, según la cual un territorio es primero incorporado en la Unión Francesa, sin consultar los deseos de su población, pero que luego, si el territorio trata de salir de la Unión, esos deseos se vuelven soberanos. Su delegación estima que se trata no sólo de un problema de derecho constitucional, sino también de un problema humano que interesa profundamente a los habitantes del Territorio. La Autoridad Administradora no puede indefinidamente pretender aplacar a la opinión pública con dosis homeopáticas de reforma política.

El representante de Nueva Zelandia estimó que la asociación con la Unión Francesa proporcionaba al Territorio ventajas importantes y que las grandes tradiciones de la República Francesa no podían considerarse como un obstáculo para la consecución de los objetivos de la Carta. Estaba seguro de que, cuando los habitantes del Territorio fueran llamados a hacer su elección definitiva, el Gobierno de Francia no dejaría de dar plena satisfacción a sus deseos.

El representante de Australia dijo que, a su juicio, la relación entre el Territorio y la Unión Francesa no es incompatible ni con la Carta ni con los Acuerdos de Administración Fiduciaria.

El representante de Siria recordó la declaración del representante de la Autoridad Administradora, según la cual la asociación del Togo con la Unión Francesa era una asociación externa y que nada impedía que el Territorio alcanzara la independencia en el momento oportuno. Recordó asimismo que esa cuestión había sido debatida en varias ocasiones por el Consejo y que se

había considerado que el Territorio no podía ser incorporado en la Unión Francesa sin el consentimiento pleno de los habitantes indígenas.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas afirmó que la Autoridad Administradora había violado la condición jurídica especial y distinta del Togo, como Territorio en fideicomiso, al incorporarlo en la Unión Francesa; la absorción del Territorio en dicha Unión le ha quitado toda posibilidad de desarrollarse y existir como entidad política independiente. Los intereses del Territorio no estaban en modo alguno garantizados dentro de la Unión Francesa. El Togo sólo tiene tres representantes en los órganos de la Unión Francesa y esos representantes no ejercen ninguna influencia apreciable. En consecuencia, las funciones legislativas han sido cedidas a órganos del Territorio metropolitano. Afirmó, además, que el Consejo debía recomendar que se instituyeran en el Territorio órganos legislativos y administrativos distintos que no dependieran de ningún órgano gubernamental fundado en la idea de la unión del Territorio con las colonias francesas. Sería conveniente que se adoptaran medidas legislativas y de otra índole para asegurar la participación de la población indígena en los órganos recomendados.

El representante de la Autoridad Administradora manifestó que estaba enteramente de acuerdo con el representante de Siria respecto a la situación jurídica del Territorio en el seno de la Unión Francesa. En respuesta al representante de la India, el representante de la Autoridad Administradora dijo que el Togo habría podido permanecer fuera de la Unión Francesa. No había sido menester obligarlo a asociarse. La única diferencia habría sido que los habitantes habrían sido privados de ciertos privilegios, tales como, por ejemplo, representación en el Parlamento y tratamiento igual al de los ciudadanos franceses en todos los territorios de la República.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

El representante de Bélgica estimó que la política de la Autoridad Administradora respecto al tributo consuetudinario y, en particular, a las autoridades consuetudinarias, no estaba claramente definida. Declaró que el reconocimiento oficial del derecho de los jefes a recibir tributos consuetudinarios era una buena cosa a condición de limitarlos teniendo en cuenta la situación actual y con tal que a las personas que así lo deseen les sea posible liberarse de la carga de tales tributos mediante el pago de una suma en dinero a una tasa fijada por la Administración.

Refiriéndose a la situación de los jefes y al pago de tributos consuetudinarios, el representante de Haití observó que, a pesar de la vigilancia de la Autoridad Administradora, a menudo esos tributos dan lugar a abusos. A su juicio, la Autoridad Administradora debía estudiar la sugestión de la Misión Visitadora respecto a la facultad de redimirse de la carga de los tributos mediante el pago de una suma en dinero. Ese problema requería una solución y el Consejo debía subrayar su gravedad.

El representante de la India dijo que en algunas partes de África el sistema tribal y las costumbres tribales habían sido puestas al servicio de la democracia, pero que en Togo parecían constituir obstáculos para su desarrollo. El pago de tributos consuetudinarios a los jefes no había sido abolido en el Territorio y a menudo tomaba la forma de trabajo forzoso. Al señalar

también que los jefes desempeñaban asimismo un gran número de funciones administrativas, el representante de la India consideró que sería preferible que esas funciones se confiaran a funcionarios pagados por la Administración. El jefe conservaría así su situación de padre de su pueblo, sin tener poderes políticos. El representante de la India no quería en modo alguno sugerir que debía abolirse el sistema tribal, porque se daba cuenta de los peligros de carácter económico, social y espiritual que esa medida podría acarrear. Estimaba solamente que en Togo el sistema tribal estaba siendo incorporado a la administración de un régimen democrático en una forma tan torpe e ineficaz que tendería a anular el espíritu democrático del régimen.

El representante de Nueva Zelanda recordó la importancia que el Acuerdo de Administración Fiduciaria atribuía al respeto de las costumbres y la cultura indígenas y declaró que la obligación de respetar las costumbres tradicionales, por una parte, y, por otra, la de promover el progreso político no eran necesariamente incompatibles con tal que la Autoridad Administradora las cumpliera a un ritmo que no fuera perjudicial a los intereses de los habitantes indígenas. Dijo asimismo que seguramente el Consejo deseará expresar la esperanza de que el proyecto de ley que prevé el establecimiento de un Consejo de Gobierno será aprobado para 1955.

El representante de El Salvador manifestó que los tributos consuetudinarios pagados a los jefes debían abolirse y que la Misión Visitadora había propuesto un buen método para poner gradualmente término a los tributos consuetudinarios que habían de pagarse en especie o en servicios. Ese método permitiría a las personas que así lo desearan pagar en dinero. Si este sistema de pagar en dinero se generalizara, los pagos en servicios o en especie desaparecerían gradualmente.

El representante de Australia tomó nota con satisfacción de las propuestas de la Autoridad Administradora relativas a la creación de un Consejo de Gobierno.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que, a pesar de las opiniones que el Consejo había expresado claramente, la Autoridad Administradora se había obstinado en favorecer el sistema tribal en el Territorio y hasta había reforzado los poderes de los jefes tribales por medio de medidas legislativas. Los jefes son, además, los agentes de la Administración encargados de funciones tales como la recaudación de los impuestos y la ejecución de las decisiones de la Administración.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estimaba que el Consejo debía señalar a la atención de la Autoridad Administradora la necesidad de adoptar medidas que permitieran al Territorio pasar del sistema tribal, que es un sistema atrasado, a un sistema autónomo y democrático.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que su Gobierno había respetado siempre las costumbres y las instituciones consuetudinarias, que son la base auténtica y viviente de la sociedad indígena. Se conocen los peligros de una supresión demasiado rápida de las instituciones tradicionales. La política de su Gobierno era permitir que las costumbres evolucionaran libremente bajo la influencia del progreso de la instrucción y del desarrollo de relaciones de toda índole con pueblos de culturas diferentes. Los legisladores habían tratado de proporcionar a los habitantes un medio de sustraerse, si así lo deseaban, al imperio de la costumbre, tanto respecto a su condición personal

como respecto a sus bienes. Por eso, el proyecto de ley relativo a las instituciones legislativas togoleesas tiende a que en adelante se confiera a la Asamblea Territorial el derecho de determinar las costumbres y de organizar el estado civil de los ciudadanos en virtud del derecho consuetudinario. La Asamblea se convertirá, pues, en la legislatura ordinaria en lo tocante al derecho civil togolés. En cuanto a los jefes, el representante de la Autoridad Administradora declaró que ellos son las autoridades naturales. Son a la vez el símbolo y la garantía de las libertades locales y, como tales, merecen ser respetados mientras conserven la confianza de la población.

El representante de la Autoridad Administradora manifestó que los *conseils de circonscription* y los consejos municipales habían sido creados para promover la evolución democrática hacia la democracia. La Autoridad Administradora utiliza a los jefes porque ellos constituyen, en las regiones donde prevalece el sistema tribal, el único intermedio posible. Reemplazarlos con funcionarios sería ineficaz, desacertado, a veces imposible y siempre muy costoso.

El representante de la Autoridad Administradora hizo observar que los tributos consuetudinarios recibidos por los jefes no presentaban los inconvenientes que habían sido señalados, pero declaró que transmitiría a su Gobierno las observaciones del representante de Bélgica.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El representante de Haití deploró que entre los funcionarios de categoría superior de la Administración sólo figuraba un funcionario togolés. En su opinión, no era dudoso que sería posible encontrar entre los jóvenes que cursaban estudios en las escuelas de enseñanza superior de la Metrópoli personas que estuvieran dispuestas a servir en la Administración, pero el representante de Haití se preguntaba si la Autoridad Administradora los había alentado suficientemente a hacerlo.

El representante de China tomó nota de los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora para aumentar el número de africanos empleados en los servicios administrativos. No obstante, compartía la esperanza de la Misión Visitadora de que se preparara a un mayor número de africanos para ocupar cargos de categoría superior en la Administración.

El representante de la India declaró que quizás uno de los aspectos menos satisfactorios de la situación política era que sólo hay un número muy pequeño de togolese en la Administración. Los togolese ocupan una proporción ínfima de los cargos, en las distintas categorías, y observó que se notaba una disminución de su número aun en las categorías inferiores. Era asimismo desalentador oír decir que los togolese instruidos no tenían ningún deseo de ocupar cargos públicos. El representante de la India estaba seguro de que entrarían al servicio de la administración pública si las condiciones de empleo les parecieran satisfactorias y si se les hiciera comprender que, al volverse funcionarios, trabajarían para sus compatriotas y para su propio Gobierno. En opinión del representante de la India, los togolese no son incapaces de administrar sus propios asuntos. No bastaba que tuvieran la posibilidad de hacerlo; era menester ofrecerles también incentivos. Además de ofrecer privilegios democráticos a la población, era menester proceder a la africanización de la burocracia gubernamental. Lo uno no podía lograrse sin lo otro.

El representante de El Salvador manifestó que, si bien la Administración había prestado atención a la cuestión de proporcionar medios de enseñanza a los habitantes indígenas para permitirles desempeñar un papel activo y directo en la administración de Togo, todavía no se había atribuido al problema toda la importancia que merece; por eso, la Autoridad Administradora debía empeñarse aún más en encontrar una solución a ese problema particularmente importante.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que del informe anual de la Autoridad Administradora se desprende que todos los cargos administrativos importantes están ocupados por europeos. Los indígenas no desempeñan más que los cargos secundarios o puramente técnicos.

El representante especial de la Autoridad Administradora dijo que sólo pueden citarse muy pocos casos de estudiantes togolese que hayan rehusado entrar en el servicio de la Administración después de terminar sus estudios. Antes de 1952, todos los estudiantes, con pocas excepciones, habían solicitado y obtenido empleos administrativos. La Administración había recibido solicitudes de empleo presentadas por estudiantes que terminarán próximamente sus estudios. La Administración local está dispuesta a ofrecer a la *élite* togolese el lugar que le corresponde, pero en interés del equilibrio de la sociedad importaba que esa *élite* no abandonara las profesiones liberales.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que las plantillas generales eran comunes a todos los territorios de ultramar administrados por Francia. La disminución del personal en la plantilla de los puestos inferiores se debe a que los funcionarios dotados de la calificación necesaria habían sido reclasificados, y asignados a puestos de categoría superior, medida que había sido aprobada y apreciada por las organizaciones de funcionarios.

PARTIDOS POLÍTICOS

El representante de Nueva Zelandia consideró que la disminución de la tirantez política en el Territorio constituía un progreso alentador, y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora vigilaría cuidadosamente la situación y garantizaría la mayor libertad de expresión y de reunión compatible con la preservación del orden público.

El representante de El Salvador estimó que se debían adoptar todas las medidas necesarias para disminuir cuanto fuese posible la tirantez que existía entre el Parti togolais du progrès y el Comité de l'Unité togolaise, a fin de lograr que en adelante sus relaciones se desarrollen en un ambiente de cordialidad y mutua comprensión.

El representante de Australia expresó la esperanza de que los dos partidos políticos rivales del Territorio darán recíprocamente pruebas de una mayor tolerancia, lo cual les permitiría coadyuvar más eficazmente al progreso de su país.

El representante de Siria señaló que existía tirantez entre los partidos políticos y llamó la atención sobre las observaciones presentadas por la Misión Visitadora a ese respecto. Expresó la esperanza de que la Ley de 1881 relativa a las asociaciones sería aplicada en el Territorio con toda la equidad y la justicia necesarios. El sistema francés en materia de asociaciones y partidos políticos es, a su juicio, excelente y su aplicación en el Territorio permitirá a todos los partidos desarrollarse; así, no sería posible arrojar un velo sobre

las actividades ni sobre las intenciones de ningún partido.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que no era en modo alguno sorprendente que la Misión Visitadora hubiese encontrado un ambiente de tirantez en el Territorio. Atribuyó esa tirantez al Comité de l'Unité togolaise que había tratado de crear ese ambiente y de influir en el ánimo de la Misión Visitadora. La agitación de ese grupo está encaminada a una finalidad bien conocida: la realización de la unidad togolese. Esa agitación no tenía otra base política y no descansaba sobre ningún motivo de orden social. Perseguir el objetivo de la unificación no era en modo alguno reprehensible, pero la Autoridad Administradora desaprobaba los procedimientos empleados por el partido para llegar al poder. Siempre había autorizado las reuniones públicas y sólo había prohibido las manifestaciones en la vía pública. El representante de la Autoridad Administradora declaró que la agitación había disminuido, pero no desaparecido enteramente; sin embargo, la situación que existía en Togo no era en modo alguno inquietante.

ASAMBLEA TERRITORIAL

El representante de China tomó nota con interés de las medidas que la Autoridad Administradora se proponía adoptar para extender los poderes de la Asamblea Territorial; expresó la esperanza de que las leyes previstas no tardarían en ser promulgadas y de que el próximo informe anual contendría datos precisos sobre este particular.

El representante de la India observó que ciertos proyectos de reformas políticas que habían sido sometidos al Parlamento Francés desde hacía 15 meses, todavía no habían sido objeto de una decisión. Ese hecho no podía considerarse de buen augurio y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría próximamente las medidas previstas. Observó que como resultado de esas reformas, los diversos órganos elegidos en el Territorio serían casi exclusivamente de carácter consultivo y deliberativo y no tendrían poderes ni legislativos ni ejecutivos. Por consiguiente, estimó que los togolese no tendrían control directo sobre la Administración que los gobierna.

El representante de Australia estimó que el Consejo debía felicitar a la Autoridad Administradora por haber ampliado las atribuciones de la Asamblea Territorial dentro del marco de las leyes existentes y por haber previsto nuevas disposiciones para ampliarlas aún más.

El representante de Siria declaró que la Asamblea Territorial tal como estaba constituida actualmente era defectuosa, ya que no era un órgano soberano y seguía estando bajo el control de la Autoridad Administradora. Uno de los objetivos del Régimen de Administración Fiduciaria es permitir a las asambleas representativas de los territorios en fideicomiso actuar casi sin control. La Asamblea Territorial sólo tenía las características de una asamblea administrativa y hasta ahora no había examinado cuestiones de orden estrictamente legislativo. Aunque es cierto que la Asamblea tiene la facultad de votar el presupuesto, según el representante de Siria existe una diferencia jurídica entre la facultad de votar el presupuesto y la de votar las leyes. La propia votación del presupuesto estaba sometida al control de la Administración local y no podía sostenerse que la Asamblea ejerciera un poder legislativo. Además, la Autoridad Administradora hasta ha llegado a reconocer que quien ejerce el poder legislativo del

Territorio es el Parlamento francés. El poder legislativo de la Asamblea Territorial debía ser ampliado progresivamente para que oportunamente fuera posible otorgar a dicha Asamblea la plenitud del poder legislativo. El representante de Siria expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora estudiaría la cuestión.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Asamblea Territorial no tenía ningún poder legislativo y ni siquiera podía tomar una decisión sobre las cuestiones relativas al presupuesto local. Añadió que, en el Territorio, el poder ejecutivo es ejercido exclusivamente por el Comisionado francés y funcionarios franceses.

El representante de la Autoridad Administradora afirmó que, además del derecho de aprobar deliberaciones que eran equivalentes a decisiones, la Asamblea tenía un poder análogo a los de los parlamentos en lo relativo a la aprobación del presupuesto y a otras cuestiones similares. Se trata de un poder esencial, y es absolutamente imposible gobernar contra la voluntad de la Asamblea. Había casos importantes en que los deseos del Gobierno eran contenidos efectivamente por la Asamblea. Añadió que no compartía la opinión del representante de Siria, quien había afirmado que la Asamblea tenía atribuciones puramente administrativas. Al contrario, los poderes de la Asamblea son indiscutiblemente políticos puesto que cualquier cambio que afecte la condición jurídica del Territorio debe obligatoriamente serle sometido.

CONSEJOS REGIONALES Y MUNICIPALES

El representante de China tomó nota con interés del proyecto de reforma de los *conseils de circonscription* y expresó la esperanza de que las leyes anunciadas serían promulgadas pronto.

El representante de Australia señaló que la Autoridad Administradora había establecido un sistema muy acertado de órganos municipales representativos y que se había dotado a un mayor número de poblaciones de la condición jurídica de municipalidad.

SUFRAGIO

El representante de China dijo que si bien la ampliación del electorado era un hecho importante, era de lamentar, sin embargo, que el sufragio universal para los adultos aun no hubiese sido instituido.

El representante de la India declaró que el sistema electoral deja mucho que desear. El número de las personas inscritas en los padrones electorales es todavía muy limitado y aunque habrá de aumentar hasta 150 000 en un porvenir cercano, el cuerpo electoral distará mucho de representar el 50% de la población adulta. El derecho de voto que, a su juicio, debía ser otorgado automáticamente a todos los adultos, está subordinado a demasiados requisitos. No había razón para que no se instituyera el sufragio universal de los adultos, de manera que se suprimiera la diferencia de trato entre los electores analfabetos y los que saben leer y escribir, o la distinción ridícula entre las madres de un hijo y las madres de dos o más hijos. Era posible instituir el sufragio universal de los adultos, aun tratándose de una población de analfabetos, sin llegar al caos.

El representante de la India observó igualmente que el número de los electores en el Territorio había quedado limitado por el hecho de ser los jefes de tribus quienes distribuyen las tarjetas electorales; a su juicio, ese método no es nada democrático. La Autoridad Ad-

ministradora había alegado que se veía obligada a recurrir a esas autoridades locales porque no le era posible identificar individualmente a cada elector, pero el representante de la India no podía aceptar ese razonamiento, ya que la experiencia de su país ha demostrado que un gobierno puede perfectamente inscribir a todos los adultos en los padrones electorales.

El representante de Nueva Zelandia tomó nota con satisfacción del aumento del número de electores inscritos y expresó la esperanza de que el ritmo de aumento de los últimos tres años sería mantenido.

El representante de El Salvador señaló que se había realizado algún progreso en el acrecentamiento del número de electores del Territorio.

El representante de Siria observó que la ley electoral aplicable en el Territorio no establece el sufragio universal, sino un sufragio limitado, y que muchos habitantes no votan. Expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora lograría pronto instituir un régimen de sufragio universal para la elección de representantes ante la Asamblea Territorial y ante el Parlamento francés.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas observó que el sufragio universal sólo se aplicaba a los europeos y que, como resultado de las diversas restricciones que están implícitas en la lista de las 16 categorías de ciudadanos que tienen derecho a votar, 113.000 personas solamente estaban inscritas en los padrones electorales, teniendo el Territorio 400.000 adultos. A su juicio, esa situación requería la introducción del sufragio universal.

El representante de la Autoridad Administradora manifestó que cada una de las 16 condiciones enumeradas basta por sí misma para garantizar el derecho de sufragio a todos los togoleses adultos de sexo masculino, que pueden hacerse inscribir en los padrones electorales a condición de identificarse debidamente. La costumbre hace que haya pocos solteros en el Territorio y los togoleses que se casan tarde a menudo son sujetos evolucionados que pueden pretender al derecho de voto en razón de su instrucción.

Respecto al electorado femenino, el representante de la Autoridad Administradora reconoció que la fórmula actual, que otorga el derecho de voto a las madres de dos o más hijos, es una transacción que puede criticarse desde el punto de vista de los principios. Pero era preferible recurrir a una transacción aceptable para la opinión de la población indígena, que desafiar a esa opinión y poner así en peligro toda la causa de la emancipación de la mujer. En virtud de los textos actuales, la gran mayoría de las mujeres togolesas pueden votar si lo desean. Todas las mujeres de 21 años o más de edad, y las madres de menos de dos hijos pueden votar si saben leer. En los medios evolucionados, el sufragio universal de hombres y mujeres es la regla, sin limitación alguna. La institución del sufragio universal de hombres y mujeres forma parte del plan de la Autoridad Administradora. Está subordinada a consideraciones, no políticas sino materiales, tales como el establecimiento de cédulas de identificación, y morales. La distribución de las tarjetas electorales por los jefes no influye en nada en el número de los electores. Los jefes no intervienen en la preparación de las listas electorales, que son preparadas con arreglo a los procedimientos aplicados en la metrópoli. La distribución de tarjetas electorales no es más que una operación secundaria que se hace después de la inscripción de los electores.

El representante de El Salvador manifestó que su delegación compartía enteramente la opinión de la Misión Visitadora de que el ejercicio de la profesión de abogado no debía depender de un acto del Poder Ejecutivo, sino solamente de las autoridades judiciales superiores. Su delegación recomendó que se aboliera la pena de deportación por delitos políticos, porque ese castigo tenía un carácter antijurídico. Observó con satisfacción que los tribunales consuetudinarios habían funcionado de una manera satisfactoria en 1952 y que se habían creado tres nuevos tribunales consuetudinarios.

El representante de Australia se manifestó impresionado por el acierto con que la Autoridad Administradora enfoca el derecho consuetudinario y por la manera en que consagra su aplicación en la administración de la justicia sin desorganizar indebidamente el género de vida tradicional y las costumbres de la población.

El representante de Siria observó que existían dos clases de tribunales en el Territorio, los tribunales consuetudinarios y los tribunales franceses. Señaló que en los tribunales consuetudinarios la Autoridad Administradora no aplicaba verdaderamente el principio de la separación de los poderes judicial y ejecutivo y que esos tribunales estaban presididos por funcionarios públicos. Estimó que ese principio debía aplicarse a los tribunales indígenas. En cuanto a los tribunales franceses, el representante de Siria estimó que es contrario al principio de la separación de poderes conferir los poderes de *Procureur de la République* (Fiscal) a jueces de paz de competencia ampliada, que ejercían a la vez las funciones de jueces de instrucción. Recomendó a la Autoridad Administradora que aplicara en el Territorio los mismos principios que se aplican en Francia.

Señaló que no existía en el Territorio ningún tribunal de apelación y que las apelaciones interpuestas a las decisiones de los jueces de competencia ampliada tenían que ser dirigidas a un tribunal de apelación fuera del Territorio. A su juicio, eso constituía una anomalía judicial poco conforme con las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria. Observó asimismo que el Tribunal de Casación podía no sólo anular un fallo dictado por un tribunal del Territorio en fideicomiso, sino también remitir el asunto a un tribunal exterior al Territorio en fideicomiso. Sin dejar de reconocer el valor del Tribunal de Casación de Francia, estimaba que dicho tribunal no debía conocer de sentencias dictadas por los tribunales del Territorio en fideicomiso y que éste debía tener su propio tribunal de casación. Si esa reforma se considera prematura, el Tribunal de Casación de Francia debiera reenviar todo asunto juzgado por un tribunal del Territorio a otra jurisdicción del Territorio y no a un tribunal exterior.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que los tribunales del Territorio estaban compuestos de funcionarios de la Administración Francesa y por jefes y notables de las tribus y que, por consiguiente, era evidente que el sistema judicial era antidemocrático.

El representante de la Autoridad Administradora manifestó que la organización de los tribunales consuetudinarios permitía a los jefes y notables de las tribus ir más allá de la etapa de la conciliación y dictar sentencia, reenviando así a los indígenas a sus jueces

naturales. En respuesta a la declaración del representante de Siria referente al principio de la separación de poderes, el representante de Francia admitió que había una ligera desviación de ese principio en lo tocante a los tribunales consuetudinarios. Explicó que esa desviación se debía a la competencia limitada de esas jurisdicciones y a los poderes restringidos de los jefes o de los notables que las integran. Hay ya un comienzo de especialización del juez consuetudinario que conducirá a la aplicación efectiva del principio de la separación de poderes.

Con respecto a los jueces de paz de competencia ampliada, el representante de la Autoridad Administradora explicó que ellos podían ser llamados a actuar como fiscales, pero que no perdían por ello su calidad separada de magistrados. Añadió que los magistrados eran enteramente dueños de formular sus conclusiones conforme al dictado de su propia conciencia y rechazó la crítica fundada en el hecho de que las jurisdicciones togolesas están sujetas a revisión por una jurisdicción superior instalada en otro territorio de ultramar. Actualmente, las jurisdicciones de Togo son jurisdicciones francesas y el representante de la Autoridad Administradora no veía ni irregularidad ni falta de lógica en el hecho de que estuvieran controladas por otras jurisdicciones francesas, sea cual fuere su ubicación, estando bien entendido que esas jurisdicciones son independientes del poder político.

El representante de la Autoridad Administradora declaró asimismo que la Administración no ejerce ningún control sobre el tribunal de apelación de Abidjan, el cual juzga todas las apelaciones con la misma imparcialidad, sea cual fuere el Territorio de que provengan. Lo mismo puede decirse respecto a la jurisdicción de reenvío. El representante de la Autoridad Administradora añadió que conforme se vaya desarrollando la vida económica del Territorio, será necesario acercar la jurisdicción de apelación a Togo. Sin embargo, una medida semejante sería ahora verdaderamente inútil para la buena administración de la justicia y acarrearía una reducción de los gastos de inversión necesarios al progreso económico del Territorio. Lo mismo puede decirse respecto a la creación de un tribunal de casación.

Refiriéndose a las observaciones del representante de El Salvador, el representante de la Autoridad Administradora declaró que, tan pronto se establezca en Lomé un tribunal de apelación se instituirá en Togo una curia de tipo clásico, pero que, por el momento, el sistema de abogados defensores funciona satisfactoriamente. En cuanto a la cuestión de la deportación, el representante de la Autoridad Administradora respondió que esa pena no fué inventada para Togo, sino que existía en el Código Penal de la Autoridad Administradora.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La Autoridad Administradora declaró que en 1952 había ocurrido una pequeña disminución de la producción como resultado de la estabilización en el mercado mundial de los precios de las cosechas de exportación del Territorio. El volumen total de éstas ascendió a 27.067 toneladas, lo que representa un aumento de

269 toneladas solamente respecto de 1951. El incremento de la producción sigue siendo una de las principales preocupaciones de la Administración, ya que tal aumento permitiría al Territorio financiar el desarrollo económico y social con sus propios recursos. Por eso, en virtud del próximo período cuadrienal del plan de desarrollo, que fué examinado en 1952, los fondos se aplicarán principalmente a aumentar la producción y la productividad, tanto en la agricultura como en las industrias.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

El informe anual correspondiente a 1952 indica que la producción agrícola aumentó respecto a la del año precedente. En general, la producción de víveres fué excelente habiendo aumentado su volumen de 665.516 toneladas en 1951 a 864.145 toneladas en 1952. Las cosechas comerciales aumentaron ligeramente de 79.480 toneladas en 1951 a 80.028 toneladas en 1952.

En su 11° período de sesiones, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora intensificaría sus esfuerzos para difundir conocimientos agrícolas entre los agricultores indígenas. La Autoridad Administradora informó que, prosiguiendo sus esfuerzos encaminados a mejorar los métodos indígenas de cultivo, había procedido a crear, como parte del plan decenal de desarrollo nuevos centros de experimentación destinados a mostrar a la población las ventajas del cultivo mixto. Tres granjas prosiguen sus trabajos en materia de conservación de suelos y de mejoramiento de las cosechas de productos alimenticios, especialmente de palma oleaginosa y de cacao. En 1952 se continuó asimismo la campaña de protección fitosanitaria. Se establecieron dos industrias: una fábrica de tapioca y un molino para la extracción de aceite de palma.

La Misión Visitadora de 1952 se manifestó satisfecha con las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora en lo que respecta a la agricultura y la felicitó por haber establecido escuelas agrícolas y centros experimentales, prestado una ayuda eficaz a la agricultura, distribuido semillas y emprendido la formación agrícola de los indígenas. Sugirió que la Autoridad Administradora estudiara la posibilidad de garantizar al productor local un precio lucrativo y suficientemente estable para sus productos agrícolas, y opinó que convenía adoptar medidas para controlar los precios que los intermediarios pagan al productor local. En sus observaciones sobre el informe de la Misión Visitadora, la Autoridad Administradora declaró que, para el algodón y el aceite de maní, había sido posible fijar un precio suficientemente lucrativo gracias a los precios garantizados en Francia y, en otros casos, gracias a la influencia estabilizadora ejercida por las compañías de seguros las cuales agrupan a los vendedores a fin de obtener mejores precios. Además, en algunos distritos esas compañías han fundado cooperativas de compra con objeto de controlar los precios cobrados por los intermediarios.

Del montante de los créditos autorizados en virtud del plan decenal de desarrollo por valor de 177.120.000 francos CFA para el desarrollo de la producción, el 80% ha sido consagrado a la agricultura. En virtud de este programa se han establecido y están funcionando las granjas agrícolas y los centros experimentales. La producción agrícola se beneficia también con la ayuda del Fondo para la Protección y el Equipo de la Producción Agrícola Local, financiado por medio de impuestos pagados por los exportadores. En 1952, se consagraron 35.000.000 de francos CFA a subvenciones

para los productores de café, de coco, de cacao, de palmas oleaginosas, de aceite de palma y de tapioca, a la protección fitosanitaria, a la distribución de semillas y plantones seleccionados, a la compra de maquinaria y a otras medidas.

En 1952 se calcula que el Territorio poseía 260.254 ovejas, 200.023 cabras, 175.409 cerdos y 103.991 cabezas de ganado vacuno. El informe anual señala que los servicios técnicos interesados continúan prestando atención a la lucha contra las enfermedades de los animales, así como a la alimentación, a la selección de los animales y a la crianza propiamente dicha.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes:

El Consejo, recordando la recomendación que formuló en su 11° período de sesiones respecto a la agricultura, toma nota con satisfacción de la mayor diversificación de las cosechas de exportación y felicita a la Autoridad Administradora por el establecimiento de granjas-escuelas y estaciones experimentales. Estima, sin embargo, que la Autoridad Administradora debiera intensificar sus esfuerzos para dar a conocer a la población indígena los métodos modernos de agricultura que pueden emplearse en el Territorio y para persuadir a los indígenas a que adopten esos métodos.

El Consejo comparte la opinión expresada por la Misión Visitadora de 1952, según la cual la Autoridad Administradora debiera estudiar la posibilidad de garantizar a los productores locales un precio suficientemente estable y lucrativo para sus productos y que debieran tomarse disposiciones para controlar los precios que los intermediarios pagan al productor local.

TIERRAS Y RÉGIMEN DE TENENCIA DE TIERRAS

La Autoridad Administradora ha subrayado que la extensión del registro de tierras en el Territorio tiene mucha importancia ya que los agricultores sólo pueden obtener un préstamo si ofrecen una garantía adicional en forma de hipoteca. La inscripción de la hipoteca no puede hacerse sino respecto a propiedades registradas en el catastro. El número de los registros continuó aumentando en 1952, y se acrecentó en 118 unidades respecto al año anterior para llegar a un total de 344. Sin embargo, en el informe anual se declaró que el tipo más corriente de tenencia es el indígena, según el cual el individuo está limitado al derecho de usufructo sobre la tierra y no está en libertad de venderla o de disponer de ella en otra forma.

En 1952, solamente dos europeos recibieron títulos agrarios sobre tierras urbanas. La superficie de las tierras en poder de personas no indígenas en virtud de concesiones era de 565,64 hectáreas, de las cuales 218 hectáreas estaban en poder de misiones religiosas.

SILVICULTURA

En su noveno período de sesiones, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora continuaría adoptando las medidas necesarias para educar a la población respecto a la importancia de conservar los bosques en el propio interés del Territorio, a fin de poder vencer cuanto antes la oposición local. Según el informe correspondiente al año 1952, los bosques del Territorio cubren una superficie de 164.000 hectáreas. Aunque esa cifra acusa un aumento de 59.000 hectáreas respecto a 1951, la Autoridad Administradora señaló, sin embargo, que representa solamente el 3% de la superficie total del Territorio y el 7,2% de la superficie cubierta de árboles. Además, señaló que, al contrario de

los años precedentes, en 1952 no hubo oposición por parte de las poblaciones locales a la clasificación de las zonas cubiertas de árboles. Se están elaborando planes para la clasificación de una nueva zona forestal de 100.000 hectáreas en 1953. Se continuó la tala de tecas, dándose una parte de los árboles abatidos a las comunidades indígenas y la otra parte al Territorio.

INDUSTRIA Y MINERÍA

Fuera de los talleres del ferrocarril, de diversos talleres para la reparación de automóviles y de la central eléctrica de Lomé, todas las instalaciones industriales (plantas desmotadoras de algodón y de capoc, una fábrica de jabón, una fábrica de coco rallado, una nueva fábrica de tapioca y un molino para la extracción del aceite) están vinculadas con la elaboración de productos agrícolas. En 1952, los agricultores utilizaban 36 trituradoras mecánicas de nuez de palma, 57 desgranadoras mecánicas de café, 298 molinos de maíz y muchos molinos mecánicos para fabricar tapioca. En su 11° período de sesiones, el Consejo tomó nota con satisfacción de que había progresado el desarrollo de las industrias secundarias en el Territorio, y expresó la esperanza de que aquella tendencia fuese mantenida.

Se sabe que en el Territorio existen yacimientos de cromita, hierro, fosfatos y bauxita, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido explotado. El Consejo ha sido informado de que se están realizando estudios para determinar si la explotación de esos yacimientos daría resultados económicos. En su noveno período de sesiones, el Consejo expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora proporcionara más datos sobre las medidas adoptadas para determinar la importancia y el valor de los yacimientos mineros del Territorio. La Autoridad Administradora declaró que en el estado actual de las investigaciones no es posible calcular la importancia de los recursos mineros ni, por lo tanto, establecer un plan para el porvenir. En sus observaciones sobre el informe de la Misión Visitadora de 1952, la Autoridad Administradora declaró que los cateos efectuados recientemente en la región de Anecho han revelado la existencia de grandes yacimientos de fosfatos de alta calidad y que la producción anual podría llegar a 300.000 toneladas.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la conclusión y la recomendación siguientes:

El Consejo toma nota del progreso de la industrialización del Territorio, especialmente la construcción de fábricas para elaborar aceite de palma y tapioca, y vuelve a expresar la esperanza, como ya lo hizo en su 11° período de sesiones, de que el desarrollo actual de las industrias de elaboración continúe a fin de que la economía del Territorio pueda desarrollarse diversificándose.

COMERCIO INTERNACIONAL

Durante el período de 1949/1952, las exportaciones e importaciones alcanzaron las cifras siguientes:

	Toneladas	Valor (en millones de francos CFA)
a) Exportaciones		
1949	27.322	845
1950	44.488	1.528
1951	43.960	2.699
1952	40.603	2.081
b) Importaciones		
1949	38.432	1.454
1950	45.105	1.624
1951	57.115	2.331
1952	48.931	2.331

En contraste con el año precedente, la balanza comercial fué desfavorable en 1952; el déficit ascendió a 250.000.000 de francos CFA. La disminución del valor total de las exportaciones se debió a la reducción del valor y de la cantidad de las exportaciones de copra, nueces de palma, almendras de bambara, algodón, cacao y cueros.

El valor de las importaciones fué casi igual que en 1951. Sin embargo, las importaciones disminuyeron en 8.000 toneladas y la Autoridad Administradora manifestó que esa disminución debía atribuirse a una fuerte reducción de las importaciones de cemento, sal, azúcar y harina.

En cuanto a las principales exportaciones, la situación fué la siguiente:

	Toneladas	
	1951	1952
Semillas de algodón.....	2.531	2.813
Nueces de palma.....	7.526	8.156
Cacao	5.250	4.961
Almendras de bambara.....	2.264	571
Copra	6.212	2.271
Algodón (desmotado).....	2.187	1.927
Tapioca	49	3.368
Coco rallado.....	149	231
Capoc (desmotado).....	342	227
Maní (descascarado).....	3.473	3.714
Café	3.432	2.593
Ganado	3.574	3.793
Pescado seco.....	1.477	1.043
Harina de mandioca.....	3.162	2.462

El 52% de las exportaciones por peso y el 68% por valor fueron expedidos a países de la Unión Francesa. El principal abastecedor de mercaderías importadas fué Francia, que envió el 45,7% por peso y el 51% por valor de las importaciones totales de Togo.

SOCIEDADES INDÍGENAS DE PREVISIÓN SOCIAL Y COOPERATIVAS

En 1952 había dos cooperativas agrícolas y una cooperativa de consumo integradas en conjunto por 515 miembros. Se estaba organizando otra cooperativa.

En períodos de sesiones anteriores, el Consejo había felicitado a la Autoridad Administradora por haber establecido cooperativas entre los habitantes indígenas, pero también había lamentado que el desarrollo de las cooperativas era algo lento. Tomó nota, sin embargo, de las seguridades dadas por la Autoridad Administradora de que continuaría fomentando el establecimiento de cooperativas y proporcionando formación profesional al personal necesario. En su informe de 1952, la Autoridad Administradora declaró que este año dos indígenas y un europeo miembro de la administración territorial se habían matriculado en un curso de formación profesional en materia de cooperativas en Francia. Otras personas debían asistir al curso en 1953.

La Autoridad Administradora informó a la Misión Visitadora de 1952 que habían ocurrido pocos cambios respecto a las cooperativas en 1951 y 1952 debido a la renuencia de los agricultores indígenas a participar en tales programas. La Misión estimó que debía hacerse una campaña para demostrar a los habitantes los beneficios que pueden obtenerse de las cooperativas.

En 1952, el Fondo Común de las Sociedades Indígenas de Previsión (Fonds commun des Sociétés indigènes de prévoyance) concedió nueve préstamos por un total de 2.616.000 francos CFA, suma equivalente al 86% de sus ingresos durante el año. Según se informó en 1951, estaba en estudio un proyecto de decreto para

a costumbres y tradiciones antiguas que no responden a los deseos actuales de la población y que impiden desarrollar la riqueza del Territorio. Mientras la propiedad permanezca en un nivel colectivo o tribal, no será posible explotar las tierras adecuadamente. Estimó que debía aplicarse en el Territorio un sistema general de catastro que tendría por efecto precisar los derechos de los detentadores de terrenos y liquidar los derechos que existen sobre esos terrenos, antes de la promulgación de tal ley. Una reforma semejante sería beneficiosa para los propios campesinos y propietarios, porque si se ha de seguir aplicando el sistema de la propiedad colectiva, no se podrá realizar ningún progreso en la explotación de las tierras.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Autoridad Administradora persistía en enajenar sistemáticamente las tierras de los habitantes indígenas. Para hacerlo, a menudo recurría al pretexto de la clasificación de los bosques. La Autoridad Administradora sostenía que la clasificación se efectuaba con el pleno asentimiento de la población indígena, pero las peticiones y las declaraciones del representante especial mostraban claramente que no se consulta a ésta a ese respecto y que la enajenación se efectúa sin su consentimiento previo. El Consejo debía defender los derechos que los indígenas tienen sobre las tierras que ellos cultivan y llamar la atención de la Autoridad Administradora sobre el carácter inadmisibles de su política tendiente a privar a los indígenas de sus tierras.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que el sistema de catastro sugerido por el representante de Siria se estaba aplicando en el Territorio, y observó que en las regiones donde se cultivan plantas vivaces existe una tendencia creciente hacia la propiedad individual de las tierras bajo el régimen del registro.

El representante especial rechazó la afirmación del representante de la URSS, según la cual las tierras de los indígenas están siendo enajenadas sistemáticamente, y señaló que, por el contrario, el Togo es el Territorio donde menos tierras han sido enajenadas. Además, el régimen de tenencia de tierras protege eficazmente los intereses de los habitantes indígenas. Declaró que la clasificación de los bosques lejos de constituir una enajenación de tierras, sirve para preservar las regiones forestales que se estaban deteriorando rápidamente.

SILVICULTURA

El representante de Bélgica expresó su satisfacción por el progreso de la repoblación forestal, tarea que, a su juicio, es capital para el porvenir del Territorio. Observó con satisfacción que en el curso del año que se examina la Autoridad Administradora había conseguido que la Asamblea Territorial consintiera en la clasificación de los bosques.

INDUSTRIAS Y MINERÍA

El representante de Haití estimó que los esfuerzos desplegados por la Autoridad Administradora para explotar los recursos naturales del Territorio debían tender, en parte, al desarrollo de las industrias, especialmente construyendo fábricas para la extracción de aceite de semillas de algodón, además de las plantas para el desmote de algodón. Sugirió también que se creara una industria de elaboración del cacao.

El representante de Australia tomó nota del progreso logrado en la industrialización del Territorio; la construcción de fábricas de aceite de palma y de tapioca es alentadora a ese respecto.

El representante de Siria estimó que el ritmo actual del desarrollo de las industrias ofrece pocas garantías para el porvenir. Recomendó que la Autoridad Administradora tomara las medidas necesarias para desarrollar la industrialización del país.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que ha sido imposible hasta ahora establecer industrias pesadas en el Territorio porque el país es pobre en fuentes de energía eléctrica, sin las cuales tales industrias no pueden explotarse económicamente.

COMERCIO INTERNACIONAL

El representante de El Salvador opinó que conveniría tratar de encontrar una solución satisfactoria a las dificultades que experimentan algunas casas indígenas de exportación debido a que las licencias de exportación, atribuidas por concurso, son monopolizadas por las sociedades europeas que poseen recursos y capitales más considerables.

El representante de Siria observó que el actual sistema de licencias de importación y exportación sólo se aplica a los productos y mercaderías que no provienen de la Metrópoli. La unión monetaria existente entre la Metrópoli y Togo tiene como corolario el hecho de que los productos franceses pueden entrar en el Territorio sin licencia de importación; por consiguiente, puede haber cierta desigualdad de trato que beneficia a la Metrópoli. La Autoridad Administradora debía estudiar esta cuestión. Si se debía mantener el sistema de licencias, debía ser aplicado a todos los países, incluso la Metrópoli.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que en la práctica el sistema de licencias propuesto por el representante de Siria no podría ser aplicado. Llamó la atención sobre el problema de las divisas y expresó la opinión de que toda solución conduciría a imponer a la Metrópoli, que ya soportaba obligaciones financieras muy pesadas, cargas que acabarían por ser intolerables, o bien comprometería el desarrollo del Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que los precios pagados a los productores no dependen de la voluntad de la Administración local. Estos precios, calculados en relación con los precios mundiales, varían según los productos y la distancia a que se encuentra el lugar de su producción. En el caso del algodón, el productor recibe cerca del 63,6% del precio f.o.b., y en el caso del cacao, el 81,3%.

SOCIEDADES INDÍGENAS DE PREVISIÓN SOCIAL Y COOPERATIVAS

El representante de El Salvador opinó que el Consejo debía recomendar que se hicieran todos los esfuerzos posibles para fomentar el desarrollo de las cooperativas.

El representante de Australia se declaró frustrado en sus esperanzas por la falta de éxito de los esfuerzos considerables realizados por la Autoridad Administradora para popularizar las cooperativas, y estimó que los habitantes indígenas necesitarían algún tiempo para habituarse a este sistema. Observó que la Autoridad Administradora había tomado disposiciones para que los

habitantes indígenas puedan iniciarse en las técnicas cooperativas en Francia; si esas medidas reciben la debida publicidad deben contribuir a desarrollar las cooperativas en el Territorio.

HACIENDA PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN

El representante de China señaló la conveniencia de que el Consejo expresara su satisfacción por la abolición del impuesto personal directo.

El representante de Siria señaló que el Territorio no emite sus propios billetes de banco y que los billetes que tienen circulación en el Territorio también tienen circulación en otros Territorios. Añadió que el Parlamento francés está estudiando actualmente un proyecto de ley relativo a esta cuestión. Declaró que deben tenerse en cuenta los intereses económicos del Territorio, porque cuando el Territorio obtenga su independencia, serán necesarias largas y difíciles negociaciones si mantiene relaciones económicas y financieras demasiado estrechas con otros territorios.

El representante de Siria estimó que el régimen tributario vigente en el Territorio no es un sistema moderno. Después de reconocer que la Autoridad Administradora había realizado progresos a este respecto, expresó la esperanza de que esos progresos continuarían.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que las realidades económicas y financieras no permiten crear un banco de emisión en el Territorio. Los intereses del Togo están enteramente protegidos por los estatutos del Banque de l'Afrique occidentale, y el Territorio recibe una parte equitativa de las utilidades que realiza este banco en sus operaciones de emisión monetaria.

El representante especial de la Autoridad Administradora aclaró que la Autoridad Administradora ya había adoptado las medidas sugeridas por el representante de Siria respecto a la modernización del régimen tributario. Por ejemplo, había abolido el impuesto de capitación confundiendo con el impuesto general sobre la renta, lo cual hace que la población indígena sólo paga un mínimo de impuestos. En cuanto a la base impositiva dijo que ésta solo podrá modificarse progresivamente, conforme se vaya generalizando el registro civil. Finalmente el impuesto sobre los vehículos fué abolido en 1953.

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO

El representante de China observó con satisfacción que, si bien el segundo plan cuatrienal tiende principalmente a continuar el desarrollo de la producción, los caminos y los puentes tienen prioridad en las asignaciones de fondos.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

LIBERTADES FUNDAMENTALES

El goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales está legalmente garantizado a todos los habitantes del Territorio. A fin de mantener el orden público, ciertas actividades políticas están reglamentadas.

El Consejo tuvo anteriormente ocasión de examinar varias peticiones, emanadas especialmente de partidarios del movimiento de unificación, en las que se sostiene que la Autoridad Administradora ha adoptado medidas injustificadas para restringir el ejercicio de las libertades fundamentales. Al examinar algunas de dichas peticiones en su 12º período de sesiones, el Consejo tomó nota de declaraciones de la Autoridad Administradora según las cuales los cargos de persecución política carecían de fundamento; en otros casos, estimó que no procedía intervenir puesto que los tribunales del Territorio eran competentes para conocer de los asuntos de que se trataba; finalmente, en un caso acogió una sugestión de la Comisión Visitadora de 1952, según la cual la Autoridad Administradora debía adoptar medidas para impedir que los agentes de policía abusaran de su autoridad.

Los miembros de la Misión Visitadora de 1952 no pudieron ponerse de acuerdo respecto a la cuestión de la libertad de expresión, de reunión y de circulación. Dos de ellos lamentaron no poder declararse satisfechos, pero reconocieron que la tirantez política que originaba varias reclamaciones se debía, a menudo, a malas inteligencias entre la Autoridad Administradora y los jefes de ciertos partidos políticos. Según otro miembro de la Misión, esa tensión era resultado de las muchas elecciones efectuadas en el Territorio durante los tres últimos años, de la pérdida de influencia del Partido de la Unidad que, a su juicio, había llevado al Partido a adoptar una actitud hostil, tanto respecto a la Autoridad Administradora como respecto al partido adverso, y de que los programas políticos de los dos partidos son diametralmente opuestos. Añadía que la Autoridad Administradora no había prohibido nunca las reuniones públicas, pero que, deseosa de mantener el orden público, había rehusado poner a disposición de los partidos políticos los locales del municipio de Lomé.

En otro pasaje de su informe, la Misión sugirió que la Autoridad Administradora adoptara las medidas necesarias para impedir que los agentes de policía abusaran de su autoridad. La Misión agregó que las investigaciones que había efectuado habían mostrado que muchas de las denuncias de golpes, detenciones y encarcelamientos contenían alegaciones inexactas y que había hallado 34 casos de embustes entre las comunicaciones que le habían sido dirigidas.

En sus observaciones sobre el informe de la Misión Visitadora, la Autoridad Administradora declaró que la llegada de la Misión al Territorio había tenido el efecto de exasperar las pasiones políticas; eso había hecho que la calma, que reinaba en el Territorio hasta entonces, pareciera momentáneamente perturbada. La Autoridad Administradora añadió que el Partido de la Unidad esperaba, con sus intervenciones y sus peticiones dirigidas a la Misión, crear la ilusión de que constituía el partido más importante del país, y que la propia Misión había podido darse cuenta, por el número de las comunicaciones que le habían sido dirigidas y por el número de audiencias que había podido dar, de que la libertad de expresión y la libertad de circulación eran enteramente respetadas en el Territorio y sólo estaban limitadas por las exigencias del orden público.

La Autoridad Administradora declaró luego que la libertad de prensa, que era un hecho incontestable, estaba definida y reglamentada por ley de 1881 que sólo prevé sanciones en casos especiales en que el orden público o el respeto de la persona se ven amenazados

por medio de la prensa. Los casos de esta naturaleza son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales. No se impone ninguna restricción a la celebración de reuniones privadas o públicas; la jurisprudencia admite, sin embargo, que pueden ser prohibidas en algunos casos enteramente excepcionales en que el orden público esté amenazado, pero ninguna interdicción de esa clase ha tenido que ser pronunciada en el Territorio. Las reuniones en la vía pública están legalmente prohibidas. En cuanto a las manifestaciones, procesiones y desfiles en la vía pública, debe notificarse previamente la intención de celebrarlas y, en ciertas condiciones, son autorizadas. En conclusión, la Autoridad Administradora declaró que era posible que, en ciertos casos, algunas personas se hubiesen equivocado respecto al reglamento aplicable a tal o cual clase de reunión, pero que era más probable que otras se hubiesen prevalido adrede de la posibilidad de confusión para fines de propaganda.

El Consejo encontró otras reclamaciones de la misma índole en las peticiones que le fueron presentadas en su 10° período de sesiones.³⁵⁰

En sus observaciones sobre esas nuevas peticiones, la Autoridad Administradora declaró, entre otras cosas, que la libertad de expresión, de prensa y de reunión era completa en el Territorio y refutó todos los cargos de medidas que, según se alegaba, ella había tomado para prohibir la celebración de reuniones. Todas las manifestaciones organizadas con arreglo a los preceptos legales se habían efectuado con absoluta libertad; en muchos casos, la intervención de la policía había permitido a las partes interesadas celebrar sus reuniones sin tener que temer las manifestaciones de partido adverso.³⁵¹

En su 13° período de sesiones, el Consejo adoptó las recomendaciones siguientes:

El Consejo, tomando nota de que en 1952 la Misión Visitadora propuso que la Autoridad Administradora adoptara medidas para impedir que los agentes de policía encargados del mantenimiento del orden público en las reuniones públicas abusaran de su autoridad, y tomando asimismo nota de las declaraciones de la Autoridad Administradora según las cuales esas medidas fueron luego adoptadas, recomienda que la Autoridad Administradora se mantenga vigilante respecto a esta cuestión, y expresa la esperanza de que las personas que tomen parte en las reuniones públicas tendrán debidamente en cuenta, en su comportamiento, la necesidad de no perturbar el orden público.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

El Consejo de Administración Fiduciaria ha reconocido que es necesario mejorar la condición jurídica y social de la mujer y, en su séptimo período de sesiones, expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora adoptaría las medidas a tal efecto. En su 11° período de sesiones, el Consejo expresó su satisfacción por los progresos realizados. El informe anual correspondiente a 1951 indica que había 164 mujeres empleadas en los servicios administrativos, que los dos principales partidos políticos habían organizado secciones femeninas, que los ayuntamientos de Lomé, Palimé y Atakpamé comprendían cada uno una mujer entre sus

miembros, y que una mujer indígena diplomada en medicina había retornado al Territorio.

CONDICIONES DEL TRABAJO

La ley que instituye el Código del Trabajo, por la cual el Consejo había manifestado su interés en anteriores períodos de sesiones, fué aprobada y promulgada en el Territorio. Según la Autoridad Administradora, esta ley, que sería aplicada por una serie de decretos previstos para 1953, otorgará a los asalariados africanos derechos y garantías análogos a aquellos de que disfrutaban los trabajadores metropolitanos. La Autoridad Administradora señaló que la legislación vigente ya garantizaba un salario mínimo, vacaciones pagadas y el derecho de formar organizaciones sindicales.

La Misión Visitadora de 1952 fué informada de que el nuevo Código del Trabajo daría fuerza de ley a ciertos principios ya reconocidos en el Territorio y especialmente a los principios siguientes: la interdicción y condenación definitivas y explícitas del trabajo forzoso, supresión de toda distinción entre los trabajadores oriundos de la metrópoli y los trabajadores indígenas, afirmación del derecho de formar organizaciones sindicales, afirmación del derecho de negociar convenios colectivos, negociaciones colectivas obligatorias antes de declarar una huelga y reconocimiento del estatuto oficial de la Inspección del Trabajo.

En su 11° período de sesiones, el Consejo pidió a la Autoridad Administradora que estudiara cuidadosamente los problemas de los trabajadores migrantes, especialmente de los que se trasladan a territorios vecinos, y de examinar en particular la posibilidad de vigilar de cerca esos movimientos migratorios; pidió a la Autoridad Administradora que proporcionara toda la información pertinente sobre el particular, en su próximo informe anual. En el informe anual correspondiente a 1952, se calcula en más de mil el número de las personas oriundas del Territorio que ocupan, en otros Territorios africanos, cargos en los servicios administrativos, en el comercio o en la industria. Alrededor de 20.000 togoleses obtienen empleo estacional en las plantaciones de cacao de Togo bajo administración británica y de Costa de Oro. La Autoridad Administradora explicó que no procuraba en modo alguno impedir la migración de los trabajadores, que es un movimiento tradicional y que no constituye un elemento perturbador de la economía del Territorio. Por el contrario, esa práctica permite a una parte de la población levantar su nivel de vida.

La Autoridad Administradora informó, además, al Consejo que las ventajas de un sistema de control de los trabajadores migrantes no compensarían, en la actualidad, las restricciones que ese sistema podría aportar a la libre circulación de la población. Sin embargo, si llegara a intentarse la contratación de mano de obra en el Territorio, se establecería un sistema de control y vigilancia.

Al igual que en 1951, en el Territorio había en 1952, 35 organizaciones sindicales integradas por un total de 4.425 afiliados.

La Misión Visitadora de 1952 oyó reclamaciones relativas al pago a los jefes del tributo consuetudinario, en especie y, algunas veces, en forma de prestación de servicios. La Autoridad Administradora informó a la Misión que esas prestaciones de servicios no podían considerarse como trabajo forzoso y que ella ejercía una vi-

³⁵⁰ T/PET.7/350 y Add.1 a 5, 351 y Add.1 y 2, 352, 354 y Add.1 a 4, 357, 359, 365; T/COM.7/L.13.

³⁵¹ T/OBS.7/10 y Add.1.

gilancia estrecha a fin de asegurar que no rebasaran los límites tradicionales del tributo consuetudinario. La Misión, si bien reconoció que sería difícil poner término bruscamente a tradiciones de esa clase, recomendó que, mientras subsistieran esas tradiciones, se tomaran disposiciones para prevenir todo abuso. La Misión expresó también la opinión de que debía fijarse el monto de dicho tributo a fin de permitir que las personas que prefieran pagarlo en dinero, pueden hacerlo.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente conclusión:

El Consejo toma nota con satisfacción de la promulgación, en el Territorio, del Código del Trabajo y de las medidas adoptadas para su aplicación.

SALARIOS Y NIVEL DE VIDA

En su noveno período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de la tendencia ascendente del costo de vida y recomendó a la Autoridad Administradora que continuara vigilando la relación entre los salarios y el costo de vida y adoptara las medidas necesarias para elevar de un modo permanente el nivel de vida de los habitantes indígenas.

Los salarios básicos, calculados sobre la base de un nivel mínimo de subsistencia, se establecen, previa consulta con la Comisión Consultiva del Trabajo en conformidad con los informes preparados por la Inspección del Trabajo respecto a los precios de los artículos de primera necesidad y con los estudios efectuados por las organizaciones sindicales y patronales. De este modo, el índice de los salarios mínimos ha sido ajustado periódicamente para compensar el aumento del costo de vida. En 1952, ese índice fué modificado de la manera siguiente: en los centros urbanos, aumento de 9,6%, que elevó el salario mínimo de 114 a 125 francos CFA; en las regiones suburbanas, aumento de 12%, que elevó el salario mínimo de 80 a 90 francos CFA; en las regiones rurales, aumento de 23%, que elevó el salario mínimo de 57 a 70 francos CFA.

HIGIENE PÚBLICA

En varias ocasiones, el Consejo tomó nota del mejoramiento de los servicios médicos, así como de los excelentes resultados obtenidos en la lucha contra la enfermedad del sueño y la meningitis cerebroespinal. El Consejo expresó la esperanza de que los servicios médicos serían mejorados aun más y, en particular, de que se facilitaría la formación médica completa de los estudiantes de medicina indígenas.

El presupuesto de los servicios de higiene pública para 1952 se elevó a 451.473.248 francos CFA, de los cuales cerca de 70.000.000 de francos CFA fueron asignados a los servicios médicos en virtud del plan decenal de desarrollo económico. El número de las consultas generales se elevó a 4.726.138, es decir, aproximadamente la misma cifra que en 1951, y el número de días de tratamiento en los hospitales se elevó a 282.060. El número de partos efectuados bajo control médico se elevó a 7.246, en vez de 7.236 en 1951. Las cifras relativas a las consultas en 1951 y en 1952 fueron las siguientes:

	1951	1952
Consultas prenatales.....	46.641	43.357
Consultas postnatales.....	66.513	68.825
Niños de hasta dos años.....	413.875	481.003
Niños de dos a cinco años.....	509.775	599.487

El personal médico en servicio en 1951 y en 1952 estuvo compuesto de los siguientes funcionarios médicos:

	1951	1952
Médicos graduados.....	11 (2 africanos)	13 (3 africanos)
Médicos africanos (formados en el país)	16	17
Parteras de los servicios de higiene pública	1	2
Parteras africanas (formadas en el país)	27	27
Funcionarios sanitarios.....	21	25
Enfermeras	343	407
Farmacéuticos	1	1
Farmacéuticos africanos (formados en el país).....	2	2
Cirujano dentista.....	1	1

El detalle de los estudiantes africanos que siguieron cursos en Francia en 1951 y 1952 fué el siguiente:

	1951	1952
Medicina	12	16
Cirugía dental.....	1	5
Farmacia	7	6
Cursos de obstetricia.....		3
Bienestar social.....		1

En su 11° período de sesiones, el Consejo invitó a la Autoridad Administradora a que continuara estudiando el problema de la mortalidad infantil y a que suministrara datos completos al respecto en su informe anual correspondiente a 1952. En dicho informe, la Autoridad Administradora señaló que una de sus principales preocupaciones era reducir la mortalidad infantil, pero añadió que los progresos realizados en ese campo sólo podrían percibirse gradualmente, que los resultados obtenidos no serían espectaculares y que no podrían evaluarse cada año. Ante todo, había que forzar la barrera de las tradiciones y supersticiones que impedían el progreso en ese campo y, a juicio de la Autoridad Administradora, se estaba en camino de lograrlo.

La Misión Visitadora de 1952 quedó bien impresionada por el equipo, el personal y el abastecimiento en suministros de los establecimientos médicos del Territorio. Respecto a su observación, según la cual debía aumentarse el número de los médicos, de las declaraciones de la Autoridad Administradora se desprende que con el personal médico que se cuenta actualmente en el Territorio, era posible prestar atención médica de una manera satisfactoria a todos los enfermos que se presentaban, y que no existía en el Territorio ningún lugar desde donde fuera menester recorrer más de 15 kilómetros para hacerse cuidar. La Autoridad Administradora añadió que 32 estudiantes del Territorio estaban estudiando medicina en Francia.

La Misión estimó asimismo que, a pesar de los esfuerzos de la Autoridad Administradora y de los resultados obtenidos hasta ahora, el problema del número de los hospitales y dispensarios aun no parecía estar enteramente resuelto. La Autoridad Administradora indicó a este respecto que el servicio móvil de higiene pública y profilaxia ha sido reorganizado bajo la dirección de tres médicos y que se está prosiguiendo la construcción de hospitales y dispensarios con arreglo a un plan preestablecido.

En su 13° período de sesiones el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando su recomendación anterior en este campo, toma nota del desarrollo de los servicios

señanza secundaria. La Misión Visitadora de 1952 estimó que la Autoridad Administradora debía estudiar la posibilidad de otorgar un mayor número de becas de estudio a estudiantes que desearan hacer sus estudios en el extranjero, a fin de responder al deseo de la población de adquirir una formación superior.

En su 13° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo apoya la sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según la cual convendría revisar el programa de becas de estudio teniendo en cuenta las necesidades del Territorio en personal calificado de ambos sexos; y recomienda a la Autoridad Administradora que, teniendo presente que Togo es un país esencialmente agrícola, aliente a los africanos calificados a proseguir sus estudios en las grandes escuelas de agricultura. Además, el Consejo espera que la Autoridad Administradora aumentará el número de las becas de estudio.

FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

En 1952 y en 1951, el número de estudiantes que recibieron formación técnica y formación profesional se distribuye de la manera siguiente:

	1951	1952
Sección comercial del Colegio de Lomé	63	83
Sección técnica del Colegio de Sokodé..	69	82
Sección de economía doméstica de la Escuela de señoritas de Lomé.....	32	32

Los servicios de agricultura y los diversos servicios administrativos técnicos forman asimismo aprendices; además, varios centenares de aprendices se perfeccionan en la escuela de formación profesional de la Misión Católica, en empresas particulares, y, sobre todo, trabajando junto con artesanos africanos. Quince estudiantes togolese están siguiendo cursos en Francia a expensas del Territorio, a fin de proseguir allí sus estudios en centros de perfeccionamiento técnico.

MAESTROS

En 1951 y 1952 el personal docente en las escuelas públicas de enseñanza primaria se componía de:

	1951	1952
Maestros pertenecientes al servicio metropolitano	42	39
Maestros del ciclo superior local.....	93	119
Maestros auxiliares.....		4
Alumnos-maestros	292	339

El informe correspondiente a 1952 indica que la primera promoción de maestros había salido de la Escuela Normal de Atakpamé. El número de estudiantes matriculados en dicha escuela se elevó a 114, en vez de 75 en 1951.

El personal docente de las escuelas públicas de enseñanza y de enseñanza técnica se componía en 1952 de un inspector académico, un profesor auxiliar, 17 profesores con certificados y 23 profesores adjuntos.

En 1951 y 1952, el personal docente de las escuelas particulares se componía de:

	1951	1952
Profesores con certificados.....	7	9
Profesores adjuntos	11	12
Maestros	29	31
Instructores	131	210
Instructores auxiliares.....	243	204

CURSOS PARA ADULTOS

Según el informe anual, hubo 199 cursos para adultos en 1952-1953, en vez de 159 en 1951-1952. En promedio siguieron estos cursos 5.500 estudiantes en 1951-1952 y 5.866 en 1952-1953. Los profesores del Colegio de Segunda Enseñanza de Lomé y de la Escuela Normal de Atakpamé organizaron cursos destinados a las personas que ya han recibido enseñanza primaria; unas 60 personas los siguieron.

En el curso del año de que se está tratando, se llevaron a efecto dos experimentos de educación fundamental, ambos con el concurso de los servicios de enseñanza, de agricultura, y de obras públicas, así como del servicio forestal del Territorio; la Autoridad Administradora tenía el propósito de crear en 1953 un centro permanente de enseñanza normal para la formación profesional de maestros de primera enseñanza.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Bélgica tomó nota de los progresos alcanzados en el campo de la enseñanza. Observó que se había progresado más en el Norte que en el Sur, y que el progreso educativo alcanzado entre las niñas era mayor que el alcanzado entre los varones. Después de recordar la opinión expresada anteriormente por el Consejo, declaró que la Autoridad Administradora había hecho cuanto podía para corregir la situación que existía antes. Se declaró satisfecho por la parte del presupuesto (17%) que había sido destinada a la enseñanza.

El representante de Haití pidió a la Autoridad Administradora que desplegara esfuerzos enérgicos en el campo de la enseñanza. Por ahora, solamente una parte de los niños en edad escolar puede beneficiarse del programa de enseñanza; estimó que esa situación estaba lejos de ser satisfactoria. Luego de tomar nota de que la Autoridad Administradora tenía el propósito de organizar un vasto programa metódico de enseñanza destinado a los niños que no pueden ser admitidos en las escuelas, expresó la esperanza de que se progresaría en ese sentido.

El representante de Haití se declaró partidario de que se empleara el francés como idioma de instrucción mientras se resuelven los problemas que suscita el empleo de las lenguas vernáculas.

El representante de China tomó nota con satisfacción de los progresos alcanzados en materia de enseñanza. Refiriéndose a las medidas que la Autoridad Administradora había adoptado para atenuar la disparidad que se manifiesta entre el Norte y el Sur en el campo de la enseñanza, estimó que había que hacer nuevos esfuerzos para lograr un desarrollo equilibrado de la enseñanza en todo el Territorio. Observó con satisfacción que había aumentado el número de niñas que van a la escuela, pero declaró que importaba mejorar rápidamente la condición jurídica y social de la mujer y que, por consiguiente, convenía facilitar su educación y aumentar el número de niñas estudiantes.

El representante de la India declaró que la situación del Territorio en materia de enseñanza presentaba muchos contrastes. Al parecer, se habían hecho progresos considerables en el campo de la enseñanza pri-

maria, pero pocos en el de la enseñanza secundaria; en cambio, la instrucción de los adultos y la educación fundamental presentaban un cuadro casi deprimente. Afirmó que una población cuyos adultos no han recibido instrucción carece de equilibrio desde el punto de vista social, cultural y político, lo cual podía acarrear consecuencias muy peligrosas. La Autoridad Administradora debía desplegar nuevos esfuerzos para inducir a los adultos a instruirse. El representante de la India estimó que convenía mantener un equilibrio racional entre la enseñanza literaria y la enseñanza técnica. El sistema que se aplicaba en el Territorio parecía estar enteramente orientado hacia la enseñanza literaria. El representante de la India declaró que le complacía ver que la Administración estaba tratando de atenuar la disparidad que existe entre el Norte y el Sur en materia de enseñanza. Estaba convencido de que, gracias a los medios de enseñanza que actualmente se estaban proporcionando, la población del Norte de Togo daría pruebas de un gran deseo de instruirse.

El representante de Nueva Zelandia estimó que el desarrollo relativamente más rápido de la enseñanza en el Norte era alentador. A su juicio, el porcentaje de la frecuentación escolar en el Territorio, que es probablemente uno de los más elevados de Africa, muestra sin embargo hasta qué punto la enseñanza universal está lejos de haberse realizado. El representante de Nueva Zelandia estimó que los progresos alcanzados eran satisfactorios, pero que la Autoridad Administradora debía proseguir sus esfuerzos en todo lo que respecta a la enseñanza.

El representante de El Salvador felicitó a la Autoridad Administradora por los progresos que había realizado. El número de alumnos que frecuentaban las escuelas primarias, especialmente en el Norte del Territorio, y los planes que la Administración se proponía llevar a efecto para elevar, en los próximos 10 años, el número de los alumnos de 40.000 a 90.000, aproximadamente, eran alentadores. Tomó nota también del acrecentamiento del número de los edificios escolares, tanto particulares como públicos. Expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora extendería su acción a la enseñanza superior y a la enseñanza técnica y de que encontraría un medio de aumentar el número de becas de estudio, a fin de permitir a muchos habitantes indígenas, que tienen el deseo y las aptitudes para hacerlo, ir al extranjero para especializarse en alguna profesión u oficio.

El representante de Australia declaró que había que felicitar a la Autoridad Administradora por la obra que había realizado en el campo de la enseñanza, y, particularmente, por los esfuerzos que había desplegado para hacer desaparecer la disparidad que existía entre el Norte y el Sur. Tomó nota de que la Autoridad Administradora se había propuesto vencer la dificultad que ocasionaba la desproporción entre el número de niñas y el número de varones matriculados en las escuelas del Territorio.

El representante de Siria recomendó que la Autoridad Administradora se preocupara por que las instituciones docentes particulares tengan en cuenta los propósitos de la Carta y del Acuerdo de Administración Fiduciaria respecto a la educación de los habitantes del Territorio. Refiriéndose al hecho de que sólo existía una escuela secundaria en el Territorio, recomendó que se ampliara el sistema de enseñanza secundaria.

El representante de Siria estimó que como una parte de la población del Territorio hablaba el árabe, convenía enseñar esa lengua no sólo en las escuelas coránicas sino también en las otras escuelas. Aunque convenía enteramente en que la población debía aprender el francés, opinó que debía también aprender el árabe, porque el conocimiento de esta lengua le permitiría desarrollar sus conocimientos y, además, aprender otros idiomas, en caso necesario.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la situación de la enseñanza en el Territorio era deplorable, puesto que más del 80% de los niños en edad escolar ni siquiera tienen acceso a la enseñanza primaria. Para 1961, la Autoridad Administradora sólo tenía la intención de enviar a la escuela a 40.000 alumnos más que ahora. Eso constituiría un retroceso, ya que ese aumento sería menor que el acrecentamiento natural de la población escolar. El programa de educación de la Autoridad Administradora era, pues, tan insuficiente que ni siquiera podía mantener el mediocre porcentaje actual de las personas que reciben instrucción.

Estimó que el Consejo debía recomendar a la Autoridad Administradora que aumentara considerablemente las asignaciones presupuestarias destinadas a la enseñanza; este aumento debía reflejarse tanto en el presupuesto del Territorio como en el del país metropolitano.

En respuesta al representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el representante y el representante especial de la Autoridad Administradora dijeron que era verdad que aun quedaba mucho por hacer en el campo de la enseñanza, pero que las dificultades fundamentales ya habían sido vencidas. A ese respecto, Togo era entre los Territorios del Africa tropical, uno de los más favorecidos. El único obstáculo que impedía la total eliminación del analfabetismo era la necesidad de distribuir armoniosamente los recursos financieros entre las diversas partidas presupuestarias. Por consiguiente, era completamente inexacto afirmar que la situación del Territorio era deplorable.

El representante de la Autoridad Administradora declaró, además, que si bien la enseñanza dada en el Territorio, en las escuelas y fuera de ellas, no era necesariamente la más eficaz que pudiera imaginarse, o la más adaptada a la vida práctica, estaba fundada en el respeto de la persona y en el espíritu de libre discusión. Esa enseñanza tendía a desarrollar el libre juicio y el respeto de sí mismo. En cuanto a la lengua árabe, el representante de la Autoridad Administradora dijo que no se había considerado necesario disponer que se enseñara por ser pequeño el número de musulmanes que residen en el país.

El representante especial de la Autoridad Administradora aseguró al representante de Siria que las escuelas particulares estaban sometidas a la misma vigilancia que las escuelas públicas. Señaló que ocho planteles proporcionaban enseñanza secundaria en el Territorio, que el número de sus estudiantes había aumentado cada año y que el ritmo de ese acrecentamiento sería rápido en el porvenir.

ENSEÑANZA SUPERIOR

El representante de China estimó que no solamente había que aumentar el número de becas de estudio, sino también repartirlas conforme a nuevos principios. Aun-

que el Territorio es esencialmente agrícola, a los estudiantes que frecuentan las escuelas superiores de agricultura sólo les fueron concedidas, en 1952, cuatro de las 79 becas de estudio disponibles. Recomendó que la Autoridad Administradora procediera, a tal efecto, a una nueva distribución de las becas de estudio y aumentara considerablemente el número, a fin de formar un número suficiente de funcionarios para responder a las necesidades del Territorio.

El representante de Siria estimó que el actual sistema de otorgamiento de becas de estudio no permitía a todos los togoleses competentes hacer estudios en Francia, y recomendó que la Autoridad Administradora desarrollara en el Territorio la enseñanza superior y, especialmente, la enseñanza técnica. Recomendó asimismo que se acrecentara el número de las becas de estudio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estimó que en materia de enseñanza superior, la situación era aun peor que en el campo de la enseñanza primaria. El Territorio no poseía ningún establecimiento de enseñanza superior y el número de las becas de estudio otorgadas a los estudiantes que proseguían sus estudios en el extranjero era muy pequeño. A pesar de que el Territorio tenía una gran necesidad de especialistas en agricultura, la Autoridad Administradora no había otorgado más que cuatro becas de estudio a los estudiantes que se orientaban hacia ese campo. Era menester que la Autoridad Ad-

ministradora creara institutos de enseñanza superior dentro del Territorio mismo.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que actualmente se concedían becas de estudio automáticamente para seguir cursos de enseñanza superior a todos los candidatos que satisfacían los requisitos necesarios.

MAESTROS

El representante de China estimó que el número de maestros era todavía insuficiente para hacer frente a las necesidades del Territorio, y que la Autoridad Administradora debía prestar más atención a este problema.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que 80% de los maestros que enseñaban en el Territorio habían recibido una formación profesional insuficiente. El Territorio sólo poseía tres escuelas normales y éstas no podían inculcar normas convenientes de enseñanza; tampoco podían formar buenos maestros ni acoger a un número suficiente de estudiantes. Según el informe³⁵² de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el número de maestros poseedores del diploma que esas escuelas confieren no bastaba ni para llenar las vacantes existentes ni para responder a la expansión del sistema escolar.

³⁵² T/1091.

Capítulo VIII

SAMOA OCCIDENTAL

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

El Territorio en fideicomiso de Samoa Occidental consta de un grupo de islas volcánicas que, en total, tienen una superficie de 2.930 Km.² y se extienden entre los 13 grados y 15 grados de latitud sur y entre los 171 grados y 173 grados de longitud oeste. Si se excluyen los islotes, cabe decir que el Territorio está constituido por dos islas grandes, Savai'i y Upolu, cuyas superficies aproximadas son de 1.800 y 1.100 Km.² respectivamente, más las dos islas pequeñas de Manono y Apolima. El clima es tropical con precipitación pluvial abundante y algunas tormentas muy fuertes; y, como resultado de ello, las islas, cuyo terreno es accidentado y montañoso debido a su origen volcánico, están cubiertas de espesas selvas tropicales.

Los resultados definitivos del censo de 1951 indican que la población se componía entonces de 80.153 samoanos, grupo étnico importante de la raza polinesia y 4.756 personas consideradas jurídicamente como europeos pero que, en su gran mayoría, eran samoanos mestizos. La tasa de natalidad es elevada, pues se calcula con cierto margen de error posible que es de 34,06 por 1.000 con respecto a los samoanos y de 36,8 por 1.000 en lo que respecta a los europeos. Por lo tanto, se ha calculado que hasta el 31 de diciembre de 1953 la población total había aumentado hasta llegar a 91.043 habitantes. La mayoría de los samoanos siguen su vida tradicional en pueblos que tienen fácil acceso al mar y se dedican a la agricultura y a la pesca, fundamentalmente para satisfacer sus necesidades.

En su 12º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, tomando nota de los progresos alcanzados en todos los campos, expresó la esperanza de que se resolverían satisfactoriamente los problemas de índole económica y social que surgieron como resultado del rápido crecimiento de la población. En respuesta a esta declaración, la Autoridad Administradora expuso que había indicios de que los dirigentes samoanos se estaban percatando de la necesidad de buscar una solución satisfactoria para los posibles problemas inherentes al rápido crecimiento de la población, aunque era probablemente cierto que su visión de lo que se podía y debía hacer estaba hasta cierto punto limitada por las costumbres samoanas. A este respecto, la Autoridad Administradora estimaba que las propuestas de reforma constitucional, que más adelante se describen, habían fijado la atención de los samoanos en ciertos problemas importantes de desarrollo que había que resolver.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación con respecto al desarrollo general del Territorio:

El Consejo toma nota con satisfacción del progreso realizado durante el período objeto de examen, en particular con las encuestas en materia de economía, trabajo y enseñanza; y espera que la Autoridad Administradora y el Gobierno de Samoa Occidental sigan utilizando el asesoramiento y la asistencia que les puedan dar las organizaciones internacionales e intergubernamentales de la región.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

El representante de El Salvador declaró que el Territorio había alcanzado un grado elevado de progreso, aunque todavía quedaba mucho por hacer. La Autoridad Administradora estaba cumpliendo con éxito su misión gracias, no solamente a su propio esfuerzo y a su buena voluntad, sino también a la indiscutible ventaja de estar administrando un Territorio habitado por gente que, en general, tenía buenas costumbres políticas, sociales y morales.

El representante de Francia expresó su satisfacción de que el desarrollo de Samoa se efectuase con un ritmo regular y en un ambiente de tranquilidad.

El representante de los Estados Unidos de América declaró que la delegación de su país deseaba manifestar su satisfacción a la Autoridad Administradora y al pueblo de Samoa Occidental por el adelanto general logrado en el transcurso del año objeto del examen y, en particular, por el esfuerzo que habían hecho por determinar la importancia de los problemas generales del Territorio, como lo demostraban los estudios básicos sobre las condiciones económicas, de trabajo y educativas; cosa que, al parecer de la delegación de los Estados Unidos de América, era indispensable para desarrollar progresivamente el Territorio. La delegación de su país también deseaba elogiar la práctica de la Autoridad Administradora de aprovechar la cooperación de otros organismos, como los organismos especializados de las Naciones Unidas y la Comisión del Pacífico Meridional.

El representante de la India consideró que la manera como la Autoridad Administradora enfocaba la situación en Samoa Occidental no dejaba nada que desear desde el punto de vista psicológico y político. Sin embargo, a la delegación de su país le agradaría que la Autoridad Administradora pensara en la posibilidad de terminar la administración fiduciaria dentro de un plazo determinado.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

REFORMA CONSTITUCIONAL

a) Consideraciones generales

El Consejo ya había informado de algunos acontecimientos que hicieron del año abarcado por el presente informe un período sumamente importante para el Territorio en fideicomiso. A principios de 1953 ocurrieron dos acontecimientos políticos importantes favorables para el adelanto del Territorio hacia el gobierno propio; en primer lugar, el establecimiento de un Consejo Ejecutivo compuesto de una mayoría de miembros de la Asamblea Legislativa, con facultades para conferenciar con el Alto Comisionado y asesorarlo acerca de la elaboración, determinación y aplicación de la política gubernativa; y, en segundo lugar, la declaración política hecha el 19 de marzo de 1953 por el Primer Ministro de Nueva Zelandia, en la que éste propuso un plan constitucional para crear más adelante el estado de Samoa Occidental y anunció la existencia de un programa general de desarrollo que se proponía facilitar a Samoa el logro del gobierno propio. Ambos acontecimientos están descritos con bastante detalle en un informe anterior del Consejo de Administración Fiduciaria.³⁵³

Un tercer acontecimiento de carácter constitucional fué la aprobación de la Ley (enmendada) de Samoa de 1953 (Samoa Amendment Act., 1953) por la que, entre otras cosas, se autorizó al Alto Comisionado para que extendiera la jurisdicción de los jueces samoanos y a la Asamblea Legislativa de Samoa Occidental para que estableciera tribunales inferiores de lo civil o de lo criminal; y se dispuso que el Ministro de Hacienda de Nueva Zelandia pudiera fijar el tipo de cambio entre la libra samoana y la neozelandesa en condiciones que no fueran de paridad.

b) Estructura política existente

Con la actual estructura constitucional, el Poder Ejecutivo pertenece al Alto Comisionado, que cuenta con la asistencia de un Consejo de Estado compuesto del propio Alto Comisionado y dos *Fautua* (jefes superiores samoanos) y con el asesoramiento de un Consejo Ejecutivo compuesto de él mismo, los dos *Fautua*, tres miembros oficiales que son también miembros de la Asamblea Legislativa, y cuatro miembros de la Asamblea Legislativa que ocupan sus cargos por elección, tres samoanos y un europeo, que son nombrados para el Consejo a propuesta de la Asamblea. El Consejo Ejecutivo, establecido a primeros de 1953 en virtud de la Ley (enmendada) de Samoa de 1952 (Samoa Amendment Act, 1952), permite a los representantes samoanos que participen en la elaboración y la aplicación de la política en un plano superior, lo cual satisface una necesidad que señalaron la Misión Visitadora de 1950 y el Consejo de Administración Fiduciaria en su octavo período de sesiones. La Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria en el 14º período de sesiones de éste que

el Consejo Ejecutivo había discutido recientemente el procedimiento para tomar las primeras disposiciones con objeto de constituir un gobierno de tipo ministerial asociando más íntimamente a los miembros no oficiales a la labor de los departamentos gubernativos; y que la propia Autoridad Administradora estaba examinando las recomendaciones del Consejo sobre este particular.

Salvo ciertos asuntos concretos que se reservan en la Ley (enmendada) de Samoa de 1947 (Samoa Amendment Act, 1947) y que se refieren a cuestiones de administración pública, a las tierras de la Corona y a ciertas decisiones sobre la reforma constitucional en Samoa Occidental, el poder legislativo en los asuntos interiores lo ejerce la Asamblea Legislativa, que se compone de miembros del Consejo de Estado, 12 miembros samoanos y cinco miembros europeos elegidos por un período de tres años y de seis miembros oficiales, como máximo, designados por el Alto Comisionado por un plazo indeterminado. El Alto Comisionado, como Presidente, no participa en las votaciones más que para hacer uso de su voto de calidad. Sin embargo, ninguna ordenanza aprobada por la Asamblea Legislativa puede adquirir carácter de ley sin el asentimiento del Alto Comisionado y no se puede aprobar ningún proyecto de ley de carácter financiero más que por recomendación del Alto Comisionado. El Gobierno de Nueva Zelandia, como Autoridad Administradora, conserva el poder de legislar para el Territorio y puede dar instrucciones al Alto Comisionado para que oponga el veto a una ordenanza o puede desautorizar una ordenanza a la que el Alto Comisionado hubiera dado el visto bueno. En la práctica, nunca se ha hecho uso del derecho de veto ni del derecho de desautorización.

Además de la Asamblea Legislativa existe el *Fono de los Faipules*, que no es sino un órgano asesor compuesto de 41 samoanos elegidos por los *matais* (jefes de familia), en representación de los distritos y subdistritos tradicionales de Samoa Occidental. El *Fono* se reúne dos veces por año y, por ley, tiene el derecho a exponer opiniones y hacer recomendaciones al Alto Comisionado relacionadas con el bienestar del pueblo samoano. También propone candidatos samoanos para los cargos de jueces de distrito, inspectores de plantaciones y jueces auxiliares del Tribunal de Tierras y Títulos (Land and Titles Court) y elige a los miembros samoanos de la Asamblea Legislativa.

Los miembros europeos de la Asamblea Legislativa se eligen en votación secreta por sufragio universal de los adultos. Sin embargo, entre la población samoana los derechos políticos son, por tradición, exclusivos de los *matais*, quienes eligen a los miembros del *Fono de los Faipules*, el cual, a su vez, elige a los miembros samoanos de la Asamblea Legislativa. Tanto la Autoridad Administradora como el Consejo de Administración Fiduciaria habían insistido anteriormente en la necesidad de establecer un método de elección más democrático, pero la Autoridad Administradora informó que el esfuerzo por educar al pueblo samoano con miras a implantar el sufragio universal en un sistema democrático de gobierno propio todavía no había dado buenos resultados debido al conservadismo inherente a la sociedad samoana. Sin embargo, aun reconociendo las dificultades que ello suponía, la Autoridad Administradora había manifestado en su informe anual correspondiente a 1953 que abrigaba la

³⁵³ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, octavo período de sesiones, Suplemento No. 4, documento A/2427, págs. 67 a 73.

esperanza de que los samoanos cambiaran pronto de sistema eligiendo a los representantes por un procedimiento más directo de votación popular. El *Fono de los Faipules* mejoró el método de elección adoptando un procedimiento sistemático para las elecciones de 1954, con arreglo al cual los candidatos fueron propuestos por los *matais* de cada distrito electoral; en el distrito donde solamente se propuso un candidato, el *Fono* eligió al candidato único, pero en los casos en que hubo más de una propuesta el *Fono* eligió uno de los candidatos en votación secreta.

La Asamblea Legislativa celebra dos períodos de sesiones por año. En el primero, aprueba el presupuesto; y en el segundo, discute la mayor parte de la legislación. En abril de 1954 se fusionaron los comités permanentes de la Asamblea Legislativa encargados de la enseñanza y de la radiodifusión respectivamente; y, actualmente, hay cuatro comités permanentes: los encargados de las cuestiones de sanidad, obras públicas, enseñanza y radiodifusión y agricultura y cooperativas.

Se ha informado al Consejo de Administración Fiduciaria de que, hasta la fecha, los samoanos han demostrado tener poco interés en constituir partidos políticos bien organizados y que la única organización verdaderamente política es el reducido Partido Democrático Samoano que, aunque ya lleva unos tres años de existencia, sólo tiene un centenar de afiliados.

c) *Propuestas de desarrollo constitucional*

Como lo expuso detalladamente el Consejo de Administración Fiduciaria en el informe sobre su 12° período de sesiones, el Primer Ministro de Nueva Zelandia hizo el 19 de marzo de 1953 unas declaraciones en las que propuso un sistema constitucional para un futuro estado de Samoa Occidental y anunció la existencia de un programa general de desarrollo administrativo, judicial, social y económico, que facilitaría el establecimiento del gobierno propio en Samoa. Propuso en sus declaraciones que, a fines de 1954, se celebrara en el Territorio una Convención Constitucional representativa de todos los sectores de la comunidad samoana, con objeto de considerar un sistema constitucional para el futuro Estado samoano; e hizo algunas indicaciones de carácter general sobre las disposiciones que se podrían adoptar pertinentemente en ese sistema; y recomendaciones más detalladas sobre la labor que convendría emprender y los problemas que exigían solución.

Tanto la Misión Visitadora de 1953, como el Consejo de Administración Fiduciaria en su 12° período de sesiones, consideraron que las declaraciones constituían una exposición de política progresiva por la que había que felicitar a la Autoridad Administradora, especialmente con respecto a la decisión de establecer la condición jurídica futura de Samoa Occidental con arreglo a la voluntad del pueblo samoano. El Consejo tomó nota con satisfacción de que se proponía la elaboración de un programa para llegar a la plenitud del gobierno propio; y manifestó la esperanza de que el pueblo samoano aprovecharía todas las oportunidades y cooperaría con la Autoridad Administradora en la labor de democratización de la sociedad samoana, lo que facilitaría el logro del gobierno propio. El Consejo también apoyó las conclusiones a que había llegado la Misión Visitadora de 1953, quien había señalado, entre otras cosas, la necesidad de ampliar el cuerpo

electoral, la necesidad de conservar ciertos vínculos con la Autoridad Administradora una vez logrado el gobierno propio y la conveniencia de intensificar la formación profesional de samoanos para las funciones administrativas y ejecutivas.

La información de que disponía el Consejo en su 14° período de sesiones indicaba que las propuestas habían producido muy buena impresión en el Territorio. En 1953 se estableció un Comité de Trabajo, compuesto de los dos *Fautua*, los tres miembros no oficiales del Consejo Ejecutivo y otros representantes samoanos y europeos, para que averiguara la opinión que merecía el plan de desarrollo en los distintos sectores de la comunidad y para que preparara detalladamente un plan de estructura constitucional con objeto de someterlo a la consideración de la Convención que se tiene la intención de celebrar a fines de 1954 o a principios de 1955. La primera decisión del Comité fué la de preparar una versión simplificada en samoano de las declaraciones del Primer Ministro y distribuir copias de la misma por toda Samoa. También se publicaron avisos por los que se pedía a todas las personas que expusieran su opinión sobre las declaraciones del Primer Ministro. El Comité pudo después hacer recomendaciones provisionales sobre la mayor parte de los problemas políticos importantes señalados por el Primer Ministro en sus declaraciones. Sin embargo, el Comité todavía no había tenido tiempo de discutir plenamente esas sugerencias provisionales y redactarlas en forma definitiva. La Autoridad Administradora consideró que ese progreso era plenamente satisfactorio y señaló que tanto el Comité de Trabajo como la gente, en general, deseaban disponer de tiempo para examinar detenidamente todos los problemas tratados.

La Autoridad Administradora también informó que se había nombrado un auxiliar especial para que ayudara al Alto Comisionado a coordinar todos los aspectos del plan de desarrollo y para que ejerciera las funciones de Secretario en el Comité de Trabajo. El Consejo, en su 12° período de sesiones, tomó nota con satisfacción de que se había decidido nombrar dicho funcionario.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones:

El Consejo, tomando nota del deseo del pueblo de Samoa Occidental de gobernarse a sí mismo y de que las declaraciones de 19 de marzo de 1953 del Primer Ministro de Nueva Zelandia permiten satisfacer las aspiraciones políticas de Samoa, manifiesta la esperanza de que el pueblo, en su próxima Convención Constitucional, elaborará, para someterlo a la consideración de la Autoridad Administradora, un plan que permita alcanzar progresivamente el gobierno propio o la independencia. El Consejo también toma nota de las disposiciones adoptadas mediante el Comité de Trabajo, de señalar a la atención del pueblo samoano la reforma constitucional propuesta por el Primer Ministro en sus declaraciones.

El Consejo, teniendo presente la conveniencia de que las funciones ejecutivas se vayan confiando progresivamente a los samoanos, expresa su satisfacción de que se haya tomado en cuenta la posibilidad de vincular más íntimamente a los miembros no oficiales del Consejo Ejecutivo con la labor de los distintos departamentos gubernamentales, como primera medida hacia el establecimiento de un gobierno de tipo ministerial.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Si se exceptúa la colonia de Aleisa, que es predominantemente europea y posee un consejo de miembros elegidos por sufragio, cabe decir que la administración local está en manos de los consejos de *matais* de pueblo y de distrito que actúan de la manera más tradicional en Samoa. La intervención de la administración central tiene principalmente por objeto hacer cumplir las disposiciones vigentes mediante un sistema de agentes locales oficiales, superpuesto a la forma tradicional de administración local. El defecto de este sistema estriba en la debilidad de los vínculos existentes entre los consejos locales y la administración central y en el hecho de que dichos consejos tradicionales ejercen también, con arreglo a las costumbres samoanas, algunas funciones de índole cuasi judicial que no están legalmente reconocidas.

El Gobierno ha manifestado el deseo de fortalecer los vínculos que unen a los consejos locales con la administración central, de separar las funciones judiciales del poder administrativo de los consejos, de ampliar la base de éstos y de uniformar su estructura. Por estas razones se reorganizó la Secretaría de la Administración incluyendo una Sección de Asuntos de Distrito bajo la dirección de un Secretario Auxiliar; y la Asamblea Legislativa aprobó en 1953 una ley sobre la Junta de Gobierno de Distritos y Pueblos. En esta ley, aprobada después de que una Comisión de Investigación hubo efectuado una encuesta, se dispone el establecimiento de una Junta de Gobierno para la Administración Local presidida por el Alto Comisionado y compuesta de los dos *Fautua* y seis miembros que ocupan cargos por nombramiento. La Junta, constituida en 1954, examinará los estatutos que le presenten los distintos consejos locales. Si los estatutos son aprobados por la Junta, quedarán legalmente sancionados. Se espera que la posibilidad de aumentar su autoridad alentará a los actuales órganos locales a someter sus estatutos a la Junta. También se espera que el sistema propuesto sea un incentivo para establecer instituciones más democráticas.

En su 12º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria había manifestado la esperanza de que se daría pronta consideración al establecimiento de algún sistema de administración local para la región urbana de Apia, cuestión que los miembros samoanos de la Asamblea Legislativa habían excluido específicamente de las atribuciones de la Comisión de Investigación encargada de examinar los aspectos relativos a la administración local. En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora declaró que se daba perfectamente cuenta de la necesidad de proceder de ese modo y que esperaba que la Asamblea Legislativa decidiría pronto efectuar un estudio detenido de los problemas planteados. Sin embargo, aunque estimaba que poco se ganaría tratando de forzar el desarrollo de la administración pública de Apia mientras no se contara con el apoyo adecuado de los habitantes, la Autoridad Administradora informó al Consejo, en el 14º período de sesiones del mismo, que en 1954 se había establecido un Comité de Planificación Urbana autorizado para hacer recomendaciones a la Administración sobre cuestiones de vivienda, construcción y conservación de carreteras, drenaje y protección contra incendios en la zona urbana.

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente conclusión:

El Consejo toma nota del establecimiento de la Junta de Gobierno de Distritos y Pueblos y de un Comité de Planificación Urbana para la zona urbana de Apia y espera que la experiencia que dichos órganos adquieran facilitará la organización de la administración local.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Administración Pública de Camoa Occidental, establecida por Ley (enmendada) de Samoa de 1949, está bajo la dirección de un Comisionado de Administración Pública de Samoa Occidental, nombrado por el Gobernador General de Nueva Zelandia y dependiente del Ministro de los Territorios Insulares de Nueva Zelandia en lo relativo a la adopción de disposiciones para el funcionamiento de la Administración y en todos los asuntos que, al parecer del Ministro, se refieran a la política de la Autoridad Administradora. La Asamblea Legislativa no tiene competencia para legislar con respecto a la Administración y, además, el Alto Comisionado no ejerce fiscalización directa sobre la misma. La Misión Visitadora de 1953 observó este último hecho y estimó que, en vista de la necesidad de que los problemas de la Administración Pública fueran resueltos enérgicamente durante el período de preparación para el gobierno propio, quizás fuera conveniente que el Ministro de los Territorios Insulares delegara en el Alto Comisionado parte de su autoridad sobre la Comisión de Administración Pública. En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora declaró que, como el asunto de la fiscalización de la Administración Pública se había de decidir en la próxima Convención Constitucional, parecía poco prudente efectuar cambios radicales a este respecto hasta que el pueblo samoano hubiera dado a conocer su opinión sobre el particular.

A fines de 1953, había 1.070 personas empleadas en la Administración Pública, es decir 84 más que en 1952. De este total, 817 eran samoanos. Todos los jefes de departamento eran europeos, y dos de ellos estaban clasificados como "europeos locales". De las 79 personas clasificadas en la categoría profesional y técnica o en la categoría de auxiliar administrativo superior, 22 eran samoanos o "europeos locales".

La Autoridad Administradora y la Misión Visitadora de 1953 estaban de acuerdo en que era necesario dar a los samoanos una formación profesional intensiva a fin de prepararlos para las funciones de más responsabilidad que habrían de asumir con la propuesta reforma constitucional. En su 12º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción de que el Gobierno de Samoa Occidental había adoptado disposiciones para establecer un sistema organizado de formación profesional del personal y de que consideraba la posibilidad de nombrar a un funcionario que se dedicara exclusivamente a la formación profesional del personal. El Consejo señaló a la atención de la Autoridad Administradora la recomendación de la Misión Visitadora de 1953 relativa a la formación profesional de funcionarios samoanos en la Administración Pública de Nueva Zelandia y, a ser posible, en otros servicios gubernamentales.

En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora señaló que, en el transcurso de dicho año, se había intensificado la formación profesional dentro del servicio en los departamentos administrativos y que varios funcionarios samoanos, principalmente del Departamento de Obras Públicas, habían

sido destinados a Nueva Zelandia para que se familiarizaran con los métodos prácticos administrativos. En 1953 se dieron unas cuantas conferencias con asistencia de funcionarios superiores y de empleados de categoría media. El principal obstáculo existente para ascender a los samoanos era el nivel generalmente bajo de instrucción de tipo "occidental" de la mayoría de los empleados locales. Sin embargo se esperaba que, con la creación del Colegio Samoano, se mejoraría apreciablemente el nivel de instrucción del personal local. La Autoridad Administradora declaró que en 1954 abrigaba la esperanza de poder prestar más atención a la elaboración de un plan general de formación profesional de funcionarios.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, consciente de que una condición importante para la perfecta aplicación de las propuestas contenidas en las declaraciones hechas el 19 de marzo de 1953 por el Primer Ministro de Nueva Zelandia es la formación de un cuerpo de funcionarios competentes y con experiencia, pide a la Autoridad Administradora que intensifique su programa de formación profesional de funcionarios a fin de capacitar a los habitantes locales para los cargos administrativos superiores.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

La Corte Suprema de Samoa Occidental tiene jurisdicción para conocer asuntos de lo civil y lo criminal; y está integrada por un Presidente, cinco comisionados, cuatro jueces auxiliares samoanos y 14 jueces de distrito samoanos. El Presidente de la Corte y los comisionados son elegidos por el Ministro de los Territorios Insulares, y los jueces de distrito y los jueces auxiliares son nombrados por el Alto Comisionado a propuesta del *Fono de los Faipules*. En los casos más importantes de delitos graves, la Corte Suprema está compuesta del Presidente y cuatro asesores. Cuando el acusado es samoano hay dos asesores samoanos y dos asesores europeos.

Desde el 1° de noviembre de 1952, los jueces samoanos auxiliares han formado parte de la Corte Suprema de Apia y de los Tribunales de Tuasivi y Savai'i durante la ausencia del Comisionado, para dar audiencia y fallar en los casos de lo civil y lo criminal que eran de su competencia. En tales ocasiones, actúan simultáneamente dos jueces auxiliares conforme a un turno mensual establecido. También actúan como consultores del Presidente o de cualquier comisionado de la Corte de Apia.

La Ley (enmendada) de Samoa de 1953 tenía por objeto, entre otras cosas importantes, establecer tribunales de distrito. A fines de 1953 todavía no se había establecido un sistema completo de tribunales de distrito, aunque ya se habían tomado disposiciones preliminares para ello. En 1953 se nombraron por un período de prueba de un año otros 14 jueces auxiliares samoanos con la intención de renovar el nombramiento de los jueces más capacitados y de sustituir a los demás al terminar dicho plazo. En el transcurso del año, los tribunales se reunieron periódicamente en los distritos periféricos a fin de que los jueces auxiliares samoanos adquirieran más práctica y para que el público se familiarizara con la administración de la justicia. En esas audiencias, presidió el Secretario de la Corte Suprema por tener categoría de comisionado.

Aparte de la Corte Suprema, el único órgano judicial legalmente constituido es el Tribunal de Tierras y Títulos Indígenas, que es competente para resolver las controversias sobre las tierras que son propiedad de los indígenas y sobre el derecho a heredar títulos samoanos. El Presidente de la Corte Suprema es también Presidente de este otro tribunal y cuenta con la ayuda de dos o tres asesores europeos y de cuatro jueces samoanos.

En su 14° período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, considerando la necesidad de desarrollar la organización judicial del Territorio, toma nota de las disposiciones adoptadas por la Autoridad Administradora, enmendando la Ley de Samoa de 1921, para permitir el establecimiento de un sistema más eficiente de tribunales inferiores y abriga la esperanza de que será posible asegurar mejor la continuidad en el servicio de los jueces de distrito samoanos y de los jueces samoanos de la Corte Suprema.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

a) Consideraciones generales

El representante de los Estados Unidos de América tomó nota con satisfacción de que en 1953 se había establecido el Consejo Ejecutivo.

El representante de la India consideró que las instituciones actuales del Territorio, aunque ofrecían a los samoanos oportunidades para participar en el gobierno y adquirir experiencia y, aunque se oponían a los factores de segregación y separación entre la población y la Autoridad Administradora, no eran en realidad órganos de gobierno propio ni permitían vincular las instituciones actuales y la organización gubernamental futura.

El representante de la India preguntó si acaso no convendría explicar a los samoanos que las declaraciones del Primer Ministro de Nueva Zelandia no representaban una posibilidad sino que eran una proclamación de la voluntad del Gobierno de Nueva Zelandia de renunciar a la administración del pueblo samoano y de aceptar únicamente las funciones que, en lo porvenir, negociara con los propios samoanos como pueblo libre. Convenía aclarar esto sin dejar lugar a dudas, de manera que cuando se reuniera la Convención Constitucional no se tratara de si los samoanos habían de asumir o no ciertas funciones, sino, primeramente, de examinar el procedimiento para encargarse de ellas y determinar el plazo para hacerlo; y, en segundo lugar, de discutir qué instituciones serían más eficaces para lograr tal fin. En tercer lugar, se debería indicar claramente el problema de que si el país había de alcanzar el gobierno propio, también se había de administrar a sí mismo. Manifestó igualmente la esperanza de que la Autoridad Administradora también aclarara que esperaba que la Convención elaboraría un plan que permitiera considerar la posibilidad de cumplir los deseos del Gobierno de Nueva Zelandia, tal como los había manifestado el Primer Ministro en su declaración y ajustándose a los propósitos del Acuerdo de Administración Fiduciaria. La delegación de su país estaba de acuerdo con el Partido Democrático Samoano, como lo había señalado la Misión Visitadora, en que la solución tal vez consistiera en llegar a una transacción entre el

sistema de los *matais* y la idea de la representación democrática individual. Estimaba que se podía elaborar un plan que permitiera a los distintos distritos pronunciarse entre el sistema de elección por los *matais* y el sistema de sufragio universal, lo cual daría a los distritos que escogieran lo primero la posibilidad de extender los derechos políticos en elecciones ulteriores, si así lo deseaban.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que, a pesar de que ya habían transcurrido ocho años desde que los samoanos habían pedido por primera vez que se les concediera la autonomía, la Autoridad Administradora no había satisfecho esta reivindicación legítima. Toda la autoridad en el Territorio estaba concentrada en manos del Gobierno de Nueva Zelanda, representado en el Territorio por el Alto Comisionado. Los Consejos Ejecutivo y Legislativo sólo eran órganos asesores y sin verdadero poder. Además, la composición de la Asamblea Legislativa y los métodos de elección para dicha Asamblea demostraban el carácter antirrepresentativo y antidemocrático de la misma. Los europeos estaban representados desproporcionadamente en la Asamblea Legislativa y eran elegidos por sufragio universal, mientras que los indígenas no disfrutaban esos derechos. Los miembros samoanos de la Asamblea Legislativa eran nombrados por el *Fono de los Faipules*, pero el propio *Fono* era elegido solamente por los *matais*. Según el informe anual, el *Fono de los Faipules*, basado en el sistema *matai*, casi siempre era conservador y la Autoridad Administradora no hacía nada para modificar el anticuado sistema de los *matais*. Al contrario, lo fomentaba; y el plan de reforma para el Territorio preveía la conservación del viejo sistema *matai*. La Autoridad Administradora debiera tomar disposiciones para asegurar el cambio de este sistema anticuado por un sistema democrático de gobierno. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló, además, que el Comité de Trabajo encargado de examinar las propuestas reformas no había sido elegido democráticamente y que por lo tanto, no era un órgano enteramente representativo del pueblo samoano. Todos los miembros del Comité habían sido nombrados por el Alto Comisionado entre los funcionarios y los representantes *matai*.

El representante especial de la Autoridad Administradora aseguró al representante de la India que la Autoridad Administradora y los dirigentes samoanos estudiarían detenidamente su declaración. Se abrigaba la esperanza de que las recomendaciones de la Convención Constitucional permitirían efectuar algunas reformas orgánicas.

En respuesta al representante de la URSS, declaró que la Asamblea que la delegación de la URSS consideraba "antirrepresentativa y antidemocrática" parecía disfrutar la plena confianza del pueblo en el Territorio y expuso que en la nueva Asamblea, la proporción de samoanos probablemente sería mucho mayor. Admitió que la Autoridad Administradora debería evitar que la perpetuación del sistema *matai* impidiera el progreso en lo porvenir y añadió que la Autoridad Administradora indicaba constantemente al pueblo samoano las ventajas de las nuevas formas de representación política y de organización económica. El representante especial declaró, además, con respecto a la Convención Constitucional, que, según tenía entendido, no se pensaba que asistiera ningún funcionario a dicha Conven-

ción y que, con toda seguridad, no se había decidido que solamente los *matai* debieran estar presentes.

b) Estructura actual del gobierno

El representante del Reino Unido expresó su satisfacción de que la Autoridad Administradora pensara nombrar Presidente de los Comités a un miembro del Parlamento elegido por sufragio, dando así el primer paso hacia la creación del cargo de Secretario del Parlamento.

El representante de Bélgica consideró que el Consejo debía respetar los deseos unánimes manifestados por el pueblo de Samoa Occidental con respecto a la cuestión de los derechos políticos.

El representante de China señaló con gran satisfacción que las últimas elecciones para la nueva Asamblea Legislativa eran las más satisfactorias que se hubieran jamás celebrado, y manifestó la esperanza de que los resultados alentadores de esas elecciones aumentarían el deseo de los dirigentes indígenas de llegar gradualmente al sufragio universal.

El representante de El Salvador señaló las modificaciones introducidas en el sistema de votación utilizado en el *Fono de los Faipules* para las elecciones de los miembros samoanos de la Asamblea Legislativa, pero declaró que la delegación de su país esperaba que el sufragio universal sería implantado lo antes posible.

El representante de Francia observó que el apego de los samoanos a sus instituciones tradicionales representaba para ellos el mejor sistema de democracia. Aunque el Consejo no podía descartar el principio del sufragio universal, tampoco podía obligar a los samoanos a adoptarlo y añadió que toda recomendación que se hiciera a los samoanos debía ser redactada con la mayor prudencia.

El representante de Siria señaló que, mientras los samoanos no disfrutaban el derecho de voto, los europeos podían votar. Por lo tanto, en una comunidad que no era muy numerosa funcionaban simultáneamente dos sistemas. Uno muy adelantado y otro atrasado. La propia Autoridad Administradora reconocía que esa situación anómala se debía a la estructura social del territorio que, sin embargo, no tenía la intención de modificar. Además, la Asamblea Legislativa comprendía miembros del Consejo de Estado que, en realidad, era un órgano ejecutivo. Es decir que no parecía existir en el Territorio la separación de las funciones legislativa y ejecutiva. Los poderes de la propia Asamblea Legislativa eran limitados y en muchos casos eran de hecho inexistentes. Además, el *Fono de los Faipules* era solamente un órgano asesor cuya inutilidad reconocía la propia Autoridad Administradora que tenía la intención de abolir dicho órgano. La delegación de su país consideraba que la Autoridad Administradora debería ampliar el cuerpo electoral y los poderes de la Asamblea Legislativa.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que dicha Autoridad tomaría evidentemente en cuenta las observaciones hechas por varios representantes acerca del sufragio universal, y que comunicaría esas observaciones al pueblo del Territorio.

c) Propuestas a favor de desarrollo constitucional

El representante del Reino Unido declaró que, al parecer de la delegación de su país, los preparativos minuciosos de la Autoridad Administradora para que Samoa pudiera alcanzar un día el gobierno propio, de-

bían merecer el apoyo total del Consejo de Administración Fiduciaria. Observó que la principal labor política que habían emprendido la Autoridad Administradora y los dirigentes samoanos consistía en presentar al pueblo samoano el plan de desarrollo y determinar el ritmo a que se podrían ir introduciendo los cambios previstos. A este respecto, consideraba que el Consejo debería dar su aprobación a los arreglos propuestos por la Autoridad Administradora, para discutir el plan con el pueblo samoano.

El representante de Bélgica consideró que el Consejo debería aprobar las disposiciones adoptadas por la Autoridad Administradora con respecto al desarrollo constitucional y aconsejar a los samoanos que reflexionaran y discutieran enteramente todas las enmiendas constitucionales propuestas.

El representante de China manifestó que la delegación de su país se sentía satisfecha por el adelanto logrado en la organización de un Comité de Trabajo encargado del Plan de Desarrollo, así como por el debate del plan por dicho comité. Era particularmente alentador, como lo había declarado el representante especial, que las discusiones de los dirigentes samoanos con respecto al Comité hubieran demostrado visión, madurez e iniciativa excepcionales.

El representante de El Salvador manifestó que la delegación de su país estimaba importante que el Grupo de Trabajo encargado del Plan de Desarrollo tuviera éxito y esperaba que al pueblo samoano le sería posible exponer su opinión acerca de las recomendaciones del Comité, de modo que la Convención Constitucional pudiera tener el éxito que se esperaba de ella.

El representante de los Estados Unidos de América manifestó la esperanza de que la Convención Constitucional se celebraría en la fecha prevista y de que el pueblo de Samoa Occidental aprovecharía verdaderamente las oportunidades que se le ofrecían para adelantar más rápidamente hacia la autonomía y asumir con entusiasmo y prudencia las responsabilidades que ello entrañaba.

El representante de Siria consideró que las declaraciones hechas el 19 de marzo de 1953 por el Primer Ministro de Nueva Zelandia, referentes a la evolución económica, social y política de Samoa Occidental, no parecían estar todavía en condiciones de aplicación y observó que en el informe anual no se dedicaba más que un sólo párrafo a dichas declaraciones. En ese párrafo se mencionaba que el Comité de Trabajo había iniciado su labor, aunque parecía haberse desvanecido el entusiasmo inicial. En el informe anual se subrayaban las dificultades con que tropezaba la Administración y se pretendía que esas dificultades se debían a las costumbres y el modo de vida del pueblo samoano.

El representante de Siria consideró que la división de la población en personas jurídicamente samoanas o europeas era innecesaria y se debería abolir.

El representante de la India consideró que la división de los ciudadanos en personas jurídicamente europeas o no europeas era una reminiscencia del imperialismo anglosajón y militaba en contra del desarrollo de la unidad territorial. Por lo tanto, manifestó la esperanza de que en el Territorio se estableciera una sola clase de ciudadanía.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que las observaciones que se habían hecho acerca del Plan de Desarrollo serían examinadas

detenidamente por la Autoridad Administradora y dadas a conocer al pueblo del Territorio. Era un error deducir que la importancia de las declaraciones del Primer Ministro disminuía de alguna manera o que había algún retraso en la aplicación del plan.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

El representante del Reino Unido consideró que el Consejo debería elogiar la creación del Comité de Planificación Urbana de Apia.

El representante de China manifestó que el establecimiento de la Junta de Gobierno de Distritos y Pueblos representaba un paso importante hacia el desarrollo de la administración local y añadió que esperaba recibir más información sobre las actividades de dicha Junta.

El representante de El Salvador declaró que la delegación de su país esperaba que cuanto antes se estableciera un sistema moderno de administración local. Advirtió con gran interés el establecimiento de la Junta de Gobierno de Distritos y Pueblos, así como la del Comité de Planificación Urbana de Apia, y añadió que esperaba que la Autoridad Administradora examinaría todas las disposiciones posibles y recurriría a todos los medios a su alcance, aunque sin forzar los acontecimientos para persuadir a los samoanos de lo beneficioso que eran los sistemas modernos de elección y administración local.

El representante de Australia, apoyando la política de la Autoridad Administradora de fomentar la tendencia hacia una forma más occidental de democracia, aunque sin insistir tanto que se llegara a provocar una reacción violenta, señaló con satisfacción que algunos distritos ya estaban tratando de establecer formas de administración local basadas en los modelos europeos y que, en 1953, se había aprobado la ley referente a la Junta de Gobierno de Distritos y Pueblos.

El representante de los Estados Unidos de América tomó nota con satisfacción de la aprobación de la ley sobre la Junta de Gobierno de Distritos y Pueblos.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que agradecía especialmente las observaciones hechas acerca de la necesidad de crear órganos locales adecuados y eficientes en el Territorio. Añadió que el Gobierno Territorial estaba examinando muy atentamente esa cuestión y que la Junta de Gobierno de Distritos y Pueblos, recientemente establecida, estaba haciendo otro tanto.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El representante del Reino Unido señaló con satisfacción lo que se estaba haciendo por preparar a los samoanos para la administración pública, tanto en los departamentos del Territorio como en Nueva Zelandia.

El representante de los Estados Unidos de América manifestó la esperanza de que la apertura del Colegio de Samoa permitiría en un porvenir cercano nombrar más samoanos para los cargos de administración pública y para cargos superiores.

El representante de la India encontró que era difícil creer que hubiera samoanos capaces de encargarse de la dirección del sistema administrativo del Territorio, y manifestó que esperaba que la Autoridad Administradora comprendería una rápida samoanización de los servicios administrativos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que no había samoanos en los cargos administrativos de verdadera responsabilidad.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

El representante de China manifestó interés por la información facilitada por el representante especial con respecto a los 14 jueces de tribunal de distrito y por las observaciones sobre la separación de las funciones administrativas y judiciales. La delegación de su país estaba muy satisfecha de que la Administración se interesara en la independencia del poder judicial. Esperaba que los esfuerzos de la Administración en ese sentido no se limitarían solamente a los tribunales de distrito, sino que el principio de la separación de poderes se extendería paulatinamente a los tribunales superiores.

El representante de Siria declaró que la organización judicial del Territorio parecía ser bastante sencilla. Solamente había un tribunal: la Corte Suprema, pues los tribunales regionales y de distrito todavía no habían sido establecidos. Si se trataba de mejorar el sistema era necesario proceder al establecimiento de dichos tribunales y además la Administración debía reconocer a los tribunales indígenas y ayudarlos a progresar.

El representante especial de la Autoridad Administradora aseguró al representante de China que, en realidad, los funcionarios que ejercían funciones judiciales en el Territorio gozaban de plena libertad en todas las categorías y no estaban sometidos a coacción alguna del Gobierno, lo que era cierto, inclusive en los casos cada vez menos frecuentes en que un funcionario administrativo desempeñaba el cargo de comisionado de la Corte Suprema. Al mejorar la formación profesional y con la fiscalización de los jueces de distrito por la Corte Suprema, sería pronto posible establecer un sistema más eficiente de tribunales inferiores.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

Con excepción de una cuantas industrias pequeñas que trabajan principalmente para el mercado local, la economía de Samoa Occidental es de tipo agrícola, y las principales cosechas destinadas a la comercialización son la copra, el cacao y la banana, que se cultivan para la exportación. La gran mayoría de los samoanos vive en aldeas y se dedica principalmente al cultivo de productos alimenticios para la subsistencia que realizan en grupos familiares bajo la dirección del *matai*, empleando métodos tradicionales. A pesar de esto, los samoanos cultivan cerca del 95% de la banana que se exporta, alrededor del 80% de la producción total de copra y posiblemente el 60% de las exportaciones de cacao. Los New Zealand Reparation Estates, organización del Gobierno de Nueva Zelandia que explota plantaciones confiscadas a los alemanes, aportan una contribución importante a la economía del Territorio. Dichas plantaciones producen grandes cantidades de copra, cacao, carne de res y madera y las utilidades se emplean en beneficio del Territorio. Estas plantaciones se utilizan también como centro de experimentación agrícola.

En general, el Territorio goza de prosperidad económica. En los años 1949 a 1953 el total de las exportaciones y reexportaciones aumentó de £1.344.728 a £1.954.689, mientras que las importaciones aumentaron de £881.584 a £1.312.769. Sin embargo, esta última cantidad representa una disminución de aproximadamente £375.000 con respecto al año 1952.

El problema económico principal de Samoa Occidental es la necesidad de aumentar la producción para satisfacer las necesidades de una población que aumenta rápidamente y que está mejorando su nivel de vida y al mismo tiempo preparar la base económica para un Estado autónomo. Tanto la Autoridad Administradora como la Misión Visitadora de 1953 están de acuerdo en que un obstáculo fundamental para esto puede muy bien ser el sistema tradicional de producción agrícola y de tenencia de tierras que se observa en las aldeas, en el cual la producción es el resultado del trabajo de grupos familiares bajo la dirección de un *matai*; estos grupos cultivan lotes pequeños y, a veces, dispersos. Para proporcionar otros medios de producción, la Asamblea Legislativa dictó en 1952 una Ordenanza de Sociedades Cooperativas y a principios de 1954 fué designado un Secretario de Cooperativas.

El Consejo y la Autoridad Administradora han destacado la necesidad de ampliar y diversificar la economía del Territorio y en su declaración sobre el progreso político de Samoa Occidental el Primer Ministro de Nueva Zelandia anunció un amplio programa de fomento, como prueba de la importancia que concede dicho Gobierno a la cuestión. Como parte del programa se inició en 1953 un estudio económico general del Territorio bajo los auspicios de la Comisión del Pacífico Meridional, cuya primera etapa se completó a principios de 1954. El estudio incluirá un estudio aerofotográfico y análisis del terreno, además de un estudio detallado de cuestiones tales como la población, producción, intercambio, recursos y renta nacional. Una segunda fase del programa incluiría medidas para desarrollar la producción industrial, tomando en cuenta las recomendaciones hechas como resultado de un estudio sobre la agricultura realizado en 1952 por un experto del Gobierno de Nueva Zelandia. La Autoridad Administradora informó al Consejo en su informe anual correspondiente a 1953 de que ya había comenzado a hacerse el estudio aerofotográfico, pero que para emprender un programa agrícola intenso había que esperar la llegada del nuevo Director de Agricultura el cual se haría cargo de su puesto a principios de 1954. En su 12º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria acogió favorablemente el programa de fomento y, en particular, tomó nota de que contaba con el apoyo de los dirigentes samoanos.

Además del programa general a que antes se alude, también se emprendieron otros trabajos de desarrollo durante 1953, entre ellos la extensión de los caminos, la iniciación de los trabajos en un nuevo puerto de embarque en Savai'i, el mejoramiento del puerto de Apia y la construcción de una nueva central hidroeléctrica en Avele, que se esperaba que comenzaría a funcionar para octubre de 1954. Un experto del Departamento de Agricultura de Nueva Zelandia visitó en el curso del año el Territorio para determinar la existencia de tuberculosis en el ganado. También se hizo una petición a la FAO para que prestara asistencia técnica a fin de determinar la posibilidad de introducir la cría de peces en viveros en la Samoa Occidental, pero todavía no se ha contraído ningún compromiso oficial.

En su 12° período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota con satisfacción de una declaración del representante de Nueva Zelandia en el sentido de que la Autoridad Administradora había terminado una investigación sobre la conveniencia de conservar la tarifa preferencial del *Commonwealth* Británico, que había estado en vigor en Samoa Occidental desde 1920 y había informado al Gobierno del Territorio de que no tenía inconveniente en abolir la tarifa preferencial y en sustituirla por una tarifa general. En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora declaró que la Asamblea Legislativa no había tenido aún la oportunidad de examinar la cuestión. No obstante, un comité departamental había examinado el problema de las tarifas en el Territorio y sus conclusiones habían sido presentadas al Consejo Ejecutivo.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación y conclusión:

El Consejo toma nota con satisfacción de que ha terminado la primera etapa del estudio económico general del Territorio y del progreso hecho en el fomento de cooperativas y en particular de la designación de un Secretario de Sociedades Cooperativas. En vista del rápido aumento de la población, el Consejo espera que en cooperación con la población samoana se prestará la atención más urgente a la cuestión de intensificar las medidas para lograr un aumento general en la producción, la diversificación de los cultivos y el establecimiento de industrias secundarias.

El Consejo, tomando nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que la Asamblea Legislativa aun no ha tenido oportunidad de considerar la cuestión de la tarifa preferencial pero que el Gobierno de Samoa Occidental está estudiando toda la cuestión de las tarifas aduaneras, espera que se le informe sobre las medidas que en definitiva se adopten.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE EXPORTACIÓN

Como ya se ha señalado, el valor total de las exportaciones continuó aumentando en 1953 y excedió en unas 176.000 libras del total correspondiente a 1952, lo que en gran parte se debió al hecho de que continuaron los precios elevados y aumentaron las exportaciones de cacao y bananas.

La comercialización de los cultivos de exportación se efectúa en parte mediante arreglos contractuales con el Gobierno, y en parte mediante el mercado libre. En el caso de la copra, producida por samoanos, en su 80%, casi todas las exportaciones son adquiridas por el Ministerio de Alimentación del Reino Unido por contrato que garantiza un precio mínimo para la copra producida en Samoa Occidental hasta el 31 de diciembre de 1951. La Junta de la Copra, organismo debidamente constituido que mantiene un Fondo de Reserva de la Copra para estabilizar los precios, determina los precios que se pagan a los productores. Durante 1953, la cantidad de copra exportada fué de 11.185 toneladas, en vez de las 17.037 toneladas exportadas el año anterior, y el precio contractual siguió siendo de £65 la tonelada f.o.b. Apia.

Las exportaciones de cacao han aumentado gradualmente en años recientes y han alcanzado un total de 3.743 toneladas en 1953, en vez de las 2.448 toneladas en 1952, y más de la mitad del total exportado fué producido por samoanos. Las cosechas se venden libremente en los mercados mundiales y en 1953 los precios fluctuaron entre £205 y £320 la tonelada f.o.b. Apia.

Una organización comercial de Nueva Zelandia se ocupa de encontrar mercados a la producción de bananas que se exporta del Territorio; dicha organización fija los precios en consulta con los representantes del Gobierno del Territorio. En 1953 los productores recibieron 9 chelines por casco; este precio no incluye los gastos ni el costo de manipulación del producto, que se pagan con arreglo a un plan del Gobierno y se añaden al precio de venta. En 1953 se exportaron 252.582 cascos de bananas, total éste que supera al de cualquier otro año, después de dos años en que la producción disminuyó debido a las sequías. Existía el proyecto de establecer en fecha próxima una Junta Bananera que se encargara de aplicar el Plan Bananero y que constituyera un fondo de estabilización para la industria.

Además de estos productos, las únicas exportaciones de importancia aparte de las reexportaciones son las de madera (aproximadamente 500.000 pies lineales al año), caucho, coco desecado y productos de la artesanía. En 1951, la producción de coco desecado quedó casi interrumpida debido a una baja registrada en los precios. Con respecto al caucho existe una situación similar.

NEW ZEALAND REPARATION ESTATES

Los New Zealand Reparation Estates son plantaciones adquiridas por el Gobierno de Nueva Zelandia en pago de las reparaciones debidas por Alemania después de la primera guerra mundial. La política del Gobierno de Nueva Zelandia ha sido que dichas plantaciones estén bajo la fiscalización del Gobierno, pero que las utilidades se empleen para costear los planes de desarrollo económico-social en beneficio del Territorio. Estas plantaciones han hecho, una aportación sumamente importante a la economía samoana pues producen grandes cantidades de copra, cacao, caucho y madera para la exportación, y sirven de centro de experimentación agrícola para el desarrollo de industrias pequeñas y para la introducción de nuevas razas de ganado. Un resultado importante obtenido de las operaciones de los Estates ha sido el desarrollo de la producción de cacao y el descubrimiento en 1952 de un tipo superior de cacao resistente a la mancha negra de la mazorca. Alrededor del 68% de las 12.000 cabezas de ganado del Territorio es propiedad de los Estates.

En su declaración del 19 de marzo de 1953 sobre el progreso político de Samoa Occidental, el Primer Ministro de Nueva Zelandia anunció que la Autoridad Administradora estaba dispuesta a estudiar los medios para transferir los Estates a Samoa Occidental, como una empresa en marcha. Se sugirió que esto debería hacerse traspasando la propiedad a un directorio en el que participarían samoanos y neozelandeses, y que estos últimos dejarían sus puestos cuando se lograra la plenitud del gobierno propio. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su 12° período de sesiones, elogió la declaración del Primer Ministro y expresó la esperanza de que el pueblo samoano consideraría cuidadosamente las sugerencias hechas para efectuar el traspaso.

En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora declaró que durante el año se había hecho un estudio preliminar sobre la forma de hacer el traspaso de los Estates, pero que probablemente debería transcurrir algún tiempo antes de que la operación se realizara efectivamente. Añadió que se estaba estudiando una propuesta de designar entretanto un comité consultivo provisional.

RÉGIMEN DE TIERRAS

Las tierras del Territorio están clasificadas por la Ley como tierras de la Corona, tierras de los samoanos y tierras de los europeos. Las tierras de la Corona están en poder del Gobierno samoano o en poder de Nueva Zelandia y las constituyen los Reparation Estates compuestos de antiguas propiedades alemanas adquiridas en pago de reparaciones después de la primera guerra mundial. Las tierras samoanas son dominio de la Corona, pero los samoanos las ocupan de acuerdo con el uso y las costumbres samoanos. Esas tierras no pueden traspasarse con carácter permanente, salvo al Gobierno de Samoa o a otros grupos samoanos, aunque pueden arrendarse con permiso de ese Gobierno. Menos de 3.500 acres de tierras samoanas han sido traspasados con carácter permanente al Gobierno y esto se ha hecho con fines públicos únicamente.

En diciembre de 1953, la tierra que se cultivaba o utilizaba en el Territorio estaba distribuida aproximadamente de la manera siguiente:

	Acres
New Zealand Reparation Estates:	
Dominio absoluto	12.900
Arrendadas	400
Samoanos	76.000
Europeos (arrendadas)	7.900
Gobierno samoano, europeos y misiones (dominio absoluto)	27.050

Además de esas tierras había aproximadamente 600.000 acres de tierras sin utilizar que incluían tierras forestales, zonas reservadas y superficies cubiertas de lava en Savai'i (45.000 acres). De todas las tierras del Territorio, los samoanos poseían de 580.000 a 585.000 acres, los europeos unos 16.000 y las misiones unos 5.000 acres. Los New Zealand Reparation Estates poseían unos 38.200 acres y las tierras de la Corona en poder del Gobierno samoano llegaban a 88.000 acres, buena parte de ellas utilizadas por habitantes indígenas para sus propios fines.

A pesar del rápido aumento de población en Samoa Occidental, la presión demográfica aun no es general y es aparente únicamente en la costa norte de Upolu y en Manono, donde en todo caso se dispone de otras tierras para solucionar los casos graves. Se considera que no hay peligro inmediato de superpoblación. Se calcula que el Territorio podría sostener el doble de su población actual sin tomar en cuenta la posibilidades de aumento de productividad; no obstante, el problema principal de la Autoridad Administradora no es mantener la actual economía de subsistencia sino hacer que la producción agrícola aumente en forma considerable especialmente las cosechas de exportación, a fin de establecer la base económica necesaria para el programa de progreso político del territorio.

Una de las dificultades principales para el aumento de la producción puede ser el sistema samoano de tenencia de tierras, en el cual pequeños grupos familiares poseen y cultivan reducidas parcelas dispersas bajo la dirección del *matai* con poco incentivo para el individuo. La Autoridad Administradora estudia este problema y espera que el fomento de las cooperativas pueda satisfacer la necesidad de contar con otro medio de organización económica. En su informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora informó también que un número cada vez mayor de samoanos está culti-

vando plantaciones mayores y mejor dirigidas, comparables a las de los europeos.

En su 12º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora trataría de encontrar una solución al problema de la tenencia de tierras y lograría fomentar la creación de cooperativas agrícolas.

HACIENDA PÚBLICA

Con arreglo a la Samoa Amendment Act, 1947, la Asamblea Legislativa debe aprobar el presupuesto anual y toda la legislación financiera con la salvedad que ninguna ley financiera que decida la consignación de créditos públicos debe ser aprobada por la Asamblea sin una recomendación previa del Alto Comisionado asesorado por el Consejo Ejecutivo. Las principales fuentes de ingreso son los derechos de importación y exportación, las ganancias de las empresas públicas, los impuestos directos, inclusive un impuesto progresivo sobre los sueldos que pagan todos los individuos, salvo las sociedades de capital, los derechos marítimos y portuarios y un impuesto sobre los establecimientos basado en el precio bruto de venta de las mercancías.

En su décimo período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, informado de que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Legislativa era partidaria, en principio, de reemplazar los impuestos sobre los sueldos y sobre los establecimientos por un impuesto sobre la renta, había expresado la esperanza de que las propuestas de revisión del sistema fiscal no sufrirían demoras indebidas. La Autoridad Administradora manifestó, sin embargo, que aun no había sido posible obtener información acerca de las rentas sujetas a impuestos, y que cualquier enmienda general del sistema existente tendría que aguardar las conclusiones del estudio general sobre la economía y las rentas del Territorio. No obstante, la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14º período de sesiones, que a fines de 1953 se había establecido un comité departamental para investigar el sistema fiscal del Territorio. Este comité había informado sobre las tarifas y los derechos de sucesión y estaba estudiando el impuesto sobre los establecimientos, los derechos de exportación y los impuestos a la renta.

Los ingresos públicos en 1953 alcanzaron un nivel máximo de £929.120, superior al de cualquier otro año, en vez de las 781.980 libras recaudadas el año anterior. Los gastos en 1953 ascendieron a £1.054.320, lo que significó un déficit de £125.200. A fin de acelerar la política de desarrollo, el presupuesto de 1953 disponía que el fondo de desarrollo de 251.740 libras formado con los excedentes de los años anteriores podría utilizarse íntegramente, pero los elevados ingresos permitieron la realización del programa de desarrollo sin tener que reducir el fondo más que en la mitad de lo que se había previsto.

De las utilidades comerciales de los New Zealand Reparation Estates, en 1953 se dedicó un total de 28.470 libras a subsidios de educación y becas en el extranjero, y 480 libras a estudios y experimentos para combatir el escarabajo dinastes.

Como se ha dicho anteriormente, durante el año se aprobó una enmienda a la Ley de Samoa por la que se autorizó al Ministro de Hacienda de Nueva Zelandia a alterar el valor de la libra samoana en relación con la libra neozelandesa.

El Departamento de Obras Públicas continuó trabajando con todos sus recursos durante 1953. En Savai'i se instalaron 84.000 pies de tubería, para abastecer de agua a 5.000 personas adicionales, y se construyeron varias cisternas de cemento, con lo que se aumentó la capacidad de almacenamiento en 110.000 galones. Terminaron los trabajos en el puente de Vaisigano y prosiguieron las obras de construcción de caminos, particularmente en Savai'i. Se progresó considerablemente en la construcción de una central hidroeléctrica de 1.000 kilovatios en Avele, que deberá terminarse en septiembre de 1954.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Bélgica observó que el promedio actual de producción anual *per capita* está disminuyendo mientras que la población está aumentando a un ritmo único en el mundo. Consideró que el Consejo debía aprobar una recomendación que destacara la necesidad de aumentar la producción a fin de solucionar el problema creado por este rápido aumento de la población. Refiriéndose a la prolongada existencia de la tarifa preferencial, declaró que quizá no fuera enteramente compatible con el Acuerdo de Administración Fiduciaria ni con la igualdad económica de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El representante de China declaró que su delegación esperaba con interés que se concluyera el estudio económico, que a su parecer debía tener repercusiones de mucha trascendencia en el futuro desarrollo del Territorio y observó con satisfacción que la Administración se daba plena cuenta de la necesidad de aumentar la producción para hacer frente al aumento constante de la población. Esperaba asimismo que se darian nuevos datos en el próximo informe anual sobre el problema de la tarifa preferencial británica que la Administración estaba estudiando.

El representante de El Salvador opinó que el establecimiento de cooperativas era muy importante y que esperaba que la Autoridad Administradora haría todo lo posible, una vez que se promulgara el reglamento en estudio, para que las cooperativas se inscribieran inmediatamente. Los estudios y experimentos sobre la diversificación de los cultivos y establecimiento de nuevas industrias, aunque se hacían en pequeña escala, debían continuarse. Añadió que convenía a este respecto que la Administración aprovechara la actual situación económica favorable puesto que quizá fuera más difícil en el porvenir intensificar el desarrollo industrial del Territorio.

El representante de Francia observó que el único problema en cierto modo inquietante en Samoa era el problema económico relativo al factor demográfico. Añadió que los esfuerzos que realizaba la Administración en el terreno económico merecían elogios, pero que era más importante persuadir a los samoanos de que tenían el porvenir en sus manos y que de su espíritu de organización y perseverancia dependería su éxito.

El representante de Australia declaró que la estabilidad y prosperidad económica del Territorio demostraban lo adecuado de la política que seguía la Administración. Observó que había en el Territorio una cantidad considerable de capital improductivo que

podía invertirse y que esperaba con interés los datos sobre las oportunidades que el actual estudio económico pudiera revelar. A este respecto, declaró que observaba con particular satisfacción el establecimiento de pequeñas industrias y las medidas que la Administración estaba adoptando para el registro de cooperativas, y para el fomento de la industria ganadera.

El representante de Siria señaló que la agricultura era el factor principal en la economía del Territorio. Añadió que, a pesar de eso, la agricultura no había ido mucho más allá de la etapa de producción de cosechas de productos alimenticios y los métodos agrícolas eran aún anticuados. Comentó además que la participación de la población indígena en las actividades económicas del Territorio parecían ser limitadas y que la Cámara de Comercio no tenía ningún miembro samoano, anomalías que exigían la atención de las Autoridades Administradoras. Observó que la Autoridad Administradora había estudiado la cuestión del sistema del trato preferencial que aún regía en el Territorio y sería interesante que el Consejo examinara lo hecho a este respecto en el 16° período de sesiones.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la economía del Territorio no había progresado porque la Autoridad Administradora fomentaba el sistema de los *matais* y enajenaba las tierras pertenecientes a la población indígena. La agricultura era rudimentaria y todavía se utilizaban medios de producción anticuados. Declaró que a fin de mejorar las condiciones de vida de la población indígena la Autoridad Administradora debía utilizar en interés de ésta una suma considerable de dinero, o sea las 500.000 libras esterlinas que pertenecían a Samoa Occidental pero que se habían invertido en Nueva Zelandia; asimismo debía emplear las 200.000 libras esterlinas que representaban las utilidades obtenidas por el Gobierno de Nueva Zelandia de los Reparation Estates.

El representante especial de la Autoridad Administradora convino en que la manera de resolver algunos de los problemas más difíciles del Territorio era mediante la adopción de medidas económicas. La Autoridad Administradora se daba cuenta de que debía darse a entender a la población del Territorio la urgencia del peligro y que únicamente mediante un esfuerzo general podría vencerse esta dificultad. Sólo a base de mayor producción *per capita* constantemente en aumento, podría el futuro Estado de Samoa Occidental mantener, no ya mejorar, su nivel de vida y su libertad de acción.

La cuestión de utilizar mejor el capital improductivo existente en el país, indudablemente sería objeto en los próximos años de vivos debates que producirían resultados saludables. El mercado que hay en la actualidad en el Territorio para los productos que podrían crearse mediante las inversiones en la agricultura, la ganadería y las industrias secundarias en la mayor parte de los casos era limitado; las grandes utilidades que se obtenían en las cosechas de exportación desalentaban las inversiones en gran escala en lo que podía denominarse "industrias de transformación". Pero donde quiera que hubiera posibilidades concretas para inversiones lucrativas, incluso de sumas comparativamente pequeñas en ciertas industrias primarias y secundarias, no serían descuidadas si la Autoridad Administradora no podía poner en práctica sus deseos. Mientras tanto, las sumas que el Gobierno estaba invirtiendo en obras de capital aumentaban continuamente. Refiriéndose a las observaciones

del representante de Siria, el representante especial declaró que, en vista de que las exportaciones de los años recientes y el actual período de prosperidad por que atravesaba el Territorio, era una exageración declarar que la agricultura no había ido más allá de la etapa de las cosechas de subsistencia. No obstante, la Autoridad Administradora se da perfecta cuenta de la necesidad de mejorar la agricultura y había tomado y seguía adoptando medidas para mejorar la situación en cooperación con el Gobierno del Territorio.

En respuesta al representante de la URSS, el representante especial declaró que, a su parecer, al afirmar dicho representante que la Autoridad Administradora debía invertir los fondos de reserva de 500.000 libras esterlinas del Gobierno del Territorio, demostraba que no había comprendido la situación constitucional ni la realidad política. Ese dinero podía ser asignado únicamente por la Asamblea Legislativa del Territorio, que votaba casi todas las sumas dedicadas a suministros y aprobaba virtualmente toda la legislación. En cuanto a las 200.000 libras esterlinas de utilidades acumuladas de los New Zealand Reparation Estates, la Autoridad Administradora se había comprometido a invertirla únicamente después de consultar con el Gobierno Territorial que en ese caso era el Consejo Ejecutivo. Aun en ese caso la Asamblea Local podía oponerse a cualquier gasto que se propusiera si así lo deseaba.

El representante especial declaró que la cuestión de las tarifas aduaneras estaba pendiente de estudio en el Gobierno Territorial. Se trataba de una cuestión que interesaba principalmente a los samoanos que como era natural se mostraban sumamente prudentes al hacer cualquier cambio radical en el sistema de tarifas, que era y posiblemente continuaría siendo durante mucho tiempo la mayor fuente de ingresos del Territorio.

NEW ZEALAND REPARATION ESTATES

El representante de los Estados Unidos de América tomó nota con satisfacción de las medidas que la Autoridad Administradora había adoptado hasta la fecha para cumplir la propuesta de traspasar a los samoanos los New Zealand Reparation Estates.

RÉGIMEN DE TIERRAS

El representante de Siria declaró que a su parecer la población indígena no estaba debidamente protegida contra la enajenación de sus tierras. Aparte de las ventas en la región de Apia, que podían realizarse mediante autorización del Presidente del Tribunal Supremo, las tierras de cultivo sólo podían ser arrendadas por un período que no excediera de 40 años y a pesar de las seguridades dadas por el representante especial en contrario, esto, al parecer de su delegación, equivalía a una verdadera enajenación. La legislación actual con respecto a la tenencia de tierras debía por consiguiente modificarse.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que las tierras que habían sido enajenadas por los alemanes y entregadas posteriormente a los New Zealand Reparation Estates no habían sido devueltas aún a la población indígena. En el plan de reforma para el Territorio se hablaba en términos muy vagos de devolver los Estates a Samoa Occidental, pero de las declaraciones del representante especial se deducía que esos planes eran indefinidos y que no se había fijado fecha alguna para ello. Además, a juzgar por la declaración del Primer Ministro

de Nueva Zelandia, era evidente que el Gobierno neozelandés tenía la intención de conservar el dominio sobre las plantaciones puesto que la administración de los Estates no podría disponer de las tierras ni de las utilidades sin el consentimiento de un funcionario designado por el Gobierno de Nueva Zelandia. Por consiguiente, la Autoridad Administradora debía tomar medidas urgentes para devolver a la población indígena los Reparation Estates, así como todas las demás tierras que les hubieren sido enajenadas de una u otra forma y tomar las medidas necesarias para impedir en lo sucesivo toda enajenación de tierras que pertenecieran a la población indígena.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró en respuesta al representante de la URSS que durante muchos años no se habían enajenado tierras de samoanos, como no fuera las que habían sido traspasadas al Gobierno para realizar obras necesarias y mantener zonas reservadas también necesarias. La población indígena poseía dentro del régimen tradicional de tenencia de tierras más de las siete novenas partes de las tierras y algunos samoanos poseían o arrendaban otras tierras ajustándose a métodos europeos. Se estaban midiendo grandes superficies de terrenos que el Gobierno de Samoa había adquirido recientemente para ponerlas a disposición de los samoanos. Además, las declaraciones del Primer Ministro sobre el traspaso de los New Zealand Reparation Estates no habían sido vagas. La oferta se había evidentemente sometido a medidas de protección temporales en condiciones que se consideraban necesarias hasta que Samoa alcanzara el gobierno propio a fin de evitar un conflicto peligroso entre el poder y la responsabilidad.

HACIENDA PÚBLICA

Observando que el único impuesto a la renta existente en el Territorio era un impuesto sobre los salarios y los sueldos que aumentaban hasta llegar a un máximo del 10%, el representante de Bélgica opinó que si las necesidades del Territorio aumentaban había otras posibilidades fiscales.

El representante de Siria declaró que el sistema fiscal del Territorio había progresado, pero señaló que la mayor parte de las sociedades de capital, sobre todo las europeas, no eran gravadas suficientemente. Los impuestos al consumo eran la fuente principal de ingresos, pero los impuestos sobre las utilidades de las sociedades anónimas prácticamente no existían. Su delegación consideraba, además que la Autoridad Administradora debía establecer un régimen fiscal completo y que comprendiera todas las actividades.

OBRAS PÚBLICAS

El representante de Bélgica observó con satisfacción que durante varios años se había tratado seriamente de mejorar el suministro de agua, y que el informe anual revelaba progresos considerables al respecto.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

ORGANIZACIÓN SOCIAL

La Misión Visitadora de 1953 así como la Autoridad Administradora han subrayado la estrecha relación que existe entre los problemas del desarrollo social y

el progreso político y económico en Samoa Occidental. A pesar de haber demostrado una notable adaptabilidad frente a las condiciones en constante variación, las formas tradicionales de la sociedad samoana en general han cambiado comparativamente poco desde la adopción del cristianismo hace más de un siglo. Como en el pasado, la unidad de la vida social samoana es la familia polínica (*aiga*), cuyos miembros reconocen la jefatura y autoridad del *matai*, o jefe de familia, que en compensación cuenta con la colaboración y los servicios de todos los miembros de su familia. Uno de los deberes del *matai* es administrar la tierra familiar y dividirla para que los miembros la exploten a cambio de los servicios que le prestan. Como el título no es hereditario sino que depende de la elección de la familia, la aspiración normal de la mayor parte de los hombres adultos es pasar de una categoría sin título a una titular.

Desde el punto de vista social, se considera que el sistema de la familia samoana tiene ciertas ventajas, ya que se basa en la interdependencia y el apoyo mutuo; en consecuencia, la Autoridad Administradora no cree que exista el problema general de la seguridad social. Desde el punto de vista político, sin embargo, constituye un obstáculo a la adopción del sufragio universal y en materia económica la economía comunal ofrece comparativamente escasos incentivos para el aumento de la producción o la acumulación del capital. Estos problemas han constituido la preocupación constante del Consejo de Administración Fiduciaria y de la Autoridad Administradora y ésta última ha señalado la existencia de una tendencia hacia el cambio, debido al aumento de una economía monetaria y a la creciente presión demográfica sobre los recursos alimenticios. Sin embargo, la política de la Autoridad Administradora no consiste en forzar un cambio de esa naturaleza, sino en tratar de educar paulatinamente a los samoanos inculcándoles las ventajas de una política más liberal y de un sistema social y económico más progresista.

La población de Samoa incluye también una pequeña minoría de unas 4.600 personas equiparadas jurídicamente a los europeos, compuesta de descendientes, en parte samoanos, y de familias fundadas por colonos europeos. Aunque esta minoría está aumentando no está muy bien definida culturalmente, puesto que muchos de sus miembros se están identificando cada vez más con la comunidad samoana y en algunos casos tienen poca sangre europea o ninguna. Se prevé que la distinción legal entre la condición jurídica del europeo y del samoano será examinada en la próxima Convención Constitucional.

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

En Samoa Occidental las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos jurídicos y políticos y según la tradición samoana pueden ocupar cualquier cargo independientemente de su categoría o importancia. Sin embargo, en la práctica, no es corriente que las mujeres lleguen a ser elegidas *matai* y, por lo tanto, en general no desempeñan funciones políticas. Aunque la gran mayoría de las mujeres prefieren casarse jóvenes y dedicarse al cuidado de la familia, los centros de formación profesional para enfermeras y maestras atraen a un número considerable de mujeres jóvenes. Además, en las aldeas las mujeres ejercen una influencia considerable, especialmente mediante las comisiones de mujeres de las aldeas (de las cuales existían 251 en 1953) que ayudan al trabajo de las es-

cuelas de las aldeas, hospitales y dispensarios, y que cuentan con el apoyo activo de la Administración. Durante el año objeto de estudio, un comité central compuesto por delegados de las diferentes comisiones femeninas de distrito fué organizado bajo la presidencia de la esposa del Alto Comisionado. El objeto de este grupo es ayudar en la coordinación de las diversas actividades de las comisiones de aldea y en el establecimiento de mejores vínculos entre las mismas.

El Consejo de Administración Fiduciaria había expresado anteriormente la esperanza de que se alentara a las mujeres todo lo posible para que llegaran a desempeñar una función importante en las funciones públicas.

NIVEL DE VIDA

Salvo un índice de los precios de consumo basados en los presupuestos familiares de los funcionarios públicos, preparado en 1951-1952, y utilizado por el Comisionado de Servicios Públicos como base para determinar el aumento del costo de vida de los empleados del Estado, no se ha hecho estudio alguno sobre el nivel de vida de los diferentes sectores de la comunidad, excepción hecha de un censo agrícola levantado en 1950-1951. Según la Autoridad Administradora, esto se debe a la dificultad que existe para determinar el costo de vida de los habitantes indígenas dada la falta de una economía monetaria general. La desnutrición y la miseria son casi desconocidas y la prosperidad general del Territorio se refleja en el bienestar y la salud de los samoanos. Al mismo tiempo, la Autoridad Administradora señaló que elevar el nivel de vida entrañaría el aumento de los servicios sociales y educativos, que ya absorben un 30% de los ingresos totales y, por lo tanto, todo aumento considerable debe producirse como consecuencia del desarrollo de la economía y el aumento de la producción.

CONDICIONES DEL TRABAJO

Como sólo una pequeña parte de la población del Territorio depende de salarios, la Autoridad Administradora había declarado anteriormente que no se necesitaba una administración de trabajo cuidadosamente organizada o una legislación del trabajo muy precisa. Sin embargo, en 1953, un funcionario del Departamento de Trabajo y Empleo de Nueva Zelanda visitó el Territorio para preparar un informe sobre las condiciones del trabajo y proponer una legislación obrera conveniente. El informe donde figuran sus conclusiones y recomendaciones fué presentado a la Asamblea Legislativa para ser puesto en práctica.

El mayor empleador es el Gobierno (inclusive la New Zealand Reparation Estates) quien fija la tasa de los salarios que paga a los trabajadores no calificados y semicalificados. Esta tasa sirve de pauta a los empleadores particulares y los dueños de las plantaciones. En 1953, la tasa pagada por el Gobierno a los trabajadores no calificados era de 9 chelines por día, mientras que la mayoría de los empleadores privados pagaban 8 chelines y 6 peniques por día. La semana de trabajo exigida por el Gobierno ha sido generalmente reducida a 45 horas, con días de descanso completo los sábados, domingos y otros días feriados. En general, la mayoría de los empleadores particulares cumple las horas de trabajo fijadas por el Gobierno. En el Territorio no existen sindicatos, aunque no se prohíbe su establecimiento, y en el pasado, como no surgían conflictos del trabajo, no se consideró necesario establecer un procedimiento para darles so-

lución. Sin embargo, en el período que se examina se presentó a la Asamblea Legislativa una moción para establecer una junta permanente de arbitraje para fallar las reclamaciones y litigios sobre salarios, y se designó una Comisión de Selección para estudiar la propuesta y presentar sus conclusiones a la Asamblea. En 1943 dicha Comisión preparó su informe, que ha quedado pendiente hasta que se termine el estudio de las condiciones del trabajo a que se ha hecho referencia.

El Departamento de Obras Públicas continúa dirigiendo un plan de formación profesional por el cual los trabajadores no calificados pueden llegar a ser trabajadores semicalificados, aumentando en consecuencia sus salarios. Se espera ampliar este plan de tal manera que la proporción de trabajadores calificados aumente en las diferentes profesiones. Algunas escuelas de misiones han organizado cursos comerciales y las principales escuelas públicas están tratando de aumentar sus servicios con ese fin. Los cursos comerciales forman parte de los programas del Colegio de Samoa. La Autoridad Administradora informó además al Consejo, en su 14° período de sesiones, que recientemente se había establecido una Comisión de Cursos Comerciales para asesorar al Gobierno Territorial sobre la mejor manera de organizar un sistema más adecuado de cursos comerciales.

El Servicio de Sanidad proporciona, en lo posible, servicios a los empleados y al resto de la población para el cuidado y protección de su salud. Se están estudiando nuevas disposiciones legales que hagan esta protección más adecuada. El Gobierno también está estudiando la legislación que debería promulgar para proporcionar un sistema de seguros contra accidentes del trabajo.

HIGIENE PÚBLICA

En 1953 no se promulgó ninguna ley importante en relación con la higiene pública y el saneamiento; en este campo no se realizó ningún progreso notable. Se mejoraron las instalaciones que existen en las instituciones para los casos de tuberculosis, y la organización administrativa encargada de la lucha contra esta enfermedad; se ha comenzado a trabajar en una nueva sala de maternidad en el hospital de Apia.

El servicio médico de Samoa Occidental está bajo la dirección del Departamento de Sanidad y mantiene un hospital general en Apia y 13 estaciones auxiliares (con aproximadamente 130 camas), tres de las cuales fueron clasificadas como hospitales rurales por la Autoridad Administradora. Los demás son dispensarios que tienen instalaciones para tratar casos de menor importancia. El hospital de Apia constituye el centro médico del Territorio; tiene las instalaciones propias de los hospitales generales, inclusive instalaciones para cirugía de importancia, radiología e investigaciones de laboratorio. También tiene locales de aislamiento (80 camas) para enfermos de tuberculosis, y una clínica prenatal; la nueva sala de maternidad tendrá capacidad para 28 casos y completará las instalaciones existentes. Todos los servicios de hospital del Territorio son gratuitos, salvo el pago de una pequeña suma para alimentos o para alojamiento especial.

En 1953, el personal del Departamento de Sanidad incluía, además del Director de Sanidad, un funcionario médico de sanidad, tres médicos europeos o neozelandeses (uno menos que en 1952), un dentista gra-

duado en Europa, 37 prácticos de medicina samoanos (seis más que en 1952) y seis dentistas auxiliares samoanos. Los servicios de enfermería fueron proporcionados por 11 enfermeras que recibieron formación profesional en Europa o Nueva Zelandia, y que están bajo la dirección de una enfermera jefe, 68 enfermeras con formación profesional local y 126 enfermeras con formación profesional parcial. Todos los médicos graduados en Europa o Nueva Zelandia trabajan en el hospital de Apia; las tres estaciones auxiliares fueron dotadas con prácticos de medicina samoanos, que contaron con la ayuda de 23 enfermeras de distrito asignadas a los lugares más importantes del Territorio.

Los prácticos de medicina samoanos y los dentistas auxiliares reciben formación profesional en la Escuela Central de Medicina de Suva, situada en las Islas Viti, y las enfermeras se preparan en una escuela de formación profesional existente en el hospital de Apia. En el hospital se dan cursos de repaso de seis meses para prácticos en medicina, destinados especialmente a mejorar la calidad del trabajo de los prácticos que se graduaron en Suva en una época en que no había tantos cursos como ahora. En 1953, ocho prácticos de medicina samoanos terminaron su formación profesional en Suva y estaban cumpliendo su internado en el hospital de Apia. Otros seis recibían instrucción en Suva o en Nueva Zelandia, y tres becarios estudiaban para recibir su título médico. Cincuenta y nueve mujeres samoanas recibían instrucción para ser enfermeras en el hospital de Apia. La Autoridad Administradora informó que existía gran escasez de inspectores sanitarios y de higiene pública con formación profesional; en 1953 había seis inspectores sanitarios auxiliares (cuatro más que en 1952) y otros recibían formación profesional en Suva. A comienzos de 1954 un funcionario neozelandés con experiencia se unió al Departamento de Sanidad como jefe de inspectores sanitarios.

Las principales enfermedades infecciosas combatidas especialmente por el Departamento de Sanidad son la tuberculosis y el pian. Para luchar contra la primera enfermedad, se ha agregado una nueva ala al hospital de Apia en 1951 como parte de un plan general para el diagnóstico, registro y vigilancia continua de todos los casos de tuberculosis descubiertos en el Territorio. En 1953, se registró un total de 295 casos, de los cuales 82 estaban internados en el hospital. Se cree que la mayor parte de los casos de tuberculosis en el Territorio fué registrada y que aquellos internados en el hospital incluyen la mayoría de los casos activos o infecciosos. Sin embargo, la Autoridad Administradora informó que en 1953 la lucha contra la tuberculosis se veía obstruida por la partida del funcionario médico encargado de ese servicio, para el cual aún no se había encontrado sustituto.

A pesar del tratamiento constante y de las diferentes campañas de "supresión" se calcula que del 5 al 10% de la población sufre de pian, ya en forma declarada o latente. Para luchar contra esta enfermedad se tiene el propósito de llevar a cabo en 1955 una campaña general, con el apoyo de la OMS y el UNICEF, que tendrá por objeto tratar dentro de un período limitado de tiempo todos los casos y contagios de esta enfermedad.

En su 12° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria había expresado su confianza en que se prestaría continua atención al mejoramiento de los servicios médicos. Durante 1953, el Gobierno

Territorial destinó 174.050 libras a gastos de Sanidad, es decir, aproximadamente el 16,5% del presupuesto total. Además del trabajo que se realiza en la sala de maternidad del hospital de Apia, se ha adquirido un nuevo equipo de rayos X mediante un subsidio del Gobierno de Nueva Zelanda y se han facilitado los servicios de un nuevo dispensario a Sataua, Savai'i. Este fué el primer dispensario construido con arreglo a una política de la que el Consejo de Administración fiduciaria tomó nota en su 12° período de sesiones, que prevé el establecimiento de un núcleo de hospitales rurales en cada distrito, a medida que se disponga de los fondos necesarios.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota de los adelantos realizados en materia de higiene pública durante el período que se examina, señala a la atención de la Autoridad Administradora la conveniencia de aumentar las instalaciones médicas y los hospitales del Territorio y expresa la esperanza de que continúen los esfuerzos en la lucha contra la tuberculosis.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de China expresó su satisfacción por el considerable progreso realizado en materia social.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

El representante de Australia señaló que la comprensión, mesura y cuidado con que la Autoridad Administradora enfocaba los problemas de la costumbre tradicional eran dignos de elogio y expresó el convencimiento de que la notable adaptabilidad que las formas tradicionales de la sociedad samoana habían demostrado al ser puestas en contacto con elementos extraños a ella se podía atribuir en gran parte a esa política.

El representante de Siria declaró que, al parecer, la sociedad samoana se veía obstruida por las costumbres y tradiciones que dificultaban considerablemente el progreso. Nadie podía exigir a la Autoridad Administradora que obligara a la población indígena a aceptar las reglas del progreso pero, por otra parte, no se podía aceptar la continuación eterna de un sistema social que impedía el progreso. La Autoridad Administradora debería prestar atención a esta tarea inmediatamente y explicar a la población las reformas orgánicas que considerara adecuadas.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El representante de Bélgica opinó que aunque la cuestión del trabajo no era de importancia fundamental en el Territorio, convenía no obstante adoptar cierta legislación obrera. Declaró además que probablemente era más sencillo realizar obras comunales, como por ejemplo el mantenimiento de caminos, por grupos de familias o de aldeas bajo la dirección de los *matais* en vez de utilizar un sistema de impuestos y remuneraciones, pero se preguntó si se podía decir con exactitud que no existía el trabajo obligatorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora convino con el representante de Siria en que,

aunque el poder político debería predominar aún más en la sociedad samoana, las mejoras y reformas que aparentemente beneficiarían al pueblo del Territorio no podían ser impuestas por la fuerza. Los samoanos se daban perfecta cuenta de que la Autoridad Administradora con arreglo al Acuerdo de Administración Fiduciaria, había contraído la obligación de respetar sus tradiciones.

HIGIENE PÚBLICA

El representante del Reino Unido señaló que el elevado nivel de los servicios sociales en Samoa hablaba por sí mismo. Observó que la campaña de lucha contra el pian, el tratamiento de los leprosos y la disminución en la incidencia de la mortalidad infantil eran probablemente los resultados más positivos del año en materia de higiene pública.

El representante de Bélgica señaló que la situación en materia de higiene pública era realmente muy favorable en comparación con la de otros territorios en fideicomiso. Sin embargo, al parecer, la tuberculosis continuaba siendo un grave peligro y señaló que se debían fomentar los esfuerzos por descubrir todos los casos atacados por dicha enfermedad, y que se debía tratar de cubrir el puesto vacante del funcionario médico que estaba anteriormente a cargo de ese trabajo, tan pronto como fuera posible.

El representante de El Salvador señaló que la situación en materia de higiene pública era satisfactoria. Sin embargo, expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora consiguiera encontrar a un funcionario médico especialista que se encargara de la lucha contra la tuberculosis.

El representante de Francia señaló que, aunque todavía quedaba mucho por hacer en materia de higiene pública, la situación en general era satisfactoria.

El representante de Siria declaró que su delegación desearía que se aumentara el número de hospitales en el Territorio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que la situación en materia de higiene pública exigía que la Autoridad Administradora tomara medidas inmediatas para construir nuevos hospitales y para aumentar el número del personal médico con formación profesional. El único hospital general existente en Samoa Occidental no podía satisfacer las necesidades de la población samoana y garantizar la atención médica adecuada y también debía señalar que, debido a los servicios inadecuados de transporte era difícil, para los enfermos procedentes de zonas alejadas, llegar al hospital. Estos hechos constituían un argumento poderoso a favor del aumento de créditos presupuestarios para atender las necesidades de higiene pública.

El representante especial de la Autoridad Administradora reconoció que en el Territorio se necesitaban más hospitales y aumento de personal. Esto podía obtenerse, pero no en un solo día. Afortunadamente, en contra de lo que había declarado el representante de la URSS, el transporte de los enfermos era mucho más fácil de lo que éste imaginaba. La necesidad de conseguir cuanto antes los servicios de un médico especializado en el tratamiento de la tuberculosis fué reconocida tanto por el Gobierno Territorial como por la Autoridad Administradora, así como el hecho de que no se debían disminuir los esfuerzos por encontrar un funcionario adecuado.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

Conforme al censo de población, en 1951 había en Samoa Oriental unos 32.000 niños en edad escolar (de cinco a 19 años). En 1953, 14.170 niños recibieron educación gratuita en las escuelas públicas del Gobierno (la cifra correspondiente a 1952 es 13.158) y 6.437 alumnos asistieron a escuelas privadas dirigidas por cinco misiones religiosas.

El sistema de escuelas del Estado consta de 100 escuelas de aldea (tres menos que en 1952), cuatro escuelas primarias de distrito, dos escuelas primarias para internos, una escuela primaria en la colonia europea de Aleisa, un jardín de infantes y una escuela primaria para niños samoanos y europeos en la región de Apia, y el colegio de Samoa (para enseñanza primaria y secundaria). El Gobierno Territorial también sostiene una escuela normal, una escuela para enfermeras samoanas y cursos nocturnos de enseñanza para adultos. Las misiones tienen también escuelas de tipo elemental y de segunda enseñanza dirigidas por catequistas y misioneros. Además tienen colegios teológicos, una escuela agrícola para hombres y una escuela comercial para mujeres.

Entre los progresos que pueden señalarse en 1953, y de los que tomó nota el Consejo en su 12° período de sesiones, figuran la terminación de la escuela primaria Vaipouli para internos en Savai'i, la cual como la de Avele, atribuye especial importancia a la formación agrícola. A principios de 1953, las escuelas samoanas de Malifa y la europea de Leififi fueron combinadas para formar el jardín de infantes y la escuela primaria de Apia, cuyo personal está compuesto por maestros europeos y samoanos en los que están matriculados unos 1.500 alumnos. A principios de 1953 se terminó definitivamente el colegio de Samoa y su departamento de segunda enseñanza empezó a admitir alumnos a razón de 30 a 40 por año; esta escuela, finalmente admitirá 200 estudiantes de segunda enseñanza, además de los matriculados en los cursos primarios, y podrá admitir nuevos alumnos cuando sea necesario. El departamento de segunda enseñanza será equipado y provisto de personal similar al de una escuela secundaria de Nueva Zelanda.

Las informaciones recibidas posteriormente por el Consejo de Administración Fiduciaria en su 14° período de sesiones indican que, además de las anteriores, a fines de 1953 estaban a punto de terminarse cuatro nuevas escuelas de aldea y una escuela primaria de distrito (en Poutasi). La construcción de una nueva escuela de distrito (que elevará a cinco el total de estas escuelas) responde a la política administrativa de establecer una escuela de distrito por lo menos en cada uno de los ocho distritos docentes, para proporcionar instrucción de un nivel superior al que hoy proporcionan las escuelas de aldea.

El Consejo ha tenido siempre presente la necesidad de desarrollar el sistema escolar del Territorio, y la Autoridad Administradora ha declarado que uno de sus fines era proporcionar una enseñanza elemental general y hacer posible una formación más adelantada para estudiantes escogidos. Señaló, sin embargo, el peligro de imponer al Gobierno una carga demasiado pesada que pudiera impedirle una autonomía econó-

mica completa. En 1953, el Director de los Servicios de Educación de Nueva Zelanda, Dr. C. E. Beeby, visitó Samoa Occidental para estudiar los problemas que plantea el desarrollo de la enseñanza e informar sobre ellos, inclusive sobre la posibilidad de implantar la enseñanza obligatoria. Los resultados de este estudio fueron publicados a comienzos de 1954.

La Misión Visitadora de 1953 y la Autoridad Administradora, señalaron la existencia de un problema particular que consiste en la necesidad de mejorar la enseñanza, instalaciones y servicios proporcionados por las escuelas elementales de las aldeas. La Autoridad Administradora informó que estas escuelas están ahora mucho mejor instaladas. Pero el problema principal es mejorar el nivel de la enseñanza, ya que el personal de la mayoría de las escuelas de las aldeas no es diplomado y la mayor parte sólo ha recibido una instrucción elemental, lo que les impide enseñar a sus alumnos más allá del cuarto curso elemental. Esta situación se remediaría, en parte, con la creación de las escuelas primarias de distrito; pero se está haciendo todo lo posible para aumentar el número de graduados de la escuela normal y darles un nivel de instrucción más elevado. En 1952 se matricularon 172 alumnos en la escuela normal: en 1953 el número de matrículas ascendió a 189 y además, 54 maestros recibieron sus títulos en el curso de dicho año. La Autoridad Administradora informó al Consejo en su 14° período de sesiones de que estaba estudiando un plan urgente para ampliar la escuela normal y para la formación acelerada de maestros de párvulos.

En 1953 el presupuesto de enseñanza alcanzó la cifra máxima de 170.000 libras esterlinas en vez de las 74.000 libras correspondientes a los nueve últimos meses de 1950. El Gobierno de Samoa contribuyó con 132.800 libras de ese total (inclusive 4.200 libras para becas de estudio del Departamento de Higiene) y el Gobierno de Nueva Zelanda contribuyó con 37.200 libras.

En su 14° período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota con satisfacción del informe preparado por el Dr. C. E. Beeby sobre la enseñanza en Samoa Occidental y de las observaciones que figuran en dicho informe sobre la preparación que reciben los maestros, sobre el Samoa College, las escuelas de distritos y de aldea, las becas para ampliación de estudios, la educación de los adultos y la implantación de la enseñanza primaria obligatoria; y tomando nota además de que el Gobierno de Samoa Occidental estudia actualmente ese informe, espera recibir información complementaria sobre las medidas que se adopten para aplicar las recomendaciones que figuran en dicho informe. El Consejo espera que la Autoridad Administradora se ocupará de crear establecimientos de enseñanza técnica y comercial.

ESCUELAS DE LAS MISIONES

En 1952, las cinco misiones religiosas instaladas en el Territorio, tenían a su cargo 395 escuelas, entre las que figuraban 324 de tipo catequístico a cargo de pastores, 35 escuelas primarias, dos escuelas secundarias, tres colegios teológicos, una escuela agrícola para hombres y una escuela comercial para mujeres. En 1953, la Latter Day Saints Mission (Misión de los Mormones) abrió una nueva escuela en Pesega y la Seventh Day Adventist Mission (Misión de los Adventistas) inició la construcción de una nueva escuela primaria en Lalovaea.

El número de alumnos inscritos en las escuelas de las misiones, salvo los que asisten sólo a los cursos dados por los pastores, ascendía a 6.437, lo que equivale aproximadamente a un 31% de la matrícula escolar total.

El Consejo había sugerido previamente que la Autoridad Administradora tomara en cuenta la conveniencia de vincular más estrechamente las escuelas de las misiones con las escuelas públicas. Según la Autoridad Administradora, existen relaciones estrechas y armoniosas entre el Departamento de Instrucción Pública y las misiones; algunos de los profesores de estas últimas siguieron cursos en la escuela normal y muchas de las escuelas de las misiones siguen el mismo programa y utilizan los mismos manuales que las escuelas públicas. En 1951 se creó un comité mixto de representantes de las misiones y del Estado para asegurar mayor cooperación.

ENSEÑANZA SUPERIOR

Los únicos establecimientos de enseñanza superior a la primaria que existen en el Territorio son la Escuela Normal, la Escuela de Enfermeras y las escuelas profesionales (secundarias) de las misiones. La enseñanza superior se recibe gracias a las becas de estudios concedidas para asistir a las instituciones de enseñanza de Nueva Zelandia o a la escuela de medicina de Suva, en las islas Viti. Además, algunas escuelas normales de Nueva Zelandia admiten gratuitamente alumnos samoanos.

Entre 1945 y fines de 1953 el Gobierno de Nueva Zelandia concedió 95 becas de estudio (inclusive 12 concedidas en 1953) a fin de que los alumnos samoanos pudieran ingresar a escuelas primarias y secundarias seleccionadas de Nueva Zelandia. A fines de 1953, 16 de esos alumnos habían regresado a Samoa Occidental, donde obtuvieron empleo en la Administración, y 33 habían terminado sus estudios secundarios y cursaban estudios superiores o de formación técnica. Seis de los estudiantes seguían cursos de medicina, derecho, ingeniería y comercio; ocho habían ingresado en escuelas normales; dos seguían cursos de enfermeras y los demás aprendían distintos oficios. Además, las misiones religiosas y otras organizaciones concedieron varias becas para ampliación de estudios en el extranjero y el Gobierno de Samoa dió también becas para seguir estudios de medicina en Suva. En 1953 se había concedido un total de 90 becas y 39 de los becados seguían cursos de enseñanza superior.

En épocas pasadas las becas de estudios servían, sobre todo, para enviar al extranjero a los alumnos que no podían cursar sus estudios secundarios en las escuelas del Territorio. Desde que comenzaron los cursos en el Colegio de Samoa, ha disminuído considerablemente la necesidad de enviar los estudiantes al extranjero para seguir cursos secundarios. Tomando esto en cuenta, el Consejo, en su 12° período de sesiones, expresó la esperanza de que la inauguración de los cursos del Colegio de Samoa no traería como consecuencia la reducción del número de becas de estudios concedidas para seguir cursos en el extranjero, sino que, en el porvenir, esas becas se dedicarían a proporcionar formación técnica superior y estudios universitarios. En su informe anual de 1953 la Autoridad Administradora respondió que no había disminuído el número de becas de estudios concedidas durante el año y que se tendrían presentes las opiniones expresadas por el Consejo cuando se examinara el informe del Director de Instrucción Pública de Nueva

Zelandia sobre las necesidades docentes en el Territorio.

La Autoridad Administradora informó al Consejo en su 14° período de sesiones, que en 1954 se creó un comité consultivo para becas de estudios, a fin de asesorar al Gobierno del Territorio en materia de concesión de becas para estudios, becas para ampliación de estudios, subsidios escolares y en otras materias relacionadas con estos puntos.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y EDUCACIÓN POPULAR

Funcionarios del Departamento de Educación Pública, destinados especialmente a esta tarea, dieron cursos regulares de enseñanza general y sobre temas comerciales en la escuela nocturna para adultos, a los que en 1953 asistieron 110 estudiantes. La calidad de trabajo en esas clases equivale a la de una clase de segundo año en un colegio secundario y permite a los estudiantes presentarse a los exámenes de administración pública de Samoa, exámenes que en el curso del año fueron aprobados por 28 candidatos. Además, el Departamento de Higiene también patrocinó comités femeninos en las aldeas (en 1953 funcionaron 251 comités) en los cuales se dan charlas y demostraciones prácticas sobre cuestiones de higiene pública y sanidad. Para fomentar la educación popular, un funcionario visita las diferentes localidades, organiza sesiones educativas con proyección de cinematoscopias; con el mismo fin se difunde información educativa sobre materias relacionadas con higiene pública, agricultura, comercio, noticias locales y mundiales por medio de la estación de radio local y de un periódico semanal, el *Samoa Bulletin*.

En su 10° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria había comprobado con inquietud que la población se interesaba cada vez menos en los cursos nocturnos para adultos. La información presentada al Consejo en su 14° período de sesiones muestra que en el 1953 el número de alumnos matriculados en esos cursos fué más del doble que en 1952.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante del Reino Unido declaró que el desarrollo de las actividades educativas, tanto respecto a lo que ya se había hecho como a lo que se planeaba, demostraba las laudables intenciones de la Autoridad Administradora hacia el pueblo de Samoa.

El representante de Bélgica estimó que el informe del Director de Instrucción Pública en Nueva Zelandia sobre los problemas relacionados con el desarrollo educativo en Samoa Occidental, estaba destinado a señalar a los samoanos que, a pesar de la posición privilegiada del Territorio, aún queda mucho por hacer. Por esto el informe era necesariamente crítico y ambicioso. Señaló, sin embargo, que el censo de 1951 mostraba que, de un total de 21.500 niños entre seis y 14 años de edad, 20.607 asisten regularmente a escuelas primarias; y esto, sin tomar en cuenta los alumnos que concurren a las escuelas de las misiones. Esto significa que, prácticamente, toda la población sabe leer y escribir. Las mujeres también asisten a las escuelas, por lo menos con la misma regularidad que los hombres. El representante de Bélgica consideró que la Autoridad Administradora merecía ser elogiada por estos resultados.

Al referirse al Colegio de Samoa, reconoció la necesidad de crear, como anexo al Departamento de Educación Secundaria, un departamento de enseñanza primaria para niños en el que se enseñe hasta un grado que les permita prepararse para ingresar a los cursos secundarios. Sin embargo subrayó que como las escuelas de distrito estaban mejorando, esta necesidad desaparecería y que el Colegio de Samoa podría entonces limitarse únicamente a la enseñanza secundaria. Dicho representante estimó que el Consejo debía tener presente que el Colegio de Samoa no dependía para sus gastos del presupuesto local sino de préstamos y subsidios concedidos por el Gobierno metropolitano de la Autoridad Administradora. Observó que el Territorio no poseía biblioteca pública, deficiencia que, a su parecer, debería subsanarse.

El representante de Bélgica señaló, además, que en el Territorio no existían escuelas industriales ni sistemas de aprendizaje. A su parecer, esta deficiencia constituía una desventaja, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de un Territorio tan aislado como Samoa y que un sistema de aprendizaje permitiría mejorar en gran parte la situación. Las misiones religiosas, en particular, podrían prestar un gran servicio si contrataran regularmente aprendices. Para terminar declaró que en una comunidad como Samoa la formación técnica era tan importante como la educación secundaria regular.

El representante de China se manifestó sumamente complacido por los grandes progresos hechos en materia de educación. Sin embargo, su delegación convino con el representante de la UNESCO en que, puesto que el adelanto educativo era tal en el Territorio, la Autoridad Administradora debería considerar la posibilidad de implantar alguna forma de enseñanza obligatoria.

El representante de El Salvador expresó la esperanza de que pronto se vencerían las dificultades con que se había tropezado para implantar la enseñanza primaria obligatoria y que la Autoridad Administradora, conforme a las recomendaciones del Director de Instrucción Pública de Nueva Zelandia y de la UNESCO, consideraría la urgente necesidad de establecer una biblioteca pública en el Territorio.

El representante de Francia manifestó que, en materia de educación, la situación era tan satisfactoria como lo permitían las circunstancias.

El representante de Siria consideró que las recomendaciones hechas en el informe del Director de Instrucción Pública de Nueva Zelandia debían ponerse en práctica lo antes posible. Al comprobar que aún no se había implantado en el Territorio la enseñanza obligatoria, declaró que no sería posible realizar progreso alguno mientras no se alcanzara este objetivo. Agregó que la educación secundaria parecía rudimentaria, que prácticamente no existía educación universitaria ni postsecundaria (*college*) y que era posible mejorar considerablemente el sistema de becas para ampliación de estudios.

El representante de la India tomó nota del alto porcentaje de personas que sabían leer y escribir en el Territorio; mas se preguntó si no había llegado ya la hora de implantar la enseñanza obligatoria y de tomar precauciones para no desperdiciar esfuerzos en materia de educación. Su delegación confiaba en que se aumentaría el número de escuelas de aldeas, se implantaría la educación obligatoria y se proporcionarían medios para cursar estudios superiores en el mismo Territorio de Samoa, sin perjuicio de aumentar las posibilidades de seguir cursos de enseñanza superior en el extranjero.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideró que debería prestarse especial atención a la situación en materia de educación. A pesar de que los samoanos solicitaban, como informaba la Misión Visitadora, que se aumentaran las oportunidades de enseñanza, la Autoridad Administradora no había cumplido sus obligaciones y la situación estaba lejos de ser satisfactoria. A este respecto el informe del Dr. Beeby demostraba que en 1952, lejos de aumentar, asistían a las escuelas menos niños que en 1945 y 1946. En la actualidad, a más de una tercera parte de los niños en edad escolar se les niega la oportunidad de asistir a las escuelas y la mayoría de los que asisten sólo tienen acceso a las escuelas elementales. Una tercera parte de los niños va a escuelas religiosas, donde la educación se limita, en general, a aprender oraciones y textos religiosos. El sistema de preparación de maestros estaba lejos de ser satisfactorio y, como resultado, había una aguda escasez de maestros. Este detalle también había sido señalado por el Dr. Beeby. Estos hechos demostraban claramente la necesidad de aumentar las partidas del presupuesto dedicadas a la enseñanza y a otras necesidades conexas.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que ésta convenía en la necesidad de hacer un esfuerzo especial en los próximos años en materia de educación. Samoa necesitaba urgentemente un grupo de hombres, por lo menos, que hubieran recibido enseñanza superior y el informe del Dr. Beeby, como declaró el representante de Bélgica, había sido deliberadamente crítico. El Gobierno del Territorio estaba examinando dicho informe. El representante especial declaró además que el representante de la URSS había tratado de demostrar que la educación en Samoa retrocedía progresivamente y que había basado su argumento en un cuadro del informe del Dr. Beeby sobre el número de alumnos inscritos en las escuelas primarias públicas. Pero el Dr. Beeby había declarado además que las cifras correspondientes a los años anteriores excedían los límites de la credibilidad y que la calidad de la educación había mejorado considerablemente. Señaló, además, que en el curso del año anterior sólo el 15% de los niños en edad escolar no había sido inscrito en las escuelas primarias. El representante especial convino en que se necesitaban muchos más maestros y declaró que se estaban tomando las medidas necesarias para remediar esta situación.

Capítulo IX

NUEVA GUINEA

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

TERRITORIO Y POBLACIÓN

El Territorio se compone de la parte nordeste de la isla de Nueva Guinea y de otras 600 islas de diferentes tamaños, de las cuales las más importantes son Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y Bougainville. El territorio tiene una superficie total de 240.870 Km.², el terreno es generalmente abrupto y los picos de algunas montañas llegan hasta 5.000 metros de altura. Sin embargo, en Nueva Guinea, que es la isla principal, hay un gran número de amplios valles cubiertos de pastos en los distritos de las tierras altas, muchos de las cuales son fértiles, tienen un clima salubre y, según lo indica la Autoridad Administradora, posiblemente serían adecuados para una colonización europea. En la costa hay, a trechos, manglares pantanosos, y también hay pantanos en las riberas del Sepik. En las regiones medias del Sepik y del Ramu, donde las tierras bajas están continuamente inundadas, los pantanos de hierbas y juncos abarcan grandes extensiones.

El clima, que es generalmente caluroso y húmedo en las llanuras costeras, donde la temperatura varía muy poco durante el año, se hace cada vez más fresco a medida que se asciende a las regiones elevadas. Con pocas excepciones, la precipitación pluvial es considerable en todo el Territorio. A pesar del gran caudal de numerosos ríos, el Sepik es el único navegable para barcos de gran calado. En los demás sólo pueden navegar canoas y lanchas pequeñas.

La población autóctona, compuesta de 967.738 habitantes censados y de otros habitantes cuyo número se calcula en 175.826, ascendían a un total de 1.143.564 habitantes en 30 de junio de 1953. Se calcula que entre la población no autóctona hay 8.406 europeos, 2.078 asiáticos y 580 personas procedentes de otros países. Estas estadísticas indican un aumento general, durante el año que se examina, de 53.232 habitantes autóctonos, 1.084 europeos, 52 asiáticos y 2 personas de otras regiones, aproximadamente.

La población autóctona varía ampliamente en todo el Territorio, en cuanto a características físicas y grupos lingüísticos. Se hablan 53 idiomas melanesios, y se estima que el número de idiomas papúes es probablemente aun mayor.

El Consejo de Administración Fiduciaria, en su 12º período de sesiones, hizo suyas, en general, las observaciones, indicaciones y recomendaciones formuladas por la Misión Visitadora de 1953, y recordó que en su 10º período de sesiones había expresado la opinión de que convenía que los informes anuales contuvieran datos completos; igualmente tomó nota con satisfacción

de las seguridades dadas por la Autoridad Administradora en el sentido de que los informes futuros contendrían datos más detallados.

La Autoridad Administradora respondió que había tomado nota de las observaciones, sugerencias y recomendaciones de la Misión Visitadora de 1953, relativas a los problemas de la administración del Territorio y que las estudiaría con el mayor detenimiento. Manifestó la Autoridad Administradora que había preparado el informe sobre la base del cuestionario aprobado en 1952, y que en las secciones pertinentes había incluido toda la información disponible que hubiese sido solicitada por algunos miembros del Consejo.

PROGRESO HACIA LA AUTONOMÍA O LA INDEPENDENCIA

En sus resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII), la Asamblea General invita a las Autoridades Administradoras a que en sus informes anuales incluyan, entre otros datos, los relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyecte adoptar para conducir a los territorios en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia y un cálculo aproximado del tiempo necesario para hacer efectivas las diversas medidas encaminadas hacia ese objetivo. Además se pide al Consejo se sirva incluir en sus informes a la Asamblea General una sección separada que trate del cumplimiento de dichas resoluciones. Esta cuestión se trata en la parte III del presente informe.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de la India estimó que, a menos que se fijara algún objetivo, o preferiblemente una serie de objetivos, parecía improbable que la Autoridad Administradora pudiera vencer los obstáculos de inercia, de dificultades administrativas y de obstrucción que oponía la población colonizadora.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que en el Territorio reinaba una atmósfera de estancamiento y que la situación de la población autóctona no sólo no mejoraba, sino que iba empeorando en muchos aspectos. En vez de promover el desarrollo del Territorio hacia la autonomía o la independencia, la Autoridad Administradora estaba fortaleciendo allí el sistema colonial.

El representante de la Autoridad Administradora consideró que no era justo decir que no había habido adelanto en el Territorio durante 35 años. Afirmó que se habían hecho progresos, aunque a un ritmo que dependía más de la capacidad de un pueblo primitivo que de los deseos idealistas de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

En virtud de la Papua and New Guinea Act (Ley relativa a Papua y Nueva Guinea) de 1949-1950, se dispone la administración conjunta del Territorio en Fideicomiso y de la vecina posesión australiana de Papua. Un Consejo Ejecutivo compuesto de no menos de nueve funcionarios (designados por nombramiento) de los territorios combinados da asesoramiento y asistencia a un Administrador que es nombrado por el Gobernador General y tiene por cometido la administración de los territorios en nombre del Gobierno del *Commonwealth* de Australia. Un consejo legislativo tiene la facultad de aprobar ordenanzas que tengan por objeto mantener la paz, el orden y el buen gobierno de los territorios combinados.

Bajo la autoridad del Administrador funcionan 12 departamentos gubernamentales que prestan servicios administrativos y técnicos a ambos territorios, con excepción del Departamento de Obras Públicas cuyo personal y actividades están bajo la autoridad del Departamento de Obras Públicas del *Commonwealth* de Australia. Con sujeción a la dirección del Administrador, el jefe del Departamento tiene a su cargo la responsabilidad de la administración minuciosa de cada Departamento. La sede de la Administración está situada en Port Moresby, en el Territorio de Papua.

El Territorio está dividido en nueve Distritos, cada uno de los cuales es administrado por un Comisionado de Distrito, a quien prestan asistencia los Oficiales Auxiliares de Distrito, los Oficiales de Patrulla y otro personal. Los Comisionados de Distrito son representantes del Administrador y son allí los funcionarios ejecutivos principales. Dentro de sus respectivos Distritos tienen la responsabilidad de la administración general y local y de la coordinación de las actividades de todos los departamentos.

De los 240.870 Km.² que tiene el Territorio, la superficie que está bajo la autoridad o influencia de la Administración aumentó, durante el período que se estudia, de 215.247 a 218.855 Km.², mediante la política permanente de penetración pacífica. Una superficie total de 22.015 Km.², clasificada como zonas de administración restringida (*restricted*), aun no está bajo la autoridad o influencia de la Administración.

La Autoridad Administradora manifestó que la consolidación de las regiones sometidas a influencia había proseguido sin interrupción durante el año, y que se habían establecido varios puestos nuevos; informó además al Consejo, durante su 14° período de sesiones, de que entre el 30 de junio de 1953 y el 31 de marzo de 1954 cuatro patrullas habían realizado sus viajes de exploración y que otras cinco habían iniciado sus expediciones de penetración pacífica para aprovechar los descubrimientos de las primeras.

En su 12° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de que la Misión Visitadora había recibido la impresión de que la autoridad de los Comisionados de Distrito era muy limitada a causa de la naturaleza altamente centralizada de la organización administrativa existente y dió su apoyo a la opinión de la Misión sobre la conveniencia

de delegar en dichos funcionarios mayor responsabilidad y autoridad.

La Autoridad Administradora declaró que, mediante la delegación de funciones, en virtud de la Public Service Ordinance 1949-1950, se habían logrado varios objetivos que se consideraban necesarios con respecto a la descentralización, especialmente en lo relativo a los Comisionados de Distrito. Además, los Comisionados de Distrito están investidos de autoridad en el campo financiero para una amplia variedad de propósitos, autoridad delegada por todos los departamentos administrativos, que ejercían los amplios poderes que les confería la legislación y, bajo la dirección del Administrador, desempeñaban funciones administrativas de coordinación en sus respectivos distritos. Sin embargo, se seguía estudiando la situación de los Comisionados de Distrito, con miras a lograr una descentralización aun mayor y a delegarles mayores responsabilidades y autoridad.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendación:

El Consejo elogia los permanentes esfuerzos que ha realizado la Autoridad Administradora para colocar bajo la influencia de la Administración, a las restantes zonas de administración restringida del Territorio, con arreglo a su política de penetración pacífica, y toma nota con satisfacción de que durante el año prosiguió sin interrupción la obra de consolidación de las zonas sometidas a dicha influencia.

El Consejo toma nota de que el Consejo Ejecutivo del Territorio es una entidad asesora compuesta de funcionarios públicos. Toma nota también de que la Administración, aunque se da cabal cuenta de la conveniencia de asociar a representantes autóctonos a los órganos políticos y a otros órganos del Territorio, estima que sería prematuro realizar ahora intento alguno por apresurar el incremento de la representación autóctona. El Consejo recomienda a la Autoridad Administradora que estudie los métodos de asociar a representantes autóctonos a los trabajos del Consejo Ejecutivo.

UNIÓN ADMINISTRATIVA

El arreglo por el cual el Territorio en fideicomiso es administrado por Australia en unión administrativa con el Territorio vecino de Papua ha sido explicado con toda extensión en informes anteriores del Consejo de Administración Fiduciaria a la Asamblea General.

En su 14° período de sesiones, el Consejo, después de recibir del Comité Permanente de Uniones Administrativas un informe³⁵⁴ sobre el nuevo estudio de este arreglo hecho por el Comité, aprobó las siguientes conclusiones:

Con respecto a las garantías enumeradas en el inciso a) del párrafo 7 de la resolución 293 (VII) del Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo observa que el informe anual sobre la administración de Nueva Guinea correspondiente al período 1952-1953 contiene por separado datos financieros, estadísticos y de otra naturaleza que se refieren al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea. Toma nota, además, de que con respecto al deseo expresado por el Consejo de que los futuros informes indiquen qué puestos clasificados en la Administración Pública del Territorio de Papua y Nueva Guinea corresponden a la Administración del

³⁵⁴ T/L.485.

Territorio en Fideicomiso, como se indicó en el documento T/916, inciso a) del párrafo 8, el informe anual correspondiente a 1952-1953 indica las posiciones de la Administración Pública de Papua y Nueva Guinea al 30 de junio de 1953, por una parte como comunes al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, y por la otra separadamente para el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y el Territorio de Papua, como se hizo en el informe anual correspondiente a 1951-1952. En el cuadro 1 del Anexo II se indica cuáles son los puestos clasificados que ocupan los miembros del personal del Territorio en fideicomiso; sus salarios respectivos aparecen en el Cuadro 3 del informe anual para 1952-1953 (páginas 109 a 120 del texto inglés), que muestra los puestos clasificados y los salarios de la Administración Pública en Papua y Nueva Guinea.

Con respecto a las garantías enumeradas en el inciso b) del párrafo 7 de la resolución 293 (VII) del Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo toma nota de que la segunda Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del Pacífico, que acudiera allí en 1953 a indicación del Gobierno de Australia, visitó la sede de la Administración Central de Papua y Nueva Guinea en Port Moresby del 9 al 13 de abril de 1953, y de que se le invitó a visitar algunas instituciones comunes a ambos territorios. Ninguna Misión Visitadora visitó el Territorio en fideicomiso después de aquella fecha.

Con respecto a las garantías enumeradas en el inciso c) del párrafo 7 de la resolución 293 (VII) del Consejo de Administración Fiduciaria,

i) El Consejo toma nota de que en el informe anual sobre la administración del Territorio de Nueva Guinea, correspondiente al período 1952-1953, se declara que se han conservado las fronteras territoriales que separan al Territorio de Papua del Territorio de Nueva Guinea.

ii) El Consejo toma nota, además, de que bajo la Ordenanza de Distritos Administrativos, de 1951, la Administración está autorizada a dividir el Territorio en Distritos, a darles nombre y a definir sus fronteras, y de cuando en cuando, a cambiar los nombres de las fronteras de los Distritos y de que, en 1951-1952, el número de Distritos de Nueva Guinea aumentó de 8 a 9, por la división del Distrito de Tierras Altas Centrales en dos Distritos conocidos con el nombre de Tierras Altas Orientales y Tierras Altas Occidentales. Durante el año que se estudia no se introdujeron modificaciones en las fronteras territoriales de los Distritos.

iii) El Consejo toma nota, además, de la declaración formulada por el representante de Australia en la 44a. sesión del Comité Permanente, celebrada el 14 de junio de 1953, en el sentido de que la Autoridad Administradora no tiene intención de establecer distritos que excedan los límites internacionales entre Papua y el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea.

Con respecto al inciso d) del párrafo 7 de la resolución 293 (VII) del Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo toma nota de que, según la información contenida en el informe anual correspondiente a 1952-1953, el impuesto a la renta ascendió a un total de 1.544.542 libras; de que la Autoridad Administradora había concedido un subsidio de 2.769.543 libras y de que los gastos alcanzaron a 4.314.085 libras. Por lo tanto, los gastos hechos en el Territorio, en el pe-

riodo de 1952-1953 no han sido inferiores al importe total de los ingresos públicos del Territorio durante ese período.

Al considerar las cuestiones relativas a la unión administrativa que afecta al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, el Consejo observa que no ha recibido información alguna que pueda indicar que esta unión, en la etapa actual de su desarrollo, no favorece los intereses de los habitantes del Territorio en fideicomiso, y continúa sosteniendo la opinión, expresada ya en el informe especial del Consejo de Administración Fiduciaria sobre las uniones administrativas³⁵⁵, de que las aduanas y los servicios fiscales y administrativos comunes, organizados sobre una base interterritorial, podrían tener ciertas ventajas para los territorios que participaran en tales arreglos, particularmente si se tienen en cuenta las condiciones económicas y sociales que prevalecen en territorios como Papua y Nueva Guinea. Al mismo tiempo, el Consejo reitera su consideración, indicada en el mismo informe especial, de que "la integración completa de las instituciones políticas de un territorio no autónomo que no está sujeto a las disposiciones de administración fiduciaria puede estorbar el desarrollo independiente del territorio en fideicomiso como entidad separada". El Consejo reitera además su opinión, como la expresó en el mismo informe especial, de que "respecto al funcionamiento de la unión administrativa, la Autoridad Administradora debe seguir protegiendo oficialmente de una manera adecuada los intereses del Territorio en fideicomiso, en particular evitando la posibilidad de promulgar una legislación que no se ajuste al Acuerdo de Administración Fiduciaria y a los principios de la Carta".

En esta ocasión no se sometieron a la atención del Consejo otros asuntos relativos a la unión administrativa que se está examinando.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

El número de puestos clasificados en la Administración Pública, tanto de Nueva Guinea como de Papua, aumentó de 1.601 a 1.641 durante el año que se examina, y los puestos cubiertos aumentaron de 1.293 a 1.447 durante el mismo período. De los puestos cubiertos, 304 fueron asignados en común a ambos territorios, 654 fueron asignados a Nueva Guinea, 318 a Papua, y 171 a ninguno en especial.

El número de empleados públicos autóctonos ascendió a un total de 9.712, incluso 1.391 en la Policía Real de Papua y Nueva Guinea. En este número estaban comprendidos 5.469 trabajadores de tipo general, 623 trabajadores de servicios médicos y 493 aspirantes a aprendices. Los empleados restantes estuvieron dedicados a ocupaciones técnicas, de enseñanza, de oficina y otras.

Según el informe anual, las modificaciones de importancia que se introdujeron en la organización de la Administración durante el año comprendieron la creación de una Oficina Auxiliar de Obras Públicas y la creación de nuevos puestos, entre ellos el de un funcionario de relaciones públicas, un inspector de distrito, seis funcionarios encargados de las autoridades

³⁵⁵ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo período de sesiones, Suplemento No. 12, documento A/2151.

autóctonas y cuatro funcionarios de cooperativas. También se hizo la reclasificación de cinco puestos de funcionarios de distrito a los cuales se asignaron sueldos más altos.

También se tomaron medidas para proseguir más activamente la campaña de contratación mediante la cual se facilite el ingreso ordenado de nuevo personal y ayude a proporcionar un servicio equilibrado. También se introdujo un sistema de selección que incluía una entrevista realizada entre el candidato y un comité debidamente constituido. Un 50% de los nuevos nombramientos, por lo menos, aparte de aquellos asignados a la oficina central, debían ser asignados al Territorio de Nueva Guinea. Además, se nombraron 34 cadetes de patrulla, que ya llegaron al Territorio, y continuaba el nombramiento de funcionarios de topografía y de veterinaria y enseñanza de categoría inicial. La contratación de personal debía continuar hasta que quedaran cubiertos todos los puestos aprobados.

El nombramiento permanente en la Administración Pública está limitado a personas calificadas que sean súbditos británicos por nacimiento o naturalización. Existen disposiciones que permiten nombrar excepcional o temporalmente a otras personas.

La Misión Visitadora opinó que la Administración debía continuar sus esfuerzos para colocar personal autóctono calificado en sus servicios, y que se debía hacer un esfuerzo mayor por dar a aquél formación profesional y emplearlo en los muchos servicios técnicos con que el Territorio necesitaba contar.

La Autoridad Administradora manifestó que cuando los habitantes autóctonos llegaran al nivel exigido, se dictarían las disposiciones adecuadas para su ingreso en la Administración Pública. Actualmente, además de la formación profesional técnica que se impartía en las escuelas técnicas de la Administración y de la Misión, varios departamentos de la Administración proporcionaban capacitación industrial y profesional, y dentro de poco tiempo podría proporcionarse esa capacitación a los trabajadores autóctonos, en virtud del sistema de aprendizaje.

La Autoridad Administradora informó además al Consejo, durante su 14° período de sesiones, de que se había aprobado la creación de una División Auxiliar de la Administración Pública para los habitantes autóctonos y de que estaba preparando la legislación necesaria. La nueva división sería esencialmente una división de formación profesional en donde se prepararía a los empleados autóctonos seleccionados para ocupar posiciones más altas en la Administración Pública. Dicha división ofrecería una carrera permanente en la Administración Pública a quienes pudieran satisfacer los requisitos de ingreso, tales como los maestros de escuela, oficinistas y otros funcionarios que tenían empleos que requerían una educación fundamental y preparación especial, así como la voluntad de asumir responsabilidades. A medida que fuera desarrollándose la nueva división, podría garantizarse una mayor participación de la población autóctona en la Administración del Territorio y una mayor oportunidad de adelanto para ocupar puestos de creciente responsabilidad. Además, se iba a preparar legislación que permitiría nombrar en otras divisiones de la Administración Pública a los habitantes autóctonos y a los residentes permanentes del Territorio, incluso a los asiáticos y a personas de razas diversas, siempre que

poseyeran los títulos y llenaran las condiciones prescritas para el ingreso en las divisiones respectivas.

En su 14° período de sesiones, el Consejo adoptó la conclusión siguiente:

El Consejo, recordando la opinión de la Misión Visitadora de que la Administración debería continuar sus esfuerzos para colocar personal autóctono calificado en sus servicios y darle formación profesional para emplearlo en los muchos servicios técnicos con que el Territorio necesitaba contar, toma nota con satisfacción del establecimiento de una División Auxiliar de la Administración Pública y de la declaración de la Autoridad Administradora en el sentido de que, a medida que la nueva División vaya desarrollándose, podrá garantizarse una mayor participación de la población autóctona en la Administración y se le ofrecerá una mejor oportunidad de adelanto para que ocupe posiciones de creciente responsabilidad.

CONSEJO LEGISLATIVO

El Consejo Legislativo, establecido en 1951 para los territorios unidos de Papua y Nueva Guinea, consta de un Administrador, 16 miembros oficiales y 12 no oficiales. De estos últimos, tres son autóctonos y dos de ellos son designados por el propio Territorio en Fideicomiso.

Todas las ordenanzas promulgadas por el Consejo Legislativo destinadas a mantener la paz, el orden y el buen gobierno del Territorio deben ser aprobadas por el Administrador, con excepción de aquellas que están exclusivamente reservadas al Gobernador General. Las ordenanzas así aprobadas por el Administrador pueden ser vetadas por el Gobernador General dentro de los seis meses siguientes a dicha aprobación.

El Consejo Legislativo se reunió del 6 al 18 de octubre de 1952 y del 4 al 8 de mayo de 1953.

El Consejo de Administración Fiduciaria, en su 12° período de sesiones, tomando nota de la opinión expresada por la Misión Visitadora de que, en la situación en que se hallaba el desarrollo político, la representación autóctona del Territorio en el Consejo Legislativo de Papua y Nueva Guinea casi no tenía más importancia que la educativa, expresó la opinión de que, en esas circunstancias, la mejor manera de abordar la benéfica política de aumentar gradualmente la representación autóctona en el Consejo Legislativo consistía en desarrollar la utilidad de éste como medio de educación política y de preparación para una participación más activa en esa labor; a tal fin recomendó que la Autoridad Administradora adoptara todas las medidas de orden práctico, incluso la posible participación de otras personas autóctonas en el trabajo del Consejo en calidad de observadores, tal como lo había propuesto la Misión Visitadora, para extender en la población autóctona la comprensión de los procedimientos legislativos; y pidió que la Autoridad Administradora incluyera información sobre este punto en el informe anual que se considera en el presente documento.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14° período de sesiones, de que la manera más efectiva de extender entre la población autóctona en su actual estado de desarrollo, la comprensión de los procedimientos legislativos era mediante la labor de los Consejos de Aldea y el estímulo y la asistencia que daban a esa labor los funcionarios de Distrito. Se esta-

ban estudiando otras medidas de orden práctico para lograr ese fin, incluso exposiciones de carácter informativo en los Consejos de Aldea y la inserción de disposiciones concretas a este respecto en los programas escolares.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo recuerda su recomendación anterior al efecto de que la Autoridad Administradora adopte todas las medidas de orden práctico, incluso la posible participación de otras personas autóctonas en el trabajo del Consejo Legislativo, en calidad de observadores, para extender entre la población autóctona la comprensión de los procedimientos legislativos. Toma nota de que la Autoridad Administradora opina que, en el actual estado de desarrollo, la manera más efectiva de extender entre la población autóctona la comprensión de los procedimientos legislativos es mediante la labor que realizan los Consejos de Aldea y el estímulo y la asistencia que se da a esa labor, pero que la Autoridad Administradora está estudiando un plan para asociar a los habitantes autóctonos como observadores en la labor del Consejo Legislativo y que está considerando también otras medidas de orden práctico para fomentar la comprensión política entre los autóctonos. El Consejo expresa la esperanza de que se elaborará y se llevará a la práctica el plan de participación de autóctonos como observadores antes de que se examine el próximo informe anual, y solicita que se incluya en ese informe la información pertinente sobre las demás medidas de orden práctico que se están tomando.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE DISTRITO

Los Consejos Consultivos de Distrito, que no son órganos creados por ley, están compuestos del Comisionado de Distrito y de miembros nombrados por el Administrador, de una lista de candidatos recomendada por el Comisionado de Distrito. Las nuevas disposiciones relativas al funcionamiento de dichos consejos, las cuales entraron en vigor en 1953, aunque no difieren sustancialmente de las que se aplicaron originalmente, permiten una mayor flexibilidad en la composición de dichos consejos.

Los Consejos Consultivos Municipales, que tampoco son órganos creados por ley, están compuestos de ciudadanos representativos y funcionarios de la Administración. Estos órganos asesoran únicamente en cuestiones relativas a los municipios. Entienden en asuntos de interés para los habitantes no autóctonos principalmente, y hasta hoy han estado compuestos exclusivamente de europeos y asiáticos. La Autoridad Administradora estima que los intereses de la población autóctona están debidamente protegidos por la política de la Administración ejercida por medio de los departamentos, especialmente del Departamento de Servicios Distritales y Cuestiones Indígenas, el cual tiene a su cargo directamente el bienestar general de los habitantes autóctonos y está representado por sus funcionarios en todos los Consejos Consultivos Municipales y de Distrito.

En su 12° período de sesiones el Consejo recordó que en la Ley sobre Papua y Nueva Guinea se preveía la creación de consejos consultivos en cuestiones indígenas, en que por lo menos una mayoría del número total de miembros sería de autóctonos, y tomó nota de que sólo personas no autóctonas formaban parte de los consejos consultivos de distrito y muni-

cipales, los cuales no eran órganos establecidos por ley ni tenían tampoco relación alguna con los consejos consultivos propuestos por la Ley. A este respecto, el Consejo hizo suyo el criterio de la Misión Visitadora de que la composición de las instituciones políticas no debería basarse rígidamente en la participación de dos grupos étnicos y recibió con beneplácito las seguridades dadas por la Autoridad Administradora en el sentido de que, cuando las condiciones fueran apropiadas para instituir los órganos de distrito previstos por la ley, consideraría plenamente la conveniencia de establecerlos sobre la base de la participación de los diversos grupos étnicos.

En el informe anual que se estudia, la Autoridad Administradora reitera las seguridades que dió al Consejo durante su 12° período de sesiones.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente conclusión:

El Consejo toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora en que reitera sus anteriores seguridades de que, cuando las condiciones sean apropiadas para instituir los órganos de distrito previstos por la ley, considerará plenamente la conveniencia de establecerlos sobre la base de la participación de los diversos grupos étnicos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Los funcionarios de la aldea, conocidos como *luluais* y *tultuls*, son designados por la Administración para el desempeño de varias funciones administrativas locales. Las funciones que la ley les asigna se refieren en general al mantenimiento de la legalidad y el orden, a cuestiones de sanidad y saneamiento y a compilación de censos y asuntos análogos. En lo tocante al mantenimiento de la legalidad y el orden, las facultades de que están investidos los *luluais* se limitan al poder de efectuar detenciones y de impartir órdenes. La Administración espera que el actual sistema de administración local por medio de funcionarios de aldea podrá ser reemplazado gradualmente por Consejos Autóctonos de Aldea, a medida que los grupos autóctonos vayan progresando hasta el estado en que puedan participar en dichos consejos. Varios especialistas del Departamento de Servicios Distritales y Cuestiones Indígenas han sido encargados de estimular el establecimiento de estos consejos y de orientarlos durante las primeras etapas de su actuación; también colaboran en esta labor algunos funcionarios designados por otros departamentos.

Durante el año que se estudia se establecieron dos nuevos consejos, integrados por 45 aldeas que tienen una población total aproximada de 9.413 habitantes, aumentando así a seis el número de consejos, y abarcando 117 aldeas con una población aproximada de 24.813 habitantes.

Algunos grupos minoritarios que abarcan una población total de 2.000 habitantes, rodeados por los consejos establecidos en Nueva Bretaña, no han querido constituir un Consejo Autóctono de Aldea. Según la información contenida en el informe que se está estudiando, se ha podido comprobar, mediante investigaciones, que esta actitud obedece a varias razones de carácter puramente local. Se están investigando las circunstancias determinantes de dicha actitud y se está prestando la mayor atención a las necesidades de esos grupos. Mientras tanto, una sección ha mani-

festado ya su deseo de unirse al Consejo de Aldea de Rabaul, y el otro grupo está estudiando todavía su situación.

Los consejos desarrollan diversas actividades relativas a los servicios sociales, al adelanto económico y a los problemas de orden general que presenta la elevación del nivel de vida. Los gastos calculados en que incurrieron los seis consejos en materia de servicios públicos en 1953 ascendieron a un total de 33.221 libras.

La Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria, en su 14° período de sesiones, de que el establecimiento de estos consejos no había sido tan difícil como se había pensado, y atribuyó este hecho principalmente a la presencia en cada consejo de miembros inteligentes y enérgicos quienes, bajo la orientación oficial, habían asumido la responsabilidad ejecutiva. Muchos miembros, sin embargo, no habían comprendido sus responsabilidades o se habían mostrado demasiado temerosos de ejercer su autoridad. En la etapa de desarrollo en que estaba la administración local, la Autoridad Administradora estimaba que era más importante que los consejeros fueran hombres dotados de energía y carácter que hombres dotados de alguna cultura. Aunque el mediano calibre de muchos miembros constituía un punto débil del sistema, se esperaba poder contar en el porvenir con candidatos más adecuados, a medida que las masas de electores fueran adquiriendo una mayor visión política. Pero en su conjunto, el nivel de la labor ejecutiva de los consejos iba mejorando firmemente y, en contraste con su primitiva actitud, los comités ejecutivos de algunos consejos tendían a demostrar mayor independencia y a aplicar sus programas sin esperar las sugerencias de los funcionarios de las Autoridades Indígenas. El progreso era evidente a pesar de la falta de educación y experiencia en cuestiones administrativas y financieras que, en opinión de la Administración haría que los consejos dependieran casi totalmente de la asistencia oficial durante muchos años.

Se ha recurrido a varios procedimientos para impedir que los consejos se separen de su pueblo, que considera que un gobierno impersonal es un gobierno inamistoso. A este respecto, la Autoridad Administradora tomó nota de que los consejos estaban actuando satisfactoriamente. Se exigía a los consejeros que constituyeran sus propios comités consultivos de aldea y que realizaran consultas regularmente con sus electores. Cada consejo convocaba también a dos o tres asambleas generales cada año, en las cuales se estimulaba al pueblo para que expresara sus críticas y sugerencias. La constante capacidad de los consejos para percibir los impuestos se consideraba como prueba cabal de su estabilidad.

El Consejo, en su 12° período de sesiones, tomó nota de la favorable impresión obtenida por la Misión Visitadora en lo referente a la eficacia de los Consejos Autóctonos de Aldea oficiales creados hasta entonces, y suscribió la opinión de la Misión Visitadora de que el rápido desarrollo de ese sistema de administración local haría mucho por apresurar el progreso político de la población, y acogió favorablemente la declaración de la Autoridad Administradora de que no sólo se proponía asignar, a tales fines, a otros funcionarios especialistas, sino que también consideraba el desarrollo de la administración local como una res-

ponsabilidad principal de los funcionarios administrativos de distrito. El Consejo observó además que varios Consejos Autóctonos de Aldea tenían ya jurisdicción sobre zonas que incluían un grupo o grupos de aldeas. Tomó nota igualmente de las opiniones de la Misión Visitadora en cuanto a la eficacia del ejemplo dado por la organización de este tipo existente en la región de Rabaúl, e instó a la Autoridad Administradora a proseguir en otras partes del Territorio a desarrollar unidades de administración local tan amplias como ésa, teniendo debidamente en cuenta la conveniencia de adaptar su norma de organización a las diversas condiciones y necesidades de las poblaciones interesadas.

En respuesta, la Autoridad Administradora indicó que la conveniencia y ventajas de los consejos representantes de un grupo o grupos de aldeas había sido advertida desde el establecimiento de los primeros consejos, y manifestó que se seguiría esta práctica cuando se estimara que ello iría en beneficio de los mejores intereses de las poblaciones interesadas. La Autoridad Administradora estimó que se estaba progresando satisfactoriamente en la consolidación de los consejos ya establecidos y en el trabajo preparatorio entre los nuevos grupos el cual, aunque era largo y exigía mucho tacto y paciencia, era necesario para que esos grupos pudieran asumir la totalidad de sus responsabilidades. La Autoridad Administradora expresó la esperanza de que, como resultado de esta labor preparatoria, podrían establecerse varios consejos nuevos durante 1953-1954.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo toma nota con satisfacción del aumento en el número de los Consejos Autóctonos de Aldea y de los progresos que éstos han realizado durante el año que se estudia, y expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora estimulará aún más este desarrollo mediante la labor de fiscalización y orientación que realizan sus funcionarios administrativos.

RÉGIMEN JUDICIAL

Los tribunales autóctonos son reconocidos administrativamente, aunque no por la ley escrita, como parte del sistema judicial del Territorio. En virtud de la Ley de 1949-1950 sobre Papua y Nueva Guinea, se autoriza el establecimiento de tribunales autóctonos, compuestos exclusivamente de indígenas, que complementarían a los Tribunales de Asuntos Indígenas ya existentes en el Territorio, pero no se han puesto en práctica las disposiciones pertinentes de esa Ley.

Anteriormente, el Consejo había recomendado a la Autoridad Administradora que tomara medidas adecuadas para dar reconocimiento, por ley escrita, a los tribunales autóctonos cuando lo considerara conveniente, y en su 10° período de sesiones, el Consejo tomó nota de que la Autoridad Administradora estaba considerando una ordenanza y su reglamentación, que permitirían el establecimiento de Tribunales Autóctonos de Aldea.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, durante su 14° período de sesiones, de que todavía estaba estudiando la cuestión del reconocimiento, por ley escrita de los tribunales autóctonos y de que el Consejo sería mantenido plenamente al corriente de cualquier decisión que se adoptara a ese respecto.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, considerando que los tribunales autóctonos están reconocidos administrativamente pero que su autoridad no está expresamente reconocida por la ley escrita, toma nota con interés de la declaración de la Autoridad Administradora en el sentido de que ha estado estudiando la cuestión del reconocimiento de dichos tribunales por ley escrita y de que el Consejo será informado plenamente de cualquier decisión que se adopte a este respecto. El Consejo espera que se tome esa decisión a la mayor brevedad con objeto de permitir que se desarrollen los tribunales autóctonos.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante del Reino Unido tomó nota de que la Autoridad Administradora había podido consolidar en forma apreciable su control sobre todo el Territorio, hasta el punto de que las zonas de administración restringida constituían menos del 10% de la superficie total.

El representante de El Salvador consideró que los esfuerzos hechos por la Autoridad Administradora para efectuar la penetración pacífica del Territorio por medio de patrullas merecían toda clase de elogios, pero instó a la Autoridad Administradora a que tratara de dar fin a su tarea a la mayor brevedad.

El representante de El Salvador estimó que la Autoridad Administradora debería estimular el desarrollo de la conciencia regional como base para la formación de la conciencia territorial, con objeto de poner fin a la fragmentación de la población, lo que incuestionablemente constituía un grave impedimento para su desarrollo ulterior.

El representante de Nueva Zelandia tomó nota de que la Autoridad Administradora, por medio de su política de penetración pacífica, iba poniendo gradualmente bajo control de la Administración a poblaciones que nunca antes habían establecido relaciones con tribus distintas de las de sus aldeas vecinas, y declaró que su delegación deseaba felicitar calurosamente a la Autoridad Administradora y a sus oficiales de patrulla, quienes habían emprendido esa azarosa y agotadora tarea con gran éxito y suscitando la menor cantidad de problemas.

El representante de Bélgica consideró que, en su conjunto, el año estudiado había sido de progresos, y elogió la política de penetración pacífica desarrollada por la Administración.

El representante de Siria tomó nota de que los habitantes autóctonos no participaban en las labores ejecutivas del Gobierno del Territorio. El Consejo Ejecutivo estaba compuesto por funcionarios y, por consiguiente, representaba únicamente a la Administración. Tomó nota, además, de que los órganos legislativos, administrativos y judiciales eran comunes al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y a Papua, y sugirió que el Consejo de Administración Fiduciaria recomendará a la Autoridad Administradora el establecimiento de órganos independientes para el Territorio en fideicomiso únicamente.

El representante de la India comentó que el término "Consejo Ejecutivo" daba la idea de ejecución de una política, de dirección y de formulación de principios. Sin embargo, en el caso de Nueva Guinea, el Consejo Ejecutivo era en realidad una reunión de los funcionarios subordinados con el Administrador del Territorio; se trataba de una reunión del personal en que la única autoridad era el Administrador. El Consejo Legislativo era una ampliación de esta reunión del personal.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que, después de 35 años de dominación australiana en Nueva Guinea, una parte apreciable de la población vivía en las llamadas zonas de administración restringida y oponían resistencia a la autoridad de Australia. La llamada penetración pacífica era en realidad una captura por las armas y por la fuerza de las regiones que todavía no estaban sometidas al control de la Administración colonial australiana.

Respecto a la política de estímulo del sistema tribal por la Autoridad Administradora, el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estimó que el Consejo de Administración Fiduciaria debía recomendar que la Autoridad Administradora tomara las medidas del caso para lograr la transición del atrasado sistema tribal a un sistema de autonomía basado en principios democráticos.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que, aunque la Administración compartía el deseo de traer el resto de las zonas de administración restringida bajo la influencia administrativa tan pronto como fuera posible, sería inconveniente, en el actual estado de cosas, alterar los métodos y procedimientos básicos que, en su opinión, habían demostrado tener éxito en el enfoque de esta tarea tan azarosa como importante. Tomó nota de que, con una sola excepción, la labor de la Administración en las zonas de administración restringida había sido altamente encomiada. Declaró, además, que la Administración se daba perfecta cuenta de la conveniencia de asociar a los representantes de la población autóctona en los órganos políticos y de otro orden del Territorio, pero estimó que sería prematuro cualquier intento de apresurar el incremento de esa representación.

UNIÓN ADMINISTRATIVA

El representante de Siria declaró que la unión administrativa entre el Territorio en fideicomiso y Papua no era en realidad sólo una unión administrativa sino una unión total, puesto que la capital de los dos territorios estaba en Papua. Además, los órganos legislativos, administrativos y judiciales eran comunes a ambos territorios. Se habían hecho preguntas al representante especial respecto a esta unión, pero las respuestas habían sido evasivas. En todo caso, era esencial recordar que Nueva Guinea era un territorio en fideicomiso y que Papua no lo era. Atar en uno solo el destino de estos dos territorios, como lo estaba haciendo la Autoridad Administradora, constituía un intento de asestar un golpe a las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria. Su delegación, concluyó el representante de Siria, consideraba que el Consejo debía recomendar que la Autoridad Administradora estableciera órganos independientes legislativos y administrativos para Nueva Guinea.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Autoridad Administradora, so pretexto de establecer una llamada "unión administrativa", había fusionado el Territorio en Fideicomiso con la colonia australiana de Papua; estos dos territorios, así juntos, constituían un todo único, tanto política como económicamente. Estimó que el Consejo debía recomendar que la Autoridad Administradora estableciera en el Territorio en fideicomiso órganos legislativos y administrativos que no estuvieran subordinados a ninguno de los demás órganos establecidos sobre la base de una unión del Territorio en fideicomiso con la colonia de Papua, y que asegurara la participación de la población autóctona en estos órganos.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que se habían observado lealmente las disposiciones y los procedimientos relativos al Régimen de Administración Fiduciaria, y que se había mantenido la condición jurídica separada del Territorio. Esta condición jurídica separada se observaba explícitamente en la legislación orgánica del Territorio, en la Ley sobre Papua y Nueva Guinea y en todas las actividades del Gobierno. Añadió que Nueva Guinea derivaba ventajas positivas de su estrecha asociación con Papua.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que en el estado actual de desarrollo la "unión administrativa" del Territorio con Papua constituía el método más eficaz para la adecuada administración de Nueva Guinea. Además, el Acuerdo de Administración Fiduciaria contenía disposiciones relativas a dicha unión.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

El representante de China manifestó la complacencia de su delegación por el hecho de que se hubiera establecido una nueva división auxiliar que podía ofrecer una carrera permanente a los servidores públicos calificados, que se estaba preparando una legislación que permitiría nombrar a los habitantes autóctonos en otras divisiones de la administración pública, y que se había establecido un instituto de administración pública para facilitar la formación profesional de personal calificado. Sin embargo, instó a la Autoridad Administradora a que incluyera en su próximo informe anual datos separados sobre el número de habitantes autóctonos del Territorio en fideicomiso que estuvieran prestando servicios en la Administración.

El representante de la India declaró que la administración del Territorio era una burocracia, aunque una burocracia ilustrada. Desde 1949, el número de europeos que ocupaban los puestos más altos de la Administración había aumentado en cerca del 40%, mientras que el número de autóctonos había aumentado en un 5%. Las únicas razones que el representante de la India podía concebir para que no aumentara apreciablemente el personal autóctono en los servicios administrativos eran el atraso de su educación y quizá el hecho de que la población colonizadora compitiera por los mismos cargos e hiciera víctima de prejuicios raciales a la población autóctona.

El representante especial de la Autoridad Administradora expresó la seguridad de que la división auxiliar de la Administración Pública serviría para aumentar la participación de la población autóctona en la Administración, lo cual era y continuaría siendo

el propósito de la Autoridad Administradora. Aseguró al Consejo que la Autoridad Administradora se preocuparía ciertamente de incluir en los futuros informes mayor información relativa al funcionamiento del sistema.

CONSEJO LEGISLATIVO

El representante del Reino Unido estimó que el sistema vigente de nombramiento de los miembros autóctonos del Consejo Legislativo era un sistema flexible y democrático e indicó que se introduciría un método electoral más eficiente cuando llegara la necesidad de introducirlo.

El representante de Bélgica afirmó que era equivocado considerar a los representantes oficiales en el Consejo Legislativo como representantes de intereses europeos. Afirmó que eran representantes de la Autoridad Administradora y representaban, sobre todo, los intereses de la población autóctona.

El representante de Siria observó que la representación autóctona en el Consejo Legislativo era muy insignificante. Además, los miembros autóctonos eran seleccionados por la Administración, mientras que los miembros europeos no oficiales eran elegidos por un colegio electoral restringido. Declaró que debía aumentarse el número de los miembros autóctonos del Consejo y reemplazar el procedimiento de selección de los candidatos por un sistema de elección.

El representante de la India tomó nota de que de los 28 miembros del Consejo Legislativo dos eran representantes autóctonos del Territorio en fideicomiso, designados por el Administrador; esto representaba una proporción de uno por cada 300.000 habitantes, aproximadamente. Estos representantes no tenían poderes ni influían para nada en las decisiones del Consejo. Este era todo el adelanto que se había logrado en 35 años. Por otra parte, para los 8.406 europeos que residían en el Territorio había 16 representantes. En 1949, el Consejo había recomendado que se aumentara el número de miembros autóctonos, pero todavía no se ha efectuado cambio alguno.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó nota de que sólo había dos miembros autóctonos del Territorio en Fideicomiso en el Consejo Legislativo, de un total de 29, y aun estos dos miembros no eran elegidos sino nombrados por la Autoridad Administradora. Por las declaraciones del representante especial podía verse que la Autoridad Administradora, aplicando una política de discriminación racial, no intentaba aumentar el número de miembros autóctonos.

El representante de la Autoridad Administradora declaró que lo sorprendente no era que los miembros autóctonos del Consejo Legislativo fueran seleccionados por la Autoridad Administradora, sino que pudieran encontrarse habitantes autóctonos, en el actual estado de desarrollo del Territorio, para que tomaran parte en un cuerpo político de esa categoría. Debía también disiparse la impresión de que el Consejo Legislativo estaba notoriamente inclinado a favor de los intereses europeos; una gran proporción de los miembros del Consejo eran funcionarios de la Administración cuyo deber principal consistía en proteger los intereses de los habitantes autóctonos. Además, había representantes de las misiones cristianas, quienes se preocupaban también de los intereses autóctonos más bien que de los intereses europeos.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que, mientras la población no fuera plenamente capaz de comprender las instituciones políticas modernas, era inevitable que la Administración asumiera la adecuada protección de los intereses autóctonos, lo cual se realizaba por medio de la representación oficial en los diversos órganos de gobierno. Sin embargo, aseguró al Consejo que la Autoridad Administradora se daba cabal cuenta de la necesidad de preparar a la población autóctona en cuestiones políticas, lo cual se comprobaba con los planes de la Administración de asociar más habitantes autóctonos como observadores en el Consejo Legislativo. Añadió asimismo que, en las circunstancias especiales de Nueva Guinea, no sería posible por el momento aplicar procedimientos electorales a la designación de miembros autóctonos del Consejo Legislativo.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE DISTRITO

El representante de China estimó que los funcionarios departamentales que formaban parte de los Consejos Consultivos de Distritos y Municipales no podían representar adecuadamente a los habitantes autóctonos.

El representante de la India tomó nota de que los Consejos Consultivos de Distritos y Municipales, cuya composición se limitaba a europeos y asiáticos, no habían sido establecidos por la ley. Indudablemente esos consejos tenían cierto valor, pero no se los podía considerar como parte de la organización gubernamental.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó nota de que los Consejos Consultivos de Distritos y Municipales estaban compuestos exclusivamente por europeos y de que la población local estaba completamente privada de toda participación en ellos, aunque las actividades de los consejos se relacionaban directamente con los intereses de la población local.

El representante de Francia declaró que no podía ver cuáles eran las ventajas que representaban hoy para la Administración los Consejos Consultivos, en su forma actual; en realidad, quizás más bien podrían estorbar la administración. Sin embargo, estimó que los Comisionados de Distrito podrían organizar cuerpos consultivos adaptados a las actuales capacidades de los habitantes autóctonos, y que dichos cuerpos consultivos podrían ser de gran utilidad.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

El representante del Reino Unido expresó la certeza de que la política del Administrador de establecer Consejos Autóctonos de Aldea era una política sana de la cual podía esperarse un desarrollo constructivo, y estimó que la adición de dos consejos al total anterior de cuatro constituía un verdadero triunfo.

El representante de El Salvador estimó que las circunstancias que se presentaban en Nueva Bretaña y Baluan eran muy estimulantes, y expresó la opinión de que la Autoridad Administradora debía estimular aún más aquellas circunstancias mediante la ayuda de funcionarios especializados, quienes explicarían a los habitantes los principios, deberes y funciones de los consejos y ayudarían a organizarlos.

El representante de la India tomó nota de que, después de casi 35 años de administración bajo mandato y bajo el régimen de Administración Fiduciaria, había sólo seis Consejos Autóctonos de Aldea en el Terri-

torio. En el informe anual se declaraba que la capacidad de los habitantes para ser considerados como buenos miembros de estos consejos dependía en mucho de su capacidad de cobrar los impuestos. La elección de miembros de los consejos se efectuaba por medio de votaciones locales y secretas, la mayor parte sobre la base de representación proporcional. Por consiguiente, cabía preguntarse si, puesto que los habitantes comprendían las complejidades de la representación proporcional, no estaban también capacitados para tomar parte en los consejos en una proporción mucho mayor de lo que lo estaban haciendo.

El representante de Francia declaró que estos consejos constituían un paso importante hacia la formación de instituciones fundamentales y que, en los años futuros, debía continuarse trabajando en el mismo sentido.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que uno de los aspectos importantes de la administración local eran los esfuerzos del Gobierno para aglutinar a los numerosos grupos tribales del territorio en una sola población con un idioma común. Declaró además que el número creciente de Consejos Autóctonos de Aldea creados por ley era prueba de los planes de la Administración para apresurar el adelanto político de la población. Estimó que el desarrollo de tales consejos, que podrían irse formando gradualmente para reemplazar la actual estructura tribal, pero sin lesionarla, era el punto de partida más adecuado para conducir a la población hacia una mayor comprensión de las instituciones políticas. A este respecto, dió seguridades de que se establecerían más consejos tan pronto como los habitantes autóctonos demostraran ser capaces, con una adecuada fiscalización y orientación, de hacerlos actuar eficientemente.

RÉGIMEN JUDICIAL

El representante de Bélgica expresó la opinión de que los tribunales autóctonos constituían una parte integrante de las instituciones tribales. A ese respecto, la Autoridad Administradora, que sostenía que las instituciones que no se oponían a los principios fundamentales de la civilización eran aceptables, debía reconocer por ley las jurisdicciones tribales.

El representante de Siria declaró que era inequitativo que los europeos disfrutaran de un sistema de jurados en materia criminal, mientras que se privaba del mismo beneficio a los habitantes autóctonos. Estimó que la Autoridad Administradora debía reconsiderar esta cuestión. Expresó también la opinión de que debía reconocerse por ley escrita al Tribunal para Asuntos Indígenas.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró, con respecto a la sugestión de que debería introducirse el sistema de jurados en los casos en que se vieran implicados los habitantes autóctonos, que el sistema de jurados era una de las instituciones jurídicas más importantes de Australia y que la Administración esperaba introducirlo eventualmente en Nueva Guinea. Sin embargo, estimó que su funcionamiento adecuado requería una mayor comprensión de la que tenían por el momento los habitantes autóctonos. Para concluir, declaró que se estaba estudiando la cuestión de dar reconocimiento por ley a los tribunales autóctonos, y que el Consejo sería plenamente informado de cualesquiera decisiones que se adoptaran a este respecto.

tivos por medio de programas de trabajos anuales. El Consejo expresó su apoyo a la opinión de la Misión Visitadora de que los fondos que año tras año se asignaban al desarrollo económico debían invertirse de acuerdo con un plan ampliamente coordinado de desarrollo que se extendiera por un período de 5 a 10 años y que tuviera por objeto establecer una pauta de expansión económica que sirviera lo mejor posible al fin de elevar las perspectivas futuras de los habitantes. Recomendó a la Autoridad Administradora que estudiara de nuevo la conveniencia de proceder en esta forma y de incorporar a dicho plan los objetivos suyos a largo plazo que puedan adaptarse a los propósitos del mismo.

El Consejo también reiteró su recomendación anterior de que se atribuyera especial importancia en los planes de desarrollo económico, a la participación de la población autóctona, y advirtió que la Misión Visitadora había encontrado que el desarrollo económico obtenido hasta entonces beneficiaba principalmente a los colonos y compañías europeas. Expresó su satisfacción por los esfuerzos redoblados de la Autoridad Administradora para formentar el desarrollo de cooperativas entre los productores autóctonos y expresó su opinión de que había que dar un lugar prominente a las actividades de esta clase en la formulación de un plan de desarrollo económico; y en apoyo de su opinión de que en los planes que se trazaran debía considerarse especialmente importante la participación de la población autóctona en general, el Consejo señaló a la atención de la Autoridad Administradora la observación hecha por la Misión Visitadora en el sentido de que una decisión justa del problema difícil e importante de la colonización europea del Territorio determinaría en grado apreciable el porvenir económico de éste.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14° período de sesiones, de que reconocía la importancia de los estudios relativos a los recursos existentes y a la explotación de la tierra y que había proporcionado y continuaría proporcionando en el porvenir de conformidad con la política ya establecida, la mayor cantidad posible de personal, equipo, etc., para asegurar la realización más rápida posible de las investigaciones básicas. Sin embargo, estimaba que el Consejo de Administración Fiduciaria tenía conocimiento del hecho de que había una escasez mundial de expertos en algunas de las técnicas necesarias y de que la labor de investigación general podría realizarse satisfactoriamente sólo con el concurso de todos los especialistas integrantes de los equipos científicos. Entretanto, conjuntamente con las investigaciones de índole más fundamental, la Autoridad Administradora estaba realizando estudios de reconocimiento e investigaciones especiales a fin de que se pudiera proceder al desarrollo económico con una base sólida dondequiera que existieran indicios favorables y donde la población indígena y otros habitantes o inmigrantes autorizados estuvieran dispuestos a emprenderlo y contarán con el equipo, el capital y la capacidad para hacerlo.

Además, la Autoridad Administradora manifestó que había examinado de nuevo la conveniencia práctica de formular planes quinquenales o decenales coordinados de desarrollo pero que seguía considerando que la actual práctica de trabajar constantemente hacia la ejecución de objetivos a largo plazo basados en una política bien definida para el desarrollo económico con planes de

acción que se coordinaran cada año, constituía el proceder más adecuado en las circunstancias del caso. Una de las dificultades inmediatas para formular con objetividad planes quinquenales o decenales estribaba precisamente en la falta de un conocimiento completo y detallado de los recursos y de otros factores que determinaban el desarrollo económico para todo el Territorio, al cual el Consejo había hecho referencia expresa en su primera recomendación sobre progreso económico. Sin embargo, la Autoridad Administradora siguió la práctica de destinar cada año el máximo de recursos financieros y de otra índole a la expansión económica gradual dentro del ámbito de los objetivos de largo plazo, definidos y coordinados, y del desarrollo económico y social, teniendo presentes los resultados de las investigaciones a corto y largo plazo a medida que se fueran conociendo los mismos.

La Autoridad Administradora declaró que tenía conciencia de la importancia del papel de la población indígena en el desarrollo económico y que siempre le asignaba un papel destacado en la planificación económica y social. Añadió que las tierras eran un factor básico en el desarrollo económico y que el bienestar de la población indígena, sus derechos e intereses de largo alcance, estaban plenamente protegidos mediante los procedimientos administrativos y jurídicos de arraigada tradición. El desarrollo de las actividades cooperativistas de producción e intercambio y de los servicios agrícolas especiales de divulgación ha recibido considerable y especial atención, particularmente durante los últimos años. La Autoridad Administradora admitió que una decisión acertada sobre la colonización europea del Territorio era de importancia fundamental para el desarrollo económico y social equilibrado. Consideraba que la introducción de recursos de capital, de conocimientos modernos y de técnicas de producción y oportunidades de empleo y formación profesional, elementos concomitantes con la empresa y la colonización europeas, eran de gran importancia para la población autóctona. La estructura actual de la ley y de la Administración aseguraban un lugar apropiado para la colonización europea dentro de la política coordinada de desarrollo económico y social con amplias garantías para la participación de la población autóctona.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo recuerda su recomendación anterior relativa al desarrollo económico general del Territorio, en el sentido de apoyar la opinión de la Misión Visitadora sobre la conveniencia de formular un plan coordinado de desarrollo a largo plazo y ejecutarlo gradualmente a medida que lo permitan las circunstancias. El Consejo toma nota de que la Autoridad Administradora, luego de haber estudiado nuevamente este asunto, estima que el procedimiento actual de trabajar constantemente hacia objetivos bien definidos de una política de largo alcance, coordinando los planes de acción de año en año, es el más adecuado en las presentes circunstancias. El Consejo tiene conciencia de que la Autoridad Administradora puede necesitar un tiempo apreciable para ponderar suficientemente un asunto de tanto alcance e importancia potencial para el adelanto del Territorio. Sin embargo, es de la opinión de que un programa coordinado de largo alcance constituye una necesidad básica para el vigoroso desarrollo económico del Territorio e insta a la Autoridad Administradora a que realice tan pronto como sea posible las investigaciones económicas generales de los recursos

del Territorio que son necesarias para la formulación de un programa de esta índole.

El Consejo, observando que no puede formarse ni registrarse compañía alguna que tenga por objeto dedicarse total o parcialmente a las actividades agrícolas, pastorales o forestales, a la extracción de carbón o mineral de hierro o a la navegación aérea, a menos que dos tercios, por lo menos, de las acciones emitidas por la compañía estén en posesión de súbditos británicos o a su nombre y recordando que el inciso d del Artículo 76 de la Carta establece la igualdad de tratamiento para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales en cuestiones de carácter social, económico y comercial, toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que esta cuestión se halla actualmente en estudio. El Consejo pide a la Autoridad Administradora que lo informe de la decisión adoptada, cuando se esté considerando el próximo informe anual.

El Consejo felicita a la Autoridad Administradora por el reciente desarrollo del movimiento cooperativista y acoge con satisfacción su promesa de fomentar y alentar el cooperativismo en la mayor medida posible.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE EXPORTACIÓN

En el año a que se refiere el presente informe, el valor de las importaciones y exportaciones fué de £7.175.612 y £8.491.396 respectivamente, lo que representa una disminución de £978.490 en las importaciones y un aumento de £1.973.515 en las exportaciones en comparación con las cifras del año anterior. En el mismo período las exportaciones de origen local, que acusaron un aumento de £1.692.228, consistieron principalmente en copra, oro, aceite de coco y cacao. La harina de coco y el aceite de coco, por valor de £35.463 y £473.026 respectivamente, fueron productos nuevos cuya exportación comenzó en febrero de 1953. El comercio exterior del Territorio consistió en la exportación de productos agrícolas y otras clases de productos primarios elaborados o sin elaborar y en la importación de productos manufacturados y ciertas clases de productos alimenticios.

Las restricciones a la importación que fueron introducidas en 1952 con el objeto de efectuar economías de divisas, limitando ciertas categorías de importaciones procedentes de otros lugares fuera de Australia a porcentajes determinados del total correspondiente a 1950-1951, fueron liberalizadas en 1953. A consecuencia de esta liberalización el cupo correspondiente a los artículos comprendidos en la categoría A puede exceder ahora del límite del 100% si se demuestra la necesidad y el carácter esencial del artículo respectivo; se elevó del 75 al 100% el cupo de los artículos correspondientes a la categoría B con excepción de las bebidas alcohólicas; el cupo de los artículos correspondientes a la categoría C, que consiste en artículos no esenciales, fué elevado del 20 al 50%. El cupo de una cuarta categoría que comprende artículos esenciales sigue siendo el mismo que la cifra correspondiente a 1950-1951, salvo los casos de necesidad o de carácter esencial.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, durante su 14° período de sesiones, de que después de terminado el informe anual que se está examinando, una moderna fábrica de madera terciada inició su producción en Bulolo. La fábrica, que costó £1.340.000, fué construída por la Commonwealth New Guinea Timbers Ltd. en la cual el Gobierno ha suscrito £500.000 de un capital total de £1.000.000. Se espera

que esta nueva industria, una vez que esté en plena producción, añadirá, aproximadamente £5.000.000 por año al comercio de exportación e importación.

HACIENDA PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN

Las rentas públicas derivadas de un subsidio directo de la Autoridad Administradora disminuyeron de £3.126.059 en 1951-1952 a £2.769.543 en 1952-1953, y las recaudaciones por concepto de impuestos internos aumentaron de £1.486.375 a £1.544.542, llegando las rentas procedentes de ambas fuentes a un total de £4.314.085. En el mismo período los gastos disminuyeron de £4.612.434 a £4.314.085. No existen en el Territorio impuestos directos, sea sobre la renta o sobre el comercio, ni en la forma de impuestos de capitación, salvo los tributos que imponen los Consejos Autóctonos de las aldeas. Las rentas que la Administración obtiene de fuente interna se derivan de los derechos de aduana, de una regalía del 5% sobre el oro, y de otros gravámenes diversos, principalmente tasas y derechos. Del total de £1.544.542 recaudado por concepto de impuestos internos, los derechos de aduana produjeron £1.041.033 y las regalías sobre el oro £169.245.

La Misión Visitadora advirtió que el Territorio dependía en gran parte de los subsidios anuales de la Autoridad Administradora y que las contribuciones recaudadas en el Territorio estaban constituidas en su mayor parte por derechos de aduanas. A juicio de la misma no se podría lograr un aumento importante de las recaudaciones por medio de ajustes en los impuestos indirectos e incluso la imposición de impuestos directos pudiera resultar insuficiente para resolver los problemas financieros del Territorio. La Misión estimó que las rentas públicas del Territorio eran inadecuadas y que seguirían siéndolo hasta que un mayor adelanto económico proporcionara nuevas fuentes de recaudación.

En su 12° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria reiteró el interés que había manifestado por la posibilidad de mejorar el sistema fiscal del Territorio, añadiendo que atribuía importancia a la recomendación de la Comisión de estudios de las aduanas de Papua y Nueva Guinea en el sentido de que se sometiera a un amplio examen todo el sistema financiero del Territorio. Había recibido con satisfacción las seguridades dadas por la Autoridad Administradora de que prestaría gran atención a las conclusiones de dicha Comisión, y expresó la esperanza de que, al llevar a cabo un examen más amplio del asunto, la Autoridad Administradora estudiaría la posibilidad de introducir alguna nueva forma de tributación directa; también había pedido que se le proporcionase nueva información al respecto en el próximo informe anual.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14° período de sesiones, de que estaba estudiando constantemente el sistema financiero del Territorio y de que, en vista de las condiciones reinantes en éste, todavía no consideraba oportuno implantar una forma de tributación directa. Al respecto, señaló la importancia de alcanzar un punto de equilibrio entre la conveniencia de aumentar las rentas públicas y la de asegurar al mismo tiempo que las inversiones de capital no se desviarían del Territorio. Con respecto a la imposición de cualquier tributación directa sobre los habitantes autóctonos, la Autoridad Administradora declaró que el Consejo indudablemente se daría cuenta de las dificultades con que tropezaba la Administración

en un Territorio donde la economía de subsistencia se halla todavía ampliamente difundida. Si bien continuaría considerando este asunto no podía prever todavía la posibilidad de imponer cualquier forma de tributación directa sobre los habitantes autóctonos aparte de los gravámenes impuestos por medio de los Consejos Autóctonos de Aldea. La Autoridad Administradora añadió que estos impuestos habían sido establecidos con el pleno consentimiento de la población de las aldeas y que la creación de tesorerías locales constituía un paso muy importante hacia la educación general del pueblo y era un adelanto desde el punto de vista de la aceptación de responsabilidades.

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes conclusiones y recomendación:

El Consejo elogia el servicio público prestado por la Autoridad Administradora al sufragar cada año dos tercios aproximadamente de los gastos públicos del Territorio.

Con respecto a su recomendación anterior relativa a la introducción de alguna forma de tributación directa, el Consejo toma nota de que la Autoridad Administradora examina periódicamente el sistema financiero pero que las condiciones todavía no son favorables para la imposición de una forma de tributación directa. Espera que los obstáculos al establecimiento de la tributación directa podrán ser superados a su debido tiempo y pide que se lo mantenga al corriente de las novedades que se produjeran al respecto.

A este respecto, el Consejo se hace cargo de las dificultades con que tropieza la Administración para imponer en forma general un sistema de tributación directa en el Territorio en fideicomiso debido al hecho de que la economía de subsistencia se halla todavía muy difundida entre los habitantes autóctonos. Toma nota con satisfacción de que en diversas regiones los Consejos Autóctonos de Aldea han impuesto tributos contando con el pleno consentimiento del pueblo que representan, y de que la Autoridad Administradora considera que el establecimiento de tesorerías locales constituye un importante adelanto hacia la educación general de los habitantes autóctonos y su aceptación de responsabilidades.

RÉGIMEN DE TIERRAS

La superficie total del Territorio, que tiene 24.100.000 hectáreas, consta de 210.140 hectáreas de propiedad de personas no autóctonas, 224.180 hectáreas en posesión de la Administración y 23.665.680 hectáreas de tierras no enajenadas. Estas últimas se consideran de propiedad de los autóctonos salvo prueba en contrario.

La Autoridad Administradora ha declarado que siempre ha reconocido la importancia de la tierra para la población autóctona y la necesidad de proteger los derechos de propiedad de ésta. Ha estimado que la garantía más importante a este respecto la constituye la disposición de la ley de tierras que prohíbe la enajenación de tierras de propiedad de los autóctonos, salvo las enajenaciones hechas por la Administración.

La Ordenanza sobre el Registro de Tierras de los Indígenas dispone la investigación y la inscripción de los intereses y derechos de los autóctonos sobre las tierras. En conformidad con esta Ordenanza se formó una Comisión de Tierras de los Autóctonos y en 1952 se nombraron un Comisionado Principal y un Comisionado. Se están efectuando los trámites para el nombramiento de más comisionados.

La política expresa de la Autoridad Administradora consiste en terminar el registro de las tierras de propiedad de los autóctonos en los distritos de mayor desarrollo agrícola, a saber, Nueva Bretaña y Nueva Irlanda; y en las zonas montañosas de población densa, donde la creciente autoridad de la Administración ha permitido a las tribus volver a sus tierras hereditarias, de las cuales habían sido despojadas debido a los conflictos tribales.

La Ordenanza sobre Tierras también establece que, de tanto en tanto y siempre que no se opongan razones valederas, el Administrador podrá declarar de propiedad de la Administración cualesquiera tierras que nunca hubieran sido enajenadas por ésta y que aparentemente no tuvieran propietario. De conformidad con esta disposición la Administración adquirió 15.679 hectáreas y espera adquirir extensiones adicionales a medida que progrese la labor de la Comisión de Tierras de los Autóctonos.

En su 12º período de sesiones, el Consejo tomó nota con satisfacción de que la Comisión de Tierras de los Autóctonos había comenzado ya su trabajo en una parte de la región de Nueva Bretaña y recomendó que se dieran los pasos necesarios lo antes posible para extender las actividades de la Comisión a otras partes del Territorio en fideicomiso. El Consejo tomó nota del informe de la Misión Visitadora de que los habitantes autóctonos de algunas zonas habían demostrado su deseo de volver a poseer las tierras que se les habían enajenado, e invitó a la Autoridad Administradora a que, cuando dicha tierra estuviera disponible para su traspaso a otros dueños, prestara consideración benevolente a las solicitudes que pudieran recibirse de los autóctonos, con vistas a concederles toda la preferencia que fuera posible en la adquisición de los títulos de propiedad de esas tierras.

La Autoridad Administradora declaró que estaba estudiando cuidadosamente la ampliación de las actividades de la Comisión de Tierras de los Autóctonos en el Territorio. Uno de los principios de la política de tierras es el de que todos los residentes tienen igualdad de derechos para procurar la propiedad de las tierras enajenadas y que la Junta de Desarrollo Agrario del Territorio consideraría con benevolencia la solicitud de cualquier población autóctona deseosa de adquirir la posesión de una extensión de tierras para su uso de conformidad con las finalidades aprobadas. Las personas autóctonas también pueden negociar por instrumento privado la adquisición de títulos de propiedad sobre las tierras enajenadas, con sujeción a las disposiciones generales que requieren la aprobación del Administrador para las transferencias de derechos sobre la tierra.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

El valor de los principales productos agrícolas de exportación durante los dos últimos años ha sido el siguiente:

	1951-1952	1952-1953
	£	£
Copra	3.589.383	4.425.057
Aceite de coco	—	473.026
Granos de cacao	147.503	171.876
Harina de coco	—	35.463

El aceite y la harina de coco son nuevos productos agrícolas cuya exportación no se había iniciado hasta febrero de 1953.

Según el informe anual, los habitantes autóctonos antes de la última guerra no se interesaban en la pro-

ducción agrícola más allá de lo necesario para satisfacer sus necesidades inmediatas de alimentos y de otra índole. Sin embargo, la Autoridad Administradora señala que, ahora gracias al asesoramiento y la ayuda que se les ha prestado, se están interesando mucho en la producción de cultivos comerciales de variedades existentes y nuevas y en la mejora de los métodos de producción.

La producción de cocos continúa siendo la principal fuente de ingresos derivados de la agricultura; su producción aumentó durante el año, en especial la producción de copra de los agricultores autóctonos, que se calcula en unas 20.000 toneladas, señalando un aumento de más o menos 100% con respecto al año anterior. La cantidad de árboles de cacao ha aumentado durante el año de 500.000 a 1.000.000. Se está acrecentando el interés en la producción del café y se han establecido plantaciones nuevas, especialmente en la zona montañosa. Se ha seguido experimentando con varios cultivos de subsistencia y comerciales en las estaciones agrícolas experimentales.

MINERÍA

La producción de oro es la principal actividad minera del Territorio. El valor de su producción aumentó de £1.707.491 en 1951-1952 a £2.147.766 en el año a que se refiere el presente informe. La Administración recibe una regalía del 5% sobre todo el oro obtenido.

En anteriores períodos de sesiones el Consejo había pedido a la Autoridad Administradora que prestara seria consideración a la posibilidad de aumentar las rentas del Territorio derivadas de la producción del oro, ya fuera mediante un aumento de la regalía actual o mediante impuestos aplicados a la industria. En su 10º período de sesiones había solicitado informes detallados sobre el costo de producción del oro y sobre las utilidades derivadas de la industria y recomendó a la Autoridad Administradora que se sirviera estudiar la posibilidad de instituir una escala móvil de regalías teniendo en cuenta la obtención de utilidades.

La Autoridad Administradora manifestó en su informe anual correspondiente a 1951-1952 que no contaba todavía con información amplia y detallada sobre los costos de producción y las utilidades de la industria del oro. Se estaban llevando a cabo investigaciones y, en cuanto estuvieran terminadas, se proporcionaría la información. Al considerar la introducción de una escala móvil de regalías basada en las utilidades se tropezó con dificultades prácticas y no parecía haber justificación alguna para hacer una excepción con la industria del oro imponiéndole un impuesto sobre el ingreso neto.

La Autoridad Administradora no estaba dispuesta a considerar la imposición de ninguna carga basada en la obtención de utilidades por la industria que no fuera una forma general de impuesto sobre la renta aplicable a toda la comunidad y se consideraba que esta última medida no era factible ni deseable desde ningún punto de vista en la actual etapa de desarrollo del Territorio.

En el informe anual correspondiente a 1952-1953 la Autoridad Administradora manifestó que la industria de extracción del oro se enfrentaba con el problema de un costo de explotación elevado que había ido aumentando constantemente en tanto que el precio del oro permanecía fijo y se estaba considerando la posibilidad de que fuera necesario prestar alguna forma de ayuda. La mayoría de los productores no estaban en condi-

ciones de soportar cualquier aumento de la actual tasa de la regalía que tendría el efecto de retardar la exploración y el desarrollo de los depósitos marginales. Se había nombrado un grupo de funcionarios con experiencia para efectuar una investigación e informar sobre la situación de la industria minera en general.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

En el año que se examina, el kilometraje total de las carreteras para vehículos aumentó en 549 kilómetros llegando a un total de 4.280 kilómetros. Este total incluye un camino de acceso del Valle del Río Ramu a Goroka en las montañas y la construcción de un camino destinado a unir a Madang con el valle del Alto Ramu. Los nuevos caminos que fueron terminados son apropiados para tránsito liviano y más adelante, a medida que lo requieran las circunstancias, serán acondicionados para soportar tránsito pesado.

En su 12º período de sesiones el Consejo tomó nota de que la Misión Visitadora había observado que, a pesar de las dificultades físicas y del alto costo de la construcción de carreteras en el Territorio, la Autoridad Administradora reconocía su importancia para el desarrollo económico en general y llevaba a cabo trabajos de construcción en los sitios en que ello resultaba posible. Tomó nota además del aumento continuo de los fondos asignados a este propósito e hizo hincapié de nuevo en el hecho de que una red eficaz de carreteras es un requisito esencial para lograr un desarrollo económico en gran escala y una efectiva cohesión social; instó a la Autoridad Administradora a intensificar sus esfuerzos en este sentido.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14º período de sesiones, de que estaba prestando la mayor atención posible al desarrollo de una red eficaz de carreteras y que cuando terminara la construcción de varios muelles de mayor magnitud quedarían libres recursos técnicos, de mano de obra y de equipo para el reconocimiento del terreno, la planificación y la construcción de carreteras. Los planes de la Autoridad Administradora para la ampliación de la red de carreteras incluían la construcción de carreteras para vehículos a motor en dirección de la región montañosa del Este pasando por el valle del Markham; la construcción de una carretera costera de Madang a Bogia y su ampliación hacia el valle del Bajo Ramu; la construcción de una carretera entre Marui, sobre el Río Sepik y Wewak; y entre Wewak, Aitape y Vanimo.

En su 14º período de sesiones el Consejo aprobó la siguiente conclusión y recomendación:

El Consejo, consciente de la importancia que tienen las comunicaciones por carretera y la necesidad de su expansión en el proceso de desarrollo del Territorio, toma nota con satisfacción de los planes de la Autoridad Administradora para la construcción de carreteras y del progreso realizado al respecto durante el año que se examina. El Consejo considera que deberían realizarse todos los esfuerzos posibles con el objeto de acelerar la mejora y la ampliación de la actual red de carreteras.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Bélgica, considerando que el plan general de desarrollo que estaría dividido en sec-

ciones anuales no permitía coordinar los diversos aspectos de la labor, expresó la convicción de que sería acertado establecer programas a largo plazo que serían examinados a intervalos regulares, procediéndose a su modificación de ser necesario.

El representante de los Estados Unidos de América manifestó que su delegación estimaba que el cimiento que el Gobierno de Australia estaba colocando con éxito para el futuro del pueblo de Nueva Guinea podría ser reforzado mediante el establecimiento de planes de largo alcance para el adelanto económico del Territorio.

El representante de China declaró que su delegación había tomado nota con interés del establecimiento de la Junta de Comercialización de la Copra de Papúa y Nueva Guinea, que constaba de tres funcionarios oficiales y dos productores locales pero no incluía a miembros autóctonos. Sin embargo, puesto que la producción de copra era mucho mayor en el Territorio en fideicomiso que en Papúa, estimaba que el Territorio en fideicomiso debería estar representado de manera más adecuada que por un solo productor local. Prosiguió señalando a la atención de la Autoridad Administradora el hecho de que el requisito de dos tercios de intereses británicos en una cantidad de empresas del Territorio era incompatible con el inciso d del Artículo 76 de la Carta y pidió que la Autoridad Administradora informara al Consejo en su próximo período de sesiones con respecto a cualquier decisión que pudiera haber adoptado sobre el asunto.

El representante del Reino Unido estimó que la actitud pragmática de la Administración hacia la planificación del desarrollo económico era acertada y elogió la creación de las empresas cooperativas, especialmente en el renglón de cacao y arroz.

El representante de Nueva Zelandia consideró que pudiera resultar más práctico, por ser Nueva Guinea un vasto territorio de desarrollo desigual, establecer una serie de planes económicos regionales más bien que un plan general para todo el Territorio. En materia de desarrollo económico del Territorio, la Autoridad Administradora debería tener cuidado de no desalentar las inversiones del extranjero.

El representante de Siria consideró que se debía efectuar un estudio económico del Territorio.

El representante de la India estimó que, a pesar de ser todavía muy pequeño el movimiento cooperativista, era digno de elogio el gran adelanto realizado en los últimos años.

El representante de Francia expresó que el progreso económico alcanzado en el Territorio era bastante satisfactorio y que se observaba un gran adelanto técnico. El desarrollo de las sociedades cooperativas autóctonas también constituía un éxito de gran importancia.

El Representante Especial de la Autoridad Administradora tomó nota de que algunos representantes se habían referido a la conveniencia de preparar un plan general de desarrollo para el Territorio. Si bien su Gobierno tenía plena conciencia de la necesidad de planificación apropiada, consideraba que el procedimiento actual de trabajar en forma constante hacia objetivos de largo plazo bien definidos y con planes de labor coordinados de año en año constituía por el momento la mejor solución. Con respecto a las cooperativas, el Consejo de Administración Fiduciaria podría tener la plena seguridad de que se apresuraría y alentaría esta actividad en la mayor medida posible.

El representante de El Salvador expresó la opinión de que la Autoridad Administradora debería implantar un sistema tributario en el Territorio y de que un aumento de las regalías del oro podría aumentar también la renta pública.

El representante de Bélgica, tomando nota de que la contribución de Australia a los gastos públicos del Territorio había alcanzado, durante muchos años, a unos dos tercios del total de dichos gastos, estimó que correspondía rendir homenaje a esta demostración de servicio público desinteresado.

El representante de Siria estimó que un sistema fiscal basado únicamente en tributación indirecta, tal como el existente en el Territorio, no era justo puesto que los impuestos indirectos afectan a todos los sectores de la población y aumentan la pobreza de los pobres y la riqueza de los ricos. En Nueva Guinea, las compañías europeas eran las únicas que se beneficiaban del sistema de tributación y el representante de Siria consideraba que había que cambiarlo.

El representante de la India observó que, aunque no había un sistema de tributación directa, había una gran cantidad de impuestos indirectos y además los Consejos de Aldea también imponían tributos. En la zona del Consejo del Pueblo de Baluan el impuesto de 1953 fué de cuatro libras para todos los hombres sanos de más de 17 años de edad. Sin embargo, el salario mensual de un obrero no calificado era de una libra por mes y el de un obrero calificado de cinco libras.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que a pesar del hecho de que la mayoría de la población autóctona no recibía ingresos monetarios, la Administración había establecido un sistema tributario que no tenía en cuenta la capacidad del pueblo para pagar impuestos. Estimó que se deberían adoptar medidas para reemplazar el impuesto de capitación (que imponían los Consejos de Aldea) por un impuesto progresivo sobre la renta o por lo menos por un sistema de impuesto sobre la renta que tuviera en cuenta la capacidad de los contribuyentes y el patrimonio de los habitantes autóctonos.

El Representante Especial de la Autoridad Administradora declaró que el asunto de la tributación había sido examinado por la Autoridad Administradora durante cierto tiempo pero que había que advertir la importancia de conciliar la conveniencia de aumentar las rentas públicas y la necesidad de asegurar que las inversiones de capital no serán perjudicadas ni serán desviadas del Territorio. Por lo tanto, el Gobierno estimaba que por el momento no sería oportuno alterar la carga de los impuestos. En lo que se refiere a la imposición de cualquier forma de tributación directa sobre los habitantes autóctonos, el Consejo se daba cuenta indudablemente de las dificultades que ello entrañaría para la Administración en un territorio donde todavía se hallaba ampliamente difundida la economía basada en la producción para la subsistencia. Se proseguiría estudiando el asunto pero la Autoridad Administradora no podía prever todavía la posibilidad de imponer cualquier forma de tributación directa salvo aquellos tributos que fueran impuestos por la población misma por conducto de los Consejos Autóctonos de Aldea. Sin embargo, contrariamente a lo que el representante de la URSS había afirmado al respecto, los Consejos de Aldea tomaban en cuenta la capacidad de los contribuyentes y el impuesto se apli-

caba principalmente a los propietarios de tierras y a los residentes para quienes no resultaba gravoso pagar. Además, esos impuestos habían sido establecidos con el pleno consentimiento de la población y la creación de las tesorías locales constituía un paso importante en su educación general y constituía un adelanto desde el punto de vista de la aceptación de responsabilidades. Además, el Representante Especial manifestó, en respuesta al representante de Siria, que los impuestos gravaban tanto las importaciones como las exportaciones y que las compañías de exportación contribuían de hecho en una forma muy apreciable a la economía del Territorio.

RÉGIMEN DE TIERRAS

El representante de Siria observó que no existía en el Territorio un registro de las transferencias de tierras, manifestando que en consecuencia la propiedad no se hallaba protegida de manera adecuada. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que la Autoridad Administradora continuaba practicando una política de enajenación de tierras y que se había establecido la Junta de Desarrollo Agrario con el objeto de ayudar a los colonos europeos a obtener tierras. Esa junta no tenía un solo miembro autóctono. La Autoridad Administradora también estaba siguiendo la política de enajenar vastas extensiones de bosques. Se debería prestar atención a la necesidad de devolver a la población autóctona todas las tierras que se le habían enajenado y se deberían adoptar medidas para prevenir que cualquier enajenación tuviera lugar en el futuro.

El Representante Especial de la Autoridad Administradora aseguró al Consejo que los derechos sobre la tierra de la población autóctona se hallan plenamente protegidos y que la tierra nunca había sido enajenada sin el consentimiento expreso de sus propietarios autóctonos. Únicamente las tierras necesarias para la construcción de carreteras u otras obras públicas constituían una excepción al respecto. Además, hasta entonces únicamente 2% de la tierra apta para el cultivo había sido enajenada y la mayoría de estas tierras se hallaba en arriendo y volvería oportunamente a posesión del Gobierno, a disposición de los habitantes autóctonos. Los habitantes autóctonos también reunían las condiciones necesarias para obtener el arriendo de tierras si así lo deseaban. Respecto a la composición de la Junta de Desarrollo Agrario informó al Consejo de que, luego de su reorganización, ella incluía entre sus miembros al Secretario de Tierras, Agrimensura y Minas, como Presidente; al Director de los Servicios Distritales y Asuntos Indígenas; al Director de Agricultura, Ganadería y Pesca; y al Director de Bosques.

MINERÍA

El representante de China observó que su delegación todavía no había obtenido del Representante Especial la información detallada que hubiese deseado tener sobre las conclusiones a que había llegado el grupo de funcionarios que había realizado investigaciones sobre la situación de la extracción de oro. Expresó la confianza que en el próximo informe anual figurarían mayores detalles al respecto.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El representante de Bélgica felicitó a la Autoridad Administradora por el apreciable progreso realizado en la construcción de carreteras a pesar de las dificultades topográficas que ofrecía el territorio, declarando

al mismo tiempo que la red de carreteras todavía era evidentemente insuficiente y expresó la esperanza de que se haría todo esfuerzo posible para ampliarla.

El representante del Reino Unido tomó nota con satisfacción de que se realizaba con ritmo sostenido la construcción de carreteras.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La estructura social de los grupos autóctonos se basa en la familia o en el clan. Si bien no existe división de clases y ninguna persona está investida de autoridad suprema entre los grupos, cada comunidad tiene dirigentes reconocidos cuyas opiniones son las más respetadas y a las cuales se debe fidelidad. Prácticamente todos estos grupos viven en sus zonas tribales y la responsabilidad del cuidado de los ancianos, desvalidos y huérfanos incumbe principalmente a la organización tribal que aplica un sistema tradicional de seguridad social para el individuo, basado en las tradicionales obligaciones y responsabilidades colectivas de la familia, el clan o la tribu. No existe legislación especial relativa a la seguridad social y a los servicios de bienestar y ningún departamento determinado está encargado de esta responsabilidad, pero la Administración declara que casi todas sus actividades están directamente relacionadas con el bienestar social de la población y que, en lo que concierne a la mayoría de los habitantes, no se necesita ningún plan general de seguridad social.

La Autoridad Administradora informó que no se impusieron restricciones a la libre circulación durante el año objeto de este informe, aparte de las dispuestas por el Reglamento de Administración de los Autóctonos (Native Administration Regulations) en virtud del cual los habitantes autóctonos deben obtener un pase para entrar en ciertas poblaciones o para permanecer ausentes de sus barrios en ciertas poblaciones entre las nueve de la noche y las seis de la mañana.

Durante el 14° período de sesiones del Consejo, la Autoridad Administradora señaló que las restricciones impuestas a la libre circulación de la población autóctona habían sido considerablemente mitigadas durante años recientes y que las actuales restricciones, aplicadas en virtud de una enmienda aprobada en septiembre de 1950, se aplicaban sólo de vez en cuando a algunas poblaciones por orden del Director de los Servicios Distritales y Asuntos Indígenas.

En su 14° período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo, tomando nota de la legislación reciente en virtud de la cual las restricciones impuestas a la libre circulación de las personas autóctonas se aplican sólo de vez en cuando a ciertas poblaciones por orden del Director de los Servicios Distritales y Asuntos Indígenas, recomienda, no obstante, que las restricciones impuestas a la libre circulación sean completamente abolidas cuanto antes.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El número de trabajadores y empleados en el Territorio el 30 de junio de 1953 era en total de 38,443, distribuidos de la forma siguiente: 16,849 contratados,

11.882 trabajadores ocasionales, 8.321 empleados de la Administración y 1.391 en las fuerzas de policía. Todos eran autóctonos, con excepción de 547 trabajadores de Papua. Otros 2.395 trabajadores autóctonos estaban empleados en Papua.

Las condiciones de empleo y bienestar de la mano de obra autóctona asalariada están reguladas por la Ordenanza de 1950-1952 sobre Mano de Obra Autóctona, la Ordenanza de 1935-1952 de Reglamentación del Trabajo en Minas y Obras Públicas y la Ordenanza de 1921-1947 sobre la protección de los Contratos de los Trabajadores Autóctonos. Los trabajadores pueden ser empleados sobre una base ocasional o diaria y en virtud de un acuerdo por escrito durante un período que no exceda de dos años. Al terminar este plazo se puede concertar un nuevo acuerdo de un año con el mismo empleador. Las excepciones comprenden los empleados que, acompañados por sus familias, pueden concertar acuerdos adicionales, y los trabajadores procedentes de los distritos de las montañas, quienes no están autorizados para trabajar en zonas situadas a un nivel inferior a 3.500 pies sobre el nivel del mar durante más de 18 meses.

Los trabajadores son transportados gratis desde sus hogares y repatriados en las mismas condiciones a la terminación del acuerdo. Una ordenanza prescribe las horas de trabajo, los períodos de descanso, la remuneración y el suministro de raciones, vivienda, ropas y cuidado médico.

Las leyes y reglamentos del trabajo son administrados y aplicados por el Departamento de Servicios Distritales y Asuntos Indígenas, que está encargado de la inspección de las condiciones de trabajo en todos los lugares de empleo y de fiscalizar la contratación, investigar las reclamaciones, asesorar a los empleados y empleadores en todas las cuestiones relativas al empleo de trabajadores autóctonos, de la conciliación en los conflictos del trabajo, de autenticar los acuerdos escritos y dar testimonio del pago final a los trabajadores al terminarse los acuerdos. El Tribunal de Distrito entiende en las violaciones de contrato tanto por parte del trabajador como del empleador.

CASTIGOS CORPORALES

El Consejo, en su 12º período de sesiones, afirmó de nuevo sus recomendaciones anteriores relativas al castigo corporal y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora aboliría oficialmente, cuanto antes, esta forma de castigo.

La Autoridad Administradora contestó que, conforme había informado anteriormente, había revisado las leyes del Territorio relativas al castigo corporal y había enmendado esas leyes en forma que se abolía dicho castigo para todos los delitos, excepto los cometidos por jóvenes, los delitos sexuales en contra de las mujeres, ciertos delitos de violencia, tentativas para destruir buques y actos similares, y delitos perpetrados en la cárcel, tales como motines y actos de violencia contra el personal carcelario. Agregó que el grado y la severidad del castigo también habían sido reducidos. Si bien mantenía todavía el principio de la abolición del castigo corporal y estimaba que las enmiendas mencionadas eran un paso en ese sentido, la Autoridad Administradora consideraba necesario, con objeto de hacer frente a las condiciones reinantes en el Territorio y en interés del mantenimiento del orden público, retener en la legislación disposiciones concernientes al castigo corporal para los delitos antes mencionados.

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota de que el castigo corporal ha sido parcialmente abolido y recordando sus recomendaciones anteriores en ese sentido, insta firmemente a la Autoridad Administradora a abolir completamente esta forma de castigo.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

El Consejo, en su 12º período de sesiones, tomó nota con interés del programa de desarrollo de la comunidad que se lleva a cabo en la isla de Tabar en colaboración con la Comisión del Pacífico Meridional, y recomendó a la Autoridad Administradora que trazara planes para emprender programas de esta naturaleza en otras partes del Territorio, y la invitó a averiguar la posibilidad de obtener la asistencia de los expertos, de conformidad con el Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, en la formulación y ejecución de estos programas.

La Autoridad Administradora declaró que el desarrollo de la comunidad era parte de la administración de asuntos indígenas y que era objeto de gran atención. La Autoridad Administradora enfocaba el problema en el sentido de que cada comunidad indígena debería ser un programa viviente y obtener la máxima atención que requería su naturaleza y permitían sus recursos. La Autoridad Administradora declaró que en el caso de que la Administración no pudiese suministrar toda la asistencia técnica necesaria con sus propios recursos, debía examinarse la cuestión de obtener asistencia de la Comisión del Pacífico Meridional o del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

HIGIENE PÚBLICA

El número de instituciones médicas mantenidas por la Administración aumentó de 506 a 547 durante el año objeto de este informe, por razón del establecimiento de 43 puestos de socorro, un leprosario y un hospital para autóctonos. Este total de instituciones médicas incluye ocho hospitales para europeos, tres para asiáticos y 40 para autóctonos, 487 puestos de socorro, 4 clínicas de bienestar y 5 leproserías. El personal médico oficial incluía 164 europeos y 2.330 no europeos, lo cual representaba una disminución de 6 europeos y un aumento de 95 no europeos durante 1952-1953. Además de éstos se habían empleado 17 europeos y 75 personas más que formaban parte del personal médico no oficial.

Los gastos correspondientes a los servicios sanitarios para los territorios combinados de Papua y Nueva Guinea ascendieron a £1.230.000 de las cuales £848.801 se gastaron en el Territorio de Nueva Guinea. Este total no incluyó los gastos realizados por trabajos y servicios de capital ni por concepto del mejoramiento y conservación de los edificios y hospitales existentes.

En las Islas Viti existen cursos para un número limitado de estudiantes autóctonos y actualmente cinco de ellos están asistiendo a los cursos para prácticos asistentes en medicina e inspectores de sanidad, y otro grupo está preparando su ingreso en las escuelas de medicina y enfermería. También se están preparando dos estudiantes con el fin de poder matricularse en una facultad de medicina de una universidad de Australia. No existen en el Territorio escuelas donde se puedan obtener títulos que permitan el ejercicio de la medicina, pero se están completando planes para

impartir formación médica completa en Papua y Nueva Guinea y en 1954 se iniciarán cursos para técnicos de patología y laboratorio y personal auxiliar de hospitales; se espera que en 1955 se iniciarán también cursos para prácticos en medicina. En instituciones oficiales se desarrollan actualmente cursos de instrucción médica para practicantes de medicina y ordenanzas autóctonos con miras a formar personal para el servicio de la Administración. Los auxiliares de laboratorio, odontología y rayos X reciben instrucción individualmente.

Además de los servicios médicos proporcionados por la Administración varias misiones desarrollan una labor análoga en el Territorio. Dichas misiones han iniciado también la instrucción de personal auxiliar de enfermería y suministran personal europeo para las tres colonias oficiales para enfermos del mal de Hansen. Se reconoce la labor de esas misiones mediante un sistema de subvenciones y la entrega gratis de suministros médicos cuyo valor ascendió a £78.746 durante el año.

El Consejo, en su 12º período de sesiones, tomó nota por un lado del aumento general del número de hospitales, dispensarios y clínicas y del número de personas que eran objeto de cuidados en los hospitales o de tratamiento médico adecuado durante el período examinado, y tomó nota por otro lado de la opinión de la Misión Visitadora de que se necesitaba urgentemente mejorar los edificios y equipo de muchos de los hospitales existentes, así como del hecho de que el plan de 1951 de construcción de nuevos hospitales no se puso en ejecución a la espera de la revisión correspondiente. Por consiguiente, el Consejo invitó a la Autoridad Administradora a tomar en consideración, al revisar el programa de hospitales, los puntos de vista expresados por la Misión Visitadora y expresó la esperanza de que el plan revisado dispondría lo necesario para la creación definitiva de un sistema integrado de hospitales que fuera adecuado, por el número, instalaciones y ubicación, para satisfacer las necesidades del Territorio. El Consejo pidió a la Autoridad Administradora que añadiese a su próximo informe anual sus planes definitivos en este sentido.

Además, el Consejo tomó nota del informe de la Misión Visitadora de que los dispensarios y puestos de socorro en el Territorio estaban, en su mayor parte, a cargo de practicantes de medicina autóctonos sin fiscalización, excepto la que realizaban en visitas ocasionales los funcionarios administrativos. El Consejo señaló a la atención de la Autoridad Administradora la opinión de la Misión de que el sistema de formación profesional de estos practicantes era poco satisfactorio, de que se les debía escoger con mayor cuidado, formar mejor y poner un personal médico calificado a fiscalizar su trabajo. A ese respecto, el Consejo recomendó que la Autoridad Administradora adoptase las medidas necesarias para revisar y mejorar el sistema de selección, formación y vigilancia a la luz de las observaciones formuladas por la Misión Visitadora.

La Autoridad Administradora declaró que convenía con el Consejo en que si bien existía un aumento general en el número de hospitales, dispensarios y clínicas y en el número de personas que eran objeto de cuidados en los hospitales o de tratamiento médico adecuado, muchos de los hospitales existentes necesitaban urgentemente mejoras en cuanto a sus edificios y equipos y que esta cuestión era objeto de la atención de la Autoridad Administradora.

La Autoridad Administradora estaba haciendo una revisión del programa de construcción de hospitales con el propósito de lograr un aumento constante en el número de hospitales generales y de hospitales especializados en el tratamiento de la tuberculosis y de la enfermedad de Hansen para crear un sistema integrado de hospitales adecuado a las necesidades del Territorio. Se había iniciado ese programa con la construcción del Hospital General en Lae y se esperaba que en 1954 se iniciaría la construcción de los hospitales regionales de Wau y Nonga. El programa de nuevas obras para 1953-1954, que incluía también la construcción de un depósito general de suministros médicos en Rabaul y diversos edificios, suponía un gasto total de £513.000.

La Administración declaró que la falta de personal médico calificado era una de las principales dificultades que demoraba el rápido desarrollo de los servicios médicos y sanitarios, pero la situación estaba mejorando gradualmente y el personal contaba con 89 funcionarios más. La Administración aclaró, además, que se daba formación profesional al personal de los puestos de socorro, que debía volver a los hospitales con intervalos regulares para asistir a cursos de repaso de tres meses. Los libros de texto para uso de estudiantes y personal médico se imprimían uniformemente en inglés, lengua franca e idiomas vernáculos. Al terminarse el año, 190 estudiantes asistían a estos cursos.

Durante el 14º período de sesiones del Consejo, la Autoridad Administradora declaró que los servicios médicos y sanitarios habían continuado ampliándose después de terminado el período a que se refería el informe anual, y que el personal médico europeo había aumentado apreciablemente de 164 a 205. El nuevo personal incluía 7 prácticos en medicina, 7 enfermeras, 10 practicantes de medicina, 2 farmacéuticas, y dos inspectores sanitarios.

En su 14º período de sesiones el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo toma nota del aumento de servicios médicos y sanitarios durante el año considerado, particularmente del aumento en el número de puestos de socorro situados en distritos apartados, pero en vista de la necesidad urgente de un mayor desarrollo de dichos servicios, especialmente en lo que concierne a la formación de personal médico autóctono, recomienda que la Autoridad Administradora prosiga el mejoramiento de sus servicios médicos y la aplicación de su programa revisado de construcción de hospitales con la mayor rapidez posible.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de El Salvador recomendó encarecidamente que las restricciones a la libre circulación fuesen completamente abolidas.

El representante de Siria manifestó su sorpresa por el hecho de que no hubiese legislación social en el Territorio. Observó, además, que la población autóctona estaba sujeta a restricciones respecto a su derecho de libre circulación. Estas restricciones parecían ser discriminatorias y eran contrarias a principios generalmente reconocidos. Si resultaba difícil mantener el orden, como lo afirmaba la Administración, ésta debía aumentar las fuerzas de policía.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas observó que existían restricciones impuestas a la libre circulación de la población autóctona. Dicha población también era perseguida y castigada por la Administración por vestirse con ropas consideradas ilegales.

El representante de Francia observó que se habían adoptado algunas medidas relativas a la libre circulación con objeto de proteger a la población autóctona. Sin embargo, debía vigilarse cuidadosamente la aplicación de dichas medidas de manera que no fuesen desviadas de su finalidad original y debían ser eliminadas cuanto antes.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló que las restricciones a la libre circulación de la población autóctona habían disminuído considerablemente durante los últimos años, de manera que las restricciones que todavía estaban en vigor no dificultaban seriamente la libre circulación en todo el Territorio. Además, en virtud de una enmienda promulgada en septiembre de 1950, las actuales restricciones se aplicaban sólo de vez en cuando a algunas poblaciones por orden del Director de Servicios Distritales y Asuntos Indígenas.

NIVEL DE VIDA

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comentó que el nivel de vida de la población autóctona era excepcionalmente bajo. La mayor parte de los trabajadores autóctonos recibían un salario mensual de 16 chelines y 6 peniques aproximadamente. La mayoría de los habitantes autóctonos no poseía renta alguna y su situación era aún peor que la de los trabajadores y estaba condenada a un estado de semiinaniación.

CONDICIONES DEL TRABAJO

El representante de Siria declaró que la legislación del trabajo daba lugar a muchas críticas pues no protegía los derechos de los trabajadores. La mitad de los salarios sólo se pagaba después de expirado el contrato de trabajo.

El representante de la India observó que el trabajador medio en el Territorio ganaba una libra esterlina australiana mensual. Cuando se añadía a esta cantidad el costo de sus raciones, ropas y alimentos, el total ascendía a £7.10.0 por mes aproximadamente, o sea menos de 2 libras australianas por semana. La mayor parte de los alimentos y ropas que recibía el trabajador eran suministrados desde Australia, y por consiguiente, una parte considerable de la cantidad asignada para sus gastos volvía a Australia en forma de importación, fabricación y utilidades. Así, pues, la verdadera remuneración del trabajador era muy reducida.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló que las tasas de salarios indicadas en el informe anual eran tasas mínimas y que pocos trabajadores, o ninguno, recibían sólo el salario mínimo. Además, los habitantes autóctonos no se veían obligados ni por la Administración ni por la presión económica a realizar ninguna clase de trabajo. Sus salarios son un suplemento a lo que perciben por sus actividades en las aldeas. Además de los salarios, los trabajadores reciben también otros beneficios, tales como indumentaria, equipo, servicios de hospitalización y raciones gratuitas. Finalmente, el aplazamiento del pago de una parte de sus salarios tiene carácter de ahorro obligatorio y protege al trabajador de mentalidad sencilla contra los gastos inútiles.

CASTIGOS CORPORALES

El representante de China consideró que no se justificaba la continuación de los castigos corporales los cuales eran incompatibles con la protección de los derechos humanos.

El representante de El Salvador recomendó encarecidamente que el castigo corporal fuese completamente abolido.

El representante de Siria consideró que el castigo corporal debía ser enteramente abolido.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que en contravención de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria, todavía se aplicaba a los habitantes autóctonos el castigo corporal.

El representante de Francia declaró que no lo habían convencido los argumentos expuestos por el representante especial concernientes a la retención del castigo corporal.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló que las leyes relativas al castigo corporal habían sido revisadas y que el castigo se había abolido excepto en el caso de cuatro categorías restringidas. Con el transcurrir del tiempo sería posible restringir aún más esas categorías.

HIGIENE PÚBLICA

El representante del Reino Unido tomó nota de la expansión de los servicios médicos y sanitarios, particularmente el establecimiento de servicios hospitalarios en las partes remotas del Territorio.

El representante de Bélgica tomó nota de que los servicios médicos del Territorio estaban todavía en estado embrionario y expresó la esperanza de que la Administración realizaría cuanto antes esfuerzos para aumentar el número de médicos en el Territorio de 35 a 67, conforme al plan existente.

El representante de la India consideró que la tasa de mortalidad infantil en el Territorio excedía todo lo imaginable. Dichas tasas ascendían a 250-300 por cada mil nacidos vivos y en la región de Middle Sepik alcanzaba la enorme cifra de 454 por mil. Sin embargo, dicho representante consideró digno de elogio los esfuerzos realizados por la Administración destinados a impartir información en la lucha contra el paludismo y a extender los servicios de protección a la infancia.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideró que la situación de la higiene pública era muy poco satisfactoria. Las defunciones debidas a la pulmonía y a la tuberculosis habían aumentado y las tasas de mortalidad infantil en la región de Sepik ascendían casi a la mitad de los nacidos vivos. El número de hospitales y personal médico era completamente inadecuado. No obstante, a pesar de lo expuesto, la Autoridad Administradora no asignaba siquiera la cantidad mínima necesaria para atender a las necesidades de la higiene pública y, en realidad, estaban disminuyendo los gastos destinados a este fin.

El representante de Francia consideró que se debía felicitar a la Autoridad Administradora por su perseverancia en las actividades de higiene pública y por los resultados obtenidos. Manifestó su satisfacción por el hecho de que se hubieran reparado los hospitales para autóctonos y se habían adoptado medidas para la preparación de practicantes de medicina.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que ésta advertía claramente la conve-

nencia de mejorar los servicios médicos y sanitarios del Territorio y que su programa de construcción de hospitales se estaba desarrollando con la mayor rapidez posible, y se esperaba que al terminarse dicho programa de construcción serían suficientes los servicios disponibles. Respecto de las tasas de mortalidad infantil, la Administración esperaba reducirlas extendiendo los servicios de protección a la madre y al niño a las regiones más remotas donde la tasa de mortalidad infantil era alta y elevada, por consiguiente, el promedio general del Territorio.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y de las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

El sistema de enseñanza del Territorio comprende las escuelas dependientes de la Administración, las dependientes de Misiones y las dependientes de los Consejos Autóctonos de Aldeas.

Se imparte la enseñanza con arreglo a distintas ordenanzas, incluso la Ordenanza de 1952 sobre Instrucción Pública del Territorio de Papua y Nueva Guinea aprobada ya, pero que no ha sido puesta en vigor en su totalidad, aunque algunas de sus disposiciones están en vigencia. Prevé el establecimiento de escuelas por parte del Administrador y autoriza a las Autoridades Indígenas a que hagan lo mismo previa aprobación del Administrador; establece que es obligatorio el registro o reconocimiento oficial para todas las escuelas no dependientes de la Administración y que ésta subvencionará a las misiones u otras instituciones educativas; que se puede declarar obligatoria la asistencia escolar en lugares determinados; que el Director de Enseñanza puede determinar el idioma o idiomas que se han de usar en las escuelas y que se creará una Junta Consultiva de Enseñanza y Comités Distritales de Enseñanza.

Durante el período 1952-1953 el número de escuelas de la Administración aumentó de 69 a 76, y el número de alumnos matriculados de 3.737 a 3.949. Esta cifra total comprendía nueve escuelas para europeos con 326 alumnos, cuatro escuelas para asiáticos con 298 alumnos, dos escuelas de alumnado parcialmente autóctono con 65 alumnos, 52 escuelas primarias para autóctonos con 2.786 alumnos y 10 escuelas primarias superiores, escuelas secundarias y escuelas de formación superior con 484 alumnos. Durante el mismo período, el Departamento de Instrucción Pública gastó un total de 254.416 libras esterlinas, suma que incluye subsidios otorgados a Misiones por valor de 50.474 libras esterlinas.

No existen universidades en el Territorio y la Autoridad Administradora declaró que el único obstáculo que se oponía a la realización de estudios superiores fuera del Territorio era el hecho de que la gran mayoría de la población autóctona no había alcanzado todavía el necesario nivel de instrucción. Empero, se estaba preparando a dos estudiantes para que iniciasen estudios que les permitieran conseguir títulos de estudios de medicina y otros estudiantes asistirían a la Escuela Central de Medicina de las Islas Viti.

En los centros de formación superior preprofesional se dan cursos preparatorios para estudios normalistas

o médicos y se enseñan otras técnicas. Dentro del Territorio hay alumnos que asisten a cursos para prácticos auxiliares en medicina, técnicos en patología y de laboratorio y auxiliares de hospital. En otras partes se está ampliando el campo de la enseñanza para que los estudiantes puedan adquirir la capacidad que necesitan en cargos de competencia especializada tales como prácticos en agronomía, oficiales de patrulla, guardabosques y policías y para conseguir formación profesional suplementaria superior en esas profesiones.

La Autoridad Administradora confía en que aumentará rápidamente el número de los alumnos en la enseñanza secundaria y superior. Se aprovecharán los servicios de las instituciones de Australia y del Territorio. Se ha asignado a Lae un personal que preparará el sitio para la construcción de los edificios destinados a un centro de formación técnica que dará en último término instrucción a los alumnos preaprendices y aprendices. Al comienzo se dará instrucción en materia de carpintería y de mecánica de motores. En el curso del año se continuó la formación profesional teórica y práctica en varios centros del Territorio.

El Consejo, en su 12º período de sesiones, había hecho suya la opinión de la Misión Visitadora de que la ampliación de los servicios de enseñanza debía ser una de las funciones primordiales de la Autoridad Administradora y que ésta debía proseguir la realización de sus planes de mejoramiento general de la enseñanza en todos los planos, y había reafirmado sus recomendaciones anteriores en este mismo sentido. Había vuelto a subrayar el hecho de que, si bien se proporcionaba a estudiantes asiáticos facilidades para recibir enseñanza secundaria general en el Territorio y a hijos de europeos para recibirla en Australia, no se otorgaban tales facilidades a estudiantes autóctonos. Había recomendado que la Autoridad Administradora adoptase las medidas necesarias para que éstos pudieran seguir estudios en instituciones de enseñanza secundaria y de enseñanza superior, entre otras cosas, mediante la concesión de becas; había recomendado además, en relación con las opiniones que había expresado sobre la cuestión de la formación profesional del personal médico autóctono, que al revisar los programas de enseñanza, la Autoridad Administradora tuviese en cuenta la conveniencia de garantizar que dichos programas facilitaran la selección e instrucción fundamental adecuada de candidatos para la formación profesional en medicina y en otras especialidades.

La Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14º período de sesiones, que en términos generales, la gran mayoría de la población autóctona no había alcanzado todavía un nivel que le permitiera comprender plenamente los valores de la civilización europea. Introducir la enseñanza secundaria en gran escala significaría establecer una jerarquía errónea en las necesidades del Territorio en materia de enseñanza. En la etapa de desarrollo en que se encontraba la población se consideraba que la labor más útil consistía en aumentar el número de escuelas primarias en las aldeas. Sin embargo la Autoridad Administradora había adoptado las medidas necesarias para que se proporcionara enseñanza y subsistencia gratuita a estudiantes autóctonos en las escuelas normales y establecimientos similares del Territorio y a los estudiantes debidamente calificados se les daba la oportunidad de seguir un curso de formación en medicina en la Escuela de Medicina Central de Suva Viti. Se habían tomado también disposiciones para que estudiantes seleccionados recibieran enseñanza superior en Australia.

En su 14° período de sesiones el Consejo aprobó la conclusión y recomendación siguientes:

El Consejo considera que la eliminación del analfabetismo es un problema fundamental en el Territorio y atribuye gran importancia a la elaboración de planes a largo plazo encaminados al progreso educativo de la población autóctona. Observa que la Autoridad Administradora opina que, por el momento, se debe atribuir la importancia primordial al aumento del número de escuelas primarias y de escuelas normales, después de lo cual debe venir el desarrollo de la enseñanza secundaria y superior. Ve con beneplácito las medidas que se están tomando para asegurar un curso rápido de formación profesional de maestros autóctonos y la reciente asignación de becas para que estudiantes autóctonos sigan cursos en Australia. El Consejo recuerda sus recomendaciones anteriores relativas a la necesidad de una mejora general de la enseñanza en todos los planos y, confía en que se asignarán los créditos adecuados para garantizar la ejecución más rápida posible de los planes de la Autoridad Administradora en materia de enseñanza.

IDIOMA DE ENSEÑANZA

Al hablar del plan de enseñanza primaria, el informe anual declara que uno de los fines principales es la enseñanza del inglés. En las escuelas vernáculas de aldea, regentadas generalmente por misiones, aunque el fin general sea de enseñar al pueblo a leer y escribir en su propia lengua, durante los tres primeros años se practica un curso de conversación preparatorio a la enseñanza sistemática del inglés, dejando para el cuarto año la lectura y escritura en este mismo idioma. En los cuatro años siguientes, el idioma inglés es el vehículo de la enseñanza en las escuelas de aldea del segundo ciclo primario, aunque algunas de ellas usan el idioma vernáculo. En tales casos, se enseña el inglés como asignatura independiente durante los cuatro años. Las escuelas centrales, consideradas como elementales superiores, que dedican un estudio más intensivo al inglés, tienen un número limitado de estudiantes por ser de un nivel superior a las escuelas primarias.

La enseñanza secundaria y superior se harán accesibles a todos los estudiantes que demuestren condiciones para ascender a niveles más altos, pero sólo podrán aprovechar de esta ventaja los que tengan una sólida educación primaria y un buen conocimiento de la lengua inglesa.

Según el informe anual, entre 1952 y 1953 se inauguró un programa de investigación sistemática de las lenguas autóctonas y su empleo en la enseñanza. Se está coleccionando e incorporando dentro del índice general y del mapa lingüístico de Nueva Guinea, una información detallada preparada a comienzos de año por el funcionario lingüístico, sobre la región que abarcan los idiomas del Territorio, y sobre el número de quienes los hablan a la cual va unido un cálculo sobre la inteligibilidad de esos idiomas para aquellos que hablan las lenguas de regiones adyacentes. Esto complementará el material acumulado en previas investigaciones lingüísticas. El valor principal que tiene un trabajo semejante para la Administración consiste en que proporciona una base para la determinación de idiomas locales o regionales y la adopción de una ortografía uniforme que los rijan.

El Consejo, en su 12° período de sesiones, observando que la Autoridad Administradora había decidido que el inglés debía ser el vehículo consagrado para impartir

la enseñanza y el idioma de todos los habitantes del Territorio, y observando asimismo, por el informe de la Misión Visitadora, la amplitud con que se utilizaba el melanesio bastardo, tanto en los niveles inferiores de la enseñanza como entre los funcionarios administrativos, en las relaciones de éstos con la población autóctona, había hecho suya la opinión de la Misión de que el melanesio bastardo no sólo no era adecuado como medio de instrucción, sino que poseía ciertas características, derivadas de las circunstancias de su origen, que reflejaban conceptos ya superados sobre las relaciones entre los habitantes autóctonos y grupos inmigrantes. Había recomendado que la Autoridad Administradora tomase medidas enérgicas para arrancar de raíz al melanesio bastardo de toda la enseñanza impartida en el Territorio; que formulase a la mayor brevedad, planes para eliminar a aquél totalmente de éste y que prohibiera oficial e inmediatamente su empleo en las regiones donde la población todavía no estuviera familiarizada con el melanesio bastardo.

El Consejo había observado también que se hallaba en preparación un mapa lingüístico del Territorio, y que se habían iniciado los trabajos para estudiar qué idiomas se prestaban mejor para la enseñanza en idioma vernáculo en diferentes regiones. Había observado el interés expresado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en este proyecto, y había pedido a la Autoridad Administradora que lo mantuviera al corriente de los progresos y los resultados de este plan y que considerara la conveniencia de procurar la colaboración de la UNESCO para completarlo.

En su 14° período de sesiones, la Autoridad Administradora informó al Consejo de que existía en todo el Territorio un problema especial originado por la complejidad y multiplicidad de las lenguas vernáculas que a menudo sólo eran usadas por pequeños núcleos de población. El inglés melanesio bastardo, se usó por lo tanto durante muchos años, como lengua franca en Nueva Guinea. La Administración estaba esforzándose por reemplazarlo, pero sería un largo proceso cambiar las costumbres del pueblo. Por razones de principio no se enseñaba esta lengua franca en las escuelas. Empero, se estaba usando en algunos sistemas educativos con el fin de vencer dificultades lingüísticas que de otro modo serían insuperables. La norma establecida de la Autoridad Administradora era enseñar a los alumnos autóctonos, en el menor tiempo posible, a leer y escribir en inglés y a hablarlo fluidamente. La Autoridad Administradora declaró que no se había terminado aún el trabajo sobre investigación de idiomas y mapa lingüístico.

En su 14° período de sesiones el Consejo aprobó la conclusión siguiente:

El Consejo aprueba el propósito de la Administración de eliminar de las escuelas el melanesio bastardo como vehículo de enseñanza y su norma de enseñar a los alumnos autóctonos, en el menor tiempo posible, a leer y escribir en inglés y a hablarlo fluidamente.

MAESTROS Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS

Entre 1952 y 1953 el personal docente de las escuelas de la Administración aumentó de 200 a 208 personas: 50 europeos, 150 autóctonos, 7 asiáticos y 1 de origen mixto.

Los maestros autóctonos de las escuelas de la Administración reciben formación profesional en dos centros de enseñanza. Doce de ellos se graduaron en el centro

de Kerevat en 1952. En 1953 no habrá graduados de ninguna de las dos instituciones mencionadas debido a una reciente prolongación de la duración del curso escolar general, pero se cree que el mejoramiento en calidad que resultará de ello, será preferible por ahora al aumento en número. Los practicantes de magisterio autóctonos ingresan en ambos centros hasta el límite de su capacidad. Se planea la creación de nuevas escuelas normales y se espera que algunas ya habrán iniciado sus cursos a comienzos del año lectivo de 1955.

En ambos centros existe una escuela central o elemental superior, a la cual sigue un curso de formación que es en parte académico y en parte profesional. Los estudios académicos tienen por fin completar la instrucción general y proporcionar un conocimiento sólido de las materias que el profesor tendrá que enseñar. Los estudios profesionales se relacionan con la técnica pedagógica, administración e higiene escolar, psicología infantil y fines y métodos de la enseñanza. El 30 de junio de 1953, los dos centros contaban con 15 estudiantes matriculados en escuelas secundarias, 185 en escuelas centrales y 69 en escuelas de aldea del segundo ciclo primario de aldea.

El Consejo, en su 12º período de sesiones, había reafirmado sus recomendaciones anteriores en favor de la ampliación de los servicios y facilidades para la formación profesional de maestros, y había hecho suya la opinión expresada por la Misión Visitadora sobre este particular. Había señalado particularmente a la atención de la Autoridad Administradora el hecho de que el reemplazo del melanesio bastardo por el inglés correcto y la elevación consiguiente del nivel general de enseñanza dependían en gran medida de la iniciación de un programa intensivo de formación profesional de maestros competentes en el empleo del inglés correcto.

La Autoridad Administradora declaró que se habían reorganizado en 1952 los centros docentes de Dregerhafen y Kerevat, contando cada uno con una escuela elemental superior y una institución de formación superior para la formación de maestros; se habían hecho más rigurosos los requisitos de ingreso y se habían prolongado los cursos de enseñanza normal a fin de ampliar los conocimientos de los maestros autóctonos. El idioma inglés fué el vehículo de enseñanza en ambas escuelas.

ESCUELAS MISIONALES

La Administración mantiene su enlace con las misiones mediante conferencias, inspecciones, visitas y planes de estudios formulados por el Departamento de Instrucción Pública, con el fin de garantizar la uniformidad de las normas de enseñanza. La Administración colabora también en la obra educativa de las organizaciones misionales mediante la concesión de equipo escolar básico y de subsidios. Entre 1952 y 1953 estos últimos ascendieron a un total de 50.474 libras esterlinas.

En el año que se está examinando, el número de escuelas misionales fué de 2.643 con una matrícula de 85.506 alumnos, lo cual indica un aumento de 83 escuelas y una baja de 7.883 alumnos.

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó las siguientes recomendaciones:

El Consejo, tomando nota del grado apreciable en que se complementan ya mutuamente dentro del Territorio la obra educativa de las Misiones y de la Administración, propone que la Autoridad Administradora estudie la posibilidad de suministrar a las Misiones, con arreglo a las condiciones prescritas, una mayor ayuda

financiera y otros medios adecuados de asistencia, como una manera de seguir cooperando al progreso educativo de la población autóctona.

El Consejo recomienda que la Autoridad Administradora siga estimulando y fomentando la asignación de todas las becas posibles para estudios dentro del Territorio o en el extranjero.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a títulos personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de los Estados Unidos de América declaró que su delegación estimaba que los acertados fundamentos que el Gobierno de Australia estaba preparando para el porvenir del pueblo de Nueva Guinea podían consolidarse mediante el desarrollo de planes a largo plazo encaminados al progreso educativo del Territorio.

El representante de China manifestó que la considerable disminución de los gastos de enseñanza era un factor de atraso y que compartía la preocupación de la Autoridad Administradora en lo relativo a la enseñanza normal. Sin embargo, tomaba conocimiento con satisfacción de que en el curso del año se habían asignado seis becas a alumnos autóctonos para estudios en el extranjero y confiaba en que se aumentase considerablemente el número de tales becas.

El representante del Reino Unido celebró la creación del sistema de becas para estudiantes del Territorio en Fideicomiso.

El representante de El Salvador manifestó que la Autoridad Administradora debiera dedicar mayor atención al fomento de la enseñanza superior y expresó también la confianza de que se aumentaría el número de escuelas oficiales en el Territorio.

El representante de Siria observó que había una diversidad de establecimientos escolares en el Territorio, algunos para europeos, otros para asiáticos y otros para la población autóctona. Esto le parecía indicar una injustificada discriminación. Consideró además que el programa escolar no se adaptaba a las necesidades de la población autóctona y declaró que, al parecer, la Autoridad Administradora consideraba que la población autóctona se encontraba en tal estado de atraso que era necesario suministrarle enseñanza en pequeñas dosis.

El representante de la India hizo notar que la baja en la matrícula escolar durante el año se atribuía a un mejoramiento en la calidad. Sin embargo, el descenso era de unos 7.000 alumnos y esto no daba margen a felicitaciones ni halagüeñas esperanzas. Observó además que la mayor parte de los maestros autóctonos carecían de formación profesional y que existía un estricto mínimo de instituciones destinadas a la formación profesional de maestros. Los dos centros oficiales existentes aseguraban unos 12 graduados por año, mientras que en 1929 el Director de Enseñanza de Queensland, había recomendado un sistema de formación profesional que aseguraría 20 profesores por año. En lo relativo a los gastos de enseñanza, hizo notar que en esta partida se incluía el dinero empleado en mandar a los hijos de los funcionarios oficiales para que recibieran enseñanza secundaria en Australia. Así se presentaba un cuadro engañoso de la cantidad de dinero invertida en el Territorio; y además el costo de tal enseñanza debiera ser sufragado por el país metropolitano

más bien que por Nueva Guinea. Desde su tercer período de sesiones, el Consejo había aprobado resoluciones relativas a la insuficiencia de los servicios docentes del Territorio, pero hasta ahora no se había notado ningún progreso en esa materia. Merecía también críticas la segregación de alumnos europeos, asiáticos y autóctonos y los hechos no mostraban que fuesen válidas las razones aducidas para justificar la segregación.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la situación de la enseñanza era absolutamente insatisfactoria. Después de 30 años de administración australiana, el pueblo de Nueva Guinea seguía siendo casi completamente analfabeto. Durante el año que se estaba examinando, los gastos de la enseñanza se habían reducido en más de 10.000 libras esterlinas, pero al mismo tiempo, habían aumentado los gastos de enseñanza para los europeos. Nada se hacía, además, para proporcionar formación profesional a un número suficiente de maestros autóctonos. Consideraba que la Autoridad Administradora debía aumentar considerablemente las consignaciones presupuestarias para enseñanza, tomar las disposiciones necesarias para suministrar enseñanza primaria a toda la población del Territorio y poner al alcance de los habitantes autóctonos la enseñanza secundaria y superior.

El representante de la Autoridad Administradora señaló que el número de escuelas misionales, que estaban subvencionadas por el Gobierno, había aumentado en 83 entre 1952 y 1953 y que el número de escuelas oficiales para hijos de padres no europeos había aumentado de 60 a 67 durante el mismo período.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la Administración estaba tratando de desarrollar la enseñanza lo más rápidamente posible pero consideraba esencial que, por el momento, se echasen sólidos fundamentos y se empleasen las energías en el aumento de escuelas primarias y en instituciones destinadas a la formación profesional de maestros. El desarrollo de la enseñanza secundaria y superior vendría cuando los niños autóctonos terminasen con éxito la enseñanza primaria. La asignación reciente de becas para que determinados alumnos autóctonos estudiaran en Australia era una etapa importante dentro del progreso educativo del Territorio. Declaró además que la Autoridad Administradora se daba cuenta de la necesidad de intensificar la formación profesional de maestros y se estaban tomando disposiciones para asegurar un curso rápido de formación profesional de maestros autóctonos. Señaló que aunque la Autoridad Administradora compartía el deseo de ver realizado el mayor progreso posible de la enseñanza, el mero hecho de disponer de fondos no bastaba por sí mismo para lograr tal progreso. En cuanto a la segregación de alumnos autóctonos, recaló que por el momento las diferencias

de idioma, de actuación escolar y de aptitudes para la enseñanza habían hecho necesaria la conservación de escuelas separadas. Manifestó también que las normas de enseñanza previstas en todas las escuelas eran las mismas, aunque se consideraba necesario comenzar en una etapa inferior cuando se trataba de la población autóctona.

IDIOMA DE ENSEÑANZA

El representante de Nueva Zelandia manifestó que la Autoridad Administradora debiera dedicar cuidadosa atención al problema del idioma de la enseñanza en las escuelas. A este propósito, se complacía en observar que la Junta Consultiva de Enseñanza había decidido aprobar un período de ocho años de instrucción primaria con el idioma inglés como vehículo de enseñanza a partir del tercer año. Había ventajas evidentes en que se adoptase el inglés en una etapa inicial de la enseñanza por cuanto el conocimiento del idioma inglés sería factor importante en el desarrollo futuro de una conciencia territorial. Además, no era posible que la Administración adoptase un idioma vernáculo especial para que se usase en todo el Territorio.

ESCUELAS MISIONALES

El representante de Bélgica recaló el papel importante desempeñado por las misiones religiosas en el progreso educativo y especialmente en la educación de las niñas, como lo probaba el hecho de que el 39% de los alumnos de las escuelas misionales de aldea fueran niñas, comparado con el 11% de las escuelas oficiales. Opinó que la Administración podría estudiar, con arreglo a las condiciones prescritas, la posibilidad de aumentar los subsidios asignados a las misiones para fines educativos. Parecía que las escuelas oficiales costaban 30 veces más que las escuelas misionales. Aunque era verdad que las escuelas misionales eran en algunos casos muy primitivas, podrían mejorarse si la Administración conseguía de las misiones la garantía de que harían todo lo posible por perfeccionar la calidad de la enseñanza en caso de que la Administración diese más ayuda financiera y ayudase en la construcción de edificios escolares apropiados.

El representante de Francia consideró que el trabajo realizado por las misiones religiosas en Nueva Guinea era muy digno de encomio y que la Administración podría ayudarlas a lograr mayores resultados. Consideraba, empero, que aun en la enseñanza primaria debería existir un cierto número de escuelas regidas directamente por la Administración.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que estaba seguro de que su Gobierno dedicaría el más serio estudio a la propuesta de que la Autoridad Administradora estudiase la posibilidad de suministrar mayor ayuda financiera a las misiones religiosas.

Capítulo X

NAURU

I. INFORMACION GENERAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

Nauru es una isla de forma ovalada situada en el Pacífico central, cerca del ecuador, que tiene una superficie de 5.263 acres. Una franja costera baja que varía de 150 a 300 yardas de ancho rodea una meseta de formación coralina que se eleva en algunos lugares hasta una altura de 200 pies. Se explotan grandes yacimientos de fosfato en la meseta, que dejan un terreno áspero compuesto de montículos de coral que varían de 30 a 50 pies de altura.

La población nauruana, que era de 1.745 personas el 30 de junio de 1953, vive en la franja costera y alrededor de una pequeña laguna en la meseta. En esta cifra no figuran los habitantes no indígenas, entre los cuales se encuentran 270 europeos, 515 chinos y 874 personas procedentes de las Islas del Pacífico.

FUTURO DE LA COMUNIDAD NAURUANA

El futuro de los nauruanos está directamente relacionado con el fosfato que parece ser el único recurso importante con que cuenta su isla. Tanto el Consejo de Administración Fiduciaria como la Autoridad Administradora no han perdido de vista la necesidad de asegurar el bienestar de los nauruanos una vez que se agoten los yacimientos de fosfato, y ese problema ha sido ya motivo de preocupación para el Consejo y sus Misiones Visitadoras de 1950 y 1953. La Misión de 1953 consideró que era dudoso que los nauruanos pudieran seguir viviendo en la isla después de que desapareciera la industria del fosfato y no veía otra alternativa que el reasentamiento de la población en otra región. Manifestó que la repercusión social del traslado podría disminuirse si se trasladaba gradualmente a los individuos, grupos o a la comunidad en conjunto. El traslado no debería diferirse hasta que cesase de funcionar la industria del fosfato, sino que debía prepararse lo antes posible un plan de reasentamiento gradual que previera la compra de tierras en fecha próxima. La Misión consideraba que en parte los responsables del traslado debían ser los Comisionados Británicos del Fosfato, y manifestaba que éstos debían proporcionar a los nauruanos toda la ayuda posible y los medios necesarios para que pudieran trasladarse satisfactoriamente. Como el Community Long-Term Investment Fund podría no ser suficiente para este propósito, la Misión consideró que se debía estudiar lo antes posible el establecimiento de un fondo de capital para poner en práctica un plan de reasentamiento gradual.

En su 12º período de sesiones el Consejo, tomando nota de que la opinión de la Misión Visitadora sobre la necesidad del reasentamiento de la población de Nauru coincidía en general con la de la Autoridad

Administradora y habiendo observado los esfuerzos realizados por esta última para aumentar los medios de formación profesional para la nueva generación nauruana, y el hecho de estar examinando la cuestión de los fondos para el reasentamiento de los nauruanos, ya sea individualmente o en grupos, recomendaba que la Autoridad Administradora formulase planes, consultando al pueblo nauruano, sobre el reasentamiento y que además examinase las maneras y medios de subsistencia que pudieran aprovechar los nauruanos que desearan permanecer en el Territorio. Recomendaba además que la Autoridad Administradora estudiase la opinión de la Misión Visitadora sobre el establecimiento de un fondo de capital destinado al reasentamiento.

La Autoridad Administradora contestó que estaba examinando las disposiciones más adecuadas que se podrían adoptar para el reasentamiento gradual y progresivo de la población nauruana, y que se estaban estudiando los diversos aspectos del problema con los nauruanos cuyos deseos y propuestas se tomarían en cuenta al formularse cualquier plan para su futuro asentamiento. Se proporcionaría al Consejo de Administración Fiduciaria mayor información a medida que se desarrollaran dichos planes. La cantidad en poder de la Nauruan Community Long-Term Investment Fund aumentó en el curso del año que se examina de 55.042 libras a 80.960 libras.

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó la recomendación siguiente:

El Consejo recuerda sus recomendaciones anteriores en las que pedía a la Autoridad Administradora que estudiase el problema que se presentará al terminarse la explotación del fosfato y que examinase con los nauruanos todas las posibles maneras y medios para resolverlo; toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que está estudiando el problema con el propósito de formular un plan para el reasentamiento progresivo de los nauruanos y pide a la Autoridad Administradora que incluya en su próximo informe anual los resultados de dicho estudio.

PROGRESO HACIA LA AUTONOMÍA O LA INDEPENDENCIA

En sus resoluciones 558 (VI) y 752 (VIII), la Asamblea General invitó a las Autoridades Administradoras a que en sus informes anuales incluyeran, entre otros datos, los relativos a las medidas ya adoptadas o que se proyectara adoptar para conducir a los territorios en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia, y un cálculo aproximado del tiempo necesario para hacer efectivas las diversas medidas encaminadas hacia ese objetivo. Además, se pedía al Consejo se sirviera incluir en sus informes a la Asamblea General una sección separada que tratara del cumplimiento de dichas resoluciones.

Esta cuestión se trata en la Parte III del presente informe.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante del Reino Unido manifestó el agrado de su delegación al saber que una delegación nauruana había asistido a la segunda Conferencia del Pacífico Sur.

El representante de Siria consideró que se notaba una falta absoluta de progreso en Nauru, cosa sorprendente puesto que muchas dificultades que se presentaban en otros territorios no existían en esa isla. Además Nauru era el más rico de los territorios en fideicomiso, ya que la tierra propiedad de los 1.700 nauruanos, aunque pequeña en superficie, contenía unos 90.000.000 de toneladas de fosfato.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que el examen hecho por el Consejo de las condiciones existentes en el Territorio en fideicomiso de Nauru había demostrado en este período de sesiones, como en los períodos anteriores, que la Autoridad Administradora no estaba cumpliendo las obligaciones que había contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del Acuerdo de Administración Fiduciaria. La Autoridad Administradora no se preocupaba, en violación de la Carta, del adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes indígenas y del desarrollo progresivo de ese Territorio hacia el gobierno propio y la independencia. La política y las actividades de la Autoridad Administradora en el Territorio demostraban que no tenía el propósito de guiar a los habitantes indígenas hacia la independencia y el gobierno propio. La Autoridad Administradora sólo estaba interesada en Nauru mientras hubiera la posibilidad de explotar el único recurso nacional del Territorio, es decir, los yacimientos de fosfato.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que su delegación se daba perfecta cuenta de los diversos problemas con que se enfrentaban la Administración para el adelanto y la protección del pueblo de Nauru, y estaba dispuesta y deseosa de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que se logaran los objetivos del régimen de administración fiduciaria.

Añadió que en cualquier debate sobre el Territorio no se deberían perder de vista dos factores: en primer lugar, su pequeña superficie y su reducida población indígena, y, en segundo lugar, que se debía y se podía prestar a los nauruanos muchos servicios que no era factible suministrar a otras comunidades que se encontraban en condiciones diferentes. La prosperidad económica de los nauruanos dependía exclusivamente de la explotación de los valiosos yacimientos de fosfato que se encontraban en la isla. Estaba seguro de que el Consejo sabría apreciar en su justo valor las importantes contribuciones hechas por los Comisionados Británicos del Fosfato al pueblo de Nauru.

Además, el representante especial rechazó la sugerencia, hecha por el representante de la URSS, de que existiera alguna inmensa conspiración entre la Administración y los Comisionados Británicos del Fosfato para sacrificar al pueblo nauruano en aras de la explotación desmedida de los yacimientos de fosfato.

FUTURO DE LA COMUNIDAD NAURUANA

El representante de Bélgica manifestó que hacía algunos años que su delegación había sugerido la adquisición de una zona de tierra cultivable en una región

sana y adecuada y que, si ese proyecto se aplazaba podría ocurrir más tarde que no se encontraran tierras disponibles. Si se adquiriera y preparara la tierra actualmente, no sería preciso obligar a los nauruanos a que se trasladasen inmediatamente, pero sería una garantía para su futuro y además el ver una zona establecida y productiva sería un aliciente para los nauruanos cuando llegase el momento de trasladarse a sus nuevos hogares.

El representante del Reino Unido observó que, a pesar de que Nauru es una isla pequeña con una población reducida, no deja de presentar, sin embargo, un problema especial y sumamente difícil. Existía la posibilidad de que la independencia pudiera significar para los nauruanos algo distinto de lo que significaba en otros territorios donde se concentraban los esfuerzos para crear un sentido de nacionalidad entre pueblos que permanecerían en sus territorios. En cambio, en Nauru, era posible que antes o después de que terminase el período de administración fiduciaria, la población tuviera que dejar la isla, individualmente o por grupos. Su delegación confiaba en que la Autoridad Administradora encontraría medios y maneras para explicar detalladamente este problema a la generación actual consultando con ella sobre el futuro. La presente generación trasmitiría la explicación a la próxima generación que al parecer sería la que sufriría las consecuencias cuando comenzaran a agotarse los yacimientos de fosfato. Elogió las medidas adoptadas por la Administración para realizar un estudio de los recursos agrícolas de la isla y su intención de dar instrucción agrícola a los habitantes, de manera que si los miembros de la comunidad tuvieran que abandonar Nauru, estarían bien preparados para iniciar una nueva vida como agricultores si así lo deseaban.

El representante de los Estados Unidos de América declaró que su delegación no tenía ninguna recomendación concreta que formular con respecto al difícil problema del futuro de los nauruanos, salvo la de instar a la Autoridad Administradora a que continuara con sus planes consultando con los habitantes. Debería realizar un programa intenso de explicación y persuasión para que los nauruanos comprendieran que la preparación anticipada de planes concretos era más bien una medida de previsión que una coacción ejercida sobre ellos para que abandonasen sus hogares en un futuro cercano. Finalmente, esperaba que la Autoridad Administradora seguiría estudiando la opinión de la Misión Visitadora con respecto al establecimiento de un fondo de capital para reasentamiento.

El representante de China señaló que el futuro de la comunidad nauruana, después de haberse agotado los yacimientos de fosfato, era sin duda alguna el problema más importante que tanto la Autoridad Administradora como los habitantes del Territorio tenían que afrontar. La Administración misma veía el problema con preocupación y evidentemente estaba tomando las medidas necesarias para consultar la opinión de los nauruanos con respecto al establecimiento de planes para el futuro. Observando que aparentemente algunos de los habitantes del Territorio reconocían la urgencia de establecer inmediatamente un plan, añadió que la Administración debería facilitar a la población la orientación necesaria y seguir preparando planes efectivos para un reasentamiento paulatino.

El representante de Francia declaró que el bienestar futuro de los habitantes creaba problemas urgentes que exigían una solución. La Autoridad Administradora que había estudiado detalladamente la materia, podría

examinar la posibilidad de establecer en uno de los territorios que están bajo su dominio una zona reservada en una región más favorable y destinada a los nauruanos, sin esperar el agotamiento de los yacimientos de fosfato. Había tanta más razón para establecer esa zona reservada, cuanto que más tarde bien podrían enajenarse las tierras que no hubieran sido adjudicadas. Observó que si se tomaban en cuenta la rápida evolución de los nauruanos, la capacidad que demostraban para ocupar cargos en la administración y en la industria y su desagrado por trabajar la tierra, la Autoridad Administradora debería estudiar la posibilidad de emplearlos en la administración de Nueva Guinea, donde se podrían utilizar sus servicios.

El representante de Haití pidió a la Autoridad Administradora, en nombre de su delegación, que hiciera todo lo posible para encontrar una nueva región para el asentamiento de los nauruanos, y recomendó, además, que estudiara las posibilidades agrícolas del Territorio. Pidió que en el próximo informe anual figurara toda la información pertinente sobre estas cuestiones.

El representante de la India declaró que su delegación estimaba que cualesquiera que fueran las ventajas de reasentar a los nauruanos en otra región, la aplicación del plan era prematura. Tenía consecuencias que deberían ser cuidadosamente examinadas por las Naciones Unidas y cualquier orientación que se siguiera en ese sentido debería tomar muy en cuenta todas esas consecuencias. Un traslado de población a otras regiones estaba en completa contradicción con las disposiciones de la Carta. El adelanto de los habitantes no se podría promover si dejaran de ser habitantes del territorio en fideicomiso y, por tanto, era imposible trasladarlos o hacer que dejaran de ser nauruanos. Si los absorbiera otra comunidad, no podrían tener gobierno propio. Declaró en conclusión que parecía haberse presentado la oportunidad de estudiar en forma muy detallada y ordenarla la cuestión de la rehabilitación de Nauru. Habría que estudiar la posibilidad de rellenar los pozos creados por la extracción del fosfato, con tierra transportada como lastre en los barcos fosfateros que llegan a Nauru.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que lo que debía considerarse como la cuestión más importante en el curso del debate, era el futuro del pueblo nauruano. Señaló que sería muy humano que los nauruanos dependieran y confiaran demasiado en la Administración y en los Comisionados Británicos del Fosfato. Ese factor psicológico había sido una de las razones que impulsaron a la Autoridad Administradora a no escatimar esfuerzo alguno para preparar profesionalmente a los nauruanos en ocupaciones útiles y a preocuparse por que esas personas tuvieran otros medios de subsistencia cuando ya no pudieran contar con las regalías y otros beneficios derivados de la industria del fosfato para su sustento y desarrollo. La Autoridad Administradora no pensaba aplazar el examen de esta importante cuestión, pero estaba estudiando cuidadosamente el problema a fin de preparar un plan objetivo y realizable para el reasentamiento progresivo de la población, que se ajustara tanto a sus propias normas como a las formuladas anteriormente por el Consejo de Administración Fiduciaria. El establecimiento de cualquier plan tiene que hacerse con el mayor cuidado y prudencia y debe contar también con el completo apoyo y colaboración de los nauruanos. La Autoridad Administradora no había descuidado la posibilidad de que pudieran existir otras fuentes de des-

arrollo económico, y las medidas ya tomadas, tales como la iniciación de un estudio sobre la utilización de la tierra con fines agrícolas demostraban que se estaban realizando todas las investigaciones posibles. Sin embargo, la posibilidad de devolver la fertilidad a la tierra de la que se había extraído el fosfato parecía muy remota.

II. PROGRESO POLITICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

Los Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido están designados como autoridad conjunta para la administración del Territorio. En virtud de acuerdos concluidos entre esos Gobiernos, Australia ejerce plenos poderes administrativos, ejecutivos y judiciales en y sobre el Territorio. La administración está a cargo de un Administrador que tiene autoridad para dictar ordenanzas para la paz, el orden y el buen gobierno del Territorio. Esas ordenanzas están sujetas a la confirmación o a la desaprobación de la Autoridad Administradora. El Administrador cuenta con la ayuda de servicios públicos en los que trabajan 16 europeos, 288 nauruanos, 30 chinos y 18 habitantes de las islas Gilbert y Ellice.

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO DE NAURU

El Consejo Local de Gobierno de Nauru está compuesto de nueve miembros elegidos por sufragio universal. El Consejo elige a uno de sus miembros como Jefe Superior que preside todas las reuniones en las que está presente, salvo aquellas que se celebran por lo menos una vez al mes con el Administrador, quien ejerce la presidencia. Tiene autoridad para adquirir, poseer y disponer de bienes reales y personales, de formalizar contratos, de iniciar y defender acciones judiciales y de efectuar todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus poderes y funciones. Puede asesorar al Administrador sobre cualquier asunto que afecte a los nauruanos inclusive en la preparación de nuevas ordenanzas o reglamentos y en la derogación o enmienda de los existentes. Las obligaciones generales del Consejo, del Jefe Superior y de los Consejeros son:

a) Desempeñar las funciones y cumplir las obligaciones que le imponen la Ordenanza del Consejo Local de Gobierno de Nauru o cualquier otra ley de Nauru;

b) Mantener en general la paz, el orden y el buen gobierno entre los nauruanos en cumplimiento de las leyes de Nauru;

c) Intervenir con el propósito de evitar que cualquier nauruano sobre el cual tiene jurisdicción cometa algún delito contra una ley de Nauru.

Puede, pendiente de las leyes de Nauru y de la aprobación del Administrador:

a) Organizar, financiar o emprender cualquier negocio o empresa;

b) Realizar cualquier trabajo que redunde en beneficio de los nauruanos, ya sea en general o en un distrito o distritos determinados; y

c) Facilitar o cooperar con la Administración de Nauru u otro organismo en el establecimiento de cualquier servicio público o social.

Puede, con la aprobación del Administrador, establecer normas sobre ciertas cuestiones concretas y, en general, sobre la paz, el orden y el bienestar de los nauruanos.

Puede también, con la aprobación del Administrador, cobrar honorarios o recibir retribución por servicios prestados, por él o por sus empleados. Todas las sumas que se reciben ingresan al fondo del Consejo. Debe someter anualmente al Administrador, para su aprobación, un cálculo aproximado de sus ingresos y gastos y no puede incurrir en más gastos que los previstos en el presupuesto o los que posteriormente aprobare el Administrador. Cuando los ingresos del Consejo no basten para atender a los gastos aprobados, el déficit se paga con fondos del Nauru Royalty Trust Fund. La Administración hace pagos trimestrales para salarios y otros gastos, inclusive para los sueldos de los miembros del Nauru Land Committee y de los alguaciles de distrito.

La Misión Visitadora observó en 1953 que el Consejo Local de Gobierno de Nauru no desempeñaba funciones adicionales a las que se le habían transferido del Consejo de Jefes precedente y seguía siendo un organismo asesor. Comprobó que entre los nauruanos existía cierto descontento con respecto a varias cláusulas de la ordenanza relativa a la participación del Consejo en la administración y, especialmente, en relación con el financiamiento de las actividades del Consejo.

El representante de la Autoridad Administradora había declarado en el 12° período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria que su Gobierno no podía aceptar las conclusiones de la Misión Visitadora, según las cuales el Consejo Local de Gobierno no desempeñaba funciones adicionales a las que se le habían transferido del Consejo de Jefes precedente, y que seguía siendo un cuerpo asesor. A este respecto había señalado a la atención las secciones 41 a 45 de la ordenanza y había subrayado que el hecho de que existiera descontento con respecto a varias cláusulas de la ordenanza no probaba que éstas fueran inadecuadas o defectuosas.

En su 12° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, observando que la Misión Visitadora expresaba la opinión de que la ordenanza en virtud de la cual se estableció el Consejo Local de Gobierno de Nauru no satisfacía plenamente a las personas directamente interesadas y que debería considerarse nuevamente la cuestión de su revisión para eliminar todos los posibles malentendidos que pudieran existir, y tomando nota de la declaración de la Autoridad Administradora relativa a que los nauruanos no comprendían aún bien la ordenanza, aunque se estaban adoptando medidas para prestar mayor asistencia y servicios de asesoramiento para ayudar al Consejo Local de Gobierno a comprender y ejercer sus poderes y funciones, había hecho suya la opinión de la Misión Visitadora en ese caso y esperaba que la Autoridad Administradora consideraría nuevamente esta cuestión.

En el informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora manifestó que se habían examinado las disposiciones de la ordenanza de 1951 relativa al Consejo Local de Gobierno de Nauru, y que se las encontraba adecuadas para su propósito, conteniendo disposiciones para que el Consejo de Gobierno asumiera mayor responsabilidad a medida que los nauruanos estuvieran mejor preparados para aceptarlas. Todos los malentendidos que habían ocurrido se debían a la falta de capacidad de los nauruanos para

comprender y ejercer los poderes y funciones previstos en la ordenanza. La Administración proporcionaba asistencia y servicios de asesoramiento para ayudar al Consejo a que comprendiera y ejerciera mejor sus poderes y funciones, y prestaría la debida atención para orientar a los nauruanos hacia la etapa en que estarán capacitados para asumir mayor responsabilidad en sus asuntos propios como lo preveía la ordenanza.

En su 14° período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando sus recomendaciones anteriores relativas a los poderes del Consejo Local de Gobierno de Nauru, y tomando nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que prestará atención para orientar a los nauruanos hacia la etapa en que estarán capacitados para asumir mayores responsabilidades en sus asuntos propios, tal como lo prevé la ordenanza en la que se establece el Consejo, expresa la esperanza de que el Consejo Local de Gobierno de Nauru hará todo lo posible por comprender y ejercer plenamente sus presentes poderes, e insta a la Autoridad Administradora para que tome todas las medidas necesarias para lograr este fin lo antes posible.

PARTICIPACIÓN DE LOS NAURUANOS EN LA ADMINISTRACIÓN

El Jefe Superior ocupa el cargo de Funcionario de Asuntos Indígenas y otros nauruanos están empleados como superintendentes de escuelas, médicos indígenas, operadores y técnicos de radio, policías, maestros de escuela, dentistas, auxiliares médicos y ordenanzas; y en el Departamento de Obras Públicas como capataces, electricistas, fontaneros, mecánicos, carpinteros, ajustadores, conductores de niveladoras del terreno y peones. Las mujeres ocupan también diversos puestos como maestras, enfermeras y dactilógrafas pero del total de 353 personas empleadas por la Administración el número de nauruanos sigue siendo casi el mismo que el año anterior y comprende a 270 hombres y 18 mujeres. La Autoridad Administradora informa que ofrece a los nauruanos todas las oportunidades y alicientes posibles a fin de que adquieran experiencia y se preparen para obtener mejores puestos en la Administración y para ello presta ayuda a estudiantes sobresalientes a fin de que continúen sus estudios en Australia y en las Islas Viti. Entre los 36 estudiantes que, en el curso del año que se considera, reciben instrucción en el extranjero se encuentran 15 estudiantes que reciben ayuda del Nauru Royalty Trust Fund, 3 que reciben ayuda de la London Missionary Society y 18 cuyos gastos son cubiertos por sus padres.

El Consejo se había interesado en años anteriores en la preparación de los nauruanos para que ocuparan puestos de mayor importancia en la Administración y en su 12° período de sesiones, después de haber tomado nota de las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora a fin de capacitar a los nauruanos para puestos de mayor importancia en la Administración y de que hasta esa fecha sólo un nauruano ocupaba un puesto de responsabilidad, había hecho suya la opinión de la Misión Visitadora de que la Autoridad Administradora debía intensificar su programa de preparación de funcionarios nauruanos para ocupar cargos de más importancia.

La Autoridad Administradora contestó que tenía por política colocar a los nauruanos en cargos de responsabilidad en cuanto éstos fueran capaces de prestar

servicios razonablemente satisfactorios en dichos puestos. Se habían tomado las disposiciones necesarias para intensificar el programa de capacitación, pero consideraba que tanto dependía de la capacidad latente, iniciativa y energía de los nauruanos como de los medios de preparación a los cuales tenían acceso. El representante especial de la Autoridad Administradora informó además al Consejo, en su 14º período de sesiones, de que recientemente se había nombrado a dos nauruanos para ocupar los cargos de Jefe de Correos y Primer Capataz del Departamento de Obras Públicas de la Administración y que sólo los 16 puestos más importantes para los cuales se requerían condiciones especiales estaban ocupados por europeos. A medida que los programas de capacitación, que prosiguen activamente, proporcionen a los nauruanos mayores conocimientos técnicos que les permitan ocupar cargos de importancia, más de ellos recibirán nombramientos adecuados.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo toma nota con satisfacción de la designación de tres nauruanos para ocupar cargos de importancia en la Administración, así como de las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora para intensificar su programa de capacitación a fin de preparar más nauruanos para que ocupen cargos similares. Insta a la Autoridad Administradora para que prosiga este programa con toda energía y formula la esperanza de que en el programa figurarán disposiciones para que se ofrezca instrucción superior y especializada tanto en materia política como técnica a fin de que los nauruanos puedan prepararse para ocupar cargos de importancia en todas las ramas de la Administración así como en las actividades de la British Phosphate Commission.

RÉGIMEN JUDICIAL

La organización judicial se compone de un Tribunal de Apelaciones, un Tribunal Central con jurisdicción civil y criminal sobre todas las personas y un Tribunal de Distrito que tiene jurisdicción civil y criminal en determinados casos. El Administrador designa al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Central se compone de un juez o de un magistrado y el Tribunal de Distrito de un magistrado. Las designaciones para ambos tribunales son hechas por el Administrador. En el Territorio no existe el sistema de jurados. De las sentencias del Tribunal de Distrito se apela ante el Tribunal Central y luego ante el Tribunal de Apelaciones.

En el curso del año se revisó la ley del Territorio relativa a los castigos corporales, introduciéndose enmiendas a la misma mediante la Criminal Code Amendment Ordinance, 1952, por la cual el castigo corporal quedó abolido para todos los delitos salvo los de carácter sexual y los de estrangulación. Se redujeron también la magnitud y severidad del castigo. La Autoridad Administradora manifestó que apoyaba el principio de la abolición del castigo corporal y que estimaba que las medidas ya adoptadas representaban un paso importante hacia su completa abolición.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota de que los castigos corporales han sido parcialmente abolidos y recordando sus recomendaciones anteriores a este respecto, insta

a la Autoridad Administradora para que suprima por completo esa forma de castigo.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de Siria señaló que ni los nauruanos ni ningún grupo de individuos entre ellos, había recibido la preparación necesaria para asumir una parte importante y cada día mayor de responsabilidad en la dirección de su destino en el mundo moderno y observó, además, que no participaban ni en las funciones ejecutivas ni en las legislativas del Gobierno.

El representante de la India manifestó que todo lo que parecía haber ocurrido desde 1926 era que los 14 distritos habían quedado reducidos a ocho y que el número de miembros del órgano asesor central había disminuido a nueve.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que la estructura política y administrativa del Territorio estaba destinada a satisfacer los fines y propósitos de dominio absoluto de los Comisionados Británicos del Fosfato. El poder político y legislativo estaba en manos del Administrador, los europeos ocupaban todos los cargos de importancia y el Consejo Local de Gobierno de Nauru no era más que un órgano asesor. La Autoridad Administradora debería establecer en el Territorio órganos legislativos y ejecutivos en los cuales participara la población indígena para solucionar sus asuntos propios y debería tomar medidas para asegurar el cambio de la vieja forma tribal de administración a un sistema de gobierno propio basado en principios democráticos.

El representante especial de la Autoridad Administradora rechazó la sugestión hecha por el representante de la URSS en el sentido de que existía una gran conspiración entre la Administración y los Comisionados Británicos del Fosfato para sacrificar a los nauruanos en aras de la explotación despiadada de los yacimientos de fosfato y negó que los Comisionados Británicos del Fosfato ejercieran control alguno sobre la Administración.

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO DE NAURU

El representante del Reino Unido declaró que su delegación se sentía impresionada por la capacidad de los nauruanos de utilizar satisfactoriamente un sistema preferencial de votación para el que se precisa una preparación cívica inteligente.

El representante de China manifestó la esperanza de que la promesa hecha por la Administración de aumentar los poderes del Consejo Local de Gobierno se cumpliría en un futuro no muy lejano.

El representante de El Salvador consideró que, además de sus funciones de asesoramiento, se debería permitir que el Consejo Local de Gobierno interviniera más directamente en la Administración. En cuanto a las disposiciones relativas al Consejo Local de Gobierno, convenía con la Misión Visitadora en que deberían ser revisadas para evitar cualquier posible malentendido que pudiera existir en la actualidad. Además, antes de que se celebraran elecciones, el reglamento debería ser bien explicado al pueblo empleando todos los medios de información posibles para asegurar que en el futuro no se volvieran a presentar situaciones desagradables como la de un candidato cuya candida-

tura tuvo que declararse inadmisibles a pesar de que contaba con gran apoyo popular.

El representante de Siria observó que el Consejo Local de Gobierno de Nauru creado recientemente tenía poderes de asesoramiento, pero que el Administrador no estaba obligado a seguir sus consejos. Ese privilegio de asesoramiento no se podía considerar como un progreso político ya que, antes, el Consejo Nauruano de Jefes había evidentemente formulado opiniones con respecto a medidas administrativas. La Autoridad Administradora había declarado que el Consejo Local de Gobierno de Nauru recibiría más poderes en cuanto estuviera capacitado para ejercerlos. Esto indicaba claramente la falta de progreso político de los nauruanos en general y también de aquellos individuos elegidos para formar parte del Consejo Local de Gobierno.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que el Consejo Local de Gobierno de Nauru no ejercía absolutamente ningún poder y que era simplemente un órgano asesor del Administrador quien, si lo estimaba conveniente, podía hacer caso omiso de su opinión.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que su Gobierno había estudiado si se debía revisar la ordenanza por la que se creó el Consejo Local de Gobierno, pero había considerado que se ajustaba al presente estado de madurez política del pueblo. Tanto el Administrador como sus funcionarios prestaban al Consejo toda la ayuda y asistencia posibles para utilizar todo lo posible los poderes que le confería la ordenanza. Los actuales poderes legislativos del Consejo se aplicaban a la mayoría de los asuntos que interesaban directamente a la comunidad nauruana. Si pareciera conveniente en lo futuro ampliar o aclarar los poderes del Consejo se tomarían las medidas adecuadas. Sin embargo, la ordenanza en vigor parecía satisfactoria por el momento. Declaró que en las futuras elecciones se tomarían todas las medidas posibles para asegurar que los derechos de los candidatos y de los electores fueran plenamente comprendidos y apreciados.

PARTICIPACIÓN DE LOS NAURUANOS EN LA ADMINISTRACIÓN

El representante del Reino Unido formuló la esperanza de que los nauruanos que ocupaban cargos públicos locales se beneficiarían con el programa intensificado de capacitación de la Administración y esperaba que daría resultados provechosos.

El representante de China declaró que el proceso de lo que se podría denominar "nauruización" del servicio administrativo se llevaba a cabo con bastante rapidez y que el aumento de por lo menos dos indígenas en los cargos superiores era particularmente satisfactorio. Sin embargo era preciso aumentar todavía considerablemente el número de esos nauruanos en los cargos superiores y a este respecto la Autoridad Administradora estaba haciendo todo lo posible para lograr dicho fin como lo demostraba el aumento de becarios que cursaban estudios superiores en el extranjero.

El representante de El Salvador manifestó que del informe anual y del informe de la Misión Visitadora se deducía que existían en el Territorio personas que debido a su capacitación y antecedentes podrían desempeñar ciertos cargos de mayor responsabilidad ocupados en la actualidad por europeos. Instó a la Administración a que se ascendiera a los nauruanos que poseían

las condiciones requeridas a puestos de mayor importancia.

El representante de Siria señaló que aunque era cierto que muchos nauruanos estaban empleados en la Administración, hasta la fecha sólo uno ocupaba un cargo de categoría. Estimaba que la Autoridad Administradora debería intensificar su programa para preparar a esos funcionarios nauruanos para que ocuparan esos cargos.

El representante de la India manifestó que en 1952-1953 sólo había un nauruano que ocupaba un cargo de elevada responsabilidad, y que después de 33 años de educación y capacitación obligatorias se había informado al Consejo de Administración Fiduciaria, en relación con nombramientos más recientes, de que los nauruanos a quienes se había confiado esos cargos no habían alcanzado un nivel suficiente de educación y no poseían las condiciones y la experiencia exigidas. Además, el nauruano medio era inteligente pero no había recibido suficiente educación y, por lo tanto, era fácil ver a quién incumbía la responsabilidad de esta situación. Añadió que el problema requería estudio adicional.

El representante especial de la Autoridad Administradora observó que se había dado gran importancia al hecho de que los nauruanos sólo ocupaban tres puestos de importancia en la Administración. Señaló a la atención del Consejo el apéndice 11 de su informe anual en el que se demostraba que de los 352 cargos administrativos sólo los 16 más importantes, para los cuales se exigían condiciones especiales, estaban ocupados por europeos. Sólo cuatro de los cargos ocupados por nauruanos podían clasificarse como puestos que no requerían conocimientos especiales. Declaró que a medida que los programas de capacitación, que estaban actualmente en pleno funcionamiento, proporcionaran a los nauruanos mayores conocimientos técnicos que les permitieran ocupar puestos de responsabilidad, más de ellos recibirían nombramientos adecuados. Subrayó que mucho dependería también de la capacidad de los nauruanos para asimilar lo que se les enseñase y de su buena voluntad y capacidad para asumir responsabilidades adicionales.

RÉGIMEN JUDICIAL

El representante de China declaró que aun incurriendo en una repetición haría un llamamiento más a la Autoridad Administradora para que prestara atención y cumpliera las numerosas resoluciones del Consejo de Administración Fiduciaria y de la Asamblea General relativas a la abolición del castigo corporal.

El representante de Haití formuló la esperanza de que la Autoridad Administradora cumpliría las recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria con respecto a la abolición del castigo corporal.

El representante de El Salvador tomó nota de las reformas relativas al castigo corporal. Manifestó que, sin embargo, ese castigo seguía aplicándose y que su delegación desearía exhortar a la Autoridad Administradora a que aplicara en el Territorio las normas de los pueblos civilizados.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que se seguía aplicando el castigo corporal en el Territorio y que aunque en el informe se indicaba que la Autoridad Administradora favorecía la abolición del castigo, no se había hecho nada para

cumplir las recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria en esa materia.

III. PROGRESO ECONOMICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La economía de Nauru se basa enteramente en la exportación de los fosfatos, siendo ésta la única industria y la única fuente de ingresos. No hay industrias secundarias y, aparte de los fosfatos, no existen otros recursos que pueden ser explotados. El suelo sumamente poroso del Territorio y la irregularidad de las lluvias limitan los cultivos y la explotación de algunos frutos y legumbres para el consumo local en las pocas tierras adecuadas para la agricultura. La pequeña extensión de la isla, la falta de prados y la poca cantidad de agua disponible sólo permiten criar unas cuantas cabezas de ganado. Sin embargo, en las aguas vecinas abunda la pesca y algunos nauruanos se ocupan de pescar lo suficiente para el consumo local.

A fin de fomentar la producción de alimentos, la Administración ha hecho arreglos con la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Organización de Investigaciones Científicas e Industriales del *Commonwealth*): "para realizar un estudio de las tierras cultivables de Nauru y prestar su asesoramiento en particular sobre—

"a) La superficie y ubicación de las tierras adecuadas para la agricultura;

"b) Los sistemas de cultivo o de cría de ganado que podría seguirse a fin de utilizar la tierra de una manera más eficaz, tomando en cuenta el medio ambiente y el plan de reasentamiento de los habitantes de la isla y previendo debidamente la autonomía en materia de alimentación y la explotación con fines comerciales;

"c) Las posibilidades físicas y económicas de rehabilitar las antiguas tierras fosfáticas a fin de adaptarlas para fines agrícolas en el porvenir;

"d) Las recomendaciones sobre posibles investigaciones y experimentos agrícolas".

INDUSTRIA DEL FOSFATO

En virtud de un acuerdo celebrado en 1919, los Gobiernos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia adquirieron, mediante la compra de la Pacific Phosphate Co. Ltd., los derechos, título e intereses en los yacimientos de fosfato de Nauru y la isla Oceánica. El control y la administración de la industria del fosfato en ambas islas han sido confiados a los Comisionados Británicos del Fosfato (British Phosphate Commissioners), junta compuesta de un comisionado nombrado por cada Gobierno asociado.

El acuerdo prevé que el fosfato ha de ser vendido a un precio f.o.b. fijado por los Comisionados para cubrir el costo de explotación y la amortización del precio de compra (3.500.000 libras esterlinas).

Las exportaciones de fosfatos de Nauru en 1952-1953 alcanzaron una cifra de 1.227.103 toneladas, la mayor que se ha registrado hasta la fecha, por valor de 1.994.045 libras esterlinas, en vez de la producción máxima alcanzada el año precedente de 1.061.797 toneladas por valor de 1.725.420 libras esterlinas.

La Autoridad Administradora, a base del rendimiento que espera obtenerse de las tierras fosfáticas no explotadas, calcula que con una producción anual aproximada de 1.000.000 de toneladas la industria del fosfato debería durar de 65 a 70 años más.

En las cuentas correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 1953, los Comisionados Británicos del Fosfato declararon que, además de los envíos de Nauru, fueron exportadas de la isla Oceánica 292.211 toneladas de fosfatos, y que los Comisionados también compraron a la Christmas Island Phosphate Commission (Comisión de los Fosfatos de la Isla de Christmas) y distribuyeron 317.418 toneladas de fosfatos procedentes de dicha isla, lo que constituye un total de 1.519.314 toneladas. Según las cuentas de todas las operaciones, las ventas de fosfatos y los créditos diversos ascienden a 2.713.458 libras esterlinas, de cuya suma debe deducirse el flete y el seguro, etc.

En su 12º período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria recordó que en sus quinto y octavo períodos de sesiones había recomendado a la Autoridad Administradora que le informara con respecto a las actividades financieras de los Comisionados Británicos del Fosfato relacionadas únicamente con Nauru, y los precios efectivamente pagados por el fosfato, comparados con los del mercado mundial, e instó a la Autoridad Administradora a que tratase, de acuerdo con los Comisionados Británicos del Fosfato, de proporcionar dicha información en su próximo informe anual. El Consejo Local de Gobierno planteó esta cuestión a la Misión Visitadora de 1953, señalando que no podía precisar su solicitud de un aumento razonable de la regalía debido a la falta de información sobre la situación financiera de los Comisionados. En el informe anual, objeto de estudio, la Autoridad Administradora declaró que las actividades de los Comisionados en Nauru y la isla Oceánica se desarrollaban como una sola empresa y que no se efectuaron operaciones financieras relacionadas únicamente con Nauru. Señaló que el acuerdo relativo a los fosfatos preveía que este producto fuera destinado a satisfacer las necesidades agrícolas del Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia, y que los fosfatos deberían ser suministrados a un precio f.o.b. fijado por los Comisionados sobre una base que cubriera los gastos de explotación, los gastos de administración, parte de los gastos administrativos, los intereses sobre el capital, la creación de un fondo para la amortización de capital y otros gastos. La industria no era administrada sobre una base comercial a fin de producir fosfatos y obtener utilidades. La Autoridad Administradora consideró que en vista de estas circunstancias toda cuestión relativa a la comparación de los precios estaba fuera de lugar.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó las siguientes recomendaciones:

El Consejo toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que las actividades de los Comisionados Británicos del Fosfato en Nauru y la isla Oceánica se realizan como una sola empresa sin ninguna operación financiera separada respecto de Nauru, y solicita de la Autoridad Administradora, como lo hizo en su 12º período de sesiones, que trate, de acuerdo con los Comisionados Británicos del Fosfato, de proporcionar información en su próximo informe anual sobre las actividades financieras de los Comisionados Británicos del Fosfato relacionadas únicamente con Nauru.

HACIENDA PÚBLICA: REGALÍAS DEL FOSFATO

Salvo una pequeña suma procedente de los derechos de aduana y de algunas otras fuentes, todos los ingresos que constituyen el presupuesto del Territorio proceden de las regalías o de los anticipos hechos por los Comisionados Británicos del Fosfato. Además, los Comisionados pagan determinadas regalías que ingresan en los Trust Funds, redundando en beneficio inmediato o futuro de los nauruanos.

El cuadro siguiente indica las regalías que, por cada tonelada de fosfato exportada, han pagado los Comisionados a la Administración y a los nauruanos, o a cuenta de éstos, durante los dos últimos años:

	1951-1952	1952-1953
<i>Regalías pagadas a la Administración o por su cuenta</i>		
Para sufragar los gastos ordinarios de la Administración	1s.	—
Para amortizar el anticipo destinado a la rehabilitación	9d.	10½d.
Para amortizar el anticipo destinado a la construcción de viviendas para los nauruanos	9d.	9d.
	2s. 6d.	1s. 7½d.
<i>Regalías abonadas a los nauruanos o a cuenta de ellos</i>		
	1951-1952	1952-1953
Al propietario del terreno de donde fué extraída la tonelada de fosfato	6d.	6d.
Al Nauruan Landowners' Royalty Trust Fund, para ser invertidas en beneficio de los propietarios de las tierras	2d.	2d.
Al Nauru Royalty Trust Fund para beneficio de los nauruanos	3d.	3d.
Al Nauruan Community Long-Term Investment Fund	5d.	5d.
	1s. 4d.	2s. 4d.
REGALÍAS, TOTAL	3s. 10d.	2s. 11½d.

Anteriormente la mayor parte de los gastos de la Administración se sufragaban con el producto de la regalía de un chelín pagada por los Comisionados del Fosfato para hacer frente a los gastos ordinarios de gobierno y con los derechos de aduana y otros impuestos. Además, los Comisionados acordaron en 1946-1947 anticipar a la Administración fondos destinados a sufragar los gastos de reconstrucción y rehabilitación y los del programa de vivienda para los nauruanos.

En su 12º período de sesiones, el Consejo fué informado de que a partir del 1º de julio de 1952 los Comisionados Británicos del Fosfato pagarían a la Administración de Nauru una suma destinada a cubrir el total calculado de los gastos y desembolsos anuales que no fueron cubiertos por otros ingresos, a cambio de la regalía de un chelín por cada tonelada de fosfato exportada y la exención del pago de aranceles aduaneros. En 1952-1953, el total pagado a la Administración en virtud de esta disposición ascendió a 133.789 libras esterlinas. Además, se pagó a la Administración una suma de 13.570 libras esterlinas procedente de la regalía de un chelín sobre los fosfatos exportados durante los tres meses anteriores al 1º de julio de 1952.

La cantidad de 200.000 libras esterlinas fijada como anticipo para rehabilitación en 1946-1947 fué aumentada ulteriormente a 350.000 libras. Con la suma de 25.000 libras esterlinas pagada a la Administración durante el año, objeto de estudio, el total de los pagos ascendió a 350.000 libras esterlinas.

Los ingresos de la Administración, que en 1952-1953 ascendieron a un total de 188.408 libras esterlinas, en vez de las 155.414 libras recaudadas en 1951-1952, se clasifican de la manera siguiente:

	1951-1952 £	1952-1953 £
Regalía de un chelín por tonelada de fosfato exportada	50.660	13.570
Pagos de los Comisionados del Fosfato en vez de los derechos de aduana y otros impuestos de la Administración	27.000	—
Anticipo destinado a la rehabilitación	65.000	25.000
Otros ingresos	12.754	16.049
Pagos hechos por los Comisionados del Fosfato para sufragar los gastos de la Administración, inclusive derechos de aduana y otros impuestos	—	133.789
TOTAL	155.414	188.408

Los gastos de las actividades administrativas ordinarias, inclusive las relativas a la reconstrucción, ascendieron a 179.423 libras esterlinas durante el año, en vez de las 146.742 libras gastadas en el período 1951-1952.

Los gastos de la enseñanza para los nauruanos y parte de los gastos de la Administración Indígena se costean con fondos procedentes del Nauruan Royalty Trust Fund. Durante el año objeto de estudio, los gastos hechos con cargo a este fondo ascendieron a 25.062 libras esterlinas, excediendo esta suma en 859 libras esterlinas al saldo existente en el fondo más la cantidad de 14.449 libras esterlinas que ingresó en el mismo. En el porvenir, los gastos de enseñanza en Nauru serán cargados a la cuenta de la Administración y no al Trust Fund.

Además de las regalías pagadas a los propietarios de las tierras, los Comisionados del Fosfato pagan una suma global de 45 libras esterlinas por acre de tierra fosfática arrendada, y un alquiler anual de 4 libras esterlinas y 10 chelines por acre de todos los terrenos no fosfáticos.

A fin de proporcionar beneficios a largo plazo a los nauruanos, se han creado dos Trust Funds: el Nauruan Landowners' Royalty Trust Fund y el Nauruan Community Long-Term Investment Fund. El primero, creado con la regalía de dos peniques por toneladas, disponía en junio de 1953 de la suma de 147.976 libras esterlinas; el segundo, formado con una regalía de 5 peniques por tonelada, contaba con un saldo favorable de 80.960 libras esterlinas.

Cuando el Consejo solicitó, en su octavo período de sesiones, que se examinase la posibilidad de un nuevo aumento de las regalías, la Autoridad Administradora declaró que las regalías se revisaban periódicamente y señaló que no se fijaban a base del precio del fosfato exportado, sino tomando en cuenta las necesidades económicas presentes y futuras de los habitantes de Nauru.

La Misión Visitadora de 1953 recibió varias solicitudes de los nauruanos relativas a las regalías, y fué informada por la Autoridad Administradora de que, desde el punto de vista jurídico, era dudoso que los Comisionados tuviesen la obligación de pagar una suma mayor que el total de los gastos de la Administración. Sin embargo, el monto de sus pagos ascendía a una suma mayor que ese total y además habían aceptado examinar la posibilidad de aumentar los pagos en concepto de regalías. La Misión consideró que una de las solicitudes recibidas, pidiendo que el aumento de

las regalías fuese proporcional al aumento del costo de vida, era en principio legítima, pero que no estaba en condiciones de determinar si el costo de la vida había aumentado después del último reajuste de la tasa de regalías. La Misión consideró que la industria del fosfato tenía la responsabilidad primordial de velar por el futuro bienestar de los nauruanos, y que pronto debía estudiarse la creación de un fondo destinado a costear el reasentamiento de los nauruanos, individualmente o en grupos, fuera de su isla, conforme al plan de reasentamiento paulatino sugerido por la Misión. Estimaba que el actual Nauruan Community Long-Term Investment Fund no bastaba para asegurar la realización de dicho plan.

En su 12° período de sesiones, el Consejo expresó la esperanza de que el nuevo acuerdo financiero concertado entre la Autoridad Administradora y los Comisionados Británicos del Fosfato figuraría en el próximo informe anual.

En el informe anual correspondiente a 1953, la Autoridad Administradora declaró que en virtud del nuevo acuerdo todos los gastos de la Administración, que no fuesen cubiertos por los ingresos, serían sufragados con el producto de la venta de fosfatos. Anteriormente, estos gastos se atendían con el producto de una regalía sobre el fosfato, que era necesario aumentar a medida que los gastos administrativos aumentaban. En vista de que éstos variaban de un año a otro y no guardaban relación con la cantidad de fosfatos exportados, se juzgaba que el establecimiento de una regalía era un método inadecuado para determinar la contribución que correspondía a los Comisionados. El pago de una regalía fija generalmente resultaba en el pago de una suma mayor de la necesaria o en un déficit que exigía la concertación de arreglos especiales. En virtud del nuevo acuerdo, el Administrador prepara ahora un proyecto de presupuesto antes del comienzo de cada ejercicio económico. Después de ser aprobado por el Ministro de los Territorios, el presupuesto se envía a los Comisionados Británicos del Fosfato, quienes abonan la suma necesaria en pagos trimestrales. En 1953-1954 se celebraron arreglos para establecer un fondo de reserva de 30.000 libras esterlinas que sería retenido por los Comisionados y serviría para cubrir los gastos no previstos en el presupuesto.

RÉGIMEN DE TIERRAS

Nauru tiene una superficie de 5.263 acres, de los cuales 4.116 son tierras fosfáticas. Salvo 110 acres pertenecientes a la Administración, 5 acres pertenecientes a las misiones y 2 acres pertenecientes a los Comisionados Británicos del Fosfato, todas las tierras pertenecen a los nauruanos. En la ordenanza de tierras de 1921-1951 se establecen disposiciones para que los propietarios nauruanos arrienden tierras a los Comisionados Británicos del Fosfato cuando éstas se requieran para la industria del fosfato. Se paga una suma global de 45 libras esterlinas por acre de tierra fosfática y un chelín y 4 peniques de regalía por cada tonelada que se exporta. Se paga un alquiler de 4 libras esterlinas y 10 chelines al año por cada acre de tierra no fosfática. El Administrador puede fijar tasas especiales cuando considera que esta suma no es equitativa. El alquiler de las tierras arrendadas temporalmente fué fijado en 1951 en 9 libras esterlinas por acre. Las tasas antes mencionadas relativas a las tierras no fosfáticas se aplican igualmente a las tierras arrendadas por la Administración.

Los Comisionados Británicos del Fosfato arriendan 1.218 acres de tierras fosfáticas y 139.492 acres de tierras no fosfáticas. La Administración arrienda 55.414 acres de tierras no fosfáticas, y una superficie adicional de 96 acres, 3 *roods** y 5 *perches***, adquirida en 1952 para ampliar la pista de aterrizaje a fin de que se ajuste a las condiciones fijadas por los convenios aeronáuticos internacionales.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

INDUSTRIA DEL FOSFATO; HACIENDA PÚBLICA; REGALÍAS DEL FOSFATO

El representante del Reino Unido declaró que su delegación había escuchado cuidadosamente los argumentos relativos a la publicación de cuentas separadas por parte de los Comisionados Británicos del Fosfato, pero estimaba que las disposiciones actuales constituían la forma más satisfactoria de combinar la libertad de actividad comercial, de que debían gozar los Comisionados, y el suministro de suficiente información para que el Consejo de Administración Fiduciaria pudiera juzgar la fidelidad con que la Autoridad Administradora cumple el Acuerdo de Administración Fiduciaria.

El representante de China observó que el Consejo Local de Gobierno no había pedido un aumento de las regalías del fosfato, sino que primero había pedido una presentación separada de cuentas de los Comisionados Británicos del Fosfato con respecto a Nauru. Esta solicitud era razonable y la Administración podría, por su parte, mostrar alguna consideración y tratar de vencer las dificultades de presentar una cuenta separada.

El representante de El Salvador expresó la esperanza de que, en vista del aumento del costo de vida, se consideraría favorablemente el aumento de las regalías que se pagan a los nauruanos.

El representante de Siria declaró que, como el precio de venta de los fosfatos no tenía ninguna relación con los pagos hechos a los nauruanos o a la Administración, ni influía sobre dichos pagos en forma alguna, y los fosfatos eran vendidos al costo, existían buenas razones para revisar los pagos que la industria de los fosfatos hacía destinados al progreso de los nauruanos. Además, estimó que la existencia de determinados arreglos celebrados en circunstancias desfavorables para el pueblo de Nauru no podía comprometerlos eternamente y era hora de que tales arreglos fueran examinados nuevamente y modificados a fin de darles un carácter más justo y equitativo. Esto era especialmente necesario en vista del porvenir incierto de los nauruanos, pues nada podía garantizarles un porvenir satisfactorio si faltaban los fondos necesarios para llevar a cabo su reasentamiento. La suma acumulada en el Nauruan Community Long-Term Investment Fund indicaba claramente lo insuficiente que era esta pequeña regalía para cumplir la finalidad a que había sido destinada.

El representante de la India señaló que el acuerdo relativo a la Comisión Británica del Fosfato no era un documento de la Sociedad de las Naciones ni de las Naciones Unidas, sino un acuerdo entre los tres

* Un *rood* equivale generalmente en Inglaterra a $\frac{1}{4}$ de acre, o sea, 1.012 metros cuadrados.

** Un *perch* = $5\frac{1}{2}$ yardas cuadradas, o sea, 4,6 metros cuadrados aproximadamente.

miembros de la Autoridad Administradora. Las Naciones Unidas tendrían que examinar algún día si desde el punto de vista jurídico el acuerdo constituía un contrato, o un compromiso, entre los Gobiernos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia y las Naciones Unidas, o algún otro pueblo, y hasta qué punto estaba en conformidad con el Acuerdo de Administración Fiduciaria. Los artículos 6, 9, 10, 11 y 12 de este último eran pertinentes en la medida que fueran necesarios para examinar a quién pertenecía realmente Nauru, si pertenecía o no a sus habitantes, cuál era la posición de las Naciones Unidas en esta cuestión, y hasta qué punto podían aplicarse las disposiciones del Artículo 76 de la Carta con relación a Nauru. Todo el concepto del acuerdo sobre los fosfatos tendría que ser examinado por las Naciones Unidas en su totalidad para determinar si la Autoridad Administradora, en virtud de un acuerdo interno con ella misma, podía hacerse dueña mediante un documento jurídico de todas las propiedades de la isla. En realidad, lo que había ocurrido era que los fideicomisarios habían llegado a un arreglo entre ellos a fin de utilizar los recursos de Nauru en beneficio de sus propios países y pueblos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la apropiación de los fosfatos por la compañía gubernamental constituía la actividad y el interés principales de la Autoridad Administradora. Los Gobiernos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia habían celebrado un acuerdo entre ellos, habían impuesto al pequeño pueblo de Nauru condiciones de esclavitud y habían explotado el único recurso natural del Territorio. El monopolio comercial llamado los Comisionados Británicos del Fosfato había exportado los fosfatos de manera intensiva y había obtenido considerables utilidades.

Como había declarado con todo acierto el representante de la India, el acuerdo celebrado en 1919 entre los Gobiernos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia contravenía las disposiciones de la Carta y las finalidades del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria. Desde que se descubrieron los fosfatos, se había exportado por valor de unos 60.000.000 de libras esterlinas en fosfatos. Actualmente, la explotación ascendía a 1.000.000 de libras esterlinas al año aproximadamente. Debido a esta explotación, los depósitos quedarían agotados dentro de unas cuantas décadas.

Sin embargo, esta cuestión no preocupaba a la Autoridad Administradora, la cual consideraba que el pueblo de Nauru debía ser reasentado en alguna otra parte a fin de que no se entorpeciera la explotación irreflexiva de los recursos del Territorio. Si se comparara el precio que paga la Autoridad Administradora y los precios que existen en otras zonas, se podría ver que los fosfatos de Nauru se vendían a un precio inferior, por lo menos 2,00 dólares la tonelada. Además, si se tomaba también en cuenta que los fosfatos del Territorio en fideicomiso eran dos veces mejores que los de otras partes del mundo, entonces resultaría evidente que, mediante estos precios de monopolio, la Autoridad Administradora había conseguido arrebatar cada año más de 4.000.000 de dólares a la población indígena.

Esto no era todo. De los bajos precios establecidos para los fosfatos, la población indígena recibía sólo una parte muy pequeña. En el informe anual se declaraba que el total de los recursos ascendía a unos 90.000.000 de toneladas. Por lo tanto, el valor total de los fosfatos

era de 145.000.000 de libras esterlinas. Si se tomaba en cuenta el hecho de que la población indígena de la isla poseía más de 4.000 acres de tierras fosfáticas, entonces podría verse que por todo esto los nauruanos recibirían cerca de 6.000.000 de libras esterlinas, o sea, aproximadamente un 4% del precio total de los fosfatos.

Por lo tanto, su delegación opinaba que la Autoridad Administradora, al explotar los recursos fosfáticos y convertir a la isla en un desierto, no se preocupaba del porvenir de los nauruanos. Era evidente que, en vista de semejante política, la población indígena de Nauru no contaba con seguridad alguna para el porvenir.

El poder de los Comisionados del Fosfato era evidente no solo económica sino también políticamente y en otros aspectos. A este respecto, cabía observarse que el representante especial no podía presentar al Consejo un estado financiero de las actividades de los Comisionados. El poder de los Comisionados había aumentado en forma tal que, en el porvenir, los gastos del Territorio serían sufragados mediante contribuciones directas de los Comisionados. De esta manera, la Administración del Territorio estaba completamente dominada por los Comisionados del Fosfato.

Los Comisionados del Fosfato, en virtud de las leyes existentes impuestas a la población, tenían derecho a enajenar tierras pertenecientes a los indígenas y a arrendar las tierras fosfáticas y explotarlas tanto como quisieran. Los Comisionados pagaban solamente 45 libras esterlinas por acre y una regalía de un chelín y cuatro peniques por tonelada. El Administrador tenía autoridad para determinar qué tierras debían ser clasificadas como tierras fosfáticas para fines de la ordenanza. La ordenanza disponía que los Comisionados podrían arrendar las tierras fosfáticas que necesitaran y arrancar cualquier árbol de la tierra arrendada. Era del todo evidente que estas disposiciones permitían a la Autoridad Administradora enajenar las tierras de la población indígena y transferirlas a los Comisionados del Fosfato.

También era indudable que la Autoridad Administradora debía examinar de nuevo los acuerdos existentes con los Comisionados del Fosfato y la legislación del Territorio a fin de establecer precios y regalías equitativos para beneficio de los nauruanos y a fin de proteger los derechos económicos y, sobre todo, los derechos de la población indígena sobre la tierra. La Autoridad Administradora debía impedir la enajenación de tierras pertenecientes a la población indígena.

El representante de la Autoridad Administradora, al contestar al representante de la India, señaló que los derechos de los Comisionados Británicos del Fosfato eran anteriores al Régimen de Administración Fiduciaria, ya que se habían adquirido antes del Régimen de Mandatos. La Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 1 del Artículo 80, protegía explícitamente estos derechos. Sin embargo, los derechos de los nauruanos también habían sido protegidos y, además de otras cosas, existían escuelas, viviendas, empleo y servicios médicos y se les había dado participación en la administración de sus propios asuntos en virtud de un sistema de capacitación que preveía la época en que tendrían plena autonomía.

El representante especial de la Autoridad Administradora añadió que en los estados financieros de los Comisionados Británicos del Fosfato, comunes a las actividades de la empresa en su totalidad, no era posible presentar detalles separados respecto de Nauru,

y que el Consejo no necesitaba esa información detallada para cumplir eficazmente sus funciones. Se habían suministrado detalles al Consejo sobre la cantidad de fosfatos producidos, su destino y valor y las condiciones de empleo de los trabajadores. En cuanto al precio pagado por los fosfatos el representante especial declaró que este precio dependía del costo, en el que figuraban grandes beneficios para los nauruanos, y además señaló que no existía un precio fijo en el mercado mundial. Por lo tanto, era difícil fijar una norma y, probablemente, era inútil tratar de hacer comparaciones.

Manifestó que no era realista expresar en dólares y centavos los costos y los precios en Nauru: la moneda era la libra australiana y era obvio que el tipo oficial de cambio no reflejaba fielmente las diferencias en los costos y el nivel de vida. Su delegación opinaba que el Consejo debía juzgar de acuerdo con los resultados y no enredarse en detalles que no venían al caso. Además, su delegación dudaba de que la posesión de tales detalles contribuyera a que los Comisionados del Fosfato realizaran sus actividades en forma más satisfactoria. El Consejo no se encargaba de dirigir las actividades de las administraciones; mucho menos aun debía tratar de constituirse en junta directiva de una empresa comercial. En vista de que el Consejo se preocupaba de los intereses de los nauruanos, debía pensarlo bien antes de intervenir en el funcionamiento de la muy eficiente empresa que aportaba tantos beneficios a los nauruanos.

La cuestión principal consistía en determinar si el pueblo nauruano recibía por lo menos un beneficio razonable de los recursos de su isla, y la cuestión secundaria era si el Consejo recibía información suficiente para cumplir fielmente sus funciones. Su delegación consideraba que este era el caso y que el analizar más profundamente los detalles relativos al funcionamiento de una empresa comercial no produciría ningún resultado provechoso y no sería una manera correcta de proceder para un organismo internacional. En vista de los muchos y grandes beneficios que los nauruanos recibían de la industria del fosfato, la Autoridad Administradora tenía derecho a rechazar cualquier indicación, que pudiera existir implícitamente en algunas preguntas, de que se estaba explotando o robando a los nauruanos. El Consejo había sido plenamente informado por medio del informe de la Misión Visitadora sobre las regalías pagadas por los Comisionados Británicos del Fosfato. Los recursos fosfáticos no habían sido desarrollados por los nauruanos y era evidente que no tenían ni poseían el capital, los conocimientos técnicos y la organización indispensables para explotar los fosfatos.

El representante especial de la Autoridad Administradora destacó que el pago de regalías a los nauruanos había sido hecho voluntariamente por los Comisionados Británicos del Fosfato y la Administración. Los Gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, y el Reino Unido, siendo los custodios del fideicomiso, habían considerado que como cuestión de equidad el pueblo de la isla debía beneficiarse con la venta de los recursos de la isla, aun cuando ellos no hubieran podido por sí solos realizar la extracción y la comercialización de los fosfatos. Hasta el momento el total de los beneficios ascendía a dos tercios de 1.000.000 de libras esterlinas, y aumentaban en forma de regalías para los isleños, de 70.000 a 100.000 libras esterlinas aproximadamente por año, sin contar los salarios derivados de los empleos con la Administración y los Comisionados Británicos del Fosfato y del suministro de servicios tales como cuidados médicos, en-

señanza y vivienda. Ya existía un fondo destinado al reasentamiento del pueblo nauruano, el Nauruan Community Long Term Investment Fund, que proporcionaría los fondos necesarios para el traslado cuando se decidiera llevarlo a cabo.

RÉGIMEN DE TIERRAS

El representante de Francia manifestó su agrado al saber que se habían satisfecho las demandas de los habitantes sobre el nuevo aeropuerto.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

INFORMACIÓN GENERAL

La mejora de las condiciones de vida de la población indígena constituye la política declarada de la Autoridad Administradora. Entre los servicios sociales gratuitos figuran los de atención médica, hospitalización e instrucción pública y la Autoridad Administradora manifiesta que no ha sido preciso implantar una legislación especial sobre la materia.

Las comunidades de los trabajadores inmigrantes, empleados por los Comisionados Británicos del Fosfato o por la Administración, se encuentran en determinadas zonas y por la noche se limita la circulación de tales trabajadores, y también la de los nauruanos. Las personas que tienen motivos justificados pueden obtener pases para circular fuera de sus respectivos distritos durante las horas prohibidas. La Autoridad Administradora considera que estas restricciones a la libre circulación cuentan con el apoyo de los nauruanos y se han dictado en interés de la población interesada.

En su 14° período de sesiones el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo recuerda las recomendaciones que ha formulado previamente a la Autoridad Administradora para que estudie la posibilidad de modificar las disposiciones de la Movement of Natives Ordinance, encaminadas a eliminar las restricciones en vigor a la circulación nocturna de la población indígena y de los trabajadores inmigrantes. Con respecto a esto, toma nota de la declaración hecha por la Autoridad Administradora en el sentido de que el pueblo nauruano desea que continúen en vigor las restricciones a la libre circulación y que la Autoridad Administradora cree necesario mantener tales restricciones en interés del Territorio, en vista de las especiales circunstancias sociales creadas por la presencia del gran número de trabajadores inmigrantes temporales. El Consejo recomienda a la Autoridad Administradora que continúe interpretando de una manera liberal las disposiciones de la Ordenanza en vigor, con miras a derogarla dentro de un plazo razonable.

CONDICIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CHINOS

En 1951-1952 se aprobó la admisión en el Territorio de las esposas e hijos de trabajadores chinos. La esposa de un trabajador, que no tenga más de dos hijos menores de 12 años, puede obtener permiso para residir en Nauru durante un año y renovar anualmente tal permiso hasta un total máximo de tres años. Al expirar el permiso, toda la familia debe salir de Nauru.

En octubre de 1952 llegaron a Nauru 12 familias. En su 12º período de sesiones, el Consejo había tomado nota con satisfacción de las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora para permitir a los trabajadores chinos que llevaran sus familias al Territorio y le había pedido que suministrase datos periódicos completos sobre la aplicación de tal programa.

En su informe anual de 1953, la Autoridad Administradora comunicaba que se estaban haciendo preparativos a fin de que más familias fueran a Nauru durante el mes de octubre de 1953.

El representante de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 14º período de sesiones, que otras 18 familias habían llegado a la isla desde el 30 de junio de 1953.

CONDICIONES DEL TRABAJO

La Administración y los Comisionados Británicos del Fosfato constituyen las fuentes principales de empleo. Como la población indígena es demasiado reducida para suministrar la necesaria mano de obra para la industria del fosfato, se contratan trabajadores en Hong Kong y en las islas Gilbert y Ellice, del Pacífico.

El número de personas que trabajaba con los distintos empleadores, el 30 de junio de 1953 era el siguiente:

	Europeos	Chinos	Nauruanos	Naturales de las islas Gilbert y Ellice	Total
Administración	16	30	288	18	352
Industria del fosfato..	101	450	144	505	1.200
Sociedad Cooperativa de Nauru	—	—	38	—	38
Otros empleadores	5	—	29	—	34
TOTAL	122	480	499	523	1.624

Durante el año, el número de trabajadores chinos disminuyó de 747 a 480. El de obreros nauruanos aumentó de 491 a 499 y el de los naturales de las islas Gilbert y Ellice de 458 a 523.

Los trabajadores indígenas empleados por la Administración son permanentes o temporeros según el tipo de trabajo y las condiciones del candidato; los Comisionados Británicos del Fosfato los contratan con carácter ocasional. La Oficina de Asuntos Indígenas (Native Affairs Office) interviene en la contratación de los mismos. Los trabajadores chinos se emplean con contrato de un año. Entre los términos y condiciones estipulados en estos contratos figuran disposiciones sobre salarios y remuneración por horas extraordinarias, horas de trabajo, fiestas, transportes gratuitos, alojamiento gratis y raciones de alimentos diarias, vestidos, cuidados en caso de enfermedad y atención médica e indemnizaciones por lesiones o muerte. Los contratos deben firmarse en presencia del Administrador y ser aprobados por éste, siendo su responsabilidad asegurar que las condiciones de tales contratos sean justas y razonables para el empleado en cuestión. Los trabajadores de las islas Gilbert y Ellice son contratados y empleados en condiciones análogas a las de los chinos.

Tras una investigación realizada sobre el costo de vida de los nauruanos, se aprobó que el salario mínimo de un obrero nauruano adulto empleado por la Administración, fuera aumentado de 126 libras anuales, más 7 chelines y 6 peniques mensuales por cada hijo

a su cargo, a 191 libras anuales más 7 chelines y 6 peniques mensuales por cada hijo a su cargo, aumento que se hizo efectivo el 1º de julio de 1952.

A consecuencia del aumento general en los tipos de salarios básicos de los empleados nauruanos, durante el año objeto del informe, los salarios mínimos y máximos se han fijado en 191 libras y 299 libras, respectivamente, para los agentes de policía y oficinistas; en 215 libras y 251 libras para los empleados de comercio, maestros, enfermeros, empleados de almacenes, electricistas y mecánicos; y en 227 libras y 299 libras para los directores de escuelas, dibujantes de primera y maestros carpinteros. Las personas que desempeñan otros trabajos de mayor responsabilidad y especialidad también han tenido aumentos, fijándose el sueldo de los telegrafistas en 311 libras y el del Inspector Escolar de Nauru en 812 libras. El funcionario de Asuntos Indígenas sigue percibiendo el mismo sueldo (836 libras) que el año anterior. En su 14º período de sesiones, el Consejo fué informado de que se había hecho un estudio de los cargos ocupados por los nauruanos en la Administración y de que el 22 de enero de 1954 había entrado en vigor una nueva escala de salarios, con efectos retroactivos al 15 de mayo de 1953. Se aumentó el sueldo básico anual a 236 libras y 10 chelines; la subvención por cada hijo menor de 16 años fué fijada en 10 chelines semanales; y se aumentaron también de una manera apreciable las gratificaciones por especialización. El salario mínimo para mujeres adultas fué fijado en 165 libras y 10 chelines anuales, aumentándose también proporcionalmente el de las menores.

En el 12º período de sesiones del Consejo, el representante de la Autoridad Administradora había declarado que los jornales de los nauruanos empleados por los Comisionados Británicos del Fosfato, fueron aumentados el 14 de abril de 1953 de 8 chelines y 8 peniques a 12 chelines por día, es decir a 175 libras anuales, más una comida a mediodía, que representa alrededor de 40 libras al año. Además se les paga una subvención mensual de 7 chelines y 6 peniques por cada hijo a su cargo.

OBRA PÚBLICAS

Todas las casas de Nauru fueron destruídas durante la guerra y para reconstruirlas se comenzó a realizar un programa de viviendas (Nauruan Housing Scheme). Los Comisionados Británicos del Fosfato convinieron en construir 350 casas de tipo europeo, 299 de las cuales habían quedado terminadas para el 30 de junio de 1953, encontrándose otras 9 en construcción. Estas casas fueron ocupadas por 1.234 nauruanos. La Administración concluyó durante el año varias obras públicas, entre las que cabe citar un edificio que servirá de oficina central a la Administración, dos casas para residencia del personal, la ampliación de la Colonia de Tuberculosos, una cárcel, una estación de radio y otras instalaciones. En su 14º período de sesiones, el Consejo fué informado que desde junio de 1953 se habían construído siguiendo el programa de viviendas un total de 311 casas y que otras 43 se estaban construyendo y quedarían terminadas para fines de 1954.

HIGIENE PÚBLICA

Entre los servicios médicos del Departamento de Sanidad del Territorio figuran un hospital general, una leprosería y un hospital para tuberculosos. En este año, se creó además un banco de sangre y en el hos-

pital de la Administración de Nauru se inauguró un dispensario prenatal para atender a todas las mujeres del Territorio que lo necesiten. En la mayoría de los distritos hay consultorios maternoinfantiles. El personal médico está integrado por 22 nauruanos, un médico europeo y dos enfermeras. En 1953 los gastos de sanidad ascendieron a 17.981 libras, en vez de 18.070 libras gastadas el año anterior.

Los Comisionados Británicos del Fosfato sostienen también dos hospitales generales, uno para europeos y otro para chinos y gilbertinos.

La Administración piensa comenzar en 1954 la construcción de un nuevo hospital general para nauruanos con 25 camas. Se ha aprobado la creación de un cargo de dentista, que prestará servicios a todos los sectores de la comunidad, esperándose que el titular para el mismo sea nombrado en breve.

A fin de descubrir los casos de tuberculosis, durante el año se hizo un examen de toda la población nauruana y todos los casos negativos fueron vacunados; también se llevó a cabo un tratamiento intensivo contra la filarisis, haciéndose un nuevo examen de todos los casos previamente tratados.

El hospital de la Administración cuenta con medios suficientes para la preparación de enfermeras y en 1953 se estaba preparando profesionalmente a seis muchachas nauruanas. También se facilita en el hospital preparación médica auxiliar.

Al terminar el año, cinco estudiantes nauruanos seguían cursos en la Escuela Central Médica de Viti, preparándose para médicos, dentistas y enfermeras. Otros cuatro estudiantes seguían en Australia estudios análogos.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

CONSIDERACIONES GENERALES

El representante de China manifestó que, cualquiera que fuera la opinión de la población indígena, la Administración tenía el deber de explicar al Consejo hechos tales como el de la incompatibilidad de las restricciones a la libertad de circulación con los derechos humanos y los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. Pidió que la Administración considerara de nuevo las resoluciones del Consejo y de la Asamblea General relativas a una revisión de las leyes y prácticas discriminatorias del Territorio.

El representante de Haití declaró que la situación actual sobre la libertad de circulación no satisfacía a su delegación. Los individuos que carecían de libertad para circular después de cierta hora estaban siendo privados de derechos humanos fundamentales por el hecho de que determinadas personas se hubieran conducido de manera indebida. Una autoridad vigilante debía ser capaz de identificar y castigar a los culpables.

El representante de El Salvador manifestó que era una lástima que en un Territorio donde se había concedido a las mujeres derechos políticos y donde la Administración se había distinguido por su brillante cooperación y continuo afán por el progreso, tales realizaciones se vieran empujadas y no resaltaran todo lo debido por la insistencia de la Administración en mantener en vigor la ordenanza sobre libertad de circulación. Expresó la esperanza de que la Administra-

ción anunciara pronto la completa supresión de las restricciones impuestas ahora a los chinos y nauruanos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Autoridad Administradora estaba siguiendo una política de discriminación y segregación raciales, al propio tiempo que hacía declaraciones hipócritas alegando la protección de la población indígena. Señaló que tal segregación, según la Misión Visitadora, se ponía de manifiesto en la legislación y disposiciones que regían la circulación de los habitantes indígenas y los trabajadores chinos. Pese a que la Misión había declarado que el Consejo, durante su quinto período de sesiones, se había opuesto a tales restricciones, no se había hecho nada para modificar la situación y durante el año objeto del informe 60 personas habían sido castigadas por infracción de tales disposiciones discriminatorias.

El representante de la Autoridad Administradora, al tomar nota de las observaciones hechas sobre la continuación de las restricciones impuestas a la libertad de circulación, señaló que ello representaba el deseo del pueblo nauruano. Su Gobierno compartía la opinión del pueblo nauruano en el sentido de que, dadas las circunstancias especiales del Territorio, donde una gran proporción de la población estaba constituida por inmigrantes temporales, tales restricciones eran necesarias y se imponían para proteger los intereses del Territorio.

NIVEL DE VIDA

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas subrayó que el nivel de vida de la población indígena y de los trabajadores chinos era muy bajo, pese a la explotación intensiva de los recursos naturales de la isla. Según el informe anual, las condiciones en que vivían los trabajadores chinos eran peores que las de los presos. De hecho, la ración diaria de alimentos de un trabajador chino costaba menos de cuatro cheelines, es decir menos que la de un recluso.

Las condiciones de vida de los nauruanos y de los chinos eran mucho peores que las de los europeos. El informe anual ponía de manifiesto que las casas de los europeos estaban ocupadas por una o dos personas mientras que en una casa nauruana había ocho y en una casa china hasta 12 personas.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que no podía comprender por qué se criticaba el hecho de que a los presos se les diera una comida de igual valor que la que se daba a los trabajadores. Su Gobierno consideraba que un hombre preso seguía siendo un hombre y no debía matársele de hambre. Señaló además que la "habitación única" a que se refería el representante de la URSS era de hecho un gran dormitorio, con espacio adecuado para cada persona.

CONDICIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CHINOS

El representante de China manifestó que su delegación había sentido vivo interés al oír lo que la Administración se proponía para mejorar las condiciones de vivienda en los alojamientos destinados a los trabajadores chinos. Pero en vista del hecho de que de los 131 alojamientos destinados a los chinos y a los naturales de las islas Gilbert y Ellice, 77 tenían solamente una habitación en la que se alojaban de 4 a 12 personas, las condiciones de los mismos difícilmente podían calificarse de satisfactorias y exigían inmediato remedio. Observó

con satisfacción que algunas familias chinas habían sido admitidas en el Territorio en las condiciones previamente señaladas por el Consejo. Pero al mismo tiempo que reiteraba su agradecimiento por la mejora registrada en la situación, pedía una vez más a la Autoridad Administradora que estudiase la posibilidad de mitigar las restricciones existentes en todo lo posible. Esperaba también con interés nuevos datos sobre las solicitudes hechas a la Administración por algunos antiguos trabajadores chinos para trabajar de nuevo en el Territorio.

El representante especial de la Autoridad Administradora, al responder al representante de China, señaló la observación hecha por la Misión Visitadora de que se habían eliminado muchas de las dificultades con que tropezaban antes los trabajadores chinos. Añadió que los chinos y otros trabajadores iban voluntariamente a Nauru y sabían perfectamente y aceptaban todas las condiciones inherentes a su empleo. Las disposiciones especiales en vigor que les afectaban tenían por objeto proteger a la población indígena.

HIGIENE PÚBLICA

El representante de Francia expresó el agrado de su delegación por la noticia de que a fines de año iba a terminarse un nuevo hospital.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que, en materia de higiene pública, la mortalidad infantil era muy elevada: 115 por 1.000 entre los niños menores de un año. En una población de 3.400 habitantes, el número de casos hospitalizados ascendía a 1.695, es decir, casi la mitad de aquélla; el total de casos tratados era de 24.193. El personal médico había sido disminuido de 27 a 25 durante el año objeto del informe.

A su juicio debían aumentarse los créditos destinados en el presupuesto a higiene pública.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que, efectivamente la tasa de mortalidad infantil había sido más elevada durante el año objeto de estudio que en los años anteriores. Sin embargo, convenía advertir que cualquier interpretación basada en cifras tan pequeñas, como las correspondientes a Nauru, tenía que hacerse con sumo cuidado. La cifra de mortalidad infantil, 115 por 1.000 para 1952-1953 representaba de hecho 12 defunciones, en vez de las 5 que constituían la cifra normal de otros años.

V. PROGRESO EDUCATIVO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

El Departamento de Educación mantiene cinco escuelas primarias y una secundaria para nauruanos y una escuela primaria para europeos. Su personal consiste de un director de enseñanza europeo, un inspector escolar nauruano, tres maestros europeos y 22 maestros graduados y practicantes nauruanos, y además cuatro maestros nauruanos empleados a jornada parcial. Durante el curso 1952-1953 a las escuelas primarias y secundarias asistían respectivamente 299 y 57 escolares nauruanos. A la escuela europea asistían 35 escolares. Los gastos destinados a la instrucción de los nauruanos durante dicho período, inclusive 6.736 libras esterlinas para estudiantes en ultramar, ascendieron a 18.469 libras esterlinas, en vez de 11.179 libras el año anterior.

Estos gastos se sufragaban mediante el Nauru Royalty Trust Fund. Los gastos para la enseñanza de los europeos se cargan al presupuesto general de la Administración.

Además de las escuelas dependientes de la Administración, existe una escuela dirigida por la misión católica y una costeada por los Comisionados Británicos del Fosfato, las cuales se rigen por las disposiciones de la ordenanza de 1921-1951 sobre instrucción obligatoria (Compulsory Education Ordinance).

La Autoridad Administradora comunica que, desde 1921, la enseñanza secundaria aumenta cada año, a medida que los escolares avanzan en sus estudios y que durante 1954 se proyecta inaugurar una cuarta clase en la escuela secundaria; se espera que cierto número de escolares podrían presentarse a examen para obtener el certificado intermedio. La nueva escuela secundaria tendrá tres aulas, una oficina, dependencias para la enseñanza de economía doméstica y para trabajos en madera y metal y una biblioteca. Tendrá una capacidad máxima de 200 alumnos.

La Autoridad Administradora declara que se está elaborando un programa para la formación dentro del servicio de maestros graduados y practicantes nauruanos. En la actualidad, un maestro europeo se encarga de hacer indicaciones y pronunciar conferencias, una tarde por semana, a los practicantes docentes y de inspeccionar semanalmente sus clases. La Administración considera que, durante 1954, se obtendrán importantes resultados gracias al nombramiento de un europeo, director de las escuelas primarias de Nauru, que se dedicará principalmente a elevar el nivel de la enseñanza.

En su 14º período de sesiones, el Consejo fué informado de que, a raíz del nombramiento del nuevo Director de enseñanza, se habían logrado progresos considerables en todas las ramas docentes. Se habían cubierto cuatro puestos de maestros europeos, algunos de los cuales habían estado vacantes durante algún tiempo y estos nombramientos se habían dejado ya sentir en el sistema docente de Nauru.

En 1952-1953 un total de 36 jóvenes nauruanos cursaban estudios en Viti y Australia, en vez de 23 durante el año anterior. Tales estudiantes estudiaban las carreras siguientes: 11 enseñanza, 9 medicina y profesiones afines, 5 contabilidad, 5 no se habían decidido todavía, 3 querían ser misioneros, 1 estudiaba estenografía, otro asuntos indígenas y otro mecánica. Quince de dichos estudiantes recibían ayuda económica del Nauru Royalty Trust Fund, en vez de 17 el año anterior.

El Consejo Local de Gobierno de Nauru expresó a la Misión Visitadora de 1953 su descontento por la manera en que la Administración dirigía la enseñanza de los nauruanos. En una petición, en la que expresaba su escepticismo por el progreso logrado después de 30 años de instrucción obligatoria, el citado Consejo hacía notar que en julio de 1952 había presentado al Administrador un amplio informe sobre la enseñanza en Nauru y que en diciembre de 1952 se había creado un comité para tratar con aquél tal asunto, llegándose a un acuerdo en varios principios fundamentales. Observaba asimismo que no le era grato tener que repetir la misma declaración sobre la enseñanza nauruana que ya, en 1950, había formulado a la Misión Visitadora. A este método dilatorio de tramitar los asuntos relativos a la enseñanza se debía, según los peticionarios el que solamente hubiera un nauruano con un cargo importante

en la Administración, después de 30 años de instrucción obligatoria.

La Misión consideró que los principios que figuran en la petición del Consejo Local de Gobierno de Nauru eran fundamentalmente buenos y opinó que la Administración debía dar los pasos pertinentes para ponerlos en práctica lo antes posible. Para ello debía prestarse más atención a la formación profesional de maestros y a la expansión de los programas de formación profesional.

Además de la necesidad de mejorar la enseñanza en general, estimaba la Misión que era imperativo formular un programa de instrucción y formación profesional que capacitara a los nauruanos para emplearse o mantenerse de otra manera si tenían que marchar fuera de su isla. Concedía por ello gran importancia a que los estudiantes en el extranjero no se prepararan exclusivamente para las profesiones que se necesitaban especialmente en el Territorio.

El Consejo de Administración Fiduciaria, en su 12º período de sesiones, había tomado nota con satisfacción del aumento en el número de estudiantes nauruanos que cursaban estudios en el extranjero y había expresado la esperanza de que la Autoridad Administradora prosiguiera sus esfuerzos a este respecto para ofrecer dichos servicios al mayor número posible de nauruanos.

En su respuesta, la Autoridad Administradora declaró que apreciaba plenamente la importancia que tenía dar a los nauruanos una educación superior y que el número de estudiantes que se encontraban en el extranjero había aumentado en 13 durante el año objeto del informe. Señalaba que, aunque continuaría el sistema de becas y se ayudaría a estudiantes particulares en el extranjero, quizás se introducirían algunas modificaciones en vista de que, actualmente, la instrucción secundaria en Nauru alcanza ya hasta el certificado intermedio.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la recomendación siguiente:

El Consejo toma nota del progreso logrado en el campo de la enseñanza durante el año que se examina y le complace la creación de una Comisión Asesora de Educación, como medida práctica para la coordinación de los planes docentes. El Consejo estima, sin embargo, que conviene estudiar de nuevo el actual plan docente, especialmente con respecto a la enseñanza superior en Nauru y en el extranjero, con miras a determinar si el mismo prevé la instrucción y preparación profesional que los nauruanos habrán de necesitar cuando se encuentren en circunstancias distintas si se les reasienta fuera del Territorio.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, hechas a título personal únicamente

El representante del Reino Unido declaró que su delegación había seguido con especial interés las activi-

dades docentes que se describen en el informe y las observaciones de la UNESCO. El aumento en los gastos de enseñanza, el programa de formación profesional, el nombramiento de un director europeo de las escuelas primarias, y el aumento del número de estudiantes nauruanos que siguen cursos en el extranjero, constituyen hechos muy satisfactorios.

El representante de China declaró que su delegación se veía gratamente sorprendida por los progresos educativos que se habían logrado durante el año objeto de estudio. Especialmente debía felicitarse a la Administración por la creación de la Comisión Asesora de Educación. Ello constituía una medida práctica que resultaría en una mejor coordinación de los planes docentes. Asimismo tomó nota de que, en lo sucesivo, todos los gastos de educación serían por cuenta de la Administración y expresó la esperanza de que en los informes anuales figuraran en el futuro cifras exactas sobre los gastos totales de enseñanza en el Territorio.

El representante de Haití tomó nota de los progresos logrados desde 1951 mediante la implantación de la enseñanza secundaria, pero agregó que tal tipo de enseñanza, al parecer, no producía un nivel suficientemente elevado de educación. La propia Autoridad Administradora había señalado que los nauruanos eran incapaces de comprender ciertos matices delicados y concretos del inglés. Confiaba en que se alentaría a los nauruanos a proseguir sus estudios hasta un nivel superior y consideraba que debía dárseles toda clase de oportunidades para lograrlo.

El representante de El Salvador manifestó su satisfacción por los esfuerzos realizados para mejorar la preparación de los maestros. Asimismo, alabó el interés que la Administración había demostrado al facilitar escuelas y medios docentes. Confiaba que se harían esfuerzos semejantes para fomentar la formación profesional y superior.

El representante de Siria manifestó que, aparte del hecho general de que no podía darse a los nauruanos la debida instrucción mientras su futuro permaneciera envuelto en el misterio, los progresos logrados en materia educativa parecían satisfactorios. Sin embargo, debían destinarse mayores cantidades a fines docentes.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideró que deberían aumentarse los créditos destinados a la enseñanza.

El representante de la Autoridad Administradora, contestando al representante de China, declaró que en lo sucesivo se presentarían con toda claridad las cantidades destinadas a la enseñanza según el nuevo sistema, en virtud del cual dichos gastos figurarían en el presupuesto ordinario de la Administración, y aseguró al representante de Haití que la Autoridad Administradora proporcionaría, en Nauru o en Australia, medios para lograr una educación secundaria completa.

Parte III

CONSECUSION, POR LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO, DEL OBJETIVO DEL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDENCIA

I. INFORMACION GENERAL

En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 558 (VI) del 18 de enero de 1952, la Asamblea General invitó a la Autoridad Administradora de los territorios en fideicomiso, con excepción de Somalia bajo administración italiana, a que incluyese en sus informes anuales datos relativos a:

a) Las medidas ya adoptadas o que se proyecte adoptar para conducir al territorio en fideicomiso, dentro del plazo más breve posible, hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia;

b) La forma en que, a este respecto, se tengan en cuenta las circunstancias particulares del territorio y de su pueblo y los deseos libremente expresados por los pueblos interesados;

c) El grado en que las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria vigente sean adecuadas, teniendo en cuenta los factores antes mencionados;

d) El cálculo aproximado del tiempo que, en las actuales circunstancias, considere necesario para completar la aplicación de una o más de las varias medidas destinadas a crear las condiciones previas para que el territorio en fideicomiso alcance el objetivo del gobierno propio o la independencia;

e) El plazo en el cual se espera que el territorio en fideicomiso alcanzará el objetivo del gobierno propio o la independencia.

En el párrafo 1 de la resolución 752 (VIII), del 9 de diciembre de 1953, la Asamblea General confirmó su resolución 558 (VI) y en el párrafo 3, pidió al Consejo de Administración Fiduciaria se sirviese incluir en su próximo y sucesivos informes a la Asamblea General una sección separada que trate del cumplimiento de ambas resoluciones citadas, especificando de modo particular las medidas que se hayan adoptado en lo concerniente a:

a) Consultas con los habitantes de cada territorio en fideicomiso relativas a las medidas ya adoptadas o que se proyecte adoptar para la consecución del gobierno propio;

b) La creación en cada territorio en fideicomiso de órganos representativos, ejecutivos y legislativos, y el alcance de sus facultades;

c) El establecimiento en cada territorio en fideicomiso del sufragio universal para los adultos y de elecciones directas;

d) La preparación y el nombramiento de aborígenes de cada Territorio en fideicomiso para desempeñar puestos de responsabilidad en la administración;

e) La creación de rentas públicas adecuadas.

Además, en la resolución se pedía al Consejo que especificase en cada caso sus conclusiones y recomendaciones, habida cuenta de las mencionadas resoluciones de la Asamblea General.

De los informes anuales pertinentes³⁵⁰ que el Consejo examinó ulteriormente, ninguno aludía en forma concreta a la resolución 558 (VI) ni, por consiguiente, contenía información alguna que las Autoridades Administradoras interesadas consideraran relacionada directamente con los términos de esa resolución. Esto es particularmente cierto en lo que respecta al cálculo del tiempo que se necesitaría para completar la aplicación de una o más de las diversas medidas destinadas a crear las condiciones previas necesarias para que el territorio en fideicomiso alcance el objetivo del gobierno propio o la independencia (inciso d) del párrafo 2 de la resolución), así como en lo tocante al plazo en el cual se espera que el territorio en fideicomiso alcance el objetivo del gobierno propio o la independencia (inciso e) del párrafo 2 de la resolución). También se aplica a la cuestión del grado en que las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria vigente serían adecuadas (inciso c) del párrafo 2), en el sentido de que ninguna de las Autoridades Administradoras ha señalado en sus informes anuales que no considere adecuadas las disposiciones vigentes.

Por otra parte, el Consejo tomó nota de que las informaciones incluidas regularmente en los informes anuales sobre la base del cuestionario provisional o revisado, y la información complementaria proporcionada por las Autoridades Administradoras por conducto de los representantes especiales de los territorios en fideicomiso o por algún otro medio, contienen informaciones relacionadas directa o indirectamente con todas las otras cuestiones planteadas en las dos resoluciones de la Asamblea General, a saber: medidas tendientes a conducir al territorio en fideicomiso hacia el objetivo del gobierno propio o la independencia; la forma en que se toman en cuenta las circunstancias particulares del territorio y de su po-

³⁵⁰ Se ha hecho referencia a la resolución en el informe anual del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre su administración del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, correspondiente al período que terminó el 30 de junio de 1952. A pesar de haberse calificado como región estratégica a este territorio en fideicomiso, sigue sujeto, a las disposiciones del Artículo 83 de la Carta, pudiendo considerársele por este hecho, y por la omisión que del mismo se hizo en la lista de territorios enumerados en la resolución 752 (VIII) de la Asamblea General, como no comprendido en los términos de las resoluciones mencionadas.

blación, así como la voluntad libremente expresada de los habitantes; y las cinco cuestiones concretas y conexas que figuran en el párrafo 3 de la resolución 752 (VIII). Además, en el caso del Togo bajo administración británica, el representante de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en el 13º período de sesiones de éste, que se está realizando un estudio de los términos del Acuerdo, teniendo en cuenta los cambios proyectados en la constitución de la Costa de Oro. En el 14º período de sesiones del Consejo, la Autoridad Administradora suministró datos³⁵⁷ sobre las modificaciones que se están introduciendo en la constitución de la Costa de Oro, y formuló propuestas relativas al futuro del territorio en fideicomiso.

II. MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONSECUCIÓN DEL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDENCIA POR PARTE DE LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

A. SITUACIÓN GENERAL

a) *Tanganyika*

Con excepción de ciertos servicios comunes que comparte con los territorios contiguos de Kenia y Uganda, Tanganyika es administrada como una unidad territorial separada. Dicho Territorio se ha encontrado, desde la iniciación del sistema de administración fiduciaria, en una etapa de desarrollo constitucional en la cual la Autoridad Administradora retiene las facultades ejecutivas y legislativas principalmente por medio del Gobernador y de su representante, pero las ejerce, en el caso de las primeras, con la asistencia de un Consejo Ejecutivo y, en el caso de las facultades legislativas, con el asesoramiento y aprobación de un Consejo Legislativo. En ambos organismos, funcionarios superiores responsables ante el Gobernador constituyen la mayoría, pero también están representados los tres grupos principales de la población del Territorio (africano, asiático y europeo) por personas designadas por el Gobernador. Las medidas vigentes más importantes adoptadas recientemente en materia de evolución del sistema constitucional, han tenido por objeto el mejoramiento y la ampliación de la representación de estos grupos, acrecentándose así la participación de tales grupos en la elaboración de normas políticas y en el desempeño de facultades legislativas.

b) *Ruanda Urundi*

Aunque el Territorio de Ruanda Urundi se encuentra asociado con el Congo Belga en una unión administrativa y aduanera, constituye una entidad distinta y posee recursos financieros propios, y una hacienda pública separada. Las leyes del Congo Belga se aplican a Ruanda Urundi sólo en los casos en que expresamente está así establecido, o cuando el Gobernador de Ruanda Urundi reconoce su vigencia mediante Ordenanza promulgada a este efecto. En la etapa actual del desarrollo del Territorio, la Autoridad Administradora mantiene el ejercicio directo de las facultades legislativas, en tanto que su representante en el Territorio está facultado para dictar disposiciones legislativas de emergencia. El Vicegobernador General tiene un Consejo Consultivo que ejerce las funciones ejecutivas ordinarias y se reúne anualmente en un breve período de sesiones; está integrado por fun-

cionarios oficiales, por representantes de diversos intereses europeos y por cinco miembros indígenas (a diferencia de la época en que se creó el Consejo—año 1947—en que no figuraba ninguna representación indígena).

La Autoridad Administradora ha declarado en su informe anual de 1952 que no es posible precisar en detalle la política mediante la cual se guiará al Territorio hacia la consecución del gobierno propio o la independencia. Ha declarado que su tarea consiste en asentar sobre bases firmes el desarrollo económico del Territorio, eliminar la amenaza del hambre y proporcionar a la población el mínimo de esa seguridad que es indispensable a todo progreso, fomentar los servicios médicos, hacer que todos los habitantes tengan acceso a la educación, resolver satisfactoriamente otros problemas sociales y, por último, desarrollar la conciencia moral, social y política de los indígenas en forma tal que se les pueda considerar capaces de gobernarse a sí mismos de acuerdo con las normas propias a todo pueblo civilizado y, de este modo, colaborar con los otros sectores de la población en el establecimiento progresivo de un gobierno investido de la representación directa de los habitantes.

c) *Camerún bajo administración británica*

El Camerún bajo administración británica no es administrado como una unidad territorial separada sino, de conformidad con el inciso a) del artículo 5 del Acuerdo de Administración Fiduciaria, como parte integrante del Territorio contiguo de Nigeria, con el cual comparte una misma constitución y los mismos órganos de gobierno. La presente constitución es de carácter federal y prevé para Nigeria y el Territorio en fideicomiso, en conjunto, tres asambleas legislativas regionales y consejos ejecutivos, así como una asamblea legislativa y ejecutiva central. En todos estos organismos hay una mayoría de africanos. Aunque las más altas facultades ejecutivas y legislativas están reservadas a la Autoridad Administradora, principalmente por medio del Gobernador que es su representante, en la práctica estos organismos se han convertido en los instrumentos ejecutivos y legislativos de ambos Territorios. Con arreglo a las reformas constitucionales aprobadas en 1953 y 1954 en las conferencias realizadas en Londres y Lagos, se acrecentará la autonomía de los órganos regionales, y la región Meridional del Territorio en fideicomiso será separada de la región oriental de Nigeria, y contará con su propio gobierno cuasi regional. La Autoridad Administradora ha informado, en una declaración sobre su política, que en 1956 otorgará a aquellas de estas tres regiones que así lo deseen, una autonomía completa con respecto a todos los asuntos que son de la competencia de los gobiernos regionales, siempre que se establezcan garantías para asegurar que los gobiernos regionales no adoptarán medidas que estorben o perjudiquen el ejercicio de las funciones del gobierno federal, o que, en alguna otra forma, hagan imposible el mantenimiento de la federación. En un plazo no mayor de tres años, a partir del mes de agosto de 1953, se convocará a otra conferencia en Nigeria, con objeto de introducir reformas en la constitución y examinar la cuestión del gobierno propio.

d) *Camerún bajo administración francesa*

El Camerún bajo administración francesa forma parte de la Unión Francesa con carácter de "Territorio asociado", categoría especial prevista en la Constitu-

³⁵⁷ T/1130-A/2660.

ción Francesa de 1946. Con arreglo a la interpretación que la Autoridad Administradora ha dado a las disposiciones constitucionales, la situación jurídica del Territorio está determinada por el Acuerdo de Administración Fiduciaria, no por la Constitución. El artículo 4 del Acuerdo dispone que el Camerún será administrado como una parte integral del territorio francés. En la práctica, las medidas básicas adoptadas con arreglo a la Constitución francesa para fomentar el progreso político de los Territorios franceses de Ultramar, son igualmente aplicadas con respecto al Camerún. Así, cabe señalar sobre todo que el Territorio en fideicomiso tiene representación en los organismos de la Unión Francesa, a saber, la Asamblea Nacional, el Consejo de la República y la Asamblea de la Unión Francesa y de este modo participa en la elaboración legislativa de la Unión Francesa en su conjunto, la que en su mayor parte está reservada a estos órganos de acuerdo con la Constitución francesa; cuenta con una Asamblea Territorial representativa que tiene facultades para adoptar decisiones y hacer consultas sobre cuestiones administrativas y presupuestarias de carácter local, si bien carece de facultades legislativas en el sentido más lato del concepto, y de la facultad de entender en las cuestiones políticas;³⁵⁸ la autoridad ejecutiva la ejerce un funcionario administrativo superior responsable ante el Ministro de la Francia de Ultramar; la población del Territorio tiene derecho al sufragio universal, cuya práctica va adquiriendo gradualmente; y los habitantes del Territorio tienen la condición jurídica de ciudadanos de la Unión Francesa. En cuanto a la cuestión relativa a la forma en que el Territorio en fideicomiso puede lograr, partiendo de la posición que ocupa dentro de la estructura de la Unión Francesa, el objetivo del gobierno propio o de la independencia, la Autoridad Administradora ha hecho la siguiente declaración formal: "En lo que concierne a la emancipación política, es evidente que cuando termine el régimen de administración fiduciaria, las poblaciones bajo administración fiduciaria tendrán la facultad, si así lo desean, de realizar sus aspiraciones fuera de la Unión Francesa. Sin embargo, hay que advertir que la calidad de miembro de la Unión Francesa ofrece a los pueblos interesados la oportunidad de progresar según sus deseos de estar unidos a Francia y formar una sola comunidad con iguales derechos y deberes, o adquiriendo la autonomía o independencia nacionales en forma de Estado libremente asociado por tratado con la República Francesa".

e) Togo bajo administración británica

El Togo bajo administración británica no es administrado como una unidad territorial separada sino,

³⁵⁸ El representante de Francia ante el Consejo de Administración Fiduciaria ha señalado que, en su opinión, algunas de las facultades deliberativas de la Asamblea Territorial, si bien no pueden llamarse facultades legislativas en el sentido estricto de la legislación francesa ni en el sentido formal del concepto, tienen sin embargo un carácter legislativo en su esencia. Asimismo, señaló que la prohibición que impide a la Asamblea Territorial discutir cuestiones de carácter político, se aplica al caso particular de las observaciones que la Asamblea puede presentar directamente, por conducto de su Presidente, al Ministro de la Francia de Ultramar. Declaró que tanto por el decreto orgánico como por la propia Constitución francesa, la Asamblea está investida de atribuciones políticas. Por último, señaló ejemplos tendientes a demostrar que la prohibición vigente en el plano político, en materia de presentación de observaciones, era objeto de una interpretación liberal por parte de la Autoridad Administradora.

de conformidad con el inciso a) del artículo 5 del Acuerdo de Administración Fiduciaria, como parte integrante del Territorio contiguo de la Costa de Oro, con el cual comparte una misma Constitución y los mismos órganos de gobierno. La actual Constitución consagra un régimen político unitario y prevé para la Costa de Oro y el Togo, en conjunto, un gabinete y un cuerpo legislativo en los que los africanos tienen una mayoría. Si bien las más altas facultades ejecutivas y legislativas están reservadas a la Autoridad Administradora, que las ejerce principalmente por medio del Gobernador, que es su representante, en la práctica estos organismos son los instrumentos de la acción política y legislativa en ambos Territorios. La Autoridad Administradora ha aceptado ciertas propuestas tendientes a un mayor progreso constitucional, en las que se prevén ciertos cambios en relación con la etapa de transición previa a la independencia; tales propuestas tienden hacia un incremento de la autonomía para ambos Territorios en su conjunto, preservando las actuales facultades que se reserva la Autoridad Administradora. En un memorándum relativo al futuro del Territorio en fideicomiso que fuera presentado a la Asamblea General, la Autoridad Administradora declaró que la Costa de Oro adquirirá la plena autonomía dentro de un cierto tiempo. Expresó que cuando llegue ese momento los objetivos del sistema de administración fiduciaria en el Togo habrán sido logrados en su mayor parte y que entonces se dará por terminado el Acuerdo de Administración Fiduciaria, pero que antes de que llegue ese momento las Naciones Unidas deberán adoptar medidas para determinar las aspiraciones de la población en cuanto a su futuro.

f) Togo bajo administración francesa

El Togo bajo administración francesa forma parte de la Unión Francesa en carácter de "Territorio asociado", categoría especial prevista en la Constitución de 1946. En sus aspectos fundamentales, este vínculo y los efectos que derivan del mismo, son los mismos que en el caso del Camerún bajo administración francesa, y la reseña consignada anteriormente sobre la situación de este último se aplica por igual al Togo.

g) Samoa Occidental

Samoa Occidental está administrada como una unidad territorial separada, y cuenta con su propia Asamblea legislativa y su propio Consejo Consultivo Ejecutivo, cada uno de los cuales posee una mayoría de miembros que no son funcionarios del Gobierno. La Autoridad Administradora, que se reserva las más altas facultades ejecutivas y legislativas, está representada en el Territorio por un Alto Comisionado que, aunque es Presidente de la Asamblea Legislativa y jefe ejecutivo del Gobierno del Territorio, no tiene facultades extraordinarias. La facultad de vetar que tiene el Alto Comisionado y la de revocar leyes locales de que está investida la Autoridad Administradora, no han sido nunca ejercidas y, en realidad, el poder ejecutivo y legislativo en el Territorio son funciones de los dos principales órganos gubernativos de Samoa.

En su mayor parte, estos aspectos del régimen constitucional tienen su origen en la Enmienda de Samoa de 1947 (Samoa Amendment Act), promulgada por la Autoridad Administradora, y han sido objeto de modificaciones ulteriores mediante enmiendas legislativas. La Autoridad Administradora ha anunciado que está dispuesta a convocar una convención constitucio-

nal representativa antes de fines de 1954, con objeto de estudiar el régimen constitucional que regiría en el futuro al Estado autónomo de Samoa Occidental.

h) *Nauru*

El Territorio de Nauru es administrado como una unidad territorial separada. El Acuerdo de Administración Fiduciaria ha designado a los Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido como autoridad conjunta para la administración del Territorio; en nombre de esta autoridad, el Gobierno de Australia ejerce todos los poderes de legislación, administración y jurisdicción. Estas funciones se ejercen a través de un administrador, que tiene la facultad de promulgar ordenanzas para asegurar la paz, el orden y el buen gobierno del Territorio, sujetas a confirmación o desautorización por parte de la Autoridad Administradora. Este régimen constitucional ha prevalecido durante el período del sistema de Administración Fiduciaria.

i) *Nueva Guinea*

Nueva Guinea no es administrada como una unidad territorial separada, sino en forma conjunta con el Territorio australiano de Papua; el artículo 5 del Acuerdo de Administración Fiduciaria incluye disposiciones relativas a una unión aduanera, fiscal o administrativa, y prevé servicios comunes para ambos Territorios. Estos dos Territorios, que la legislación pertinente llama "Territorio de Papua y Nueva Guinea", se encuentran a cargo de un Administrador quien es responsable ante la Autoridad Administradora. Además de tener una administración común, los dos Territorios comparten los mismos procedimientos ejecutivos y legislativos. En las cuestiones ejecutivas, el Administrador actúa con el asesoramiento y asistencia de un Consejo Ejecutivo integrado por funcionarios designados por la Autoridad Administradora. La legislación local está a cargo de un Consejo Legislativo, en el cual la mayoría está compuesta de funcionarios del Gobierno, y cuyas decisiones están sujetas igualmente a la aprobación expresa de la Autoridad Administradora o de un representante de la misma.

El actual régimen constitucional deriva de la Ley sobre Papua y Nueva Guinea de 1949-1950, promulgada por la Autoridad Administradora. En la Ley se declara la intención de mantener la identidad y el estatuto de cada uno de los dos Territorios, y se dispone además que, en Nueva Guinea, los gastos no serán inferiores a los ingresos que se recauden en ese Territorio.

B. CONSULTAS CON LA POBLACIÓN RESPECTO DE LAS MEDIDAS TOMADAS O PROYECTADAS CON MIRAS AL GOBIERNO PROPIO

a) *Tanganyika*

La base de la estructura actual del gobierno se encuentra en la constitución vigente de Tanganyika, la cual está establecida en las Ordenes de Tanganyika, promulgadas en Consejo, de 1920, 1926, 1939, 1948 y 1949, y en la Orden de Tanganyika promulgada en Consejo (Consejo Legislativo) de 1926 y en las Ordenes de enmienda de 1935, 1937, 1945, 1948 y 1949. La información de que dispone el Consejo indica que tales medidas no han sido resultado de ninguna consulta directa o específica previa con los habitantes, pero que las reformas recientemente adoptadas se deben a investigaciones especiales en las cuales la opi-

nión pública tuvo participación mediante discusiones auspiciadas a ese efecto. El 3 de diciembre de 1949, el Gobernador nombró una Comisión de Desarrollo Constitucional con objeto de examinar la estructura constitucional del Territorio, tanto en el plano local como en el territorial, y de formular recomendaciones para el futuro desarrollo constitucional del mismo. La Comisión estuvo compuesta de dos miembros oficiales y de los 14 miembros no oficiales del Consejo Legislativo (siete europeos, tres asiáticos y cuatro africanos, designados por el Gobernador). El informe de la Comisión³⁵⁰ expresa que su subcomisión ambulante visitó 15 lugares a lo largo del Territorio, y atendió reclamaciones o recibió memorandums de unas 140 personas y organizaciones africanas, asiáticas y europeas. La Comisión declaró que el público en general no había demostrado todo el interés que era de esperarse; que un cierto número de europeos habían expresado claramente su deseo de aguardar que el Consejo Europeo de Tanganyika emprendiese una política común; y que, en el caso de los africanos, el interés político de la mayoría era puramente local. En términos generales, en opinión de los grupos mejor informados de todas las razas, el desarrollo económico y político del Territorio debe fundamentarse en una asociación activa, basada en la confianza mutua entre las tres razas más numerosas; no se observó que existiese ninguna aspiración vehemente de reformas.

Las principales recomendaciones de la Comisión fueron que se considerase el nombramiento de un africano en el Consejo Ejecutivo (esta recomendación fué atendida inmediatamente), que se aumentase considerablemente el número de miembros del Consejo Legislativo, que se mantuviese la mayoría de representantes del gobierno hasta que se hubiese logrado una mayor experiencia, que los asientos en el Consejo correspondientes a miembros no oficiales fuesen distribuidos por igual entre las tres razas, que se designase un número limitado de miembros no oficiales como parte del sector oficial del Consejo. Asimismo, la Comisión recomendó el establecimiento de administraciones regionales, apoyadas por consejos regionales interraciales, consejos interraciales de distrito que tengan, por regla general, una mayoría de miembros no oficiales, así como la adopción de reformas en el plano del gobierno urbano local. La Comisión aceptó el principio de la representación electiva en el Consejo Legislativo, y recomendó que se realizasen cuanto antes las elecciones para la integración de los consejos regionales y de distrito.

Con ciertas reservas, el Gobernador y la Autoridad Administradora aprobaron en principio las recomendaciones del Comité. En 1952, un Comisionado Especial³⁶⁰ fué designado para que realizara un estudio más detenido de las propuestas relativas a los consejos de distrito, regionalización y sistema electoral. En su informe,³⁶¹ de fecha 29 de septiembre de 1952, el Comisionado Especial dejó constancia de que discutió con "numerosos representantes de todas las razas y comunidades, oficiales y particulares", pero declaró

³⁵⁰ Tanganyika: Informe de la Comisión de Desarrollo Constitucional, 1951. (*Report of the Committee on Constitutional Development, 1951*).

³⁶⁰ Profesor W. J. M. Mackenzie, Victoria University of Manchester, Inglaterra.

³⁶¹ Tanganyika: *Constitutional Development Commission—Report of the Special Commissioner appointed to examine matters arising out of the Report of the Committee on Constitutional Development*.

igualmente que "aun no existe una opinión pública formada en Tanganyika, con excepción de ciertas cuestiones de principio de carácter muy general". El Comisionado formuló recomendaciones detalladas para el establecimiento de consejos de distrito; propuso el desarrollo de una organización provincial administrativa en lugar de la regionalización, e hizo recomendaciones detalladas sobre procedimientos electorales.

Sobre la base de las recomendaciones del Comisionado, el Consejo Legislativo promulgó en 1953 una Ordenanza de la Administración Local que autorizaba el establecimiento de consejos de distrito. A principios de 1954 se hizo un anuncio sobre los cambios propuestos con respecto al Consejo Legislativo; en gran parte estos cambios están de acuerdo con los recomendados por la Comisión de Desarrollo Constitucional.

b) Ruanda Urundi

La base de la actual estructura del gobierno se encuentra en la Ley del 21 de agosto de 1925, y en decretos y ordenanzas que, sobre la base de esa Ley, fueron promulgadas por la Autoridad Administradora o en nombre de la misma. Las ordenanzas y decretos mencionados son, concretamente, una ordenanza legislativa del 4 de octubre de 1943 en la que se determinan las facultades del *Bami*, de los jefes y de los subjefes; un decreto del 4 de marzo de 1947 en el que se establece el Consejo del Vicegobierno General; y un decreto del 14 de julio de 1952 por el que se reorganiza la estructura política indígena. La organización constitucional del Territorio ha sido el resultado de las discusiones habidas en los dos *conseils de pays*.

c) Camerún bajo administración británica

La base de la actual estructura de gobierno se encuentra en la vigente Constitución de Nigeria y el Camerún, esto es, la Orden de Nigeria promulgada en Consejo (Constitución) del año 1951, y en las enmiendas aprobadas en 1953 y 1954, aun sujetas a promulgación formal. Aunque la aprobación final y la promulgación de la legislación constitucional están reservadas a la Autoridad Administradora, tanto la Constitución de 1951 como las enmiendas propuestas ahora han sido resultados de consultas, realizadas especialmente con ese objeto, con los representantes de Nigeria y el Camerún.

Es así que la Constitución de 1951 se basó en gran parte en las propuestas formuladas por una conferencia general celebrada en 1950 y compuesta por 53 miembros, todos los cuales eran africanos con excepción de tres. Antes de esta conferencia se realizaron consultas con la población de ambos territorios tanto en las aldeas como en el plano provincial y regional. Para las consultas en el plano regional, dos representantes del Camerún septentrional asistieron a la Conferencia Regional del Norte, aunque ningún representante de esta parte del Territorio en fideicomiso asistió a la conferencia general. Cuatro representantes del Camerún meridional participaron en la conferencia regional del Este, y un miembro representó con carácter especial a esta parte del Territorio en la conferencia general.

Entre las cuestiones ventiladas en estas consultas se encuentra la relativa a si sería o no necesaria alguna fórmula especial de estructura constitucional para el Camerún, en vista de que se trata de un territorio en fideicomiso. Los dos representantes del Camerún septentrional ante la Conferencia Regional del Norte,

declararon que debía continuar el régimen de administración fiduciaria. Sin embargo, la conferencia en su conjunto aprobó las conclusiones siguientes: a) que el territorio en fideicomiso del Camerún en la región septentrional debía continuar siendo administrado como parte de la región septentrional, y b) que debía ponerse fin al régimen de administración fiduciaria. En las propuestas finales sobre constitución, no se retuvo sino la primera de estas conclusiones. En el caso del Camerún meridional, los representantes de este sector se manifestaron en favor de una separación regional del Camerún, pero la Conferencia Regional del Este, en su conjunto, aprobó la idea de que continúe la administración del Camerún meridional como parte de Nigeria Oriental. Sin embargo, la conferencia sugirió que se podrían satisfacer adecuadamente las aspiraciones del Camerún meridional mediante una disposición especial que previera la representación de este territorio en los órganos regionales y centrales del gobierno. Estas propuestas fueron aceptadas ulteriormente por el representante del Camerún meridional en la conferencia general y fueron finalmente incorporadas en la Constitución de 1951.

A principios de 1953, una crisis política ocurrida en la Asamblea (House of Assembly) de Nigeria oriental, en la que el Camerún meridional estaba representado, así como divergencias aparecidas en la Administración Central, persuadieron a la Autoridad Administradora de que debía modificarse la Constitución de 1951 a fin de conceder una mayor autonomía regional. Al mismo tiempo, se renovaron las demandas de la población del Camerún meridional en favor de una separación regional del territorio en fideicomiso. A raíz de esto, el Secretario de Estado del Reino Unido convocó a una conferencia a reunirse en Londres, a la que se invitó a seis delegados por cada región, juntamente con un delegado que represente especialmente al Camerún, para discutir la revisión de la Constitución. El informe de la conferencia³⁶² señala que en una entrevista que el Secretario de Estado sostuvo en forma separada con el delegado del Camerún y otros representantes del Territorio,³⁶³ los representantes del Camerún meridional expresaron la esperanza de que se llegaría a establecer una unidad regional separada que comprendiera a todo el territorio en fideicomiso. Sin embargo, el portavoz del Camerún septentrional declaró que esa parte del territorio deseaba que se mantuviese la actual asociación con Nigeria septentrional. La delegación del Camerún aclaró entonces que deseaba lograr una separación regional para el Camerún meridional, así como una representación en los organismos centrales de Nigeria. El Secretario de Estado convino en esto último, sujeto a un estudio fiscal y al resultado de nuevas elecciones a realizarse en el Camerún meridional para la integración de la Asamblea Oriental (Eastern House of Assembly), y aceptó de antemano el resultado de tales elecciones como una indicación de la opinión pública del Camerún sobre el asunto. En estas elecciones, el Kamerun National Congress, partido que estaba en favor de la separación regional, obtuvo 12 bancas de las 13 reservadas para

³⁶² United Kingdom Colonial Office: Report by the Conference on the Nigerian Constitution held in London in July and August 1953 (Cmd. 8934).

³⁶³ El delegado, Dr. E. M. L. Endeley, dirigente del principal partido político del Camerún meridional, estuvo acompañado de dos consultores. Además, tanto la delegación de la Región Oriental como la de la Región Septentrional incluyó una persona del Camerún.

los miembros del Camerún meridional. Posteriormente, cuando a principios de 1954 se reanudó en Lagos la conferencia constitucional, se convino en que el Camerún meridional sería separado de la Región Oriental para concedérsele carácter de Territorio Federal, asegurándose así su participación en los recursos financieros de la Federación, así como sus propios órganos legislativos y ejecutivos para ocuparse de los asuntos regionales.³⁶⁴ Mediante un procedimiento menos formal de consultas locales, la Autoridad Administradora introdujo gradualmente algunas reformas en el plano del gobierno local, tendientes especialmente a ampliar las bases de las actuales instituciones tradicionales o cuasi tradicionales. En el caso del Camerún meridional, en 1950 se promulgaron ciertas disposiciones legales como resultado de las recomendaciones formuladas por un comité especial de la Asamblea Oriental (Eastern House of Assembly), si bien las mismas no han sido aún puestas en vigencia en el territorio en fideicomiso.

d) Camerún bajo administración francesa

La base de la estructura actual del gobierno y de la administración del Camerún se encuentra, por una parte, en la Constitución Francesa de 1946 y, por la otra, con arreglo a las disposiciones de esa Constitución, en las leyes promulgadas por el Parlamento Francés y en las reglamentaciones dictadas por el Poder Ejecutivo. La Constitución, así como la aplicación de sus disposiciones en el Camerún, no ha sido el resultado de ninguna consulta especial y directa con los habitantes. La propia constitución, sin embargo, se originó en las deliberaciones de dos Asambleas Constituyentes celebradas en Francia en 1945 y 1946 respectivamente. Cada una de estas Asambleas estuvo integrada por representantes electos en Francia y en los Territorios de Ultramar; esos territorios estuvieron representados por 36 diputados elegidos por ciudadanos franceses y por 24 diputados (de los cuales 12 eran de Argel) electos por personas especialmente calificadas aunque desprovistas de la ciudadanía francesa. En el Camerún, un número de votantes eligió a un diputado para representar a los ciudadanos franceses (para la segunda Asamblea Constituyente se registraron 2.216 electores) y uno para representar a las personas carentes de la ciudadanía francesa (16.146 electores registrados). El segundo proyecto de constitución fue aprobado el 13 de octubre de 1946 por plebiscito de todos los ciudadanos franceses, y fue promulgada el 27 de octubre de 1946. La primera legislación que creaba las nuevas instituciones políticas fue promulgada por la misma Asamblea Constituyente.³⁶⁵ La legislación promulgada posteriormente en esta materia tampoco ha sido resultado de ninguna consulta directa con los habitantes. Las facultades legislativas con respecto al derecho penal, las libertades civiles y la organización política y administrativa en los Territorios de Ultramar, continúan, de conformidad con la Cons-

titución, en manos del Parlamento Francés (Assemblée nationale y Conseils de la République); en todas las demás cuestiones las leyes francesas sólo son aplicables en virtud de disposición expresa o de decreto que haga extensivas tales leyes, previa consulta con la Assemblée de l'Union française; al mismo tiempo, el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, previa consulta con la Assemblée de l'Union française, puede decretar disposiciones especiales con respecto a cada Territorio de Ultramar. En la práctica, lo corriente es que las leyes más importantes aplicables a los territorios en fideicomiso sean promulgadas en forma de leyes con fuerza en todos los Territorios de Ultramar que posean instituciones análogas.

e) Togo bajo administración británica³⁶⁶

La base de la actual estructura del gobierno se encuentra en la Constitución vigente en Costa de Oro y Togo, cuyo principal instrumento es el Decreto (Constitución) de la Costa de Oro promulgado en Consejo en 1950, que entró en vigor en 1951. Si bien la aprobación final y la promulgación de las legislaciones constitucionales están reservadas a la Autoridad Administradora, tanto la Constitución de 1951 como las enmiendas ahora proyectadas son el resultado de consultas realizadas con los representantes de la población de la Costa de Oro y Togo, en su conjunto.

Así, la constitución actual se basa en las propuestas formuladas con motivo de una serie de consultas que se iniciaron con una investigación sobre los disturbios ocurridos en 1948 en Costa de Oro y, en menor grado, en el Togo. Esta investigación fue realizada por un grupo de personas independientes comisionadas por el Gobierno del Reino Unido. Las propuestas de esta Comisión³⁶⁷ para llevar a cabo reformas políticas y de otra índole, que tendían a acrecentar considerablemente la participación popular en el gobierno, fueron luego examinadas por un Comité compuesto en su totalidad por africanos ("Coussey" Committee), que fuera establecido por el Gobierno de Costa de Oro. Aunque el Togo no estaba representado en ese Comité, y aunque el Mandato del mismo no comprendía expresamente al territorio en fideicomiso, se ocupó principalmente, como lo hiciera la anterior Comisión Investigadora, de recibir representaciones orales o escritas de las partes interesadas, grupos y personas y, por consiguiente, celebró audiencia y recibió memorandums de varias partes del territorio en fideicomiso, así como de Costa de Oro. Su Subcomité de Administración local pasó dos días en el Togo meridional y un día en el Togo septentrional; y su subcomité de estructuras regionales pasó un día en el Togo meridional. Se entrevistó a funcionarios locales, jefes y consejos, así como representantes de All-Ewe Conference. Algunos de los memorandums y telegramas recibidos por el Comité provenían del Togo. Las nuevas propuestas³⁶⁸ que formuló el Comité después de realizar estas consultas, fueron en general aceptadas por la Autoridad Administradora como base de un

³⁶⁴ En el documento T/C.1/L.37 se reproducen resúmenes del informe de la conferencia, correspondientes al período de reanudación.

³⁶⁵ En el documento T/AC.14/6, figura una exposición más detallada de la evolución que ha sufrido la Constitución, a la que se limita la reseña que se da en este documento. En el curso del primer examen realizado por el Comité de Uniones Administrativas de los vínculos existentes entre los territorios en fideicomiso y la Unión Francesa, el representante de Francia declaró que la población indígena no ha planteado objeción alguna a la asociación del Camerún con la Unión, y que puede considerarse que el sistema goza del apoyo decidido de los habitantes (T/338).

³⁶⁶ No figuran en este documento las consultas relacionadas con la proyectada reconstitución del Consejo Mixto para los asuntos del Togo, debido a que tales consultas han sido objeto de un informe especial preparado por el Consejo de Administración Fiduciaria (A/2669).

³⁶⁷ *Report of the Commission of Inquiry into Disturbances on the Gold Coast, 1948, Colonial No. 231.*

³⁶⁸ Costa de Oro: *Report to His Excellency the Governor by the Committee on Constitutional Reform, 1949, Colonial No. 248.*

mayor progreso hacia el gobierno propio previsto por la Constitución de 1951.³⁶⁹

En lo que concierne a Togo, las propuestas denotaban una orientación general favorable a la confirmación y fortalecimiento de la unión de las dos partes del Togo con las regiones adyacentes de Costa de Oro, permitiendo de este modo que aquel territorio participara del progreso constitucional como si fuese parte de la Costa de Oro. Además de lograr una mayor representación en el cuerpo legislativo de Costa de Oro, que tendría mayores facultades y una representación en mayoría en el seno del Consejo Ejecutivo, el Togo participaría en los cambios proyectados en la estructura regional de Costa de Oro. El Comité recomendó que se adoptara en cierto grado la descentralización tanto de las funciones ejecutivas como de las administrativas hasta en el plano regional; y con sus propuestas incluían el establecimiento de una nueva región Togo Trans-Volta en la que el Togo meridional estaría unido a la parte sudoriental de Costa de Oro, para que constituyera una unidad demográfica de lengua predominantemente ewé. El Togo septentrional seguiría formando parte de los territorios septentrionales de Costa de Oro.

El Comité estimaba que estas recomendaciones contrariarían con la aprobación de los habitantes de las regiones interesadas. Observaba, sin embargo, que los representantes de tres de los Estados indígenas de esa región, quienes sostenían el criterio de que el Togo meridional debía constituir una unidad separada, hicieron objeciones a su propuesta para el Togo meridional. A causa de esta oposición y en vista de la situación especial del territorio en fideicomiso, la Autoridad Administradora retiró su aprobación a la propuesta regional hasta que "se determine la opinión ponderada de la población".³⁷⁰ El Comité informó luego al Consejo de Administración Fiduciaria acerca de los progresos realizados en las consultas sobre esta materia con las Autoridades Indígenas de la región; por último, luego de haberse aprobado la decisión de convertir la organización regional de Costa de Oro en una entidad puramente administrativa, sin la descentralización de las facultades ejecutivas recomendada por el Comité, la Autoridad Administradora informó que había aprobado la información de una nueva región Togo Trans-Volta.

Estos mismos procedimientos principales de consulta tuvieron igualmente las consecuencias siguientes: reforma del sistema de administración local, tanto en el Togo como en Costa de Oro; instauración del sufragio universal de los adultos, que se llevó a cabo en dos etapas y se limitó al Togo meridional en lo que respecta a las elecciones legislativas, pero ejercido directamente en todo el territorio en fideicomiso en lo que respecta a las elecciones para la administración local; y creación de una Comisión de Servicio Público para asesorar al Gobernador sobre la fiscalización de la administración pública, incluso la africanización de la misma. Además, la Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria que en 1952, antes de introducirse las reformas en el gobierno local del Togo, se realizaron consultas con el fin de dar la oportunidad a la población interesada de expresar sus opiniones sobre la exacta jurisdicción territorial y la constitución de cada consejo local.

³⁶⁹ Costa de Oro: *Statement by H. M. Government on the Report of the Committee on Constitutional Reform, Colonial No. 250.*

³⁷⁰ *Colonial No. 250, op. cit.*

Consultas con las poblaciones de la Costa de Oro y el Togo precedieron a la publicación en 1953, por parte del Gobierno de Costa de Oro, de las propuestas³⁷¹ para una mayor reforma constitucional "con respecto al período limitado de transición que se necesita para poder realizar, con miras a la independencia, los arreglos constitucionales y administrativos indispensables". El procedimiento de consulta consistió en una invitación del Primer Ministro de Costa de Oro, formulada en una declaración del 16 de octubre de 1952, a los consejos regionales y autoridades tradicionales, así como a todo partido político o grupo, para que presentaran por escrito sus puntos de vista; luego de considerar estos puntos de vista, el Gobierno formularía (como lo hizo) sus puntos de vista y los presentaría para ser discutidos en la Asamblea Legislativa. El Gobierno informó que se había distribuido profusamente un total de 255.280 copias de esta declaración. Las representaciones formuladas procedieron de 131 consejos, partidos y grupos políticos de Costa de Oro y Togo. A raíz de los pedidos para que se siguiera un procedimiento de consulta más directo, el Primer Ministro celebró ulteriormente reuniones separadas con las autoridades regionales, con los partidos políticos minoritarios de la Costa de Oro y con el Trades Union Congress.

El Primer Ministro no propuso que se considerase la situación del territorio en fideicomiso como un tema concreto o separado de estas consultas, si bien ese punto fué objeto de una declaración especial³⁷² en el curso de las propuestas ulteriores del Gobierno, declaración en la que se expresó que, en lo que respecta a la región septentrional, "existe una demanda unánime, frecuentemente reiterada, de la población de la región septentrional para que dicha región forme parte de los territorios septentrionales de Costa de Oro", y que, en el caso de la región meridional, "existe en el Togo meridional un sentimiento creciente en favor de la integración de dicho Territorio con Costa de Oro".

Las exposiciones que el Gobierno estudió antes de formular sus puntos de vista incluían, según información proporcionada al Consejo de Administración Fiduciaria en su 13º período de sesiones, 11 grupos de togoleses. La mayoría de tales representaciones figuran en una lista consignada como apéndice³⁷³ de las propuestas del Gobierno para que se instauren en el Togo meridional algunos de los consejos locales y organizaciones políticas; el Gobierno lamentó que no se hubiera podido realizar consultas con el Consejo de Togo Trans-Volta, debido a que este organismo todavía no había sido creado, pero manifestó que se había tomado plenamente en cuenta los puntos de vista expresados por las autoridades tradicionales de la región. Las propuestas del Gobierno indicaban además que las consultas respecto de la población del Togo septentrional consistieron en la presentación de puntos de vista por parte del Consejo de los Territorios Septentrionales, organismo éste en que está combinada la representación de las regiones septentrionales de la Costa de Oro y de Togo, y de cuyos 22 miembros en 1952 seis eran residentes o nativos del Territorio en fideicomiso.

Los puntos de vista que fueron presentados en esta forma con respecto a la situación del Togo, están resu-

³⁷¹ Costa de Oro: *The Government's Proposals for Constitutional Reform, 1953.*

³⁷² El texto íntegro figura en la parte II, capítulo VI, de este informe.

³⁷³ *Proposals, op. cit., appendix B.*

midos en las propuestas del Gobierno. En el caso del Togo septentrional, una declaración unánime presentada por el Consejo de los Terroristas Septentrionales incluía la petición siguiente:

“Que la cuestión del porvenir del Sector Septentrional del Togo bajo la administración fiduciaria del Reino Unido, es una cuestión que debe ser resuelta antes de obtenerse una completa autonomía, puesto que cuatro de los más importantes Estados se extienden en el interior de ese Territorio y los jefes principales de la población no están dispuestos a que sus Estados sean desmembrados por una línea de delimitación internacional.”

Las representaciones hechas con respecto al Togo fueron igualmente resumidas por el Gobierno en la forma siguiente:

“Algunos de los organismos que formularon representaciones sobre la reforma constitucional, plantean la cuestión del Togo bajo la administración fiduciaria del Reino Unido; la mayoría de estas representaciones se referían directamente a los asuntos del Togo. Esos organismos expresaron el deseo de que el Togo británico se constituyese en una unidad dentro de un territorio autónomo de Costa de Ooro (o “Ghana”, como lo llaman algunos). Algunos pocos grupos manifestaron que debía constituirse en una unidad federal, o que en el Gabinete debería haber un ministro para los asuntos del Togo”.

Las propuestas para realizar modificaciones provisionales en la constitución, que fueron formuladas por el Gobierno, aprobadas por la Asamblea Legislativa y aceptadas por la Autoridad Administradora, implican que el Territorio en fideicomiso continuará siendo administrado como parte integrante de Costa de Oro y, por consiguiente, que seguirá participando como antes de los nuevos progresos que se realicen en materia constitucional, como si fuese parte de Costa de Oro.³⁷⁴

La Autoridad Administradora, al opinar que debe ponerse fin al Acuerdo de Administración Fiduciaria cuando Costa de Oro obtenga la plena autonomía, propone ahora que las Naciones Unidas adopten medidas para determinar, de conformidad con el Artículo 76 de la Carta, la opinión de los habitantes del Territorio en fideicomiso en lo que respecta al futuro estatuto del Territorio. Ha declarado que estaría dispuesto a convenir en la realización de un plebiscito si, después que la Misión Visitadora de 1955 haya informado, las Naciones Unidas desean realizar nuevas investigaciones.

f) *Togo bajo administración francesa*³⁷⁵

Como en el caso del Camerún bajo administración francesa, la base de la actual estructura del gobierno y de la administración del Togo bajo administración francesa se encuentra, por una parte, en la Constitución Francesa de 1946 y, por la otra, con arreglo a las disposiciones de esa Constitución, en las leyes promulgadas por el Parlamento francés y en las reglamentaciones dictadas por el Poder Ejecutivo. De modo análogo, la Constitución y la aplicación de sus disposi-

ciones al Territorio en fideicomiso por medio de la legislación pertinente, no han sido el resultado de ninguna consulta especial y directa con los habitantes del Togo. La reseña dada en el caso del Camerún en cuanto a la evolución de la Constitución y del procedimiento legislativo prescrito por la misma, se aplica igualmente al Togo, salvo que en las Asambleas Constituyentes el Togo no estaba representado en forma separada sino conjuntamente con la colonia adyacente de Dhomey; ambos territorios tenían un diputado en representación de los ciudadanos franceses (de los cuales 1.577 fueron registrados como electores en la época de la segunda Asamblea) y un diputado en representación de las personas especialmente calificadas carentes de la ciudadanía francesa (de las cuales hubo 11.692 electores registrados).³⁷⁶

g) *Samoa occidental*

La base de la actual estructura del Gobierno se encuentra en la Ley de Samoa de 1921 (Samoa Act), en la forma en que fué enmendada ulteriormente en especial por la Ley de Enmienda de Samoa de 1947 y 1952 (Samoa Amendment Acts). Si bien la aprobación final y la promulgación de toda esta legislación constitucional están reservadas a la Autoridad Administradora, la Ley de Enmienda de Samoa de 1947, en particular, ha sido el resultado de consultas directas con los dirigentes tradicionales y otros representantes de la población de Samoa. Estas consultas se realizaron a raíz del pedido de autonomía que hicieron esos dirigentes y representantes a las Naciones Unidas en 1946, y fueron llevadas a cabo simultáneamente en 1947 por la Autoridad Administradora y por una misión especial del Consejo de Administración Fiduciaria. Las recomendaciones de la misión coincidieron en su mayor parte con las reformas constitucionales efectuadas en ese entonces.

El principio de las consultas ha constituido igualmente la base de las propuestas para la realización de otras reformas constitucionales anunciadas por la Autoridad Administradora el 19 de marzo de 1953. Estas propuestas presentaron al pueblo de Samoa los objetivos generales que, en opinión de la Autoridad Administradora, Samoa occidental deberá esforzarse por lograr en el plano político, administrativo, social y económico; y en las mismas se preveía que debería celebrarse con el Territorio una convención, representativa de todos los sectores de la comunidad samoana, antes de finalizar el año 1954, con objeto de considerar el régimen constitucional que regiría en el futuro a un Estado autónomo de Samoa occidental. Además de hacer una serie de observaciones generales relativas a las disposiciones que dicho régimen podría contener, la Autoridad Administradora aclaró que estas sugerencias sólo tenían el propósito de servir como guía para que los habitantes de Samoa pudiesen instituir una democracia parlamentaria, y que la Convención Constituyente estaría en libertad de examinar cualesquier otras propuestas. Las recomendaciones de la Convención serían cuidadosamente examinadas por el Gobierno de Nueva Zelandia, el que estaba dispuesto a llevar a la práctica cualquier régimen que fuera com-

³⁷⁴ Para más detalles sobre los cambios acordados, véase el documento T/C.1/L.36.

³⁷⁵ Debido a que las consultas relacionadas con el proyectado restablecimiento del Consejo Mixto para los Asuntos del Togo constituyen la materia de un informe formulado por el Consejo de Administración Fiduciaria (A/2669), tales consultas están excluidas del presente documento.

³⁷⁶ Véase también nota a la subsección d) *supra*. En la oportunidad mencionada en dicha subsección, el representante de Francia declaró que las reclamaciones contra el sistema de la Unión Francesa, que en algunos pocos casos excepcionales fueron recibidas del Togo, eran simplemente peticiones de aclaración, y que puede considerarse que el sistema cuenta con el apoyo decidido de los habitantes del Territorio en fideicomiso.

patible con sus responsabilidades de Autoridad Administradora y con su preocupación por el bienestar del pueblo de Samoa.

Desde la época en que estas propuestas fueron formuladas, el Alto Comisionado ha establecido un comité de trabajo, integrado por el *Fautua*, por los miembros no oficiales del Consejo Ejecutivo y por otros representantes de las comunidades samoanas y europeas, con objeto de discutir las propuestas de la Autoridad Administradora, determinar la opinión de los habitantes con respecto a las mismas y preparar un proyecto detallado de régimen constitucional para ser sometido a la consideración de la Convención Constituyente. Una de las primeras medidas adoptadas por el comité de trabajo, que se reunió en Samoa Occidental durante y después de septiembre de 1953, consistió en preparar una versión samoana simplificada de la declaración del Primer Ministro, que fué distribuida en todo el Territorio de Samoa Occidental, y en invitar a todos los habitantes a que expresasen sus puntos de vista sobre esa declaración.

h) *Nauru*

La base de la estructura actual del Gobierno se encuentra en la *Laws Repeal and Adopting Ordinance*, de 1922-1952, que faculta al Administrador a promulgar ordenanzas para el mantenimiento de la paz, el orden y el buen gobierno del Territorio. La información de que dispone el Consejo no indica que esta ordenanza haya sido el resultado de alguna consulta especial y directa con los habitantes.

i) *Nueva Guinea*

La base de la estructura actual del Gobierno se encuentra en la Ley de Papua y Nueva Guinea de 1949-1950, que entró en vigor el 1º de julio de 1949. La información de que dispone el Consejo de Administración Fiduciaria no indica que esta legislación haya sido el resultado de alguna consulta especial y directa con los habitantes.

C. DESARROLLO DE LOS ÓRGANOS DE CARÁCTER REPRESENTATIVO, EJECUTIVO Y LEGISLATIVO Y AMPLIACIÓN DE SUS PODERES

a) *Tanganyika*

Durante todo el período de administración fiduciaria, Tanganyika ha contado con un Consejo Ejecutivo, encargado de asesorar al Gobernador, y compuesto de ocho miembros oficiales y cinco miembros sin carácter oficial (tres europeos, uno asiático y, desde 1951, un africano), y un Consejo Legislativo formado por el Gobernador en calidad de presidente, 15 miembros oficiales de categoría superior y 14 miembros sin carácter oficial (cuatro africanos, tres asiáticos y siete europeos) nombrados por el Gobernador. En 1953 se nombró a un *speaker* para que lo presidiera; el primer *speaker* es un miembro no oficial. El Consejo Legislativo tiene plena competencia en materia legislativa y presupuestaria del Territorio, con sujeción a la aprobación del Gobernador.

La Autoridad Administradora aceptó en principio las recomendaciones de una Comisión de Desarrollo Constitucional,³⁷⁷ la cual propuso que se aumentara el número de miembros del Consejo Legislativo, y que las tres razas tuvieran igual representación en el grupo

de miembros sin carácter oficial, aunque los representantes oficiales debían seguir constituyendo la mayoría. La propia Autoridad Administradora decidió que el objetivo debía ser establecer el nuevo Consejo dentro de un plazo no mayor de cinco años a contar desde 1951; las propuestas concretas en este sentido fueron anunciadas a principios de 1954. El Consejo debe ser reconstituido durante el primer semestre de 1955, fecha en que el número de los miembros oficiales será aumentado a 28 y el número de los miembros sin carácter oficial a 27. Este último grupo estará compuesto de nueve africanos, nueve asiáticos y nueve europeos nombrados por el Gobernador e incluirá un miembro por cada raza en cada una de las ocho provincias y Dar-es-Salaam.³⁷⁸

Tanganyika también forma parte, con Kenia y Uganda, de una Alta Comisión y de una Asamblea Legislativa Central, establecida en 1948 y renovada en 1951 por recomendación unánime de cada uno de los tres cuerpos legislativos territoriales, que administran y legislan respectivamente en lo relativo a varios servicios comunes a los tres Territorios. En estos servicios están incluidas varias organizaciones dedicadas a investigaciones y otras actividades análogas, así como los departamentos de aduanas, impuestos sobre la renta, ciertos asuntos relativos a la producción y distribución, correos, telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y estadística. Los tres Territorios están representados por igual en la Asamblea Legislativa Central por un miembro oficial y cuatro miembros no oficiales.

En lo referente a la administración local, en dos provincias existen consejos provinciales mixtos compuestos de miembros oficiales y miembros no oficiales, y en 32 lugares hay autoridades urbanas con consejos mixtos. La gran mayoría de la población está sujeta al control directo de las Autoridades Indígenas, las cuales tienen su origen en instituciones tribales y en otras instituciones tradicionales; en algunos casos existen consejos elegidos, pero lo más corriente es que existan jefes asesorados por consejos. En 1953 se promulgaron leyes que permitían la creación de consejos interraciales de condado, distintos de las Autoridades Indígenas, pero hasta la fecha sólo se han establecido dos consejos provisionales.

b) *Ruanda Urundi*

Ninguna de las dos poblaciones, la indígena y la no indígena, participa directamente en el ejercicio de las facultades ejecutivas o legislativas. El Consejo de la Vicegobernación General, compuesto de miembros *ex-officio* y miembros designados, incluso cinco miembros indígenas, se reúne por lo menos una vez al año y cuantas veces sea necesario, tiene funciones consultivas en lo relativo al presupuesto, y sus deliberaciones pueden referirse a todas las cuestiones sometidas a su consideración por el Gobierno, y puede hacer sugerencias a este último.

Por el decreto de 14 de julio de 1952, que reformó la estructura política indígena, el número de consejos indígenas ha sido aumentado y los miembros de los consejos más importantes son seleccionados mediante un sistema de elección indirecta por los miembros de los consejos más bajos. En los consejos más importantes participan los representantes de los notables, así como los jefes a los que se les puede consultar sobre ciertas cuestiones sometidas por los *Bami* y los jefes.

³⁷⁷ Véase la subsección B a), *supra*.

³⁷⁸ *Address of the Governor to the Legislative Council, Budget Session*, 12 de mayo de 1954.

c) Camerún bajo administración británica

Mientras no se hayan constituido los órganos proyectados del Camerún Meridional, el Territorio en fideicomiso no tendrá órganos de carácter representativo, ejecutivo o legislativo propios que sean de un nivel más elevado que las dependencias administrativas locales. Antes de que entrara en vigor la Constitución de 1951, el Territorio no tenía representación indígena en los consejos legislativo y ejecutivo que compartía con Nigeria, pero el Camerún Septentrional como parte de la Región Septentrional de Nigeria, y el Camerún Meridional como parte de la Región Oriental, estuvieron representados en los consejos regionales basados principalmente en las instituciones tradicionales y tenían facultades financieras y consultivas.

En virtud de la Constitución de 1951 el número de miembros del Consejo Legislativo, que en adelante se llamó Cámara de Representantes, fué aumentado a 148 miembros incluyendo una mayoría (136) de representantes africanos elegidos por los consejos regionales, seis miembros *ex officio* y no más de seis miembros especiales. A esta Cámara se le dieron amplias facultades,³⁷⁹ con sujeción sólo al asentimiento oficial, en materia de gastos y legislación para los Territorios combinados. El Consejo Ejecutivo, que recibió el nombre de Consejo de Ministros, pasó a ser el principal órgano directivo político para Nigeria y el Camerún, y está integrado por el Gobernador, una mayoría (12) de Ministros africanos (cuatro nombrados por cada una de las tres Asambleas Legislativas Regionales) y un minoría (6) de miembros *ex officio*. Al Camerún Meridional se le dió una representación especial en estos dos órganos de gobierno; por lo menos cuatro de los 34 miembros de la Cámara de Representantes procedentes de la Región Oriental debían necesariamente, según la ley, ser nombrados por aquella parte del Camerún comprendida dentro de la Región Oriental, y por lo menos uno de los Ministros nombrados por la Cámara de Asamblea Oriental debía ser necesariamente un representante de una División del Camerún en la Cámara Oriental. En la práctica, el Camerún Meridional fué representado directamente en la Cámara Central de Representantes por seis miembros elegidos de la Cámara de Asamblea Oriental. Aunque no se estipuló una representación especial para el Camerún Septentrional, dos miembros del Camerún Septentrional fueron elegidos de hecho de la Cámara de Asamblea de la Región Septentrional.

En la esfera regional, los consejos ejecutivos fueron formados para que actuaran como los principales órganos encargados de la política regional. Un miembro del Camerún Septentrional se convirtió (en 1954) en miembro del Consejo Ejecutivo regional del Norte; en el Consejo Ejecutivo Regional del Este se requería por lo menos un miembro del Camerún Meridional. Al mismo tiempo, las anteriores asambleas regionales fueron ampliadas con una mayoría de miembros elegidos por un sistema de colegio electoral. En la Asamblea Regional del Norte, el Camerún Septentrional está representado por un jefe en la Cámara de Jefes y por tres miembros elegidos entre los 90 miembros elegidos de la Cámara de Asamblea. En la Cámara de

la Asamblea Oriental, el Camerún Meridional cuenta con 13 miembros elegidos de un total de 97. A estas Asambleas Legislativas regionales se les confirió facultades legislativas regionales con respecto a varios asuntos determinados, estando sometidas a la aprobación del Consejo Central de Ministros. A la Cámara Central de Representantes se le confiaron las facultades legislativas referentes a otras cuestiones.

De conformidad con las reformas constitucionales propuestas en 1953-1954, se ampliaría la Cámara Central de Representantes para que tuviera un total de 184 miembros elegidos en la proporción de uno por cada 170.000 habitantes; las elecciones para el nombramiento de estos miembros se celebrarían separadamente de las elecciones para las Asambleas legislativas regionales. El Camerún Meridional estaría representado por seis miembros y el Camerún Septentrional por cuatro. Esta última cifra señalaría un aumento considerable en la representación. En el Consejo de Ministros, en el que el número de miembros *ex officio* se reduciría de seis a tres y el de los ministros africanos de 12 a 10, la representación del Camerún quedaría como antes: a saber, un miembro procedente del Camerún Meridional. Las Asambleas legislativas regionales no continuarían estando parcialmente subordinadas, en lo que respecta a sus facultades, al Consejo Ejecutivo Central, aunque continuarían compartiendo las facultades legislativas con la rama ejecutiva federal en lo referente a todos los asuntos de interés común.

Los nuevos órganos que se piensa crear para las instituciones gubernamentales del Camerún Meridional diferirían de los órganos de las administraciones regionales, puesto que el Camerún Meridional no posee por el momento un pleno estatuto regional. Habría una participación comparativamente alta de funcionarios, los jefes tradicionales estarían representados, y la condición del Territorio quedaría protegida por el Gobernador General, que es el vínculo directo con la Autoridad Administradora. La Asamblea Legislativa, bajo la presidencia del Comisionado del Camerún, se compondría de 13 miembros elegidos, seis representantes de las Autoridades Indígenas, dos representantes de los intereses especiales no representados en otra forma y tres representantes oficiales. El Gobernador General tendría que dar su asentimiento a las leyes que se promulgaran. El Consejo Ejecutivo, igualmente bajo la presidencia del Comisionado del Camerún, se compondría de cuatro representantes elegidos entre los 21 miembros no oficiales de la Asamblea Legislativa, que serían nombrados por el Gobernador General, por recomendaciones del Comisionado, hechas en consulta con el dirigente del partido de mayoría en la Cámara y tres representantes oficiales. El Camerún Septentrional, que continuaría formando parte de la Región Septentrional de Nigeria, contaría con cinco miembros de la Cámara de Asamblea del Norte. Estos cinco miembros, con la posible adición de algunos miembros procedentes de las circunscripciones electorales situadas parcialmente dentro del Territorio en fideicomiso, podrían, al mismo tiempo, constituir una comisión consultiva cuya función consistiría en mantener informado al Gobierno Regional del Norte de la opinión del Camerún en lo que respecta a la legislación regional.

En la esfera de la administración local, la base del sistema administrativo continúan siendo los jefes tradicionales o cuasi tradicionales de las tribus o comunidades, reconocidos como Autoridades Indígenas dotadas de atribuciones para decidir en asuntos financieros

³⁷⁹ Además de sus facultades generales exclusivas, el Gobernador no puede dar su asentimiento a ningún proyecto de ley que a su juicio no sea compatible con los tratados o las obligaciones internacionales de la Autoridad Administradora, incluso las obligaciones que se derivan del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

y de gobierno. Sin embargo, en el norte, a fines de 1953, se había reemplazado a todas las Autoridades Indígenas individuales por Jefes asistidos por un Consejo. En el sur, las leyes que permiten la creación de consejos locales más modernos han estado en vigor desde 1950 en lo que respecta a la Región Oriental en conjunto, pero no han sido aplicadas todavía al Camerún. Las leyes relativas a la administración local serán de la competencia de la proyectada Asamblea Legislativa del Camerún Meridional.

d) Camerún bajo administración francesa

En el Territorio existen varios órganos representativos, particularmente una Asamblea Territorial (*Assemblée territoriale*) y consejos en varias comunas (*communes*) urbanas y rurales. El funcionario administrativo superior (*Haut-Commissaire*) ejerce el poder ejecutivo en nombre del Gobierno francés y, de conformidad con el sistema de la Unión Francesa, se ha dado a los habitantes participación en el proceso legislativo confiriéndoles una representación en los órganos del Parlamento francés.

En consecuencia, en 1946 se asignó al Camerún tres representantes entre los 591 diputados de la *Assemblée nationale*.³⁸⁰ Con ulterioridad se aumentó este número a cuatro, uno elegido por los ciudadanos franceses y tres por las diversas categorías de electores no ciudadanos. El Territorio en fideicomiso cuenta también con tres representantes en el *Conseil de la République*, uno elegido por el colegio electoral de ciudadanos franceses de la *Assemblée territoriale* y dos por el colegio de electores no ciudadanos (véase *infra*). El Territorio tiene además cinco representantes, cuatro de ellos africanos, en la *Assemblée de l'Union française* y dos representantes africanos en el *Conseil économique*.

Como se ha explicado antes, la Constitución francesa de 1946, después de investir al Parlamento francés de los poderes legislativos fundamentales,³⁸¹ dispone que en cada Territorio se cree una asamblea elegida y que el sistema electoral, la composición y la competencia de la asamblea se definirán en leyes dictadas para el efecto. Después de que el Parlamento aprobó la ley del 7 de octubre de 1946, se expidieron los decretos del 25 de octubre de 1946, en virtud de los cuales se establecían nuevas asambleas representativas (*Assemblées représentatives*) en los Territorios de Ultramar y en los Territorios Asociados en vez de las establecidas por un decreto anterior del Gobierno Provisional de la República. La mayor parte de las nuevas asambleas, incluso las del Camerún y Togo, se componían de dos secciones, la primera elegida por ciudadanos franceses y la segunda por electores no ciudadanos, comprendidos en cualquiera de varias categorías electorales. Las facultades de las asambleas eran de dos tipos: a) el derecho de adoptar decisiones en asuntos tales como la administración de los bienes muebles e inmuebles del Territorio, ciertas cuestiones sociales, empréstitos, tránsito de turistas, urbanismo, impuestos, derechos y contribuciones de toda clase; y b) el derecho de consulta obligatoria en lo referente a ciertos problemas, tal como el de la organización de los servicios administrativos. Cada asamblea discute el presupuesto presentado por la Administración, y está en

libertad de aprobar o rechazar asuntos no definidos como obligatorios, por ejemplo: deudas no pagadas, remuneración y conservación de funcionarios de los personales establecidos por ley o por decreto y fijar los gastos relativos a: fuerzas de policía, justicia, enseñanza, higiene pública, fondos especiales y gastos expresamente requeridos por ley. Cada Asamblea puede también hacer conocer sus opiniones al Gobierno y aprobar resoluciones sobre cuestiones que no tengan carácter político.

Por las leyes de 27 de agosto de 1947, 23 de mayo de 1951 y 6 de febrero de 1952, el Parlamento francés aumentó las categorías de votantes calificados y en otros aspectos modificó el sistema de sufragio y, por la ley últimamente citada, en el caso del Camerún, acrecentó el número de miembros que representaban la comunidad de ciudadanos franceses de 16 a 18, y el número de los que representaban la comunidad de electores no ciudadanos de 24 a 32. Esta ley también cambió el nombre de los órganos territoriales de *Assemblées représentatives* a *Assemblées territoriales*. Las facultades de la Asamblea Territorial del Camerún no fueron modificadas, aunque desde 1950 la Autoridad Administradora ha venido considerando la conveniencia de ampliarlas. En su informe anual correspondiente a dicho año, la Autoridad Administradora informó al Consejo de Administración Fiduciaria que había preparado proyectos de leyes encaminados a ampliar los poderes más allá de los reconocidos por el decreto de 25 de octubre de 1946; y en su noveno período de sesiones de 1951 informó al Consejo que esta ampliación de poderes se aplicaría particularmente a la aprobación de concesiones y enajenación de tierras. No obstante, de los varios proyectos de ley sometidos a la consideración del Parlamento francés en 1951, sólo uno—aquel que pasó a ser la ley de 6 de febrero de 1952, mencionada anteriormente—fue discutido sin demora; esta ley no modificó por sí misma la competencia de las asambleas de ultramar, pero dispuso que las leyes que ampliaban sus poderes deberían presentarse a más tardar en julio de 1952. Sin embargo, no se presentó ninguna ley en esa época, y tampoco en 1953 se promulgó ninguna ley al respecto. En el 13° período de sesiones, el representante de la Autoridad Administradora informó al Consejo que confiaba en que el Parlamento francés consideraría, antes del verano de 1954, las reformas políticas concernientes al Territorio, en particular aquellas que aumentaban las facultades deliberativas de la Asamblea Territorial. Declaró además que las reformas propuestas entonces incluían la creación de cierto tipo de consejo ejecutivo que capacitaría a la Asamblea Territorial a seguir de cerca la aplicación de sus decisiones.³⁸²

En lo concerniente a la administración local, los órganos representativos se están estableciendo en el Camerún por etapas. A partir de 1941, se han creado *communes-mixtes* urbanas en 12 centros; cada una está administrada por un Alcalde y un comité municipal nombrado por el Alto Comisionado. Una nueva evolución, gracias a la cual se espera reemplazar algunas de las *communes-mixtes* urbanas más pequeñas, consiste en la creación, en virtud del decreto del 21 de agosto de 1952, de 12 *communes-mixtes* rurales en tres de las 18 regiones administrativas del Territorio. La administración de cada una está a cargo de un funcionario nombrado por el Alto Comisionado al que

³⁸⁰ De los cuales 514 fueron elegidos por la Metrópoli, 40 por los Departamentos de Ultramar y 37 por los Territorios de Ultramar y Territorios Asociados (por ejemplo, en fideicomiso) (T/AC.14/6).

³⁸¹ Véase la subsección B d) *supra*.

³⁸² No se han puesto a disposición del Consejo ninguno de los textos de las diversas propuestas.

presta asistencia un concejo municipal elegido y que posee poderes deliberativos, particularmente en asuntos de presupuesto.

e) Togo bajo administración británica

Con excepción de la breve existencia, posterior a 1950, de un Consejo del Togo Meridional dotado de funciones consultivas y electorales, el Territorio en fideicomiso no ha contado con órganos representativo, ejecutivo o legislativo propios con categoría superior a aquella de las dependencias administrativas locales, ni tampoco se prevé su creación de conformidad con las reformas provisionales de la constitución. Hasta 1950, el Territorio tampoco tenía representación en los consejos ejecutivo y legislativo que, como partes integrantes de la colonia de Costa de Oro y de los Territorios Septentrionales, compartía con la Costa de Oro. En ese año, y en espera de la presentación del proyecto de Constitución de Costa de Oro de 1951, el nuevo Consejo del Togo Meridional fué autorizado a seleccionar un representante para que ocupara uno de los 32 asientos en el Consejo Legislativo de Costa de Oro. Los Territorios Septentrionales de Costa de Oro y, por lo tanto, el Togo septentrional, no tenían representación.

En virtud de la Constitución de Costa de Oro de 1951, un nuevo cuerpo legislativo, conocido con el nombre de Asamblea Legislativa, fué investido de poderes legislativos, sobre la totalidad de Costa de Oro y el Togo, previo asentimiento del Gobernador (y, en el caso del Territorio en fideicomiso, a las disposiciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria). Se aumentó el número de sus miembros a 84, de los cuales 75 debían ser elegidos; se confirió al Togo Septentrional una representación no definida, en el sentido de que formaba parte de los Territorios septentrionales, los cuales, en conjunto, disponían de 19 asientos; y al Togo Meridional se le asignaron concretamente tres de los 37 asientos reservados a la región conocida como la Colonia de Costa de Oro. Al Consejo Ejecutivo (que más tarde se llamó el Gabinete) se le dió, en virtud de la Constitución, una mayoría de miembros representativos africanos que, en la práctica, son miembros elegidos; dicho Consejo se convirtió en el órgano principal de la política gubernamental. Su composición y el número de sus miembros no se basó en consideraciones geográficas o territoriales, y no se nombró ningún representante del Togo en ese Consejo.

En la esfera regional, si bien la parte septentrional continuaba formando parte integrante de los Territorios Septentrionales y debía estar representada de esa manera en el Consejo de los Territorios Septentrionales, la posición administrativa del Togo Meridional fué modificada por el hecho de que fué combinada con la parte sudoriental de la Colonia de Costa de Oro para formar una nueva región, el Togo Trans-Volta. Esta modificación significaba la abolición del Consejo del Togo Meridional establecido en 1950 y la creación del Consejo del Togo Trans-Volta con facultades consultivas análogas, pero que ahora se componía de 21 miembros procedentes del Togo y 18 procedentes de Costa de Oro propiamente dicha.

Las reformas provisionales de la Constitución propuestas por el Gobierno de Costa de Oro en 1953, y que fueron aprobadas por la Autoridad Administradora, tendrán en especial los siguientes resultados, que afectarán por igual al Territorio en fideicomiso y a Costa de Oro: la creación de un Gabinete totalmente

representativo que será "responsable del gobierno autónomo interno del Territorio", con la salvedad de que continuarán en vigor las facultades reservadas del Gobernador y deberán cumplirse las obligaciones relativas a los asuntos exteriores, a la defensa del Togo y a ciertos asuntos relacionados con la policía,³⁸³ y la ulterior ampliación de la Asamblea Legislativa a 104 miembros, todos ellos elegidos directamente mediante el sufragio de los adultos, uno por cada una de las 104 circunscripciones electorales que comprende la totalidad de Costa de Oro y el Territorio en fideicomiso. Por lo tanto, la representación del Togo depende de la influencia que ejercen estas circunscripciones electorales, que ya han sido establecidas y cuyos límites no coinciden necesariamente con la frontera entre Costa de Oro y el Togo; de este modo, la población del Togo Septentrional está repartida entre tres circunscripciones electorales situadas dentro del Territorio en fideicomiso y entre otras cuatro situadas parcialmente dentro del Territorio, y la población del Togo Meridional está repartida entre cuatro circunscripciones electorales situadas dentro del Territorio y dos situadas sólo parcialmente en el mismo.

A las reformas constitucionales acompañaron también reformas relativas de la administración local. Una ordenanza sobre la administración local, aprobada por la Asamblea Legislativa en 1951, permitió que se reemplazaran, con propósitos de administración local, las antiguas Autoridades Indígenas, basadas en la autoridad tradicional, por consejos locales y de distrito, compuestos en sus dos terceras partes de miembros elegidos y la tercera restante de miembros tradicionales. Así, el Togo Septentrional quedó dividido en cuatro zonas de consejos de distrito, de los cuales cuatro están sólo parcialmente situados en el Territorio en fideicomiso; el Togo Meridional quedó dividido en tres zonas de consejos de distrito y 15 zonas de consejos locales, una de ellas con límites fuera del Territorio en fideicomiso. Las nuevas autoridades tienen facultades diversas, incluso la autoridad para cobrar impuestos locales.

f) Togo bajo administración francesa

La situación del Togo bajo administración francesa es, básicamente, la misma que la del Camerún bajo administración francesa, que ya ha sido descrita arriba, con diferencias sólo en cuestiones de representación y organización administrativa local. Por ejemplo, el poder ejecutivo lo ejerce, en nombre del Gobierno francés, el funcionario superior administrativo (el *Commissaire de la République*); el medio por el cual, con arreglo al sistema de la Unión Francesa, se ha dado a los habitantes participación en el proceso legislativo es el de la representación en los órganos del Parlamento francés. Desde 1946, el Togo ha tenido un representante en la *Assemblée nationale* elegido mediante un registro electoral único de las diversas categorías de votantes. El Territorio tiene dos representantes en el *Conseil de la République*, elegidos por los miembros de la *Assemblée territoriale*. Tiene también un representante en la *Assemblée de l'Union française*.

La descripción hecha en el caso del Camerún sobre la evolución y atribuciones de la *Assemblée représentative* (ahora *Assemblée territoriale*) se aplica también al Togo. Las mismas leyes de 27 de agosto de 1947, 23 de mayo de 1951 y 6 de febrero de 1952 crearon

³⁸³ *Statement of the United Kingdom Minister of State, Colonial Office, House of Commons*, 28 de abril de 1954. Véase también el documento T/C.1/L.36.

nuevas categorías de votantes calificados y modificaron el sistema de sufragio, y la última de las leyes citadas creó un sistema de colegio electoral único en el Togo para la elección de la Asamblea. Como en el caso del Camerún, desde 1950 la Autoridad Administradora ha estudiado la ampliación de las facultades de la Asamblea. Ya se ha señalado el proyecto de ley encaminado a modificar y ampliar los poderes de las Asambleas Representativas del Togo y del Camerún; dicho proyecto fué mencionado al Consejo en ese año; y en el 11º período de sesiones, al año siguiente, se informó al Consejo que se había presentado ante el Parlamento francés un proyecto de ley cuyo objeto es conceder una ampliación de poderes bien definida; la Autoridad Administradora se proponía transferir el mayor número posible de cuestiones consultivas a la categoría de temas sobre los cuales la Asamblea podía decidir. Sin embargo, se ha observado que el único proyecto de ley que afectaba la organización política de los territorios en fideicomiso y que realmente discutió el Parlamento francés en 1951, y se convirtió en ley en 6 de febrero de 1952, no modificaba por sí mismo la competencia de las asambleas de ultramar, sino que disponía que tales leyes deberían ser presentadas a más tardar el 1º de julio de 1952. Al mismo tiempo, la Autoridad Administradora informó al Consejo que estaba estudiando una propuesta mucho más liberal que la mencionada en 1951 y, en su informe de 1952, la Autoridad Administradora declaró que los proyectos de ley habían sido aprobados por el Consejo de Ministros y presentados a la consideración de la *Assemblée nationale*. Sin embargo, en 1953 no se aprobó ninguna de dichas leyes, pero el representante de la Autoridad Administradora informó al Consejo, en su 13º período de sesiones, que confiaba en que el Parlamento examinaría las reformas propuestas antes del verano de 1954. La Autoridad Administradora manifestó además que las propuestas presentadas a la *Assemblée nationale* incluían la creación de un Consejo de Gobierno (*Conseil de gouvernement*) compuesto igualmente por personas elegidas por la *Assemblée territoriale* y por personas nombradas por el *Commissaire de la République*.

En lo que respecta a la administración local, por un *arrêté* de 16 de julio de 1951 se estableció un nuevo sistema de consejos de distrito electivos (*conseils de circonscription*), debiéndose crear un consejo por cada distrito administrativo, que en cada caso sería elegido por un colegio electoral integrado por las personas designadas en las aldeas de conformidad con las prácticas habituales. Se debe consultar a estos consejos sobre diversos asuntos de carácter local, incluso impuestos, derechos, nuevas escuelas y otras obras, y pueden ser consultados sobre cualquiera otra cuestión que la Administración estime conveniente. En 1952 se presentaron a la *Assemblée nationale* propuestas encaminadas a incrementar los poderes de estos consejos, en especial con respecto a cuestiones financieras. Además, se ha otorgado el carácter de municipalidades a siete ciudades del Territorio, cada una con una comisión elegida y presidida por un funcionario. Una propuesta presentada en 1950 con objeto de elevar la categoría de la ciudad principal, Lomé, a la de *commune de moyen exercice*, con un alcalde elegido, ha sido aplazada en espera de que se aprueben leyes aplicables a los Territorios Franceses de Ultramar en su conjunto.

g) Samoa Occidental

En virtud de la Ley (enmendada) de Samoa de 1947, Samoa Occidental cuenta con una Asamblea Legisla-

tiva compuesta del Alto Comisionado como presidente, los dos *Fautuas* (altos jefes samoanos), 12 miembros samoanos elegidos, cinco miembros elegidos europeos y seis miembros oficiales nombrados por el Alto Comisionado. Los miembros elegidos europeos se seleccionan mediante votación secreta, de conformidad con un sistema de sufragio para los adultos, y el *Fono* de los *Faipules* (véase *infra*) selecciona a los miembros samoanos por lo general teniendo en cuenta las candidaturas presentadas por los *matai* (jefes de familia) de cada distrito. La Asamblea Legislativa tiene amplias facultades legislativas en lo concerniente a los asuntos internos y plena autoridad financiera, pero subordinada al asentimiento del Alto Comisionado. No obstante, la Asamblea no puede legislar sobre asuntos relativos a la defensa, a las relaciones internacionales, a las tierras de la Corona, al Servicio Público y a otras cuestiones reservadas. El Alto Comisionado ejerce el poder de veto sobre las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, y el Gobernador General de Nueva Zelandia puede, en el plazo de un año, rechazar una ley que haya recibido el consentimiento del Alto Comisionado. Pero, en la práctica, jamás se ha aplicado el veto ni se ha rechazado una ley aprobada por el Alto Comisionado.

El *Fono* de los *Faipules* ejerce también la representación samoana; dicho órgano se compone de 41 miembros elegidos por los *matai* (jefes de familia) de los distritos tradicionales. Sin embargo, este órgano es esencialmente consultivo, y por ley tiene derecho a expresar opiniones o hacer recomendaciones al Alto Comisionado.

La Ley (enmendada) de Samoa de 1952 dispone la participación de personas sin carácter oficial como miembros del Consejo Ejecutivo establecido en 1953. Este órgano se compone del Alto Comisionado, los dos *Fautuas*, tres miembros oficiales que son a la vez miembros de la Asamblea Legislativa, y cuatro miembros elegidos de la Asamblea Legislativa, tres samoanos y un europeo, que son nombrados teniendo en cuenta las candidaturas presentadas por ese órgano. Las funciones del Consejo Ejecutivo consisten en celebrar consultas con el Alto Comisionado y asesorarlo en la preparación, formulación y aplicación de la política de gobierno de Samoa Occidental. Existe también un Consejo de Estado, compuesto por el Alto Comisionado y dos *Fautuas*. Este no es un órgano ejecutivo, pero el Alto Comisionado está obligado a consultarlo respecto a todas las propuestas de carácter legislativo que serán sometidas a la Asamblea Legislativa, y concernientes a todas las cuestiones estrechamente relacionadas con las costumbres samoanas y a toda otra cuestión relativa al bienestar de Samoa Occidental y que el Alto Comisionado estime oportuno consultar.

Como se ha indicado anteriormente, la Autoridad Administradora ha propuesto que se celebre en el Territorio una convención constitucional representativa antes de que termine 1954, para considerar un sistema constitucional para el futuro Estado de Samoa Occidental. Entre los temas sugeridos para su inclusión en el programa de esta convención, figura la creación de una Cámara de Representantes única y un Gobierno Ejecutivo compuesto de un Primer Ministro y un Gabinete.

La administración local está a cargo de los consejos de pueblo y distrito integrado por los *matais*, según la tradicional manera samoana. La intervención de la administración en los asuntos locales se ha limitado en gran medida a hacer aplicar los reglamentos mediante

un sistema de agentes oficiales locales. En 1953, la Asamblea Legislativa aprobó una ordenanza sobre Juntas de Gobierno de Distritos y Pueblos y, con arreglo a tal ordenanza, se instituyó una Junta de Gobierno local y se debía estimular a las autoridades locales para que sometieran a la consideración de la Junta de Gobierno local sus propias ordenanzas y reglamentos para su sanción legal.

h) *Nauru*

En este Territorio no existen órganos ejecutivo ni legislativo. El Administrador ejerce los poderes ejecutivo y legislativo en nombre de la Autoridad Administradora.

El Consejo Local de Gobierno de Nauru, órgano de gobierno local que se compone de nueve miembros elegidos, fué constituido en virtud de una ordenanza y elegido en 1951 para que reemplazara a un consejo de jefes que no tenía carácter legal; puede asesorar al Administrador en lo referente a cualquier asunto que afecte a los nauruanos, incluso la promulgación de nuevas ordenanzas o reglamentos y la derogación o enmienda de cualesquiera leyes o reglamentos existentes. El Administrador puede, si lo considera oportuno, actuar en forma contraria al asesoramiento del Consejo con respecto a cualquier cuestión. El Consejo puede, con sujeción a la aprobación del Administrador, adoptar decisiones sobre ciertos asuntos determinados y, en general, en lo que se refiere a la paz, el orden y el bienestar de los nauruanos.

i) *Nueva Guinea*

El Administrador cuenta con el asesoramiento y asistencia de un Consejo Ejecutivo compuesto de no menos de nueve funcionarios del Territorio nombrados por la Autoridad Administradora, la que fija a su arbitrio la duración de sus nombramientos.

El Consejo Legislativo para los Territorios unidos de Papua y Nueva Guinea, inaugurado en 1951, consiste del Administrador, 16 miembros oficiales y 12 no oficiales. De estos últimos, tres son indígenas, dos de éstos designados entre los oriundos del Territorio en fideicomiso; otros tres son elegidos por personas no indígenas (dos circunscripciones electorales están situadas en el Territorio en fideicomiso); tres miembros representan a las misiones religiosas (dos del Territorio en fideicomiso); y tres representan los intereses comerciales (dos del Territorio en fideicomiso).

Todas las ordenanzas dictadas por el Consejo para asegurar la paz, el orden y el buen gobierno del Territorio deben contar con el asentimiento del Administrador, salvo en aquellos asuntos en que la Autoridad Administradora se ha reservado el derecho de decidir por sí misma. Las ordenanzas que haya aprobado el Administrador pueden ser desautorizadas por la Autoridad Administradora.

Los Consejos Consultivos de Distrito, que tampoco tienen fundamento legal, se componen del comisionado de distrito respectivo y de los miembros nombrados por el Administrador de una nómina de personas recomendadas por el comisionado de distrito. Los consejos consultivos municipales, que tampoco son creados por ley, se componen de ciudadanos representativos y de funcionarios de la Administración. La Autoridad Administradora ha declarado que tanto los consejos consultivos de distrito y municipales tienen competencia en asuntos que no afectan esencialmente los intereses indígenas, y hasta ahora el nombramiento de los miem-

bros ha recaído en europeos y asiáticos. La Autoridad Administradora considera que los intereses de la población indígena están ya adecuadamente protegidos por la política que sigue la Administración en todos los departamentos, especialmente en el Departamento de Servicios de Distrito y Asuntos Indígenas.

La Administración confía en que podrá reemplazar gradualmente el actual sistema de administración local que ejercen los funcionarios de aldea, por consejos indígenas de aldea, mientras los grupos indígenas progresen hacia una etapa que les permita participar en las actividades de tales consejos. Se han nombrado funcionarios especialistas del Departamento de Servicios de Distrito y de Asuntos Indígenas con el fin de alentar la creación de tales consejos y orientar sus actividades durante las primeras etapas; también los funcionarios de otros departamentos prestan asistencia. Hasta el 30 de junio de 1953, se habían establecido ya seis consejos que abarcaban 117 aldeas con una población aproximada de 24.813 habitantes.

La Autoridad Administradora ha declarado también que en esta etapa del desarrollo, el medio más eficaz para incrementar entre la población indígena la comprensión del procedimiento legislativo lo ofrece la actividad de los consejos de aldea, y el aliento y ayuda que prestan a tales labores los funcionarios de distrito.

D. EL DESARROLLO DEL SUFRAGIO UNIVERSAL DE ADULTOS Y LAS ELECCIONES DIRECTAS

a) *Tanganyika*

No existen leyes sobre sufragio en el Territorio, y se designan los miembros de todos los órganos mediante nombramiento, salvo en el caso de algunas de las Autoridades Indígenas. La Comisión de Desarrollo Constitucional, que presentó un informe en 1951,³⁸⁴ aceptó el principio de la elección de los miembros del Consejo Legislativo y de los consejos gubernativos regionales y locales, pero dejó los detalles para un estudio ulterior; informó que, de modo general, la comunidad europea favorecía la celebración inmediata de elecciones; que los asiáticos se habían pronunciado en favor de elecciones para los europeos y asiáticos mediante un registro electoral común que más tarde se extendería a los africanos; y que los africanos favorecían elecciones indirectas sobre una base comunal. El Comisionado Especial,³⁸⁵ en las propuestas detalladas que presentó ulteriormente, opinó que por el momento se debían excluir las elecciones directas por los africanos, pero sugería que se llevaran a cabo experimentos con registros comunes en uno o dos centros urbanos. Sugirió que, como primer paso hacia las elecciones de africanos al Consejo Legislativo, la mayor parte de los miembros africanos debían ser nombrados como representantes de las provincias y, de ser posible, seleccionados entre los candidatos propuestos por las Autoridades Indígenas. En la actualidad podían justificarse las elecciones de europeos sólo en dos, y posiblemente en tres provincias y en la capital; y las elecciones de asiáticos, sobre la base de un registro electoral común asiático, solamente tendrían justificación en tres provincias y en la capital.

La proyectada reforma del Consejo Legislativo, anunciada en mayo de 1954,³⁸⁵ tiende, sin embargo, a aplazar la introducción del principio electivo en la constitución de ese órgano. Al anunciar la reforma, el

³⁸⁴ Véase la subsección B a), *supra*.

³⁸⁵ Véase la subsección C a), *supra*.

Gobernador declaró que la mayoría de las opiniones que se le habían expresado favorecían que se asegurara que la nueva legislatura quedase firmemente establecida antes de que se introdujeran las elecciones. Se ha propuesto, sin embargo, que los miembros deben ser elegidos por un período de tres años en lugar de cinco como se hace en la actualidad. Además, la representación no oficial se haría por primera vez sobre una base geográfica y teniendo en cuenta los grupos de población.

b) Ruanda Urundi

No hay un sistema general de sufragio en el Territorio. En varias ocasiones, y con el propósito de promover la educación política, la Administración ha procedido a celebrar elecciones para los consejos de los centros extratribales y en los cuales los habitantes de dichos centros pueden expresar sus preferencias. El decreto del 14 de julio de 1952 dispone que los notables que integran los nuevos consejos de subjerarquías pueden ser elegidos por los otros notables inscritos en una lista que formulará el subjefe respectivo. Se escoge a los miembros de los consejos indígenas más importantes mediante un sistema de elección indirecta en la que participan los notables y los jefes que tienen asiento en los consejos de menor categoría.

c) Camerún bajo administración británica

Antes de que se introdujera la Constitución de 1951 ni en Nigeria ni en el Camerún existían leyes relativas a elecciones. Desde entonces se ha empleado el sistema del colegio electoral para la elección de representantes a los organismos legislativos regionales. En la región oriental, se han celebrado elecciones en dos etapas (en 1951 y en 1953), mientras que en la región septentrional las elecciones se celebraron en cuatro etapas. El derecho a participar en estas elecciones se extendió a todos los adultos de Nigeria o el Camerún que fueran contribuyentes o que, a falta de ello, poseyeran la categoría de residentes o fuesen oriundos de una circunscripción electoral de las regiones. Todos los hombres adultos están obligados a pagar impuestos y, por lo tanto, tienen derecho a votar; las mujeres, aunque "competentes" para pagar impuestos, no están obligadas a ello y en la práctica raramente lo hacen.

Los representantes que integran la Cámara Central de Representantes son elegidos, de conformidad con la Constitución de 1951, entre candidatos pertenecientes a los órganos regionales. Con arreglo a las reformas constitucionales aprobadas en 1953, las elecciones para la Legislatura Federal serán en lo futuro separadas de aquellas para las legislaturas regionales. La Asamblea Legislativa Federal estará integrada por un miembro elegido por cada 170.000 habitantes, o sea por un total de 184 miembros.

No hay leyes electorales de aplicación territorial que rijan la selección de miembros de los consejos de Autoridades Indígenas (administraciones locales); por regla general, la selección de estos miembros suele hacerse dentro de cada clan o tribu, con arreglo a su propio procedimiento. Sin embargo, en ciertos consejos se han nombrado miembros elegidos.

d) Camerún bajo administración francesa

La Constitución francesa de 1946 establece el principio del sufragio universal de adultos, y la política de la Autoridad Administradora ha consistido en extender el sufragio por etapas a los habitantes de los Territo-

rios de Ultramar y Territorios Asociados (por ejemplo, Territorios en fideicomiso). Las leyes de 5 de octubre de 1946, 27 de agosto de 1947, 23 de mayo de 1951 y 6 de febrero de 1952 constituyen las principales medidas legislativas adoptadas al efecto. En el caso del Camerún, estas leyes establecen dos colegios electorales principales, uno para los ciudadanos franceses y el otro para ciertas categorías de electores no ciudadanos; estos colegios eligen en forma directa y separada los representantes del Territorio ante la *Assemblée nationale* y todos los miembros de la *Assemblée territoriale*; este organismo, a su vez, actúa como colegio electoral para el *Conseil de la République* y la *Assemblée de l'Union française*. La ley de 6 de febrero de 1952 mantuvo el sistema de los dos colegios en el Camerún.

El derecho de los adultos de ambos sexos, mayores de 21 años de edad, a votar en estas elecciones nacionales y territoriales depende de si están comprendidos en cualquiera de las categorías previstas por la ley. Además de las personas de ciudadanía francesa, originalmente había 12 de esas categorías; estas comprendían: las personas con cierto grado de adelanto social (*notables évolués*); los miembros y antiguos miembros de las asambleas locales y de ciertas asociaciones o sociedades; personas que habían recibido condecoraciones u otros honores franceses; los funcionarios del gobierno o empleados permanentes; los actuales y antiguos presidentes o asesores de los tribunales indígenas; los ministros de religiones; las personas que cumplen el servicio militar o que lo hayan cumplido; comerciantes, industriales, agricultores, artesanos y, en general, todos los que posean una licencia; los jefes o representantes de las comunidades indígenas; los propietarios con título; los poseedores de un permiso de caza o de licencia para conducir vehículos automotores. La ley del 27 de agosto de 1947 añadió una 13a. categoría: todas las personas que puedan comprobar su aptitud para leer el francés o el árabe. La ley de 23 de mayo de 1951 aumentó tres categorías más: los jefes de familia, las madres de dos hijos vivos o que hayan muerto al servicio de Francia, y los beneficiarios de pensiones (*titulaires de pension*). La ley de 6 de febrero añadió una cuarta categoría: los jefes de grupos familiares.

El número de personas de ambos sexos, comprendidas en una u otra de estas categorías, y que se inscriben en los registros, ha aumentado de 15.896 en 1946 a 116.566 el 31 de marzo de 1951; 532.475 el 17 de junio del mismo año, y 580.000 en 1952. La población indígena del Territorio en fideicomiso es de 3.050.000 habitantes.

Normalmente, las elecciones parlamentarias y territoriales se celebran cada cinco años, las últimas elecciones se realizaron en 1951 y 1952, respectivamente. Estas fueron las segundas elecciones celebradas con arreglo a la Constitución francesa de 1946.

Las elecciones para los Concejos Municipales en las 12 comunas mixtas rurales (*communes mixtes*) hasta ahora establecidas se celebran mediante un sufragio único en el que participa un colegio electoral único, pero en ciertas comunas se han reservado algunos asientos para candidatos franceses.

e) Togo bajo administración británica

No existía una forma general de sufragio universal en el Territorio en fideicomiso antes de la introducción de la Constitución de 1951; la representación que existía se basaba en gran medida en métodos tradicionales

de selección. Sin embargo, la nueva Constitución introdujo en las zonas rurales de la Colonia de Costa de Oro y, por consiguiente, en el Togo Meridional, un sistema electoral en dos etapas, mediante el cual se eligieron varios miembros de la Asamblea Legislativa. La primera etapa consistió en la creación de colegios electorales mediante el sufragio universal directo; en la segunda etapa estos colegios eligieron los verdaderos representantes. Con arreglo a este procedimiento, se eligieron a dos de los tres miembros del Togo Meridional, y el tercero fue elegido por el Consejo del Togo Meridional que actuó como órgano electoral. En los Territorios septentrionales, incluso el Togo Septentrional, se formó un solo colegio electoral compuesto de miembros del Consejo de los Territorios Septentrionales al que se agregaron los delegados elegidos por los consejos de distrito. Sin embargo, poco después se implantaron en toda Costa de Oro y el Togo las elecciones directas por sufragio universal de adultos, instituidas por las ordenanzas promulgadas por la Administración Local en 1951 (Local Government Ordinances); según este sistema fueron elegidos los representantes que constituyen las dos terceras partes de los miembros de cada Consejo local.

Las reformas provisionales de la Constitución propuestas por el Gobierno de Costa de Oro en 1953, y aceptadas por la Autoridad Administradora, incluían la elección de una nueva Asamblea Legislativa para Costa de Oro y el Territorio en fideicomiso, enteramente por el sufragio directo, secreto y universal de los adultos. La legislación a este efecto se aprobó en 1953, en previsión de las elecciones que debían celebrarse en junio de 1954.

f) Togo bajo administración francesa

El sistema de sufragio y elecciones en el Togo bajo administración francesa se rige por las mismas leyes y es esencialmente el mismo que se ha descrito para el Camerún bajo administración francesa. No obstante, debe advertirse que la ley de 6 de febrero de 1952, si bien mantenía el sistema de dos colegios electorales en el Camerún, creó un colegio electoral único en el Togo y, por lo tanto, se ha procedido a combinar las dos listas anteriores.

El número de personas de ambos sexos que pertenecen a una u otra de las categorías de electores (como se explicó en el caso del Camerún) y que realmente se han inscrito ha aumentado de 7.963 en 1947 a 28.580 a principios de 1951; después a 50.915 en marzo de 1952, y a 113.279 en 1953. El Territorio en fideicomiso tiene aproximadamente una población de 1.031.000. Las últimas elecciones parlamentarias y territoriales se llevaron a cabo en 1951 y 1952, respectivamente.

Un sistema electoral diferente se aplica a los consejos de distrito (*conseils de circonscription*) recientemente establecidos en todo el Territorio. Estos consejos han sido elegidos en dos etapas: en la primera, cada aldea designa un pequeño número de electores siguiendo los métodos consuetudinarios; y en la segunda etapa, esos electores eligen a los representantes.

g) Samoa Occidental

Se aplican sistemas electorales separados para la elección de cinco miembros europeos y 12 miembros samoanos de la Asamblea Legislativa. La comunidad europea ejerce el sufragio universal de adultos; entre los samoanos, el derecho a participar en las votaciones continúa restringido a los *matai* quienes eligen a los

miembros del *Fono* de los *Faipules*, los cuales, a su vez, eligen a los miembros samoanos. La Asamblea Legislativa vuelve a constituirse cada tres años; las últimas elecciones se celebraron en abril de 1951, debiendo llevarse a cabo las segundas con arreglo a la presente constitución.

h) Nauru

Todos los nauruanos de más de 21 años de edad están capacitados para participar en las elecciones de los miembros del Consejo Local de Gobierno de Nauru, sólo que las personas sentenciadas que guarden o deban guardar prisión por un año o por un tiempo mayor no tienen derecho a inscribirse en los registros electorales. Las votaciones se llevan a cabo por el sistema preferencial y obligatorio. Las elecciones deben celebrarse a intervalos no mayores de cuatro años; las primeras se celebraron en diciembre de 1951.

i) Nueva Guinea

Las personas mayores de 21 años de edad que no sean habitantes indígenas ni extranjeros pueden inscribirse en los registros como electores y pueden votar en las elecciones de los dos miembros no oficiales ni indígenas del Consejo Legislativo de Nueva Guinea. Las elecciones se basan en el sistema preferencial, y deben celebrarse a intervalos no menores de tres años. Las primeras elecciones se llevaron a cabo en noviembre de 1951.

Todo habitante indígena de una zona de consejo que paga contribuciones impuestas por el Consejo o que haya sido exonerado del pago de este impuesto está capacitado para votar en las elecciones de los miembros de los consejos indígenas locales. Las mujeres que residen en una zona de consejo pueden adquirir el derecho de voto mediante el pago de un impuesto reducido, que, por lo general, es de una libra esterlina.

F. FORMACIÓN PROFESIONAL DE INDÍGENAS Y SU NOMBRAMIENTO EN CARGOS DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

a) Tanganika

Hasta la fecha muy pocos africanos, por no llenar los requisitos necesarios, han sido nombrados en puestos superiores de la administración pública, que en su mayor parte son desempeñados por europeos. La plantilla general, compuesta de funcionarios del cuadro superior, del intermedio y del subalterno, estaba integrada en 1952 por 2.747 europeos, 1.359 asiáticos y 13.719 africanos. No existe en el Territorio ninguna institución de enseñanza superior, pero la mayoría de los estudiantes que reúnen las condiciones para aspirar a dicha enseñanza tienen oportunidad de recibirla, ya sea en el Colegio Makerere de Uganda o en ultramar. El número de esos estudiantes ha aumentado de año en año y a fines de 1953 había 88 en el Colegio Makerere, 16 en universidades del Reino Unido y otros 16 que seguían cursos de enseñanza superior en el Reino Unido y otros países.

b) Ruanda Urundi

Habitantes indígenas del Territorio o del Congo ocupan en su mayor parte los puestos públicos subalternos de la administración central (559 funcionarios de esa categoría en 1952). La mayoría de dichos funcionarios ha terminado sus estudios secundarios y se estableció con ese fin una sección de estudios administrativos en el grupo de escuelas de Astrida. Durante

1953, 23 estudiantes indígenas recibían enseñanza superior en el Congo Belga o en Europa.

c) Camerún bajo administración británica

El Territorio en fideicomiso tiene una administración pública en común con Nigeria. En virtud de la Constitución revisada, cada región tendrá su propia administración pública, pero el personal del Camerún Meridional será proporcionado por la Administración Pública Federal. Se informó al Consejo que el Gobierno de Nigeria tiene por norma contratar ese personal en la menor medida posible en el extranjero, siempre que ello no vaya en desmedro de la eficiencia y, por lo tanto, capacitar a los habitantes del país para las funciones administrativas. Los habitantes del Territorio que poseen las aptitudes y las condiciones de carácter requeridas tienen acceso a los puestos de la administración pública de todas las categorías. Sin embargo, pocos africanos del Camerún han sido empleados hasta ahora en la rama superior de la administración pública; la cifra máxima comunicada para el período 1950-1953 fué de dos. Fuera de que son pocas las personas suficientemente idóneas, la Autoridad Administradora ha señalado a la atención la competencia que hace a la administración pública la atracción del comercio y las actividades políticas; puede mencionarse como ejemplo de ello el caso de dos funcionarios superiores del Camerún que renunciaron a su nombramiento en 1953 con objeto de dedicarse a la política. Al mismo tiempo, el número de estudiantes indígenas que gozan actualmente de becas para la realización de estudios superiores en África Occidental y en ultramar ha aumentado de 21 en 1950 a 31 en 1952.

Los órganos ejecutivos central y regional establecidos en virtud de la Constitución de 1951 han proporcionado a algunos cameruneses puestos particularmente elevados en el gobierno. Un africano del Territorio en fideicomiso ha sido miembro del Consejo Central de Ministros, otro fué miembro del Consejo Ejecutivo Regional Oriental y un tercero fué nombrado en 1954 miembro del Consejo Ejecutivo Regional del Norte. La creación de un gobierno cuasirregional, proyectado para el Camerún Meridional, ofrecerá nuevas oportunidades de esa índole.

d) Camerún bajo administración francesa

La Autoridad Administradora ha informado al Consejo que los funcionarios de los servicios administrativos del Territorio se contratan mediante exámenes de competencia a los que pueden presentarse todas las personas que posean las aptitudes requeridas. No existen en el Territorio facilidades para cursar estudios superiores, pero las becas concedidas para la realización de estos estudios en el exterior han aumentado de año en año, alcanzando un total de 82 en 1952. Los futuros becarios serán orientados hacia los campos especializados convenientes para satisfacer las necesidades del Territorio. Asimismo, se imparte preparación dentro del servicio, la que tiene por objeto capacitar a los actuales funcionarios para que ocupen cargos más importantes. El número total del personal administrativo ha aumentado de 5.327 africanos y 998 europeos en 1947 a 9.971 africanos y 4.323 europeos en 1952. De éstos, 73 africanos y 827 europeos ocupaban puestos superiores.

e) Togo bajo administración británica

El Territorio en fideicomiso tiene una administración pública en común con Costa de Oro y el gobierno

ha adoptado una política orgánica de africanización de la administración. El gobierno reafirmó esa política al formular en 1953 sus propuestas de reformas constitucionales provisionales; señaló que era necesario acelerar la africanización de la administración con la mayor rapidez posible compatible con la eficiencia, pero que todo programa acelerado debía tener en cuenta que es menester contar siempre con los servicios de funcionarios de ultramar experimentados. Las personas competentes del Togo tienen acceso a todas las categorías de la administración pública y a fines de 1950 había 11 togoleses entre 653 africanos que ocupaban puestos superiores. La Autoridad Administradora ha reconocido que esa proporción es baja, pero confía en que la situación mejorará en virtud de un ritmo más acelerado del programa de enseñanza y de la concesión de becas. A principios de 1954 había 58 estudiantes togoleses en el University College de Costa de Oro y en el Kumasi College of Technology en comparación con 37 en 1952; y en este último año había también 22 estudiantes togoleses que seguían estudios superiores en el Reino Unido y en Norteamérica.

f) Togo bajo administración francesa

Las nuevas disposiciones que rigen la contratación de personal para los servicios administrativos disponen, a partir de 1953, la contratación directa de personas competentes para lo que se denomina categorías "superiores" y para el ascenso de los funcionarios calificados de las categorías locales a esos *échelons* de la administración. No existen en el Territorio facilidades para cursar estudios superiores, pero las becas concedidas para la realización de dichos estudios en el exterior ha aumentado de año en año, llegando en 1952 a un total de 58 para estudios universitarios y 32 para preparación técnica. El número de empleados indígenas de las categorías "superiores" aumentó de 175 en 1948 a 339 en 1952, y el de los de las categorías "inferiores", de 4.348 a 4.900. El número de europeos en toda la administración aumentó de 154 a 242, 221 de los cuales trabajan en las categorías "superiores". Entre los ejemplos citados por la Autoridad Administradora con respecto a los puestos más importantes ocupados por africanos, figuran la dirección de dos distritos agrícolas y de cuatro comisarías. Un funcionario togolés, adscrito al despacho del *Commissaire de la République*, participó en la labor de los 12º y 13º periodo de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria en calidad de miembro de la delegación francesa y de representante especial del Territorio.

g) Samoa Occidental

En 1953, de un total de 1.070 personas empleadas en la Administración Pública, 817 eran samoanos. Los samoanos ocupaban ocho puestos de un total de 93 puestos superiores. La Autoridad Administradora expresa que todos los sectores de la población pueden ser nombrados en la Administración Pública, siempre que posean los conocimientos requeridos.

El Samoa College, que por su cuerpo de profesores y el material de enseñanza que posee está al mismo nivel que una escuela secundaria de Nueva Zelandia, se inauguró en 1953 con una matrícula total de 52 alumnos. Se espera que este número aumente anualmente hasta llegar a 200 estudiantes de enseñanza secundaria. Desde 1945 la Autoridad Administradora ha otorgado en total 95 becas (incluso 12 otorgadas en diciembre de 1953) lo que permitió que los estudian-

tes de Samoa Occidental ingresaran en escuelas primarias y secundarias escogidas de Nueva Zelandia. Dieciséis de dichos estudiantes que han regresado al Territorio están empleados en varias dependencias gubernamentales y otros 23 que han terminado su instrucción secundaria reciben actualmente enseñanza superior o preparación especializada en Nueva Zelandia.

h) *Nauru*

En 1952-1953 había un total de 352 personas empleadas en los distintos departamentos de la Administración nauruana. Entre ellos figuraban 16 europeos, 288 nauruanos, 30 chinos y 18 nativos de las islas Gilbert y Ellice. El jefe de un departamento (Asuntos Indígenas) era nauruano. Otros nauruanos estaban empleados como superintendentes de escuelas, practicantes médicos indígenas, operarios y técnicos de radio, policías, dibujantes, maestros de escuela, asistentes médicos y auxiliares de enfermería en distintas funciones en el Departamento de Obras.

La Autoridad Administradora ha declarado que se brinda a los nauruanos toda clase de oportunidades y estímulos para que adquirieran experiencia y se les imparte la instrucción necesaria para que estén en condiciones de ocupar cargos públicos más elevados, y con ese fin se ayuda a un número escogido de estudiantes para que continúe sus estudios en Australia y las Islas Viti y se dictan clases semanales en las que se preparan aprendices en distintos oficios. En 1953, había 57 estudiantes matriculados en escuelas secundarias y 23 estudiantes seguían cursos en el exterior.

i) *Nueva Guinea*

Los habitantes indígenas no ocupan puestos en la Administración Pública, pero se ha aprobado la creación de una división auxiliar para los mismos y se está preparando la legislación necesaria. Esta nueva división será esencialmente una división de formación profesional y se prepararán en ella a empleados indígenas escogidos para las divisiones superiores de la Administración Pública. Los habitantes indígenas empleados por la Administración en 1953 ascendieron a un total de 9.712. De éstos, 5.469 eran trabajadores de tipo general, 1.391 estaban en las fuerzas policiales, 623 eran trabajadores de servicios médicos y 493 aspirantes. El resto consistía de grupos más pequeños dedicados a ocupaciones técnicas, educativas, trabajos de oficina y otras actividades.

Con respecto a las medidas para facilitar a los estudiantes indígenas el acceso a los estudios secundarios y superiores, la Autoridad Administradora ha declarado que, en términos generales, la gran mayoría de la población indígena no ha alcanzado todavía un nivel que le permita comprender plenamente los valores de la civilización europea y que implantar la enseñanza secundaria en una escala muy amplia equivaldría a resolver erróneamente el problema educativo del Territorio. En esta etapa, la Autoridad Administradora estima que lo más conveniente es concentrar todas las energías en el aumento de las escuelas primarias en las aldeas. Sin embargo, se imparte enseñanza gratuita y se pagan los gastos de subsistencia a los alumnos que reciben preparación superior en los centros de formación profesional para maestros y otros establecimientos análogos del Territorio y los estudiantes debidamente calificados tienen la oportunidad de seguir estudios de medicina en la Escuela Central de Medicina de Suva, en las

Islas Viti. Asimismo, se han adoptado las disposiciones necesarias para que algunos estudiantes escogidos realicen estudios superiores en Australia.

F. OBTENCIÓN DE INGRESOS FISCALES ADECUADOS

a) *Tanganyika*

Con arreglo a la nueva presentación del presupuesto del Territorio, hay tres cuentas diferentes dentro del presupuesto general, cada una de ellas con sus fuentes propias de financiamiento: a) la cuenta de desarrollo agrícola, con sus partidas de gastos ordinarios y de inversiones de capital; b) la cuenta general de gastos ordinarios, que agrupa todas las demás partidas de gastos ordinarios; y c) la cuenta de operaciones de capital, que agrupa todas las demás partidas de inversiones. En la cuenta de desarrollo agrícola, los gastos, que en 1950, 1951 y 1952 se elevaron a 258.940, 322.153 y 382.272 libras esterlinas, respectivamente, fueron, como de costumbre, cubiertos totalmente todos los años por los ingresos del Territorio, es decir, principalmente mediante transferencias del Fondo de Desarrollo Agrícola alimentado en su mayor parte con las utilidades realizadas por el Gobierno en la compra y venta de algodón. En la cuenta de operaciones de capital, los gastos que en 1950, 1951 y 1952 ascendieron a 3.179.219, 3.507.896 y 4.607.038 libras esterlinas, respectivamente, fueron financiados en parte con los ingresos presupuestarios (2.867.057 libras procedentes de la Reserva del Plan de Desarrollo, que se alimentó durante los años que se están examinando con las remesas presupuestarias siguientes: 2.304.333 libras procedentes de los ingresos por concepto del impuesto a la exportación de henequén (sisal), 315.355 libras procedentes de una transferencia de un Fondo Especial y 1.281.350 libras por concepto de "aportaciones para el desarrollo") pero sobre todo con ingresos presupuestarios, es decir con subsidios del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial (1.093.405 libras en 1950, 1.174.728 libras en 1951 y 936.489 libras en 1952), con una aportación de la Administración de Cooperación Económica (ECA) (79.507 libras en 1952), con una transferencia de Fondos Especiales (315.355 libras en 1952) y con préstamos y anticipos con cargo a préstamos (1.027.377 libras en 1950, 2.069.719 libras en 1951 y 1.924.074 libras en 1952). Sin embargo, en la cuenta general de gastos ordinarios, los ingresos locales, que ascendieron a 10.400.000 libras esterlinas en 1950, 11.900.000 libras en 1951 y 16.400.000 libras en 1952, no sólo cubrieron los gastos durante el período que se está examinando, sino que contribuyeron a aumentar en más de 3.000.000 de libras varias reservas, incluso la Reserva del Plan de Desarrollo, quedando todavía un superávit final de alrededor de 400.000 libras. Las cifras de los ingresos de aduana, los impuestos, las patentes, los derechos y los ingresos procedentes de bienes del Estado para los años 1950-1952, fueron las siguientes: ingresos de aduana, 4.416.146, 5.644.582 y 6.614.186 libras esterlinas, respectivamente; impuestos, patentes, derechos e ingresos procedentes de bienes del Estado, 4.763.193, 5.248.845 y 8.446.926 libras, respectivamente, debiéndose este último aumento principalmente a una apreciable elevación de las regalías mineras que ascendieron a más de 680.000 libras en 1952, en comparación con 52.000 en 1951 y 193.000 en 1950.

b) *Ruanda Urundi*³⁸⁶

El Territorio tiene dos presupuestos: a) el presupuesto ordinario, que comprende las partidas de gastos ordinarios; y b) el presupuesto extraordinario, que comprende las partidas de gastos de inversiones. Durante el período que va de 1949 a 1951,³⁸⁶ el presupuesto ordinario arrojó un superávit de 127.000.000 de francos, siendo las cifras de los gastos y los ingresos para 1949, 1950 y 1951 las siguientes: gastos: 327.-334.161, 335.164.570 y 430.643.948 francos, respectivamente; ingresos: 275.904.788, 385.919.350 y 559.211.-752 francos, respectivamente. Sin embargo, debe hacerse notar que las cifras de 1949 correspondientes a los gastos ordinarios comprenden los gastos "excepcionales" por un monto de 97.361.359 francos, que fueron financiados en parte con anticipos reembolsables, sin interés, hechos por Bélgica y el Congo Belga (33.796 francos) y en parte con los superávits de ejercicios económicos anteriores. La parte que los ingresos de aduana, incluso los impuestos internos, representaron en los ingresos ordinarios se puede evaluar aproximadamente en 100.000.000, 130.000.000 y 216.000.000 de francos durante 1949, 1950 y 1951, al paso que los impuestos y los derechos produjeron aproximadamente 135.000.000, 150.000.000 y 200.000.000 de francos. En cuanto al presupuesto extraordinario, las consignaciones de fondos para los tres años arriba mencionados se elevaron a 72.417.000, 178.475.000 y 161.802.000 francos, respectivamente. Entre los medios de financiamiento figuran fuentes de ingresos extraordinarios tales como las ventas de propiedades del Estado (aunque por un pequeño monto) y, sobre todo (desde 1950), anticipos reembolsables, sin interés, hechos por el Gobierno belga (tanto en 1950 como en 1951 se obtuvieron préstamos por valor de 150.000.000 de francos). Además, cada *circonscription* indígena (*chef-ferie* y *pays*) tiene su presupuesto propio, y la suma de los ingresos y los gastos de los mismos en 1952 fueron de 78.327.000 y 77.609.000 francos, respectivamente.

c) *Camerún bajo administración británica*³⁸⁷

En los cálculos de gastos e ingresos del Territorio, tal como se los presenta, los relativos al Plan de Desarrollo y Bienestar se diferencian de los demás. Por lo tanto se seguirá aquí el mismo método. Durante el período que se está examinando, los gastos realizados en virtud del Plan, que ascendieron a 613.000 libras esterlinas (se gastaron 136.100 libras en 1949-1950, 172.300 en 1950-1951 y 304.600 en 1951-1952), se financiaron de la manera siguiente: 234.600 libras procedieron de subsidios del Fondo de Desarrollo y Bienestar Colonial (78.600 libras en 1949-1950, 53.500 en 1950-1951 y 102.500 en 1951-1952), 318.200 libras se originaron en anticipos de préstamos de fondos gubernamentales (57.500 libras en 1949-1950, 118.800 en 1950-1951 y 141.900 en 1951-1952), 58.500 libras representaron en 1951-1952 un subsidio del Fondo para el Desarrollo de Canteras en el Camerún y 1.700 libras representaron, también en 1951-1952, un subsidio

³⁸⁶ Las cifras para 1952 sólo llegan hasta el 31 de octubre y, por lo tanto, no se tuvieron en cuenta. Además, las cifras de 1951 son definitivas sólo con respecto al presupuesto ordinario, puesto que todas las cifras del presupuesto extraordinario son todavía previsiones. Sin embargo, se estima que se han registrado pocas modificaciones.

³⁸⁷ Puesto que el Territorio no tiene presupuesto propio, las cifras consignadas a continuación son las que le atribuye el Gobierno de Nigeria. Sólo deben considerarse aproximadas.

de la Junta para la Comercialización del Cacao. Por lo tanto, esta cuenta quedó perfectamente equilibrada, como es habitual. En cuanto a la otra cuenta, la de gastos del presupuesto, que durante el período que se está considerando ascendieron a un total de 2.684.000 libras (se gastaron 744.000 libras en 1949-1950, 888.000 en 1950-1951 y 1.052.000 en 1951-1952), fué cubierta holgadamente con los ingresos ordinarios, ya que estos últimos ascendieron a 3.329.000 libras, siendo los gastos por año los siguientes: 1.028.000 libras recaudadas en 1949-1950, 1.093.000 en 1950-1951 y 1.208.000 en 1951-1952. En estas tres últimas cifras, los ingresos de aduana representaron 232.000, 235.000 y 527.000 libras, respectivamente; los impuestos directos, 619.000, 724.000 y 534.000 libras, respectivamente; las patentes y los derechos, 43.000, 50.000 y 56.000 libras, respectivamente, y los impuestos internos, 17.300, 25.000 y 38.000 libras, respectivamente.

d) *Camerún bajo administración francesa*³⁸⁸

El Territorio tiene dos presupuestos principales, es decir el presupuesto local, que comprende principalmente los gastos ordinarios y el presupuesto anual del plan decenal de desarrollo del FIDES (Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico y Social), que comprende principalmente gastos en inversiones, cuyo financiamiento se realiza, como en el caso del Togo francés, mediante subsidios de la metrópoli y aportaciones del Territorio. En el presupuesto local, los ingresos totales durante el período que se está examinando solamente igualaron los gastos ordinarios (17.062.125.070 francos CFA, en comparación con 16.917.628.585, sin incluir las reservas). Incluso se hubiera registrado un déficit en la cuenta ordinaria si las partidas de gastos comprendieran los sueldos de los administradores, jueces y otros funcionarios públicos (172.951.000 en 1950; 320.959.680 en 1951 y 308.084.015 en 1952) los que, aunque corresponden al Territorio, fueron incluidos en el presupuesto de la metrópoli. Las cifras de los gastos para 1950, 1951 y 1952, respectivamente, fueron los siguientes: gastos: 4.318.267.734, 5.870.482.090 y 6.728.878.741 francos CFA; ingresos: 4.334.488.943, 5.891.098.163 y 6.836.-537.964 francos CFA. En estas tres últimas cifras de ingresos, las rentas de aduana representaron aproximadamente 2.000 millones, 3.700 millones y 3.800 millones de francos CFA, respectivamente, al paso que los impuestos, los derechos y las rentas procedentes de bienes del Estado representaron 1.400 millones, 1.800 millones y 2.200 millones de francos CFA, respectivamente. Dado que nunca se registró un verdadero superávit en la cuenta ordinaria del presupuesto, las aportaciones del Territorio al plan del FIDES tuvieron que financiarse cada año enteramente con anticipos de la Caisse central de la France d'Outre-mer. Por lo tanto, los gastos reales del FIDES, que desde julio de 1949 hasta julio de 1952 ascendieron a un total de 9.494.018.191 francos CFA (2.889.955.438 en 1949-1950; 2.889.955.438 en 1950-1951; y 3.714.107.315 en 1951-1952), con los correspondientes compromisos territoriales por 4.079.423.877 francos CFA (1.131.-465.311 en 1949-1950; 1.131.465.311 en 1950-1951 y 1.816.493.255 en 1951-1952), fueron financiados como de costumbre sólo con fondos de fuentes externas. Además de esos gastos en trabajos de desarrollo, se registraron otros durante el período que se está exami-

³⁸⁸ Las cifras correspondientes a los años 1951 y 1952 sólo son provisionales.

nado, puesto que los préstamos concedidos por la Caisse central permitieron que las municipalidades previeran en sus presupuestos programas de equipo (dichos anticipos ascendieron en 1952 a 370.000 francos CFA), mientras que la Autoridad Administradora subvencionó totalmente sin participación financiera alguna del Territorio programas especiales de equipo pesado (*travaux d'infrastructure*), por un monto de 21.658.121 francos CFA en 1950, 51.785.000 en 1951 y 162.978.048 en 1952.

e) *Togo bajo administración británica*³⁸⁹

Durante el período que se está analizando, los gastos ordinarios, que alcanzaron un total aproximado de 2.700.000 libras (se gastaron unas 750.000 libras en 1949-1950, 1.000.000 en 1950-1951 y 980.000 en 1951-1952) fueron sobrepasados por los ingresos ordinarios, ya que estos últimos ascendieron a un total de casi 3.300.000 libras (se recaudaron aproximadamente 770.000 libras en 1949-1950, 1.000.000 en 1950-1951 y 1.500.000 libras en 1951-1952). En el mismo período, los derechos de aduana (excluidos los recargos sobre el cacao) produjeron aproximadamente 640.000, 840.000 y 1.000.000 de libras al paso que los impuestos, las patentes y los derechos se elevaron a alrededor de 100.000, 120.000 y 125.000 libras. En cuanto a los gastos de desarrollo, alcanzaron a un total de casi 400.000 libras (se gastaron aproximadamente 43.000 en 1949-1950, 20.000 en 1950-1951 y 330.000 en 1951-1952) y fueron financiados con varios subsidios, pero, principalmente, desde 1951-1952, con ingresos ordinarios es decir con los ingresos procedentes de los recargos a la exportación de cacao (293.227 libras). Dichos recargos, que se aplicaron por primera vez durante 1951-1952, produjeron, según se informó, 607.035 libras en ese año, quedando por lo tanto, la suma de 313.808 disponible "para gastos en los años subsiguientes en trabajos de desarrollo que beneficián al Territorio, tanto los realizados en el propio Togo como los que, como el nuevo puerto de Tema, es muy probable que lo beneficie".³⁹⁰

f) *Togo bajo administración francesa*³⁹¹

A pesar de los anticipos de la Caisse centrale de la France d'Outre-mer por un total de 564.319.057 francos CFA (185.723.010 en 1950, 177.678.964 en 1951 y 200.917.083 en 1952) y de las transferencias de fondos tomados de las reservas por un total de 345.809.000 francos CFA (202.459.000 en 1950, 38.450.000 en 1951 y 104.900.000 en 1952), el presupuesto del Territorio se cerró con un déficit de 124.000.000 de francos CFA durante el período que se está considerando. Dicho déficit hubiera sido aún mayor si las partidas de gastos comprendieran los sueldos e indemnizaciones de los administradores, jueces y otros funcionarios públicos (34.020.000 francos CFA en 1950, 35.384.000 en 1951 y 50.486.000 en 1952) los que, aunque corresponden al Territorio, fueron incluidos en el presupuesto de la metrópolis. Las cifras de los

gastos y los ingresos correspondientes a 1950, 1951 y 1952, respectivamente, fueron las siguientes: gastos: 1.524.207.417; 1.421.856.524 y 1.687.008.590 francos CFA; ingresos: 1.534.207.417; 1.494.985.439 y 1.479.639.601 francos CFA. En estas tres últimas cifras de ingresos, los ingresos de aduana representaron 540, 730 y 635 millones de francos CFA, respectivamente; al paso que los impuestos, los derechos y las rentas procedentes de bienes del Estado representaron aproximadamente 270.000.000, 360.000.000 y 460.000.000 de francos CFA, respectivamente. En las cifras de los gastos para 1950, 1951 y 1952, el "equipo" representó 313.182.728, 202.917.867 y 270.744.325 francos CFA, respectivamente. Sin embargo, estas últimas cifras no presentan un cuadro completo de los trabajos de desarrollo realizados en el Territorio, puesto que el plan del FIDES prevé que, aparte de las aportaciones del Territorio, la metrópolis debe conceder subsidios para el desarrollo del Territorio. Estos subsidios ascendieron aproximadamente a 240.000.000 de francos CFA en 1949-1950, 250.000.000 en 1950-1951 y 220.000.000 en 1951-1952. Puesto que las aportaciones del Territorio al plan fueron financiadas cada año sólo con los anticipos de la Caisse centrale arriba mencionados, los gastos del FIDES fueron, durante el período que se está considerando, así como en años anteriores, financiados totalmente con fondos procedentes de fuentes externas.

g) *Samoa occidental*

El presupuesto del Territorio, que comprende partidas de gastos ordinarios y extraordinarios, arrojó un pequeño déficit durante los años que se están examinando. Los gastos totales ascendieron a 2.497.075 libras (631.175 en 1951, 811.580 en 1952 y 1.054.320 en 1953), frente a las 2.389.997 libras de los ingresos totales (678.897 en 1951, 781.980 en 1952 y 929.120 en 1953). Sin embargo, el financiamiento de los gastos del Territorio, con excepción de los de algunos programas de desarrollo financiados con subsidios especiales de la Autoridad Administradora, se efectúa solamente con los ingresos internos, financiándose los déficit presupuestarios con superávit de ejercicios anteriores. De estos ingresos internos los derechos de importación y exportación constituyen el rubro principal, con las cifras siguientes para el período que se está examinando: 464.290 libras en 1951, 542.990 en 1952 y 482.320 en 1953, representando por lo tanto el 62% aproximadamente de los ingresos totales. Los impuestos directos y otras formas de tributación indirecta produjeron las cantidades siguientes: 101.300 libras en 1951, 121.340 en 1952 y 138.100 en 1953. En lo que atañe a los gastos, las cifras revelan que se invirtieron en desarrollo económico 115.730, 173.920 y 209.770 libras en 1951, 1952 y 1953, respectivamente, mientras que los programas de higiene y enseñanza, junto con una campaña contra los escarabajos, fueron subvencionados con subsidios concedidos por la Autoridad Administradora por un monto de 52.200, 50.880 y 34.300 libras, respectivamente.

h) *Nauru*

El presupuesto territorial comprende tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios pero los gastos no se registran en distintas cuentas según la naturaleza de los mismos, aunque las fuentes de financiamiento no son las mismas para unos y otros.

³⁸⁹ Puesto que el Territorio no tiene presupuesto propio, las cifras que se consignan a continuación son las que ha comunicado el Gobierno de la Costa de Oro. Sólo deben considerarse aproximadas.

³⁹⁰ Informe de la Autoridad Administradora correspondiente al año 1952, pág. 48 del texto inglés.

³⁹¹ Las cifras correspondientes a 1952 no deben considerarse definitivas, puesto que se establecieron a fines de 1952, es decir antes del cierre del ejercicio económico.

Los gastos extraordinarios, que se relacionan con la reconstrucción y la rehabilitación de la Isla, es decir "principalmente con la reconstrucción de los edificios oficiales y de las viviendas del personal europeo que fueron destruidas por los japoneses y con la compra de equipo mecánico y provisiones", se financian con un anticipo concedido a la Administración por los Comisionados británicos del fosfato. Dicho anticipo, fijado en un principio en 200.000 libras, ha sido aumentado a 350.000 libras y reditúa interés a razón del 3½% anual. Su amortización, incluidos los intereses, se efectúa anualmente con los ingresos procedentes de una regalía sobre las exportaciones de fosfato, fijada actualmente en 10½ peniques por tonelada exportada. Durante el período que se está examinando, se retiró de ese préstamo la suma de 150.000 libras (60.000 en 1950-1951, 65.000 en 1951-1952 y 25.000 en 1952-1953). El reembolso de los anticipos, incluidos los intereses, se realizó de la siguiente manera: 35.653 libras en 1950-1951, 40.155 en 1951-1952 y 53.686 en 1952-1953, quedando, por lo tanto, un saldo deudor de 203.168 al 30 de junio de 1953.

En lo que respecta a los gastos ordinarios del presupuesto, su financiamiento se efectúa casi exclusivamente con pagos de los Comisionados Británicos del Fosfato; el 93% de los ingresos totales durante el período que se está considerando procedió de dicha fuente. Este arreglo se basa en un convenio concertado entre los gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido, que prevé que todos los gastos de la Administración, en cuanto no sean sufragados con fondos procedentes de los ingresos, deben ser pagados con los ingresos procedentes de las ventas de fosfato. Durante el período que se está examinando, dichos pagos efectuados por los Comisionados se distribuyen de la siguiente manera: a) 21.764 libras por concepto de regalías sobre el fosfato extraído de las tierras de la Administración (9.326 libras en 1950-1951, 6.041 en 1951-1952 y 6.397 en 1952-1953); b) 108.048 libras por concepto de regalías para equilibrar el presupuesto (43.812 en 1950-1951, 50.660 en 1951-1952 y sólo 13.576 en 1952-1953, ya que el régimen de regalías se suspendió a partir del 1° de julio de 1952 y fue reemplazado por los pagos mencionados en el punto d) a continuación); c) 51.000 libras por concepto de "pagos en reemplazo de los derechos de aduana sobre mercaderías imponibles importadas por los Comisionados Británicos del Fosfato y los derechos y cargos a que están sujetos los Comisionados en virtud de las leyes del Territorio" (24.000 libras en 1950-1951, 27.000 en 1951-1952, al paso que no se hizo ningún pago en 1952-1953, dado que estas sumas globales fueron reemplazadas también por los pagos mencionados en el punto d) a partir del 1° de julio de 1952; y d) 133.789, en 1952-1953, que representan la cantidad que deben pagar los Comisionados Británicos del Fosfato para hacer frente a los gastos de la Administración no cubiertos por otros ingresos, debido a que se suprimieron los pagos mencionados en los puntos b) y c) que anteceden.

Los totales de los gastos y los ingresos fiscales para 1950-1951, 1951-1952 y 1952-1953, incluidos los anticipos de préstamos, pero excluidos los reembolsos de préstamos, fueron los siguientes: gastos: 130.491, 146.742 y 179.423 libras, respectivamente; ingresos: 145.019, 155.414 y 188.408 libras, respectivamente. Sin embargo, estas cifras no presentan un cuadro com-

pleto de la hacienda del Territorio durante el período que se está examinando, puesto que no figuran en el presupuesto del Territorio otras dos fuentes de gastos públicos, a saber: gastos de enseñanza y gastos del plan de construcción de viviendas para los nauruanos. Los gastos de enseñanza, que en 1950-1951, 1951-1952 y 1952-1953 ascendieron a 8.048, 13.932 y 25.062 libras, respectivamente, fueron financiados con fondos del Nauru Royalty Trust Fund, el que se alimenta con los ingresos procedentes de otra regalía de tres peniques por tonelada de fosfato exportada, la que durante los tres años que se están examinando produjo 12.806, 12.665 y 14.449 libras, respectivamente. Sin embargo, a partir del 1° de julio de 1953 los gastos de enseñanza en Nauru debían cargarse al presupuesto territorial. En lo que atañe al plan de construcción de viviendas para los nauruanos, iniciado en mayo de 1949, que prevé la construcción de 250 viviendas para los indígenas con un costo total de 200.000 libras, su financiamiento está asegurado por un anticipo al 3½% de interés, concedido a la Administración por los Comisionados Británicos del Fosfato. Para permitir el reembolso del adelanto, junto con los intereses, se estableció una regalía adicional de nueve peniques por tonelada de fosfato exportada. Aunque ese plan constituye una empresa pública, en los informes anuales de la Autoridad Administradora no figura cifra alguna de ingresos y gastos, salvo la mención en el capítulo sobre progreso económico de que en 1951, 1952 y 1953, las partidas para el plan de construcción de viviendas para los nauruanos eran de 23.769, 40.155 y 46.016 libras, respectivamente.

Otra característica de la hacienda pública del Territorio es la transferencia de los ingresos procedentes de otra regalía más de cinco peniques por tonelada de fosfato exportada a un fondo de inversiones a largo plazo denominado Nauru Community Long-Term Investment Fund, cuyo objeto es el de prestar asistencia económica a los isleños después del año 2.000, fecha en que se calcula que se habrá extraído todo el fosfato de la isla.

i) Nueva Guinea

Está lejos de haberse alcanzado la autonomía financiera en Nueva Guinea, puesto que el presupuesto territorial sólo se equilibra mediante importantes subsidios concedidos por la Autoridad Administradora. Estos subsidios ascendieron a un total de 8.251.912 libras durante el período que se está examinando (2.356.310 en 1950-1951, 3.126.059 en 1951-1952 y 2.769.912 en 1952-1953), en comparación con un total de sólo 4.250.328 libras por concepto de ingresos internos (1.219.411 en 1950-1951, 1.486.375 en 1951-1952 y 1.544.542 en 1952-1953). Por consiguiente, los gastos que se elevaron a 12.502.240 libras durante el mismo período (3.575.721 en 1950-1951, 4.612.434 en 1951-1952 y 4.314.085 en 1952-1953), fueron financiados en sus dos terceras partes con ayuda externa.

Los ingresos internos consisten principalmente de ingresos de aduana, dado que no existe la tributación directa. Durante el período que se está examinando, dichos ingresos representaron aproximadamente el 65% del total de los ingresos internos, con la siguiente distribución por año: 751.171 libras en 1950-1951, 1.000.284 en 1951-1952 y 1.041.033 en 1952-1953, mientras que durante el mismo período, las patentes, los derechos de timbre y los ingresos postales, junto

CUADRO I. PRESUPUESTO TERRITORIAL: ORDINARIO

Territorio	Porcentaje de gastos ordinarios ^a financiados		
	Con ingresos ordinarios ^a	Con ingresos de aduana	Con impuestos y derechos
Tanganyika	100	45	50
Ruanda Urundi.....	100	34 ^b	37
Camerún bajo administración británica ^c	100	37 ^c	80 ^c
Camerún bajo administración francesa ^d	96	53	30
Togo bajo administración británica	100	92 ^c	13 ^c
Togo bajo administración francesa ^d	90	48	25
Samoa occidental.....	100	66 ^e	16 ^e
Nauru	100	No se dispone de los datos correspondientes	
Nueva Guinea ^f	41 ^h	27	4

^a Se excluyen de los gastos ordinarios las transferencias a reservas y de los ingresos ordinarios las transferencias de reservas.

^b Incluye los impuestos internos.

^c Tomando como base de los ingresos y los gastos extraordinarios las cuentas del Plan de Desarrollo y Bienestar.

^d Con objeto de que las cifras sean comparables con las de los demás Territorios, se han hecho figurar como partidas de gastos los sueldos y las indemnizaciones de los funcionarios públicos del Territorio, que se cargan al presupuesto de la metrópoli.

^e Los ingresos excedieron los gastos, lo que permitió que hubiera un superávit presupuestario.

^f Considerando que debe suponerse que todos los rubros de ingresos ordinarios financian tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, puesto que no se ha destinado al desarrollo ningún rubro determinado de ingresos ordinarios.

^g Tomando como base de los gastos ordinarios todo lo que no sea gastos en obras de capital y considerando, además, que todos los rubros de los ingresos ordinarios contribuyen a financiar sólo los gastos ordinarios, puesto que las dos terceras partes de los gastos del Territorio sólo pueden financiarse mediante subsidios externos.

^h Este porcentaje se basa en cifras de ingresos ordinarios que se obtuvieron restando del total de los ingresos internos la suma de 176.000 libras que representa las transferencias procedentes de reservas.

CUADRO II. GASTOS PÚBLICOS DE DESARROLLO

Territorio	Porcentaje de gastos de desarrollo financiados			Porcentaje de gastos de desarrollo financiados	
	Con ingresos de aduana (incluso recargos a la exportación)	Con otros rubros de ingresos ordinarios del presupuesto	Con rubros de ingresos extraordinarios del presupuesto ^a	Con subsidios	Con préstamos y anticipos
Tanganyika ^b	16 ^c	9 ^c	3 ^c	20	44
Ruanda Urundi.....	—	—	16 ^d	—	84
Camerún bajo administración británica ^e	—	—	—	47	53
Camerún bajo administración francesa ^f	—	—	—	54	46
Togo bajo administración británica.....	73 ^g	—	—	27	—
Togo bajo administración francesa.....	—	—	15	47	38
Samoa occidental ^h	41	20	17	22	—
Nauru ⁱ	100 ^j	—	—	—	—
Nueva Guinea ^k	—	—	—	100	—

^a Incluye las ventas de bienes del Estado y las transferencias procedentes de reservas.

^b Excluye la cuenta de Desarrollo Agrícola, que siempre se financia sin ayuda externa.

^c Este porcentaje hubiera aumentado en un 20% aproximadamente si la aportación total del Territorio al desarrollo se hubiera gastado en nuevas obras durante el período que se está examinando, en lugar de haberse mantenido en parte en reserva.

^d Debido principalmente al hecho de que en 1949 los gastos excepcionales fueron financiados en parte con superávit de presupuestos de ejercicios anteriores.

^e Los porcentajes siguientes, basados como anteriormente en las cuentas del Plan de Desarrollo y Bienestar, no presentan un cuadro completo de los esfuerzos del Territorio en materia de desarrollo, puesto que la Cameroons Development Corporation, entidad pública autónoma, realiza obras de desarrollo por su cuenta. Por consiguiente, su programa de edificios y construcciones implicó en 1951 y 1952 gastos por valor de 216.331 y 411.082 libras, respectivamente. Además, pueden realizarse obras de desarrollo, aparte de las que se hacen en virtud del Plan de Desarrollo y Bienestar, puesto que ciertos ingresos públicos, como los superávits de ejercicios anteriores y las utilidades excedentes de la Cameroons Development Corporation,

se destinan a fomentar el desarrollo. Sin embargo, no pudo encontrarse ningún indicio que permita saber a qué proyectos, si es que existen, se destinaron dichos fondos durante el período que se está examinando.

^f Cuentas del FIDES solamente, puesto que en los informes de la Autoridad Administradora no se consignaron cifras definitivas del presupuesto extraordinario del Territorio.

^g Este porcentaje se hubiera elevado al 86% si los ingresos totales procedentes de los recargos a la exportación de cacao se hubieran gastado en nuevos trabajos en 1951-1952, en lugar de mantenerse parcialmente en reserva.

^h Véase nota f) del cuadro I.

ⁱ Teniendo en cuenta los gastos de reconstrucción y rehabilitación solamente, con exclusión del plan de construcción de viviendas para los nauruanos, respecto del cual no se dispone de cifras.

^j Los reembolsos del préstamo para la rehabilitación hechos con los ingresos por concepto de regalías sobre la exportación de fosfato ascendieron a 130.000 libras aproximadamente durante el período que se está examinando, es decir a una cantidad mayor a la efectivamente gastada en reconstrucción y rehabilitación y proveniente de los anticipos recibidos durante el mismo período.

^k Véase nota g) del cuadro I.

con los derechos y las multas, representaron 99.032, 127.364 y 142.603 libras, respectivamente. Los gastos en obras de capital ascendieron a un total de 2.210.444 libras (620.123 en 1950-1951, 871.473 en 1951-1952 y 718.848 en 1952-1953).

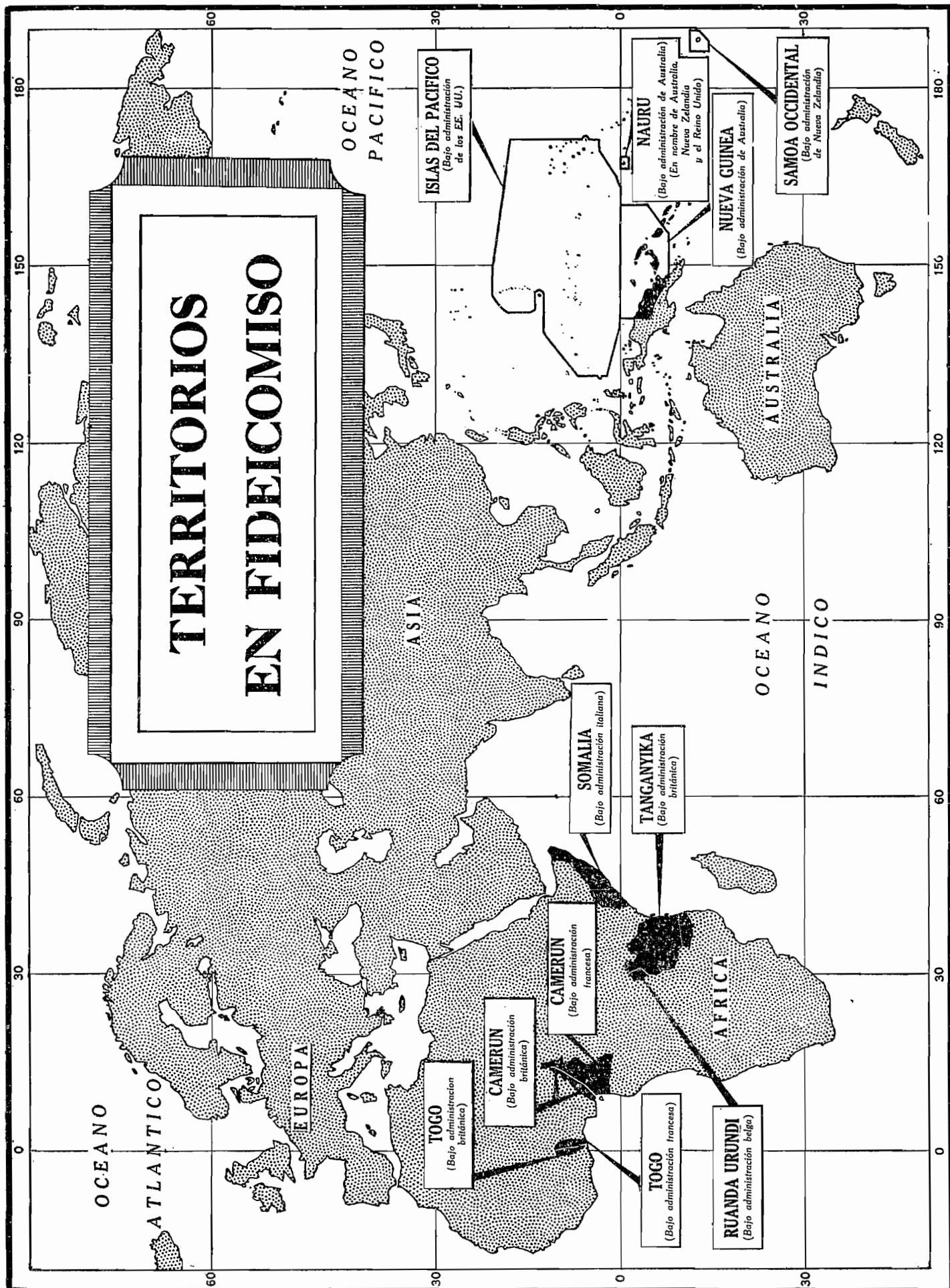
j) *Resumen*

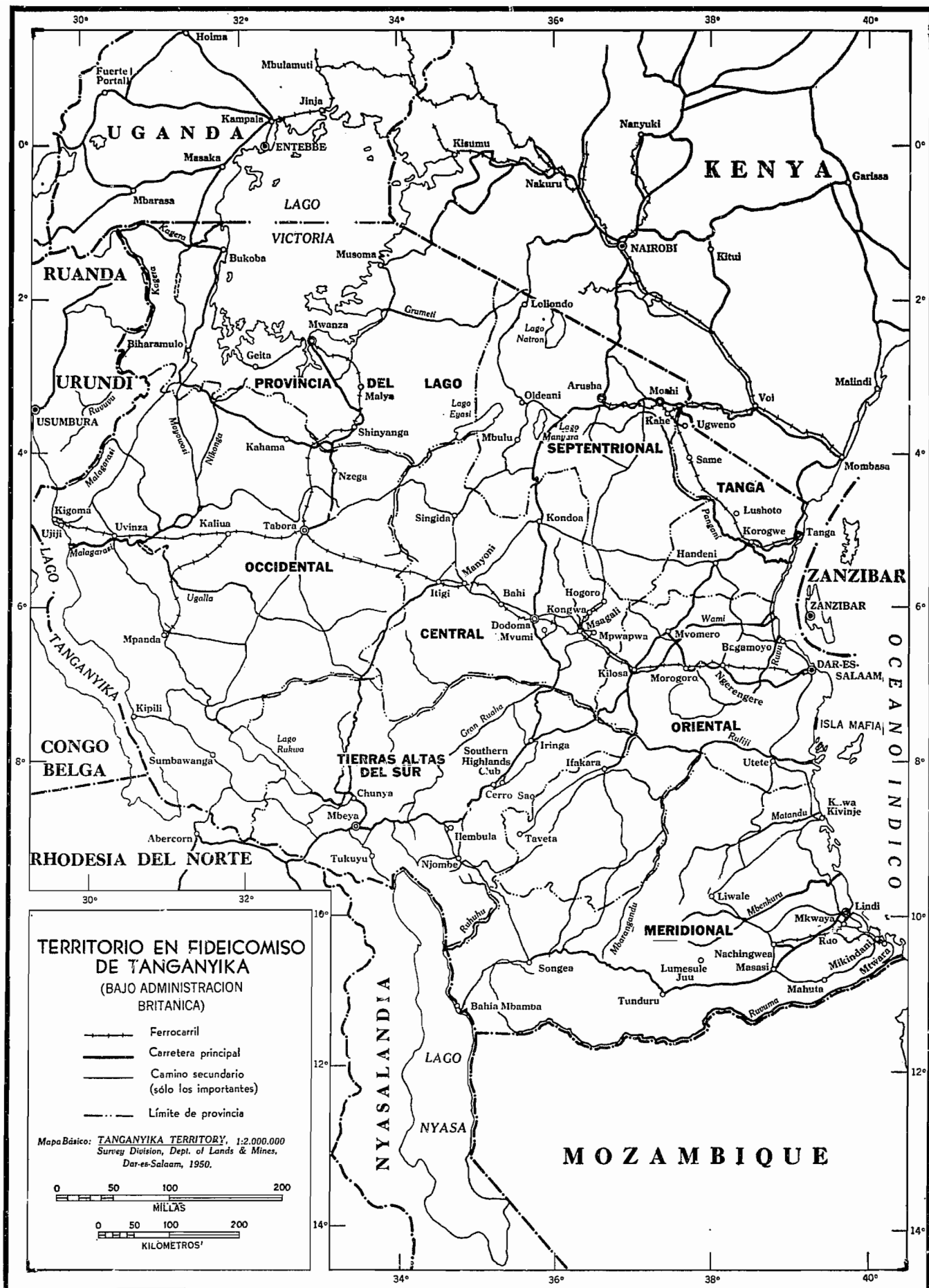
En los dos cuadros anteriores se consigna un resumen de las observaciones que anteceden.

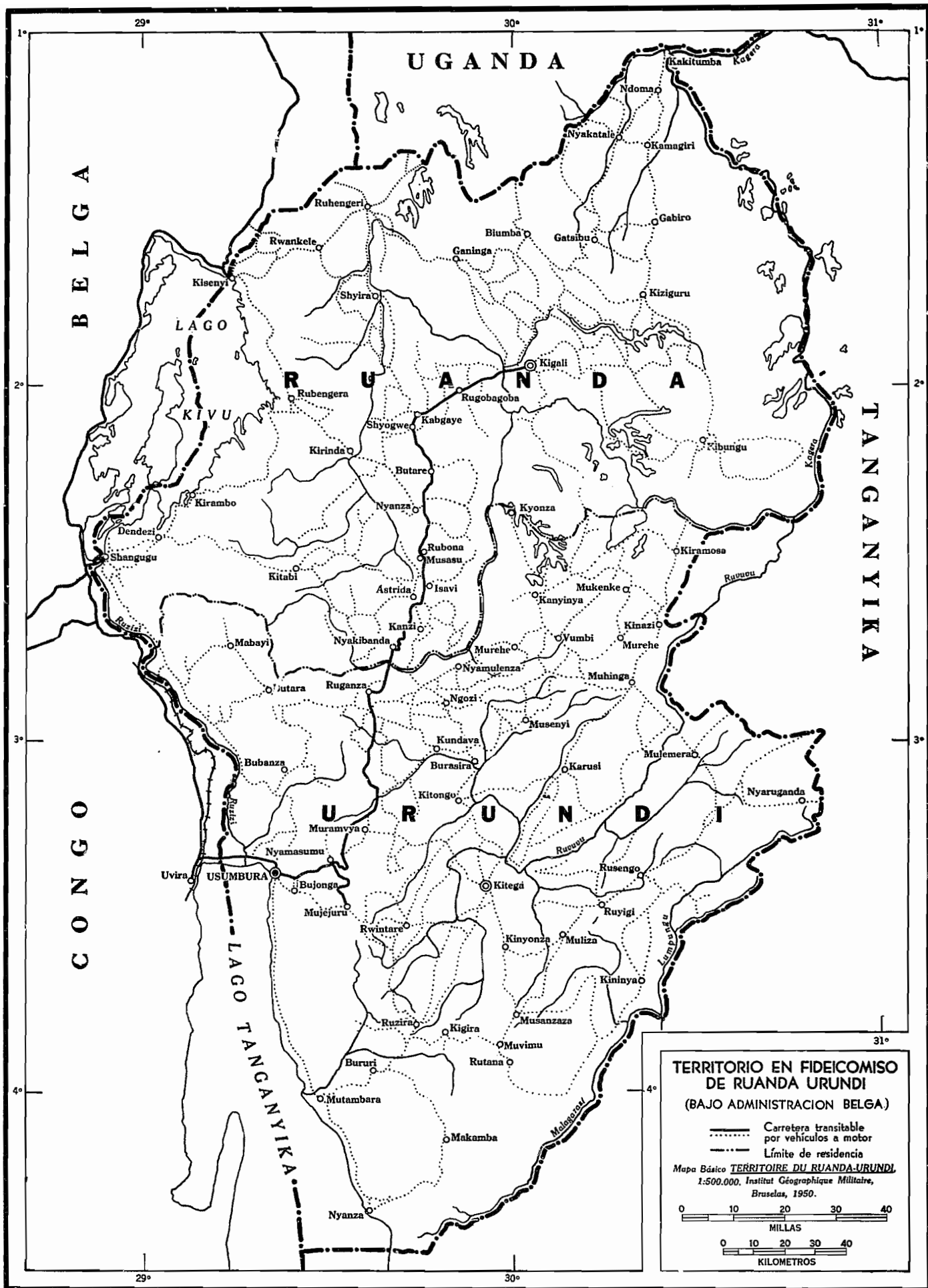
El porcentaje de los gastos ordinarios financiados *a*) con ingresos ordinarios (recurrentes); *b*) con ingresos de aduana; y *c*) con impuestos, se indica en el cuadro I, para los distintos territorios. Las cifras se refieren

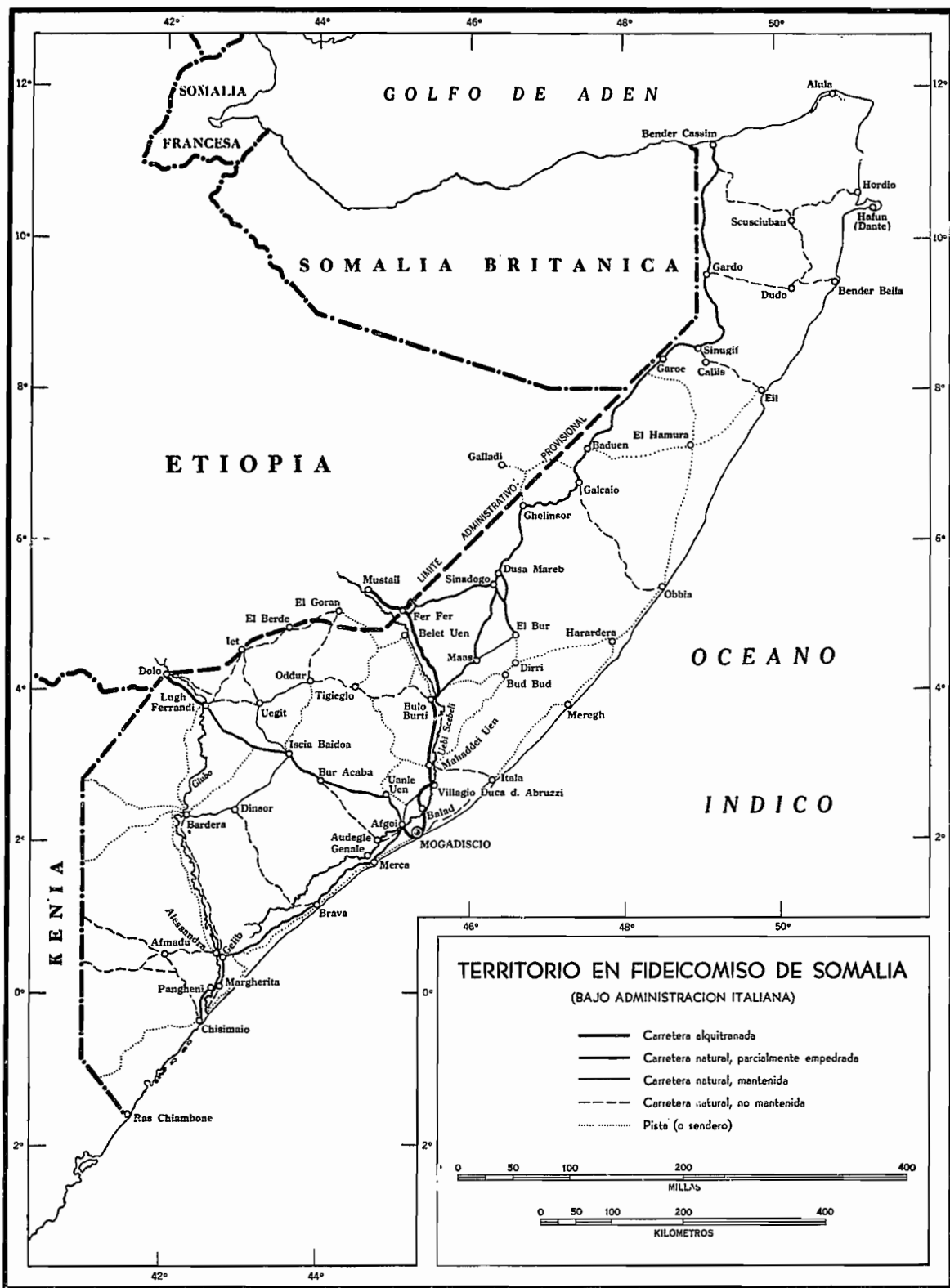
al período que va de 1950 a 1952, salvo en el caso de Ruanda Urundi en que el período es de 1949 a 1951, debido a que no se dispuso de datos definitivos para el año 1952.

El cuadro II refleja la forma en que se financiaron los gastos públicos de desarrollo en los distintos Territorios. Los períodos de referencia son los mismos del cuadro I. Sin embargo, los porcentajes consignados deben tomarse con cierta reserva, por cuanto las cuentas de gastos extraordinarios comprenden muy a menudo no sólo gastos de capital, sino también gastos ordinarios, tales como los sueldos o los gastos de conservación de las nuevas obras.



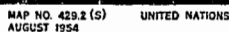
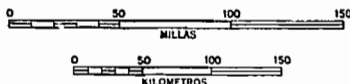


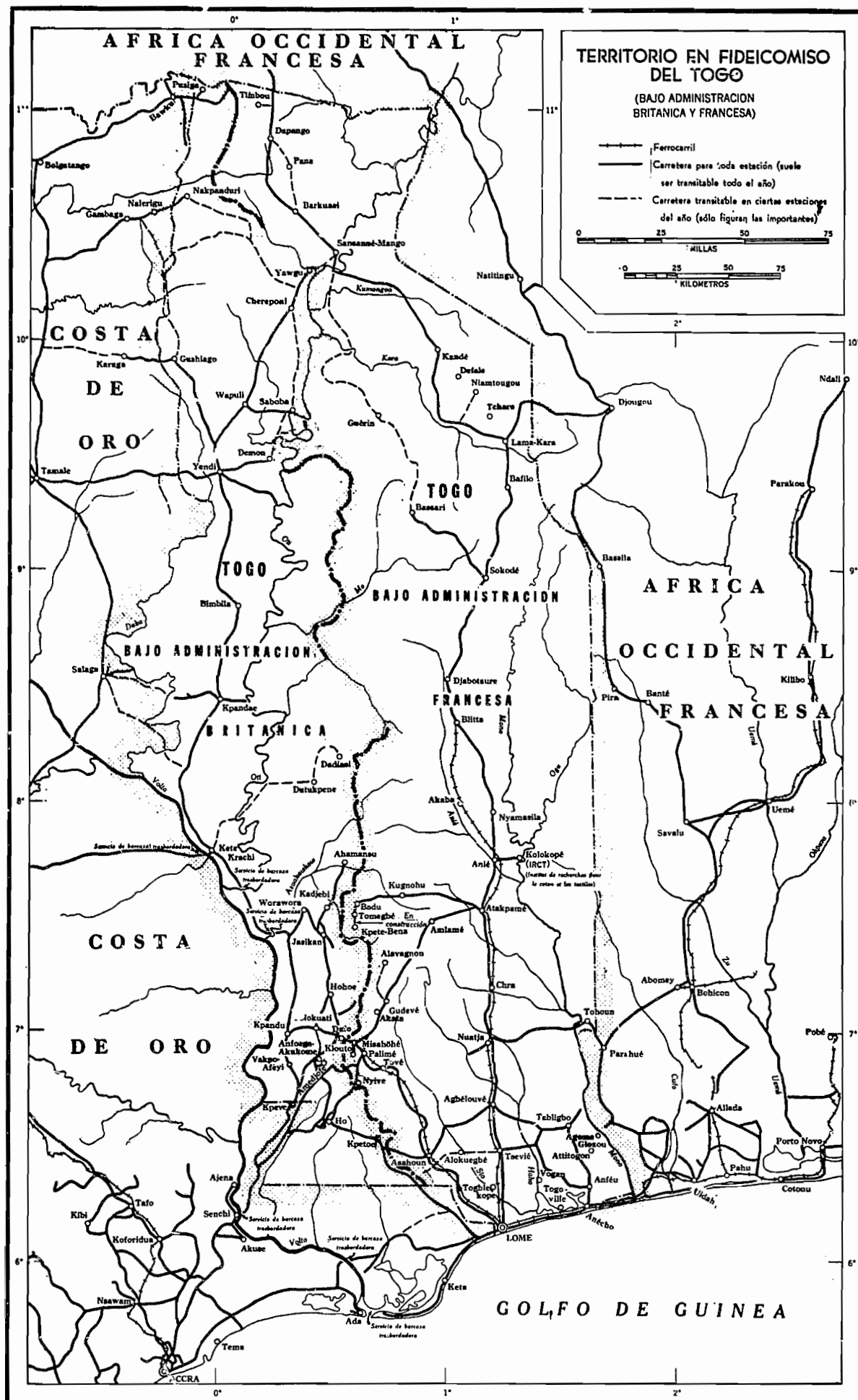




(BAJO ADMINISTRACION
BRITANICA Y FRANCESA)

- +—+—+—+— Ferrocarril
- ===== Carretera para toda estación (suele ser transitable todo el año)
- - - - - Carretera transitable en ciertas estaciones del año (sólo figuran las importantes)

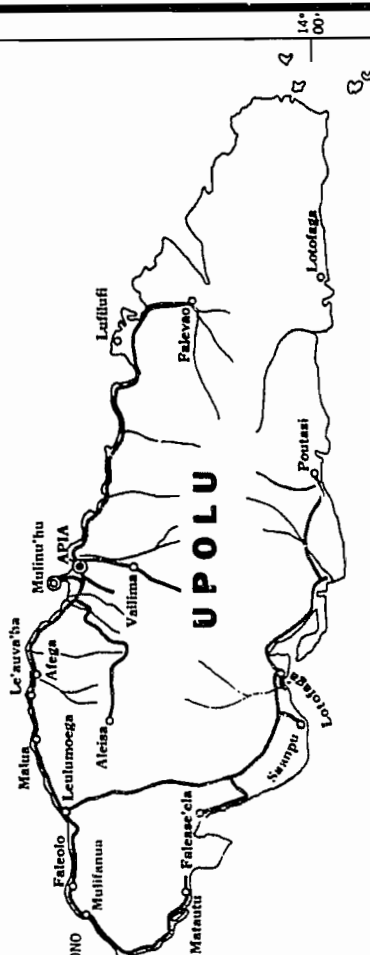
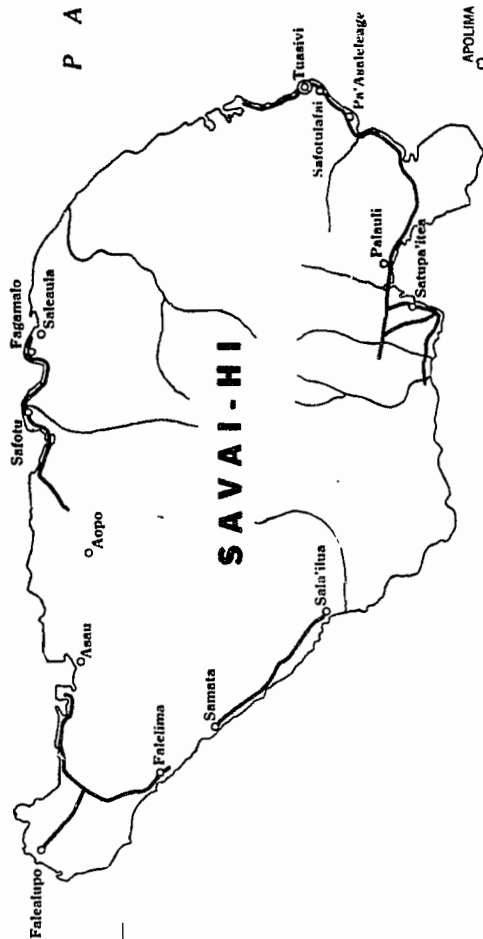
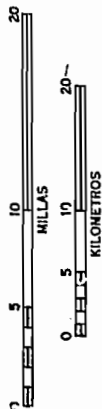


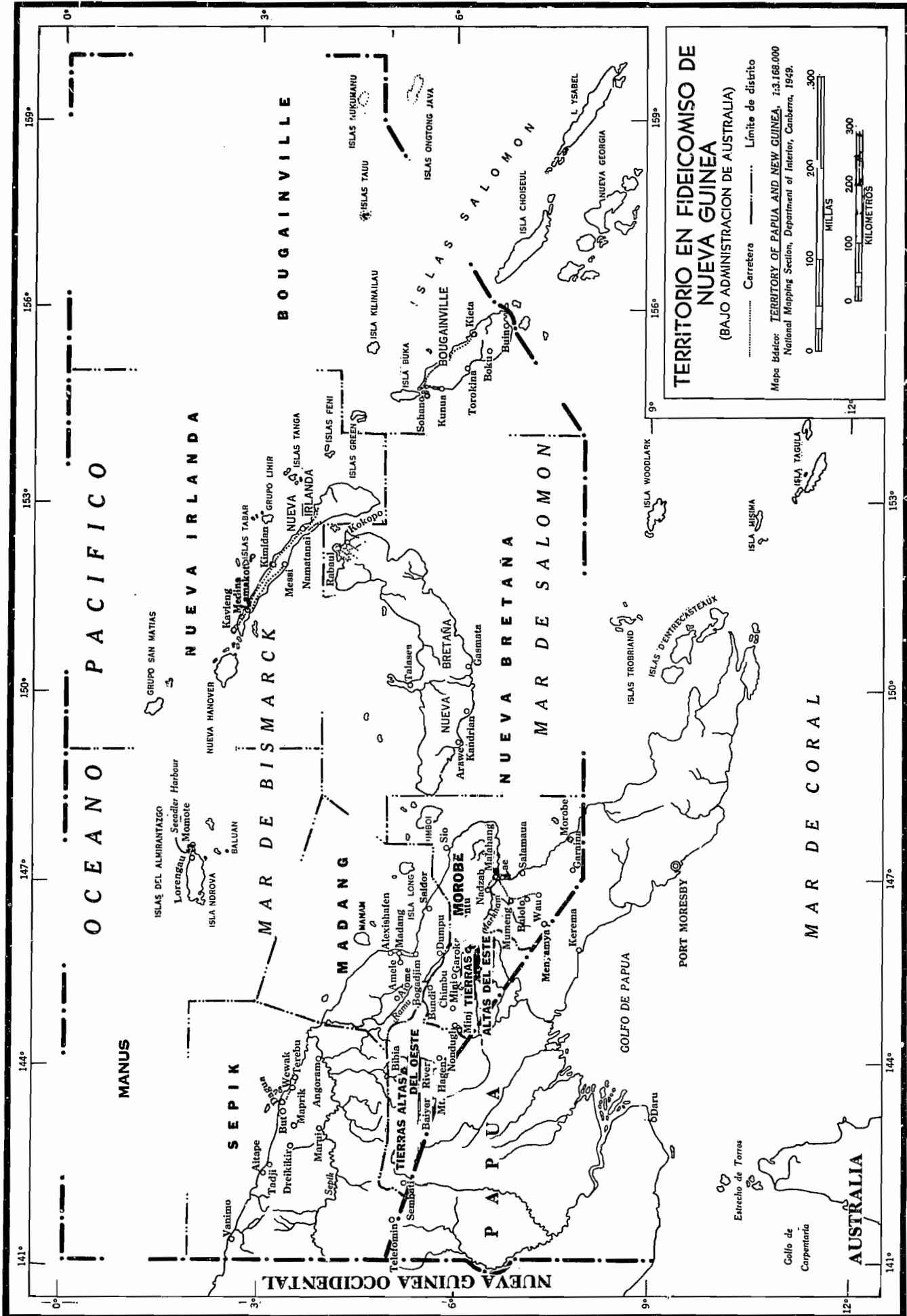


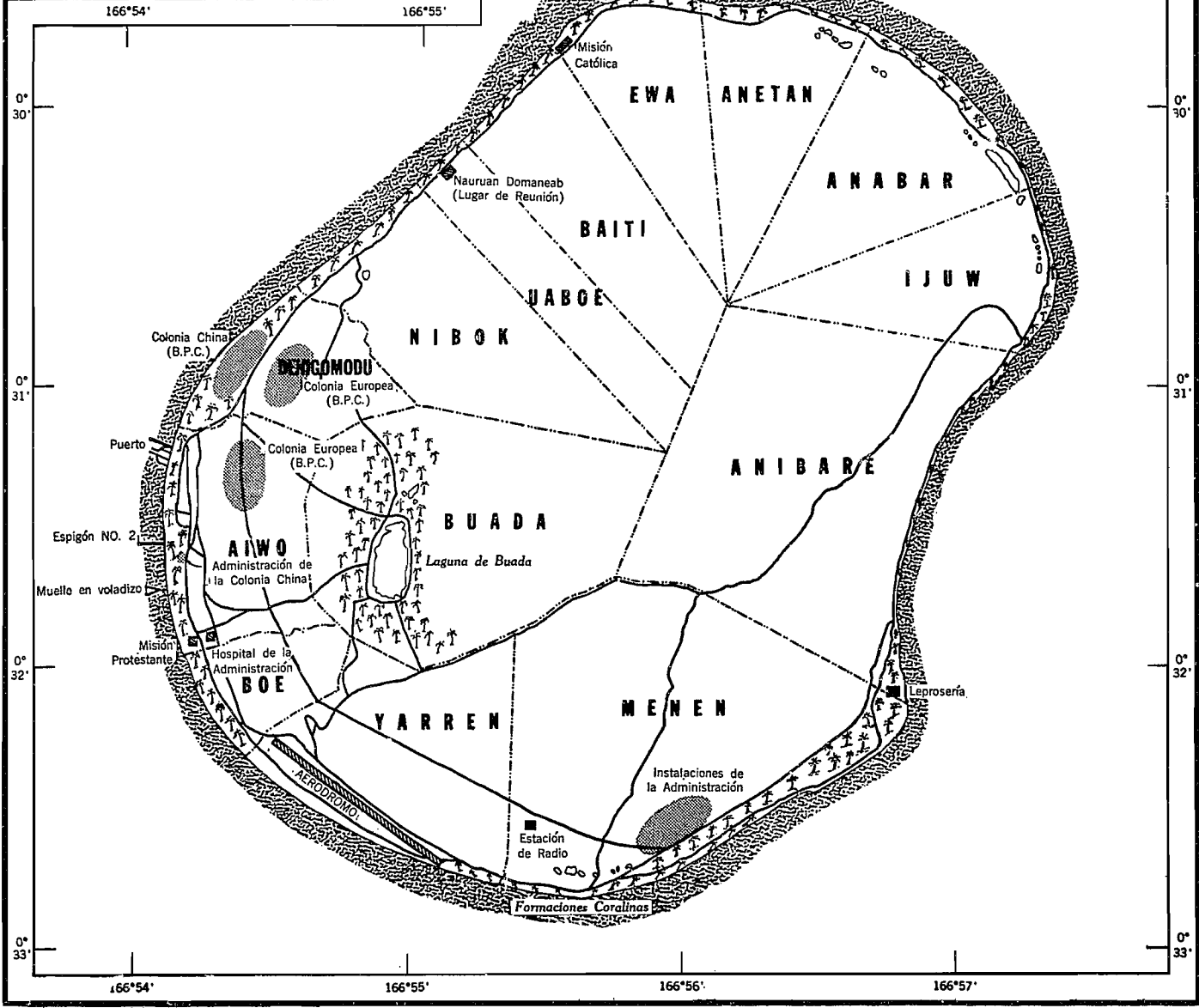
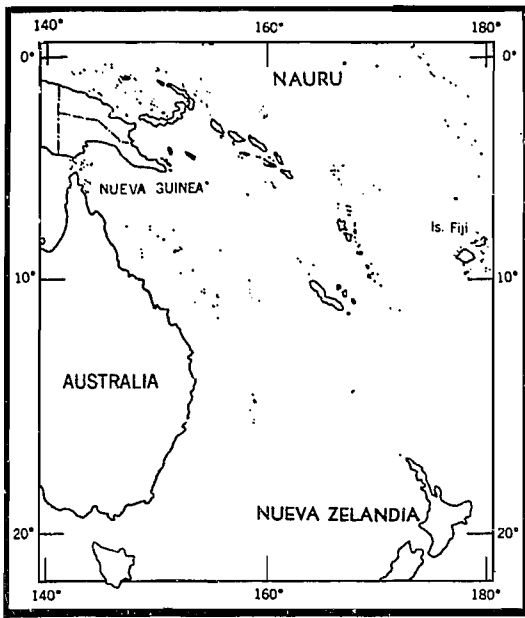
TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE SAMOA OCCIDENTAL (BAJO ADMINISTRACION DE NUEVA ZELANDIA)

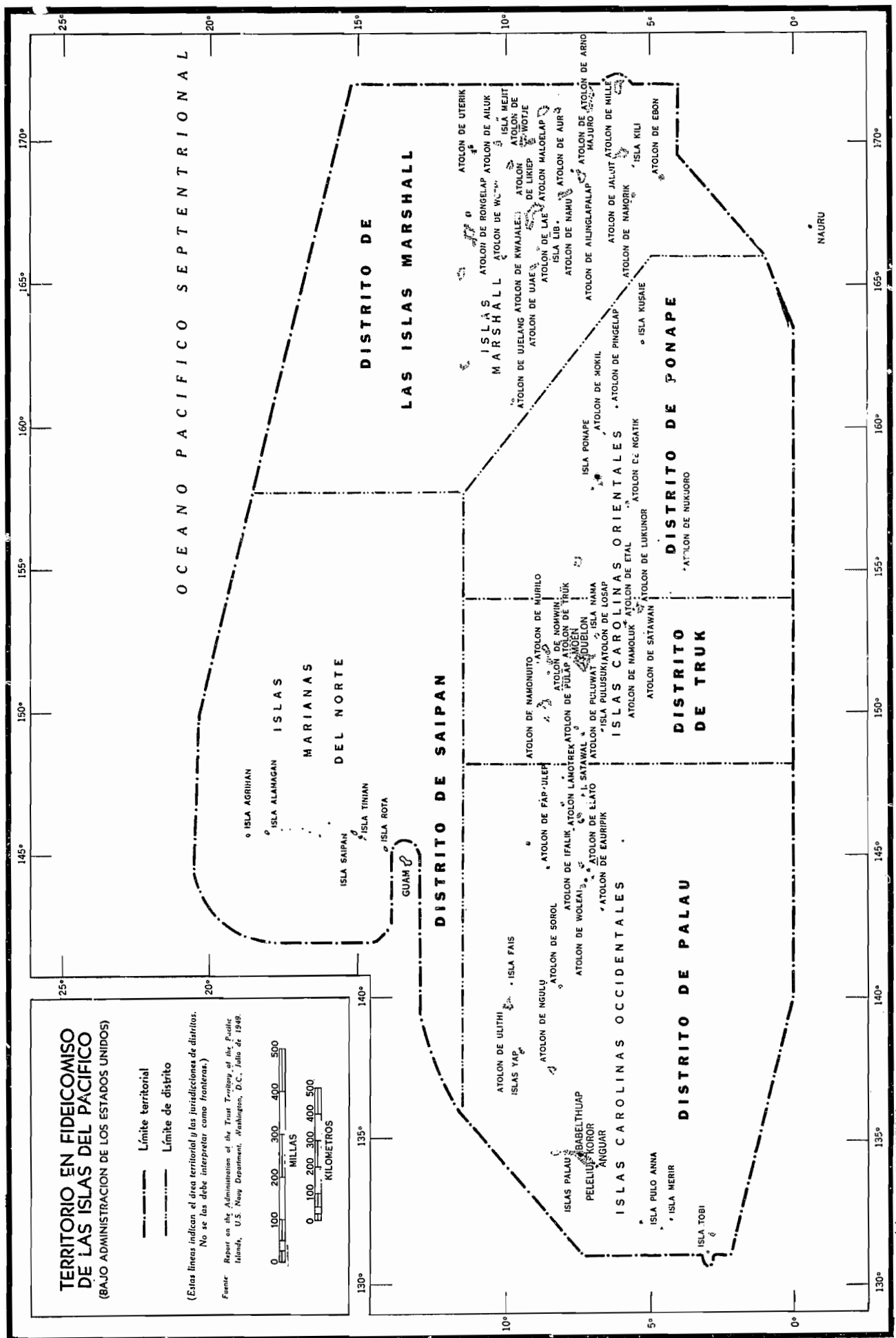
Carretera

Mapa Básico: TRUST TERRITORY OF WESTERN SAMOA,
Wellington, 1949.









AGENTES DE VENTA DE LAS PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

ARGENTINA

Editorial Sudamericana, Alsina 500, Buenos Aires.

AUSTRALIA

H. A. Goddard, 255a George St., Sydney, and 90 Queen St., Melbourne.
Melbourne University Press, Carlton N.3, Victoria.

BELGICA

Agence et Messageries de la Presse S.A., 14-22 rue du Persil, Bruxelles.
W. H. Smith & Son, 71-75, boulevard Adolphe-Max, Bruxelles.

BOLIVIA

Librería Selecciones, Casilla 972, La Paz.

BRASIL

Livraria Agir, Rio de Janeiro, São Paulo and Belo Horizonte.

CANADA

Ryerson Press, 299 Queen St. West, Toronto.
Periodico, Inc., 5112 Ave. Papineau, Montreal, 34.

CEILAN

Associated Newspapers of Ceylon, Lake House, Colombo.

CHECOSLOVAQUIA

Československý Spisovatel, Národní Trída 9, Praha 1.

CHILE

Librería Ivens, Moneda 822, Santiago.
Editorial del Pacífico, Ahumada 57, Santiago.

CHINA

The World Book Co. Ltd., 99 Chung King Road, 1st Section, Taipei, Taiwan.
Commercial Press, 211 Honan Rd., Shanghai.

COLOMBIA

Librería América, Medellín.
Librería Nacional Ltda., Barranquilla.

COSTA RICA

Trejos Hermanos, Apartado 1313, San José.

CUBA

La Casa Beiga, O'Reilly 455, La Habana.

DINAMARCA

Einer Munksgaard, Ltd., Norregade 6, København, K.

ECUADOR

Librería Científica, Guayaquil y Quito.

EGIPTO

Librería "La Renaissance d'Egypte", 9 Sh. Adly Pasha, Cairo.

EL SALVADOR

Manuel Navas y Cía., 1a. Avenida sur 37, San Salvador.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Int'l Documents Service, Columbia Univ. Press, 2960 Broadway, New York 27, N.Y.

FILIPINAS

Alema's Book Store, 749 Rizal Avenue, Manila.

FINLANDIA

Akateeminen Kirjakauppa, 2, Keskuskatu, Helsinki.

FRANCIA

Editions A. Pedone, 13, rue Soufflot, Paris V.

GRECIA

"Eleftheroudakis," Place de la Constitution, Athènes.

GUATEMALA

Goubaud & Cía. Ltda., 5a. Avenida sur 28, Guatemala.

HAITI

Librería "A la Caravelle," Boite postale 111-B, Port-au-Prince.

HONDURAS

Librería Panamericana, Tegucigalpa.

HONG KONG

The Swindon Book Co., 25 Nathan Road Kowloon.

INDIA

Oxford Book & Stationery Co., Scindia House, New Delhi, and 17 Park Street, Calcutta.
P. Varadachary & Co., 8 Linghi Chetty St., Madras

INDONESIA

Pembangunan, Ltd., Gunung Sahari 84, Djakarta.

IRAK

Mackenzie's Bookshop, Baghdad.

IRAN

Ketab-Khaneh Danesh, 293 Saadi Avenue, Teheran.

ISLANDIA

Bokaverzlun Sigfusar Eymundssonar H. F., Austurstraeti 18, Reykjavik.

ISRAEL

Blumstein's Bookstores Ltd., 35 Allenby Road, Tel-Aviv.

ITALIA

Libreria, Commissionaria Sansoni, Via Gina Capponi 26, Firenze.

LIBANO

Librairie Universelle, Beyrouth.

LIBERIA

J. Momolu Kamara, Monrovia.
Albert Gemayel, Monrovia.

LUXEMBURGO

Librairie J. Schummer, Luxembourg.

MEXICO

Editorial Hermes S.A., Ignacio Moriscall 41, México, D.F.

NORUEGA

Johan Grundt Tanum Forlag, Kr. Augustsgt. 7A, Oslo.

NUEVA ZELANDIA

United Nations Association of New Zealand, C.P.O. 1011, Wellington.

PAISES BAJOS

N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage.

PAKISTAN

Thomas & Thomas, Fort Mansion, Frere Road, Karachi, 3.
Publishers United, 176 Anarkali, Lahore.
The Pakistan Cooperative Book Society, Chittagong and Dacca (East Pakistan).

PANAMA

José Menéndez, Plaza de Arango, Panamá.

PARAGUAY

Moreno Hermanos, Asunción.

PERU

Librería Internacional del Perú, Lima y Arequipa.

PORTUGAL

Livraria Rodrigues, 186 Rua Aurea, Lisboa.

REINO UNIDO

H.M. Stationery Office, P.O. Box 569, London, S.E. 1 (and at H.M.S.O. Shops).

REPUBLICA DOMINICANA

Librería Dominicana, Mercedes 49, Ciudad Trujillo.

SINGAPUR

The City Book Store, Ltd., Winchester House, Collyer Quay.

SIRIA

Librairie Universelle, Damas.

SUECIA

C. E. Fritze's Kungl. Hovbokhandel A-B, Fredsgatan 2, Stockholm.

SUIZA

Librairie Payot S.A., Lausanne, Genève.
Hans Raunhardt, Kirchgasse 17, Zurich 1.

TAILANDIA

Pramuan Mit Ltd., 55 Chakrawat Road, Wat Tuk, Bangkok.

TURQUIA

Librairie Hachette, 469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, Istanbul.

UNION SUDAFRICANA

Van Schaik's Bookstore, Box 724, Pretoria.

URUGUAY

Representación de Editoriales, Prof. H. D'Elia, Av. 18 de Julio 1333, Montevideo.

VENEZUELA

Librería del Este, Edificio Galipán, Av. F. Miranda — El Rosal, Caracas.

VIETNAM

Papeterie-Librairie Nouvelle Albert Portail, Boite postale 283, Saigon.

YUGOSLAVIA

Drzavno Produzeca, Jugoslovenske Knjige, Terzije 27-11, Beograd.

Las publicaciones de las Naciones Unidas pueden además obtenerse en las siguientes librerías:

EN ALEMANIA

Elwert & Meurer, Hauptstrasse 101, Berlin —Schöneberg.

W. E. Saarbach, Gereonstrasse 25-29, Köln (22c).

Alex. Horn, Spiegelgasse 9, Wiesbaden.

EN AUSTRIA

B. Wullerstorff, Waagplatz, 4, Salzburg.
Gerold & Co., 1, Graben 31, Wien 1.

EN ESPAÑA

Librería Bosch, 11 Ronda Universidad, Barcelona.

EN JAPON

Maruzen Company, Ltd., 6 Tori-Nichome, Nihonbashi, Tokyo.

En aquellos países donde aun no se han designado agentes de venta los pedidos o consultas deben dirigirse a: Sección de Ventas y Distribución, Naciones Unidas, Nueva York, EE. UU. de A.; o a Sección de Ventas, Oficina de las Naciones Unidas, Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza.

(5451)